

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE MEDICINA

Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria



TESIS DOCTORAL

**Aspectos médico legales sobre consumo de alcohol y trabajo
en las resoluciones judiciales**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Sara Bandrés Hernández

Director

Bernardo Perea Pérez

Madrid, 2017



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Facultad de Medicina
Departamento de Toxicología
y Legislación Sanitaria

TESIS DOCTORAL

ASPECTOS MÉDICO LEGALES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y TRABAJO EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

D^a. Sara Bandrés Hernández

Director

Prof. Dr. D. Bernardo Perea Pérez

OCTUBRE 2015

Índice

Agradecimientos.	7
Abreviaturas.	9
Summary.	11
1. Introducción y justificación.	15
1.1. Breve historia sobre el consumo de alcohol.	15
1.1.1. <i>La cultura del alcohol.</i>	16
1.1.2. <i>Del consumo de alcohol en el mundo al consumo de alcohol en Europa.</i>	18
1.1.3. <i>Perfiles de consumo de alcohol en dos países vecinos: Francia y España.</i>	20
1.2. Repercusiones sociales, sanitarias y laborales del consumo de alcohol, relevantes desde una perspectiva médico legal.	22
1.2.1. <i>Repercusiones del consumo de alcohol en la salud.</i>	22
1.2.2. <i>Repercusiones sociales y laborales del consumo de alcohol relevantes, desde una perspectiva médico legal.</i>	24
1.2.3. <i>Políticas preventivas sobre el consumo de alcohol en el ámbito laboral.</i>	25
2. Hipótesis y objetivos.	27
2.1. Hipótesis.	27
2.2. Objetivos.	27
3. Material y método.	29
3.1. El material: resoluciones judiciales.	30
3.1.1. <i>De la resolución procesal a la jurisprudencia.</i>	30
3.1.2. <i>Bases de datos jurídicas para la búsqueda de resoluciones judiciales.</i>	33
3.2. El diseño de un método.	37
3.2.1. <i>El método de selección de las resoluciones judiciales.</i>	37
3.2.2. <i>El método analítico descriptivo de las resoluciones judiciales.</i>	44
4. Resultados.	47
4.1. Resultados cuantitativos: acotando el tema.	48
4.1.1. <i>Resultado 1: Voces genéricas.</i>	48
4.1.2. <i>Resultado 2: Periodo de tiempo.</i>	48
4.1.3. <i>Resultado 3: Jurisdicción.</i>	49
4.1.4. <i>Resultado 4: Órgano emisor de la resolución judicial.</i>	49
4.2. Resultados cuantitativos y cualitativos: búsqueda avanzada.	50
4.2.1. <i>Resultado 5: Matización de voces en trabajo.</i>	50
4.2.2. <i>Resultado 6: Matización de voces en consumo de alcohol.</i>	51
4.2.3. <i>Resultado 7: Jurisdicción administrativa.</i>	53
4.3. Resultados cualitativos: cribado de resultados.	55
4.3.1. <i>Resultado 8: Criterio de repetición entre buscadores.</i>	55
4.3.2. <i>Resultado 9: Criterio de repetición entre voces.</i>	58
4.3.3. <i>Resultado 10: Criterio de validez y resultados cuantitativos definitivos.</i>	58
4.3.4. <i>Resultado 11: Las tablas resumen de resultados.</i>	59
4.3.5. <i>Resultado 12: Relación de resoluciones judiciales francesas y españolas sobre consumo de alcohol y trabajo acorde a criterios medico legales.</i>	71

5. Discusión	75
5.1. Consumo de alcohol y despido disciplinario.	76
5.1.1. <i>El consumo de alcohol determina los requisitos jurídicos del despido disciplinario.</i>	76
5.1.1.1. <i>Requisitos del incumplimiento contractual: gravedad, culpabilidad y causalidad.</i>	77
5.1.1.2. <i>Forma del despido disciplinario, calificación y efectos.</i>	78
5.1.2. <i>El consumo de alcohol motiva el despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.</i>	79
5.1.2.1. <i>Definición y origen del principio de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.</i>	79
5.1.2.2. <i>Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de consumo de alcohol en la esfera privada y despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza:</i>	80
1) Consideración médico legal 1: Consumo de alcohol en la esfera privada.	80
2) Consideración médico legal 2: Objetividad jurídica de la tasa de alcoholemia y las formas de consumo.	82
3) Consideración médico legal 3: La causalidad jurídica dependiente del criterio médico legal.	85
5.1.3. <i>El consumo de alcohol motiva el despido disciplinario por embriaguez habitual o toxicomanía.</i>	87
5.1.3.1. <i>La embriaguez habitual en el tiempo y lugar de trabajo con repercusión negativa en el ámbito laboral.</i>	87
5.1.3.2. <i>Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de consumo de alcohol y despido disciplinario por embriaguez habitual:</i>	88
1) Consideración médico legal 4: Habitualidad en la embriaguez versus dependencia alcohólica.	88
2) Consideración médico legal 5: Consumo de alcohol en la esfera profesional.	89
3) Consideración médico legal 6: Tasa de alcoholemia versus sintomatología etílica.	89
4) Consideración médico legal 7: Diagnóstico de los perfiles de consumo de alcohol.	94
5.2. Consumo de alcohol y acoso moral	96
5.2.1. <i>La perspectiva médico legal del acoso moral en el ámbito laboral.</i>	96
5.2.2. <i>Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de acoso moral en el ámbito laboral y consumo de alcohol:</i>	97
1) Consideración médico legal 8: La influencia del consumo de alcohol en el ambiente laboral.	97
2) Consideración médico legal 9: Perfiles de consumo que originan acoso moral.	99
5.3. Consumo de alcohol y prestaciones de la Seguridad Social	100
5.3.1. <i>Principios del sistema de prestaciones de la Seguridad Social.</i>	101
5.3.2. <i>Alcohol dependencia e incapacidad permanente.</i>	103
5.3.2.1. <i>La prestación de incapacidad permanente.</i>	103
5.3.2.2. <i>Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de alcohol dependencia e incapacidad permanente:</i>	103
1) Consideración médico legal 10: Dependencia alcohólica como situación asimilada al alta en la seguridad social.	103
2) Consideración médico legal 11: Alcohol dependencia determina la incapacidad del trabajador o la revisión del grado de incapacidad.	105
5.3.3. <i>Consumo de alcohol y la determinación de la contingencia como accidente laboral.</i>	107
5.3.3.1. <i>El concepto jurídico de accidente laboral y el concepto médico de daño.</i>	107
5.3.3.2. <i>Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de consumo de alcohol y accidente de trabajo:</i>	108
1) Consideración médico legal 12: Tipos de alteración en la salud y la determinación del consumo de alcohol.	108
2) Consideración médico legal 13: El consumo de alcohol, imprudencia temeraria y prevención de riesgos laborales.	109

6. Conclusiones.	111
7. Bibliografía.	113
7.1. Normativa.	112
7.2. Documentos.	114
7.3. Libros y artículos de revistas.	114
7.4. Páginas web.	118
8. Anexos	119
8.1. Anexo I.F: Relación de resoluciones judiciales francesas sobre consumo de alcohol y trabajo, según el método de selección diseñado.	119
8.2. Anexo I.E: Relación de resoluciones judiciales españolas sobre consumo de alcohol y trabajo, según el método de selección diseñado.	129
8.3. Anexo II.F: Relación cronológica de resoluciones judiciales francesas sobre consumo de alcohol y trabajo, después de aplicar los criterios de cribado de resultados.	149
8.4. Anexo II.E: Relación cronológica de resoluciones judiciales españolas sobre consumo de alcohol y trabajo, después de aplicar los criterios de cribado de resultados.	151
8.5. Anexo III: Relación de resoluciones judiciales francesas y españolas sobre consumo de alcohol y trabajo, acorde a criterios médico legales.	156
8.6. Anexo IV: Textos íntegros de las resoluciones judiciales francesas y españolas sobre consumo de alcohol y trabajo, acorde a criterios médico legales.	163

Agradecimientos

Agradecer al Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, dirigido por la Profesora Doctora Doña María José Anadón Baselga, la incorporación de este proyecto de tesis en el Departamento. Así como a mi director, el Profesor Doctor Don Bernardo Perea Pérez, su apoyo y apuesta por la coexistencia de dos materias aparentemente dispares, como son la Medicina y el Derecho.

Deseo también, agradecer y dedicar este esfuerzo a mi familia: A Rodrigo y Alejandro, porque su constante motivación y comprensión madura les hace protagonistas de este proyecto. A mi marido Pablo, por creer en mí incondicionalmente. A mis padres, por ilusionarme a cada instante, alentar mi ánimo y reorientar mis pasos. A mi hermano Pablo, porque siempre querré ser como él de mayor. A mi tío David por su apoyo y disposición ante la adversidad informática. A mi tía Aurora, por su leal respaldo. A mi prima Laura. Y a mi abuela, porque ella representa a todos los que están y los que no están.

Abreviaturas

ADH	Alcohol DesHidrogenasa
BOE	Boletín Oficial del Estado
CC	Código Civil
C.Cass	Cour de Cassation
CE	Constitución Española
CENDOJ	Centro de Documentación Judicial
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LECr	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LGSS	Ley General de la Seguridad Social
LOPJ	Ley Orgánica Poder Judicial
LRJS	Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
OMS	Organización Mundial de la Salud
PIB	Producto Interior Bruto
REM	Rapid Eyes Movement
TS	Tribunal Supremo
UE	Unión Europea
UE15	Unión Europea del grupo de los 15

Summary

■ Introduction and Justification

Alcohol consumption is one of our species' vestiges. Fermentation was discovered in prehistoric times and that is why its history appears parallel to the evolution of mankind. Alcohol consumption is conceived as a social behavior, hence as a cultural rite, which has been source to a culture of alcohol. In ancient times, it was conceived as a mystical and cathartic experience; in the Middle Ages, as the deserved punishment of the poor; in the 19th century, as an addiction; and in the 20th century, as a risky chronic disease. Nowadays, the medical concerns for alcohol predominate in the area of health. So does the management of "alcohol risks" at work. Hence, medical, social and legal aspects of the problem are to be taken into consideration.

According to the 2014 World Health Organization's report, in 15 years Europe's average alcohol consumption will be twice the World's. The traditional dichotomy between countries with "wet cultures" and those with "dry cultures" is disappearing and being homogenized in new ways of risky consumption that spread in younger populations. In this respect, Spain is considered to be a country in transition towards the "binge drinking" model; whereas in France the above mentioned model is already deeply settled. Nevertheless, both cases predict important social, medical and labor repercussions. This cultural change of consumption habits is forcing governments to undertake prevention policies to face today's high-risk alcohol consumption and its ruinous demographic and economic consequences.

Both from a social and an individual perspective, alcohol consumption has its bigger impact on a country's morbidity, mortality and epidemiology rates and its economy alike. At work, alcohol consumption is measured following economic and subjective criteria and assessing its negative repercussions in work performance. Working environment, business lunches and parties can mean alcohol consumption at work; and so do pressure on workers, demands of productivity, the establishment of working objectives and stress. In all these cases, alcohol consumption may symbolize a relief from labor suffering. This double-edged sword turns alcohol into the most consumed drug by workers. The association of alcohol consumption to higher accident rates, to a drop in working performance, to work absenteeism, to an increase in wrongful conducts or in labor risks triggers prevention policies that aim to diminish the risks for the employable population derived from alcohol consumption.

Alcohol consumption has been source to many different studies based on both its social and medical repercussions, but none of them seems to have dealt with the medical-legal approach of case law. Through judicial decisions – conceived as the social mirror of conflict resolution – and through combining the realms of Medicine and Law, this thesis aims to provide a glimpse into the problem of alcohol consumption within the workforce.

■ Hypothesis

Due to all this, the hypothesis that we would like to formulate in this study is whether case law can objectively demonstrate what the medical-legal conflicts are that stem from the combination of alcohol consumption and work.

■ Aims

In order to test our hypothesis, we intend to achieve first five preliminary targets: 1) gathering all the judicial decisions that, for a selected period of time, address the relation between alcohol consumption and work; 2) determining and classifying the obtained sentences in accordance to medical-legal criteria; 3) describing the medical-legal conflicts related to both alcohol consumption and working performance; 4) taking two countries

of the European Union as models – France and Spain – to compare their judicial decisions on alcohol consumption and work; 5) providing the scientific community with the juridical documents that have been specially categorized according to a medical-legal perspective, in order to enable eventual comparative investigations connecting Labor Law, alcohol consumption and Legal Medicine.

■ Materials and Methodology

The material subject to study consists of procedural judicial decisions –edicts and judgments – that have been obtained by means of four different electronic legal databases: *Légifrance*, *Dalloz*, *Cendoj* and *Tirant on-line*. The first two are French and the other two are Spanish. In order to homogenize the comparative study between the two countries, in both cases a state and a private legal database have been chosen.

A two-phase methodology has been applied to the judicial decisions: the first one is devoted to the selection of the decisions that are related to alcohol consumption and work; the second phase is based on the analytical and descriptive study of some of the selected judicial decisions.

The selection criteria of the judicial decisions are structured in five different searching levels that simultaneously annotate the investigation in a sort of “funnel effect”. In level no. 1, we have introduced the voices “*alcohol y trabajo*” for Spain and “*alcool et travail*” for France, thus juxtaposing these two terms. Level no.2 selects the decisions that were released in a certain period of time: from January 1st, 2004 until December 31st, 2014. Level no.3 adds the criteria “labour jurisdiction”. Level no.4 consists of a first critical reading of the documents. Finally, the level no.5 is used to tint the generic voices introducing 3 new terms for the field “work”: “*despido*”, “*accidente de trabajo*” and “*incapacidad*” for Spain and “*licenciement*”, “*accident de travail*” and “*incapacité*” for France; and 5 new words referring to alcohol: “*embriaguez*”, “*ebriedad*”, “*alcohólico*”, “*alcoholismo*” and “*alcoholemia*” for Spain, and “*ébriété*”, “*ivresse*”, “*aloolique*”, “*acoolisme*” and “*alcoolémie*” for France. These 8 new terms make 15 relations of juxtaposition for each country. For this 5th level, we have also added what continental Law calls the contentious-administrative jurisdiction.

With these searching criteria, the legal databases provide, for every proposed list of terms, a second list of judicial decisions. In order to avoid duplicity of documents, this list also needs to be submitted to a “sifting of results”. The sifting has consisted of dismissing the identical judicial decisions found in the different databases and the different relations of voices. We have also put aside those that presented a content that was not related to alcohol consumption and work, and hence did not fit in the study. Finally, we have applied the analytical descriptive method to the final decisions using “summary tables” for the results, and then identified and classified them according to medical-legal criteria.

■ Results

According to a designed descriptive observational methodology, the obtained results can be classified in the following types: exclusively quantitative results (from result no.1 to no.5); quantitative and qualitative results ensued from an advanced research (results no.6 and no.7); and final results, which are mainly qualitative (from result no.8 to no.12).

Hence, according to the described investigatory method, in level no.1 we obtained 37,865 judicial decisions for Spain and 6,127 for France. After annotating the period of time, we got respectively 33,060 and 5,658. Level no.3 (adding Labor Jurisdiction as new criteria) made the decisions diminish to 5,399 for both countries, and level no.4 to 248 for Spain and 149 for France. Levels no.5, no.6 and no.7 (adding the new criteria on work and alcohol consumption but also considering the contentious-administrative jurisdiction) made the number of documents increase to 455 for Spain and 323 for France. In level no.8, when taking into account the repetition of decisions in the different databases, we obtained 238 documents for Spain and 171 for France. After dismissing the repeated terms in level no.9, the total number of decisions dropped respectively to 151 and 77. Finally level no.10 dismissed all the decisions having an invalid content, and we got a final quantitative result of 106 decisions for Spain and 65 for France. Level no.11 presents the final results in “summary tables” which

provide a brief description of the 171 remaining documents. Following the selected medical-legal criteria, level no.12 divides the case law into 12 different situations that refer to alcohol consumption and work: 1) private alcohol consumption is cause to a dismissal for the transgression of contractual good faith and for breach of trust; 2) alcohol consumption during temporary inability; 3) driving under the influence alcohol justifies the dismissal for habitual drunkenness; 4) alcohol consumption at work; 5) habitual drunkenness at work justifies disciplinary dismissal; 6) alcohol dependence and disciplinary dismissal; 7) regulation of habitual drunkenness in collective agreements; 8) the influence of alcohol consumption in harassment or moral discrimination at work and working environment; 9) the links between alcohol dependence as a working situation, and registers in the Social Security System; 10) alcohol dependence and inability; 11) alcohol consumption as the worker's wilful misconduct; 12) alcohol consumption and the prevention of occupational risks.

These 171 decisions are finally gathered according to 3 different medical-legal categories: alcohol consumption and disciplinary dismissal (61% of them – Spain 31% and France 30%); alcohol consumption and moral harassment (9% of the decisions – France 8% and Spain only 1%); and alcohol consumption and Social Security subsidies (30%, all of them Spanish).

■ Discussion

The discussion is accordingly set on the basis of the three above mentioned medical-legal categories: alcohol consumption and disciplinary dismissal, alcohol consumption and moral harassment, and alcohol consumption and Social Security subsidies.

As regards the first discussion topic, the medical-legal aspects at stake refer: on the one hand, to situations of private alcohol consumption causing disciplinary dismissals due to the transgression of the contractual good faith and the breach of trust; on the other hand, to situations of disciplinary dismissals due to habitual drunkenness. Those two situations raise the medical-legal conflict on making the difference between the worker's private and professional spheres, thus touching the medical concept of *intimacy in drugs consumption*. Many aspects interfere in the definition of the worker's alcohol consumption, such as the objectivity of blood alcohol testing, the worker's consumption patterns and habits, the symptomatology of drunkenness, and alcoholism itself, as a disease. Thus, there is a lack of a clear medical causality leading to a legal causality sound enough to serve as motivation for the decision. In addition, in some cases, consumption patterns may get mixed up with tested positive consumptions without drunkenness, or with the determination of a presumption of drunkenness based on the worker's behavior. All this makes the regularity in consumption mere legal requirement.

Alcohol consumption and moral harassment is a hot issue today in France. From a medical-legal perspective, the relevant aspects are the influence of alcohol consumption in the working environment, and the consumption pattern of both a harassed worker and a stalker. 75% of the harmful conducts that constitute moral harassment are considered wrongful dismissals by the employer and 66.6% of them are eventually qualified as unfair in the studied decisions. The worker's alcohol consumption patterns are alcoholism or drunkenness. In the cases where alcohol leads to possible situations of working mobbing or burnout, we made the difference between vertical downstream harassment (60% of the studied decisions); vertical upwards harassment (6.6 % of the selected decisions), and horizontal harassment (33.3 % of the decisions).

Then we face the medical-labour issue of alcohol consumption and Social Security subsidies. Here, the medical-legal aspects refer to alcoholism as a highly assimilated situation, alcohol dependence, inability, and occupational accident alike. The resolutions tackle the assimilation of alcoholism to the register in the Social Security System applying the doctrine of the parenthesis. But the application for incapacity or a change of degree – justified by alcohol dependency – requires simultaneously suffering other pathologies. In these cases, the legal argumentation is strengthened but still depends on the medical-legal report made by an expert. Finally, as for occupational accidents, alcohol consumption is what decides that a contingency as related or not to work. The medical-legal aspects here refer to the causality between a change in the victim's health and the determination of how can alcohol consumption lead to the worker's likely wilful misconduct. In these cases, medical-legal conflicts arise when blood, air or vitreous humor alcohol levels are considered equal to drunkenness, which entails contradictory case law.

■ Conclusions

As regards target no.1, we conclude that the judicial decisions, which have been selected according to a methodology that optimizes the use of Spanish and French legal databases, fulfill a criterion of homogeneity that allows a suitable study of medical-legal conflicts. As for target no.2, the study of the judicial decisions leads to 13 medical-legal conclusions that are common in Spain and France, are consolidated in the eleven studied years, and reveal the need to unite Medicine and Law. The studied decisions in target no.3 made us observe that blood alcohol levels are not properly interpreted due to the following reasons: inappropriate clinical effects are inferred, different patterns of alcohol consumption are not taken into account and, as a result, individual differences are not assessed, and the objective results of alcohol testing are underused. The selected resolutions underline the importance of both medical-legal and expert reports in establishing the legal causal relation. In order that the courts do a better use of the medical-legal expert proof, we propose that reports should draw up a protocol based on causal criteria without raising the legal causal relation. Prevention is a medical concept incorporated to Labor Law. That is the reason why we propose establishing maps of working risks that justify medical-legal studies that can predict alcohol dependence at work. From the comparative Spanish-French study in target no.4, we conclude that for similar patterns of alcohol consumption and comparable medical conflicts (dismissal and moral harassment): France prioritizes the use of positive law, the burden of proof, objectivity and employer's responsibility; whereas in Spain we observed a prevalence of a more subjective and flexible legal approach due to a social culture of alcohol dependence. Finally, as regards target no.5, the selected judicial decisions allowed us to extend the comparative analysis to other European Union's countries.

■ Bibliography

- BANDRÉS HERNÁNDEZ, Sara: *Análisis de la doctrina judicial respecto de la relación entre consumo de alcohol y accidente de trabajo*; Además ediciones, 2008.
- BELLIVIER, Muriel: *Droit du travail dans le sécteur social et médico social*, edition Dunod, 2015.
- CISCART, Béa: *El despido por embriaguez y toxicomanía*, 1998.
- DELGADO BUENO, Santiago, (dir): *Tratado de medicina legal y ciencias forenses*, Tomos I, II, III, IV, V y VI; Edición Bosch, 2011.
- JEANNIN, Jean Paul: *Gérer le risque alcohol au travail*, Editions de la Chronique Sociale, junio 2003.

1.1. Breve historia sobre el consumo de alcohol • 1.1.1. La cultura del alcohol • 1.1.2. Del consumo de alcohol en el mundo al consumo de alcohol en Europa • 1.1.3. Perfiles de consumo de alcohol en dos países vecinos: Francia y España • 1.2. Repercusiones sociales, sanitarias y laborales del consumo de alcohol relevantes desde una perspectiva médico legal • 1.2.1. Repercusiones del consumo de alcohol en la salud • 1.2.2. Repercusiones sociales y laborales del consumo de alcohol relevantes desde una perspectiva médico legal • 1.2.3. Políticas preventivas sobre consumo de alcohol en el ámbito laboral

La relación entre el consumo de alcohol y el trabajo implica cuestiones médico legales que surgen del fenómeno de integración de una conducta, como el consumo de alcohol, en el contexto socio cultural de una sociedad. Ahora bien, ¿Cuáles son las cuestiones médico legales que derivan de la relación entre consumo de alcohol y trabajo? Los aspectos médico legales se determinan en función de las repercusiones sociales que dichas conductas socioculturales producen a lo largo de la historia, en concreto, en los ámbitos de la salud (la medicina) y de lo legal, sea en este caso la materia laboral. Por ello se hace inevitable introducir el consumo de alcohol desde su concepción de conducta socio cultural trascendente al amparo de los datos objetivos que describen el consumo social; así como precisar las consecuencias sociales que dicho consumo de alcohol manifiesta en la salud y el trabajo; y que propician la preocupación preventiva actual.

1.1.- Breve historia sobre el consumo de alcohol

La historia sobre el consumo de alcohol se dibuja paralela a la evolución del hombre desde que se descubriera la fermentación hace aproximadamente 9.000 años, durante el periodo prehistórico del Neolítico¹. Un proceso biológico de transformación observado probablemente al azar gracias a la aparición de la alfarería, que permitió la utilización de vasijas y de recipientes de cerámica en los que se podía transformar la glucosa de las frutas en alcohol^{2,3}. Puede decirse que a partir de entonces el alcohol se ha concebido, tanto por su procedencia misteriosa como por sus efectos en el comportamiento de las personas, como un producto mágico⁴. Sin embargo, el tiempo que entraña el progreso de sus técnicas de elaboración, ha supuesto su integración en las distintas sociedades como rito cultural, lo que consecuentemente ha determinado a la propia condición humana, al desplegarse la cultura del alcohol.

¹ Instituto Valenciano de Trastornos Adictivos (IVATAD), *El alcohol en la historia*, Valencia Adicciones, versión documental, revisado en 30 noviembre 2014.

² En el Paleolítico se han encontrado molinos de grano y en la Antigüedad jeroglíficos egipcios que recogen la transformación de los cereales, mediante la fermentación, para obtener pan. Francisco Manuel García Ruiz, *La Ciencia del pan*, el rincón de la Ciencia número 63, ISSN 1579-1149, diciembre 2012. <http://rincondelaciencia.educa.madrid.org/Curiosid2/rc-146/rc-146.html>

³ Las levaduras naturales más relevantes que producen fermentación alcohólica son *saccharomyces*, *cerevisiae*, *kluveromyces fragilis*, *Torulaspora* y *Zymomonas mobilis*. Beltran G. and colb. *Analysis of yeast populations during alcoholic fermentation; a six year follow-up study*, Systematic and Applied Microbiology, 25: 287-293, 2002.

Hay levaduras que propician la fermentación del néctar de las flores produciendo un contenido alcohólico del 3,8% que es similar al de una cerveza. El biólogo Robert Dudley propone en el año 2000 que las frutas maduras pueden contener un 61% de azúcar y que liberan sustancias volátiles entre ellas el etanol. Andreas Gerloff y Manfred V. Singer, *Las raíces evolutivas del alcoholismo*, Mente y cerebro número 65 páginas 72 a 75, 2014.

⁴ Defienden algunos autores que la palabra alcohol es de origen árabe (“al” que significa “el” y “kohl” que se refiere a lo sutil, delgado, delicado). Numerosos papiros médicos refieren a la existencia de recetas para proteger los ojos de la luz o de las enfermedades causadas por el clima. Entre ellas destaca la de un polvo negro, muy fino y delicado, descubierto por los egipcios al triturar antimonio y galena. Lo utilizaban para delinearse los ojos o como antiséptico. En el siglo XIII, los alquimistas árabes sometieron estas sales a la acción del fuego y observaron que se transmutaban en un espíritu volátil, pasando de un estado sólido a uno gaseoso. Con el uso del alambique destilaron una bebida fuerte y estimulante, que por analogía de segregación de un espíritu denominaron *el espíritu: al-kohl*. Término que usaron para referirse a toda esencia obtenida en una destilación. De ahí que las bebidas alcohólicas blancas o destiladas sean también llamadas “espirituosas”. <http://etimologiaarabe.blogspot.com.es/2010/02/el-espiritu-del-alcohol.html>.

1.1.1.- La cultura del alcohol

El consumo de alcohol es un vestigio más de nuestra especie⁵, en tanto que descubrimiento químico y conducta social; y su reflejo lo hayamos en la mitología, la religión, el arte, la literatura⁶ o incluso en el Derecho⁷. En sus orígenes, los egipcios cosechaban la cebada en las tierras fértiles del Nilo para elaborar la cerveza que la población bebía; mientras que el vino se importaba de Oriente próximo y su uso estaba restringido al rito religioso. El consumo de vino se populariza con el mundo romano al introducirlo en la dieta de las tropas militares como bebida básica⁸. Su consumo conquista las poblaciones al ritmo de la romanización, y motiva la vulgarización de las fiestas populares al dios Baco que tenían como objetivo iniciar a las adolescentes en la vida sexual. La creciente asiduidad de estas celebraciones hace que pasen de festejarse de tres días al año a dos días al mes. Ello suscita la intervención del Senado Romano que fracasa en este intento, dado el significativo arraigo social de la alegre costumbre. Nos referimos a una asentada tradición que obligará al Cristianismo a optar por la reconversión de tales festejos en lo que hoy conocemos como Carnaval.

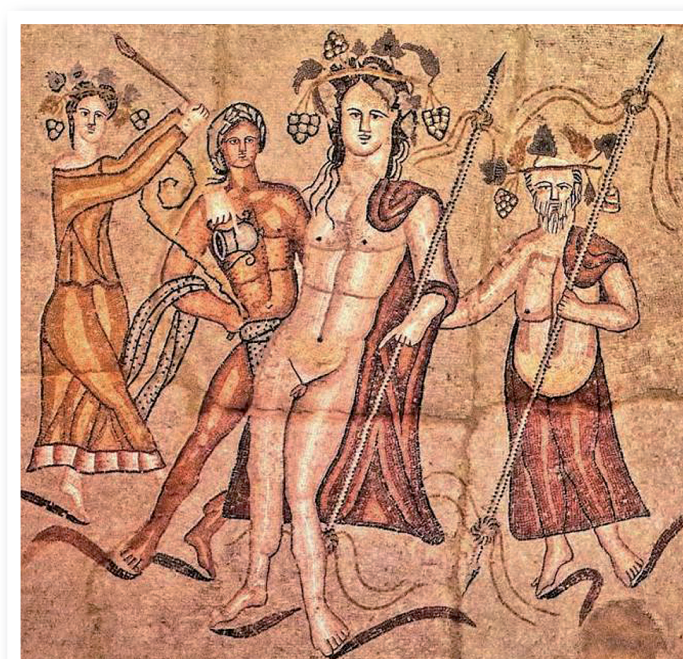


Foto 1. Fragmento *Mosaico de Baco*, finales del siglo IV d.C. Casa de Baco, *Complutum*, Alcalá de Henares, depósito Museo Arqueológico Nacional.

Para garantizar el orden público el Derecho regula en sus normas los comportamientos que pueden producir desorden social, y en lo que concierne el alcohol nos consta que ya hace cuatro mil años los babilonios regularon la fabricación, la venta y el consumo de cerveza en sus códigos⁹. Parece que históricamente, el consumo de alcohol ya generaba conflictos sociales desde los inicios, pero no será hasta el siglo XVI que se formará la primera sociedad de temperancia por el alquimista protestante Hieronymus Brunschwygk¹⁰; y cuatrocientos años después, en 1935, se funde la primera asociación de Alcohólicos Anónimos por William Griffith Wilson y Bob Smith en Estados Unidos, Ohio.

El movimiento abstencionista, impulsado por la preocupación de la fabricación de los licores, no evitó que el consumo de alcohol causará importantes estragos a lo largo del siglo XIX. Por primera vez, higienistas, sindicalistas, médicos y psiquiatras se plantearon la necesidad de prevenir el consumo abusivo de alcohol y entonces comenzará el conocido discurso social sobre la borrachera y la embriaguez. Mientras la Ciencia progresa en sus descubrimientos acerca del alcohol con el químico y biólogo Lavoisier que en 1787 describe el proceso de fermentación. El químico y físico Gay-Lussac logra medir cuantitativamente los grados de alcohol

⁵ Robert Dudley denomina este fenómeno “*resaca evolutiva*”. Andreas Gerloff y Manfred V. Singer, *Las raíces evolutivas del alcoholismo*, Mente y cerebro número 65 páginas 72 a 75, 2014.

⁶ Jean-Paul Jeannin se refiere a los modelos de consumo Rabelais y Zola inspirados en las descripciones literarias que los autores plasman en sus novelas. Rabelais se centra más en los aspectos positivos del alcohol mientras que Zola realza sus consecuencias negativas. *Gérer le risque alcool au travail*, Editions de la Chronique Sociale, junio 2003, página 49.

⁷ Nos referimos a la acepción del término derecho en tanto que norma positiva, a diferencia de su acepción como facultad que se escribiría con minúscula.

⁸ Adolfo Raúl Menéndez Argüín, *Consideraciones sobre la dieta de los legionarios romanos en las provincias fronterizas del N.O. del imperio*; Habis, 0210-7694, número 33, páginas 447-457, 2002.

⁹ El Código Hammurabi previene de los efectos sociales de la embriaguez. Entre otras curiosidades dictamina la muerte por inmersión de la tabernera que rebajase la calidad de la bebida alcohólica, así como también establece castigos a quien abandone sus obligaciones por haber bebido; Sinto Espresate Renau, *El alcoholismo a través de la historia*, LiberAddictus, www.infoadicciones.net, revisado junio 2015.

¹⁰ A Hieronymus Brunschwygk (1450-1513) se le atribuye la obra “*El libro del arte de la destilación*”.



Foto 2. *The Drunkard's Progress*, litografía de Nathaniel Currier a favor del movimiento de temperancia, enero 1846.

en un líquido alcoholizado y el químico Louis Pasteur¹¹ seguido del premio nobel de Química en 1907, Eduard Buchner¹², demuestran como la fermentación de azúcares produce, mediante una compleja cadena de fenómenos físico-químicos, alcohol etílico gracias a la levadura. Se trata del fenómeno bautizado por Louis Pasteur como “*respiración sin aire*”.

En el siglo XX, el discurso médico sobre el consumo de alcohol cobra protagonismo. Fue el sueco Magnus Huss quien acuña el término alcoholismo definiéndolo como enfermedad somática y crónica en 1849¹³. La concepción del alcoholismo como enfermedad es contemporánea a la industrialización. El aumento productivo de las bebidas alcohólicas, la creciente tasa de mortalidad asociada al consumo de alcohol, su relación con numerosas enfermedades circulatorias, digestivas, respiratorias o genito-urinarias, e incluso su vinculación a enfermedades infecciosas como la sífilis o el cólera, determinarán la modificación de los patrones de consumo social; y el alcoholismo entendido como causa de enfermedades modernas establece la denominada “*plaga del alcohol*”¹⁴. A este escenario médico se añade en la esfera laboral el registro de un elevado número de accidentes de trabajo por consumo de alcohol coincidentes con la época de mayor auge constructivo

¹¹ La fermentación alcohólica fue estudiada por Louis Pasteur entre 1822 y 1895. Ángel Blanco, Francisco Javier Guijarro, Rafaela Pozas y Carmelo Uruga, *Origen y evolución del término alcohol*, www.geocities.ws, revisado 2015.

¹² Eduard Buchner fue un destacado químico alemán, galardonado con el premio Nobel de Química en 1907. Descubrió la zimasa, mezcla enzimática elaborada por las levaduras que cataliza la transformación de la glucosa y los azúcares para obtener alcohol etílico y dióxido de carbono.

¹³ Magnus Huss definió el alcoholismo como un fenómeno de envenenamiento de la sangre que suponía un proceso de lesión del sistema nervioso según Nourisson página 41. Jean Paul Jeannin, *Gérer le risque alcool au travail*, Editions de la Chronique Sociale, junio 2003, página 41.

¹⁴ Término acuñado por el francés Nourisson como “*fléau social majeur*” Jean Paul Jeannin, *Gérer le risque alcool au travail*, Editions de la Chronique Sociale, junio 2003.



Foto 3. Almuerzo en el rascacielos, Charles Ebbets 1932

de rascacielos en Nueva York. Ello motiva la promulgación de la Ley Seca en Estados Unidos como *Enmienda XVIII* a la Constitución. La normativa vigente durante el periodo de 1920 a 1933 prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio estadounidense. Lejos de solucionar el problema social del alcohol favoreció la industria clandestina y los elevados precios del alcohol en el mercado negro; pero por otro lado, a partir de 1950 conducirá hacia una concepción más moderna y depurada del consumo de alcohol. La idea de un consumo de riesgo afianzará su aproximación científica y olvidará su traza moral originaria.

Después de este breve relato podemos comprobar que una amplia gama de concepciones sobre el consumo de alcohol escriben su historia. De experiencia mística y catártica en la Antigüedad a merecido castigo de los pobres en la Edad Media, ya sea por su equiparación a un vicio, a una tara hereditaria o a una enfermedad mental. En el siglo XIX¹⁵, se considera una adicción a prevenir que se convierte en enfermedad crónica de riesgo para el siglo XX. Actualmente lo que predomina es el concepto moderno de gestión del “riesgo alcohol”¹⁶. La gestión dirigida a solucionar o a reducir al mínimo el riesgo social del alcohol ha de considerar necesariamente aspectos médicos, sociales y legales de la cuestión. Destaca en nuestra cultura la equiparación del consumo de alcohol a un rito social permitiendo realzar la importancia de una celebración, separar el ocio de la obligación, consolar aflicciones o prometer expectativas de negocio hasta el punto de ser las propias tareas laborales las que legitimen o exijan un consumo de alcohol para cerciorar el éxito. Por lo que si una sociedad se define en parte por su consumo de alcohol, cabe preguntarse: ¿Cuánto alcohol consume hoy nuestra sociedad?

1.1.2.- Del consumo de alcohol en el mundo al consumo de alcohol en Europa

Extendidas las técnicas de fermentación y destilación por todo el mundo, su perfección motiva que cada civilización desarrolle la elaboración de alguna bebida alcohólica. De manera que el sochu en Japón, el aguardiente en Sud África, el tequila en Méjico o el vino en Europa constituyen identidad social de los pueblos¹⁷. Actualmente, la internacionalización del mercado hace que la gran diversidad de bebidas alcohólicas se consuma en todo el mundo, llegando a alcanzar en 2012 un consumo de 27.000 millones de litros de destilados. El destilado más bebido en el mundo es el vodka con 4.400 millones de litros al año, siendo Rusia el mayor consumidor, luego Estados Unidos y Ucrania. El segundo destilado más popular es el ron con 1.470 millones de litros, del que la India, Estados Unidos, Filipinas y Cuba son líderes de consumo. Los mayores consumidores de whisky escocés con 860.000 litros al año en todo el mundo son Francia, Estados Unidos y el Reino Unido; mientras que el tequila se toma más en Estados Unidos que en México. En cuanto a la ginebra, Filipinas lidera su consumo¹⁸.

¹⁵ Los médicos de la segunda mitad del siglo XIX investigan el aspecto somático del consumo de alcohol en los hospitales y asilos de la época. Era una enfermedad de pobres. Se distingue entre el buen alcohol y mal alcohol.

¹⁶ Jean-Paul Jeannin, *Gérer le risque alcool au travail*, Editions de la Chronique Sociale, junio 2003.

¹⁷ Julia Muñoz de Cote Orozco, *Las bebidas alcohólicas en la historia de la humanidad*, AAPAUNAM, Academia, Ciencia y Cultura, www.medigraphic.org.mx, 10 febrero de 2010.

¹⁸ Publicado en *The Economist* por Bryan Le, el 18 junio de 2013.

Según *The Economist*, todos bebemos de todo, siendo Europa el continente que más cantidad de alcohol consume. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe de 2014¹⁹, Europa consume 11 litros de etanol por adulto al año; no obstante, si tenemos en cuenta la población europea abstemia de 55 millones y el consumo no registrado, la cifra podría elevarse a 15 litros de etanol por adulto al año consumidos en forma de cerveza en un 44%, en vino en un 34% y el resto en licores en un 23%²⁰. Con estos datos, Europa ha duplicado en 15 años el consumo medio de alcohol en el mundo, lo que al implicar consecuencias en la salud de los bebedores, de las personas que les rodean y de la sociedad en general, ha requerido que la OMS enfatice de manera prioritaria todos los aspectos relacionados con la prevención²¹.

Según éste documento de referencia mundial, las variaciones sociales, culturales, geográficas y económicas entre los diferentes países que componen la Unión Europea (UE), han supuesto la división de Europa en cuatro grupos según el consumo de alcohol: Este, Centro-Este de Europa, Oeste y Centro-Oeste de Europa. Entre los países nórdicos y el Sur de Europa existen diferentes consumos, patrones y tendencias, pero la mayor diferencia se revela entre el Este y el Oeste. El Este realiza un mayor consumo de alcohol con 14,5 litros de alcohol puro por adulto al año, y el Oeste consume casi 12,5 litros de etanol puro por adulto al año. Entre el Norte y el Sur, la diferencia es menor con 11,2 litros en el Sur de Europa y casi 10 litros en el Norte. Ahora bien, cuando se tienen en cuenta los indicadores de consumo peligroso de alcohol, es decir la proporción de bebida que se toma fuera de las comidas²² o el consumo por atracones (*"binge drinking"*), entonces el Este y Centro-Este de Europa alcanza la mayor puntuación con 2,9 en una escala donde el valor numérico 1 es registrado como el consumo de menor daño y el valor numérico de 5 como el que refiere al consumo más dañino. Le siguen los países nórdicos con 2,8; el Centro-Oeste y Oeste europeo con 1,5 y el Sur de Europa con 1,1. Con este tipo de valoración el Este y los países nórdicos lideran el consumo de alcohol de riesgo.

Con criterios demográficos, 266 millones de los adultos europeos consumen al día hasta un máximo de 20 gramos de alcohol para las mujeres y hasta 40 gramos de alcohol para los hombres. Un 15% de los adultos referidos (58 millones) superan este nivel, rebasando 20 millones de ellos (6%) los 40 gramos de alcohol al día para las mujeres y los 60 gramos de alcohol al día para los hombres. Si nos fijamos en la adicción más que en los niveles de consumo, podemos estimar que 23 millones de europeos (es decir el 5% de los hombres y el 1% de las mujeres) sufren una dependencia alcohólica en cualquier año aisladamente considerado. En todas las culturas estudiadas, los hombres se enfrentan a una mayor probabilidad de consumo de alcohol respecto de las mujeres; y de consumirlo, consumirán siempre más que el sexo femenino. Una diferencia que acrece entre ambos sexos cuando se considera el consumo de riesgo. Si bien, aunque las mujeres registren una cifra inferior de consumo de riesgo y aunque en caso de embarazo el consumo sea cero, todavía un número significativo de mujeres, entre un 25% y un 50%, continúa bebiendo y algunas a un nivel perjudicial para su salud.

Desde un punto de vista socio económico, Europa ocupa un papel central en el mercado global del alcohol constituyendo la fuente de una cuarta parte de la producción mundial de alcohol, y más de la mitad de la del vino. Comercialmente, la UE está involucrada en el 70% de las exportaciones de alcohol y en casi la mitad de las importaciones mundiales. La mayor parte de este comercio se realiza entre los propios países europeos y el comercio del alcohol contribuye con aproximadamente 9 billones de euros al balance de mercancías de la UE en su conjunto; prueba de ello son las siguientes cifras económicas relativas a la industria alcohólica, el empleo y los costes:

¹⁹ *Global status report on alcohol and health 2014*, www.apps.who.int.

²⁰ Los diez países de Europa que consumen más alcohol puro por habitante y años son: Bielorusia con 17,5 litros, República de Moldavia con 16,8 litros, Inglaterra 15,4 litros, Rusia 15,2 litros, Dinamarca 13,5 litros, Alemania con 12,5 litros de alcohol puro, República Checa con 11,5 litros, Italia con 11 litros de alcohol puro y Francia con 10,2 litros.

²¹ El mensaje que pretende transmitir la OMS a los países europeos es: *"la enfermedad relacionada con el alcohol en Europa es evitable"*, lo que se pone de manifiesto en los documentos: para Europa, *European Union Drug Strategy 2013-2020*, www.concilium.europa.eu, marzo de 2013; para España *la Estrategia Nacional sobre drogas 2009-2016*, BOE de 19 de febrero 2009 página 15284; y para Francia, *Plan Gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017*.

²² En la mayor parte de la UE15, el 40% de los consumos se concentran en la cena, aunque en los países del Sur, es mucho más probable consumir alcohol a la hora del almuerzo. Se deduce también un gradiente entre Norte y Sur respecto del consumo diario: la frecuencia de consumo no diaria (por ejemplo beber varias veces por semana, pero no cada día) es más común en la Europa Central en la que se observa una reciente armonización dentro de la UE15.

- El papel económico de la industria alcoholera revela que los impuestos del alcohol en la Europa de los 15²³ sumaron 25 billones de euros en el año 2011 excluyendo las tasas de venta y otras contribuciones pagadas en la cadena de suministros.
- En cuanto al empleo, más de setecientos cincuenta mil puestos de trabajo se relacionan con la producción de alcohol (sobre todo de vino), además del empleo generado en la cadena de distribución.
- El coste total tangible del alcohol se estimó en 125 billones de euros para el año 2003, cifra que equivale al 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo y que es aproximadamente igual al valor recientemente calculado para el tabaco.
- Los costes intangibles, que indican el valor que las personas otorgan al dolor, sufrimiento y pérdida de vida por los daños en la salud, los delitos y los problemas sociales causados por el alcohol se estimaron en 270 billones de euros (oscilando las cifras entre 150 billones de euros y 760 billones de euros) en 2003.

La trascendencia del consumo de alcohol a nivel mundial concentra su dinamismo en el continente europeo, condicionado principalmente por el elevado consumo de alcohol puro en litros *per capita* que presentan distintos países europeos, el preocupante consumo de riesgo en determinados grupos poblacionales y la rentable industrialización del alcohol que obliga a establecer criterios de gestión económicos y sociales. Ahora bien, ¿los matices de consumo entre los distintos países de la UE desarrollan patrones de consumo comparables?

1.1.3.- Perfiles de consumo de alcohol en dos países vecinos: Francia y España

Para describir los patrones de consumo de alcohol en una sociedad, los estudios recurren a criterios de medición según indicadores de consumo como el consumo de alcohol *per capita*²⁴, la edad de inicio y la frecuencia de consumo de alcohol, la cantidad de alcohol consumida, el consumo promedio de alcohol, el consumo excesivo puntual y la preferencia de bebidas alcohólicas²⁵. La información se obtiene mediante la elaboración de encuestas poblacionales y los resultados permiten clasificar homogéneamente y de manera comparable las distintas formas de consumo de alcohol²⁶.

Como ya se ha avanzado Europa se divide en cuatro grupos geográficos según el consumo de alcohol realizado, ¿existen diferencias de consumo entre países de un mismo grupo geográfico? Para ello se ha considerado que Francia y España son un ejemplo comparativo interesante por su cercanía; y en consecuencia se han recogido de forma paralela los datos relativos al consumo de alcohol que se presentan en ambas sociedades europeas²⁷.

- El 65,6% de la población española de más de 15 años²⁸ bebió alguna vez alcohol en el último año, mientras que en Francia el porcentaje asciende al 86,9% de su población.

²³ La Europa de los 15 la componen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos Portugal Reino Unido y Suecia.

²⁴ Es un indicador poblacional agregado que permite realizar comparaciones y análisis de tendencias. Su cálculo se basa en datos sobre producción, importación exportación y venta de bebidas alcohólicas disponible mediante estadísticas gubernamentales. Se expresa en litros de etanol puro.

²⁵ Se refiere a aquella que contiene etanol en su composición, sea de forma natural o adquirida, con una concentración superior 1% de su volumen. Las bebidas alcohólicas se comparan en virtud de su graduación o porcentaje de etanol. Una bebida de 13° indica que cada 100 ml de bebida, 13 ml son de etanol puro. Santiago Delgado Bueno, *Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forense*, tomo II, capítulo 69, editorial Bosch, 2011.

²⁶ José L Valencia Martín, María José González, Iñaki Galán, *Aspectos metodológicos en la medición del consumo de alcohol: la importancia de los patrones de consumo*, Revista Española Salud Pública número 4, volumen 88, páginas 433 a 446, julio-agosto 2014.

²⁷ Referido en: La Encuesta Nacional de Salud en España, referida al periodo 2011-2012 y publicada por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en el año 2013. Jean-Baptiste Richard, y colb, *La consommation d'alcool en France en 2014*, Evolutions número 32, páginas 1 a 6, abril 2015. Iñaki Galán y colb., *Patrones de consumo de alcohol en España: un país en transición*, Rev Esp Salud Pública número 4, 88:529-540, julio- agosto 2014

²⁸ El informe de la Encuesta Domiciliaria sobre el uso y Abuso de Drogas en España realizado para el periodo 2009-2013 (EDADES) establece que la edad media de inicio es a los 16 años aunque la primera embriaguez sobre los 14 años.

- Del dato del 65,6% de la población española consumidora de alcohol o del dato del 86,9% de la población francesa consumidora; respectivamente el 77,5% fueron hombres españoles y el 54,3% fueron mujeres españolas; y para Francia, el 88,9% fueron franceses mientras que el 84% fueron francesas.
- El consumo diario de alcohol en España es del 13,8% y en Francia del 9,7% en la población general.
- El consumo diario de alcohol en Francia y España aumenta con la edad alcanzando un máximo de 25% para la edad entre 65 y 75, mientras que el consumo de riesgo disminuye para ser de un 2%.
- En España se consume más cerveza (46,5% de la población) y menos vino (38,6% de la población), en Francia se consume menos cerveza (20,3% de la población) y más vino (37,1% de la población).
- Los hombres franceses que más alcohol consumen se encuentran en la franja de edad de 25 y 34 años y las mujeres francesas en la edad entre 35 y 44 años; mientras que en España los hombres que más alcohol consumen tienen entre 30 y 44 años y las mujeres entre 15 y 29 años.
- El 56,8% de los jóvenes franceses entre 15 y 24 años declara haber consumido alcohol dentro del patrón *binge drinking*²⁹ y en España lo declara el 46,8% de los jóvenes entre 15 y 29 años³⁰.

Al asociar y comparar el consumo de alcohol en virtud de los datos estadísticos que presentan los estudios relativos a cada país, puede decirse que entre Francia y España existe un perfil social de consumo similar en sentido genérico, pero desigual al matizar las diferencias que pasan desapercibidas:

- En ambos países más de la mitad de la población consume alcohol, aunque en Francia lo consume un 18,8% más de la población general.
- Igualmente en Francia y España los hombres consumen más alcohol que las mujeres, mientras que en Francia el consumo por ambos sexos es parejo en porcentaje; en España la diferencia de consumo entre uno y otro sexo es significativamente mayor.
- La franja de edad en la que más alcohol se consume es más temprana en los hombres franceses que los españoles, ocurre a la inversa en las mujeres, donde la franja de edad es más temprana para las mujeres españolas que para las francesas.
- Las encuestas confirman que se consume más alcohol en Francia que España, sin embargo el consumo diario de alcohol de los españoles es mayor que el consumo diario de los franceses.
- En cuanto a la preferencia de bebidas alcohólicas consumidas, en España la cerveza ha desplazado al vino pero en Francia el vino es la bebida preferida de los franceses.
- Finalmente, los jóvenes franceses y españoles consumen alcohol según el patrón conocido como *binge drinking*, que se encuentra mucho más asentado en la juventud francesa que en la española. Lo que justifica que algunos autores planteen que el patrón de consumo de alcohol en España correspondería al denominado “país en transición”³¹.

Estos pequeños matices sobre el consumo de alcohol, observados al comparar ambos países, ponen de manifiesto que, aunque el consumo tienda hacia un mismo modelo, los patrones sociales actuales se muestran distintos en cada una de las dos sociedades. Tradicionalmente se ha diferenciado entre países con *wet cultures* donde el consumo de alcohol está integrado en la vida cotidiana, y países con *dry cultures*, donde el consumo por intoxicación es más probable. Esta dicotomía de modelos parece ir desapareciendo para homogeneizarse en una nueva forma de consumo donde destacan para la medición criterios de regularidad en el consumo y el grado de embriaguez. España se sitúa en este perfil como país en transición hacia el patrón *binge drinking*, mientras que en Francia dicho modelo está más que asentado. Se trata de un perfil de consumo de alcohol instaurado entre los más jóvenes y cuyas consecuencias a futuro predicen importantes repercusiones sociales, sanitarias y laborales. Este cambio cultural de consumo obliga a plantear políticas de prevención que atiendan al consumo de riesgo practicado en la actualidad. Ahora bien, ¿Deben considerar las políticas preventivas los matices de consumo que presenta cada país? ¿Es posible que un determinado enfoque preventivo de consumo

²⁹ El patrón del *binge drinking* es el consumo de igual o más de seis bebidas estándar (una bebida estándar es equivalente a 10 gramos de alcohol) en un intervalo de tiempo de cuatro a seis horas en el caso de los hombres y de igual o más de cinco horas en las mujeres.

³⁰ La población española entre 15 y 16 años se refieren a consumos medios de 60 gramos de alcohol en una sola vez. Entre los adolescentes que consumen alcohol de forma frecuente, una de cada 6 veces lo hace en forma de “atración” (*binge drinking*).

³¹ Ver nota 26.

de alcohol pueda no ser eficaz por no atender a su estricto perfil de consumo? Lo cierto es que la prevención vela por una disminución de las repercusiones sociales negativas, ya sea en el ámbito de la salud para evitar una dramática demografía; ya sea en el ámbito laboral para velar por una sociedad no ruinoso. Los perjuicios sobre la salud individual o pública y los daños sociales variarían necesariamente en función del patrón de consumo de alcohol de cada sociedad; pero lo que indudablemente preocupa hoy a ambos países vecinos es el riesgo del consumo alcohol y sus consecuencias futuras sobre la sociedad.

1.2.- Repercusiones sociales, sanitarias y laborales del consumo de alcohol relevantes desde una perspectiva médico legal

La Medicina Legal permite establecer razonamientos y juicios de determinación jurídica al facultar la investigación de causas y establecer perfiles psicopatológicos relacionados con el comportamiento o enfermedades padecidas; en definitiva de ella depende, en muchas ocasiones, la fijación única de un nexo causal que afectará a la imputabilidad de unos hechos respecto de un sujeto. El consumo de alcohol es uno de los principales factores de impacto sobre la salud individual y colectiva; y así lo enfatiza la OMS en sus diferentes informes acerca del consumo de alcohol y la salud pública, desde el año 2005 hasta el año 2014. Destacan también entre los problemas sociales asociados al consumo nocivo y a las tendencias de consumo peligroso, conflictos vinculados a la salud, la discapacidad, la violencia, la marginación y el trabajo, de los que derivan necesariamente aspectos médico legales debido a la exigencia, para el Derecho, de establecer relaciones causales. ¿Qué repercusiones sociales, sanitarias y laborales justifican la intervención de la Medicina Legal en el consumo de alcohol?

1.2.1.- Repercusiones del consumo de alcohol en la salud

Una vez ingerido, el alcohol alcanza la circulación sanguínea sin ser modificado aparentemente³². Un 20% del alcohol se absorbe en el estómago y el 80% en el intestino delgado. Podemos considerar que el tiempo medio de absorción de alcohol en el estómago es de 1,7 minutos³³. El alcohol se distribuye en los tejidos del cuerpo, proporcionalmente a su contenido en agua, por lo que ante una cantidad igual de alcohol consumido, se alcanza una mayor concentración de alcohol en los tejidos de las mujeres que en los hombres³⁴. El alcohol se elimina a una velocidad constante por los pulmones en forma de vapor mezclado con el aire expirado. Entre un 3% y un 5% del alcohol ingerido es eliminado, sin transformación alguna, por la orina, la heces, el sudor y el aire expirado; mientras que el 95% y 98% del alcohol ingerido se metaboliza en el hígado con una tasa de metabolismo hepático³⁵ fija e independiente de la cantidad consumida; por lo que generalmente el hígado metaboliza 10 gramos de etanol a la hora. Tras el consumo de alcohol los efectos sobre el sistema nervioso y el cerebro pueden iniciarse a los cinco minutos del consumo, con un máximo de 30-45 minutos. Los efectos inmediatos del alcohol sobre el organismo son la relajación, la desinhibición y la sensación de bienestar, que se modifican a medida que aumenta el consumo (aumentando el grado de intoxicación etílica) lo que determina alteraciones como la reducción de la capacidad cognitiva, sensorial (audición y visión) y motora, la dificultad al hablar, la lentitud de reacción, la debilidad muscular e incluso situaciones de vértigo, náuseas y vómitos que pueden provocar la pérdida de conciencia y el coma etílico a partir de una concentración en sangre de 3 g/l. Se considera que el alcohol puede ser causa de muerte por depresión respiratoria a partir de una concentración en sangre de 5 g/l. El alcohol también afecta a los patrones

³² Se acepta la existencia de una cierta capacidad metabólica en el estómago debido a la existencia de la ADH (Alcohol Deshidrogenasa), cuyas variaciones genéticas están relacionadas con el sexo y la raza.

³³ Debe tenerse en cuenta que la absorción del alcohol es dependiente de la dosis consumo de alimentos y fármacos. Aragón y colb. en Adicciones, vol. 14, 2002.

³⁴ El volumen de distribución del etanol es de 0,7 l/kg en el hombre y de 0,6 l/kg en la mujer. Si añadimos el menor peso corporal de la mujer respecto del hombre, tendremos mayores niveles de etanol en sangre en la mujer para cantidades iguales de alcohol ingerido.

³⁵ La capacidad de eliminación del etanol oscila entre 10-20 ml/100ml sangre/hora sin que sean determinantes la edad y el sexo. La metabolización puede verse influida por la expresión de diferentes factores genéticos que afectan a la oxidación del etanol y la existencia de diferentes sistemas bioquímicos que metabolizan el alcohol en el hígado. Santiago Delgado Bueno, dir., *Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses*, tomo II, capítulo 69, páginas 207-251, Bosch, 2011.

del sueño con retardos en el inicio del sueño REM y en consecuencia altera el descanso nocturno. Su consumo afecta al control ejecutivo deteriorándolo, lo que determina una mayor probabilidad de conductas agresivas y violencia física, así como una dificultad cognitiva para resolver conflictos. Finalmente cabe considerar que el alcohol tiene una toxicidad acumulativa con el riesgo de producir lesiones a largo plazo sobre órganos y sistemas corporales. En la actualidad se acepta que los efectos negativos del alcohol pueden observarse a partir de consumos de 10 gramos de alcohol al día³⁶.

Las consecuencias del consumo de alcohol en la salud pública e individual repercuten fundamentalmente en la morbilidad, la mortalidad, la epidemiología y la economía de un país. Así lo ponen de manifiesto los siguientes datos objetivos obtenidos de documentos internacionales y nacionales³⁷:

- El consumo de alcohol provoca el padecimiento de más de 60 enfermedades según informe de la OMS en 2005. La evolución de la investigación científica de los últimos años pone de manifiesto en el año 2014 que son más de 200 enfermedades o lesiones, las relacionadas con el consumo de alcohol.
- Los grupos de enfermedades más directamente relacionadas con el consumo de alcohol son el cáncer, las enfermedades infecciosas, las enfermedades metabólicas, los trastornos mentales, las enfermedades neurológicas, cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales así como alteraciones maternas y perinatales.
- 3,3 millones de las muertes en el mundo en el año 2012 fueron a causa del consumo de alcohol, lo que representa el 5,9% de todas las muertes. Más concretamente el 25% de las defunciones para el grupo etario de 20 a 39 años se atribuye al consumo de alcohol. En la UE más del 7% de los problemas de salud y muertes prematuras están relacionados con el consumo de alcohol, lo que representa un 25% de las muertes en varones jóvenes entre 15 y 29 años.
- Los daños en la salud de terceros relacionados con el consumo de alcohol determinan en Europa aproximadamente sesenta mil nacimientos de bajo peso por consumo durante el embarazo; de 5 a 9 millones de niños viven en entornos familiares afectados por el alcohol; y diez mil fallecimientos en accidentes de tráfico³⁸ de personas distintas al conductor intoxicado (peatones y ocupantes de vehículo).
- El consumo de alcohol en Francia determina cuarenta y nueve mil fallecimientos al año, de los que treinta y seis mil quinientos son hombres (el 13% de la mortalidad total masculina) y doce mil quinientos son mujeres (el 5% de la mortalidad femenina).
- En España la mayor parte de las muertes atribuibles al alcohol vienen determinadas a partir de consumos elevados, es decir de 60 g/día para los hombres y 40 g/día para las mujeres. Ello determina que el 10% de la mortalidad total de la población entre 15 y 64 años se puede atribuir al consumo excesivo y regular de alcohol (80% hombres y 67% mujeres).
- La principal causa de muerte prematura en Francia es el consumo de alcohol, siendo un 22% de las muertes para el grupo etario de 15 a 34 años y un 18% de las muertes prematuras para las personas entre 35 y 63 años.

³⁶ Ana Sarasa-Renedo y colb. *Principales daños sanitarios y sociales relacionados con el consumo de alcohol*, Rev Esp Salud Pública número 4, 88:469-491, julio- agosto 2014.

³⁷ En la reunión del año 2005, la 58ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS (WHA 58.26), en su apartado 13.14, describía la magnitud de los problemas de la salud pública asociados al consumo nocivo de alcohol y las tendencias de consumo peligroso. El informe elaborado por Peter Anderson y Ben Baumberg acerca del consumo de alcohol en Europa, desde una perspectiva de salud pública, en el año 2006, en el que la Comisión Europea iniciaba la elaboración de sus estrategias políticas acerca del alcohol en Europa. (Institute of Alcohol Studies. R. Unido 2006) puso de manifiesto la necesidad de desarrollar políticas de salud pública, capaces de: *“movilizar los recursos locales, estatales, nacionales e internacionales que garantizan las condiciones necesarias para la salud de la población”*.

El Consejo de Ministros en su reunión de 23 de enero de 2009 adoptó el acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Nacional sobre Drogas para el periodo 2009-2016 (BOE nº 38 de 13 de Febrero de 2009, pág. 15284) , en el que se reconoce la gran importancia social y sanitaria acerca del consumo de drogas en España

El informe publicado por la OMS en 2014, *“Global status report on alcohol and health 2014”* , Pone de manifiesto la situación general en el mundo sobre el consumo de bebidas alcohólicas y su relación con la salud.

³⁸ Según el informe de la Fiscalía de tráfico de 2014, en España el 64% de condenas por delitos contra la seguridad vial en 2013 era por conducción bajo los efectos de alcohol y drogas. Así mismo 251 presos de un total de 990 lo eran por conducir bajo los efectos del alcohol.

- En Francia más de 2 millones de personas presentan síntomas de dependencia alcohólica y al menos un 40% de la población presenta un trastorno mental asociado al consumo de alcohol.
- En España el 1,3% de la población general es consumidor de alto riesgo³⁹, siendo el porcentaje para la franja de edad de 45 a 64 años un 1,9%.

Concluimos que la búsqueda de nuevas sensaciones, la edad temprana de inicio, la falta de reconocimiento social de los efectos del alcohol y el patrón de policonsumo⁴⁰ de sustancias psicotrópicas son, entre otros, causas determinantes para la aparición de futuras situaciones de abuso y dependencia⁴¹ alcohólica. Los consumos de alcohol de riesgo se acentúan en los grupos de población más jóvenes, lo que supone una derivación de las consecuencias por consumo de alcohol al ámbito laboral, ya que nos referimos a la población activa o al potencial activo de un país.

1.2.2.- Repercusiones sociales y laborales del consumo de alcohol relevantes, desde una perspectiva médico legal

La repercusión del consumo de alcohol en el ámbito laboral es una cuestión relativamente moderna y su debate está motivado al amparo de los distintos perfiles que presenta. Convivencias laborales, comidas de negocios y fiestas pueden ser sinónimos de consumo de alcohol en el trabajo; pero también la presión de los trabajadores, la exigencia de productividad, el cumplimiento de los objetivos laborales y el estrés revelan el consumo de alcohol como un medio de enfrentarse a las adversidades laborales y adaptarse al sufrimiento derivado del trabajo. Un arma de doble filo que convierte el alcohol en la droga más consumida por los trabajadores ¿Cómo influye el patrón de consumo de alcohol en la población activa?

El consumo de alcohol en el trabajo se mide objetivamente en términos económicos y subjetivamente según la repercusión negativa que dicha conducta de consumo tiene sobre la actividad laboral. De manera que a las siguientes cuestiones laborales negativas podemos aparejar los siguientes datos estadísticos⁴² reflejados en la literatura científica:

- Entre los años 1995 y 2005, el consumo de alcohol alcanza las prevalencias más altas entre los trabajadores respecto de la población general. Así el 95% de la población laboral ha tomado bebidas alcohólicas alguna vez y el 90% lo ha consumido en los últimos doce meses. Se estima que el 12% de los trabajadores consumen alcohol en niveles de riesgo para la salud. El 26% de los bebedores han presentado problemas derivados de su consumo habitual y casi un 7% de ellos ha sufrido algún tipo de consecuencia laboral negativa: accidente, sanciones y despidos. Algunos estudios cifran en un 30% los accidentes relacionados con el consumo de alcohol.
- En 2013, el 10,5% de la población entre 16 y 64 años empleada o en paro con trabajo previo había consumido alcohol en los últimos 30 días. Lo que supone un descenso respecto de los datos del año 2007 que referían un 11% de la población laboral.
- El perfil del consumidor de bebidas alcohólicas a diario en el marco laboral corresponde a un hombre mayor de 45 años sin estudios o con estudios primarios o secundarios.
- El consumo de alcohol en los trabajadores de mayor edad se hace más problemático laboralmente, al disminuir significativamente sus aptitudes para el puesto de trabajo.

³⁹ Es la persona que ha consumido alcohol en los últimos doce meses con cualquier frecuencia y cantidad, mayor de 40g/día en hombre y de 24 g/día en mujeres.

⁴⁰ Se define como la asociación de consumo de alcohol con otras sustancias estimulantes de forma simultánea o de forma regular en la vida cotidiana.

⁴¹ Philippe Arvers, *Trastornos Adictivos*, 7(2):59-68, 2005.

⁴² Teófila Vicente Herrero y colb., *Consumo de alcohol en población trabajadora española y repercusiones metabólicas*, Rev Cubana de Salud Pública, 2014; 40 (1). Legleye S y colb., *Gender and age disparities in the association of occupational factors with alcohol abuse and smoking in the french working population*, Rev Epidemiol Santé Publique, 2011; 59 (4):223-32. Chau N y colb., *Lorhandicape Group Are occupational factors and mental difficulty associated with occupational injury?*, J Occup Environ Med., 2011; 53 (12):1452-9; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España, Observatorio Español de la droga y las toxicomanías, 2015.

- El consumo de alcohol incrementa el absentismo laboral y se estima un gasto de 59 billones de euros por pérdida de productividad, en concepto de absentismo, desempleo y pérdida de años de vida laboral por muerte prematura en la UE.
- Las actividades laborales con mayor prevalencia en el consumo de bebidas alcohólicas a diario son: el sector de la construcción con un dato del 19,4% y la agricultura, pesca, ganadería y extracción con un 13,5 %. Otros sectores como las actividades domésticas y servicios personales registran un 4% de consumidores y las actividades artísticas recreativas y deportivas el 7,3%.
- En función de la jornada laboral, los trabajadores que consumen bebidas alcohólicas a diario trabajan, bien en la jornada partida (12%), o bien en turno de noche (11,5%).
- El 4,8% de la población entre 16 y 64 años empleada o en paro con trabajo previo realiza un consumo de riesgo de alcohol, siendo su perfil el de un hombre soltero menor de 25 años sin estudios o con estudios primarios o secundarios.
- Los estudios españoles reflejan que la prevalencia de consumo de alcohol en la población trabajadora supera al de la población general, alrededor de un 24% de trabajadores consume una cantidad de alcohol considerada de riesgo para la salud física. El mayor porcentaje de bebedores de riesgo se encuentra en la clase social más baja *blue collar*⁴³ y no entre los universitarios.
- Los costes por bajas laborales relacionados con el consumo de alcohol se concretaron en la cantidad de 72.854 millones de euros al año en 2005⁴⁴.

El consumo de alcohol en la población activa repercute en el trabajo desde el momento en que supone mayor accidentalidad, una disminución de rendimiento laboral, un incumplimiento de la jornada laboral, un aumento de los errores en el puesto de trabajo, entre otras. En definitiva la relación entre el consumo de alcohol y trabajo determina consecuencias negativas en el ámbito laboral, ya que supone un aumento de los riesgos laborales. Ello justifica que se planteen políticas de prevención con el objetivo de disminuir los riesgos derivados del consumo de alcohol de la población activa.

1.2.3.- Políticas preventivas sobre el consumo de alcohol en el ámbito laboral

Las políticas de prevención relativas al consumo de drogas se fundamentan en aquellos principios rectores que se orientan bien a la posibilidad de evitar o disminuir el consumo de drogas, bien a concienciar a la sociedad como parte activa en su remedio, o bien a reducir las probabilidades de adicción en la población general. De manera que, en base a dichos objetivos sociales, encontramos en los documentos de referencia⁴⁵ la recopilación de actuaciones preventivas como las siguientes:

- Promover conciencia social sobre los problemas, los daños y los costes relacionados con las drogas incrementando la comunicación con la población.
- Aumentar capacidades y habilidades de resistencia a la oferta de consumo.
- Retrasar la edad de inicio del contacto con drogas.
- Ajustarse a los patrones de consumo habitual u ocasional.
- Formar y realizar una labor educativa e informativa respecto de la población para que las políticas sean más eficaces.
- Combatir el tráfico de drogas a nivel internacional y nacional.
- Velar por una mejor aplicación de las normas internacionales y nacionales.
- Fomentar una mejor coordinación territorial en el país.
- Diseñar y aplicar medidas preventivas en el ámbito laboral.

⁴³ CON-94 y su listado de ocupaciones permite dividir a los trabajadores en *manuales blue collar* y no manuales *white collar*, Teófila Vicente Herrero y Ángel Arturo López González. *Consumo de alcohol en trabajadores españoles del sector servicios. Variables sociodemográficas y laborales implicadas*, www.cienciaytrabajo.cl, año 16, número 51, septiembre-diciembre de 2014.

⁴⁴ M.T. Gómez Tiegón y F. J. Álvarez González estiman en 2005.

⁴⁵ Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España; Encuesta Nacional de Salud en España 2013 y La consommation d'alcool en France 2014; Estrategia Nacional sobre drogas. España 2009-2016; Plan de prevención francés 2009-2016.

Los sectores poblacionales objeto de las políticas preventivas se dividen en: la sociedad en su conjunto, la familia, la población infantil, la comunidad educativa, los colectivos más vulnerables y la población laboral. Resulta interesante que la esfera laboral sea uno de los puntos de mira para el establecimiento de políticas preventivas sobre el consumo de drogas; ello se debe a que en el contexto del trabajo pueden vigilarse más eficazmente la aplicación de una determinada política preventiva. Lo que justifica la existencia de una normativa en específica en Prevención de Riesgos laborales⁴⁶.

Al centrarnos en la prevención del consumo de alcohol en la esfera laboral, en España la prevención hace hincapié en la prevención primaria dentro de un marco global de promoción de la salud en el ámbito laboral, a fin de introducir cambios en las aptitudes y nivel de información referidas a los riesgos del consumo de alcohol en el lugar de trabajo. Se propugnan programas de prevención secundaria en los empleados que ya tiene problemas relacionados con el consumo de alcohol para prevenir la pérdida de calidad en el desarrollo del trabajo, pérdida de empleo, pérdida de productividad. Programas de prevención terciaria que consisten en la reintegración al puesto de trabajo de aquellos empleados que han recibido tratamiento por alcohol dependencia. En Francia, se potencia la figura del médico del trabajo para filtrar aquellos casos de riesgo y valorar el ambiente laboral de los trabajadores.

El consumo de alcohol constituye una preocupación mundial pero en Europa se percibe especial inquietud debido a las consecuencias sociales que pueden resultar del patrón cultural de consumo abusivo de alcohol que se perfila en las poblaciones europeas actuales. El consumo de alcohol ha motivado diversidad de estudios acerca de las repercusiones que el consumo de alcohol tiene sobre la salud, acerca de los riesgos de su abusos sobre la necesidad de su prevención. Estudios médicos que permiten conocer más acerca del consumo y estudios estadísticos que analizan cuánto, cómo, y qué se consume desde la perspectiva sociológica a través de encuestas, pero si aunamos el ámbito médico y legal la perspectiva se deberá estudiar desde el conflicto judicial exteriorizado mediante las resoluciones judiciales públicas. Esta tesis plantea una mirada al problema social del consumo de alcohol en la población activa, desde la coexistencia entre la Medicina y el Derecho, sin que ambas materias se contemplen aisladamente, sino en conjunto. Una convivencia de la que surgen aspectos médico legales por derivarse de ella, no solo la evidencia de un problema socio sanitario, sino las respuestas y soluciones propuestas ante los diferentes conflictos relacionados con el consumo de alcohol y el trabajo. La genuina mirada médico legal es la perspectiva propuesta en esta tesis a través de las resoluciones judiciales, concebidas como reflejo social del abordaje de resolución de conflictos.

⁴⁶ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

2.1.- Hipótesis

Las resoluciones judiciales pueden evidenciar, de forma objetiva, las cuestiones y conflictos médico legales que se derivan del consumo de alcohol y el ámbito laboral.

2.2.- Objetivos

Los objetivos que se proponen para esta tesis son:

- 1.- Seleccionar las resoluciones judiciales que recojan una relación entre el consumo de alcohol y el trabajo en un periodo de tiempo concreto.
- 2.- Determinar y clasificar las resoluciones judiciales obtenidas de acuerdo con criterios médico legales.
- 3.- Describir los conflictos médico legales relacionados con el consumo de alcohol y el trabajo.
- 4.- Comparar las resoluciones judiciales sobre consumo de alcohol y trabajo en dos países de la Unión Europea como modelo: Francia y España.
- 5.- Aportar a la comunidad científica, en el ámbito de la Medicina legal y del Derecho, los documentos jurídicos especialmente clasificados desde un punto de vista médico legal, a fin de futuras investigaciones comparadas que relacionen el Derecho laboral, consumo de alcohol y Medicina Legal.

3.1. El material: resoluciones judiciales • 3.1.1. De la resolución procesal a la jurisprudencia • 3.1.2. Bases de datos jurídicas para la búsqueda de resoluciones judiciales • 3.2. El diseño de un método • 3.2.1. El método de selección de las resoluciones judiciales • 3.2.2. El método analítico descriptivo de las resoluciones judiciales

El apartado 3 sobre el material y método relativo a este trabajo de investigación acerca de la relación entre consumo de alcohol y el trabajo, plantea abiertamente las cuestiones acerca de: el *qué* se investiga y el *cómo* se investiga desde una perspectiva práctica. Para el adecuado examen de la realidad social planteada entre el consumo de alcohol y el trabajo, se pretende la distinción y separación¹ suficiente de las partes que componen la temática de investigación mediante el material elegido y método diseñado que presentamos a continuación.

Con el material² nos referimos al *qué* se investiga, y en este sentido el *qué* se constituye de manera práctica en el cuerpo sobre el que recae la indagación. Es decir que con el término material se alude a la documentación que sirve de base para la elaboración del trabajo intelectual (3.1). En el interés de un mejor análisis médico legal de las coincidencias y diferencias entre Francia y España sobre la relación entre consumo de alcohol y trabajo se han considerado elementos jurídicos y procesales con el fin de elaborar, en mejores condiciones intelectuales, los elementos de distinción que esta tesis pueda suscitar. Para ello se atenderá al concepto jurídico de resolución judicial, su regulación y acceso.

Con el método³ nos referimos al *cómo* se estudia dicho material o documentación, y en este caso presentamos la elaboración de un diseño metodológico. Un método que permite primero seleccionar los documentos jurídicos que serán analizados, los cuales a su vez conformaran el material real de la búsqueda (3.2.1 página 37); y segundo, un método que permite realizar una lectura analítico descriptiva de los susodichos documentos con el fin de deducir las realidades socio laborales existentes que planteen cuestiones médico legales (3.2.2 página 44).

En definitiva material y método, por un lado fundamentan la investigación ofreciendo una serie de resultados recogidos en el apartado 4 de este trabajo; y por otro, hacen posible la discusión sobre la relación entre consumo de alcohol y el trabajo en Francia y España construido en el apartado 5 de esta tesis (página 75).

¹ Se aplican a esta reflexión los sentidos del término análisis que define el Diccionario de la Real Academia Española donde en una primera acepción, la palabra análisis de origen griego es "la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos"; y en una segunda acepción "el examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual".

Al amparo de estas definiciones trasladadas a la fundamentación de la investigación, se entiende la relación entre consumo de alcohol y trabajo como el "todo" al que se refiere la primera acepción, y en la segunda acepción como la "realidad susceptible de estudio intelectual" para la que se hace necesario distinguir, separar y examinar cuando el fin es analizar.

² El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra material de origen latino (*materialis*) como aquello que es "perteneciente o relativo a la materia" en primer lugar; como lo "opuesto a lo espiritual" en segundo lugar; como lo "opuesto a la forma" en tercer lugar; y en una octava acepción como la "documentación que sirve de base para un trabajo intelectual". Es la octava acepción la que justifica desde el punto de vista práctico el uso de este término en nuestro trabajo ya que nos permite identificar material y documento como términos sinónimos.

³ El término método lo define, el Diccionario de la Real Academia Española, entre varias acepciones como un "modo de decir o hacer con orden"; como un "modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa" y como "procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla". Las distintas metodologías diseñadas para esta tesis pretenden ser procesos que ordenen, observen para concluir realidades.

3.1.- El material: resoluciones judiciales

3.1.1.- De la resolución procesal a la jurisprudencia

El material objeto de estudio en esta tesis acerca de la relación entre consumo de alcohol y el trabajo lo componen dos tipos de documentos jurídicos concretos: autos y sentencias. Tales documentos jurídicos se clasifican, dentro de los actos procesales, en la categoría de las resoluciones procesales, junto a las providencias, diligencias y decretos⁴.

Las resoluciones procesales son los actos jurídicos de decisión referidos al desarrollo del proceso jurídico⁵, de manera que, por su naturaleza procesal, se regulan en la normativa procesal marco o básica y así se refiere a ellas la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) que les dedica su capítulo IV del Título III⁶, Libro III; la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que las regula en su capítulo VIII, sección I, del Título V, Libro I⁷; el Real Decreto de 14 de septiembre de 1884 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) en su capítulo I del Título VI⁸, Libro I; la Ley 36/2011, de 10 de octubre,

⁴ Las providencias, diligencias y decretos no son resoluciones objeto de estudio en esta tesis, además tampoco son resoluciones publicadas.

⁵ Las resoluciones procesales pueden ser jurisdiccionales o gubernativas. Las primeras son aquellas mediante las cuales los Jueces y Tribunales dan respuesta a las pretensiones que las partes formulan en el proceso o acuerdan de oficio dar, a las actuaciones el trámite establecido legalmente. Reciben denominaciones de sentencias, autos y providencias. Las segundas son acuerdos dictados por los tribunales cuando no estén constituidos en Salas de Justicia, las de las Salas de Gobiernos y las restantes dictadas por jueces o tribunales que no tengan carácter jurisdiccional (LOPJ, LEC, LECr, LPL, LJCA, Reglamento CGPJ 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los tribunales). Juan Manuel Fernández Martínez coord., *Diccionario Jurídico*, Colección Derecho de la A a la Z, Aranzadi, 2009.

⁶ *Artículo 245:* 1. Las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carácter jurisdiccional se denominarán: a) Providencias, cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso. b) Autos, cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma. c) Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deban revestir esta forma. 2. Las sentencias podrán dictarse de viva voz cuando lo autorice la Ley. 3. Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley. 4. Llámese ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme. Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey.

⁷ *Artículo 206 Clases de resoluciones:* 1. Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias dictadas por los Jueces y Tribunales. En los procesos de declaración, cuando la ley no exprese la clase de resolución judicial que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas: 1.ª Se dictará providencia cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial por así establecerlo la ley, siempre que en tales casos no exigiera expresamente la forma de auto. 2.ª Se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvencción, acumulación de acciones, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones. También revestirán la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta Ley tramitación especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisión del Tribunal, así como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que, respecto de estas últimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto. 3.ª Se dictará sentencia para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la ley. También se resolverán mediante sentencia los recursos extraordinarios y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes. 2. Las resoluciones de los Secretarios Judiciales se denominarán diligencias y decretos. Cuando la ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas: 1.ª Se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca. 2.ª Se dictará decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el Secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto. 3.ª Se dictarán diligencias de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal. 3. En los procesos de ejecución se seguirán, en lo que resulten aplicables, las reglas establecidas en los apartados anteriores.

⁸ *Artículo 141:* Las resoluciones de carácter judicial que dicten los Juzgados y Tribunales se denominarán: Providencias, cuando resuelvan cuestiones procesales reservadas al Juez y que no requieran legalmente la forma de auto. Autos, cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a los imputados o procesados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles; cuando decidan la competencia del Juzgado o Tribunal, la procedencia o improcedencia de la recusación, cuando decidan recursos contra providencias o decretos, la prisión o libertad provisional, la admisión o denegación de prueba o del derecho de justicia gratuita o afecten a un derecho fundamental y, finalmente, los demás que según las Leyes deben fundarse. Sentencias, cuando decidan definitivamente la cuestión criminal. Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación. Llámese ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme.

Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) en el capítulo II del Título IV, Libro I⁹; y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa en su Título IV, Sección 8 en la que se refiere exclusivamente a la resolución judicial de la sentencia.

La enumeración *numerus clausus* de resoluciones procesales prevista en nuestro ordenamiento jurídico distingue cinco tipos de resoluciones procesales: las tres primeras resoluciones (providencias, autos y sentencias) son actos procesales de carácter judicial¹⁰ y jurisdiccional¹¹ dictados por los jueces y tribunales competentes en el asunto; y las dos categorías siguientes (diligencias y decretos) son actos procesales dictados por los Secretarios Judiciales. Todas ellas se caracterizan por decidir sobre el desenvolvimiento del proceso jurídico, por lo que en consecuencia tales resoluciones supondrán o bien la continuación del procedimiento al que se refieran dentro del proceso jurídico, o bien su terminación. En este aspecto, y atendiendo a la repercusión que una resolución puede tener sobre el procedimiento o sobre el proceso, se diferencia entre resoluciones interlocutorias, definitivas y resoluciones firmes. Las primeras resuelven cuestiones prejudiciales y disponen la continuidad del procedimiento; las segundas se caracterizan por poner fin al procedimiento¹² y las terceras darán por terminado el proceso al suponer con su firmeza el requisito jurídico de autoridad de cosa juzgada¹³.

La diferencia entre proceso y procedimiento radica en una cuestión de continente y contenido. El proceso judicial lo conforman una serie de actos jurídicos que agrupados pueden identificarse con distintos tipos de procedimientos, que agrupados a su vez constituyen el proceso jurídico. (Ver esquema 1: Del hecho jurídico al auto o sentencia).

La convivencia en sociedad supone la existencia de acontecimientos que pueden tener o no tener transcendencia jurídica. Los hechos que denominamos jurídicos son acaecimientos no voluntarios que tienen efectos jurídicos, en cambio cuando hay voluntad de un sujeto se denominan actos jurídicos; y es en esta última categoría donde se clasifican los actos procesales definidos de manera genérica como los hechos voluntarios con efectos jurídicos que afectan al proceso. El requisito de voluntariedad incluido en la definición implica necesariamente la existencia de un sujeto, por lo tanto la clasificación de los distintos actos procesales atenderá a un criterio subjetivo y se diferenciará entre actos procesales de las partes, actos procesales de los Jueces o Tribunales y actos procesales de los Secretarios Judiciales. Las resoluciones judiciales son los actos procesales dictados por los Jueces y Tribunales y como ya hemos avanzado pueden tener forma de providencias, autos y sentencias.

Para el caso que nos ocupa, los autos y sentencias que constituyen el material de esta tesis y que se someterán al estudio médico legal planteado son resoluciones judiciales definitivas o firmes. La diferencia entre auto y sentencia radica en que la sentencia resuelve el asunto principal objeto del litigio, mientras que el auto resuelve cuestiones de diversa índole relacionadas con el asunto principal del conflicto que surgen a lo largo del proceso judicial. Por tanto, los efectos jurídicos de la sentencia son definitivos y los efectos jurídicos de un auto son provisionales. No obstante, se dice de los autos que son definitivos y que las sentencias son

La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerde, la firma o rúbrica del Juez o del Presidente y la firma del Secretario Judicial. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime conveniente. Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados por el Juez, Magistrado o Magistrados que los dicten. Todas las resoluciones incluirán la mención del lugar y fecha en que se adopten, y si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.

⁹ *Artículo 49 Clases de resoluciones:* 1. Los Jueces y Tribunales de lo social adoptarán sus decisiones por medio de providencias, autos y sentencias en los casos y con las formalidades legalmente previstas. 2. Los Secretarios Judiciales resolverán por medio de diligencias y decretos, igualmente en los casos y con las formalidades legalmente previstas. 3. Se podrán dictar resoluciones orales por el Juez, Tribunal o Secretario Judicial durante la celebración del juicio u otros actos que presidan, documentándose en el acta con expresión del fallo y motivación sucinta de aquellas resoluciones.

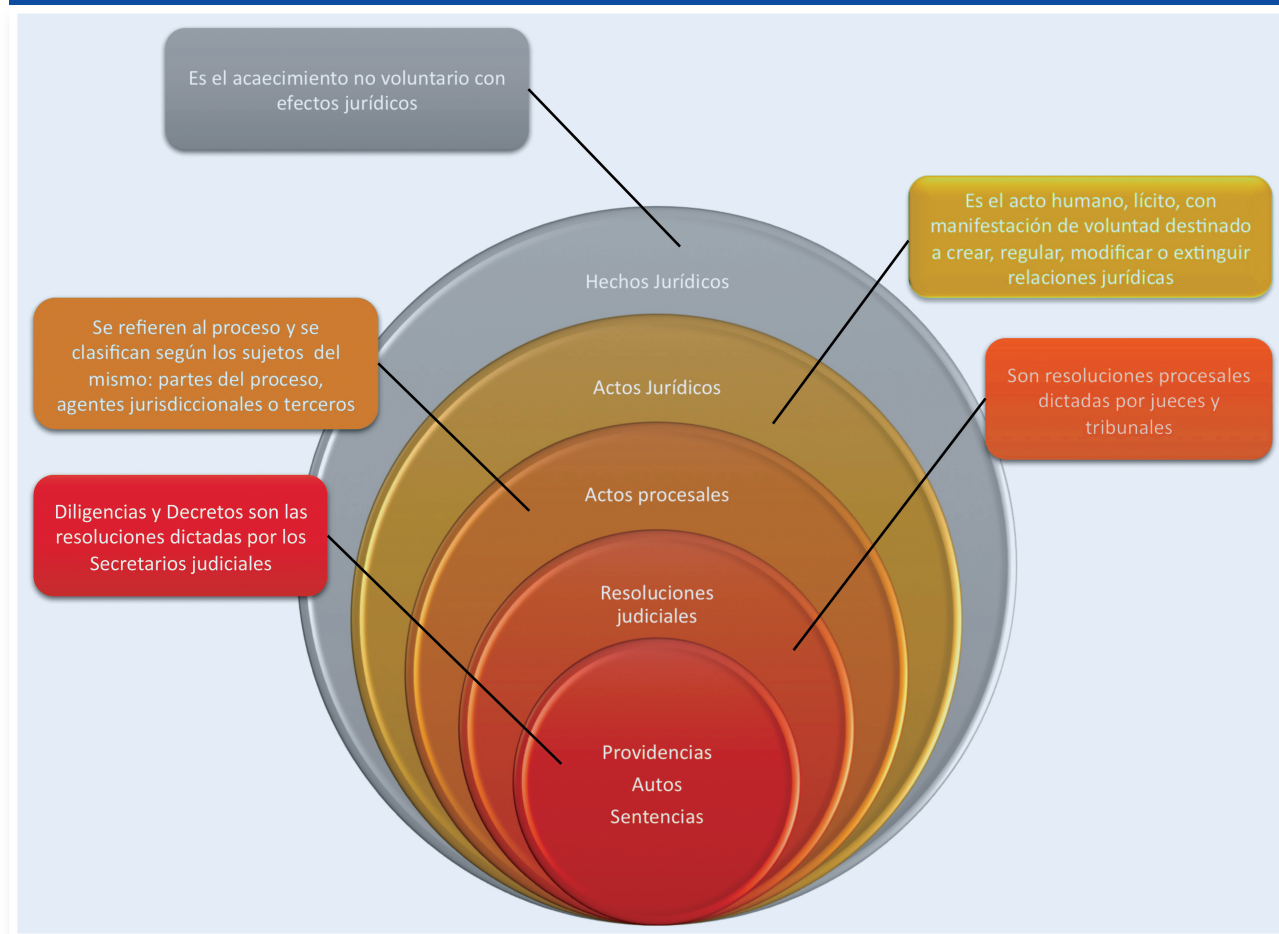
¹⁰ Según regula la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y el Real Decreto de 14 de septiembre de 1884 por la que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento criminal.

¹¹ Según regula Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: suponen el ejercicio de la jurisdicción en aplicación de un derecho material o procesal las resoluciones de carácter gubernativo y se llaman acuerdos.

¹² Gimeno Sendra, Vicente, Introducción al derecho procesal, edición Colex, 2014.

¹³ Artículo 207.3 de la LEC.

Esquema 1. Del hecho jurídico al auto o sentencia



firmes en virtud de la autoridad de cosa juzgada por la que el juez o tribunal queda vinculado a ella según el principio jurídico de invariabilidad regulado en el artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Conviene aclarar, ya que la mayoría de los documentos obtenidos para el estudio reflejados en el apartado 4 sobre Resultados son autos; que para las sentencias definitivas que ponen fin a la primera instancia y contra las que cabe recurso, la firmeza depende de que en el auto de admisión ante el órgano superior se resuelva bien la admisión, bien la inadmisión del recurso. Así, la inadmisión del recurso convertirá la sentencia definitiva en sentencia firme. En este sentido, las resoluciones con forma de autos definitivos (o sentencias interlocutorias) y las sentencias definitivas ponen fin al procedimiento bien porque resuelven sobre un recurso en el caso de los autos, bien porque ponen fin a la primera instancia en el caso de la sentencia. Las sentencias firmes, en cambio, ponen fin al proceso bien porque no cabe recurso contra ellas bien porque estando previsto el recurso ha transcurrido el plazo legal para su interposición por las partes legitimadas.

Ambas resoluciones auto y sentencia coinciden en su estructura formal, contienen un encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamento jurídico o de Derecho o razonamiento jurídico y fallo. Es requisito esencial para este tipo de resoluciones que contengan una motivación jurídica, una herencia del Derecho romano¹⁴ que suele argumentarse en el apartado dedicado a los fundamentos jurídicos.

El análisis de este tipo de documentos jurídicos que componen el material de esta investigación sobre la relación entre el consumo de alcohol y el trabajo ofrece por su importancia en el desarrollo del procedimiento

¹⁴ Thomas Javier Aliste Santos, *La motivación de las resoluciones judiciales*, Marcial Pons, Madrid 2011.

o proceso judicial y por su motivación, un reflejo práctico de los conflictos sociales, aunque cabe recordar que a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de nuestro Código Civil (CC) solo será fuente de nuestro ordenamiento jurídico español la jurisprudencia¹⁵ y los requisitos de su existencia son que haya dos sentencias sobre un supuesto de hecho semejante que dictaminen lo mismo y que emanen del Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional. Por lo que los documentos que se analizan en este trabajo constituyen doctrina judicial, lo que sigue constituyendo un reflejo social importante, sobre todo gracias a la publicidad de estas resoluciones definitivas o firmes que de conformidad con la Ley del Poder Judicial y la Constitución española son accesibles¹⁶ a la ciudadanía a través de las plataformas informáticas.

3.1.2.- Bases de datos jurídicas para la búsqueda de resoluciones judiciales

En la actualidad, el acceso a las resoluciones judiciales dictadas por los Juzgados y Tribunales se realiza a través de bases de datos jurídicas electrónicas. Un conjunto de información organizada y sistematizada en archivos electrónicos, ya sea en una web pública o privada, que proporciona, mediante el uso de distintos tipos de localizadores¹⁷, la información propia del ámbito jurídico en general como puede ser la referida a legislación, jurisprudencia, doctrina o formularios.

El acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, desarrolla el principio jurídico de publicidad aplicado a las resoluciones judiciales al amparo de lo regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Constitución Española, por lo que en su artículo 7 relativo a la publicación y difusión de las resoluciones judiciales¹⁸ establece que las resoluciones judiciales serán remitidas al Centro de Documentación Judicial (Cendoj) para su informatización. Tal organismo se encargará de:

¹⁵ Artículo 1 Código Civil: 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. 3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado». 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.

¹⁶ Acuerdo 1/2005 Consejo del Poder Judicial, artículo 3: 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los interesados podrán acceder al texto de las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el Juez o por todos los Magistrados que las hubieran dictado, depositadas en la Oficina judicial y registradas en los sistemas informáticos.

¹⁷ Los principales localizadores se refieren a voces, expresiones, fechas, números de recursos o números de sentencia entre otros.

¹⁸ **Artículo 7:** Con el objeto de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 107.10 de la LOPJ**, en lo que se refiere a la publicación oficial de las sentencias y otras resoluciones del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales, todos los Juzgados y Tribunales, bajo la supervisión de sus titulares o Presidentes, o de alguno de los Magistrados en quienes aquellos deleguen a estos efectos, procederán a remitir al Consejo General del Poder Judicial, a través del Centro de Documentación Judicial y con la periodicidad que se establezca, copia de todas las sentencias, así como de otras resoluciones que puedan resultar de interés, que hayan sido dictadas por el respectivo órgano judicial. Para que la remisión a través de los sistemas informáticos judiciales sea posible, todos los Jueces y Magistrados cuidarán de que las sentencias y demás resoluciones se integren en las aplicaciones informáticas de su órgano judicial. A tal fin, los Juzgados y Tribunales numerarán las sentencias y autos siguiendo el orden cronológico de su dictado para su incorporación al Libro de Registro de Sentencias y/o Autos a que se refiere el **artículo 265 de la LOPJ**. En cada órgano Judicial se llevará una réplica informática de dicho Libro, que reflejará siempre el número de procedimiento, fecha y número de la resolución, así como, en su caso, su firmeza, como paso previo a su envío en forma electrónica al Centro de Documentación Judicial. En dicho Libro, las resoluciones estarán certificadas electrónicamente, cuando el estado tecnológico del sistema informático lo permita. El Director del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial, procederá a efectuar las recomendaciones que fuesen precisas sobre la materialización de los envíos. En el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se cumplirá lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos personales y en los **artículos 234 y 266 de la LOPJ**. Salvo lo dispuesto en los **artículos 234 y 266 de la LOPJ**, no se facilitarán por los órganos jurisdiccionales copias de las resoluciones judiciales a los fines de difusión pública regulados en el presente artículo, sin perjuicio del derecho a acceder en las condiciones que se establezcan, a la información jurídica de que disponga el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Gabinetes de Comunicación del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, previstas en el Reglamento de los Órganos de Gobierno de Tribunales.

- La recopilación archivo, certificación y custodia de las resoluciones para velar por su integridad, autenticidad y acceso.
- El tratamiento de las resoluciones para cumplir con la legislación en materia de protección de datos personales.
- La difusión de las resoluciones que están dirigidas a los ciudadanos, la Carrera Judicial, las administraciones públicas y las empresas editoriales para su reutilización.
- La edición y distribución de las publicaciones del Consejo y la gestión de las consultas de información jurisprudencial, legal, doctrinal, así como de la coordinación de todas las bibliotecas judiciales del país y del servicio de información y comunicación a través de los entornos web del Poder Judicial.
- Colaborar en la implantación de las decisiones adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial en materia de armonización de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficiencia de la actividad de los Juzgados y Tribunales¹⁹.

Por tanto, el requisito legal de publicidad de las resoluciones judiciales al que se refiere un Estado de Derecho estará garantizado por un organismo público que fomentará su difusión en general sin obligaciones reclamables en cuanto a los medios tecnológicos empleados. Las editoriales privadas ampliarán su mercado difundiendo dicha información pública mediante el diseño de bases de datos jurídicas más completas desde un punto de vista indagatorio²⁰.

Las diferencias entre una base de datos privada y pública son que las bases de datos oficiales suelen referirse a un único tipo de información ya sea legislativa, doctrinal, jurisprudencial o parlamentaria; en cambio, las bases de datos privadas suelen abarcar más de un tipo de información en el ámbito jurídico o incluso todos, y en ocasiones los relaciona entre sí. Por otro lado, las bases de datos oficiales ofrecen un acceso gratuito a la información contenida y las bases de datos jurídicas privadas son de pago mediante el abono de una cuota mensual o anual. Finalmente, la última diferencia se refiere al tesoro²¹ que contiene la información clasificada y que permite hacer la búsqueda por voces, siendo mucho más eficaces los niveles de relación entre los documentos jurídicos que componen el contenido de la información en los tesoros ofrecidos por las bases de datos privadas que por las públicas. En líneas generales, un tesoro comprende lo siguiente:

1. Una lista de términos preferidos, ordenados en forma alfabética, temática y jerárquica.
2. Una lista de sinónimos de esos términos preferidos, llamados descriptores que se unen a los términos.
3. Una jerarquía o relaciones entre los términos.
4. Las definiciones de los términos para facilitar la selección de los mismos por parte del usuario.
5. Un conjunto de reglas para usar el tesoro.

En esta tesis se han elegido cuatro bases de datos jurídicas: Legifrance, Dalloz, Cendoj y Tiran on line. Las dos primeras de origen francés y las dos últimas de origen español para poder atender al objetivo de comparativa entre los dos países europeos vecinos: Francia y España; con el fin de ampliar estos propósitos comparativos, en cada país se ha elegido una base pública y otra privada.

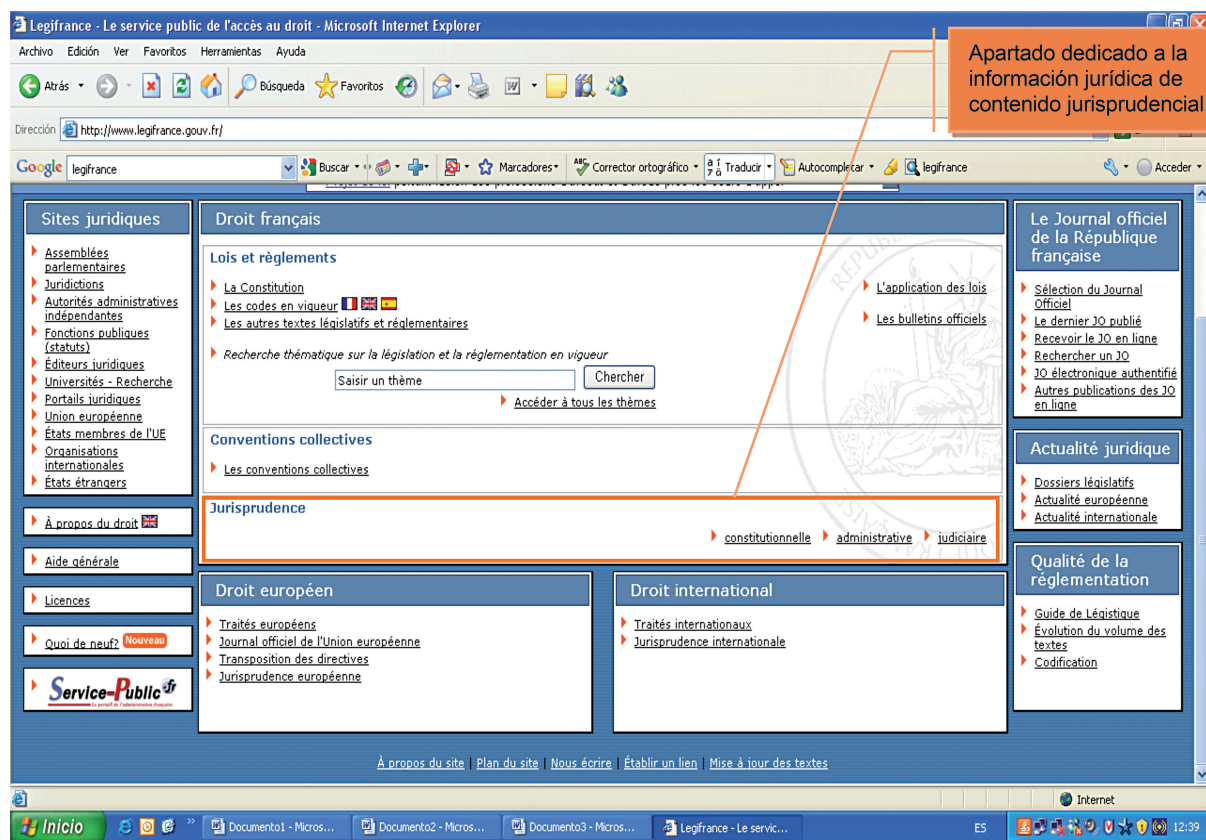
Legifrance²² es una base de datos jurídica gratuita creada en Francia en el año 1990 para ofrecer a la población francesa un servicio público de difusión del Derecho. El contenido de la información jurídica ofrecida es de carácter normativo, jurisprudencial y doctrinal; y se remite a documentos que datan desde 1978. Se trata de un servicio dependiente de la Secretaría General del Gobierno y la información es difundida conforme a lo establecido en la sentencia de 9 de octubre de 2002 relativa al sitio web de Legifrance. En Francia el derecho de acceso se encuentra previsto en la Ley 78, de 6 de enero de 1978 relativa a la informatización de los ficheros y las libertades.

¹⁹ www.poderjudicial.es

²⁰ Rosario Duaso Calés, *Regulación europea sobre difusión de la jurisprudencia en internet*

²¹ Tesoro es la lista de palabras o términos empleados para representar conceptos. Proviene del latín *thesaurus* (tesoro), y este a su vez del griego clásico *thesauros* (almacén, tesorería). Es utilizado en la literatura como *thesaurus*, *thesauri* o *tesoro* para referirse a los diccionarios.

²² www.legifrance.gouv.fr



El Centro de Documentación²³ Judicial (Cendoj) es el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial que se encarga de la publicación oficial de la jurisprudencia al amparo de lo regulado en el artículo 560.1.10ª de la Ley Orgánica 4/2013, además de otras competencias en el ámbito de la documentación y de los servicios de gestión del conocimiento²⁴. Fue creado en el año 1996 y su sede está situada en el Palacio de Justicia de San Sebastián, en virtud del Convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno Vasco con fecha 31 de octubre de 1996.

A través de esta web, se facilitan gratuitamente a la ciudadanía las sentencias y otras resoluciones del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales²⁵. El Cendoj lleva a cabo la recopilación de las resoluciones judiciales a través de su remisión desde los Tribunales de Justicia y sistemas de gestión procesal de las Administraciones Públicas competentes en materia de justicia. Una vez recibidas dichas resoluciones, se procede a su tratamiento informático eliminando los datos de carácter personal y siendo normalizadas en un único formato (XML). Finalizado el tratamiento, se procede a su difusión a través de distintos ámbitos, difusión pública a través de la web, puesta a disposición de las

²³ www.poderjudicial.es.

²⁴ El Cendoj ofrece también servicios en el ámbito de las publicaciones, documentación y bibliotecas. Con carácter general, las publicaciones del Consejo General del Poder Judicial se llevan a cabo en formato electrónico y corresponde a este órgano técnico llevar a cabo la gestión, catalogación y difusión de dichas publicaciones, lo que incluye los materiales de los cursos de formación continua, así como otros productos bibliográficos que se generan como resultado de la actividad del Poder Judicial. En el ámbito europeo, participa en las actividades de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, así como en grupos de trabajo de la Unión Europea. Su actividad también le lleva a participar en proyectos de cooperación internacional que permiten la creación de Centros de similares características en otros países, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho así como a la transparencia en el ejercicio de las funciones propias del Poder Judicial. Esta actividad ha permitido crear redes internacionales de colaboración como es el caso de la Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial (Iberius).

²⁵ La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional es difundida por el Tribunal Constitucional.

Esquema 2. Estructura organizativa del Cendoj, tomado de www.poderjudicial.es

Foto 4. Désiré Dalloz, abogado (1795-1869)

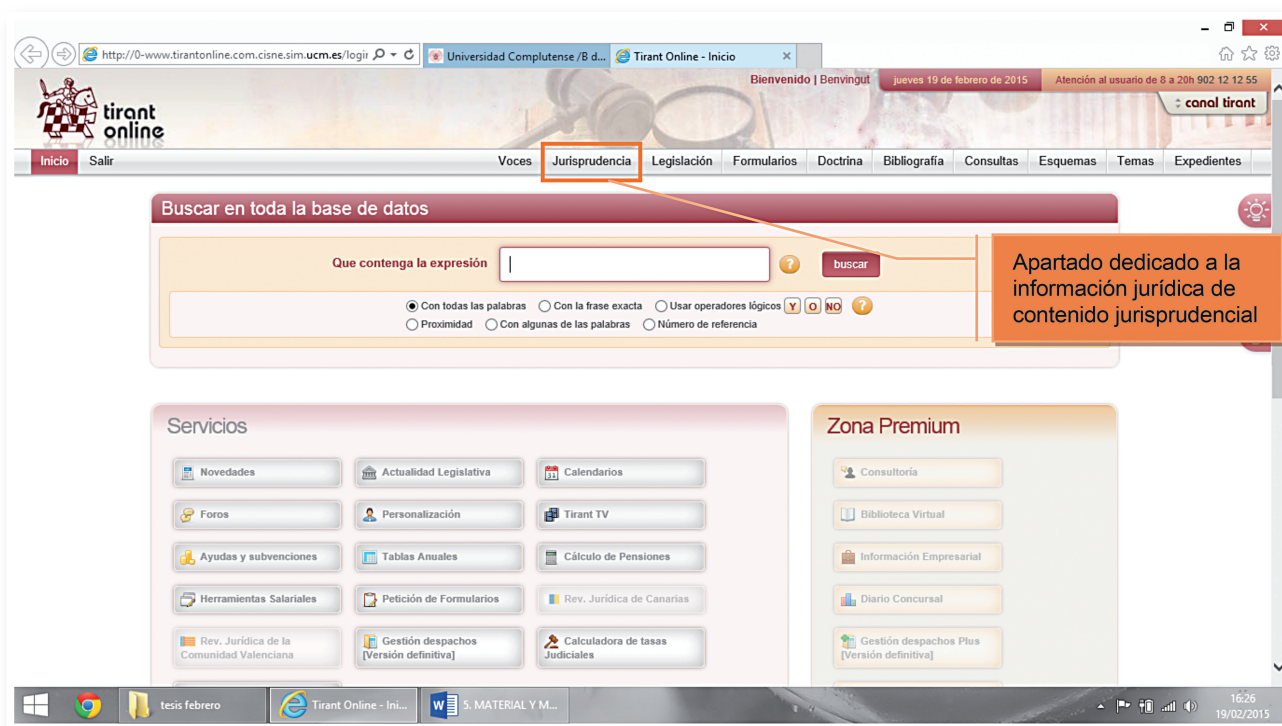
empresas editoriales y otros operadores del mercado, incorporación a las bases de datos del propio Cendoj para su uso por el personal judicial, etc. Todo ello, respetando la legislación en materia de protección de datos personales.

Dalloz²⁶ es una base de datos jurídica privada fundada en sus orígenes como editorial por Désiré Dalloz (1795-1869), un jurista, político y editor francés que inició su carrera profesional como abogado. A lo largo de su trayectoria profesional, Dalloz fue admitido en la Corte Real en 1817 y practicó el derecho entre los años 1823 y 1836. Tenía especial relevancia la publicación de sus argumentos orales en periódicos y revistas jurídicas como *Moniteur* y *Gazette des tribunaux*. Fue representante del departamento francés de Jura entre los años 1837 to 1848, dirigiendo la *Maison d'Orléans*. Su principal contribución al Derecho francés ha sido el diseño de un diario que recoja las decisiones judiciales y que se conoció como *Jurisprudence du royaume. Recueil periodique et critique*. En 1832, publicó el *Répertoire de jurisprudence générale du royaume*, una recopilación de todas las decisiones judiciales cuya versión adaptada fue publicada entre los años 1845 y 1870. Junto con su hermano Armand fundó la editorial francesa Dalloz que en actualidad continúa publicando el *Recueil Dalloz*, en formato electrónico y es uno de los líderes de ediciones jurídicas francesas tanto en el ámbito universitario como profesional.

Tiran on line²⁷ es una base de datos de la editorial Tiran lo Blanch, que toma su nombre de la novela valenciana el *tirante blanco* publicada en 1490 y nace hace 25 años en Valencia como una librería en la Calle Artes Gráficas, 14 de Valencia. Hoy es de las empresas editoriales españolas más importantes especializada en Ciencias Sociales. Ofrece una base de datos que presenta la información jurídica en internet de forma interactiva incluyendo Legislación vigente y consolidada; Jurisprudencia y Resoluciones Administrativas; Doctrina; Formularios, Modelos y Protocolos; Bibliografía de todas las editoriales; Consultas así como esquemas procesales y sustantivos. Se trata de una librería virtual hecha por libreros pero en la que se incorporan las nuevas tecnologías ofreciendo búsqueda por distintos parámetros y de varias maneras diferentes con índices propios que permiten poner a disposición de los usuarios "productos de análisis".

²⁶ www.dalloz.fr.

²⁷ www.tiranonline.com.



3.2.- El diseño de un método

El diseño metodológico que hemos elaborado en esta tesis, se inspira en la definición que entiende el término método como un procedimiento que permite hacer algo con orden para encontrar una verdad y hacerla visible, aparente o presente²⁸. El método diseñado se orienta al estudio analítico descriptivo posterior de las resoluciones judiciales, proponiendo dos métodos consecutivos: el primero, un método de selección de resoluciones judiciales aplicado a la búsqueda de los documentos jurídicos publicados (3.2.1); y el segundo, un método analítico descriptivo aplicado al contenido de las resoluciones judiciales previamente seleccionadas (3.2.2).

3.2.1.- El método de selección de las resoluciones judiciales

Las bases de datos jurídicas ofrecen la posibilidad de buscar un solo documento jurídico si es que disponemos de los datos suficientes para identificarlo, o permiten mediante un juego de criterios elegidos y combinados por el usuario ahondar en alguna temática concreta como la relación entre consumo de alcohol y el trabajo; y conocer la respuesta judicial que existe sobre la materia. El método de selección parte de este último supuesto, ya que desconocemos si existen resoluciones judiciales que traten el tema de la relación entre consumo de alcohol y el trabajo, y el interrogante al que trataremos de dar respuesta será el de cuántas resoluciones judiciales vinculan el consumo de alcohol con el trabajo.

Para comenzar la búsqueda entramos en la página web²⁹ correspondiente a las bases de datos jurídicas elegidas y en su menú principal donde podemos encontrar apartados dedicados a legislación, doctrina y a jurisprudencia, entre otros, elegimos la información de contenido jurisprudencial puesto que es dónde estarán publicadas las resoluciones judiciales. Seguidamente en la pantalla saldrá una ficha de búsqueda con distintas casillas, cada una reservada a los datos que acotarán la búsqueda. Procedemos entonces a introducir los siguientes criterios de búsqueda que hemos perfilado en niveles y con los que iniciamos la elaboración de nuestro diseño metodológico de selección de resoluciones judiciales:

²⁸ Ver definición de método recogida en nota 3.

²⁹ www.legifrance.fr, www.dalloz.fr, www.tirantonline.com, www.poderjudicial.es.

Nivel de búsqueda 1: voces genéricas

En el campo reservado a las voces, donde interviene el tesoro de cada buscador, introducimos la relación entre términos genéricos de *alcohol y trabajo* en las bases de datos jurídicas de España y los términos *alcohol et travail* en las bases de Francia. Se trata de unas palabras muy genéricas que pretenden hacer un primer acercamiento al tema por representar los dos conceptos básicos de la relación entre consumo de alcohol y el trabajo, además los yuxtaponemos con la preposición “y” para indicar al tesoro que lo que buscamos es una relación entre ambos conceptos, luego tendrán que aparecer simultáneamente en el texto de los documentos jurídicos propuestos por el tesoro. El resultado ofrecido es una relación de resoluciones judiciales que nos permitirá valorar cuantitativamente a qué nos enfrentamos.

Nivel de búsqueda 2: periodo de tiempo

En el campo reservado a las fechas introducimos un periodo de tiempo lo suficientemente representativo para que nos proporcione una visión amplia de la materia elegida, para lo que se estima un periodo de 11 años, es decir desde el 1 de enero del año 2004 hasta el 31 de diciembre del año 2014.

Nivel de búsqueda 3: jurisdicción

En la casilla reservada a la jurisdicción optamos por acotar la búsqueda a la jurisdicción laboral, ya que el tema elegido se caracteriza por su referirse al ámbito del trabajo. Al existir un proceso judicial específico para la materia social, tanto en España como en Francia, todos aquellos conflictos con repercusión en el ámbito del Derecho del trabajo serán competencia de la jurisdicción laboral. No obstante, al diferenciarse entre los trabajadores y el funcionariado se atiende también a la respuesta que ofrece en la jurisdicción contencioso administrativa, ya que para los conflictos laborales de los funcionarios se deberá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

Nivel de búsqueda 4: órgano emisor de la resolución judicial

Como se ha explicado en el apartado 3.1.1 (página 30), la jurisprudencia en materia laboral sería emitida por el Tribunal Supremo, sala de lo Social, así que optamos por analizar las resoluciones judiciales que hayan sido emitidas por el Tribunal Supremo, cuyo equivalente en Francia será la Cour de Cassation. Con el fin de conocer si existe jurisprudencia sobre esta materia.

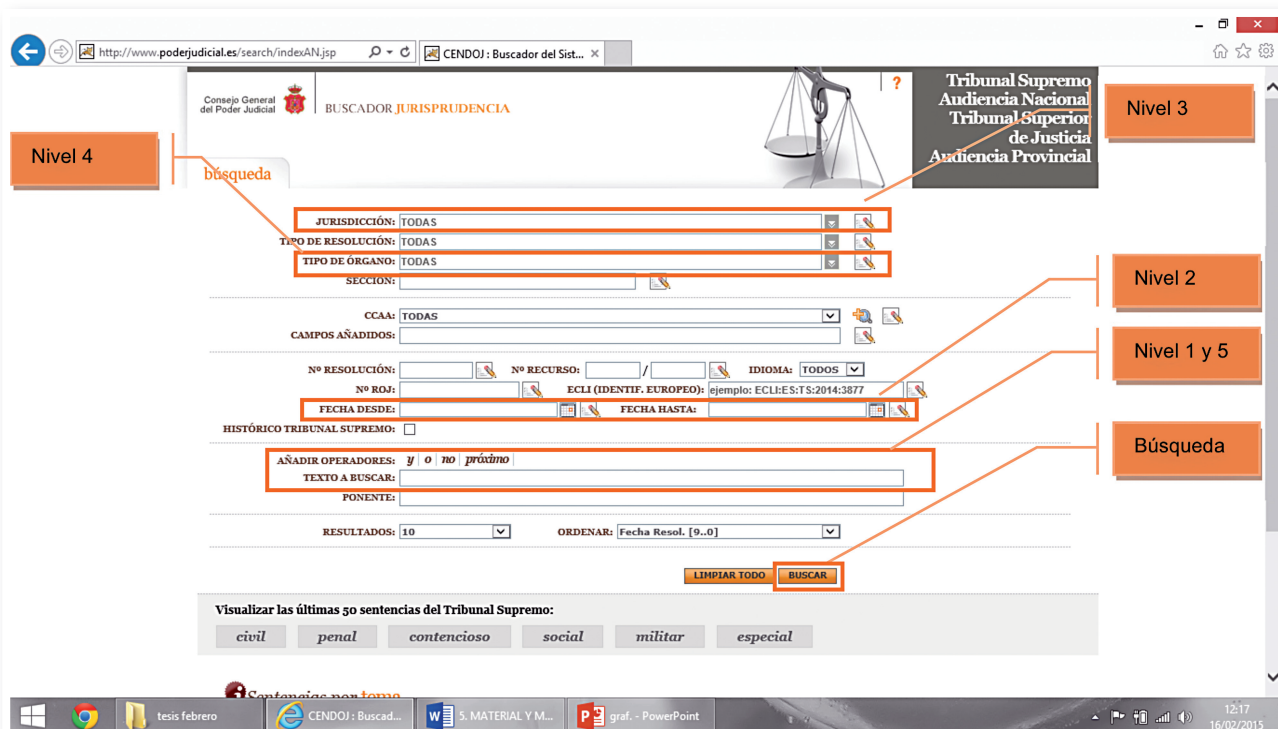
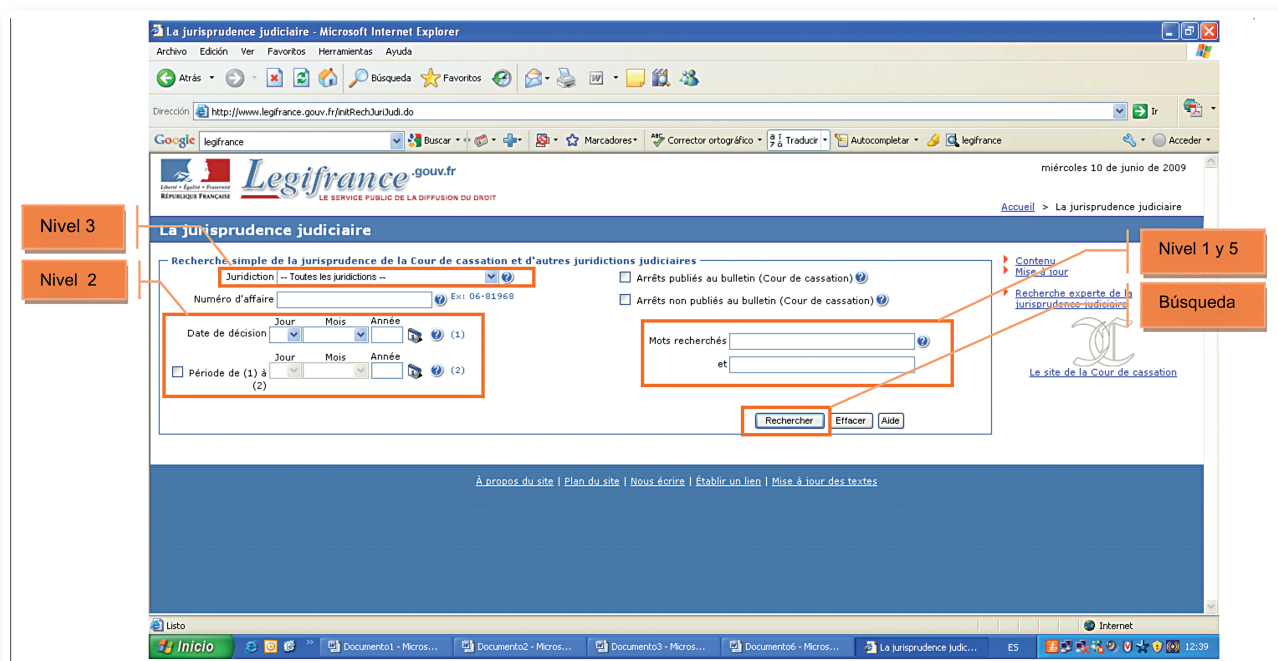
Nivel de búsqueda 5: matización de las voces

Tras la acotación del tema con las anteriores búsquedas y una primera lectura de los documentos obtenidos, se opta por matizar la búsqueda de resoluciones judiciales en el tesoro. Se mantienen todos los criterios indagatorios anteriores pero se modifican las voces. En la lengua francesa se han elegido como voces relacionadas con el consumo de alcohol las siguientes palabras: *ébriété, ivresse, alcoolique, alcoolémie* y *alcoolisme*; y en la búsqueda española para realizar el análisis comparativo de manera estricta los correspondientes términos traducidos de: *ebriedad, embriaguez, alcohólico, alcoholemia y alcoholismo*.

En el ámbito laboral también se matizan las voces optando por los términos en Francia de: *licenciement, accident de travail e incapacité*; y en España los respectivos de: *despido, accidente de trabajo e incapacidad*. Lo que se introduce en el tesoro, en este nivel 5 de la búsqueda, son relaciones entre términos donde una de las palabras representa el ámbito del trabajo y la otra el aspecto referente al consumo de alcohol. Las relaciones construidas son las siguientes: En España: *despido y ebriedad; despido y embriaguez; despido y alcohólico; despido y alcoholemia; despido y alcoholismo; accidente de trabajo y ebriedad; accidente de trabajo y embriaguez; accidente de trabajo y alcohólico; accidente de trabajo y alcoholemia; accidente de trabajo y alcoholismo; incapacidad y ebriedad; incapacidad y embriaguez; incapacidad y alcohólico; incapacidad y*

alcoholemia; e incapacidad y alcoholismo. En Francia: licenciement et ebriété; licenciement et ivresse; licenciement et alcoolique; licenciement et alcoolémie; licenciement et alcoolisme; accident de travail et ebriété; accident de travail et ivresse; accident de travail et alcoolique; accident de travail et alcoolémie; accident de travail et alcoolisme; incapacité et ebriété; incapacité et ivresse; incapacité et alcoolique; incapacité et alcoolémie; incapacité et alcoolisme. En total ocho términos y quince relaciones yuxtapuestas para cada país.

Estos cinco niveles de búsqueda construyen el esquema global diseñado para la búsqueda de las resoluciones judiciales. Estas operaciones indagatorias en niveles se repiten en cada una de las bases de datos jurídicas elegidas, aunque como puede apreciarse a continuación en los pantallazos de cada buscador jurídico, destaca alguna que otra diferencia.



The screenshot shows the Dalloz.fr search interface. The browser address bar displays 'http://www.dalloz.fr/documentation/Recherche'. The page title is 'Dalloz.fr | Recherche avancée'. The interface is divided into several sections:

- Texte intégral:** A section for full-text search with multiple input fields and dropdown menus labeled 'ET' (AND) and 'OU' (OR). It includes buttons for 'Effacer' (Clear) and 'Rechercher' (Search).
- Critères de recherche avancée:** A section for advanced search criteria. It includes checkboxes for 'Législation' and 'Jurisprudence' (checked). Below these are dropdown menus for 'Juridiction' (set to 'Toutes'), 'Ville' (set to 'Toutes'), and 'Formation' (set to 'Toutes'). There is also a 'Numéro de décision' field and a 'Date' field with dropdowns for 'Le', 'JJ', 'MM', and 'AAAA'. Checkboxes for 'Publication officielle' and 'Citation Dalloz' are also present. Buttons for 'Effacer' and 'Rechercher' are at the bottom.
- Annotations:** Orange boxes and lines highlight specific features:
 - Nivel 1 y 5:** Points to the 'Texte intégral' section.
 - Nivel 3:** Points to the 'Critères de recherche avancée' section.
 - Nivel 2:** Points to the 'Juridiction' dropdown menu.
 - Búsqueda:** Points to the 'Rechercher' button in the advanced search section.

The screenshot shows the Tirant Online search interface. The browser address bar displays 'http://0-www.tirantonline.com.cisne.sim.ucm.es/tol/t'. The page title is 'Tirant Online - Jurisprudencia'. The interface includes a navigation bar with links like 'Inicio', 'Salir', 'Voces', 'Jurisprudencia', 'Legislación', 'Formularios', 'Doctrina', 'Bibliografía', 'Consultas', 'Esquemas', 'Temas', and 'Expedientes'. The main search area includes:

- Que contenga la expresión:** A search input field with a dropdown menu for 'Con todas las palabras', 'Con la frase exacta', 'Usar operadores lógicos', 'Proximidad', 'Con algunas de las palabras', and 'Número de referencia'. It includes buttons for 'Y', 'O', 'NO', and '?'. It is annotated with 'Nivel 1 y 5' and 'Nivel 4'.
- Jurisdicción:** A dropdown menu for selecting the jurisdiction. It is annotated with 'Nivel 2'.
- Origen:** A dropdown menu for selecting the origin. It is annotated with 'Nivel 3'.
- Tipo de resolución:** A dropdown menu for selecting the type of resolution.
- Fechas:** A date range selector with dropdowns for 'dd/mm/aaaa'. It is annotated with 'Nivel 2'.
- Sentido del fallo:** A dropdown menu for selecting the sense of the ruling.
- Nº Resolución (nº/aaaa):** A text input field for the resolution number.
- Nº Recurso (nº/aaaa):** A text input field for the appeal number.
- Sección:** A dropdown menu for selecting the section.
- Otros campos:** A text input field for other fields (cabecera, resumen, supuesto de hecho).
- Ponente:** A text input field for the author.
- Relacionado con artículo/norma:** A dropdown menu for selecting the related article/norm. It is annotated with 'Nivel 2'.
- Buscar solo documentos de la selección Tirant:** A checkbox for searching only documents from the Tirant selection.

Los criterios de selección de resoluciones judiciales elegidos (voces, periodo de tiempo, jurisdicción y órgano emisor de la resolución) y presentados en forma de niveles de búsqueda acotan la indagación propuesta de manera simultánea; lo que gráficamente nos ha permitido denominarlo “fenómeno embudo”. (Ver esquema 3: El “efecto embudo”). Las bases de datos jurídicas actuales que permiten esta combinación sincrónica de criterios, proporcionan, para cada búsqueda propuesta, un resultado en forma de listado de resoluciones

Esquema 3. El “efecto embudo”



judiciales. Los listados trabajados en esta tesis son los que combinan todos los criterios indagatorios abarcados desde el nivel de búsqueda 2 al nivel de búsqueda 5, quedando el nivel de búsqueda 1 como una mera aproximación cuantitativa al tema al quedar sustituido por el nivel de búsqueda 5 con la matización de voces. En este sentido, aclaramos que a cada relación yuxtapuesta de voces recogida en el nivel 5, corresponde una búsqueda distinta y en consecuencia la obtención de un listado distinto de resoluciones judiciales. En una segunda fase del diseño metodológico de selección de resoluciones, dichos resultados en forma de listados de documentos se combinarán y mezclarán para ser unificados en un solo listado de resoluciones judiciales.

Los mismos criterios de selección serán tratados como criterios de ordenación de las resoluciones judiciales obtenidas. A continuación presentamos una muestra de los listados obtenidos a raíz de cada búsqueda en cada base de datos jurídica utilizada.

La imagen muestra una captura de pantalla de la página de resultados de búsqueda en el sitio web legifrance.gouv.fr. La barra de direcciones indica la URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/rech/luriludi.do?reprise:>. El título de la página es "Listado de resoluciones judiciales". El resultado de la búsqueda indica: "Résultats de votre recherche : 16 document(s) trouvé(s)". La lista de resultados muestra 16 documentos, cada uno con su número, tipo de resolución, fecha y estado de publicación.

Número	Resolución	Fecha	Estado
1.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482.	26 novembre 2014	Inédit
2.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117.	15 janvier 2014	Inédit
3.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-17.182.	30 septembre 2013	Inédit
4.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668.	18 décembre 2012	Inédit
5.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669.	18 décembre 2012	Inédit
6.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155.	18 décembre 2012	Inédit
7.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.884 11-12.889 11-12.914.	26 juin 2012	Inédit
8.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500.	23 mai 2012	Inédit
9.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713.	15 décembre 2011	Inédit
10.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712.	15 décembre 2011	Inédit
11.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162 10-30.163 10-30.164 10-30.165 10-30.166 10-30.167 10-30.168 10-30.169 10-30.170 10-30.171.	8 juin 2011	Publié au bulletin
12.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984.	16 décembre 2009	Inédit
13.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198.	23 septembre 2009	Inédit
14.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.304.	22 septembre 2009	Inédit
15.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294.	29 avril 2009	Inédit
16.	CASS Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-42.071.	1 avril 2009	Inédit

http://www.dalloz.fr/documentation/Liste?cbt=0_dCF

Dalloz.fr | Liste de résultats

CONNEXION

Codes Dalloz Encyclopédie Formulaires Ouvrages Revue

RECHERCHER

Retour à la recherche Vos 20 dernières recherches

Filtrer les résultats

Catégorie

- Jurisprudence (50)
- Cour de cassation (50)

Date

- 2014 (2)
- 2013 (5)
- 2012 (6)
- 2011 (7)
- 2010 (4)
- 2009 (3)
- 2008 (7)

Voir la suite

Votre recherche

accident de travail et alcoolique

Rechercher

Critères avancés: Jurisprudence X Cour de cassation X Entre 01/01/2004 et 31/12/2014 X

50 résultats hors-abonnements

Tout sélectionner Ajouter à votre sélection Voir votre sélection 20 30 Tri par: pertinence - date

01 Cour de cassation — 2ème chambre civile — 9 février 2012 — n° 11-12.491
Jurisprudence / Décision commentée ou citée
Résumé : travail auprès de la société fédération continentale, aux droits de laquelle se trouve la société general vie (assureur); qu'en février 1994, m. x... ayant été victime d'un accident de la circulation, l'assureur a pris en charge le sinistre; qu'à

02 Cour de cassation — Chambre sociale — 8 février 2012 — n° 11-10.382
Jurisprudence / Décision commentée ou citée
Résumé : code de travail, art. L. 4612-8 droit social 2012, p. 431, recueil dalloz 2012, p. 2622, cour de cassation chambre sociale 8 février 2012 11-10.382 m. lacabarte, mme lambremont, m. lalande, scp gatinneau et fattaccini ... scp odent et poulet cour d'appel de

03 Cour de cassation — Chambre criminelle — 9 octobre 2007 — n° 06-89.093
Jurisprudence / Décision commentée ou citée

http://www.dalloz.fr/documentation/Liste?cbt=0_dCF

Dalloz.fr | Liste de résultats

CONNEXION

Codes Dalloz Encyclopédie Formulaires Ouvrages Revue

RECHERCHER

Retour à la recherche Vos 20 dernières recherches

Filtrer les résultats

Catégorie

- Jurisprudence (50)
- Cour de cassation (50)

Date

- 2014 (2)
- 2013 (5)
- 2012 (6)
- 2011 (7)
- 2010 (4)
- 2009 (3)
- 2008 (7)

Voir la suite

Votre recherche

accident de travail et alcoolique

Rechercher

Critères avancés: Jurisprudence X Cour de cassation X Entre 01/01/2004 et 31/12/2014 X

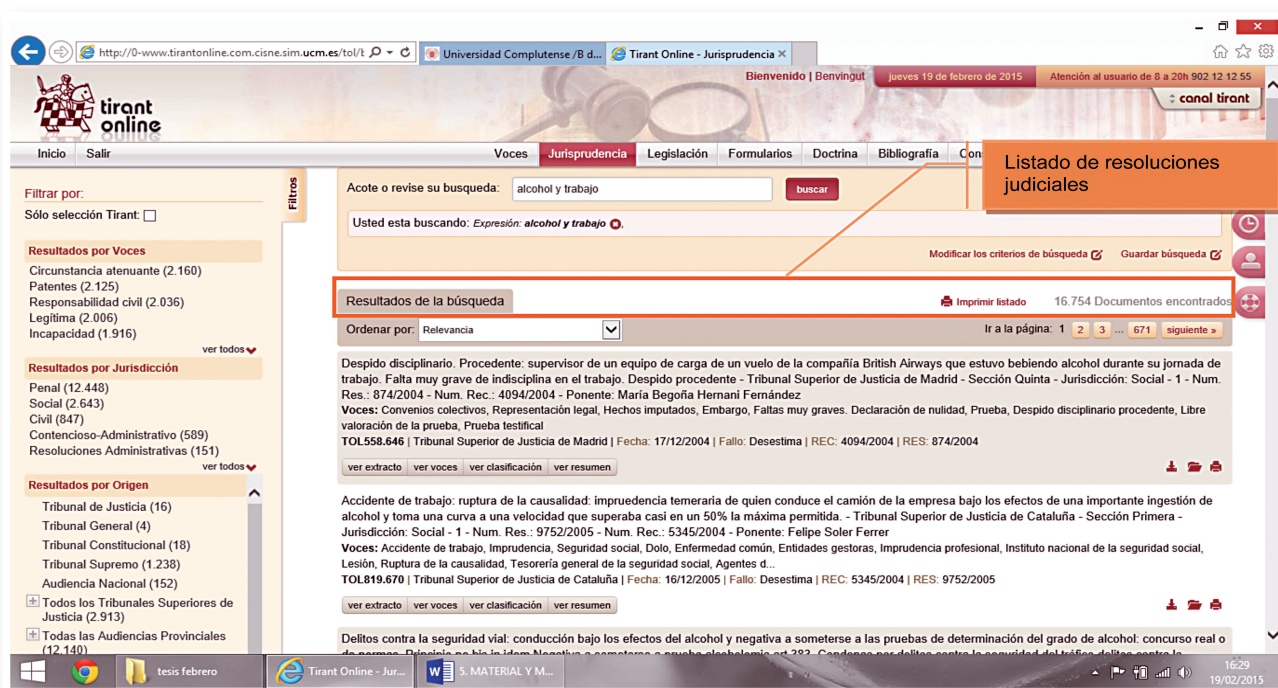
50 résultats hors-abonnements

Tout sélectionner Ajouter à votre sélection Voir votre sélection 20 30 Tri par: pertinence - date

01 Cour de cassation — 2ème chambre civile — 9 février 2012 — n° 11-12.491
Jurisprudence / Décision commentée ou citée
Résumé : travail auprès de la société fédération continentale, aux droits de laquelle se trouve la société general vie (assureur); qu'en février 1994, m. x... ayant été victime d'un accident de la circulation, l'assureur a pris en charge le sinistre; qu'à

02 Cour de cassation — Chambre sociale — 8 février 2012 — n° 11-10.382
Jurisprudence / Décision commentée ou citée
Résumé : code de travail, art. L. 4612-8 droit social 2012, p. 431, recueil dalloz 2012, p. 2622, cour de cassation chambre sociale 8 février 2012 11-10.382 m. lacabarte, mme lambremont, m. lalande, scp gatinneau et fattaccini ... scp odent et poulet cour d'appel de

03 Cour de cassation — Chambre criminelle — 9 octobre 2007 — n° 06-89.093
Jurisprudence / Décision commentée ou citée

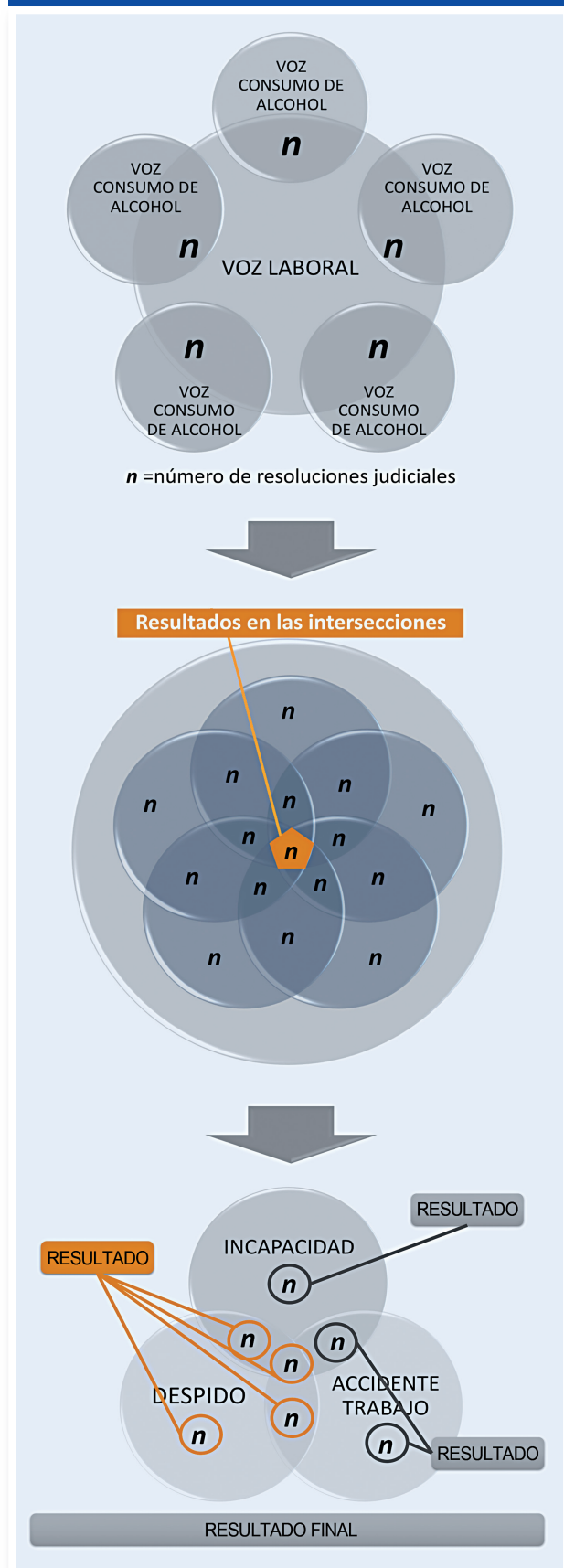


Como se ha adelantado anteriormente, para obtener un único listado de resoluciones judiciales objeto de estudio para esta tesis, hemos dispuesto una segunda fase en nuestro diseño metodológico de selección. En ella hemos sometido los listados de resoluciones judiciales obtenidos a una tarea de filtro que hemos llamado “*cribado de resultados*”. Para ello, hemos procedido primero a la eliminación de las resoluciones judiciales repetidas entre las distintas bases de datos jurídicas y entre las relaciones de voces propuestas, lo que hemos denominado eliminación según criterios de repetición. Luego en una segunda etapa, hemos realizado la eliminación de las resoluciones no válidas por describir un contenido distinto al de la relación entre consumo de alcohol y trabajo, lo que hemos llamado eliminación conforme a criterios de validez. Todo ello con una doble finalidad, la de obtener, por un lado, un listado único de resoluciones judiciales que pueda utilizarse para el análisis médico legal de las resoluciones; y por otro lado, la de lograr un resultado real y válido para la búsqueda de resoluciones judiciales en materia de consumo de alcohol y trabajo.

Para el descarte de resoluciones judiciales según criterios de repetición se ha diseñado un proceso ilustrado mediante los siguientes esquemas de “*círculos de resultados*”. El primero recoge numéricamente (*n*) la cantidad de resoluciones judiciales obtenidas de las relaciones yuxtapuestas entre las voces plasmadas en el nivel 5 de la búsqueda y determinadas para la relación entre consumo de alcohol y trabajo. Este esquema se ha aplicado para cada base de datos utilizada en los dos países, y posteriormente se han fusionado siguiendo los criterios de repetición referidos entre bases de datos primero, y entre voces después. El segundo esquema del proceso de selección, representa gráficamente la eliminación de las resoluciones judiciales repetidas entre las distintas voces sobre consumo de alcohol: *ebriedad*, *embriaguez*, *alcohólico*, *alcoholemia* y *alcoholismo*. Este esquema se realiza para cada voz sobre el trabajo: *despido*, *accidente de trabajo* e *incapacidad*. Cada sección formada por las intersecciones entre los círculos se suma para obtener el resultado cuantitativo de documentos jurídicos. Al unir los resultados cuantitativos para cada voz sobre el contexto laboral, obtenemos el tercer esquema que resume en tres círculos concéntricos respectivos a las voces sobre laborales, el número de resoluciones para cada campo. Al igual que en la fase anterior del proceso de selección se sumarán las cifras correspondientes a la cantidad de documentos de las distintas secciones formadas por las intersecciones para evitar la duplicidad o triplicidad de las resoluciones. Así obtenemos el resultado cuantitativo final.

La exclusión de las resoluciones según el criterio de validez se ha realizado con su lectura textual, que ha permitido desechar aquellas resoluciones que en su texto alberguen la relación de voces introducidas en los buscadores pero que no presentan, por su contexto, ninguna relación con la temática del trabajo de investigación. Con la aplicación de este último criterio de selección obtenemos el resultado real que nos muestra un verdadero reflejo social respecto de la relación entre consumo de alcohol y el trabajo a través de las resoluciones judiciales. Ahora queda enfrentarse al análisis de dicha realidad mediante la metodología analítica propuesta a continuación. (Ver esquema 4: Proceso de selección cuantitativo de las resoluciones judiciales).

Esquema 4. Proceso de selección cuantitativo de las resoluciones judiciales



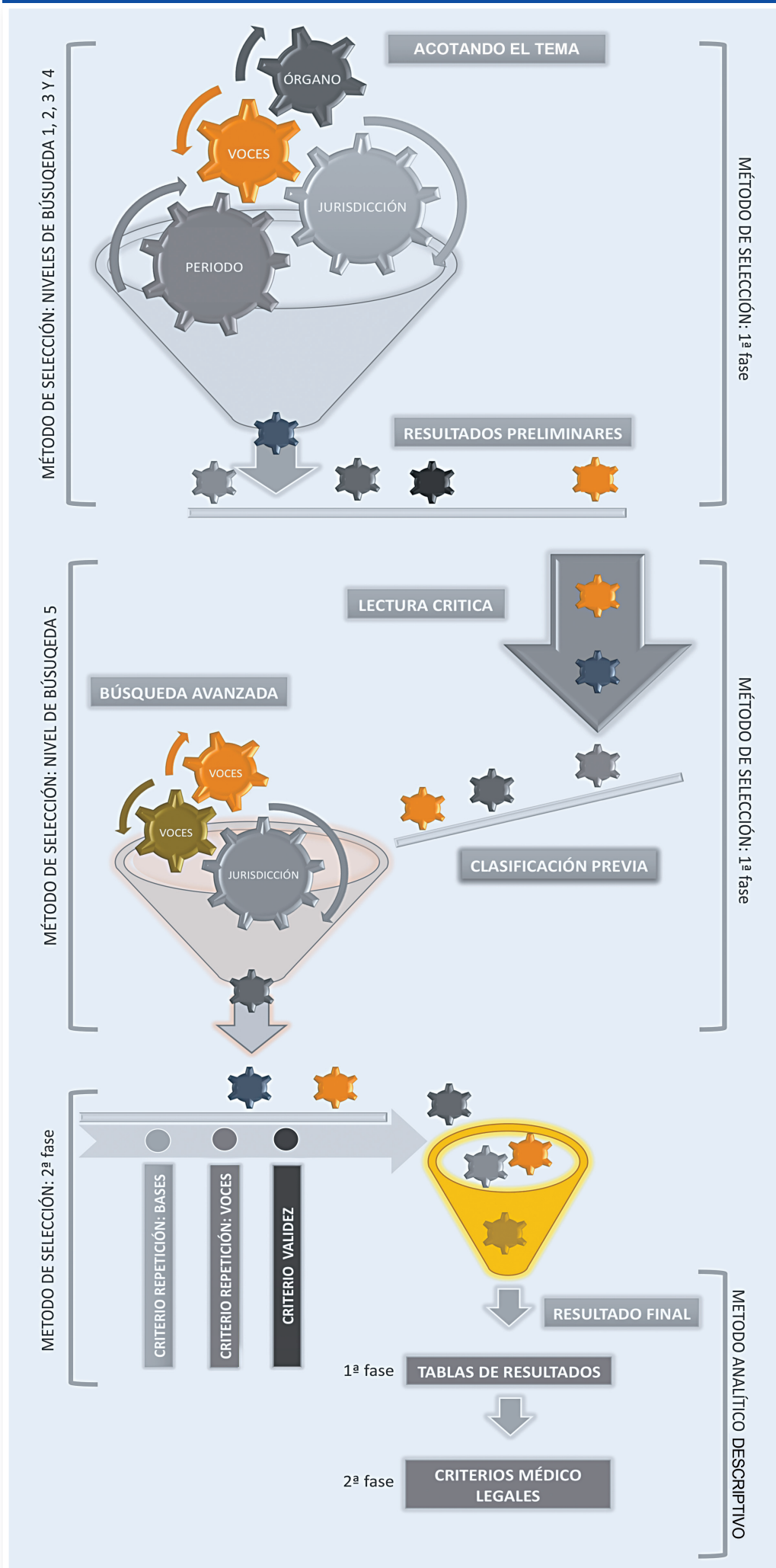
3.2.2.- El método analítico de las resoluciones judiciales

Una vez obtenida la relación definitiva de resoluciones judiciales objeto de análisis introducimos el método analítico que hemos diseñado. En esta fase pueden distinguirse dos etapas de análisis. La primera se refiere a la elaboración de lo que hemos denominado “*tablas resumen de resultados*” y la segunda a la clasificación de las resoluciones según criterios médico legales. Para la realización de las “*tablas resumen de resultados*” se ha tenido en cuenta la propia estructura formal de una resolución, que distingue y separa en su redacción los párrafos de encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo. Para cada una de estas secciones se han extraído, mediante la lectura de los documentos, la información relevante e importante desde un punto de vista médico legal. De manera que, para cada apartado se recogerá la siguiente información:

- **Para el encabezamiento:**
 - Número de recurso.
 - Fecha.
 - Acción jurídica ejercida.
 - Resumen de procedencia en la primera instancia.
 - Recurrente.
- **Antecedentes de hecho:**
 - Profesión.
 - Consumo de alcohol referido.
- **Razonamientos jurídicos/fundamentos de derecho:**
 - Sentencia de contraste.
 - Hechos acaecidos en la sentencia de contraste.
 - Nexo causal establecido.
- **Fallo:**
 - Sentido del fallo.

En una segunda etapa y aprovechando la visión general que ofrecen las “*tablas resumen de resultados*” diseñadas, se han identificado las cuestiones médico legales contenidas en los documentos; y en base a dicha caracterización se han clasificado las resoluciones judiciales en grupos asociados según tales criterios médico legales reconocidos. Con ello se elabora una relación definitiva de resoluciones judiciales sobre consumo de alcohol y trabajo según criterios médico legales. A continuación ilustramos el esquema 5, recoge todo el proceso metodológico diseñado para este trabajo de investigación.

Esquema 5. El “efecto embudo” aplicado a la metodología diseñada



4.1.- Resultados cuantitativos: acotando el tema • 4.1.1.- Resultado 1: voces genéricas • 4.1.2.- Resultado 2: periodo de tiempo • 4.1.3.- Resultado 3: jurisdicción • 4.1.4.- Resultado 4: órgano emisor de la resolución judicial • 4.2.- Resultados cuantitativos y cualitativos: búsqueda avanzada • 4.2.1.- Resultado 5: matización de voces en Derecho del trabajo • 4.2.2.- Resultado 6: matización de voces en consumo de alcohol • 4.2.3 Resultado 7: jurisdicción administrativa • 4.3.- Resultados cualitativos: cribado de resultados • 4.3.1.-Resultado 8: criterio de repetición entre buscadores • 4.3.2.- Resultado 9: criterio de repetición entre voces • 4.3.3.- Resultado 10: criterio de validez y resultados cuantitativos definitivos • 4.3.4.- Resultado 11: Las tablas resumen de resultados • 4.3.5.-Resultado 12: Relación de resoluciones judiciales francesas y españolas sobre consumo de alcohol y trabajo acorde a criterios médico legales

A manera de consideración previa, cualquier proceso de búsqueda jurisprudencial mediante bases de datos informatizadas con tesoro que pretenda indagar sobre una relación entre dos temas, sea en este caso la relación entre consumo de alcohol y el trabajo, supone la obtención de una serie de resultados preliminares antes de alcanzar un resultado definitivo en la investigación. En este sentido y en virtud de la metodología de búsqueda planteada, los resultados previos están ligados a las distintas decisiones y actuaciones indagatorias que orientan la búsqueda jurisprudencial y que se encuentran descritas en el apartado 3 (página 29) acerca del material y método de esta tesis. La elección de un determinado criterio indagatorio permite valorar el resultado bien desde un punto de vista únicamente cuantitativo; bien desde una perspectiva que combine tanto criterios de cantidad como de cualidad en el resultado. El primero se refiere a la cantidad en cifras de resoluciones judiciales obtenidas, y el segundo al contenido o contexto del documento analizado. De esta manera mediante la concepción de ambos criterios, los resultados preliminares conducen, mediante un “efecto embudo” a un resultado final de la búsqueda concebido como el más acorde a la realidad social desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo.

Al atender al hecho de que cada uno de los resultados obtenidos en la búsqueda que se presentan a continuación, se corresponden con un acto o decisión indagatoria concreta del proceso de búsqueda, distinguimos en este apartado tres tipos de resultados: los resultados puramente cuantitativos que suponen la acotación del tema de estudio (apartado 4.1. página 48); los resultados cualitativos y cualitativos que representan los pasos de una búsqueda avanzada (apartado 4.2. página 50); y los resultados cualitativos que refieren únicamente al contenido y contexto de los documentos objeto de análisis (apartado 4.3. página 55), y mediante cribado de resultados diseñado nos llevan al resultado final de la indagación.

Las actuaciones indagatorias que ofrecen resultados cuantitativos son la elección de voces genéricas (resultado 1); la elección del periodo de tiempo (resultado 2); la elección de la jurisdicción (resultado 3) y la elección del órgano de emisión de la resolución judicial (resultado 4). Constituyen unos resultados cuantitativos y cualitativos orientados a la búsqueda avanzada las decisiones de matizar las voces en Derecho del trabajo (resultado 5); la matización de voces en el consumo de alcohol (resultado 6); y la añadidura de la indagación en la jurisdicción administrativa (resultado 7). Los criterios de cribado de resultados refieren a resultados obtenidos según un criterio de eliminación por repetición de resoluciones entre los buscadores (resultado 8) y entre voces (resultado 9); así como un criterio de eliminación por validez (resultado 10). Finalmente el estudio de las resoluciones judiciales obtenidas según las “tablas de resultados” (resultado 11); y la clasificación acorde a criterios médico legales (resultado 12).

4.1.- Resultados cuantitativos: acotando el tema

4.1.1.- Resultado 1: Voces genéricas

En un primer acercamiento indagatorio a un tema de relación entre dos subtemas: consumo de alcohol por un lado y el trabajo por otro; se eligen dos voces genéricas representativas para cada uno de los subtemas que componen la relación, las cuales en este caso han sido *alcohol* y *trabajo*.

El **resultado 1** refleja un resultado puramente cuantitativo representativo del número de resoluciones judiciales obtenidas al introducir en las bases de datos jurídicas las voces de *alcohol* y *trabajo* según el nivel de búsqueda 1. La base de datos jurídicos a través de su tesoro relaciona todos aquellos documentos que contengan ambas palabras en su texto, sin atender al contexto o contenido, y los presenta en forma de listados.

FRANCIA		
Voix	<i>Alcool et travail</i>	
Bases de données juridiques	<i>Legifrance</i>	<i>Dalloz</i>
	666 documents	5.461 documents

ESPAÑA		
Voces	<i>Alcohol y trabajo</i>	
Bases de datos jurídicas	<i>Cendoj</i>	<i>Tiran on line</i>
	21.400 documentos	16.465 documentos

4.1.2.- Resultado 2: Periodo de tiempo

Con la introducción del criterio de elección de la franja temporal de 11 años: desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2014 obtenemos el **resultado 2** que reduce discretamente la cantidad de resoluciones judiciales encontradas por el buscador. Seguimos ante un resultado cuantitativo sin referencia al contexto de los documentos encontrados.

FRANCIA		
Voix	<i>Alcool et travail</i>	
Dates	<i>01/01/2004 à 31/12/2014</i>	
Bases de données juridiques	<i>Legifrance</i>	<i>Dalloz</i>
	459 documents	5.226 documents

ESPAÑA		
Voces	<i>Alcohol y trabajo</i>	
Periodo	<i>01/01/2004 a 31/12/2014</i>	
Bases de datos jurídicas	<i>Cendoj</i>	<i>Tiran on line</i>
	17.747 documentos	15.313 documentos

4.1.3.- Resultado 3: Jurisdicción

El **resultado 3** empieza a aproximarse al contenido de las resoluciones, ya que al buscar respuesta jurisprudencial sobre un conflicto que tiene repercusión en el ámbito laboral. Se acota la búsqueda a dicho ámbito eligiendo para el campo reservado a la jurisdicción, la jurisdicción social. Por lo tanto, aunque en el nivel 1 de búsqueda en voces sea yuxtapuesta, con la introducción simultánea de este criterio de jurisdicción, se garantiza un resultado que atiende, de forma genérica, al contenido laboral de las resoluciones estudiadas.

En este aspecto el orden de la búsqueda difiere entre Francia y España debido a las diferencias procesales de cada país¹. Para Francia primero se elige el tipo de jurisprudencia; constitucional, administrativa o judicial. Elegimos judicial. Luego se elige la jurisdicción que se determina definiendo el órgano emisor de la resolución judicial, y elegimos la Cour de Cassation.

FRANCIA		
Voix	<i>Alcool et travail</i>	
Dates	<i>01/01/2004 à 31/12/2014</i>	
Jurisprudence	<i>Judiciaire</i>	
Jurisdiction	<i>Cour de Cassation</i>	
Bases de données juridiques	<i>Legifrance</i>	<i>Dalloz</i>
	171 documents	183 documents

En España al existir distinción entre jurisdicción social, civil, administrativa y penal; elegimos para la casilla reservada a la jurisdicción la social, sin necesidad de elegir órgano emisor por el momento.

ESPAÑA		
Voces	<i>Alcohol y trabajo</i>	
Periodo	<i>01/01/2004 a 31/12/2014</i>	
Jurisdicción	<i>Social</i>	
Órgano	<i>Tribunal Supremo</i>	
Bases de datos jurídicas	<i>Cendoj</i>	<i>Tiran on line</i>
	2.615 documentos	2.430 documentos

4.1.4.- Resultado 4: Órgano emisor de la resolución judicial

En el **resultado 4** se refleja el objetivo de conocer si existe jurisprudencia respecto de la relación entre consumo de alcohol y el trabajo. Introduce la elección de órgano emisor de la resolución decantándose por el órgano que es capaz de crear jurisprudencia y que es el Tribunal Supremo.

En Francia con el resultado 3 se ha introducido ya el criterio electivo de órgano emisor en la casilla de la jurisdicción por lo que en el resultado 4 se matizará la búsqueda atendiendo a las salas que componen el órgano y se elegirá la sala de lo social.

¹ La significativa diferencia cuantitativa entre los resultados de Francia y España se debe a que el sistema procesal francés obliga a la especificación de órganos emisores de resoluciones judiciales antes que en el sistema procesal español.

FRANCIA		
Voix	<i>Alcool et travail</i>	
Dates	<i>01/01/2004 à 31/12/2014</i>	
Jurisprudence	<i>Judiciaire</i>	
Jurisdiction	<i>Cour de Cassation</i>	
Chambre	<i>Sociale</i>	
Bases de données juridiques	<i>Legifrance</i>	<i>Dalloz</i>
	68 documents	171 documents

ESPAÑA		
Voces	<i>Alcohol y trabajo</i>	
Periodo	<i>01/01/2004 hasta el 31/12/2014</i>	
Jurisdicción	<i>Social</i>	
Órgano	<i>Tribunal Supremo</i>	
Sala	<i>Social</i>	
Bases de datos jurídicas	<i>Cendoj</i>	<i>Tiran on line</i>
	135 documentos	113 documentos

4.2.- Resultados cuantitativos y cualitativos: búsqueda avanzada

4.2.1.- Resultado 5: Matización de voces en el trabajo

El resultado 4, último resultado cuantitativo, nos ha proporcionado un volumen de documentos jurídicos interesante cuantitativamente, que se presta a poder realizar una primera lectura de las resoluciones. De dicha lectura se deduce que los documentos jurídicos obtenidos se refieren, en el aspecto laboral, a tres tipos de contenido: el despido, los accidentes de trabajo y la incapacidad laboral. Por lo tanto se decide matizar en el nivel 5 de la búsqueda, sustituyendo la voz *trabajo* por las voces de despido, accidente de trabajo e incapacidad. Con esta actuación indagatoria conseguimos crear nuevas relaciones de yuxtaposición entre las voces obteniendo resultados para los pareados entre *despido-alcohol*; *accidente de trabajo-alcohol*; *incapacidad-alcohol*; a los que corresponde un listado de resoluciones judiciales. Con ello obtenemos el **resultado 5**. Recordamos que en este nivel se mantienen todos los niveles de búsqueda anteriores.

FRANCIA		
Voix	Bases de données juridiques	
	<i>Legifrance</i>	<i>Dalloz</i>
Licenciement et alcool	63 documents	66 documents
Accident de travail et alcool	3 documents	8 documents
Incapacité et alcool	5 documents	5 documents

ESPAÑA		
Voces	Bases de datos jurídicas	
	<i>Cendoj</i>	<i>Tiran on line</i>
Despido et alcohol	52 documentos	43 documentos
Accidente de trabajo et alcohol	67 documentos	53 documentos
Incapacidad et alcohol	60 documentos	48 documentos

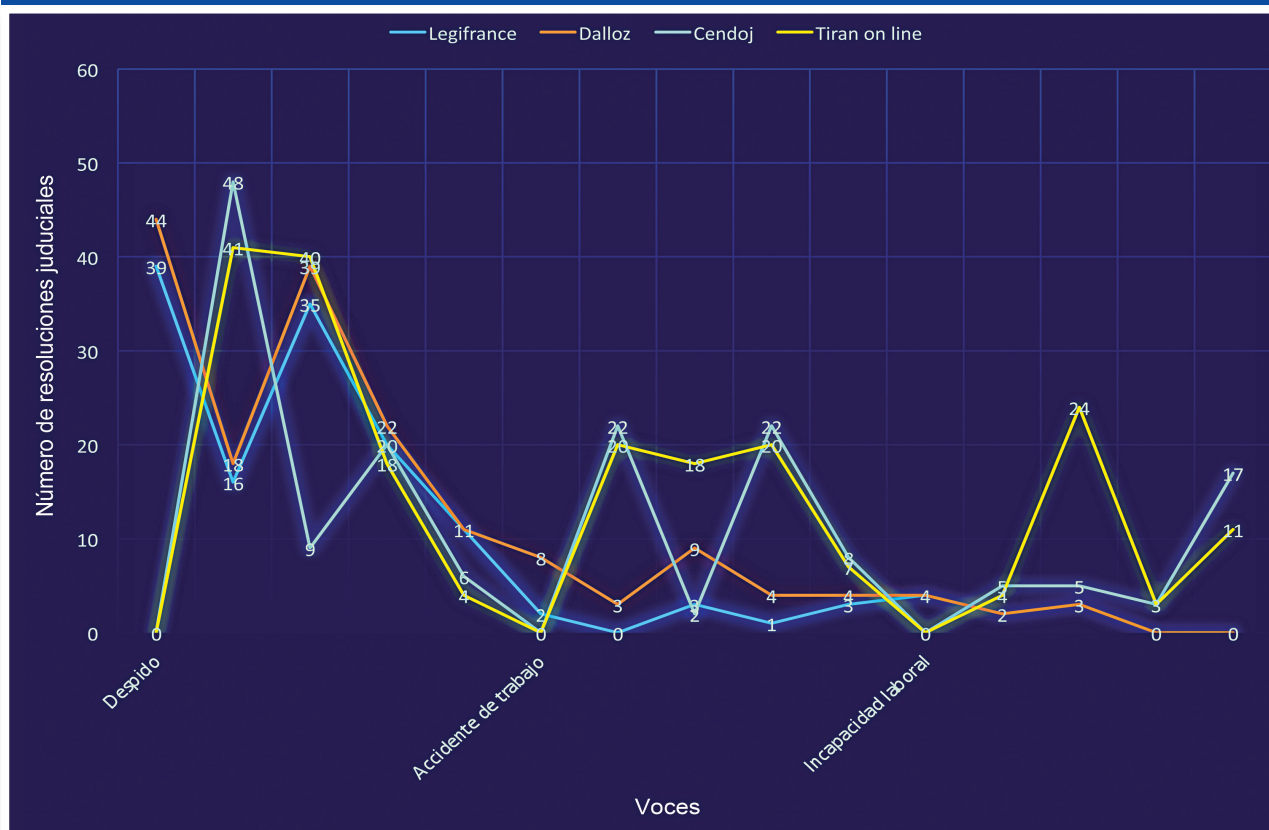
4.2.2.- Resultado 6: Matización de voces en consumo de alcohol

Al igual que en el resultado 5, el **resultado 6** pretende matizar en lo respectivo al subtema del consumo de alcohol atendiendo, en esta ocasión, a las posibles formas de consumo. Se sustituye la voz genérica *alcohol* por las de *ebriedad*, *embriaguez*, *alcohólico*, *alcoholemia* y *alcoholismo* y se establecen las siguientes relaciones de yuxtaposición entre voces para las que obtenemos su respectivo resultado en forma de listado de resoluciones judiciales: *despido–ebriedad*; *despido–embriaguez*; *despido–alcohólico*; *despido–alcoholemia*; *despido–alcoholismo*; *accidente de trabajo–ebriedad*; *accidente de trabajo–embriaguez*; *accidente de trabajo–alcohólico*; *accidente de trabajo–alcoholemia*; *accidente de trabajo–alcoholismo*; *incapacidad–ebriedad*; *incapacidad–embriaguez*; *incapacidad–alcohólico*; *incapacidad–alcoholemia*; e *incapacidad–alcoholismo*. Los anexos F.I y E.I (páginas 119 y 129) presentan el resultado 6 en forma de listados de resoluciones judiciales obtenidos.

FRANCIA			
Voces		Bases de données juridiques	
		<i>Legifrance</i>	<i>Dalloz</i>
Licenciement	Ebriété	39 documents	44 documents
	Ivresse	16 documents	18 documents
	Alcoolique	35 documents	39 documents
	Alcoolémie	20 documents	22 documents
	Alcoolisme	11 documents	11 documents
Accident de travail	Ebriété	2 documents	8 documents
	Ivresse	0 documents	3 documents
	Alcoolique	3 documents	9 documents
	Alcoolémie	1 documents	4 documents
	Alcoolisme	3 documents	4 documents
Incapacité	Ebriété	4 documents	4 documents
	Ivresse	2 documents	2 documents
	Alcoolique	3 documents	3 documents
	Alcoolémie	0 documents	0 documents
	Alcoolisme	0 documents	0 documents

ESPAÑA			
Voces		Bases de datos jurídicas	
		<i>Cendoj</i>	<i>Tiran on line</i>
Despido	Ebriedad	0 documentos	0 documentos
	Embriaguez	48 documentos	41 documentos
	Alcohólico	9 documentos	40 documentos
	Alcoholemia	20 documentos	18 documentos
	Alcoholismo	6 documentos	4 documentos
Accidente de trabajo	Ebriedad	0 documentos	0 documentos
	Embriaguez	22 documentos	20 documentos
	Alcohólico	2 documentos	18 documentos
	Alcoholemia	22 documentos	20 documentos
	Alcoholismo	8 documentos	7 documentos
Incapacidad	Ebriedad	0 documentos	0 documentos
	Embriaguez	5 documentos	4 documentos
	Alcohólico	5 documentos	24 documentos
	Alcoholemia	3 documentos	3 documentos
	Alcoholismo	17 documentos	11 documentos

Gráfico 1. Comparativa entre buscadores



4.2.3.- Resultado 7: Jurisdicción administrativa

El **resultado 7** refleja la relación entre consumo de alcohol y el trabajo en la jurisdicción administrativa. Para obtener este resultado se retrocede a los niveles 3 y 4 de búsqueda con el fin de sustituir la jurisdicción social por la administrativa; y así en el caso de Francia cambiar el órgano emisor de la Cour de Cassation por el Conseil d'Etat, y en España la sala social por la sala contencioso administrativa. Se trata de un resultado que atiende al contenido en cuanto que contempla la posibilidad de que el consumo de alcohol se pueda dar en el funcionariado. Ahora bien, desde un punto de vista cuantitativo, las resoluciones obtenidas en este resultado deberán sumarse a los resultados definitivos si atienden a los criterios de del cribado de resultados descritos en el apartado 4.3. (página 55). A continuación las dos primeras tablas plasman los resultados obtenidos conservando los criterios de búsqueda definidos anteriormente en los niveles 1 y 2; y las dos últimas los resultados según las relaciones de yuxtaposición entre voces relativas al nivel 5 de búsqueda: *despido–ebriedad; despido–embriaguez; despido–alcohólico; despido–alcoholemia; despido–alcoholismo; accidente de trabajo–ebriedad; accidente de trabajo–embriaguez; accidente de trabajo–alcohólico; accidente de trabajo–alcoholemia; accidente de trabajo–alcoholismo; incapacidad–ebriedad; incapacidad–embriaguez; incapacidad–alcohólico; incapacidad–alcoholemia; e incapacidad–alcoholismo*. (Ver anexos F.I y E.I páginas 119 y 129).

FRANCIA		
Voix	<i>Alcool et travail</i>	
Dates	<i>01/01/2004 à 31/12/2014</i>	
Jurisprudence	<i>Administrative</i>	
Jurisdiction	<i>Conseil d' Etat</i>	
Chambre	<i>Administrative</i>	
Bases de données juridiques	<i>Legifrance</i>	<i>Dalloz</i>
	5 documents	7 documents

ESPAÑA		
Voces	<i>Alcohol y trabajo</i>	
Periodo	<i>Desde el 01/01/2004 hasta el 31/12/2014</i>	
Jurisdicción	<i>Contencioso administrativa</i>	
Órgano	<i>Tribunal Supremo</i>	
Sala	<i>Contencioso administrativa</i>	
Bases de datos jurídicas	<i>Cendoj</i>	<i>Tiran on line</i>
	40 documentos	39 documentos

FRANCIA			
Voix		Bases de données juridiques	
		<i>Legifrance</i>	<i>Dalloz</i>
Licenciement	Ebriété	0 documentos	0 documentos
	Ivresse	1 documentos	1 documentos
	Alcoolique	1 documentos	1 documentos
	Alcoolémie	0 documentos	0 documentos
	Alcoolisme	0 documentos	0 documentos
Accident de travail	Ebriété	1 documentos	2 documentos
	Ivresse	0 documentos	0 documentos
	Alcoolique	1 documentos	0 documentos
	Alcoolémie	0 documentos	0 documentos
	Alcoolisme	0 documentos	0 documentos
Incapacité	Ebriété	0 documentos	0 documentos
	Ivresse	0 documentos	0 documentos
	Alcoolique	2 documentos	3 documentos
	Alcoolémie	0 documentos	0 documentos
	Alcoolisme	0 documentos	0 documentos

ESPAÑA			
Voces		Bases de datos jurídicas	
		<i>Cendoj</i>	<i>Tiran on line</i>
Despido	Ebriedad	0 documents	0 documents
	Embriaguez	1 documents	1 documents
	Alcohólico	0 documents	2 documents
	Alcoholemia	0 documents	0 documents
	Alcoholismo	0 documents	0 documents
Accidente de trabajo	Ebriedad	0 documents	0 documents
	Embriaguez	0 documents	0 documents
	Alcohólico	0 documents	63 documents
	Alcoholemia	0 documents	0 documents
	Alcoholismo	0 documents	0 documents
Incapacidad	Ebriedad	0 documents	0 documents
	Embriaguez	0 documents	0 documents
	Alcohólico	0 documents	5 documents
	Alcoholemia	0 documents	0 documents
	Alcoholismo	3 documents	3 documents

4.3.- Resultados cualitativos: el cribado de resultados

Los resultados 8, 9 y 10 ofrecen (como en los resultados anteriores) cifras que refieren a las cantidades de documentos jurídicos obtenidos. No obstante los resultados que se exponen a continuación se diferencian de los anteriores por ser, ante todo, resultados cualitativos.

Mediante los resultados 8, 9 y 10 se refleja el cribado realizado a partir de los resultados obtenidos anteriormente. Se introduce en la selección de resoluciones judiciales obtenida criterios de calidad referidos a su contenido. Es decir que no tratamos únicamente de saber, a través de estos resultados cualitativos, cuántas resoluciones judiciales existen acerca de la relación entre consumo de alcohol y el trabajo, sino de conocer cuántos de los documentos obtenidos sirven para el estudio de nuestra temática en función de su contenido.

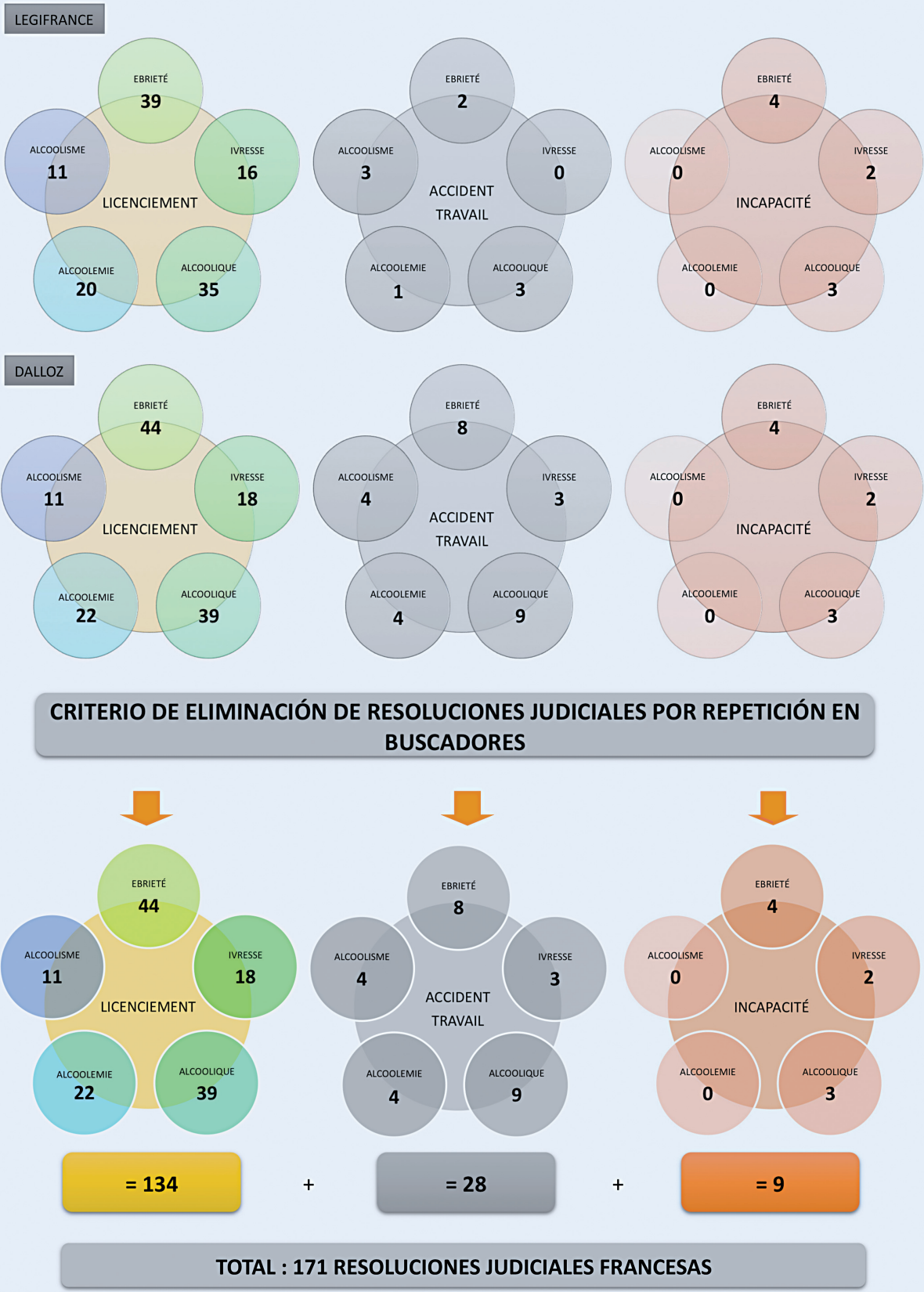
La finalidad de estos resultados es la obtención del resultado definitivo en la búsqueda jurisprudencial planteada. De manera que el resultado 8 expresa el criterio de repetición entre buscadores (página 55); el resultado 9, el criterio de repetición entre voces (página 58) y el resultado 10 el listado definitivo de resoluciones judiciales que se prestan al estudio (página 58). Los resultados 11 y 12 refieren a los resultados obtenidos por aplicación del método analítico descriptivo (páginas 59 y 71 respectivamente).

4.3.1.- Resultado 8: Criterio de repetición entre buscadores

El **resultado 8** recupera el resultado 6 y lo presenta gráficamente en forma de esquemas de círculos. Cada círculo central representa uno de los ítems elegidos sobre el trabajo: *despido*, *accidente de trabajo e incapacidad*; y los círculos más pequeños los ítems sobre consumo de alcohol: *ebriedad*, *embriaguez*, *alcohólico*, *alcoholemia* y *alcoholismo*. Las intersecciones entre los círculos simbolizan el criterio de yuxtaposición entre las voces y en cada intersección se encuentran las cifras obtenidas en las tablas del resultado 6 correspondientes a cada buscador español o francés utilizado.

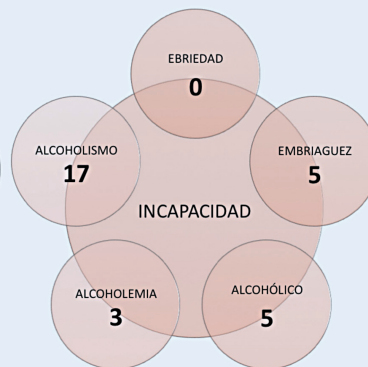
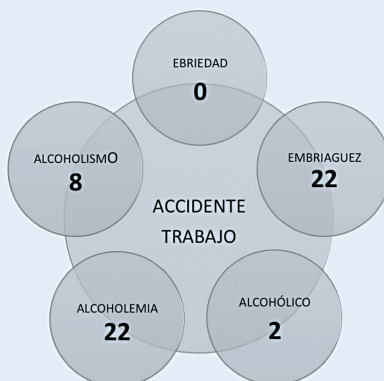
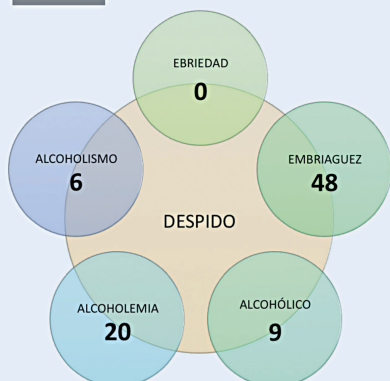
Con esta comparativa presentada en forma gráfica, se pretende eliminar aquellos documentos repetidos por aparecer repetidas en los listados de resoluciones judiciales obtenidos en el buscador público y privado de cada país. De lo contrario, el resultado 6 nos ofrecería unos resultados erróneos, ya que algunos documentos computarían doblemente.

Esquema 6. En Francia

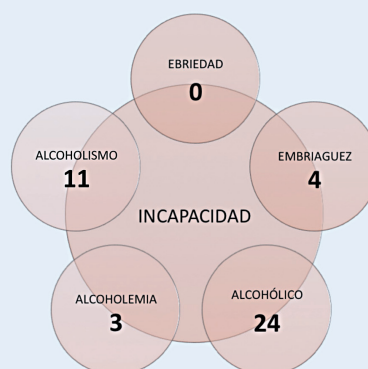
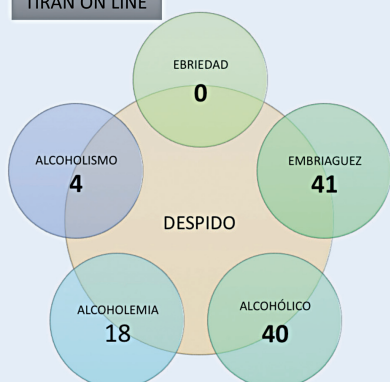


Esquema 7. En España

CENDOJ



TIRAN ON LINE

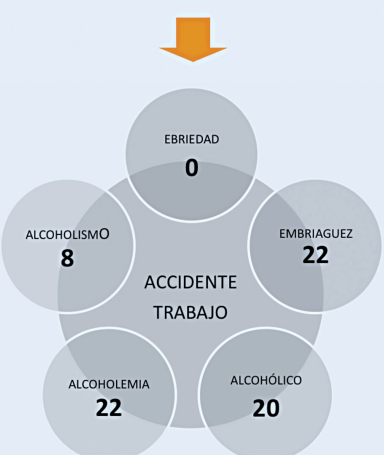


CRITERIO DE ELIMINACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES POR REPETICIÓN EN BUSCADORES



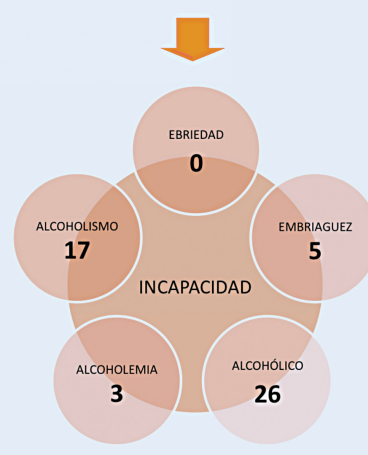
= 115

+



= 72

+



= 51

TOTAL : 238 RESOLUCIONES JUDICIALES ESPAÑOLAS

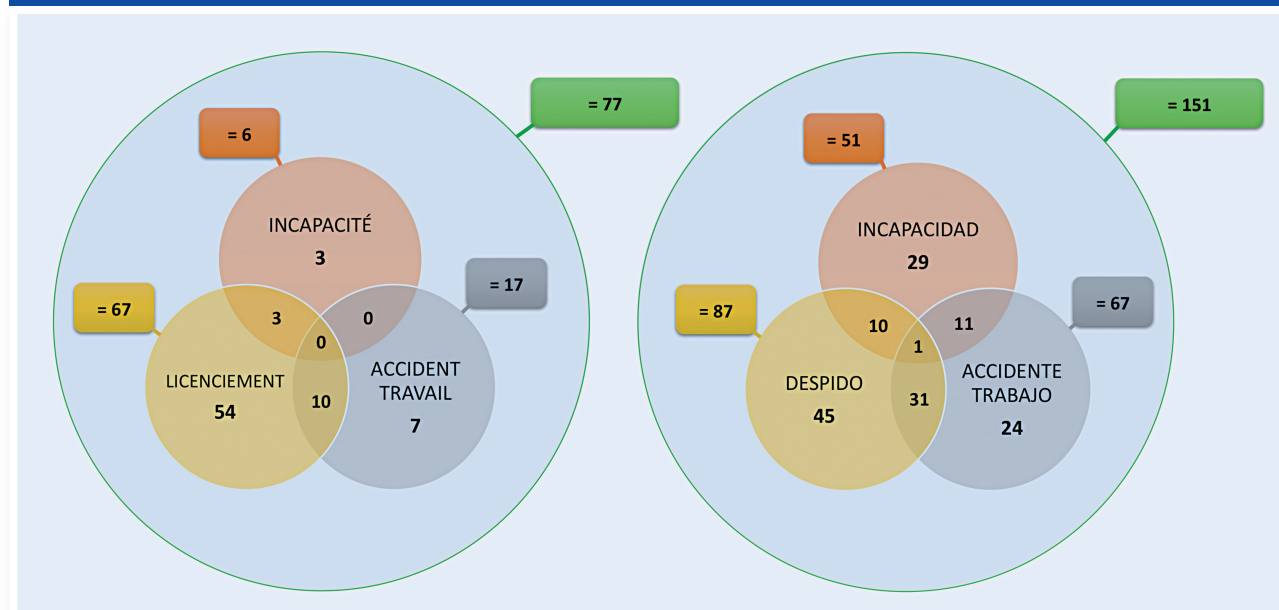
En conclusión, las resoluciones judiciales francesas obtenidas sin repetición entre buscadores público de Legifrance y privado de Dalloz son de 134 para despido, de 28 para accidente de trabajo y de 9 para incapacidad. Las resoluciones judiciales españolas obtenidas sin repetición entre buscadores público Cendoj y privado Tiran on line son de 115 para despido, de 72 para accidente de trabajo y de 51 para incapacidad.

4.3.2.- Resultado 9: Criterio de repetición entre voces

El **resultado 9**, a partir de los resultados obtenidos en el resultado 8, elimina los documentos jurídicos repetidos entre los listados de resoluciones que atienden a las distintas relaciones de yuxtaposición entre voces, y lo hace en dos fases. En la primera fase se eliminan los documentos repetidos entre los ítems sobre consumo de alcohol: *ebriedad*, *embriaguez*, *alcohólico*, *alcoholemia* y *alcoholismo*, y se obtienen los siguientes resultados: en España 87 resoluciones para la voz *despido*, 67 documentos para la voz de *accidente de trabajo* y 51 para *incapacidad*; en Francia 67 para *licenciement*, 17 para *accident de travail* y 6 para *incapacité*. En la segunda fase se descartan las resoluciones repetidas entre los ítems relativos al trabajo: *despido*, *accidente de trabajo* e *incapacidad* en virtud de los resultados de la fase primera.

El esquema circular presentado a continuación representa en tres círculos concéntricos, las tres voces del ámbito laboral, y recoge en cada intersección la cantidad de documentos jurídicos encontrados bien con una sola voz, bien con dos voces o bien con tres para poder descartar aquellas resoluciones que se repitan en las distintas relaciones yuxtapuestas de voces.

Esquema 8. Círculos concéntricos de resoluciones judiciales una vez aplicado el criterio de eliminación por repetición entre voces laborales en Francia y España



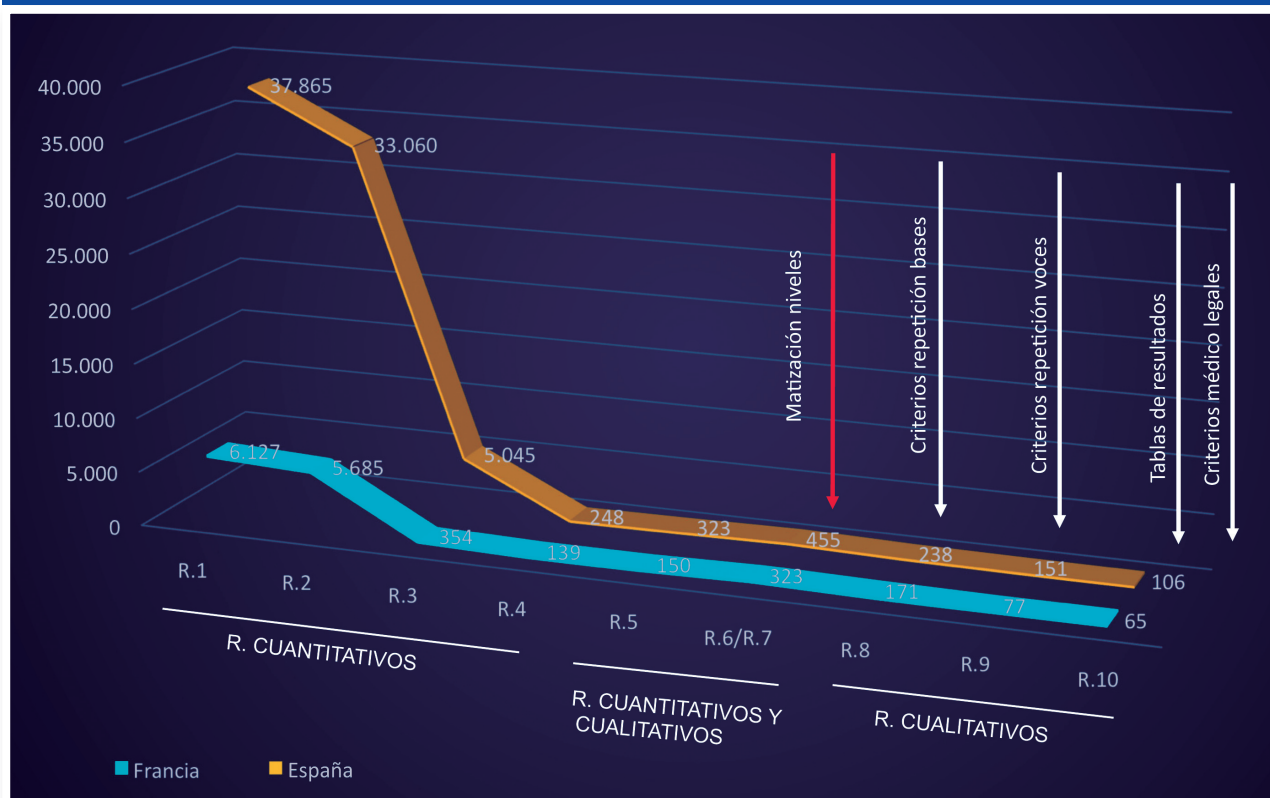
En conclusión, al sumar todas las cifras contenidas en cada intersección del esquema, deducimos que 77 son las resoluciones francesas objeto de análisis y 151 las resoluciones judiciales españolas. Lo que suma un total de 228 resoluciones judiciales francesas y españolas.

4.3.3.- Resultado 10: Criterio de validez y resultados cuantitativos definitivos

A esta cifra total de 228 documentos queda restar aquellas resoluciones judiciales cuyo contenido no refiere ningún tipo de relación entre consumo de alcohol y el trabajo. Para ello, hemos aplicado lo que hemos denominado criterio de eliminación por validez, que requiere de la lectura de las resoluciones judiciales.

Según el **resultado 10** se establece que las resoluciones no válidas en Francia por su contenido ascienden a la cifra de 12, por lo que resta 65 documentos válidos para el estudio médico legal. En España los documentos no válidos son 45, por los que 106 resoluciones son las seleccionadas para ser analizadas en la tabla de resultados. En conclusión, el estudio médico legal de las resoluciones se realizará sobre una totalidad de 171 resoluciones judiciales francesa y española, cuya relación cronológica se encuentra recogida en los anexos F.II y E.II. (páginas 149 y 151).

Gráfico 2. Efecto embudo en la selección de resoluciones judiciales



4.3.4.- Resultado 11: Las tablas resumen de resultados

El **resultado 11** recoge la totalidad de las resoluciones judiciales válidas para el estudio, en tablas resumen que se presentan a continuación. Por orden cronológico, para cada resolución se recogen los siguientes datos: número de recurso, fecha, datos sobre la procedencia en primera instancia, acción jurídica ejercida, profesión, consumo de alcohol, hechos sentencia de contraste, criterios de establecimiento del nexo causal y sentido del fallo. (Ver anexos F.II y E.II. de las páginas 149 y 151).

Nº	ANTECEDENTES PROCESALES				HECHOS		RAZONAMIENTO JURÍDICO		FALLO	
	recurso	Acción jurídica			Profesión	Consumo de alcohol	Sentencia de contraste	Nexo causal por contraste		Sentido
		1ª	Supl	Cas						
2014										
1	123/2014 7 mayo	Despido			cocinero	Ingesta de bebidas alcohólicas en el bar que regentaba la mujer estando en IT por ansiedad reactiva con tratamiento de Alprazolam y Paroxetina, siendo habitual la recomendación de abstinención alcohólica.	TSJ Madrid 840/2011: trabajador oficial 1ª sale de fiesta durante varios días estando IT por trastorno neurótico y depresión por ansiedad con ansiolíticos y antidepressivos. Consumo de alcohol recomendado explícitamente como moderado.	La ingesta de alguna bebida alcohólica no retrasa recuperación. No recomendado expresamente por médico. No hay transgresión buena fe contractual.	I	
			P	IMP						EMP
2	392/2013 6 mayo	Revisión invalidez			-	Padece hepatopatía crónica de origen alcohólico.	TSJ Castilla y León, sede Burgos de 29 de noviembre de 2012: niega la aparición de nuevas dolencias.	Se advierten nuevas dolencias.	I	
			EST	DEST						INSS
3	2822/2013 22 abril	Incapacidad permanente			-	Polineuropatía mixta con alcohólica de carácter intenso. Dependencia al alcohol y tabaco.	TSJ de Murcia 305/2008: polineuropatía, cuadro psiquiátrico, demencia.	No existe identidad en las dolencias.	I	
			EST	EST						TRAB
4	1965/2013 9 abril	Despido			conductor	Accidente tráfico con alcoholemia positiva, retirada de carnet. Juicio por alcoholemia ocultado a la empresa.	TSJ País Vasco 619/01, de 29 de mayo de 2001: director de sucursal bancaria no informa por descuido de conductas realizadas en la empresa.	Ocultación de accidente con retirada y sigue conduciendo con normalidad. Transgresión buen fe contractual.	I	
			P	P						TRAB
2013										
5	1768/2013 5 diciembre	Prestaciones seguridad social			-	Psiconeurosis más indemnización por padecer alcoholismo. No determina cronicidad.	STSJ Cantabria 982/2006: ingreso por consumo excesivo. Etilismo crónico.	Grado de alcoholismo menor, no cronicidad.	I	
			EST	EST						TRAB
6	938/2013 26 noviembre	Pensión viudedad y orfandad			-	Trabajadora fallece de un infarto en el parto. Embarazo de riesgo.	STSJ Galicia 2594/2007, 1 octubre de 2010: alcohólico crónico para el que Tribunal acepta retrotraer cómputo de carencia. Teoría del paréntesis	Trabajadora se encontraba de alta y no atiende a un deterioro de la enfermedad.	I	
			EST.P	DEST						CON Y.
7	62/2013 12 noviembre	Impugnación de convenio colectivo			-	Desarrollo del convenio colectivo comercio, hostelería y turismo mediante reglamento.	-	La interpretación de la norma ha de ser extensiva.	I	
			EST.P	-						EMP
8	717/2012 3 octubre	Indemnización por convenio.			-	Aseguradora excluye casos de embriaguez para cubrir contingencias.	STSJ de Valencia, de 4 de octubre de 2005: atiende al contenido de coberturas de la póliza no a la determinación de contingencia.	Semejanza de supuestos.	EST.	
			EST.P	DEST						EMP

9	415/2013 10 septiembre	Despido P IMP EMP	Manejador de pluma	Embriguez reconocida por trabajador al día siguiente, que había estado bebiendo en un bar mientras se reanudaban los trabajos suspendidos por temporal.	TSJ Valencia 1749/2006: trabajador sancionado dos veces por consumo TSJ Castilla La Mancha 1387/2010: embriguez habitual	Falta de habitualidad, falta de repercusión negativa en el trabajo que afecte a seguridad.	I
10	474/2013 10 septiembre	Despido P IMP EMP	Empleado Mercedes	Accidente de tráfico con vehículo de empresa prueba alcoholemia positiva, oculta consumo a la empresa pero no el accidente.	TSJ Valencia 8/2/11: Trabajador miente sobre accidente de tráfico.	Se valora el hecho de que el trabajador no conociera la situación de siniestro total. Teoría gradualista.	I
11	420/2013 25 junio	Despido P P TRAB	viajante	Embriguez en lugar de trabajo. Desobedece orden de no conducir vehículo de empresa	TSJ Madrid 574/2005: operario de rampa spanair ingesta bebidas, se ausenta del puesto y retrasa vuelos.	No necesaria habitualidad y persiste conducta temeraria de conducción a pesar de la orden empresarial	I
12	1906/2012 29 mayo	Despido P IMP EMP	panelista	Embriguez vestuario centro de trabajo. Padece adicción a ingesta alcohol en tratamiento de deshabitación. No sancionado previamente por embriguez	TSJ Baleares 19/7/07: embriguez por toxicomanía ocasional sancionada con despido	Falta habitualidad no sancionado anteriormente. No había empezado a trabajar	I
13	2329/2012 28 mayo	Pensión viudedad DEST DEST VIUD A	-	Reconocida incapacidad no contributiva	STSJ Galicia 2594/2007,1 oct.: alcoholismo crónico asimilado al alta laboral.	No se acredita que cumplierse el mínimo de días cotizados ni el porqué de la falta de demanda de empleo.	I
14	6/2013 7 mayo	Despido Rec. Queja P P TRAB	-	Ocultación a la empresa de accidente de tráfico por conducción bajo los efectos del alcohol con retirada de carnet	STS 3085/2008; 3629/2010; 2833/2010;	La ocultación se atribuye a un mero olvido.	E
15	1400/2012 18 abril 1400/2012 18 abril	Despido P P TRAB Despido P P TRAB	- -	Consumo de alcohol durante la incapacidad temporal Consumo de alcohol durante la incapacidad temporal	STSJ de Cantabria de 29 de junio de 2007: consumo de alcohol no pone en riesgo tratamiento	Transgresión de la buena fe contractual: salidas nocturnas no compatibles con cuadro ansioso depresivo.	I I
16	1722/2012 26 febrero	Despido P P TRAB	contable	Consumo de bebidas alcohólicas destinadas a los clientes del hotel. Comportamiento inadecuado, agresivo, acosador. No consta embriguez habitualidad.	TSJ Madrid 21/5/08 2117/08: conducta bajo efecto de bebidas alcohólicas sin dolo ni culpa del trabajador. No consta habitualidad. TSJ Cataluña 13/5/99 20/99: insultos	La embriguez buscada estando en el trabajo. No es una exigente de conciencia sobre actos realizados: desperfectos, transgresión buena fe e intimidad.	I
17	2473/2012 5 febrero	Determinar contingencia DES DES TRAB	marinero	Caída al mar desde un pesquero. Traumatismo cráneo encefálico. Deprivación etílica	STSJ País Vasco 2292/2003, 25 nov: Accidente al desembarcar, presunción de laboralidad aunque dolencias se manifestases a posteriori.	Imposible establecer nexo causal. Dolencias aparecen en tiempo y lugar de trabajo pero no relacionada con trabajo.	I
18	1661/2012 22 enero	incapacidad EST EST TRAB		Asimilada al alta la esquizofrenia	STS 16/12/99: etilismo crónico no inscrito en desempleo	No hay cese <i>animus laborandi</i> por alcoholismo. Hechos no probados	I
2012							
19	1649/2012 5 diciembre	Despido P TRAB	Vigilante	Signos de embriguez. 2.3g/l en urgencias. Vistiendo uniforme de vigilante.	TSJ Valencia 6/10/2012 TSJ Madrid 5/4/2005: vigilante con arma desobediencia en estado ebrio	Embriguez comprobada	I
20	3711/2011 4 diciembre	Prestaciones EST DEST EMP	Conductor de autobús	Padece trastorno de ansiedad	STSJ Andalucía 22 septiembre 2011, rec. 186/2011	Mobbing laboral: suicidio. Accidente no laboral	I
21	1402/2012 27 noviembre	Despido IMP P TRAB	Tendero	Consumo de alcohol en horario de apertura	STSJ de Valencia de 17 de enero de 2012: disminución voluntaria del rendimiento del trabajo.	Concasas: hurto y disminución del rendimiento en el trabajo	I
22	648/2012 11 octubre	Despido P P IMP P TRAB	Conductor camioneta	Conducción con furgoneta de empresa Tasa 0,66 y 0,63. No habitual pero riesgo para terceros	TSJ País Vasco 26/10/10: Sentencia contraste 0,45 sin síntomas de embriguez. Sin riesgo de accidente.	Independientemente de la habitualidad se han vulnerado normas de seguridad y salud en el trabajo. Transgresión buena fe contractual.	I

23	1142/2012 13 septiembre	Pensión viudedad		-	Causante sufría alcoholismo crónico	STS 23 dic.2005: depresiva fallece por aneurisma.	No consta inscripción como demandante de empleo ni se acredita que las patologías justifiquen el alejamiento del mercado laboral.	I
24	2138/2011 17 mayo	Despido	E	VIUD A	Parada en bares durante jornada laboral. Prueba de alcohololemia positiva.	TSJ Castilla La Mancha16/6/95: oculta avería de parabrasis a la empresa y la repara	Embraguez podía haber repercutido en seguridad de los demás dado su cargo profesional. Ocultación y transgresión buena fe contractual.	I
			P	P				
25	3317/2011 11 abril	Incapacidad	EST	TRAB	Incapacidad diabetes II	STSJ Andalucía 1914/06: STSJ Andalucía: 1122/01: alcoholismo	Dolencias distintas.	I
26	2934/2011 27 marzo	prestaciones	DES	EMP	Caida desde balcón y fallece. Toxicológico: 2,03. Accidente producido por embriaguez.	STSJ Galicia 5611/2001, 30 abril: alcohol rompe nexo causal y es imprudencia del trabajador. STSJ Castilla León 1008/2002, 11 dic: Medidas de seguridad obligación del trabajador	La embriaguez no exime de recargo ya que faltan medidas de seguridad. Perdida de oportunidad.	I
27	3416/2011 28 marzo	Despido	P	TRAB	IT por rotura de menisco con prescripción de reposo. Sale caminando de bar en bar hasta altas horas de la madrugada consumiendo alcohol y permaneciendo de pie. Grado de minusvalía: hernias, parestesias...	TSJ Madrid 3 oct. 2006: Rotura de ligamento interno hace la compra, saca al perro, acude a una fiesta al final de su reposo	Cuidados prescritos no realizados y el consumo de alcohol contrario al tratamiento médico prescrito.	I
28	1985/2011 20 marzo	Incapacidad	DES	EMP	Tasa de alcohololemia supera el límite permitido. Síntomas de embriaguez no demostrados	STSJ Galicia 1526/2007: Antecedentes alcoholismo. Accidente de trabajo con rotura	Dolencias frente a dolencias derivadas accidente de trabajo.	I
29	2961/2011 7 marzo	Despido	P	TRAB	Tasa de alcohololemia 0,34 y 0,32. Vehículo trasladado por un compañero al garaje de empresa.	TSJ Cataluña 16/4/02, 8470/01: tasa 0,31 y 0,32. Vehículo inmovilizado por policía. Informa a la empresa	Importancia de la profesión con repercusión en servicio público de transporte.	I
30	2558/2011 9 febrero	Despido	IMP	EMP	Bebedor habitual. No probado que consumo sea en trabajo ni horas laborales ni afecta a rendimiento	TSJ Murcia 3/10/05 937/05: trabajador cae al río y desaparece, falta de medidas de seguridad	No demostrada la repercusión negativa en el trabajo, el consumo en tiempo y lugar de trabajo.	I
31	977/2011 31 enero	Despido	P	TRAB	Tasa alcohololemia 0,34 y 0,32. Vehículo trasladado por un compañero al garaje de empresa.	TSJ Cataluña 16/4/02 8470/01: conductor camión positivo en tasa de alcohololemia 0,31	Tasa positiva no supone embriaguez. Hay un riesgo para la integridad de los pasajeros.	I
2011								
32	1728/2011 7 diciembre	Revisión grado incapacidad	EST	TRAB	Nueva dolencia consumo de alcohol	STSJ Galicia: Agravación hepatopatía y excesivo y abusivo consumo de alcohol. Hepatitis aguda alcohólica.	Alcoholismo no es un agravante de la enfermedad	I
33	4691/2010 3 noviembre	Despido	P	IMP	Testigo le ve entrar en un bar en dos ocasiones. Olía a alcohol. Parece que consume sangría. Hay rumores de que consuma alcohol.	TSJ Murcia 26/12/96 1174/1996: conductor detección alcohólica etilómetro 0,66 y 0,59	No acreditado el consumo de alcohol.	I
34	1166/2011 20 septiembre	Incapacidad	EST.P	TRAB	Dependencia alcohólica , polineuropatía	STS 20 ene 2003: doctrina del paréntesis	Carencias cualificadas 140 LGSS	I
35	3540/2010 8 septiembre	Despido	IMP	P	Acude al centro de trabajo ebrio y desaliñado. Advertido por director verbalmente.	STSJ Madrid 12/4/05: oficial de 1ª embriagado en el domicilio de dos clientes.	No se describe días y comportamiento, ni intensidad embriaguez y la habitualidad es discutida.	I
36	2601/2010 11 abril	Resp. empresarial	DEST	EMP	Accidente de tráfico: salida de la calzada y vuelco. Fallece. 1,45 g/l de alcohol	STSJ Valencia3265/02, 30 abril: No hay infracción trabajador, Consumo de 0,3ml	Falta de medidas de seguridad: estructura de protección para vuelco, sin barra anti vuelco y cinturón seguridad	I

37	1179/2010 29 marzo	Incapacidad permanente DEST DEST	-	Trastorno límite de personalidad y consumo abusivo de alcohol	Tsj Cantabria 391/2008: osteopenia, microcalcificaciones. Trastorno adictivo por consumo de alcohol intentó deshabituación sin éxito	Distinto cuadro clínico. Deshabituación sin éxito, ha de ser intentada deshabituación en supuesto.	I
38	3325/2010 29 marzo	Despido P P	Ayudante de oficio TRAB	Embraguez habitual: carta despedido y amonestaciones previas. Acude ebrio al trabajo. Deshabituación posterior a amonestaciones tolerada por empresa.	Tsj Asturias 6/5/94 1132/1993: No constan amonestaciones que demuestren habitualidad.	Habitualidad demostrada por recogida en carta y amonestaciones previas.	I
39	2946/2010 24 febrero	Incapacidad DEST DEST		Incapacidad permanente por dependencia alcohólica	STSJ Asturias 233/2000: incapacidad alcoholismo crónico	Lesiones orgánicas distintas.	I
40	2018/2010 24 enero	Despido P	Ingeniero Telecomunicaciones	IT por enfermedad común ansiedad con benzodacepinas. Contraindicado consumo de bebidas alcohólicas. Acude a un Master de la empresa y en un descanso toma bebidas alcohólicas.	Tsj Cataluña 17 nov: IT por ansiedad despedido por acudir a una discoteca e ingerir bebidas alcohólicas.	Inocuidad del hecho enjuiciado. Desestimado el motivo.	EST. P
2010							
41	1376/2010 23 noviembre	Despido IMP	Conductor camión	Prueba de alcoholemia 0,35mg/l y 0,30mg/l	STSJ Valencia 3941/2006 23 enero: conductor mecánico tasa 0,43 mg/l y 0,42mg/l No síntomas de embriaguez. Retraso en entrega camión con gran tonelaje.	No riesgo, quejas de clientes en retraso de la mercancía.	I
42	716/2010 9 septiembre	Despido IMP	Oficial de 2ª	Al inicio de jornada laboral estaba durmiendo en vehículo. Se incorpora a trabajar ¿tarde? y desobedece orden de no trabajar. Policía constata que no hay estado de embriaguez	STSJ Murcia 142/1992 18 mayo: embriaguez habitual que le impide hacer trabajo reiterada.	No se acredita embriaguez y realiza su trabajo con normalidad hasta el final de jornada	I
43	187/2010 9 septiembre	Despido P	Instalador	Acuden a Estación de Atocha, lugar de trabajo, fuera de horario mostrando signos de embriaguez. Amenaza y agreden al vigilante	STSJ Madrid 2368/2006 12/9/06: agresión entre compañeros fuera del centro de trabajo, no consta de quien proviene la provocación	Hechos tienen lugar en el centro de trabajo	I
44	3561/2009 20 julio	Prestación orfandad DEST	-	Muerte víctima de un homicidio. Antecedentes de alcoholismo acreditan no estar inscrito en desempleo.	STSJ Valencia 609/08, 13 feb. 01: inscrito en desempleo	Causa de la muerte externa: disparo durante permiso penitenciario.	I
45	4251/2009 8 junio	Despido P	Viajante	Accidente de tráfico con vehículo en doble fila. Tasa alcohol 1,77 y 1,84	Colisión de madrugada después de una cena tasa 190 y mucha nieve	La embriaguez influye en el accidente de tráfico. No acreditada en contraste.	I
46	2155/2009 28 abril	Despido P	Pilotos aviación	Agresión entre trabajadores embriagados la noche antes del vuelo, que les impidió trabajar al día siguiente	STSJ Madrid 1062/09 30 abril: intimididad	Agresiones consideradas en tiempo y lugar de trabajo. Acreditada embriaguez por Policía. Tiempo de prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas por seguridad pasajeros	I
47	1183/2009 25 febrero	Despido IMP	-	Tasa conduciendo vehículo 0,85 mg/l y 0,86mg/l en domingo. Amonestado dos veces por síntomas de haber ingerido alcohol en trabajo	STSJ Castilla La Mancha 20 enero 2004: conductor de vehículo transportando 25 toneladas de madera. 1,33 y 1,36	Embraguez no es habitual y no hay riesgo al conducir en domingo.	I
2009							
48	1531/2009 9 diciembre	Despido P	Técnico auxiliar	Empleo vehículo empresa para actividad no empresarial. Conducía en zigzag y se saltó semáforo rojo. Test alcoholemia positivo	STSJ Madrid 4064/07, 30 oct.: solicitado vehículo empresa para usarlo privadamente STSJ Catilla y León 1670/07, 17 oct.: accidente de tráfico tras ingerir alcohol	Constan que utilizó furgoneta sin autorización y datos respecto de la alcoholemia que pones en riesgo a terceros	I
49	605/2009 17 noviembre	Despido P	Capataz	Sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas en trabajo con otros compañeros.	STSJ Canarias, 29 nov 2007: STSJ Madrid, 20 abril 2004: STSJ La Mancha, 15 nov 1993: síntomas de embriaguez evidentes	Despedido por deslealtad y falta de confianza faltando a su responsabilidad como capataz respecto resto de trabajadores.	I

50	166/2009 29 octubre	Cantidad EST	Encofrador	Desplome de pilar generando politraumatismo con muerte. Alcohol 2,6g	STSJ 1356/06,24 julio:	No interrumpida prescripción.	I
51	3381/2008 13 octubre	Despido IMP	Auxiliar de servicios	Accidente de tráfico con prueba de alcoholemia positiva. Ojos rojos, pupilas dilatadas y voz pastosa. Embriaguez probada.	STSJ Madrid 5250/97, 27 ene: comercial bebedor en horas de trabajo	Convenios colectivos diferentes. Consumo de bebidas distinto de embriaguez	I
52	430/2009 17 septiembre	Cantidad DES	Conductor mecánico	Accidente de tráfico salida de la vía bajo efecto de alcohol, cocaína y cannabis.	STSJ Cantabria183/2006,22 marzo: curva peligrosa con pendiente prolongada más alcohol 1,20, calzada mojada y nocturno. Debido a la inadecuada velocidad	Concurrencia de causas en sentencia de contraste y no en sentencia recurrida.	I
53	1805/2007 16 julio	Cantidad DES	Comercial	Depresión con alcoholismo crónico.	Enfisema y Fibrosis pulmonar	Patologías distintas: lesiones y secuelas y limitaciones distintas.	I
54	3954/2008 28 mayo	Despido IMP	Vigilante de seguridad	Embriaguez vistiendo uniforme e insultos a un superior	STSJ Tenerife 194/05, 28 abril: personarse en estado de embriaguez	Actor no llegó a trabajar mientras que en el otro caso estaba de servicio.	I
55	3211/2008 28 mayo	Despido EST	—	Introduce bebidas alcohólicas en el centro de trabajo	STSJ Andalucía 27 noviembre 1998	Admitido por empresarios en otras ocasiones	I
56	3606/2008 29 abril	Despido P	Vigilante de seguridad	Se presenta en puesto de trabajo en estado de embriaguez. Desaseado y descuidado. Actitud presenciada por ciudadanos.	STSJ País Vasco 1990/04, 26 oct.: S e persona en centro de trabajo embriagado fuera de su horario de trabajo.	Teoría gradualista. Negativa repercusión en el trabajo por la presencia de ciudadanos y que jefe acusa para que no trabaje.	I
57	1027/2008 27 febrero	Despido EST,P	—	Entró en distintos establecimientos: bares y tiendas de comestibles	STSJ Cataluña de 17 de enero 2008	No demostrado consumo de alcohol	I
58	1987/2008 10 febrero	Cantidad EST,P	Conductor	Accidente de tráfico con daños al vehículo. Sin consumo de alcohol	STSJ de Cantabria 10 marzo 2004, STSJ de Castilla y León 6 de abril 2001: descuido y distracción	Conducta negligente por conducir al doble de la velocidad permitida	I
59	2885/2007 3 febrero	Despido EP		Dependiente a cocaína y abuso de alcohol. En plan drogodependencia y alcoholismo de la empresa. Robo de dinero a la empresa	STSJ Madrid 27 dic. 2002: trastorno de dependencia alcohol abandona su puesto de trabajo. Enfermedad común.	Dinero se devolvió pero muy posteriormente al hurto. La rehabilitación es asumida por empresa.	I
60	1454/2008 13 enero	Despido IMP	-	Agresión entre compañeros fuera del lugar y tiempo de trabajo en una feria	STSJ Castilla León 983/05, 2 junio 2005: director empresarial da discurso de agradecimiento en estado de embriaguez insultando a asistentes	Principios de proporcionalidad y gradualidad: fuera de horario y lugar de trabajo sin repercusión parda el trabajo.	I
2008							
61	4036/2007 4 diciembre	Despido IMP	vendedor	Delito contra la seguridad del tráfico por conducción bajo efectos alcohol. 0,86 y0,83	TSJ Madrid 6095/2005 7 marzo: montador conduce vehículo de la empresa en estado de embriaguez, riesgo a terceros	No hay transgresión de buena fe contractual por notificación del accidente.	I
62	1463/2008 26 noviembre	Despido p	electricista	Síntomas clínicos de embriaguez	STSJ Baleares 493/98: accidente tráfico tasa positiva, importantes daños al vehículo, despedido	Daños causados menores y accidente tuvo lugar al terminar el servicio.	I
63	3101/2007 11 septiembre	Despido DES	Inspector de servicios	Accidente de tráfico: colisión. Alcoholemia 73 y 69. Oculta a la empresa lo ocurrido	STSJ País Vasco de 22 de enero 2002	Acoso moral	I
64	3929/2007 17 julio	Despido invalidéz		Trabajador despedido porque decir que otro bebe	STSJ 17 2004 Accidente de tráfico con afecciones psíquicas	Accidente , periodo de cotización,	I
65	3799/2007 19 junio	Incapacidad temporal DES		Diabetes y hepatopatía de origen alcohólico	STS 8/11/04: IT	No afecto a incapacidad permanente	I
66	4288/2009 8 julio	Contingencia DES		Faringitis, ansiedad y alcoholismo	1,78 g/l alcohol y 0,02 mg/ml cocaína: imprudencia temeraria.	Maniobras innecesarias. Conduce a más velocidad. Concausas, no imprudencia.	I

2007									
67	274/2007 27 septiembre	Incapacidad permanente	DES	DES	TRAB	Enolismo crónico, pancreatitis de etiología alcohólica	ST: Alcohólico crónico con ingreso hospitalario fractura costillas...	No existe identidad entre patologías.	I
68	322/2005 25 septiembre	Pensión viudedad	E.P	E.	VIUD A	Muerte con cirrosis hepática alcohólica. Hepatopatía crónica	STS 1194/97, 19 NOV. 1997: alcoholismo crónico de varios años de evolución asimilado al alta laboral	Trabajador autónomo. No constan periodos de incapacidad laboral.	I
69	5452/2005 25 septiembre	Prestaciones muerte y supervivencia	DES	EST	MUTUA	Obrero	STSJ Baleares 18 mayo: Suicidio y alcoholismo por mobbing laboral	STSJ Baleares 18 mayo: Suicidio y alcoholismo por mobbing laboral	I
70	3745/2006 18 julio	Incapacidad	DES	EST	TRAB	Administrativo	Dependencia alcohólica y trastorno histriónico	Lesiones no definitivas	I
71	4970/2006 10 julio	Invalidez perm	DES	DES	TRAB	Vigilante de seguridad	Ansiedad, benzodacepinas dependencia alcohólica	No hay incompatibilidad con profesión habitual	I
72	1208/2006 26 abril	derechos	EST	DES	EMP	comercial	Accidente en itinere con 0,96g/l. Adelantamiento antirreglamentario	Concentración menor	I
73	3034/2006 24 abril	Incapacidad permanente	EST	EST	TRAB	Jardinero	Déficit mental cognitivo desde infancia y diabetes.	No igualdad entre patologías.	I
74	1731/2006 20 marzo	Incapacidad permanente	DES	DES	TRAB	Conductor	Visión binocular, aumento tensión ocular	No probado, profesiones distintas.	I
75	3077/2005 7 marzo	Despido	P	P	TRAB	Oficial metalurgia 1ª	IT por ansiedad, acude con asiduidad a bar cercano y consume alcohol en abundancia.	La ingesta de alcohol es incompatible con la ansiedad mientras que la artrosis resultaba irreversible.	I
76	5435/2004 23 enero	Muerte y supervivencia	EST	DES	MUT UA	Trabajos de ferralla	Caída de 8 metros provoca muerte. No había barandillas en el puente, sin arnés. Etanol 3,55g/l	Falta de medidas de seguridad. Pérdida de oportunidad.	I
77	3967/2005 10 enero	Despido	P	P	TRAB	Electricista inspector vía pública	Agresiones físicas a dos personas de la vía pública, después de estar en un bar. Consume tabaco, 60/día, alcohol de forma moderada y cocaína ocasional.	Prestaba sus servicios como inspector en la vía pública.	I
2006									
78	1662/2005 20 julio	Cantidad	DES	DES	TRAB	Asimilación al alta	STS 18 jun 2001: alcoholismo crónico doctrina humanizadora	No hay patología relevante para asimilación al alta en seguridad social	I
79	3905/2005 18 julio	Prestaciones	EST	DES	MUT UA	Reparador	Accidente de tráfico, coche sumergido en la alberca muerte, alcohol 1,85g/l Fase ebrrosa de intoxicación etilica aguda.	Concausas alcohol y descuido. Accidente en misión. Tas es imprudencia pero no temeridad.	I
80	3492/2005 6 junio	Despido	IMP	P	TRAB	Oficial 1ª	Accidente tráfico y acude a reunión de trabajo de fin de jornada en estado de embriaguez agresivo e insultando.	Acude a reunión ebrio después de haber bebido durante jornada laboral y en actitud agresiva.	I
81	2918/2005 18 mayo	Despido	P	IMP	EMP	Operario de rampa conductor	Estado de sueño en el trabajo por no dormir día anterior por estar de fiesta e ingerir alcohol. Se ausenta del trabajo retrasando vuelos	No hay embriaguez. Única conducta sancionable ausentarse durante tres horas del puesto de trabajo.	I
82	647/2005 3 abril	Cantidad	EP	DES	MUT UA	Maneja grúa botonera con mando distancia	Caída con alcohol 3,84g/l	No había medios de protección	I
83	3433/2005 28 marzo	Despido	P	P	TRAB	Chofer repartidor	Control de alcohololemia positivo: 0,86 y 0,64 sin carnet de manipulador renovado	Despedido por la no renovación del carnet no por alcohololemia. Aunque es superior.	I

84	5249/2004 14 marzo	Pensión orfandad EST	HIJO	Cirrosis alcohólica, muerte por cirrosis hepática. Asimilar al alta.	STS 19 nov. 1997: alcoholismo crónico	El alcoholismo crónico no le incapacita para trabajar	I
85	4617/2004 31 enero	Cantidad E	ASEG	Fallece por accidente de tráfico no laboral con tasa alcoholemia 1,66	STS 2070/2003, 13 mayo: las obligaciones convenio colectivo dimanar en contrato de seguros	Aseguradora no cubre accidentes cuando consta embriaguez.	I
2005							
86	5229/2004 28 noviembre	Prestaciones EST	HER	Accidente de tráfico con consumo de alcohol positivo, durante el tiempo de trabajo. Fallecimiento.	-	Imprudencia temeraria por parte del trabajador.	I
87	4367/2004 22 noviembre	Accidente de trabajo DEST	TRAB	Caida con alcoholismo negativo	STSJ Extremadura 2 enero 2000 (rec. 731/99): Ingesta de bebidas alcohólicas positiva	Actividad realizada no coincide con su profesión.	I
88	5042/2004 25 octubre	Prestaciones EST.P	HER	Caida y desaparición en el mar. Fallecimiento.	STSJ Galicia 11 marzo 1997	Imprudencia temeraria por beber en tiempo de descanso y salir a cubierta en tiempo de descanso.	I
89	2684/2004 15 septiembre	Prestaciones DEST	HER	Caida al mar y fallecimiento por asfixia mecánica por sumersión. Presencia de alcohol etílico en sangre y humor vítreo.	STSJ País Vasco 22 febrero 2000 (rec. 2651/1999): caída al vacío un riesgo de la profesión, al margen de la tasa de alcoholemia.	Imprudencia temeraria; rompe el nexo causal.	I
90	3205/2004 28 junio	Pensión viudedad y orfandad EST	HER	Hepatopatía crónica alcohólica.	Resolución 13/09/1983: interpretación humanizadora del alta en seguridad social	No identidad fáctica entre los supuestos. Falta cotización	I
91	1557/2004 21 julio	Sanciones P	IMP	Daños en vehículo empresa por accidente de tráfico. No acreditado consumo de alcohol.	STSJ Asturias 27 sept. 2002: cesado por despido. Pilotaba fuera de su jornada laboral.	Empresa corre con gastos/riesgo pues no queda acreditado dolo o culpa ni consumo de alcohol.	I
92	3873/2004 14 junio	Prestaciones EST	HER	Caida y fallecimiento. Alcoholemia positiva.	STSJ País Vasco 22 febrero 2000	La conducta de consumo de alcohol prohibida por la empresa no puede considerarse imprudencia profesional.	I
93	1454/2004 19 abril	Pensión viudedad DEST	HER	Interpretación flexible del requisito de estar en alta o asimilada al alta en la Seguridad Social. Angina de pecho; infarto.	STSJ Madrid 18 junio 2001 y 22 octubre 1999: alcoholismo crónico	No hay identidad de los supuestos fácticos. El alcoholismo no se equipara a infarto.	I
94	1626/2004 29 marzo	Despido IMP	P	Insultos, amenazas a compañeros y una vez en estado de embriaguez.	STSJ Madrid 17 marzo 1994: estado de embriaguez provocó escándalo con insultos y agresividad. Teoría gradualista al no haber habitualidad	Distinta antigüedad trabajadores. Agresividad no sólo el día en que estaba embriagado.	I
95	1319/2004 27 enero	Despido P	P	Ataco a un cliente que estaba molestando a otro. Uso desproporcionado de la fuerza. Aparente estado de embriaguez	En defensa de la empresa	Uso desproporcionado de la fuerza.	I
96	1366/2004 17 enero	Prestación Seg. Social DEST	EST	Pancreatitis aguda alcohólica y fallecimiento.	STS 2 y 3 febrero 2004 (rec. 4806/02 y 1525/03). STS 10 y 15 marzo 2004 (rec. 2429/03 y 3162/03)	Período de incapacidad temporal computado como asimilado al alta.	EST
97	1367/2004 11 enero	Despido P	P	Conducción alcohólica 1,33mg/l y 1,36mg/l. Evidentes síntomas de embriaguez. 25 toneladas de madera.	STSJ Castilla La Mancha 15 feb 1999: embriaguez habitual con 0,40 y 0,34	En 1999 el límite de tasa alcoholemia distinto. Riesgo para terceros.	I
2004							
98	1712/2004 22 noviembre	Prestaciones EST	MUT	Atrapado entre la puerta y el pescante del barco. Tasa de alcoholemia positiva.	STSJ Cataluña 26 marzo 2002	Imprudencia no temeraria. Se desconocen las causas del accidente.	I
99	1843/2004 18 noviembre	Invalidez EST	DEST	Reconocimiento de incapacidad permanente con síndrome de abstinencia alcohólica, con hepatopatía derivada de enolismo.	STSJ Cataluña 22 noviembre 2000 (rec. 9095/1999)	Consta ánimus laborandi.	I

100	4168/2003 23 septiembre	Invalidez DEST	-	Cirrosis hepática alcohólica.	STS 29 junio 2001	Sin identidad fáctica entre los supuestos. Inadmisión.	I
101	5743/2003 8 septiembre	Despido IMP	Conductor autobús	Control de alcoholemia positivo	STS 30 noviembre 2002	Medicamento elixifilen rompe el nexo causal	I
102	6296/2003 19 julio	Prestaciones EST	Conductor remolque	Accidente de tráfico con grado de alcohol en sangre y exceso de velocidad. Fallecimiento.	STSJ Valencia 29 febrero 2000 (rec. 3266/96); la conducta no implica riesgos.	Imprudencia temeraria por alcoholemia y exceso de velocidad.	I
103	5169/2003 30 abril	Despido P	Tendero	Presenta estado de embriaguez en el trabajo	STSJ Aragón 12 marzo 2001: embriaguez reiterada	Falta identidad fáctica entre las sentencias. No hay embriaguez habitual	I
104	1427/2003 5 febrero	Cantidad y Despido IMP	Oficial	Disminución del rendimiento en el trabajo.	STSJ Cataluña 25 enero 2001: enolismo crónico de un cuidador psiquiátrico.	No hay contradicción entre el supuesto recurrido y de contraste.	I
105	4375/2002 27 enero	Prestaciones DEST	Obrero de grúa	Accidente de tráfico y fallecimiento	STSJ Cataluña 20 febrero 2002 y STSJ Asturias 18 mayo 2001	Falta de medidas de seguridad.	I
106	1382/2003 23 enero	Despido P	Empleado del metro	Trastorno de dependencia alcohólica con repercusión en el ámbito laboral.	STSJ País Vasco 11 abril 2000	No identidad del concepto de habitualidad	I

Nº	ANTECEDENTES PROCESALES			HECHOS		RAZONAMIENTO JURÍDICO		FALLO
	Recurso	Acción jurídica		Profesión	Consumo de alcohol	Sentencia apelación	Nexo causal por contraste	
	1ª	Supl	Cas					Sentido
2014								
1	13-23.995 3 diciembre	Despido		Dessinateur projecteur	Consumo de alcohol durante conducción. Alcoholtest positivo etlometro negativo,, A mucho velocidad	Douai 15 febrero 2013	Despido por causa real y sería pero no grave	CAP
2	13-16.793 8 octubre	Despido		comercial	Viaje de empresa para compensar el trabajo Estado de embriaguez avanzado, agresividad y violencia con compañeros de trabajo	Rennes 27 febrero 2013	El viaje no pertenece a la esfera de la vida privada pues está relacionado con el trabajo y la actitud negativa hacia los compañeros es sancionable aunque sea fuera del tiempo y lugar de trabajo	CA
3	13-19.900 23 septiembre	Demission a ses torts		artesano	Ofensas del jefe hacia el trabajador. Nunca le han visto embriagado	Paris 24 abril 2013		R
4	13-113.757 2 julio	Despido		conductor	0,50 g/l alcohol test antes de conducir	Orléans 8 enero 20132	No hay falta grave pues no se cumple reglamento interior empresa de que presentará estado de embriaguez como para poner en riesgo a terceros.	R
5	12-29.458 7 mayo	Despido		vendedora	Trabajador se queja de que jefe se encuentra regularmente en estado de embriaguez por las tardes	Bastia 11 enero 2012	No existe insubordinación sino libertad de expresión por parte del trabajador	CA
6	13-10.985 7 mayo	Despido		Vendedora caja	Se presenta en estado de embriaguez en el trabajo. Con retraso. No es la primera advertencia. Errores en el trabajo con dinero.Sufre depresión.	Dijon 19 abril 2012	Falta grave	R
7	12-22.117 15 enero	Despido		Agent propete	Suspension de carnet de conducir por estado de embriaguez fuera de horas de trabajo. Indispensable conducción del vehiculo para el trabajo	Aix en Provence 4 octubre 2011	No puede usarse un problema de la vida privada para el despido como falta grave.	CA
2013								
8	12-22.132 6 noviembre	despido		Vigilante securitas	Problema de alcohol con un cliente impide desplazarle más cerca de su domicilio	Orléans 11 mayo	No es posible el traslado a un centro más cercano de su domicilio. No hay tal problemática para trabajador 130 km de distancia	R
9	12-18915 31 octubre	despido		-	Trabajadora que dice que otra es alcohólica	Amiens 7 marzo 2012	¿????	R
10	12-17.182 30 septiembre	despido		conductor	Control alcoholemia positiva. Retirada carnet. Policia constata estado de ebriedad. 0.43 Y 0.41	Limoges 20 junio 2011	El empresario debe prohibir coger camión si constata estado de embriaguez en el trabajador.	R

11	12-16.878 10 julio	despido	Inseminador artificial	Accidente de tráfico con control de alcoholemia 4,08 g/l positivo y retirada de carnet.	Besançon 3 febrero 2012	El consumo en la vida privada no motiva causa de despido salvo que muestre falta de interés en sus obligaciones contractuales.	CA
12	11-263.43 13 marzo	No renueva contrato	Mantenimiento	Suscripción carnet de conducir conducción bajo efecto de bebidas alcohólicas	Douai 18 febrero 2011	La recalificación del contrato de trabajo es decisión del empresario	R
13	11-276.52 13 febrero	despido	camarero	Dos amonestaciones por ebriedad. Médico del trabajo diagnostica depresión	Paris 6 octubre 2011	Las amonestaciones por ebriedad no constituyen harçèlement moral	R
14	11-27.566 13 febrero	—	Técnico venta	Consumo del empresario	Rouen, 4 octubre 2011	—	R
2012							
15	11-20387 19 diciembre	Despido TRAB	Conductor	Impregnación alcohólica e insuficiencia profesional por problemas personales	Reims 4 mayo 2011	Es causa de despido medida en función de las decisiones profesionales que tuviera que tomar. Insuficiencia es causa esté ligada o no al alcohol	R
16	11-22668 18 diciembre	Despido EMP	Comercial	Consumo en la empresa, conocido por el empresario. Amonestado. Tasa no superior a la penalmente sancionada. Consumo durante las pausas: dos vasos de vino.	Besançon, 7 junio 2011	Introducir bebidas alcohólicas en la cafetería no constatado estado de embriaguez, etilometro a disposición empresario Desproporción de la sanción por despido. Solo violación del reglamento. Empresario no informo bien.	R
17	11-22155 18 diciembre	Despido TRAB	Jefe del servicio educativo	Etilotest practicado dos veces positivo llevada a su domicilio, la segunda al médico que confirma su embriaguez	Douai 31 mayo 2011	Acreditado estado de embriaguez. Despido justificado. Peligro personas o bienes.	R
18	11-12884;11-12889; 11-12914 26 junio	Despido TRAB	—	Introduce alcohol en la empresa, violando reglamento interior	Metz, 20 diciembre 2010	Comportamiento constitutivo de causa real y sería para justificar el despido.	R
19	11-19914 20 junio	EMP	—	Consumo de alcohol en tiempo y lugar de trabajo en los vestuarios. En su csillero tenían vasos y vino. Etilotest positivo de dos trabajadores	Rennes, 22 abril 2011	Tolerado el consumo en fiestas en la empresa de manera habitual.	R
20	11-14500 23 mayo	Despido	Técnico comercial	Conducción vehículo de empresa en tiempo de trabajo. Suspensión contrato de trabajo por juicio. Velocidad excesiva	Angers, 25 enero 2011	Privado de su carne por consumo de alcohol, Lo penal por encima del despido, repercusión negativa por retirada de carne no por consumo....???	
21	11-11208 12 abril	Despido EMP	Conductor de trabajos	Conducción bajo efectos del alcohol. Tasa 1.67 gr. Delito penal	Bordeaux, 30 noviembre 2010	Conocimiento por parte del empresario.	R
22	11-10986 4 abril	Despido Indemnización EMP	camarero	Trabajador bebís mucho	Pau, 12 abril 2010	No hay causa real y sería	R
23	10-19496 9 febrero	Despido	Director de agencia	Consumo de alcohol durante la hora de comer. Vuelve a su puesto de trabajo con aliento con olor a alcohol. Tendencia a beber	—	Estado de embriaguez en horas de trabajo y en repetidas ocasiones. La empresa pierde clientes.	R
24	10-22909 9 febrero	Despido EMP	Obrero polivalente	Violencia y agresividad hacia lo trabajadores	Lyon 11 junio 2010	El empresario solo informa al trabajador.	R
25	11-10382 8 febrero	—	—	Control alcoholemia	—	—	R
26	10-14114 18 febrero	Ruptura del contrato	—	Trabajador se va del trabajo en estado de embriaguez por imposibilidad de poder trabajar	Grenoble, 8 junio 2009	No poder trabajar no equivale a una dimisión por parte del trabajador	CA
27	10-16832 18 enero	Despido	Conductor	Estado de embriaguez manifiesto que requiere de la intervención de otro conductor por reclamación del cliente	Aix-en- provençe septiembre 2009	Contradicciones menifestas	CA

2011							
28	10-22.713 15 diciembre	Despido	—	Introducción de bebidas alcohólicas en el centro de trabajo y consumo de alcohol.	Metz, 14 junio 2010	El empresario tiene obligación de controlar el consumo de alcohol en el lugar de trabajo	R
29	10-21.560 7 diciembre	Despido	Conductor	Comportamiento descrito por los compañeros como si estuviera en estado de embriaguez.	Paris, 8 diciembre 2009	Consumo no probado.	R
30	10-19.435 29 noviembre	Despido	Agente de control	Inaptitud física para el trabajo	Colmar, 21 abril 2010	Alcoholismo del trabajador. Considerada la discriminación por alcohólico.	CA
31	10-30.162 8 junio	Despido	Vigilante de seguridad	Estado de embriaguez en el lugar de trabajo. Control de alcoholemia por el empresario con resultado positivo	Riom, 24 noviembre 2009	Ausencia de repercusión negativa en la empresa	—
32	09-70.170 28 abril	Despido	Camarero	Comportamiento agresivo respecto de la dirección	Versalles, 28 abril 2009	La agresividad tenía por objetivo defenderse de un cliente.	CA
33	09-43.020 1 marzo	Despido	Camarero	Hurto de cierta cantidad de dinero	—	—	R
34	09-71.742 2 febrero	Despido	—	Conducción con tasa positiva en misión durante fin de semana	Paris, 8 octubre 2009	Voluntario para la misión y comunica empresa retirada de carnet.	R
35	09-43.079 18 enero	Despido	Conductor de autobús	Conduce bajo los efectos del alcohol. No informa a la empresa de la retirada de carnet	Paris, 2 julio 2009	Repercusión negativa en la empresa	CA
2010							
36	09-42.267 24 noviembre	Despido	Enfermero	Consumo cotidiano en el restaurante, acudiendo al trabajo en estado de embriaguez	Nouméa, 17 diciembre 2008	Sanción desproporcionada	CA
37	08-44.661 10 noviembre	Despido	Secretaria	Alcoholismo de la trabajadora	Versalles, 25 junio 2008	Acoso por depresión derivada de conflictos socio laborales.	CA
38	09-40.603 22 septiembre	Despido	Responsable técnico	Tendencia al consumo de alcohol de su superior gerárquico.	Bordeaux, 8 abril 2008	Despido justificado por retrasos y falta al planing de trabajo	R
39	08-45.323 5 mayo	Despido	Taxista	—	—	—	—
40	08-70.411 21 abril	Despido	Repartidor	Reparto de mercancía y consumo de alcohol	Aix-en-Provence, 20 diciembre 2007	Repercusión negativa en la empresa. El certificado médico prueba que no hay consumo de alcohol crónico.	R
2009							
41	08-44.984 16 diciembre	Despido	Enfermera	Estado de embriaguez durante el servicio de noche. Confirmado por el equipo médico y etilotest	Aix-en-Provence, 15 septiembre 2008	Responsabilidad del empresario	CA
42	08-43.466 2 diciembre	Despido	Chofer	Suspendido carnet por estar bajo los efectos del alcohol	Mans,22 mayo 2008	Falta grave ligada a su vida profesional de conductor.	R
43	08-42.493 25 noviembre	Despido	Mecánico militar	Se presume el consumo de alcohol por su comportamiento en el trabajo.	Paris, 1 abril 2008	Tratamiento con medicamentos para el dolor que rompen el nexo causal con el alcohol.	R
44	08-42.198 23 septiembre	Despido	Cocinero	Consumo de alcohol y estado de ebriedad en el lugar de trabajo. Comportamiento alcohol dependiente.	Angers, 11 marzo 2008	El empresario debe velar por el buen ambiente e higiene laboral	R
45	08-42.304 22 septiembre	Despido	Repartidor	Conducción vehículo de la empresa bajo efectos del alcohol	Toulouse, 21 marzo 2008	Falta grave ligada a su vida profesional.	CA
46	07-44.513 3 junio	Despido	Jugador de baloncesto	Consumo de alcohol durante incapacidad temporal	Nancy 30 mayo 2007	Consumo no perjudica su dolencia de lesión en la rodilla	CA
47	07-42.294 29 abril	Despido	Fontanero	Encargado de llevar trabajadores en vehículo. Accidente tráfico bajo efectos del alcohol. Homicidio	Chambery 24 abril 2007	Falta grave. Repercusión en la empresa.	CA

48	08-42.071 1 abril	Despido	Repartidor	Conducción bajo los efectos del alcohol con su vehículo personal	Montpellier, 25 abril, 2007	Falta grave ligada a su vida profesional de conductor.	R
49	07-45.511 1 abril	Despido	—	Introducción de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo sin presentar estado de ebriedad.	Metz, 13 febrero 2007	La introducción de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo no es una falta.	CA
50	08-40.159 31 marzo	Despido	Técnico prospección	Alcoholismo en el lugar y tiempo de trabajo	Paris, 6 abril 2007	Incumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo.	R
51	07-44.092 10 marzo	Despido	Jefe de equipo	Alcoholismo por parte del empresario. Ruptura abusiva del contrato.	Dijon, 28 septiembre 2006	Los reproches al superior jerárquico constituyen ejercicio de libertad de expresión	CA
52	07-44.172 27 enero	Despido	Empleado restaurante	Cocinero alcohólico que genera mal ambiente laboral.	Rennes, 4 junio 2007	Los médicos del trabajo recuerdan al empresario su responsabilidad de mejorar el ambiente laboral respecto del alcoholismo del cocinero.	CA
2008							
53	07-40.426 12 junio	Despido	Conductor	Conducción en estado de embriaguez.	Paris, 13 junio 2006	Riesgo para terceros. Transporte escolar.	R
54	06-45.212 19 marzo	Despido	Representante	Consumo de alcohol durante vacaciones y suspensión del carnet de conducir	Lyon, 31 agosto, 2006	Falta grave ligada a su vida profesional que requiere de la conducción de vehículo..	R
2006							
55	05-42.277 13 septiembre	Despido	Conductor	Acude al trabajo en estado de embriaguez.	Rennes, 8 marzo 2005	El médico del trabajo le considera apto para el desempeño de su actividad profesional. Duda subsistente sobre el consumo de alcohol.	R
56	03-47.478 22 marzo	Acoso laboral	Mecánica máquina coser	Trato degradante por su condición de alcohólica.	Douai, 30 septiembre 2003	No demostrado alcoholismo.	R
57	04-40.915 2 febrero	Despido	Conductor	Conduce camión en estado de alcoholemia	Versailles, 19 noviembre 2003	Tasa de alcoholemia no aportada	R
2005							
58	03-44.773 12 octubre	Despido	Agente control de aguas	Impregnación alcohólica y falta de capacidad para realizar los trabajos requeridos.	Colmar, 19 mayo 2003	No consta falta grave.	CA
59	03-43.082 18 mayo	—	Obrero polivalente	Introducción de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. Negativa a realizar el alcoholtest de la empresa.	Dijon, 26 septiembre 2002	Falta grave. La empresa puede realizar control de alcohol si peligrosan las personas o los bienes.	R
60	03-43.082 17 mayo	Despido	Dependiente	Consumo de alcohol en el lugar de trabajo	Lyon, 26 febrero 2003	Consumo de alcohol permitido por la empresa	R
61	03-44.338 10 mayo	Despido	Mantenimiento ascensores	Conducción bajo efectos del alcohol	Rennes, 10 abril 2003	La conducción de vehículo no está relacionada con su vida profesional	R
2004							
62	01-47.000 24 febrero	Despido	Técnico de calefacción	Control de alcoholemia positivo y legítimo por la empresa, antes de utilizar una máquina peligrosa o conducción de un vehículo.	Aux-en-Provence, 8 octubre 2001	El alcoholtest empresarial no puede realizarse al final de la jornada de trabajo.	CA
2010 jurisprudencia administrativa							
63	32.2521 2 julio	Sanción disciplinaria	Funcionario	Accidente de tráfico bajo los efectos del alcohol	—	La administración no es sujeto obligado a indemnizar a la víctima	R
2006 jurisprudencia administrativa							
64	26.8938 17 mayo	Sanción disciplinaria	Inspector	Accidente de tráfico en ejercicio de sus funciones bajo los efectos del alcohol.	—	Posibilidad de ejercitar acción de responsabilidad administrativa por falta del personal funcionario.	CA
65	27.1676 1 febrero	Despido	Agente público	Disputa bajo los efectos del alcohol en vacaciones pero con su arma	—	Expulsado por riesgo para terceros	R

4.3.5.- Resultado 12: Relación de resoluciones judiciales francesas y españolas sobre consumo de alcohol y trabajo acorde a criterios médico legales

El **resultado 12** recoge en forma de listado, las resoluciones judiciales clasificadas según los criterios médico legales identificados en los documentos jurídicos seleccionados. Las resoluciones judiciales, objeto del estudio comparativo, se han ordenado acorde a dichos aspectos médico legales y por orden cronológico en una relación que se adjunta en el anexo III (página 156). Además, los textos íntegros de las resoluciones se incorporan a este trabajo como anexo IV (página 163) con el fin de sustanciar la discusión y atender a nuestro objetivo quinto consistente en aportar la selección de documentos jurídicos obtenidos según el método diseñado y descrito en el apartado 3 (página 29).

Según este resultado, los aspectos médicos legales que se distinguen respecto de la relación entre consumo de alcohol y trabajo se agrupan en tres materias médico laborales: consumo de alcohol y despido; consumo de alcohol y acoso moral; y consumo de alcohol y prestaciones de la seguridad social. Para cada una de estas materias se distinguen a su vez 12 situaciones médico legales que enumeramos a continuación:

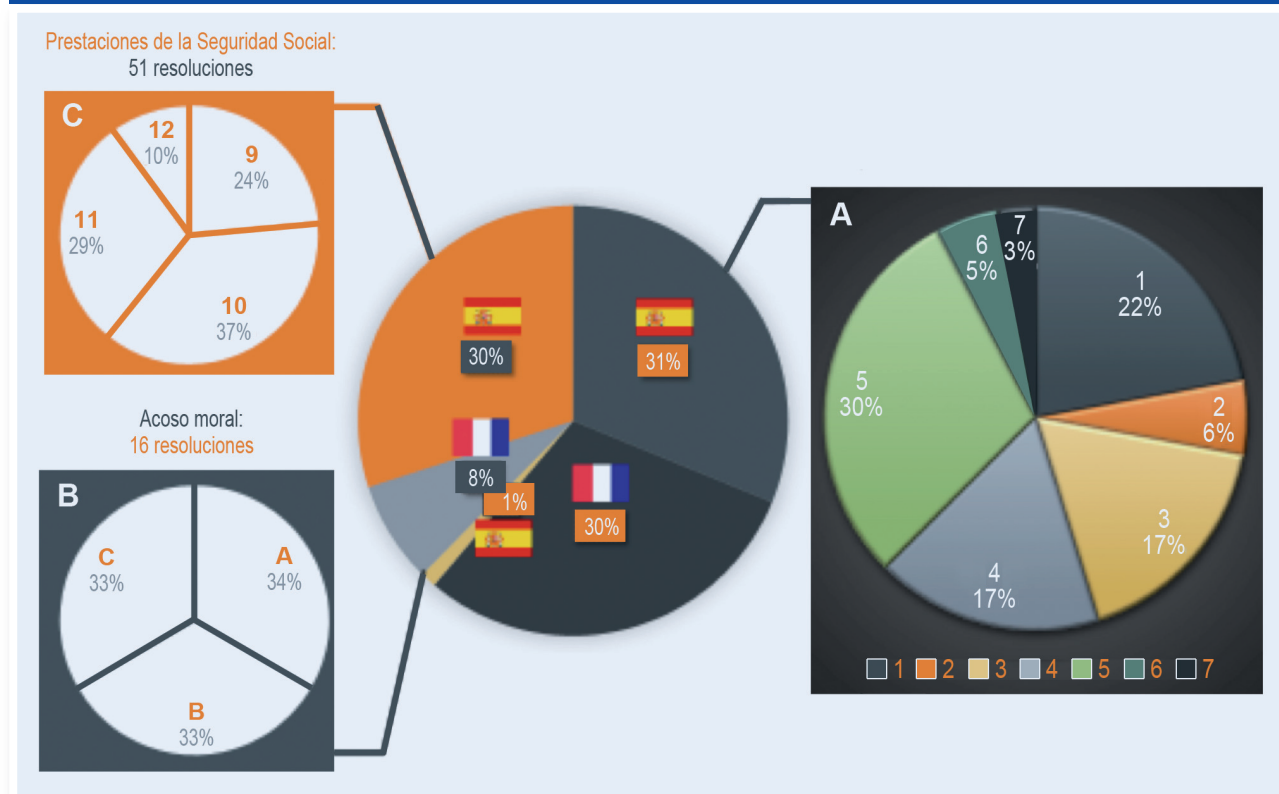
1. Consumo de alcohol en la esfera privada motiva el despido por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.
2. Consumo de alcohol durante la incapacidad temporal.
3. Conducción de vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas motiva el despido por embriaguez habitual.
4. Consumo de alcohol en la esfera profesional.
5. La embriaguez habitual en el trabajo motivo de despido disciplinario.
6. Alcohol dependencia y despido disciplinario.
7. Regulación de la embriaguez habitual en los convenios colectivos.
8. Acoso o discriminación moral y ambiente laboral motivado por el consumo de alcohol.
9. Alcohol dependencia como situación laboral de asimilada al alta en la Seguridad Social.
10. Alcohol dependencia e incapacidad.
11. Consumo de alcohol como imprudencia temeraria del trabajador.
12. Consumo de alcohol y prevención de riesgos laborales.

El gráfico 3, titulado *171 resoluciones, 3 temáticas médico laborales y 12 cuestiones médico legales* que presentamos a continuación, sintetiza los resultados numéricos obtenidos en Francia y los España al identificar los aspectos médico legales encontrados en las resoluciones judiciales.

En un sentido genérico las 12 cuestiones médico legales planteadas en las resoluciones judiciales pueden reagruparse, tal y como se visualiza en la esfera central del gráfico 3, en tres temas médico laborales² claramente diferenciados: consumo de alcohol y despido disciplinario, consumo de alcohol y discriminación moral, consumo de alcohol y prestaciones de la Seguridad Social. Así un 61% de las resoluciones refieren a la extinción del contrato laboral por despido disciplinario, de las que un 31% son resoluciones españolas y un 30% resoluciones francesas. Un 9% refieren a la discriminación moral en el ámbito laboral, siendo la mayoría de los documentos de origen francés; y un 30% de las resoluciones aluden a la relación entre consumo de alcohol y prestaciones sociales. No constando en esta última temática, según los resultados, más que documentos españoles. (Ver gráfico 3).

² Concepto que pretende aunar la esfera médica y la esfera jurídica en su materia laboral.

Gráfico 3. 171 resoluciones, 3 temáticas médico laborales y 12 cuestiones médico legales



A. Consumo de alcohol y despido disciplinario:

1. Consumo de alcohol en la esfera privada motiva el despido por trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.
2. Consumo de alcohol durante la incapacidad temporal.
3. Conducción de vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas motiva el despido disciplinario por embriaguez habitual.
4. Consumo de alcohol en la esfera profesional.
5. La embriaguez habitual motivo de despido disciplinario.
6. Alcohol dependencia y despido disciplinario.
7. Regulación de la embriaguez habitual en los convenios colectivos.

B. Consumo de alcohol y discriminación moral:

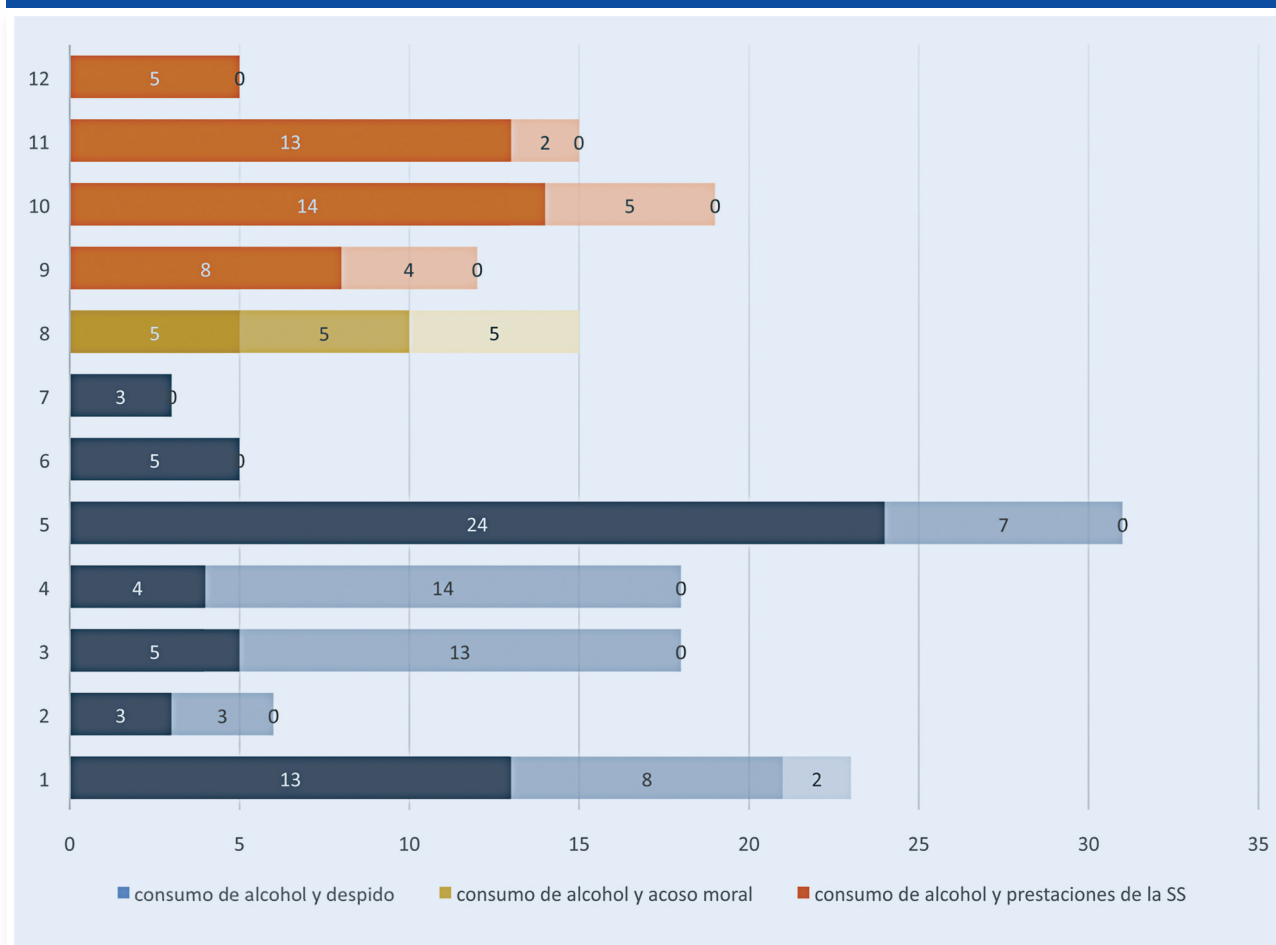
8. Acoso, discriminación moral y ambiente laboral motivado por el consumo de alcohol.

C. Consumo de alcohol y prestaciones de la Seguridad Social:

9. Alcohol dependencia como situación laboral de asimilada al alta en la Seguridad Social.
10. Alcohol dependencia y grados de incapacidad.
11. Consumo de alcohol como imprudencia temeraria del trabajador.
12. Consumo de alcohol y prevención de riesgos laborales.

En un sentido específico, los tres gráficos circulares externos matizan porcentualmente los temas médico laborales. Las cuestiones médico legales se incluyen, según el orden numérico dado anteriormente del 1 al 12, en el gráfico correspondiente al tema médico laboral al que se refieran. De manera que, para el consumo de alcohol y despido disciplinario se diferencian 7 cuestiones médico legales (de la 1 a la 7), para el consumo de alcohol y discriminación moral 3 posibles supuestos, y para el consumo de alcohol y las prestaciones sociales 4 aspectos médico legales (de la 9 a la 12). A su vez cada cuestión se divide en matices casuísticos relativos a un mismo aspecto médico legal, lo que se ilustra en el siguiente gráfico. Según el gráfico 4, cada aspecto médico legal puede contemplar hasta tres matices que modifican el establecimiento del nexo causal.

Gráfico 4. Matices en las resoluciones judiciales



Por lo expuesto y a la luz de las resoluciones judiciales analizadas, reflejo social de un país, podemos decir que el consumo de alcohol se manifiesta en el ámbito del trabajo bien con la extinción de la relación laboral mediante el despido disciplinario, bien desde la discriminación moral o bien por el reconocimiento de las prestaciones a la seguridad social. Se trata de tres áreas propias del Derecho laboral que constituirán los ejes de nuestra discusión. Ahora bien, al realizar una primera comparación entre los países podemos adelantar que respecto de la primera temática, España y Francia están bastante igualadas en porcentajes y habrá que atender a los matices casuísticos para encontrar diferencias o similitudes entre los dos perfiles de consumo. En la segunda temática Francia prevalece frente a España, constituyéndose el acoso moral respecto del alcohol como un problema más bien francés mientras que en la tercera temática, la cuestión es únicamente española.

5.1.- Consumo de alcohol y despido disciplinario • 5.1.1.- El consumo de alcohol determina los requisitos jurídicos del despido disciplinario • 5.1.1.1.- Requisitos del incumplimiento contractual: gravedad, culpabilidad y causalidad • 5.1.1.2.- Forma del despido disciplinario, calificación y efectos • 5.1.2.- El consumo de alcohol motiva el despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza • 5.1.2.1.- Definición y origen del principio de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza • 5.1.2.2.- Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de consumo de alcohol en la esfera privada y despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza: 1) Consideración médico legal 1: consumo de alcohol en la esfera privada; 2) Consideración médico legal 2: objetividad jurídica de la tasa de alcoholemia y las formas de consumo 3) Consideración médico legal 3: la causalidad jurídica dependiente del criterio médico legal • 5.1.3.- El consumo de alcohol motiva el despido disciplinario por embriaguez habitual o toxicomanía • 5.1.3.1.- La embriaguez habitual en el tiempo y lugar de trabajo con repercusión negativa en el ámbito laboral • 5.1.3.2.- Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de consumo de alcohol y despido disciplinario por embriaguez habitual: 1) Consideración médico legal 4: habitualidad en la embriaguez versus dependencia alcohólica 2) Consideración médico legal 5: consumo de alcohol en la esfera profesional 3) Consideración médico legal 6: tasa de alcoholemia versus sintomatología ética 4) Consideración médico legal 7: diagnóstico de los perfiles de consumo de alcohol • 5.2.- Consumo de alcohol y acoso moral • 5.2.1.- La perspectiva médico legal del acoso moral en el ámbito laboral • 5.2.2.- Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de acoso moral en el ámbito laboral y consumo de alcohol: 1) Consideración médico legal 8: La influencia del consumo de alcohol en el ambiente laboral 2) Consideración médico legal 9: Perfiles de consumo que originan acoso moral • 5.3.- Consumo de alcohol y prestaciones de la seguridad social • 5.3.1.- Principios del sistema de prestaciones de la seguridad social • 5.3.2.- Alcohol dependencia e incapacidad permanente • 5.3.2.1.- La prestación de incapacidad permanente • 5.3.2.2.- Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de alcohol dependencia e incapacidad permanente: 1) Consideración médico legal 10: dependencia alcohólica como situación de asimilada al alta en la seguridad social 2) Consideración médico legal 11: alcohol dependencia determina la incapacidad del trabajador o la revisión del grado de incapacidad • 5.3.3.- Consumo de alcohol y la determinación de la contingencia como accidente laboral • 5.3.3.1.- El concepto jurídico de accidente laboral y el concepto médico de daño • 5.3.3.2.- Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de consumo de alcohol y accidente de trabajo: 1) Consideración médico legal 12: tipos de alteración en la salud y la determinación del consumo de alcohol 2) Consideración médico legal 13: el consumo de alcohol imprudencia temeraria y prevención de riesgos laborales.

El Derecho del trabajo es la parte del ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno humano trabajo, integrando en un marco de conductas sociales, las relaciones laborales. El Derecho del trabajo se estructura por un lado en un sistema de normas y por otro en un sistema de relaciones jurídicas. En el primero, se articulan las normas del Estado (Constitución, leyes y reglamentos), las normas pactadas por las representaciones sindicales y patronales (convenios colectivos), las normas consuetudinarias y las normas internacionales, así como su correspondiente aplicación mediante la función doctrinal y jurisprudencial. En segundo lugar, se distinguen las relaciones laborales básicas (contrato de trabajo y relaciones en la empresa), las relaciones laborales de conflicto y las relaciones laborales de tutela estatal (protección del empleo y de la promoción social, así como Seguridad Social).¹

¹ Jesús R. Mercader Uguina, *Lecciones de Derecho del trabajo*, edición 8ª Tiran lo Blanch, 2015. Gilles Auzaro et Emmanuel Dockès, *Droit du travail*, édition Dalloz, 2015.

Como se recoge en el apartado 4 de esta tesis, en el resultado 12 (página 71), el consumo de alcohol se relaciona, de forma concreta, con tres áreas laborales: el despido a la que refieren 104 resoluciones, de las que 51 son francesas y 53 españolas; la discriminación moral con 14 resoluciones francesas y 2 españolas; y las prestaciones de la seguridad social con 51 documentos estudiados de origen únicamente español. En total 171 resoluciones judiciales referidas a tres temas laborales que representan correlativamente los distintos tipos de relaciones del trabajo enumerados anteriormente, y que consecuentemente implicarán la aplicación de los distintos sistemas normativos mencionados, según la materia y los sujetos intervinientes en la relación laboral. En torno a estos tres temas médico laborales se construye la discusión médico legal que exponemos a continuación.

5.1.- Consumo de alcohol y despido disciplinario

La relación laboral en sentido estricto está sometida a un curso vital. Se inicia con la celebración de un contrato, se prolonga con el intercambio de prestaciones entre el trabajador y el empresario pudiendo sufrir vicisitudes novatorias, suspensivas o de otro tipo hasta extinguirse. Las causas de extinción del contrato laboral pueden clasificarse en tres grupos: la extinción del contrato por cumplimiento, la extinción por desaparición, jubilación o incapacidad de los sujetos y la extinción por voluntad de las partes o por circunstancias objetivas.² En el tercer grupo cabe la extinción por mutuo acuerdo o por decisión unilateral del trabajador o del empresario³. Los 104 documentos jurídicos estudiados que relacionan el consumo de alcohol y el despido contemplan la extinción de la relación laboral respecto de este último supuesto reseñado de extinción unilateral por el empresario.

La extinción de la relación laboral por voluntad unilateral del empresario es el acto jurídico que llamamos despido, y tanto en la regulación francesa como en la española se reconocen las formas de despido por causas objetivas y de despido disciplinario⁴. En nuestras 104 resoluciones judiciales sobre despido analizadas, la categoría de despido relacionada con el alcohol es la del despido disciplinario. Por tanto, dada la cantidad de casos obtenidos, que suponen un 61,1% del estudio; se nos hace necesario delimitar los requisitos generales del despido disciplinario cuando existe consumo de alcohol (5.1.1 página 76); y los aspectos médico legales relativos a los distintos grupos de supuestos de hecho obtenidos en las resoluciones judiciales (5.1.2 y 5.1.3 páginas 79 y 87).

5.1.1.- El consumo de alcohol determina los requisitos jurídicos del despido disciplinario

El despido disciplinario se concibe, tanto en Francia como en España, como el acto jurídico unilateral por el que el empresario procede a la extinción de la relación jurídica de trabajo, amparándose en un incumplimiento del trabajador⁵. Esta última circunstancia (el incumplimiento) hace que la naturaleza jurídica del despido disciplinario haya sido abordada desde dos perspectivas diferentes: la que compara el despido a un acto resolutorio⁶ y la que lo asimila a una sanción, esta última como máxima expresión del poder disciplinario o sancionador que ostenta el empresario para con el trabajador.⁷

² En el primer grupo se contempla la extinción por expiración del tiempo, conclusión del trabajo convenido o por cumplimiento de una condición resolutoria. En el segundo grupo la extinción por muerte, jubilación o incapacidad del trabajador o empresario así como la extinción del empresario persona jurídica.

³ Carmen Algar Jiménez, *La relación laboral: una visión práctica*, Monografías Difusión Jurídica, 2009

⁴ Artículos 49 a 54 del ET, para España y artículo del Code du Travail (CT), L.1231 para Francia. En Francia, se distingue entre despido por motivos personales donde cabe diferenciar entre motivos del trabajador y motivos disciplinarios (CT L.1232); y despido económico, que puede ser individual y colectivo (CT L.1233).

⁵ Fernández Martínez, Juan Manuel coord., *Diccionario Jurídico*, Colección Derecho de la A a la Z, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2009. Guillen Raymon y Vincent, Jean, *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, Paris 2007.

⁶ Dicha interpretación se ampara en lo regulado en el artículo 1124 del CC. Alfredo Montoya Melgar, *Derecho del trabajo*, tecnos edición 13ª, 1992.

⁷ El Tribunal Supremo ha definido el despido como una sanción que consiste en la decisión empresarial amparada en la falta grave del trabajador y trascendente imputable al trabajador, que el empresario ha de estar dispuesto a probar. El proceso de reclamación judicial contra el despido es común para todo trabajador que considere su despido ilegal, al margen de que se alegue causa legal por el empresario, esta causa deberá quedar probada. Según ha afirmado el Tribunal Supremo, el despido disciplinario es la más grave de las sanciones que el empresario puede imponer al trabajador en el ejercicio de su poder disciplinario reconocido en el

5.1.1.1.- Requisitos del incumplimiento contractual: gravedad, culpabilidad y causalidad

El despido disciplinario requiere, por tanto, en primer término del incumplimiento contractual que provenga del trabajador. Dicho incumplimiento ha de caracterizarse por la nota de gravedad de un comportamiento y por un cierto grado de culpabilidad del trabajador en tanto que sujeto de la conducta⁸. Siendo el Derecho positivo español y francés, Derechos *pro operario* que defienden el carácter causal del despido, por inclinarse hacia la perspectiva que aúna los conceptos de despido y sanción, instauran principios de tipicidad y legalidad, propios del orden penal o sancionador administrativo, en el Derecho del trabajo. En consecuencia, el legislador sistematiza, en el apartado 2 del artículo 54 del ET⁹, una lista de causas legales que justifican el despido disciplinario con el fin de garantizar la seguridad jurídica y protección del trabajador. Así es como quedan relacionados los conceptos jurídicos de incumplimiento, gravedad, culpabilidad y causalidad. Pero el carácter tasado de las causas de despido disciplinario compensa la balanza del lado del empresario con la generalidad y amplitud descriptiva de algunas de esas causas, que hace difícil la exclusión de comportamientos no comprendidos en la lista normativa. ¿Es el consumo de alcohol, una conducta grave, culpable y causal? Según nuestros resultados cuando se plantean incumplimientos del trabajador ligados a un consumo de alcohol prosperan un 47% de los casos estudiados, en los que el despido se estima procedente, pero no siempre la valoración de la gravedad, culpabilidad o causalidad de la conducta se precisa a expensas del consumo de alcohol, intervienen otros factores asociados o completamente distintos.

A la luz de las resoluciones judiciales, el consumo de alcohol, como conducta del trabajador, se encuentra vinculado a los motivos legales de despido por transgresión de la buena fe y abuso de confianza en un 27,8% de las resoluciones sobre despido; y por embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo, un 72,2% de los documentos. El primer motivo se vincula al consumo de alcohol de una manera indirecta, mientras que el segundo se enfrenta al consumo de alcohol por parte del trabajador de una manera directa. Respecto de las otras causas legales reguladas como el absentismo, la desobediencia en el trabajo, las ofensas verbales o la disminución del rendimiento, conviene alegar, en nuestra opinión, que se trata de motivos que pudieran estar relacionados con la existencia de un consumo de alcohol según el perfil del consumidor, pero que no se utilizan como argumentos a la hora de probar un despido disciplinario, ya que no se han obtenido resultados en este sentido. De la misma forma, nos sorprende que no se concatenen varios de estos incumplimientos, quizá menores, para dar fuerza justificativa al despido promovido por causa del alcohol.

Por tanto, a nuestro juicio, el consumo de alcohol por parte del trabajador es una conducta grave porque puede contemplarse en las causas legalmente tasadas del artículo 54.2 del ET tanto directa como indirectamente; y es culpable porque la protagoniza el trabajador. Ahora bien, la generalidad de las causas descritas nos obliga a recurrir a los criterios judiciales de interpretación¹⁰ para una correcta aplicación¹¹ de la norma. Aplicación normativa posible mediante la mecánica de subsunción, mediante la cual la conducta de consumo de alcohol por el trabajador se integra en alguna de las causas de despido tasadas, sea la transgresión de la buena fe contractual o la embriaguez habitual. En la subsunción se ha poder revestir el caso real de gravedad, siempre que la causa alegada por el empresario pueda probarse; y la imputabilidad determinará el grado de culpabilidad contemplando bien el dolo o la negligencia del trabajador. De ello dependerá la procedencia del despido y se

artículo 58.1 del E.T; y en consecuencia, ha de ser objeto de una interpretación restrictiva para contrarrestar la amplia redacción de la norma respecto de algunas causas. Ello implica que, antes de adoptar la decisión de despido, han de valorarse los antecedentes y circunstancias concurrentes en la relación con la conducta del trabajador; para saber si dicha conducta es merecedora o no de una sanción como la de despido.

⁸ El artículo 54.1 del ET regula que “el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.”

⁹ El artículo 54.2 del ET establece que “se considerarán incumplimientos contractuales: a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo. c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos. d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.”

¹⁰ La interpretación jurídica se atiene al alcance y contenido del artículo 3.1 CC.

¹¹ La aplicación del Derecho supone la incorporación de normas jurídicas a situaciones vividas, en general conflictivas. Presenta especial relevancia en este sentido la perspectiva de la jurisprudencia, que en nuestro ordenamiento no es fuente directa, sino indirecta (artículo 1.6 CC); y que progresivamente reviste mayor eficacia jurídica sin restringirse a la doctrina del TS.

requerirá de la aplicación de criterios médico legales que ayuden a establecer el nexo causal, sea la tasa de alcoholemia, los informes con valor médico legal, el dictamen médico legal pericial o la Medicina del trabajo. (Delgado, S.; Vicente-Herrero T.; Bandrés F., Derecho Sanitario y Medicina Legal del Trabajo, volumen 1 y 2 del Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses, editorial Bosch, 2011).

5.1.1.2.- Forma del despido disciplinario, calificación y efectos

La forma del despido es importante ya que de ella puede depender la procedencia del despido. El acto de despido ha de exteriorizarse mediante una declaración de voluntad escrita cuya omisión supone la nulidad del despido. El documento que fija la decisión es la carta de despido, comunicación que hace el empresario al trabajador y en la que han de constar los hechos que motivan el despido y la fecha de efecto¹², la cual puede coincidir con la de la comunicación o ser posterior. El contenido de la carta no puede consistir en genéricas expresiones, ha de ser concreto, claro y preciso, recogiendo los hechos a los que se refiere y los días en que se cometieron¹³. Se entenderá que genera indefensión transcribir la definición jurídica de una de las causas de despido, así como no concretar el contenido de la conducta del trabajador, por no deducirse el criterio de gravedad requerido. Este requisito formal confirma que la carga de la prueba atañe al empresario, por lo que reiteramos que, en nuestra opinión, la utilización concatenada o simultánea de otros comportamientos con cabida en las otras causas legales de despido disciplinario y relacionados con el consumo de alcohol como el absentismo, la indisciplina, la agresividad u ofensas verbales o físicas, podrían consolidar el valor probatorio del consumo e incluso podrían indicar el perfil del consumidor, sobre todo en el caso de tener que demostrar una embriaguez habitual. Pero esta estrategia jurídica que planteamos no queda plasmada en las resoluciones analizadas.

La notificación del mismo al trabajador es indistinta, el despido es eficaz cuando el trabajador conoce que el empresario rechaza su prestación laboral, pudiendo también comunicarse verbalmente o mediante actos externos que expresen claramente su voluntad rescisoria. No obstante, la normativa exige la formalización escrita mediante carta de despido.

La finalidad de la formalización escrita del despido es dar a conocer al trabajador el incumplimiento contractual que se le imputa para que pueda instrumentar su defensa; delimitar la controversia judicial ya que el empresario no podrá alegar más hechos de los que aparezcan en la carta de despido¹⁴; fijar el *dies a quo* o momento a partir del cual comienza a computarse el plazo del que dispone el trabajador despedido para reclamar en caso de disconformidad con la decisión empresarial y acreditar la situación de desempleo.

Los efectos jurídicos del despido disciplinario se regulan en el artículo 53 y siguientes del ET¹⁵. La calificación puede ser de procedente, improcedente¹⁶ o nulo. El despido será procedente cuando quede acreditado el incumplimiento del trabajador alegado por el empresario en su escrito de comunicación, lo que implicará la extinción de la relación laboral. El despido será improcedente cuando no se acredite el incumplimiento alegado por el empresario o no queda probada la gravedad y culpabilidad justificativas del despido. La consecuencia de la improcedencia es la readmisión del trabajador o el abono de la indemnización. El despido nulo es aquel que adolece de defectos formales como falta de requisitos, vicios en el procedimiento, o en el fondo con despidos fraudulentos o discriminatorios. La consecuencia será en todo caso, la readmisión.

¹² El artículo 55.1 del ET "El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos. Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido. Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese. Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare, deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato." El artículo 55.2 del ET: "Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumplierse los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que sólo surtirá efectos desde su fecha, sólo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social."

¹³ La sentencia del TS de 22 de octubre de 1990 refiere al contenido de la carta de despido.

¹⁴ Artículo 105.2 de la LRJS

¹⁵ Artículo 53 del ET en sus apartados 3, 4, 5, 6 y 7 dedicados a la forma y efectos del despido disciplinario.

¹⁶ Artículo 56 del ET dedicado al despido improcedente.

En resumen, ante un consumo de alcohol por parte del trabajador y desde una perspectiva médico legal, se deriva de nuestros resultados (ver anexo III, página 156) que los conceptos jurídicos de gravedad, culpabilidad, causalidad, imputabilidad, prueba, procedencia e incluso nulidad queden ligados necesariamente a la opinión médico legal de un médico perito o de un médico del trabajo a través de un dictamen médico legal pericial o de los informes médico pertinentes. Ya que dicho juicio científico es el que podría permitir al juez establecer un nexo causal firme, atender a una gradualidad en la gravedad de la conducta o en la culpabilidad del sujeto y el que permitiría probar objetivamente los hechos relacionados con un posible consumo de alcohol.

Las causas legales utilizadas, en el ámbito laboral, para motivar un despido disciplinario relacionado con el consumo de alcohol de manera directa o indirecta son la transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, y la embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo. Lo que nos lleva a analizar los aspectos médico legales en ambas causas.

5.1.2.- El consumo de alcohol motiva el despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza

5.1.2.1.- Definición y origen del principio de transgresión de la buena fe¹⁷ y abuso de confianza

Según el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores la cuarta causa de despido disciplinario es la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. Todas las causas de despido disciplinario han sido objeto de interpretación por los Juzgados y Tribunales pero ésta es, sin duda, la causa de despido más genérica y que más pronunciamientos jurisprudenciales ha generado porque es una causa abierta que sirve de base a multitud de despidos relacionados con comportamientos o incumplimientos de los trabajadores que no tienen encaje legal en las demás causas de despido previstas en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Según la jurisprudencia¹⁸ concurre transgresión de la buena fe contractual cuando por parte del trabajador se cause una violación de los deberes de fidelidad diligencia y lealtad exigibles para el buen orden laboral y los intereses de la empresa, lo que hace referencia al incumplimiento de las obligaciones naturales. El trabajador ha de actuar con conciencia de su conducta vulneradora; sin necesidad de que de ello se derive un perjuicio para la empresa. No se exige necesariamente una culpabilidad por dolo, basta la negligencia culpable del trabajador. Un criterio de gran relevancia para el análisis médico legal y pericial.

Los supuestos de transgresión de la buena fe contractual son múltiples, siendo algunos de los considerados por la jurisprudencia los siguientes¹⁹:

- Actuaciones delictivas que producen un perjuicio económico a la empresa.
- Realizar competencia desleal, entendiéndose por tal la actividad del trabajador encaminada a realizar labores de la misma naturaleza o rama de la producción de las que está desarrollando en virtud de contrato de trabajo, sin consentimiento del empresario y siempre que se le cause a éste un perjuicio real o potencial.
- El uso abusivo de los poderes o facultades atribuidas al trabajador, como disponer, sin consentimiento de la empresa, de material de la misma o ejercer funciones ajenas al cargo que se ocupa, defraudaciones contables, las irregularidades bancarias o el desvío de clientes.

¹⁷ La buena fe entendida como principio heredado del Derecho romano, en el que el derecho es arte o ciencia de la prudencia y de lo justo, de lo bueno, de lo equitativo. El Derecho es saber juzgar.

¹⁸ El Tribunal Supremo ha tenido ocasión ininidad de ocasiones de definir este concepto jurídico indeterminado pero la que más se acerca a la realidad, es la que realizó en la Sentencia de 4 de marzo de 1991: "La buena fe en su sentido objetivo constituye un modelo de tipicidad de conducta exigible o, mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones éticas que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos, con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas con el que deben cumplirse las obligaciones, y que se traducen en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza". También STS de 24 de enero de 1990; STS de 1 de julio de 1988; STS de 26 de mayo de 1986; STS de 21 de febrero de 1983; STS de 20 de enero de 1990; STS de 24 de octubre de 1989.

¹⁹ STS de 22 de febrero de 1990; STS de 22 de marzo de 1991; STS 20 de enero de 1990; STS 16 de mayo de 1990; STS de 23 de enero de 1990; STS 19 de octubre de 1990.

- Obtener beneficios particulares de forma fraudulenta mediante apropiación de materiales, dinero o fórmulas industriales de la empresa, particularmente cuando se está obligado a su custodia, independientemente de la cuantía de su valor, mediante el uso de medios de la empresa con fines particulares, o mediante salidas del trabajo con la misma finalidad. En estos dos últimos casos las conductas del trabajador deben tener cierta entidad y desproporción para ser acreedoras del despido.²⁰
- El comportamiento negligente del trabajador, conculcando el mínimo deber de diligencia.
- La deslealtad o incumplimiento consciente y malicioso del deber de fidelidad.
- La realización de trabajos estando en situación de incapacidad temporal, siempre que la actividad desempeñada evidencie la aptitud para el trabajo o sea de tal naturaleza que impida o dilate la curación.
- Actuaciones irregulares como las coacciones o las amenazas a los compañeros que no secundan la huelga, o causar daños a las instalaciones o bienes de empresa.
- Causar daños por imprudencia.
- La falsedad en cuanto a la formación, titulación o capacidades exigidas por la empresa.
- La falsedad para obtener permisos o licencias para supuestos no previstos legalmente.

Sin embargo, no constituyen transgresión de la buena fe contractual supuestos como participar en un piquete informativo durante una huelga, llevar una vida desordenada sin repercusión en el ámbito laboral, o la apropiación liviana de determinados objetos de la empresa, pues, la sanción a imponer debe guardar proporcionalidad con la infracción cometida según una teoría gradualista; y la sanción de despido está reservada a las conductas más graves.

Por tanto, al considerar el consumo de alcohol como conducta subsumible en esta causa legal, la deberíamos definir mínimamente como grave y culpable en grado de negligencia, al no ser necesario de que se deriven de ella ni daños ni grados máximos de la culpa. De los supuestos previamente enumerados según lo dispuesto por la jurisprudencia en esta causa, podrían relacionarse con una conducta de consumo de alcohol: el comportamiento negligente del trabajador conculcando el mínimo deber de diligencia; el consumo estando en situación de incapacidad temporal, siempre que evidencie la aptitud para el trabajo o sea de tal naturaleza que impida o dilate la curación; actuaciones irregulares como las coacciones o las amenazas; causar daños a las instalaciones o bienes de empresa y causar daños por imprudencia. Ahora bien, el 27,8% de los autos clasificados en la relación de consumo de alcohol y despido por transgresión de la buena fe contractual (ver anexo III y IV), encontramos situaciones de consumo de alcohol en el ámbito de la esfera privada de los trabajadores ligados a otras conductas, bien a la conducción de vehículos en un 75% de los casos, bien al uso indebido de la condición profesional que representa un 3,4% de los casos; o consumos simultáneos con el periodo de incapacidad temporal del trabajador en un 20,6% de los casos. En resumen, el consumo de alcohol se presenta indirectamente relacionado con el trabajo, y en consecuencia el recorrido causal tendrá que relacionar un comportamiento privado de consumo con una consecuencia laboral dañina o con la generación de una desconfianza manifiesta para la empresa.

5.1.2.2.- Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de consumo de alcohol en la esfera privada y despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza

1) Consideración médico legal 1: consumo de alcohol en la esfera privada

Los supuestos de hecho que se describen en las resoluciones judiciales estudiadas y que vinculan un consumo de alcohol por parte del trabajador a un despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza; coinciden en la circunstancia de que el consumo de alcohol tiene lugar en el ámbito de la vida privada del trabajador. Es decir, que para estos casos, el consumo de alcohol no está

²⁰ En relación con el uso de medios de la empresa para fines particulares hay que hacer una matización en lo que se refiere al uso del teléfono y también del ordenador para esos fines particulares, porque respecto a este tipo de conducta los tribunales vienen señalando que no todo uso particular del teléfono o del ordenador de la empresa (internet, correo electrónico) implica un abuso de confianza. Como hemos señalado ya, debe atenderse al perjuicio económico que la actuación del trabajador cause a la empresa, así como a la gravedad de la conducta, poniéndola en relación con el rendimiento del trabajador. Francis Lefèbvre, Memento práctico social 2015, ediciones Francis Lefèbvre, 2015, páginas 378 y 379.

directamente ligado al ámbito profesional, y necesita del establecimiento de una cadena causal que los relacione, siendo el consumo de alcohol un eslabón más de dicha cadena causal.

La frontera entre la vida privada del trabajador y su vida profesional puede pretender dibujarse a partir de lo regulado en la Sección quinta del ET, dedicada al *Tiempo de trabajo*; por lo que para su delimitación debería tenerse en cuenta los conceptos laborales de jornada, horario laboral, vacaciones, fiestas, permisos²¹ e incluso de incapacidad temporal²². Los casos estudiados acotan este ámbito de vida privada del trabajador en el tiempo que sucede fuera del horario laboral para un 68,9% de las resoluciones de despido por transgresión de la buena fe²³, el que acontece en fines de semana 3,4%²⁴, vacaciones 3,4%²⁵, permisos 3,4%²⁶, o incluso el de baja por incapacidad temporal 20,6% de las resoluciones²⁷.

Al amparo del concepto médico legal de intimidad²⁸, el respeto a la privacidad del individuo amparado constitucionalmente por los derechos y libertades públicas de los ciudadanos²⁹ hace que cualquier tipo de consumo de alcohol realizado en la esfera privada no tenga repercusión jurídica alguna, por lo que resulta necesario, en estos supuestos, atender a los criterios que vinculan o confunden un consumo de alcohol en la vida privada con un consumo en el ámbito profesional (consideración médico legal 3). De lo contrario, nos enfrentaríamos a un conflicto jerárquico entre un derecho fundamental y el interés particular del empresario. (Martínez K., Medicina e intimidad: una visión desde la bioética, revista de Calidad Asistencial, volumen 06, octubre 2004).

²¹ Artículo 34 sobre la Jornada; artículo 35 sobre Horas extraordinarias; artículo 36 Trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo; artículo 37 sobre Descanso semanal, fiestas y permisos; artículo 38 sobre Vacaciones anuales del ET. En Francia, los artículos CT L.3161 a L.3134).

²² La incapacidad temporal es un concepto de las prestaciones de la seguridad social por el que el trabajador tiene derecho a prestación económica equivalente a un porcentaje sobre la base reguladora. La LGSS no define la incapacidad temporal pero en su artículo 128.1 de la LGSS contempla las situaciones de incapacidad temporal distinguiendo entre las derivadas de contingencias profesionales y las comunes. Entre los requisitos constitutivos de una situación de incapacidad temporal, la alteración de la salud que incapacita al trabajador para realizar su actividad profesional requiere del juicio médico, ya de él depende la determinación de la capacitación para el trabajo así como la compatibilidad del tratamiento con la actividad laboral. Pudiendo darse la posibilidad de una alteración de la salud que no incapacite para la actividad laboral. Otro requisito importante es la temporalidad, es decir que se espera curación o mejoría del estado de salud del trabajador; a diferencia de la incapacidad permanente que supone el carácter definitivo de las lesiones.

²³ Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Miguel Ángel Luelmo Millán, nº recurso: 1965/2013, de 9 de abril de 2014 (ROJ: ATS 4178/2004); Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117, Inédit; Cour de Cassation civile, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.878, Inédit; Auto Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso 6/2013, de 7 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 4584/2013); Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343, Inédit; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.079, Publié au bulletin; Conseil d'Etat, 2 juillet 2010, nº 322.521; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466, Publié au bulletin; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-42.071, Inédit; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 mars 2005, 03-44.388, Inédit; Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 474/2013, de 10 de septiembre de 2013 (ROJ: ATS 8970/2013); Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.208, Inédit; Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº recurso 1531/2009, de 9 de diciembre de 2009 (ROJ: ATS 17768/2009); Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.304, Inédit; Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.1987/2008, ponente Rosa María Viroles Piñol, de 10 de febrero de 2009 (TOL3.372.431); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Mariano Sampedro Corral, nº recurso: 4036/2007, de 4 de diciembre de 2008 (ROJ: ATS 13776/2008); Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso 1463/2008, de 26 de noviembre de 2008 (ROJ: ATS 14475/2008); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Autrán, nº recurso: 1557/2004, de 21 de junio de 2005 (TOL675.760); Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.742, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294, Inédit.

²⁴ Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano, nº recurso 1183/2009, de 25 de febrero de 2010 (ROJ: ATS 3267/2010).

²⁵ Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.212, Inédit.

²⁶ Conseil d'État, 1 février 2006, 271.676, Inédit.

²⁷ Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num Rec. 1400/2012, ponente: Jordi Agustí Juliá, de 18 de abril de 2013 (TOL3.879.633); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 2018/2010, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 24 de enero de 2011 (TOL2.042.700); Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513, Inédit; Auto de Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Fernando Salinas Molina, nº de recurso 123/2014, de 7 de mayo de 2014 (TOL4.417.281); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec. 3416/2011, ponente: Antonio Martín Valverde, de 28 de marzo de 2012 (TOL3.303.001); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Jurisdicción: Social, Num. Rec.: 3077/2005, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 7 de marzo de 2007 (TOL3.358.978).

²⁸ Antonio Fayos Gardó, *Los derechos a la intimidad y a la privacidad en el siglo XXI*, Dynkinson, 2015.

²⁹ Artículo 18 de la CE.

2) Consideración médico legal 2: objetividad jurídica de la tasa de alcoholemia y las formas de consumo

Para argumentar con mejor criterio esta fase de la discusión hemos elaborado las tablas 1, 2 y 3 presentadas a continuación que resumen, a partir de nuestros resultados, los casos de las resoluciones judiciales desde una perspectiva médico legal³⁰. En ellas se recogen los preceptos de análisis que permiten establecer los criterios doctrinales respecto de la vinculación o equiparación jurídico causal entre la vida privada y la profesional del trabajador en relación con los elementos médico legales que permiten determinar objetivamente el consumo de alcohol. En las tablas se han agrupado tres tipos de supuestos de hecho: consumo de alcohol en la esfera privada y su repercusión negativa en la empresa que representan un 44,9% de los casos (tabla 1), conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas con vehículo de la empresa o tarea profesional asignada con un 34,4% (tabla 2) y consumo de alcohol durante la incapacidad temporal con 20,6% (tabla 3). Se describen para cada resolución, según convenga para la determinación de la susodicha vinculación con el alcohol, la conducta, la profesión ejercida, la enfermedad padecida o el tratamiento prescrito, el consumo de alcohol determinado, la relación de causalidad establecida en la resolución y la calificación del despido.

Las tablas 1 y 2, refieren en la columna dedicada al consumo de alcohol, a la positividad o negatividad de la tasa de alcoholemia, y algunos recursos recogen el dato numérico en sangre (g/l) o aire expirado en (mg/l)³¹.

Nº Recurso	Conducta	Profesión	Cons. Alcohol	Causalidad	Despido
1965/2013	Conducción de vehículo: turismo	Conductor	Positiva	Sigue conduciendo aún con el permiso retirado	Procedente
12-22.117	Conducción de vehículo: turismo	Agente de limpieza	Positiva	No es indispensable la conducción de vehículo para el ejercicio de su actividad profesional.	Improcedente
12-16.878	Conducción de vehículo: turismo	Inseminador agrícola	Positiva 4,08g/l sangre	No es indispensable la conducción de vehículo para el ejercicio de su actividad profesional.	Improcedente
6/2013	Conducción de vehículo: turismo	Conductor	Positiva	Trabajador oculta tasa de alcoholemia pero no la retirada del permiso.	Improcedente
11-26.343	Conducción de vehículo: turismo	Chófer	Positiva	La conducción de vehículo es la actividad exclusiva de su profesión.	Procedente
09-43.079	Conducción de vehículo: turismo	Chófer de autobús	1,94g/l sangre 0,97mg/l aire	No informa a la empresa de la retirada del carnet.	Procedente
32-2521	Conducción de vehículo: turismo	Funcionario	Positiva	La falta de un funcionario en esfera privada no tiene sanción disciplinaria.	Improcedente
1183/2009	Conducción de vehículo: turismo	---	0,85 mg/l aire 0,86 mg/l aire	No hay embriaguez habitual aunque se vincule a otro episodio anterior de presentarse en el trabajo con síntomas de embriaguez.	Improcedente
08-43.466	Conducción de vehículo: turismo	Camionero	Positiva	Empresa no ha esperado a la autorización del inspector de trabajo.	Improcedente
08-42.071	Conducción de vehículo	Camionero	Positiva	Imposibilidad de ejercer su actividad profesional.	Procedente
06-45.212	Conducción de vehículo	Representante	Positiva	Imposibilidad de ejercer su actividad profesional por tener que viajar frecuentemente.	Procedente
27-1676	Hacer uso de su condición de comisario para entrar en un establecimiento	Comisario de policía	Síntomas	Uso de su condición profesional con posesión de arma de fuego.	Procedente
03-44.388	Conducción de vehículo	Técnico de ascensores	Positiva	No es indispensable la conducción de vehículo para el ejercicio de su actividad profesional.	Improcedente

REC: número de recurso de la resolución; CONS.AL.: determinación del consumo de alcohol; DESP.: calificación del despido (PROC.: procedente; IMPROC: improcedente)

³⁰ Para la realización de estas tablas se han utilizado los datos obtenidos en el resultado 11 del apartado 4 (página 59).

³¹ En la actualidad se incorporan otros matices biológicos como es el caso de la saliva. Los proyectos europeos más relevantes son ROSITA (<http://www.rosita.org>); IMMORTAL (www.immortal.or.at) y DRUID (proyecto europeo driving under influence of alcohol and drugs), cuyo informe final fue emitido por el Ministerio del Interior y la Dirección General de tráfico en julio de 2011.

Tabla 2. Supuestos estudiados de conducción bajo los efectos del alcohol en la esfera privada con vehículo de la empresa o con tarea profesional asignada

Nº Recurso	Conducta	Cons. Alcohol	Causalidad	Despido
474/2013	Conducción de vehículo de empresa	Positiva	Comunica a la empresa el accidente pero no el consumo de alcohol. Teoría gradualista.	Procedente
11-11.208	Conducción de vehículo de empresa	1,67g/l sangre	Prescrito.	Improcedente
09-71.742	Conducción de vehículo	0,45 g/l aire 0,40 g/l aire	Voluntario para la misión.	Improcedente
1531/2009	Conducción de vehículo de empresa	Positiva	Concorre consumo positivo y no autorización de uso de vehículo por la empresa.	Procedente
08-42.304	Conducción de vehículo de empresa	Positiva	Imposibilidad de ejercer su actividad principal.	Procedente
07-42.94	Conducción de vehículo	Positiva	Empresa había encomendado a un trabajador no beber para llevar al resto de trabajadores al hotel.	Procedente
1987/2008	Conducción de vehículo de empresa	Negativo	Consumo de alcohol considerado actuación culpable y negligente.	Cantidad
4036/2007	Conducción de vehículo de empresa	0,86 mg/l aire 0,83 mg/l aire	No comunicado a la empresa. No demostrado que fuera en esfera profesional.	Improcedente
1463/2008	Conducción de vehículo de empresa	73 mg/l aire 69 mg/l aire	Accidente se produjo una vez cumplimentados los servicios profesionales.	Improcedente
1557/2004	Conducción de vehículo de empresa	Negativo	No hay conducta temeraria.	Cantidad

REC: número de recurso de la resolución; CONS.AL.: determinación del consumo de alcohol; DESP.: calificación del despido (PROC.: procedente; IMPROC.: improcedente)

La tasa de alcoholemia practicada por la Guardia Civil no se concibe como una intrusión del ámbito privado, desde el momento en que concurre la acción de conducción de un vehículo. Proporciona un dato objetivo respecto de la existencia de consumo de alcohol y se reconoce como prueba jurídica suficiente para delimitar la frontera entre la calificación del despido como procedente o improcedente. En las resoluciones seleccionadas se recoge la positividad de la tasa en un 86,9% de los casos y en el 13,1% restante los documentos refieren a una sintomatología o a la negatividad de la tasa. En los casos en los que consta la positividad de la tasa, un 35% establece un dato numérico dentro de un rango que oscila entre 0,40 mg/l de aire expirado y 4,08 g/l de sangre, entendemos que cuando las resoluciones refieren la positividad de la tasa de alcoholemia apuntan a valores por encima de los estipulados en la norma³². En la resolución con recurso 1463/2008 hay un error en la tasa, porque refiere al triple de lo permitido y no se corresponde con la transcripción de la tasa, suponiendo un imposible científico. Además en la redacción se confunden alcoholemia con alcohol en aire expirado. Es ocasiones se registran dos tasas de alcohol que permiten valorar si el consumidor se encuentra en una fase de absorción ascendente, descendiente o fase de meseta.

En la tabla 1, observamos que en un 92,4% de los casos se trata de comportamientos de conducción de vehículo, a excepción de la resolución francesa con número de recurso 27-1676 que describe un comportamiento de uso indebido de la condición de cargo público por parte del trabajador, un comportamiento de deslealtad para la empresa que justifica la causa legal de transgresión por buena fe. En la tabla 2, el 100% de las conductas son de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. La conducción de vehículos en sí misma no es una conducta jurídicamente reprochable al trabajador, y menos en la esfera de su privacidad, pero cuando la conducción se realiza bajo los efectos de bebidas alcohólicas, entonces dicho comportamiento interesa al Derecho, calificándose la conducta de imprudente o negligente, pudiendo ser constitutiva de un

³² En España los límites de alcoholemia son de 0,25 mg/l de aire espirado y 0,5 g/l en sangre, menos para los profesionales y noveles que es de 0,15 mg/l y 0,3 g/l en sangre. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (Vigente hasta el 01 de Octubre de 2015). En Francia, los límites son de 0,5g/l en sangre y 0,2g/l en sangre para noveles y profesionales. Décret n° 2004-1138 du 25 octobre 2004. En Alemania, Hungría, Italia, República Checa, Rumania, Eslovaquia y Suiza la tasa para conductores noveles es de 0,0 g/l. Recordamos que como nuestro estudio abarca un periodo de 11 años hay que tener en cuenta que las tasas de alcoholemia permitidas se han ido reduciendo.

delito contra la seguridad en el tráfico con repercusión en el ámbito administrativo y penal³³. Entonces la transgresión de la buena fe se justifica en el acto delictivo y en el riesgo para terceros, prevaleciendo sobre el derecho a la intimidad en la esfera privada.

La tabla 3 elaborada sobre consumo de alcohol durante la incapacidad temporal contempla conductas de consumo: juergas, ingestión de bebida alcohólica o consumo en un bar. No refiere a tasas de alcoholemia salvo el caso francés del juzgador de baloncesto con recurso número 07-44.513 y es porque concurre la conducción de un vehículo. En este grupo de supuestos hemos añadido la columna sobre enfermedad padecida y tratamiento prescrito, ya que el establecimiento del nexo causal va a depender de la relación entre el consumo de alcohol y la enfermedad padecida o el tratamiento prescrito durante la incapacidad temporal al no constar el dato objetivo de la tasa de alcoholemia.

Nº Recurso	Conducta	Enfermedad	Cons. Alcohol	Causalidad - Tratamiento	Despido
1400/2012	Consumo de alcohol durante la IT	Ansiedad depresiva	Fotos de Facebook juergas nocturnas	Consumo de alcohol incompatible con el tratamiento.	Procedente
2018/2010	Consumo de alcohol durante la IT	Ansiedad depresiva	Ingiera cerveza	Inocuidad de la conducta de consumo aun con tratamiento con benzoacepinas.	Improcedente
07-44.513	Consumo de alcohol durante la IT	Lesión de rodilla	0,49 g/l aire	Alcoholemia no compromete su recuperación.	Improcedente
123/2014	Consumo de alcohol durante la IT	Ansiedad reactiva	Ingesta de bebidas	Consumo moderado permitido aún con alprazolam y paroxetina.	Improcedente
3416/2011	Consumo de alcohol durante la IT	Rotura de menisco	Camina de bar en bar consumiendo bebidas	El consumo no es relevante pero sí el caminar.	Procedente
3077/2005	Consumo de alcohol durante la IT	Ansiedad	Ingesta en bar entre 5 y 12 botellines de cerveza y cubalibres	Ingesta incompatible con enfermedad padecida.	Procedente

REC.: número de recurso de la resolución; ENFERM.: enfermedad padecida que justifica la incapacidad temporal; TRATAM.: tratamiento prescrito; CONS.AL.: determinación del consumo de alcohol; DESP.: calificación del despido (PROC.: procedente; IMPROC.: improcedente)

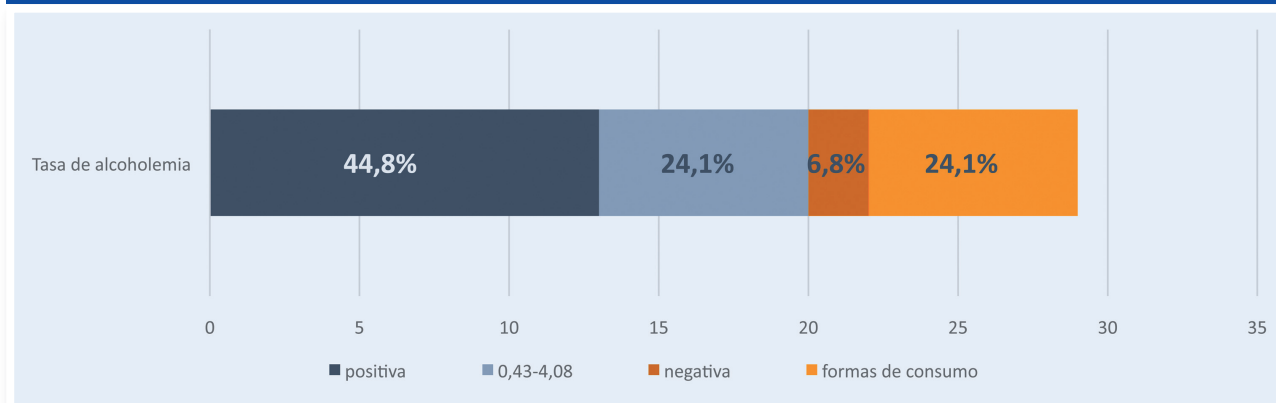
Por tanto, destacamos en estos casos de la tabla 3 tres elementos médico legales: la forma indeterminada de consumo de alcohol, la enfermedad padecida y el tratamiento prescrito al trabajador. En consecuencia el aspecto médico legal relevante en estos asuntos es que se ha de determinar la correspondencia entre un modo de consumir alcohol y la posible repercusión física que pueda entrañar teniendo en cuenta la enfermedad o tratamiento seguido por el trabajador, que justifica su incapacidad temporal. En nuestra opinión en estos casos es muy importante el dictamen pericial médico legal, ya que de él dependerá en esencia el nexo jurídico causal y en consecuencia la calificación del despido. Pero no consta en ninguna de las resoluciones analizadas, el haber acudido a una prueba médico pericial para dirimir el conflicto jurídico. Se deduce de las resoluciones que lo que consta son los informes médicos de diagnóstico, prescripción y tratamiento emitidos por el médico de atención primaria o el médico especialista.

En resumen, de las resoluciones analizadas, las pruebas médico legales que determinan el consumo de alcohol, pueden ser objetivas por presentar un dato comparable con un límite jurídico regulado: la tasa de alcoholemia; o pueden ser subjetivas por requerir la valoración de un perito médico legista que permita con su conocimiento científico establecer relaciones de causalidad, aunque de ello no hagan uso los tribunales como hemos constatado. Concluimos que tanto en Francia como en España, no hay conformidad en la determinación del consumo de alcohol, ya que pudiendo establecer las tasas de alcoholemia sin margen de error, las

³³ Las normas básicas de referencia son Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico. CP y Code de la route francés.

resoluciones se someten a una pérdida de información por reducir las tasas registradas a un simple positivo o negativo. Se hace necesario en nuestra opinión, protocolizar los informes técnicos que determinan la alcoholemia, en los que se incluya tipo de muestra, la metodología analítica, y criterios de interpretación de los resultados. A continuación resumimos esta consideración médico legal en el siguiente gráfico.³⁴

Gráfico 5. Determinación del consumo de alcohol en las resoluciones por despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual



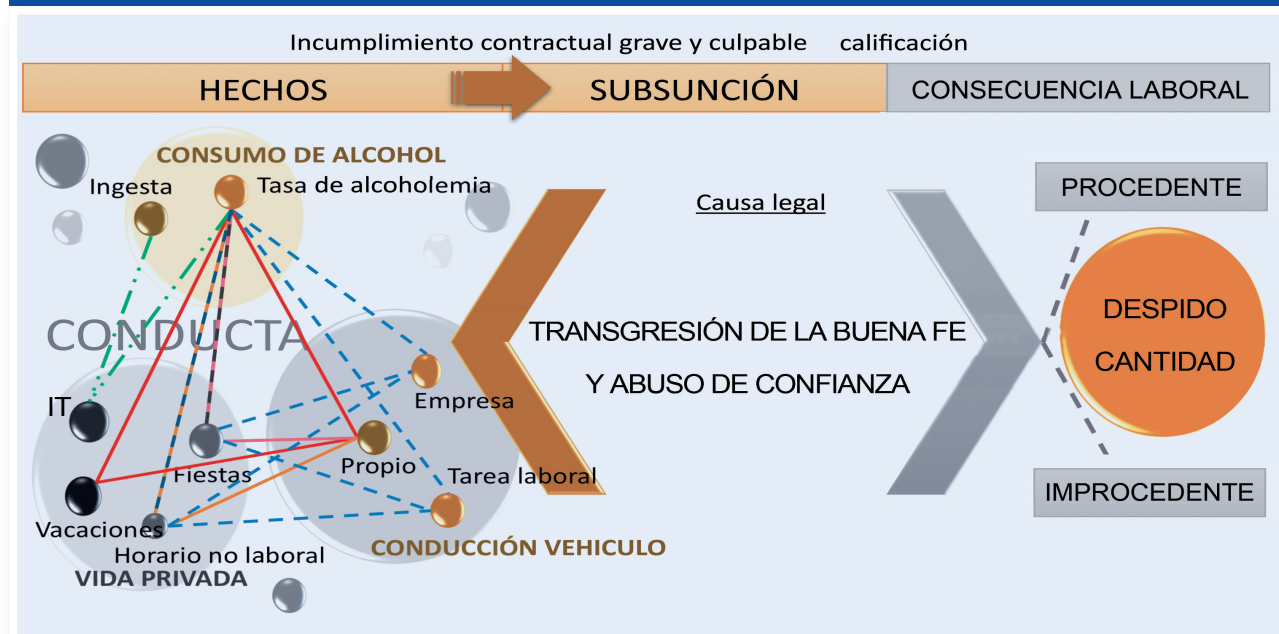
3) Consideración médico legal 3: la causalidad jurídica dependiente del criterio médico legal

Del establecimiento de una relación jurídico causal deriva la calificación del despido disciplinario. Aunque para aplicar la causa de transgresión de la buena fe no es necesario la existencia de daños; el consumo de alcohol, como conducta imprudente o negligente, se fundamenta en una causalidad laboral que reside en la expresión: “si repercute en el trabajo”; independientemente de los daños causados. Las resoluciones abordan la calificación de la conducta y del despido desde la repercusión que tiene en la empresa, así lo ilustramos en el esquema 1 de patrones de subsunción médico legales para el despido disciplinario por transgresión de la buena fe y abuso de confianza que hemos elaborado. Destacamos a este respecto que en el 41,3% de las resoluciones estudiadas sobre despido por transgresión de la buena contractual se califica la procedencia, y en el 51,72% su improcedencia.

Los tipos de repercusiones en la empresa por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, presentadas en las resoluciones, son: la retirada de carnet, la ocultación a la empresa de los hechos o la conducción sin carnet. Para establecer una causalidad, la doctrina atiende a la condición de que la conducción de un vehículo sea necesaria para el ejercicio de la actividad profesional, y en consecuencia considera la profesión y la actividad ejercida en la empresa, por el trabajador. De manera que, las resoluciones francesas establecen una presunción de improcedencia del despido disciplinario amparada en el argumento de consumo en la vida privada del trabajador, a excepción de que el comportamiento del trabajador genere bien un daño objetivable para la empresa, que haga imposible mantenerle en la empresa, o bien que la conducta suponga una falta de interés sobre sus obligaciones contractuales, o bien que atente contra la imagen de la empresa, o bien que las consecuencias de dicha conducta le impidan realizar su actividad profesional principal. Así, si la profesión y actividad están relacionadas directamente con la conducción de un vehículo, en caso de consumo de alcohol por parte del trabajador, el despido será procedente. Y cuando se use un vehículo de empresa se presumirá que la conducción de vehículo es necesaria para el ejercicio de la profesión. Para los supuestos de tarea profesional asignada el criterio doctrinal seguido refiere que la tarea ha de estar específicamente asignada por el empresario y ligada a la actividad profesional, como en el caso con número de recurso 07-42.94. Mientras que si la tarea es puntual, urgente y voluntaria como en el supuesto con recurso número 09-71.742, el despido será improcedente.

³⁴ Alhambra y Segura, *El alcohol, cuestiones jurídico médicas*, editorial Comares, 2005 y Bandrés F. y Delgado S., *Intoxicaciones originadas por el alcohol etílico, Tratado de medicina legal y ciencias forenses* capítulo 69, editorial Bosch, 2012.

Esquema 9. Patrones de subsunción médico legales para el despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza



En España, en cambio, la doctrina judicial aplica una teoría gradualista por la que se atiende a criterios subjetivos de negligencia, culpa o imprudencia del trabajador. Considera el principio inclinándose hacia el abuso de confianza, atendiendo a los comportamientos morales y sin atenerse en exceso a los datos objetivos; lo que supone una doctrina contradictoria entre las resoluciones sobre despido y cantidad, así como una falta de identidad con la doctrina francesa. En los casos con recursos números 6/2013 y 474/2013 se prioriza la intimidad al entender que no hay deslealtad por parte del trabajador, ya que informó de su retirada del carnet sin comunicar que el motivo fue un consumo de alcohol positivo, y aunque su profesión sea la de conductor, el despido es calificado de improcedente. En el ejercicio de acciones de reclamación de cantidad por los daños del vehículo de empresa, la empresa asumirá los costes de reparación siempre que no haya habido negligencia por parte del trabajador, y será comportamiento negligente el uso de vehículo de empresa en la esfera de la vida privada³⁵ con tasa de alcoholemia positiva (autos con número de recurso 1987/2008 y 1557/2004). En cambio, para los supuestos de los recursos números 1463/2008 y 4036/2007, prevalece el argumento de la esfera de la vida privada, aunque el consumo sea positivo y se haga un uso del vehículo de empresa. Una doctrina contradictoria, que convierte el argumento de riesgo para terceros, en una premisa de mayor relevancia en Francia que en España. En nuestra opinión tales contradicciones podrían justificarse en fundamentar el despido como si la causa fuera de embriaguez en vez de por transgresión de la buena fe contractual.

En los casos de consumo de alcohol durante la incapacidad temporal, la conducta repercute en el trabajo si retrasa la mejoría o impide la curación, lo que supone un retraso de la reincorporación a la actividad profesional. Preocupa entonces que, al ser las enfermedades de las resoluciones en su mayoría de carácter depresivo, el consumo de alcohol se relacione con la propia enfermedad más que con la repercusión negativa para la empresa; lo que en nuestra opinión sitúa al dictamen legal médico pericial en una posición jurídica importante. La abstención alcohólica ha de ser la consigna médica, puesto que si está permitido el consumo de alcohol moderado entonces el despido es improcedente como en el auto con recurso número 123/2014. En el caso del jugador de baloncesto con la lesión de la rodilla el consumo de alcohol no es incompatible con la mejoría, la empresa alega este motivo además de la negativa imagen que supone para la empresa. Sin

³⁵ Tener un vehículo de empresa no supone presunción de horario laboral. La empresa tendrá que demostrar el tiempo o la esfera en la que se produjo el consumo o el accidente de tráfico que evidencié el consumo. Auto con número de recurso 4036/2007.

embargo, el despido se considera improcedente, porque prima la esfera de la vida privada. En estos supuestos el juicio médico es de vital importancia para establecer el nexo causal y en consecuencia la justificación de la causa de despido, por lo que se hace necesaria la opinión médica o la existencia de un informe médico pericial en el juicio como prueba fundamental. Sorprende que no conste en las resoluciones esta práctica.

5.1.3.- El consumo de alcohol motiva el despido disciplinario por embriaguez habitual o toxicomanía

5.1.3.1.- La embriaguez habitual en el tiempo y lugar de trabajo con repercusión negativa en el ámbito laboral

Como se ha expuesto en el apartado 5.1.1, el artículo 54.2 f) del ET regula como causa legal de despido disciplinario, la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. Desde una consideración médico legal del asunto, interesa definir el estado de embriaguez³⁶ para articular el doble requisito jurídico que la norma contempla: la habitualidad y la repercusión negativa en el trabajo. A diferencia de lo planteado en el despido por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, en estos supuestos, la relación de entre consumo de alcohol y trabajo es directa, luego la causalidad entre el consumo de alcohol y la repercusión negativa en el trabajo ha de estar, en principio, claramente definida.

El consumo de alcohol que provoca embriaguez constituye una tipicidad *strictu sensu* que justifica la gravedad de la conducta en materia laboral; a diferencia de otras áreas jurídicas, como la penal, donde la embriaguez o toxicomanía pueden concebirse como atenuantes³⁷ de la culpabilidad en el delito. Los convenios colectivos regulan, desarrollan y matizan el alcance de esta causa según la profesión y el riesgo a terceros³⁸.

En Francia, el artículo del Código del trabajo R 4228-20 refiere a que la introducción de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo no está autorizada salvo el vino, la cerveza, la sidra y el alcohol Perry; y el artículo R 4228-21 prohíbe la incorporación al trabajo del trabajador ebrio así como permanecer ebrio en el trabajo. Dos normas que la doctrina francesa entiende como contradictorias, por los siguientes motivos: el artículo R 4228-21 supone una responsabilidad del empresario que se constituye en obligación de resultados, mientras que el artículo R 4228-20 impide al empresario velar por el no consumo de alcohol en el trabajo de sus trabajadores. Además si los reglamentos o convenios colectivos prohíben el consumo de alcohol de sus trabajadores, corren el riesgo de ser interpretados como ilícitos por contradecir la norma básica. En este sentido, la jurisprudencia se ha visto obligada a introducir criterios interpretativos que atiendan al riesgo, al peligro y a las situaciones del trabajo. (Muriel Bellivier, *Droit du travail dans le secteur social et médico social*, edición Dunod, 2015, páginas 36 a 43).

Las resoluciones sobre despido disciplinario y embriaguez habitual son las más abundantes del estudio, considerándose un 72,1% del total de los documentos seleccionados. La complejidad jurídica descrita se manifiesta importante por lo que hemos tenido que distinguir, mediante la elaboración de tablas, entre las distintas formas de consumo presentadas en las resoluciones: conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas que representan un 24% de las resoluciones sobre despido por embriaguez habitual; consumo de alcohol en el trabajo con un 24%; embriaguez habitual que supone un 41,3% de las resoluciones y alcohol dependencia con un 10,6%.

³⁶ La OMS define el término ebriedad (inebriety) como un estado de intoxicación. El término indica un patrón habitual de embriaguez y solía utilizarse en situaciones en las que actualmente se emplea “alcoholismo” o “dependencia del alcohol” implicando una enfermedad. Junto con ebrio (persona en estado de embriaguez), era la terminología convencional empleada a finales del siglo XIX para designar la intoxicación ética habitual; y siguió utilizándose hasta la década de los años cuarenta del pasado siglo. En Estados Unidos y Francia el concepto sigue vigente en los textos jurídicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, embriaguez crónica (chronicinebriate) o embriaguez pública (publicinebriate), que se refiere a una persona culpable del delito de estar ebrio en un lugar público.

³⁷ Artículo 20.2 CP sobre causas que eximen de la responsabilidad criminal.

³⁸ Esto se comprueba en las resoluciones estudiadas: STS de 12 de noviembre de 2013 con Rec. 62/2013; Cour de Cassation de 08 de febrero de 2012, pourvoi numero 11-10.382; Cour de Cassation de 05 de mayo de 2010 pourvoi numero 08-45.323.

5.1.3.2.- Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de consumo de alcohol y despido disciplinario por embriaguez habitual

1) Consideración médico legal 4: Habitualidad en la embriaguez versus dependencia alcohólica

La habitualidad requiere como el término indica de un hábito, lo que supone una costumbre o práctica frecuente por repetición de un acto. La doctrina judicial interpreta el criterio de habitualidad como la reiteración del estado de embriaguez cuando éste se repite en intervalos de tiempo regulares (STSJ de Madrid de 10 de abril de 2003 y STSJ de Madrid de 25 julio de 2002). No obstante, el requisito de habitualidad en la embriaguez no es necesario cuando concurre un riesgo a terceros, y esto lo comprobamos en las resoluciones que refieren supuestos de conducción de un vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas³⁹, donde el 66,6% de los despidos se estiman procedentes. Es más podríamos afirmar que en estos casos no es necesario demostrar el estado de embriaguez, basta con acreditar el consumo de alcohol. Por lo que sólo la positividad de una tasa de alcoholemia superior a los niveles legales permitidos, es motivo suficiente para calificar el despido de procedente. En estos términos, la resolución con recurso número 1376/2010 no aplica estos criterios interpretativos al declarar el despido improcedente por entender la falta de temeridad aun existiendo una tasa de alcoholemia positiva en 0,35 mg/l y 0,30 mg/l. Existe entonces doctrina española contradictoria y se reitera el criterio francés de valorar el argumento jurídico de riesgo a terceros.

En lo que respecta al concepto jurídico de reiteración demuestran las resoluciones que no se contemplan los consumos en la esfera de la vida privada para justificar una habitualidad de la embriaguez en el trabajo: Auto con recurso número 1183/2009 (tabla 1). Ni tampoco se consideran incidentes muy anteriores para acumularlos a acontecimientos recientes como el caso francés con número de recurso 11-11208 que refiere a un hecho del año 2007 para despedir al trabajador en el año 2008 (tabla 2).

Un último aspecto médico legal se refiere a la diferencia entre embriaguez habitual y alcohol dependencia. ¿Cuándo estamos ante una embriaguez habitual y cuándo ante un alcohol dependencia? ¿Cuál es la frontera entre el consumo y la enfermedad? La respuesta médica a esta pregunta es fundamental para el jurista, ya que de ella depende la calificación del despido: para los casos en que se demuestre embriaguez habitual podremos optar a que se considere el despido disciplinario procedente, mientras que para los supuestos de dependencia alcohólica observamos, que la improcedencia del despido está asegurada en estos casos⁴⁰. Por

³⁹ Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500, Inédit; Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, nº recurso: 2138/2011, de 17 de mayo de 2012 (ROJ: ATS 6494/2012); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso: 3381/2008, de 13 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 14873/2009); Conseil d'Etat, 17 mai 2006, 268.938, Publié au recueil Lebon; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-17.182, Inédit; Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº recurso: 648/2012, de 11 de octubre de 2012 (ROJ: ATS 10998/2012); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburugaga, nº recurso: 2961/2011, de 7 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4659/2012); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº recurso: 977/2011, de 31 de enero de 2012 (ROJ: ATS 1400/2012); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso: 1376/2010, de 23 de noviembre de 2010 (ROJ: ATS 15399/2010); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso: 4251/2009, de 8 de junio de 2010 (ROJ: ATS 9801/2010); Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.426, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.277, Inédit; Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso 3433/2005, de 28 de marzo de 2006 (ROJ: ATS 6414/2006); Cour de Cassation, civile, chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-40.915, Inédit; Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Autran, nº recurso: 1367/2004, de 11 de enero de 2005 (ROJ: ATS 54/2005); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº recurso: 5743/2003, de 8 de septiembre de 2004 (ROJ: ATS 9914/2004).

⁴⁰ Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Lourdes Arastey Sahun, nº recurso: 1906/2012, de 29 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 6252/2013); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº recurso: 2558/2011, de 9 de febrero de 2012 (ROJ: ATS 1718/2012); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 2885/2007, de 3 de febrero de 2009 (ROJ: ATS 2475/2009); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso: 1427/2003, de 5 de febrero de 2004 (ROJ: ATS 1272/2004); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº recurso: 1382/2003, de 23 de enero de 2004 (ROJ: ATS 704/2004).

tanto, el alcohol dependencia entendida como enfermedad no cabe en los motivos de despido por causa de embriaguez habitual.⁴¹

2) Consideración médico legal 5: Consumo de alcohol en la esfera profesional

Con el requisito de la habitualidad han de concurrir unas circunstancias de lugar y tiempo: que la embriaguez sea en el lugar y en tiempo de trabajo. Para ello se ha de valorar nuevamente la diferencia entre la esfera profesional y la vida privada, teniendo en cuenta los artículos 35 a 38 del ET ya referidos en la consideración médico legal 1 del punto 5.1.2.2. A diferencia de los casos de despido por transgresión de la buena fe contractual, ahora hay que delimitar la esfera profesional de la privada y no la privada de la profesional. En los supuestos de conducción de vehículo, se presupone que la conducción se realiza en el tiempo de trabajo y que el propio vehículo es el lugar de trabajo por depender el ejercicio de la profesión del propio vehículo: conductores, repartidores, camioneros, autobuseros, choferes. Los supuestos de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas refieren a una presunción de consumo en el lugar de trabajo y durante el tiempo de trabajo, siempre que se demuestre que la conducción del vehículo es necesaria para el ámbito profesional. La causalidad se enfocará bien atendiendo al argumento de la profesión ejercida; bien a la necesidad de uso de vehículo para cumplimiento de la actividad laboral. En definitiva, se presume la laboralidad. En Francia, el empresario tiene que probar que se hace imposible el ejercicio de la actividad profesional cuando se trata de desplazamientos profesionales si la actividad no consiste en sí misma en la conducción (Resolución con recurso número 11-14500). Resaltamos en este aspecto que el consumo de alcohol no tiene porqué realizarse en el centro de trabajo, hemos encontrado un importante variedad de casos en los que se acude ebrio al trabajo. Lo que a veces es considerado como argumento de improcedencia del despido porque el consumo no cumple con el requisito de realizarse en el lugar de trabajo; y en otras ocasiones es un detalle no valorado porque el estado de embriaguez se manifiesta en el ámbito laboral⁴² (Ciscart Beá, N. *El despido por embriaguez y toxicomanía*, editorial Bosch, 1998).

En cuanto al lugar de trabajo, es importante referir a los accidentes *in itinere*. Para los que el trayecto del domicilio al trabajo o del trabajo al domicilio es tiempo y lugar de trabajo, siempre que esté no se considere interrumpido por otros motivos. En estos casos no concurren ambos requisitos de lugar y tiempo, sólo el de lugar. Es decir que finalizado el tiempo de trabajo, aún se considera lugar y tiempo laboral el trayecto entre trabajo y domicilio o viceversa.

3) Consideración médico legal 6: Tasa de alcoholemia versus sintomatología etílica

El despido disciplinario amparado en la causa de embriaguez habitual se apoya en un criterio médico legal de tasa de alcoholemia positiva cuando estamos ante casos de conducción de vehículo para Francia y España, y trabajos arriesgados en Francia; o se apoya en una sintomatología que exterioriza el estado de embriaguez del trabajador. La tabla 4, que hemos elaborado, sintetiza los supuestos de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas en el tiempo y lugar de trabajo, recoge en la columna del consumo de alcohol, tasas de alcoholemia positivas, igual que en los casos de las tablas 1 y 2. Pero al estar en el ámbito de la esfera profesional la causa de despido alegada no es la transgresión de la buena fe contractual sino la embriaguez habitual aunque los supuestos no insistan en el requisito de la habitualidad por concurrir un riesgo para terceros importante cuando se conduce un vehículo.

La elaboración de la tabla 5, en su columna sobre el consumo de alcohol, refiere, en la mayoría de los supuestos, a criterios más subjetivos de sintomatología o estado del trabajador, lo que nos ha permitido distinguir varios tipos o formas de consumo como el consumo de alcohol sin llegar a la embriaguez: el estado de embriaguez, la presunción de embriaguez o la alcohol dependencia.

⁴¹ Informes sobre el alcohol, Informes de la Comisión Clínica, Ministerio de Sanidad y Consumo, Delegación del Gobierno para el plan nacional de Drogas, febrero, 2007.

⁴² (Niewjaer, M. *Gestion des états d'ivresse au travail*, tesis doctoral, Université de Lille, directeur de la recherche Mr. George Masclet, 2007 y Gómez-Talegón, M. T., Álvarez F.J., *Alcohol y prevención de los problemas relacionados con el consumo de alcohol en el ámbito laboral*, Med Segur Trab 2005; volumen LI número 198:65-72.

Tabla 4. Supuestos estudiados de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas en el ámbito profesional

Nº Recurso	Conducta	Profesión	Cons. Alcohol	Causalidad	Despido
13-23.995	Conducción de vehículo	Proyectista, dibujante	Etilo test defectuoso	Consumo no probado. Velocidad excesiva. No hay falta grave.	Procedente
12-17182	Conducción de camión	Camionero mercancía pesada	0,43mg/l aire 0,41mg/l aire	No demostrado que el empresario supiera del estado de embriaguez antes de coger vehículo. (prueba de tacografos)	Procedente
648/2012	Conducción de furgoneta	Conductor	0,66 mg/l 0,65 mg/l	Embriaguez no habitual pero vulneración normas tráfico y riesgo a terceros pudiendo implicar grave responsabilidad de la empresa	Procedente
11-14.500	Conducción de vehículo	Comercial	Positiva	Empresario no ha esperado decisión penal.	Improcedente
2138/2011	Conducción de vehículo	Jefe de instalaciones eléctricas	Positiva	Ocultación a la empresa. Riesgo para terceros	Procedente
2961/2011	Conducción de vehículo de servicio público	Conductor	Positiva	Riesgo para terceros	Procedente
977/2011	Conducción de autobús	Conductor	0,34mg/l 0,32mg/l	Riesgo para terceros	Procedente
1376/2010	Conducción de camión	Conductor	0,35mg/l 0,30mg/l	No constatada temeridad, ni riesgo para terceros ni habitualidad	Improcedente
4251/2009	Conducción de vehículo	Viajante	1,77mg/l 1,84mg/l	Estado de alcoholemia influye en accidente	Procedente
08-70.411	Error en la entrega de un paquete	Chófer	Síntomas	Conduce vehículo	Procedente
07-40426	Conducción de vehículo	Conductor de autobús	---	Riesgo para terceros	Procedente
05-42277		Conductor de autobús	Síntomas de estado de embriaguez	Riesgo para terceros. Duda subsiste	Improcedente
3381/2008	Conducción de vehículo	Auxiliar de servicios	Positiva	Embriaguez, Falta del convenio colectivo. Viste uniforme. La habitualidad no es necesaria en la conducción.	Procedente
26-8938	Conducción de vehículo	Funcionario. Inspector de trabajo	Positiva	Indemnización. No hay despido en jurisdicción administrativa. Mal funcionamiento de la administración.	Cantidad
3433/2005	Conducción de vehículo	Chófer repartidor	0,86mg/l 0,64g/l	Embriaguez y falta de renovación del carnet de manipulador. concausas	Procedente
04-40915	Conducción de camión	Camionero	Positiva	Tasa no conocida. No demostrado	Improcedente
1367/2004	Conducción de tractor camión	Camionero	1,33 mg/l 1,36 mg/l Síntomas de embriaguez	Riesgo para tercero es repercusión negativa para empresa	Procedente
5743/2003	Conducción de autobús	Conductor autobús escolar	Positiva	En tratamiento con Elixifilín da positivo en test alcoholemia	Improcedente

REC: número de recurso de la resolución; PROF: profesión; CONS.AL.: determinación del consumo de alcohol; DESP.: calificación del despido (PROC.: procedente; IMPROC.: improcedente).

Tabla 5. Supuestos de despido por embriaguez habitual según tipología de consumo de alcohol

Rec. Pourvoi	Conducta	Profesión	Cons. Alcohol	Causalidad	Despido
Introducción de bebidas en el lugar de trabajo					
11-12.884	Introducción de bebidas alcohólicas, organizan una fiesta	— —	— —	Comportamiento regulado en convenio colectivo	Procedente
10-22.713	Introducción y consumo de bebidas alcohólicas por fiesta	— —	Con embriaguez	Convenio no lo regula	Improcedente
3211/2008	Introducción de bebidas alcohólicas	— —	Sin embriaguez	Ya se habían hecho fiestas similares con consentimiento de los jefes	Improcedente
07-45.511	Introducción y consumo de bebidas alcohólicas	Conductor	Sin embriaguez	No probado estado de embriaguez. No media análisis por el empresario siendo conductor.	Improcedente
Consumo de alcohol sin embriaguez					
415/2013	Bebe en un bar a la espera de reanudación de trabajos. No puede reincorporarse al trabajo por estado de embriaguez	Obrero	Consumo	No consta habitualidad y no se incorpora al trabajo luego no hay riesgo a terceros.	Improcedente
1722/2012	Consumo de bebidas en hotel donde trabaja	Contable	Buscó estar embriagado	Comportamiento de insultos, acoso y agresividad.	Procedente
11-20387	Consumo	Conductor	Impregnación alcohólica	Comportamiento y aptitud profesional negativa. Empresario no le deja trabajar por insuficiencia profesional y prevención	Procedente
11-22668	Consumo de alcohol en pausas	Responsable logístico	Testifical de consumir 2 vasos de vino	No demostrado, no prohibido explícitamente el consumo.	Improcedente
1402/2012	Consumo en horario de apertura	— —	— —	Concausas hurto y disminución del trabajo.	Procedente
11-19914	Consumo en los vestuarios del trabajo	Imprenta	— —	Permitido por empresario en otras ocasiones.	Improcedente
11-10986	Consumo en trabajo	Camarero	Bebía mucho	No renovado contrato estacional.	Fin contrato
10-19.496	Consumo en hora de comer	Director de agencia	Aliento a alcohol	La empresa pierde clientes por aparente estado de embriaguez del director	Procedente
4691/2010	Consumo en hora de comer	Conductor	Rumores de consumo. Aliento a alcohol	No demostrado consumo	Improcedente
605/2009	Consumo en trabajo con compañeros	Capataz	Visto consumiendo	Despido de deslealtad. Transgresión buena fe	Procedente
08-42198	Comportamiento de alcohólico	Contable	Comportamiento	Repercusión en su trabajo y mal ambiente. Habitual	Procedente
1027/2008	Entrar en establecimientos a comprar bebidas y bares	— —	Entrar en bares	No demostrado. Padece diabetes	Improcedente
03-43.082	Consumo en lugar de trabajo y horas	Encargado tienda	Consumo	No hay imparcialidad en testimonio No hay embriaguez	Improcedente
5169/2003	Bebía vino de la nevera del trabajo	Subagente de tienda	Carta de despido	Concausas, de retrasos. No demostrada habitualidad	Improcedente

REC: número de recurso de la resolución; PROF: profesión; CONS.AL.: determinación del consumo de alcohol; DESP.: calificación del despido (PROC.: procedente; IMPROC.: improcedente)

Tabla 5. Supuestos de despido por embriaguez habitual según tipología de consumo de alcohol (cont.)

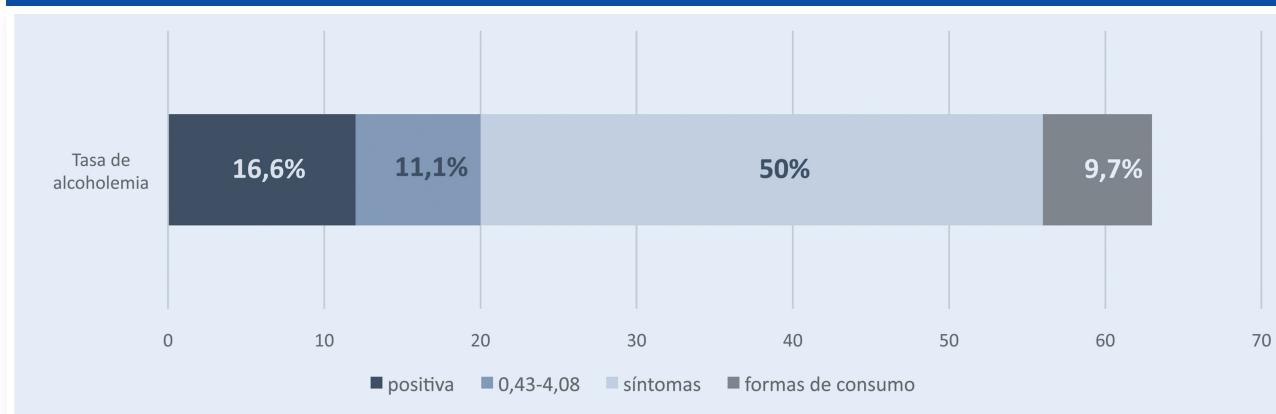
Rec. Pourvoi	Conducta	Profesión	Cons. Alcohol	Causalidad	Despido
Estado de embriaguez					
13-16.793	Fiesta en viaje de organizado por empresa	— —	Embriaguez avanzado en cena	Agresividad. Esfera profesional	Procedente
13-13.757	Presenta síntomas embriaguez	Conductor	Etilo test positivo	No justificado hacer el alcohol test	Improcedente
13-10.985	Errores en caja	Cajera	Hospitalizada Ebriedad pronunciada	Embriaguez sin riesgo por habitualidad demostrada	Procedente
420/2013	Acude embriagado	Viajante	Síntomas	No necesario habitualidad cuando hay riesgo a terceros	Procedente
11-22.155	Consumo	Jefe del servicio educativo	Test empresario positivo	Etilo test positivo del empresario. Trato a clientes. Prueba de estado de embriaguez además de test. Doctor corrobora estado de embriaguez	Procedente
1649/2012	Signo de embriaguez en trabajo con uniforme	Vigilante	Analítica 2,3 g/l	Riesgo a terceros	Procedente
10-22.909	— —	— —	Violencia verbal	Empresario debió tomar las medidas	Improcedente
10-16.832	Estado embriaguez manifiesto	Conductor carretera	Síntomas	Riesgo a terceros. Empresario no le deja trabajar	Procedente
3540/2010	Acude al trabajo ebrio y desaliñado	Jefe de sección	Síntomas	Habitualidad	Procedente
10-30.162	— —	Vigilante	Control alcoholemia positivo	Riesgo para terceros	Improcedente
3325/2010	Estado embriaguez frecuente	Ayudante de oficio	Síntomas	Amonestaciones previas demuestran habitualidad	Procedente
09-43.020	Robo	Camarero	Agresividad estado de embriaguez	Amonestaciones repetidas	Procedente
09-42.267	Consumo en un bar. Acude en estados de embriaguez	— —	Embriaguez determinada por médico	Desproporción de la sanción	Improcedente
187/2010	Acuden al lugar de trabajo fuera de horario	Obreros	Agresividad	Embriaguez en lugar de trabajo	Improcedente
2155/2009	Ingieren bebidas alcohólicas en horario laboral	Pilotos	Pelea embriaguez	Prohibida ingesta. Conducta grave y culpable	Procedente
08-44.984	Turno de noche embriagada	Enfermera	Síntomas y etilo test	Responsable empresario	Improcedente
3954/2008	Dos advertencias	Vigilante	Síntomas	Riesgo a terceros. Porta arma	Procedente
3606/2008	Se presenta en estado de embriaguez	Vigilante	Síntomas	Repercusión negativa	Procedente
08-40.159	Consumo en Dubai viaje de negocios. Acude ebrio	Técnico	Consumo	Desintoxicación	Procedente
3492/2005	Acude ebrio a reunión	Oficial 1a	Síntomas y daños en furgoneta	Agresividad. Repercusión negativa no habitualidad	Procedente
03-44.773	Incapacidad para trabajar	Agente explotación	Impregnación	No habitualidad	Improcedente
03-43.404	— —	Operador	Síntomas	Rehúsa hacerse control	Procedente
1626/2004	Enfrentamientos, desatención	Oficial 1a	Síntomas	Conducta reiterada y persistente	Procedente
01-47.000		Agente técnico calefacción	Control empresario positivo	Empresario no puede hacer test al final de la jornada de trabajo	Improcedente

Tabla 5. Supuestos de despido por embriaguez habitual según tipología de consumo de alcohol (cont.)

Rec. Pourvoi	Conducta	Profesión	Cons. Alcohol	Causalidad	Despido
Presunción de embriaguez					
10-21.560	---	Conductor	Comportamiento	---	---
716/2010	Durmiendo en coche	Oficial 2a	Estado	No demostrada	Improcedente
08-42.493	---	Técnico helicópteros	Estado Comportamiento	Medicamentos contra el dolor	Improcedente
1454/2008	Agresión a compañero en una feria	Empresario	Comportamiento	No ámbito laboral	Improcedente
3967/2005	Agresiones en vía pública	Inspector	Comportamiento, hábitos de consumo	Riesgo para terceros	Procedente
2918/2005	Juerga nocturna anterior	Operario de rampa conductor	Comportamiento. Ausencia	No embriaguez	Improcedente
1319/2004	Uso desproporcionado de la fuerza	Vigilante	Agresividad	Riesgo para terceros	Procedente
Alcohol dependencia					
1906/2012	Acude embriagado	Panelista	Síntomas	En programa de reinserción. No consta habitualidad	Improcedente
2558/2011	Bebedor habitual	---	---	No demostrada consumo en trabajo	Improcedente
2885/2007	Dependiente de cocaína y alcohol y robo	---	---	Plan de drogodependencia	¿?
1427/2003	---	Oficial	---	Repercusión negativa	Improcedente
1382/2003	Alcohol dependencia	Metro	---	---	Improcedente

El siguiente gráfico 6 que presentamos a continuación, resume la determinación del consumo de alcohol en las resoluciones estudiadas e ilustra nuestra opinión respecto de que el dictamen médico pericial permitiría reducir la doctrina judicial contradictoria al respecto del despido disciplinario por embriaguez habitual. Ya que solo un informe médico pericial permite esclarecer que existe objetivamente un estado de embriaguez y no solo un consumo de alcohol positivo.⁴³

Gráfico 6. Determinación del consumo de alcohol en las resoluciones por despido disciplinario por embriaguez habitual

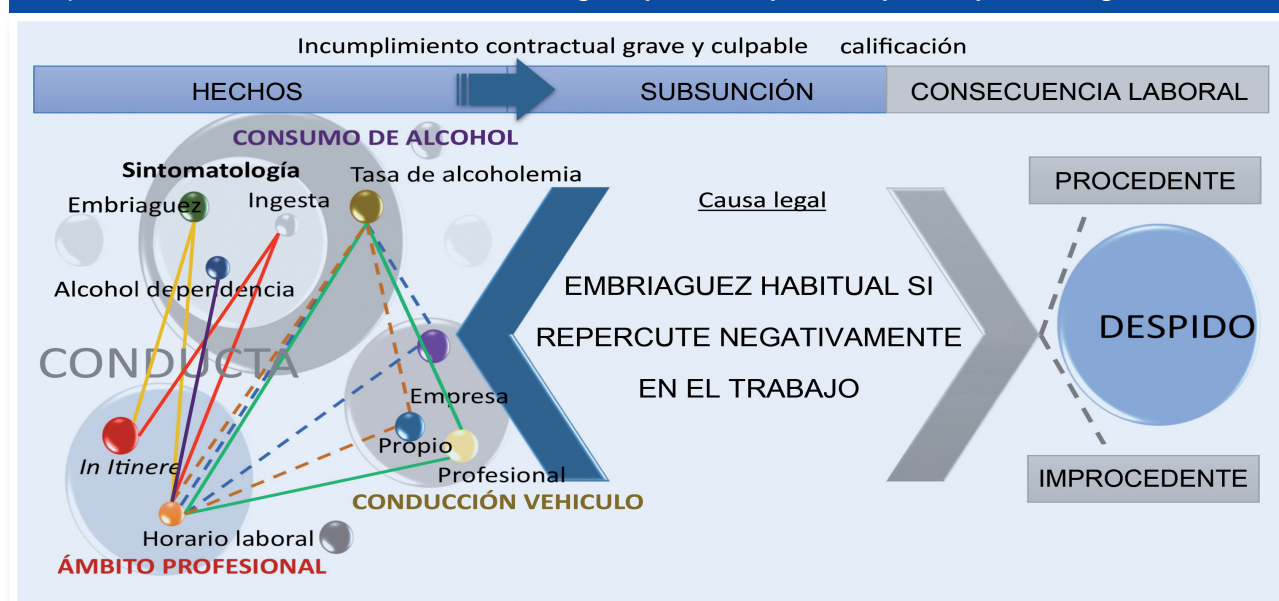


⁴³ González J.C. y Colás M., *Epidemiología de los accidentes de tráfico*, capítulo 88, Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses, director Delgado, S., editorial Bosch, 2012.

4) Consideración médico legal 7: Diagnóstico de perfiles de consumo de alcohol

Al analizar la causalidad jurídica de los supuestos recogidos en las tablas 4 y 5, la cuestión médico legal radica en la siguiente pregunta: ¿pueden identificarse los perfiles de consumo de las resoluciones con estados de embriaguez habitual? En la consideración médico legal 4, hemos destacado que la doctrina diferencia entre dependencia alcohólica y habitualidad. Ahora bien, el consumo de alcohol sin llegar a estar embriagado que representa un 25% de los casos de despido por embriaguez; o la presunción de embriaguez con un 9,3% de los casos, refieren formas de consumo difícilmente asociadas a un estado físico y por tanto situaciones más complejas de subsumir en la causa legal del despido por embriaguez habitual. A continuación el esquema 2 que hemos diseñado recoge los patrones de subsunción para el despido disciplinario por embriaguez habitual con el fin de aflorar los aspectos médico legales en los casos estudiados.⁴⁴

Esquema 10. Patrones de subsunción médico legales para el despido disciplinario por embriaguez habitual



Cuando hay tasa de alcoholemia positiva no se valora la sintomatología de la embriaguez, el dato objetivo prevalece sobre el subjetivo (resolución con recurso número 2961/2011); siempre que la tasa positiva sea cierta y no contemple ninguna causa de ruptura del nexo causal (resolución con recurso número 5743/2003) a expensas de un dictamen médico pericial. Es decir que ante una prueba de tasa de alcoholemia positiva se presume el estado de embriaguez, salvo que un dictamen médico pericial establezca lo contrario. En este mismo sentido recordamos que para los supuestos en los que se considera la existencia de riesgo a terceros no se contempla ni la habitualidad del estado de embriaguez ni la necesidad de repercusión negativa para la empresa. La puesta en riesgo de terceros es suficiente para considerar la conducta de consumo de alcohol imprudente, negligente, o temeraria. Se trata de la repercusión negativa en potencia para la empresa y al no externalizarse, convierte el Derecho en preventivo.

La conducta de introducción de bebidas alcohólicas en el centro de trabajo (tabla 5) justifica el despido por falta grave cuando la reglamentación de los convenios lo prohíbe expresamente (resolución con recurso número 11-12884), incluso si la introducción de bebidas va asociada a un consumo de alcohol es necesario

⁴⁴ La alcohol dependencia y su diagnóstico clínico se desarrolla fundamentalmente a partir de 1976 en el trabajo British Medical Journal, número 1 pp.1058-61, *Alcohol dependence provisional description of clinical syndrome*.

que se recoja en el convenio colectivo (resoluciones con recursos números 10-22713 y 10-22712). En España, si constan precedentes de introducción y consumo de bebidas alcohólicas por los empresarios, el despido es improcedente (resolución con recurso número 3211/2008). Por tanto, el desarrollo de las normas generales en los convenios colectivos es igualmente importante, aunque nos planteamos en estos casos por qué la estrategia jurídica no se enfoca mediante una causa de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.

Respecto del perfil de consumo sin embriaguez (tabla 5), se antoja difícil demostrar la existencia de un consumo. En estos casos, para probar el consumo de alcohol se acude a alegar consumos *in fraganti* en el tiempo y lugar de trabajo probados mediante testigos, o la sintomatología del trabajador: aliento a alcohol, ojos rojos y brillantes, somnolencia, o posibles comportamientos agresivos que pudieran derivar del consumo; lo que supone enfocar la causas del despido desde el criterio de repercusión negativa en el trabajo, en vez de hacerlo desde la habitualidad de una embriaguez. En consecuencia cuando no quede demostrada la embriaguez habitual, el despido se calificará de improcedente, aunque tendría cabida en la causa de transgresión de buena fe contractual, según nuestro criterio.

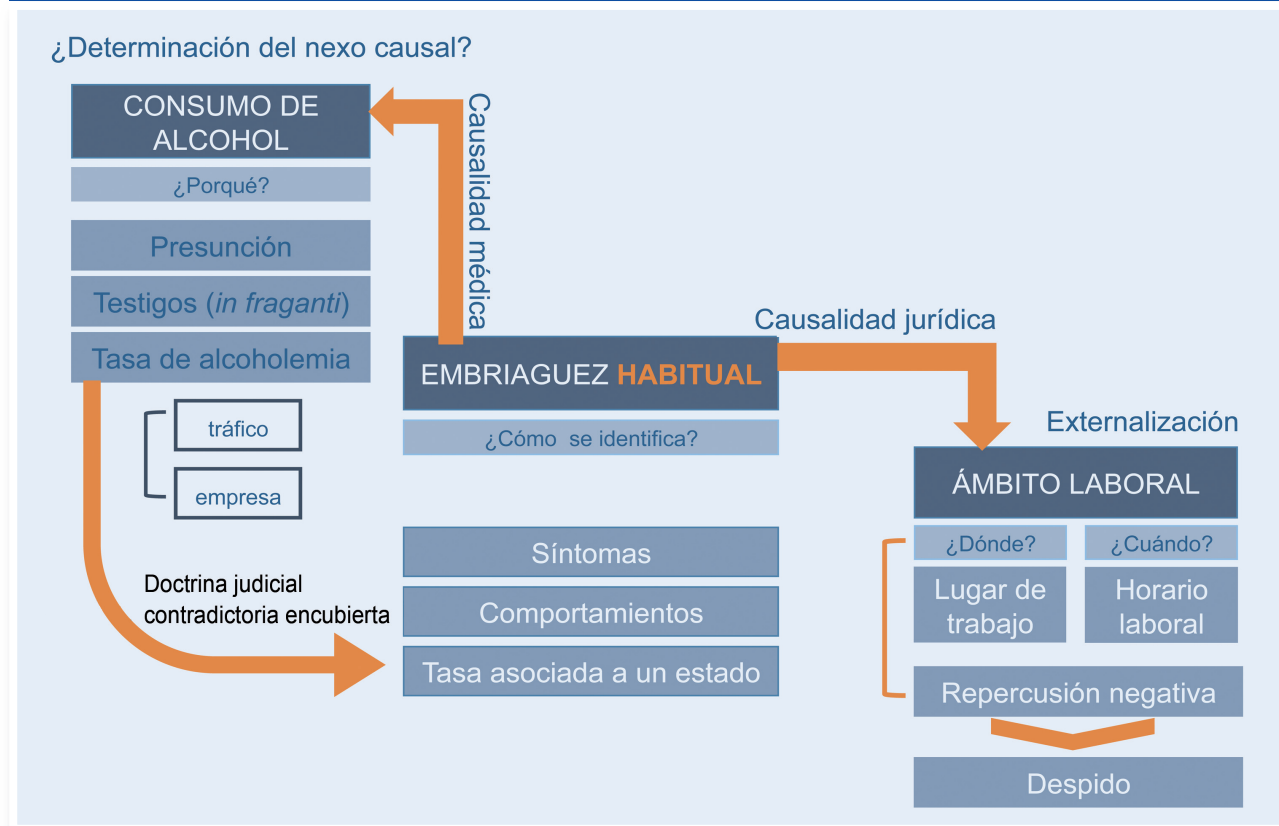
Para los supuestos clasificados en el perfil de embriaguez habitual (tabla 5), destaca una diferencia importante e interesante entre España y Francia. En España el estado de embriaguez se prueba jurídicamente mediante la sintomatología que presenta el trabajador sin acudir a un dictamen médico pericial, y la habitualidad mediante amonestaciones laborales repetidas. Lo que desde nuestro punto de vista genera una importante inseguridad jurídica tanto para el trabajador como para el empresario, ya que ni la sintomatología ni la habitualidad en el consumo, se someten a criterio médico. En cambio, en Francia, el empresario está autorizado a practicar un alcohol test al trabajador para confirmar sus sospechas de que está embriagado, y sobre todo, en caso de que la actividad profesional sugiera algún riesgo para el trabajador o para terceros (resolución con recurso número 01-47.000). Esta práctica legalizada es fruto de la alta responsabilidad exigida al empresario en caso de existir daños derivados del consumo de alcohol de un trabajador. Se hace prácticamente responsable al empresario de la imprudencia o temeridad de sus trabajadores, llegando a exigirle responsabilidad penal por no controlar el consumo de alcohol en el lugar de trabajo (arrêt 5 junio de 2007).⁴⁵ En España, dicha práctica plantearía conflictos con el concepto de intimidad, solo cuando el trabajador acude al hospital, el empresario puede acreditar objetivamente su estado de embriaguez. Igualmente en Francia, destaca el papel del médico del trabajo en la detección de supuestos de habitualidad en el consumo.

El perfil de presunción de embriaguez (tabla 5) se refiere a una cierta sospecha de estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas. La presunción del empresario no es presunción jurídica. Es decir que la carga de la prueba es del empresario y en consecuencia, si no concurre más argumento que el de la presunción basada en comportamientos atípicos como la agresividad, violencia, insultos, o desobediencia entre otros; el despido será improcedente. Insistimos en el enfoque de estos casos deberían plantearse por la causa de transgresión de la buena fe contractual porque probablemente tendrían más eco jurídico.

En resumen, las causas legales de despido disciplinario por transgresión de la buena fe y embriaguez habitual, utilizadas para supuestos de consumo de alcohol por parte del trabajador, se plantean con un enfoque más médico legal en Francia que en España. Aunque jurídicamente en Francia se exige más responsabilidad del empresario adjudicándole un rol de control de consumo de alcohol. Deducimos, por tanto, del análisis comparado de las resoluciones, que en España las estrategias jurídicas se desenfocan al utilizar inadecuadamente los criterios de consumo y asociarlos a las causas legales de despido contempladas. A continuación resumimos esquemáticamente (esquema 11) este epígrafe 5.1.2.2. (página 80).

⁴⁵ Arrêt Corona 1 febrero de 1980, Conseil d'État número 06-361. Ley francesa de 8 de diciembre de 1983, arrêt RNUR de 9 de octubre de 1987, Conseil d'État número 72-220 y artículo CT L. 122-35. Muriel Bellivier, *Droit du travail dans le secteur social et médico social*, Dunod, 2015, páginas 40 y 41.

Esquema 11. Determinación del nexo causal



5.2.- Consumo de alcohol y acoso moral

5.2.1.- La perspectiva médico legal del acoso moral en el ámbito laboral

En la relación laboral, los trabajadores tienen derecho a que se respete su intimidad y a que se considere su dignidad. Se entiende por acoso moral aquellos comportamientos hostiles, atentatorios a la dignidad de la persona. El ET se refiere en su artículo 19 a la seguridad e higiene del trabajo, pero el acoso moral encuentra su amparo normativo en el artículo 173.1 del CP y se desarrolla jurisprudencialmente.⁴⁶ En Francia, el acoso moral se traduce como un impacto sobre el estado de salud del trabajador (*arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 24 Octobre 2004 N°04-41008*) y se regula en el artículo L.1152-2 del Código del trabajo que dice: *“Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.”*⁴⁷ Se trata de una conducta ejercida de forma reiterada⁴⁸, potencialmente lesiva y no necesariamente deseada. Puede estar dirigida contra uno o más trabajadores en el lugar de trabajo o por consecuencia del mismo.⁴⁹

⁴⁶ Amparo normativo español sobre el acoso moral: artículos 10, 14, 15, 16 y 18 CE; artículos 4 y 50.1 del ET, artículo 10 de la Ley 14/86, General de Sanidad, artículos 123 y 127 de la Ley General de Seguridad Social; artículos 176 a 316 CP; artículos 1902 y 1903 CC; Ley de prevención de riesgos laborales y Ley Orgánica 14/1999, que trata sobre la protección a las víctimas de malos tratos.

⁴⁷ Traducción: *Ningún trabajador tiene que soportar comportamientos repetidos de acoso moral que tienen la finalidad o el efecto de degradar las condiciones de trabajo y es susceptible de atentar contra los derechos y la dignidad. De alterar la salud física o psíquica o comprometer el futuro profesional.* Definición estimada por la Cour de Cassation en varios casos, destacan dos sentencias del 7 julio de 2009 por la sala social números n°07-44590 et 8-40034.

⁴⁸ Cour de Cassation, chambre sociale, 4 de abril de 2006 n°04-43929 y STSJ Aragón 30 de junio de 2003.

⁴⁹ Marie-France Hirigoyen, *El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso*, Paidós Ibérica 2013. Toda la obra de esta autora se refiere al acoso moral laboral.

La obligación del empresario respecto del acoso moral es una obligación de resultado. Según el artículo L.4121-1 del CT, el empresario debe, por seguridad, evaluar y prevenir el riesgo de acoso moral (arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation le 21 Juin 2006 n°05-43914). Existe una presunción de acoso, por lo que la carga de la prueba corresponde al empresario (arrêt chambre sociale de la Cour de cassation du 30 avril 2009 n°07-45264). Por esto en Francia no es necesario que el trabajador alegue hechos de suposición de acoso, basta con presumir el acoso (arrêt Cour Cass de 7 julio de 2009 n° 07-44590). La reacción de los trabajadores frente a un abuso del empresario en este campo puede manifestarse en denuncia a la autoridad laboral o demanda en la jurisdicción social pidiendo la extinción del contrato independientemente del planteamiento que pueda realizarse en la jurisdicción penal.

El acoso moral requiere de conductas lesivas no deseadas y susceptibles de causar daño, menoscabo a la dignidad asociado a la vulneración de otros derechos, reiteración de las conductas lesivas y de hechos se produzcan en el lugar o con ocasión del trabajo. Entre las conductas que la jurisprudencia española cataloga de acoso moral se encuentran: el impedimento a la comunicación adecuada de la víctima con su entorno laboral, impedir o dificultar establecimiento de contactos sociales, desacreditar la reputación de la víctima (ridiculizar o rumorear sobre su vida privada), desacreditar la reputación profesional de la víctima, conductas que producen efectos nocivos sobre su salud física o psíquica del trabajador.⁵⁰ La jurisprudencia francesa, recoge como motivos de discriminación la sobrecarga de trabajo, los reproches repetidos, los reproches concernientes a las paradas laborales o por enfermedad, la agresividad del empresario hacia el trabajador, la supresión de funciones o de salario, la privación de hacer horas y la supresión del puesto de trabajo.⁵¹ Todas pueden estar relacionadas con el alcohol, pero, ¿cómo se manifiesta el consumo de alcohol en el acoso moral en las resoluciones? ¿Es una consecuencia o una causa del acoso? A esta cuestión se refiere el 9% de las resoluciones estudiadas. En los casos españoles destaca la resolución 5452/2005 en la que el consumo de alcohol se plantea consecuencia del ambiente sufrido por el trabajador. En Francia, destaca que el 69,2% de las resoluciones estiman el despido improcedente por considerarlo una sanción abusiva propia de un acoso moral. Cuando los despidos son procedentes es porque se refieren a acosos horizontales (entre trabajadores) y se despiden al trabajador que acosa moralmente, no al acosado.⁵²

5.2.2.- Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de acoso moral en el ámbito laboral y consumo de alcohol

1) Consideración médico legal 8: La influencia del consumo de alcohol en el ambiente laboral

¿En qué sentido puede el consumo de alcohol estar relacionado con un supuesto de acoso moral o discriminación laboral? Los casos de acoso moral laboral son, como muestran el resultado 12, más frecuentes en Francia que en España. Así, mientras que en Francia un 86,6% de los casos recurren a una argumentación de acoso moral en el ámbito laboral; en España solo un 13,3% de los supuestos refieren a una posible discriminación en el ámbito laboral vinculada al consumo de alcohol.

La tabla 6 elaborada para la discusión, que exponemos a continuación, presenta los casos sobre consumo de alcohol y acoso moral encontrados en las resoluciones judiciales analizadas. En ella se recogen los datos relativos a los comportamientos lesivos susceptibles de constituir un acoso moral, el consumo de alcohol relacionado con cada caso, la causalidad establecida entre la posible conducta lesiva y el consumo de alcohol, y finalmente el sentido del fallo.

⁵⁰ STS de 22 febrero 2005, y 28 octubre 2010.

⁵¹ Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant le 24 juin 2009 N° de pourvoi : 08-41681; arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant le 8 juillet 2009 N° de pourvoi : 08-41638; arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant le 7 juillet 2009 N° de pourvoi : 07-44590, arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant le 7 juillet 2009 N° de pourvoi : 0-40034; arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant le 24 juin 2009 N° de pourvoi : 07-45208; Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant le 24 septembre 2008 N° de pourvoi : 06-45579. Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant le 24 juin 2009 N° de pourvoi : 07-41925; Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant le 3 juin 2009 N° de pourvoi : 07-43923; Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant le 5 mai 2009 N° de pourvoi : 07-45397.

⁵² Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18915, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.172, Inédit; Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, n° Recurso: 3101/2007, de 11 de septiembre de 2008 (ROJ: ATS 8437/2008); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, n° Recurso: 5452/2005, de 25 de septiembre de 2007 (ROJ: ATS 7151/2007); Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478, Inédit.

Tabla 6. Supuestos de acoso moral y discriminación relacionados con el consumo de alcohol

Nº Recurso	Acoso moral	Cons. Alcohol	Causalidad	Fallo
13-19.900	Despido abusivo. Agresividad empresario hacia trabajador	Alcoholismo del empresario	Alcoholismo no demostrado	Desp. Procedente
12-29.458	Despido abusivo. Agresividad empresario hacia trabajador	Alcoholismo del empresario	La insubordinación de la trabajadora tenía por objeto defenderse	Desp. Improcedente
12-22.132	Despido abusivo. No se le concede movilidad geográfica	Alcoholismo del trabajador	La reclasificación del puesto no es posible por problemas anteriores con el cliente derivados de su alcoholismo	Desp. Procedente
12-18.915	Despido por agresividad verbal del trabajador	Inventa que los trabajadores son alcohólicos	Corresponde al empresario velar por el buen ambiente laboral	Desp. Procedente
11-27.652	Despido abusivo. Amonestaciones disciplinarias. Sin relación con otros trabajadores	Ebriedad del trabajador derivada de cuadro depresivo	Vulnerabilidad del trabajador por su enfermedad depresiva	Desp. Improcedente
11-27.566	Despido abusivo. Agresividad empresario hacia trabajador	Alcoholismo del empresario	Alcoholismo no negado por empresario	Desp. Improcedente
10-14.114	Ruptura anticipada de la relación contractual	Alcoholismo del trabajador	Discriminación por enfermedad de alcoholismo padecida	Desp. Improcedente
10-19.435	Despido abusivo. Empresario no reclasifica al trabajador por inaptitud física para el puesto. Sin relación con clientela	Alcoholismo del trabajador	Discriminación por alcoholismo padecido. Degradación de las condiciones laborales	Desp. Improcedente
09-70.170	Despido abusivo	Cliente en estado de ebriedad	La agresividad del trabajador tenía por objeto defenderse del cliente	Desp. Improcedente
08-44.661	Despido abusivo	Alcoholismo de trabajador por depresión	Depresión derivada de conflictos socio-profesionales	Desp. Improcedente
09-40.603	Despido abusivo. Agresividad empresario hacia trabajador	Alcoholismo del empresario	Vaguedad e imprecisión respecto de la repercusión del alcoholismo del empresario en la relación laboral	Desp. Procedente
07-44.092	Ruptura contractual abusiva	Alcoholismo del empresario no demostrado	Libertad de expresión del trabajador reconocida. Solo dirigido al empresario	Desp. Improcedente
07-44.172	Trabajador alcohólico genera mal ambiente laboral: degradación condiciones laborales e higiene deplorable	Alcoholismo de trabajador	Empresario debe garantizar buen ambiente laboral	Desp. Procedente
3101/2007	Acusaciones de embriaguez a un compañero de trabajo	Alcoholismo del acusado no demostrado	Las acusaciones no constituyen libertad de expresión	Desp. Procedente
03-47.478	Mobbing. Acusan de alcohólica	No demostrado. Síndrome depresivo	No demostrado	—
5452/2005	Mobbing. Relación con compañeros	Sentencia de contraste	Presunción de laboralidad del suicidio. El alcoholismo padecido puede eliminar dicha presunción	Prestación

REC: número de recurso de la resolución; D. PROC.: despido procedente; DIMPROC.: despido improcedente; PREST.: concesión de la prestación social

Las conductas lesivas susceptibles de ser clasificadas por el juez, como constitutivas de acoso moral en las resoluciones estudiadas, refieren en su mayoría (75% de las resoluciones estudiadas) a despidos abusivos por parte del empresario, pero sólo cuando queda demostrado el uso desproporcionado del poder sancionador del empresario, el despido aplicado al trabajador supuestamente acosado, se califica de improcedente (66,6% de las resoluciones estudiadas). Lo interesante respecto de estos supuestos es que la exteriorización de un posible acoso moral en el ámbito laboral aflora desde el ejercicio de la acción jurídica de despido bien por abuso de poder sancionador del empresario, bien porque la conducta lesiva ejercida por el trabajador provoca su consecuente despido.

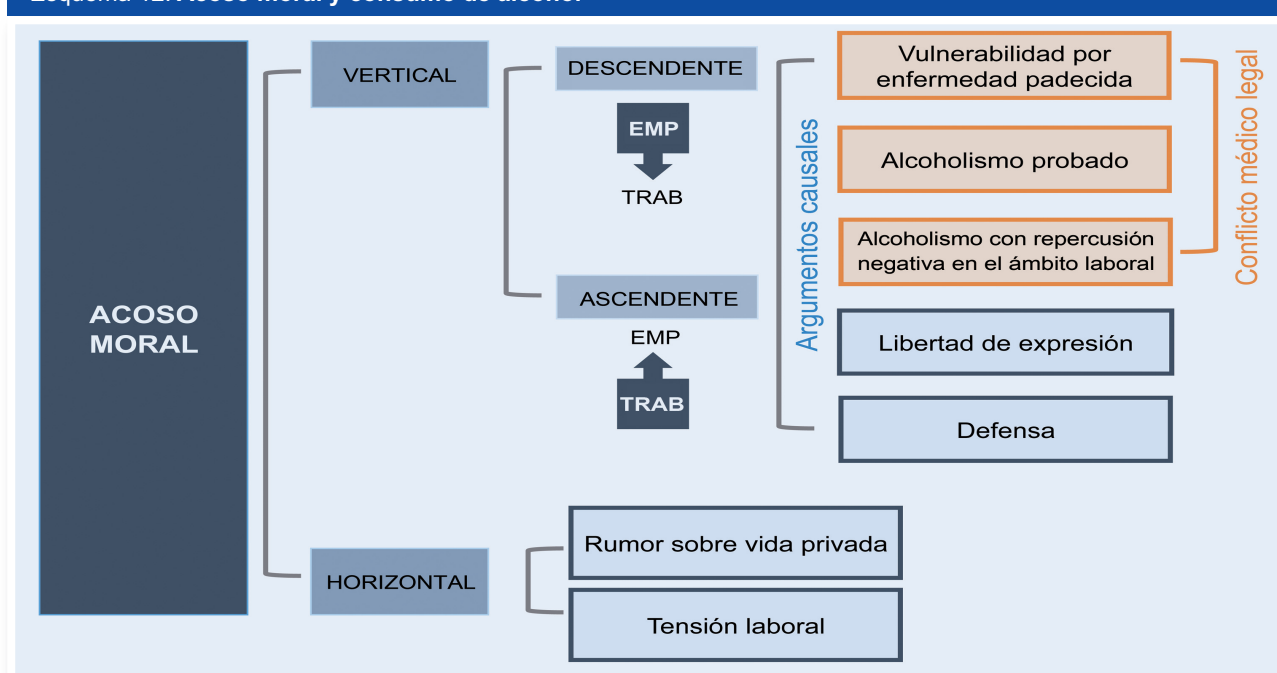
Diferenciamos según el sujeto que realiza la conducta lesiva entre acoso vertical descendente del empresario o superior jerárquico hacia el trabajador que representa un 60% de las resoluciones estudiadas; acoso vertical ascendente del trabajador al empresario o superior jerárquico con un 6,6%, y acoso horizontal entre compañeros de trabajo con un 33,3%. Las primeras conductas consisten en despidos o rupturas

contractuales abusivas⁵³, las segundas en rumores sobre la vida privada del empresario e insubordinaciones⁵⁴ y las terceras con rumores sobre la vida privada de un compañero que suponen *mobbing* o *burnout*⁵⁵. Por tanto, el consumo de alcohol influye en el ámbito laboral mediante acoso vertical de consumo por parte del empresario o por acoso horizontal debido al consumo del trabajador que genera mal ambiente laboral o invención del consumo para perjudicar a los compañeros. De ambos es responsable el empresario.

2) Consideración médico legal 9: Perfiles de consumo de alcohol que originan acoso moral

El tipo de consumo de alcohol referido en los supuestos de acoso moral es el alcoholismo o estado de embriaguez. Los sujetos consumidores son los trabajadores pero también, por primera vez vemos el reflejo social de un consumo de alcohol que proviene del empresario⁵⁶ y no del trabajador, así como el enfrentamiento de un trabajador respecto de un cliente embriagado (Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.170). Alguien ajeno a la relación laboral. El consumo de alcohol al que se refieren las resoluciones ha de estar demostrado y para ello tiene mucha relevancia en la práctica de la prueba, o bien la opinión del médico del trabajo, o bien las testificales de otros trabajadores. Pero para los casos de consumo por parte del empresario resulta complicado probar la existencia de un consumo. Ha de constar un comportamiento agresivo manifiesto. En este sentido opinamos que en la resolución con número de recurso 07-44092 existe cierta discriminación positiva a favor del trabajador entre los acosos verticales ascendientes y descendientes. A continuación, ilustramos con el esquema 12, los argumentos jurídicos causales utilizados en las resoluciones judiciales estudiadas para las situaciones de acoso moral y consumo de alcohol.

Esquema 12. Acoso moral y consumo de alcohol



⁵³ Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.900, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.458, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22132, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27652, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14114, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-19.435, Publié au bulletin; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 10 de novembre 2010, 08-44661, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.170, Inédit.

⁵⁴ Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092, Inédit.

⁵⁵ Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18915, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.172, Inédit; Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº Recurso: 3101/2007, de 11 de septiembre de 2008 (ROJ: ATS 8437/2008); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 5452/2005, de 25 de septiembre de 2007 (ROJ: ATS 7151/2007); Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478, Inédit.

⁵⁶ Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.900, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.458, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603, Inédit; Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092, Inédit.

Respecto de los argumentos causales puede deducirse que para que exista acoso moral del empresario hacia el trabajador, relacionado con el consumo de alcohol, es necesario que se vulnere la dignidad del trabajador por enfermedad padecida relacionada con el alcoholismo, lo que recuerda las argumentaciones médico legales para el despido disciplinario improcedente por razón de enfermedad (consideración médico legal 4). Igualmente si el alcoholismo proviene del empresario entonces ha de probarse una repercusión negativa en el ambiente laboral, necesariamente.

Para que exista acoso moral del trabajador hacia el empresario relacionado con el consumo de alcohol que justifique un despido es necesario que no haya conflicto entre la libertad de expresión del trabajador y el derecho a la intimidad del empresario. Por lo que los rumores sobre vida privada del empresario no atentan contra su intimidad si se manifiestan directamente a éste. En nuestra opinión en Francia se aplica una discriminación positiva.

Para que exista acoso moral de un trabajador hacia otro trabajador relacionado con el consumo de alcohol, es necesario bien que el alcoholismo del trabajador genere mal ambiente laboral, lo que justificaría su despido por parte del empresario, por cuanto es el obligado a proteger el resto de los trabajadores, así como del ambiente saludable en el trabajo. Bien que se rumoree sobre su vida privada en el ámbito laboral, lo que puede conllevar situaciones de *mobbing* o *burnout*.⁵⁷

Por tanto, de las resoluciones estudiadas, deducimos que el consumo de alcohol puede motivar la existencia de un ambiente laboral desfavorable, o puede derivarse como consecuencia del mal ambiente laboral⁵⁸, y que también sin llegar a existir consumo puede utilizarse el alcohol como insulto para degradar a un trabajador.

5.3.- Consumo de alcohol y prestaciones de la Seguridad Social

Respecto de ésta temática médico laboral solo se han obtenido 51 resoluciones españolas. La cuestión sobre consumo de alcohol y prestaciones sociales parece no haberse planteado en Francia en los últimos 11 años. Lo que refleja, en nuestra opinión, que probablemente, la posibilidad del empresario de practicar un etilo test para evitar riesgos laborales, el hecho de que su falta de observancia conlleve una responsabilidad jurídico laboral ampliamente reconocida, y la importancia que Francia otorga al rol del médico del trabajo, reducen necesariamente los accidentes laborales y orientan una gestión efectiva de incapacidades laborales.

Las 51 resoluciones españolas que contemplan relaciones laborales de tutela estatal, constituyen el 30%, de los documentos jurídicos seleccionados y estudiados. Dicho resultado comporta casos referidos a cuestiones relacionadas con el alcoholismo como situación de asimilada alta en un 23,5%⁵⁹, con el alcohol

⁵⁷ González, D. y Tejero R., El mobbing o acoso psicológico en el lugar de trabajo, capítulo 52 y 53, Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Tomo I, volumen 2, editorial Bosch, 2011.

⁵⁸ El único caso estudiados es el Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 5452/2005, de 25 de septiembre de 2007 (ROJ: ATS 7151/2007).

⁵⁹ Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 1142/2012, de 13 de septiembre de 2012 (ROJ: ATS 9299/2012); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº Recurso: 3561/2009, de 20 de julio de 2010 (ROJ: ATS 11993/2010); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 322/2005, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 25 de septiembre de 2007 (TOL1.161.703); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 1662/2005, de 20 de julio de 2006 (ROJ: ATS 14361/2006); Sentencia Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Gil Suárez, nº Recurso: 5249/2004, de 14 de marzo de 2006 (ROJ: STS 2476/2006); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3205/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 28 de junio de 2005 (TOL718.936); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 1454/2004, de 19 de abril de 2005 (ROJ: ATS 4635/2005); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1843/2004, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, de 18 de noviembre de 2004 (TOL867.322); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel García de la Serrana, nº recurso: 938/2013, de 26 de noviembre de 2013 (ROJ: ATS 12254/2013); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 2329/2012, de 28 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 5941/2013); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 1661/2012, de 22 de enero de 2013 (ROJ: ATS 1271/2013); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1366/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 17 de enero de 2005 (TOL565.133).

dependencia y la incapacidad en un 37,3%⁶⁰ y finalmente con situaciones relativas a accidentes de trabajo en un 39,2%⁶¹. Por tanto, en nuestra discusión señalaremos algunos principios de nuestro sistema de prestaciones de la Seguridad Social (5.3.1, página 101) para centrarnos medico legalmente en el alcohol y la incapacidad (5.3.2, página 103), así como en el alcohol y el accidente de trabajo (5.3.3, página 107).

5.3.1.- Principios del sistema de prestaciones de la Seguridad Social

El artículo 41 de la Constitución Española⁶² establece la obligación de los poderes públicos, los agentes e interlocutores sociales de mantener un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario. En su virtud,

⁶⁰ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Miguel Ángel Luelmo Millán, nº Recurso: 392/2013, de 6 de mayo de 2014 (ROJ: STS 3298/2014); Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Lourdes Arastey Sahún, nº Recurso: 2822/2013, de 22 de abril de 2014 (TOL796.324); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº Recurso: 1768/2013, de 5 de diciembre de 2013 (ROJ: ATS 12658/2013); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1728/2011, ponente: José Luis Gil Olmo López, de 7 de diciembre de 2011 (TOL3.331.523); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1166/2011, ponente: Jesús Souto Prieto, de 20 de septiembre de 2011 (TOL3.393.402); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1179/2010, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, de 29 de marzo de 2011 (TOL3.351.008); Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº recurso: 2946/2010, de 24 de febrero de 2011 (ROJ: ATS 3494/2011); Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 1805/2007, de 16 de julio de 2009 (ROJ: ATS 11930/2009); Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 3929/2007, de 17 de julio de 2008 (ROJ: ATS 7437/2008); Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 3799/2007, de 19 de junio de 2008 (ROJ: ATS 7274/2008); Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 274/2007, de 27 de septiembre de 2007 (ROJ: ATS 14747/2007); Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Gil Suárez, nº Recurso: 3745/2006, de 18 de julio de 2007 (ROJ: ATS 12320/2007); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4970/2006, Ponente: Rosa María Viroles Piñol, de 10 de julio de 2007 (TOL3.321.125); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4168/2003, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, de 23 de septiembre de 2004 (TOL515.504); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3711/2011, ponente: Jordi Agustí Juliá, de 4 de diciembre de 2012 (TOL3.059.581); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 3317/2011, de 11 de abril de 2012 (ROJ: ATS 4642/2012); Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Fernando de Castro Fernández, nº Recurso: 1985/2011, de 20 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4835/2012); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 3034/2006, de 24 de abril de 2007 (ROJ: ATS 8267/2007); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1731/2006, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 20 de marzo de 2007 (TOL3.310.588).

⁶¹ Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 2473/2012, de 5 de febrero de 2013 (ROJ: ATS 1756/2013); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº Recurso: 166/2009, de 29 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 15775/2009); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 430/2009, ponente: Jesús Souto Prieto, de 17 de septiembre de 2009 (TOL3.374.264); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Joaquín Samper Juan, nº Recurso: 4288/2007, de 8 de julio de 2008 (ROJ: ATS 7304/2008); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 1208/2006, de 26 de abril de 2007 (ROJ: ATS 8483/2007); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº Recurso: 3905/2005, de 18 de julio de 2006 (ROJ: ATS 12611/2006); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 5229/2004, ponente: José María Botana López, de 28 de noviembre de 2005 (TOL796.324); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4367/2004, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, de 22 de noviembre de 2005 (TOL781.766); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 5042/2004, de 25 de octubre de 2005 (ROJ: ATS 12845/2005); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 2684/2004, de 15 de septiembre de 2005 (ROJ: ATS 10821/2005); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 3873/2004, de 14 de junio de 2005 (ROJ: ATS 7419/2005); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1712/2004, ponente: Antonio Martín Valverde, de 22 de noviembre de 2004 (TOL550.710); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 6296/2003, de 19 de julio de 2004 (ROJ: ATS 9365/2004); Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, nº recurso: 717/2012, de 3 de octubre de 2013 (ROJ: ATS 704/2004); Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 4617/2004, de 31 de enero de 2006 (ROJ: STS 550/20106); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 2934/2011, de 27 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 5135/2012); Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº Recurso: 2601/2010, de 11 de abril de 2011 (ROJ: STS 2280/2011); Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº Recurso: 5435/2004, de 23 de enero de 2007 (ROJ: STS 890/2007); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José María Botana López, nº Recurso: 647/2005, de 3 de abril de 2006 (ROJ: ATS 3542/2006); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Bonete Desdentado, nº Recurso: 4375/2002, de 27 de enero de 2004 (ROJ: ATS 884/2004).

⁶² El segundo precepto de interés es el artículo 149.1.17 CE que incluye la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social entre las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. A la luz del tercer precepto contemplado, que es el artículo 129.1 CE, esa legislación que corresponde al Estado debe establecer las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social. Una cuarta y última referencia a la Seguridad Social se contiene en el artículo 25.2 CE cuando, al referirse a los derechos del condenado a pena de prisión, declara que “en todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social”. Pero la contemplación de las líneas maestras de la Seguridad Social trazadas por la Constitución no se reduce a los cuatro artículos aludidos, en que tal expresión se utiliza. Hay que mencionar también otros artículos: la protección económica de la familia (artículo 39 CE); la protección de la salud (artículo 43 CE); el tratamiento y rehabilitación de los disminuidos físicos (artículo 49 CE) y la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (artículo 50 CE). Aspectos todos ellos considerados internacionalmente como vertientes de la Seguridad Social.

el Estado se compromete a establecer un sistema de protección público y a articular los recursos económicos para hacer suficiente la protección social; si bien la Constitución establece que el nivel complementario de la protección será libre, luego podrá tener carácter privado.

El modelo de Seguridad Social español se organizaba sobre tres ideas básicas: la proporcionalidad entre la prestación reconocida y la contribución económica realizada por los trabajadores, conocida como la contributividad; la naturaleza profesional de la protección ligada al desempeño de una actividad y la escasa o nula consideración de los recursos económicos disponibles por parte del sujeto protegido. Estas características sufren una importante alteración a partir de la aprobación de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, sobre prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, que introduce un segundo nivel de protección con el objetivo de suplir la carencia de rentas de subsistencia, con independencia de la actividad profesional del beneficiario y de sus aportaciones económicas al sistema, que conocemos como cotizaciones⁶³. Así, queda configurado el sistema de protección de la Seguridad Social a través de dos modalidades o niveles: una modalidad contributiva y una modalidad no contributiva.

Actualmente los principios que sustentan y orientan la evolución de nuestro sistema de Seguridad Social son:

- La Contributividad: proporcionalidad entre lo percibido y lo aportado.
- La Universalidad: extensión máxima de la acción protectora.
- La Solidaridad intergeneracional: mientras trabajamos contribuimos a financiar las pensiones actuales.
- La Equidad e igualdad de derechos con independencia del momento y lugar de residencia del asegurado.
- La Suficiencia: garantía y perfeccionamiento de los niveles de bienestar mediante prestaciones adecuadas.
- La Unidad de Caja: el Estado es el único titular de todos los recursos obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social.

La acción protectora del Sistema de Seguridad Social español se articula en base a la protección integral y universalizada para cubrir las contingencias comprendidas en la asistencia sanitario-farmacéutica, la protección familiar, los servicios sociales y, en determinados casos, el subsidio por desempleo. A esta protección acceden todos los ciudadanos, en idénticas condiciones, con independencia de que hayan contribuido o no al Sistema de la Seguridad Social, y se completa, por una parte, con el sistema de prestaciones económicas en el que, de forma armónica y diferenciada, se integra la modalidad contributiva, en la que se ofrecen rentas de sustitución de los salarios percibidos en activo (proporcionalidad entre salario-cotización y prestación) y, por otra, con la modalidad no contributiva, dirigida a proporcionar rentas de compensación de las necesidades básicas en favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad, no acceden a la esfera contributiva. A estos dos niveles de carácter público y obligatorio hay que añadir un tercer nivel complementario de carácter libre, constituido principalmente por las Entidades de Previsión Social y los Fondos de Pensiones.⁶⁴

Las prestaciones puede ser de dos tipos: en especie o económicas. Las prestaciones en especie se refieren a asistencia sanitaria, prestación farmacéutica y servicios sociales. Las económicas se clasifican en cuatro categorías: subsidios, pensiones, indemnizaciones y otras prestaciones⁶⁵. Las prestaciones de la seguridad social a las que se refieren las resoluciones analizadas son pensiones o indemnizaciones; y la dependencia alcohólica va a determinar el carácter contributivo de las mismas.

⁶³ Pacto de Toledo, aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados de España, durante la sesión del 6 de abril de 1995.

⁶⁴ Juan Gorelli Hernández; Vilchez Porras, M.; Álvarez Alcolea, M.; Val Tena, A; Gutiérrez Pérez, M., Lecciones de seguridad social, 5ª edición tecnos, 2015

⁶⁵ En los subsidios, las prestaciones son por: incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, temporal en favor de familiares. En las pensiones, las prestaciones son por: jubilación, incapacidad permanente, por muerte y supervivencia, extraordinarias por terrorismo. En las indemnizaciones, las prestaciones son por: lesiones permanentes, incapacidad permanente parcial, fallecimiento (accidente de trabajo o enfermedad profesional). Otras prestaciones son: protección familiar, desempleo, auxilio por defunción, prestación temporal de viudedad.

5.3.2.- Alcohol dependencia e incapacidad permanente

5.3.2.1.- La prestación de incapacidad permanente

Tras una enfermedad o un accidente, el trabajador puede encontrarse en una situación de alteración continuada de su salud, que le imposibilite o le limite la realización de su actividad profesional habitual o de cualquier otra actividad profesional. Tal situación de incapacidad puede originar bien una pensión contributiva, bien una pensión no contributiva.

En la modalidad contributiva, es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasifica con arreglo a los siguientes grados^{66 67}:

1. Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual⁶⁸: ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.
2. Incapacidad permanente total para la profesión habitual: la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
3. Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo: la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.
4. Gran invalidez: la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos.

Las situaciones de incapacidad permanente darán derecho a las correspondientes prestaciones si se reúnen las condiciones establecidas, y la determinación del grado se realiza teniendo en cuenta los efectos en el trabajo, el conjunto de dolencias y la posibilidad de corrección, así como los criterios jurisprudenciales. ¿Cómo repercute un alcohol dependencia en la determinación de una incapacidad? Encontramos en las resoluciones situaciones de asimilada al alta y determinación de revisión de grado, donde la sentencia de contraste tiene una importancia jurídica interesante. Ello nos ha obligado a no desechar en la selección de documentos, las resoluciones cuyos hechos no contemplan el consumo de alcohol, pero se comparan con supuestos de contraste que sí refieren consumos de alcohol, llegando a comparar patologías medicamente incomparables y convirtiendo el alcoholismo en un modelo de contraste.⁶⁹

5.3.2.2.- Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de alcohol dependencia e incapacidad permanente

1) Consideración médico legal 10: Dependencia alcohólica como situación asimilada al alta en la Seguridad Social

El alcoholismo se define como un consumo crónico y periódico que se caracteriza por un deterioro sobre el control de la bebida. Provoca episodios frecuentes de intoxicación, así como una obsesión del consumo a

⁶⁶ Manuel Carpio González, *Manual de incapacidad permanente: criterios prácticos para la valoración médica en España*, Almuzara, 2007.

⁶⁷ Artículo 137 de la LGSS.

⁶⁸ En los casos de accidente sea o no de trabajo, se entiende por profesión habitual la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo; en caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante los doce meses anteriores a la fecha en que se hubiese iniciado la incapacidad temporal.

⁶⁹ Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num Rec. 3711/2011, ponente: Jordi Agustí Juliá, de 4 de diciembre de 2012 (TOL3.059.581); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 3317/2011, de 11 de abril de 2012 (ROJ: ATS 4642/2012); Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Fernando de Castro Fernández, nº Recurso: 1985/2011, de 20 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4835/2012); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 3034/2006, de 24 de abril de 2007 (ROJ: ATS 8267/2007); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec. 1731/2006, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 20 de marzo de 2007 (TOL3.310.588).

pesar de sus circunstancias adversas. El concepto de alcoholismo como enfermedad se considera un trastorno que tiene una causa biológica primaria y una evolución natural previsible. La OMS ante la imprecisión de este término, en 1979 utiliza la expresión síndrome de dependencia de alcohol que permite una valoración y juicio más preciso tanto en sus aspectos médicos como legales.⁷⁰ En el ámbito jurídico, hemos comprobado en la consideración médico legal 4, que el alcoholismo se concibe como enfermedad: el despido disciplinario se considera improcedente cuando se demuestra la existencia de una dependencia alcohólica, por entender que el trabajador está afecto de una enfermedad. En los supuestos que nos ocupan ahora, el trabajador solicita algún tipo de prestación social como las pensiones de viudedad, orfandad o incapacidad permanente, por el padecimiento de la enfermedad de alcoholismo que es utilizado por los beneficiarios como argumento para determinar el periodo de alta en la seguridad social. En consecuencia, el alcoholismo determinará la frontera entre el derecho a una prestación contributiva o no contributiva.

Para estos casos hemos elaborado la tabla 7 que presenta las resoluciones analizadas al respecto. Situaciones en las que los trabajadores que no tienen cotizados los años necesarios para acceder a una prestación social contributiva y asimilan el padecimiento de alcoholismo a una situación de alta en la seguridad social⁷¹. Los datos recogidos para la síntesis de estos casos son recurso, tipo de prestación solicitada, grado de alcoholismo, causalidad y el sentido del fallo.

Tabla 7. Supuestos estudiados de alcohol dependencia asimilados al alta en Seguridad Social				
Nº Recurso	Prest. Seg. Social	Cons. Alcohol	Causalidad	Fallo
938/2013	Pensión viudedad y orfandad	Alcoholismo crónico en sentencia de contraste	Grave y progresivo deterioro del alcoholismo y estar inscrito como demandante de empleo justifica retrotraer el periodo de carencia	Dest.
2329/2012	Pensión viudedad	Alcoholismo crónico en sentencia de contraste	Grave y progresivo deterioro del alcoholismo y estar inscrito como demandante de empleo justifica retrotraer el periodo de carencia	Dest.
1661/2012	Pensión IP	Alcoholismo crónico en sentencia de contraste	El alcoholismo justifica el cese de laboralidad. "Animus laborandi" demostrado	Dest.
1142/2012	Pensión viudedad	Alcoholismo crónico	No permaneció demandante de empleo. Alcoholismo no justifica alejamiento del mercado laboral.	Dest.
3561/2009	Pensión orfandad	Antecedentes de alcohol dependencia	Alcoholismo no justifica alejamiento del mercado laboral	Dest.
322/2005	Pensión viudedad	Cirrosis hepática alcohólica, bebedor habitual	5 años sin demandar empleo, cuando falleció hacia 4 años que no bebía, no permaneció demandante de empleo. Alcoholismo no requiere tratamiento de continuo.	Dest.
1662/2005	Indemnización	Alcoholismo crónico recogido en la sentencia de contraste	No consta alcoholismo crónico en el supuesto juzgado	Dest.
5249/2004	Pensión orfandad	Proceso de cirrosis alcohólica que provoca la muerte	Alcoholismo no le incapacita para el trabajo	Dest.
3205/2004	Pensión viudedad y orfandad	Hepatopatía alcohólica	No consta que el alcoholismo se padeciera con anterioridad al cese en el trabajo	Dest.
1454/2004	Pensión viudedad	Alcoholismo padecido meses antes del fallecimiento en sentencia de contraste	No se cumplen los requisitos	Dest.
1843/2004	Pensión IP	Síndrome de abstinencia alcohólica	Se aplica teoría de paréntesis: la interrupción en la inscripción de demanda de empleo justificada por el síndrome de abstinencia.	Est.
1366/2004	Pensión IP	Pancreatitis aguda alcohólica. Fallece	El periodo de IT se computa como asimilada al alta, pero no se presume, al fallecer, que hubiera agotado el periodo máximo de IT.	Est.

REC: número de recurso de la resolución; CONSUMO DE ALCOHOL: determinación de alcoholismo en la resolución; DEST: desestimación de la prestación; EST: estimación de la prestación.

⁷⁰ Referido en el texto de la OMS de 1994, Lexicon of Alcohol and Drugs Terms. Definición de American Society of Addiction Medicine en 1990.

⁷¹ Artículo 125 de la LGSS.

En las resoluciones estudiadas se distinguen dos formas de abordar el conflicto laboral de alcoholismo como situación asimilada al alta en la seguridad social: la primera consiste en interpretar como inexistentes los periodos en que el trabajador no cotizó por causas ajenas a su voluntad sea el padecimiento de alcohol dependencia⁷². La segunda es retrotrayendo el cómputo del periodo de carencia a una fecha anterior al hecho causante⁷³. En ambas situaciones se coloca un paréntesis respecto de los periodos que no se van a computar a los efectos de alta en la seguridad social, de ahí que la doctrina lleve por nombre: doctrina del paréntesis. Una teoría aplicada por los jueces y tribunales en base a una interpretación flexibilizadora y humanizadora de la norma. El alcoholismo se entiende en estos casos como una enfermedad y aunque esté demostrado su grave y progresivo deterioro de la salud, para la doctrina judicial se trata de una enfermedad que no requiere de tratamiento continuado, ni impide al trabajador el llamado “*animus laborandi*”. En consecuencia, la doctrina del paréntesis no se aplica a supuestos de alcohol dependencia salvo en la sentencia de contraste a la que refieren algunas de las resoluciones: STSJ de Galicia, 1 de octubre de 2010 recurso 2594/2007, en la que sí existe el requisito de inscripción como demandante de desempleo. A nuestro juicio, decidir si la dependencia alcohólica requiere de un tratamiento continuado, o si supone un grave o progresivo deterioro, son condiciones que deberían considerarse según la opinión médica, no constando en las resoluciones informes o dictámenes médico legales periciales alguno.

Destacan por su argumentación jurídica los supuestos estudiados con número de recurso 938/2013, 2329/2012 y 1661/2012, por el uso que hacen de las sentencias de contraste. La sentencia de contraste es un requisito procesal para recurrir por unificación de doctrina, y en nuestro estudio ha planteado la comparación entre dependencia alcohólica y otras alteraciones en la salud como: el infarto sufrido en el parto, la minusvalía del 72% y la esquizofrenia paranoide respectivamente. El problema médico legal que planteamos, en este aspecto, es que al existir una gran disparidad médica entre las diferentes patologías, ¿es conveniente relacionarlos desde una perspectiva jurídica? En nuestra opinión, se hace imprescindible, para estos casos de asimilación al alta en la seguridad social o de contraste, la prueba de dictamen médico legal pericial para poder resolver con objetividad y causalidad las situaciones de conflicto jurídico laborales en las prestaciones de la seguridad social. La opinión médica ha de dirigirse a determinar si el alcoholismo impide la realización de cualquier actividad laboral obligando la baja del trabajador con el fin de justificar, en la esfera jurídica, criterios de humanidad social.

2) Consideración médico legal 11: Alcohol dependencia determina la incapacidad del trabajador o la revisión del grado de incapacidad

El padecimiento de una dependencia alcohólica puede implicar, según las resoluciones analizadas, la solicitud de una incapacidad permanente o la revisión del grado de incapacidad. La tabla 8 elaborada, recoge en 5 columnas los datos sobre el recurso, el grado de incapacidad solicitado o el grado revisado, la descripción breve del padecimiento de alcohol dependencia, la causalidad y el sentido del fallo respecto de si se ha concedido la incapacidad o el grado solicitado. A continuación la tabla 8 presenta los casos relativos a alcohol dependencia e incapacidad permanente.

⁷² Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 1142/2012, de 13 de septiembre de 2012 (ROJ: ATS 9299/2012); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº Recurso: 3561/2009, de 20 de julio de 2010 (ROJ: ATS 11993/2010); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 322/2005, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 25 de septiembre de 2007 (TOL1.161.703); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 1662/2005, de 20 de julio de 2006 (ROJ: ATS 14361/2006); Sentencia Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Gil Suárez, nº Recurso: 5249/2004, de 14 de marzo de 2006 (ROJ: STS 2476/2006); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3205/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 28 de junio de 2005 (TOL718.936); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 1454/2004, de 19 de abril de 2005 (ROJ: ATS 4635/2005); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1843/2004, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, de 18 de noviembre de 2004 (TOL867.322); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 1661/2012, de 22 de enero de 2013 (ROJ: ATS 1271/2013); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1366/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 17 de enero de 2005 (TOL565.133).

⁷³ Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel García de la Serrana, nº recurso: 938/2013, de 26 de noviembre de 2013 (ROJ: ATS 12254/2013); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 2329/2012, de 28 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 5941/2013).

Tabla 8. Supuestos estudiados de alcohol dependencia e incapacidad permanente en las resoluciones estudiadas

Recurso	Grado Incap.	Cons. Alcohol	Causalidad	Inc.
392/2013	IPA a GI	Cirrosis hepática grado B de origen enólico	Confirma reconocimiento de GI por persistencia de dolencia	Si
2822/2013	IPT a IPA	Polineuropatía mixta alcohólica de carácter intensivo	La edad no es una agravante en la enfermedad	No
1768/2013	IPA	Psiconeurosis, alcohol dependencia, grado de minusvalía 66%	Fallecido, no valorado por especialistas	No
3711/2011	IPA	Diabetes Mellitus tipo II, hipertensión y deslipemias. Hernia inguinal, cardiopatía isquémica con stent.	Dolencias actor no le impiden realizar su profesión habitual de montador de ascensores	No
3317/2011	IPA	Alcohol en sentencia de contraste	Las dolencias entre sentencia recurrida y de contraste difieren. Alcoholismo equiparado a cardiopatía isquémica y diabetes	No
1985/2011	IPT a IPA	Discapacidad del sistema osteoarticular por trastorno de disco intervertebral con minusvalía de 56% y trastorno afectivo	Alcoholismo en sentencia de contraste valorado como agravante. No hay agravación de dolencias	No
1728/2011	IPT a IPA	Nueva dolencia de consumo abusivo de alcohol con hepatitis aguda alcohólica	Nueva dolencia no impide desarrollar actividades sedentarias y livianas	No
1166/2011	IPA	Alcohol dependencia, polineuropatía sensitivo motora axonal de etiología alcohólica	No se aplica doctrina del paréntesis a periodos de reincorporación laboral no efectiva	No
1179/2010	IPA o IPT	Trastorno límite y abuso de alcohol	No incapacitada para profesión habitual de dependienta	No
2946/2010	IPA	Alcohol dependencia	Hay posibilidades de tratamiento. La alcohol dependencia ha de estar ligada a otras patologías	No
1805/2007	IPT a IPA	Depresión reactiva prolongada y alcohol dependencia sin abstinencia prolongada. Artrosis, osteoporosis lumbar, discopatía degenerativa izquierda, espondilosis, espondilo artrosis, lumbalgia mecánica, exoforia izquierda	No hay empeoramiento de las dolencias	No
3929/2007	IPA o GI	Hepatopatía y pancreatitis de origen alcohólico. Diabetes mellitus 2	Dolencias permitían la inscripción en la oficina de empleo	No
3799/2007	IT a IP	Alcohol dependencia, hepatopatía alcohólica y ansiedad	Hubo reincorporación al trabajo de 6 meses	No
274/2007	IPA	Enolismo crónico, depresión y pancreatitis crónica de etiología alcohólica	No hay informe pericial	No
3745/2006	IPT	Alcohol dependencia y trastorno histriónico de personalidad	No se han definido limitaciones definitivas por no estar agotadas las posibilidades terapéuticas	No
4970/2006	IPT	Ansiedad, dependencia benzoacepinas, antecedentes de alcoholismo, agudeza visual (70%/10%) fibromialgia, tuberculomas cerebrales e hidrocefalia	No incapacitada para profesión habitual de vigilante de seguridad porque no requiere esfuerzo físico	No
3034/2006	IPA	Déficit mental cognitivo, diabetes mellitus II, hernia inguinal, fistula anal, hiperqueratosis plantar y visión de luz	Alcoholismo de la sentencia de contraste entendido como agravante que impide el desempeño de la profesión	No
1731/2006	IPA o IPT	Trombosis de vena central de la retina OI percibe luz. Pérdida visual correversible. Amaurosis izquierda secundaria a glaucoma neovascular y síndrome ansioso depresivo	Alcoholismo de sentencias de contraste como desequilibrante para la profesión habitual. Cuadro clínico no	No
4168/2003	IT a IPA	Cirrosis hepática alcohólica y VHC, trombosis portal con encefalopatía hepática pre trasplante hepático, astenia moderada y disnea de moderados esfuerzos 9º	No acreditado periodo mínimo de cotización exigible. No incapacitado para profesión habitual de conductor por renovación del carnet de conducir.	No

REC: número de recurso de la resolución; INC.: incapacidad; IPT: incapacidad permanente total; IPA: incapacidad permanente absoluta; GI: gran invalidez; IT: incapacidad temporal; CONSUMO DE ALCOHOL: determinación de alcoholismo en la resolución; S.: concesión de la prestación; N.: no concesión de la prestación.

La dependencia alcohólica es alegada por los trabajadores, en las resoluciones estudiadas, como una enfermedad que justifica una incapacidad permanente o como un agravante de su salud. Pero lo cierto es que el alcoholismo por sí mismo no justifica, según la doctrina judicial, una incapacitación para el trabajo. Solamente se reconoce esta dolencia de cara a una incapacidad permanente, si está asociada a otro tipo de patologías o si se manifiesta como agravante del estado de salud del beneficiario (resolución con número de recurso 392/2013).

En el 99% de las resoluciones analizadas se deniega la incapacidad por alcoholismo o la modificación de su grado, y ello se debe a que el argumento jurídico de inhabilitación para la profesión habitual tiene mucha fuerza a la hora de conceder una prestación por incapacidad permanente. El alcoholismo es entendido jurídicamente como una patología que no limita el ejercicio de otras actividades profesionales y que tiene posibilidades de tratamiento. Dos argumentos que, a nuestro juicio, han de ampararse en el criterio médico del dictamen médico pericial o en la opinión del médico del trabajo.⁷⁴

Al igual que en la consideración médico legal 10, las sentencias de contraste⁷⁵ tienen importancia ya que asocian alcohol dependencia a patologías como diabetes; hernias, minusvalías, cardiopatías, déficit mental, trombosis y depresión ansiosa.

En resumen, el dictamen médico legal pericial relativo a la determinación de la incapacidad de los trabajadores para la actividad laboral, debe referirse, de manera protocolizada al nexo causal; y precisar si la dependencia alcohólica justifica una incapacidad permanente y en qué grado; así como concretar si el alcoholismo puede constituir una agravante en la salud que fundamente la modificación del grado de incapacidad.

5.3.3.- Consumo de alcohol y la determinación de la contingencia como accidente laboral

5.3.3.1.- El concepto jurídico de accidente laboral y el concepto médico de daño

El accidente de trabajo se define en el artículo 115.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)⁷⁶, y establece tres requisitos para la determinación de un accidente como laboral: el primero se refiere a la existencia de lesión corporal, el segundo a que la lesión sea soportada por el trabajador, y el tercero a que acaezca una relación causal entre el trabajo y la lesión. Destacamos nuevamente para estos casos, el supuesto de accidentes *in itinere* regulados en el artículo 115.2 a) LGSS, a los que hemos hecho mención en la consideración médico legal 5.

En lo que concierne el requisito de lesión corporal, decir, que dicha expresión se ha entendido en sentido estricto hasta que la jurisprudencia lo ha equiparado al concepto de daño con el fin de ofrecer una interpretación extensiva del término (STS de 17 junio de 1903). De este modo, con la palabra daño se abarcan los hechos ocurridos en el momento del accidente así como los posteriores. Dicha interpretación extensiva de la expresión legal lesión corporal ha permitido, a su vez, identificar los términos con el concepto de alteración de la salud, la cual puede consistir en lesiones físicas o psíquicas. Jurídicamente, desde la perspectiva del nexo causal, se trata de demostrar que un daño que altera la salud del trabajador, deriva del trabajo.

Las resoluciones estudiadas sobre accidente de trabajo representan un 11,7% del total de documentos jurídicos estudiados. Se trata de supuestos en los que se reclama una prestación social de muerte o supervivencia como la viudedad, orfandad o la indemnización. La determinación del accidente como laboral supone un recargo más alto en porcentaje y en consecuencia una prestación contributiva mayor. Los casos presentan las siguientes consideraciones médico legales.

⁷⁴ Borobia Fernández, C., *Valoración médica y jurídica de la incapacidad laboral*, editorial La Ley, 2006 y *Medicina de los Seguros de vida*, editorial Elsevier, 2014.

⁷⁵ Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num Rec. 3711/2011, ponente: Jordí Agustí Juliá, de 4 de diciembre de 2012 (TOL3.059.581); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 3317/2011, de 11 de abril de 2012 (ROJ: ATS 4642/2012); Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Fernando de Castro Fernández, nº Recurso: 1985/2011, de 20 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4835/2012); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 3034/2006, de 24 de abril de 2007 (ROJ: ATS 8267/2007); Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec. 1731/2006, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 20 de marzo de 2007 (TOL3.310.588).

⁷⁶ Además el artículo 115.2 LGSS amplía la concepción mediante una enumeración de siete supuestos especiales.

5.3.3.2.- Aspectos de relevancia médico legal en los supuestos estudiados de consumo de alcohol y accidente de trabajo

1) Consideración médico legal 12: Tipos de alteración en la salud y la determinación del consumo de alcohol

La tabla 9 se refiere a los supuestos en los que se determina la existencia de accidente de trabajo. Para su elaboración se han recogido los siguientes datos: el número de recurso, el suceso ocurrido que provoca el accidente, la alteración en la salud, la profesión del accidentado, el consumo de alcohol y los argumentos causales entre el suceso, la alteración en la salud y el consumo de alcohol; y finalmente la determinación de la contingencia.

Tabla 9. Supuestos de consumo de alcohol como imprudencia temeraria						
Recurso	Suceso	Alteración en la salud	Profesión	Consumo de alcohol	Causalidad	Acc. Lab
2473/2012	Caída al mar	Traumatismo torácico, contusión cervical, fractura de apófisis espinosa C6, infarto agudo	Pescador	Presentó cuadro de privación etílica. Alcoholismo crónico	Nuevas dolencias no derivan del accidente laboral y se manifiestan fuera del lugar y tiempo de trabajo	S / N
2934/2011	Caída de edificio	Fallecimiento	Guarda de obra	Tasa 2,03 g/L	Falta barandilla	Si
2601/2010	Accidente de tráfico	Traumatismo con aplastamiento craneal fallecimiento	Peón	Tasa 1,45 g/L	Consumo simple imprudencia del trabajador. Falta mecanismo de protección en vehículo y dotar de cinturón de seguridad	Si
166/2009	Desplome de pilar	Politraumatismo y fallecimiento	Obrero	Tasa 2,6 g/L	Imprudencia del trabajador	No
430/2009	Accidente de tráfico	Fallecimiento	Conductor mecánico	Alcohol, cocaína y cannabis	Imprudencia temeraria aunque no esté demostrada el consumo objetivamente	No
4288/2007	Accidente de tráfico <i>in itinere</i>	Fallecimiento	<i>In itinere</i>	1,66 g/l y cannabis	Imprudencia temeraria. Maniobras innecesarias en un tramo de obras. Sentencia de contraste contradictoria	No
1208/2006	Accidente de tráfico <i>in itinere</i>	Fallecimiento	Comercial misión	Tasa 0,96 g/l	La tasa no es elevada en comparación con sentencia de contraste. Adelantamiento antirreglamentario	Si
5435/2004	Caída 8 metros	Fallecimiento	Oficial 1a	Tasa 3,55 g/l	Sin barandillas, sin arnes. Pérdida de oportunidad	Si
3905/2005	Accidente de tráfico en misión	Muerte por ahogamiento	En misión	1,85 g/l fase ebria, etílica aguda	Imprudencia pero no temeraria. No hay conducta desatenta	Si
647/2005	Caída	IP en grado GI Traumatismo torácico, fractura clavícula y escápula, paraplejía	Gruista	Tasa 3,84 g/l	No tenía plataforma para situarse. Medios de protección ineficaces	Si
5229/2004	Accidente de tráfico	Fallecimiento	Conductor mercancía peligrosa	Tasa 0,52 g/l	Imprudencia temeraria por consumo y velocidad inadecuada. En contraste 0,80 es baja	No
4367/2004	Caída desde 3 metros	Lesiones	Fontanero	No alcohol	Trabajos de antenista. No son de su profesión. Sentencia contraste bebidas alcohólicas en informe de urgencias no consta grado de afectación	No
5042/2004	Caída al mar	Desaparecido. Fallecimiento	Marinero	Había estado bebiendo y se fue a descansar	Imprudencia temeraria. En tiempo de descanso no de trabajo	No
2684/2004	Caída al mar	Fallecimiento por asfixia mecánica por sumersión	<i>In itinere</i>	3,23g/l y 3,50 Humor vítreo	Imprudencia solo consta que accedió al buque con tasa de alcoholemia. Ruptura nexa causal. No es accidente <i>in itinere</i>	No

Tabla 9. Supuestos de consumo de alcohol como imprudencia temeraria (cont.)

Recurso	Suceso	Alteración en la salud	Profesión	Consumo de alcohol	Causalidad	Acc. Lab
3873/2004	Caída	Fallecimiento	Atomizador	Tasa 1,12 g/l Informe medicina legal 1,5g/l y 2,28 HV	Imprudencia profesional	No
1712/2004	Atrapamiento	Fallecimiento	Marinero	Tasa 4,44 en sangre	Imprudencia pero no temeraria, se desconocen causas	Si
6296/2003	Accidente de tráfico	Fallecimiento	Conductor remolque	Tasa 1,54 gr/l	Imprudencia temeraria por alcoholemia y velocidad excesiva. Contraste: no riesgo	No
4375/2002	Accidente de tráfico	Fallecimiento	Obrero, grúa	Tasa 0,8 gr de alcohol etílico	Falta anclajes cinturón seguridad, redes, plataformas	Si

REC: número de recurso de la resolución; PROF.: profesión; ACC. LAB.: accidente laboral; S.: determinación del accidente como laboral; N.: determinación del accidente como no laboral.

El 83,3% de los daños por accidente provocan la muerte del trabajador accidentado, por lo que los beneficiarios de la prestación son los familiares. El resto de los casos refieren a lesiones físicas importantes por traumatismos. El consumo de alcohol no se presenta como causa de la muerte o de la lesión, sino que supone la realización de una conducta peligrosa o arriesgada que conlleva la lesión corporal padecida.

En estos supuestos, el consumo de alcohol se determina mediante una tasa de alcoholemia obtenida en el hospital o remitida por el Instituto de Medicina Legal, Toxicología y Ciencias Forenses en la autopsia. Por lo que, en la columna dedicada al consumo de alcohol, obtenemos tasas de alcoholemia pre mortem en sangre y aire expirado o post mortem en sangre o en humor vítreo. En estos casos, la tasa de alcohol se interpreta jurídicamente respecto de los efectos clínicos que pudo tener en el organismo antes del accidente, en conexión con la conducta imprudente, arriesgada o peligrosa realizada por el trabajador; y el daño causado al accidentado. Una misma tasa de alcoholemia no repercute de igual forma en todos los sujetos. Las variaciones interindividuales, relacionadas con los efectos del alcohol, están vinculadas a la diferente capacidad metabólica del organismo, el hábito de consumo, la edad, sexo, y peso corporal. Y en los casos de muestras biológicas post mortem, casos del humor vítreo, resulta muy difícil realizar una interpretación objetiva de los resultados como habitualmente se hace en las determinaciones ante mortem y en sangre.⁷⁷ Por lo que las resoluciones judiciales están basando su argumentación causal en el hecho de que haya habido consumo de alcohol y no en la causa de que dicho consumo provoque la conducta imprudente. (Bandrés Hernández, S. y Arroyo Gonzalez, M. 2008).⁷⁸

En definitiva, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de accidentalidad laboral, pero esta es una realidad genérica que no tiene por qué aplicarse a la casuística según un criterio de equidad. Los tribunales tratan de temeridad el consumo de alcohol pero no la conducta peligrosa que provoca el accidente. Se hace, en consecuencia, necesario que los informes médicos y forenses ofrezcan una interpretación de los resultados científicos.

2) Consideración médico legal 13: El consumo de alcohol, imprudencia temeraria y prevención de riesgos laborales

No hay duda de que el consumo de alcohol por parte del trabajador en el ejercicio de una actividad profesional propia del ámbito de la pesca, la construcción o de alguna actividad que requiera de la conducción de vehículos, constituye es una imprudencia por implicar una puesta en riesgo innecesaria. Ahora bien, la calificación de dicha conducta imprudente como temeridad, no está tan clara para los tribunales. Para calificar

⁷⁷ Bandrés, F., Jurado, C., Delgado, S., Mecanismos post mortales y su repercusión en la interpretación analítica toxicológica, capítulo 67, Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Tomo II, Bosch, 2012.

⁷⁸ Monografía sobre Análisis de la doctrina judicial respecto de la relación entre consumo de alcohol y accidente de trabajo, colección docencia universitaria, Serie Derecho, salud y cultura, edita Fundación Tejerina, 2008.

un accidente de laboral ha de existir un consumo de alcohol asociado a otra conducta de riesgo. La temeridad jurídica necesita de concausas, es decir circunstancias asociadas también imputables al trabajador, como un exceso de velocidad para la conducción de vehículo o un comportamiento irracional. De lo contrario, el consumo de alcohol se calificará de simple imprudencia, pero no de imprudencia temeraria. Recoge en este sentido la resolución estudiada con recurso 1208/2006, lo siguiente: *“Si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como la imprudencia que rompe la relación de causalidad. La imprudencia se configura en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto litigioso, y esas circunstancias concurrentes son de apreciación inicial del juzgador en cada caso concreto, para determinar si existe o no la causa de exclusión de la presunción de laboralidad”*.

A este respecto cabe destacar que las compañías de seguros retiran las indemnizaciones por accidente producidos a causa de embriaguez (Resolución con número de recurso 717/2012), estimando que existe embriaguez a partir de una tasa de 0,80 g/l. Por tanto podría darse el caso de que los tribunales no considerasen la imprudencia temeraria por embriaguez y las aseguradoras sí, retirando en consecuencia la cobertura al empresario, quien debería responder según lo estimado por los tribunales; y en su caso pagar la prestación aunque la aseguradora no la cubra.

La consideración del consumo de alcohol como imprudencia temeraria rompe el nexo causal en la determinación de la accidente como de trabajo. Es decir que aunque el accidente contemple todos los requisitos legales para ser accidente laboral, el consumo de alcohol por parte del trabajador puede eliminar tal consideración. Pero si se probará una falta de prevención de riesgos laborales en el ejercicio de la actividad profesional, entonces aunque concurra un consumo de alcohol demostrado, no se considera la posible imprudencia del trabajador, sino la concurrencia de una pérdida de oportunidad.⁷⁹ En consecuencia, la falta de medidas de seguridad en el entorno de la prevención de riesgos laborales evita la ruptura del nexo causal por imprudencia temeraria del trabajador ligada al consumo de alcohol.⁸⁰

En resumen, existe contradicción doctrinal entre las distintas resoluciones judiciales. En nuestra opinión, originada por una incorrecta interpretación de las tasas de alcoholemia en humor vítreo, ya que de ellas no se infiere una reconstrucción de los hechos, ni se atiende a los perfiles de consumo de alcohol.

⁷⁹ Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 2934/2011, de 27 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 5135/2012); Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº Recurso: 2601/2010, de 11 de abril de 2011 (ROJ: STS 2280/2011); Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº Recurso: 5435/2004, de 23 de enero de 2007 (ROJ: STS 890/2007); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José María Botana López, nº Recurso: 647/2005, de 3 de abril de 2006 (ROJ: ATS 3542/2006); Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Bonete Desdentado, nº Recurso: 4375/2002, de 27 de enero de 2004 (ROJ: ATS 884/2004).

⁸⁰ Llano Sánchez, M. Imprudencia del trabajador y accidentes de trabajo, Actualidad Laboral número 16 de septiembre, páginas 2007 a 20122, 2006.

En relación con el objetivo 1

1. Concluimos que las resoluciones judiciales seleccionadas según el diseño de una metodología que optimiza el uso de las bases de datos jurídicos de España y Francia, cumplen un criterio de homogeneidad que permite un adecuado estudio de los conflictos médico legales.

En relación con el objetivo 2

2. Del estudio de las resoluciones judiciales se extraen 13 consideraciones médico legales comunes para Francia y España, consolidadas en los once años estudiados, y que ponen de manifiesto la necesidad de aunar la Medicina y el Derecho.

En relación con el objetivo 3

3. En las resoluciones estudiadas constatamos que no se interpretan adecuadamente las tasas de alcoholemia por los siguientes motivos:
 - a) Se infieren efectos clínicos inadecuados.
 - b) No se tienen en cuenta los distintos perfiles de consumo de alcohol y en consecuencia no se atiende a las diferencias interindividuales.
 - c) Se infrutiliza los resultados objetivos del informe de alcoholemia.
4. Las resoluciones seleccionadas ponen de manifiesto la importancia de los informes y dictámenes médico legales y periciales para el establecimiento del nexo causal jurídico.
5. Para que los tribunales hagan un mejor uso de la prueba médico legal pericial proponemos que los dictámenes e informes atiendan a una protocolización que recoja criterios causales sin plantear la relación jurídico causal.
6. La prevención es un concepto médico que se incorpora al Derecho del trabajo, por lo que proponemos la elaboración de mapas de riesgos laborales que justifiquen los estudios médico laborales para predecir la alcohol dependencia en el entorno laboral.

En relación con el objetivo 4

7. Del estudio comparado entre Francia y España se infiere que para perfiles de consumo de alcohol y conflictos médico legales similares (en el despido y el acoso moral); Francia se prioriza el uso del Derecho positivo, carga de la prueba, objetividad y responsabilidad del empresario; mientras que en España prevalecen enfoques jurídicos más subjetivos y flexibles afectados por la cultura social de la alcohol dependencia.

En relación con el objetivo 5

8. Las resoluciones judiciales seleccionadas y aportadas en el presente estudio permiten ampliar el análisis comparado con otros países de la Unión Europea.

7.1.- Normativa

1. Constitución Española de 1978.
2. Constitución Francesa de 1958.
3. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
4. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
5. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
6. Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
8. Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
9. Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social.
10. Ley Orgánica 4/2013, además de otras competencias en el ámbito de la documentación y de los servicios de gestión del conocimiento.
11. Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
12. Ley 78, de 6 de enero de 1978 relativa a la informatización de los ficheros y las libertades de Francia.
13. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
14. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
15. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
16. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
17. Real Decreto de 24 de julio de 1889, Texto de la Edición del Código Civil mandada publicar en cumplimiento de la Ley de 26 de mayo último.
18. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
19. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
20. Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las Normas de Cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
21. Resolución de la 63ª, Asamblea Mundial de la Salud, WHA63.13, Estrategia Mundial para reducir el Uso Nocivo del Alcohol.
22. Resolución 61ª, Asamblea Mundial de la Salud WHA61.4, Estrategia Mundial para reducir el Uso Nocivo del Alcohol, mayo 2008.
23. Resolución 58ª, Asamblea Mundial de la Salud WHA58.26, Problemas de salud Pública causados por el Uso Nocivo del Alcohol, mayo 2005.
24. Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009- 2016, Boletín Oficial del Estado, de 13 de Febrero de 2009 (<http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/13/pdfs/BOE-A-2009-2451.pdf>).

25. Recomendación 2012/C 402/01, Estrategia de la Unión Europea en materia de Lucha contra la Droga 2013-2020, Diario oficial de la Unión Europea, de 29 de diciembre de 2012.

7.2.- Documentos

26. Encuesta Nacional de Salud. España 2011/12, Consumo de Alcohol, Serie Informes Monográficos nº 1, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid 2013.
27. Encuesta 2013-2014 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
28. Informe Nacional 2012 (ALOEDT) elaborado por el punto focal nacional Reitox, España, Evolución, tendencias y cuestiones particulares sobre Consumo de Drogas, ed. European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction y Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2012.
29. Informe de la Comisión Clínica sobre Alcohol, Ministerio de Sanidad y Consumo, ed. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, febrero 2007.
30. Instituto Valenciano de Trastornos Adictivos (IVATAD), El alcohol en la historia, Valencia, Adicciones, versión documental, revisado noviembre 2014.
31. Memoria del Plan Nacional sobre Drogas, ed. Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2011
32. New Drugs in Europa 2012, EMCDDA-Europol 2012 Annual report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA.
33. Primera Conferencia sobre Prevención de los Problemas derivados del Alcohol, Madrid 14-15 Junio 2007, publicado por Ministerio de Sanidad y consumo 2008.
34. Plan Gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives, 2013-2017.
35. Informe Plan de Acción sobre drogas en España 2013-2016, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
36. Global Status Report on Alcohol, Country profiles France, Organización Mundial de la Salud, 2014.
37. 22 Committee on Alcohol Data, Indicators and Definitions. Alcohol-Related Indicators. European.

7.3.- Libros y artículos de revistas

38. Alhambra M.J. y Segura, L., *El alcohol, cuestiones jurídico médicas*, ed. Comares, 2005.
39. Algar Jiménez, C.; *La relación laboral: una visión práctica*, Monografías, ed. Difusión Jurídica, 2009.
40. Aliste S., Thomas J.; *La motivación de las resoluciones judiciales*, ed. Marcial Pons, Madrid 2011.
41. American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fifth Edition, DSM-5. Arlington, VA, American Psychiatric Association; 2013 (<http://dsm.psychiatryonline.org>).
42. Andersen P.; *Alcohol in the European Union*; ed. World Health Organization, 2012.
43. Anderson P.; Baumberg B.; *El alcohol en Europa, una perspectiva de salud pública*, Informe para la comisión europea, Institute of Alcohol Studies. Reino Unido, junio 2006.
44. Arvers, P.; *Trastornos adictivos*, 7(2):59-68,2005.
45. Auzaro, G. y Dockès, E.; *Droit du travail*, ed. Dalloz, 2015.
46. Azibert, G.; *Code de Procédure Pénale*, ed Lexis Nexis, 2015.
47. Bandrés Moya, F. y Gómez-Gallego, F.; *Toxicología clínica de las drogodependencias*, ed. Ademas Comunicación Gráfica S.L., 2007.
48. Bandrés Hernández, S. y Arroyo M.; *Análisis de la doctrina judicial respecto de la relación entre consumo de alcohol y accidente de trabajo*; ed. Ademas Comunicación Gráfica, 2008.
49. Bellivier, M., *Droit du travail dans le secteur social et médico social*, ed. Dunod, 2015.
50. Beltran G. and colb.; *Analysis of yeast populations during alcoholic fermentation; a six year follow-up study*, Systematic and Applied Microbiology, 25: 287-293, 2002.
51. Bilbao, A.; *El accidente de trabajo, entre lo negativo y lo irreformable*, serie sociología y política, siglo veintiuno de España editores, S.A., 1997.
52. Blanco, A.; Guijarro, F.J.; Pozas, R. y Uraga, C.; *Origen y evolución del término alcohol*, www.geocities.ws, revisado 2015.
53. Bloomfield K., Stockwell T., Gmel G., Rehn N.; *International comparisons of alcohol consumption*, ed. Alcohol Research and Health 2003; 27(1):95-109.

54. Bobes J.; *Índice Europeo de Severidad de la Adicción*, ed. EuropASI. Actas de la IV Reunión Interregional de Psiquiatría, 1996.
55. Boniface S.; Fuller E.; *Drinking diary*, Health Survey for England 2011. Vol 1 Health, social care and lifestyles. National Health Service. The Health and Social Care Information Centre 2012:207-52.
56. Borrajo Dacruz, E.; *75 cuestiones legales y casos prácticos sobre accidentes de trabajo*, ed. La Ley, 2008.
57. Borges G.; Orozco R.; Monteiro M; Cherpitel C.; Then EP, López VA, et al. Risk of injury after alcohol consumption from case-crossover studies in five countries from the Americas. *Addiction*. 2013; 108:97-103.
58. Borges G.; *Variation in alcohol-related injury by type and cause of injury*, Alcohol and injuries, Emergency department studies in an international perspective, Geneva: World Health Organization; 2009. (http://www.who.int/substance_abuse/msbalcunuries.pdf).
59. Borobia Fernández, C.; *Valoración médica y jurídica de la incapacidad laboral*, editorial La Ley, 2006.
60. Borobia Fernández, C; *Medicina de los seguros de vida*, Elsevier, 2014.
61. Brigitte Feuillet- Le Mintier. *Normativité et Biomedicine*, Études Juridiques N° 17, Edition Economica, Paris 2003.
62. Bryan L.; *The Economist*, el 18 junio de 2013.
63. Boniface S, Fuller E. *Drinking diary*. En: Health Survey for England 2011. Vol 1 Health, social care and lifestyles. National Health Service. The Health and Social Care Information Centre 2012:207-52.
64. Code de Déontologie Médicale. Éditions du Seuil. 1996.
65. Code de Procédure Civile, ed. Lexis Nexis, 2015.
66. Cadiet, L.; *Code de Procédure Civile*, ed. Lexis Nexis, 2015.
67. Campos Marín, R.; *Alcoholismo, Medicina y sociedad en España (1876-1923)*, edita CSIC, 1997.
68. Carpio González, M.; *Manual de incapacidad permanente: criterios prácticos para la valoración médica en España*, ed. Almuzara, 2007.
69. Chau N y colb., *Lorhandicape Group Are occupational factors and mental difficulty associated with occupational injury?*, *J Occup Environ Med.*, 2011;53 (12):1452-9.
70. Committee on Alcohol Data, Indicators and Definitions. Alcohol-Related Indicators. European Commission Health and Consumers Directorate-General, 2010.
71. Connor J.; Norton R.; Ameratunga S.; Jackson R.; *The contribution of alcohol to serious car crash injuries*, *Epidemiology* 2004; 15:337-344.
72. Courssier, P.; *Code de la Sécurité Sociale*, ed. Lexis Nexis, 2015.
73. Cunradi C.B.; Caetano R.; Schafer J.; *Alcohol-related problems, drug use, and male intimate partner violence severity among US couples*. *Alcohol ClinExp Res*. 2002; 26:493-500.
74. Daepfen. J.B.; *Vademecum D'alcoholologie*, Editions Medicine et Hygiene. Geneve.2003.
75. Delgado Bueno, S.; coord., *Manual de procedimientos en orientación sociolaboral para técnicos de reinserción*, ed. Agencia antidroga de la Comunidad de Madrid, 2003.
76. Delgado Bueno, S., director; *Derecho sanitario y Medicina Legal del Trabajo*, Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Tomo I, Volumen 1 y 2; ed. Bosch, 2011.
77. Delgado Bueno, S.; director; *Toxicología forense. Daño Corporal o Psicofísico. Daño cerebral adquirido*, Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Tomo II; ed. Bosch, 2011.
78. Delgado Bueno, S. y Torrecilla Jiménez, J.M.; *Medicina Legal en drogodependencias*, Elsevier España S.L., 2003.
79. Desessard, L. y Massé, M.; *Code de la Route*, ed. Dalloz, 2015.
80. Diccionario de la Real Academia Española, Espasa, 2014.
81. Downing J.; Hughes K.; Bellis M.A.; Calafat A.; Juan M.; Blay N.T.; *Factors associated with risky sexual behaviour: a comparison of British, Spanish and German holiday makers to the Balearics*, *Eur J PublicHealth*. 2011; 21:275-281.
82. Elzo Imaz, Javier, Laespada, María Teresa; Pallarés, Joan, Más allá del botellón: Análisis socioantropológico del consumo de alcohol en los adolescentes y jóvenes, edita Agencia antidroga de la comunidad de Madrid, 2003.
83. Fayós Gardó, Antonio, *Los derechos a la intimidad y a la privacidad en el siglo XXI*, Dynkinson, 2015.
84. Fernández Avilés, Juan Antonio, *El accidente de trabajo en el sistema de la seguridad social*, Atelier libros jurídicos, 2007.
85. Fernández Domínguez, Juan José, *Alcohol y drogas en el trabajo: del despido disciplinario y sus problemas a la prevención del riesgo y asistencia al trabajador*, Wolters Kluwer, 2013.
86. Fernández Martínez, Juan Manuel coord., *Diccionario Jurídico*, Colección Derecho de la A a la Z, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2009.

87. Galán I.; González M.J.; Valencia Martin J.L.; *Patrones del Consumo de alcohol en España: Un país en transición*, Revista Española Salud Pública número 4 julio-agosto 2014, 88: 529-540.
88. García Ruiz, Francisco Manuel, *La Ciencia del pan*, el rincón de la Ciencia número 63, ISSN 1579-1149, diciembre 2012. <http://rincondelaciencia.educa.madrid.org/Curiosid2/rc-146/rc-146.html>.
89. Gerloff, A.; y V. Singer, M.; *Las raíces evolutivas del alcoholismo*, Mente y cerebro número 65, 2014.
90. Gilmore I. et al.; *Alcohol, Work and productivity*; Scientific Opinion of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum; Septiembre 2011.
91. Gimeno Sendra, Vicente, Introducción al derecho procesal, 9ª edición, Colex, 2014.
92. Gómez Abelleira, Francisco J., La causalidad del despido disciplinario, Estudios de derecho Laboral, Thomson Reuters, 2009.
93. Gómez-Talegón M.T.; Álvarez González F.J.; *Alcohol y prevención de los problemas relacionados con el consumo de alcohol en el ámbito laboral*, Med Segur Tra. 2005; Vol LI nº 198:65-72.
94. Gonzalez, D. y Tejero R., El mobbing o acoso psicológico en el lugar de trabajo, Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Tomo I, Volumen 2, ed. Bosch, 2011.
95. Gorelli Hernández, Juan, Vilchez Porras, M.; Álvarez Alcolea, M. Val Tena, A. Gutierrez Pérez M., *Leciones de seguridad social*, 5ª ed. Tecnos, 2015.
96. Grittner U, Kuntsche S, Graham K, Bloomfield K. Social inequalities and gender differences in the experience of alcohol-related problems. *Alcohol*. 2012; 47:597-605.
97. Guardia Serecigni J. y col. : *Socidrogalcohol. Alcoholismo. Guías clínicas basada en la evidencia científica*. ed. Socidrogalcohol. Madrid. 2007.
98. Guillien, R. y Vincent, J.; *Lexique des termes juridiques*, edita Dalloz, Paris 2007.
99. Gutierrez-Fisac J.L.; Suarez M, Neira M, Regidor E. Tendencia de los principales factores de riesgo de enfermedades crónicas. España, 2001-2011/12. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid, 2013. http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/FactoresRiesgo_Espana__2001_2011_12.pdf.
100. Henry, X.; Code Civile, 114 ed. Dalloz, 2015.
101. Hirigoyen, M.F.; *El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso*, Paidós Ibérica, 2013.
102. Hirigoyen, M.F.; *Le harcèlement moral*, Pocket, 2011.
103. Hirigoyen, M. F.; *Le harcèlement moral au travail*, Presse Universitaires de France, 2014.
104. Indave, I.; Sorde, L.; Pulido, J.; Vallejo, F.; Sarasa- Renedo, A.; Bravo, M.J.; *Métodos de investigación sobre daños en la población relacionados con el alcohol*, Revista Española Salud Pública número 4 julio-agosto 2014; 88: 447-468.
105. Instituto Valenciano de Trastornos adictivos (IVATAD), *El alcohol en la historia*, Valencia Adicciones, versión documental, revisado en 30 noviembre 2014.
106. Jeannin, Jean Paul, *Gérer le risque alcool au travail*, Editions de la Chronique Sociale, 2003.
107. Jimenez M; Monasor R.; Rubio G.; *Instrumentos de evaluación en el alcoholismo*; Trastornos Adictivos 2003; 5(1):13-21.
108. Kessler, F.; *Droit de la protection sociale*, editions Dalloz, 2000.
109. Kokkevi A.; Hastgers C.; *European Adaptation of a multidimensional assesment instrument of drug and alcohol dependence*; Eur Addict Res 1995;1:208-21.
110. Kuntsche E.; Rehm J.; Gmel G.; *Characteristics of binge drinkers in Europe*; Soc Sci Med 2004; 59:113-27.
111. Legleye S y col., *Gender and age disparities in the association of occupational factors with alcohol abuse and smoking in the french working population*, Rev Epidemiol Santé Publique, 2011; 59 (4):223-32.
112. Llano Sánchez, M., *Imprudencia del trabajador y accidentes de trabajo*, Actualidad Laboral número 16 septiembre, 2006.
113. Lorente Arenas, Fernando, *La incapacidad temporal*, edición Smith Beecham, 1997.
114. Luque Parra, Manuel, *La organización de la prevención en la empresa*, colección laboral, Tirant lo Blanch, Valencia 2001.
115. Markus, J.P. y Cristol, D.; Code de la Santé Publique, editado Dalloz, Paris 2015.
116. Mayaud, Y. y Gayet C.; Code Pénal, edita Dalloz, Paris 2015.
117. McKinney C.M.; Caetano R.; Rodriguez L.A.; Okoro N.; *Does alcohol involvement increase the severity of intimate partner violence?*; Alcohol ClinExp Res. 2010; 34:655-658.
118. *Management of alcohol- and drug-related issues in the workplace*. An ILO code of practice (ISBN 92-2-109455-3), Ginebra, 1996, y en francés: *Prise en charge des questions d'alcoolisme et de toxicomanie sur le lieu de travail*. Recueil de directives pratiques (ISBN 92-2-209455-7), Ginebra, 1996.

119. Martínez K., *Medicina e intimidad: una visión desde la bioética*, revista de Calidad Asistencial, volumen 06, octubre 2004.
120. Martínez Cuevas, Alfredo J., *Los accidentes de trabajo en la construcción: Análisis de causas y responsabilidades*, CISS Edición, 2007.
121. Melero Ibañez, Juan Carlos y Ortiz de Anda, *Alcohol y Salud Laboral. Lugar de trabajo libre de drogas*; Eddex, 2002.
122. Memento práctico social Francis Lefèvre, 2015.
123. Menéndez Argüín, A.R.; *Consideraciones sobre la dieta de los legionarios romanos en las provincias fronterizas del N.O. del imperio*; Habis, ISSN 0210-7694, número 33, 2002.
124. Mercader Uguina, *Lecciones de Derecho del trabajo*, edición 8ª, Tiran lo Blanch, 2015.
125. Mourás M. Et al: consumo de tranquilizantes en pacientes alcohólicos y su relación con los trastornos de personalidad y el deterioro neuropsicológico. Med Clin (Barc) .2008;130(18):693-5.
126. Montoya Melgar, Alfredo, *Derecho del trabajo*, 13ª edición Tecnos, 1992.
127. Muñoz de Cote Orozco, Julia, *Las bebidas alcohólicas en la historia de la humanidad*, AAPAUNAM, Academia, Ciencia y Cultura, www.medigraphic.org.mx, 10 febrero de 2010.
128. Nieuwjaer M.; *Gestion des états d'ivresse au travail*, Université de Lille. Directeur Mr. Georges Masclet.2007.
129. Ortega Cervigón , J.I.; *el accidente de trabajo: cómo se gestiona*, Centro de Estudios Adams-Ediciones Valbuena S.A., noviembre de 2012.
130. Pascual Pastor coord.: *Aproximación al tratamiento Integral del alcoholismo*, Ed. FARE, 2009.
131. Pérez Capitán, L.; *Imprudencia del trabajador, accidente de trabajo y responsabilidad empresarial* http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/prevencion_riesgos_laborales/imprudencia-del-trabajador-accidente-de-trabajo-y-responsabilidad-empresarial, 2008.
132. Pulido, J.; Indave Ruiz, I.; Colell- Ortega E.; Ruiz García, M.; Bartoli, M.; y Barrio, G.; *Estudios poblacionales en España sobre daños relacionados con el consumo de alcohol*. Revista Española Salud Pública número 4 julio-agosto 2014; 88:493-513.
133. Rehm J.; Baliunas D.; Borges G.L.; Graham K.; Irving HM, Kehoe T, et al. *The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease: an overview*; Addiction. 2010; 105:817-843.
134. Rehm J.; Gmel G.; Sempos C.T.; Trevisan M.; *Alcohol-related morbidity and mortality*. Alcohol Res Health. 2003; 27:39-51.
135. Rehm J.; Scafato E.; *Indicators of alcohol consumption and attributable harm for monitoring and surveillance in European Union countries*; Addiction 2011; 106 (Suppl. 1), 4–10.
136. Richard J.B.; Palle C.; Guignard R.; Viet, *La consommation d'alcool en France en 2014*, Evolution número 35, abril 2015.
137. Room R.; Rehm J.; *Clear criteria based on absolute risk: Reforming the basis of guidelines on low-risk drinking*; Drug and Alcohol Review 2012; 31:135-140.
138. World Health Organization. Glosario de términos de Alcohol y drogas. Ministerio de Sanidad y consumo. 1994.
139. World Health Organization. La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias. ASSIT. Manual para uso en Atención Primaria. www.paho.org. 2010.
140. Real de Asúa D.; González-Cajal J.: Implicaciones éticas y jurídicas de la determinación de alcoholemia en urgencias. Cuad. Bioet. XXIII; 2012/3ª.
141. Regoli, Hervé, *Institutions judiciaires*, 3ª edition Dalloz, Paris, 2001.
142. Rehm J, Scafato E. Indicators of alcohol consumption and attributable harm for monitoring and surveillance in European Union countries. Addiction 2011; 106 (Suppl. 1), 4–10.
143. Ruiz Rodríguez, I. y Torollo González, F.J.; coord., *Curso de prevención de riesgos laborales: España en el marco de la Unión Europea*, Dykinson, Madrid, 1999.
144. Sala Franco, T. y Salas Baena, A.; *La incapacidad temporal: aspectos laborales, sanitarios y de la seguridad social*, Tiran lo Blanch, 2007.
145. Sánchez Pérez P.; *El alcohol y la conducción*, DGT Ministerios del Interior, 2014.
146. San Martín Mazzucconi, Carolina, *La imprudencia del trabajador en el accidente de trabajo claves jurisprudenciales*, revista del ministerio de trabajo e inmigración número 84, ISSN 1137-5868, 2009.
147. Savisens A. et al: *Género y alteraciones hepáticas nutricionales y metabólicas del alcoholismo grave: estudio de 480 pacientes*. Med Cin (Barc), 2011;137(2):49-54.

148. Sarasa-Renedo, A.; Sordo, L.; Molist, G.; Hoyos, J.; Guitart, A.M.; Barrio, G.; *Principales daños sanitarios y sociales relacionados con el consumo de alcohol*. Revista Española Salud Pública número 4 julio-agosto 2014, 88:469-491.
149. Schiltz, P.; *L'alcool et le travail*, edition promoculture, Luxembourg, 2008.
150. Sinto Espresate R.; *El alcoholismo a través de la historia*, Liber Addictus, www.infoadicciones.net, revisado junio 2015.
151. Suelves J.M.; Villalbí, J.R.; Bosque-Prous, M.; Espelt, A.; Brugal, T.; *Tratamiento especializado del abuso de dependencia del alcohol*; Revista Española Salud Pública número 4 julio-agosto 2014, 88:541-549.
152. Taylor B.; Irving HM, Kanteres F.; Room R.; Borges G.L.; Cherpitel C.J.; et al.; *The more you drink, the harder you fall: a systematic review and meta-analysis of how acute alcohol consumption and injury or collision risk increaset ogether*; Drug Alcohol Depend; 2010; 110:108-116.
153. Teyssier, Bernard, *Code du travail*, Lexis Nexis, 2015.
154. Valencia Martín, J.L.; González, M.J.; Galán I.; *Aspectos metodológicos en la medición del consumo de alcohol: la importancia de los patrones de consumo*, Revista Española Salud Publica número; 4 julio-agosto 2014.
155. Velázquez Buendía, L.; Dominguez Berjón, M.F.; Esteban-Vasallo, M.; Génova Maleras, R.; Zoni, A.C.; *Medidas de exposición a la movilidad en las lesiones graves por tráfico en la Comunidad de Madrid*; Revista Española Salud Pública número 3, mayo-junio 2015; 89:271-281.
156. Villalbí J.R.; y Benavides F.G.; *Contribuir a la salud pública desde las sociedades profesionales y científicas: El grupo de trabajo sobre alcohol en la sociedad española de epidemiología*; Revista Española Salud Pública número 4, julio-agosto 2014; 88: 429-432.
157. Ye, Y.; y Cherpitel C.J.; *Risk of injury asociated with alcohol and alcohol-related injury*; Alcohol and injuries, Emergency department studies in international perspective, Geneva, World Health Organization; 2009. (www.who.int/substance_abuse/msbalcinuries.pdf).

7.4.- Páginas web

158. www.boe.es/legislacion/codigos.
159. www.dalloz.fr.
160. www.etimologiaarabe.blogspot.com.es/2010/02/el-espirtu-del-alcohol.html.
161. www.geocities.ws.
162. www.grupomedicodurango.com/alcoholismo/.
163. www.infoadicciones.net.
164. www.inmortal.or.at.
165. www.legifrance.gouv.fr.
166. www.poderjudicial.es.
167. www.publicacionesoficiales.boe.es.
168. www.tiranonline.com.
169. www.rosita.org.

8.1.- Anexo I.F. Relación de resoluciones judiciales francesas sobre consumo de alcohol y trabajo según el método de selección diseñado • 8.2.- Anexo I.E. Relación de resoluciones judiciales españolas sobre consumo de alcohol y trabajo según el método de selección diseñado • 8.3.- Anexo II.F. Relación cronológica de resoluciones judiciales francesas sobre consumo de alcohol y trabajo después de aplicar los criterios de cribado de resultados • 8.4.- Anexo II.E. Relación cronológica de resoluciones judiciales españolas sobre consumo de alcohol y trabajo después de aplicar los criterios de cribado de resultados • 8.5.- Anexo III. Relación de resoluciones judiciales francesas y españolas sobre consumo de alcohol y trabajo acorde a criterios médico legales • 8.6.- Anexo IV. Textos íntegros de las resoluciones judiciales francesas y españolas sobre consumo de alcohol y trabajo, seleccionadas acorde a criterios médico legales

8.1.- ANEXO I. F.- Relación de resoluciones judiciales francesas sobre consumo de alcohol y trabajo, según el método de selección diseñado

El **anexo I. F.** refiere las relaciones de resoluciones judiciales francesas obtenidas a través de la base de datos jurídica y pública francesa de Legifrance y la base de datos jurídica y privada francesa de Dalloz, respecto de las relaciones de yuxtaposición entre las voces de: *licenciement et ebriété*; *licenciement et ivresse*; *licenciement et alcoolique*; *licenciement et alcoolémie*; *licenciement et alcoolisme*; *accident de travail et ebriété*; *accident de travail et ivresse*; *accident de travail et alcoolique*; *accident de travail et alcoolémie*; *accident de travail et alcoolisme*; *incapacité et ebriété*; *incapacité et ivresse*; *incapacité et alcoolique*; *incapacité et alcoolémie*; *incapacité et alcoolisme*; planteadas en los resultado 6 y 7 del apartado 4 de esta tesis (páginas 51 y 52).

Las resoluciones emitidas por los órganos de la *Cour de Cassation* para la jurisdicción laboral y por el *Conseil d'État* para la jurisdicción administrativa, se presentan por orden cronológico, de más reciente a más antigua, durante el periodo de tiempo que abarca desde el 1 de enero de 2004 hasta 31 de diciembre de 2014.

○ LICENCIEMENT

«Ébriété»

Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:

39 documentos

1. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995, Inédit
2. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793, Publié au bulletin
3. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.900, Inédit
4. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-113.757, Inédit
5. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.458, Inédit
6. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.985, Inédit
7. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117, Inédit
8. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-17.182
9. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.652, Inédit
10. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668, Inédit
11. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669, Inédit
12. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155, Inédit
13. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.914, Inédit
14. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986, Inédit

15. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.496, Inédit
16. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909, Inédit
17. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832, Inédit
18. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713, Inédit
19. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712, Inédit
20. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-21.560, Inédit
21. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-15.877, Inédit
22. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162 10-30.163 10-30.164 10-30.165 10-30.166 10-30.167 10-30.168 10-30.169 10-30.170 10-30.171, Publié au bulletin
23. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.170, Inédit
24. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020, Inédit
25. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.190, Publié au bulletin
26. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.079, Publié au bulletin
27. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-42.267, Inédit
28. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44.661, Inédit
29. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411, Inédit
30. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984, Inédit
31. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493, Inédit
32. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294, Inédit
33. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511, Inédit
34. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.159, Inédit
35. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.426, Inédit
36. Cour de Cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.277, Inédit
37. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44.773, Inédit
38. Cour de Cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404, Inédit
39. Cour de Cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.000, Publié au bulletin

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:

44 documentos

1. Cour de Cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, n° 13-23.995
2. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, n° 13-16.793, 1769
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, n° 13-16.793
4. Cour de Cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, n° 13-19.900
5. Cour de Cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, n° 13-13.757
6. Cour de Cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, n° 13-10.985
7. Cour de Cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, n° 12-29.458
8. Cour de Cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, n°12-22.117
9. Cour de Cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, n° 12-17.182
10. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, n° 11-27.652
11. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.668
12. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.155
13. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.669
14. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, n° 11-19.914
15. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, n° 11-10.986
16. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10-22.909
17. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10-19.496, 420
18. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10-19.496
19. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 10-16.832
20. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.712
21. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.713
22. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, n° 10-21.560
23. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, n° 10-15.877
24. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, n° 10-30.162, n° 10-30.163, n° 10-30.164, n° 10-30.165, n° 10-30.166, n° 10-30.167, n° 10-30.168, n° 10-30.169, n° 10-30.170, n° 10-30.171
25. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011 10-30.162;10-30.171;1317 FS-P+B
26. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, n° 09-70.170

27. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, n° 09-43.020
28. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, n° 09-43.190
29. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, n° 09-43.079
30. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, n° 09-42.267
31. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, n° 08-44.661
32. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, n° 08-70.411, 871
33. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, n° 08-70.411
34. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, n° 08-44.984
35. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, n° 08-42.493
36. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, n° 07-42.294
37. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, n° 07-45.511
38. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, n° 08-40.159
39. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, n° 07-40.426
40. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, n° 05-42.277
41. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, n° 03-44.773
42. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, n° 03-43.404
43. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, n° 01-47.000
44. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, n° 01-47.000, 461

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:

0 documentos

«Ivresse»

Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:

16 documentos

1. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482, Inédit
2. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117, Inédit
3. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-17.182, Inédit
4. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668, Inédit
5. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669, Inédit
6. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155, Inédit
7. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.884 11-12.889 11-12.914, Inédit
8. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500, Inédit
9. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713, Inédit
10. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712, Inédit
11. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162 10-30.163 10-30.164 10-30.165 10-30.166 10-30.167 10-30.168 10-30.169 10-30.170 10-30.171, Publié au bulletin
12. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984, Inédit
13. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198, Inédit
14. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.304, Inédit
15. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294, Inédit
16. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-42.071, Inédit

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:

18 documentos

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, n° 13-22.482
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, n° 12-22.117, 87
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, n° 12-22.117
4. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, n° 12-17.182
5. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.668
6. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.155
7. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.669
8. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, n° 11-12.884, n° 11-12.889, n° 11-12.914

9. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, n° 11-14.500
10. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.712
11. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.713
12. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, n° 10-30.162, 10-30.163 10-30.164 10-30.165 10-30.166 10-30.167 10-30.168 10-30.169 10-30.170 10-30.171
13. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2009, n° 08-44.984
14. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, n° 08-42.198, 1938
15. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, n° 08-42.198
16. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 08-42.304
17. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, n° 07-42.294
18. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, n° 08-42.071

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:**1 documento**

1. Conseil d'État, Section du Contentieux, 01/02/2006, 271676, Publié au recueil Lebon

Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:**1 documento**

1. Conseil d'État, Section du contentieux, 1 février 2006, n° 271676

«Alcoolique»**Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:****35 documentos**

1. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995, Inédit
2. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.757, Inédit
3. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.962, Inédit
4. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.316, Inédit
5. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734, Inédit
6. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.915, Inédit
7. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.878, Inédit
8. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343, Inédit
9. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566, Inédit
10. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.387, Inédit
11. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668, Inédit
12. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669, Inédit
13. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155, Inédit
14. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500, Inédit
15. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.208, Inédit
16. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.496, Inédit
17. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713, Inédit
18. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712, Inédit
19. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162 10-30.163 10-30.164 10-30.165 10-30.166 10-30.167 10-30.168 10-30.169 10-30.170 10-30.171, Publié au bulletin
20. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.742, Inédit
21. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.079, Publié au bulletin
22. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984, Inédit
23. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466, Publié au bulletin
24. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493, Inédit
25. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198, Inédit
26. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.304, Inédit
27. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513, Inédit
28. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294, Inédit
29. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-42.071, Inédit
30. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.212, Inédit

31. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2006, 03-47.478, Inédit
32. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2006, 04-40.915, Inédit
33. Cour de Cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44.773, Inédit
34. Cour de Cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.082, Inédit
35. Cour de Cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.000

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:**39 documentos**

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, n° 13-23.995, 1993
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, n° 13-13.757
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, n° 13-16.962
4. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, n° 12-18.316
5. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 12-22.734
6. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, n° 12-18.915
7. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, n° 12-16.878
8. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, n° 11-26.343
9. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, n° 11-27.566
10. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, n° 11-20.387
11. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.668
12. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.155
13. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.669
14. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, n° 11-14.500
15. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, n° 11-11.208
16. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10-19.496
17. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.712
18. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.713
19. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, n° 10-30.162, 10-30.171
20. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, n° 10-30.162, n° 10-30.163, n° 10-30.164, n° 10-30.165, n° 10-30.166, n° 10-30.167, n° 10-30.168, n° 10-30.169, n° 10-30.170, n° 10-30.171
21. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, n° 09-71.742
22. Cour de cassation, Chambre, 18 janvier 2011, n° 09-43.079
23. Cour de cassation, Chambre, 16 décembre 2009, n° 08-44.984
24. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, n° 08-43.466, 2432
25. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, n° 08-43.466
26. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, n° 08-42.493
27. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, n° 08-42.198, 1938
28. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, n° 08-42.198
29. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 08-42.304
30. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, n° 07-44.513
31. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, n° 07-42.294
32. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, n° 08-42.071
33. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, n° 06-45.212
34. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, n° 03-47.478
35. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, n° 04-40.915
36. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, n° 03-44.773
37. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, n° 03-43.082
38. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, n° 01-47.000, 461
39. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, n° 01-47.000

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:**1 documento**

1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10/03/2010, 322824

Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:**1 documento**

1. Conseil d'Etat, 10 mars 2010, n° 322824

«Alcoolémie»

Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:

20 documentos

1. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995, Inédit
2. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.757, Inédit
3. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-17.182, Inédit
4. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.878, Inédit
5. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668, Inédit
6. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669, Inédit
7. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155, Inédit
8. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.914, Inédit
9. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.208, Inédit
10. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713, Inédit
11. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712, Inédit
12. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162 10-30.163 10-30.164 10-30.165 10-30.166 10-30.167 10-30.168 10-30.169 10-30.170 10-30.171, Publié au bulletin
13. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.742, Inédit
14. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984, Inédit
15. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.304, Inédit
16. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513, Inédit
17. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.426, Inédit
18. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2006, 04-40.915, Inédit
19. Cour de Cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44.338, Inédit
20. Cour de Cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.000, Publié au bulletin

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:

22 documentos

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, n° 13-23.995, 1993
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, n° 13-13.757
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, n° 12-17.182
4. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, n° 12-16.878
5. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.668
6. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.155
7. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.669
8. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, n° 11-19.914
9. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, n° 11-11.208
10. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.712
11. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.713
12. n° 10-30.171, 1317
13. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, n° 10-30.162, n° 10-30.163, n° 10-30.164, n° 10-30.165, n° 10-30.166, n° 10-30.167, n° 10-30.168, n° 10-30.169, n° 10-30.170, n° 10-30.171
14. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, n° 09-71.742
15. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, n° 08-44.984
16. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 08-42.304
17. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, n° 07-44.513
18. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, n° 07-40.426
19. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, n° 04-40.915
20. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, n° 03-44.388
21. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, n° 01-47.000; 461
22. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, n° 01-47.000

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:

0 documentos

«Alcoolisme»**Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:****11 documentos**

1. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.132, Inédit
2. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566, Inédit
3. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668, Inédit
4. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669, Inédit
5. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909, Inédit
6. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-19.435, Publié au bulletin
7. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603, Inédit
8. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.159, Inédit
9. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092, Publié au bulletin
10. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.172, Inédit
11. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.130, Inédit

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:**11 documentos**

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, n° 12-22.132
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, n° 11-27.566
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.668
4. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, n° 11-22.669
5. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10-22.909
6. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, n° 10-19.435
7. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, n° 09-40.603
8. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, n° 08-40.159
9. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, n° 07-44.092
10. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, n° 07-44.172
11. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, n° 07-44.130

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:**0 documentos****Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:****0 documentos****○ ACCIDENT DE TRAVAIL****«Ébriété»****Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:****2 documentos**

1. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909
2. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:**8 documentos**

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, n° 13-16.793; 1769
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, n° 13-16.793
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2014, n° 13-83.265 ; 2696
4. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10-22.909
5. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.712
6. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.713
7. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, n° 08-70.411
8. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, n° 07-42.294

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:**1 documento**

1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17/05/2006, 268938, Publié au recueil Lebon

Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:**2 documentos**

1. Conseil d'Etat, 2 juillet 2010, n° 322521
2. Conseil d'Etat, 17 mai 2006, n° 268938

«Ivresse»**Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:****0 documentos****Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:****3 documentos**

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.713
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.712
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, n° 07-42.294

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:**0 documentos****Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:****0 documentos****«Alcoolique»****Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:****3 documentos**

1. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.915, Inédit
2. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.208, Inédit
3. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-10.382, Publié au bulletin

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:**9 documentos**

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, n° 12-18.915
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, n° 12-16.878
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, n° 11-26.343
4. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, n° 11-11.208
5. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, n° 11-10.382
6. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.712
7. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.713
8. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, n° 08-45.323
9. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, n° 07-42.294

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:**1 documento**

1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10/03/2010, 322824

Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:**0 documentos****«Alcoolémie»****Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:****1 documento**

1. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.208, Inédit

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:**4 documentos**

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, n° 12-16.878
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, n° 11-11.208
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.712
4. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10-22.713

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:**0 documentos****Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:****0 documentos****«Alcoolisme»****Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:****3 documentos**

1. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909, Inédit
2. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.269, Inédit
3. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092, Publié au bulletin

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:**4 documentos**

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 11-12.491
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10-22.909
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, n° 08-42.269
4. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, n° 07-44.092

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:**0 documentos****Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:****0 documentos****○ INCAPACITÉ****«Ébriété»****Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:****4 documentos**

1. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-84.787, Inédit
2. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117, Inédit
3. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.114, Inédit
4. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44.773, Inédit

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:**4 documentos**

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, n° 12-29.458
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, n° 12-22.117
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 10-14.114
4. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, n° 03-44.773

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:**0 documentos****Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:****0 documentos****«Ivresse»****Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:****2 documentos**

1. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117, Inédit
2. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.114, Inédit

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:

2 documentos

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, n° 12-22.117
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 10-14.114

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:

0 documentos

«Alcoolique»

Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:

3 documentos

1. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.732, Inédit
2. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.114, Inédit
3. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44.773, Inédit

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:

3 documentos

1. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, n° 11-11.732
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, n° 03-44.773
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, n° 03-43.082

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:

2 documentos

1. Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 364557, Inédit au recueil Lebon
2. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21/07/2009, 320476, Inédit au recueil Lebon

Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:

3 documentos

1. Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, n° 364557
2. Conseil d'État, 17 juillet 2013, n° 364557
3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, n° 320476

«Alcoolémie»

Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:

0 documentos

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz:

0 documentos

«Alcoolisme»

Resultados jurisdicción laboral en Legifrance:

0 documentos

Resultados jurisdicción laboral en Dalloz:

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Legifrance:

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Dalloz :

0 documentos

8.2.- ANEXO I. E.- Relación de resoluciones judiciales españolas sobre consumo de alcohol y trabajo, según método de selección diseñado

El **anexo I. E.** refiere las relaciones de resoluciones judiciales españolas obtenidas a través de la base de datos jurídica y pública española de Cendoj y la base de datos jurídica y privada española de Tiran on line, respecto de las relaciones de yuxtaposición entre las voces de: *despido y ebriedad*; *despido y embriaguez*; *despido y alcohólico*; *despido y alcoholemia*; *despido y alcoholismo*; *accidente de trabajo y ebriedad*; *accidente de trabajo y embriaguez*; *accidente de trabajo y alcohólico*; *accidente de trabajo y alcoholemia*; *accidente de trabajo y alcoholismo*; *incapacidad y ebriedad*; *incapacidad y embriaguez*; *incapacidad y alcohólico*; *incapacidad y alcoholemia*; e *incapacidad y alcoholismo*; planteadas en los resultados 6 y 7 del apartado 4 de esta tesis (páginas 51 y 52).

Las resoluciones emitidas por la Sala Social del Tribunal Supremo para la jurisdicción laboral y por la Sala Contencioso Administrativa para la jurisdicción administrativa, se presentan por orden cronológico (de más reciente a más antigua) durante el periodo de tiempo que abarca desde el 1 de enero de 2004 hasta 31 de diciembre de 2014.

○ DESPIDO

«Ebriedad»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ	0 documentos
--	--------------

Resultados jurisdicción social en Tiran on line:	0 documentos
--	--------------

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ:	0 documentos
---	--------------

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line:	0 documentos
--	--------------

«Embriaguez»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ	48 documentos
--	---------------

1. Auto de Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Jesús Souto Prieto, nº de recurso 2010/2013, de 15 de enero de 2014 (ROJ: ATS1638/2014)
2. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Rosa María Viroles Piñol, nº recurso 62/2013, de 12 de noviembre de 2013 (ROJ:STS 6641/2013)
3. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº recurso: 415/2013, de 10 de septiembre de 2013 (ROJ: ATS 8581/2013)
4. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 474/2013, de 10 de septiembre de 2013 (ROJ: ATS 8970/2013)
5. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº recurso: 420/2013, de 25 de junio de 2013 (ROJ: ATS 7447/2013)
6. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Lourdes Arastey Sahun, nº recurso: 1906/2012, de 29 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 6252/2013)
7. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde nº recurso: 1722/2012, de 26 de febrero de 2013 (ROJ: ATS 2303/2013)
8. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso: 1649/2012, de 5 de diciembre de 2012 (ROJ: ATS 12706/2012)
9. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº recurso: 648/2012, de 11 de octubre de 2012 (ROJ: ATS 10998/2012)
10. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, nº recurso: 2138/201, de 17 de mayo de 2012 (ROJ: ATS 6494/2012)

11. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 3015/2011, de 8 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4666/2012)
12. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburugaga, nº recurso: 2961/2011, de 7 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4659/2012)
13. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso: 2990/2011, de 14 de febrero de 2012 (ROJ: ATS 2275/2012)
14. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº recurso: 2558/201, de 9 de febrero de 2012 (ROJ: ATS 1718/2012)
15. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº recurso: 977/2011, de 31 de enero de 2012 (ROJ: ATS 1400/2012)
16. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jordi Agustí Julia, nº de recurso: 3540/2010, de 8 de septiembre de 2011 (ROJ: ATS 9780/2011)
17. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Souto Prieto, nº recurso: 3325/2010, 29 de marzo de 2011 (ROJ: ATS 4374/2011)
18. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso: 1376/2010, de 23 de noviembre de 2010 (ROJ: ATS 15399/2010)
19. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 187/2010, 9 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 11023/2010)
20. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº de recurso: 716/2010, de 9 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 11687/2010)
21. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso: 4251/2009, de 8 de junio de 2010 (ROJ: ATS 9801/2010)
22. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Lourdes Arastey Sahun, nº recurso: 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (ROJ: ATS 6987/2010)
23. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº recurso: 1183/2009, de 25 de febrero de 2010 (ROJ: ATS 3267/2010)
24. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº recurso: 605/2009, de 17 de noviembre de 2009 (ROJ: ATS 18438/2009)
25. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso: 3381/2008, de 13 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 14873/2009)
26. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Joaquín Samper Juan, nº recurso: 792/2009, de 6 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 14491/2009)
27. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente José Luis Gilolmo López, nº recurso: 3954/2008, de 28 de mayo de 2009 (ROJ: ATS 9129/2009)
28. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Benigno Varela Autran, nº recurso: 3606/2008, de 29 de abril de 2009, (ROJ: ATS 7823/2009)
29. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 2885/2007, de 3 de febrero de 2009 (ROJ: ATS 2475/2009)
30. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº recurso: 2407/2007, de 27 de enero de 2009 (ROJ: STS 634/2009)
31. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Aus-tran, nº recurso: 1454/2008, de 13 de enero de 2009 (ROJ: ATS 641/2009)
32. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Mariano Sampedro Corral, nº recurso: 4036/2007, de 4 de diciembre de 2008 (ROJ: ATS 13776/2008)
33. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº recurso: 3101/2007, de 11 de septiembre de 2008 (ROJ: ATS 8437/2008)
34. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº recurso: 528/2007, de 21 de mayo de 2008 (ROJ: STS 4469/2008)
35. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel Iglesias Cabero, nº recurso: 71/2006, de 1 de junio de 2007 (ROJ: STS 4711/2007)
36. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Mariano Sampedro Corral, nº recurso: 3967/2005, de 10 de enero de 2007(ROJ: ATS 2138/2007)
37. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Milagros Calvo Ibar-lucea, nº recurso: 3492/2005, de 6 de junio de 2006 (ROJ: ATS 11019/2006)

38. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso: 2918/2005, de 18 de mayo de 2006 (ROJ: ATS 9890/2006)
39. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº recurso: 3790/2004, de 12 de julio de 2005 (ROJ: ATS 18397/2005)
40. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Autran, nº recurso: 2994/2004, de 5 de julio de 2005 (ROJ: ATS 8756/2005)
41. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso: 1626/2004, de 29 de marzo de 2005 (ROJ: ATS 3581/2005)
42. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso: 1319/2004, de 27 de enero de 2005 (ROJ: ATS 923/2005)
43. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Autran, nº recurso: 1367/2004, de 11 de enero de 2005 (ROJ: ATS 54/2005)
44. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº recurso: 2819/2003, de 22 de junio de 2004 (ROJ: ATS 8146/2004)
45. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº recurso: 5388/2003, de 16 de junio de 2004 (ROJ: ATS 7896/2004)
46. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº recurso: 5169/2003, de 30 de abril de 2004 (ROJ: ATS 55443/2004)
47. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso: 1427/2003, de 5 de febrero de 2004 (ROJ: ATS 1272/2004)
48. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº recurso: 1382/2003, de 23 de enero de 2004 (ROJ: ATS 704/2004)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line

41 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 2010/2013, ponente: Jesús Souto Prieto, de 15 de enero de 2014 (TOL4.138.112)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 62/2013, ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 12 de noviembre de 2013 (TOL4.111.444)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1722/2012, ponente: Antonio Martín Valverde de 26 de febrero de 2013 (TOL3.875.182)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1649 / 2012, ponente: Antonio Martín Valverde de 5 de diciembre de 2012 (TOL3.345.775)
5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 648/2012, ponente: Fernando Salinas Molina, de 11 de octubre de 2012 (TOL3.398.179)
6. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2138/2011, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, de 17 de mayo de 2012 (TOL3.348.733)
7. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3015/2011, ponente: Aurelio Desdentado Bonete de 8 de marzo de 2012 (TOL3.383.197)
8. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2961/2011, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, de 7 de marzo de 2012 (TOL3.315.657)
9. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2990/2011, ponente: Antonio Martín Valverde, de 14 de febrero de 2012 (TOL3.363.739)
10. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2558/2011, ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 9 de febrero de 2012 (TOL3.386.366)
11. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 977/2011, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 31 de enero de 2012 (TOL3.320.019)
12. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3540/2010, ponente: Jordi Agustí Juliá, de 8 de septiembre de 2011 (TOL3.376.253)
13. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3325/2010, ponente: Jesús Souto Prieto, de 29 de marzo de 2011 (TOL3.388.182)
14. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1376/2010, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 23 de noviembre de 2010 (TOL3.367.983)
15. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 716/2010, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 9 de septiembre de 2010 (TOL3.337.202)
16. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 187/2010, Ponente: Aurelio Desdentado Bonete, de 9 de septiembre de 2010 (TOL3.349.868)

17. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4251/2009, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 8 de junio de 2010 (TOL3.392.039)
18. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (TOL1.874.609)
19. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1183/2009, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, de 25 febrero de 2010 (TOL3.386.632)
20. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 605/2009, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, de 17 de noviembre de 2009 (TOL2.148.098)
21. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3381/2008, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 13 de octubre de 2009 (TOL3.359.674)
22. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 792/2009, ponente: Joaquín Samper Juan, de 6 de octubre de 2009 (TOL3.332.865)
23. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3954/2008, ponente: José Luis Gilolmo López, de 28 de mayo de 2009 (TOL3.317.505)
24. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3606/2008, ponente: Benigno Varela Autrán, de 29 de abril 2009 (TOL3.376.865)
25. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2885/2007, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, de 3 de febrero de 2009 (TOL3.330.512)
26. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec 2407/2007, de 27 de enero de 2009 (TOL1.460.265)
27. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1454/2008, ponente: Benigno Varela Autrán, de 13 de enero de 2009 (TOL3.361.125)
28. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4036/2007, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 4 de diciembre de 2008 (TOL3.350.006)
29. Tribunal Supremo, Num. Rec. 528/2007, de 21 de mayo de 2008 (TOL1.369.638)
30. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 71/2006, ponente: Manuel Iglesias Cabero, de 1 de junio de 2007 (TOL1.113.306)
31. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3967/2005, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 10 de enero de 2007 (TOL3.346.313)
32. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3492/2005, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, de 6 de junio de 2006 (TOL3.387.794)
33. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2918/2005, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 18 de mayo de 2006 (TOL3.380.997)
34. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 3790/2004, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 12 de julio de 2005 (TOL3.338.974)
35. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 2994/2004, ponente: Benigno Varela Autrán, de 5 de julio de 2005 (TOL698.606)
36. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 1626/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 27 de enero de 2005 (TOL633.720)
37. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 1319/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 27 de enero de 2005 (TOL3.371.989)
38. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 1367/2004, ponente: Benigno Varela Autrán, de 11 de enero de 2005 (TOL615.778)
39. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 2819/2003, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 22 de junio de 2004 (TOL516.250)
40. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 5388/2003, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 16 de junio de 2004 (TOL454.138)
41. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 5169/2003, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 30 de abril de 2004 (TOL421.852)

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ

1 documento

1. Sentencia del Tribunal Supremo, sala Contencioso, Madrid, sección 5, ponente Rafael Fernández Valverde, nº de recurso 7398/2005, de 26 de mayo de 2009 (ROJ: STS 4087/2009)

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line

1 documento

1. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Quinta, Num. Rec.:7398/2005, ponente: Rafael Fernández Valverde, de 26 de mayo de 2009 (TOL1.560.132)

«Alcohólico»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ

9 documentos

1. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº recurso 1312/2013, de 5 de diciembre de 2013 (ROJ: ATS 12082/2013)
2. Auto Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº recurso 3372/2010, de 5 de abril de 2011 (ROJ: ATS 5032/2011)
3. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso 2885/2007, de 3 de febrero de 2009 (ROJ: ATS 2475/2009)
4. Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José María Botana López, nº recurso 4282/2006, de 22 de enero de 2008 (ROJ: STS 2292/2008)
5. Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso 3200/2006, de 15 de octubre de 2007 (ROJ: STS 6911/2007)
6. Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1 ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº recurso 2394/2006, de 20 de junio de 2007 (ROJ: STS 5684/2007)
7. Auto Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid Sección 1, ponente: Luis Gil Suárez, nº recurso 720/2005, de 26 de abril de 2006 (ROJ: ATS 10732/2006)
8. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº recurso: 1325/2003, de 21 de diciembre de 2005 (ROJ: ATS 18337/2005)
9. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso: 4178/2003, de 17 de septiembre de 2004 (ROJ: ATS 5765/2004)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line

40 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 123/2014, ponente: Fernando Salinas Molina, de 7 de mayo de 2014 (TOL4.417.281)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1400/2012, ponente: Jordi Agustí Juliá, de 18 de abril de 2013 (TOL3.879.633)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec. 1722/2012, ponente: Antonio Martín Valverde, de 26 de febrero de 2013 (TOL3.875.182)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 3711/2011, ponente: Jordi Agustí Juliá, de 4 de diciembre de 2012 (TOL3.059.581)
5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1402/2012, ponente: JoséLuis Gilolmo López, de 27 de noviembre 2012 (TOL3.361.102)
6. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 648/2012, ponente: Fernando Salinas Molina, de 11 de octubre de 2012 (TOL3.398.179)
7. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3253/2011, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 20 de septiembre de 2012 (TOL3.392.697)
8. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 141/2012, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, de 19 de junio de 2012 (TOL2.652.650)
9. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3416/2011, ponente: Antonio Martín Valverde, de 28 de marzo de 2012 (TOL3.303.001)
10. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2990/2011, ponente: Antonio Martín Valverde, de 14 de febrero de 2012 (TOL3.363.739)
11. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 958/2011, ponente: Jesús Souto Prieto, de 24 de enero de 2012 (TOL2.459.519)
12. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 4691/2010, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 3 de noviembre de 2011 (TOL2.304.557)
13. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3372/2010, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, de 5 de abril de 2011 (TOL3.303.310)
14. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 2018/2010, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 24 de enero de 2011 (TOL2.042.700)

15. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4251/2009, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 8 de junio de 2010 (TOL3.392.039)
16. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (TOL1.874.609)
17. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3535/2009, ponente: Antonio Martín Valverde, de 18 de marzo de 2010 (TOL3.349.278)
18. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 605/2009 ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, de 17 de noviembre de 2009 (TOL2.148.098)
19. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3381/2008, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 13 de octubre de 2009 (TOL3.359.674)
20. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3211/2008, ponente: Joaquín Samper Juan, de 28 de mayo de 2009 (TOL3.367.447)
21. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 1605/2008, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 2 de marzo de 2009 (TOL1.474.770)
22. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1027/2008 , ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 27 de febrero de 2009 (TOL3.337.941)
23. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec. 2885/2007, ponente Aurelio Desdentado Bonete, de 3 de febrero de 2009 (TOL3.330.512)
24. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4036/2007, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 4 de diciembre de 2008 (TOL3.350.006)
25. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 4282/2006, ponente: José María Botana López, de 22 de enero de 2008 (TOL1.324.297)
26. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 3200/2006, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 15 de octubre de 2007 (TOL1.174.950)
27. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4970/2006, ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 10 de julio de 2007 (TOL3.321.125)
28. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 2486/2006, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 3 de julio de 2007 (TOL1.143.895)
29. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 2394/2006, ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 20 de junio de 2007 (TOL1.143.893)
30. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3077/2005, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 7 de marzo de 2007 (TOL3.358.978)
31. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 49/2005, ponente: Manuel Iglesias Cabero, de 31 de mayo de 2006 (TOL961.984)
32. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2918/2005, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 18 de mayo de 2006 (TOL3.380.997)
33. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num de Rec.: 725/2005, de 10 de mayo de 2006 (TOL956.231)
34. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 720/2005, ponente: Luis Gil Suárez, de 26 de abril de 2006 (TOL3.320.282)
35. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 1325/2005, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 21 de diciembre de 2005 (TOL3.372.957)
36. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 1980/2004, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 13 de julio de 2005 (TOL712.124)
37. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 1557/2004, ponente: Benigno Varela Aufrán, de 21 de junio de 2005 (TOL675.760)
38. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 1367/2004, ponente: Benigno Varela Aufrán, de 11 de enero de 2005 (TOL615.778)
39. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 4178/2003, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 17 de septiembre de 2004 (TOL515.492)
40. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 5169/2003, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 30 de abril de 2004 (TOL421.852)

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line :

2 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4178/2012, ponente: Emilio Frías Ponce, de 23 de octubre de 2014 (TOL4.538.528)
2. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 2896/2003, ponente: Agustín Puente Prieto, de 6 de junio de 2007 (TOL1.113.174)

«Alcoholemia»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ:

20 documentos

1. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Miguel Ángel Luelmo Millán, nº recurso: 1965/2013, de 9 de abril de 2014 (ROJ: ATS 4178/2004)
2. Auto Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonate, nº recurso 474/2013, de 10 de septiembre de 2013 (ROJ: ATS 8970/2013)
3. Auto Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso 6/2013, de 7 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 4584/2013)
4. Auto Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso 1649/2012, de 5 de diciembre de 2012 (ROJ: ATS 12706/2012)
5. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Fernando Salinas Molina, nº recurso 648/2012, de 11 de octubre de 2012 (ROJ: ATS 10998/2012)
6. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Fernando Salinas Molina, nº recurso 573/2012, de 20 de septiembre de 2012 (ROJ: ATS 9800/2012)
7. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel Ramón Alarcón, nº recurso 2138/2011, de 17 de mayo de 2012 (ROJ: ATS 6494/2012)
8. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano, nº recurso 2961/2011, de 7 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4659/2012)
9. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº recurso 977/2012, de 31 de enero de 2011 (ROJ: ATS 1400/2012)
10. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso 1376/2010, de 23 de noviembre de 2010 (ROJ: ATS15399/2010)
11. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso 4251/2009, de 8 de junio de 2010 (ROJ: ATS 9801/2010)
12. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Lourdes Arastey Sahun, nº recurso 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (ROJ: ATS 6987/2010)
13. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Marái Luisa Segoviano, nº recurso 1183/2009, de 25 de febrero de 2010 (ROJ: ATS 3267/2010)
14. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº recurso 1531/2009, de 9 de diciembre de 2009 (ROJ: ATS 17768/2009)
15. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso 3381/2008, de 13 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 14873/2009)
16. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso 1463/2008, de 26 de noviembre de 2008 (ROJ: ATS 14475/2008)
17. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso 2918/2005, de 18 de mayo de 2006 (ROJ: ATS 9890/2006)
18. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso 3433/2005, de 28 de marzo de 2006 (ROJ: ATS 6414/2006)
19. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Autrán, nº recurso: 1367/2004, de 11 de enero de 2005 (ROJ: ATS 54/2005)
20. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº recurso: 5743/2003, de 8 de septiembre de 2004 (ROJ: ATS 9914/2004)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line

18 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1965/2013, ponente: Antonio Martín Valverde, de 9 de abril de 2014 (TOL4.396.028)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 6/2013, ponente: Antonio Martín Valverde, de 7 de mayo de 2013 (TOL3.877.428)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1649/2012, ponente: Antonio Martín Valverde, de 5 de diciembre de 2012 (TOL3.345.775)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 648/2012, ponente: Fernando Salinas Molina, de 11 de octubre de 2012 (TOL3.398.179)
5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Rec.: 573/2012, ponente: Fernando Salinas Molina, de 20 de septiembre de 2012 (TOL3.312.126)
6. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2138/2011, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, de 17 de mayo de 2012 (TOL3.348.733)
7. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2961/2011, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, de 7 de marzo de 2012 (TOL3.315.657)
8. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 977/2011, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 31 de enero de 2012 (TOL3.320.019)
9. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1376/2010, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 23 de noviembre de 2010 (TOL3.367.983)
10. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4251/2009, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 8 de junio de 2010 (TOL3.392.039)
11. Tribunal Supremo, Sala Cuarta - Sección Primera, Num.Rec: 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (TOL1.874.609)
12. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1183/2009, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, de 25 de febrero de 2010 (TOL3.386.632)
13. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1531/2009, ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 9 de diciembre de 2009 (TOL3.305.394)
14. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3381/2008, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 13 de octubre de 2009 (TOL3.359.674)
15. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1463/2008, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 26 de noviembre de 2008 (TOL3.336.915)
16. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2918/2005, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 18 de mayo de 2006 (TOL3.380.997)
17. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 3433/2005, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 28 de marzo de 2006 (TOL945.611)
18. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1367/2004, ponente: Benigno Varela Autrán, de 11 de enero de 2005 (TOL3.877.428)

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line

0 documentos

«Alcoholismo»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ

6 documentos

1. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso 912/2013, de 13 de noviembre de 2013 (ROJ: ATS 11952/2013)
2. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 2885/2007, de 3 de febrero de 2009 (ROJ: ATS 2475/2009)
3. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Gil Suárez, nº Recurso: 720/2005, de 26 de abril de 2006 (ROJ: ATS 10732/2006)
4. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº recurso: 1325/2005, de 21 de diciembre de 2005 (ROJ: ATS 18337/2005)

5. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso: 4178/2003, de 17 de septiembre de 2004 (ROJ: ATS 5765/2004)
6. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº recurso: 4632/2003, de 9 de septiembre de 2004 (ROJ: ATS 9970/2004)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line**4 documentos**

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2885/2007, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, de 3 de febrero de 2009 (TOL3.330.512)
2. Tribunal Supremo - Sala Cuarta, Num. Rec.: 720/2005, ponente: Luis Gil Suárez, de 26 de abril de 2006 (TOL3.320.282)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1325/2005, ponente: Víctor Eladio, de 21 de diciembre de 2005 (TOL3.372.957)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4178/2003, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 17 de septiembre de 2004 (TOL515.492)

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ**0 documentos****Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line****0 documentos****○ ACCIDENTE DE TRABAJO****«Ebriedad»****Resultados jurisdicción social en CENDOJ:****0 documentos****Resultados jurisdicción social en Tiran on line****0 documentos****Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ****0 documentos****Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line****0 documentos****«Embriaguez»****Resultados jurisdicción social en CENDOJ****22 documentos**

1. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, nº Recurso: 717/2012, de 3 de octubre de 2013 (ROJ: STS 6321/2013)
2. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 474/2013, de 10 de septiembre de 2013 (ROJ: ATS 8970/2013)
3. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº Recurso: 648/2012, de 11 de octubre de 2012 (ROJ: ATS 10998/2012)
4. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 2934/2011, de 27 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 5135/2012)
5. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº Recurso: 2558/2011, de 9 de febrero de 2012 (ROJ: ATS 1718/2012)
6. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº Recurso: 2601/2010, de 11 de abril de 2011 (ROJ: STS 2280/2011)
7. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 3325/2010, de 29 de marzo de 2011 (ROJ: ATS 4374/2011)
8. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº Recurso: 1376/2010, de 23 de noviembre de 2010 (ROJ: ATS15399/2010)

9. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 4251/2009, de 8 de junio de 2010 (ROJ: ATS9801/2010)
10. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Lourdes Arastey Sahun, nº Recurso: 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (ROJ: ATS 6987/2010)
11. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº Recurso: 166/2009, de 29 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 15775/2009)
12. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº Recurso: 3381/2008, de 13 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 14873/2009)
13. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 4036/2007, de 4 de diciembre de 2008 (ROJ: ATS 13776/2008)
14. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº Recurso: 528/2007, de 21 de mayo de 2008 (ROJ: STS 4469/2008)
15. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Manuel Iglesias Cabero, nº Recurso: 71/2006, de 1 de junio de 2007 (ROJ: ATS 4711/2007)
16. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 3492/2005, de 6 de junio de 2006 (ROJ: ATS 11019/2006)
17. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 2918/2005, de 18 de mayo de 2006 (ROJ: ATS 9890/2006)
18. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 4617/2004, de 31 de enero de 2006 (ROJ: STS 550/2006)
19. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 5042/2004, de 25 de octubre de 2004 (ROJ: ATS 12845/2005)
20. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 2684/2004, de 15 de septiembre de 2005 (ROJ: ATS 10821/2005)
21. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 3873/2004, de 14 de junio de 2005 (ROJ: ATS 7419/2005)
22. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 6296/2003, de 19 de julio de 2004 (ROJ: ATS 9365/2004)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line

20 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 717/2012, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, de 3 de octubre de 2013 (TOL4.074.944)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 648/2012, ponente: Fernando Salinas Molina, de 11 de octubre de 2012 (TOL3.398.179)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2934/2011, ponente: Antonio Martín Valverde, de 27 de marzo de 2012 (TOL3.349.741)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2558/2011, ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 9 de febrero de 2012 (TOL3.386.366)
5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 2601/2010, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, de 11 de abril de 2011 (TOL2.112.673)
6. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3325/2010, ponente: Jesús Souto Prieto, de 29 de marzo de 2011 (TOL3.388.182)
7. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1376/2010, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 23 de noviembre de 2010 (TOL3.367.983)
8. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4251/2009, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido de 8 de junio de 2010 (TOL3.392.039)
9. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (TOL1.874.609)
10. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 29 de octubre de 2009 (TOL1.748.946)
11. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3381/2008, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 13 de octubre de 2009 (TOL3.359.674)
12. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4036/2007, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 4 de diciembre de 2008 (TOL3.350.006)
13. Tribunal Supremo, Num. Rec 528/2007, de 21 de mayo de 2008 (TOL1.369.638)
14. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 71/2006, ponente: Manuel Iglesias Cabero, de 1 de junio de 2007 (TOL1.113.306)

15. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3492/2005, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, de 6 de junio de 2006 (TOL3.387.794)
16. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2918/2005, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 18 de mayo de 2006 (TOL3.380.997)
17. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 5042/2004, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 25 de octubre de 2005 (TOL739.504)
18. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2684/2004, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, de 15 de septiembre de 2005 (TOL732.222)
19. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3873/2003, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, de 14 de junio de 2005 (TOL668.490)
20. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 6296/2003, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, de 19 de julio de 2004 (TOL516.319)

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line

0 documentos

«Alcohólico»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ

2 documentos

1. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº Recurso: 938/2013, de 26 de noviembre de 2013 (ROJ: ATS 12254/2013)
2. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 3929/2007, de 17 de julio de 2008 (ROJ: ATS 74374/2008)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line

18 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 3711/2011, Ponente: Jordi Agustí Juliá, de 4 de diciembre de 2012 (TOL3.059.581)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 648 / 2012, ponente: Fernando Salinas Molina, de 11 de octubre de 2012 (TOL3.398.179)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1728 / 2011, ponente: José Luis Gil Olmo López, de 7 de diciembre de 2011 (TOL3.331.523)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 1266/2010, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, de 9 de diciembre de 2010 (TOL2.036.588)
5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4251/2009, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 8 de junio de 2010 (TOL3.392.039)
6. Tribunal Supremo, Num. Rec. 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (TOL1.874.609)
7. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3381/2008, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 12 de octubre de 2009 (TOL3.359.674)
8. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 430/2009, ponente: Jesús Souto Prieto, de 17 de septiembre de 2009 (TOL3.374.264)
9. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1987 / 2008, ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 10 de febrero de 2009 (TOL3.372.431)
10. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4036/2007, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 4 de diciembre de 2008 (TOL3.350.006)
11. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 322/2005, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 25 de septiembre de 2007 (TOL1.161.703)
12. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2918/2005, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 18 de mayo de 2006 (TOL3.380.997)
13. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 5229/2004, ponente: José María Botana López, de 28 de noviembre de 2005 (TOL796.324)
14. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4367/2004, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, de 22 de noviembre de 2005 (TOL781.766)

15. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1557/2004, ponente: Benigno Varela Austrán, de 21 de junio de 2005 (TOL675.760)
16. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3873/2004, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, de 14 de junio de 2005 (TOL668.490)
17. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1712/2004, ponente: Antonio Martín Valverde, de 22 de noviembre de 2004 (TOL550.710)
18. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4500/2003, ponente: Víctor Fuentes López, de 30 de marzo de 2004 (TOL366.297)

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ:

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line:

63 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Primera, Num. Rec.: 1138/2011, ponente: Octavio Juan Herrero Pina, de 22 de septiembre de 2011 (TOL2.252.359)
2. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 1981/2009, ponente: Octavio Juan Herrero Pina, de 12 de septiembre de 2011(TOL2.242.013)
3. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Cuarta, Num. Rec.: 1884/2007, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 13 de mayo de 2011(TOL2.124.209)
4. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 408/2007, ponente: Margarita Robles Fernández, de 9 de mayo de 2008 (TOL1.324.346)
5. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 35/2006, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 31 de diciembre de 2007 (TOL1.235.065)
6. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 96/2006, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 31 de diciembre de 2007 (TOL1.235.161)
7. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 297/2006, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 31 de diciembre de 2007 (TOL1.235.160)
8. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 295/2006, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 31 de diciembre de 2007 (TOL1.235.162)
9. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 4330/2004, ponente: Margarita Robles Fernández, de 5 de diciembre de 2007 (TOL1.214.191)
10. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 205/2006, ponente: Margarita Robles Fernández, de 12 de septiembre de 2007 (TOL1.146.856)
11. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 73/2006, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 21 de diciembre de 2006 (TOL1.040.357)
12. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 71/2006, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 21 de diciembre de 2006 (TOL1.040.355)
13. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 74/2006, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 14 de diciembre de 2006 (TOL1.028.320)
14. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 239/2005, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 5 de diciembre de 2006 (TOL1.025.668)
15. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 334/2005, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 5 de diciembre de 2006 (TOL1.025.669)
16. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 316/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 27 de noviembre de 2006 (TOL1.022.798)
17. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 155/2005 - ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 27 de noviembre de (TOL1.022.797)
18. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 72/2006, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 27 de noviembre de 2006 (TOL1.025.670)
19. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 173/2005, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 15 de noviembre de 2006 (TOL1.018.730)
20. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 341/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 15 de noviembre de 2006 (TOL1.018.729)
21. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 135/2005, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 15 de noviembre de 2006 (TOL1.018.728)

22. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 55/2005, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 13 de noviembre de 2006 (TOL1.013.707)
23. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 324/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 3 de noviembre de 2006 (TOL1.009.674)
24. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 9/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 3 de noviembre de 2006 (TOL1.009.669)
25. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 80/2005, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 3 de noviembre de 2006 (TOL1.009.670)
26. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 11/2005, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 3 de noviembre de 2006 (TOL1.009.671)
27. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 46/2005, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 18 de mayo de 2006 (TOL935.623)
28. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 314/2004 - Ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 31 de enero de 2006 (TOL827.651)
29. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 315/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 31 de enero de 2006 (TOL827.650)
30. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 338/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 31 de enero de 2006 (TOL827.653)
31. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 319/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 30 de enero de 2006 (TOL839.632)
32. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 42/2005, ponente: Santiago Martínez Varres-García, de 16 de diciembre de 2006 (TOL856.600)
33. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 243/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 15 de diciembre de 2005 (TOL781.644)
34. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 289/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 11 de octubre de 2005 (TOL738.693)
35. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 1/2005, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 11 de octubre de 2005 (TOL732.099)
36. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 112/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 27 de septiembre de 2005 (TOL883.438)
37. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 176/2003, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 31 de mayo de 2005 (TOL668.387)
38. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 294/2003, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 31 de mayo de 2005 (TOL668.390)
39. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 242/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 5 de mayo de 2005 (TOL649.470)
40. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 178/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 28 de febrero de 2005 (TOL615.581)
41. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 47/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 22 de febrero de 2005 (TOL649.455)
42. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 13/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 22 de febrero de 2005 (TOL615.575)
43. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 296/2003, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 22 de febrero de 2005 (TOL615.567)
44. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 278/2004, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 22 de febrero de 2005 (TOL615.566)
45. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 139/2003, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 30 de noviembre de 2004 (TOL591.323)
46. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 165/2003, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 30 de noviembre de 2004 (TOL564.909)
47. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 99/2003, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 3 de noviembre de 2004 (TOL564.914)
48. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 166/2003, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 29 de octubre de 2004 (TOL564.911)
49. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 217/2002, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 21 de octubre de 2004 (TOL515.344)

50. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 262/2002, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 21 de octubre de 2004 (TOL515.324)
51. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 264/2002, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 21 de octubre de 2004 (TOL615.524)
52. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 264/2002, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 29 de octubre de 2004 (TOL726.529)
53. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 273/2002, de 7 de octubre de 2004 (TOL633.626)
54. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 23/2002, de 7 de octubre de 2004 (TOL515.339)
55. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 40/2002, de 7 de octubre de 2004 (TOL515.355)
56. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 14/2003, de 4 de octubre de 2004 (TOL550.615)
57. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 98/2003, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 27 de septiembre de 2004 (TOL515.326)
58. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 253/2002, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 13 de julio de 2004 (TOL515.323)
59. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 252/2002, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 13 de julio de 2004 (TOL515.322)
60. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 264/2002, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 29 de octubre de 2004 (TOL726.529)
61. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 17/2003, de 12 de julio de 2004 (TOL515.354)
62. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 283/2002, de 21 de junio de 2004 (TOL515.356)
63. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 1862/2000, de 24 de mayo de 2004 (TOL502.415)

«Alcoholemia»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ

22 documentos

1. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 474/2013, de 10 de septiembre de 2013 (ROJ: ATS 8970/2013)
2. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº Recurso: 648/2012, de 11 de octubre de 2012 (ROJ: ATS 10998/2012)
3. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº Recurso: 2280/2011, de 11 de abril de 2011 (ROJ: STS 2280/2011)
4. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº Recurso: 1376/2010, de 23 de noviembre de 2010 (ROJ: ATS 15399/2010)
5. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Fernando Castro Fernández, nº Recurso: 1190/2010, de 14 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 12025/2010)
6. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 4251/2009, de 8 de junio de 2010 (ROJ: ATS 9801/2010)
7. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Lourdes Arastey Sahun, nº Recurso: 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (ROJ: ATS 6987/2010)
8. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº Recurso: 1531/2009, de 9 de diciembre de 2009 (ROJ: ATS 17768/2009)
9. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº Recurso: 166/2009, de 29 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 15775/2009)
10. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº Recurso: 3381/2008, de 13 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 14873/2009)
11. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 1463/2008, de 26 de noviembre de 2008 (ROJ: ATS 14475/2008)

12. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Joaquín Samper Juan, nº Recurso: 4288/2007, de 8 de julio de 2008 (ROJ: ATS 7304/2008)
13. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 1208/2006, de 26 de abril de 2007 (ROJ: ATS 8483/2007)
14. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº Recurso: 5435/2004, de 23 de enero de 2007 (ROJ: STS 890/2007)
15. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº Recurso: 3905/2005, de 18 de julio de 2006 (ROJ: ATS 12611/2006)
16. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 9890/2006, de 18 de mayo de 2006 (ROJ: ATS 9890/2006)
17. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José María Botana López, nº Recurso: 647/2005, de 3 de abril de 2006 (ROJ: ATS 3542/2006)
18. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José María Botana López, nº Recurso: 5229/2004, de 28 de noviembre de 2005 (ROJ: ATS 14944/2005)
19. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 2684/2004, de 15 de septiembre de 2005 (ROJ: ATS 10821/2005)
20. Auto de Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Molinero Tamborero, nº Recurso: 3873/2004, de 14 de junio de 2005 (ROJ: ATS 7419/2005)
21. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Molinero Tamborero, nº Recurso: 6296/2003, de 19 de julio de 2004 (ROJ: ATS 9365/2004)
22. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 4375/2002, de 27 de enero de 2004 (ROJ: ATS 884/2004)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line

20 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 648/2012, ponente: Fernando Salinas Molina, de 11 de octubre de 2012 (TOL3.398.179)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 2601/2010, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, de 11 de abril de 2011 (TOL2.112.673)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1376/2010, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 23 de noviembre de 2010 (TOL3.367.983)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1190/2010, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 14 de septiembre de 2010 (TOL3.299.371)
5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4251/2009, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 8 de junio de 2010 (TOL3.392.039)
6. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (TOL1.874.609)
7. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1531/2009, ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 9 de diciembre de 2009 (TOL3.305.394)
8. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 29 de octubre de 2009 (TOL1.748.946)
9. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3381/2008, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 13 de octubre de 2009 (TOL3.359.674)
10. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1463/2008, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 26 de noviembre de 2008 (TOL3.336.915)
11. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1208/2006, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 26 de abril de 2007 (TOL3.333.919)
12. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 5435/2004, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, de 23 de enero de 2007 (TOL1.038.546)
13. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3905/2005, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 18 de julio de 2006 (TOL3.365.513)
14. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2918/2005, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 18 de mayo de 2006 (TOL3.380.997)
15. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 647/2005, ponente: José María Botana López, de 3 de abril de 2006 (TOL956.287)
16. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 5229/2004, ponente: José María Botana López, de 28 de noviembre de 2005 (TOL796.324)

17. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2686/2004, ponente: Milagro Calvo Ibarlucea, de 15 de septiembre de 2005 (TOL732.222)
18. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3873/2004, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, de 14 de junio de 2005 (TOL668.490)
19. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 6296/2003, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, de 19 de julio de 2004 (TOL516.319)
20. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4375/2002, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, de 27 de enero de 2004 (TOL356.956)

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line

0 documentos

«Alcoholismo»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ

8 documentos

1. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº Recurso: 938/2013, de 26 de noviembre de 2013 (ROJ: ATS 12254/2013)
2. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 2473/2012, de 5 de febrero de 2013 (ROJ: ATS 1756/2013)
3. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº Recurso: 1985/2011, de 20 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4835/2012)
4. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº Recurso: 3561/2009, de 20 de julio de 2010 (ROJ: ATS 11993/2010)
5. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº Recurso: 322/2005, de 25 de septiembre de 2007 (ROJ: STS 6564/2007)
6. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 5452/2005, de 25 de septiembre de 2007 (ROJ: STS 7151/2007)
7. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 3873/2004, de 14 de junio de 2005 (ROJ: ATS 7419/2005)
8. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 1454/2004, de 19 de abril de 2005 (ROJ: ATS 4635/2005)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line

7 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2473/2012, ponente: Jesús Souto Prieto, de 5 de febrero de 2013 (TOL3.876.647)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1985/2011, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 20 de marzo de 2012 (TOL3.339.893)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3561/2009, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 20 de julio de 2010 (TOL3.358.759)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 322/2005, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 25 de septiembre de 2007 (TOL1.161.703)
5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 5452/2005, ponente: Antonio Martín Valverde, de 25 de septiembre de 2007 (TOL1.220.890)
6. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3873/2004, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, de 14 de junio de 2005 (TOL668.490)
7. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1454/2004, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 19 de abril de 2005 (TOL3.299.944)

Resultados de jurisprudencia administrativa en CENDOJ

0 documentos

Resultados jurisprudencia administrativa en Tiran on line

0 documentos

○ INCAPACIDAD

«Ebriedad»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ	0 documentos
Resultados jurisdicción social en Tiran on line	0 documentos
Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ	0 documentos
Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line	0 documentos

«Embriaguez»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ	5 documentos
--	--------------

1. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, nº Recurso: 717/2012, de 3 de octubre de 2013 (ROJ:STS 6321/2013)
2. Auto Tribunal Supremo, Sala de lo social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº Recurso: 605/2009, de 17 de noviembre de 2009 (ROJ: ATS 18438/2009)
3. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Fernando Salinas Molina, nº Recurso: 166/2009, de 29 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 15775/2009)
4. Sentencia Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel Iglesias Cabero, nº Recurso: 71/2006, de 1 de junio de 2007 (ROJ: STS 4711/2007)
5. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 1382/2003, de 23 de enero de 2004 (ROJ: ATS 704/2004)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line	4 documentos
---	--------------

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 717/2012, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, de 3 de octubre de 2013 (TOL4.074.944)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 605/2009, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, de 17 de noviembre de 2009 (TOL2.148.098)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 29 de octubre de 2009 (TOL1.748.946)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 71/2006, ponente: Manuel Iglesias Cabero, de 1 de junio de 2007(TOL1.113.306)

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ	0 documentos
--	--------------

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line	0 documentos
---	--------------

«Alcohólico»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ:	5 documentos
---	--------------

1. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Miguel Ángel Luelmo Millán, nº Recurso: 392/2013, de 6 de mayo de 2014 (ROJ: STS 3298/2014)
2. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Souto Prieto, nº recurso: 2329/2012, de 28 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 5941/2013)
3. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso: 2792/2011, de 28 de febrero de 2012 (ROJ: ATS 2659/2012)
4. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº recurso: 2946/2010, de 24 de febrero de 2011 (ROJ: ATS 3494/2011)
5. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso: 3929/2007, de 17 de julio de 2008 (ROJ: ATS 7437/200)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line

24 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 123/2014, ponente: Fernando Salinas Molina, de 7 de mayo de 2014 (TOL4.417.281)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 392/2013, ponente: Miguel Ángel Luelmo Millán, de 6 de mayo de 2014 (TOL796.324)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2822/2013, ponente: María LOURDES Arastey Sahún, de 22 de abril de 2014 (TOL796.324)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1400/2012, ponente: Jordi Agustí Juliá, de 18 de abril de 2013 (TOL3.879.633)
5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 3711/2011, ponente: Jordi Agustí Juliá, de 4 de diciembre de 2012 (TOL3.059.581)
6. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3416/2011, ponente: Antonio Martín Valverde, de 28 de marzo de 2012 (TOL3.303.001)
7. Tribunal Supremo, Num de Rec. 2792/2011, de 28 de febrero de 2012 (TOL2.494.396)
8. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1728/2011, ponente: José Luis Gil Olmo López, de 7 de diciembre de 2011 (TOL3.331.523)
9. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1166/2011 - Ponente: Jesús Souto Prieto, de 20 de septiembre de 2011 (TOL3.393.402)
10. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1179/2010, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, de 29 de marzo de 2011 (TOL3.351.008)
11. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2946/2010, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, de 24 de febrero de 2011, (TOL3.310.205)
12. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 2018/2010, Ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 24 de enero de 2011 (TOL2.042.700)
13. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 1266/2010, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, de 9 de diciembre de 2010 (TOL2.036.588)
14. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 750/2009, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, de 26 de noviembre de 2009 (TOL3.346.043)
15. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 605/2009, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, de 17 de noviembre de 2009 (TOL2.148.098)
16. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1027 / 2008, Ponente: José Manuel López García de la Serrana, 27 de febrero de 2009 (TOL3.337.941)
17. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 322/2005, Ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 25 de septiembre de 2007 (TOL1.161.703)
18. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4970/2006, Ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 10 de julio de 2007 (TOL3.321.125)
19. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1731/2006, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 20 de marzo de 2007 (TOL3.310.588)
20. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3077/2005, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 7 de marzo de 2007 (TOL3.358.978)
21. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3205/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 28 de junio de 2005 (TOL718.936)
22. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1366/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 17 de enero de 2005 (TOL565.133)
23. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1843/2004, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, de 18 de noviembre de 2004 (TOL867.322)
24. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4168/2003, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, de 23 de septiembre de 2004 (TOL515.504)

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line:

5 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Cuarta, Num. Rec.: 1884/2007, ponente: Enrique Lecumberri Martí, de 13 de mayo de 2011 (TOL2.124.209)
2. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Octava, Num. Rec.: 251/2006, ponente: José Díaz Delgado, de 9 de julio de 2009 (TOL1.577.539)

3. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 4429/2004, Ponente: Margarita Robles Fernández, de 26 de junio de 2008 (TOL1.340.324)
4. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, Num. Rec.: 2988/2006, ponente: Fernando Ledesma Bartret, de 30 de mayo de 2008 (TOL1.324.405)
5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1862/2000, de 24 de mayo de 2004 (TOL502.415)

«Alcoholemia»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ

3 documentos

1. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº Recurso: 1190/2010, de 14 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 12025/2010)
2. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Fernando Salinas Molina, nº Recurso: 166/2009, de 29 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 15775/2009)
3. Sentencia Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: José María Botana López, nº Recurso: 647/2005, de 3 de abril de 2006 (ROJ: STS 3542/2006)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line

3 documentos

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Jurisdicción, Social 2, Num. Rec.: 1190/2010, Ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 14 de septiembre de 2010 (TOL3.299.371)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 29 de octubre de 2009 (TOL1.748.946)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 647/2005, ponente: José María Botana López, de 3 de abril de 2006 (TOL956.287)

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ

0 documentos

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line

0 documentos

«Alcoholismo»

Resultados jurisdicción social en CENDOJ

17 documentos

1. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº Recurso: 1768/2013, de 5 de diciembre de 2013 (ROJ: ATS 12658/2013)
2. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 2473/2012, de 5 de febrero de 2013 (ROJ:ATS 1756/2013)
3. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 1661/2012, de 22 de enero de 2013 (ROJ: ATS 1271/2013)
4. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 1142/2012, de 13 de septiembre de 2012 (ROJ: ATS 9299/2012)
5. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Milafros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 3317/2011, de 11 de abril de 2012 (ROJ: ATS 4642/2012)
6. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº Recurso: 1985/2011, de 20 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4835/2012)
7. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº Recurso: 2946/2010, de 24 de febrero de 2011 (ROJ: ATS 3494/2011)
8. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 1805/2007, de 16 de julio de 2009 (ROJ: ATS 11930/2009)
9. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 3799/2007, de 19 de junio de 2008 (ROJ: ATS 7274/2008)
10. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 274/2007, de 27 de septiembre de 2007 (ROJ: ATS 14747/2007)
11. Sentencia Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº Recurso: 322/2005, de 25 de septiembre de 2007 (ROJ: STS 6564/2007)

12. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Gil Suárez, nº Recurso: 3745/2006, de 18 de julio de 2007 (ROJ: ATS 12320/2007)
13. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 3034/2006, de 24 de abril de 2007 (ROJ: ATS 8267/2007)
14. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº Recurso: 1731/2006, de 20 de marzo de 2007 (ROJ: ATS 6066/2007)
15. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 1662/2005, de 20 de julio de 2006 (ROJ: ATS 14361/2006)
16. Sentencia Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Gil Suárez, nº Recurso: 5249/2004, de 14 de marzo de 2006 (ROJ: STS 2476/2006)
17. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 4632/2003, de 9 de septiembre de 2004 (ROJ: ATS 9970/2004)

Resultados jurisdicción social en Tiran on line**11 documentos**

1. Tribunal Supremo, Sección Primera, Num. Rec.: 1768/2013, ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 5 de diciembre de 2013 (TOL4.143.101)
2. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2473/2012, ponente: Jesús Souto Prieto, de 5 de febrero de 2013 (TOL3.876.647)
3. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1661/2012, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, de 22 de enero de 2013 (TOL3.879.509)
4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1142/2012, ponente: Antonio Martín Valverde, de 13 de septiembre de 2012 (TOL3.379.016)
5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1985/2011, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 20 de marzo de 2012 (TOL3.339.893)
6. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 2946/2010, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, de 24 de febrero de 2011 (TOL3.310.205)
7. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1805/2007, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, de 16 de julio de 2009 (TOL3.382.709)
8. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 322/2005, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 25 de septiembre de 2007 (TOL1.161.703)
9. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3034/2006, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 24 de abril de 2007 (TOL3.311.585)
10. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1731/2006, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 20 de marzo de 2007 (TOL3.310.588)
11. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1662/2005, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, de 20 de julio de 2006 (TOL3.398.232)

Resultados jurisdicción administrativa en CENDOJ**3 documentos**

1. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan José González Rivas, nº Recurso: 117/2009, de 14 de octubre de 2010(ROJ: STS 5224/20130)
2. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Margarita Robles Fernández, nº Recurso: 4429/2004, de 26 de junio de 2008 (ROJ: STS 3160/2008)
3. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Margarita Robles Fernández, nº Recurso: 4672/2002, de 21 de diciembre de 2006 (ROJ: STS 7864/2006)

Resultados jurisdicción administrativa en Tiran on line**3 documentos**

1. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Séptima, Num. Rec.: 117/2009, ponente: Juan José González Rivas, de 14 de octubre de 2010 (TOL1.975.120)
2. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 4429/2004, ponente: Margarita Robles Fernández, de 26 de junio de 2008 (TOL1.340.324)
3. Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Sexta, Num. Rec.: 4672/2002, ponente: Margarita Robles Fernández, de 21 de diciembre de 2006 (TOL1.022.783)

8.3.- ANEXO II. F.- Relación cronológica de resoluciones judiciales francesas sobre consumo de alcohol y trabajo, después de aplicar los criterios de cribado de resultados

El **anexo II. F** presenta la relación cronológica de resoluciones judiciales francesas correspondientes al periodo de tiempo desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2014 emitidas por la sala social de la *Cour de Cassation* para la jurisdicción social (8.3.1) y por el *Conseil d'État* para la jurisdicción administrativa (8.3.2), después de aplicar los criterios de repetición entre buscadores jurisprudenciales, de repetición entre voces y de validez referidos correlativamente en los resultados 8, 9 y 10 del apartado 4 de esta tesis (páginas 55 y 58).

8.3.1.- Resultados en la jurisdicción social francesa

2014

1. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995, Inédit
2. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793, Publié au bulletin
3. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.900, Inédit
4. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-113.757, Inédit
5. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.458, Inédit
6. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.985, Inédit
7. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117, Inédit

2013

8. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.132, Inédit
9. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.915, Inédit
10. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-17.182
11. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.878, Inédit
12. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343, Inédit
13. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.652, Inédit
14. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566, Inédit

2012

15. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.387, Inédit
16. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668, Inédit
17. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155, Inédit
18. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.884 11-12.889 11-12.914, Inédit
19. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.914, Inédit
20. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500, Inédit
21. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.208, Inédit
22. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986, Inédit
23. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.496, Inédit
24. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909, Inédit
25. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-10.382, Publié au bulletin
26. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832, Inédit
27. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.114, Inédit

2011

28. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713, Inédit
29. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-21.560, Inédit
30. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-19.435, Publié au bulletin
31. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162 10-30.163 10-30.164 10-30.165 10-30.166 10-30.167 10-30.168 10-30.169 10-30.170 10-30.171, Publié au bulletin
32. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.170, Inédit
33. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020, Inédit
34. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.742, Inédit
35. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.079, Publié au bulletin

2010

36. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-42.267, Inédit
37. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44.661, Inédit
38. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603, Inédit
39. Cour de Cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, n° 08-45.323
40. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411, Inédit

2009

41. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984, Inédit
42. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466, Publié au bulletin
43. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493, Inédit
44. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198, Inédit
45. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.304, Inédit
46. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513, Inédit
47. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294, Inédit
48. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-42.071, Inédit
49. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511, Inédit
50. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.159, Inédit
51. Cour de cassation, chambre sociale, 10 mars 2009, n° 07-44.092
52. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, n° 07-44.172

2008

53. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.426, Inédit
54. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.212, Inédit

2006

55. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 septembre 2006, 05-42.277, Inédit
56. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2006, 03-47.478, Inédit
57. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2006, 04-40.915, Inédit

2005

58. Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44.773, Inédit
59. Cour de Cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404, Inédit
60. Cour de Cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.082, Inédit
61. Cour de Cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44.338, Inédit

2004

62. Cour de Cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.000, Publié au bulletin

8.3.2.- Resultados en la jurisdicción administrativa francesa

2010

1. Conseil d'Etat, 2 juillet 2010, n° 322521

2006

2. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17/05/2006, 268938, Publié au recueil Lebon
3. Conseil d'État, Section du Contentieux, 01/02/2006, 271676, Publié au recueil Lebon

8.4.- ANEXO II.E.- Relación cronológica de resoluciones judiciales españolas sobre consumo de alcohol y trabajo, después de aplicar los criterios de cribado de resultados

El **anexo II.E.** presenta la relación cronológica de resoluciones judiciales españolas correspondientes al periodo de tiempo desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2014 emitidas por la Sala Social del Tribunal Supremo para la jurisdicción social¹, después de aplicar los criterios de repetición entre buscadores jurisprudenciales, de repetición entre voces y de validez referidos correlativamente en los resultados 8, 9 y 10 del apartado 4 de esta tesis (páginas 55 a 59).

2014

1. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Miguel Ángel Luelmo Millán, nº Recurso: 392/2013, de 6 de mayo de 2014 (ROJ: STS 3298/2014)
2. Auto de Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Fernando Salinas Molina, nº de recurso 123/2014, de 7 de mayo de 2014 (TOL4.417.281)
3. Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Lourdes Arastey Sahún, nº Recurso: 2822/2013, de 22 de abril de 2014 (TOL4.405.171)
4. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Miguel Ángel Luelmo Millán, nº recurso: 1965/2013, de 9 de abril de 2014 (ROJ: ATS 4178/2004)

2013

5. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Rosa María Viroljés Piñol, nº recurso 1768/2013, de 5 de diciembre de 2013 (ROJ: ATS12658/2013)
6. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel García de la Serrana, nº recurso: 938/2013, de 26 de noviembre de 2013 (ROJ: ATS 12254/2013)
7. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa Mará Viroles Piñol, nº recurso: 62/2013, de 12 de noviembre de 2013 (ROJ: ATS /2013)
8. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, nº recurso: 717/2012, de 3 de octubre de 2013 (ROJ: STS 632/2013)
9. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº recurso: 415/2013, de 10 de septiembre de 2013 (ROJ: ATS 8581/2013)
10. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 474/2013, de 10 de septiembre de 2013 (ROJ: ATS 8970/2013)
11. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº recurso: 420/2013, de 25 de junio de 2013 (ROJ: ATS 7447/2013)
12. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Lourdes Arastey Sahún, nº recurso: 1906/2012, de 29 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 6252/2013)
13. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Souto Prieto, nº recurso: 2329/2012, de 28 de mayo de 2013 (ROJ: ATS5941/2013)
14. Auto Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso 6/2013, de 7 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 4584/2013)
15. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jordí Agustí Juliá, nº recurso: 1400/2012, de 18 de abril de 2013 (TL3.879.633)
16. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde nº recurso: 1722/2012, de 26 de febrero de 2013 (ROJ: ATS 2303/2013)
17. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 2473/2012, de 5 de febrero de 2013 (ROJ: ATS 1756/2013)
18. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº recurso: 1661/2012, de 22 de enero de 2013 (ROJ: ATS 1271/2013)

¹ No se han encontrado resultados válidos para la jurisdicción contencioso administrativa.

2012

19. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso: 1649/2012, de 5 de diciembre de 2012 (ROJ: ATS 12706/2012)
20. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jordí Agustí Juliá, nº recurso: 3711/2011, de 4 de diciembre de 2013 (TOL3.059.581)
21. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Gilolmo López, nº recurso: 1402/2012, de 27 de noviembre de 2012 (ROJ: ATS 8581/2013)
22. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº recurso: 648/2012, de 11 de octubre de 2012 (ROJ: ATS 10998/2012)
23. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso: 1142/2012, de 13 de septiembre de 2012 (ROJ: ATS 9299/2012)
24. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, nº recurso: 2138/2011, de 17 de mayo de 2012 (ROJ: ATS 6494/2012)
25. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 3317/2011, de 11 de abril de 2012 (ROJ: ATS 4642/2012)
26. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec: 3416/2011, ponente: Antonio Martín Valverde, de 28 de marzo de 2012 (TOL3.303.001)
27. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 2934/2011, de 27 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 5135/2012)
28. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Fernando de Castro Fernández, nº Recurso: 1985/2011, de 20 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4835/2012)
29. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburugaga, nº recurso: 2961/2011, de 7 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4659/2012)
30. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº recurso: 2558/2011, de 9 de febrero de 2012 (ROJ: ATS 1718/2012)
31. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº recurso: 977/2011, de 31 de enero de 2012 (ROJ: ATS 1400/2012)

2011

32. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1728/2011, ponente: José Luis Gil Olmo López, de 7 de diciembre de 2011 (TOL3.331.523)
33. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec.: 4691/2010, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 3 de noviembre de 2011 (TOL2.304.557)
34. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jordí Agustí Julia, nº de recurso: 3540/2010, de 8 de septiembre de 2011 (ROJ: ATS 9780/2011)
35. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1166/2011, ponente: Jesús Souto Prieto, de 20 de septiembre de 2011 (TOL3.393.402)
36. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Segoviano Astaburuaga, nº Recurso: 2601/2010, de 11 de abril de 2011 (ROJ: STS 2280/2011)
37. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Souto Prieto, nº recurso: 3325/2010, 29 de marzo de 2011 (ROJ: ATS 4374/2011)
38. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1179/2010, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, de 29 de marzo de 2011 (TOL3.351.008)
39. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº recurso: 2946/2010, de 24 de febrero de 2011 (ROJ: ATS 3494/2011)
40. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 2018/2010, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 24 de enero de 2011 (TOL2.042.700)

2010

41. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso: 1376/2010, de 23 de noviembre de 2010 (ROJ: ATS 15399/2010)
42. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº de recurso: 716/2010, de 9 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 11687/2010)
43. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 187/2010, 9 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 11023/2010)
44. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº Recurso: 3561/2009, de 20 de julio de 2010 (ROJ: ATS 11993/2010)
45. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso: 4251/2009, de 8 de junio de 2010 (ROJ: ATS 9801/2010)
46. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Lourdes Arastey Sahun, nº recurso 2155/2009, de 28 de abril de 2010(ROJ: ATS 6987/2010)
47. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano, nº recurso 1183/2009, de 25 de febrero de 2010 (ROJ: ATS 3267/2010)

2009

48. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº recurso 1531/2009, de 9 de diciembre de 2009 (ROJ: ATS 17768/2009)
49. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano, nº recurso 605/2009, de 17 de noviembre de 2009 (ROJ: ATS 18438/20190)
50. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº Recurso: 166/2009, de 29 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 15775/2009)
51. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso: 3381/2008, de 13 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 14873/2009)
52. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 430/2009, ponente: Jesús Souto Prieto, de 17 de septiembre de 2009 (TOL3.374.264)
53. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 1805/2007, de 16 de julio de 2009 (ROJ: ATS 11930/2009)
54. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente José Luis Gilolmo López, nº recurso: 3954/2008, de 28 de mayo de 2009 (ROJ: ATS 9129/2009)
55. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Joaquín Samper Juan, nº recurso: 3211/2008, de 28 de mayo de 2009 (TOL3.367.447)
56. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Benigno Varela Autran, nº recurso: 3606/2008, de 29 de abril de 2009, (ROJ: ATS 7823/2009)
57. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel López García de la Serrana, nº recurso: 1027/2008, de 27 de febrero de 2009 (ROJ: ATS 2475/2009)
58. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.1987/2008, ponente Rosa María Virolés Piñol, de 10 de febrero de 2009 (TOL3.372.431)
59. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 2885/2007, de 3 de febrero de 2009 (ROJ: ATS 2475/2009)
60. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Aus-tran, nº recurso: 1454/2008, de 13 de enero de 2009 (ROJ: ATS 641/2009)

2008

61. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Mariano Sampedro Corral, nº recurso: 4036/2007, de 4 de diciembre de 2008 (ROJ: ATS 13776/2008)
62. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso 1463/2008, de 26 de noviembre de 2008 (ROJ: ATS 14475/2008)

63. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luisa Segoviano As-taburuaga, nº recurso: 3101/2007, de 11 de septiembre de 2008 (ROJ: ATS 8437/2008)
64. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 3929/2007, de 17 de julio de 2008 (ROJ: ATS 7437/2008)
65. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Joaquín Samper Juan, nº Recurso: 4288/2007, de 8 de julio de 2008 (ROJ: ATS 7304/2008)
66. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 3799/2007, de 19 de junio de 2008 (ROJ: ATS 7274/2008)

2007

67. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 274/2007, de 27 de septiembre de 2007 (ROJ: ATS 14747/2007)
68. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Núm. Rec. 322/2005, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 25 de septiembre de 2007 (TOL1.161.703)
69. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 5452/2005, de 25 de septiembre de 2012 (ROJ: ATS 7151/2007)
70. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4970/2006, Ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 10 de julio de 2007(TOL3.321.125)
71. Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Gil Suárez, nº Recurso: 3745/2006, de 18 de julio de 2007 (ROJ: ATS 12320/2007)
72. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 1208/2006, de 26 de abril de 2007 (ROJ: ATS 8483/2007)
73. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 3034/2006, de 24 de abril de 2007 (ROJ: ATS 8267/2007)
74. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec. 1731/2006, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 20 de marzo de 2007 (TOL3.310.588)
75. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Jurisdicción: Social, Num. Rec.: 3077/2005, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 7 de marzo de 2007 (TOL3.358.978)
76. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº Recurso: 5435/2004, de 23 de enero de 2007 (ROJ: STS 890/2007)
77. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Mariano Sampedro Corral, nº recurso: 3967/2005, de 10 de enero de 2007(ROJ: ATS 2138/2007)

2006

78. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 1662/2005, de 20 de julio de 2006 (ROJ: ATS 14361/2006)
79. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº Recurso: 3905/2005, de 18 de julio de 2006 (ROJ: ATS 12611/2006)
80. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº recurso: 3492/2005, de 6 de junio de 2006 (ROJ: ATS 11019/2006)
81. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso: 2918/2005, de 18 de mayo de 2006 (ROJ: ATS 9890/2006)
82. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José María Botana López, nº Recurso: 647/2005, de 3 de abril de 2006 (ROJ: ATS 3542/2006)
83. Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso 3433/2005, de 28 de marzo de 2006 (ROJ: ATS 6414/2006)
84. Sentencia Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Gil Suárez, nº Recurso: 5249/2004, de 14 de marzo de 2006 (ROJ: STS 2476/2006)
85. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 4617/2004, de 31 de enero de 2006 (ROJ: STS 550/20106)

2005

86. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 5229/2004, ponente: José María Botana López, de 28 de noviembre de 2005 (TOL796.324)
87. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4367/2004, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, de 22 de noviembre de 2005 (TOL781.766)
88. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 5042/2004, de 25 de octubre de 2005 (ROJ: ATS 12845/2005)
89. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Irbalucea, nº Recurso: 2684/2004, de 15 de septiembre de 2005 (ROJ: ATS 10821/2005)
90. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Autrán, nº recurso: 1557/2004, de 21 de julio de 2005 (TOL675.760)
91. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3205/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 28 de junio de 2005 (TOL718.936)
92. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 3873/2004, de 14 de junio de 2005 (ROJ: ATS 7419/2005)
93. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 1454/2004, de 19 de abril de 2005 (ROJ: ATS 4635/2005)
94. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso: 1626/2004, de 29 de marzo de 2005 (ROJ: ATS 3581/2005)
95. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso: 1319/2004, de 27 de enero de 2005 (ROJ: ATS 923/2005)
96. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1366/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 17 de enero de 2005 (TOL565.133)
97. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Autran, nº recurso: 1367/2004, de 11 de enero de 2005 (ROJ: ATS 54/2005)

2004

98. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1712/2004, ponente: Antonio Martín Valverde, de 22 de noviembre de 2004 (TOL550.710)
99. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1843/2004, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, de 18 de noviembre de 2004 (TOL867.322)
100. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4168/2003, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, de 23 de septiembre de 2004 (TOL515.504)
101. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº recurso: 5743/2003, de 8 de septiembre de 2004 (ROJ: ATS 9914/2004)
102. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 6296/2003, de 19 de julio de 2004 (ROJ: ATS 9365/2004)
103. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº recurso: 5169/2003, de 30 de abril de 2004 (ROJ: ATS 55443/2004)
104. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso: 1427/2003, de 5 de febrero de 2004 (ROJ: ATS 1272/2004)
105. Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Bonete Desdentado, nº Recurso: 4375/2002, de 27 de enero de 2004 (ROJ: ATS 884/2004)
106. Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº recurso: 1382/2003, de 23 de enero de 2004 (ROJ: ATS 704/2004)

8.5.- ANEXO III.- Resoluciones judiciales francesas y españolas sobre consumo de alcohol y trabajo acorde a criterios médico legales

1.- CONSUMO DE ALCOHOL Y DESPIDO DESCPLINARIO

El consumo de alcohol en la esfera privada motiva el despido disciplinario por trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza

CONSUMO DE ALCOHOL EN LA ESFERA PRIVADA Y REPERCUSIÓN NEGATIVA EN LA EMPRESA

- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Miguel Ángel Luelmo Millán, nº recurso: 1965/2013, de 9 de abril de 2014 (ROJ: ATS 4178/2004)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117, Inédit
- Cour de Cassation civile, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.878, Inédit
- Auto Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso 6/2013, de 7 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 4584/2013)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343, Inédit
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.079, Publié au bulletin
- Conseil d'Etat, 2 juillet 2010, nº 322.521
- Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano, nº recurso 1183/2009, de 25 de febrero de 2010 (ROJ: ATS 3267/2010)
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466, Publié au bulletin
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-42.071, Inédit
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.212, Inédit
- Conseil d' État, 1 février 2006, 271.676, Inédit
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 mars 2005, 03-44.388, Inédit

CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA ESFERA PRIVADA CON VEHÍCULO DE LA EMPRESA

- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 474/2013, de 10 de septiembre de 2013 (ROJ: ATS 8970/2013)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-11.208, Inédit
- Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº recurso 1531/2009, de 9 de diciembre de 2009 (ROJ: ATS 17768/2009)
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.304, Inédit
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.1987/2008, ponente Rosa María Virolés Piñol, de 10 de febrero de 2009 (TOL3.372.431)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Mariano Sampedro Corral, nº recurso: 4036/2007, de 4 de diciembre de 2008 (ROJ: ATS 13776/2008)
- Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso 1463/2008, de 26 de noviembre de 2008 (ROJ: ATS 14475/2008)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Autrán, nº recurso: 1557/2004, de 21 de junio de 2005 (TOL675.760)

CONSUMO DE ALCOHOL EN LA ESFERA PRIVADA CON TAREA PROFESIONAL ASIGNADA

- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.742, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294, Inédit

El consumo de alcohol durante la incapacidad temporal**CONSUMO DE ALCOHOL INCOMPATIBLE CON EL TRATAMIENTO MÉDICO PRESCRITO**

- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num Rec. 1400/2012, ponente: Jordí Agustí Juliá, de 18 de abril de 2013 (TOL3.879.633)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 2018/2010, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, de 24 de enero de 2011 (TOL2.042.700)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513, Inédit

CONSUMO DE ALCOHOL INCOMPATIBLE CON LA ENFERMEDAD PADECIDA

- Auto de Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Fernando Salinas Molina, nº de recurso 123/2014, de 7 de mayo de 2014 (TOL4.417.281)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec. 3416/2011, ponente: Antonio Martín Valverde, de 28 de marzo de 2012 (TOL3.303.001)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Jurisdicción: Social, Num. Rec.: 3077/2005, ponente: Mariano Sampedro Corral, de 7 de marzo de 2007 (TOL3.358.978)

La conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas motiva el despido disciplinario por embriaguez habitual**DURANTE LA JORNADA LABORAL Y EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES PROFESIONALES**

- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, nº recurso: 2138/2011, de 17 de mayo de 2012 (ROJ: ATS 6494/2012)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso: 3381/2008, de 13 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 14873/2009)
- Conseil d'Etat, 17 mai 2006, 268.938, Publié au recueil Lebon

PROFESIONALES DE LA CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-17.182, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº recurso: 648/2012, de 11 de octubre de 2012 (ROJ: ATS 10998/2012)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano As-taburugaga, nº recurso: 2961/2011, de 7 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4659/2012)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº recurso: 977/2011, de 31 de enero de 2012 (ROJ: ATS 1400/2012)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº recurso: 1376/2010, de 23 de noviembre de 2010 (ROJ: ATS 15399/2010)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso: 4251/2009, de 8 de junio de 2010 (ROJ: ATS 9801/2010)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.411, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.426, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.277, Inédit
- Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso 3433/2005, de 28 de marzo de 2006 (ROJ: ATS 6414/2006)
- Cour de Cassation, civile, chambre sociale, 2 febrero 2005, 04-40.915, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Autran, nº recurso: 1367/2004, de 11 de enero de 2005 (ROJ: ATS 54/2005)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº recurso: 5743/2003, de 8 de septiembre de 2004 (ROJ: ATS 9914/2004)

Consumo de alcohol en el trabajo**INTRODUCIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL TRABAJO**

- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.884, 11-12.889, 11-12.914, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713, Inédit
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num Rec. 3211/2008, ponente: Joaquín Samper Juan, de 28 de mayo de 2009 (TOL3.367.447)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511, Inédit

CONSUMO DE ALCOHOL SIN EMBRIAGUEZ

- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, nº recurso: 415/2013, de 10 de septiembre de 2013 (ROJ: ATS 8581/2013)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde nº recurso: 1722/2012, de 26 de febrero de 2013 (ROJ: ATS 2303/2013)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.387, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668, Inédit
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec. 1402/2012, ponente: José Luis Gilolmo López, de 27 de noviembre de 2012 (TOL3.361.102)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.914, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.496, Inédit
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 4691/2010, ponente: Luis Fernando de Castro Fernández, de 3 de noviembre de 2011 (TOL2.304.557)
- Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano, nº recurso 605/2009, de 17 de noviembre de 2009 (ROJ: ATS 18438/20190)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel López García de la Serrana, nº recurso: 1027/2008, de 27 de febrero de 2009 (ROJ: ATS 3296/2009)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.082, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº recurso: 5169/2003, de 30 de abril de 2004 (ROJ: ATS 55443/2004)

La embriaguez habitual en el trabajo motivo de despido disciplinario**ESTADO DE EMBRIAGUEZ**

- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793, Publié au bulletin
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.757, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.985, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano As-taburuaga, nº recurso: 420/2013, de 25 de junio de 2013 (ROJ: ATS 7447/2013)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº recurso: 1649/2012, de 5 de diciembre de 2012 (ROJ: ATS 12706/2012)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.832, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jordi Agustí Julia, nº de recurso: 3540/2010, de 8 de septiembre de 2011 (ROJ: ATS 9780/2011)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162, Publié au bulletin
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Souto Prieto, nº recurso: 3325/2010, 29 de marzo de 2011 (ROJ: ATS 4374/2011)

- Cour de Cassation , civile, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020,
- Cour de Cassatio, civile, chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-42.267, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 187/2010, 9 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 11023/2010)
- Auto Tribunal Supremo Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Lourdes Arastey Sahun, nº recurso 2155/2009, de 28 de abril de 2010 (ROJ: ATS 6987/2010)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente José Luis Gilolmo López, nº recurso: 3954/2008, de 28 de mayo de 2009 (ROJ: ATS 9129/2009)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente Benigno Varela Autran, nº recurso: 3606/2008, de 29 de abril de 2009 (ROJ: ATS 7823/2009)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.159, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº recurso: 3492/2005, de 6 de junio de 2006 (ROJ: ATS 11019/2006)
- Cour de Cassation, civile, chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44.773, Inédit
- Cour de Cassation, civile, chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso: 1626/2004, de 29 de marzo de 2005 (ROJ: ATS 3581/2005)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.000, Publié au bulletin

PRESUNCIÓN DE ESTADO DE EMBRIAGUEZ

- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 décembre de 2011, 10-21.560, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: José Manuel López García de la Serrana, nº de recurso: 716/2010, de 9 de septiembre de 2010 (ROJ: ATS 11687/2010)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493, Inédit
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Benigno Varela Austran, nº recurso: 1454/2008, de 13 de enero de 2009 (ROJ: ATS 641/2009)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Mario Sampedro Corral, nº recurso: 3967/2005, de 10 de enero de 2007 (ROJ: ATS 2138/2007)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº recurso: 2918/2005, de 18 de mayo de 2006 (ROJ: ATS 9890/2006)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso: 1319/2004, de 27 de enero de 2005 (ROJ: ATS 923/2005)

Alcohol dependencia y despido disciplinario

- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Lourdes Arastey Sahun, nº recurso: 1906/2012, de 29 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 6252/2013)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº recurso: 2558/2011, de 9 de febrero de 2012 (ROJ: ATS 1718/2012)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº recurso: 2885/2007, de 3 de febrero de 2009 (ROJ: ATS 2475/2009)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº recurso: 1427/2003, de 5 de febrero de 2004 (ROJ: ATS 1272/2004)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº recurso: 1382/2003, de 23 de enero de 2004 (ROJ: ATS 704/2004)

Regulación de la embriaguez habitual en los convenios colectivos

- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº Recurso: 62/2013, de 12 de noviembre de 2013 (ROJ: ATS 62/2013)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-10.382, Publié au bulletin
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.323

2.- CONSUMO DE ALCOHOL Y ACOSO MORAL

Acoso o discriminación moral y ambiente laboral derivado del consumo de alcohol

DEL EMPRESARIO CONSUMIDOR DE ALCOHOL HACIA EL TRABAJADOR

- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.900, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.458, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092, Inédit

RUPTURA ABUSIVA DE LA RELACIÓN LABORAL

- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.132, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.652, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.114, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-19.435, Publié au bulletin Cour de Cassation, Civile, Chambre sociale, 10 de noviembre 2010, 08-44.661, Inedit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.170, Inédit

DE UN TRABAJADOR A OTRO TRABAJADOR

- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.915, Inédit
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.172, Inédit
- Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº Recurso: 3101/2007, de 11 de septiembre de 2008 (ROJ: ATS 8437/2008)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 5452/2005, de 25 de septiembre de 2007 (ROJ: ATS 7151/2007)
- Cour de Cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478, Inédit

3.- CONSUMO DE ALCOHOL Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Alcohol dependencia como situación laboral de asimilada al alta en la Seguridad Social

RECONOCIMIENTO DE ASIMILADA AL ALTA

- Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 1142/2012, de 13 de septiembre de 2012 (ROJ: ATS 9299/2012)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Francisco García Sánchez, nº Recurso: 3561/2009, de 20 de julio de 2010 (ROJ: ATS 11993/2010)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Sección Primera, Num. Rec. 322/2005, ponente: José Manuel López García de la Serrana, de 25 de septiembre de 2007 (TOL1.161.703)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 1662/2005, de 20 de julio de 2006 (ROJ: ATS 14361/2006)
- Sentencia Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Gil Suárez, nº Recurso: 5249/2004, de 14 de marzo de 2006 (ROJ: STS 2476/2006)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 3205/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 28 de junio de 2005 (TOL718.936)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 1454/2004, de 19 de abril de 2005 (ROJ: ATS 4635/2005)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1843/2004, ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, de 18 de noviembre de 2004 (TOL867.322)

EL CÁLCULO DEL PERÍODO DE CARENANCIA

- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel García de la Serrana, nº recurso: 938/2013, de 26 de noviembre de 2013 (ROJ: ATS 12254/2013)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 2329/2012, de 28 de mayo de 2013 (ROJ: ATS 5941/2013)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 1661/2012, de 22 de enero de 2013 (ROJ: ATS 1271/2013)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1366/2004, ponente: Juan Francisco García Sánchez, de 17 de enero de 2005 (TOL565.133)

Alcohol dependencia e incapacidad permanente

- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Juan Miguel Ángel Luelmo Millán, nº Recurso: 392/2013, de 6 de mayo de 2014 (ROJ: STS 3298/2014)
- Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Lourdes Arastey Sahún, nº Recurso: 2822/2013, de 22 de abril de 2014 (TOL796.324)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Rosa María Viroles Piñol, nº Recurso: 1768/2013, de 5 de diciembre de 2013 (ROJ: ATS 12658/2013)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1728/2011, ponente: José Luis Gil Olmo López, de 7 de diciembre de 2011 (TOL3.331.523)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1166/2011, ponente: Jesús Souto Prieto, de 20 de septiembre de 2011 (TOL3.393.402)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1179/2010, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, de 29 de marzo de 2011 (TOL3.351.008)
- Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº recurso: 2946/2010, de 24 de febrero de 2011 (ROJ: ATS 3494/2011)
- Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 1805/2007, de 16 de julio de 2009 (ROJ: ATS 11930/2009)
- Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 3929/2007, de 17 de julio de 2008 (ROJ: ATS 7437/2008)
- Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 3799/2007, de 19 de junio de 2008 (ROJ: ATS 7274/2008)
- Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 274/2007, de 27 de septiembre de 2007 (ROJ: ATS 14747/2007)
- Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Luis Gil Suárez, nº Recurso: 3745/2006, de 18 de julio de 2007 (ROJ: ATS 12320/2007)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4970/2006, Ponente: Rosa María Virolés Piñol, de 10 de julio de 2007 (TOL3.321.125)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4168/2003, ponente: Jesús Gullón Rodríguez, de 23 de septiembre de 2004 (TOL515.504)

EL ALCOHOL DEPENDENCIA COMO MODELO DE CONTRASTE PARA LA INCAPACIDAD

- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num Rec. 3711/2011, ponente: Jordí Agustí Juliá, de 4 de diciembre de 2012 (TOL3.059.581)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Ibarlucea, nº Recurso: 3317/2011, de 11 de abril de 2012 (ROJ: ATS 4642/2012)
- Auto Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1, ponente: Fernando de Castro Fernández, nº Recurso: 1985/2011, de 20 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 4835/2012)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 3034/2006, de 24 de abril de 2007 (ROJ: ATS 8267/2007)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec. 1731/2006, ponente: Víctor Eladio Fuentes López, de 20 de marzo de 2007 (TOL3.310.588)

Consumo de alcohol como imprudencia temeraria del trabajador**IMPRUDENCIA TEMERARIA Y PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD**

- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Souto Prieto, nº Recurso: 2473/2012, de 5 de febrero de 2013 (ROJ: ATS 1756/2013)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Fernando Salinas Molina, nº Recurso: 166/2009, de 29 de octubre de 2009 (ROJ: ATS 15775/2009)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 430/2009, ponente: Jesús Souto Prieto, de 17 de septiembre de 2009 (TOL3.374.264)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Joaquín Samper Juan, nº Recurso: 4288/2007, de 8 de julio de 2008 (ROJ: ATS 7304/2008)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Luis Ramón Martínez Garrido, nº Recurso: 1208/2006, de 26 de abril de 2007 (ROJ: ATS 8483/2007)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Víctor Eladio Fuentes López, nº Recurso: 3905/2005, de 18 de julio de 2006 (ROJ: ATS 12611/2006)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 5229/2004, ponente: José María Botana López, de 28 de noviembre de 2005 (TOL796.324)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 4367/2004, ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, de 22 de noviembre de 2005 (TOL781.766)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Mariano Sampedro Corral, nº Recurso: 5042/2004, de 25 de octubre de 2005 (ROJ: ATS 12845/2005)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Milagros Calvo Irbaluzea, nº Recurso: 2684/2004, de 15 de septiembre de 2005 (ROJ: ATS 10821/2005)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 3873/2004, de 14 de junio de 2005 (ROJ: ATS 7419/2005)
- Tribunal Supremo, Sala Cuarta, Num. Rec.: 1712/2004, ponente: Antonio Martín Valverde, de 22 de noviembre de 2004 (TOL550.710)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Gonzalo Moliner Tamborero, nº Recurso: 6296/2003, de 19 de julio de 2004 (ROJ: ATS 9365/2004)

CRITERIOS DE IMPRUDENCIA TEMERARIA DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

- Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Madrid, Sección 1, ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel, nº recurso: 717/2012, de 3 de octubre de 2013 (ROJ: ATS 704/2004)
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Desdentado Bonete, nº Recurso: 4617/2004, de 31 de enero de 2006 (ROJ: STS 550/20106)

Consumo de alcohol y prevención de riesgos laborales

- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Antonio Martín Valverde, nº Recurso: 2934/2011, de 27 de marzo de 2012 (ROJ: ATS 5135/2012)
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga, nº Recurso: 2601/2010, de 11 de abril de 2011 (ROJ: STS 2280/2011)
- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Jesús Gullón Rodríguez, nº Recurso: 5435/2004, de 23 de enero de 2007 (ROJ: STS 890/2007)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: José María Botana López, nº Recurso: 647/2005, de 3 de abril de 2006 (ROJ: ATS 3542/2006)
- Auto del Tribunal Supremo, Sala Social, Madrid, Sección 1 ponente: Aurelio Bonete Desdentado, nº Recurso: 4375/2002, de 27 de enero de 2004 (ROJ: ATS 884/2004)

8.6.- ANEXO IV.- Textos íntegros de las resoluciones judiciales francesas y españolas sobre consumo de alcohol y trabajo acorde a criterios médico legales

1.- CONSUMO DE ALCOHOL Y DESPIDO DISCIPLINARIO

El consumo de alcohol en la esfera privada motiva el despido disciplinario por trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza

CONSUMO DE ALCOHOL EN LA ESFERA PRIVADA Y REPERCUSIÓN NEGATIVA EN LA EMPRESA

Roj: Ats 4178/2014 - Ecli:Es:Ts:2014:4178a
 Id Cendoj: 28079140012014200798
 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
 Sede: Madrid
 Sección: 1
 Nº De Recurso: 1965/2013
 Nº De Resolución:
 Procedimiento: Social
 Ponente: Miguel Ángel Luelmo Millán
 Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a nueve de Abril de dos mil catorce.
 Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. MIGUEL ÁNGEL LUELMO MILLÁN.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Lérida se dictó sentencia en fecha 7 de marzo de 2012, en el procedimiento nº 557/2011 seguido a instancia de D. Bernardo contra TRANSEGRE S.L., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 19 de septiembre de 2012, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 26 de junio de 2013, se formalizó por la letrada D^a Yasmina González Gil en nombre y representación de D. Bernardo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada. Y por escrito de fecha 22 de julio de 2013 y para actuar ante esta Sala se designó al procurador D. Eduardo Moya Gómez.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 16 de enero de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo.

Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

La sentencia impugnada confirma la dictada en la instancia, que ha desestimado la demanda solicitando la declaración de despido nulo o, subsidiariamente, improcedente. Consta que el actor ha prestado servicios para la empresa demandada con una antigüedad de 02/05/89 y categoría de conductor, ostentando la condición de representante de los trabajadores; que el 03/03/11, sobre las 1:00 horas cuando se disponía a aparcar un turismo colisionó con otro vehículo, y practicada la prueba de alcoholemia, arrojó un resultado positivo; que la Guardia Urbana intervino cautelarmente su permiso de conducir, advirtiéndole que quedaba cautelarmente inhabilitado para conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta que las causas que motivan la inhabilitación hayan desaparecido; que no comentó nada en la empresa y continuo conduciendo con normalidad hasta el 21/06/11, en que dijo que al día siguiente no podría ir a trabajar porque tenía un juicio por una alcoholemia del mes de marzo; que recayó sentencia condenatoria el 22/06/11; que ese mismo día, el demandante se personó en la empresa y manifestó que le habían retirado el carnet durante 11 meses, quedándole 8 meses de cumplimiento de la pena y que el Juez le día había «regalado» 3 meses, por lo que la condena se le quedaba en 3 meses; que la empresa le concedió vacaciones, y tras la apertura de un expediente contradictorio, el 12/07/11 le entregó carta de despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. La sentencia de instancia mantiene que la conducta imputada al trabajador —conductor— consistente en ocultar a la empresa la retirada de su carnet de conducir y seguir conduciendo con normalidad constituye una transgresión de la buena fe contractual. Conclusión a la que también llega la Sala, razonando que los hechos constituyen una transgresión de la buena fe contractual, ya que siendo el demandante conductor de la demandada oculto lo ocurrido, lo que implica un abuso de confianza pues ha conducido con toda normalidad desde que fue inhabilitado para ello.

La sentencia referencial, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 29/05/01 (R. 619/01), declara la improcedencia del despido enjuiciado. Se trata de un supuesto en el que el actor, director de sucursal bancaria, fue despedido disciplinariamente por transgresión de la buena fe contractual, deslealtad, abuso de confianza y desobediencia. La Sala fundamenta su decisión en que el trabajador ha incurrido en tres incumplimientos contractuales distintos, pero carentes de la gravedad necesaria para justificar el despido. A tal efecto, razona que, si bien no comunicó al banco que iba a acceder al consejo de administración de una empresa antes de aceptarlo, para analizar si tal circunstancia podía generar una colisión de intereses, el incumplimiento no es del deber de no concurrir, sino de cumplimentar la instrucción recibida, pudiendo atribuirse la omisión a un simple descuido; que el haber realizado llamadas telefónicas desde el banco a la empresa antes indicada, si bien obedece a su propio interés pues no era cliente de la entidad y supone un incumplimiento al cargar a la demandada un coste que no le corresponde, constituye una conducta tipificada como falta grave; y la conducta imputada consistente en haber almacenado varios cientos de botellas particulares en el sótano del banco, también tiene encaje en la falta grave de interrupción o perturbación del servicio sin justificación legal.

De lo expuesto, se desprende que las sentencias comparadas no son contradictorias al diferir las conductas enjuiciadas y las circunstancias acreditadas en cada caso y, en consecuencia, distinta también la valoración que de ellas ha hecho cada Tribunal. Así, en la referencial se pondera, por una parte, que los incumplimientos en que incurrió el demandante, consistentes en realizar un gran número de llamadas telefónicas y haber

almacenado varios cientos de botellas particulares en el sótano del banco en que trabajaba constituyen falta grave; y, por otra, que el no haber comunicado al banco que iba a acceder a un consejo de administración antes de aceptarlo, para analizar si tal circunstancia podía generar una colisión de intereses, no afectaba al deber de no concurrir, sino de cumplimentar la instrucción recibida, pudiendo atribuirse la omisión a un simple descuido. Mientras que, en la recurrida el hecho que se imputa al trabajador —conductor— consistente en haber ocultado a la empresa la retirada por la autoridad de su carnet de conducir y seguir conduciendo con normalidad.

Por otra parte, la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del ET, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico [Sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (R. 1232/1990 y 2271/1991), 15 y 29 de enero de 1997 (R. 952/1996 y 3461/1995), 6 de Julio de 2004 (R. 5346/2003), 9 de julio de 2004 (R. 3496/2002), 24 de mayo de 2005 (R. 1728/04) y 3 de julio de 2007 (R. 2486/07)].

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada D^a Yasmina González Gil, en nombre y representación de D. Bernardo, representado en esta instancia por el procurador D. Eduardo Moya Gómez, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 19 de septiembre de 2012, en el recurso de suplicación número 3586/2012, interpuesto por D. Bernardo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Lérida de fecha 7 de marzo de 2012, en el procedimiento nº 557/2011 seguido a instancia de D. Bernardo contra TRANSEGRE S.L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du 15 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-22117
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00087
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée en 2005 sous contrat à durée déterminée par la société Sols propres en qualité d'agent de propreté; qu'ayant été licenciée le 31 décembre 2007 au motif qu'elle s'était vu retirer son permis de conduire, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA TROISIÈME BRANCHE:

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que chacun a droit au respect de sa vie privée; qu'un salarié ne peut être valablement licencié pour un motif tiré de sa vie privée que si son comportement a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise au regard de la fonction exercée; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, agent de propreté, la suspension de son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse en dehors de ses heures de travail, sans constater que la fonction même d'agent de propreté rendait indispensable la conduite d'un véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument délaissée, a constaté que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle de la salariée; que le moyen n'est pas fondé;

MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIÈRE BRANCHE:

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le décompte journalier des heures travaillées produit par elle à l'appui de sa demande n'apparaît pas avoir été établi au jour le jour, qu'il ne précise pas le motif des dépassements d'horaire, que l'employeur souligne que ce document comporte au moins quatre erreurs, l'intéressée ayant notamment compté des heures travaillées alors qu'elle était absente, que la société indique encore que le personnel ayant eu à remplacer la salariée a respecté l'horaire contractuel alors que celle-ci n'appliquait pas ses directives, et justifie lui en avoir plusieurs fois fait le reproche; qu'enfin, la salariée ne justifie pas que l'activité qui lui était confiée ne pouvait s'exécuter dans le temps imparti;

Attendu cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait produit un décompte journalier des heures travaillées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIÈME BRANCHE DU MOYEN:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet,

en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;

Condamne la société Sols propres aux dépens;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard, la somme de 3 000 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la société Sols propres, employeur, à l'encontre de madame X..., salariée, et d'avoir débouté celle-ci de ses demandes à l'encontre de l'employeur;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, les parties conviennent que madame X... a été embauchée pour une durée de travail de 117 heures mensuelles pouvant faire l'objet d'une augmentation; que le contrat de travail définit l'horaire journalier de la salariée; que madame X... produit à l'appui de sa demande un décompte journalier des heures travaillées; qu'outre que ce décompte n'apparaît pas avoir été établi au jour le jour, il ne précise pas le motif des dépassements d'horaires et comporte au moins 4 erreurs comme le souligne l'employeur, madame X... ayant notamment compté des heures travaillées alors qu'elle était absente; que par ailleurs, l'employeur indique que les salariés ayant eu à remplacer madame X... ont respecté l'horaire contractuel et précise que madame X... n'appliquait pas les directives de l'employeur, et justifie lui en avoir plusieurs fois fait le reproche; qu'en conséquence et à défaut pour madame X... de justifier que l'activité qui lui était confiée ne pouvait s'exécuter dans le temps imparti, sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas justifiée; que par courrier du 23 novembre 2007, madame X... a informé son employeur de la suspension de son permis de conduire, lui a demandé de regrouper ses heures le matin, ne pouvant plus exécuter les heures prévues au contrat de travail soit de 6h à 8h et de 18h à 20h ainsi que le samedi de 5h à 10h au motif qu'elle ne peut plus se déplacer ni conduire la voiture de la société; que la lettre de licenciement fait grief à madame X... de se trouver dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, faute de pouvoir se déplacer pour se rendre de son domicile au siège de l'entreprise, de son domicile ou du siège de l'entreprise sur un chantier ou d'un chantier à un autre, et ce en raison de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois; que l'employeur explique dans cette lettre que la suspension du permis de conduire gêne l'entreprise de par la nécessité de devoir procéder à son remplacement et qu'il n'est pas possible de regrouper ses heures de travail car celles-ci sont dictées par la demande des clients; qu'il ajoute que cette suspension pour conduite en état d'ivresse manifeste porte atteinte au sérieux et à la notoriété de l'entreprise du fait qu'elle est amenée à conduire un véhicule de la société dans le cadre de ses fonctions et par le risque qu'elle ferait courir à l'employeur par son comportement si devanture elle portait préjudice à des personnes ou à des biens; que madame X... soutient qu'elle n'avait pas l'obligation contractuelle d'avoir le permis de conduire; que son contrat de travail prévoit expressément au chapitre « obligations professionnelles » qu'elle devra respecter les trajets et les horaires des chantiers, les véhicules étant équipés du système VDO de contrôle; que cette obligation démontre que la conduite d'un véhicule de l'entreprise était une condition d'exécution de son travail et partant qu'en étant privée de son permis de conduire, elle ne peut plus exécuter sa prestation de travail conformément au contrat; qu'au demeurant, le seul fait pour madame X... de ne pouvoir se déplacer au siège de la société et donc de ne pouvoir exécuter son travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; que sur l'indemnité de préavis: que lorsque le salarié ne peut de son propre fait exécuter son préavis, aucune indemnité ne lui est dû; qu'en l'espèce, madame X... ne pouvant se rendre à son travail, elle se trouvait donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis et ne peut en conséquence réclamer d'indemnité à ce titre; que sur l'indemnité de licenciement, madame X... ayant plus de deux années d'ancienneté peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à 1/10ème de salaire par année d'ancienneté; que l'employeur produit le bulletin de salaire du mois de janvier 2008 sur lequel figure le paiement de cette indemnité pour la somme de 254,19 euros; que la demande à ce titre n'est pas fondée; que sur les indemnités journalières; qu'il résulte de la convention collective applicable aux relations contractuelles que les agents d'entretien ayant au

moins deux ans d'ancienneté peuvent prétendre à une indemnisation en cas de maladie; qu'en conséquence, madame X... ne peut réclamer un complément de salaire pour ses arrêts maladie antérieurs au 18 août 2007; que pour la période postérieure, l'employeur justifie avoir rempli ses obligations; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4 et p. 5);

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par la salariée que par l'employeur, de nature à justifier les horaires réalisés et convenus; que le tableau récapitulatif produit par la salariée, confectionné à partir de ses notes personnelles, n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, et n'est pas à lui seul probant, d'autant plus que l'horaire de travail est expressément établi dans le contrat signé entre les parties; que madame X... n'apporte aucun élément objectif suffisant des heures supplémentaires réclamées, ni même d'indices permettant d'apprécier qu'elle les ait réalisées, et qu'il n'est pas établi que l'employeur lui ait demandé d'effectuer des dépassements d'horaires, ni que ceux-ci aient été nécessaires pour réaliser le travail contractuellement convenu et fixé; qu'il appartenait à la salariée de se présenter sur les chantiers de travail auxquels elle était affectée, ou, tout au moins, au siège de l'entreprise pour être véhiculée, son contrat de travail prévoyant expressément l'obligation de respecter les trajets inscrits sur les feuilles de planning avec les véhicules fournis; que la salariée, par courrier du 23 novembre 2007, a indiqué à son employeur qu'elle ne pouvait plus se déplacer pour effectuer ses obligations contractuelles, et n'a effectué aucune démarche ni proposition pour adapter ses conditions de transports eu égard à la suspension de permis prononcée à son encontre, imposant à son employeur un remplacement au pied levé et des perturbations préjudiciables pour le fonctionnement de l'entreprise, alors qu'il est au contraire révélé par les pièces qu'elle produit et ses conclusions, qu'elle pouvait utiliser son scooter pour ce faire; qu'aucune obligation ne peut être imposée à un employeur d'adapter les horaires et ses modalités de fonctionnement de l'entreprise aux difficultés personnelles rencontrées par une employée dont le permis de conduire a été suspendu pour graves infractions, par ailleurs réitérées; que le retrait du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, même en dehors du temps de travail, et alors que les déplacements de la salariée sont nécessaires pour l'exécution du contrat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant plus que cet état d'ébriété porte atteinte à l'image de l'entreprise, avec des répercussions commerciales pour les clients qui lui confient les clefs de leurs bureaux et office; que la salariée sanctionnée par le retrait de son permis et alors que la conduite d'un véhicule est nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle est matériellement dans l'impossibilité d'exécuter, ayant par ailleurs dissimulé à son employeur ces possibilités de déplacement en scooter, et ayant au contraire affirmé par courrier du 23 novembre 2007 être dans l'impossibilité totale de se déplacer (jugement, p. 4 et 5, § 1);

- 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le nombre d'heures de travail accomplies est présumé établi au travers de la production, par le salarié, d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, que celle-ci produisait certes à l'appui de sa demande un décompte journalier des heures travaillées, mais que ce décompte n'apparaissait pas établi au jour le jour, ni ne précisait le motif des dépassements d'horaires, sans indiquer en quoi l'absence de mention des motifs des heures supplémentaires effectuées ou d'établissement d'un décompte journalier excluait que la demande de la salariée puisse être regardée comme suffisamment étayée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail;
- 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, que le décompte journalier des heures travaillées qu'elle produisait comportait au moins quatre erreurs, sans préciser en quoi consistaient ces prétendues erreurs ni indiquer les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile;
- 3°/ ALORS, ENFIN, QUE chacun a droit au respect de sa vie privée; qu'un salarié ne peut être valablement licencié pour un motif tiré de sa vie privée que si son comportement a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise au regard de la fonction exercée; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, agent de propreté, la suspension de son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse en dehors de ses heures de travail, sans constater que la fonction même d'agent de propreté rendait indispensable la conduite d'un véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 4 octobre 2011.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 10 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-16878
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01338
Non publié au bulletin
Cassation
M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 décembre 1975 en qualité d'inséminateur par la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle, devenue la société Geniatest coopérative, a été licencié pour faute grave, le 6 février 2009;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie à la suite d'un accident de la circulation et que son permis de conduire lui avait été immédiatement retiré, retient que le motif énoncé dans la lettre de licenciement portait bien sur le comportement du salarié dont l'intempérance grave avait conduit à la suspension de son permis de conduire pendant une longue durée, l'empêchant de poursuivre normalement son activité, ce qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise mais constituait assurément une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l'attribution principale de l'intéressé impliquait des déplacements habituels à l'aide d'un véhicule;

Attendu cependant qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail; que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié s'était vu retirer son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise en dehors de l'exécution de son contrat de travail, de sorte que son licenciement, dès lors qu'il avait été prononcé pour motif disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;

Condamne la société Geniatest coopérative aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geniatest coopérative et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Yves X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Monsieur Yves X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire;

AUX MOTIFS QU'il résulte des explications fournies par les parties à l'audience des débats que M. Yves X... exerçait au sein de la société coopérative Geniatest le métier de technicien d'insémination; il est établi que pour effectuer son travail le salarié était régulièrement amené à se déplacer en véhicule pour se rendre dans les différents élevages, adhérents de ladite coopérative; il est constant que le 3 décembre 2008 à 18 h 15mn M. Yves X... a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie réalisé par la brigade de gendarmerie de Marnay (70) à la suite d'un accident de la circulation qu'il avait provoqué; ce contrôle s'étant avéré positif (4,08 g/l) son permis de conduire lui a été immédiatement retiré; le 5 décembre 2008 la commission préfectorale de la Haute-Saône a prononcé une mesure de suspension provisoire du permis de conduire pour une durée de 6 mois; dans la lettre de licenciement, en date du 6 février 2009, qui fixe les termes du litige, l'Union de Coopérative Geniatest écrit, pour justifier le congédiement pour faute grave du salarié; « votre comportement, à savoir la conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool, constitue une infraction pénale (manquement grave aux règles du code de la route) qui a conduit à rendre impossible pour une durée d'au moins 6 mois l'exécution de vos fonctions de technicien d'insémination. En effet celle-ci nécessite la conduite d'un véhicule d'entreprise. Vous vous trouvez donc pour une cause gravement fautive qui vous est pleinement imputable, dans l'impossibilité d'exercer pour une longue période les fonctions inhérentes à l'exécution de votre contrat de travail. Votre comportement, et ses conséquences directes sur votre vie professionnelle, justifie votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis, ni versement d'une indemnité de licenciement; »; il n'est pas contesté que lors de la commission des faits reprochés à M., Yves X..., ce dernier conduisait son véhicule personnel en dehors du temps et du lieu de travail; si un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, et que si le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé, en elle-même, comme la méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail, il n'est toutefois pas possible de ne pas prendre en compte la nature de l'infraction commise, à savoir le taux élevé d'alcoolémie présenté par M. Yves X... (4,08 g/l) ayant provoqué un grave accident de la circulation et ayant entraîné le retrait prolongé de son permis de conduire pour une durée de six mois dans un premier temps, ce qui a incontestablement eu des répercussions sur son contrat de travail ainsi que l'a expressément mentionné l'employeur dans la lettre de licenciement, celui-ci rappelant en effet que les fonctions de M. X... nécessitaient la conduite d'un véhicule d'entreprise et que le comportement du salarié, à savoir la conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool, conduisait à rendre impossible pour une durée d'au moins six mois l'exécution de ses fonctions de technicien d'insémination; ainsi, le motif énoncé dans la lettre de licenciement porte bien sur le comportement du salarié qui par son intempérance grave a conduit à la suspension de son permis de conduire pendant une longue durée l'empêchant de poursuivre normalement son activité, ce qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais ce qui constituait assurément une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l'attribution principale de l'intéressé était d'assurer des actes d'insémination au sein d'élevages impliquant des déplacements habituels à l'aide d'un véhicule, et donc la possession d'un permis de conduire et une aptitude à la conduite d'un tel véhicule, celle-ci étant démentie par l'ampleur de l'alcoolémie relevée; le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. Yves X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle devenue la coopérative Geniatest la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. Yves X... peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement dont le calcul n'est pas contesté, à savoir 19 246,62 €; de même, il peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis de trois mois, à savoir 7 018,62 € brut, l'employeur se contentant de préciser que l'intéressé n'aurait pas été en mesure d'exercer ses fonctions d'inséminateur itinérant, alors qu'elle ne produit pas le contrat de travail et qu'il

résulte de ses conclusions que la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle comptait avant sa fusion le 1er janvier 2010 une trentaine de salariés dont la plupart étaient techniciens d'insémination, leur attribution principale étant d'assurer des actes d'insémination au sein d'élevages, un véhicule étant mis à disposition de chaque inséminateur; l'employeur ne précise pas quelles étaient les autres attributions du salarié ni si des activités sédentaires ne pouvaient pas être exercées par le salarié pendant son préavis;

Et AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QUE Monsieur Yves X... soutient que l'infraction au Code de la route, dont il est l'auteur, ayant eu lieu en dehors de son temps de travail, relève de la vie personnelle du salarié et ne peut constituer une faute soumise au pouvoir disciplinaire de l'employeur, sachant que le salarié n'était pas sous sa subordination au moment des faits; il convient de rappeler que Monsieur Yves X..., à la suite du grave accident de la route qu'il a causé le 3 décembre 2008, sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie particulièrement important, a été l'objet d'une suspension administrative, pour une durée de 6 mois et condamné définitivement par le Tribunal correctionnel de Vesoul, entre autres, à 12 mois de suspension de permis de conduire; en principe, les faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent constituer une faute, cependant la Cour de Cassation a statué que le fait pour un salarié, affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle; la Haute Cour précise qu'un tel fait se rattache à la vie professionnelle du salarié lorsque la conduite d'un véhicule automobile constitue son activité exclusive ou lorsqu'elle constitue une activité accessoire, mais indispensable, à l'exercice de son activité principale; en l'espèce, Monsieur Yves X..., en sa qualité d'inséminateur, avait à sa disposition un véhicule confié par la CEIA afin qu'il puisse exécuter ses tournées auprès des adhérents de la coopérative; il est constant et non contesté que le salarié, privé de son permis de conduire pour une durée provisoire de 6 mois puis augmentée à 12 mois par la décision du Tribunal correctionnel, ne pouvait effectuer ses tournées et exercer, pour la période considérée, ses fonctions de technicien d'insémination; c'est ce motif de trouble causé à l'entreprise que rappelle la société CEIA dans le cadre de la notification de licenciement de Monsieur Yves X..., l'employeur précisant que suite aux manquements du salarié, la coopérative se trouvait privée, pour une durée de 12 mois, d'un technicien d'insémination, qualification particulièrement technique et peu courante, rendant particulièrement difficile son remplacement; il y a donc lieu de considérer que l'infraction au Code de la route commise, en dehors de son activité professionnelle, par Monsieur Yves X..., à la suite d'une intempérance grave et ayant amené la suspension de son permis de conduire pendant une longue durée, constitue, en empêchant le salarié de poursuivre normalement son activité, une faute grave qui se rattache à la vie professionnelle du salarié et a perturbé l'activité de la société coopérative, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise;

- ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire le licenciement prononcé pour faute grave en raison du comportement «gravement fautif» du salarié; qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail; que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail; que la Cour d'appel a relevé que le salarié s'était vu suspendre son permis de conduire à la suite de faits commis en dehors de l'exécution de son contrat de travail, lequel avait été rompu en raison de son comportement considéré comme fautif; qu'en disant ce licenciement disciplinaire fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Besançon, du 3 février 2012.

Roj: ATS 4584/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4584A
Id Cendoj: 28079140012013200864
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 6/2013
Nº de Resolución:
Procedimiento: Queja
Ponente: Antonio Martín Valverde
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a siete de Mayo de dos mil trece.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. ANTONIO MARTIN VALVERDE.

HECHOS:

PRIMERO.- Por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Cataluña se dictó auto el 27 de diciembre de 2012, en el que se acordaba tener por no anunciado el recurso de casación para unificación de doctrina presentado por la representación letrada del Sr. Jeronimo contra la sentencia dictada por esa Sala el 19 de septiembre de 2012, en el recurso de suplicación número 358612.

SEGUNDO.- Contra dicho auto se ha interpuesto recurso de queja por el letrado representante del Sr. Jeronimo, el 23 de enero de 2013.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO. - El recurso de queja se fórmula frente al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de diciembre de 2012, que acuerda tener por no preparado el recurso de casación para unificación de la doctrina y poner fin al trámite del recurso interpuesto por el trabajador demandante contra la sentencia dictada el 19/9/2012 (Rec 3586/12), porque en el escrito presentado al efecto no se ha determinado el núcleo de la contradicción, en la forma exigida por el art 221.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).

SEGUNDO.- La sentencia dictada en suplicación desestima el recurso del trabajador y con ello la demanda en reclamación de despido nulo y subsidiariamente improcedente. El trabajador, con la categoría de conductor, fue despedido imputándosele una falta muy grave de transgresión de la buena fe contractual, consistente en la ocultación a la empresa, previo reconocimiento de los hechos, de la condena como autor de un delito contra la seguridad del tráfico a 8 meses de privación del permiso de conducir, que entregó en ese acto, por conducción bajo los efectos del alcohol. La sentencia declara la procedencia del despido, al estimar acreditados los hechos y por tanto, haber conducido el empleado con toda normalidad desde que se le inhabilitó para ello.

El recurrente en el escrito de preparación señala que la cuestión casacional se centra en determinar si se han producido «labores de ocultación de hecho transcendental» a los efectos del art 54.2 d) ET, planteando «si se ha procedido por el empresario correctamente al calificar la conducta realizada por el trabajador como abuso de confianza, puesto que la ocultación solo consistió en no informar a la empresa de la existencia de un juicio pero no de que estuviera privado desde hacia meses del carnet de conducir, puesto que este hecho no ocurrió». El trabajador insiste en que la «única falta reproachable sería la no información sobre el incidente y posterior asistencia a juicio» en relación con el incidente de alcoholemia pero no la privación del carnet de conducir, «no pudiendo los meros olvidos u ocultaciones de escasa importancia ser considerados como faltas muy graves susceptibles de despido». Se citan 4 sentencias de contraste, señalando que se da idéntica situación y que la contradicción se produce en materia sustantiva por inaplicación de lo establecido en el art 54.2 d) ET y en las que a diferencia de la recurrida se llega a la conclusión que las ocultaciones de escasa importancia no pueden ser considerados como faltas muy graves susceptibles de despido.

La Sala de suplicación tiene por no preparado el recurso de casación unificadora al entender que no se ha efectuado la necesaria aunque sucinta comparación que permita apuntar la existencia de igualdad de hechos, pretensiones y fundamentos, así como la diferencia de pronunciamientos.

TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el art. 221.2.a) LRJS el escrito de preparación del recurso deberá exponer cada uno de los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos. Por otro lado, a tenor del art. 225.4 LRJS son causas de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para preparar el recurso.

De este modo, la Ley de la Jurisdicción Social viene a recoger el criterio sostenido por la Sala IV al amparo de la normativa anterior en sentencias de 6 de octubre de 2009 (R. 3085/2008), 4 de octubre de 2011 (R. 3629/2010) y 12 de julio de 2011 (R. 2833/2010). Conforme a esa doctrina el escrito de preparación del recurso ha de exponer el núcleo básico de la contradicción y citar la sentencia o sentencias con las que tal contradicción se produce, de modo que si bien no será necesario efectuar en dicho escrito «el análisis comparativo de las identidades que constituyen el ámbito propio de la relación precisa y circunstanciada del escrito de interposición», si se «deberá identificar tanto el núcleo básico de la contradicción, que la Sala ha definido como la determinación del objeto y el sentido de la divergencia entre las resoluciones comparadas, como las sentencias concretas que se tienen por contradictorias».

Por otra parte, hay que señalar que el incumplimiento de tales requisitos constituye un defecto procesal insubsanable y se trata de «una omisión injustificada imputable a quien prepara el recurso en un trámite que, a diferencia de lo que ocurre con la casación ordinaria y la suplicación, exige la intervención de Letrado, y esa omisión afecta a la regularidad del procedimiento, al retrasar, también de forma injustificada, la firmeza de la sentencia de suplicación con el consiguiente perjuicio para la parte que ha obtenido un pronunciamiento favorable».

Hay que advertir, además, que sobre tal interpretación se pronunció el Tribunal Constitucional, declarando en auto 260/1993, de 20 de julio, que este criterio no era contrario al art. 24 de la Constitución, «sino más bien impecable desde el punto de vista constitucional y legal». Doctrina que reiteró en la STC 111/2000, de 5 de mayo.

Esta doctrina ha sido aplicada por numerosas resoluciones de esta Sala, entre las más recientes, autos resolviendo los recursos de queja de fechas 16/1/2012, RQ 98/12; 17/1/2013, RQ 97/12 y 25/1/2013, RQ 59/12.

CUARTO.- La exposición sucinta no es, desde luego, la relación precisa y circunstanciada de la contradicción que exige el art. 224 de la Ley, pero tampoco se identifica con una mera afirmación de que la contradicción existe, sino que debe mostrarse su realidad haciéndola visible. Esta muestra de la contradicción no implica el análisis comparativo de las identidades, lo que es propio de la formalización del recurso, pero sí exige la identificación del núcleo básico de la contradicción como la de las sentencias respecto de las cuales ésta se produce, sentencias que luego habrán de ser precisamente sobre las que podrá versar el escrito de formalización del recurso y que certificadas se aporten al mismo.

La Sala ha definido el núcleo de la contradicción como «la determinación del alcance y sentido de la divergencia de las sentencias comparadas» (sentencia de 7 de octubre de 2008, recurso 538/2007) y desde esta perspectiva hay que concluir que el requisito se cumple en el escrito de preparación del recurso, con independencia de que éste puede resultar poco explicativo en cuanto a los hechos de las sentencias comparadas. Hay que aclarar que estamos ante un requisito formal, en el que basta que se afirme la contradicción y se exponga el sentido de ésta sin el detalle propio del escrito de interposición del recurso, pues el control de la existencia de la contradicción corresponde a una fase posterior de la admisión del recurso (art. 225, 4 y 5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción).

En aplicación de la anterior doctrina puede decirse que el recurrente ha cumplido con el requisito del exponer el núcleo de la contradicción, en tanto que consta claramente que el mismo consiste en la calificación de la ocultación del juicio penal a la empresa, que estima que no constituye falta disciplinaria grave al tratarse de

un mero olvido, negando que se le hubiera privado del carnet. Es cierto que se le podría exigir una mayor concreción en los hechos que han justificado los pronunciamientos de las sentencias comparadas - despido improcedente- y en particular los que según el recurrente son calificados por aquellas como ocultaciones de escasa importancia. Sin embargo, y en contra del criterio de la sala de suplicación, se estima que el recurrente ha cumplido con las formalidades exigidas en cuando expresa con claridad cual es la cuestión litigiosa que plantea ante esta Sala IV y que ha provocado los teóricos fallos contradictorios.

Procede, por tanto, la estimación de la queja.

LA SALA ACUERDA:

Estimar el recurso de queja interpuesto por el Letrado Sra. González Gil, en nombre y representación Don. Jeronimo, contra el Auto dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27/12/2012, revocando y dejando sin efecto el mismo, debiendo tenerse por preparado el referido recurso de casación para la unificación de doctrina presentado, debiendo dicha Sala seguir con la tramitación del recurso. No cabe recurso alguno.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 13 mars 2013
N° de pourvoi: 11-26343
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00505
Non publié au bulletin
Rejet
M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2011) que M. X... a été engagé, à compter du 27 décembre 2004, par l'association Club nautique Stelliien en qualité d'ouvrier de maintenance dans le cadre d'un contrat initiative-emploi; que le contrat a été rompu par l'employeur le 5 juin 2008, au motif que la suspension de son permis de conduire, intervenue dans un cadre privé, pour six mois, lui interdisait d'exécuter ses fonctions, dont la mise à l'eau des engins nautiques; que soutenant qu'il avait été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'en l'absence de faute grave l'employeur ne pouvait mettre fin aux relations contractuelles avant l'échéance du terme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes correspondant aux salaires restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer dommages intérêts pour licenciement illégitime sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que si la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indéterminée relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois à la demande de l'employeur requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation; que dès lors en requalifiant le contrat à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée en l'absence de demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas procédé à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la demande de l'employeur mais a en réalité qualifié le contrat de travail conclu entre les parties dont la nature juridique était indéterminée; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, alloué au salarié des dommages intérêts pour licenciement illégitime d'un montant de 8.000 € sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail,

Aux motifs que « sur la nature du contrat ayant lié les parties, aux termes de l'article L 322-4-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-36 du 18 janvier 2005 «les contrats initiative emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L.122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt quatre mois»; que ces contrats, destinés à favoriser l'accès à l'emploi de certaines catégories de personnes en difficulté, avaient pour support nécessaire (article L. 322-4-2 du même code) une convention conclue entre l'État et l'employeur permettant à ce dernier de percevoir une aide forfaitaire pendant 24 mois consécutifs lorsque le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée et pendant la durée du contrat lorsque celui-ci l'avait été pour une durée déterminée (article 6 du décret n°2002-400 du 25 mars 2002 modifié); que cette aide était versée pendant 36 mois supplémentaires lorsque le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée au profit d'un salarié âgé de plus de 50 ans et de moins de 65 ans appartenant à certaines catégories; que ce dispositif a été modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de celle-ci restant soumis aux dispositions applicables à la date de leur conclusion; que la convention 10169 conclue les 8 et 20 décembre 2004 entre l'agence locale pour l'emploi de Berck Côte d'Opale représentant l'État et l'association CNS prévoit qu'elle a pour objet l'embauche par celle-ci de Serge X..., demandeur d'emploi âgé de 50 ans et inscrit depuis 18 mois au moins, pour une durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent; que la date d'effet de cette embauche est le 27 décembre 2004; qu'il résulte de l'«attestation de situation-échancier» émanant de l'agence locale pour l'emploi et afférente à la convention 1069 précitée que l'aide forfaitaire a été versée au CNS pendant 60 mois, signe que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée; que l'attestation remise au salarié au moment de la prise d'effet de son licenciement mentionnait également qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée; que l'intimée explique la signature avec le même salarié de deux contrats de travail ayant le même objet par l'irrégularité du premier, qui ne pouvait être conclu avant la convention qui lui servait de support, et qu'elle a dû refaire avant de le déposer auprès des services du ministère du travail; qu'elle relève cependant que le premier stipulait qu'il était conclu pour une durée indéterminée, et que c'est par erreur que le second mentionnait qu'il était conclu pour une durée de 5 ans, ce qui était légalement impossible mais correspondait à la durée maximale pendant laquelle l'aide forfaitaire pouvait être perçue; qu'il résulte de ce qui précède que tel était effectivement le cas; que le salarié fait valoir que la re-qualification en contrat à durée indéterminée d'un contrat de travail à durée déterminée irrégulier ne peut être demandée par l'employeur; qu'il s'agit cependant, en présence de deux contrats prenant effet à la même date et divergeant entre eux sur ce point essentiel, de déterminer celui qui correspondait à la commune intention des parties et devait donc régir leurs rapports, de sorte que l'argument est sans portée; que sur la légitimité du licenciement la lettre du juin 2008 motive cette mesure par «l'impossibilité fonctionnelle» dans laquelle Monsieur X... se trouve «d'exercer (sa) fonction de chauffeur, compte tenu de la suspension de (son) permis de conduire décidée par le préfet pour une durée de 6 mois à la suite du contrôle dont il a fait l'objet dans la nuit du 8 au 9 mai alors qu'il conduisait son véhicule personnel sous l'empire d'un état alcoolique et de la nécessité dans laquelle se trouve l'association «de procéder à (son) remplacement définitif tout particulièrement en ce début de saison estivale; que l'employeur y souligne que le contrat de travail de M. X... stipule que celui-ci occupait à temps complet un emploi de chauffeur et d'agent d'entretien du matériel et prévoyait expressément son «affectation à la mise à l'eau des engins nautiques», ce qui «requiert nécessairement la possession d'un permis de conduire» et que la suspension de son permis de conduire interdisait l'exercice de cette attribution; que la compagnie d'assurances de l'association a avisé cette dernière de ce qu'elle ne la couvrirait pas en cas d'accident survenu dans ces conditions; que l'entretien de la base nautique et de son matériel, principalement effectué pendant la période hivernale, «représente une charge de travail bien insuffisante pour justifier votre emploi pendant la période minimale de 6 mois que couvre la suspension du permis de conduire»; que la lettre de licenciement rappelle enfin que le salarié a répondu par la négative (courrier du 27 mai) à la proposition qui lui était faite de suspendre son contrat de travail pendant la durée de la suspension de son permis; que l'appelant réplique que la faute commise -qu'il ne conteste pas- l'a été «en dehors de sa période de travail» et que la suspension de permis de conduire dont il a fait l'objet n'affectait pas l'exercice de ses attributions qui auraient été exercées pendant 2 ans par un moniteur de char à voile qui en était démuné; que son contrat stipulait que ses missions étaient d'une part l'entretien de la base nautique et de son matériel automoteur et d'autre part la mise à l'eau des engins nautiques; qu'il ne faisait nulle mention d'un emploi de chauffeur ni de l'exigence d'un permis de conduire en cours de validité; qu'un fait de la vie personnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il se rattache à l'activité professionnelle du salarié; que tel est le cas d'une suspension du permis de conduire lorsque la conduite d'un véhicule automobile est l'activité exclusive du salarié ou lorsque, bien qu'accessoire, elle est indispensable à l'exercice de l'activité principale; qu'il résulte certes des attestations versées aux débats que la mise à l'eau

des engins nautiques occupait, sauf pendant la période hivernale, la majeure partie du temps de travail de l'intéressé, et que la MACIF n'aurait pas couvert la responsabilité civile de l'association en cas de sinistre provoqué par un conducteur non titulaire des certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur; qu'aucune des pièces produites ne permet toutefois d'affirmer que, pour la mise à l'eau et la remontée des bateaux, le conducteur du tracteur doive conduire sur des voies ouvertes à la circulation publique; qu'en tout état de cause, l'association pouvait organiser le travail entre ses trois salariés ayant les mêmes missions de manière à conserver M. X... à son service; qu'enfin il n'est pas soutenu que la suspension provisoire du permis de conduire de l'appelant ait créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise; que son licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse; que sur les demandes Indemnitaires la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer, compte tenu notamment de l'âge (54 ans) et de l'ancienneté (ans, 5 mois et 9 jours) de Serge X... à la date de la rupture, à 8 000 euros, soit l'équivalent de 7 mois de salaire, l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail; qu'il résulte des bulletins de paye produits que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ont été payées, l'une en deux versements les 30 juin et 31 juillet 2008, l'autre le 5 août de la même année; que Serge X... reste encore créancier des congés payés afférents au préavis; que conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil, les sommes ci dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, en l'espèce le 18 avril 2009, pour celle de nature salariale, à compter du présent arrêt pour celle de nature indemnitaire;

Alors que si la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois à la demande de l'employeur requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation; que dès lors en requalifiant le contrat à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée en l'absence de demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé;

Décision attaquée: Cour d'appel de Douai, du 18 février 2011.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 18 janvier 2011
N° de pourvoi: 09-43079
Publié au bulletin
Cassation
Mme Collomp, président
Mme Agostini, conseiller apporteur
M. Aldigé, avocat général
SCP Odent et Poulet, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble le titre XII du statut des agents de la RATP;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la RATP en qualité de machiniste receveur le 1er février 1993, M. X... a été révoqué le 29 septembre 2005 pour avoir omis d'informer son employeur de la décision le condamnant pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que pour dire que la mesure de révocation doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les poursuites disciplinaires ont été engagées tardivement par la lettre du 1er août 2005 qui seule constitue la convocation exigée par l'article L. 122-44 ancien du code du travail et par les articles 159 et suivants du statut des agents de la RATP relatifs à la procédure applicable à la mesure de révocation qui avait été envisagée d'emblée par l'employeur;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'agent avait été convoqué le 17 juin 2005 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avant la mise en place de la procédure de comparution devant le conseil de discipline, ce dont il ressortait que les poursuites disciplinaires avaient été engagées à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Condamne M. X... aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la RATP

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la mesure de révocation prise par la RATP, à l'encontre d'un de ses agents commissionnés (Monsieur X...), devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE le directeur de la RATP avait pris la décision de révoquer Monsieur X... au motif de: « N'informe pas le Centre de bus de son retrait de permis à la date du 31 mars 2004 et des décisions de justice, à savoir une suspension de son permis de conduire pour une période de 5 mois et une condamnation à 15

jours de prison avec sursis pour une conduite en état d'ébriété (1, 94 g d'alcool par litre de sang) »; qu'il était constant, d'une part, que le 5 juillet 2004, le tribunal de grande instance d'Abbeville avait déclaré Monsieur X... coupable d'avoir, le 31 mars 2004, conduit le véhicule BMW..., sous l'empire d'un état alcoolique (0, 97 mg par litre d'air expiré) et d'excès de vitesse et, en répression, l'avait condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 150 € d'amende et 5 mois de suspension du permis de conduire, d'autre part, que la RATP avait appris cette condamnation le 26 mai 2005; qu'il était acquis aux débats que la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail est interrompue par l'engagement de poursuites disciplinaires; que, par lettre du 17 juin 2005 remise en main propre le 20 juin 2005, la RATP avait convoqué Monsieur X... « à un entretien préalable à une sanction disciplinaire du second degré », « pouvant aller jusqu'à la révocation », en visant uniquement les « dispositions des articles 149 et suivants du statut du personnel »; que, le 19 juillet 2005, Monsieur X... avait été avisé de la transmission de son dossier au conseil de discipline, en vue du prononcé d'une mesure du second degré pouvant aller jusqu'à la révocation et, le 1er août 2005, il avait été convoqué à l'audience préparatoire au conseil de discipline, au visa des articles L 122-41 du code du travail et du Titre XII du statut du personnel; qu'au regard des dispositions du Titre XII du statut des agents de la RATP relatif à la discipline, Monsieur X... était fondé à soutenir que la procédure disciplinaire, lorsqu'une sanction telle que la révocation est envisagée, débute par l'entretien préparatoire au conseil de discipline; qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre du 17 juin 2005, que cette lettre ne constituait ni la convocation à l'entretien préparatoire au conseil de discipline prévue aux articles 159 et 160 du statut, ni une convocation à l'entretien préalable à un licenciement prévu à l'article L 122-41 du code du travail; que la lettre du 19 juillet, si elle manifestait la volonté de la RATP de sanctionner Monsieur X..., ne constituait l'engagement des poursuites ni au sens de l'article L 122-44 ancien du code du travail, ni au sens du statut pris en son article 149; que l'engagement des poursuites n'étant intervenu que le 1er août 2005, pour des faits connus de la RATP depuis le 26 mai 2005, était tardif, de sorte que les faits ne pouvaient plus être sanctionnés; que, par voie de conséquence, la révocation de Monsieur X... intervenue le 29 septembre 2005 n'étant pas fondée, la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- 1°) ALORS QUE les dispositions disciplinaires issues du statut du personnel de la RATP, lesquelles ne sont pas exclusives des dispositions légales issues du code du travail, sont conformes au droit commun et prescrivent la convocation du salarié à un entretien préalable, lorsqu'une sanction pouvant affecter sa situation dans l'entreprise, est envisagée à son encontre; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé de prendre en considération la date de convocation (20 juin 2005) de Monsieur X... à un entretien préalable au prononcé d'une sanction pouvant aller jusqu'à la révocation, comme date d'engagement des poursuites disciplinaires, prétexte pris de ce que le statut du personnel de la RATP, seul visé par la lettre de convocation, ne prévoyait pas un tel entretien préalable mais seulement une audience préliminaire, a violé les articles L 1332-2, L 1332-4 du code du travail, 149 et suivants du Titre XII du statut du personnel de la RATP,
- 2°) ALORS QUE la convocation à un entretien préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire constitue l'acte d'engagement des poursuites, qui interrompt le délai de prescription de deux mois au-delà duquel aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être engagée; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que, d'une part, Monsieur X... avait, par lettre remise en main propre le 20 juin 2005, été convoqué à l'entretien préalable à la mesure de sanction envisagée à son encontre et que, d'autre part, l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs le 26 mai précédant, n'en a pas déduit que les poursuites avaient été engagées dans le délai légal de deux mois, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard des articles L 1332-2 et L 1332-4 du code du travail, ensemble des articles 149 et suivants du Titre XII du statut du personnel de la RATP.

Publication: Bulletin 2011, V, n° 24

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, du 2 juillet 2009

Titrages et résumés: CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'engagement des poursuites - Convocation à l'entretien préalable

Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire

Textes appliqués:

article L. 1332-4 du code du travail; titre XII du statut des agents de la RATP.

Jurisprudence**La victime d'une faute commise par un fonctionnaire ne peut demander une sanction disciplinaire****Conseil d'Etat****5ème et 4ème sous-sections réunies****02-07-2010****n° 322521****SOMMAIRE:**

Victime d'une faute commise par un agent public. Cette victime a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de cette faute. Elle n'est cependant pas titulaire d'un droit à indemnité résultant, soit de l'absence de sanction disciplinaire de l'agent qui a commis la faute, soit du choix de la sanction disciplinaire qui a été infligée

TEXTE INTÉGRAL:

Conseil d'Etat 5ème et 4ème sous-sections réunies 02-07-2010 N° 322521

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2008 et 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant [...], agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, Auriane, Alexandre, Nicolas et Aurore A; ils demandent au Conseil d'Etat:

- 1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 100 000 € en réparation des préjudices résultant pour eux de l'arrêt du ministre de l'emploi et de la solidarité du 5 novembre 1999 prononçant contre M. B, contrôleur du travail, une sanction limitée à une exclusions temporaire de fonctions de trois mois dont deux mois avec sursis;
- 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel;
- 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 novembre 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a infligé à M. B, contrôleur du travail, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant trois mois dont deux mois avec sursis au motif que, conduisant en état d'ébriété, il avait provoqué un accident de la circulation ayant entraîné le décès de M. Armand C, avant de se rendre coupable du délit de fuite et de se livrer à de fausses déclarations sur les circonstances entourant cet accident; que, par un jugement du 16 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a, d'une part, condamné M. B à une peine d'emprisonnement, à une amende et à l'annulation de son permis de conduire et l'a, d'autre part, condamné solidairement avec l'Etat à la réparation civile des préjudices matériels et moraux

subis par les ayants droit de M. Armand C; que, par un arrêt du 17 mai 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mars 2004 jugeant que M. Marc A, en sa qualité de fils de la victime, ne justifiait pas d'un intérêt à demander l'annulation de cette sanction qu'il estimait insuffisante; que, par un nouveau pourvoi, M. Marc A, agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses quatre enfants mineurs, demande l'annulation de l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour eux de la sanction, qu'ils estiment insuffisante, infligée à M. B;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué:

Considérant que la cour a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été insuffisamment motivé, entaché de contradiction de motifs et d'erreur de droit;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué:

Considérant que la sanction disciplinaire n'a pas pour finalité de réparer le préjudice de la victime de la faute commise par l'agent public sanctionné; qu'il en résulte que la victime, si elle a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de cette faute, n'est pas titulaire d'un droit à indemnité résultant soit de l'absence de sanction disciplinaire de l'agent qui a commis la faute, soit du choix de la sanction disciplinaire qui a été infligée;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas inexactement interprété les mémoires des requérants en ce qui concerne la nature du préjudice qu'ils invoquaient, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un préjudice indemnisable que leur aurait causé, par son insuffisance, la sanction infligée à M. B; que c'est dès lors sans erreur de droit ni contradiction de motifs qu'elle n'a pas censuré le jugement du tribunal administratif de Nantes qui s'était fondé sur le même motif pour rejeter leur demande d'indemnité;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mai 2008; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DÉCIDE:

Article 1er: Le pourvoi des consorts A est rejeté.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Marc A, à Mlle Auriane A, à M. Alexandre A, à M. Nicolas A, à Mlle Aurore A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Délibéré dans la séance du 19 mai 2010 où siégeaient: M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président; Mme Sylvie Hubac, M. Marc Dandelot, Présidents de sous-section; M. Jean-Claude Mallet, M. Jean Musitelli, Mme Anne-Françoise Roul, M. Didier Chauvaux, M. Michel Thenault, Conseillers d'Etat et M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat-rapporteur.

Lu en séance publique le 2 juillet 2010.

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon.

Jurisprudence citée: Rapp., sur l'absence d'intérêt à agir, en contentieux de l'excès de pouvoir, d'un tiers à l'encontre d'une décision prise par l'administration de sanctionner ou ne pas sanctionner son agent, Section, 10 juillet 1995, Mme Laplace, n° 141654, p. 302; 17 mai 2006, Bellanger, n° 268938, p. 257.

Composition de la juridiction: M. Christian Vigouroux, Président. - M. Olivier Rousselle, Rapporteur. - M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public. - Me Haas, Avocat

Décision attaquée:

Texte(s) appliqué(s):

Copyright 2015 - Dalloz - Tous droits réservés.

Roj: ATS 3267/2010
Id Cendoj: 28079140012010200408
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1183/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil diez.
Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. MARÍA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 5 de los de Las Palmas de Gran Canaria se dictó sentencia en fecha 11 de julio de 2007, en el procedimiento nº 368/07 seguido a instancia de D. Fructuoso contra DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS CANARIAS, S.L. y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS CANARIAS, S.L., siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en fecha 27 de octubre de 2008, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 27 de marzo de 2009 se formalizó por la Procuradora D^a Flora Toledo Hontiyuelo, en nombre y representación de DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS CANARIAS, S.L., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 4 de noviembre de 2009 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El día 13 de marzo de 2007, mediante carta, la empresa demandada comunicó al actor el despido disciplinario basado en el artículo 54.2 f) del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 29 y 30 del Convenio Colectivo de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa *«por embriaguez habitual que repercuta negativamente en el trabajo»*. Consta acreditado que el domingo 7 de mayo de 2006 cuando conducía su vehículo, el actor fue sometido a un control de alcoholemia que resultó positivo con 0,85 mg. de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba y 0,86 en la segunda y como consecuencia de ello se le impuso sanción en vía administrativa de multa de 600 € y retirada del permiso de conducir durante un mes, autorizándose administrativamente el cumplimiento de la retirada del permiso desde el 1 de marzo al 31 de julio de 2007. El 8 de marzo y el 30 de mayo de 2005 el actor había sido amonestado por presentarse al trabajo con síntomas de haber ingerido alcohol. La sentencia de instancia declaró improcedente el despido, pronunciamiento confirmado en suplicación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de 27 de octubre de 2008, al no haberse evidenciado una situación de embriaguez habitual del actor con incidencia negativa en su trabajo.

Recorre la empresa demandada en casación para la unificación de doctrina, seleccionando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 20 de enero de 2004, confirmatoria de la de instancia que había declarado procedente el despido disciplinario del actor, el cual, en ese, caso había sido condenado por sentencia del Juzgado de lo Penal de Segovia como autor de un delito contra la seguridad del tráfico con la privación del derecho a conducir vehículos de motor durante un año y un día. El actor había sido

sometido a un control de alcoholemia cuando conducía un vehículo de la empresa transportando 25 toneladas de madera durante un trayecto de la localidad de Tuy a Córdoba, dando un resultado positivo de 1,33 mg en la primera prueba y de 1,36 mg en la segunda.

Procede, por tanto, comprobar si entre dicha sentencia y la recurrida concurre la contradicción que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. Según ha reiterado la Sala, dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y R. 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y R. 2506/2007). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y R. 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y R. 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y R. 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y R. 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y R. 1138/2008).

Pues bien; conforme a la doctrina que se acaba de exponer la contradicción es inexistente al ser distintas las causas de despido imputadas y por tanto la conducta que se trata de acreditar, así como la propia conducta que en cada caso queda acreditada.

En la sentencia recurrida el despido se basa en la embriaguez habitual del actor, invocando la comunicación escrita los artículos 54.2 f) y los artículos 29 y 30 del Convenio de aplicación referidos a dicha causa de despido y cuya infracción ha sido objeto de denuncia en el recurso de suplicación y en el presente de casación unificadora por la empresa demandada. En cambio, según el hecho probado tercero de la sentencia de contraste, que transcribe la carta de despido, el mismo se produce en base al artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, sin mayor concreción, y la sentencia decide acerca de la posibilidad de subsumir la conducta del actor anteriormente expuesta en el supuesto del artículo 54.2d) del Estatuto de los Trabajadores, como constitutiva de una transgresión de la buena fe contractual, llegando la sentencia a una conclusión positiva por lo que confirma la procedencia del despido. Ambas sentencias consideran que la embriaguez que contemplan no es habitual pero la recurrida confirma la improcedencia del despido porque el mismo se había basado en esa concreta causa, lo que no ocurre en la sentencia de contraste en la que la carta de despido no se refiere al apartado f) del artículo 54 d) del Estatuto de los Trabajadores.

Aparte de lo anterior, las conductas son también distintas, pues en la sentencia de contraste el control de alcoholemia con resultado positivo se produce cuando el actor conducía un camión de la empresa cargado con 25 toneladas de madera en un largo trayecto entre Tuy y Córdoba, mientras que en el caso de autos el control se produce un domingo cuando el actor conducía su propio vehículo, y registra una tasa de alcohol inferior a la registrada en el caso de la sentencia de contraste.

En relación con las diferentes conductas, la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (Sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (R. 1232/1990 y R. 2271/1991), 15 y 29 de enero de 1997 (R. 952/1996 y R. 3461/1995), 6 de julio de 2004 (R. 5346/2003), 9 de julio de 2004 (R. 3496/2002), 24 de mayo de 2005 (R. 1728/04), 8 de junio de 2006 (R. 5165/04) y 3 de julio de 2007 R. 2486/06).

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora D^a Flora Toledo Hontiyuelo, en nombre y representación de DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS CANARIAS, S.L. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en fecha 27 de octubre de 2008, en el recurso de suplicación número 1400/07, interpuesto por DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS CANARIAS, S.L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de los de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 11 de julio de 2007, en el procedimiento nº 368/07 seguido a instancia de D. Fructuoso contra DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS CANARIAS, S.L. y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 2 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-43466
Publié au bulletin
Rejet
Mme Collomp, président
Mme Perony, conseiller apporteur
M. Duplat (premier avocat général), avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile:

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé (conseil de prud'hommes du Mans, 22 mai 2008) que le permis de conduire de M. X..., employé comme chauffeur routier par la société Mory Team, délégué syndical, délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, a été suspendu le 26 janvier 2008 pour une durée de six mois; qu'il en a informé son employeur qui a engagé une procédure de licenciement à son encontre; que l'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'inspecteur du travail le 7 avril 2008, il a alors été affecté à la manutention; qu'il a saisi la formation de référé d'une demande de provision sur les salaires non payés du 28 janvier au 9 avril 2008;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de faire droit à cette demande, alors selon le moyen:

- 1°/ que le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer ou suspendre son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle; qu'en considérant que la société n'avait aucune raison d'exercer son pouvoir disciplinaire visé au point 6 de l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, et qu'elle devait donc engager la procédure de concertation prévue au même article de l'accord de branche afin de rechercher un emploi de reclassement, cependant qu'il avait constaté que dans le cours de «sa vie privée», son permis avait été suspendu pour une durée de six mois à la suite d'un contrôle alcootest, ce dont il résultait que M. X... avait commis un fait fautif, passible d'une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 susvisé;
- 2°/ qu'en vertu de l'article R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que le caractère fautif du comportement de M. X..., rattaché à sa vie professionnelle, justifiait que l'exposante puisse engager une procédure disciplinaire, de telle sorte que l'obligation de suivre la procédure de concertation prévue par l'accord du 13 novembre 1992 était au moins sérieusement contestable, peu important le refus d'autoriser le licenciement opposé par l'inspecteur du travail; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé;
- 3°/ qu'il est permis à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute; que pour lui ordonner de verser à M. Daniel X... la somme de 2 448,75 euros au titre des salaires dus du 28 janvier 2008 au 9 avril 2004, le conseil de prud'hommes a considéré qu'elle aurait dû engager la procédure de concertation conventionnelle comme elle y avait procédé pour d'autres salariés en pareille situation; qu'en se contentant de faire référence à une «pareille situation», sans préciser en quoi ces autres

salariés visés avaient été dans une situation identique à celle de M. X..., et sans caractériser la moindre discrimination illicite ni le moindre détournement de pouvoir résultant de l'absence de concertation avec M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points;

Mais attendu que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection; qu'il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'ordonnance qui a décidé que la créance au titre des salaires dus pour la période du 28 janvier au 9 avril 2008 n'était pas sérieusement contestable, a statué à bon droit;

Que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Mory Team aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Mory Team.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à l'exposante de verser à Monsieur X... la somme de 2448,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 janvier au 9 avril 2008;

AUX MOTIFS QUE «les dispositions de l'accord du 13 novembre 1992 doivent s'appliquer loyalement; que la situation découle d'un comportement répréhensible de Monsieur X... dans sa vie privée et dont les conséquences sont précisément évoquées par l'accord du 13 novembre 1992; que la Société évoque un caractère de récidive de ce comportement ainsi que la dangerosité évidente attachée à la consommation d'alcool pour un chauffeur routier qui l'ont conduite à engager une procédure de licenciement; que cependant, aucun comportement semblable n'a été rapporté dans le cadre de ses fonctions de chauffeur tandis que la récidive ne semble être évoquée que pour la forme, sans autre précision; que la société n'avait donc aucune raison d'exercer son pouvoir disciplinaire visé au point 6 de l'article 2; qu'elle devait donc engager la procédure de concertation prévue au même article de l'accord de branche afin de rechercher un emploi de reclassement, tout comme elle y avait procédé pour d'autres salariés en pareille situation»;

- ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer ou suspendre son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle; qu'en considérant que la société n'avait aucune raison d'exercer son pouvoir disciplinaire visé au point 6 de l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, et qu'elle devait donc engager la procédure de concertation prévue au même article de l'accord de branche afin de rechercher un emploi de reclassement, cependant qu'il avait constaté que dans le cours de «sa vie privée», son permis avait été suspendu pour une durée de six mois à la suite d'un contrôle alcootest (ordonnance, p. 2, al. al. 3), ce dont il résultait que Monsieur X... avait commis un fait fautif, passible d'une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail ensemble l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 susvisé;

QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en vertu de l'article R. 1455-7 du Code du travail, la formation de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que le caractère fautif du comportement de Monsieur X..., rattaché à sa vie professionnelle, justifiait que l'exposante puisse engager une procédure disciplinaire, de telle sorte que l'obligation de suivre la procédure de concertation prévue par l'accord du 13 novembre 1992 était au moins sérieusement contestable, peu important le refus d'autoriser le licenciement opposé par l'inspecteur du travail; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé;

- ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est permis à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute; que pour ordonner à la Société MORY TEAM de verser à Monsieur Daniel X... la somme de 2.448,75 au titre des salaires dus du 28 janvier 2008 au 9 avril 2004, le conseil de prud'hommes a considéré que l'exposante aurait dû engager la procédure de concertation conventionnelle comme elle y avait procédé pour d'autres salariés en pareille situation; qu'en se contentant de faire référence à une « pareille situation », sans préciser en quoi ces autres salariés visés avaient été dans une situation identique à celle de Monsieur X..., et sans caractériser la moindre discrimination illicite ni le moindre détournement de pouvoir résultant de l'absence de concertation avec Monsieur X..., le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail ensemble l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points.

Publication: Bulletin 2009, V, n° 272

Décision attaquée: Conseil de prud'hommes du Mans, du 22 mai 2008

Titrages et résumés: CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Nécessité - Portée

Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection.

Il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice des fonctions de chauffeur routier, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

Doit être approuvé l'ordonnance de référé, qui décide que la créance au titre des salaires dus pour la période qui s'est écoulée entre la décision de l'employeur de suspendre la rémunération du salarié et la reprise du paiement du salaire consécutive au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, n'est pas sérieusement contestable.

REPRESENTATION DES SALAIRES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Délai d'obtention de l'autorisation administrative - Obligation de l'employeur de conserver et de rémunérer le salarié pendant le délai - Applications diverses.

Précédents jurisprudentiels: Sur, l'obligation de maintien du salarié dans son emploi et de la perception de son salaire en l'absence d'autorisation administrative du licenciement par l'inspecteur du travail, a rapprocher: Soc., 3 octobre 1989, pourvoi n° 86-45.691, Bull. 1989, V, n° 558 (cassation); Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-43.723, Bull. 1997, V, n° 225 (rejet); Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-42.037, Bull. 2009, V, n° 271 (rejet).

Textes appliqués:

Conseil de prud'hommes du Mans, 22 mai 2008, 08/00055.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 1 avril 2009

N° de pourvoi: 08-42071

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Blondel, Me Odent, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que M. X..., engagé à compter du 5 août 1991 par la société Stogaz distribution en qualité de chauffeur-livreur et nommé chef de parc à compter du 29 mars 2004, a été licencié par lettre du 12 mai 2005 en raison de la suspension, le 4 avril 2005, pour une durée de quatre mois, de son permis de conduire, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique de son véhicule personnel;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen:

- 1°/ que le litige est circonscrit par les termes de la lettre de licenciement; que M. X... a été licencié pour impossibilité d'exécuter une prestation de chauffeur-livreur en raison de la suspension provisoire de son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique; qu'en appliquant le principe de la légitimité d'un licenciement prononcé pour des faits de conduite en état d'ivresse en dehors de son lieu de travail en raison de son possible retentissement sur l'exécution d'un contrat de travail ayant pour objet la conduite de camions, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué un principe jurisprudentiel à une situation qu'il n'avait pas vocation à régir, a, ce faisant, méconnu les termes de la lettre de congédiement et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail;
- 2°/ que, dans le cadre de sa recherche du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé, tout juge doit déterminer si la sanction est adéquate et proportionnelle pour faire cesser le trouble objectif; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à l'instar d'un autre salarié de l'entreprise, il aurait pu ne se voir appliquer qu'une mesure de suspension provisoire de son contrat de travail ou de mise en congés pendant la période de suspension de son permis de conduire ou d'affectation à son poste de chef de parc à plein temps, autant de mesures qui justifiaient l'absence d'impossibilité d'exécution de son contrat de travail pendant cette courte période; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail;
- 3°/ qu'est caractérisée (sic) une discrimination de nature à priver tout caractère réel et sérieux d'une mesure de licenciement le fait de la part d'un employeur d'appliquer à l'un de ses salariés une mesure de suspension de son contrat de travail pendant la durée de suspension de son permis de conduire et à un autre, placé dans des conditions quasi identiques, une mesure de licenciement; qu'en décidant que n'était pas discriminatoire la mesure de licenciement appliquée à M. X... dont le permis de conduire avait été suspendu pendant quatre mois, motif pris que l'autre salarié concerné n'aurait vu son permis suspendu que pendant deux mois et qu'il aurait fait la demande de suspension de son contrat de travail à son employeur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants et, à tout le moins, insuffisants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail qu'elle a ainsi violé;

Mais attendu que la cour d'appel qui, restant dans les limites fixées par la lettre de licenciement, a retenu que M. X... n'était plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de la suspension de son permis de conduire, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié, M. X..., de sa demande de condamnation de son employeur, la société STOGAZ DISTRIBUTION, pour licenciement abusif, à lui verser les indemnités subséquentes;

AUX MOTIFS QUE le comportement du salarié dans sa vie privée ne peut affecter la relation salariale, sauf s'il doit avoir des répercussions sur celle-ci, tenant en particulier à la nature des fonctions exercées; qu'ainsi, le fait pour un salarié, affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles, d'être l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à la vie professionnelle et légitime en conséquence son licenciement du moment où l'intéressé ne se trouve plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail; qu'en l'occurrence, M. X..., auquel une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois avait été notifiée le 4 avril 2005 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'exerçait qu'occasionnellement des fonctions de chauffeur-livreur, ayant été nommé au poste de chef de parc par avenant du 29 mars 2004; qu'il résulte, en premier lieu, du document intitulé « cadre de fonctionnement » signé par l'intéressé que le chef de parc garde toutes ses obligations de chauffeur, que les heures destinées à sa fonction de chef de parc le seront en dehors de ses heures de chauffeur et que les heures nécessaires à l'accomplissement de ses tâches (de chef de parc) ont été estimées entre 20 minutes et 1 heure 15 (par jour) en fonction du nombre de camions se trouvant sur le chantier; qu'il ressort, par ailleurs, des relevés d'activité et des feuilles d'heures produits aux débats, concernant la période de janvier 2004 à mars 2005, que M. X... consacrait mensuellement entre 11 et 18 journées de travail à la conduite des véhicules de l'entreprise, parallèlement à ses tâches de chef de parc; que l'essentiel de son activité était donc bien la conduite des véhicules, peu important que le site de Perpignan n'ait comporté alors que deux camions pour un effectif de trois salariés, dès lors que ces deux camions « 10 palettes » permettaient d'effectuer une dizaine de tournées par semaine; que si la société STOGAZ DISTRIBUTION n'a mis en œuvre la procédure de licenciement que le 29 avril 2005, elle affirme que M. X... ne lui a transmis que tardivement les justificatifs relatifs à la suspension de son permis de conduire; que le salarié n'a, de fait, travaillé que le 6 avril 2005 au parc, prenant les 4, 5, 7 et 8 avril des repos compensateurs, puis s'est trouvé en congés payés du 11 au 29 avril 2005; que concernant la discrimination invoquée, la société STOGAZ DISTRIBUTION fait valoir que la suspension de permis de conduire dont avait fait l'objet en 2004 un autre chauffeur affecté au site de Milhaud dans le Gard (Philippe Z...) était de deux mois seulement et que l'intéressé avait fait une démarche auprès de l'employeur en vue de solliciter une suspension de son contrat de travail, ce qui lui avait été accordé à titre exceptionnel (attestation José A... B...); que les éléments ainsi apportés sont de nature à établir que la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X... est exclusive de toute discrimination;

1°/ ALORS QUE le litige est circonscrit par les termes de la lettre de licenciement; que M. X... a été licencié pour impossibilité d'exécuter une prestation de chauffeur-livreur en raison de la suspension provisoire de son permis de conduire pour conduire sous l'empire d'un état alcoolique; qu'en appliquant le principe de la légitimité d'un licenciement prononcé pour des faits de conduite en état d'ivresse en dehors de son lieu de travail en raison de son possible retentissement sur l'exécution d'un contrat de travail ayant pour objet la conduite de camions, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué un principe jurisprudentiel à une situation qu'il n'avait pas vocation à régir, a, ce faisant, méconnu les termes de la lettre de congédiement et violé l'article L.122-14-3 du code du travail;

2°/ ALORS QUE, dans le cadre de sa recherche du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé, tout juge doit déterminer si la sanction est adéquate et proportionnelle pour faire cesser le trouble objectif; que,

dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à l'instar d'un autre salarié de l'entreprise, il aurait pu ne se voir appliquer qu'une mesure de suspension provisoire de son contrat de travail ou de mise en congés pendant la période de suspension de son permis de conduire ou d'affectation à son poste de chef de parc à plein temps, autant de mesures qui justifiaient l'absence d'impossibilité d'exécution de son contrat de travail pendant cette courte période; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du code du travail;

- 3°/ ALORS QU'est caractérisée une discrimination de nature à priver tout caractère réel et sérieux de une mesure de licenciement, le fait de la part d'un employeur d'appliquer à l'un de ses salariés une mesure de suspension de son contrat de travail pendant la durée de suspension de son permis de conduire et à un autre, placé dans des conditions quasi identiques, une mesure de licenciement; qu'en décidant que n'était pas discriminatoire la mesure de licenciement appliquée à M. X... dont le permis de conduire avait été suspendu pendant quatre mois, motif pris que l'autre salarié concerné n'aurait vu son permis suspendu que pendant deux mois et qu'il aurait fait la demande de suspension de son contrat de travail à son employeur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants et, à tout le moins, insuffisants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L.122-14-3 du code du travail qu'elle a ainsi violé.

Décision attaquée: Cour d'appel de Montpellier, du 25 avril 2007.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 19 mars 2008
N° de pourvoi: 06-45212
Non publié au bulletin
Cassation
M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Laugier et Caston, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Damien technologie, a été licencié par lettre du 4 octobre 2004 en raison de la suspension de son permis de conduire le 23 août 2004, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique;

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mesure de suspension de permis de conduire infligée au salarié, intervenue dans le cadre de sa vie personnelle et, de surcroît, pendant ses congés payés, n'avait eu aucun effet sur la relation contractuelle de travail;

Attendu cependant que le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

Décision attaquée: Cour d'appel de Lyon, du 31 août 2006.

Le: 27/09/2013
Conseil d'État
N° 271676
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Genevois, président
M. Damien Botteghi, rapporteur
M. Olson, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 1 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 16 septembre 2004 et le 15 juin 2005 présentés par M. Henri-Jacques X, demeurant...; M. X demande au Conseil d'Etat:

- 1°/ d'annuler le décret du 13 août 2004 par lequel le Président de la République lui a infligé la sanction de l'exclusion définitive du service en qualité de commissaire de police stagiaire de la police nationale;
- 2°/ d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder sans délai à sa réintégration dans le corps des commissaires de police et de l'autoriser à poursuivre sa scolarité pour être titularisé;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2004 portant organisation de la formation initiale et de la formation continue des commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement;

Considérant que M. X demande l'annulation du décret du Président de la République en date du 13 août 2004 prononçant son exclusion définitive du service en qualité de commissaire stagiaire de la police nationale et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans le corps des commissaires de police;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;

SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE:

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, alors en vigueur, les commissaires de la police nationale qui constituent

ce corps «sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur»; qu'il ressort des articles 4 et 5 de ce décret que le corps comprend trois grades dont le premier, celui de commissaire de police, comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons; qu'aux termes de l'article 8: «Les candidats reçus aux concours ou recrutés au choix sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police»; qu'enfin selon l'article 17 du décret: « Les décisions autres que la nomination et les sanctions disciplinaires concernant les commissaires de police sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci peut cependant prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme»;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la nomination dans le corps de direction et de conception de la police nationale s'effectue à l'entrée dans ce corps en qualité d'élève commissaire et qu'il appartient au Président de la République de la prononcer; qu'il était par suite compétent pour décider, par le décret attaqué, d'infliger la sanction d'exclusion définitive du service à M. X, commissaire stagiaire de la police nationale, alors même que celui-ci avait été nommé par arrêté du ministre de l'intérieur;

Considérant que M. X, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ne peut utilement soutenir que le décret attaqué aurait dû être précédé des consultations prévues à l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, et à l'article 17 de l'arrêté du 23 janvier 2004 portant organisation de la formation initiale et de la formation continue de commissaire de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, lesquelles ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement pour insuffisance professionnelle;

Considérant que l'ampliation, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, fait foi, contrairement à ce que soutient le requérant, de ce que le décret a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre de l'intérieur;

Considérant que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs;

Considérant que les circonstances dans lesquelles la notification du décret attaqué a été faite à M. X sont sans influence sur sa légalité;

SUR LA LÉGALITÉ INTERNE:

Considérant qu'ainsi que le rappelle l'article 7 du code de déontologie édicté par le décret du 18 mars 1986, le fonctionnaire de la police nationale «ne se départit de sa dignité en aucune circonstance»;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors qu'il était en congé durant sa période de stage à la circonscription de sécurité publique de Nantes, a été expulsé d'un établissement de nuit après une rixe à laquelle il avait pris part; qu'en état d'ivresse caractérisée, il s'est prévalu, afin de pouvoir pénétrer à nouveau dans l'établissement, de sa qualité de commissaire stagiaire pour demander l'appui des forces de police appelées sur place; qu'il était en possession de son arme de service contrairement aux prescriptions du règlement général d'emploi de la police nationale qui lui imposait de remiser son arme à l'armurerie de service pendant un congé; que ces faits, alors au surplus que son comportement antérieur avait déjà justifié des observations de la part de ses supérieurs, étaient de nature à justifier légalement une sanction; que la sanction de l'exclusion définitive du service prononcée à raison de ces faits, qui doivent s'apprécier compte tenu de la qualité de commissaire de police stagiaire de l'intéressé et des obligations déontologiques de dignité et d'exemplarité qui s'imposaient à lui, tout particulièrement dans un lieu public et alors même qu'il n'était pas en service, n'est pas manifestement disproportionnée; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'un de ses collègues aurait bénéficié d'une sanction plus clémente après avoir commis des faits analogues;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées ne peuvent qu'être rejetées;

DECIDE:

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Henri-Jacques X, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Abstrats: 36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Conditions de nomination. - Compétence du Président de la République - a) Nomination dans le Corps de Conception et de Direction de la Police Nationale en qualité d'élève Commissaire (décret du 9 mai 1995) - b) Conséquence - compétence pour prononcer l'exclusion définitive du Service d'un Commissaire Stagiaire de la Police Nationale.

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires. - Commissaire Stagiaire de la Police Nationale - Compétence pour prononcer l'exclusion - Président de la République.

54-07-02-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle restreint. - Sanction prononcée à l'encontre d'un agent public [rj1].

Résumé: 36-03-03-007 a) Il résulte des dispositions du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, alors en vigueur, que la nomination dans le corps de direction et de conception de la police nationale s'effectue à l'entrée dans ce corps en qualité d'élève commissaire et qu'il appartient au Président de la République de la prononcer.....b) Par suite, celui-ci est compétent pour décider d'infliger la sanction d'exclusion définitive du service à un commissaire stagiaire de la police nationale, alors même que ce dernier a été nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.

36-10-06-01 Il résulte des dispositions du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, alors en vigueur, que la nomination dans le corps de direction et de conception de la police nationale s'effectue à l'entrée dans ce corps en qualité d'élève commissaire et qu'il appartient au Président de la République de la prononcer. Par suite, celui-ci est compétent pour décider d'infliger la sanction d'exclusion définitive du service à un commissaire stagiaire de la police nationale, alors même que ce dernier a été nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.

54-07-02-04 Le Conseil d'Etat vérifie qu'une sanction prononcée à l'encontre d'un agent public n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.

[RJ1] Comp., optant pour un contrôle normal s'agissant de la sanction infligée à un agent d'une société de bourse, Assemblée, 4 mars 1991, Le Cun, p. 70; jugeant que les sanctions infligées aux agents publics dont les attributions ne comportent pas de participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes publiques entrent dans le champ de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 février 2000, L'Hermite, p. 101; CEDH 8 décembre 1999, Pellegrin c/ France, n° 28.591/95.

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 10 mai 2005
N° de pourvoi: 03-44388
Non publié au bulletin
Président: Mme MAZARS conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2003), que M. Le X..., engagé le 29 juin 1987 en qualité d'agent de maintenance et de montage par la société Thyssenkrupp ascenseurs, a, le 24 mai 2001, vu son permis de conduire immédiatement suspendu à la suite d'un contrôle ayant révélé, alors qu'il conduisait son véhicule personnel, un taux d'alcoolémie; que ce salarié ayant alors averti son employeur le 28 mai 2001, celui-ci l'a convoqué le jour même à un entretien préalable et l'a licencié le 12 juin suivant;

Attendu que la société Thyssenkrupp ascenseurs fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de la condamner tant à payer à M. Le X... des dommages et intérêts qu'à rembourser à l'organisme concerné les allocations versées à ce salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen:

- 1° / que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, à la date du licenciement, le salarié, privé de son permis de conduire, ne pouvait plus remplir ses obligations; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
- 2° / qu'en décidant qu'il incombait à l'employeur de suspendre le contrat de travail jusqu'à la décision pénale à intervenir, plutôt que de prononcer le licenciement immédiat, la cour d'appel a méconnu le pouvoir d'appréciation qui appartient au seul employeur, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
- 3° / que la seule suspension administrative du permis de conduire pour un fait imputable au salarié, dès lors que, prononcée à effet immédiat pour une durée indéterminée, elle met le salarié dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations de son contrat de travail, suffit à justifier son licenciement; qu'en décidant le contraire, bien qu'elle constate que le permis de conduire du salarié a été suspendu en raison d'un fort taux d'alcoolémie du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
- 4° / que le licenciement motivé par l'impossibilité pour le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail, en raison d'une suspension administrative du permis de conduire prononcée pour un fait imputable au salarié, ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de remise en cause ultérieure de la suspension administrative par la juridiction pénale; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui constate que la juridiction pénale a refusé le permis blanc sollicité par le salarié et ordonné avec exécution provisoire la suspension de son permis de conduire pendant 13 mois, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Thyssenkrupp ascenseurs aux dépens;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

Décision attaquée: cour d'appel de Rennes (8e chambre Prud'Hom), du 10 avril 2003.

► CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA ESFERA PRIVADA CON VEHÍCULO DE LA EMPRESA

Roj: Ats 8970/2013
Id Cendoj: 28079140012013201836
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº De Recurso: 474/2013
Nº De Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Aurelio Desdentado Bonete
Tipo De Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a diez de Septiembre de dos mil trece.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. AURELIO DESDENTADO BONETE.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 32 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 17 de enero de 2012, en el procedimiento nº 944/11 seguido a instancia de D. Jose Antonio contra COMERCIAL MERCEDES BENZ, S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 16 de noviembre de 2012, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 16 de enero de 2013 se formalizó por el Letrado D. Carlos Pérez- Cejuela López, en nombre y representación de COMERCIAL MERCEDES BENZ, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 21 de junio de 2013 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y R. 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y R. 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y R. 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y R. 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y R. 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y R. 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y R. 1138/2008, 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011).

Por tanto, procede comprobar si entre la sentencia recurrida en casación unificadora y la que se propone de contraste por la parte recurrente concurre el requisito de la contradicción, de conformidad con la doctrina de la Sala que se acaba de exponer.

En el caso de la sentencia recurrida, el 5 de febrero de 2011 sobre las 9,10 horas el actor conducía -tras una ingesta alcohólica- un vehículo cedido por la empresa para su utilización dentro del ámbito profesional, cuando perdió el control del coche saliéndose de la calzada por el margen derecho, golpeándose contra un poste eléctrico y contra la valla de seguridad. El actor se sometió a las pruebas de alcoholemia que dieron un resultado positivo. El actor no puso en conocimiento de la empresa por escrito el accidente, comunicándose verbalmente a su responsable directo, negándole que fuera bajo los efectos de alcohol. En el hecho probado octavo y en el fundamento tercero de la sentencia de instancia se relata que el actor a petición de la testigo Sr. Alberto le remitió un correo electrónico (folio 131) relatando que el accidente se había producido en circunstancias distintas a las anteriormente indicadas. La empresa instruyó expediente disciplinario al actor que terminó con resolución de 15 de julio de 2011 por la que se procede a su despido; que no se produce porque el actor condujera en estado de embriaguez sino por haber ocultado los hechos a la empresa.

La sentencia de instancia declaró procedente el despido por haber ocultado el actor la realidad de los hechos -ocultando la existencia de un atestado, no haber dado parte de daños como se contiene en el documento de cesión del vehículo, ni haber informado al responsable del sector de seguros ni haber informado que el vehículo fue objeto de siniestro total-; el actor ha sido condenado en firme por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Getafe.

Recurrió el actor en suplicación, dictándose sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 2012 que estima el recurso y declara improcedente el despido. Considera la sentencia que *«Lo verdaderamente relevante y significativo es que el actor comunicó verbalmente a su responsable directo, Sr. Braulio, que había tenido un accidente, y lo hizo tan solo dos días después de la fecha en que se produjo»*, aclarando que el día 5 era sábado y el 7 se puso en contacto con su superior. Según la sentencia, que el actor no cumplimentara el parte de siniestro, se justifica porque no lo consideró necesario al reconocer su culpa en el accidente y resta relevancia a las omisiones a las que se ha hecho referencia.

Recorre la empresa demandada en casación para la unificación de doctrina, seleccionando de contraste -de entre las varias que cita en la formalización del recurso- la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 8 de febrero de 2011. En ese caso, el actor, conduciendo un vehículo propiedad de la empresa demandada, después de su jornada de trabajo y tras detenerse en varios lugares sufrió un accidente de tráfico en el que -según la Guardia Civil- el vehículo chocó con su parte trasera contra un pino. El actor comunicó a la empresa que el accidente se produjo a la salida del trabajo al ser golpeado por detrás por un vehículo que se había dado a la fuga. La sentencia confirma la procedencia del despido, valorando el hecho de que el actor ocultara a la empresa el modo en que dicho accidente tuvo lugar, mintiendo sobre dicho suceso *«al mencionar de forma errónea y consciente no solo el lugar del accidente, sino también el modo de producción del mismo, implicando a un vehículo inexistente»*.

Aunque los supuestos comparados presentan una clara identidad, existen diferencias que impiden apreciar el requisito de la contradicción. Así, la sentencia de contraste valora el hecho de que el actor unos meses antes había sufrido otro accidente, igualmente con daños y en el mismo vehículo, y en base a lo cual la sentencia rechaza al final de su fundamentación la aplicación de la doctrina gradualista.

Por otra parte la sentencia recurrida valora otras circunstancias en las que se basaba el despido como que el actor no podía conocer en un primer momento la situación de siniestro total del vehículo, o la falta de abono por el actor de los daños sufridos, o el no haber cumplimentado el parte de siniestro; circunstancias que son

ajenas a la sentencia de contraste. Por otra parte, la Sala ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995, 6 de Julio de 2004, R. 5346/2003, 24 de mayo de 2005, R. 1728/04, 8 de junio de 2006, R. 5165/2004 y 18 de diciembre de 2007, R. 4301/2006, 15 de enero de 2009, R. 2302/2007, 19 de julio de 2010, R. 2643/2009, 19 de enero de 2011, R. 1207/2010, 24 de enero de 2011, R. 2018/2010 y 24 de mayo de 2011, R. 1978/2010 y 14 de julio de 2011, R. 3060/10).

En la providencia del pasado 21 de junio de 2013 que advertía de la posible inadmisión del recurso por falta de contradicción se deslizó un error de transcripción al referirse a la sentencia de contraste, de forma que en lugar de citar la seleccionada por la recurrente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 8 de febrero de 2011 se citó la sentencia aquí recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 2012.

En su escrito de alegaciones la parte recurrente dice que se ha considerado como de contraste una sentencia distinta a la que en su día seleccionó por lo que solicita se tenga por seleccionada la sentencia de la Comunidad Valenciana «a los efectos de hacer la expresa comparación o examen de contraste sobre la misma y no sobre la que por error se ha identificado y efectuado, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de noviembre de 2012...». Así pues, las alegaciones no se oponen a la falta de contradicción porque entiende que se ha llegado a esa conclusión al comparar la sentencia recurrida con otra distinta a la seleccionada.

No puede accederse a lo interesado y el recurso debe ser inadmitido por falta de contradicción porque la comparación de la sentencia recurrida se ha realizado con la efectivamente seleccionada del Tribunal de la Comunidad Valenciana. La providencia de la Sala se refería por error a la recurrida y no a ninguna otra sentencia, y ese es un error evidente que la parte pudo apreciar, máxime cuando en la providencia se indicaba que la sentencia de contraste «toma en consideración que el actor había sufrido meses antes otro accidente, en base a lo cual rechaza la aplicación de la teoría gradualista»; y la parte pudo fácilmente comprobar que eso se corresponde realmente con lo argumentado por la sentencia del Tribunal de la Comunidad Valenciana.

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 219.1 y 225. 5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Con imposición de costas a la parte recurrente, mantenimiento del aval constituido hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, en su caso, la realización del mismo, y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Carlos Pérez-Cejuela López, en nombre y representación de COMERCIAL MERCEDES BENZ, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 16 de noviembre de 2012, en el recurso de suplicación número 4485/12, interpuesto por D. Jose Antonio, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 32 de los de Madrid de fecha 17 de enero de 2012, en el procedimiento nº 944/11 seguido a instancia de D. Jose Antonio contra COMERCIAL MERCEDES BENZ, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente mantenimiento del aval prestado hasta que se cumpla la sentencia y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 12 avril 2012
N° de pourvoi: 11-11208
Non publié au bulletin
Rejet
M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2010), que M. X... engagé par la société Entreprise de travaux routiers le 6 mars 2007 en qualité de conducteur de travaux, a le 25 octobre suivant à l'occasion d'un accident de la circulation survenu pendant son temps de travail au volant du véhicule de la société qu'il conduisait, été victime d'une agression de la part du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 2008;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur des faits prescrits et est dès lors sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen:

- 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si ce fait a donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales; que le délai est interrompu par l'engagement des poursuites jusqu'au jour où l'employeur a eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure; qu'en déduisant la tardiveté de la procédure disciplinaire initiée le 7 mai 2008 du fait que l'employeur aurait été informé par son salarié de la réalité des faits reprochés et des poursuites pénales en cours contre lui pour ces faits la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail;
- 2°/ subsidiairement qu'en déduisant la connaissance exacte, par l'employeur, de faits fautifs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis hors de l'entreprise, de considérations inopérantes, telles l'information que lui aurait donnée son salarié «...d'une procédure pénale le visant...à l'occasion de l'agression dont il avait été victime» ou les «...circonstances de l'accident du travail (agression par un tiers de M. X... alors qu'il conduisait un véhicule de la société, avec transport au CHU de Bordeaux par hélicoptère), dont la société ETR ...avait été immédiatement prévenue», quand il ressortait du dossier de la procédure pénale produit devant elle que la constatation du taux d'alcoolémie (1,67 grammes) de M. X... n'avait été notifiée au salarié que le 2 novembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait eu une connaissance tardive des faits qu'il reprochait au salarié; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Entreprise de travaux routiers aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise de travaux routiers et la condamne à payer à M. X... la somme de 2.500 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Entreprise de travaux routiers (ETR).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR «dit que le licenciement de Mr X... repose sur des faits prescrits et que dès lors il est sans cause réelle et sérieuse», condamné en conséquence la SAS ETR à verser à ce salarié les sommes de 773,23 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied, outre les congés payés y afférents, 7.989,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2.687,40 € à titre de 13ème mois, ordonné le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois;

AUX MOTIFS QUE «Monsieur Gilles X... a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 22 mai 2008 dans les termes suivants:

Nous avons eu récemment connaissance des conditions dans lesquelles vous conduisiez un véhicule de l'entreprise le 25 octobre 2007 en fin d'après-midi alors que, victime d'une agression, vous avez fait l'objet d'une évacuation sur le CHU de Bordeaux.

Il apparaît qu'au moment des faits vous conduisiez sous l'empire d'un état alcoolique provoqué par une consommation dans le cadre de votre activité professionnelle»;

QUE l'article L.1332-4 du Code du travail fixe le délai de prescription en matière disciplinaire à deux mois, ce délai commençant à courir à compter de la commission des faits ou de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance;

QUE les faits à l'origine du licenciement se sont déroulés le 22 octobre 2007 alors que la Société ETR a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de son salarié le 7 mai 2008; que pour faire échec à la prescription, la Société ETR prétend qu'elle n'a eu connaissance des circonstances précises de l'accident du travail de son salarié que le 28 avril 2008, date à laquelle le Parquet de Périgueux lui a transmis, à sa demande, le dossier; que toutefois, contrairement aux premiers juges, la cour estime que le fait que la Société ETR n'ait reçu communication du dossier pénal que le 28 avril 2008 ne démontre en rien qu'elle n'avait pas connaissance avant de tous les éléments précis sur l'accident du travail de son salarié, d'autant que Monsieur X... affirme pour sa part avoir totalement informé son employeur des poursuites pénales dont il faisait l'objet (et que) compte tenu des circonstances de l'accident du travail (agression par un tiers de Monsieur Gilles X... alors qu'il conduisait un véhicule de la Société, avec transport au CHU de Bordeaux par hélicoptère), la Société ETR qui a été immédiatement prévenue ne saurait valablement soutenir qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'ensemble des circonstances de l'accident avant le 28 avril 2008 ou qu'elle n'a jamais fait une quelconque recherche durant sept mois...pour soudainement «entendre des rumeurs» sur son salarié quelques jours avant la reprise du travail de celui-ci;

QUE d'ailleurs, la Société ETR verse aux débats une pièce significative qui démontre qu'elle était bien informée des circonstances de l'accident et des poursuites à l'encontre de Monsieur X... à l'occasion de cet accident avant de recevoir copie du dossier par le Parquet (à savoir) le courrier en date du 17 avril 2008 du délégué du Procureur qui lui répond:

«J'ai bien reçu copie de votre courrier du 10 avril 2008 par lequel vous exprimiez le souhait d'obtenir une copie du procès-verbal concernant votre salarié...je ne peux accéder à votre demande...»

Comment l'employeur aurait-il pu savoir qu'une procédure pénale visant son salarié à l'occasion d'une agression dont celui-ci avait été victime était devant le délégué du Procureur si son salarié ne lui en avait préalablement parlé?

QU' au vu de cette analyse, et contrairement aux premiers juges, la Cour considère que la Société ETR ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas une connaissance suffisamment précise des faits qu'elle a reprochés

à son salarié pour fonder un licenciement pour ne le licencier que sept mois après l'accident» (arrêt p.4 in fine, p.5 alinéas 1 à 5);

- 1°/ ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si ce fait a donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales; que le délai est interrompu par l'engagement des poursuites jusqu'au jour où l'employeur a eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure; qu'en déduisant la tardiveté de la procédure disciplinaire initiée le 7 mai 2008 du fait que l'employeur aurait été informé par son salarié de la réalité des faits reprochés et des poursuites pénales en cours contre lui pour ces faits la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1332-4 du Code du travail.
- 2°/ ALORS subsidiairement QU' en déduisant la connaissance exacte, par l'employeur, de faits fautifs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis hors de l'entreprise, de considérations inopérantes, telles l'information que lui aurait donnée son salarié «...d'une procédure pénale (le) visant...à l'occasion de l'agression dont il avait été victime» ou les «...circonstances de l'accident du travail (agression par un tiers de Monsieur Gilles X... alors qu'il conduisait un véhicule de la Société, avec transport au CHU de Bordeaux par hélicoptère), (dont) la Société ETR ...(avait) été immédiatement prévenue», quand il ressortait du dossier de la procédure pénale produit devant elle que la constatation du taux d'alcoolémie (1,67 grammes) de Monsieur X... n'avait été notifiée au salarié que le 2 novembre 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Bordeaux, du 30 novembre 2010.

Roj: ATS 17768/2009
Id Cendoj: 28079140012009203422
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1531/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Rosa María Viroles Piñol
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de dos mil nueve.
Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. ROSA MARÍA VIROLES PIÑOL.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Oviedo se dictó sentencia en fecha 1 de octubre de 2008, en el procedimiento nº 627/08 seguido a instancia de D. Estanislao contra UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS F.C.C., S.A., AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., sobre despido, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias, en fecha 13 de marzo de 2009, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 19 de mayo de 2009 se formalizó por el Procurador D. Alberto Hidalgo Martínez en nombre y representación de D. Estanislao, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 15 de octubre de 2009, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y de interés casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias de 13 de marzo de 2009 (rec. 2759/2008), revoca la de instancia declarando la procedencia del despido del que ha sido objeto el actor. Consta en el relato fáctico de la sentencia que prestaba sus servicios para la demandada desde 2003 como técnico auxiliar, y que era miembro del Comité de empresa, hasta su despido disciplinario. La sentencia ahora recurrida en casación unificadora considera cierto el hecho que consta en la carta de despido como justificativo del mismo, esto es: que el día 9-6-2008, aprovechando que disponía de las llaves de una furgoneta de la empresa (con su logotipo), cuyo uso tenía asignado un compañero de trabajo que estaba de vacaciones, empleó el vehículo con su combustible para realizar una actividad ajena a su cometido profesional sin contar con la previa y exigida autorización o permiso, siendo interceptado por la Guardia Civil al día siguiente *«porque conducía en zigzag y se saltó un semáforo en rojo, dando positivo en el test de alcoholemia»*, resultando condenado en sentencia firme como autor responsable de un delito contra la seguridad vial. Pues bien, entiende la Sala que se trata de un acto claro de desobediencia, que transgrede la buena fe contractual y fidelidad esenciales a la relación laboral, justificando por ende el despido. Contra esta sentencia interpone recurso de casación para unificación de doctrina el actor, construido artificiosamente sobre dos motivos casacionales, respecto de los que no es posible apreciar contradicción.

El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos

distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

El primer motivo que alega el recurrente, se articula en torno a la procedencia de un despido por utilización de un vehículo de la empresa sin autorización previa, aportando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de octubre de 2007 (Rec. 4064/2007), respecto de la que, como se ha avanzado, no es posible apreciar contradicción porque en este caso se declara improcedente el despido del actor, pero habiéndose debido éste a hechos diversos a los ahora enjuiciados. En concreto, se considera probado en este caso que cierto día el actor solicitó las llaves de un vehículo de la empresa —que utilizaba como herramienta de trabajo—, que le fueron entregadas, cogiendo éste al día siguiente sin autorización para su uso de forma privada. Valora la Sala estos hechos para considerarlos insuficientes para justificar un despido disciplinario, al entender que la conducta enjuiciada no reviste ni la naturaleza ni la gravedad y la culpabilidad que la empresa pretende, pues la utilización un solo día para fines propios del vehículo que se usa como herramienta de trabajo, sin contar con autorización para ello, no puede determinar la calificación de procedente del despido.

Huelga señalar que el supuesto de referencia ninguna relación guarda con el de autos, toda vez que mientras en ese caso lo único que se había probado era que el actor había utilizado un solo día para fines propios del vehículo que se usaba como herramienta de trabajo, sin contar con autorización para ello, en el de autos consta probado que el actor, aprovechando que disponía de las llaves de una furgoneta de la empresa (con su logotipo), cuyo uso tenía asignado otro compañero, la tomó para realizar una actividad ajena a su cometido profesional sin contar con la previa y exigida autorización o permiso, siendo interceptado por la Guardia Civil al día siguiente por conducir en zigzag y saltarse un semáforo en rojo, dando positivo en el test de alcoholemia, y siendo luego condenado como autor responsable de un delito contra la seguridad vial.

SEGUNDO.- El segundo motivo que alega el recurrente se articula en torno a la procedencia del despido por utilización de un vehículo de la empresa una vez finalizada la jornada, bajo la influencia del alcohol, con test de alcoholemia positivo y condena penal, aportando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 17 de octubre de 2007 (rec. 1670/2007), respecto de la que también puede predicarse falta de contradicción, ya que, si bien igualmente se declara la improcedencia del despido del actor, ésta se funda en torno a otros hechos, en concreto, en este caso, sólo se considera probado que el actor sufrió un accidente con un vehículo que la empresa tenía alquilado a una tercera comercial, y con el que éste realizaba su actividad laboral, y lo sufrió tras ingerir alcohol. No es preciso insistir en que en el caso de autos concurren otras circunstancias que incrementan considerablemente la gravedad de la conducta sancionada. En efecto, en el caso que nos ocupa el actor utilizó una furgoneta de la empresa, sin autorización, siendo interceptado por la Guardia Civil al día siguiente por conducir en zigzag y saltarse un semáforo en rojo, dando positivo en el test de alcoholemia, y siendo luego condenado como autor responsable de un delito contra la seguridad vial.

TERCERO.- Por otra parte, la Sala ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas a efectos de su inclusión en alguno de los diferentes apartados del número 1 del artículo 50 del ET no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en estos casos la decisión se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 19 de diciembre de 1991 (R. 404/1991), 16 de junio de 1992 (R. 1312/1991), 13 de julio de 1998 (R. 3688/1997), 22 de enero y 26 de junio de 2008, R. 335/2007 y 2196/2007 y autos, entre otros muchos, de 19 de diciembre de 2007, R. 370/2007 y 17 de julio de 2008, R. 3595/2007).

CUARTO.- Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 10 de noviembre de 2009, donde reiterando lo ya expuesto en el escrito de interposición no aporta argumentos jurídicos que desvirtúen lo razonado por esta Sala en su providencia de 15 de octubre de 2009.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas. Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador D. Alberto Hidalgo Martínez, en nombre y representación de D. Estanislao contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias de fecha 13 de marzo de 2009, en el recurso de suplicación número 2759/08, interpuesto por UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, FCC, S.A. - AGUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Oviedo de fecha 1 de octubre de 2008, en el procedimiento nº 627/08 seguido a instancia de D. Estanislao contra UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS F.C.C., S.A., AGUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 22 septembre 2009
N° de pourvoi: 08-42304
Non publié au bulletin
Cassation
M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu l'article L. 1211-1 du code du travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 1979 par la société Villeroy et Boch, et en dernier lieu délégué régional, a été licencié pour faute grave le 14 avril 2005;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... était en mesure de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dès lors que deux anciens salariés de l'entreprise avaient accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié dont le permis de conduire avait été suspendu ne pouvait plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction et alors que l'employeur n'était pas tenu d'accepter qu'il se substituât des tiers pour la conduite du véhicule que l'entreprise mettait à disposition pour les déplacements professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Villeroy et Boch.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, par voie de conséquence, condamné la société VILLEROY & BOCH à verser à Monsieur X... les sommes de 1.456,27 euros à titre de rappel de salaire, 9.426,03 euros à titre d'indemnité de préavis, 38.959,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

AUX MOTIFS QUE selon la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, le motif de cette décision de l'employeur réside non dans l'infraction routière, commise dans un cadre privé, mais dans ses incidences professionnelles: impossibilité de travailler, et atteinte portée à l'image de l'entreprise; que des faits commis dans le cadre de la vie privée ne peuvent entraîner un licenciement que si, par leur nature, ils se rattachent à la vie professionnelle ou s'ils créent un trouble objectif à la vie de l'entreprise; qu'en l'espèce, il ne peut être retenu que l'infraction routière et la suspension de permis de conduire se rattachaient à l'emploi de M. Gilles X..., puisque ses fonctions n'étaient pas la conduite de véhicules; qu'il n'est pas plus démontré qu'ils créaient un trouble objectif à l'entreprise, et plus précisément qu'ils plaçaient le salarié dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail; qu'en effet, ses fonctions, de nature commerciale, nécessitaient la visite de clients, sur dix départements; que dès lors, le salarié pouvait poursuivre son activité à condition de trouver une solution pour être conduit, ce qu'il a fait (ce dont attestent ses fiches de paie de déplacement, remboursés) en obtenant l'aide de deux personnes tierces à l'entreprise, anciens salariés; que ce fait ne lui est pas reproché, alors que la S.A.S. VILLEROY & BOCH en avait connaissance au moment de la convocation à l'entretien préalable, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. Y... (informé durant la « semaine 13 ») et de l'envoi le 30 mars 2005 par Mme Z... de son permis de conduire, et l'employeur ne démontre pas, qu'ainsi qu'il le soutient, qu'il n'existait aucune solution permettant à M. Gilles X... de poursuivre son activité commerciale; qu'en dernier lieu, il n'est justifié en aucune façon de l'atteinte qui a pu être portée à l'image de l'entreprise par suite de la suspension de permis de conduire temporaire de M. Gilles X...; qu'en conséquence, le licenciement de M. Gilles X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- 1º/ ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle; qu'un tel fait se rattache à la vie professionnelle du salarié lorsque la conduite d'un véhicule automobile constitue son activité exclusive ou lorsqu'elle constitue une activité accessoire, mais indispensable, à l'exercice de son activité principale; qu'ainsi le fait pour un salarié dont le travail consiste à visiter des clients répartis sur une zone géographique comprenant plusieurs départements, avec un véhicule de fonctions, de se voir retirer son permis de conduire en raison d'une conduite en état d'alcoolémie, se rattache à sa vie professionnelle; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les fonctions commerciales de Monsieur X... consistaient à visiter des clients, sur dix départements, en utilisant un véhicule de fonctions; qu'elle a cependant affirmé que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis par Monsieur X... en dehors de son temps de travail et la suspension de permis de conduire dont il faisait l'objet ne pouvaient être rattachés à son emploi, dans la mesure où ses fonctions n'étaient pas la conduite de véhicules; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail;
- 2º/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur doit énoncer un motif suffisamment précis; qu'il peut ainsi exposer non seulement le fait reproché au salarié, mais également les circonstances qui donnent à ce fait un caractère fautif et une gravité suffisante à ses yeux pour justifier le licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... était motivée de la manière suivante «(...) nous vous notifions votre licenciement au motif personnel suivant: Vous avez fait l'objet d'une mesure de retrait temporaire de votre permis de conduire, pour conduite en état d'ivresse; cette situation ne vous permet plus d'exercer votre activité professionnelle, qui consiste en visites de clients de votre ressort géographique. Par ailleurs, ce fait porte gravement atteinte à l'image de l'entreprise, que vous représentez auprès de vos clients»; qu'ainsi, en énonçant que «selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le motif de cette décision de l'employeur réside non dans l'infraction routière, commise dans un cadre privé, mais dans ses incidences professionnelles: impossibilité de travailler, et atteinte portée à l'image de l'entreprise», la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et, partant, violé l'article 1134 du Code civil;
- 3º/ ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en concluant un contrat de travail, le salarié s'engage à exécuter personnellement sa prestation de travail; que lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité d'exécuter lui-même sa prestation de travail, son employeur n'est pas tenu d'admettre qu'une autre personne exécute sa prestation de travail à sa place; qu'en l'espèce, la prestation de travail que Monsieur X... s'était engagé à exécuter au service de la société VILLEROY & BOCH consistait à visiter des clients, sur dix

départements, en utilisant un véhicule de fonctions; que l'exécution de sa prestation comportait ainsi, non seulement des activités purement commerciales, mais également la conduite d'un véhicule automobile; que, la cour d'appel a néanmoins affirmé, pour expliquer qu'il n'était pas démontré que la suspension du permis de conduire de Monsieur X... plaçait ce dernier dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail, que Monsieur X... pouvait poursuivre son activité à condition de trouver une solution pour être conduit; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le caractère intuitu personae du contrat de travail et violé l'article L. 121-1 du Code du travail;

- 4º/ ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un salarié, qui est affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile, se voit retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'employeur n'est pas tenu de chercher des solutions qui permettraient au salarié de continuer d'assumer une partie de ses fonctions ne nécessitant pas la possession d'un permis de conduire; qu'en particulier, l'employeur ne saurait être tenu de mettre à la disposition du salarié une personne spécialement affectée à sa conduite sur ses différents lieux de travail; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié, au motif que, s'il s'était vu retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui l'empêchait de conduire son véhicule de fonctions, la société VILLEROY & BOCH ne démontrait pas qu'il n'existait aucune solution permettant à Monsieur X... de poursuivre son activité commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Toulouse, du 21 mars 2008.

<http://www.tirantonline.com>
Documento TOL3.372.431
Jurisprudencia
Jurisdicción: Social
Ponente: Rosa María Virolés Piñol
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 10/02/2009
Tipo Resolución: Auto
Sala: Cuarta
Número Recurso: 1987 / 2008

ENCABEZAMIENTO:

En la Villa de Madrid, a diez de Febrero de dos mil nueve.
Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. ROSA MARÍA VIROLÉS PIÑOL.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social N° 2 de los de Burgos se dictó sentencia en fecha 5 de octubre de 2007, en el procedimiento nº 474 / 07 seguido a instancia de D. Adolfo contra FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, ARTINE MOVIMIENTOS EXCAVACIONES Y SERVICIOS, S. L., sobre cantidad, que estimaba en parte la pretensión formulada y la reconvencción solicitada por Artine Movimientos Excavaciones y Servicios, S. L.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en fecha 27 de febrero de 2008, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 24 de junio de 2008 se formalizó por la Procuradora D^a Elena Puig Turegano en nombre y representación de D. Adolfo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 16 de diciembre de 2008 acordó abrir el trámite de inadmisión, por descomposición artificial de la controversia, falta de contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La sentencia que se recurre, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, de 27 de febrero de 2008 (Rec. 799 / 07) tiene por objeto la reclamación efectuada por el trabajador, correspondiente a salarios devengados y no abonados y la liquidación proporcional y a su vez debatir la demanda reconvenccional planteada por la empresa, respecto a los gastos ocasionados en un vehículo de su propiedad como consecuencia del accidente de tráfico sufrido por el trabajador.

La sentencia de instancia, confirmada por la ahora recurrida, estimó la demanda del trabajador, excepto en lo relativo al interés por mora y también la reconvencción formulada, condenando al actor al abono de la cantidad pretendida. Por lo que ahora interesa, y en el segundo motivo de suplicación, el trabajador alegó que la conducta no reviste la suficiente gravedad como para exigirle una responsabilidad de daños y perjuicios, puesto que el accidente causado cuando conducía un camión de la empresa fue un mero descuido sin que existiera dolo ni culpa y que tal riesgo de actividad debe ser asumido por la empleadora. Argumento que es rechazado por la Sala de Suplicación, al entender que la actuación de aquel no se trata de un mero descuido y si de un comportamiento negligente y culposo, excediendo de lo que es el actuar normal de un conductor.

SEGUNDO.- Disconforme con la anterior resolución se alza el trabajador en casación unificadora, articulando el mismo a través de tres motivos, seleccionando las correspondientes sentencias - Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 10 de marzo de 2004 (Rec. 1151 / 03) y Tribunal Superior de Justicia de Castilla y

León, sede en Valladolid, de 6 de abril de 2001 (Rec. 438 / 01) - y denunciando infracción de los arts 5 y 20 ET, en relación a los arts. 3. 1, 1088, 1089 y 1091 del Código Civil, así como los arts 1101 y 1104 del mismo cuerpo legal, y del art 24 CE. La recurrente mantiene, en esencia, que el accidente se produjo por un mero descuido o distracción, no por una negligencia grave, generadora de la responsabilidad exigida, si bien disecciona las argumentaciones de la Sala de Suplicación para sustentar tres motivos diferentes. Sin embargo, este actuar es incorrecto, porque aquí no se debaten varios puntos de contradicción, sino uno sólo y la unidad de esa cuestión no puede desconocerse introduciendo diversas perspectivas de análisis sobre algunas de las circunstancias concurrentes, porque no es lo mismo la existencia dentro de un mismo pleito de distintos puntos de decisión (como la jurisdicción, la caducidad o el problema de fondo), que la concurrencia de diversas circunstancias que deben ser valoradas para la decisión de un mismo punto de decisión, es decir, mediante pronunciamiento unitario (sentencias 31 de enero de 2005 (R. 4715 / 2003), 15 de marzo de 2005 (R. 5793 / 2003). Avala la tesis de la descomposición artificial, el dato que la infracción jurídica denunciada sea única y también que una misma sentencia de contraste, sea utilizada para dos motivos.

Y estas argumentaciones no han quedado desvirtuadas por las alegaciones de la recurrente realizadas en trámite de inadmisión. Y en todo caso, no se ha producido la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que en definitiva, esta Sala ha analizado todas las sentencias invocadas de contraste a los efectos de la contradicción.

TERCERO.- Como es obligado, por imperativo del artículo 217 de la ley de Procedimiento Laboral, lo primero que debe valorarse en todo recurso de casación para la unificación de doctrina, es si concurre entre la sentencia recurrida y la que se propone como término de comparación el requisito básico de la contradicción.

Al respecto, la Sala ha reiterado que la contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales, siendo preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de « hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales ». También se ha dicho que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824 / 1991 y 1053 / 1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035 / 4996, 94 / 1997, y 4203 / 1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478 / 1997), 7 de abril de 2005 (R. 430 / 2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132 / 2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082 / 2004).

De conformidad con la anterior doctrina, y tal y como se anticipaba en la precedente providencia, ninguna de las sentencias propuestas de contraste es contradictoria con la recurrida.

CUARTO.- 1. - Respecto a la sentencia invocada para los motivos primero y tercero, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 10 de marzo de 2004 (Rec. 1151 / 03), el recurrente plantea que ante igual forma de producirse el accidente, en un caso éste se califica de mero descuido del trabajador y en el otro de grave imprudencia, y también respecto a la diferente valoración sobre quien debe soportar el riesgo que comporta la actividad del trabajador desarrollada con medios o útiles de la empresa.

La sentencia de contraste ha recaído en un procedimiento que tenía por objeto la declaración de la improcedencia del descuento que la empresa verificó en el salario del actor para compensar los gastos de reparación de un vehículo propiedad de la empresa, que ésta puso a disposición del trabajador con motivo de un desplazamiento. El demandante que presta servicios como sondista, y realiza frecuentes desplazamientos por razón de su trabajo, cuando se dirigía a la localidad donde se encontraba hospedado, sufrió un accidente de tráfico, resultando daños materiales para el vehículo propiedad de la empresa. También la empresa formuló reconvencción por la diferencia hasta el total del valor de los daños. Frente a la sentencia de instancia, desestimatoria de la demanda formulada por el actor, y estimatoria de la demanda reconvenccional deducida por la empresa, interpuso aquél recurso de suplicación. El objeto del debate viene constituido por la exigencia de dolo o culpa para que sea exigible la obligación de compensación de los daños originados por el trabajador en los bienes de la empresa, conforme a lo dispuesto en el art. 63 de la derogada LCT. La Sala estima que en este caso es la empresa la que debe soportar el riesgo que comporta la circulación de un vehículo de motor

por vías públicas, habida cuenta que el trabajador no ha incurrido en dolo o culpa grave, sino en una mera negligencia o descuido, al no haberse acreditado que condujese bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni que realizase una maniobra de conducción temeraria. Todo lo cual lleva a la estimación del recurso y de la pretensión actora, dejando sin efecto el descuento realizado por la empresa.

2.- Es cierto que las situaciones contempladas presentan indudables semejanzas, en cuanto en ambas nos encontramos con trabajadores que han sufrido sendos accidentes de circulación con vehículos propiedad de la empresa, y a los que ésta reclama los daños causados. Ahora bien, existen diferencias substanciales en cuanto a la forma de producirse el accidente que lógicamente tiene su influencia a la hora de calificar la actuación del trabajador. Por otra parte resulta que no existe doctrina alguna a unificar pues ambas resoluciones entienden que para que surja la obligación del trabajador de indemnizar al empresario por los perjuicios causados en útiles de su propiedad, es necesario una actuación culposa, siendo así que la actuación negligente debe tener la entidad suficiente para provocar el nacimiento de la responsabilidad. Y en el presente caso queda acreditado que el trabajador conducía el camión accidentado a una velocidad el doble de la permitida, a 80 Km / h, cuando el límite estaba en 40 Km / h y todo ello en una carretera en obras que estaba debidamente señalizada [fundamento de derecho 5º de la sentencia de instancia con evidente valor fáctico].

Y esta actuación acredita que el accidente no se produjo por mero descuido del trabajador, ni tampoco se constatan elementos o factores que le exoneren del elemento culpabilístico. Por el contrario en el caso de la referencial, no se acredita nada semejante, pues únicamente se verifica que tras dar un fuerte frenazo, el vehículo se salió de la calzada, y por otra parte consta que no conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ni que realizase una maniobra de conducción temeraria, ni tampoco como ocurre en el caso de autos que circulara a una velocidad muy superior a la permitida. Lo que lleva a ponderar la conducta como una actuación meramente negligente o de simple descuido. Es decir, se descarta la existencia de dolo o culpa grave. Y sin que se desprenda, que hubo exceso de velocidad, que ningún reflejo tiene en el relato histórico.

3.- Estos razonamientos, contenidos en nuestra providencia de 16 de diciembre de 2007, no han quedado desvirtuados con las alegaciones del recurrente. En ellas simplemente se insiste en la concurrencia de la identidad sostenida porque en ambos supuestos los vehículos circulaban con exceso de velocidad.

Argumento que no puede tener favorable acogida porque, como se ha dicho en las líneas precedentes, dicho extremo no ha quedado acreditado en la sentencia de contraste.

QUINTO.- Finalmente se procede a analizar la otra sentencia invocada de contraste, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Valladolid, de 6 de abril de 2001 (Rec. 438 / 01). Esta se corresponde con el segundo motivo, en el que se denuncia la diferente valoración de las circunstancias relativas al estado de la calzada y su influencia en la voluntariedad del actuar del trabajador. Y que resulta que tampoco es contradictoria con la impugnada. En efecto, en la referencial, se reclama también por la empresa al trabajador la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia del accidente de tráfico sufrido por aquel.

Y que es desestimada al no concurrir en la conducta del trabajador dolo o negligencia culpable ni omisión de la diligencia que exigía la naturaleza de la obligación conforme a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. En este supuesto, el trabajador que ostentaba la categoría profesional de conductor, conducía un camión cisterna y una vez enfilado un tramo recto de buena visibilidad, se distrajo momentáneamente para coger unos papeles de la guantera. En este supuesto, junto a la distracción puntual se valora especialmente que el tramo fuera recto y de buena visibilidad, la falta de arcones en la calzada y que la anchura fuera solo 2, 90 metros por cada carril. Y estas circunstancias son ajenas a la impugnada en la que queda acreditado que en el momento del accidente el trabajador circulaba por un tramo en obras, debidamente señalizado y a una velocidad de 80 Km / H, cuando la máxima permitida era de 40 Km / h.

En su escrito de alegaciones la parte recurrente insiste en la contradicción entre la sentencias pero de la exposición que antecede se evidencia la falta de identidad entre los supuestos enjuiciados y por tanto la ausencia de contradicción.

SEXTO.- Por otra parte, el recurso carece de contenido casacional, y ello pese a lo manifestado por el recurrente en trámite de inadmisión. En el planteamiento subyace el descontento del trabajador con la valoración de la prueba y en particular de las circunstancias concurrentes en la producción del accidente. Y ello sobre la base de realizar unas afirmaciones, que no tienen su reflejo en el relato fáctico. Y es sabido que

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora D^a Elena Puig Turegano, en nombre y representación de D. Adolfo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 27 de febrero de 2008, en el recurso de suplicación número 799 / 07, interpuesto por D. Adolfo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Burgos de fecha 5 de octubre de 2007, en el procedimiento nº 474/ 07 seguido a instancia de D. Adolfo contra FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, ARTINE MOVIMIENTOS EXCAVACIONES Y SERVICIOS, S. L., sobre cantidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Roj: ATS 13776/2008
Id Cendoj: 28079140012008202655
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 4036/2007
Procedimiento: Social
Ponente: Mariano Sampedro Corral
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a cuatro de Diciembre de dos mil ocho.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. MARIANO SAMPEDRO CORRAL.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Valladolid se dictó sentencia en fecha 7 de mayo de 2007, en el procedimiento nº 315/2007 seguido a instancia de D. Jesús Ángel contra HILTI ESPAÑOLA S.A., sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en fecha 17 de octubre de 2007, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 5 de diciembre de 2007 se formalizó por el Letrado D. Pedro Jiménez Gutiérrez en nombre y representación de HILTI ESPAÑOLA S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 11 de septiembre de 2008 acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de cita y fundamentación de la infracción legal, falta de contenido casacional y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina es un recurso extraordinario que debe estar fundado en un motivo de infracción de ley (artículo 222 de la LPL, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal). La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia *«no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia»* (S. 25 de abril de 2002 - R. 2500/2001). Así se deduce no sólo del art. 222 LPL, sino de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en ese orden Social, cuyo art. 477.1 prescribe que *«el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso»*, mientras que el artículo 481.1 de la LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.º de la LEC (Autos de inadmisión de 14 de marzo de 2001 (R. 1589/2000), 9 de mayo de 2001 (R. 4299/2000), 10 de enero de 2002 (R. 4248/2000) y de 27 de febrero de 2002 (R. 3213/2001), y Sentencias de 25 de abril de 2002 (R. 2500/2001), 11 de marzo de 2004 (R. 3679/2003), 19 de mayo de 2004 (R. 4493/2003), 8 de marzo de 2005 (R. 606/2004), 28 de junio de 2005 (R. 3116/04) y 13 de julio de 2007 (R.1482/05).

Pues bien, el recurso se interpone por la empresa demandada incumpliendo de manera manifiesta e insubsanable el requisito de determinación y fundamentación de la infracción legal que establece el art. 222 LPL, pues, en contra de lo que alega la recurrente en su escrito de 15 de octubre, no basta para satisfacer

dicha exigencia legal la cita que de los preceptos se pueda realizar al relacionar la sentencia contrastada, tal como esta Sala ha señalado en varias ocasiones.

SEGUNDO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de *«hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales»*. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R.430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004).

La empresa demandada recurre en casación unificadora pretendiendo, al igual que hizo en el recurso de suplicación, que se declare la procedencia del despido disciplinario de que fue objeto el trabajador al considerar que las infracciones que le han sido imputadas y que constan acreditadas justifican la decisión extintiva, por lo que debe declararse la procedencia del despido. En definitiva, la recurrente está combatiendo la valoración de la prueba realizada por el juzgador de instancia y aceptada por la Sala de suplicación.

La pretensión de la recurrente carece de contenido casacional pues esta Sala, en casos como el presente ha señalado con reiteración que la finalidad institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que no sea posible en este excepcional recurso revisar los hechos probados de la sentencia recurrida ni abordar cuestiones relativas a la valoración de la prueba (sentencia de 3 de junio de 1.992 y las que en ella se citan), pues «es claro que el error de hecho no puede fundar un recurso de casación para la unificación de doctrina, como se desprende de los artículos 217 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, y ello tanto si la revisión se intenta por la vía directa de la denuncia de un error de hecho como si, de forma indirecta, se plantea como una denuncia de infracción de las reglas sobre valoración legal de la prueba, sobre la distribución de su carga o sobre los límites de las facultades de revisión fáctica de la Sala de suplicación (sentencias de 9 de febrero de 1.993 (R. 1496/1992), 19 de abril de 2004 (R. 4053/2002), 7 de mayo de 2004 (R. 4337/2002), 3 de junio de 2004 (R. 2106/2003) o auto de 17 de enero de 1997 (R. 1771/1996).

La sentencia recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León - Valladolid- de 17 de octubre de 2007, examina el despido disciplinario del actor, que presta sus servicios para la empresa Hilti Española SA con categoría de vendedor. El día 23-02-06 la empresa le comunicó al actor carta de despido disciplinario en los términos que constan, con ocasión de los hechos acaecidos el 24-06-05 y que provocaron, asimismo, la incoación de diligencias penales. En la carta, la empresa hace constar que tuvo conocimiento de los hechos a través de un compañero del trabajador, admitiéndolos este finalmente y entregando copia de la sentencia del orden penal. En efecto, en fecha 18-12-06 se dictó sentencia por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid, en cuyo fallo se condenaba al actor como autor de un delito contra la seguridad del tráfico por conducción bajo los efectos del alcohol, a una pena de cuatro meses de multa, privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por ocho meses y un día. En dicha sentencia quedó constancia de que el acusado prestó su conformidad con la calificación de la acusación, quedando firme ante el acuerdo de las partes y manifestar éstas su voluntad de no recurrirla. Los hechos imputados eran los siguientes: el día 24-06-05, sobre las 21 h, el acusado guiaba un turismo marca SEAT Córdoba 1.9, matrícula 4337CHM facilitado por la empresa por la Avda. de Burgos de la ciudad de Valladolid bajo los efectos de una intoxicación etílica que disminuía sensiblemente sus facultades psicofísicas, por lo que no respetó un semáforo en rojo, colisionando con un vehículo que conducía correctamente. Sometido a test alcoholímetro con motivo de presentar síntomas evidentes de embriaguez a las 21,29 h y 21,50 h de dicho día, dio un resultado de 0,86 y 0,83 mg de alcohol por litro de aire espirado respectivamente; presentando además evidentes síntomas de embriaguez, como ojos rojos, rostro congestionado, aliento a alcohol, habla espesa y deambulación titubeante. La Sala, en lo que ahora interesa, tras no aceptar la revisión fáctica planteada, entra a resolver el octavo motivo del recurso de suplicación en el

que la empresa alega infracción de los artículo 54.2.d y 5.a del ET reiterando que el despido debe ser calificado de procedente por violación del deber de fidelidad, dado que el actor había ocultado a la empresa el accidente de tráfico y las circunstancias en las que se produjo y, asimismo, infracción del artículo 20.1 del ET al haber consumido bebidas alcohólicas el trabajador durante el tiempo de trabajo y, como consecuencia, haber sufrido accidente de trabajo. El Tribunal de suplicación, concluye afirmando que no ha quedado acreditado que el actor ocultara el accidente de tráfico sino que, bien al contrario, lo había comunicado a su superior inmediato y tampoco que el accidente de tráfico se produjera en la jornada de trabajo, por lo que no concurre en el caso los requisitos de gravedad y culpabilidad exigidos por la jurisprudencia para la declaración de procedencia del despido. Por ello, se desestima el recurso y se confirma el pronunciamiento de instancia, que declara el despido improcedente.

Del examen pormenorizado del escrito de interposición del recurso se deduce que, efectivamente, no cabe admitir más que la existencia de un solo punto o materia de contradicción porque en los tres planteados coincide el objeto de la pretensión, ordenado a cuestionar la improcedencia del despido, con lo que su multiplicación en tres motivos supone una evidente descomposición artificial del sentido unitario de la controversia, que resulta improcedente, como tiene señalado la Sala en numerosas sentencias (de 5 de marzo de 1998 (R. 2407/1997), 21 de abril de 1998 (R. 3288/1997), 20 de julio de 2001 (R. 4207/1999), 25 de octubre de 2002 (R. 2096/2000), 20 de julio de 2004 (R. 540/2003), 31 de enero de 2005 (R. 4715/2003), 15 de marzo de 2005 (R. 5793/2003), porque aquí no se debaten varios puntos de contradicción, sino uno sólo, y la unidad de esa cuestión no puede desconocerse introduciendo diversas perspectivas de análisis sobre algunas de las circunstancias concurrentes. En consecuencia, la Sala requirió trabajador recurrente mediante providencia de 7 de abril de 2008, para que seleccionara una sentencia firme de entre las aportadas, puesto que la materia de contradicción es única al cuestionarse exclusivamente la improcedencia del despido. La recurrente presentó escrito en el que se opta a favor de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de marzo de 2006 (R. 6095/2005) y por ello, de acuerdo con reiterada doctrina de esta Sala, esta sentencia es la única que puede tomarse en consideración a los efectos de la contradicción que exige el art. 217 de la L.P.L. Dicha sentencia de contraste versa sobre el despido disciplinario de un trabajador, con categoría de montador, al que se le imputa haber la comisión de una falta muy grave prevista en los artículos 91 y 92 del Convenio Colectivo General de la Industria Textil y de la Confección publicado el 14/8/2003 y sancionable con el despido según lo que establece el artículo 93 del mismo texto convencional, por haber conducido en estado de embriaguez y haber sido condenado por sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Aranda de Duero como autor responsable de un delito contra la seguridad del tráfico a la retirada de carné de conducir por un periodo de ocho meses. Como datos fácticos constan los siguientes: el actor y otros dos empleados de la demandada estaban en Aranda de Duero realizando el montaje de unas carpas; tras terminar el trabajo, viajaban de madrugada a Madrid en vehículo proporcionado por la empresa que conducía el actor cuando sufrieron el accidente de tráfico que dio origen a las diligencias penales indicadas. La Sala considera acreditado que el accidente se sufrió en tiempo de trabajo y que el hecho de que el actor condujera en estado de embriaguez poniendo en peligro tanto a sus compañeros como a terceros constituye un incumplimiento muy grave y es a la empresa a la que corresponde aplicar la sanción que estime conveniente, siempre que se adecue a lo convencionalmente establecido. Habiendo sido así en este caso, no cabe aplicar la teoría gradualista para imponer otra sanción, puesto que ello descalificaría el cuadro normativo sancionador.

No concurren las identidades exigidas en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral entre el supuesto examinado en la sentencia recurrida y el analizado en la de contraste, pese a versar ambas sobre la impugnación de despidos disciplinarios basados en la conducta de los trabajadores, puesto que las circunstancias concurrentes y los incumplimientos imputados son distintos en cada caso. Así, en primer lugar, en la sentencia recurrida se imputa al trabajador la trasgresión de la buena fe contractual al no haber notificado a la empleadora el hecho del accidente y las circunstancias que lo motivaron, mientras que en la sentencia de contraste la empresa se remite a las faltas tipificadas en el Convenio de aplicación para imputar al trabajador la comisión de una muy grave por embriaguez habitual y otra grave por causar desperfectos en un vehículo de la empresa. En segundo lugar, en la referencial no se discute el que los hechos originadores del despido ocurrieron en tiempo de trabajo, mientras que en la recurrida no se considera acreditada dicha circunstancia, puesto que sólo consta en el relato de hechos que el trabajador sufrió el accidente después de haber estado con un cliente pero sin que conste si regresaba a casa desde su puesto de trabajo directamente o si había realizado alguna otra actividad después de la cita profesional que hubiera podido interrumpir el nexo causal

entre el trabajo y el accidente. Por último, en la sentencia recurrida se vincula la desestimación de la infracción normativa planteada al fracaso de la revisión fáctica primeramente intentada, mientras que en la de contraste no se planteó la revisión de hechos probados en el recurso.

Por otra parte, la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del ET no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (Sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (R. 1232/1990 y 2271/1991), 15 y 29 de enero de 1997 (R. 952/1996 y 3461/1995), 6 de Julio de 2004 (R. 5346/2003), 9 de julio de 2004 (R.3496/2002) y de 24 de mayo de 2005 (R. 1728/04).

Los anteriores razonamientos conducen a que las alegaciones realizadas por el recurrente, en tramite de inadmisión, no desvirtúen la inexistencia de identidad entre las sentencias comparadas, dado que en su escrito se limita a discrepar de las apreciaciones contenidas en la providencia de esta Sala, pero sin añadir argumentos distintos a los ya expuestos o que puedan fundamentar la identidad alegada.

TERCERO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, dándose a las cantidades ingresadas o los aseguramientos prestados el destino legal.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Pedro Jiménez Gutiérrez, en nombre y representación de HILTI ESPAÑOLA S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de fecha 17 de octubre de 2007, en el recurso de suplicación número 1670/2007, interpuesto por HILTI ESPAÑOLA S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Valladolid de fecha 7 de mayo de 2007, en el procedimiento nº 315/2007 seguido a instancia de D. Jesús Ángel contra HILTI ESPAÑOLA S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y con la pérdida del depósito constituido, dándose a las cantidades ingresadas o los aseguramientos prestados el destino legal.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 14475/2008
Id Cendoj: 28079140012008202870
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1463/2008
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Ramón Martínez Garrido
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Noviembre de dos mil ocho.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS RAMÓN MARTÍNEZ GARRIDO.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Las Palmas se dictó sentencia en fecha 8 de febrero de 2007, en el procedimiento nº 946/06 seguido a instancia de DON Augusto contra MONTAJE ELÉCTRICOS DE TENERIFE S.A. y FOGASA, sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DON Augusto, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en fecha 27 de diciembre de 2007, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 23 de abril de 2008 se formalizó por el Procurador Don Roberto de Hoyos Mencía, en nombre y representación de MONTAJES ELÉCTRICOS DE TENERIFE, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 23 de septiembre de 2008 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/1996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R.430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004)].

En el caso analizado por la sentencia recurrida, el trabajador sufrió un accidente de tráfico cuando, una vez cumplimentados los servicios asignados y cuando se disponía a dejar el vehículo de la empresa en las dependencias de esta, se salió de la vía colisionando contra un muro y vallado de protección ubicado al margen derecho, propiedad del Cabildo insular. La Policía Municipal procedió a retirar el vehículo y a realizarle la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 73 mg. de alcohol por litro de aire expirado en la primera ocasión y 69 mg en la segunda, siendo esta cantidad más del triple del límite permitido. El trabajador,

al reincorporarse a la empresa el lunes siguiente, omitió todo detalle sobre las circunstancias del accidente y que el mismo se había producido como consecuencia de haber conducido bajo la influencia del alcohol. El actor fue condenado en juicio penal por delito contra la seguridad del tráfico, siendo condenado a una pena de multa de 4 meses, a la privación del permiso de conducir por 16 meses, así como a indemnizar los daños causados al Cabildo. Los daños sufridos por el vehículo, una furgoneta mixta Citroën modelo C-15, ascienden a 4.062,39 euros. La empresa procedió a notificarle el despido, basándolo en el art. 47. g) del convenio colectivo del sector del metal de 1987, al que se remite el convenio colectivo provincial de la Siderometalurgia de la provincia de Las Palmas, así como en la transgresión del art. 54.2 a apartados d) y e) del Estatuto de los Trabajadores. La sentencia de instancia entendió que el despido era procedente, pero la Sala de suplicación ha declarado el mismo improcedente, por entender que la norma aplicable es el art. 9 del Acuerdo sobre Código de Conducta laboral para la Industria del Metal, y no el precepto alegado del convenio del metal, y constituir la misma una falta grave que no repercutió negativamente en el trabajo, ya que el accidente se produjo una vez cumplimentados todos los servicios asignados y cuando el trabajador se disponía a dejar el vehículo de la empresa en sus dependencias.

Recorre en casación para unificación de doctrina la empresa demandada, invocando como contradictoria la STSJ Baleares de 17 de diciembre de 1998, R. 493/98. En la misma se analiza el caso de un trabajador que conducía un camión de la empresa y sufrió asimismo accidente de tráfico al salirse de la carretera y provocar daños en el vehículo por valor de 5.424.674 ptas., más 291.740 ptas. en concepto de reparación de la cuba. La Guardia Civil levantó atestado por supuesto delito contra la seguridad del tráfico en función de las pruebas de alcoholemia practicadas al trabajador, que arrojó un resultado positivo, lo que provocó su detención. La sentencia de instancia declaró improcedente el despido, si bien la sentencia de suplicación ha revocado este fallo, entendiendo que el trabajador sufrió el accidente estando bajo la influencia de una tasa de alcohol superior a la permitida, habiendo causado importantes daños en el vehículo de la empresa, entendiendo que dicha conducta era subsumible en el art. 54.2.d) ET y en el art. 53.9 del Acuerdo General del Transporte de Mercancías por carretera.

En el presente caso, pese a la indudable similitud de los supuestos comparados en relación con algunos aspectos -ambos trabajadores conducían un vehículo de la empresa superando los límites de alcoholemia permitidos y sufrieron un accidente de tráfico en dicho estado-, aspectos en los que insiste la parte recurrente en su escrito de alegaciones de 7 de octubre de 2008, los supuestos no son comparables. En primer lugar, la normativa aplicable al caso no resulta coincidente, ya que en el supuesto analizado por la sentencia recurrida se discute si la norma aplicable era el art. 9 del Acuerdo sobre Código de Conducta Laboral de la empresa del metal, al que remitía el convenio colectivo aplicable de la provincia, y que tipificaba -a juicio de la sentenciacom o falta grave la conducta del trabajador. En cambio, en el caso analizado por la sentencia de contraste, la conducta se tipifica en función de lo dispuesto en el art. 53.9 del Acuerdo General del Transporte de mercancías por carretera, sin que la remisión en ambos casos al genérico art. 54.2 d) ET sea suficiente a los efectos de superar el juicio de la contradicción. Además, los daños causados fueron inferiores en el caso analizado por la sentencia recurrida, teniendo en cuenta, además, que en la misma se declara con valor fáctico en su fundamentación jurídica que el accidente se produjo una vez cumplimentados los servicios asignados y cuando se disponía a dejar el vehículo de la empresa en sus dependencias. En consecuencia, no puede entenderse superado el juicio de contradicción entre ambas sentencias.

Por otra parte, hay que recordar que la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del ET no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (Sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (R. 1232/1990 y 2271/1991), 15 y 29 de enero de 1997 (R. 952/1996 y 3461/1995), 6 de Julio de 2004 (R. 5346/2003), 9 de julio de 2004 (R. 3496/2002) y de 24 de mayo de 2005 (R. 1728/04).

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas a la parte recurrente, pérdida de depósito y mantenimiento de la garantía constituida en los términos señalados en la sentencia de suplicación.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador Don Roberto de Hoyos Mencía en nombre y representación de MONTAJES ELÉCTRICOS DE TENERIFE, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de fecha 27 de diciembre de 2.007, en el recurso de suplicación número 929/07, interpuesto por DON Augusto, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Las Palmas de fecha 8 de febrero de 2.007, en el procedimiento nº 946/06 seguido a instancia de D. Augusto contra MONTAJE ELÉCTRICOS DE TENERIFE S.A. y FOGASA, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente, pérdida de depósito y mantenimiento de la garantía constituida en los términos señalados en la sentencia de suplicación.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL675.760

Jurisprudencia

Cabecera: Reclamación de cantidad deducida por la empresa frente al trabajador en concepto de compensación por daños sufridos en un vehículo propiedad de la empleadora con base en lo dispuesto en el art.63 de la derogada ley de contrato de trabajo. falta de contradicción.

Jurisdicción: Social

Ponente: Benigno Varela Autrán

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 21/06/2005

Tipo Resolución: Auto

Sala: Cuarta

Sección: Primera

Número Recurso: 1557/2004

ENCABEZAMIENTO:

Resolviendo recurso contra resolución: **Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 10/03/2004.**

Procedimiento: **Social**

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Junio de dos mil cinco.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Santander se dictó sentencia en fecha 2 de mayo de 2003, en el procedimiento nº 1024/02 seguido a instancia de DON Jorge contra LABORAGUA, S.A., sobre sanciones, que desestimaba la demanda formulada por Don Jorge contra Laboragua, S.A.. Y estimaba la demanda reconvencional formulada por Laboragua, S.A. contra Don Jorge.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DON Jorge, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en fecha 10 de marzo de 2.004, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 5 de mayo de 2.004 se formalizó por el Letrado Don Ángel Fuentes López, en nombre y representación de LABORAGUA, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 13 de enero de 2.005 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 de enero, 18

de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997 y 23 de septiembre de 1998). La sentencia que se recurre ha recaído en un procedimiento que tenía por objeto la declaración de la improcedencia del descuento que la empresa verificó en el salario del actor entre los meses de abril de 2002 a abril de 2003, para compensar los gastos de reparación de un vehículo propiedad de la empresa, que ésta puso a disposición del trabajador con motivo de un desplazamiento. El demandante presta servicios en la entidad LABORAGUA, S.A. como sondista, y realiza frecuentes desplazamientos por razón de su trabajo. Destinado en el mes de noviembre de 2001 a La Rioja, el 29 de dicho mes, sobre la 1:30 horas de la madrugada, y cuando se dirigía a la localidad donde se encontraba hospedado, sufrió un accidente de tráfico, resultando daños materiales para el vehículo propiedad de la empresa por importe de 3.685,03 €. Los descuentos verificados y ahora reclamados ascienden a la cantidad de 2.163,6 €, habiendo la empresa formulado reconvencción por la diferencia hasta el total del valor de los daños, esto es, por 1.521,42 €. Frente a la sentencia de instancia, desestimatoria de la demanda formulada por el actor, y estimatoria de la demanda reconvenccional deducida por la empresa, interpuso aquél recurso de suplicación. El objeto del debate viene constituido por la exigencia de dolo o culpa para que sea exigible la obligación de compensación de los daños originados por el trabajador en los bienes de la empresa, conforme a lo dispuesto en el art.63 de la derogada LCT. La Sala estima que en este caso es la empresa la que debe soportar el riesgo que comporta la circulación de un vehículo de motor por vías públicas, habida cuenta que el trabajador no ha incurrido en dolo o culpa grave, sino en una mera negligencia o descuido, al no haberse acreditado que condujese bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni que realizase una maniobra de conducción temeraria. Todo lo cual conduce a la estimación del recurso y a la estimación de la pretensión actora, dejando sin efecto el descuento realizado por la empresa, que carece de título.

La entidad recurrente alega que la aludida sentencia contradice la doctrina contenida en la de la Sala de Asturias de 27 de septiembre de 2002, desestimatoria del recurso interpuesto por el trabajador demandado, frente a la sentencia de instancia, que estimó la pretensión deducida por la empresa de condena al pago de 1.600.000 pesetas. El trabajador había cesado por despido en junio de 2000, lo que dio lugar al correspondiente procedimiento, en el que recayó sentencia de 21 de agosto de 2000, que adquirió firmeza. El día 24 de junio de 2000 el actor sufrió un accidente de circulación, al salirse de la vía con vuelco, cuando pilotaba fuera de su jornada laboral y sin autorización empresarial un vehículo propiedad de la empresa. La sentencia de instancia condenó al trabajador a pagar la cantidad referida, siendo confirmada por la Sala de Asturias.

No es posible apreciar la contradicción que se invoca, pues los supuestos debatidos, aunque giren alrededor de la misma cuestión jurídica, no revisten la necesaria identidad. Así, en concreto, en el caso de la sentencia de contraste consta que el trabajador sufrió el accidente conduciendo un vehículo sin autorización de la empresa, lo que contrasta con lo acontecido en el caso ahora debatido, donde se valora que el actor realizaba frecuentes desplazamientos en automóvil, por razón de su trabajo, habiendo sufrido el accidente en un desplazamiento ordenado por la empresa. Por otro lado, los términos del debate tampoco han sido coincidentes, pues en el caso enjuiciado en la sentencia que se recurre se valora a efectos de la decisión la concurrencia de dolo o culpa grave, que la Sala descarta, al haberse acreditado que el trabajador no conducía bajo efectos de bebidas alcohólicas ni realizó maniobras de conducción temerarias, mientras que en el supuesto de la sentencia de contraste lo que se discute y opone la parte demandada a la pretensión de la empresa es, básicamente, la propiedad del vehículo, resolviendo la Sala, además, sobre la base de un previo pronunciamiento recaído en procedimiento de despido, circunstancias que en absoluto coinciden con las concurrentes en el caso ahora sometido a esta Sala. Frente a lo cual, la parte únicamente insiste en sus alegaciones en poner de manifiesto los elementos de similitud, sin aportar argumento alguno que prive de virtualidad a las diferencias que la Sala ha apreciado.

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, hay que imponer a la parte recurrente las costas del presente recurso y acordar la pérdida del depósito, dando a la consignación constituida su destino legal.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Ángel Fuentes López en nombre y representación de LABORAGUA, S.A. contra la sentencia dictada por la

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 10 de marzo de 2.004, en el recurso de suplicación número 1151/03, interpuesto por DON Jorge, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Santander de fecha 2 de mayo de 2.003, en el procedimiento nº 1024/02 seguido a instancia de DON Jorge contra LABORAGUA, S.A., sobre sanciones.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente, y acordar la pérdida del depósito, dando a la consignación constituida su destino legal.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

CONSUMO DE ALCOHOL EN LA ESFERA PRIVADA CON TAREA PROFESIONAL ASIGNADA**Le: 27/09/2013****Cour de cassation****chambre sociale****Audience publique du 2 février 2011****N° de pourvoi: 09-71742****Non publié au bulletin****Rejet****Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président****Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)****REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS****LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:**

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que M. X..., engagé le 14 juin 1999 par la société Darfeuille services, a été licencié pour faute grave le 27 avril 2007;

SUR LE PREMIER MOYEN:

Attendu que la société Darfeuille services fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée comme ne comprenant pas trois magistrats alors, selon le moyen:

- 1°/ que le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne que deux magistrats, encourt la nullité en application de l'article 454 du code de procédure civile;
- 2°/ que si deux juges seulement ont délibéré, l'arrêt attaqué n'en encourt pas moins la nullité pour violation de la règle de l'imparité et de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire;

Mais attendu que la critique du moyen est inopérante en ce qu'elle s'adresse à une mention de l'arrêt du 8 octobre 2009 rectifié par l'arrêt irrévocable du 11 mars 2010;

SUR LE SECOND MOYEN:

Attendu que la société Darfeuille services fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen:

- 1°/ qu'en application de l'article L. 1121 du code du travail, il est de jurisprudence constante que le fait pour un salarié affecté à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle et justifie un licenciement disciplinaire; qu'en considérant, pour réfuter le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé, que la suspension immédiate du permis de conduire de M. X... pendant l'exécution d'une mission d'astreinte, consécutivement à un test d'alcoolémie positif, avait été commise pendant le week-end et qu'il n'en était résulté aucun préjudice pour l'entreprise, la cour a violé le texte susvisé;
- 2°/ que le salarié est tenu à une obligation permanente de loyauté envers son employeur, même en dehors de son temps de travail, de sorte que le manquement à cette obligation est constitutif d'une faute justifiant un licenciement disciplinaire; qu'en constatant que M. X... avait commis pendant le week-end une infraction au code de la route ayant entraîné la suspension immédiate de son permis de conduire, dont il avait pourtant besoin pour remplir la mission de conducteur et responsable d'astreinte pour laquelle il s'était porté volontaire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail;

3°/ qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la jurisprudence définit la faute grave comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en subordonnant l'existence d'une telle faute à l'existence d'un préjudice en résultant subi par l'entreprise, la cour a méconnu le texte susvisé;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait pris toutes dispositions pour se faire remplacer dans le cadre d'une astreinte qu'il avait volontairement assurée à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné l'existence de la faute à un préjudice, a pu retenir que la suspension du permis de conduire n'interdisait pas au salarié de poursuivre l'exécution normale de son contrat de travail et qu'il n'y avait pas de faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Darfeuille services aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2.500 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT

Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Darfeuille services;

PREMIER MOYEN DE CASSATION:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et diverses sommes à titre de rappels de salaires, de préavis, de congés payés et 7.460 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en mentionnant: «Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, Mme Irène LEBE, conseiller, M. qui ont délibéré»;

1°/ ALORS QUE le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré; que l'arrêt attaqué qui ne mentionne que deux magistrats encourt la nullité en application de l'article 454 du code de procédure civile;

2°/ ET ALORS QUE si deux juges seulement ont délibéré, l'arrêt attaqué n'en encourt pas moins la nullité pour violation de la règle de l'imparité et de l'article L.121-3 du Code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION:

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société DARFEUILLE SERVICES à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 3000 euros au titre du préjudice moral distinct, de 1.746 euros pour rappel de salaire de mise à pied outre les congés payés afférents et de 8.870 euros à titre de préavis outre les congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE; «les griefs allégués dans la lettre de licenciement doivent être examinés en tenant compte de l'ancienneté de sept ans du salarié et du fait qu'après s'être fait retirer son permis de conduire par les gendarmes pendant qu'il était d'astreinte, il a pris les dispositions nécessaires pour faire assurer ce service par un de ses collègues; que la démarche du salarié pour se faire remplacer en urgence est établie; que Monsieur X... n'a pas commis de faute en attendant le lundi matin pour avertir son employeur du retrait de son permis de conduire; que la faute initiale reprochant au salarié d'avoir fait l'objet d'une suspension immédiate de son permis de conduire pour un taux d'alcoolémie de 0,9 g par litre à l'occasion d'un contrôle par les forces de l'ordre ne peut fonder le licenciement; que l'employeur n'établit pas que le système d'astreinte mis en place était licite comme répondant aux exigences de l'article L. 3121-7 du code du travail et qu'en conséquence, il est malvenu à fonder une faute grave de licenciement sur des faits commis pendant le week-end dans le cadre d'une astreinte irrégulière; que le dosage relevé par les gendarmes au moment de

l'infraction était de 0,45 mg/litre pour un seuil fixé à l'époque par le législateur de 0,40 mg/litre; que même si le salarié, qui a reconnu avoir participé à un vin d'honneur qui s'est poursuivi, sans qu'il en ait été averti préalablement, par un repas de mariage, a commis une infraction au code de la route pendant son week-end d'astreinte alors qu'il n'avait pas à exécuter de mission particulière de sorte qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour l'entreprise; que dans le cadre de ses fonctions de base, en qualité de responsable d'exploitation, Monsieur X... n'avait nullement besoin de son permis de conduire qui ne lui était utile que quand il se portait volontaire pour assurer des astreintes de conducteur que ne lui imposait pas son contrat de travail; que le salarié avait paré à l'urgence de manière satisfaisante en mobilisant un de ses collègues et qu'il n'était pas suffisamment enivré pour l'empêcher d'agir en se faisant véhiculer par sa femme; que la détention de son permis n'était pas utile à l'exécution normale et correcte de sa prestation de travail; que l'importance donnée à cette mésaventure d'un salarié ancien et de qualité rend plausible la thèse de celui-ci selon laquelle la nouvelle responsable du service aurait cherché à se débarrasser à bon compte d'un collègue dont elle craignait l'influence; que ce licenciement ouvre donc droit pour Monsieur X... à une indemnité; que la Cour fixe à 30.000 euros la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail; que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salarié au paiement d'un salaire correspondant à la mise à pied de 18 jours et à l'indemnité conventionnelle de préavis; que ce licenciement mis en oeuvre de manière brutale et vexatoire a causé un préjudice moral distinct indemnisé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros»;

- 1º/ ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article L.1121 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que le fait pour un salarié affecté à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle et justifie un licenciement disciplinaire; qu'en considérant, pour réfuter le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé, que la suspension immédiate du permis de conduire de Monsieur X... pendant l'exécution d'une mission d'astreinte, consécutivement à un test d'alcoolémie positif, avait été commise pendant le week-end et qu'il n'en était résulté aucun préjudice pour l'entreprise, la Cour a violé le texte susvisé.
- 2º/ ALORS D'AUTRE PART QU'en tout état de cause, le salarié est tenu à une obligation permanente de loyauté envers son employeur, même en dehors de son temps de travail, de sorte que le manquement à cette obligation est constitutif d'une faute justifiant un licenciement disciplinaire; qu'en constatant que Monsieur X... avait commis pendant le week-end une infraction au code de la route ayant entraîné la suspension immédiate de son permis de conduire, dont il avait pourtant besoin pour remplir la mission de conducteur et responsable d'astreinte pour laquelle il s'était porté volontaire, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
- 3º/ ALORS ENFIN QU'en application de l'article L. 1234-1 du Code du travail, la jurisprudence définit la faute grave comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en subordonnant l'existence d'une telle faute à l'existence d'un préjudice en résultant subi par l'entreprise, la Cour a méconnu le texte susvisé.

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, du 8 octobre 2009.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 29 avril 2009
N° de pourvoi: 07-42294
Non publié au bulletin
Cassation sans renvoi
M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boullez, SCP Didier et Pinet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Cédric X..., engagé le 24 janvier 2002 par la société Yvroud européenne des fluides en qualité de plombier, a été licencié pour faute lourde le 13 janvier 2005;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIÈRE BRANCHE:

Attendu que la société Yvroud européenne des fluides fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que même en l'absence de toute intention de nuire, la faute lourde privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, est celle d'une exceptionnelle gravité que le salarié commet consciemment et sans raison valable en faisant courir à autrui un risque inadmissible, qu'il ne pouvait ignorer; qu'il ressort des constatations auxquelles les juridictions de fond ont procédées que M. Cédric X..., alors qu'il se trouvait en état d'ébriété au sortir d'un dîner, a agressé son collègue de travail, M. Y..., qui était chargé par son employeur de le raccompagner à son hôtel, à bord d'un véhicule qu'il avait mis à sa disposition, qu'il en a pris le volant au mépris des consignes de sécurité, après en avoir expulsé M. Y..., et qu'il a enfin causé un accident de la circulation provoquant la mort d'une mère de famille et blessant trois autres personnes; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une faute lourde, que la condamnation pénale de M. Cédric X... pour homicide et blessure involontaire ne révèle pas qu'il ait agi dans le dessein de nuire à son employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Cédric X... n'avait pas nécessairement conscience des risques inadmissibles qu'il faisait courir aux tiers comme à lui-même par des violences d'une extrême gravité, pour avoir violé délibérément les consignes de sécurité énoncées par l'employeur, en prenant la route en état d'ébriété à bord du véhicule de l'entreprise, après avoir agressé celui qui devait le reconduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3 du code du travail;

Mais attendu que la faute lourde suppose l'intention de nuire et qu'ayant constaté que cette intention faisait défaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision;

MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIÈME, TROISIÈME ET QUATRIÈME BRANCHES:

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail;

Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur a une part de responsabilité dans la réalisation des faits fautifs;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Cédric X..., qui était en état d'ébriété, avait agressé le salarié chargé par l'employeur de le reconduire à son hôtel et que, s'étant emparé du véhicule mis à la disposition de ce dernier, il avait provoqué un accident mortel de la circulation, ce dont il résultait qu'indépendamment du comportement de l'employeur, le maintien de M. Cédric X... dans l'entreprise était impossible et que ses agissements constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry;

Dit n'y avoir lieu à renvoi;

Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave;

Déboute M. Cédric X... de toutes ses demandes;

Condamne M. Cédric X... aux dépens d'appel et de cassation;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Yvroud européenne des fluides

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute lourde que la société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES avait notifié à M. Cédric X..., le 13 janvier 2005, et D'AVOIR condamné la société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés correspondants et en remboursement de la mise à pied conservatoire;

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de fait soumis au débat contradictoire que le 15 décembre 2004, M Z..., responsable du site de Thoiry de la société YVROUD, a convié le personnel de l'agence, en dehors des heures de travail, à un apéritif servi dans les locaux de celle-ci puis à un repas de fin d'année; que le responsable a indiqué que cinq ou six salariés ne consommant jamais d'alcool avaient été désignés pour assurer le transport des autres, Ce qui a été confirmé par l'un d'eux, M. Larbi Y..., chargé de conduire jusqu'au restaurant un véhicule Renault Trafic de l'entreprise dans lequel avait pris place notamment M. Cédric X..., déjà sous l'empire d'un état alcoolique; qu'à l'issue du repas, au cours duquel, se trouvant dans un état d'ivresse de plus en plus prononcé, il avait été l'auteur de plusieurs incidents ayant contraint le chef d'agence à intervenir, M. X..., usant de violence à l'égard de M. Y... qui prétend avoir été «éjecté du Trafic», a pris le volant du véhicule et a causé un accident mortel de la circulation, au cours duquel le véhicule de location de la société YVROUD a été détruit; que M. X..., poursuivi devant la juridiction correctionnelle en présence de l'assureur de ce véhicule, a été déclaré coupable d'homicide et de blessures involontaires commis par un conducteur sous l'emprise d'un état alcoolique (1 mg/l), par un jugement du Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 24 janvier 2005; que le fait, pour un salarié amené au cours de l'exécution de son contrat de travail à conduire un véhicule automobile de l'entreprise, d'être impliqué dans un accident de la circulation causé par son état d'ébriété, fût-ce en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle; que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire et que si la condamnation pénale établit nécessairement l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, cet élément n'implique pas, par lui-même, l'intention du salarié de nuire à l'employeur dans la commission de l'acte constitutif de la faute invoquée à l'appui du licenciement; que M. X... soutient justement que la société YVROUD ne rapporte pas la preuve qu'il a eu l'intention de lui nuire en provoquant un accident mortel de la circulation alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique; que c'est donc à tort que le Conseil des prud'hommes a retenu que le licenciement était justifié sur ce fondement; que la faute grave, résultant des relations de travail et d'une importance telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, ne peut davantage être retenue au vu des circonstances particulières de l'espèce desquelles il ressort, d'une part, que c'est l'employeur qui a organisé la mise à la disposition du salarié de nombreuses boissons alcoolisées (bière, pastis, vins) et, d'autre part, que n'ayant pu se méprendre sur l'état d'ivresse de l'intéressé, le chef d'agence, loin de veiller à ce que celui-ci ne

conduise pas, a quitté le restaurant avant les salariés sans se préoccuper de ce qu'il pourrait advenir; que la part de responsabilité imputable à l'employeur dans les faits qui ont suivi, nonobstant l'absence de poursuites pénales à son encontre, inopérante dans le présent litige, ôte ainsi au grief le caractère de gravité opposé au salarié; qu'il n'en reste pas moins que M. X... n'était pas dans l'obligation de boire, qu'il ne peut soutenir avoir été privé de son libre arbitre sur ce point, qu'il a bu sans retenue et a exigé de prendre le volant du véhicule de location de la société en écartant le salarié qui aurait dû raccompagner jusqu'à leur hôtel ceux d'entre eux qui avaient commis des excès de boissons; que ce comportement justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse le privant d'une indemnité de ce chef; que M. X... se prévaut à juste titre d'un salaire mensuel brut de 1.925,71 (heures normales: 1.735,10 + heures de trajet: 91,62 + prime de management 99,09), de sorte qu'au vu de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans), sa demande faite au titre du préavis (3861,42) et des congés payés correspondants (385,14) doit être accueillie; qu'il est fondé également à obtenir le remboursement de sa mise à pied (886,60), ainsi que le solde des congés payés qu'il avait acquis à la date de la rupture (2522,52); qu'enfin, sa demande d'indemnité de licenciement doit être admise à concurrence de la somme réclamée de 577,71;

- 1º/ ALORS QUE même en l'absence de toute intention de nuire, la faute lourde privative de l'indemnité de compensatrice de congés payés, est celle d'une exceptionnelle gravité que le salarié commet consciemment et sans raison valable en faisant courir à autrui, un risque inadmissible qu'il ne pouvait ignorer; qu'il ressort des constatations auxquelles les juridictions du fond ont procédées que M. Cédric X..., alors qu'il se trouvait en état d'ébriété au sortir d'un dîner, a agressé son collègue de travail, M. Y..., qui était chargé par son employeur, de le raccompagner à son hôtel, à bord d'un véhicule qu'il avait mis à disposition, qu'il en a pris le volant, au mépris des consignes de sécurité de son employeur, après en avoir expulsé M. Y..., et qu'il a enfin causé un accident de circulation provoquant la mort d'une mère de famille et blessant trois autres personnes; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une faute lourde, que la condamnation pénale de M. Cédric X... pour homicide et blessure involontaire ne révèle pas qu'il ait agi dans le dessin de nuire à son employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Cédric X... n'avait pas nécessairement conscience des risques inadmissibles qu'il faisait courir aux tiers comme à lui-même par des violences d'une extrême gravité, pour avoir violé délibérément les consignes de sécurité énoncées par l'employeur, en prenant la route en état d'ébriété à bord du véhicule de l'employeur, après avoir agressé celui qui devait le reconduire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 230-3 du Code du travail;
- 2º/ ALORS subsidiairement QU'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédées que M. Cédric X... avait provoqué un accident de la circulation mortel en conduisant un véhicule dont il avait pris le contrôle après avoir agressé M. Y... qui était spécialement chargé par l'employeur de le reconduire à son hôtel en raison de son état d'ébriété; qu'en affirmant cependant, pour exclure l'existence d'une faute grave, que l'employeur porterait une part de responsabilité dans la survenance de l'accident de la circulation, nonobstant l'absence de poursuites pénales à son encontre, d'une part, pour avoir mis à la disposition des salariés de nombreuses boissons alcoolisées, d'autre part, parce que le chef d'agence avait quitté le restaurant, sans veiller à ce que M. Cédric X... ne conduise pas, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'employeur avait pris toutes les précautions utiles pour éviter la survenance d'un accident de la circulation en confiant à un salarié qui ne buvait pas d'alcool, la charge de raccompagner ses collègues qui en avaient consommé, à bord d'un véhicule de l'entreprise prévu à cet effet; qu'ainsi, elle a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil et des articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 230-3 du Code du travail;
- 3º/ ALORS subsidiairement QUE l'employeur est libéré de son obligation de sécurité de résultat par la preuve d'une cause étrangère; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédées que M. Cédric X... avait provoqué un accident de la circulation mortel en conduisant un véhicule dont il avait pris le contrôle après avoir agressé M. Y... qui était spécialement chargé par l'employeur de le reconduire à son hôtel en raison de son état d'ébriété; qu'en affirmant cependant, pour exclure l'existence d'une faute grave, que l'employeur porterait une part de responsabilité dans la survenance de l'accident de la circulation, nonobstant l'absence de poursuites pénales à son encontre, d'une part, pour avoir mis à la disposition des salariés de nombreuses boissons alcoolisées, d'autre part, parce que le chef d'agence avait quitté le restaurant, sans veiller à ce que M. Cédric X... ne conduise pas, bien qu'il n'ait pu se

méprendre sur son état d'ivresse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur (conclusions, p. 15), si l'accident de la circulation ne puisait pas sa cause exclusive dans le comportement violent de M. Cédric X... qui constituait pour l'employeur un cas de force majeure qu'il n'avait pas été en mesure de prévenir, en raison de sa soudaineté et de son imprévisibilité, en dépit des précautions qu'il avait prises pour éviter tout accident de la circulation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil et des articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 230-3 du Code du travail;

- 4º/ ALORS QUE la condamnation pénale du salarié pour homicide et blessure involontaires lui interdit de reprocher à son employeur, un manquement à son obligation de surveillance; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute grave, que l'employeur avait insuffisamment surveillé M. Cédric X..., tout en constatant qu'il avait été déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires sous la double circonstance aggravante de consommations de produits stupéfiants et de conduite en état d'ivresse, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil et des articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 230-3 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Chambéry, du 24 avril 2007.

*El consumo de alcohol durante la incapacidad temporal***CONSUMO DE ALCOHOL INCOMPATIBLE CON EL TRATAMIENTO MÉDICO PRESCRITO**<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL3.879.633

Jurisprudencia

Jurisdicción: Social

Ponente: Jordi Agustí Juliá

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 18/04/2013

Tipo Resolución: Auto

Sala: Cuarta

Número Recurso: 1400 / 2012

ENCABEZAMIENTO:

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Abril de dos mil trece.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JORDI AGUSTI JULIA.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 5 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 25 de febrero de 2011, en el procedimiento nº 1156 / 10 seguido a instancia de D. Hipolito contra COMERCIAL LUDASI, S. L., sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 23 de enero de 2012, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO - Por escrito de fecha 17 de abril de 2012 se formalizó por el Letrado D. Miguel Angel Tuñas Matilla, en nombre y representación de D. Hipolito, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO - Esta Sala, por providencia de fecha 29 de noviembre de 2012 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción y por falta de contradicción.

A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó.

El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- En el supuesto enjuiciado, el actor causó baja por IT el 2 de febrero de 2010 por presentar cuadro ansioso depresivo secundario a efecto adverso en ambiente de trabajo. El actor había colgado en la página de facebook diversas fotografías de salidas nocturnas a partir del 8 de mayo de 2010 durante, al menos, dos fines de semana. Dª Serafina, hija del representante de la empresa, se encontró con un anterior empleado según el cual el actor le había manifestado que pensaba estar 18 meses de baja. La Sra. Serafina procedió a entrar en facebook donde aparecieron las fotos del demandante en salidas nocturnas y comentarios del mismo. Al lunes siguiente, 26 de julio de 2010, la empresa acudió al notario para reflejar el contenido de lo expuesto en la red social y el siguiente 30 de julio la empresa entregó a actor carta de despido.

La sentencia de instancia declaró procedente el despido, pronunciamiento confirmado en suplicación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de enero de 2012. En primer lugar, dicha sentencia rechaza la prescripción de las faltas por cuanto la empresa tuvo conocimiento de los hechos en la semana

entre el 19 y el 23 de julio y el despido se produjo el siguiente día 30. En segundo lugar la sentencia entiende que el actor transgredió la buena fe contractual al efectuar las salidas nocturnas «*tomando copas*», actitud - dice la sentencia - «*que se considera no recomendable, mientras que se siga el tratamiento que le fue prescrito al recurrente, que o bien ponen en riesgo el proceso de curación o denotan que estas son indicativas de la curación según se desprende el informe médico forense unido a los autos (folio 109)*».

Recorre el actor en casación para la unificación de doctrina, aportando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 de junio de 2007, por lo que deben recordarse las exigencias básicas que la Sala ha venido reiterando en relación con el recurso de casación unificadora, de conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 224 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Por una parte, el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia, de la Sala IV del Tribunal Supremo o, en su caso, del Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Habiéndose reiterado que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

Por su parte, el artículo 224 1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219.

El recurso no cumple estas dos exigencias. En primer lugar no contiene una relación precisa y circunstanciada de la contradicción, pues respecto a la citada sentencia de contraste y en el apartado dedicado a la «*identidad sustancial de los hechos*» el recurso se limita a decir que «*nos encontramos ante un supuesto en el que se produjo el despido de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal, por efectuar actividades de estricto entretenimiento o recreo durante dicha situación*». Naturalmente, solo con ello el recurso omite una exposición pormenorizada del supuesto de hecho que la sentencia de contraste enjuicia, omitiendo también su comparación con el caso que la sentencia recurrida contempla a los efectos de evidenciar la sustancial identidad que la ley exige para acreditar la contradicción.

En segundo lugar, la contradicción entre la sentencia recurrida y la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 de junio de 2007 es inexistente. La sentencia de contraste declara la improcedencia del despido de un representante de comercio, al que se le imputaba la transgresión de la buena fe contractual al realizar un viaje al amparo de una baja médica de incapacidad. Consta que el trabajador, durante el año 2006, solicitó en dos ocasiones autorización para realizar un viaje a Egipto que tenía proyectado y contratado entre los días 2 y 13 de noviembre, autorización que le fue denegada por la empresa porque ya había disfrutado del periodo de vacaciones reglamentario. El actor causó baja por incapacidad temporal del 31 de octubre al 22 de noviembre de 2006, con el diagnóstico de trastorno adaptativo mixto, y el médico le recomendó solicitar autorización a la inspección médica para viajar, por considerarlo conveniente para su recuperación y que le fue concedida, realizando el viaje.

Por lo que se refiere a la prescripción, los pronunciamientos de las sentencias comparadas no son distintos como exige el artículo 219. 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social sino coincidentes pues la sentencia de contraste rechaza la prescripción, como hace la recurrida.

En cuanto a la gravedad de la conducta, los supuestos enjuiciados son claramente distintos. Difieren las actividades realizadas estando de baja, pero sobre todo ocurre que en la sentencia de contraste el viaje había sido considerado adecuado por prescripción médica para la curación o cuanto menos para paliar la enfermedad de tipo ansioso depresivo que sufría el actor. En cambio, la sentencia recurrida toma en consideración un informe médico forense obrante al folio 109 de las actuaciones que no considera recomendable consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento ni compatible las salidas nocturnas y el citado consumo con un cuadro ansioso depresivo de entidad suficiente como para requerir la baja laboral.

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 219. 1 y 225. 5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Miguel Angel Tuñas Matilla, en nombre y representación de D. Hipolito contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 23 de enero de 2012, en el recurso de suplicación número 3803 / 11, interpuesto por D. Hipolito, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de _lo Social nº 5 de los de Madrid de fecha 25 de febrero de 2011, en el procedimiento nº 1156 / 10 seguido a instancia de D. Hipolito contra COMERCIAL LUDASI, S. L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL2.042.700

Jurisprudencia

Cabecera: Despido disciplinario. Falta de contradicción en los dos motivos que postulan la procedencia. Se admite el tercer motivo referido a la cuantía del salario regulador. Tribunal supremo despido disciplinario calculo salarios tramitación. Salario regulador despido* incapacidad temporal. Incongruencia salario regulador despido. Rebaja de salario

Jurisdicción: Social

Ponente: Luis Ramón Martínez Garrido

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 24/01/2011

Tipo Resolución: Sentencia

Sala: Cuarta

Sección: Primera

Número Recurso: 2018/2010

ENCABEZAMIENTO:

Resolviendo recurso contra resolución: **Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de 26/03/2010.**
Procedimiento: **Social**

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Enero de dos mil once.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Sr. Marcos Ramos en nombre y representación de OPTIMI SPAIN, S.L.U. contra la sentencia dictada el 26 de marzo de 2010 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en recurso de suplicación núm. 91/10, interpuesto contra la sentencia de fecha 7 de octubre de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete, en autos núm. 689/2009, seguidos a instancia de D. Torcuato, contra Optimi Spain S.L.U., sobre DESPIDO.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS RAMÓN MARTÍNEZ GARRIDO.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha 7 de octubre de 2.009 el Juzgado de lo Social de Albacete nº 2 dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: *«Debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D. Torcuato, contra la empresa Optimi Spain S.L.U. declarando convalidada la extinción del contrato de trabajo que aquél produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación».*

SEGUNDO.- Que, en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos: «PRIMERO: D. Torcuato, mayor de edad, con D.N.I. nº NUM000, vecino de Albacete, ha venido prestando sus servicios para la empresa Optimi Spain S.L.U. desde el 5 de julio de 2004, como Ingeniero de Telecomunicaciones, con la categoría profesional de Titulado superior, y salario de 3.041,67 euros mensuales.- SEGUNDO: El 28 de junio de 2009 el trabajador recibe comunicación de la empresa informándole de su despido con efectos del día 23 de junio de 2009. El 1 de julio de 2009 la empresa remite al trabajador «ampliación de la carta de despido». (Documentos que obran en los ramos de prueba de los litigantes y que en este momento se da por reproducida).- TERCERO: Disconforme la decisión extintiva el trabajador ha intentado la preceptiva conciliación ante la SMAC de Albacete el 22 de julio de 2009, sin avenencia, habiendo presentado papeleta de conciliación el día 9 de julio de 2009.- CUARTO: La demanda ha sido presentada ante el Juzgado Decano de los de lo Social de Albacete el 28 de julio de 2009.- QUINTO: La empresa que se dedica a la realización de proyectos y desarrollos de telefonía, requiere en la última fase de estos que el personal asignado a dichos trabajos se desplace al país en el que se ha diseñado su implantación.- SEXTO: Desde el inicio de la relación laboral el trabajador se ha desplazado para ultimar proyectos en no menos de 30 ocasiones, realizando viajes a distintos países de Asia, América y Europa.- SEPTIMO: El actor ha participado activamente en la

preparación de un proyecto a desarrollar en Iran para el cliente MTNI Rancell (JSP - 0098 MNTBBechamarking).- OCTAVO: En marzo de 2009 ante una solicitud de vacaciones del hoy actor (documento nº 10 de los aportados por la demandada) la empresa le indica que antes debe comunicar cual es la situación del proyecto en Iran en el que esta trabajando. A primeros de abril la empresa interesa del trabajador facilite su pasaporte para preparar su visado para viajar a Iran.- NOVENO: Ante la negativa de desplazarse la empresa entrega comunicación al trabajador el 20 de abril de 2009 (documento 14 de la prueba documental de la demandada, que en este momento se da por reproducido), informándole que el desplazamiento a Iran se iniciara el día 4 de mayo de 2009, con una duración de 1 mes, interesándole informe de los motivos de su negativa a desplazarse.- DECIMO: El 23 de abril de 2009 el actor presenta comunicación a la empresa (Doc 16 de la prueba documental de la demandada) aceptando la decisión de desplazamiento a Iran, mostrando su disconformidad con la decisión adoptada y las causas que la motivan. Interesando le concreten las condiciones en que se va a efectuar el desplazamiento.- UNDECIMO: Mediante correo electrónico de 24 de abril de 2009 el trabajador remite escaneado el pasaporte, confirmando telefónicamente este mismo día que acepta la realización del viaje.- DUODECIMO: El 27 de abril de 2009 la empresa remite comunicación al trabajador mediante burofax la información solicitada (Doc 17 de la prueba documental de la demandada) indicando al trabajador los motivos de su desplazamiento y las condiciones del mismo, que coinciden con las que ha venido disfrutando en sus reiterados desplazamientos. Indicando como posdata: «esperemos que su comportamiento en este caso concreto, tras manifestar de forma vehemente su negativa a aceptar la situación, no responda a estrategia alguna y se limite a un simple malentendido».- DECIMO TERCERO: El 27 de abril de 2009 el trabajador comunica telefónicamente a la empresa que no se encuentra bien, y remite parte de baja de incapacidad temporal por contingencias comunes. La empresa tiene concertado con Mutua Intercomarcal la cobertura de los riesgos derivados de contingencias comunes y profesionales.- DECIMO CUARTO: En mayo de 2008 el trabajador solicitó de la empresa certificado del Departamento de Recursos Humanos para poder inscribirse en un Master (MBA de alta exigencia y con asistencia obligatoria, impartido en Madrid por el Instituto de Empresa), a fin de acreditar que trabaja en una empresa, y así poder cursarlo en la modalidad a tiempo parcial (Viernes tarde y sábados mañana); indicándole que el certificado lo debía interesar de su superior. En enero de 2009 el trabajador interesa nuevamente la carta de empresa en relación con el curso; informándole su superior que: «cualquier master presencial va a ser incompatible con los proyectos que tenemos en estos momentos y que vamos a tener a lo largo del año».- DECIMO QUINTO: En numerosas ocasiones el trabajador ha faltado a los controles y citas médicos fijados por Mutua Intercomarcal en concreto 19 de mayo, 19, 25 y 29 de junio. Por la Mutua se ha iniciado procedimiento de extinción de la prestación económica, al amparo de lo dispuesto en el art. 131 bis de la L.G.S.A., al entender no justificada las diversas ausencias. (documento 21 de la demandada).- DECIMO SEXTO: Según informe emitido por los servicios médicos de la Mutua Intercomarcal el 26 de junio de 2009 «El cuadro clínico que presentaba el 19 de junio de 2009 Torcuato, es incompatible con la realización de viajes a diferentes localidades por los efectos secundarios de los fármacos pautados, así como la asistencia a actividades que requieran atención y concentración, siendo aconsejable, por lo contrario la asistencia por especialistas.- DECIMO SEPTIMO: En escrito suscrito el 24 de septiembre de 2009, por el facultativo que extendió los partes de baja del actor indica que en su historia clínica consta: Inicio I.L. T. Con fecha 27/4/2009 por un trastorno de ansiedad excesiva. Siguió tratamiento con Benzodiazepinas y se recomendó asistencia un master por ser beneficioso para superar dicho proceso. Con evolución favorable fue alta el 9/07/2009».- DECIMO OCTAVO: La benzodiacepina como el resto de ansiolíticos sus principales efectos adversos consisten en somnolencia y confusión. Y entre sus contraindicaciones figura que no se debe consumir conjuntamente con bebidas alcohólicas ni conducir vehículos a motor.- DECIMO NOVENO: Según consta en los informes emitidos por los detectives Metodo 3 S.A. contratados por la empresa el trabajador ha venido asistiendo al Master impartido por el Instituto de Empresa en Madrid, constando fotográficamente su presencia en la salida de dicha institución los días 9 y 22 de mayo y el 19 de junio de 2009, el día 22 en un «descanso» ha acudido a un bar de las inmediaciones del Instituto junto con tres compañeros, consumiendo una caña de cerveza, y manteniendo «actitud dicharachera y participativa en la conversación, preferentemente con la chica». El 19 de junio al abandonar el Instituto el actor y cinco compañeros de trabajo entran en un bar de las inmediaciones en el que permanecen unos 25 minutos, periodo en que el demandante consume tres cervezas de barril; observando que «al investigado se le ve contento y participativo».- VIGESIMO: El actor no ostenta ni ha ostentado cargo alguno de representación colectiva o sindical».

TERCERO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación procesal de D. Torcuato ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la cual dictó sentencia en fecha 26 de marzo de 2010, en la que consta el siguiente fallo: «Que estimando el recurso de suplicación formulado por la representación letrada de D. Torcuato contra la Sentencia de fecha 7 de octubre de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete, en autos 689/09 sobre despido, siendo parte recurrida OPTIMI SPAIN, SLU, debemos revocar y revocamos la citada resolución, dictando otra en su lugar, por la que estimando la demanda formulada por D. Torcuato contra la empresa «Optimi Spain, SLU», debemos declarar y declaramos improcedente del despido del que fue objeto aquél, condenando a la empresa a que en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, opte entre la readmisión del trabajador al mismo puesto de trabajo y mismas condiciones que regían antes del despido, o el abono de una indemnización de 22.810,50 euros (s.e.u.o.), y en todo caso, el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha que tuvo efectos el despido (23 de junio de 2009) hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 101,38 euros día, sin perjuicio de las deducciones que procedan por las cantidades percibidas en concepto de incapacidad temporal, o por salarios, si el actor hubiera encontrado otro empleo».

CUATRO.- Por la representación de OPTIMI SPAIN, S.L.U. se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 2 de junio de 2010. Se aportan como sentencias contradictorias con la recurrida las dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de noviembre de 2.003 y 13 de noviembre de 2.007 y por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo e, 30 de junio de 2.008.

QUINTO.- Por providencia de fecha 21 de octubre de 2010 se procedió a admitir a trámite el citado recurso y, habiéndose impugnado el recurso, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó informe en el sentido de considerar procedente la estimación parcial del recurso, e instruido el Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 18 de enero de 2010, en el que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La sentencia recurrida de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 26 de marzo de 2010, estimando el recurso de suplicación interpuesto por el demandante, declaró improcedente su despido, efectuando el correspondiente Pronunciamiento de condena frente a la empresa demandada.

Los hechos básicos para la solución del litigio -literalmente más arriba transcritos- son los siguientes: El demandante es Ingeniero de Telecomunicación y, al servicio de la empresa Optimi Spain S.L.U., ha realizado numerosos viajes al extranjero por cuenta de la empresa. Se le ordenó un viaje a Irán, que el demandante rechazó en principio y acabó aceptando más tarde, pero, días antes de la fecha fijada para el desplazamiento, inició un proceso de incapacidad temporal por trastorno de ansiedad excesiva para el que le fue impuesto tratamiento con benzodiacepina.

La carta de despido la empresa le imputa la asistencia a un Master para el que había de desplazarse a Madrid los viernes por la tarde y sábados por la mañana sin estar autorizado por la empresa.

La demandada ha formalizado el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que estructura en tres motivos. Los dos primeros pretenden la obtención de un pronunciamiento de procedencia del despido y, el tercero, postula la rebaja del salario que la sentencia ha tomado como módulo para el cálculo de las indemnizaciones. Propone para cada uno de esos motivos la correspondiente sentencia de contraste cuya procedencia examinaremos por separado.

SEGUNDO.- Para el primer motivo en el que se alega la fraudulencia de la asistencia al master, se propone la sentencia de la Sala de Cataluña de 13 de noviembre de 2007. Resuelve esta sentencia acerca de una trabajadora, responsable regional de captación de socios para el Real Automóvil Club de Cataluña que, hallándose en baja por incapacidad temporal, a causa de un trastorno ansioso depresivo, asistía a un curso de ciclo superior de educación infantil durante seis horas y cuarto cada día, con asistencia obligatoria y dos años de duración, con los correspondientes trabajos y exámenes. Afirmó la sentencia, que declaró procedente el despido, que la trabajadora estaba capacitada para el trabajo cuyas exigencias era menores que las del trabajo que venía realizando.

No cabe duda que no existe identidad sustancial de los hechos enjuiciados en la sentencia recurrida y la invocada de contradicción. Ni la asistencia necesaria a los cursos contemplados en uno y otro caso, ni la dedicación que requerían guarda ni siquiera parecido. Máxime cuando obra en los autos recomendación del mismo facultativo que extendía los partes, para que el actor asistiera al master de referencia por considerar que sería beneficioso para superar el trastorno de ansiedad (hecho probado décimo séptimo). Existe causa de inadmisión que, en este trámite, deviene causa de desestimación.

TERCERO.- Invoca la empresa la vulneración por el actor de la buena fe contractual por la realización de actos incompatibles con el tratamiento prescrito. Basa la alegación en que consta en la sentencia recurrida que, en dos ocasiones, en un descanso y al acabar las clases, el actor estuvo con otros compañeros en un bar y tomó una cerveza, en un caso, y tres cervezas de barril, en otro. Se propone como sentencia contradictoria la de la Sala de Cataluña de 17 de noviembre de 2003, resolución que confirmó el pronunciamiento de procedencia de un despido de trabajador, que hallándose de baja por un proceso de incapacidad temporal por síndrome de ansiedad, en la madrugada del 6 de diciembre se encontraba en una discoteca donde permaneció desde las cuatro a las cinco horas treinta, e ingiriendo al menos dos bebidas, siendo así que tenía prescrito un tratamiento con ansiolíticos con la finalidad de descansar entre 6 y 8 horas diarias.

Tampoco concurre una identidad sustancial de los hechos enjuiciados en ambas resoluciones. La inocuidad de la conducta en el supuesto hoy enjuiciado -en el que, por otra parte, no se incluye el hecho en la carta de despido- y la más grave conducta del supuesto enjuiciado en la sentencia invocada de contradicción difieren de modo que no son susceptibles de ser equiparadas como posibles causantes de igual pronunciamiento. Concorre causa de inadmisión que deviene de desestimación del motivo.

CUARTO.- Por último plantea el recurrente una tercera materia del recurso. Los hechos probados señalan como salario del actor la suma de 3.041,67 euros mensuales y, sin que la sentencia contenga razonamiento alguno al respecto, señala como módulo de los salarios de tramitación la de 101,38 euros diarios. Aún sin razonamiento alguno es evidente que se ha dividido el salario mensual por 30. Procedimiento que impugna el recurrente invocando, como sentencia de contraste, la de esta Sala de 30 de junio de 2008, resolución que dispone el cálculo del salario diario en función de los 365 días del año y no de los artificiales 30 días del mes. Ciertamente es que la sentencia recurrida no contiene razonamiento al respecto, pero no podemos olvidar que el recurso de suplicación fue interpuesto por el demandante que ninguna alusión tenía que hacer a tal fin. Se admite la contradicción en los términos exigidos por el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral debiendo la Sala pronunciarse sobre la doctrina ajustada a Derecho.

QUINTO.- La doctrina unificada se halla en la sentencia invocada de contradicción cuya tesis hemos de mantener por razones de seguridad jurídica y ser la adecuada a los términos legales.

Razonábamos allí que *«los parámetros que establece el art. 56.1 ET para cuantificar la indemnización que corresponde son el salario diario y el tiempo de prestación de servicios [textualmente: «cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio»], y el primero de aquéllos no puede sino consistir en el cociente que resulte de dividir -supuesto de declararse probado el salario anual- esta retribución global por los 365 días que al año corresponden [366 para el caso de año bisiesto]; y no por la cifra que en definitiva se mantiene en la decisión recurrida, la de 360 días, que es el resultado obtenido al multiplicar los dos divisores utilizados [12x30] y que responde al erróneo criterio de prescindir que la mensualidad tiene el promedio real de 30,42 días [365/12] y atender a los artificiales 30 días a menudo utilizados por la práctica forense con inequívoco apoyo en la redacción originaria -vigente hasta el Decreto 1836/1974, de 31/Mayo- del art. 7 CC [«Si en las leyes se habla de meses... se entenderá que los meses son de treinta días... Si los meses se determinan por sus nombres, se computarán por los días que respectivamente tengan»] y que también en ocasiones establece el legislador [así, para la determinación de la base reguladora en las situaciones de IT, conforme al art. 13 Decreto 1646/72]».*

Con arreglo a esta tesis el salario regulador de los de tramitación será el correspondiente al mensual multiplicado por doce y dividido por 365 días, dando un resultado de 100 euros diarios. Procede, en consecuencia, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, la estimación en parte del recurso, reduciendo el importe de los salarios de tramitación a 100 euros diarios y manteniendo los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Estimamos en parte el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Sr. Marcos Ramos en nombre y representación de OPTIMI SPAIN, S.L.U. contra la sentencia dictada el 26 de marzo de 2010 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha; casamos y anulamos sentencia recurrida cuyos pronunciamientos mantenemos salvo el referido al importe de los salarios de tramitación que reducimos a la suma de 100 euros diario. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Luis Ramon Martinez Garrido hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 3 juin 2009
N° de pourvoi: 07-44513
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Balat, SCP Gaschignard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail;

Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2002 en qualité de basketteur professionnel par le club Y... Z... Nancy Basket (le Club) pour la période du 12 août 2002 au 11 juin 2003; qu'après une blessure au genou, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2002; que pour favoriser sa guérison le Club lui a fait suivre des cours de rééducation physique dans une clinique spécialisée à Capbreton; que le 15 décembre 2002 à 6 heures 45, M. X... a fait l'objet à Nancy d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un taux de 0,47 mg/l; que le Club a résilié son contrat de travail pour faute grave par lettre du 14 janvier 2003; que M. X... a contesté la rupture en saisissant la juridiction prud'homale;

Attendu que pour dire que M. X... avait commis une faute grave justifiant la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée et l'avoir, par suite, débouté de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le taux d'alcoolémie constaté le 15 décembre 2002 était la conséquence d'une forte ingestion d'alcool à l'évidence de nature à compromettre l'état physique de l'intéressé et d'amoindrir les performances sportives que le Club était en droit d'attendre de son joueur, que M. X... était tenu de respecter son obligation d'hygiène de vie même pendant la période de suspension de son contrat de travail dans la mesure où l'inobservation par lui au cours de cette période de l'engagement ainsi souscrit a une répercussion sur la qualité de la prestation de travail, que tel avait bien été le cas en l'espèce puisque le salarié s'était mis dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé la veille du jour de sa reprise du travail, ce qui devait nécessairement entraîner le lendemain et les jours suivants une diminution de ses capacités physiques pour un entraînement correct en vue d'un retour rapide à la compétition, que M. X... avait ainsi, par son comportement, gravement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de l'employeur, rendant pour celui-ci impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'échéance du terme;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait imputé à M. X... qui s'était déroulé en dehors du temps de travail relevait de sa vie personnelle et ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;

Condamne la société Z... Nancy Basket aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2.500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. Cory X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Cory X... a commis une faute grave justifiant la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée, et de l'avoir par suite débouté de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail liant les parties contient une clause, laquelle reproduit une disposition figurant à l'article 10-1-3 de la Convention collective de branche du Basket professionnel, selon laquelle Monsieur X... «s'engage à adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport de haut niveau»; que cette clause avait naturellement à s'appliquer à des aspects de la vie privée du salarié; que le taux d'alcool de 0,47 mg/l constaté dans l'organisme de Monsieur X... lors d'un contrôle de police de celui-ci au volant d'une voiture effectué le 15 décembre 2002, est la conséquence d'une forte ingestion d'alcool par lui, laquelle était à l'évidence de nature à compromettre l'état physique de l'intéressé et d'amoindrir ses performances sportives que le club était en droit d'attendre de son joueur, ce d'autant que Monsieur X... bénéficiait d'une rémunération importante; que Monsieur X... était tenu de respecter son obligation d'hygiène de vie même pendant la période de suspension de son contrat de travail, dans la mesure où l'inobservation par lui au cours de cette période de l'engagement ainsi souscrit a une répercussion sur la qualité de sa prestation de travail; que tel a bien été le cas en l'espèce puisque le salarié s'est mis dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé la veille du jour de sa reprise du travail, ce qui devait nécessairement entraîner le lendemain et les jours suivants, une diminution de ses capacités physiques pour un entraînement correct en vue d'un retour rapide à la compétition; que Monsieur X... a ainsi, par son comportement, gravement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de l'employeur, rendant pour celui-ci impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'échéance de son terme;

1^o/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié un contrôle d'alcoolémie positif qui était selon lui, non point susceptible d'établir que le salarié aurait manqué à son obligation d'adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport de haut niveau, alors qu'il devait reprendre l'entraînement le lendemain matin, mais de nature à porter atteinte à l'image véhiculée par le club, et alors que, toujours selon la lettre de licenciement, le salarié était encore en arrêt de travail le 16 décembre 2002 et devait reprendre la compétition en début d'année 2003; qu'en retenant, pour dire que la faute grave était caractérisée, que le comportement de Monsieur X... constituait une violation de l'obligation qui lui était faite d'adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport de haut niveau, la Cour d'appel a méconnu les limites de la lettre de licenciement, en violation des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail;

2^o/ ALORS, en toute hypothèse, QUE ne constitue pas une faute grave interdisant la poursuite des relations contractuelles, le fait, pour un sportif professionnel d'avoir ponctuellement consommé un excès d'alcool; qu'en retenant que ce seul fait, résultant de la vie privée du salarié, qui plus est commis pendant la période de suspension du contrat de travail, avait constitué une faute grave autorisant l'employeur à rompre le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Nancy, du 30 mai 2007.

CONSUMO DE ALCOHOL INCOMPATIBLE CON LA ENFERMEDAD PADECIDA

<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL4.417.281

Jurisprudencia

Cabecera: Despido disciplinario. trabajador en situación de IT y realización de actividades incompatibles con la misma. Infracciones procesales. Falta de contradicción.

Jurisdicción: Social

Ponente: Fernando Salinas Molina

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 07/05/2014

Tipo Resolución: Auto

Sección: Primera

Número Recurso: 123/2014

ENCABEZAMIENTO:

AUTO:

En la Villa de Madrid, a siete de Mayo de dos mil catorce.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO SALINAS MOLINA.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Burgos se dictó sentencia en fecha 8 de mayo de 2013, en el procedimiento nº 929/12 seguido a instancia de D. Agustín contra HOTEL FERNAN GONZÁLEZ S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en fecha 3 de octubre de 2013, que estimaba en lo procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada, estimando en lo procedente la demanda formulada, declarando el despido del actor improcedente.

TERCERO.- Por escrito de fecha 18 de diciembre de 2013 se formalizó por la Letrada Dª María del Mar Marcos Saiz en nombre y representación de HOTEL FERNÁN GONZÁLEZ, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 17 de marzo de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo.

Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales»

(sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

Esta exigencia no se cumple en el presente recurso. En efecto, es objeto del actual recurso de casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Burgos) de 3 de octubre de 2013, en la que, con estimación del recurso deducido por el trabajador recurrente, se declara la improcedencia del despido con las consecuencias legales inherentes a tal declaración. El actor ha venido prestando servicios para la demandada —HOTEL FERNAN GONZALEZ, SA— desde el 26-11-1980 y categoría profesional de cocinero. El 7-8-2012 el demandante inicia una situación de IT derivada de enfermedad común, con el diagnóstico de ansiedad reactiva, situación en la que permaneció hasta el 14-12-2012, habiendo estado en tratamiento con Alprazolam y Paroxetina, siendo recomendación habitual la abstención alcohólica, habiéndole prescrito el facultativo de la SS ausentarse de Burgos para beneficio de su patología. El 26-9-2012 es despedido por motivos disciplinarios. La sala de suplicación en contra del parecer del Juez a quo, descarta que las conductas sancionadas relativas a la realización de determinadas labores en el bar que regentaba su mujer estando en situación de IT, así como la ingesta de bebidas alcohólicas, constituyan transgresión de la buena fe contractual a los efectos de justificar el despido.

Disconforme la demandada con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina, planteando un inicial motivo de contradicción en el que denuncia la infracción de los arts. 5 a), 54.1 y 54.2.d) ET, en relación a la transgresión de la buena fe contractual, proponiendo como sentencia de contraste a los efectos de abordar el juicio positivo de contradicción la dictada por la misma Sala de 18 de enero de 2012 (rec. 840/2011), confirmatoria de la sentencia de instancia, que declaró la procedencia del despido objeto de enjuiciamiento. Consta que el actor ha prestado servicios para la demandada, MICHELIN ESPAÑA Y PORTUGAL S.A., desde el año 1973, con la categoría profesional de Oficial 1ª. Desde agosto del 2006 ha sido diagnosticado de un trastorno adaptativo mixto reactivo a causas laborales que viene siendo tratado con medicamentos ansiolíticos y antidepresivos y también mediante psicoterapia. El actor tiene un periodo de baja médica por esta causa desde el 30-7-07 al 2-10-07; otra por trastornos neuróticos del 29-4-08 al 9-10-08 y otra baja por cuadro depresivo con ansiedad desde el 22-3-11 y persiste en la actualidad. Desde el 9-8-05 ha tenido otros periodos de baja por otras causas no psíquicas. El actor no tiene prohibido expresamente el consumo de alcohol, pero sí le esta recomendado, de forma explícita, su consumo moderado. El actor en las fiestas de su localidad ha salido repetidamente de fiesta, durante al menos dos días, bebiendo durante los mismos de forma notable y mostrándose alegre y participativo en dicho ambiente festivo, comportamiento por el que fue despedido mediante carta de 11-7-11 y con igual fecha de efectos, lo que es impugnado por entender que es nulo o improcedente. La Sala, por lo que hace a la infracción de la buena fe contractual como causa de despido procedente, señala que la conducta del trabajador, de un lado, denota que su depresión no parece tan profunda como se pretende, dada dicha actitud participativa y festiva y, de otro lado, el hecho de beber en abundancia está claramente contraindicado en dicha situación, pudiendo perjudicar de forma directa y efectiva su recuperación, por lo que considera que dicha conducta vulnera la necesaria buena fe contractual, que regula el art. 54.2.d) ET, haciéndose, por ello, acreedor a la sanción impuesta de despido, máxime, cuando la propia empresa le abona un complemento específico por dicha situación de IT.

No es posible establecer una comparación entre las sentencia recurrida y de contraste en términos de contradicción doctrinal, pues llegan a conclusiones dispares, por aplicación de unos comunes criterios de valoración a situaciones fácticas no coincidentes. Es doctrina conocida, y aplicada en ambos casos por las respectivas Salas, que los elementos fácticos relevantes en supuestos de despido por transgresión de la buena fe contractual como consecuencia de la realización de actividades incompatibles con la situación de baja por

incapacidad temporal, son el tipo de lesión y el proceso patológico y de recuperación de la misma derivado, y por otro, la clase de actividad desarrollada durante la baja y los efectos que pueda desencadenar en el proceso curativo. Y en este caso eran distintas las patologías, y las concretas actividades desempeñadas por los respectivos demandantes y su posible incidencia en el proceso de curación. Así, en la sentencia recurrida se trata de un trabajador diagnosticado de ansiedad reactiva, al que se le imputa acudir al bar de su mujer y ayudar a colocar sillas o mesas o tirar al contenedor botellas vacías, tampoco se aprecia un proceder culpable en el hecho de ingerir bebidas alcohólicas al no constatarse que fuera en grado tal que efectivamente retrasara su recuperación. Por el contrario, en la sentencia de contraste se trata de un trabajador diagnosticado de un adaptativo mixto reactivo y trastornos neuróticos, en situación de IT por cuadro depresivo, y sale dos días de fiesta de forma activamente participativa, comportamiento a priori, incompatible con un cuadro depresivo, lo que denota que su depresión no parece tan profunda como se pretende, y bebe de forma notable cuando, a lo sumo, podía hacerlo de forma moderada, lo que está claramente contraindicado en dicha situación, porque puede perjudicar de forma directa y efectiva su recuperación. Razones todas ellas que —por lo dicho— avalan una solución divergente en cuanto a la existencia o no de transgresión de la buena fe contractual y a la proporcionalidad de la medida disciplinaria adoptada.

Por otra parte, también es doctrina consolidada de esta Sala que la calificación de las conductas a efectos de despido disciplinario, al depender de una valoración casuística de las circunstancias individualizadas concurrentes en cada caso, difícilmente puede dar lugar a un supuesto incluido en el ámbito de la unificación de doctrina.

SEGUNDO.- Y por lo que atañe al segundo motivo de contradicción planteado con carácter subsidiario y en el que se denuncia la infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales señalando la vulneración de los arts. 97 y 201 LRJS, en relación con el art. 24.1 CE, proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala homónima de Madrid de 13 de mayo de 2009 (rec. 1399/09). En la misma se desestima el recurso de suplicación deducido por el demandante frente al fallo de instancia adverso a la pretensión deducida por despido. Tal fallo desestimatorio tuvo como sustento una defectuosa articulación del recurso.

Conviene recordar que lo planteado en el recurso es una infracción procesal. A este respecto, la Sala ha señalado en la STS de 6 de junio de 2006, R. 1234/05 que «el examen de las infracciones procesales en este excepcional recurso está condicionado por la existencia de contradicción, sin que aquellas puedan apreciarse de oficio, salvo que afecten claramente a la jurisdicción o a la competencia funcional de esta Sala, ni a instancia de parte si ésta no acredita tal requisito [SSTS de 21 de noviembre de 2000, R. 2856/00; 21 de noviembre de 2000, R. 234/00; 21 de marzo de 2000, R. 2260/99; y 16 de julio de 2004, R. 4126/03]». «Asimismo, para que pueda apreciarse la contradicción en los recursos que denuncian infracciones procesales no sólo es necesario que «las irregularidades que se invocan sean homogéneas», sino que también es preciso que en las controversias concurren «las identidades subjetivas, la igualdad de hechos, fundamentos y pretensiones» que exige el art. 217 LPL. Ello es así porque en otro caso, dada la naturaleza de estas infracciones, se acabaría dando a las mismas «el tratamiento procesal de la simple casación» y, por otra parte, porque normalmente el alcance de la infracción procesal no puede aislarse de la propia configuración sustantiva de la controversia [aparte de las previamente citadas, el ATS 12 de noviembre de 1997, R. 1383/97; y las SSTS 21 de marzo de 2000 R. 2260/99; 10 de mayo de 2000, R. 2000/99; 21 de noviembre de 2000 (Sala General y R. 2856/99); 21 de noviembre de 2000 (Sala General y R. 234/00); 28 de febrero de 2001 (Sala General y R. 1902/00); 9 de abril de 2001, R. 2695/00; 3 de mayo de 2001, R. 2663/00; 13 de junio de 2001, R. 3955/00; 29 de junio de 2001, R. 1886/00; 23 de enero de 2002, R. 4294/00; 23 de marzo de 2002, R. 2280/01; 27 de mayo de 2002, R. 2523/01; 28 de junio de 2002, R. 2460/01; 11 de julio de 2002, R. 982/01; 11 de marzo de 2003, R. 2786/02; 24 de marzo de 2003, R. 3516/01; 29 de enero de 2004, R. 1917/03; 02 de febrero de 2004, R. 3329/01; 16 de julio de 2004, R. 4126/03; 16 de noviembre de 2004, R. 4210/03; y 27 de enero de 2005, R. 939/04]].» La contradicción en materia de infracciones procesales exige para que concorra, que exista homogeneidad en las irregularidades que se invocan, y dicho presupuesto no concurren en el supuesto actual. En efecto, en la sentencia de contraste, más que una infracción procesal propiamente dicha, nos hallamos en presencia de un recurso extraordinario de suplicación articulado con defectuosa técnica procesal, al interesarse en el mismo únicamente una amplia revisión del relato histórico, pero huérfano de motivo de infracción de normas jurídicas, lo que impide la posibilidad de modificar el fallo. Por el contrario, a la sentencia recurrida se le imputa resolver sobre términos no planteados en el debate, lo que a juicio de la recurrente supone construir de oficio el recurso por parte del órgano jurisdiccional de la suplicación. Por lo tanto, no es posible establecer divergencia doctrinal alguna entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso.

En consecuencia, de acuerdo con la doctrina antes indicada no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación al no concurrir las identidades que exige el artículo 219 de la Ley de la Jurisdicción Social.

TERCERO.- No son atendibles las alegaciones evacuadas por la parte recurrente tras la precedente providencia que abrió el trámite de inadmisión, al no desvirtuar lo que aquí ha quedado expuesto de manera razonada y sin que aporten extremo alguno no examinado por la Sala a la hora de abordar el juicio positivo de contraste. Por lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 225 LRJS, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicación, e imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a María del Mar Marcos Saiz, en nombre y representación de HOTEL FERNÁN GONZÁLEZ, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 3 de octubre de 2013, en el recurso de suplicación número 463/13, interpuesto por D.

Agustín, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Burgos de fecha 8 de mayo de 2013, en el procedimiento nº 929/12 seguido a instancia de D. Agustín contra HOTEL FERNAN GONZÁLEZ S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente; dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

<http://www.tirantonline.com>
Documento TOL3.303.001
Jurisprudencia
Jurisdicción: Social
Ponente: Antonio Martín Valverde
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 28/03/2012
Tipo Resolución: Auto
Sala: Cuarta
Número Recurso: 3416 / 2011

ENCABEZAMIENTO:

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil doce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 6 de los de Santander se dictó sentencia en fecha 3 de mayo de 2011, en el procedimiento nº 170 / 11 seguido a instancia de D. Teodosio contra BRIDGESTONE HISPANIA, S. A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en fecha 27 de julio de 2011, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 3 de noviembre de 2011 se formalizó por el Letrado D. Severino Cano Vinagrero, en nombre y representación de D. Teodosio, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 30 de enero de 2012 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción y por falta de contradicción.

A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó.

El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 27 de junio de 2011 confirma la de instancia que había declarado procedente el despido disciplinario del actor. En el supuesto enjuiciado, el trabajador demandante ostentaba la categoría de « profesional de la fabricación de neumáticos » permaneció en situación de incapacidad temporal por una rotura de menisco interno y de ligamento de rodilla derecha sometida a artroscopia y ligamentoplastia, desde el 7 de julio de 2009 al 7 de mayo de 2010, desde el 14 de mayo de 2010 al 20 de julio de 2010 y desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 7 de enero de 2011, siendo el diagnóstico de la última baja: recaída de gonalgia izquierda. Al menos durante cinco días del mes de noviembre de 2010 (días 13, 14, 19, 20 y 21) el trabajador salió de su domicilio entre las 22 y las 23 horas y se desplazó caminando de bar en bar por distintos establecimientos hosteleros (hasta seis en una misma noche) en los que permaneció de pie durante horas consumiendo bebidas alcohólicas y fumando hasta las 4 ó 5, 41 horas de la madrugada. Durante la última baja médica al actor se le había prescrito para su rodilla, analgesia, reposo y control por su médico, así como ejercicios domiciliarios de fortalecimiento.

Recorre la parte demandante en casación para la unificación de doctrina seleccionando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de octubre de 2006 que declara improcedente el despido disciplinario de la actora acordado por la empresa demandada en relación con las actividades realizadas mientras se encontraba de baja médica.

Por tanto, deben recordarse las exigencias básicas en relación con el citado recurso que la Sala ha venido reiterando.

En primer lugar, el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral exige que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, lo que supone necesariamente una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos [sentencias de 3 de noviembre de 2008 (R.2791 / 07), 25 de noviembre de 2008 (R. 5057 / 06), 10 de diciembre de 2008 (R. 1537 / 07), 11 de diciembre de 2008 (R. 2379 / 07), 15 de diciembre de 2008 (R. 178 / 08), 19 de diciembre 2008 (R. 881 / 08), 19 de diciembre de 2008 (R. 881 / 08), 30 de diciembre de 2008 (R. 3291 / 07), 3 de marzo de 2009 (R. 4510 / 07), 9 de marzo de 2009 (R. 2123 / 07) y 26 de enero de 2010 (R. 791 / 09).

El recurso no lleva a cabo una relación precisa y circunstanciada de la contradicción, pues respecto a la sentencia de contraste se limita a transcribir un párrafo de su fundamentación jurídica omitiendo una exposición pormenorizada del supuesto de hecho enjuiciado, del que no se dice ni las dolencias sufridas por la trabajadora demandante, ni el puesto que ocupaba en la empresa, ni la actividad realizada estando de baja, omitiendo así la comparación de dichas circunstancias con las del caso de la sentencia recurrida a los efectos de evidenciar la sustancial identidad que la ley exige para apreciar la contradicción.

SEGUNDO.- La Sala también ha reiterado que la contradicción que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de « hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales » (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430 / 2004 y R. 2082 / 2004; 25 de julio de 2007, R. 2704 / 2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586 / 2006 y R. 312 / 2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993 / 2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703 / 2006 y R. 2506 / 2007). También se ha reiterado que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814 / 2007; 3 de junio de 2008, R. 595 / 2007 y R. 2532 / 2006; 18 - 7 - 08, R. 437 / 2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126 / 2007 y 2613 / 2007; 2 de octubre de 2008, R. 483 / 2007 y R. 4351 / 2007; 20 de octubre de 2008, R. 672 / 2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637 / 2007 y R. 3883 / 07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470 / 2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014 / 2007 y R. 1138 / 2008) y 29 de octubre de 2010 (R. 200 / 10).

De conformidad con la doctrina que se acaba de exponer la contradicción es inexistente, pues entre los supuestos de hecho enjuiciados se aprecian las siguientes diferencias que justifican los diferentes pronunciamientos de las sentencias: **A)** Difieren las categorías profesionales de los actores y los puestos de trabajo que ocupaban - profesional de fabricación de neumáticos en la recurrida y de encargada de turno en la de contraste - así como las dolencias que tenían que superar para incorporarse a dichos puestos - rotura de menisco interno y de ligamento de la rodilla izquierda en el caso de la sentencia recurrida y contractura dorsal en la de contraste; **B)** También difieren las actividades desarrolladas por los demandantes durante la situación de baja y por tanto su repercusión en la recuperación de sus dolencias. Así, en la sentencia recurrida el actor durante las noches y madrugadas de al menos cinco días frecuentó una serie de bares permaneciendo de pie durante horas, consumiendo bebidas alcohólicas, mientras que en la sentencia de contraste lo que relatan los hechos probados son actividades normales en la vida diaria de la demandante como acudir a consulta médica cargada con una mochila, al supermercado con un carro de la compra, pasear al perro, y lo que parece ser una celebración al entrar en una parroquia para después trasladarse a un restaurante a cenar y después bailar y visitar una discoteca, coincidiendo esto último con la mejoría propia de la finalización del periodo de incapacidad temporal; **C)** por último, la sentencia recurrida se refiere a los cuidados que se le habían prescrito al actor para con su rodilla de analgesia y reposo, así como al consumo de bebidas alcohólicas a pesar del tratamiento farmacológico al que estaba sometido, sin que en la sentencia de contraste se valoren circunstancias iguales.

En su escrito de alegaciones, la parte recurrente se opone a la inadmisión, pero es claro que las diferencias observadas pueden justificar perfectamente la discrepancia en los respectivos fallos de las sentencias sometidas a contraste, de tal suerte que cada una de ellas resolvió el supuesto particular que se sometía a su enjuiciamiento. Además de la falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción que ya sería causa suficiente de inadmisión.

Además, hay que recordar que según ha reiterado la Sala la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 15 y 29 de enero de 1997, R. 952 / 1996 y 3461 / 1995, 6 de julio de 2004, R. 5346 / 2003, 24 de mayo de 2005, R. 1728 / 04, 8 de junio de 2006, R. 5165 / 2004, 18 de diciembre de 2007, R. 4301 / 2006 y las mas recientes de 19 de enero de 2011, R. 1207 / 10 y 14 de julio de 2011, R. 3060 / 10 y 6 de octubre de 2011, R. 3583 / 10).

TERCERO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Severino Cano Vinagrero, en nombre y representación de D. Teodosio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 27 de julio de 2011, en el recurso de suplicación número 604 / 11, interpuesto por D. Teodosio, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Santander de fecha 3 de mayo de 2011, en el procedimiento nº 170 / 11 seguido a instancia de D. Teodosio contra BRIDGESTONE HISPANIA, S. A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

<http://www.tirantonline.com>
Documento TOL3.358.978
Jurisprudencia
Jurisdicción: Social
Ponente: Mariano Sampedro Corral
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 07/03/2007
Tipo Resolución: Auto
Sala: Cuarta
Número Recurso: 3077 / 2005

ENCABEZAMIENTO:

En la Villa de Madrid, a siete de Marzo de dos mil siete.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 8 de los de Valencia se dictó sentencia en fecha 15 de octubre de 2004, en el procedimiento nº 757 / 04 seguido a instancia de D. Luis Antonio contra FORD ESPAÑA S. A., sobre reclamación de despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por D. Luis Antonio, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 21 de abril de 2005, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 1 de julio de 2005 se formalizó por el Letrado D. Jesús Royuela Sánchez en nombre y representación de D. Luis Antonio, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 3 de octubre de 2006 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley, de acuerdo con el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal.

La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia « no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia » (sentencia de 25 de abril de 2002, R. 2500 / 2001). Así se deduce no sólo del citado art. 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación supletoria en ese orden Social, cuyo art. 477. 1 prescribe que « el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso », mientras que el artículo 481. 1 LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483. 2.º LEC (autos de inadmisión de 14 de marzo de 2001, R. 1589 / 2000; 9 de mayo de 2001, R. 4299 / 2000; 10 de enero de 2002, R. 4248 / 2000; y de 27 de febrero de 2002, R. 3213 / 2001; y sentencias de 25 de abril de 2002, R. 2500 / 2001; 11 de marzo de 2004, R. 3679 / 2003; 19 de mayo de 2004, R. 4493 / 2003; 8 de marzo de 2005, R. 606 / 2004; 28 de junio de 2005, R. 3116 / 04, 16 de enero de 2006, R. 670 / 2005 y 8 de junio de 2006, R. 5287 / 2004).

El presente recurso se formula sin cita ni fundamentación de infracción legal alguna, lo que es causa suficiente para su inadmisión, de acuerdo con doctrina señalada.

SEGUNDO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 y 28 de enero de 1992, R. 824 / 1991 y 1053 / 1991; 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997, R. 4035 / 4996, 94 / 1997, y 4203 / 1996; 23 de septiembre de 1998, R. 4478 / 1997; 7 de abril de 2005, R. 430 / 2004; 25 de abril de 2005, R. 3132 / 2004; y 4 de mayo de 2005, R. 2082 / 2004).

El trabajador demandante, que prestaba sus servicios para la demandada Ford España, SA, desde el 26-8-1998, con la categoría profesional de Oficial Metalúrgico de 1ª, causó baja por incapacidad temporal con diagnóstico de «ansiedad» el 16/2/2004, hasta el 13/7/2004 en que fue dado de alta. En el inalterado relato fáctico aparece constatado que a mediados de junio el actor fue observado durante varios días consecutivos (21, 22, 23 y 24 de junio) acudiendo con asiduidad a un bar cercano a su domicilio y consumiendo abundantes cervezas y cubalibres, en cantidad excesiva (entre 5 y 12 botellines de cerveza de 1 / 3, según los días, y en uno de ellos, 3 botellines y 7 cubalibres), a consecuencia de lo cual fue despedido, mediante carta notificada el 19/7/2004, por transgresión de la buena fe contractual. La sentencia de instancia declaró la procedencia del despido, siendo esta decisión confirmada en suplicación pues el trabajador realizó una conducta contraria a la buena fe contractual, además de un posible fraude a la Seguridad Social, derivándose de la prueba pericial realizada que la ingesta de alcohol es incompatible con la enfermedad del actor, pues la prolonga perjudicando el proceso de recuperación, y que la misma ansiedad padecida puede deberse a la ingesta alcohólica.

En el supuesto de la sentencia seleccionada de contaste del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 14 de marzo de 1995 (R. 3347/1994), el entonces actor, que trabajaba para la demandada Grupos Diferenciales, SA desde el 26/6/1975, con la categoría de Especialista / Cortad. probetas, fue despedido el 15-7-1994 porque, estando de baja por incapacidad temporal desde el 1/3/1994 (y antes desde el 2/12/1993 al 23/2/1994), debido a la «artrosis de columna» padecida, fue sorprendido consumiendo alcohol durante cuatro días casi consecutivos en diversos bares, al amanecer o al atardecer, y durante un tiempo variable (entre 1 y 3 h y media) según los días. La sentencia de suplicación desestima el recurso de la empresa y confirma la decisión de instancia que declaró la improcedencia del despido porque si bien el Médico de la empresa había advertido por dos veces al demandante con anterioridad a los días de autos que la ingesta de alcohol retrasaría su curación, el mismo Médico manifestó luego en el acto del juicio que el proceso artrósico presentado por el actor resultaba irreversible, sin que tampoco se haya demostrado que tomara medicamentos incompatibles con el alcohol ni que le sentaran mal las consumiciones efectuadas.

De lo expuesto se deduce la falta de contradicción pues las enfermedades padecidas son en cada caso diversas, constando en la sentencia recurrida que la ingesta de alcohol era incompatible con la « ansiedad » sufrida por el actor, al prolongarla y perjudicar el proceso de recuperación, mientras que en la sentencia de contraste resulta acreditado que la artrosis presentada por el actor resultaba irreversible.

Por otra parte, la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas, a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992, R. 1232 / 1990 y 2271 / 1991; 15 y 29 de enero de 1997, R. 952 / 1996 y 3461 / 1995; 6 de Julio de 2004, R. 5346 / 2003; 9 de julio de 2004, R. 3496 / 2002; 24 de mayo de 2005, R. 1728 / 04; y 20 de septiembre de 2006, R. 476 / 05).

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los arts. 217 y 223. 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, el recurso planteado no puede ser admitido, habiéndose manifestado en el mismo sentido el Ministerio Fiscal, sin que el escrito de alegaciones de la recurrente sea suficiente para desvirtuar las apreciaciones que en el mismo sentido le fueron puestas de manifiesto por la precedente providencia de inadmisión, y sin que proceda imponer a la parte recurrente las costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Jesús Royuela Sánchez, en nombre y representación de D. Luis Antonio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 21 de abril de 2005, en el recurso de suplicación número 4081 / 04, interpuesto por D. Luis Antonio, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de los de Valencia de fecha 15 de octubre de 2004, en el procedimiento nº 757 / 04 seguido a instancia de D. Luis Antonio contra FORD ESPAÑA S. A., sobre reclamación de despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

La conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas motiva el despido disciplinario por embriaguez habitual

D DURANTE LA JORNADA LABORAL Y EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES PROFESIONALES

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 3 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-23995
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01993
Non publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi
M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Donne acte à la société Grontmij France de sa reprise d'instance;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 octobre 2011, n° 10-23. 677), que M. X..., engagé le 30 juin 2003 en qualité de dessinateur projeteur par la société Ginger telecoms, aux droits de laquelle vient la société Grontmij France, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 2009 après mise à pied conservatoire;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié:

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, complément de préavis et congés payés afférents, complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, rappels de salaire concernant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, alors, selon le moyen:

- 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; que pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié se contente de produire aux débats un tableau sommaire rempli par ses soins pour les besoins de l'audience, retraçant ses heures supplémentaires de 2006, 2007 et 2008, accompagné de plannings hebdomadaires de la société Ginger telecoms le concernant, non datés, portant des mentions manuscrites de durées de trajet; qu'en estimant que ces documents ne sont pas de nature à étayer la demande alors qu'il avait produit un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées accompagné de plannings, et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail;
- 2°/ qu'au surplus, en retenant, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le salarié n'a jamais auparavant produit dans la procédure les trois documents que la cour d'appel a analysés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les trois documents produits devant elle seulement, dont le dernier la veille de l'audience alors qu'il était daté du 2 mai 2009, non datés pour les deux autres, ne présentaient aucun caractère de sérieux et de fiabilité nécessaire pour être de nature à étayer une demande;

que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve versés par les parties à l'appui de leurs allégations; que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le troisième moyen de ce pourvoi:

Attendu que ce moyen devient sans objet du fait du rejet à intervenir sur le deuxième moyen;

Sur le cinquième moyen de ce pourvoi:

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé; qu'en le déboutant de cette demande sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de non-réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile; que le moyen n'est pas recevable;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur:

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail;

Attendu que l'arrêt dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une faute grave et condamne en conséquence l'employeur à verser à ce dernier des sommes au titre des indemnités de rupture et du paiement des salaires perdus pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, lors d'un déplacement professionnel, le salarié avait conduit son véhicule de service à une vitesse très largement excessive et, qu'à la suite d'un contrôle, les gendarmes lui avaient interdit de poursuivre sa route en raison d'une imprégnation alcoolique et ordonné au stagiaire qui l'accompagnait de prendre le volant, que dans la semaine qui avait suivi, ce stagiaire, dont le salarié avait la charge, avait démissionné en raison des craintes qu'il éprouvait pour sa sécurité lors des déplacements, ce dont il résultait que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié:

Attendu que du fait de la cassation à intervenir, ces moyens deviennent sans objet;

Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi principal du salarié;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des indemnités de rupture et à un rappel de salaire et congés payés afférents correspondant à la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef:

DEBOUTE M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, rappel de salaire et congés payés afférents pour mise à pied conservatoire;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 59.800 € bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

AUX MOTIFS QUE vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l'audience, il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et suivants du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, étant rappelé d'une part, que l'on doit entendre par motif personnel un motif inhérent à la personne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui-ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif, d'autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les motifs qui y sont énoncés fixent, lorsque celui-ci est contesté, les limites du litige; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié; que par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des articles 1234-1 et suivants et 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement, étant rappelé que la faute grave doit s'entendre d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que c'est à l'employeur qu'il incombe d'en rapporter la preuve; QU'en l'espèce, il est constant que le jour des faits reprochés à Benoît X..., celui-ci était parti en compagnie d'un stagiaire dans l'entreprise, Tanguy Y..., au volant d'un véhicule de la société pour se rendre à un chantier situé à Locon en vue de procéder au remplacement d'un disjoncteur sur un pylône; que la société Ginger Télécoms communique aux débats une attestation établie par Tanguy Y... qui est ainsi rédigée: «En tant que stagiaire chez Ginger Télécoms je me rendais le 10 décembre 2008 sur le chantier de Locon avec M. X... pour intervenir sur le pylône et pour remplacer un disjoncteur. C'est à environ 5 km du site que nous nous sommes fait arrêter par les gendarmes ceux-ci effectuent un contrôle à alcoolémie s'avérant positif. M. X... est emmené à la gendarmerie pour passer à l'éthylomètre. Une demi-heure plus tard il revient accompagné des gendarmes. Ceux-ci exigeaient que je prenne le volant. Pendant ce temps, M. X... a eu une conversation téléphonique avec son responsable M. A... pour lui narrer l'incident qui vient de se produire. M. X... lui a indiqué avoir eu de la chance car l'éthylomètre était défectueux. Une fois sur site et les travaux terminés M. X... a souhaité reprendre le volant pour rentrer sur Calais. Il a conduit à très vive allure environ à 170 km/ h (vitesse compteur) tout au long du trajet. A la suite de cet événement, j'ai demandé conseil auprès de mes responsables de formation. Sous ces conseils, j'ai soumis ma démission. Cela a engendré des problèmes concernant le bon déroulement de mon cursus universitaire (notation retour en formation initiale)»; qu'il est constant que Tanguy Y... a effectivement démissionné de son poste de stagiaire dans l'entreprise dans les semaines qui ont suivi et qu'il résulte d'un courrier en date du 11 juin 2009 adressé à la société Ginger Télécoms et émanant de l'Université du Littoral dans le cadre de laquelle s'effectuait le stage de Tanguy Y..., que c'est bien sur les conseils de l'autorité universitaire et compte tenu des faits survenus le 10 décembre 2008 et les risques encourus par le stagiaire que celui-ci avait décidé de démissionner; que la société intimée communique également aux débats une attestation de M. B..., directeur grand projet au sein de la société Ginger Télécoms, et que cette personne y indique avoir eu un entretien téléphonique avec Tanguy Y..., à la suite de la démission de celui-ci, et que ce stagiaire lui avait relaté, en termes analogues à ceux de l'attestation ci-dessus reproduite, les faits survenus le 10 décembre précédent; qu'il est également communiqué une attestation émanant de M. A... qui confirme l'appel téléphonique lui avait adressé Benoît X... au moment où celui-ci avait fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie par les services de gendarmerie; qu'en réponse à une demande que leur avait adressée

le conseil de Benoît X..., les gendarmes de la brigade territoriale d'Estaires, dans un courrier (produit aux débats) en date du 17 mai 2009, soit de nombreux mois plus tard, ont indiqué qu'un contrôle d'alcoolémie avait été effectivement réalisé à la date du 10 décembre 2008, et qu'aucune procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'avait été établie concernant Benoît X..., le contrôle s'étant avéré négatif; qu'il était toutefois aussitôt précisé dans ce courrier «vu le temps écoulé nous ignorons si c'est effectivement M. X... Benoît qui a fait l'objet d'un contrôle au bureau par éthylomètre car aucune infraction n'a été relevée»; qu'il est également produit un courrier date du 25 mai 2009 émanant du général de gendarmerie commandant la région Nord-Pas-de-Calais lequel n'avait pas assisté au contrôle dont il s'agissait mais qui, en termes analogues, confirme simplement l'existence d'un contrôle d'alcoolémie effectué le 10 décembre 2008 et le fait qu'aucun procès-verbal relevant une infraction n'a à cette occasion été établi; qu'ainsi, il apparaît, au résultat de ces deux documents, que les gendarmes enquêteurs, tout en confirmant la réalité du contrôle d'alcoolémie aux date et lieu dont il s'agit, n'ont pu, compte tenu du temps écoulé et de ce qu'aucun procès-verbal n'a été établi, rapporter de façon précise les faits qui se sont effectivement produits, dans les locaux de la gendarmerie, lors de contrôle, de sorte que les indications très imprécises-compte tenu de l'ancienneté des faits-fournies dans ces documents quant à ce qui s'est exactement passé lors de ce contrôle ne peuvent donc être considérées comme étant en contradiction avec les éléments ci-dessus analysés et notamment l'attestation établie par Tanguy Y..., éléments dont il résulte clairement et de façon circonstanciée, et même si Benoît X... n'a, en définitive, fait l'objet ni d'un procès-verbal pour infraction ni de poursuites pénales-1 que, le 10 décembre 2008, Benoît X..., dans le cadre de son travail, et alors qu'il était au volant d'un véhicule de service, a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui, en tout cas à son premier stade, s'est avéré positif, au point que les gendarmes, à la suite de ce contrôle, et même si l'on ne peut aujourd'hui déterminer avec une absolue certitude les circonstances exactes dans lesquelles, par la suite et dans les locaux de la gendarmerie, le contrôle à l'éthylomètre a été ou non effectué, lui ont en définitive imposé de céder le volant du véhicule au stagiaire qui l'accompagnait, que par la suite, et malgré les injonctions des gendarmes, Benoît X... a imposé à Tanguy Y... de lui céder à nouveau le volant,-3 que ce même jour, la conduite par Benoît X... de son véhicule de service était particulièrement imprudente puisque son stagiaire a pu faire état, de façon dépourvue d'équivoque, d'une vitesse qui, même si l'appelant vient soutenir que le chiffre de 170 Km indiqué n'apparaît pas crédible compte tenu du type de véhicule dont il s'agissait, était en toute hypothèse très largement excessive par rapport aux règles autorisées, et ce tout au long du trajet; que le comportement ainsi établi de Benoît X... dans le cadre de son travail, comportement qui est manifestement contraire tant aux règles élémentaires de prudence qu'aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise (communiqué aux débats) et notamment aux articles 2. 6 et 3. 7 de ce règlement-qui interdisent en effet toute consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail et qui rappellent en outre que tout salarié de l'entreprise disposant d'un véhicule de fonction doit respecter les dispositions du code de la route-et qui est en outre à l'origine directe de la démission du jeune stagiaire dont il avait la charge, doit s'analyser en un manquement à ses obligations de salarié qui n'est certes pas suffisamment grave pour justifier son départ immédiat de l'entreprise et son licenciement sans indemnité ni préavis, mais qui n'en constitue pas moins une faute suffisamment sérieuse pour justifier la rupture de son contrat de travail; qu'en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé de requalifier le licenciement pour faute grave qui a été notifié à Benoît X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu le Règlement Intérieur de la Société GINGER TELECOMS repris dans le chapitre «Sécurité» en article 3. 7 qui dit que «Tout salarié disposant d'un véhicule de fonction ou de société doit respecter les dispositions du Code de la Route»; que vu l'attestation sur l'honneur de Monsieur Y... Tanguy en date du 12. 06. 2009, vu l'attestation de Monsieur D... Behdad en date du 03. 06. 2009, vu le courrier du CUEEP Littoral, organisme de formation de Monsieur Y... Tanguy, vu le courrier du Général de division Gérard E...envoyé le 25 mai 2009 à la demande du représentant de Monsieur X... Benoît, le Conseil des Prud'hommes dit que le dosage du taux d'alcoolémie de Monsieur X... Benoît n'a pu être déterminé avec précision avec l'Ethylomètre, mais que ce second test ne pouvait être réalisé qu'en cas de positivité de l'Ethylotest; que même si aucune infraction n'a été relevée par la gendarmerie au regard du Code de la Route, il n'en demeure pas moins que Monsieur X... Benoît a été contrôlé «positif» à l'éthylotest alors qu'il était au volant du véhicule de société, et que les gendarmes ont demandé à Monsieur Y... de prendre le volant au lieu et place de Monsieur X... Benoît; que la prise d'alcool par Monsieur X... Benoît est confirmée et par conséquent il est en infraction avec l'article 3. 7 du règlement Intérieur; que lors du retour, Monsieur X... a repris le volant malgré l'interdiction

prononcée par les gendarmes; qu'il a roulé à vive allure aux dires de Monsieur Y... Tanguy; que le Conseil estime que la vitesse indiquée par Monsieur Y... Tanguy de 170 km/ Heure au compteur, ce détail est important, suffit à démontrer un excès de vitesse mettant en jeu l'intégrité du conducteur et de son passager; que c'est à la suite de ces événements que Monsieur Y... Tanguy, après avoir pris contact avec son responsable de stage, a été amené à démissionner de son stage; que Monsieur Y... Tanguy n'a fait que respecter les dispositions de l'article 3. 5 du Règlement Intérieur qui stipule que «Conformément aux articles 4131-1 et suivants du Code du Travail, tout salarié ayant un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent, doit immédiatement le signaler à la hiérarchie»; que le comportement de Monsieur X... Benoît constitue donc une infraction au regard du Règlement Intérieur engendrant la prise d'une sanction de la part de l'employeur; que le Conseil des Prud'hommes reconnaît que l'absence de dosage de l'éthylomètre ne prouve pas un état d'ébriété caractérisé mais que la positivité de l'éthylotest détermine la prise de boisson alcoolisée au volant du véhicule de société; que la vitesse excessive de 170 Km/ heure non reconnue par le demandeur n'a pas été démontrée par le défendeur, mais que l'attestation de Monsieur Y..., suffit à démontrer une vitesse excessive sur route; qu'enfin le Conseil des Prud'hommes retient que c'est l'ensemble de ces événements qui ont été la cause de la démission du stagiaire; que par conséquent, le Conseil des Prud'hommes requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne la Société GINGER TELECOMS à verser à Monsieur X... Benoît la somme de 4. 983 euros au titre du préavis de deux mois et les congés payés y afférents pour 498, 00 euros, la somme de 3. 687 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 1. 434, 34 euros au titre du paiement de la mise à pied et les congés payés y afférents pour 143 euros; qu'il convient également de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1º/ ALORS QUE par lettre du 25 mai 2009, le Général de gendarmerie commandant la région Nord-Pas-de-Calais a énoncé que le 10 décembre 2008 Monsieur X... a fait l'objet de la part des gendarmes de la brigade d'Estaires d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé négatif; qu'en énonçant que le Général de gendarmerie confirme simplement l'existence d'un contrôle d'alcoolémie effectué le 10 décembre 2008 et le fait qu'aucun procès-verbal relevant une infraction n'a à cette occasion été établi occultant l'information essentielle à la solution du litige que le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'est révélé négatif, la Cour d'appel a dénaturé le document en violation de l'article 1134 du code civil;
- 2º/ ALORS QUE si, après l'examen des pièces versées aux débats par les parties, il subsiste un doute sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, il doit profiter au salarié; qu'en l'espèce, en retenant notamment sur la base de l'attestation de Monsieur Y... que le grief de conduite en état d'ébriété, y compris au retour du chantier, était établi au motif que l'exposant a été positif dans un premier temps à l'éthylotest sans tenir compte du fait que les gendarmes de la brigade territoriale d'Estaires qui ont procédé à la vérification nécessaire à l'éthylomètre, ont témoigné que le contrôle à l'éthylomètre effectué dans ses locaux a été de toute façon négatif et que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction, ce dont il s'évinçait qu'il existait un doute sur l'état d'ébriété du salarié dont il devait profiter, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ensemble l'article L 1232-1 du code du travail;
- 3º/ ALORS ENCORE QU'en retenant à l'encontre du salarié le grief d'avoir le même jour à quelques heures d'intervalle malgré le contrôle d'alcoolémie positif reconduit le véhicule de service, sans rechercher le temps qui s'était écoulé entre le contrôle et le retour du chantier une fois la prestation de travail accomplie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ensemble l'article L 1232-1 du code du travail;
- 4º/ ALORS ENFIN QU'en retenant le grief de la conduite à près de 170 km/heure était établi par l'attestation de Monsieur Y... sans rechercher comme elle y était invitée s'il n'existait pas un doute quant à l'allégation d'une telle vitesse, alors que l'exposant avait fait valoir et établi que cette accusation d'excès de vitesse était totalement dénué de sérieux s'agissant d'un véhicule ayant plus de 180.000 km au compteur transportant deux ouvriers équipés de leurs outils à bord et circulant sur une route départementale particulièrement sinueuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ensemble l'article L 1232-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 40.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et les sommes de 1.332 € à titre de complément de préavis, de 133 € à titre des congés payés y afférents, 777 € à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 383 € à titre de complément de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 38,30 € au titre des congés payés y afférents;

AUX MOTIFS QUE comme en première instance, Benoît X... sollicite la condamnation de la société Ginger Télécoms à lui verser une somme de 40.000 € à titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées; qu'il convient ici de rappeler que les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du Travail précisent qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles; qu'il résulte certes de ces dispositions que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, mais qu'il appartient néanmoins au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'il convient de rappeler qu'au début de la présente instance et en tout cas devant le conseil des prud'hommes, Benoît X... n'avait communiqué absolument aucune pièce au soutien de sa réclamation et avait simplement sollicité l'allocation d'une provision de 40.000 €, demandant en outre au conseil de prud'hommes d'enjoindre à la société de Ginger Télécoms de communiquer aux débats les tickets de péage autoroutier et les bons Total services, demandes que les premiers juges ont écartées; qu'aujourd'hui devant la cour, soit donc plus de trois années après le début de la présente instance, Benoît X... communique pour la première fois aux débats deux documents; que le premier de ces documents consiste en un simple tableau intitulé par l'appelant «détail des heures supplémentaires non payées» mais qui se présente en réalité comme un tableau très sommaire, dont il n'est pas contesté qu'il a été établi par l'appelant lui-même, énumérant en outre sans autre explication ou justification complémentaire le nombre global d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées chaque mois au cours des années 2006, 2007 et 2008, étant observé par ailleurs qu'il apparaît assez clairement que le nombre d'heures retenues pour chaque mois correspond en réalité à un rajout systématique, pour chaque journée travail, de pas moins de quatre heures de travail supplémentaires; que ce tableau fait état en définitive d'un total d'heures supplémentaires de 2312, étant ici observé que Benoît X... dans ses écritures indique certes qu'à ce chiffre correspondrait un total de salaires impayés de 34.471 € mais qu'il reconnaît lui-même qu'il ne s'agit que d'une estimation imprécise et qu'il sollicite en définitive, comme devant les premiers juges, une somme globale de 40.000 €; qu'il apparaît donc très clairement qu'il s'agit là d'un document qui, outre que l'on ne voit pas pourquoi il n'a pas été communiqué dès l'origine du litige, qu'il est par ailleurs non daté et dont tout laisse supposer qu'il n'a été établi que pour les besoins de l'audience de la cour du 18 décembre 2012, ne présente à l'évidence et en toute hypothèse aucun des caractères de sérieux et de fiabilité nécessaires pour pouvoir le regarder comme étant de nature à étayer la réclamation de Benoît X...; que le deuxième document aujourd'hui communiqué consiste en une série de documents qui semblent être des plannings de la société Ginger Télécoms sur lesquels apparaissent une série de prénoms, dont celui de Benoît X..., et qui semblent indiquer les activités et missions de chacune des personnes concernées pour chacun des jours ouvrables d'une même semaine et ce pour tout un ensemble de semaines; que ces documents, dont il y a lieu (de souligner) qu'ils ne sont ni signés ni datés, et qu'ils ne comportent aucune date ni aucune indication permettant de déterminer les semaines, les mois et les années concernées, portent en outre, pour les semaines qui semblent concerner Benoît X..., un certain nombre de mentions manuscrites au crayon apportées par celui-ci au bas de certains jours de la semaine et faisant état de durées de trajet; que ces documents, comme le tableau ci-dessus analysé, ne sauraient à l'évidence constituer un élément véritablement sérieux et fiable de nature à étayer la réclamation de Benoît X..., ce d'autant moins que les durées de trajet qui y ont été apportées de façon manuscrite par Benoît X... lui-même apparaissent souvent comme étant à tout le moins arbitraires, voire fantaisistes, ainsi que le révèle par exemple (et ce n'est qu'un exemple) une durée totale de trajet de pas moins de 4 h 30 pour aller effectuer une mission à Cambrai depuis l'agglomération lilloise; qu'enfin, que Benoît X... a communiqué aux débats, la veille même de l'audience devant la cour, une attestation émanant de M. G...

collègue de travail de l'appelant au sein de la société Ginger Télécoms-attestation dont il convient d'abord de noter, là encore, que l'on ne peut fortement s'étonner qu'elle n'ait donc été communiquée qu'extrêmement tardivement alors qu'elle est pourtant datée du 2 mai 2009, et qui, surtout, ne comporte, s'agissant de la question en litige présentement examinée, que les seules mentions suivantes «- heures supplémentaires non déclarées et non payées. Journée à plus de 13 heures régulièrement (route comprise)»; que ces seules mentions, extrêmement sibyllines, qui ne comportent aucune date ou période précise et qui, surtout, n'apportent aucune précision quant aux salariés qui auraient pu être concernés par les faits mentionnés, ne sont évidemment pas de nature, et encore moins que les documents précédents, à étayer en quoi que ce soit la réclamation de Benoît X...; qu'en conséquence, et au résultat de ces éléments, il apparaît que la réclamation formée par Benoît X... en matière d'heures supplémentaires doit être, en application des règles et principes ci-dessus rappelés, purement et simplement écartée et que le jugement déféré, par voie de conséquence, doit être également confirmé sur ce point; (...) qu'il convient simplement de préciser ici qu'en égard aux développements ci-dessus consacrés à la réclamation formée par Benoît X... au titre des heures supplémentaires et au fait que cette réclamation doit être rejetée, les demandes, ci-dessus rappelées, formées par Benoît X... en cause d'appel et tendant, en conséquence des heures supplémentaires qu'il revendique, à l'augmentation de ces trois indemnités ne peuvent qu'être rejetées;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTÉS qu'en l'espèce, Monsieur X... Benoît ne produit aucun élément à l'appui de sa demande susceptible d'être comparé à ceux que le Conseil serait en droit de demander à la partie adverse; que la somme de 40. 000 euros qui ne correspond, selon Monsieur X... Benoît, qu'à une provision pour environ une vingtaine d'heures par semaine ne saurait constituer un début de preuve; que les documents réclamés par le demandeur, ne permettraient pas de prouver, de façon certaine, que Monsieur X... Benoît ait effectué des heures de travail effectif pouvant être considérées comme heures supplémentaires; que ce comportement, qui consiste à défier les règles du contradictoire en affaire prud'homale, et refuser celles établies et exigées par les différents articles cités ci-dessus sur la charge de la preuve, n'a pas droit de cité dans la juridiction d'exception qu'est le Conseil des Prud'hommes;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié se contente de produire aux débats un tableau sommaire rempli par ses soins pour les besoins de l'audience, retraçant ses heures supplémentaires de 2006, 2007 et 2008, accompagné de plannings hebdomadaires de la société Ginger Télécoms concernant Monsieur X... non datés portant des mentions manuscrites de durées de trajet; qu'en estimant que ces documents ne sont pas de nature à étayer la demande alors que le salarié avait produit un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées accompagné de plannings, et auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail;

QU'au surplus en retenant pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires que le salarié n'a jamais auparavant produit dans la procédure les trois documents que la Cour d'appel a analysés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 14. 951 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen;

ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral distinct du licenciement causé par les accusations infondées dont il a été l'objet.

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen;

ET AUX MOTIFS encore QUE il apparaît que si une faute grave ne peut certes être retenue à l'encontre de Benoît X..., le licenciement de celui-ci apparaît néanmoins fondé, de sorte que l'intéressé ne peut invoquer un préjudice moral subi par lui à raison des accusations injustifiées qui auraient été portées contre lui à l'occasion de ce licenciement étant ajouté que la société Ginger Télécoms a simplement reproché à l'intéressé, tant dans la lettre de licenciement que dans ses explications à l'occasion de la présente instance, et notamment dans ses écritures susvisées, d'avoir conduit un véhicule de service après avoir consommé de l'alcool au point que le contrôle, et en tout cas le premier contrôle à l'éthylotest, effectué par les gendarmes s'est avéré positif, reproche qui s'est avéré fondé;

- ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1.098 € au titre du droit individuel à la formation

SANS AUCUN MOTIF

- ALORS QUE tout jugement doit être motivé; qu'en déboutant Monsieur X... de cette demande sans en justifier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Grontmij France, venant aux droits de la société Ginger telecoms, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et en conséquence d'AVOIR, confirmant le jugement, condamné la société GINGER TELECOMS à verser à Monsieur X... les sommes de 4. 983 € au titre du préavis conventionnel, 493 € au titre des congés payés y afférents, 3.687 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.434,34 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et 143 € au titre des congés payés y afférent;

AUX MOTIFS QUE «le comportement ainsi établi de Benoît X... dans le cadre de son travail, comportement qui est manifestement contraire tant aux règles élémentaires de prudence qu'aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise et notamment aux articles 2. 6 et 3. 7 de ce règlement-qui interdisent en effet toute consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail et qui rappellent en outre que tout salarié de l'entreprise disposant d'un véhicule de fonction doit respecter les dispositions du Code de la route-et qui est en outre à l'origine directe de la démission du jeune stagiaire dont il avait la charge, doit s'analyser en un manquement à ses obligations de salarié qui n'est certes pas suffisamment grave pour justifier son départ immédiat de l'entreprise et son licenciement sans indemnité de préavis, mais qui n'en constitue pas moins une faute suffisamment sérieuse pour justifier la rupture de son contrat de travail»;

- ALORS QUE constitue une faute grave le fait de conduire un véhicule de fonction pendant une mission en état d'ébriété et à une vitesse «très largement excessive par rapport aux règles autorisées, et ce tout au long du trajet»; qu'en l'espèce, en affirmant que les fautes de cette nature commises par Monsieur X... ne constituaient néanmoins pas une faute grave, mais simplement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Douai, du 15 février 2013.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 23 mai 2012
N° de pourvoi: 11-14500
Non publié au bulletin
Rejet
M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 janvier 2011), que M. X..., engagé par la société Debernard le 9 octobre 1978 en qualité de technico-commercial, a été contrôlé, le 21 juillet 2008, alors qu'il conduisait, sur son temps de travail, un véhicule de l'entreprise sous l'empire d'un état alcoolique et au-delà de la vitesse autorisée; que son permis de conduite a en conséquence fait l'objet d'une suspension administrative d'une durée de six mois; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er septembre 2008, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal correctionnel; que, le 16 décembre 2008, le salarié accompagné d'un huissier de justice, s'est présenté dans les locaux de la société, qu'il avait préalablement avisée, pour reprendre son poste ce qui lui a été refusé; qu'il a été condamné le 9 février 2009 à deux amendes et à une suspension de permis de conduire pendant huit mois; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre du 10 mars 2009, puis licencié pour faute grave, le 27 mars 2009;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied prononcée le 1er septembre 2008, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen:

- 1°/ que présente un caractère conservatoire la suspension du contrat de travail du salarié qui est décidée par l'employeur dans l'attente de la décision pénale à intervenir sur des faits de conduite en état d'ivresse au temps du travail, et dépassement de la vitesse autorisée, dès lors que l'employeur informe son salarié que la décision du Tribunal correctionnel pourrait avoir des conséquences sur son contrat de travail; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail;
- 2°/ qu'emporte interruption du délai de deux mois au terme duquel aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être engagée la rétention du permis de conduire du salarié décidée par l'autorité administrative compétente dans l'attente de la décision du Parquet d'engager des poursuites pénales; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail;
- 3°/ que lorsque le permis de conduire du salarié fait l'objet d'une suspension administrative pour conduite en état d'ivresse et dépassement de la vitesse autorisée, l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de gestion, décider d'attendre l'issue de la procédure pénale pour engager des poursuites disciplinaires et n'est nullement tenu de rompre immédiatement le contrat de travail, le permis serait-il indispensable à l'exercice par le salarié de ses fonctions; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir sursis à sa décision de rompre le contrat de travail dans l'attente de la décision pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail;
- 4°/ que la privation du permis de conduire d'un salarié l'empêchant de fournir de manière effective sa prestation de travail autorise l'employeur à suspendre le contrat de travail; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié occupait un poste itinérant nécessitant la conduite de véhicules; que l'employeur soutenait en

conséquence avoir été dans l'obligation de suspendre le contrat de travail du salarié à la suite de la suspension administrative de son permis; qu'en condamnant l'employeur à des rappels de salaire, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le salarié pouvait effectuer sa prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du code du travail;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la suspension du contrat de travail du salarié par l'employeur n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a pu décider que cette décision avait le caractère d'une mise à pied disciplinaire;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la suspension administrative du permis de conduire était sans incidence sur le cours de la prescription;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Debernard aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Debernard;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Debernard;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision déferée et, statuant à nouveau, d'avoir dit que la société DEBERNARD a prononcé le 1er septembre 2008 une mise à pied disciplinaire à l'encontre de M. Michel X..., d'AVOIR annulé cette sanction, d'AVOIR dit que le licenciement était sans cause réelle et condamné l'employeur à divers rappel de salaires, indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre d'AVOIR dit que les créances salariales porteront intérêts à compter de la convocation devant le conseil des prud'hommes et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser les allocations chômage et à verser au salarié 500 euros au titre de l'absence de mention du droit au DIF dans la lettre de licenciement.

AUX MOTIFS QUE M. Michel X... a été engagé par la société Debernard, le 9 octobre 1978, en qualité de technico-commercial. Aucun contrat de travail n'a été établi à l'époque. La convention collective applicable est celle, nationale, des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Le 21 juillet 2008, M. Michel X... a fait l'objet d'une rétention administrative de son permis de conduire de six mois, pour conduite en état alcoolique et dépassement de la vitesse autorisée. Les infractions ont été constatées durant son temps de travail et alors qu'il se trouvait au volant du véhicule de l'entreprise. M. Michel X... a informé immédiatement son employeur des faits. La société Debernard a demandé à M. Michel X... de demeurer à son domicile le 22 juillet 2008, cette journée étant rémunérée au titre des congés payés, M. Michel X... est revenu à l'entreprise mettre ses dossiers en ordre les 23 et 24 juillet 2008, puis il a été en congés payés du 25 juillet au 1er septembre 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2008, la société Debernard a convoqué M. Michel X... pour le 1er septembre 2008. Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2008, la société Debernard a notifié à M. Michel X... «la suspension de son contrat de travail, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Correctionnel... suspension prenant effet à compter de la présente». M. Michel X... n'avait pas signé, ce 1er septembre 2008, un «protocole d'accord» portant sur cette suspension, proposé par la société Debernard. Le 2 septembre 2008, M. Michel X... a, à son tour, adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Debernard, par lequel il a confirmé son refus de signer le dit «protocole» et, a fait une contre-proposition, soit de «déléguer une personne pour ses déplacements en clientèle à temps partiel, étant donné qu'il a beaucoup de travail au bureau d'étude... s'engageant à régler les frais que cela peut entraîner». Le 5 septembre 2008, par une autre lettre recommandée avec accusé de réception, la société Debernard a répondu à M. Michel X... que sa proposition n'était pas acceptable et, qu'elle

maintenait la décision du 1er septembre 2008. Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2008, M. Michel X... a avisé la société Debernard qu'il se présenterait, le 16 décembre 2008, dans leurs locaux, afin de reprendre son travail. M. Michel X... s'étant, le 16 décembre 2008, fait accompagner d'un huissier, ce dernier a dressé procès-verbal de ce que l'employeur s'opposait à cette reprise de poste, arguant d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2008 envoyée à M. Michel X..., confirmant la «suspension de son contrat de travail jusqu'au prononcé de la décision qui sera rendue par le Tribunal Correctionnel». Par ordonnance pénale rendue par le tribunal correctionnel de Tours, le 9 février 2009, M. Michel X... a été reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées et condamné à deux amendes, ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour huit mois. M. Michel X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire «à compter de la première présentation de la lettre», par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2009. L'entretien préalable s'est tenu le 24 mars 2009. M. Michel X... a été, effectivement, licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2009. La société Debernard écrit à M. Michel X..., dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2008: «par la présente, et dans la mesure où vous ne pouvez plus exercer votre contrat de travail, je vous notifie la suspension de votre contrat de travail, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal correctionnel. Cette suspension prendra effet à réception de la présente. Je vous demande donc de m'informer dès que vous en aurez connaissance, de la date de votre convocation devant le Tribunal Correctionnel, et la décision qui sera rendue. Comme je vous l'ai indiqué, la décision du Tribunal aura nécessairement des incidences sur l'exécution de votre contrat de travail». La seule question qui doit se poser, quant à la missive précitée, est de savoir si l'on se trouve en présence d'une mise à pied à titre conservatoire ou d'une mise à pied disciplinaire de M. Michel X... par la société Debernard. Certes, seule une faute grave (ou une faute lourde) permet à l'employeur de recourir à une telle mesure, dont l'effet est de suspendre le contrat de travail de l'employeur, ce qui implique, durant cette période, une décharge du salarié, comme de l'employeur, de leur obligation réciproque, le premier d'accomplir un travail, le second de fournir une rémunération en contrepartie. La société Debernard a bien visé la faute grave à l'appui du licenciement de M. Michel X... qui a suivi la dite mise à pied, et les faits qui ont valu cette mise à pied, puis le licenciement, sont identiques. En faveur encore d'une mise à pied à titre conservatoire, il convient de noter que la dite mesure est: prise préalablement à une éventuelle décision de sanction à l'encontre de M. Michel X...; prononcée dans l'attente des résultats d'une procédure extérieure, mais néanmoins afférente aux mêmes faits. Il n'empêche que le critère déterminant pour la distinction d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une mise à pied disciplinaire réside dans l'avertissement que l'employeur fait au salarié de l'engagement de la procédure de licenciement, avertissement qui doit être concomitant à la mise à pied, l'engagement de la procédure se vérifiant dans les faits. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. Michel X... ne sera finalement convoqué par la société Debernard à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, convocation assortie d'ailleurs d'une mise à pied à titre conservatoire, que le 10 mars 2009. La mise à pied prononcée a, dès lors, le caractère de sanction disciplinaire. Ne peuvent, en tout cas, être invoquées les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, selon lesquelles: «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales». Il résulte de ce texte que, lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, le délai de deux mois afin d'engager des poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale et, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où ce dernier établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure. L'interruption n'intervient, toutefois, qu'à deux conditions, à savoir: que les poursuites pénales concernent le fait reproché au salarié et susceptible de justifier contre lui une sanction disciplinaire, que les poursuites pénales aient été déclenchées dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif. Si, en l'espèce, la première condition est remplie, il n'en est pas de même de la seconde. La société Debernard n'a jamais contesté (cf encore leur courrier en date du 25 août 2008) que, dès le 21 juillet 2008, elle était parfaitement informée de ce que Michel X... avait été contrôlé par la gendarmerie alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et avait commis un excès de vitesse, tout cela pendant son temps de travail et au volant du véhicule de l'entreprise. Elle était tout autant informée que le même avait été l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire, cette pièce lui étant pourtant indispensable dans l'exercice de sa profession. Elle n'était pas dans l'obligation, du coup, de surseoir à sa

décision en attente de sa condamnation pénale. En outre, à la lecture de l'ordonnance pénale du 9 février 2009 qui a effectivement condamné M. Michel X... pour les infractions commises, il ressort que l'action publique à l'encontre de M. Michel X... n'a été mise en mouvement par le parquet de Tours que le 2 octobre 2008 («sur réquisition»). Aucune interruption de la prescription des faits disciplinaires ne pouvait, de fait, s'ensuivre, puisque l'action publique aurait dû être mise en mouvement avant le 21 septembre 2008, pour qu'un tel effet interruptif puisse, ne serait-ce qu'être discuté, même s'il n'était, au bout du compte, pas retenu. Une mise à pied disciplinaire entraîne, dans le principe, une perte de salaire. Toutefois, pour être valable, encore faut-il que la dite mise à pied ait été prise conformément à la procédure prévue à l'article L.1332-2 du code du travail. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la procédure sus-visée n'a en rien été respectée. Ceci justifie l'annulation de la sanction prononcée le 1er septembre 2008 par la société Debernard à l'encontre de M. Michel X.... La société Debernard devra, en conséquence, verser à M. Michel X... les salaires, dont ce dernier, a été privé durant le temps de la mise à pied ainsi annulée, soit la somme de 21 637 euros. La société Debernard, pour licencier M. Michel X... le 27 mars 2009 pour faute grave, s'est référée aux faits du 21 juillet 2008 qui ont été rappelés dans les précédents développements, auxquels il conviendra de se reporter (cf lettre de licenciement). Le dit licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour deux motifs, à savoir que: l'employeur a d'ores et déjà épuisé son pouvoir disciplinaire, les faits sanctionnés le 27 mars 2009 étant rigoureusement identiques à ceux sanctionnés le 1er septembre 2008, et ce n'est pas l'annulation de cette dernière sanction qui y change quoi que ce soit; les faits sur lesquels le licenciement s'appuie sont prescrits (cf à nouveau les développements précédents). Et la mention par la société Debernard dans la lettre de licenciement de M. Michel X... de la phrase ci-après, «votre attitude n'est pas un fait isolé, puisque cela fait 5 fois que vous conduisez un véhicule sous l'empire de l'alcool avec rétention du permis de conduire», ne peut suffire à légitimer le licenciement intervenu. La rédaction de l'article L. 1332-4 précité permet de conclure que l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif, qui procède quand même d'un comportement identique, est constaté. Mais, encore faut-il que ce nouveau fait fautif ne soit pas lui-même prescrit, ce qui est le cas en l'espèce. À supposer même que les cinq faits avancés existent et aient donné lieu à sanction (s), l'article L.1332-5 du Code du travail n'aurait permis leur rappel que si la (ou les) dite (s) sanction (s) remonta(en)t à moins de trois ans avant l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires. La seule pièce versée sur ce point par la société Debernard est une lettre qui date déjà de l'année 1999. Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. Michel X... a droit aux indemnités de rupture (préavis, licenciement...), en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail. La société Debernard sera, du coup, condamnée à lui verser 10 045,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 30 135,60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. Conformément toujours à l'article L.1235-3 du code du travail, M. Michel X..., ayant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise qui compte elle-même plus de onze salariés (en l'état vingt-six), et cela lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, peut prétendre à une indemnité. Celle-ci ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire qui s'entendent comme la rémunération brute. Au-delà de ce minimum légal, la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges qui peuvent retenir différents critères (ex. âge du salarié, ancienneté, durée du chômage, perte d'avantages en nature, dommage moral...). Certes, M. Michel X... avait réalisé une longue carrière au sein de la société Debernard et venait d'avoir 55 ans quand il a quitté cette dernière. Néanmoins, après avoir été indemnisé par le Pôle emploi, il a pu retrouver, le 31 décembre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que responsable commercial, contre un salaire brut mensuel de 2 293 euros et une indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 600 euros par mois. L'indemnité qui lui sera, en conséquence, allouée sera fixée à la somme de 16860 euros (base retenue 2 810 euros, cf bulletins de salaire au dossier). Par ailleurs, il devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, être ordonné à la société Debernard de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qu'ils ont été dans l'obligation de déboursier, du licenciement à ce jour, dans la limite de deux mois. L'employeur est tenu de mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, dit DIF, qui sont, sous condition d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, de vingt heures chaque année, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (articles L. 6323-1 et suivants du code du travail). Cette disposition a été introduite dans le code du travail à la suite d'une loi du 4 mai 2004, entrée en vigueur le 7 du même mois. M. Michel X... relève de cette législation. L'absence de la dite mention dans la lettre de rupture que lui a adressée son employeur (le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse) lui a fait perdre cet avantage. L'indemnisation consécutive sera fixée à la somme de 500 euros (articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail dans leur rédaction de l'époque).

- 1°/ ALORS QUE présente un caractère conservatoire la suspension du contrat de travail du salarié qui est décidée par l'employeur dans l'attente de la décision pénale à intervenir sur des faits de conduite en état d'ivresse au temps du travail, et dépassement de la vitesse autorisée, dès lors que l'employeur informe son salarié que la décision du Tribunal correctionnel pourrait avoir des conséquences sur son contrat de travail; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail;
- 2°/ ALORS QU'emporte interruption du délai de deux mois au terme duquel aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être engagée la rétention du permis de conduire du salarié décidée par l'autorité administrative compétente dans l'attente de la décision du Parquet d'engager des poursuites pénales; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail;
- 3°/ ALORS QUE lorsque le permis de conduire du salarié fait l'objet d'une suspension administrative pour conduite en état d'ivresse et dépassement de la vitesse autorisée, l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de gestion, décider d'attendre l'issue de la procédure pénale pour engager des poursuites disciplinaires et n'est nullement tenu de rompre immédiatement le contrat de travail, le permis serait-il indispensable à l'exercice par le salarié de ses fonctions; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir sursis à sa décision de rompre le contrat de travail dans l'attente de la décision pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail;
- 4°/ ALORS en tout état de cause QUE la privation du permis de conduire d'un salarié l'empêchant de fournir de manière effective sa prestation de travail autorise l'employeur à suspendre le contrat de travail; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié occupait un poste itinérant nécessitant la conduite de véhicules; que l'employeur soutenait en conséquence avoir été dans l'obligation de suspendre le contrat de travail du salarié à la suite de la suspension administrative de son permis; qu'en condamnant l'employeur à des rappels de salaire, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le salarié pouvait effectuer sa prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du code du travail;

Décision attaquée: Cour d'appel d'Angers, du 25 janvier 2011.

Roj: ATS 6494/2012
Id Cendoj: 28079140012012201422
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2138/2011
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Mayo de dos mil doce.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL RAMÓN ALARCÓN CARACUEL.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 3 de los de Girona se dictó sentencia en fecha 2 de septiembre de 2010, en el procedimiento nº 447/2010 seguido a instancia de D. Adolfo contra EMTE GIRONA S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 5 de mayo de 2011, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 22 de junio de 2011, se formalizó por el Letrado D. Alfonso Abete Otazu en nombre y representación de D. Adolfo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 19 de enero de 2012, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007, 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010).

El recurrente, que prestaba servicios como jefe de equipo en una empresa dedicada a las instalaciones eléctricas, estaba encargado de organizar y coordinar el trabajo del personal a su servicio y garantizar su seguridad. El 12 de marzo de 2010 estaba en situación de servicio especial para atender las averías producidas por una nevada en la provincia de Girona, dependiendo de él un grupo de trabajadores de la demandada y de otra empresa de Sevilla. Su misión era localizar las averías y colocar grupos electrógenos. El recurrente, que conducía el vehículo, hizo dos paradas y en las dos se quedó en un bar consumiendo alcohol. Cuando la Guardia Civil le hizo una prueba de alcoholemia, dio resultado positivo y los agentes inmovilizaron el vehículo, por lo que hubo de enviarse a un sustituto. El recurrente no recogió la incidencia en el parte de trabajo, sino que hizo constar que había

trabajado normalmente. La sentencia recurrida ha calificado el despido de procedente no solo por el estado de embriaguez del actor que podía repercutir en la seguridad de los demás trabajadores, sino por la ocultación de la incidencia producida, constituyendo esa conducta una trasgresión de la buena fe contractual.

La sentencia de contraste es del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 16 de junio de 1995 (r. 510/1995), que declara improcedente el despido del actor, encargado de la recaudación y limpieza de cabinas y retribuido con un módulo salarial fijo. El día de los hechos comenzó su trabajo sobre las 6,00 horas y limpió cuatro cabinas, pero entre las 11,00 y las 12,00 horas se le rompió el parabrisas de la furgoneta, por lo que llamó a la empresa para pedir instrucciones. Se le ordenó que reparase el vehículo, para lo cual el trabajador lo llevó a un taller donde entró sobre las 12,05 horas. En la carta de despido se le imputa el falseamiento de los partes de trabajo en cuanto al número de cabinas limpiadas, pero ante la situación descrita la sentencia considera inverosímil ese hecho por carente de sentido. De modo que «(...) la justificación de la realización de un segundo parte que no responde a la realidad será otra, no aclarada en el acto de juicio, pero objetivamente no responde a una actitud sorpresiva ni a una intención lucrativa por parte del trabajador».

Debe apreciarse falta de identidad entre las sentencias comparadas porque tanto la categoría profesional de los interesados, su grado de responsabilidad y las incidencias ocurridas en cada caso son distintas. El recurrente tiene la categoría de jefe de equipo y de él depende la seguridad de los demás trabajadores que forman el equipo, siendo además el conductor del vehículo. Durante la madrugada del día de los hechos hace dos paradas en sendos bares de una hora cada una con el resultado de que da positivo en la prueba de alcoholemia y el vehículo queda inmovilizado hasta que llegue un sustituto, no recogiendo nada de esto en el parte de trabajo, sino que hace constar que había trabajado normalmente desde las 19,00 hasta las 7,00 horas. Lo ocurrido en el caso de la sentencia de contraste es que el trabajador, retribuido mediante una cantidad fija mensual, desempeña la tarea encomendada hasta que no puede seguir utilizando la furgoneta por la rotura del parabrisas, lo que comunica a la empresa y tiene que dejar el vehículo en un taller. En definitiva, tras examinar todas las circunstancias, la sentencia de contraste llega a la conclusión de que no hay prueba sobre el hecho imputado en la carta de despido de falseamiento del parte de trabajo.

Por otra parte, la Sala ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995, 6 de julio de 2004, R. 5346/2003, 24 de mayo de 2005, R. 1728/04, 8 de junio de 2006, R. 5165/2004 y 18 de diciembre de 2007, R. 4301/2006, 15 de enero de 2009, R. 2302/2007, 15 de febrero de 2010, R. 2278/2009, 19 de julio de 2010, R. 2643/2009, 19 de enero de 2011, R. 1207/2010, 24 de enero de 2011, R. 2018/2010 y 24 de mayo de 2011, R. 1978/2010).

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita. Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Alfonso Abete Otazu, en nombre y representación de D. Adolfo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 5 de mayo de 2011, en el recurso de suplicación número 190/2011, interpuesto por D. Adolfo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Girona de fecha 2 de septiembre de 2010, en el procedimiento nº 447/2010 seguido a instancia de D. Adolfo contra EMTE GIRONA S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación. Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 14873/2009
Id Cendoj: 28079140012009202807
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3381/2008
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: José Manuel López García de la Serrana
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a trece de Octubre de dos mil nueve.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 24 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 16 de enero de 2007, en el procedimiento nº 697/07 seguido a instancia de DON Imanol contra EMPRESA SERVICIOS SECURITAS S.A. y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por SERVICIOS SECURITAS S.A., siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 11 de junio de 2.008, que estimaba en parte el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 15 de octubre de 2009 se formalizó por el Letrado Don Alfredo Souto García, en nombre y representación de DON Imanol, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 10 de junio de 2009 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/1996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004)].

En el supuesto analizado por la sentencia recurrida, se debate sobre la procedencia o improcedencia del despido disciplinario sufrido por el actor debido a que este, de profesión auxiliar de servicios, el día 27 de julio de 2007, cuando volvía de repostar un vehículo de la empresa para la que prestaba servicios, sufrió un accidente de tráfico. La Guardia urbana le practicó la prueba de la alcoholemia y dio positivo, por lo que procedió a inmovilizar

el vehículo por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. El responsable de la empresa en la que el trabajador prestaba servicios llamó a la empresa demandada para comentar lo ocurrido, y el Jefe de Seguridad de la misma acudió a buscar al actor, encontrándolo muy nervioso, con un discurso inconexo, con los ojos rojos, las pupilas dilatadas y la voz pastosa, y lo llevó a la mutua; posteriormente, y ya sobre las 10 horas de la noche, se ofreció para acompañarle a su casa porque en su opinión, no estaba en condiciones de conducir. La empresa le despidió por estos hechos, considerando que se había producido un episodio de embriaguez probada durante el servicio, basándose en la infracción de los arts. 35.e y 36 apartado tercero del convenio colectivo de la empresa. La sentencia de instancia fundamentó la improcedencia del despido en que en el convenio de la empresa se calificaba como falta muy grave «la embriaguez o uso de drogas durante el servicio», mientras que el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad dispone que constituye falta muy grave «la embriaguez probada, vistiendo uniforme». Según la sentencia de instancia, ninguno de estos dos preceptos se adecuan al art. 54.2.f) ET, que exige que el despido disciplinario se base en una «embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo», por lo que ambos preceptos convencionales serían más severos que el propio ET, sin que el art. 3.1 de dicha norma legal permita esta situación. Recurrida en suplicación la sentencia por vulneración del art. 35 del convenio de la empresa, y los arts. 3.2 y 54.2.d) ET, la sentencia, apoyándose en diversos precedentes judiciales, llega a la conclusión de que es posible que la mera embriaguez se regule en el convenio colectivo de aplicación como falta muy grave susceptible de despido, ya que la especificidad del convenio no contradice ni agrava el genérico incumplimiento del art. 54.2 ET, en cuanto este regula la embriaguez habitual, cuestión distinta a la regulada en el convenio colectivo. Además, la normativa del convenio colectivo encontraría su apoyatura legal no en el art. 54.2.f) ET, sino en el art. 54.2.d) ET, que considera causa de despido la transgresión de la buena fe contractual. En consecuencia, la sentencia de suplicación revocó la sentencia de instancia, declarando el despido procedente.

Invoca de contraste la parte actora la STSJ Madrid de 27 de enero de 1998, R. 5250/97. En la misma, se analiza el caso de un trabajador, con categoría de comercial, y que sufrió asimismo despido disciplinario. En concreto, al actor se le imputó en la carta de despido que bebía en horas de trabajo o antes de la jornada laboral, aprovechando al final de la jornada el cambio de Jefe de Sala. Dicha actividad no es diaria, pero sí frecuente, abonando en ocasiones las cervezas, pero no los «chupitos». Se le imputa haber consumido bebidas alcohólicas, en concreto, los días 10, 14, 15 y 16 de abril. La sentencia de instancia declaró improcedente el despido. Se denuncia en suplicación la vulneración de los arts. 45.b) y 46 del convenio colectivo de empresas comercializadoras de Juegos colectivos de dinero y azar, en relación con el art. 55.4 ET, sin que se den en el supuesto de hecho las notas exigidas por el art. 54.2.f) ET. La sentencia de suplicación desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, al entender que el convenio colectivo, que establecía como falta muy grave, susceptible de despido, la embriaguez, aunque sea ocasional durante el servicio. La Sala considera que el precepto convencional se opone a lo dispuesto en el art. 54.2.f) ET, siendo este un mínimo de Derecho necesario.

A pesar de la aparente proximidad de los supuestos y de las alegaciones efectuadas por la parte recurrente en su escrito de 9 de julio de 2009, ha de apreciarse falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste. En efecto, en el caso analizado por la sentencia recurrida se trataba de un trabajador auxiliar de servicios que conducía bajo los efectos del alcohol, sufriendo accidente de tráfico en estas circunstancias, mientras que en el caso analizado por la sentencia de contraste se trataba de un comercial al que se le imputa el consumo de bebidas alcohólicas durante ciertos días, no procediendo al pago de las mismas en determinadas ocasiones. Además, los convenios colectivos aplicados son distintos y tienen diferentes redacciones. Por último, y lo que es más importante, mientras que en la sentencia recurrida el recurso se fundó en la vulneración del art. 54.2.d) ET -transgresión de la buena fe contractual-, entendiendo la sentencia recurrida que el supuesto regulado convencionalmente era subsumible en dicha norma, en el caso de la sentencia de contraste no se invocó como vulnerado este precepto, sin que se debatiese en ningún momento la adecuación de la norma convencional al art. 54.2.d) ET, sino al art. 54.2.f) ET -relativo a embriaguez habitual-. Esta diferencia de hace aún mucho más evidente si se analiza el Auto de esta Sala de 25 de junio de 1998, por la que se inadmitió el recurso de casación para unificación de doctrina (R. 1145/98) interpuesto contra la sentencia de contraste invocada en el presente procedimiento. En el mismo, precisamente, la parte recurrente invocaba vulneración del art. 54.2.d) ET, y la Sala apreció cuestión nueva, por no haberse planteado en suplicación debate alguno sobre este precepto.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. LA SALA

ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Alfredo Souto García en nombre y representación de DON Imanol contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 11 de junio de 2.008, en el recurso de suplicación número 2580/08, interpuesto por SERVICIOS SECURITAS S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 24 de los de Barcelona de fecha 16 de enero de 2.007, en el procedimiento nº 697/07 seguido a instancia de DON Imanol contra EMPRESA SERVICIOS SECURITAS S.A. y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Conseil d'État
N° 268938
Publié au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Stirn, président
M. Pierre-Antoine Molina, rapporteur
M. Keller, commissaire du gouvernement
HAAS, avocat(s)
lecture du mercredi 17 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc B, demeurant...; M. B demande au Conseil d'Etat:

- 1°/ d'annuler l'arrêt du 11 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2002, tendant à ce que la sanction disciplinaire infligée à M. Michel A par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 5 novembre 1999 soit annulée et à ce qu'une nouvelle procédure disciplinaire soit engagée à l'encontre de l'intéressé;
- 2°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement;

Considérant que M. B a attaqué devant le juge administratif le refus opposé par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à sa demande tendant à l'aggravation de la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pendant 3 mois dont 2 avec sursis infligée à M. A par le ministre; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette sanction se fonde sur le motif tiré de ce que M. A, inspecteur du travail, conduisant en état d'ébriété, a provoqué un accident de la circulation ayant entraîné le décès du père du requérant, avant de se rendre coupable de délit de fuite et de se livrer à de fausses déclarations sur les circonstances entourant cet accident; que, pour rejeter la requête de M. B, les juges du fond ont jugé qu'il ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision;

Considérant que la victime d'un dommage causé par un agent public dans l'exercice de ses fonctions a la possibilité d'engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l'administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la responsabilité de l'agent concerné devant le juge judiciaire; que, dans le cas où une action pénale est intentée à l'encontre de ce dernier, elle peut, en outre, ainsi que M. B l'a fait en l'espèce, se constituer partie civile; qu'en revanche la décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation

vis-à-vis de l'administration; que, dès lors, un tiers est dépourvu d'intérêt à déférer une telle mesure au juge administratif; qu'il en résulte qu'en jugeant que M. B ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la sanction infligée à M. A, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit; qu'en estimant que l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à la requête de M. B ne méconnaissait pas son droit à un recours effectif devant un juge rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas méconnu ces stipulations;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence;

DECIDE:

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Marc B, à M. Michel A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Abstrats: 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. - Intérêt pour agir d'un tiers contre la sanction infligée à un fonctionnaire - Absence - Voies de droit alternatives.

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. - Décision infligeant une sanction à un agent public - Irrecevabilité d'un tiers à agir contre cette décision - Voies de droit alternatives.

Résumé: 36-09-04 La décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration. Un tiers est dès lors dépourvu d'intérêt à déférer une telle mesure au juge administratif. La victime d'un dommage causé par un agent public dans l'exercice de ses fonctions a en revanche la possibilité d'engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l'administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la responsabilité de l'agent concerné devant le juge judiciaire. Dans le cas où une action pénale est intentée à l'encontre de l'agent, elle peut en outre se constituer partie civile.

54-01-04-01 La décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration. Un tiers est dès lors dépourvu d'intérêt à déférer une telle mesure au juge administratif. La victime d'un dommage causé par un agent public dans l'exercice de ses fonctions a en revanche la possibilité d'engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l'administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la responsabilité de l'agent concerné devant le juge judiciaire. Dans le cas où une action pénale est intentée à l'encontre de l'agent, elle peut en outre se constituer partie civile.

PROFESIONALES DE LA CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 30 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-17182
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01558
Non publié au bulletin
Rejet
M. Lacabarats (président), président
SCP Didier et Pinet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 juin 2011), que M. X... a été engagé le 4 janvier 2007 par la société Collinet-Lafollas, en qualité de chauffeur poids lourds; que le 3 mars 2010, alors qu'il conduisait un véhicule de l'entreprise, il a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie positif par les services de gendarmerie, qui a donné lieu à un retrait immédiat de son permis de conduire; qu'après avoir été en arrêt de travail du 4 mars jusqu'au 10 mai 2010, il a été licencié le 19 mai 2010 pour faute grave;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen:

- 1°/ que la lettre de licenciement, qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, fixe les limites du litige; que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 19 mai 2010 au salarié, chauffeur poids lourds, exposait: «le 3 mars à votre arrivée à l'entreprise, et alors que vous deviez intervenir sur différents chantiers, il a été constaté que vous étiez dans un état d'ébriété élevé rendant totalement impossible l'exécution de vos tâches ainsi que la conduite du véhicule; Vous avez été contrôlé par la gendarmerie; un procès-verbal d'infraction vous a été dressé et vous avez fait l'objet d'une rétention immédiate de votre permis de conduire (ç)»; que pour écarter le moyen du salarié soutenant que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur n'aurait pas dû le laisser prendre le volant après avoir constaté son état d'ébriété, la cour d'appel a retenu que cette version des faits était contredite par les éléments versés aux débats par l'employeur; qu'en statuant ainsi quand l'employeur avait lui-même admis, dans la lettre de licenciement, que l'état d'ébriété du salarié avait été constaté avant qu'il prenne le volant, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail;
- 2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit interdire au salarié employé en qualité de chauffeur dont il constate l'état d'ébriété, de prendre le volant; que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le 3 mars 2010 à 9 heures 15, il avait fait l'objet d'un contrôle d'imprégnation éthylique positif pendant son temps de travail et au volant d'un véhicule appartenant à l'employeur; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur qui, aux termes mêmes de la lettre de licenciement, avait constaté l'état d'ébriété du salarié à son arrivée dans l'entreprise, n'avait pas commis une faute exonératoire en s'abstenant de lui interdire de prendre le volant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail;
- 3°/ que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été licencié en raison de son état de santé déficient l'ayant conduit dans la dernière période à effectuer plusieurs séjours en milieu hospitalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail;

Mais attendu que, tant par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la version donnée par le salarié de ses horaires d'arrivée à l'entreprise et de son départ vers le dépôt avec le véhicule de l'entreprise, en ayant vu l'employeur qui l'aurait laissé partir sans rien constater, était contredite par les disques chronotachygraphes et les témoignages de trois salariés, qu'il était informé du risque de licenciement qu'il encourait en cas de conduite en état d'ivresse; qu'ayant retenu que le comportement du salarié constituait une violation manifeste de ses obligations contractuelles, elle a, sans modifier les termes de litige, pu décider, excluant par là-même toute autre cause de licenciement, que ce comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de monsieur Eric X... justifié, et débouté le salarié de toutes ses demandes;

AUX MOTIFS QUE le 3 mars 2010 à 9h15, Eric X... a fait l'objet d'un contrôle d'imprégnation éthylique positif (0,43 et 0,41 mg) pendant son temps de travail et au volant d'un véhicule appartenant à son employeur, la SARL Collinet Lafollas; que monsieur X... affirme que ce matin-là, il est arrivé à l'entreprise à 7 heures, que l'employeur, qui l'a vu vers 7h15, l'a laissé partir sans rien constater, qu'il est allé au dépôt avec un autre salarié pour effectuer le chargement de la marchandise à livrer et a attendu 9h ou 9h10 pour avoir le feu vert de Thibaud de Garnier des Garets, qui le conteste, pour partir faire ses livraisons de tuiles et que quelques minutes plus tard, il a été contrôlé par la gendarmerie, faisant l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire; que cette version des faits est contredite tant par les disques chronotachygraphes, selon lesquels le camion n'a roulé qu'à partir de 8h15, que par les attestations des autres salariés, Frédéric Y..., chargé d'affaires, Francisco Z..., maçon, et Guy A..., contremaître, présents au dépôt le jour des faits de 7h à 7h40 et qui n'ont pas vu monsieur X... dans la société à ce moment-là; qu'il y lieu de rappeler que le contrat de travail de monsieur X... prévoit dans son article VI «véhicule»: «il est convenu que toute faute notamment conduite en état d'ivresse entraînera une procédure disciplinaire suivie ou non d'un licenciement»; que, par ailleurs, une note de service du 18 mai 2009 indique: «Nous vous rappelons qu'il est interdit de pénétrer dans l'entreprise en état d'ivresse, d'y introduire ou d'y consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants»; que, par conséquent, le salarié était parfaitement au courant des risques de licenciement qu'il encourait; qu'il admet à présent que la rupture de son contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse; que, cependant, la cour considère comme l'a fait le conseil que la faute grave est caractérisée en l'espèce, le comportement du salarié constituant une violation manifeste de ses obligations contractuelles entraînant une désorganisation importante de l'entreprise car il était le seul chauffeur à pouvoir approvisionner les chantiers, comportement présentant un état de dangerosité pour lui-même et les tiers et susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'employeur; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déferé, qui a retenu la faute grave et a débouté Eric X... de toutes ses demandes;

1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement, qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, fixe les limites du litige; que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 19 mai 2010 à monsieur X..., chauffeur poids-lourds, exposait: «le 3 mars à votre arrivée à l'entreprise, et alors que vous deviez intervenir sur différents chantiers, il a été constaté que vous étiez dans un état d'ébriété élevé rendant totalement impossible l'exécution de vos tâches ainsi que la conduite du véhicule ¿ Vous avez été contrôlé

par la gendarmerie; un procès-verbal d'infraction vous a été dressé et vous avez fait l'objet d'une rétention immédiate de votre permis de conduire (¿)»; que pour écarter le moyen du salarié soutenant que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur n'aurait pas dû le laisser prendre le volant après avoir constaté son état d'ébriété, la cour d'appel a retenu que cette version des faits était contredite par les éléments versés aux débats par l'employeur; qu'en statuant ainsi quand l'employeur avait lui-même admis, dans la lettre de licenciement, que l'état d'ébriété du salarié avait été constaté avant qu'il prenne le volant, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail;

- 2°/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit interdire au salarié employé en qualité de chauffeur dont il constate l'état d'ébriété, de prendre le volant; que pour dire le licenciement de monsieur X... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le 3 mars 2010 à 9h15, il avait fait l'objet d'un contrôle d'imprégnation éthylique positif pendant son temps de travail et au volant d'un véhicule appartenant à l'employeur; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur qui, aux termes mêmes de la lettre de licenciement avait constaté l'état d'ébriété du salarié à son arrivée dans l'entreprise, n'avait pas commis une faute exonératoire en s'abstenant de lui interdire de prendre le volant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail;
- 3°/ ALORS QUE le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions p.8 dernier §) si monsieur X... n'avait pas été licencié en raison de son état de santé déficient l'ayant conduit dans la dernière période à effectuer plusieurs séjours en milieu hospitalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Limoges, du 20 juin 2011.

Roj: ATS 10998/2012
Id Cendoj: 28079140012012202403
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 648/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Fernando Salinas Molina
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a once de Octubre de dos mil doce.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO SALINAS MOLINA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 7 de los de Murcia se dictó sentencia en fecha 17 de febrero de 2011, en el procedimiento nº 1301/10 seguido a instancia de DOÑA Otilia contra NUEVA COCINA MEDITERRANEA, S.L., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por Otilia, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en fecha 24 de noviembre de 2011, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 23 de marzo de 2012 se formalizó por el Letrado Don Juan Soro Mateo, en nombre y representación de DOÑA Otilia, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 19 de julio de 2012 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción, falta de cita y fundamentación de la infracción legal. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

La sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 24 de noviembre de 2011 (Rec. 416/2011), confirma la de instancia por la que se declaró la procedencia del despido del trabajador, que ostentando la categoría de conductor fue sancionado por la Guardia Civil de Tráfico con multa de 500 euros y

detracción de 6 puntos el carnet de conducir, por circular con una furgoneta de la empresa con una tasa de alcohol en aire expirado superior a los 0,25 mg/l reglamentariamente establecidos, ya que en la primera prueba dio 0,66 mg/l y en la segunda prueba 0,63 mg/l, firmando documento de saldo y finiquito en el que se hacía constar que no tenía más que pedir ni reclamar por concepto alguno. Entiende la Sala que independientemente de que la conducta de embriaguez no sea habitual, se han vulnerado las normas de seguridad y salud en el trabajo y las normas de circulación de vehículos de motor durante la prestación de servicios, suponiendo un riesgo para terceros y pudiendo provocar una grave responsabilidad para la empresa, lo que implica una transgresión de la buena contractual y diligencia exigible en las tareas laborales correspondientes al puesto de trabajo desempeñado. Añade la Sala que debe otorgarse valor liberatorio al finiquito firmado por cuanto no puede apreciarse ningún vicio del consentimiento.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la actora, por considerar que el despido debe ser declarado improcedente, para lo que cita tres sentencias de contraste: 1) sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 26 de octubre de 2010 (Rec. 2057/2010); 2) sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 28 de enero de 2010 (Rec. 807/2009); y 3) sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 16 de abril de 2002 (Rec. 8470/2001). Por diligencia de ordenación de 30 de marzo de 2012, se le otorga a la parte recurrente plazo de 10 días para que seleccione de entre las sentencias que cita la que más convenga a su propósito de acreditar la contradicción, al ser suficiente para viabilizar el recurso una sentencia firme por cada materia de contradicción. Por diligencia de ordenación de 25 de abril de 2012, se comunica a la parte recurrente que en atención a los escritos remitidos vía fax, se entiende por seleccionada como sentencia contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 26 de octubre de 2010 (Rec. 2057/2010), otorgando a la parte recurrente plazo de 10 días para que aporte certificación original de la resolución, al no ser válida la certificación remitida vía fax, lo que hizo la parte el 14-05-2012.

Pues bien, en relación con dicha sentencia aportada de contraste, debe señalarse que no cabe apreciar la existencia de contradicción con la sentencia recurrida, pues en la misma lo que consta es que el actor conducía el vehículo de trabajo habiendo previamente ingerido alcohol, por lo que el responsable de control de la empresa, al comprobar que el trabajador estaba agitado y gesticulaba mucho conduciendo en zonas no asignadas y de forma extraña, llamó a la policía que realizó control de alcoholemia arrojando resultado de 0,42 mgs/l de alcohol en aire a las 13.15 horas, y 0,45 mg/l a las 13:31 horas, siendo trasladado el actor al servicio de urgencias en donde no se advirtieron síntomas de embriaguez, y siendo absuelto el actor del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas por sentencia del Juzgado de lo Penal. En suplicación se confirma la sentencia de instancia en la que se declara la improcedencia del despido, por entender la Sala que no se ha acreditado la influencia del alcohol en la conducción ni que existiera riesgo grave de accidente laboral, ya que es el responsable de control de la empresa el que avisó a la policía, siendo trasladado el actor al servicio de urgencias que no advirtió síntomas de embriaguez en el trabajador, dictándose sentencia una vez seguidas diligencias penales que absolvió al trabajador, por lo que no se ha producido una quiebra de la buena fe contractual en grado suficiente como para merecer la sanción máxima de despido.

De lo relacionado se desprende que no puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, por cuanto no es idéntica la situación de quien si bien en la prueba de alcoholemia realizada por la Policía al llamar el responsable de control de la empresa dio 0,42 mg/l y 0,45 mg/l, si bien al acudir al servicio de urgencias no se apreciaron síntomas de embriaguez, y además fue absuelto del delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas -que es lo que consta en la sentencia de contrastede quien sobrepasa más del doble de lo permitido -0,66 mg/l y en la segunda prueba 0,63 mg/l- en la prueba de alcoholemia realizada por la Guardia Civil, firmando además un recibo de saldo y finiquito -que es lo que consta en la sentencia recurrida-.

SEGUNDO.- Por otra parte, la Sala ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995, 6 de Julio de 2004, R. 5346/2003, 24 de mayo de 2005, R. 1728/04, 8 de junio de 2006, R. 5165/2004 y 18 de diciembre de 2007, R. 4301/2006, 15 de enero de 2009,

R. 2302/2007, 15 de febrero de 2010, R. 2278/2009, 19 de julio de 2010, R. 2643/2009, 19 de enero de 2011, R. 1207/2010, 24 de enero de 2011, R. 2018/2010 y 24 de mayo de 2011, R. 1978/2010.

TERCERO.- Además, debe tenerse en cuenta que la parte recurrente cita en cuanto que infringido el art. 54.2 d) ET, si bien no fundamenta, más allá de la comparación entre la sentencia recurrida y las tres que cita de contraste que realiza, las razones por las que entiende que existe infracción legal, y el recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley, de acuerdo con el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal. La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» (sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 2008, R. 2206/2006 y 5 de marzo de 2008, R. 1256/2007 y 4298/2006, 14 de mayo de 2008, R. 734/2007 y 1671/2007; 17 de junio de 2008, R. 67/2007; 25 de septiembre de 2008, R. 1790/2007; 2 y 7 de octubre de 2008, R. 1964/2007 y 538/2007; y 3 de noviembre de 2008, R. 2791/2007). Así se deduce, no sólo del citado art. 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación supletoria en ese orden social, cuyo artículo 477.1 prescribe que «el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso», mientras que el artículo 481.1 LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.º LEC (entre otras, sentencias de 8 de marzo de 2005, R. 606/2004; 28 de junio de 2005, R. 3116/2004; 16 de enero de 2006, R. 670/2005 y 8 de junio de 2006, R. 5287/2004; 7 de junio de 2007, R. 767/2006; 21 de diciembre de 2007, R. 4193/2006; 16 y 18 de julio de 2008, R. 2202/2007 y 1192/2007; 19 y 25 de septiembre de 2008, R. 384/2007 y 1790/2007; 22 de octubre de 2008, R. 4312/2006; 16 de enero de 2009, R. 88/2008; y 17 de febrero de 2009, R. 2401/2007).

CUARTO.- En relación con las alegaciones realizadas por la parte por escrito de 13 de septiembre de 2012, deben admitirse las relativas a que debe ser de aplicación la Ley de Procedimiento Laboral (RDLegislativo 2/1995, de 7 de abril), y no la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011, de 10 de octubre), si bien ello no obsta a la inadmisión del recurso en los términos expresados en la providencia de 19 de julio de 2012, por cuanto no puede apreciarse la existencia de contradicción por las razones anteriormente expuestas, sin que las alegaciones que realiza la parte al respecto desvirtúen lo establecido en la providencia anteriormente mencionada, y sin que pueda admitirse tampoco la alegación en relación con el cumplimiento de la fundamentación de la infracción legal, por cuanto como se ha expuesto sólo compara la sentencia recurrida con la de contraste.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Juan Soro Mateo en nombre y representación de DOÑA Otilia contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 24 de noviembre de 2011, en el recurso de suplicación número 416/11, interpuesto por DOÑA Otilia, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Murcia de fecha 17 de febrero de 2011, en el procedimiento nº 1301/10 seguido a instancia de DOÑA Otilia contra NUEVA COCINA MEDITERRANEA, S.L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 4659/2012
Id Cendoj: 28079140012012200952
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2961/2011
Procedimiento: Social
Ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a siete de Marzo de dos mil doce.

Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. MARÍA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social N^o 4 de los de Oviedo se dictó sentencia en fecha 23 de marzo de 2011, en el procedimiento n^o 614/10 seguido a instancia de D. Miguel Ángel contra TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS SL (T.U.A.), sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias, en fecha 8 de julio de 2011, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 30 de septiembre de 2011 se formalizó por la Letrada D^a María Montoto García en nombre y representación de D. Miguel Ángel, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 16 de enero de 2012, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

Esta exigencia no se cumple en el presente recurso. En efecto, es objeto del actual recurso de casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 8 de julio de 2011, en la que se confirma el fallo combatido adverso a la pretensión por despido rectora de autos. El actor que viene prestando servicios para la demandada — TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS, S.L. (TUA), desde el 9 de enero de 1988 con la categoría de conductor, es despedido, tras la tramitación del pertinente expediente

disciplinario, en virtud de carta de 1 de junio de 2010 que reproduce íntegramente la narración histórica y en la que se le imputa la comisión de una falta laboral de carácter muy grave de conformidad con el Laudo Arbitral de 24 de noviembre de 2000 y art. 54.2.d) del ET. La Sala en sintonía con la decisión judicial de instancia concluye que el incumplimiento laboral imputado al trabajador reviste la suficiente gravedad para ser merecedor de la sanción por despido, por cuanto que el actor conducía un autobús de viajeros, si no con síntomas de embriaguez sí con una tasa de alcoholemia que superaba el mínimo legalmente permitido, lo que entraña un perjuicio para la empresa y un malestar evidente entre los usuarios del servicio quienes ante la actuación anómala del conductor dieron parte de la misma a la Policía local y a la empresa.

Disconforme la parte actora con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina denunciando la infracción del art. 54.2.d) ET, insistiendo en que su conducta no puso en peligro la circulación, ya que sólo fue sancionado en vía administrativa, sin que conste ni propuesta de retirada temporal de su permiso de conducción, proponiendo como sentencia de contraste a los efectos de verificar el juicio positivo de contradicción, la dictada por la Sala homónima de Cataluña de 16 de abril de 2002 (rec. 8470/01). En la misma se contempla también el despido disciplinario de un trabajador que dio positivo en un control de alcoholemia, estando inmovilizado en un control establecido por los Mossos d'Esquadra, teniendo conocimiento enseguida la empresa de lo acontecido y todo ello cuando él mismo prestaba servicios en la empresa. El despido no había dado positivo con anterioridad en ningún control ni había sido objeto de sanción en su dilatada vida profesional. La prueba practicada fue la de aire espirado, dando 0,31 y 0,32 a los 15,32 y 15,38 del día 25 de enero de 2001. En este caso y a la vista de las circunstancias concurrentes, la sentencia concluye que no se da el tipo legal para sancionar la conducta del trabajador como falta muy grave que justificaría su despido como procedente.

No es posible, a la vista de lo anterior, considerar que concurre la identidad necesaria para la viabilidad de este recurso. Y ello porque aunque las conductas en ambos casos consisten en el estado de embriaguez del trabajador que da lugar a una serie de incidencias en la prestación del servicio, ni se trata del mismo ámbito de actividad ni el trabajo realizado por uno y otro es el mismo. Y esos datos tienen una evidente repercusión en la valoración de las respectivas conductas a efectos de un despido disciplinario. No son los mismos efectos los que efectivamente ha provocado la embriaguez del hoy recurrente al prestar sus servicios en un vehículo destinado al servicio público, habiendo provocado un malestar entre los usuarios del servicio quienes ante su anómala actuación dieron parte de la misma a la Policía Local y a la empresa, que los ocasionados en el caso de la sentencia de contraste en la que lo único acreditado fue el resultado positivo del test de alcoholemia lo que provocó la inmovilización del vehículo por orden policial, sin que conste que la conducta supusiera un peligro para la circulación. Además, la normativa convencional aplicable en cada caso es distinta.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Sala ha señalado con reiteración que la calificación de las conductas a efectos de despido disciplinario, al depender de una valoración casuística de las circunstancias individualizadas concurrentes en cada caso, difícilmente puede dar lugar a un supuesto incluido en el ámbito de la unificación de doctrina.

SEGUNDO.- Por cuanto se deja razonado que para nada aparece desvirtuado por las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia que le fue concedido en esta fase de inadmisión del recurso y de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal procede inadmitir a trámite el presente recurso de acuerdo con el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin que proceda la imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a María Montoto García, en nombre y representación de D. Miguel Ángel contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias de fecha 8 de julio de 2011, en el recurso de suplicación número 1375/11, interpuesto por D. Miguel Ángel, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Oviedo de fecha 23 de marzo de 2011, en el procedimiento nº 614/10 seguido a instancia de D. Miguel Ángel contra TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS SL (T.U.A.), sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 1400/2012
Id Cendoj: 28079140012012200191
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 977/2011
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Fernando de Castro Fernández
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Enero de dos mil doce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNÁNDEZ.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Lleida se dictó sentencia en fecha 25 de mayo de 2010, en el procedimiento nº 862/2009 seguido a instancia de D. Domingo contra ALSINA GRAELLS DE AUTOTRANSPORTE, sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 27 de enero de 2010, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 4 de abril de 2011, se formalizó por el Letrado D. Josep Antoni Simo I Castillo en nombre y representación de D. Domingo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 3 de noviembre de 2011, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de enero de 2011 (R. 5876/2010) confirma la de instancia que había declarado procedente el despido disciplinario del trabajador demandante.

Recorre dicha parte en casación para la unificación de doctrina, proponiendo como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de abril de 2002 (R. 8470/2001) que confirma la improcedencia del despido del actor.

La contradicción es inexistente al ser distintos los supuestos de hecho enjuiciados.

En el caso que la sentencia recurrida consta que el actor el 27 de agosto de 2009 cuando conducía un autobús de la empresa, para la que prestaba servicios como conductor, fue parado por los *mossos d'esquadra* y sometido a un control de alcoholemia, dando en un primer momento 0,34 MG/L y en una segunda prueba 0,32 MG/L. Dado que no se le permitió seguir conduciendo, los pasajeros del autobús tuvieron que continuar el viaje por sus propios medios, y el vehículo trasladado al garaje de la empresa por un compañero del actor. Como consecuencia de lo anterior el actor fue sancionado con una multa de 600 euros y retirada de 6 puntos del permiso de conducción.

En la sentencia de contraste se imputó al trabajador en la carta de despido embriaguez habitual que repercutía negativamente en el trabajo. Los hechos imputados consistieron en que estando el trabajador en ruta como conductor de un camión de transporte, permaneció inmovilizado durante varias horas por orden de la patrulla de *mossos d'esquadra* tras dar resultado positivo en un control de alcoholemia -0,31 MG/L-. La sentencia no considera la existencia de una falta muy grave que justificaría la máxima sanción laboral porque ante la ausencia de otros datos no puede concluirse que el demandante por el hecho de dar positivo en el control de alcoholemia estuviera embriagado.

No existe contradicción porque en el caso de contraste lo único que se acreditó fue el resultado positivo en test de alcoholemia lo que provocó la inmovilización del vehículo por orden policial, sin que conste que la conducta supusiera un peligro para la circulación. Sin embargo, en el caso de autos se valora que la conducta del actor puso en peligro la integridad de los pasajeros que iban en el autobús, quienes además tuvieron que continuar el viaje por sus propios medios. Además, la normativa convencional aplicable en cada caso es distinta así como la actividad de las empresas.

En el escrito de alegaciones la recurrente insiste en la admisión del recurso pero las diferencias apuntadas son claras e impiden apreciar la identidad necesaria conforme a lo expuesto en esta resolución.

Por otra parte, en relación con los despidos disciplinarios, la Sala ha declarado de forma reiterada - sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (RCUD nº 1232/90 y 2271/91), 15 y 29 de enero de 1997 (RCUD nº 952/96 y 3461/95) y 13 de noviembre de 2000 (RCUD nº 4391/99)-, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en estos casos la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico. En relación con esta cuestión debe citarse la sentencia de 24 de mayo de 2005 (RCUD nº 1728/04) conforme a la cual, «puede afirmarse que este tipo de litigios carece de interés casacional, pues su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora, sino que comprometería gravemente el funcionamiento del recurso con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social».

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener el recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Josep Antoni Simo I Castillo, en nombre y representación de D. Domingo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 27 de enero de 2011, en el recurso de suplicación número 5876/2010, interpuesto por D. Domingo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Lleida de fecha 25 de mayo de 2010, en el procedimiento nº 862/2009 seguido a instancia de D. Domingo contra ALSINA GRAELLS DE AUTOTRANSPORTE, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 15399/2010
Id Cendoj: 28079140012010203006
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1376/2010
Procedimiento: Social
Ponente: José Manuel López García de la Serrana
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Noviembre de dos mil diez.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Burgos se dictó sentencia en fecha 27 de octubre de 2009, en el procedimiento nº 766/09 seguido a instancia de DON Augusto contra TRANSPORTES BOYACA S.L., sobre despido, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por TRANSPORTES BOYACA S.L., siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en fecha 28 de enero de 2010, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 15 de abril de 2.010 se formalizó por el Letrado Don Juan Carlos Martín Rodríguez, en nombre y representación de EMPRESA TRANSPORTES BOYACA, S.L., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 20 de julio de 2010 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008). Contradicción que no puede apreciarse en el presente supuesto.

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 28 de enero de 2010 (Rec. 807/2009), confirma la sentencia de instancia por la que se declara el despido improcedente. Consta en

la sentencia recurrida que el trabajador, con categoría profesional conductor de camión, mientras conducía un camión desde Burgos hasta Bilbao, a las 4.15 horas, fue detenido por agentes de la autoridad que le practicaron pruebas de alcoholemia con resultado de una concentración de 0,35 mg/l -en la primera prueba- y 0,30 mg/l -en la segunda prueba-, siendo el valor máximo autorizado para los conductores de camión o autobús de 0,15 mg/l y para conductores de coches 0,25 mg/l. Los agentes de la autoridad inmovilizaron el camión, debiendo enviar la empresa un conductor distinto para llevar la mercancía que debía estar en Bilbao a las 7 horas. En instancia se declara la improcedencia del despido por entender que no se ha generado un riesgo, ni se constató por los agentes de la autoridad una conducción anárquica, ni comprobaron síntomas de intoxicación etílica pese a ser portador de un índice superior al permitido en vía administrativa. Confirma la Sala de suplicación dicha sentencia, analizando el art. 43 del Convenio colectivo para la actividad de transportes por carretera, garajes y aparcamientos de Burgos, que determina que cuando se produzca la retirada del carné la empresa deberá «acoplar al trabajador a un puesto de trabajo de inferior o igual categoría mientras dure la retirada de carné», además de que en el mismo no se contempla como falta tipificada otra diferente al estado de embriaguez habitual, y a mayor abundamiento, que no toda infracción de la normativa administrativa de tráfico y seguridad vial supone una transgresión de la buena fe contractual, por lo que al no haberse constatado una conducción temeraria que hubiera supuesto un posible riesgo, el despido debe ser considerado improcedente.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la empresa, seleccionando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 23 de enero de 2007 (Rec. 3941/2006), respecto de la que no es posible apreciar contradicción por cuanto no son comparables los hechos que constan probados en ambas. Consta en el relato fáctico de la sentencia de contraste que el trabajador, con categoría de conductor mecánico, conducía un camión realizando habitualmente dos viajes con carga de Enguera a Chiva, cuando, por no llevar las placas de matrícula perfectamente visibles, fue parado por la Guardia Civil de Tráfico sometiéndole a una prueba de alcoholemia, de la que dio como resultado de la primera prueba 0,43 mg/l y de la segunda 0,42 mg/l. Como el vehículo fue inmovilizado, tuvo que acudir el representante de la empresa a recoger al actor, llevándolo a su casa mientras otro empleado recogió un camión, constandingueja del cliente ante el retraso de la carga que no fue entregada hasta por la tarde. En suplicación se confirma la sentencia de instancia por la que se declara la procedencia del despido, por entender la Sala que a pesar de que el trabajador no presentaba síntomas de embriaguez, llevaba un camión de gran tonelaje cargado, poniéndose a sabiendas en una situación que reduce los reflejos de la conducción, y que además se ocasionó perjuicio a la empresa ya que tuvo que desplazarse el representante de la misma a recoger al actor para llevarlo a casa, y otro empleado tuvo que recoger el camión para entregar la carga, además de que se propuso sanción de suspensión del carné de conducir por un mes, reconociendo la Sala que si bien la conducta no se sanciona con el despido en el art. 66.9 del Convenio Colectivo de Transporte aplicable a la empresa -que sanciona con el despido «la imprudencia o negligencia en acto de servicio si implicase riesgo de accidente o peligro de avería en la máquina, vehículo o instalaciones»- sí que es transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.

No puede apreciarse la existencia de contradicción pues no existe identidad ni en los convenios colectivos que son de aplicación en ambos supuestos, ni en los hechos que constan probados en ambas sentencias. Así, mientras que en la sentencia de contraste consta que el trabajador conducía un camión de gran tonelaje, dicho hecho no consta en la sentencia recurrida. En la sentencia de contraste consta que se produjeron quejas de los clientes ante el retraso en la carga, además de un perjuicio, ya que el representante de la empresa y un trabajador tuvieron que desplazarse, el primero para llevar al actor a casa, y el segundo para trasladar la mercancía. Además, tampoco son idénticos los niveles de alcoholemia detectados en los trabajadores de ambas sentencias, 0,43 mg/l -en primera prueba- y 0,42 mg/l -en la segunda prueba- en la sentencia de contraste, y 0,35 mg/l -en la primera prueba- y 0,30 mg/l -en la segunda prueba- en la recurrida, ni en la sentencia recurrida consta que al trabajador se le propusiera un mes de retirada del carné de conducir. Además, la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida se basa en el convenio colectivo para la actividad de transportes por carretera garajes y aparcamientos de Burgos, que determina que cuando se produzca la retirada del carné la empresa deberá «acoplar al trabajadores a un puesto de trabajo de inferior o igual categoría mientras dure la retirada de carné», mientras que en la sentencia de contraste la Sala refiere al Convenio Colectivo de Transporte aplicable a la empresa -que sanciona con el despido «la imprudencia o negligencia en acto de servicio si implicase riesgo de accidente o peligro de avería en la máquina, vehículo o instalaciones»-, sin que el texto de ambos convenios sean los mismos, ni equiparables.

SEGUNDO.- Por otra parte, la Sala ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del ET no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995, 6 de Julio de 2004, R. 5346/2003, 24 de mayo de 2005, R. 1728/04, 8 de junio de 2006, R. 5165/2004 y 18 de diciembre de 2007, R. 4301/2006).

TERCERO.- No habiendo presentado el recurrente alegaciones en el plazo establecido para ello, procede declarar la inadmisión del recurso, de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral, y con lo informado por el Ministerio Fiscal, con imposición de costas, pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose en su caso a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Juan Carlos Martín Rodríguez en nombre y representación de EMPRESA TRANSPORTES BOYACA, S.L. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 28 de enero de 2010, en el recurso de suplicación número 807/09, interpuesto por EMPRESA TRANSPORTES BOYACA, S.L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Burgos de fecha 27 de octubre de 2009, en el procedimiento nº 766/09 seguido a instancia de DON Augusto contra TRANSPORTES BOYACA S.L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente, pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose en su caso a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 9801/2010
Id Cendoj: 28079140012010201771
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 4251/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Ramón Martínez Garrido
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a ocho de Junio de dos mil diez.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS RAMÓN MARTÍNEZ GARRIDO.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Burgos se dictó sentencia en fecha 25 de junio de 2009, en el procedimiento nº 521/09 seguido a instancia de D. Daniel contra AUTOMOBIA, S.A., con intervención del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en fecha 15 de octubre de 2009, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 29 de diciembre de 2009 se formalizó por el Procurador D. Fernando Gala Escribano en nombre y representación de D. Daniel, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 25 de marzo de 2010, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y falta de contenido casacional por pretender modificar los hechos considerados probados. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

Del examen de las sentencias comparadas se deduce que esta exigencia no se cumple en el presente recurso. Así, en el caso de la sentencia recurrida el trabajador demandante prestaba servicios para la demandada desde el 2/5/2005, con al categoría profesional de viajante, hasta que fue despedido el 22/4/2009, porque el día 27/2/2009, a eso de las 20:40 horas y conduciendo el vehículo propiedad de la empresa que ésta le había proporcionado para la realización de su trabajo y que también podía utilizar para fines particulares, sufrió un accidente al colisionar con otro vehículo aparcado en doble fila con buena visibilidad y señalización, siendo el importe de la reparación del vehículo de la empresa de 3.955,22 € y los del vehículo impactado de 6.694,79€. Y debido al mal estado en que se encontraba el actor, la autoridad pública le hizo la prueba de alcoholemia, dando positivo tanto en la primera (1,77 mg/l) como en la segunda (1,84 mg/l), lo que además dio lugar a la tramitación de las oportunas diligencias por delito contra la seguridad en el tráfico. La sentencia de suplicación ahora impugnada confirma la dictada en la instancia que declaró la procedencia del despido, porque el actor no sólo no ha utilizado el vehículo con la diligencia debida, al ser propiedad de la empresa y además un instrumento de trabajo, sino que ha provocado en estado de embriaguez, muy por encima de los límites permitidos, un accidente de tráfico con resultados dañosos muy importantes causando el consiguiente perjuicio para la empleadora.

En el caso de la sentencia de contraste también se examina el despido de un trabajador que había sufrido un accidente de tráfico con un vehículo de la empresa para la que prestaba servicios. En ese caso el citado vehículo colisionó contra un árbol, en la localidad de Wons, en Holanda, donde el demandante estaba trabajando para la demandada, sufriendo lesiones de gravedad uno de los dos acompañantes con que viajaba, y causando al vehículo daños de consideración. Consta que el accidente se produjo sobre las 3 de la madrugada, cuando se dirigían al lugar de residencia después de cenar, y que estaba nevando mucho y la carretera estaba cubierta de nieve, que el actor perdió el control y se chocaron contra un árbol. Igualmente consta que al actor se le efectuó la prueba de alcoholemia dando como resultado 190 ug/l. La sentencia de contraste confirma la improcedencia del despido declarada en la instancia porque de los hechos probados no se deduce que el actor condujera bajo la influencia de bebidas alcohólicas, sino sólo que eran las 3 de la madrugada, que estaba nevando mucho y que el actor perdió el control y chocó contra un árbol.

De lo expuesto se deduce que la contradicción no puede ser apreciada pues la sentencia recurrida considera probado que el estado de embriaguez del demandante influyó en el accidente sufrido con el vehículo de la empresa, mientras que en la de contraste dicha circunstancia no se considera acreditada.

SEGUNDO.- La Sala ha señalado con reiteración que la finalidad institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que no sea posible en este excepcional recurso revisar los hechos probados de la sentencia recurrida ni abordar cuestiones relativas a la valoración de la prueba (sentencias de 14 de marzo de 2001 (R. 2623/2000), 7 de mayo de 2001 (R. 3962/1999), 29 de junio de 2001 (R. 1886/2000), 2 de octubre de 2001 (R. 2592/2000), 6 de marzo de 2002 (R. 2940/2001), 17 de abril de 2002 (R. 2890/2001), 30 de septiembre de 2002 (R. 3828/2001), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006), y 29 de mayo de 2007 (R. 429/2006), pues «es claro que el error de hecho no puede fundar un recurso de casación para la unificación de doctrina, como se desprende de los artículos 217 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, y ello tanto si la revisión se intenta por la vía directa de la denuncia de un error de hecho como si de forma indirecta (sentencia de 9 de febrero de 1.993 (R. 1496/1992), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006), 29 de mayo de 2007 (R. 429/2006), 2 de julio de 2007 (R. 1251/2006), 25 de septiembre de 2007 (R. 1909/2006), 25 de septiembre de 2007 (R. 3137/2006), 5 de diciembre de 2007 (R. 3071/2006), 5-12-2007 (R. 1928/2004), 17 de junio de 2008 (R. 67/2007), 30 de junio de 2008 (R. 1385/2007), 30 de junio de 2008 (R. 2639/2007), 17 de julio de 2008 (R. 2929/2007), 15 de diciembre de 2008 (R. 178/2008), 29 de enero de 2009 (R. 476/2008), y 23 de febrero de 2009 (R. 3017/2007).

El presente recurso, en la medida en que pretende la revisión de los hechos probados incurre en causa de inadmisión por falta de contenido casacional.

TERCERO.- No contradicen lo anteriormente expuesto las alegaciones presentadas por la parte recurrente en el trámite de inadmisión, que se limitan a insistir en su pretensión y a reiterar los argumentos precisados en su escrito de formalización, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador D. Fernando Gala Escribano, en nombre y representación de D. Daniel contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 15 de octubre de 2009, en el recurso de suplicación número 545/09, interpuesto por D. Daniel, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Burgos de fecha 25 de junio de 2009, en el procedimiento nº 521/09 seguido a instancia de D. Daniel contra AUTOMOBA, S.A., con intervención del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 21 avril 2010

N° de pourvoi: 08-70411

Non publié au bulletin

Rejet

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Spinosi, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2007), qu'engagé comme chauffeur-livreur manutentionnaire le 16 octobre 2002, par la société Badouix frères, Salem X... a été licencié pour faute grave le 25 avril 2005, au motif que, le 2 avril 2005, il aurait effectué une livraison sous l'emprise de l'alcool; que, contestant la réalité des faits fautifs, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen:

- 1°/ que, selon l'article L. 1232-6 du code du travail, l'absence d'énonciation par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement du ou des motifs du licenciement a pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre adressée au salarié par l'employeur le 4 avril 2005 que ce dernier avait pris la décision de procéder au licenciement dès cette date, antérieurement à l'entretien préalable, de sorte qu'il s'en déduisait que le licenciement était intervenu le 4 avril 2005; que la cour d'appel ne pouvait toutefois apprécier l'existence d'une faute grave au regard du grief énoncé postérieurement dans la lettre du 25 avril 2005 sans violer le texte susvisé;
- 2°/ que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure; qu'en constatant l'irrégularité de la procédure tout en décidant que le salarié n'avait formulé aucune réclamation de ce chef, quand il avait formulé une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1235-2 du code du travail;
- 3°/ qu'en état de cause, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs énoncés dont il appartient au juge de rechercher s'ils revêtent le caractère de faute grave; qu'à considérer que la lettre du 25 avril 2005 constituait la lettre de licenciement, celle-ci faisait grief au salarié d'avoir «livré samedi 2 avril 2005 avec un véhicule de l'entreprise sous l'emprise de l'alcool»; que la cour d'appel, pour décider que le licenciement repose sur une faute grave, s'est contentée de relever que les attestations produites par l'employeur, auquel il incombait de démontrer que les faits énoncés avaient le caractère de faute grave, établissent que le salarié n'était pas «dans un état normal» le 2 avril 2005, élément pourtant insuffisant pour caractériser le manquement énoncé dans la lettre de licenciement, et a, partant, violé les articles L. 232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail;

Mais attendu d'abord qu'ayant relevé qu'en dépit de la formulation de la lettre de convocation à l'entretien préalable, rien n'établissait que l'intéressé avait reçu notification verbale de son licenciement, la cour d'appel a pu considérer que la rupture résultait de la notification de la lettre de licenciement du 25 avril 2005;

Attendu ensuite que le salarié ne s'était pas prévalu d'une irrégularité de procédure;

Attendu enfin que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait assuré ses fonctions le 2 avril 2005 dans un état d'ébriété, ce qui était de nature à compromettre la qualité de son travail, à mettre en péril sa sécurité comme celle d'autrui et à engager la responsabilité de l'employeur, a pu décider que ce fait rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes;

Aux motifs que «La lettre adressée par l'employeur à Monsieur X... le 4 avril 2005 confirme à l'intéressé son «renvoi immédiat» et le convoque à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave.

La formulation de cette lettre laisse supposer que l'employeur avait décidé de licencier son salarié avant l'entretien préalable et donc sans respecter la procédure mais n'établit que l'intéressé avait reçu notification, verbalement, de son licenciement.

Cette irrégularité affecte la procédure et non le licenciement.

Monsieur X... ne formule aucune réclamation du chef de l'irrégularité de la procédure.

Ce dernier s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail du 27 février au 8 mars 2005: il n'y a pas eu de visite médicale de reprise.

Le contrat de travail était donc suspendu au moment du licenciement et seule une faute grave pouvait justifier la rupture.

L'employeur produit, pour démontrer les faits reprochés au salarié, les deux attestations suivantes:

- Madame Z..., responsable rayon marée, qui indique qu'elle a remarqué à plusieurs reprises que le livreur sentait l'alcool et que le 2 avril il sentait plus qu'habituellement.
- Monsieur A... qui certifie avoir vu le chauffeur en état d'ébriété avancée et indique qu'il s'est trompé de magasin pour la livraison du samedi 2 avril.

La société BADOUIX FRERES produit également un courrier du responsable de la société E-LECLERC en date du 2 avril 2005 qui l'informe que lors de la livraison du 2 avril 2005 le chauffeur s'est trompé de marchandise et se trouvait dans un état étrange «peut-être avait il bu ou était il drogué».

Le certificat médical attestant que Monsieur X... ne présente pas de signe d'intoxication chronique n'est pas de nature à infirmer les attestations concordantes selon lesquelles Monsieur X... n'était pas dans un état normal le 2 avril 2005.

Ce fait, outre qu'il compromet la qualité du travail du salarié, est de nature à mettre en péril la sécurité de l'intéressé et celle d'autrui et à engager la responsabilité de l'employeur; il constitue une faute d'une gravité telle que le maintien de Monsieur X... au sein de l'entreprise était impossible, même durant le temps limité du préavis.

Le licenciement de Monsieur X... est donc justifié et l'intéressé sera débouté de ses demandes»;

- 1º/ ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article L.1232-6 du code du travail, l'absence d'énonciation par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement du ou des motifs du licenciement a pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre adressée au salarié par l'employeur le 4 avril 2005 que ce dernier avait pris la décision de procéder au licenciement dès cette date, antérieurement à l'entretien préalable, de sorte qu'il s'en déduisait que le licenciement était intervenu le 4 avril 2005; que la cour d'appel ne pouvait toutefois apprécier l'existence d'une faute grave au regard du grief énoncé postérieurement dans la lettre du 25 avril 2005 sans violer le texte susvisé;
- 2º/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure; qu'en constatant l'irrégularité de la procédure tout en décidant que le salarié n'avait formulé aucune réclamation de ce chef, quand il avait formulé une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.1235-2 du code du travail;
- 3º/ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs énoncés dont il appartient au juge de rechercher s'ils revêtent le caractère de faute grave; qu'à considérer que la lettre du 25 avril 2005 constituait la lettre de licenciement, celle-ci faisait grief au salarié d'avoir «livré samedi 2 avril 2005 avec un véhicule de l'entreprise sous l'emprise de l'alcool»; que la cour d'appel, pour décider que le licenciement repose sur une faute grave, s'est contentée de relever que les attestations produites par l'employeur, auquel il incombait de démontrer que les faits énoncés avaient le caractère de faute grave, établissent que le salarié n'était pas «dans un état normal» le 2 avril 2005, élément pourtant insuffisant pour caractériser le manquement énoncé dans la lettre de licenciement, et a, partant, violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 20 décembre 2007

Textes appliqués:

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, 06/10472.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 12 juin 2008

N° de pourvoi: 07-40426

Non publié au bulletin

Rejet

M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Odent, Me Rouvière, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2006) que M. X..., conducteur de bus à la RATP, a été révoqué le 29 décembre 2003 après avis du conseil de discipline, à la suite d'un contrôle d'alcoolémie positif dans l'exercice de ses fonctions;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen:

- 1°/ que la faute grave du salarié privative d'indemnité est celle qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'il en résulte que l'employeur ne peut invoquer la faute grave, pour rompre le contrat de travail, lorsque après avoir pris connaissance des manquements du salarié il lui a néanmoins proposé de reprendre son activité; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... ne pouvait être prononcé pour faute grave dès lors qu'à la suite d'une prétendue conduite en état d'ébriété survenue le 25 septembre 2003, la RATP n'a pas estimé devoir le suspendre de son poste de conducteur de bus et lui a au contraire, imposé de reprendre son poste de conduite y compris un transport d'enfant, ce qui était de nature à exclure tout caractère de gravité aux faits reprochés au salarié; qu'ainsi, l'arrêt qui considère que la RATP était fondée en sa décision de révocation du salarié sans pour autant constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a violé les articles L. 122-32-31, L. 122-32-2, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail;
- 2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du salarié faisant expressément valoir qu'à la suite de la conduite en état d'ébriété qui lui était reprochée, il avait été maintenu dans ses fonctions de chauffeur de bus, aucune mise à pied n'ayant été prise à son encontre; que de même le 29 septembre 2003 la RATP avait continué à lui confier la conduite d'un bus y compris un transport d'enfants, ce qui démontrait, outre l'absence de faute grave de sa part, qu'en réalité sa révocation n'était justifiée que par la prolongation de son arrêt de travail et la volonté de l'employeur de mettre un terme au contrat sans avoir à lui verser d'indemnité; que ce moyen était déterminant de la solution du litige; qu'ainsi, faute d'y répondre, l'arrêt qui se borne à affirmer que la RATP était fondée en sa décision de révocation est entachée d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile;

Mais attendu, d'abord, que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonnée au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire; que la cour d'appel ayant retenu que le statut du personnel de la RATP n'imposait pas que l'agent ayant manqué gravement à la discipline soit suspendu de ses fonctions, et que son maintien provisoire en service avait été subordonné au respect d'un contrôle systématique de sa sobriété, en a exactement déduit que l'employeur pouvait se prévaloir de la faute grave;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le comportement du salarié était de nature à faire courir un risque aux voyageurs, aux tiers et à lui même, et ainsi fait ressortir que son maintien dans l'entreprise était impossible, elle a pu décider, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, qu'il avait commis une faute grave;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, du 13 juin 2006.

Le: 27/09/2013

**Cour de cassation
chambre sociale**

Audience publique du 13 septembre 2006

N° de pourvoi: 05-42277

Non publié au bulletin

Rejet

Président: M. CHAUVIRE conseiller, président

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2005), que M. Le X..., engagé en 1999 en qualité de conducteur d'autobus par la Régie communautaire des transports du pays malouin Saint-Malo bus, a été licencié pour faute grave le 27 juin 2002;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Le X... était illégitime et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses sommes ainsi qu'à rembourser une somme à l'ASSEDIC de Bretagne, alors, selon le moyen:

- 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du débat, qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la Régie Saint-Malo bus avait tout d'abord reproché à M. Le X... de s'être présenté à son service en état d'ébriété et ensuite, en toute hypothèse, de s'être présenté à son service alors qu'il n'était pas en état de l'assurer «pour quelque cause que ce soit, non portée à la connaissance de votre supérieur hiérarchique», faisant ainsi courir des risques à l'entreprise; que cependant, la cour d'appel a énoncé que le second grief visait à reprocher au salarié d'avoir dissimulé son état de travailleur handicapé et que M. Le X... avait été reconnu, antérieurement à l'acte litigieux, apte par la médecine du travail qui n'avait décelé aucune contre indication à la conduite d'autobus, pour en déduire que le second grief n'était pas caractérisé; aussi, la cour d'appel a-t-elle méconnu le cadre du débat tel que fixé par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, méconnaissance qui résulte d'une dénaturation de cette lettre; en cela, elle a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail;
- 2°/ que, pour apprécier le caractère légitime ou non d'un licenciement, les juges sont tenus de rechercher si les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement sont établis; qu'en jugeant que le licenciement de M. Le X... était illégitime, sans avoir recherché, comme cela avait été allégué dans la lettre de licenciement puis soutenu dans les écritures d'appel de la Régie Saint-Malo bus, si la circonstance suivant laquelle M. Le X... s'était présenté pour assurer son service alors qu'il n'était pas en état de le faire ne constituait pas une faute, ce comportement dangereux faisant courir des risques à l'entreprise, aux tiers passagers et étant également de nature à engager la responsabilité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail;
- 3°/ que la règle de preuve suivant laquelle si un doute subsiste, il profite au salarié, ne saurait pallier la carence du juge qui n'a pas effectué une recherche à laquelle il était tenu; qu'en jugeant que les griefs n'étaient pas fondés et que le doute devait bénéficier au salarié sans avoir examiné le second grief formulé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail;

Mais attendu qu'examinant le motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que l'état d'ébriété du salarié lors de sa prise de service n'était pas établi; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la Régie communautaire des transports du pays Malouin Saint Malo bus aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Régie communautaire des transports du pays Malouin Saint-Malo bus à payer à M. Le X..., la somme de 2.500 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

Décision attaquée: cour d'appel de Rennes (chambre sociale), du 8 mars 2005.

Roj: ATS 6414/2006
Id Cendoj: 28079140012006200600
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3433/2005
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Juan Francisco García Sánchez
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil seis.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Orense se dictó sentencia en fecha 22 de julio de 2004, en el procedimiento nº 471/04 seguido a instancia de D. Íñigo contra D. Carlos Jesús, sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por ambas partes, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 24 de mayo de 2005, que desestimaba los recursos interpuestos y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 21 de julio de 2005 se formalizó por la Letrada D^a Natalia Iglesias Ormaechea, en nombre y representación de D. Íñigo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 19 de diciembre de 2005 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La Sala ha reiterado que contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 de enero de 1.992, RCU 824/91; 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, RCU 4067/96, 94/97 y 4203/96; 17 de mayo y 22 de junio de 2000 RCU 1253/99 y 1785/99; 14 de noviembre de 2003, RCU 4758/02; 17 de diciembre de 2004, RCU 6028/03 y 20 de enero de 2005, RCU nº 1111/03).

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 24 de mayo de 2005 confirma la de instancia que había declarado procedente el despido disciplinario del trabajador demandante.

Recorre dicha parte en casación para la unificación de doctrina, proponiendo como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de abril de 2002 que confirma la improcedencia del despido del actor.

La contradicción es inexistente al ser distintos los supuestos de hecho enjuiciados.

En el caso que la sentencia recurrida contempla se acreditan dos conductas diferenciadas del trabajador despedido. La primera consistente en que el actor el 8 de marzo de 2004 cuando conducía un camión de la empresa, para la que prestaba servicios como chofer-repartidor, fue parado por la guardia civil y sometido a un control de alcoholemia, dando en un primer momento 0,86 MG/L y en una segunda prueba 0,64 MG/L. Dado que no se le permitió seguir conduciendo, avisó al empresario demandado que se hizo cargo del vehículo y realizó el reparto del día. Como consecuencia de lo anterior el actor fue sancionado con una multa de 600 euros y suspensión de la autorización para conducir durante un mes. La segunda conducta del actor que queda acreditada consiste en el incumplimiento de la obligación de renovar el carnet de manipulador.

En la sentencia de contraste en cambio sólo se acredita que el actor dio positivo en un control de alcoholemia en el que dio 0,31 MG/L. En ese caso, por tanto, la tasa de alcohol era considerablemente inferior a la que da el actor en el caso de autos, aparte de que en la sentencia de contraste no consta la retirada temporal del permiso de conductor lo que si ocurre en la recurrida.

Pero aparte de las anteriores diferencias, lo que también ocurre que la sentencia de contraste únicamente contempla el resultado positivo en un control de alcoholemia, sin que se enjuicie ningún otro incumplimiento del trabajador, a diferencia de lo que ocurre en la recurrida donde el actor incumplió su obligación de renovar el carnet de manipulador.

No obstante las alegaciones de la parte recurrente, los diferentes pronunciamientos de las sentencias no pueden considerarse contradictorios, al enjuiciar supuestos de hecho también distintos.

Por otra parte, en relación con los despidos disciplinarios, la Sala ha declarado de forma reiterada - sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (RCUD nº 1232/90 y 2271/91), 15 y 29 de enero de 1997 (RCUD nº 952/96 y 3461/95) y 13 de noviembre de 2000 (RCUD nº 4391/99)-, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en estos casos la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico. En relación con esta cuestión debe citarse la sentencia de 24 de mayo de 2005 (RCUD nº 1728/04) conforme a la cual, «puede afirmarse que este tipo de litigios carece de interés casacional, pues su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora, sino que comprometería gravemente el funcionamiento del recurso con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social».

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a Natalia Iglesias Ormaechea en nombre y representación de D. Íñigo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 24 de mayo de 2.005, en el recurso de suplicación número 1564/05, interpuesto por D. Carlos Jesús y D. Íñigo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Orense de fecha 22 de julio de 2.004, en el procedimiento nº 471/04 seguido a instancia de D. Íñigo contra D. Carlos Jesús, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 2 février 2006
N° de pourvoi: 04-40915
Non publié au bulletin
Rejet
Président: M. BAILLY conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1980 par la société Desneux TP en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2000, pour avoir, dans l'exercice de ses fonctions, conduit un véhicule de l'entreprise sous l'emprise d'un état alcoolique;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêté attaqué (Versailles, 19 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen:

- 1° / que la conduite d'un camion en état d'alcoolémie avéré constitue une faute grave, quand bien même le taux exact d'alcool dans le sang ne serait pas connu; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail;
- 2° / que le procès-verbal de contravention infligée au salarié le 29 août 2000, mentionnant la perte de trois points du permis de conduire, indique expressément, comme seule infraction, la «conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, R. 233-5 du CR»; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas certain qu'il ait été verbalisé de ce chef, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal de contravention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
- 3° / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles l'attestation de la préfecture des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2001 précisant que le salarié ne faisait pas l'objet de sanction résultait seulement du fait que ce document ne faisait pas état des points figurant sur le permis de conduire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, a relevé que la preuve d'un taux d'alcoolémie passible d'une infraction pénale n'était pas rapportée; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Desneux TP aux dépens;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

Décision attaquée: cour d'appel de Versailles (chambre sociale), du 19 novembre 2003.

Roj: ATS 54/2005 - ECLI:ES:TS:2005:54A
Id Cendoj: 28079140012005200162
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1367/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Benigno Varela Autrán
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a once de Enero de dos mil cinco.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Ciudad Real se dictó sentencia en fecha 8 de septiembre de 2003, en el procedimiento nº 539/03 seguido a instancia de Clemente contra CASADO Y RODRIGUEZ, S.L., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en fecha 20 de enero de 2004, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de abril de 2004 se formalizó por la Letrada D^a María del Mar Yébenes Heras en nombre y representación de Clemente, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 19 de octubre de 2004 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 de enero, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997 y 23 de septiembre de 1998). Es objeto del actual recurso de casación para unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 20 de enero de 2004, que ha confirmado el fallo de instancia desestimatorio de la demanda por despido rectora de autos. Son hechos relevantes para la decisión que el actor, conductor mecánico, ha venido prestando servicios para la demandada -CASADO Y RODRIGUEZ SL- desde el día 15-09-89. El día 20-06-03 la empresa le comunicó al actor carta de despido disciplinario en los términos que constan, con ocasión de los hechos acaecidos el 17-05-03 y que provocaron, asimismo, la incoación de diligencias penales. En efecto, en fecha 4-06-03 se dictó sentencia por el Juzgado de lo Penal de Segovia, en cuyo fallo se condenaba al actor como autor de un delito contra la Seguridad del Tráfico por conducción alcohólica, a una pena de seis meses de multa, privación del derecho a conducir vehículos de motor y

ciclomotores por un año y un día. En dicha sentencia quedó constancia de que el acusado prestó su conformidad con la calificación de la acusación, quedando firme ante el acuerdo de las partes, se declaraba como probado que el día 17-05-03, sobre las 21,30 h, el acusado guiaba el tractor camión MAN 19.464 FTL, matrícula PB-....-F -cargado con 25 Tn de madera y un PMA de 40 Tn-, por la carretera A-6 bajo los efectos de una intoxicación etílica que disminuía sensiblemente sus facultades psicofísicas; y que sometido a test alcoholímetro con motivo de presentar síntomas evidentes de embriaguez a las 21,44 h y 22 h de dicho día, dio un resultado de 1,33 mg de alcohol por litro de aire espirado, en la primera, y 1,36 mg en la segunda medición; así como que presentaba evidentes síntomas de embriaguez, como cansancio, agotamiento, rostro congestionado y arrebolado, ojos brillantes, pupilas dilatadas, habla pastosa halitosis alcohólica muy fuerte de cerca, y deambulación titubeante. El tribunal de suplicación en su elaborada sentencia concluye afirmando que en la conducta descrita concurren las notas definidoras del quebranto de la buena fe contractual ex art. 54.2 d) del ET, decisión que en todo caso no queda atemperada por el hecho de que el demandante se hallara en estado de embriaguez, dada la repercusión negativa que dicho estado proyecta sobre el trabajo, máxime en la actividad de transporte por carretera.

Para justificar, en el caso, que existe la contradicción, que, como requisito de viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, impone el artículo 217 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, afirma la parte demandante que la sentencia que combate, llega a pronunciamiento distinto que la sentencia que invoca para su contraste dictada por la misma Sala de 15 de febrero de 1999. La aludida sentencia examina una reclamación por despido disciplinario, con causa en la embriaguez habitual ex art. 54.2.f) del ET. En un caso en que el demandante, que prestaba servicios para la demandada con categoría de conductor de autobús, fue sancionado con despido con base en que cuando realizaba un trayecto, al ser sometido a las pruebas de alcoholemia sobrepasaba el límite permitido -índice de 0,40 g/cm³ en la primera prueba y de 0,34 veinte minutos después-, sin que se le permitiera continuar el trayecto, siendo sustituido por otro conductor de la empresa, por lo que se le impuso una sanción administrativa de privación del permiso de conducir y multa de 50.000 ptas. La Sala tras calificar la falta como grave, por aplicación del art. 116 de la Ordenanza Laboral para las Empresas de Transportes por Carretera, Orden Ministerial de 20 de marzo de 1971, con fundamento en tratarse de una conducta incumplidora por una sola vez, no constitutiva de habitualidad, desestima la pretensión, por apreciar la prescripción de la falta, por transcurso del plazo de veinte días previsto para las faltas graves en el arts. 60.2 del ET. A la vista de lo que antecede no cabe más que concluir que entre los supuestos comparados no concurre la necesaria triple identidad legal que en cuanto a hechos, fundamentos y pretensiones exige el art. 217 de la LPL para abordar el juicio de contradicción, y si bien es cierto y no se desconoce que entre los supuestos comparados existe ab initio una identidad material toda vez que en ambos casos nos hallamos en presencia de despidos disciplinarios, existen también otras diferencias fácticas con insoslayable relevancia jurídica que impiden apreciar la divergencia doctrinal denunciada. En efecto los pronunciamientos opuestos pero no divergentes derivan de lo constatado en cada uno de los relatos examinados y en la ausencia de homogeneidad entre los supuestos relatados. Así, por lo pronto en la sentencia de referencia se aborda la calificación como grave o muy grave de la falta imputada como causa de despido, a los efectos de determinar el plazo de prescripción aplicable al supuesto examinado, a la luz de lo establecido en el art. 60 del ET. Pero es que además, mientras que en esta sentencia se aborda un supuesto en el que el índice de alcohol en la sangre no alcanzó el límite legal que en el momento en que acontecieron los hechos estaba fijado en el 0,80 g/cm³, por lo que las diligencias penales fueron archivadas; en la sentencia recurrida, se contempla un supuesto en el que el trabajador alcanzó un resultado de 1,33 mg de alcohol por litro de aires respirado cuando conducía un camión de gran tonelaje, hecho que derivó una condena penal, toda ello sin perjuicio de que, esencialmente, se imputó al actor a los efectos ahora debatidos una conducta transgresora de la buena fe contractual.

Por otra parte, esta Sala ha reiterado -y así lo recuerda la sentencia de 27 de octubre de 1998 (recurso 3616/97) con cita de distintas resoluciones- que la valoración casuística de circunstancias individualizadas y variables en cada supuesto no es materia propia de la unificación de doctrina, como ocurre en la calificación de los despidos disciplinarios.

Al respecto, resulta especialmente significativa la sentencia de 16 de julio de 1991 dictada en unificación de doctrina (recurso 110/91) en un supuesto de despido disciplinario y según la cual, «...la conducta del trabajador que, en definitiva, es lo que se juzga en un proceso por despido disciplinario, difiere en cada uno de ellos; lo cual, por otra parte, resulta obvio, sin necesidad de entrar en un análisis comparativo de dichas conductas en uno y otro caso; porque de suyo, el comportamiento del ser humano ante circunstancias concretas y, por tanto,

diferentes en el tiempo y en el espacio de otras que, por mucho que sea su similitud nunca podrán ser iguales, tampoco podrá ser equiparado y homologado en forma alguna con el de otra persona, en estas circunstancias».

De conformidad con lo anteriormente expuesto, hay que concluir que la calificación de los supuestos de hecho en materia de despidos disciplinarios no es materia propia de la unificación de doctrina porque parten necesariamente de una valoración individualizada de circunstancias que no permite establecer criterios generales de interpretación.

SEGUNDO.- Por lo razonado, no habiendo el recurrente formulado alegaciones en el trámite oportuno, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y sin que proceda la imposición de costas. Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a María del Mar Yébenes Heras, en nombre y representación de Clemente contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de fecha 20 de enero de 2004, en el recurso de suplicación número 2005/03, interpuesto por Clemente, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Ciudad Real de fecha 8 de septiembre de 2003, en el procedimiento nº 539/03 seguido a instancia de Clemente contra CASADO Y RODRIGUEZ, S.L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 9914/2004 - ECLI:ES:TS:2004:9914A
Id Cendoj: 28079140012004202686
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 5743/2003
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Jesús Gullón Rodríguez
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a ocho de Septiembre de dos mil cuatro.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 3 de los de Orense se dictó sentencia en fecha 14 de abril de 2003, en el procedimiento nº 85/03 seguido a instancia de D. Salvador contra AUTO INDUSTRIAL, S.A.U., sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 26 de septiembre de 2003, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de noviembre de 2003 se formalizó por el Letrado D. Francisco José Castiñeira Martínez, en nombre y representación de AUTO INDUSTRIAL, S.A.U., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 10 de mayo de 2004 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- Es doctrina constante de esta Sala que el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 y 28 de enero de 1.992, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, 23 de septiembre de 1998, 17 de mayo de 2000 y las más recientes de 14 de noviembre y 1 de diciembre de 2003).

Consta acreditado que el 2 de diciembre de 2002 sobre las 9,15 horas el actor conducía el autobús dedicado a transporte escolar propiedad de la demandada cuando la Guardia Civil de Tráfico le realizó un control de alcoholemia que resultó positivo. Como consecuencia de lo anterior la empresa procedió al despido disciplinario del actor que fue declarado improcedente en la instancia y dicho pronunciamiento confirmado en suplicación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 26 de septiembre de 2003. Recurre la empresa demandada en casación para la unificación de doctrina, proponiendo como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 30 de noviembre de 2002

confirmatoria de la de instancia que había declarado procedente el despido del trabajador también conductor de autobús que había dado positivo en un control de alcoholemia.

La contradicción es inexistente porque la sentencia recurrida valora unas circunstancias ajenas a la sentencia de contraste.

Así en el caso de autos consta acreditado que el actor había tomado media hora antes del control un medicamento llamado Elixifilin recetado por el médico de guardia ante el cuadro de bronquitis que padecía, medicamento que -dice la sentencia en su fundamento tercero- contiene etanol sustancia que suele dar positiva en los controles de alcoholemia. Esta circunstancia es por completo ajena a la sentencia de contraste y también difiere la propia situación de cada uno de los conductores pues en el caso de autos el actor presenta un aspecto externo sin peculiaridad alguna, sin detalle destacable en el rostro y en la mirada, mientras que en la sentencia de contraste se relata (hecho tercero) que el actor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas desprendiendo olor a alcohol (sin haber tomado medicamento alguno) mirada brillante y rostro congestionado.

En su escrito de alegaciones la parte recurrente insiste en la admisión del recurso pero las diferencias apuntadas justifican los diferentes pronunciamientos. Debe recordarse que la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en estos casos la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992, 15 y 29 de enero de 1997).

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Francisco José Castiñeira Martínez, en nombre y representación de AUTO INDUSTRIAL, S.A.U. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 26 de septiembre de 2003, en el recurso de suplicación número 4199/03, interpuesto por AUTO INDUSTRIAL, S.A.U., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Orense de fecha 14 de abril de 2003, en el procedimiento nº 85/93 seguido a instancia de D. Salvador contra AUTO INDUSTRIAL, S.A.U., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Consumo de alcohol en el trabajo

INTRODUCIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL TRABAJO

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 26 juin 2012

N° de pourvoi: 11-12884 11-12889 11-12914

Non publié au bulletin

Rejet

M. Lacabarats (président), président

SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 11-12. 884, N 11-12. 889 et Q 11-12. 914;

SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX POURVOIS:

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 20 décembre 2010), que MM. X..., Y... et Z..., qui étaient employés par la société France Transfo en qualité d'ouvriers et de monteur depuis respectivement les 4 juin 1991, 26 mars 1990 et 5 août 1997, ont été licenciés le 9 février 2006 pour avoir organisé un « pot » pendant les heures de travail et sans autorisation de la hiérarchie en introduisant de l'alcool à cette occasion dans l'entreprise en violation du règlement intérieur; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que pour être justifié, le licenciement doit être prononcé pour une cause réelle et sérieuse, ce qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de litige; de sorte qu'en se bornant à relever que le comportement fautif du salarié tel qu'il se trouvait caractérisé dans la lettre de licenciement était établi et était constitutif d'une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la gravité du comportement reproché au salarié, les seuls motifs excluant que son ancienneté puisse constituer une circonstance atténuante étant insuffisants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail;

Mais attendu qu'après avoir relevé non seulement que l'ancienneté des salariés n'était pas constitutive d'une circonstance atténuante mais qu'elle était précisément de nature à leur conférer une conscience accrue du danger lié à l'introduction et la consommation d'alcool à raison des machines utilisées pour la construction et la réparation de transformateurs, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail en décidant, par une décision motivée, que leurs licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause ce pouvoir souverain, ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE les pourvois;

Condamne MM. X..., Z... et Y... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen commun produit aux pourvois n° H 11-12. 884, N 11-12. 889 et Q 11-12. 914 par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le comportement du salarié était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et partant d'avoir débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes;

AUX MOTIFS QUE la société France Transfo conteste la décision du Conseil de prud'hommes qui a considéré que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Qu'elle fait valoir en effet que:

- Il n'est pas d'usage à France Transfo d'autoriser des pots alcoolisés ou non et que les salariés n'avaient pas une telle autorisation;
- Compte tenu de son activité consistant à construire et réparer notamment des transformateurs, et nécessitant l'utilisation de machines dont certaines sont dangereuses, le règlement intérieur applicable à l'entreprise comporte en page 1 l'énoncé des interdictions suivantes:
- entrer dans l'entreprise sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants,
- introduire ou faciliter l'introduction de boissons alcoolisées ou de produits stupéfiants sur les lieux de travail-consommer de l'alcool ou des produits stupéfiants sur les lieux de travail. A noter que seules les consommations alcoolisées proposées dans le cadre du restaurant d'entreprise pour accompagner les repas sont autorisées;
- il est indifférent de savoir si M. X... est à l'origine de l'introduction de la bouteille de whisky dans un atelier alors même que l'impossibilité de déterminer qui avait introduit l'alcool résulte de la solidarité entre les salariés;- il est indifférent que le salarié n'ait pas été en état d'ivresse ni qu'il ait pas bu l'alcool dans le verre qu'il tenait à la main alors que les faits se sont produits vers 17 heures, que M. X... terminait son poste de travail à 20 heures 30, que les faits ont été interrompus par l'intervention du supérieur hiérarchique et que l'alcool utilisé était un alcool fort;

qu'elle ajoute qu'elle aurait pu, sur la base de l'arrêt de la cour de cassation du 25 janvier 1995 qui a considéré que la consommation d'alcool constituait une faute grave lorsqu'elle est interdite dans l'entreprise, justifier le licenciement du salarié en cause par une faute grave privative de préavis;

que M. X... au contraire expose que:

- il n'a pas reconnu, de même que les autres salariés avoir introduit de l'alcool de sorte que son licenciement n'est pas justifié dès lors qu'il apparaît que pour l'employeur c'est l'introduction d'alcool dans l'entreprise qui est la cause réelle du licenciement puisqu'il a été proposé à chacun des 5 salariés concernés, postérieurement au licenciement, de se dénoncer pour avoir introduit de l'alcool dans l'entreprise, moyennant quoi les 4 autres salariés seraient réintégrés;
- la consommation d'alcool n'a pas eu lieu, puisqu'il a été mis fin au pot avant que les salariés aient consommé;
- l'appréciation de la gravité de la faute doit s'apprécier «in concreto».

au regard de:

- la mise en cause ou non de la sécurité dans l'entreprise.
- le trouble ou non au bon fonctionnement de l'entreprise.
- les antécédents professionnels ou disciplinaires du salarié et son ancienneté dans l'entreprise;
- la légèreté de la faute commise par M. X... qui a contesté à deux reprises avoir introduit de l'alcool, et dont le comportement répréhensible se trouve constitué par le seul fait d'avoir participé à une réunion avec quatre autres salariés pour prendre un pot non consommé par obéissance aux ordres du chef de production aurait dû au pire être sanctionné par une mise à pied;

qu'il conclut qu'en réalité l'employeur a voulu se débarrasser des salariés concernés dans le cadre d'une politique de réduction des effectifs, puis se rendant compte de ce qu'ils étaient expérimentés, a vainement tenté de se rattraper en proposant la réintégration de quatre d'entre eux, le cinquième reconnaissant avoir introduit de l'alcool;

qu'il est constant que le règlement intérieur de France Transfo interdit pour raison de sécurité l'introduction et la consommation d'alcool dans l'entreprise;

qu'il ressort de l'attestation établie le 5 décembre 2006 par M. José A... responsable d'unité autonome de production, que le 19 janvier 2006 à la suite d'un problème technique urgent apparu dans la réparation d'un transformateur, le témoin ainsi que le responsable du bureau d'études, un technicien qualité et le coordinateur du secteur se sont rendus au local de réparation afin d'essayer de trouver une solution au problème rencontré par l'opérateur et qu'à leur arrivée vers 17 heures 30, ils se sont retrouvés en présence de cinq personnes: Messieurs X..., Y..., Z..., C... et D... qui se trouvaient debout autour d'un établi transformé en table et sur lequel se trouvaient posés des « gâteaux apéritifs », une bouteille de whisky à moitié pleine et une bouteille de coca cola; que le témoin précise que les cinq salariés tenaient chacun leur verre à la main, qu'ils ont été surpris de les voir arriver, qu'ils ont sans attendre posé leur verre et ont immédiatement regagné leurs postes de travail respectifs;

que dans une nouvelle attestation établie le 11 décembre 2006 par le même témoin, ce dernier rapporte que lors des entretiens des salariés du 1er février 2006, ces derniers ont reconnu l'ensemble des faits, ont dit ne pas avoir bu dans la mesure où ils avaient été surpris mais avoir indiqué que dans le cas contraire ils auraient consommé l'alcool;

que M. X... reconnaît la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement;

qu'il s'évince de l'ensemble de ces énonciations que les cinq salariés avaient organisé un « pot » au cours duquel ils devaient boire du whisky, introduit dans l'entreprise, qu'ils étaient sur le point de boire cet alcool dans l'entreprise et n'en ont été empêchés que par l'arrivée de quatre autres salariés, parmi lesquels se trouvait un responsable hiérarchique, Monsieur A...;

que l'organisation de ce pot par les cinq salariés et leur participation à celui-ci au mépris des dispositions du règlement intérieur interdisant l'introduction et la consommation d'alcool dans l'entreprise caractérisent un comportement fautif des salariés en cause et notamment de M. X... dont il n'est pas contesté par ces derniers qu'il devait après le pot rejoindre son poste de travail, puisqu'il terminait son service, le jour des faits à 20 heures 30;

que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige;

qu'il ressort de l'attestation de Monsieur André B..., délégué CFDT, qu'après le licenciement, et plus précisément le 14 février 2006, il a été amené à faire au nom de la direction la proposition selon laquelle, en cas de reconnaissance par l'un des cinq salariés de ce qu'il avait introduit l'alcool, les quatre autres seraient réintégrés, une telle intention, subordonnée à une condition qui n'a jamais été réalisée, ne saurait caractériser rétroactivement la volonté de l'employeur de ne sanctionner au moment du licenciement que l'introduction de l'alcool dans l'entreprise;

que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ne saurait être constitutive d'une circonstance atténuante alors précisément qu'elle était de nature à lui conférer une conscience accrue du danger lié à l'introduction et à la consommation d'alcool à raison des machines utilisées pour la construction et la réparation de transformateurs; qu'il apparaît en conséquence que le comportement fautif du salarié tel qu'il se trouve caractérisé dans la lettre de licenciement est établi et est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement;

qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes;

- ALORS QUE pour être justifié, le licenciement doit être prononcé pour une cause réelle et sérieuse, ce qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de litige;

De sorte qu'en se bornant à relever que le comportement fautif du salarié tel qu'il se trouvait caractérisé dans la lettre de licenciement était établi et était constitutif d'une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la gravité du comportement reproché au salarié, les seuls motifs excluant que son ancienneté puisse constituer une circonstance atténuante étant insuffisants, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Metz, du 20 décembre 2010.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 15 décembre 2011

N° de pourvoi: 10-22713

Non publié au bulletin

Rejet

**M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)**

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 2010), qu'engagé le 23 septembre 1968 par la société Usinor devenue Akers France, M. Y..., qui exerçait les fonctions d'aciériste, a été licencié pour faute grave pour avoir consommé de l'alcool sur le lieu de travail;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités légales et conventionnelle de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen:

- 1°/ que le règlement intérieur de l'entreprise prohibe expressément l'introduction d'alcool sur le site, ainsi que le fait de y pénétrer ou séjourner en état d'ivresse; que dénature les termes clairs et précis de ce règlement et viole les articles 1134 du code civil et L. 1321-1 du code du travail la cour d'appel qui considère que ce règlement intérieur de la société Akers ne prohiberait pas formellement toute consommation d'alcool sur le lieu de travail;
- 2°/ qu'indépendamment même des stipulations du règlement intérieur, en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat; qu'en application de ce principe général, la société Akers était en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié dont il était avéré que celui-ci avait consommé de l'alcool sur le lieu de travail, peu important que son état d'ivresse manifeste, en dépit des nombreuses présomptions en ce sens, n'ait pas été formellement établi; qu'ayant ainsi constaté que M. Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail la cour d'appel qui décide qu'un tel comportement ne présenterait pas un caractère fautif;

Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénégation, que le salarié avait à la fin de sa journée de travail, participé à un «pot» organisé dans l'entreprise sans autorisation de l'employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées, son état d'ébriété n'étant pas démontré, la cour d'appel a pu décider que le fait reproché à ce salarié qui en trente huit années au service de l'employeur n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ne constituait pas une faute grave; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Akers France aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Akers France;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Akers France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société AKERS à lui payer les sommes de 1.107,92 € à titre d'indemnités de mise à pied conservatoire injustifiée, 110,76 à titre de congés payés afférents, 4.120,90 € à titre de préavis, 412,09 € de congés payés afférents, 20.707,51 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 143.287,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et d'AVOIR en outre ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave est celle qui, résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis; qu'en la matière, la charge de la preuve de la matérialité de la faute comme de sa gravité, incombe exclusivement à l'employeur; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:

«Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 11 heures, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir:

- non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même.
- manquement à la discipline et au règlement intérieur.

Le 16 mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur, et plus précisément les articles 13-1 et 13-2 et l'article 16 du règlement intérieur, puisque vous avez consommé de l'alcool sur votre lieu de travail... cette consommation d'alcool ayant entraîné les excès de comportement dont vous nous avez fait part lors de l'entretien, et qui vous ont conduit notamment à ramener chez lui un de vos collègues, en bleu de travail, dans un état d'ébriété avancée...

Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave...». que l'employeur conteste la décision déferée qui a considéré que le licenciement de Monsieur Armand Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse; qu'il fait valoir que le 16 mars 2007, après le poste d'après-midi, Monsieur Z..., salarié, a organisé un «pot d'anniversaire».

À l'occasion duquel il a introduit dans l'entreprise des bouteilles d'alcool, que contrairement à la plupart de leurs collègues, Messieurs A..., Y... et B... se sont maintenus dans les locaux de l'entreprise jusqu'à une heure avancée de la nuit pour continuer à consommer et sans doute terminer les bouteilles d'alcool, que la situation s'est envenimée jusqu'à l'éclat d'une bagarre dans les vestiaires, que M. A... a eu un accident sur le parking et a embouti un véhicule en stationnement, que Monsieur Y... a ramené Monsieur B... à son domicile, que les faits ont été révélés à la direction par Monsieur Y... le lundi 19 mars au matin qu'il ajoute que le règlement intérieur interdit implicitement mais nécessairement la consommation d'alcool dans l'entreprise, que cela est d'ailleurs expressément admis par le syndicat CGT qui a émis un tract à l'occasion du licenciement de Messieurs Y... et A..., que Monsieur Y... a incontestablement consommé de l'alcool dans les locaux de l'entreprise et s'est donc placé en infraction caractérisée avec les dispositions du règlement intérieur, que Messieurs D...et E..., évoquant avoir recueilli la confession de Monsieur Y..., rapportent des faits de « querelles dans le vestiaire », « paroles et bousculades », « comportements excessifs dus à l'alcool suite à la célébration d'un anniversaire bien arrosé »; qu'il affirme enfin qu'il est inconcevable, pour un employeur, de pouvoir composer ou aménager les règles de sécurité qui s'imposent à tous et qu'il appartient à celui-ci de veiller avec la fermeté nécessaire, au respect par les salariés des mesures de sécurité instituées en vue de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise; que Monsieur Armand Y... fait valoir que l'article 13-1 du règlement intérieur interdit l'introduction des boissons alcoolisées et la consommation de drogues dans l'entreprise, que l'article 13-2 interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise, que les bouteilles d'alcool ont été introduites par Monsieur Z... lequel s'est vu sanctionné d'une mise à pied de 3 jours,

que l'employeur ne démontre pas qu'il s'est trouvé en état d'ivresse dans les locaux de l'entreprise ni qu'il ait été à l'origine des incidents que se sont déroulés dans les vestiaires ni qu'il ait commis une quelconque faute disciplinaire; qu'au contraire, le fait qu'il ait décidé de raccompagner à son domicile un collègue de travail prouve qu'il était en pleine possession de toutes ses facultés d'analyse et de réflexion et qu'il a accompli un geste citoyen, que le licenciement, survenu alors qu'il était âgé de 53 ans avec 38 ans d'ancienneté dans l'entreprise, est dénué de cause réelle et sérieuse; qu'il est constant que le 16 mars 2007, à l'issue de sa journée de travail, Monsieur Armand Y... a participé à un « pot d'anniversaire » organisé dans les locaux de l'entreprise, par un collègue de travail, M. Z..., qui a ramené à cette occasion un gâteau et des bouteilles d'alcool; que le règlement intérieur de l'entreprise interdit dans son article 13-1 l'introduction de boissons alcoolisées qu'il prohibe également le fait de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise (article 13-2); qu'enfin, tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit (article 16); qu'il est constant en l'espèce que Monsieur Armand Y... n'a introduit aucune boisson alcoolisée dans l'usine; que, comme l'a justement relevé le premier juge, les dispositions du règlement intérieur ne prohibent pas formellement toute consommation d'alcool sur les lieux de travail, et cc, nonobstant les termes du tract édité par le syndicat CGT; que le premier juge en a exactement déduit qu'à défaut de disposition expresse, une consommation isolée et modérée de boissons alcoolisées, a fortiori en dehors du temps de travail, ne peut constituer une cause de licenciement et que seul un abus de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger constitue une faute disciplinaire; qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucune mesure de taux d'alcoolémie de Monsieur Armand Y... qui, s'il admet avoir consommé modérément, dénie tout état d'ébriété; que l'employeur, ne produit pas davantage devant la Cour que devant le premier juge, de témoignage direct faisant état d'un comportement de Monsieur Armand Y... laissant présumer qu'il a séjourné dans l'entreprise en état d'ébriété et qu'il a, de ce fait, exposé des personnes ou des biens à un danger quelconque; que si, après avoir recueilli la confession de Monsieur Armand Y..., M. E... et D..., supérieurs hiérarchiques de Messieurs A... et Y... ont rapporté à la direction que ce dernier avait fait état de « paroles, bousculades, querelles dans le vestiaire », ces déclarations très imprécises sur le rôle de chacun des participants ne permettent pas d'imputer à Monsieur Armand Y... un comportement anormal ni de lui attribuer une quelconque part de responsabilité dans les incidents qui se seraient déroulés; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'heure tardive de son départ et le fait que Monsieur Armand Y... ait raccompagné Monsieur B... à son domicile ne peuvent faire présumer la réalité d'une imprégnation alcoolique excessive; qu'en définitive, la preuve de l'existence d'une faute disciplinaire n'est pas rapportée: que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Monsieur Armand Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse»;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Armand Y... a été embauché par la société US INOR aux droits de laquelle vient la SAKERS le 23 Septembre 1968; que suivant courrier du 17 Avril 2007, il a été licencié pour faute grave son employeur invoquant les raisons suivantes:

- «- Non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même.
- Manquement à la discipline et au règlement intérieur.

Le 16 Mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur, et plus précisément les articles 13-1 et 13-2 et l'article 16 du règlement intérieur, puisque vous avez consommé de l'alcool sur votre lieu de travail, ce que vous avez d'ailleurs reconnu lors de l'entretien, cette consommation d'alcool ayant entraîné les excès de comportement dont vous nous avez fait part lors de l'entretien, et qui vous ont conduit notamment à ramener chez lui un de vos collègues, en bleu de travail, dans un état d'ébriété avancée». Que le règlement intérieur de l'entreprise interdit dans son article 13-1 l'introduction de boissons alcoolisées; qu'il prohibe également le fait de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise (article 13. 2); qu'enfin tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit (article 16); que les dispositions du règlement intérieur ne prohibent pas formellement toute consommation d'alcool et ce, nonobstant le tract édité par le syndicat CGT; que plus généralement une consommation isolée et modérée de boissons alcoolisées ne peut constituer une cause de licenciement; que seul un abus de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger constitue une faute disciplinaire; qu'il est constant que le 16 Mars 2007, Monsieur Z... a apporté dans l'entreprise des boissons alcoolisées et un gâteau à l'intention de ses collègues; que Monsieur Y... a participé à la fête d'anniversaire ainsi organisée à l'issue de la journée de travail; que s'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a consommé de l'alcool, le salarié réfute s'être trouvé en état d'ébriété; que l'heure tardive

de son départ et le fait qu'il ait raccompagné un collègue ne peuvent faire présumer la réalité d'une imprégnation alcoolique excessive; que selon Messieurs B...et D..., supérieurs hiérarchiques de Monsieur Y..., ce dernier leur a confié que «suite à la célébration de l'anniversaire, il s'ensuivit des comportements excessifs dûs à l'alcool (paroles et bousculades)», que «le pot s'est mal terminé (querelles dans le vestiaire)»; qu'il ne ressort pas de ces déclarations faites en termes généraux, la preuve d'un comportement anormal qui pourrait être attribué à Monsieur Y...; qu'à défaut de toute autre preuve, sa présence dans l'entreprise lors d'incidents ne permet pas de le considérer comme personnellement responsable de ceux-ci; qu'en conséquence, il ne ressort pas des éléments produits aux débats la réalité d'une faute disciplinaire imputable au salarié; qu'il convient de considérer que le licenciement de Monsieur Y... est sans cause réelle et sérieuse»;

1º/ ALORS, D'UNE PART, QUE le règlement intérieur de l'entreprise prohibe expressément l'introduction d'alcool sur le site, ainsi que le fait de d'y pénétrer ou séjourner en état d'ivresse; que dénature les termes clairs et précis de ce règlement et viole les articles 1134 du Code civil et L. 1321-1 du Code du travail la cour d'appel qui considère que ce règlement intérieur de la Société AKERS ne prohiberait pas formellement toute consommation d'alcool sur le lieu de travail;

2º/ ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'indépendamment même des stipulations du règlement intérieur, en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat; qu'en application de ce principe général, la Société AKERS était en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié dont il était avéré que celui-ci avait consommé de l'alcool sur le lieu de travail, peu important que son état d'ivresse manifeste, en dépit des nombreuses présomptions en ce sens, n'ait pas été formellement établi; qu'ayant ainsi constaté que Monsieur Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L. 4122-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide qu'un tel comportement ne présenterait pas un caractère fautif.

Décision attaquée: Cour d'appel de Metz, du 14 juin 2010.

<http://www.tirantonline.com>
Documento TOL3.367.447
Jurisprudencia
Jurisdicción: Social
Ponente: Joaquín Samper Juan
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 28/05/2009
Tipo Resolución: Auto
Sala: Cuarta
Número Recurso: 3211 / 2008

ENCABEZAMIENTO:

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Mayo de dos mil nueve.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOAQUÍN SAMPER JUAN.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 5 de los de Santa Cruz de Tenerife se dictó sentencia en fecha 31 de marzo de 2008, en el procedimiento nº 40 / 08 seguido a instancia de DON Pedro Enrique contra «CONSTRUCCIONES LAS RIQUELAS, SOCIEDAD LIMITADA LABORAL», sobre declaración de improcedencia de despido, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DON Pedro Enrique y CONSTRUCCIONES LAS RIQUELAS S. L., siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en fecha 21 de julio de 2008, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 2 de octubre de 2. 008 se formalizó por el Letrado Don Luis Tallo Cabrera, en nombre y representación de CONSTRUCCIONES LAS RIQUELAS S. L., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 5 de marzo de 2009 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824 / 1991 y 1053 / 1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035 / 4996, 94 / 1997, y 4203 / 1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478 / 1997), 7 de abril de 2005 (R. 430 / 2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132 / 2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082 / 2004)].

En el caso analizado por la sentencia recurrida, el actor prestaba servicios como vigilante en una obra de la empresa demandada. En la tarde - noche del 23 de noviembre de 2007 se personaron en la obra, mientras

que el actor prestaba servicios, otros trabajadores con comida y bebida y cubiertos. Dado que el encargado de la obra se había olvidado de entregar al actor las llaves de la oficina y el comedor de la obra, el actor y las restantes personas acudieron a la terraza de uno de los chalés en construcción, colocando una mesa, una bombilla para iluminarse y encendiendo una radio para poner música. Sobre las 21: 30 horas, el encargado se personó en la obra para dejar las llaves al actor, comprobando la presencia de las personas en la terraza.

El encargado llamó al actor para preguntarle qué es lo que ocurría, recriminando al actor que organizara un tenderete en la obra. En ocasiones anteriores, se habían realizado, con consentimiento de los jefes, en las dependencias de la obra, celebraciones, incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas, empleándose para ello casi siempre el comedor de la empresa. La empresa despidió al trabajador por estos hechos, amparándose en el art. 54. 2. d) del Estatuto de los Trabajadores y en el art. 99 del Convenio colectivo de la Construcción, por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. Impugnada esta decisión por el trabajador, tanto la sentencia de instancia como la de suplicación ahora recurrida han declarado el despido improcedente.

En concreto, para la sentencia de suplicación, y con apoyo en la teoría gradualista, la conducta del trabajador no revistió la gravedad requerida para considerar procedente el despido.

Recorre en casación para unificación de doctrina la empresa demandada, entendiendo que el despido era procedente, e invocando de contraste la STSJ Andalucía / Málaga de 27 de noviembre de 1998, R. 828 / 98.

La actora en aquel procedimiento era auxiliar de la empresa demandada, y en la primera quincena del mes de agosto, celebró una fiesta en el centro de trabajo, sin autorización de la empresa, introduciendo una barbacoa, comida y bebida. Por tales hechos fue despedida y tanto la sentencia de instancia como la sentencia de suplicación ha declarado la procedencia del despido. En concreto, la sentencia de suplicación entiende que la conducta de la trabajadora supone una grave transgresión de la buena fe contractual, sin que en conductas de estas características quepa admitir grados, no suponiendo el despido una desproporción en orden a la conducta en que ha incurrido la trabajadora.

Como puede observarse, no se da la contradicción requerida, puesto que en la sentencia recurrida constan elementos de hecho que no están presentes en el caso analizado por la sentencia de contraste, y ello hace que los casos no puedan compararse, pese a la aparente contradicción de las doctrinas sobre la transgresión de la buena fe contenida en ambas sentencias. Así, en el caso analizado por la sentencia recurrida es relevante el hecho de que se llevase a cabo en una obra, pero sobre todo, el hecho de que conste que se habían realizado otras fiestas anteriores en la obra, si bien en el comedor de la empresa, del cual el trabajador despedido carecía de las llaves en el concreto día en que se celebró la fiesta, por haber olvidado dejárselas el encargado. En cambio, en el caso de la sentencia de contraste, la trabajadora, con categoría de auxiliar, celebró una fiesta en el centro de trabajo de esta, sin especificar dónde, y sin que conste que hubiera práctica alguna de celebración de fiestas semejantes, constando sin embargo que carecía de autorización para celebrarla.

Por otra parte, la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del ET no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (Sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (R. 1232 / 1990 y 2271 / 1991), 15 y 29 de enero de 1997 (R. 952 / 1996 y 3461 / 1995), 6 de Julio de 2004 (R. 5346 / 2003), 9 de julio de 2004 (R. 3496 / 2002) y de 24 de mayo de 2005 (R. 1728 / 04).

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas a la parte recurrente, así como pérdida del depósito.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Luis Tallo Cabrera en nombre y representación de CONSTRUCCIONES LAS RIQUELAS S. L. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife de fecha 21 de julio de 2008, en el recurso de suplicación número 427 / 08, interpuesto por DON Pedro Enrique y CONSTRUCCIONES LAS RIQUELAS S. L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de los de Santa Cruz de Tenerife de fecha 31 de marzo de 2. 008, en el procedimiento nº 40/08 seguido a instancia de DON Pedro Enrique contra «CONSTRUCCIONES LAS RIQUELAS, SOCIEDAD LIMITADA LABORAL», sobre declaración de improcedencia de despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente, así como pérdida del depósito.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 1 avril 2009
N° de pourvoi: 07-45511
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu les articles L. 231-8 et L. 122-14-2 devenus L. 4131-1 et L. 1232-6 du code du travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 février 1990 par la société Arend en qualité d'aide couvreur, a été licencié le 21 août 2003 pour faute grave pour les raisons suivantes:

«- le 5 août 2003: refus de continuer le travail après cinq heures de travail sur chantier, - le 7 août 2003: absence du chantier sans autorisation de 11h50 à 13h40; boisson alcoolisée introduite sur le chantier et consommée; départ du chantier sans autorisation et utilisation sans autorisation de la camionnette de l'entreprise en laissant le chef d'équipe seul sur le chantier sans moyen de locomotion pour rentrer, - le 8 août 2003: refus de réintégrer l'équipe et de travailler; parti sans autorisation préalable»; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que le droit de retrait ne peut trouver application en l'espèce, le salarié n'alléguant pas qu'il aurait averti ses supérieurs hiérarchiques du danger qu'aurait présenté la canicule, que le fait de quitter son emploi à deux reprises sans y avoir été autorisé en l'espace de deux jours constitue un manquement de nature à désorganiser l'entreprise et que si ces deux manquements ne sauraient en eux-mêmes être de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, il n'en reste pas moins que l'association de ces faits et d'un état d'ébriété présenté par une personne employée à des travaux de couverture est de nature à justifier la décision;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'employeur ne contestait pas que le refus de travailler du salarié trouvait son origine dans la chaleur exceptionnelle des jours en question, d'autre part que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochait à celui-ci que l'introduction et la consommation de boisson alcoolisée sur le chantier et non un état d'ébriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;

Condamne la société Arend aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Arend à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave commise par ce dernier et D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement consécutives à la rupture de son contrat de travail;

AUX MOTIFS QUE:

«La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; en l'espèce que l'employeur fait valoir plusieurs séries de griefs à l'encontre de Monsieur Biagio X... qui sont contestés par ce dernier; qu'en ce qui concerne les faits d'absences du 5 août et du 7 août 2003, il convient de constater que Monsieur Biagio X... ne les conteste pas dans leur matérialité mais justifie son attitude par la forte chaleur et la canicule observées au cours de ces journées que si les premiers juges ont fait état des dispositions de l'article L 231-8-1 du Code du travail relatives au droit de retrait de ce salarié à raison de la canicule pour considérer que son départ du chantier ne saurait constituer une faute, il n'en reste pas moins que ce raisonnement ne saurait être suivi; qu'en effet, par application des dispositions de l'article L 231-8 du Code du travail, le salarié qui entend se retirer en raison d'un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé doit avertir immédiatement l'employeur ou son représentant; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque 'il n'est nullement allégué par Monsieur Biagio X... de ce qu'il ait averti ses supérieurs hiérarchiques du danger qu'aurait présenté la canicule; qu'au contraire, les attestations produites par la Sarl AREND établissent clairement que Monsieur Biagio X... et son collègue se sont soustraits à leurs obligations et ont quitté leur travail, sans explication ni justification; que pour ce qui concerne les faits d'alcoolisation sur le chantier, Monsieur Biagio X... fait valoir qu'il conteste cette allégation et qu'il appartient à l'employeur de prouver ces allégations; que cependant, il convient de constater que la Sarl AREND produit plusieurs attestations circonstanciées de personnes travaillant dans l'entreprise qui établissent clairement que Monsieur Biagio X... et son collègue mis en cause se trouvaient en état d'ébriété; que le témoignage du concierge de l'IUT où se déroulaient les travaux de couverture effectués par la Sarl AREND, confirme la consommation d'alcool de ces deux salariés; que ce grief se trouve donc établi,...; en conséquence de ce qui précède que les griefs établis à l'encontre de Monsieur Biagio X... consistant en son refus de continuer le travail le 5 août 2003, en son absence non autorisée dans la journée du 7 août 2003 et dans les faits d'ébriété du même jour sont de nature à justifier d'une faute grave; que le fait de quitter son emploi à deux reprises sans y avoir été autorisé en l'espace de deux jours, constitue un manquement de nature à désorganiser l'entreprise et alors même qu'un rappel à l'ordre avait été effectué par Monsieur Y..., conducteur de travaux le 6 août 2003, ainsi qu'en témoigne l'attestation établie par ce dernier; que si ces deux manquements ne sauraient en eux-mêmes être de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, il n'en reste pas moins que l'association de l'état d'ébriété qui a été constaté le 7 août 2003 et de ces précédents faits est de nature à justifier la décision prise par l'employeur; qu'en effet, ces éléments démontrent une absence de respect du salarié des directives de l'employeur, lesquels associés à un état d'ébriété présenté par une personne employée à des travaux de couverture sont de nature à compromettre la sécurité du chantier et partant à justifier la décision prise par l'employeur tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité» (arrêt, p. 4 et 5);

- 1º ALORS QUE la simple omission par le salarié d'informer son employeur de l'exercice de son droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ne peut constituer à elle seule une faute grave; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'était pas contesté que la canicule du 5 août 2003 revêtait, pour Monsieur X..., couvreur, un danger manifeste pour sa santé, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la simple omission, par Monsieur X..., d'informer son employeur de l'usage de son droit de retrait, constituait une faute grave, sans violer, ensemble, les articles L 122-6, L 231-8 et L 231-8-1 du Code du travail;
- 2º ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, la lettre du 21 août 2003 reprochait à Monsieur X..., le 7 août 2003, d'avoir introduit et consommé sur le chantier une boisson alcoolisée; qu'en reprochant à Monsieur X... son état d'ébriété le 7 août 2003, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 122-6 et L 122-14-2 du Code du travail;
- 3º ALORS QUE l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées sur un chantier ne constituent pas en elles-mêmes une faute; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 122-6 et L 232-2 du Code du travail;
- 4º ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en l'espèce, en se bornant à évoquer la production de «plusieurs attestations circonstanciées de personnes travaillant dans l'entreprise», établissant l'état d'ébriété de Monsieur X..., sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, desdites attestations, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

Décision attaquée: Cour d'appel de Metz, du 13 février 2007.

CONSUMO DE ALCOHOL SIN EMBRIAGUEZ

Roj: ATS 8581/2013
Id Cendoj: 28079140012013201737
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 415/2013
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Fernando de Castro Fernández
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a diez de Septiembre de dos mil trece.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNÁNDEZ.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Albacete se dictó sentencia en fecha 12 de marzo de 2012, en el procedimiento nº 40/12 seguido a instancia de DON Ceferino contra EMPRESA «EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.», sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DON Ceferino, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en fecha 31 de julio de 2012, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de diciembre de 2012 se formalizó por el Letrado Don Francisco Javier San Martín Rodríguez, en nombre y representación de MERCANTIL EIFFAGE ENERGÍA S.L., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 16 de mayo de 2013 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y

2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

Consta en la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de 31 de julio de 2012 (Rec. 770/2012), que el 28-11-2011, se notificó al actor carta de despido disciplinario por indisciplina y desobediencia en el trabajo, al amparo de lo dispuesto en el art. 54.2 b ET en relación con el art. 30 c), k) y l) del Convenio colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Albacete, constando probado que el día 23-11-2011, sobre las 9.30 horas, llegó la cuadrilla de trabajo a la que pertenecía el actor a la localidad de Hellín sin que pudiera iniciarse la ejecución de los trabajos encomendados por la climatología, lo que se comunicó a la empresa, por lo que el actor y otro compañero se dirigieron al bar «Los Serranos», donde permanecieron hasta las 13:00 horas, volviendo al lugar donde debían iniciar los trabajos al haber dejado de llover, momento en que el actor presentaba estado de embriaguez aunque se iniciaron éstos, manejando el actor la pluma. Como consecuencia de que se tuvieron que interrumpir nuevamente los trabajos por razones climatológicas, el actor y otro compañero regresaron nuevamente al bar, donde permanecieron hasta aproximadamente las 16.30, 17:00 horas, regresando solamente el compañero del actor que había acudido con él al bar al lugar donde debían ejecutarse los trabajos, que se reiniciaron, regresando el actor a la ciudad de Albacete desde el bar en un taxi por su estado de embriaguez. Los dos trabajadores estuvieron consumiendo varias botellas de vino. Tras ser convocado a una reunión en las dependencias de la empresa al día siguiente (24-11-2011), en la misma se reconoció por el actor que el día anterior y durante la jornada laboral había consumido alcohol. Consta igualmente probado que en el Plan Genérico de Seguridad y Salud para la Coordinación de Actividades Empresariales en Materia de Prevención de Riesgos Laborales en los trabajos a realizar para Iberdrola Distribución, consta que se podrá retirar la autorización de realizar trabajos *«cuando se observe que el trabajador incumple las normas de seguridad, o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado o la situación transitoria del trabajador no se adecuan a las exigencias psicofísicas requeridas por el tipo de trabajo a desarrollar»*, y además, en la Evaluación de Riesgos de la empresa, que *«debe recordar que maneja un equipo de trabajo que puede provocar graves lesiones a usted mismo o a otros operarios por ello preste la máxima atención y siga las normas establecidas, no beba alcohol, ni tome medicamentos que puedan afectar a su capacidad de trabajo»*.

La Sala de suplicación revoca la sentencia de instancia para declarar la improcedencia del despido, por entender que no consta que la embriaguez del trabajador sea habitual, ni que ello incidiera en el trabajo teniendo en cuenta que el día de los hechos no pudo llevarse a cabo éste por circunstancias meteorológicas, además de que teniendo en cuenta que el despido se produce por indisciplina o desobediencia, no existe constancia de que el trabajador hubiera recibido una orden de trabajo que se hubiera negado a realizar, ya que quien decidió suspender los trabajos por la lluvia fue el capataz, lo que hizo que el actor se guarneciera en un bar cercano, donde permaneció hasta que el capataz le ordenó que acudiera para comenzar la sustitución de las válvulas, sin que conste que el recurrente se negara, ni que se prohibiera al actor guarnecerse de la lluvia en el bar en el que se encontraba hasta ese momento. En definitiva, entiende la Sala que no puede considerarse que hubiera desobediencia alguna, al no serle prohibida la permanencia en el bar en el que se resguardó a la espera de que parara de llover, sin que los hechos tengan la suficiente gravedad como para llevar aparejada la sanción de despido al no desobedecer orden expresa, por lo que el despido debe ser calificado de improcedente.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la empresa, planteando dos motivos del recurso, el primero en el que cuestiona que el despido pueda ser calificado de improcedente teniendo en cuenta los presupuestos que conllevan la decisión de despido, para lo que selecciona, por escrito de 7 de marzo de 2013, en contestación a la Diligencia de Ordenación de 25 de febrero de 2013, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 4 de julio de 2006 (Rec. 1749/2006); y el segundo en el que igualmente cuestiona la calificación del despido por cuanto considera que los hechos que constan probados no son sólo los que figuran en el relato fáctico, sino también los que constan en cualquier otro lugar de la sentencia, argumentando que ha quedado acreditada la desobediencia cuando en el fundamento de derecho de la sentencia de instancia se determina que la empresa *«incide reiteradamente en los trabajadores en la necesidad de consumo cero de alcohol»*, y que la conducta del actor *«comporta una total omisión a las instrucciones dadas por la empresa en materia de seguridad y salud laboral»*, para lo que invoca de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de 16 de diciembre de 2010 (Rec. 1387/2010).

Consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 4 de julio de 2006 (Rec. 1749/2006), invocada de contraste para el primer motivo de casación unificadora, que el actor fue sancionado en dos ocasiones por ausencias al trabajo y haberse bebido una cerveza pese a la prohibición de consumir bebidas alcohólicas el 07-07-2005, habiendo sido sorprendido consumiendo bebidas en la bodega del bar del establecimiento durante la jornada de trabajo los días 7 y 8-05-2005, y falta de respeto a sus superiores, sanciones que no fueron impugnadas, siendo despedido disciplinariamente el 24-08-2005 por abuso de confianza, falta de respeto a su superior jerárquico, a compañeros y clientes, y reincidente consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada laboral sin autorización previa de ningún tipo, y ello por cuanto entre el 01-03 y el 24-07- 2005 se habían producido descuadres en las existencias de la bodega que no tenían justificación alguna, reconociendo el actor el consumo de los productos durante su jornada de trabajo, y entre el 27-07 y el 18-08-2005, ausencia nuevamente de botellas de cerveza, aceptando el trabajador que había realizado el consumo de las mismas, increpando al maitre sobre el horno que estaba apagado y en presencia de 8 clientes el día 20-08-2005. Consta igualmente que el trabajador denunció a la dirección de la empresa que era objeto de acoso laboral en el ambiente de trabajo en especial por parte del maitre, que el actor admitió en el acto de juicio que realizaba consumiciones, y que la empresa indicó de forma expresa que estaba prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en horas de trabajo así como la consumición de bebidas del establecimiento, y por la vía de revisión de hechos probados en suplicación, que el actor sigue tratamiento en la unidad de salud mental y por médico de atención primaria, con paroxetina y ansiolíticos. La Sala de suplicación confirma la sentencia de instancia que declaró la procedencia del despido del actor, por entender que aún existiendo órdenes expresas de que estaba prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en horas de trabajo, el actor desobedeció dichas órdenes, constando acreditado el descuadre de las existencias de la bodega y reconociendo el actor realizar consumiciones de cervezas del establecimiento en horas de trabajo.

De lo relacionado se desprende que no puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, por cuanto no existe identidad en los hechos que constan probados, de ahí que en atención a los mismos las razones de decidir de las Salas difieran, sin que puedan considerarse los fallos contradictorios. En efecto, en la sentencia recurrida, si bien se recuerda en la Evaluación de Riesgos de la Empresa, que se debe prestar la máxima atención en el manejo del equipo de trabajo, por lo que se deben seguir las normas establecidas, no beber alcohol ni tomar medicamentos, consta igualmente que los trabajos no pudieron iniciarse por razones climatológicas, por lo que el actor se refugió en un bar donde permaneció hasta que el capataz le ordenó que acudiera a trabajar, sin que éste se negara y sin que se le prohibiera guarnecerse de la lluvia en dicho bar, de ahí que aunque conste acreditado el consumo de bebidas alcohólicas por el actor, no consta acreditado que éste incumpliera órdenes empresariales que fue la causa de despido esgrimidas en la carta, de ahí que la Sala declare la improcedencia del mismo. Por el contrario, en la sentencia de contraste sí consta que a partir del año 2002, el Director del Hotel indicó de forma expresa que estaba prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en horas de trabajo así como la consumición de bebidas del establecimiento, de ahí que constando probado que el actor consumía cervezas (por reconocerlo el propio actor tras el descuadre de las existencias de la bodega), la Sala declare la procedencia del despido por haber incumplido el actor -que además había sido sancionado previamente con suspensión de empleo y sueldo por consumo de cervezas- las órdenes expresas.

SEGUNDO.- Tampoco puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la segunda invocada como término de comparación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de 16 de diciembre de 2010 (Rec. 1387/2010), para el segundo motivo de casación unificadora por el que la parte entiende que deben tenerse en cuenta para calificar el despido no sólo los hechos que constan probados en la relación fáctica, sino también los que puedan considerarse como tales y consten en la fundamentación jurídica, pues dicha sentencia confirma la de instancia que declaró la procedencia del despido, por constar probado que el trabajador que tenía la categoría de responsable de retén en cercadillo durante el tiempo de extinción de incendios forestales y de capataz durante el periodo de prevención, presentaba una situación de embriaguez habitual durante el tiempo de prestación de servicios, contraviniendo lo dispuesto en el art. 37 de II Convenio colectivo para el personal de las empresas adjudicatarias de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad de Castilla La Mancha, que considera dicha conducta como un incumplimiento contractual grave y culpable. Añade la Sala que si bien la sentencia de instancia presenta defectos de redacción manifiestos, pues en el relato fáctico se recoge la declaración de los diversos testigos de los hechos imputados sin figurar la convicción judicial que aparece recogida en la fundamentación jurídica, ello no constituye un óbice para entender cuáles son los hechos probados, ya que las declaraciones fácticas y dicha convicción judicial que están insertas en la fundamentación jurídica de la sentencia y no en sus hechos probados, tienen plena validez.

No puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, por cuanto en la sentencia de contraste la Sala fundamenta su decisión teniendo en cuenta los hechos que constan probados, que no sólo aparecen en el relato fáctico en el que se recogen con extensión la declaración de diversos testigos pero no la convicción judicial, sino en la fundamentación jurídica en la que sí figura dicha convicción judicial, por lo que en atención a ellos, y en particular a que consta acreditada la embriaguez habitual durante la prestación de servicios de quien ejercía funciones que podían afectar a la seguridad de otros trabajadores en una actividad peligrosa consistente en la prevención de incendios, declara la procedencia del despido al constar como causa extintiva la embriaguez o toxicomanía que repercuta negativamente en el trabajo en el art. 37 del II Convenio Colectivo para el personal de las empresas adjudicatarias de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad de Castilla La Mancha de aplicación en el supuesto enjuiciado. Nada de ello consta, ni se plantea ni se discute en la sentencia recurrida, en la que la Sala falla en atención a los hechos que constan probados sin determinar si los mismos se extraen del relato fáctico o constan en la fundamentación jurídica, declarando la improcedencia del despido no por embriaguez, sino por desobediencia a las órdenes empresariales, debiendo tenerse en cuenta además, que no es de aplicación la norma convencional aplicable en la sentencia recurrida, sino el Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Albacete.

TERCERO.- Por otra parte, la Sala ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995, 6 de Julio de 2004, R. 5346/2003, 24 de mayo de 2005, R. 1728/04, 8 de junio de 2006, R. 5165/2004 y 18 de diciembre de 2007, R. 4301/2006, 15 de enero de 2009, R. 2302/2007, 15 de febrero de 2010, R. 2278/2009, 19 de julio de 2010, R. 2643/2009, 19 de enero de 2011, R. 1207/2010, 24 de enero de 2011, R. 2018/2010 y 24 de mayo de 2011, R. 1978/2010).

CUARTO.- Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 30 de mayo de 2013, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 16 de mayo de 2013, sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto o argumentos jurídicos que desvirtúen el contenido de la misma, ya que se limita a reiterar lo ya expuesto en el escrito de interposición del recurso respecto de la existencia de contradicción con las sentencias de contraste de los dos motivos en que articula el recurso, lo que por las razones anteriormente expuestas no puede admitirse.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas, pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose en su caso a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Francisco Javier San Martín Rodríguez en nombre y representación de MERCANTIL EIFFAGE ENERGÍA S.L. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de fecha 31 de julio de 2012, en el recurso de suplicación número 770/12, interpuesto por DON Ceferino, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Albacete de fecha 12 de marzo de 2012, en el procedimiento nº 40/12 seguido a instancia de DON Ceferino contra EMPRESA «EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.», sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente, pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose en su caso a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.

Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 2303/2013
Id Cendoj: 28079140012013200352
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1722/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Antonio Martín Valverde
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Febrero de dos mil trece.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 7 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 2 de noviembre de 2011, en el procedimiento nº 876/2011 seguido a instancia de D. Urbano contra AC DOS LERIDA S.L.U., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 30 de marzo de 2012, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 15 de junio de 2012, se formalizó por la letrada Dª Susana Gutiérrez Lallave en nombre y representación de D. Urbano, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 10 de diciembre de 2012, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007

y 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

La sentencia impugnada confirma la dictada en la instancia, que ha declarado la procedencia del despido disciplinario enjuiciado. El actor, que prestaba servicios desde el 07/08/06 para la demandada como contable general, en la noche del 16 al 17/06/11 llegó al hotel donde trabajaba procediendo a consumir bebidas destinadas a los clientes. Durante el transcurso de la noche provocó distintos incidentes, como insultar y provocar al recepcionista, lanzar una maceta de flores y una botella de cerveza contra los muros del hotel, tocar las nalgas sin su consentimiento a una camarera y orinar en el recibidor del hotel. Llamado por los empleados, el Director del hotel acudió pasadas las 7 de la mañana y se llevó a su casa al trabajador. El demandante, el 22/06/11, con efectos retroactivos de 20/06/11, fue dado de baja, pasando a situación de IT, por enfermedad común (trastorno de ansiedad). La empresa imputa en la carta deslealtad o abuso de confianza, causar desperfectos en la empresa, atentar a la intimidad y dignidad de la mujer, e indisciplina entendida como transgresión de la buena fe contractual. La Sala de suplicación rechaza el argumento del actor de que no se le pueden imputar los diversos desmanes cometidos, al estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por cuanto del inmodificado relato fáctico se desprende que llegó al hotel con el propósito de consumir bebidas alcohólicas destinadas a los clientes, no constando que estuviese ebrio sino que en todo caso busco de propósito la embriaguez. Sin que —concluye— exista justificación en su comportamiento, gravemente perjudicial para la empresa al comprometer a clientes y compañeros de trabajo y suponer ruptura con las elementales normas cívicas en un espacio cerrado y habitado.

El trabajador interpone recurso de casación para unificación de la doctrina, articulando dos motivos, relativos a la necesidad de que el incumplimiento del trabajador sea grave y culpable, y a la aplicación del criterio gradualista.

1.- La sentencia propuesta para el primer motivo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21/05/08 (R. 2117/08), revoca la dictada en la instancia y califica el despido como improcedente. Se trata de un supuesto en el que el actor, que prestaba servicios desde el 04/04/05 como camarero, cuando el 13/09/07 se reincorporó al trabajo, tras haber permanecido en IT, faltó al respeto y acosó a una trabajadora que no conocía. El encargado percatándose de que estaba bebido y carecía de condiciones para trabajar, le recriminó si no le daba vergüenza y le ordeno marchar a su casa. Al día siguiente, en el cambio de turno, el demandante se dirigió a la trabajadora y le pidió perdón, diciéndole su compañera que valía pero que le dejara en paz. La Sala argumenta que en la carta de despido lo que se le imputa al trabajador es acudir a su puesto de trabajo el 13/09/07 en evidente estado de embriaguez, narrando a continuación los actos que protagonizó como consecuencia del mismo y manifestando que no era la primera vez que tenía lugar, calificando de habitual su embriaguez. Es esa conducta —continúa— la que exclusivamente ha de enjuiciarse, sin que puedan traerse otras que no figuran en la carta, y al no acreditarse que la embriaguez fuera habitual y no apreciarse que incurriera en una falta de desobediencia, ni transgrediera la buena fe contractual, ni maltratara de obra a compañeros, ni atentara al respeto de la intimidad y dignidad de la mujer mediante ofensas de carácter sexual, porque todas esas conductas se realizaron por el trabajador bajo los efectos de las bebidas alcohólicas y por tanto sin dolo ni culpa, califica el despido de procedente.

Las sentencias no son contradictorias pues las faltas imputadas a los respectivos trabajadores son distintas. La referencial parte de que en la carta de despido lo que se le imputa al trabajador es acudir a su puesto de trabajo en evidente estado de embriaguez, calificando de habitual la embriaguez; mientras que en la sentencia recurrida se imputa deslealtad o abuso de confianza, causar desperfectos en la empresa, atentar a la intimidad y dignidad de la mujer, e indisciplina entendida como transgresión de la buena fe contractual.

2.- La sentencia seleccionada para el segundo motivo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13/05/99 (R. 20/99), con estimación del recurso interpuesto por los trabajadores, declara la improcedencia de los despidos acaecidos como consecuencia de los insultos proferidos. La Sala de suplicación, parte de que los demandantes mantuvieron una discusión con el Director de la empresa en tono airado, y tras concluir la misma, uno de ellos se refirió a este superior en tono despectivo, y la otra hizo una llamada a su domicilio, insultando al Director y a su esposa. La Sala valora que las expresiones son proferidas en el acaloramiento de una fuerte discusión entre todos los implicados, en el marco de una riña, valorando especialmente que las trabajadoras son parientes cercanos del Director - sobrina directa y cuñada - y que sin la concurrencia de estos vínculos el comportamiento sería de mayor gravedad, y que en cierta manera

disculpa la llamada al domicilio en tanto que lo hace a casa de su hermana, comportamiento que no tiene continuidad alguna, que se limita a la expresión de dos palabras insultantes aisladas y ocasionales, y que no se produce entre el director y sus empleados ordinarios sino como consecuencia de una llamada telefónica de la trabajadora a casa de su propia hermana. Respecto a la otra trabajadora se valoran también los vínculos familiares. Concluye que si bien no son defendibles las expresiones insultantes, valoradas las circunstancias concurrentes, y que el comportamiento sancionado es ocasional, fruto de una airada discusión entre todos los implicados que no consta provocada por los trabajadores y se limita a unas expresiones puntuales desgraciadamente frecuentes en el marco de discusiones acaloradas, estima la improcedencia del despido.

Tampoco concurre la contradicción alegada, pues no existe la identidad sustancial de los hechos. Así, mientras en la recurrida se enjuicia una conducta consistente en provocar al trabajador a lo largo de una noche distintos incidentes, como insultar y provocar al recepcionista del hotel, lanzar una maceta de flores y una botella de cerveza contra los muros del edificio, tocar las nalgas sin su consentimiento a una camarera y orinar en el recibidor del hotel, en la referencial únicamente se analizan unos insultos, siendo totalmente dispares los implicados y las circunstancias concurrentes.

Por otra parte, la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del ET, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico [Sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (R. 1232/1990 y 2271/1991), 15 y 29 de enero de 1997 (R. 952/1996 y 3461/1995), 6 de julio de 2004 (R. 5346/2003), 9 de julio de 2004 (R. 3496/2002), 24 de mayo de 2005 (R. 1728/04) y 3 de julio de 2007 (R. 2486/07)].

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones, que no aporta argumentos nuevos. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada D^a Susana Gutiérrez Lallave, en nombre y representación de D. Urbano contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 30 de marzo de 2012, en el recurso de suplicación número 1551/2012, interpuesto por D. Urbano, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Madrid de fecha 2 de noviembre de 2011, en el procedimiento nº 876/2011 seguido a instancia de D. Urbano contra AC DOS LERIDA S.L.U., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 19 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-20387
Non publié au bulletin
Rejet
M. Lacabarats (président), président
SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 2011), que M. X...a été engagé le 1er avril 1979 par la société Parcs et Jardins Grandcolas, en qualité de chauffeur d'engins; qu'il a été licencié le 8 juin 2007; que, contestant la légitimité de son licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen:

- 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié une imprégnation alcoolique importante et une insuffisance professionnelle liée à ce premier reproche; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sur la seule constatation que le salarié avait connu un passage difficile dans sa vie professionnelle et personnelle qui avait gravement perturbé son activité, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail;
- 2°/ que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel qui, après avoir exclu que le licenciement puisse être fondé sur le seul grief d'intempérance faute d'être suffisamment démontré par l'employeur, se borne à constater que le salarié avait connu un passage difficile dans sa vie professionnelle et personnelle qui avait gravement perturbé son activité et eu des répercussions certaines sur le fonctionnement dans l'entreprise, sans préciser en quoi consistaient ce passage difficile et les perturbations qui en étaient résultées, ni en quoi cette circonstance était constitutive d'un motif réel et sérieux de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail;
- 3°/ que l'insuffisance professionnelle d'un salarié s'apprécie en fonction de sa qualification professionnelle; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'en sa qualité de conducteur d'engins, il n'était pas qualifié pour prendre les mesures et que sa seule fonction consistait à terrasser; que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, se borne à constater que l'employeur versait aux débats des attestations de clients mécontents incriminant personnellement le salarié, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les erreurs de niveaux ou d'implantations dénoncées par ces clients relevaient effectivement de la qualification du salarié, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-2 du code du travail;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que des clients de l'entreprise s'étaient plaints de la qualité du travail fourni par le salarié et retenu que son comportement avait eu des répercussions certaines sur le fonctionnement de cette entreprise, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'un des griefs visés par la lettre de licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X...aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral;

AUX MOTIFS QUE le licenciement repose également sur l'insuffisance professionnelle pouvant être liée à l'imprégnation alcoolique; que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle qui constitue une cause légitime de licenciement qui se distingue de la faute n'est pas soumis à la prescription de deux mois; que si le juge ne saurait substituer son appréciation à celle de l'employeur notamment dans l'appréciation des aptitudes professionnelles, il n'en demeure pas moins que l'insuffisance alléguée doit reposer sur des faits concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur; que l'employeur produit un certain nombre d'attestations de clients mécontents et incriminant personnellement M. X..., contrairement à ce que relevaient à tort les premiers juges; qu'ainsi le 11 mai 2007 la société Les logements de champagne Plurihabitat écrivait à l'entreprise Grandcolas qu'elle refusait toute nouvelle intervention pour les prochains chantiers de Mr X...; que M. Gérard Y... rédacteur de ce courrier a attesté dans les formes requises le 10 juin 2009 avoir constaté de nombreuses malfaçons du fait de M. X..., lequel est arrivé à plusieurs reprises sur le chantier, en ne paraissant pas dans «un état normal»; que le gérant de la SARL Coric par courrier en date du 15 mai 2007 se plaignait d'imperfections dans l'exécution des terrassements, en imputait directement la responsabilité à M. X..., et demandait l'intervention d'un autre chauffeur, faute de quoi la société se verrait dans l'obligation d'annuler les futurs contrats; que M. Z... directeur de la SARL FCC attestait le 18 janvier 2008 avoir eu à se plaindre du travail effectué par M. X... auprès de son employeur ainsi que de son comportement; que M. A... surveillant de chantier de Bati-Champagne confirme que deux clients se sont plaints auprès de lui de dégradations survenues lors de travaux de terrassements effectués par M. X...; qu'enfin, M. Gilles C... collègue de M. X... confirmait avoir été dans l'obligation d'empêcher ce dernier de conduire le camion semi-remorque et de prendre le volant à sa place, l'avoir signalé à son employeur mais ne pas avoir souhaité faire une attestation; qu'il est constant que l'intempérance peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement voire une faute grave selon les circonstances, notamment quand les faits d'intempérance ont des répercussions sur la marche du service et le préjudice commercial qui peut en résulter; qu'en l'espèce, l'employeur démontre suffisamment que M. X... a eu un passage difficile dans sa vie professionnelle et personnelle qui a gravement perturbé son activité et a eu des répercussions certaines sur le fonctionnement de l'entreprise, générant pour cette dernière un préjudice commercial tant financier que sur l'image de l'entreprise; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse;

- 1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié une imprégnation alcoolique importante et une insuffisance professionnelle liée à ce premier reproche; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sur la seule constatation que le salarié avait connu un passage difficile dans sa vie professionnelle et personnelle qui avait gravement perturbé son activité, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail;
- 2°/ ALORS QUE tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; que la Cour d'appel qui, après avoir exclu que le licenciement puisse être fondé sur le seul grief d'intempérance faute d'être suffisamment démontré par l'employeur, se borne à constater que le salarié avait connu un passage difficile dans sa vie professionnelle et personnelle qui avait gravement perturbé son activité et eu des répercussions certaines sur le fonctionnement dans l'entreprise, sans préciser en quoi consistaient ce passage difficile et les perturbations qui en étaient résultées, ni en quoi cette circonstance était constitutive d'un motif réel et sérieux de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail;

3°/ ALORS QUE l'insuffisance professionnelle d'un salarié s'apprécie en fonction de sa qualification professionnelle; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'en sa qualité de conducteur d'engins, il n'était pas qualifié pour prendre les mesures et que sa seule fonction consistait à terrasser (conclusions d'appel p. 6); que la Cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, se borne à constater que l'employeur versait aux débats des attestations de clients mécontents incriminant personnellement le salarié, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les erreurs de niveaux ou d'implantations dénoncées par ces clients relevaient effectivement de la qualification du salarié, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-2 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Reims, du 4 mai 2011.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 18 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-22668

Non publié au bulletin

Rejet

M. Lacabarats (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 2011), que M. X..., engagé par la société Faurecia bloc le 13 septembre 1976, occupait depuis près de douze ans un emploi de magasinier cariste lorsqu'il a été licencié pour faute par lettre recommandée du 7 janvier 2008 pour avoir apporté et consommé du vin dans l'entreprise; qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen:

- 1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision; qu'en l'espèce, l'employeur contestait expressément avoir eu connaissance de la consommation d'alcool par le salarié et son collègue lors des pauses et soutenait qu'ils avaient agi en secret, et produisait les attestations de MM. Y... et Z..., responsables logistiques, dont il résultait que les salariés, lorsqu'ils avaient été surpris en train de consommer du vin le 14 décembre 2007, avait dans un premier temps cherché à dissimuler leur acte, ce qui établissait qu'ils souhaitaient le cacher; qu'en affirmant qu'il était «établi» qu'aucune sanction ne leur avait jamais été notifiée pour de tels faits ni même pour d'autres faits «alors qu'ils ne se cachaient pas», sans indiquer de quel élément elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
- 2°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; que l'employeur avait versé aux débats des attestations dont il ressortait que le salarié avait reconnu avoir consommé du vin en dépit de l'interdiction absolue édictée par le règlement intérieur; qu'ainsi, il produisait une attestation de M. Z..., responsable logistique, selon laquelle «MM. X... et X... ont reconnu avoir consommé de l'alcool et être en faute par rapport au règlement intérieur de l'usine» et une attestation de M. A..., gestionnaire du personnel, indiquant que «ces deux salariés savaient de plus notre extrême sévérité à faire respecter la non introduction et la non consommation d'alcool sur le site»; qu'en jugeant que l'employeur n'établissait pas avoir régulièrement informé le personnel de l'interdiction de consommer du vin, sans examiner ces attestations qui établissaient que M. X... en était, lui, parfaitement informé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
- 3°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; que, pour établir qu'après la réunion du CHSCT de janvier 2008, le personnel avait de nouveau été régulièrement informé de l'interdiction d'introduire et de consommer du vin dans l'entreprise, l'employeur avait versé aux débats une note d'information GAP du 12 février 2008 rappelant que «l'introduction de boissons alcoolisées est strictement interdite»; qu'en affirmant qu'aucun document ne permettait de vérifier que cette information, préconisée par le CHSCT, avait été régulièrement donnée aux salariés, sans examiner cette note d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
- 4°/ qu'en tout état de cause, qu'à supposer l'article 4-1 du règlement intérieur de l'entreprise non opposable aux salariés, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié dont les fonctions

consistent à conduire un véhicule de le faire sous l'emprise d'un état alcoolique, même si son taux d'alcoolémie est inférieur au taux pénalement punissable; qu'en l'espèce, le salarié avait reconnu qu'il consommait habituellement du vin sur son lieu de travail lors des pauses et que le jour des faits litigieux il avait consommé deux verres de vin, ce qui lui était reproché dans la lettre de licenciement; qu'en s'abstenant d'examiner si une telle consommation d'alcool, pendant les pauses, ne constituait pas en tout état de cause, compte tenu des fonctions de cariste du salarié et des conditions d'exercice de celles-ci, une faute justifiant le prononcé du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail;

- 5°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision; que la lettre de licenciement de janvier 2008 fait état d'une mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de M. X... le 12 juin 2007 notamment pour «non-respect des règles générales de sécurité», sanction dont le salarié n'avait pas contesté l'existence; qu'en disant que le salarié licencié pour «comportement récurrent concernant le non-respect de prescriptions de sécurité» n'avait jamais été sanctionné ou averti pour des faits similaires ni même pour d'autres faits, sans indiquer de quel élément elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas reproché au salarié d'avoir été en état d'ivresse ou d'ébriété et relevé qu'il n'était justifié d'aucune sanction ou avertissement préalable à l'encontre de ce salarié qui avait une ancienneté dans l'entreprise de plus de trente-deux ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour en déduire que le licenciement du salarié n'avait pas de cause sérieuse et a ainsi légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Faurecia bloc avant aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Faurecia bloc à payer à M. X... la somme de 1 250 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Faurecia bloc avant.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FAURECIA BLOC AVANT à payer à monsieur X... les sommes de 28.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société FAURECIA BLOC AVANT aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement;

AUX MOTIFS QUE monsieur Philippe X..., salarié de la société Faurecia Bloc Avant depuis le 13 septembre 1976 et occupant depuis près de douze ans l'emploi de magasinier cariste, ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement notifiée le 7 janvier 2008 visant des faits commis le 14 décembre 2007 suivis d'une mise à pied à titre conservatoire, mais conteste principalement la nature de la sanction prise ainsi que la licéité de l'article du règlement intérieur sur lequel repose la sanction, à savoir l'article 4-1 dudit règlement entré en vigueur le 1er juin 2004, lequel est ainsi rédigé: «Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement en état d'ivresse. L'introduction de boissons alcoolisées est strictement interdite. Tout membre du personnel dont le comportement laisse supposer une consommation excessive d'alcool est reconduit à ses frais et sans délai jusqu'à son domicile. Tout salarié qui contesterait son état d'imprégnation alcoolique pourra proposer d'en faire la preuve en usant d'un éthylomètre mis à sa disposition par le service du personnel. Lorsque l'état d'un salarié constitue, du fait de ses fonctions, un risque grave ou une situation

dangereuse pour sa sécurité ou celle des tiers, la direction pourra imposer un moyen de contrôle du taux d'alcoolémie dans les limites fixées par la loi en vigueur (tels que l'alcootest, éthylomètre...) dans le but de prévenir ou de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse ou ce risque grave. Ce contrôle est effectué à la demande des représentants de la direction ayant la responsabilité de l'application des règles de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail et il est réalisé par un représentant des services des ressources humaines ou hygiène sécurité. Un membre du CHSCT ou, à défaut un délégué du personnel ou, à défaut, un autre membre du personnel pourra sur la demande de l'intéressé être présent lors de ce test. Le salarié peut contester le résultat en apportant la preuve contraire et peut demander une contre-expertise»; Attendu que ce texte est plus restrictif que l'article R. 4228-20 du code du travail qui dispose qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail, mais a néanmoins vocation à être appliqué dès lors qu'il a été adopté régulièrement et qu'il vise à améliorer la sécurité du personnel dans l'entreprise en limitant autant que possible les risques liés à l'alcool; Que toutefois une telle interdiction de toute boisson alcoolisée depuis le 1er juin 2004 doit nécessairement être accompagnée d'une information exhaustive et régulière, notamment en ce qui concerne l'introduction sur le site de l'entreprise de boissons comme le vin ou la bière, lesquelles étaient autorisées avant l'entrée en vigueur de ce règlement, étant relevé que l'article 4-1 du règlement intérieur porte essentiellement sur les moyens de contrôler la consommation excessive d'alcool et ses conséquences, et que l'interdiction de l'introduction de boissons alcoolisées sur le site n'est que l'un des moyens de prévention de l'alcoolisme; Qu'en l'espèce, s'il est constant que M. X... et son collègue M. B... ont introduit sur le site de l'entreprise une bouteille de vin le 14 décembre 2007 et ont consommé du vin vers 18 heures lors d'un casse-croûte pris au réfectoire, et si ces derniers ont reconnu qu'ils agissaient habituellement ainsi, il est également établi qu'aucune sanction ni avertissement ne leur avait jamais été notifié pour de tels faits, ni même pour d'autres faits, alors qu'ils ne se cachaient pas, Mr B..., qui avait également interjeté appel du jugement le déboutant de ses demandes, ayant même précisé à l'audience où les deux affaires ont été appelées, que les verres étaient sur la table; Que dès lors se pose nécessairement la question de l'information donnée aux salariés quant à l'interdiction d'introduire notamment du vin dans la cafétéria, alors qu'une telle consommation était selon les salariés eux-mêmes habituelle et faite au vu et au su de tous, et qu'en tout cas se pose la question de la proportionnalité de la sanction étant acquis qu'aucun reproche n'est fait au salarié quant à un quelconque état d'ivresse ou d'ébriété, seule la violation du règlement étant en cause; Que les documents produits aux débats permettent de relever des carences dans le domaine de l'information et de la prévention, ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal de la réunion du CHSCT tenue quelque peu tardivement en janvier 2008 à la demande des membres de ce comité en date du 23 octobre 2007, l'un des membres, M. C..., s'étant exprimé ainsi: «Il n'y a pas eu d'information de faite concernant la consommation du quart de litre de vin rouge lors des repas. Nous sommes intimement convaincus que % du personnel pensent qu'il est toujours possible de consommer ce quart de litre de vin rouge. Cela pose problème et la dernière information concernant l'interdiction de consommer de l'alcool date du 27 juillet 2000. S'il n'y a pas d'informations de faites de façon régulière, les choses sont oubliées. Nous tenons donc à faire prendre en compte deux points: -il y a un gros travail d'information à faire auprès du personnel, -il n'y a plus du tout de politique de prévention de faite, un travail de prévention est donc à faire... La direction ne voit plus que la répression au détriment de la prévention»; Qu'aucun document probant ne permet de vérifier qu'une telle information a été donnée régulièrement aux salariés, étant relevé que l'inspecteur du travail, dans une lettre adressée à l'employeur le 29 février 2008, a demandé à ce dernier de porter à sa connaissance le contenu de l'information faite à l'attention du personnel sur cette question de l'alcool et de sa consommation dans l'établissement, la suite donnée n'étant pas connue de la cour; Qu'au vu de ces éléments, si le fait reproché à M. X... est bien réel, il ne peut être qualifié de sérieux faute de preuve d'une information et d'une prévention suffisantes, étant à nouveau relevé qu'il n'est justifié d'aucune sanction ou avertissement préalable à l'encontre de ce salarié qui a..uvré au service de l'entreprise depuis 1976; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. X... de sa demande et l'a condamné aux dépens; Que ce dernier, né en 1957, comptait près de ans d'ancienneté; qu'il a incontestablement subi un préjudice du fait de son licenciement, étant relevé que sa situation après le licenciement n'est pas connue; qu'une indemnité de 28.000 € lui sera allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Qu'il sera d'autre part fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois; Qu'il sera en outre alloué une indemnité de 800 € à M. X... au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- 1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision; qu'en l'espèce, l'employeur contestait expressément avoir eu connaissance de la consommation d'alcool par le salarié et son collègue lors des pauses et soutenait qu'ils avaient agi en secret, et produisait les attestations de messieurs Y... et Z..., responsables logistiques, dont il résultait que les salariés, lorsqu'ils avaient été surpris en train de consommer du vin le 14 décembre 2007, avaient dans un premier temps cherché à dissimuler leur acte, ce qui établissait qu'ils souhaitaient le cacher; qu'en affirmant qu'il était «établi» qu'aucune sanction ne leur avait jamais été notifiée pour de tels faits ni même pour d'autres faits «alors qu'ils ne se cachaient pas», sans indiquer de quel élément elle tirait une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
- 2°/ ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; que l'employeur avait versé aux débats des attestations dont il ressortait que le salarié avait reconnu avoir consommé du vin en dépit de l'interdiction absolue édictée par le règlement intérieur; qu'ainsi, il produisait une attestation de monsieur Z..., responsable logistique, selon laquelle «messieurs X... et X... ont reconnu avoir consommé de l'alcool et être en faute par rapport au règlement intérieur de l'usine» et une attestation de monsieur A..., gestionnaire du personnel, indiquant que «ces deux salariés savaient de plus notre extrême sévérité à faire respecter la non introduction et la non consommation d'alcool sur le site»; qu'en jugeant que l'employeur n'établissait pas avoir régulièrement informé le personnel de l'interdiction de consommer du vin, sans examiner ces attestations qui établissaient que monsieur X... en était, lui, parfaitement informé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
- 3°/ ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; que, pour établir qu'après la réunion du CHSCT de janvier 2008, le personnel avait de nouveau été régulièrement informé de l'interdiction d'introduire et de consommer du vin dans l'entreprise, l'employeur avait versé aux débats une note d'information GAP du 12 février 2008 rappelant que «l'introduction de boissons alcoolisées est strictement interdite»; qu'en affirmant qu'aucun document ne permettait de vérifier que cette information, préconisée par le CHSCT, avait été régulièrement donnée aux salariés, sans examiner cette note d'information, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
- 4°/ ALORS, en tout état de cause, QU'à supposer l'article 4-1 du règlement intérieur de l'entreprise non opposable aux salariés, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié dont les fonctions consistent à conduire un véhicule de le faire sous l'emprise d'un état alcoolique, même si son taux d'alcoolémie est inférieur au taux pénalement punissable; qu'en l'espèce, le salarié avait reconnu qu'il consommait habituellement du vin sur son lieu de travail lors des pauses et que le jour des faits litigieux il avait consommé deux verres de vin, ce qui lui était reproché dans la lettre de licenciement; qu'en s'abstenant d'examiner si une telle consommation d'alcool, pendant les pauses, ne constituait pas en tout état de cause, compte tenu des fonctions de cariste du salarié et des conditions d'exercice de celles-ci, une faute justifiant le prononcé du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1232-6 du code du travail;
- 5°/ ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision; que la lettre de licenciement du 7 janvier 2008 fait état d'une mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de monsieur X... le 12 juin 2007 notamment pour «non respect des règles générales de sécurité», sanction dont le salarié n'avait pas contesté l'existence; qu'en disant que le salarié licencié pour «comportement récurrent concernant le non respect de prescriptions de sécurité» n'avait jamais été sanctionné ou averti pour des faits similaires ni même pour d'autres faits, sans indiquer de quel élément elle tirait une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Décision attaquée: Cour d'appel de Besançon, du 7 juin 2011.

<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL3.361.102

Jurisprudencia

Jurisdicción: Social

Ponente: José Luis Gilolmo López

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 27/11/2012

Tipo Resolución: Auto

Sala: Cuarta

Número Recurso: 1402 / 2012

ENCABEZAMIENTO:

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Noviembre de dos mil doce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ LUIS GILOLMO LÓPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Valencia se dictó sentencia en fecha 12 de septiembre de 2011, en el procedimiento nº 670 / 11 seguido a instancia de DON Luis Pablo contra EMPRESA CONSUM, S. COOP. V., sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por CONSUM S. COOP VAL., siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 17 de enero de 2012, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 30 de abril de 2012 se formalizó por el Letrado Don Marcos M^a Hermida Revilla, en nombre y representación de DON Luis Pablo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 2 de octubre de 2012 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y falta de fundamentación de la infracción legal. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser - a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo - una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo.

Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430 / 2004 y R. 2082 / 2004; 25 de julio de 2007, R. 2704 / 2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586 / 2006 y 312 / 2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993 / 2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703 / 2006 y 2506 / 2007), 24 de junio de 2011, R. 3460 / 2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307 / 2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328 / 2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753 / 2010.

Consta en la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 17 de enero de 2012 (Rec. 3169 / 2011), que CONSUM, S. COOP. V., acordó por escrito de 04 - 05 - 2011 la incoación de expediente disciplinario al actor con designación de instructor, por disminución voluntaria y continuada en el

rendimiento del trabajo que afectaba negativamente al funcionamiento de la tienda, lo que suponía una falta muy grave con propuesta de expulsión en aplicación del art. 20. 2 c) de lo estatutos sociales. El actor formuló alegaciones en el sentido de que el pliego de cargos adolecía de indeterminación, si bien el Consejo Rector de la cooperativa resolvió confirmar la sanción de expulsión del actor, formulando éste impugnación ante la Comisión de Recursos que fue desestimada, confirmándose de este modo la sanción de expulsión, habiendo suspendido cautelarmente la cooperativa de empleo al demandante. El actor suscribió con el representante de la cooperativa un documento en el que se ponía de manifiesto que el actor había incurrido en determinados hechos que se especificaban, por lo que en aras a preservar su honor, la empresa disponía su expulsión por la comisión de una falta muy grave, contemplándose en el mismo que «a fin de evitar futuros litigios en cualquier orden jurisdiccional, ambas partes pactan la extinción de la relación laboral que las une», conteniéndose como estipulaciones la entrega de las cantidades que constan en el hecho probado cuarto en concepto de saldo de cuentas y finiquito y de capital social, comprometiéndose el actor «a no ejercitar acción legal alguna contra esta extinción de la relación laboral que le une con la empresa,... por lo que renuncia expresamente de cualquier acción proveniente de la relación laboral que hoy se extingue... no teniendo nada más que reclamar ni por el despido ni por cualquier otro concepto derivado de la relación laboral extinguida». En instancia se declara improcedente e indebida la expulsión disciplinaria. La Sala de suplicación revoca dicha sentencia para desestimar la demanda, por entender que debe otorgarse valor liberatorio al recibo de finiquito, ya que el actor suscribió un acuerdo en el que las partes manifiestan que el actor ha incurrido en determinados hechos que se concretan, tales como consumir alcohol en la tienda en horario de apertura al público sin abonar las botellas que consumía, ofrecer a sus subordinados el consumo de bebidas alcohólicas, etc. y en aras a preservar su honor, la empresa dispone su expulsión, firmando el documento de transacción en el que se le liquidan las cantidades en concepto de saldo de cuentas y finiquito y capital social, lo que supone una verdadera transacción.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina el actor, por considerar que no debe otorgarse valor liberatorio al documento firmado, para lo que invoca de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 10 de noviembre de 2009 (Rec. 2468 / 2009), en la que consta que la actora prestaba servicios igualmente para CONSUM Sociedad Cooperativa Valenciana, cuando, una trabajadora comunicó al encargado del centro que había dejado pasar por caja una compra de pescadería preparada por la actora a su compañero sentimental, en la que le había incluido productos que no se habían contabilizado en el ticket de compra, por lo que se impuso a dicha trabajadora una sanción y la dirección del centro llamó a la actora a una reunión en la que estaban presentes la asesora jurídica y representante legal del centro para exponerle que habían decidido despedirla y que para evitarle perjuicios no iban a incoar expediente por falta de hurto, presentándole una documentación en la que se simula la incoación y tramitación de un expediente por disminución voluntaria y continuada del rendimiento del trabajo, conminándola para que firmara un documento donde aceptaba la sanción impuesta y finalizaba la relación laboral sin indemnización, además de la renuncia de la trabajadora a ejercitar la acción legal de despido, dándose aviso a la representante social del centro que explicó a la actora la situación, sin que asesorara a la actora sobre el contenido del documento, estando la actora en todo momento alterada y preocupada, no pudiendo contener el llanto, negando el haber cometido falta alguna. En instancia se declara la nulidad de la sanción impuesta declarando improcedente el despido derivado de dicha sanción, confirmando la Sala de suplicación dicha sentencia, por entender que de la lectura del documento firmado por la trabajadora se detecta una falta total de un objeto cierto, determinado y determinable, ya que la actora se compromete a prestaciones claras (aquietarse con la extinción del vínculo y renunciar a cualquier acción derivada de la extinción contractual, es decir, renuncia a todo desde la firma de finiquito), mientras que las prestaciones de la cooperativa no son claras, ya que no se precisa cantidad alguna que se comprometía a abonar por el saldo de cuentas y finiquito, ni por devolución del capital social que se referencia a lo que le corresponda a fecha 08 - 01 - 2008. A mayor abundamiento, la Sala determina, como ya se hizo en instancia, que no concurre reciprocidad de prestaciones entre las partes propias de una transacción, ya que la cooperativa no renuncia a nada, y la actora no obtiene ningún beneficio, al revés, es privada de ejercitar su defensa ante los órganos de la cooperativa y ante los órganos judiciales o extrajudiciales externos a la misma.

De lo relacionado se desprende que no puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, ya que no existe identidad en los hechos que constan probados en ambas sentencias, de ahí

que las razones de decidir de ambas difieran, no pudiendo considerarse los fallos contradictorios. En efecto, en la sentencia recurrida lo que consta es que se incoó expediente disciplinario al actor, con designación de instructor, formulando éste alegaciones, confirmándose la sanción impuesta por el consejo rector de la cooperativa, por lo que el actor impugnó la misma ante la comisión de recursos que la confirmó, por lo que suscribió un documento en el que en aras a preservar su honor, se disponía la expulsión por la comisión falta muy grave, comprometiéndose la empresa a abonar las cantidades que constan en el hecho probado cuarto en concepto de saldo de cuentas y finiquito y capital social, y el actor a no ejercitar acción legal alguna contra la extinción, de ahí que la Sala otorgue valor liberatorio al documento transaccional firmado; por el contrario, en la sentencia de contraste lo que consta es que la cooperativa llamó a una reunión a la actora en la que estaban presentes la asesora jurídica, el jefe de tienda, y posteriormente la representante social del centro, en la que le explicaron la situación a la trabajadora, conminándole a firmar un documento apelando a su interés familiar, negando la actora en todo momento que hubiera cometido falta alguna, mostrándose alterada y preocupada, no pudiendo contener el llanto, señalándole que para evitarle perjuicios no iban a incoar expediente por falta de hurto, y constando en el documento únicamente que la actora renunciaba a emprender acciones legales y la empresa que le abonaría la cantidad que le correspondiera a una fecha determinada en concepto de saldo de cuentas y finiquito que no estaba concretada, de ahí que la Sala no otorgue valor liberatorio al documento firmado por considerar que no sirve en cuanto que documento transaccional, ya que la cooperativa no renuncia a nada, y ningún beneficio obtiene la actora que por el contrario se ve privada de ejercitar su defensa ante los órganos de la cooperativa y ante órganos judiciales o extrajudiciales.

SEGUNDO.- Pero es que además, la parte recurrente, al hilo de la comparación de sentencias que realiza, invoca los artículos 1264 y 1265 CC, pero no expone, más allá que la comparación referida, las razones por las que existe infracción legal, y el recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley o, en su caso, en el quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho. Todo ello, de acuerdo con el artículo 224 1. b) y 224. 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 207 del mismo texto legal. La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, precisa la Ley Reguladora de la Jurisdicción social, consiste en expresar «separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207, excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas». La Jurisprudencia de esta Sala ya había señalado con insistencia que dicha exigencia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» (sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 2008, R. 2206 / 2006 y 5 de marzo de 2008, R. 1256 / 2007 y 4298 / 2006, 14 de mayo de 2008, R. 734 / 2007 y 1671 / 2007; 17 de junio de 2008, R. 67 / 2007; 25 de septiembre de 2008, R. 1790 / 2007; 2 y 7 de octubre de 2008, R. 1964 / 2007 y 538 / 2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2791 / 2007; 7 de octubre de 2011, R. 3528 / 2010; 13 de octubre de 2011, R. 4019 / 5010 y 13 de diciembre de 2011, R. 4114 / 2010).

TERCERO.- Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 19 de octubre de 2012, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 2 de octubre de 2012, insistiendo en la existencia de contradicción, pero sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto o argumentos jurídicos que desvirtúen el contenido de la misma, y señalando las razones por las que considera infringidos los preceptos que menciona, lo que realiza en momento procesal inoportuno.

CUARTO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin que, a tenor de lo dispuesto en el art. 235. 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, haya lugar a la imposición de costas Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Marcos M^a Hermida Revilla en nombre y representación de DON Luis Pablo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 17 de enero de 2012, en el recurso de suplicación número 3169 / 11, interpuesto por EMPRESA CONSUM S. COOP. VAL., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Valencia de fecha 12 de septiembre de 2011, en el procedimiento nº 670 / 11 seguido a instancia de DON Luis Pablo contra EMPRESA CONSUM, S. COOP. V., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 20 juin 2012

N° de pourvoi: 11-19914

Non publié au bulletin

Rejet

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Le Prado, SCP Boullez, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2011), que MM. X... et Y..., engagés respectivement les 1er avril 1986 et 16 juillet 2001 par la société Imprimerie Bretecher au sein de laquelle ils exerçaient les fonctions d'aide finition tasseur pour le premier et de massicotier pour le second, ont été licenciés pour faute grave par lettres du 4 mars 2008, l'employeur leur reprochant une consommation d'alcool sur le lieu et aux heures du travail;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser les salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen:

- 1°/ que la tolérance de l'employeur est enfermée dans son objet; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la consommation d'alcool par l'employeur était seulement permise à de rares occasions festives dans un cadre limité; qu'en décidant cependant que la tolérance de l'employeur lui interdisait de licencier MM. X... et Y... pour avoir consommé de l'alcool dans les vestiaires de l'entreprise à 5 h 30 du matin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que MM. Y... et X... étaient clairement sortis du cadre de la tolérance de l'employeur qui avait enfermé la consommation d'alcool par ses salariés sur le lieu de travail dans de strictes limites en la surveillant et en l'encadrant à l'occasion de diverses fêtes ou pots comme il est d'usage dans toute entreprise sans leur permettre pour autant de boire de l'alcool en dehors de ce cadre strictement défini par l'usage; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1234-1 du code du travail;
- 2°/ que si tel n'est pas le cas qu'à la supposer établie, la tolérance de l'employeur à l'égard du comportement fautif du salarié lui laisse la faculté de procéder à un licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors que le comportement est constitutif d'une telle faute; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la consommation d'alcool par MM. X... et Y... constituait indiscutablement une faute disciplinaire (arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa); qu'en décidant cependant que l'employeur ne pouvait pas s'en prévaloir pour procéder à leur licenciement pour faute grave dès lors qu'il avait toléré la consommation d'alcool sur les lieux de travail à l'occasion de réunions ou de fêtes qu'il encadrait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait à tout le moins que leur licenciement était justifié par une faute simple; qu'ainsi, elle a violé l'article L.1235-1 du code du travail;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à plusieurs reprises l'employeur avait admis l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans l'établissement à l'occasion de la fête des rois et de réunions de fin d'année ou d'anniversaires sur le temps et au lieu du travail, la cour d'appel a pu décider que la consommation à une seule reprise d'une très faible quantité d'alcool par les salariés avant la prise du travail ne rendait pas impossible leur maintien dans l'entreprise; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Imprimerie Bretecher aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Bretecher et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à MM. X... et Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Bretecher

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE BRETECHER à payer à M. Jean-Michel X... et à M. Christian Y..., des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, en développant ce moyen les salariés ne contestent cependant pas formellement leur absence de badgeage lors du contrôle ni une consommation d'alcool sur le lieu du travail; qu'en second lieu, il convient de relever que les termes de la lettre de licenciement qui fixent les motifs du litige n'évoque que les faits du 18 février 2008, de sorte que les faits antérieurs ou le comportement passé des intéressés ne peuvent être pris en considération; qu'invoquant la faute grave, l'employeur supporte la charge de la preuve; que Monsieur Z..., directeur, a délivré une attestation dans laquelle il affirme avoir vu le 18 février 2008 à 5 h 30 Monsieur X... prendre une bouteille dans sa voiture côté passager, et s'étant rendu accompagné du dirigeant de l'entreprise dans les vestiaires hommes, y avoir trouvé Jean-Michel X..., Christian Y... et Stéphane A...; Monsieur X... déclarait à cet instant «tu l'as mis où ton verre?»; qu'il a été alors trouvés par Monsieur Z... dans un casier sans nom et sans cadenas deux verres vides et un verre de vin rosé plein, un tire-bouchon ainsi qu'une bouteille de vin rosé entamée; que les salariés niant avoir consommé de l'alcool, le test pratiqué avec un éthylotest électronique s'est révélé positif pour Monsieur X... et Monsieur Y... qui ont alors reconnu selon Monsieur Z..., qu'ils avaient consommé de l'alcool; que les résultats positifs de l'éthylotest pour les 2 salariés et la présence dans un casier non attribué d'une bouteille de rosé entamée et d'un verre rempli sont attestés par Monsieur B... salarié présent lors de l'intervention du directeur; qu'enfin par lettres du 13 mars 2008, les salariés ont expressément reconnu avoir consommé du vin le 18 février 2008, mais avant la prise du travail à 5 h 00 du matin; que cependant les éléments concordants rapportés dans l'attestation de Monsieur Z... sur les constatations effectuées dans les vestiaires (présence des salariés dans les vestiaires, d'une bouteille de vin entamée et d'un verre rempli), permettent d'écarter l'affirmation d'une consommation avant la prise du travail; que Monsieur Y... et Monsieur X... contestent la légitimité du contrôle de leur alcoolémie; que cependant le règlement intérieur prévoyait l'interdiction formelle d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées à l'intérieur de l'établissement et autorisait la direction à faire pratiquer des alcootests aux salariés dans le cas où leur état constituerait un danger pour eux-mêmes ou leur entourage, dans le but de prévention d'une situation dangereuse; qu'en l'espèce, alors que les salariés étaient pris alors qu'ils venaient de consommer une boisson alcoolisée, le contrôle de leur alcoolémie prévu par le règlement intérieur était possible pour s'assurer de leur état de santé, étant précisé que l'activité de l'employeur comporte l'usage de machines susceptibles d'être dangereuses, notamment pour Monsieur Y... massicotier ou encore Monsieur X... tasseur; que ce contrôle était donc justifié pour prévenir une situation potentiellement dangereuse pour les salariés établie à partir de faits objectifs de consommation d'alcool, le travail dans des ateliers d'imprimerie en état d'ébriété étant de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger; qu'enfin, le règlement intérieur prévoyait expressément le recours à l'alcootest, sans qu'il soit nécessaire que les modalités de contestation de ce contrôle y soient précisées, dès lors qu'en l'espèce, la lettre du 13 mars 2008 de Monsieur Y... et l'attestation de Mr A... établissent que les intéressés ont pu être soumis à un second test de contrôle qui s'est avéré négatif: que le fait fautif est donc incontestablement établi contre les deux salariés; que cependant les pièces produites aux débats font apparaître que l'employeur en contradiction avec les termes du règlement intérieur prohibant l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans l'établissement, a organisé le 2 février 2007 une réunion du personnel sur le temps et le lieu du travail à l'occasion de la fête des rois, au cours de laquelle il était offert aux salariés des boissons alcoolisées; que lors de cette réunion tenue de 17 h 30 à 18 h 00 environ, deux salariés dont Monsieur Y... travaillait pourtant jusqu'à 24 h 00 ce soir-là; que l'attestation de Monsieur C... salarié de l'entreprise jusqu'en décembre 2004 produite par l'employeur, rapporte également que ce dernier autorisait quelques réunions de fin d'année ou d'anniversaire, avec boissons alcoolisées ou non; que le fait que ces réunions étaient encadrées afin d'éviter d'éventuels débordements ou excès, était néanmoins de nature à représenter aux yeux des salariés une tolérance et en tout cas une application non rigoureuse des prescriptions du règlement intérieur; qu'en l'espèce les taux d'alcoolémie relevés le 18 février 2008 chez Monsieur Y... et Monsieur X... étant

très limités (il est admis qu'ils étaient inférieurs au taux prohibé pour la conduite d'un véhicule automobile), et s'étant avérés négatifs au second contrôle, n'étaient pas le signe d'un excès important ou d'un état d'ébriété manifeste ni révélateurs d'une consommation manifestement supérieure à celle pouvant résulter des manifestations festives avec boissons alcoolisées tolérées par l'employeur; que de ce fait alors qu'il n'est pas établi contre les salariés concernés qu'ils auraient dépassé des limites non excusables au regard de la tolérance de l'employeur, il n'apparaît pas en l'espèce que la faute établie contre Monsieur X... et Monsieur Y... était d'une gravité telle qu'elle pouvait justifier le licenciement des intéressés a fortiori pour faute grave; que par ailleurs, il résulte de la fiche de badgeage des intéressés que ces derniers ayant «badgé» leur prise de travail à 4 h 50 et 4 h 51, n'avaient pas activé leur badge à 5 h 30 lorsqu'ils ont été surpris à l'intérieur des vestiaires, en infraction avec les engagements de l'employeur selon lesquels une pause de 30 minutes payée avec obligation de pointer était instaurée à compter du 14 janvier 2008; que cependant le caractère récent de cette obligation, mais également la tolérance de l'employeur au regard de l'obligation de badger lors des prises de pause (rapportée de façon concordante par les attestations de Messieurs A..., D... et E...) permettent de considérer que ce fait fautif ne peut également pas justifier un licenciement a fortiori pour faute grave; que le jugement qui a déclaré les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse sera donc confirmé sur ce point, ainsi que sur les indemnités de rupture et sur les rappels de salaire concernant les périodes de mises à pied, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées; que Monsieur Y... avait plus de 6 ans d'ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés; qu'il justifie d'une période de chômage indemnisé jusqu'en août 2008, date à laquelle il a été embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation jusqu'au 24 février 2009 avec un salaire moindre, puis après une période d'emploi à durée déterminée de mai à septembre 2009, d'un emploi en qualité de chauffeur routier à compter du 1er octobre 2009 par contrat devenu à durée déterminée; que compte tenu de ces éléments la réparation de son préjudice qui en tout état de cause devait être égale aux salaires des 6 derniers mois, doit être portée à 12.500 €; que Monsieur X... avait plus de 21 ans d'ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés; qu'il justifie d'une période de chômage indemnisé de mai 2008 à août 2010, la prise en charge étant parfois partielle en raison de missions intérimaires dont le salarié ne précise pas la durée; que compte tenu de ces éléments la réparation de son préjudice a justement été fixée à 25.000 €, les conditions d'application de l'article L 1235-3 du Code du Travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées aux salariés dans la limite de 4 mois d'indemnités pour chacun; qu'en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur X... et Monsieur Y... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles pour l'ensemble de l'instance dont le montant sera fixé au dispositif, précision étant faite que chacun d'eux plaident par le même Conseil; que la société IMPRIMERIE BRETECHER, partie perdante, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile;

1°/ ALORS QUE la tolérance de l'employeur est enfermée dans son objet;

qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la consommation d'alcool par l'employeur était seulement permise à de rares occasions festives dans un cadre limité; qu'en décidant cependant que la tolérance de l'employeur lui interdisait de licencier Messieurs X... et Y... pour avoir consommé de l'alcool dans les vestiaires de l'entreprise à 5 h 30 du matin, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Messieurs Y... et X... étaient clairement sortis du cadre de la tolérance de l'employeur qui avait enfermé la consommation d'alcool par ses salariés sur le lieu de travail dans de strictes limites en la surveillant et en l'encadrant à l'occasion de diverses fêtes ou pots comme il est d'usage dans toute entreprise sans leur permettre pour autant de boire de l'alcool en dehors de ce cadre strictement défini par l'usage; qu'ainsi, elle a violé l'article L 1234-1 du Code du travail.

2°/ ALORS si tel n'est pas le cas QU'à la supposer établie, la tolérance de l'employeur à l'égard du comportement fautif du salarié lui laisse la faculté de procéder à un licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors que le comportement est constitutif d'une telle faute; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la consommation d'alcool par Messieurs X... et Y... constituait indiscutablement une faute disciplinaire (arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa); qu'en décidant cependant que l'employeur ne pouvait pas s'en prévaloir pour procéder à leur licenciement pour faute grave dès lors qu'il avait toléré la consommation d'alcool sur les lieux de travail à l'occasion de réunions ou de fêtes qu'il encadrait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait à tout le moins que leur licenciement était justifié par une faute simple; qu'ainsi, elle a violé l'article L 1235-1 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Rennes, du 22 avril 2011.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 4 avril 2012
N° de pourvoi: 11-10986
Non publié au bulletin
Rejet
M. Lacabarats (président), président
Me Copper-Royer, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 avril 2010), que M. X... a été engagé par Mme Y... en qualité de serveur à compter du 15 juin 2006 selon un contrat de travail conclu pour la période du 15 juin au 31 août 2006; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement de diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen:

- 1°/ que les parties ont signé le 15 juin 2006 un contrat à durée déterminée emploi saisonnier; que M. X... a travaillé dès le 15 juin et que Mme Y... a régularisé une déclaration d'embauche le même jour; que les juges du fond n'ont pas tiré des écrits les conséquences qui s'imposaient; qu'ils ont violé les articles 1134 du code civil, L. 1241-1 et suivants du code du travail;
- 2°/ qu'une transmission tardive n'entraîne une requalification que si elle est établie; que le caractère d'emploi à durée déterminée figurait sur le contrat, régularisé dès le 15 juin 2006; que les conditions d'emploi pendant une période estivale impliquaient nécessairement un contrat à durée déterminée; que la cour d'appel en ne prouvant pas une transmission tardive et en ne prenant pas en compte les caractéristiques de l'emploi de M. X..., a violé les articles L. 1241-1 et suivants L. 1242-13 du code du travail, 455 du code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail avait été transmis au salarié au-delà du délai de deux jours requis par l'article L. 1242-13 du code du travail, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne Mme Y... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée, dit ce contrat irrégulièrement rompu et condamné Madame Y... à verser à Monsieur X... diverses indemnités;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du contrat ... le Code du Travail, dans son article L 122-3-1 stipule: «Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche»;

... que le contrat n'a été remis à Monsieur X... que le 27 juillet 2006, soit plus d'un mois après son embauche, il y a donc lieu de le requalifier en contrat à durée indéterminée, et de faire droit à ses demandes à ce sujet;

«Sur l'attitude de Monsieur X... Madame Y... dit avoir été victime d'injures de la part de Monsieur X...;

Il y a lieu de rejeter cette affirmation, car jamais Monsieur X... n'a fait l'objet du moindre avertissement malgré cela, et que d'autre part, ces injures constituant une faute grave, elle aurait pu prononcer une mise à pied conservatoire avant de le licencier;

Il y a également lieu de rejeter l'attestation de Monsieur B...qui indique que Monsieur X... buvait beaucoup, sans préciser la moindre quantité. Il déclare également que certains jours Monsieur X... était limite. Or, Monsieur B...ne fait pas état de ses études en alcoologie prouvant qu'il est qualifié pour dire si une personne est ou non en état d'ébriété;

Sur la fin de contrat de Monsieur X... ... que le contrat de travail de Monsieur X... doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, il n'y a pas lieu de tenir compte de la date de fin de contrat figurant sur le contrat à durée déterminée;

Madame Y... aurait dû procéder au licenciement de Monsieur X..., or elle ne l'a pas fait;

Dans ce cas, il y a lieu de dire et juger que le départ de Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans respect de la procédure prévue par l'article L 122-14, et que celui-ci est donc intervenu sans cause réelle ni sérieuse, et en dédommager Monsieur X...;

Sur le reçu pour solde de tout compte Article L 122-17: «Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent».

De ce fait, Madame Y... ne peut pas dire que le fait que Monsieur X... ait signé ce reçu la libère de toute somme qu'elle resterait lui devoir, ou qu'il pourrait lui réclamer devant les juridictions compétences (jugement p. 4, 5 et 6).

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande en requalification du contrat de travail:

Conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche; sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce si le contrat de travail mentionne «Fait à Biscarrosse le 15 juin 2006», date par ailleurs surchargée, le salarié a cependant mentionné «Reçu le 27. 07. 2006».

Il ne saurait dans ces conditions être contesté que le contrat de travail a été transmis au-delà de deux jours au salarié.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2, alinéa 2 du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié, il y a lieu de lui accorder une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il y a lieu de fixer à 1.500 € l'indemnité de requalification.

Sur les conséquences de la rupture:

La rupture du contrat requalifié, rompu, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, les dommages et intérêts et l'indemnité pour irrégularité de la procédure.

Il y a lieu de confirmer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1235. 5 du code du travail, justement évaluée par le conseil de prud'hommes.

Aux termes de la convention collective applicable, en dehors de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté continue, sauf faute grave ou faute lourde, à savoir pour les employés et pour une ancienneté inférieure à 6 mois, 8 jours.

L'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à 394, 68 € bruts outre 39, 46 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé sur le fondement de l'article L1235. 5 du code du travail, l'indemnisation ainsi allouée se cumule avec l'indemnité due en cas d'irrégularité de la procédure, justement évaluée par le conseil de prud'hommes à la somme de 400 €» (arrêt attaqué p. 7 et 8).

- ALORS QUE les parties ont signé le 15 juin 2006 un contrat à durée déterminée emploi saisonnier; que Monsieur X... a travaillé dès le 15 juin et que Madame Y... a régularisé une déclaration d'embauche le même jour; que les juges du fond n'ont pas tiré des écrits les conséquences qui s'imposaient; qu'ils ont violé les articles 1134 du Code civil, L 1241-1 et suivants du Code du travail;
- ET QU'une transmission tardive n'entraîne une requalification que si elle est établie; que le caractère d'emploi à durée déterminée figurait sur le contrat, régularisé dès le 15 juin 2006; que les conditions d'emploi pendant une période estivale impliquaient nécessairement un contrat à durée déterminée; que la Cour d'appel en ne prouvant pas une transmission tardive et en ne prenant pas en compte les caractéristiques de l'emploi de Monsieur X..., a violé les articles L 1241-1 et suivants L 1242-13 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile.

Décision attaquée: Cour d'appel de Pau, du 12 avril 2010.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 9 février 2012

N° de pourvoi: 10-19496

Non publié au bulletin

Rejet

**M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)**

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2010) que M. X..., engagé le 27 mai 2002 par la société Suisscortage Nice en qualité de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave le 29 mai 2008;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen:

- 1°/ que le fait qu'un salarié demande à une collègue de vérifier après l'heure du déjeuner si son haleine ne sent pas l'alcool; qu'une autre dise que de son bureau émanait une odeur d'alcool après les pauses déjeuner et qu'un client soit d'avis qu'il avait «tendance à boire plus que de raison» ne justifiant pas un licenciement pour «état d'ébriété pendant les heures de travail», la cour d'appel a violé, par erreur manifeste de qualification, l'article L. 1235-1 du code du travail;
- 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que tel n'est pas le cas du salarié, auquel aucun reproche n'a été fait en six ans de présence, soupçonné d'ébriété sur le témoignage d'une odeur d'alcool après les pauses déjeuner ainsi que sur l'avis isolé d'un client pour lequel il avait «tendance» à boire plus que de raison; qu'en disant dans ces conditions que l'employeur ne pouvait conserver le salarié à son service, même pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail;
- 3°/ qu'en estimant «vraisemblable» que l'état d'ébriété prêté au salarié ait fait perdre des clients à l'entreprise, la cour d'appel, statuant par motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile;
- 4°/ qu'enfin, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en citant, pour juger avéré l'état d'ébriété prêté au salarié licencié pour faute grave, le témoignage d'une collègue qui, ainsi que le salarié licencié le soulignait dans ses conclusions (p. 8, pénultième §, à propos de Mme Y...), avait quitté l'entreprise un an et demi avant le licenciement, et qui rappelait qu'un comportement toléré par l'employeur ne peut être reproché au salarié (id. p. 5, 2e §), la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, en tout état de cause, les faits invoqués n'étaient pas couverts par la prescription, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail;

Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... a soutenu devant les juges du fond que les agissements qui lui étaient reprochés étaient prescrits; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa quatrième branche;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, directeur d'agence, s'était trouvé régulièrement sur son lieu de travail en état d'ébriété après le déjeuner ce qui risquait de ternir durablement l'image de l'entreprise, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que ces agissements rendaient impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise et constituaient une faute grave;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Pascal X..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Suisscortage Nice, employeur, au paiement de la somme de 151.650 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 19.104,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 1.910,41 € à titre de congés payés afférents; 11.182,81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 29 mai 2008 énonce le grief suivant: «nous vous avons reçu le 21 mai 2008 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre rencontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants: état d'ébriété pendant les heures de travail, et ce de façon répétée. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre (...); que l'employeur, auquel incombe la preuve de la faute grave, verse aux débats les témoignages de 1) Madame Y... «nous déjeunions régulièrement le jeudi et le vendredi, jours de ma présence à Nice, au restaurant «le chien qui fume». Je quittais le restaurant vers 13 heures 45 – 14 heures pour rejoindre mon lieu de travail. Monsieur Pascal X... restait un long moment encore. Je lui ai fait remarquer qu'il était mal venu de «traîner» au restaurant vis à vis de ses collaborateurs, ce qu'il n'a pas apprécié (...). Avant chaque réunion de direction réunissant tous les directeurs d'agence, Monsieur Pascal X... passait à mon bureau afin que je vérifie si son haleine sentait l'alcool. Après avoir pris un bonbon, il montait en salle de réunion»; 2) Madame Z... « (...) les mois précédant son licenciement, il avait pris l'habitude de prendre des pauses-déjeuner plus longues que nécessaire deux à trois fois par semaine. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de faire «des efforts» pour écourter ses pauses, mais il n'en a jamais tenu compte. Mon but était de lui faire comprendre qu'il devait motiver son personnel. De plus, j'ai remarqué qu'en rentrant de ses pauses déjeuner que de son bureau émanait une odeur d'alcool»; 3) Monsieur A... (client) «j'ai pu constater à plusieurs reprises lors de rendez-vous que Monsieur Pascal X... avait tendance à boire plus que de raison»; que les autres témoignages produits par l'employeur sont sans intérêt; que pour contrebalancer les attestations de l'employeur, Monsieur Pascal X... verse aux débats: - d'une part une attestation de Mme B..., qui relate qu'elle a été sollicitée «à trois reprises de faire une attestation contre (notre) ancien directeur» - d'autre part, une attestation de M. C... qui indique qu'il n'a jamais constaté «chez Monsieur Pascal X... d'état d'ébriété ni aucun signe lié à une quelconque consommation d'alcool»; que toutefois, la cour se doit de relever que l'attestation de Mme B... est inévitablement sujette à caution du fait qu'elle a contesté devant le conseil de prud'hommes le licenciement dont elle a elle-même fait l'objet; et que, dans une seconde attestation (pièce n° 10), M. C... ne peut citer que deux rendez-vous avec M. X... qui ont eu lieu après le repas de la mi-journée: le 20 décembre 2007 à 14 heures 30 et le 21 mai 2008 à 15 heures; le premier date donc d'une époque où aucun état d'ébriété n'était reproché à M. X...; que les quatre attestations circonstanciées susvisées versées aux débats par l'employeur établissent sans conteste possible que l'haleine de M. X... sentait l'alcool après des repas qu'il prolongeait plus que de raison et au cours desquels il buvait beaucoup d'alcool (Monsieur A...); que le fait pour un directeur d'agence, dont la conduite doit nécessairement être exemplaire pendant l'exercice de ses fonctions, d'être régulièrement en état d'ébriété après le déjeuner, constitue une faute grave, car l'employeur ne pouvait, sauf à ternir durablement l'image de son entreprise, conserver à son service, même pendant la durée limitée du préavis, un cadre sous l'emprise d'un état alcoolique pendant ses rendez-vous; qu'en effet, il est vraisemblable qu'un certain nombre de clients, stupéfaits d'être reçus par un directeur en état d'ébriété et s'interrogeant avec raison sur le bien-fondé des conseils qu'il pouvait leur dispenser dans cet état, sont allés

consulter des entreprises concurrentes où ils ont été reçus par un interlocuteur sobre et entièrement lucide; que le jugement doit donc être infirmé et Monsieur Pascal X... débouté de toutes ses demandes;

- 1°) ALORS QUE le fait qu'un salarié demande à une collègue de vérifier après l'heure du déjeuner si son haleine ne sent pas l'alcool; qu'une autre dise que de son bureau émanait une odeur d'alcool après les pauses déjeuner et qu'un client soit d'avis qu'il avait «tendance à boire plus que de raison» ne justifiant pas un licenciement pour «état d'ébriété pendant les heures de travail», la cour d'appel a violé, par erreur manifeste de qualification, l'article L 1235-1 du Code du travail;
- 2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que tel n'est pas le cas du salarié, auquel aucun reproche n'a été fait en six ans de présence, soupçonné d'ébriété sur le témoignage d'une odeur d'alcool après les pauses déjeuner ainsi que sur l'avis isolé d'un client pour lequel il avait «tendance» à boire plus que de raison; qu'en disant dans ces conditions que l'employeur ne pouvait conserver le salarié à son service, même pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail;
- 3°) ALORS EN OUTRE QU'en estimant «vraisemblable» que l'état d'ébriété prêté au salarié ait fait perdre des clients à l'entreprise, la cour d'appel, statuant par motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
- 4°) ALORS ENFIN QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en citant, pour juger avéré l'état d'ébriété prêté au salarié licencié pour faute grave, le témoignage d'une collègue qui, ainsi que le salarié licencié le soulignait dans ses conclusions (p. 8, pénultième §, à propos de Mme Y...), avait quitté l'entreprise un an et demi avant le licenciement, et qui rappelait qu'un comportement toléré par l'employeur ne peut être reproché au salarié (id. p. 5, 2ème §), la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, en tout état de cause, les faits invoqués n'étaient pas couverts par la prescription, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 19 avril 2010.

<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL2.304.557

Jurisprudencia

Cabecera: Despido disciplinario. Conductor de autobús. Ingesta de alcohol.

Sentencia de instancia: insuficiencia de hechos probados. Falta de contradicción.

Jurisdicción: Social

Ponente: Luis Fernando de Castro Fernández

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 03/11/2011

Tipo Resolución: Auto

Sala: Cuarta

Sección: Primera

Número Recurso: 4691/2010

ENCABEZAMIENTO:

Procedimiento: **Social**

AUTO:

En la Villa de Madrid, a tres de Noviembre de dos mil once.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNÁNDEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 7 de los de Málaga se dictó sentencia en fecha 6 de noviembre de 2009, en el procedimiento nº 961/2009 seguido a instancia de D. Jesús Ángel contra CROWN RESORTS MANAGEMENT S.L., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en fecha 4 de noviembre de 2010, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 18 de enero de 2011, se formalizó por el Letrado D. Francisco Javier Valverde Conejero en nombre y representación de CROWN RESORTS MANAGEMENT S.L., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 9 de junio de 2011, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- En la sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 26-12-1996 (rec. 1174/1996), según el relato de hechos probados de la sentencia de instancia y los que con tal valor se recogen en la fundamentación jurídica, se hace constar que el actor, con la categoría profesional de conductor, prestaba servicios para la empresa CROWN RESORTS MANAGEMENT, S.L., siéndole de aplicación el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostelería. En fecha 2-6-2009, la empresa comunicó al trabajador su despido disciplinario por los hechos acaecidos en los días 31-5 y 2-6 de 2009. El actor fue visto por la testigo, Sra. Reyes, el 31-5-2009 cuando, tras aparcar el vehículo de la empresa en las inmediaciones de la playa, entró en el restaurante Andy's Beach. Según la misma testigo, sobre las 17h. se lo volvió a encontrar en la recepción de la empresa, asegurando que olía a alcohol. Dos días después, la misma testigo observó de nuevo el vehículo de la empresa en la misma playa y al actor en el interior del restaurante tomando un vaso de lo que luego constató que era sangría. Un compañero del actor dijo que existían rumores de que consumía alcohol. El actor lleva 12 años trabajando en la empresa sin que consten antecedentes desfavorables.

El trabajador impugnó su despido ante el Juzgado de lo Social, dictándose sentencia desestimatoria de su pretensión, acogiendo la procedencia del despido. Recurrida en suplicación dicha sentencia, el Tribunal Superior estimó el recurso del trabajador, revocando la sentencia de instancia y declarando la improcedencia del despido. La sentencia del Tribunal entendió que «para convalidar la decisión extintiva empresarial es necesario que se despliegue suficiente actividad probatoria por parte del empresario para que se acredite en el juicio la veracidad de los hechos que se imputan al trabajador, lo cual de tener suficiente reflejo en la redacción de hechos probados, extremo que, según este Tribunal *ad quem*, no concurre en la presente *litis*. En efecto, porque, en primer lugar, en el relato de hechos probados no se describe clara y nítidamente la conducta del trabajador. Tan solo en el ordinal segundo se proclama que la empresa comunicó al demandante su despido mediante carta que se da por reproducida en su integridad; es decir, lo que la Juzgadora da por probado es la entrega de la carta y su contenido, pero nada expresa sobre los hechos realizados por el actor. Y en segundo lugar, porque lo único que relata la Magistrada en el fundamento de derecho segundo, párrafo segundo (si se quiere dar la consideración de aseveraciones con valor de hechos probados) es que la Sra. Reyes vio al demandante los días 31 de mayo y 2 de junio quien, en tiempo coincidente con el almuerzo, entraba en el local Andy's Beach; que posteriormente olió al demandante a alcohol; que el segundo de los días descritos lo vio tomar un vaso de lo que, al parecer pudiera ser sangría; y que existían rumores de que el demandante consumía alcohol. Pues bien, parece que la decisión extintiva empresarial se basa más en la existencia de rumores de que el trabajador consumía alcohol que en hechos determinantes del real consumo de dicha sustancia en horas de trabajo puesto que el hecho de que el demandante estuviera en un local a mediodía los días 31 de mayo y 2 de junio no implica, necesariamente, que estuviera consumiendo alcohol. Y menos aún se puede deducir tal circunstancia por el hecho de que la Sra. Reyes le volviese a ver horas más tarde y le pareciera que olía a alcohol. Por ello y porque del relato de hechos probados, complementado con los razonamientos jurídicos, no se desprende la veracidad de la conducta imputada, la Sala debe acoger favorablemente el motivo y por su efecto el recurso (...)».

El recurso de casación se formula por la empresa, planteando dos motivos. El primer motivo tiene por objeto la declaración de que la conducta del actor era merecedora del despido. El segundo motivo, formulado de manera subsidiaria, pretende la declaración de insuficiencia de hechos probados en la sentencia de instancia y con ella su nulidad y la de las posteriores actuaciones.

SEGUNDO.- Como se decía, el primer motivo tiene por objeto la declaración de que la conducta del actor era merecedora del despido, al efecto se aporta como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 26-12-1996 (rec. 1174/1996). En dicha sentencia consta que el demandante el día 16-4-1996, sobre las 6.30 horas, estando de servicio, consumió un «carajillo» de coñac, y posteriormente a las 11.20 horas otro «carajillo» de coñac y una copa de coñac, reanudando inmediatamente después su ruta, cuando al llegar a la siguiente parada de la esta ciudad, frente al parque de bomberos, sobre las 11.20 horas, fue requerido por dos agentes de la Policía Local para ser sometido a las pruebas de detección alcohólica, a lo que el actor accede; se le practica la prueba de aire aspirado con el etilómetro, arrojando un resultado positivo de 0,66 mg de alcohol por litro de aire aspirado, veintitrés minutos después de practicada la primera prueba se le efectúa una segunda, a las 11.51 horas, que arroja un resultado positivo de 0,59 mg de alcohol por litro de aire aspirado. El actor manifestó estar conforme con el resultado de las pruebas practicadas. Seguidamente se le efectúa examen de signos externos, presentando respiración normal, aliento con fuerte olor a alcohol, no vómitos, rostro normal, ojos apagados, pupilas apenas se le aprecian, equilibrio bien, andar y girar mal por deficiencia física en cadera izquierda, prueba dedo a dedo varios intentos incorrectos al contar del 1 a 14 adelante-atrás, prueba de nariz con las dos manos bien, ropa bien, habla pastosa con repetición de frases, actitud y comportamiento colaborador, no se le realiza la prueba de paso sobre raya ni de recoger monedas. La presencia de la Policía Local en la parada fue como consecuencia de la llamada de la central de autobuses urbanos de esta ciudad informando que el conductor de un autobús urbano, parecía influido por los efectos de bebidas alcohólicas ya que habían recibido dos llamadas telefónicas de viajeros del citado autobús en tal sentido. Un inspector de la empresa se personó, requerido por ésta, en la referida parada, y por decisión de los agentes de la Policía Municipal se procedió a sustituir al demandante por otro conductor de la empresa para continuar la ruta. El despido del actor como consecuencia de estos fue calificado de procedente por la sentencia de instancia y en la de suplicación, al amparo de los correspondientes arts. del Estatuto de los Trabajadores y del art. 116 de la Ordenanza de Trabajo de Transportes por Carretera.

El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

En aplicación de la doctrina expuesta, no puede apreciarse contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación al no concurrir la identidad que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. Así, en primer lugar, son distintas las normas sectoriales de aplicación a las infracciones y sanciones debatidas, pues mientras en la sentencia recurrida resulta aplicable el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal del Sector de Hostelería, en la de contraste lo es la Ordenanza de Transportes por Carretera. Y, en segundo lugar, mientras en la sentencia recurrida lo imputado al trabajador es que fue visto por la testigo en horario coincidente con el almuerzo entrando en el local Andy's Beach, que posteriormente olió al demandante a alcohol, que un segundo día lo vio tomar un vaso de lo que pudiera ser sangría, y que existían rumores de que el demandante consumía alcohol; por el contrario, en la sentencia de contraste consta acreditado que el actor reconoció expresamente haber ingerido alcohol, existiendo además los datos positivos en tal sentido (tasa de 0'66 mg. de alcohol por litro de sangre y posteriormene de 0'59 mg.), obtenidos tras las pruebas de detección alcohólica realizadas por los agentes de la Policía Local.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Sala ha señalado, con reiteración, que la calificación de las conductas a efectos de despido disciplinario, al depender de una valoración casuística de las circunstancias individualizadas concurrentes en cada caso, difícilmente puede dar lugar a un supuesto incluido en el ámbito de la unificación de doctrina.

TERCERO.- Para el segundo motivo de recurso, formulado de manera subsidiaria respecto del anterior, cuyo objeto es la declaración de insuficiencia de hechos probados de la sentencia de instancia y, en consecuencia, su nulidad, se trae como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga) de 15-4-2004 (rec. 163/2004). En dicha sentencia se hace constar que «(...) en el presente caso se ha producido una clara insuficiencia en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues, encontrándonos ante un despido disciplinario en el que la empresa remite carta de despido al actor en la que le imputa, diversos hechos concretos y determinados que constituirían incumplimientos contractuales motivadores del despido, el relato fáctico de la resolución impugnada no contiene la menor mención acerca de si considera probados o no los hechos imputados al trabajador en la comunicación escrita de despido. En definitiva, el relato fáctico de la sentencia omite toda referencia a lo que evidentemente constituye la cuestión central de un procedimiento por despido disciplinario, esto es si el juzgador de instancia considera que la empresa ha probado la veracidad de los hechos imputados al trabajador en la carta de despido como justificativos del mismo. Es cierto que en la fundamentación jurídica de la sentencia se hace una ambigua referencia sobre el valor de las declaraciones efectuadas por algunos testigos en orden a acreditar determinados extremos de la carta de despido, pero, independientemente de que tampoco se indica con claridad si la Magistrada de instancia considera si han quedado probados o no las imputaciones efectuadas al actor en la carta de despido, es incuestionable que las afirmaciones de hechos contenidas en la fundamentación jurídica de la sentencia pueden completar o aclarar algún extremo del relato de hechos

probados, pero nunca suplir una declaración fáctica no ya insuficiente sino inexistente por completo. En consecuencia, se ha producido un grave quebranto de lo previsto en el artículo 97-2 de la Ley de Procedimiento Laboral, al no contener la sentencia de instancia los datos fácticos necesarios para poder resolver la cuestión objeto de litigio, así como no encontrarse suficientemente motivada, por lo que se impone decretar la nulidad de la sentencia de instancia y de todas las actuaciones posteriores, con devolución de las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen, a fin de que el Magistrado a quo subsane las referidas omisiones, y se pronuncie sobre todas las cuestiones que fueron objeto de debate en el juicio, decidiendo sobre todas las imputaciones realizadas al actor en la carta de despido, razonando acerca de las responsabilidades que incumben a cada uno de los codemandados».

Del mismo modo, aplicando la doctrina indicada en el numeral anterior, no puede apreciarse contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación al no concurrir la identidad que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. En este sentido, en la sentencia recurrida la Sala no considera que la sentencia de instancia no contenga un relato suficiente de hechos probados, sino únicamente que del indicado relato fáctico no resulta acreditada la veracidad de los hechos que se imputan al trabajador por la empresa, aspecto imprescindible para acoger la procedencia del despido. Sin embargo, la sentencia de contraste entiende que en la sentencia de instancia se ha producido una «clara insuficiencia en el relato de hechos probados» y continúa considerando que «es incuestionable que las afirmaciones de hechos contenidas en la fundamentación jurídica de la sentencia pueden completar o aclarar algún extremo del relato de hechos probados, pero nunca suplir una declaración fáctica no ya insuficiente sino inexistente por completo».

CUARTO.- Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 7 de septiembre de 2011, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 9 de junio de 2011, insistiendo en la existencia de contradicción, en particular respecto del segundo motivo de recurso, pero sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto, ni argumentos jurídicos que desvirtúen su contenido.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral se imponen las costas a la parte recurrente y se acuerda la pérdida del depósito constituido, dándose a la consignación efectuada el destino legal.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Francisco Javier Valverde Conejero, en nombre y representación de CROWN RESORTS MANAGEMENT S.L. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga de fecha 4 de noviembre de 2010, en el recurso de suplicación número 1166/2010, interpuesto por D. Jesús Ángel, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Málaga de fecha 6 de noviembre de 2009, en el procedimiento nº 961/2009 seguido a instancia de D. Jesús Ángel contra CROWN RESORTS MANAGEMENT S.L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, dándose a la consignación efectuada el destino legal.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Roj: ATS 18438/2009
Id Cendoj: 28079140012009203691
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 605/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Noviembre de dos mil nueve.
Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. MARÍA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social N^o 1 de los de Motril se dictó sentencia en fecha 30 de mayo de 2008, en el procedimiento n^o 304/08 seguido a instancia de D. Nemesio contra el GRUPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por ambas partes, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 3 de diciembre de 2008, que desestimaba el recurso interpuesto por el demandante y estimaba el interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 19 de febrero de 2009 se formalizó por la Procuradora D^a M^a Soledad Ruiz Bullido, en nombre y representación de D. Nemesio, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 9 de julio de 2009 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, con revocación de la de instancia, declara procedente el despido del actor que prestaba servicios para la empresa demandada con la categoría profesional de capataz. Según el inmodificado relato de hechos probados, el 18 de enero de 2008, la empresa inició expediente sancionador según el cual el actor fue sorprendido el anterior día 9 en la zona de fabricación de cartón, sección de la que el actor era el encargado, sin realizar las funciones propias de su puesto de trabajo, consumiendo bebidas alcohólicas con otros dos trabajadores, intentando esconder los vasos que estaban utilizando dentro de unas cajas vacías ubicadas en una especie de zulo que habían construido en dicha zona con palets y cajas vacías. El 29 de febrero de 2008 la empresa comunicó al actor que los anteriores hechos eran constitutivos de tres faltas, con las sanciones correspondientes de conformidad con el convenio de aplicación (de manipulado y envasado de frutas, hortalizas, patata temprana y extratemprana de Granada y su provincia): la primera de carácter grave consistente en entregarse a juegos y distracciones estando de servicio, sancionada con suspensión de empleo y sueldo de 15 días; la segunda de carácter leve por el consumo de bebidas alcohólicas en el centro de trabajo, sancionada con suspensión de empleo y sueldo de 2 días, y la tercera de carácter muy grave por transgresión de la buena fe contractual en el cumplimiento de sus obligaciones, al haberse comportado con manifiesta deslealtad y abuso de confianza, sancionada con el despido disciplinario, por lo que se procedió a dar de baja al actor en la Seguridad Social, practicándose liquidación de haberes con las deducciones correspondientes. Según el hecho probado cuarto, el día 9 de enero de 2008, el actor, estando en su jornada de trabajo, se encontraba, junto con dos compañeros, fuera de su puesto, en la zona de fabricación de cartón, sección de la que era encargado, consumiendo una bebida que contenía alcohol.

Recorre la parte demandante en casación para la unificación de doctrina, planteando cuatro motivos, y proponiendo cuatro sentencias de contraste.

La Sala ha reiterado que para apreciar el requisito de la contradicción que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral es necesario que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales, siendo preciso que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». También se ha repetido que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 de enero de 1.992, RCU 824/91; 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, RCU 4067/96, 94/97 y 4203/96; 17 de mayo y 22 de junio de 2000 RCU 1253/99 y 1785/99; 14 de noviembre de 2003, RCU 4758/02; 17 de diciembre de 2004, RCU 6028/03 y 20 de enero de 2005, RCU nº 1111/03), 15 de noviembre de 2005 (RCU nº 5015/04), 7 de febrero de 2006 (RCU nº 1346/04), 13 de marzo de 2007 (RCU nº 4633/05) y 14 de mayo de 2008 (RCU 1671/07).

Conforme a la anterior doctrina ninguna de las cuatro sentencias de contraste es contradictoria con la recurrida, por las razones que a continuación se exponen, que no resultan desvirtuadas por las alegaciones de la parte recurrente oponiéndose a la inadmisión del recurso.

Los dos primeros motivos se plantean en relación con el principio «*non bis in idem*» que la parte recurrente considera vulnerado.

Concretamente en el primer motivo se dice que la sentencia recurrida ha vulnerado el principio jurídico de «*Consunción y Absorción, en relación con el principio «Ne Bis in Idem» en tanto que se ha estimado que una misma conducta puede multiplicarse artificialmente, diseccionándose en varios hechos distintos, dando lugar a múltiples sanciones*». Se propone de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de 29 de noviembre de 2007, confirmatoria de la de instancia que había declarado improcedente el despido disciplinario del actor.

La contradicción con la sentencia recurrida es inexistente al ser distintas las faltas que se imputan en cada caso y las sanciones correspondientes a las mismas y, desde luego, la conducta observada por los trabajadores despedidos. En el caso de autos -como ya se ha expuesto- la empresa sanciona tres conductas; las dos primeras calificadas como grave y leve con suspensiones de empleo y sueldo de 15 y 2 días, y la tercera calificada como muy grave sancionada con el despido que es lo que se impugna mediante la demanda inicial de las actuaciones. Y la gravedad de la conducta viene determinada por el cargo de capataz que el actor tenía en la empresa habiéndose producido los hechos en la zona de la que él era encargado; de forma que el actor no solo no controló a los trabajadores que estaban a su cargo sino que participó en el consumo de alcohol durante las horas de trabajo y abandonando sus funciones. Esta situación es por completo ajena a la sentencia de contraste donde no se contempla sanción alguna de suspensión de empleo y sueldo junto con otra de despido, sino sólo esta última sanción como consecuencia de dos conductas distintas; la primera por un incidente con el gerente de ventas a raíz de unas discrepancias en el recibo de comisiones; y la segunda por ausentarse del puesto de trabajo para acudir a una consulta médica, engañando a un compañero a quien hizo creer que tenía permiso para ausentarse, dejando sin repartir una serie de pedidos, y la sentencia confirma la improcedencia del despido atendiendo que la entrevista con el gerente se desarrolló en términos de normalidad y al acreditarse que el estado de salud del actor exigía una intervención quirúrgica urgente.

El segundo motivo insiste en la vulneración del principio «*non bis in idem*» en tanto «*se ha estimado correcta la imposición de la sanción de despido disciplinario a una conducta, sobre la que ya habían recaído dos sanciones con anterioridad*», refiriéndose a las dos suspensiones de empleo y sueldo.

Se propone de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de abril de 2004 que confirma la improcedencia del despido de la actora, que se encontraba en situación de baja por incapacidad temporal hasta que el 12 de marzo de 2003 recibió el alta médica. El 14 de mayo de 2003 la empresa le remitió carta imputándole la inasistencia al trabajo desde el anterior 12 de marzo, sancionándole «*con suspensión de sueldo correspondiente a los días de inasistencia injustificada y despido disciplinario...*».

Tampoco en este motivo puede apreciarse la contradicción, porque según lo que se acaba de exponer, en la sentencia de contraste se imputa una única conducta -la no asistencia al trabajo - que se sanciona con suspensión de empleo y sueldo y con el despido, mientras que en la sentencia recurrida se trata de tres conductas distintas y la tercera, muy grave, es la que se sanciona con el despido, únicamente.

En el tercer motivo se denuncia la infracción del artículo 54.2 f), que contempla la embriaguez habitual como causa de despido, proponiendo de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia La Mancha de 15 de noviembre de 1993 que también confirma la improcedencia del despido del actor -conductor mecánico- que había sido denunciado por la guardia civil al presentar evidentes síntomas de embriaguez. La contradicción es asimismo inexistente porque las conductas de los trabajadores son por completo distintas, pues la sentencia recurrida no declara procedente el despido porque el actor fuera sorprendido consumiendo alcohol, sino por la deslealtad y el abuso de confianza dado el cargo de responsabilidad que el actor ostentaba en la empresa.

En el cuarto motivo sostiene el recurso que la única conducta que queda acreditada no justifica el despido, con referencia al contenido hecho probado cuarto y propone de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de 9 de mayo de 2007 que también declara improcedente el despido del actor que -según relata el hecho probado tercero- con fecha 18 de septiembre de 2006, presentó denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil del puesto de Toro (Zamora) por robo de distintos efectos y cantidad de dinero que había dejado en el coche propiedad de la empresa, con el que realizaba su trabajo, practicándose inspección ocular por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y levantándose acta en la que se llega a la conclusión de que el robo denunciado «... *posiblemente no existiera y el denunciante simulara el robo presentando la correspondiente denuncia para justificar ante la empresa y quedarse él con el dinero...*». Con fecha 5 de octubre de 2006 el actor fue despedido «... *toda vez que le roba a la empresa bienes y efectivo por un valor total superior a los 6.000 Euros, causa daños en el vehículo de la misma pendientes de cuantificar y además para ocultar su conducta simula un robo ficticio supuestamente cometido por tercera persona presentando una denuncia ante la Guardia Civil que tras las averiguaciones oportunas resulta ser falsa*». Considera la sentencia propuesta de contraste que en el relato de hechos probados no se declaran como tales los que se imputan al actor en la carta de despido -la apropiación de una cantidad de dinero cobrada a un cliente de la empresa y la simulación de un delito de robo para encubrir dicha apropiación- concluyendo que los hechos imputados no están debidamente acreditados y no pasan de ser una mera posibilidad apuntada por la policía judicial.

De nuevo hay que decir que la contradicción es inexistente y también hay que insistir en que, en el presente caso, el despido no se produce sólo porque el actor estuviera consumiendo alcohol junto con otros dos trabajadores durante el tiempo de trabajo, sino porque ello ocurre en la zona de la que estaba encargado, conducta esta que no guarda la menor identidad con lo relatado por la sentencia de contraste.

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Sin imposición de costas a la parte recurrente

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora D^a M^a Soledad Ruiz Bullido, en nombre y representación de D. Nemesio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 3 de diciembre de 2008, en el recurso de suplicación número 2597/08, interpuesto por D. Nemesio y por el GRUPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Motril de fecha 30 de mayo de 2008, en el procedimiento nº 304/08 seguido a instancia de D. Nemesio contra el GRUPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 23 septembre 2009

N° de pourvoi: 08-42198

Non publié au bulletin

Rejet

M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 mars 2008), que M. X..., cuisinier, dont le contrat de travail avait été repris par la société Resto express, au sein de laquelle il était également associé, a été licencié pour faute grave le 6 février 2004;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement consécutives à un licenciement abusif, alors, selon le moyen:

- 1°/ que le comportement alcoolique d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que lorsqu'il a une répercussion sur la qualité de son travail ou lorsqu'il est de nature à exposer le salarié lui-même ou d'autres personnes à un danger; qu'au cas d'espèce, pour valider le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel a relevé que des incidents d'alcoolisation reprochables au salarié s'étaient produits en décembre 2003 (attestation Z...) et janvier 2004 (attestation B...), à des dates rapprochées; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la consommation d'alcool de M. X... sur son lieu de travail avait une répercussion sur la qualité de son travail ni caractériser en quoi ses fonctions de cuisinier pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code;
- 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait quand le comportement de M. X..., qui était âgé de 47 ans et avait plus de vingt ans d'ancienneté dans le même poste sans avoir jamais fait l'objet du moindre avertissement ni d'aucun reproche, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du même code;
- 3°/ qu'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, notamment le comportement alcoolique qui lui était reproché et dont il contestait la matérialité, ne constituaient pas la véritable cause du licenciement qui trouvait son origine dans un différend qui opposait M. Y... (associé et représentant légal de la SARL Resto express) à M. X... qui, en sa double qualité d'associé et de caution, souhaitait obtenir des explications sur la gestion, les comptes sociaux, l'état comptable de la société pour l'exercice 2003 et les conventions écrites par la société; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contexte conflictuel dans lequel le licenciement du salarié était survenu, la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient pourtant les conclusions du salarié, si le motif du licenciement ne reposait pas, en réalité, sur un désaccord entre associés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1232-1 du même code;
- 4°/ qu'enfin, en n'analysant que sommairement les éléments de preuve produits par l'employeur pour se contenter, s'agissant de ceux invoqués par M. X..., d'énoncer que le salarié n'apportait pas la contre-preuve des faits allégués par la SARL Resto express, les juges du second degré ont violé le principe

d'égalité des armes, ensemble le droit au procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, a relevé que M. X... avait, en décembre 2003 et janvier 2004, consommé de l'alcool sur son lieu de travail, jusqu'à l'ivresse, ce qui l'avait empêché d'effectuer correctement son travail; qu'elle a pu décider, écartant par là même le moyen pris d'une autre cause de licenciement, que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituaient une faute grave;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses première et troisième branches et n'est pas fondé pour le surplus, ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure;

EN CE QU'il a validé le licenciement de M. X... pour faute grave et déchargé l'employeur des condamnations afférentes (dommages et intérêts, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, salaires, mises à pied, remboursement d'indemnités de chômage);

AUX MOTIFS QUE «le licenciement pour faute grave a été prononcé pour:- faits d'alcoolisation préjudiciables à l'entreprise,- incohérence dans l'organisation et incompétence professionnelle,- harcèlement (Madame A...),- diffamations; que le salarié conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir que le véritable motif de celui-ci réside dans le fait qu'en sa qualité d'associé», il avait demandé un accès aux comptes de la société, mettant en cause sur ce point la gérance; que contrairement à ce que soutient M. X..., l'essentiel des griefs portés dans la lettre de licenciement est suffisamment vérifié par les pièces versées par l'employeur, ainsi des comportements d'alcoolisation de M. X... sur le lieu de travail; qu'il résulte de plusieurs attestations précises et régulièrement délivrées (B... – C... – A... – D... – E... – Z... – F...) que M. X... consommait de l'alcool sur son lieu de travail, jusqu'à l'ivresse en certaines occasions, ce qui l'empêchait d'effectuer correctement son travail; que des faits de cette nature ont été constatés en décembre 2003 et janvier 2004, donc à l'intérieur du délai de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail, faisant revivre les faits plus anciens de même nature; qu'en fait, ce comportement de M. X... est plus anciens; que toutefois, le salarié ne peut invoquer une tolérance de l'employeur, dont le représentant n'est pas sur place; qu'il résulte également des mêmes attestations que M. X... prenait des décisions intempestives en matière d'organisation du travail et de relations clients; que par plusieurs attestations régulièrement délivrées, Madame A... indique, précisions à l'appui, que M. X... la harcelait; qu'en tout état de cause, il est établi que M. X... avait une attitude pour le moins excessive à l'égard de cette salariée; que les deux contre-attestations versées par la salariée (épouse ex-comptable) ne font pas la preuve contraire des griefs ainsi allégués; que le salarié indique que les griefs invoqués et analysés ci-dessus ne constituent pas la véritable cause du licenciement; qu'il indique que le véritable motif est un litige entre associés, M. X... s'inquiétant de l'état de la société dont il avait cautionné les emprunts, cette démarche n'ayant pas été appréciée du gérant; qu'il y a une coïncidence entre la démarche de M. X..., demandant des comptes sur sa qualité d'associé (fin d'année 2003) et le lancement de la procédure de licenciement; que, pour autant, rien ne permet de dire que cette démarche collective, à laquelle M. X... s'est associé, a été déterminante de son licenciement dont elle constituerait la cause réelle; qu'il convient de relever que des incidents d'alcoolisation reprochables à M. X... se sont produits en décembre 2003 (attestation Z...) et janvier 2004 (attestation B...) à des dates rapprochées; qu'au total, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et

sérieuse s'analysant en une faute grave; que des épisodes rapprochés d'alcoolisation rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis; qu'il convient de réformer le jugement sur ce point et en rejetant les demandes d'indemnités et de dommages et intérêts afférentes; que M. X... fait état d'un grief de forme en indiquant que l'employeur n'a pas fait figurer dans la convocation à l'entretien préalable l'adresse de la mairie de son domicile, où il pouvait consulter la liste des conseillers des salariés du département; que ce grief, purement formel, sera réparé par l'allocation de 100 de dommages et intérêts; qu'il convient de tarder à statuer sur toutes les autres demandes (...)» (arrêt, p. 4 et 5);

- 1°/ ALORS QUE, premièrement, le comportement alcoolique d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que lorsqu'il a une répercussion sur la qualité de son travail ou lorsqu'il est de nature à exposer le salarié lui-même ou d'autres personnes à un danger; qu'au cas d'espèce, pour valider le licenciement pour faute grave de M. X..., la Cour d'appel a relevé que des incidents d'alcoolisation reprochables au salarié s'étaient produits en décembre 2003 (attestation Z...) et janvier 2004 (attestation B...), à des dates rapprochées; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la consommation d'alcool de M. X... sur son lieu de travail avait une répercussion sur la qualité de son travail ni caractériser en quoi ses fonctions de cuisinier pouvaient être dangereuses dans un tel état, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code;
- 2°/ ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme elle l'a fait quand le comportement de M. X..., qui était âgé de 47 ans et avait plus de vingt ans d'ancienneté dans le même poste sans avoir jamais fait l'objet du moindre avertissement ni d'aucun reproche, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du même Code;
- 3°/ ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, notamment le comportement alcoolique qui lui était reproché et dont il contestait la matérialité, ne constituaient pas la véritable cause du licenciement qui trouvait son origine dans un différend qui opposait M. Y... (associé et représentant légal de la SARL RESTO EXPRESS) à M. X... qui, en sa double qualité d'associé et de caution, souhaitait obtenir des explications sur la gestion, les comptes sociaux, l'état comptable de la société pour l'exercice 2003 et les conventions écrites par la société (conclusions d'appel de M. X..., p. 9, § 2 et p. 10); qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contexte conflictuel dans lequel le licenciement du salarié était survenu, la Cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient pourtant les conclusions du salarié, si le motif du licenciement ne reposait pas, en réalité, sur un désaccord entre associés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1232-1 du même Code;
- 4°/ Et ALORS QUE, quatrièmement et enfin, en n'analysant que sommairement les éléments de preuve produits par l'employeur pour se contenter, s'agissant de ceux invoqués par M. X..., d'énoncer que le salarié n'apportait pas la contre-preuve des faits allégués par la SARL RESTO EXPRESS, les juges du second degré ont violé le principe d'égalité des armes, ensemble le droit au procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision attaquée: Cour d'appel d'Angers, du 11 mars 2008.

Roj: ATS 3296/2009 - ECLI:ES:TS:2009:3296A
Id Cendoj: 28079140012009200516
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1027/2008
Procedimiento: Social
Ponente: José Manuel López García de la Serrana
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Febrero de dos mil nueve.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Sabadell se dictó sentencia en fecha 8 de mayo de 2007, en el procedimiento nº 56/07 seguido a instancia de D. Alonso contra SERVEIS GENERALS PER MUNICIPIS, S.A., y FOGASA, siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre despido, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 17 de enero de 2008, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 4 de abril de 2008 se formalizó por el Letrado D. José Ramón Castro Villoria en nombre y representación de SERVEIS GENERALS PER MUNICIPIS, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 15 de enero de 2009 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- 1.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004).

2.- Y esta exigencia no se cumple en el presente supuesto. Es objeto del actual recurso de casación unificadora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de enero de 2008 (Rec. 7750/07), que confirma la declaración de improcedencia en un supuesto en que el trabajador fue despedido disciplinariamente, imputándole que durante los días que se señalan en la carta [7 días en tres meses] se ausentó del trabajo, hechos que califica la empresa como falta muy grave, al amparo del art 54 del Convenio Colectivo del sector de aparcamientos. En los días especificados en la carta de despido, el actor disponía de 15 minutos de

descanso en mañana y tarde - sin que se haya constatado su disfrute - y queda acreditado que el trabajador entró en distintos establecimientos, bares y comestibles, en donde estaba algunos minutos, regresando a su actividad. En algunos de los bares donde entró pidió algún refresco, café con leche y en ocasiones café o cerveza. La Sala de Suplicación entiende que no se han acreditado los hechos imputados en la carta y si bien se producen determinadas asistencias a bares o comestibles no revisten la cotas de culpabilidad y gravedad suficientes para imponer la máxima sanción. Consta que el actor ha padecido en los últimos años diversas secuelas que motivaron un largo proceso de incapacidad temporal, así como la dificultad de control de la diabetes que padece, las descompensaciones que le provocan y la necesidad de sucesivos ingresos hospitalarios.

3.- Disconforme con la anterior resolución se alza la empresa en casación unificadora, alegando infracción del art 54, 3, 10 y 11 y 55 c) del Convenio de aplicación al entender que han quedado acreditados los reiterados incumplimientos del trabajador, planteando en esta instancia si cuando el trabajador incurre en falta muy grave por «reiteración de las faltas» puede o no aplicarse la teoría gradualista.

Invoca como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de septiembre de 2007 (Rec. 3258/07), que con revocación de la de instancia declara la improcedencia del despido. En este supuesto la trabajadora, con categoría de limpiadora, en la contrata adjudicada en un colegio, fue despedida como consecuencia del incidente, desarrollado en el lugar y tiempo de trabajo, con otra trabajadora, en el transcurso del cual ambas se insultaron y agredieron mutuamente.

4.- De la comparación efectuada se desprende que tales supuestos no son identificables a fin de establecer la identidad sustancial exigida en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, puesto que los hechos que en cada caso motivan o no la imposición de la máxima sanción disciplinaria no son coincidentes, de modo que la aplicación de la doctrina sobre la valoración de las conductas a efectos de despido, de la teoría gradualista y de la valoración de la gravedad de los hechos y la responsabilidad a la vista de las concretas circunstancias concurrentes, arroja un resultado necesariamente dispar. Así, en primer lugar son diferentes las imputaciones realizadas, lo que lógicamente tiene su influencia en el desarrollo del debate: En el caso de autos, se imputa fraude, deslealtad y abuso de confianza, así como el abandono injustificado del trabajo, al amparo de la normativa convencional de aplicación y del art 54. d) ET, mientras que en la referencial, el despido se realiza al amparo del art 54.2. c): ofensas verbales o físicas a las personas que trabajan en la empresa.

Por otra parte, es diferente la actividad probatoria realizada en cada una de ellas y el convencimiento alcanzado por los respectivos juzgadores. En el caso de autos se recoge expresamente en la sentencia de instancia y en la de suplicación *«que los hechos imputados en la carta de despido no se han acreditado con la contundencia pretendida por la demandada»* para seguidamente añadir *«En el presente caso se constata que los hechos imputados al actor no revisten la máxima gravedad que justificaría el despido. Así, aun cuando se consideraran acreditados los mismos en su totalidad, lo que como se refiere en el relato fáctico no se ha probado por la demandada, es cierto que existen circunstancias concretas que atenuarían su relevancia»*. Y resulta que en la referencial nada de esto acontece, puesto que está acreditada la riña en la que, además de malos tratos de palabra, se produjo una agresión física entre las trabajadoras, quedando los hechos imputados acreditados sin ningún género de dudas.

Sobre estas bases, resulta que en la impugnada, si bien se producen determinadas asistencias del trabajador, durante el tiempo de trabajo, a bares y establecimientos de comestibles, no se especifica la duración ni tampoco si se utilizó el tiempo de descanso establecido. Y a mayor abundamiento, aun cuando se acreditaran estos hechos, el consumir en unos casos un café, un refresco o una cerveza puede tener sentido a la vista de la diabetes mellitus que sufre el actor, propenso a descompensaciones y que le pueden exigir breves ingestas. Esto es, existen circunstancias atenuantes cuales son: la propia enfermedad del actor que justificaría, las en general, breves paradas de su actividad; el hecho de que el actor, con independencia de que en estas paradas tomara alguna consumición, realizará anotaciones relacionadas con su actividad profesional; el dato de que el trabajador iniciara su jornada, en general, con anterioridad al horario establecido, podría compensar parcialmente el posible exceso de paradas; no se aporta por la demandada ningún elemento de prueba que acredite que el actor alcanzara un rendimiento en su actividad inferior a sus compañeros y no consta que con anterioridad hubiera sido amonestado o impuesto sanción por falta leve o grave. Mientras que en la referencial consta que la actora agredió a otra trabajadora, sin que hubiera mediado provocación, la agresión se produjo

en un Colegio y en presencia de profesores, alumnos y padres de alumnos, y estas agresiones físicas y las circunstancias concurrentes acreditan la trascendencia y gravedad de la conducta imputada.

Por lo que se refiere a la cuestión ahora planteada - aplicación de la teoría gradualista a los supuestos de reiteración de faltas - la misma no es analizada ni en la recurrida ni en la referencial. En aquella, la empresa recurrente sustentaba el recurso de suplicación en los continuos incumplimientos a las normas establecidas por la empresa, la ausencia al trabajo desde los 10 a los 70 minutos y en un consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que no es estimado pues en el relato histórico no se encuentran las circunstancias o hechos a que se refiere la recurrente.

SEGUNDO.- Por otra parte, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 3 de julio de 2007 (RCUD 2486/07) y las que ella cita, en particular la de 24 de mayo de 2005 (RCUD 1728/04) y salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, *«el despido disciplinario «no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en estos casos la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 30 de enero [-rcud 1232/90 -] y 18 de mayo de 1992 [-rcud 2271/91 -], 15 [-rcud 952/96 -] y 29 de enero de 1997 [-rcud 3461/95 -], 6 de abril [-rcud 1270/99 -], 2 de junio [-rcud 311/99 -] y 13 de noviembre de 2000 [-rcud 4391/99... Desde esta perspectiva puede afirmarse que este tipo de litigios carece de interés casacional y su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora, sino que comprometería gravemente el funcionamiento del recurso con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo».*

TERCERO.- Las precedentes consideraciones, no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, donde se insiste en lo ya expuesto en el escrito de interposición, discrepando de lo razonado por esta Sala en relación con el alcance de la identidad sustancial a que alude el art. 217 LPL. De la comparación efectuada se desprende que son distintas las imputaciones contenidas en las respectivas cartas de despido y los hechos acreditados, resultando que en la sentencia impugnada se estima que no han sido constatadas las imputaciones realizadas, por lo que se declara la improcedencia del despido sin necesidad de aplicar la teoría gradualista, y únicamente se refiere a la misma, a mayor abundamiento y para el supuesto de que se hubieran acreditado. Y nada semejante acontece en la de contraste.

CUARTO.- Por lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, con imposición de costas a la mercantil recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicación.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. José Ramón Castro Villoria, en nombre y representación de SERVEIS GENERALS PER MUNICIPIS, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 17 de enero de 2008, en el recurso de suplicación número 7750/07, interpuesto por SERVEIS GENERALS PER MUNICIPIS, S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Sabadell de fecha 8 de mayo de 2007, en el procedimiento nº 56/07 seguido a instancia de D. Alonso contra SERVEIS GENERALS PER MUNICIPIS, S.A., y FOGASA, siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la mercantil recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.

Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 17 mai 2005
N° de pourvoi: 03-43082
Non publié au bulletin
Rejet
Président: M. SARGOS, président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité d'adjoint au chef de magasin par la société Europa discount Le Maraîcher, aux droits de laquelle se trouve la société Europa discount (ED) respectivement le 6 septembre 1993 et le 8 novembre 1994; que M. X... a été promu chef de magasin en janvier 1994; que les deux salariés ont été licenciés pour faute grave le 9 janvier 1998;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2003) d'avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen:

- 1^o/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, il résulte des lettres de licenciement de Messieurs X... et Y... qu'ils ont été licenciés pour trois griefs distincts: la consommation d'alcool sur les lieux de travail en contradiction avec le règlement intérieur, l'incapacité d'assumer leur travail et les perturbations de l'établissement sous l'emprise de cette consommation alcoolisée et la profération de menaces à l'encontre de leurs supérieurs; qu'après avoir relevé que les salariés avaient effectivement consommé de l'alcool sur le lieu de leur travail, les juges du fond ont néanmoins jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que les griefs contenus dans la lettre de licenciement formeraient un tout et que la consommation d'alcool sur les lieux de travail ne constituerait une cause sérieuse de licenciement que si elle avait placé les salariés sous l'empire d'un état alcoolique et s'il en était résulté des perturbations pour l'établissement; qu'en se déterminant ainsi lorsque les griefs invoqués ne formaient nullement un tout mais constituaient des griefs autonomes qui devaient être examinés séparément, la cour d'appel a dénaturé les lettres de licenciements et violé l'article 1134 du Code civil;
- 2^o/ que constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement le seul fait pour un salarié de consommer de l'alcool sur son lieu de travail en infraction avec le règlement intérieur, peu important que cette consommation ne l'ait pas placé sous l'empire d'un état alcoolique ou qu'il n'en soit pas résulté de perturbation pour l'établissement, qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que MM. X... et Y... avaient consommé de l'alcool sur le lieu de leur travail et non en salle de repos; qu'il n'est pas contesté, comme le rappelaient les lettres de licenciement, que la consommation d'alcool sur le lieu de travail était formellement interdite par l'article 4 du règlement intérieur en vigueur dans la société; qu'en énonçant qu'un tel comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant qu'il n'était nullement établi que la consommation d'alcool les avaient placés sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il en était résulté des perturbations pour l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;
- 3^o/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre; qu'ainsi les attestations de toutes sortes sont recevables à titre de preuve, même si elles émanent de personnes ayant un lien avec l'une des parties et notamment de salariés de l'entreprise; qu'en décidant que l'attestation de M. Z..., simple salarié superviseur, ne pouvait pas être retenue comme élément doté de l'impartialité indispensable en la matière, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ainsi que l'article 199 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les salariés avaient consommé du vin lors du repas de midi, leur comportement était normal et leurs propos lucides, de sorte qu'aucun élément ne permettait de retenir à leur encontre les faits invoqués par l'employeur; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société ED aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

Décision attaquée: cour d'appel de Lyon (chambre sociale), du 26 février 2003.

Roj: ATS 5543/2004 - ECLI:ES:TS:2004:5543A
Id Cendoj: 28079140012004201491
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 5169/2003
Nº de Resolución:
Procedimiento: Inadmisión
Ponente: Victor Eladio Fuentes López
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil cuatro.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 13 de diciembre de 2002, en el procedimiento nº 899/02 seguido a instancia de Juan Pedro contra SIGLA IBERICA, S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 10 de junio de 2003, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 16 de octubre de 2003 se formalizó por el Letrado D. José Manuel Ruiz López en nombre y representación de SIGLA IBERICA, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 17 de febrero de 2004 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 de enero, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997 y 23 de septiembre de 1998).

La sentencia que se recurre ha recaído en un procedimiento de despido, instado por el trabajador demandante frente a la demandada, SIGLA IBÉRICA S.A., para la que aquél prestaba servicios como subagente de tienda, habitualmente en Madrid, si bien el 11 de junio de 2002 había sido desplazado provisionalmente a Barcelona. El 9 de septiembre de ese año la empresa comunicó al actor su despido, con base en la conducta inadecuada, en perjuicio de la empresa y de su imagen, observada por el trabajador desde el mes de julio. El actor iniciaba su jornada a las ocho horas, procediendo a la apertura de la tienda. Durante el mes de julio tuvo retrasos de al menos una hora en siete ocasiones, lo que provocó la prolongación de la jornada del personal del turno de noche. El día 21 de julio, domingo, el actor acudió puntualmente al trabajo y comenzó la apertura de la tienda,

pero unos quince minutos más tarde avisó a una compañera porque decía encontrarse mal. Dicha compañera apreció que el actor tenía un desordenado aspecto, detectando signos de que había ingerido bebidas alcohólicas. El siguiente día primero de septiembre, también domingo, el actor no acudió al trabajo, avisando a la misma compañera del hecho anterior de que algo le había sentado mal. La trabajadora presumió que se hallaba de nuevo bajo el efecto de bebidas alcohólicas, y le preguntó que dónde se encontraba, respondiendo el actor que no lo sabía. Esos dos días el establecimiento acusó un descenso de las ventas en la primera hora de apertura, respecto de la misma franja horaria de otros domingos. La sentencia de instancia declaró la procedencia del despido, siendo recurrida en suplicación, donde se ha debatido si la carta reunía los requisitos de contenido y forma precisos, al no haber aludido a las concretas fechas de los retrasos, y si los mismos justificaban la medida extintiva adoptada, por cuanto que el convenio de aplicación sólo los tipifica como faltas grave y muy grave cuando se ocasionen un perjuicio a la empresa, lo que aquí ni se le ha imputado al trabajador ni ha resultado probado, pues no es dable deducir que el descenso de las ventas fuese imputable a la inasistencia del actor, que era sustituido por su compañera. En cuanto a la embriaguez, no se acredita su habitualidad. Todo lo cual lleva a la estimación del recurso y a la declaración de la improcedencia del despido.

La recurrente pretende articular el presente recurso sobre la existencia de contradicción entre la sentencia que se impugna y la de la Sala de Aragón de 12 de marzo de 2001, recaída igualmente en procedimiento de despido, en cuanto a la determinación de si la carta de despido cumple con las exigencias legales de concreción, cuando se trata de imputar al trabajador —dice la recurrente— «hechos generalizados y reiterados en un determinado período de tiempo».

El actor en el supuesto controvertido en la sentencia seleccionada prestó servicios para Montajes Navea, SL, desde el 21 de mayo de 1985, como Oficial 1º, realizando su actividad en la nave de Amylum Ibérica, SA, quien en septiembre de 2000 solicitó de la demandada que el actor no volviera al trabajo. La obra en la citada nave quedó paralizada en septiembre de 2000. El actor a lo largo del año 1999 y del 2000 en numerosas ocasiones, casi diarias, acudía a su trabajo habiendo ingerido bebidas alcohólicas, lo que era apreciado por sus compañeros, y a lo largo de la jornada bebía vino de botellas que había en la nevera del centro de trabajo, quedando en estado de embriaguez. Se ausentaba del puesto de trabajo, en muchas ocasiones para no regresar, con el fin de ingerir bebidas alcohólicas. Varias veces se ha dormido en los vestuarios, donde ha sido encontrado por sus compañeros al buscarlo por notar su ausencia. A veces, durante unos diez o quince días, dejaba de beber alcohol y posteriormente volvía a hacerlo. Cuando se marchaba del puesto de trabajo los compañeros debían hacer su labor y Ismael cumplimentaba diariamente los partes de trabajo que había de rellenar el actor. Jose Ángel D. recibía órdenes de los Ingenieros del centro de trabajo y en ocasiones también salía para hacer encargos encomendados por dichos técnicos. Tal comportamiento se mantuvo a lo largo del año 2000. En diversas ocasiones los responsables de Amylum y de la demandada requirieron al actor para que dejase de beber. Se llevó al actor a la consulta de un psicólogo para que le ayudara a dejar de beber alcohol, pero el Sr. D. solo fue a la consulta en una ocasión. El 18 de septiembre de 2000 la demandada notificó al actor su despido mediante carta. Contra la sentencia desestimatoria recaída en la instancia se interpuso recurso de suplicación, donde se ha debatido, en primer lugar, si la carta de despido cumplía las exigencias formales en cuanto a precisión de los hechos imputados y de las fechas de comisión de los mismos; y, en segundo termino, la concurrencia de la nota de habitualidad en la conducta y la imputabilidad de la misma al trabajador, que alega que padece una enfermedad. La Sala desestima ambos motivos.

Es claro que no puede apreciarse la contradicción denunciada, por cuanto que no existe identidad entre los supuestos analizados por las respectivas sentencias, si se trata de valorar la suficiencia y precisión del contenido de la carta en relación con las fechas de comisión de «hechos generalizados y reiterados en un período de tiempo». Y ello, en síntesis, porque en el caso de la sentencia de contraste la carta de despido describe con sumo detalle la conducta imputada al actor, consistente básicamente en la embriaguez habitual ocasionada por el consumo excesivo, casi a diario durante dos años consecutivos, de bebidas alcohólicas, con graves y numerosos percances en la organización y prestación del trabajo y el consiguiente perjuicio para la empresa. En cambio, en el caso de la sentencia que se recurre la Sala aprecia el incumplimiento de la referida exigencia de contenido y precisión de la carta de despido, en la que se imputaba al actor retrasos en siete ocasiones a lo largo del mes de julio, lo que, es obvio, no tiene el mismo alcance que la conducta imputada en el caso anterior. Además, la declaración de improcedencia en ese caso se basó en circunstancias adicionales, como que no se considerara acreditada la gravedad de tales retrasos que exige el convenio para calificarlos como faltas graves o muy graves, y el hecho de que la embriaguez no fuese habitual.

Al tratarse de verificar una pura exigencia formal de la carta de despido, y no tanto la calificación de las conductas en cada caso imputadas a efectos de despido, no resulta aquí de aplicación la doctrina de esta Sala sobre la dificultad de homogeneizar criterios doctrinales en relación con dicha cuestión. Concorre aquí, simple y llanamente, una falta de identidad fáctica entre las controversias resueltas por las sentencias sometidas a comparación.

Muestra la parte recurrente, en su escrito de alegaciones, su sorpresa por lo resuelto en providencia de 17 de febrero pasado en la que se apreciaba la posible falta de contradicción entre las sentencias comparadas. Tras recordar a esta Sala cuál es la doctrina de la propia Sala sobre el alcance del presupuesto de la identidad, manifiesta dónde está, a su juicio, la equivocación de la referida providencia, que la parte centra en la mayor concreción de la carta de despido en el supuesto ahora sometido a la consideración de esta Sala, tratándose en ambos casos de «hechos constantes». Sin embargo, estas afirmaciones no son más que la particular versión de lo que en ambos casos acontece, así como una valoración interesada de lo que habría de haberse resuelto en el presente caso. En cualquier caso, la versión de la parte prescinde de otorgar relevancia a otras circunstancias y factores diferenciales, que aquí han quedado expuestos, lo que no deja de ser una mera discrepancia de criterio con el mantenido por esta Sala.

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, hay que imponer a la parte recurrente las costas del presente recurso y acordar la pérdida del depósito, dando a la consignación constituida su destino legal.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. José Manuel Ruiz López, en nombre y representación de SIGLA IBERICA, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 10 de junio de 2003, en el recurso de suplicación número 1406/03, interpuesto por Juan Pedro, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Madrid de fecha 13 de diciembre de 2002, en el procedimiento nº 899/02 seguido a instancia de Juan Pedro contra SIGLA IBERICA, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente; pérdida del depósito constituido, y dando a la consignación constituida su destino legal.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

*La embriaguez habitual en el trabajo motivo de despido disciplinario***ESTADO DE EMBRIAGUEZ**

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 8 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-16793
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01769
Publié au bulletin
Cassation
M. Frouin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mai 1996 par la société d'assurance Generali IARD vie en qualité de conseiller commercial pour occuper en dernier lieu les fonctions d'inspecteur principal, a été convié à un voyage organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société afin de récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise; qu'à la suite d'incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié, commis à l'occasion d'un séjour d'agrément en dehors du temps et du lieu de travail, relevaient de la vie privée quand bien même des supérieurs hiérarchiques et d'autres salariés étaient conviés à participer à ce séjour et que le salarié avait tenté de bénéficier de la législation professionnelle pour un accident dont il était prétendu qu'il était survenu à l'occasion de ce séjour et qu'aucun manquement de l'intéressé à une obligation contractuelle n'était établi;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits de menaces, insultes et comportements agressifs commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un «challenge» national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachaient à la vie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD vie.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'insertion en raison de l'absence d'information sur le droit individuel à la formation, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la présentation d'une attestation Pôle Emploi erronée, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'avoir condamné la société employeur à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement dans la limite de six mois et d'avoir débouté la société employeur de ses demandes;

AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement; que la lettre de licenciement de M. X... pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée: «... Au cours de l'entretien, j'ai exposé les motifs du licenciement envisagé à voire rencontre. Vous êtes Inspecteur Principal au sein de la Division Côte d'Armor-Morbihan de la Direction du réseau salariés. Début mai 2009, l'entreprise a organisé un voyage de récompense pour les collaborateurs du réseau salarié vainqueurs des compétitions au regard de leur performance en 2008. C'est dans ce cadre, que vous avez été invité à participer à un voyage en Croatie du 7 au 10 mai 2009. Au cours de ce voyage, vous avez eu une attitude particulièrement agressive, violente, irrespectueuse et menaçante à l'égard de certains de vos collègues de travail et de votre hiérarchie. En effet, la veille du départ, le 6 mai 2009, une partie des participants s'est retrouvée à l'hôtel IBIS de l'aéroport Charles de Gaulle. Lors de ce premier dîner au restaurant de l'hôtel, en état d'ébriété évident, vous avez provoqué un premier incident avec certains de vos collègues de travail. En tombant de votre chaise avec une bouteille de vin rouge dans la main, vous avez tâché la veste de la compagne d'un collègue de travail. Lorsque ce dernier vous demande de vous excuser, vous vous êtes mis à l'insulter et à le menacer physiquement en l'invitant à le suivre à l'extérieur de l'hôtel. Devant l'hôtel, toujours dans un état d'énervement certain, vous avez continué à avoir une attitude agressive et menaçante envers vos collègues de travail. Le lendemain de cette première soirée, Monsieur Gilbert Y..., Contrôleur Général et votre responsable hiérarchique, considérant que votre comportement de la veille était inacceptable, vous a demandé d'avoir une attitude irréprochable à l'avenir. Or, le 7 mai au soir, à Dubrovnik, vous avez eu une nouvelle fois un comportement agressif, violent et menaçant à l'égard de votre hiérarchie. En effet, votés avez provoqué un nouvel incident avec un des serveurs du restaurant. Monsieur Eric Z..., Directeur du Réseau Salarié, vous a alors demandé de regagner votre chambre. Pourtant, un peu plus tard dans la soirée, vous êtes rentré en contact avec Monsieur Gilbert Y.... Vous avez prononcé des insultes particulièrement violentes à l'égard de votre responsable hiérarchique. Votre comportement faisait apparaître un état d'ébriété avancé. Par la suite, vous vous êtes retrouvé dans une position extrêmement agressive vis-à-vis du Directeur du réseau salariés, Monsieur Z..., et vous en seriez venu aux mains si Monsieur Z... n'avait pas fait preuve de maîtrise. Nous considérons que ce comportement est particulièrement grave et inacceptable dans le cadre de vos fonctions. Les explications apportées lors de l'entretien préalable par Monsieur Francky B..., et que vous lui aviez préalablement indiquées, n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation... Au vu des éléments recueillis au cours de l'ensemble de la procédure, et après réflexion, nous avons décidé de vous notifier par la présente lettre recommandée avec avis de réception votre licenciement pour faute grave»; que l'employeur soutient pour l'essentiel que les faits en cause sont en relation directe avec la sphère professionnelle, ce qu'a reconnu M X... en sollicitant l'application de la législation professionnelle pour un prétendu accident survenu dans le cadre du séjour en Croatie et que ces faits prouvés fondaient un licenciement pour faute grave, après une procédure régulière devant le conseil de discipline; que le salarié fait valoir que les faits reprochés relèvent de la vie privée et ne peuvent constituer une faute, et encore moins une faute grave, et fonder un licenciement et qu'il a été licencié verbalement par M Z... dès le 7 mai 2009; qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant du contrat de travail; qu'en l'espèce, le séjour organisé

par l'employeur et offert à M X... n'était pas un voyage d'affaires et ne s'inscrivait pas dans un séminaire, mais constituait uniquement un voyage d'agrément destiné à récompenser des salariés de la société GENERALI lauréats d'un challenge national interne à l'entreprise; qu'un tel séjour qui ne s'est pas déroulé au temps et au lieu du travail, relève de la vie privée du salarié, quand bien même des supérieurs hiérarchiques et d'autres salariés cadres y étaient conviés et que M X... a tenté de bénéficier de la législation professionnelle pour un accident qu'il dit être survenu lors du séjour en Croatie; qu'il n'est pas établi que M Z..., directeur commercial, a notifié verbalement à M X... son licenciement dans la soirée du 7 mai 2009; que M A..., divisionnaire, interrogé le 1er juillet 2009 dans le cadre de l'enquête administrative menée par la CAPM, précise que le directeur commercial a menacé l'intéressé de licenciement de retour en France, à la suite de quoi M X... s'est emporté contre de dernier, puis contre M Y... dans des termes grossiers selon celui-ci; qu'aucune des pièces contractuelles versées au débat ne fait obligation à M X... d'avoir tel ou tel comportement dans le cadre d'un tel séjour; qu'outre le fait que l'altercation prêtée à M X... avec un serveur croate est contestée et n'est pas établie, et que la menace de licenciement proférée à son encontre le 7 mai 2009 par M Z..., n'a pas participé à la quiétude de la soirée, il n'est pas établi de manquement de l'intéressé à une obligation découlant du contrat de travail; qu'il s'en suit que son licenciement prononcé pour motif disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé; Sur les conséquences du licenciement; que licencié sans cause réelle et sérieuse, M X..., âgé de 48 ans, a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 13 années dans cette entreprise de plus de onze salariés et d'un salaire moyen brut de 7.253,37 €; qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 10 août 2009 au taux journalier net de 113,02 €; que M X... ne verse aucune pièce sur la durée de sa prise en charge par l'Assedic et sur sa situation à ce jour; que le préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l'allocation de la somme de 44.000 €; que M X... est également fondé à obtenir un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire du 25 mai au 8 juin 2009, soit la somme non contestée de 1.306,66 €, dont à déduire les indemnités journalières de 577,98 €, soit un total de 728,68 € et l'indemnité de congés payés afférents de 72, 86 €, le jugement étant confirmé que sur la base d'un salaire moyen brut de 7.253,37 € selon les bulletins de salaire, l'indemnité de préavis de trois mois, à laquelle a droit M X... ressort à 21.760,10 € et 2.176 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de la convention collective applicable ressort à la somme non autrement contestée de 38. 168, 18 €; qu'il n'apparaît pas à la Cour que le licenciement de M X... s'est déroulé dans des circonstances vexatoires, l'employeur ayant diligenté une procédure de licenciement dans les conditions légales et conventionnelles et ne pouvant se voir reprocher la défection au conseil de discipline d'un salarié désigné par M X... et convoqué pour y siéger; qu'en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou nul et conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées; que toutefois l'employeur est dispensé de ce remboursement lorsque l'effectif de l'entreprise est de moins de onze salariés et que le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté; que la SA GENERALI IARD Vie qui remplit les conditions de ce texte, sera condamnée à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M X... du jour de son licenciement dans la limite de six mois; * Sur le droit individuel à la formation; que l'article L. 6323-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du licenciement, dispose que lorsque le salarié a acquis des heures au titre du droit individuel à la formation, l'employeur l'informe de ses droits dans la lettre de licenciement, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation; qu'en l'espèce, M X... qui ne pouvait être licencié pour motif disciplinaire et devait être informé de son DIF dans la lettre de licenciement n'a pas bénéficié de cette information; que ce manquement lui a nécessairement causé un préjudice constitué par la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation; que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1.098 €; * Sur l'attestation Assedic; que les salaires bruts portés par l'employeur sur l'attestation Assedic remise à M X... ne correspondent pas aux salaires versés à ce dernier de janvier à avril 2009, de sorte que l'assiette de calcul a été minorée de 7.600 €; que M X... soutient que cette minoration lui a causé un préjudice dont il demande réparation; que la société GENERALI rétorque qu'elle devait, en

application de l'article 59 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, porter sur l'attestation Assedic le montant de la rémunération brute mensuelle du salarié dans la limite de 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ce qu'elle a fait; qu'aux termes des dispositions des articles L. 5422-9 du code du travail et 43 du règlement précité, l'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond égal à 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale; que ce plafond ressortait en 2009 à (2.859 € x 4) 11 €, montant de rémunération jamais atteint par le salarié au cours des douze derniers mois d'activité; qu'en minorant les rémunérations versées à M X... et donc ses droits au titre de l'allocation de retour à l'emploi, l'employeur a causé au salarié un préjudice dont il doit réparation; que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 €; Sur les autres demandes; qu'en application de l'article 1153 du code civil et conformément à la demande, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 11 décembre 2009; qu'il convient par ailleurs de condamner la société GENERALI IARD Vie à remettre à M X... une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés selon les termes de l'arrêt, dans le mois de sa notification, sans qu'il y ait lieu de fixer dès à présent une astreinte; que l'équité justifie que la société GENERALI IARD Vie qui succombe en appel verse à M X... la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle octroyée par le conseil de prud'hommes et supporte les entiers dépens;

1^o/ ALORS D'UNE PART QUE des violences physiques et verbales commises par un salarié, même hors du temps et du lieu du travail, peuvent justifier une sanction disciplinaire lorsque les faits incriminés se rattachent à la vie professionnelle du salarié et à l'entreprise; qu'ayant constaté que c'est au cours d'un voyage d'agrément organisé et offert par l'employeur et destiné à récompenser des salariés lauréats d'un challenge national interne à l'entreprise, que les faits imputés à Monsieur X..., employé en qualité d'Inspecteur principal, statut cadre, et décrits dans la lettre de licenciement comme constitutifs d'une «attitude particulièrement agressive, violente, irrespectueuse et menaçante à l'égard de certains de vos collègues de travail et de votre hiérarchie» avaient été commis, ce dont il résultait que ces faits se rattachaient à la vie professionnelle du salarié, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et conclure que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que le séjour organisé par l'employeur et offert aux salariés constituait uniquement un voyage d'agrément, et qu'un tel séjour qui ne s'est pas déroulé au temps et au lieu du travail relève de la vie privée du salarié, a violé les dispositions des articles L 1331-1 du Code du travail ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail;

2^o/ ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause, QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire lorsqu'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail; que commet un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, le salarié, occupant un poste de cadre, qui, à l'occasion d'un voyage organisé et offert par l'employeur pour récompenser certains salariés de l'entreprise, commet une agression physique et verbale à l'encontre de certains de ses collègues de travail et de son supérieur hiérarchique et se montre irrespectueux, insultant et menaçant à leur égard; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement faisant notamment grief à Monsieur X... d'avoir, le 6 mai 2009, soit à l'occasion d'un voyage organisé et offert par l'employeur pour récompenser certains salariés de l'entreprise, provoqué un premier incident en insultant, agressant et menaçant physiquement plusieurs collègues de travail lorsqu'il se trouvait en état d'ébriété évident, la Cour d'appel qui retient qu'aucune des pièces contractuelles versées aux débats ne fait obligation à Monsieur X... d'avoir tel ou tel comportement dans le cadre d'un tel séjour relevant de sa vie privée et qu'il n'est pas établi de manquement de l'intéressé à une obligation découlant du contrat de travail, a violé les dispositions des articles L 1331-1 du Code du travail ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail;

Publication:

Décision attaquée: Cour d'appel de Rennes, du 27 février 2013.

Le: 16/01/2015

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 2 juillet 2014

N° de pourvoi: 13-13757

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01314

Non publié au bulletin

Rejet

M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Bertrand, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 janvier 2013), que M. X..., engagé le 1er février 1999 en qualité de conditionneur par la société Stockalliance, aux droits de laquelle est venue la société ND Norbert Dentressangle Logistics, a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2008 à la suite d'un contrôle d'alcoolémie qui s'est révélé positif; qu'il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen:

- 1°/ que le contrôle du taux d'alcool d'un salarié sur son lieu de travail n'est licite qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'en égard à la nature du travail confié à ce salarié un tel état d'ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave; qu'en décidant que le contrôle d'alcoolémie opéré n'était pas conforme au règlement intérieur aux motifs que l'alcootest ne pouvait être pratiqué que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse, cependant que le règlement intérieur prévoyait que l'alcootest pouvait être imposé aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé et dont l'état d'imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes ou leur entourage et que les modalités de ce contrôle en permettaient la contestation, la cour d'appel a violé les articles violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail;
- 2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis; que l'article 1er chapitre IV du règlement intérieur litigieux rappelle que «le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation. Le salarié pourra demander à être assisté d'un tiers et à bénéficier d'une contre-expertise»; qu'en déduisant de cette clause que l'alcootest ne pouvait être pratiqué que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1er du chapitre IV du règlement intérieur de la société ND Logistics et méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu que l'employeur ne pouvait, selon le règlement intérieur, soumettre le salarié à un contrôle d'alcoolémie, dans le but de faire cesser immédiatement la situation, que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel, qui a justement dénié toute portée au dépistage effectué en violation de ce règlement, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société ND Norbert Dentressangle Logistics aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société ND Norbert Dentressangle logistics

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Norbert Dentressangle Logistics à payer à Monsieur Messaoud X... les sommes de 3 024 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 070 € à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, 9 072 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé, et d'avoir ordonné, en conséquence, le remboursement par la société Norbert Dentressangle Logistics aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour de la rupture, dans la limite de 6 mois d'indemnités;

AUX MOTIFS QUE la société Stockalliance est une entreprise de logistique qui, le premier février 1999, a engagé Monsieur X... comme conditionneur, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée; qu'elle est reprise par la société Norbert Dentressangle Logistics; que Monsieur X... est licencié pour faute grave le 23 décembre 2008; que la longueur de la lettre de rupture ne permet pas de la reprendre intégralement; qu'en résumé: le 3 décembre 2008 à 9 heures 45, il se soumet à un alcootest, l'appareil mentionne 2 fois un résultat positif (hot, soit plus de 0,50 gramme d'alcool par litre de sang), il a reconnu avoir bu la veille au soir et n'a pas contesté le résultat, mais a dit qu'il était tout à fait apte à travailler, ce contrôle est conforme à l'article 1er du règlement intérieur et, selon l'article 10, l'état d'ébriété est une infraction à ce règlement, compte tenu des risques pour la sécurité du fait qu'il est amené à conduire un engin de manutention, c'est une faute grave; qu'il résulte du rapport écrit que le 3 décembre l'ensemble du service CAF (18 salariés) a été soumis à un alcootest et que le résultat a été «hot» (positif) pour Monsieur X...; que pour être régulier, ce contrôle devait être conforme au règlement intérieur; qu'il prévoit que: «Le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation; le salarié pourra demander à être assisté d'un tiers et à bénéficier d'une contre-expertise»; qu'il en résulte que l'alcootest ne peut être pratiqué que si le salarié présente un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse; qu'ici, rien ne permet de dire que Monsieur X... ait présenté un état d'ébriété apparent; que le fait que le contrôle ait été pratiqué sur les 18 personnes d'un service démontre même le contraire; que ce dépistage n'étant pas conforme au règlement, son résultat ne constitue pas une faute; que le licenciement est infondé; que le montant des indemnités de rupture est justifié et non contesté; que Monsieur X... ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés, les dommages intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois; que le préavis l'indemnise jusqu'au 23 février 2009; qu'il ne produit aucun élément, comme par exemple des relevés d'indemnités Pôle Emploi, permettant de connaître sa situation professionnelle ultérieure; que son préjudice matériel et moral n'a pas excédé le minimum et sera fixé à 9.072 €; que le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné, dans la limite de 6 mois; que la société devra remettre les documents induits sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif; que les demandes reconventionnelles ne peuvent qu'être rejetées;

1°/ ALORS QUE, d'une part, le contrôle du taux d'alcool d'un salarié sur son lieu de travail n'est licite qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'en égard à la nature du travail confié à ce salarié un tel état d'ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave; qu'en décidant que le contrôle d'alcoolémie opéré n'était pas conforme au règlement intérieur aux motifs que l'alcootest ne pouvait être pratiqué que si le

salarié présentait un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse, cependant que le règlement intérieur prévoyait que l'alcootest pouvait être imposé aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé et dont l'état d'imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes ou leur entourage et que les modalités de ce contrôle en permettaient la contestation, la Cour d'appel a violé les articles violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du Code du travail;

- 2º/ ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis; que l'article 1er chapitre IV du règlement intérieur litigieux rappelle que «le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation. Le salarié pourra demander à être assisté d'un tiers et à bénéficier d'une contre-expertise»; qu'en déduisant de cette clause que l'alcootest ne pouvait être pratiqué que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1er du chapitre IV du règlement intérieur de la société ND Logistics et méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.

Décision attaquée: Cour d'appel d'Orléans, du 8 janvier 2013.

Le: 16/01/2015

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 7 mai 2014

N° de pourvoi: 13-10985

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00868

Non publié au bulletin

Rejet

M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 2012) que Mme X..., engagée le 1er décembre 1983 par la société Disbour en qualité d'hôtesse de caisse-vendeuse, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 août 2010;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen:

- 1°/ qu'en ayant retenu que le fait de s'être présentée le 10 juillet 2010 à son travail en état d'ébriété prononcé et d'avoir commis des erreurs d'enregistrement constituait une faute grave, alors qu'un tel comportement, de la part d'une salariée ayant près de 27 ans d'ancienneté, qui dès le 12 juillet 2010, avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (psychasthénie et dépression), jusqu'au 24 octobre 2010, avait de surcroît été hospitalisée du 11 au 16 juillet 2010, du 21 au 27 août et du 13 septembre au 9 octobre 2010, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail;
- 2°/ qu'en ayant retenu que l'état d'ébriété pouvait constituer une faute grave, sans avoir constaté qu'il avait exposé à un danger les personnes ou les biens et que le règlement intérieur prévoyait des modalités de contrôle de cet état en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée se trouvait en état d'ébriété dans l'enceinte du magasin et qu'elle avait commis sous l'empire de l'alcool plusieurs erreurs de caisse, la cour d'appel a pu décider, eu égard à ses antécédents et aux répercussions de son comportement sur la qualité de son travail et sur le fonctionnement de l'entreprise, que son attitude rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave;

Aux motifs que le 10 juillet 2010 au matin, Mme X... s'est présentée à son poste de caisse avec une heure de retard et dans un état d'ébriété révélant une inaptitude à prendre son poste, qu'elle a eu bien du mal à rejoindre le vestiaire, qu'elle était en état d'ébriété manifeste, incapable de faire des rendus de monnaie, qu'il a fallu la renvoyer chez elle au bout d'une demi-heure en raison de ses multiples erreurs, que son absence en période estivale a provoqué un surcroît de travail pour les autres caissières présentes ainsi qu'un fort mécontentement des clients, que certains d'entre eux n'ont pas hésité à abandonner leur caddie et à quitter le magasin sans leurs achats et qu'en dépit de la demande explicite de l'employeur, l'intéressée ne s'est pas représentée à son travail à 13h30; que la preuve de la prise de poste de Mme X... en état d'ébriété manifeste le 10 juillet 2010 est rapportée (...); qu'elle a fait montre d'une intempérance réitérée puisque des avertissements lui avaient déjà été notifiés pour état d'ébriété sur le lieu de travail le 12 octobre 2006 et le 3 décembre 2007; que l'appelante démontre par ailleurs que le 10 juillet 2010, Mme X... a enregistré deux concombres au prix unitaire de 99,99 € commettant ainsi une erreur grossière s'ajoutant à la très longue liste des erreurs ayant fait l'objet des avertissements des 12 octobre 2006, 19 avril 2007, 11 février 2008, 18 février 2009 et 19 avril 2010; que diverses attestations démontrent que certaines clientes du magasin évitaient la caisse tenue par Mme X... pour ne pas être victime de ses erreurs d'enregistrement; que la preuve est rapportée des deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement; que l'état d'ébriété de Mme X... sur le lieu de travail n'était pas sans précédent; qu'il a eu des répercussions sur la qualité de son travail ainsi que sur le fonctionnement normal de l'entreprise; qu'il était de nature à compromettre la qualité de son activité professionnelle et à engager la responsabilité de l'employeur; qu'il a rendu impossible son maintien dans l'entreprise; que dès lors, la Sarl Disbour était fondée à licencier la salariée pour faute grave;

- 1º/ ALORS QUE, en ayant retenu que le fait de s'être présentée le 10 juillet 2010 à son travail en état d'ébriété prononcé et d'avoir commis des erreurs d'enregistrement constituait une faute grave, alors qu'un tel comportement, de la part d'une salariée ayant près de 27 ans d'ancienneté, qui dès le 12 juillet 2010, avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (psychasthénie et dépression), jusqu'au 24 octobre 2010, avait de surcroît été hospitalisée du 11 au 16 juillet 2010, du 21 au 27 août et du 13 septembre au 9 octobre 2010, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail;
- 2º/ ALORS QUE, en ayant retenu que l'état d'ébriété pouvait constituer une faute grave, sans avoir constaté qu'il avait exposé à un danger les personnes ou les biens et que le règlement intérieur prévoyait des modalités de contrôle de cet état en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Dijon, du 19 avril 2012.

Roj: ATS 7447/2013
Id Cendoj: 28079140012013201581
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 420/2013
Procedimiento: Social
Ponente: María Luísa Segoviano Astaburuaga
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Junio de dos mil trece.

Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Móstoles se dictó sentencia en fecha 30 de abril de 2012, en el procedimiento nº 1137/11 seguido a instancia de D. Jose Carlos contra BOAYA, S.L., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 26 de noviembre de 2012, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 31 de enero de 2013 se formalizó por el Letrado D. Ignacio Herrero Alonso en nombre y representación de D. Jose Carlos, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 8 de mayo de 2013, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

ÚNICO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007; 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007; 24 de junio de 2011, R. 3460/2010; 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010; 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010; y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Dicho presupuesto no concurre en el presente caso tal como se deduce de la comparación que ahora se realiza. Así, en el supuesto de la sentencia recurrida el trabajador demandante prestaba servicios con la antigüedad de 21/6/2007 y la categoría profesional de viajante, razón por la cual utilizaba para sus desplazamientos laborales un vehículo de la empresa, y el 12/5/2011 fue despedido por indisciplina y desobediencia, y por transgresión de la buena fe contractual con abuso de confianza, debido a los hechos alegados en la carta de despido y acreditados en juicio, que tuvieron lugar el día 11/5/2011 en que el trabajador acudió al centro de trabajo de Fuenlabrada en estado de embriaguez, tras conducir el vehículo de la empresa, y al encontrarse con la gerente,

el actor le dijo que «había bebido mucho» y que «no sabía lo mucho que bebía», y la llamó «ruin y cutre», y le dijo que «quería arruinar la empresa», y a otro compañero le llamó «putos miserables y ruines» y «pelele»; y que la gerente de la empresa prohibió al actor que volviera a conducir pero que éste se negó a devolverle las llaves del automóvil marchándose más tarde con el mismo a Villaverde. La sentencia de instancia desestimó la demanda de despido, y la de suplicación ahora impugnada confirma dicha resolución al estimar la procedencia de dicho acto extintivo. La sentencia razona que no es la embriaguez el único hecho sancionable, de modo que todo lo demás sucedido el día 11/5/2011 es una mera consecuencia de dicho estado, como pretendía el trabajador recurrente en suplicación, porque ya sólo el hecho de haber conducido un vehículo de la empresa en estado de embriaguez constituye causa de despido, no siendo en este caso necesaria la habitualidad de la embriaguez, dado el riesgo provocado para las personas y bienes con indudable repercusión para la empresa; pero es que además el actor persistió en su conducta porque prolongó su temeraria conducción a pesar de que la gerente le prohibió que lo hiciera, volviendo a coger el vehículo para desplazarse hasta Villaverde, de lo que resulta que la conducta tiene entidad suficiente para merecer el despido.

Disconforme con la anterior resolución, recurre el trabajador en casación para la unificación de doctrina aportando de contraste la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de mayo de 2005 (R. 574/2005), que revoca la de instancia y declara improcedente el despido disciplinario del actor acordado por la empresa demandada SPANAIR S.A. para la que prestaba servicios como operario de rampa conductor. En este supuesto, y por lo que ahora interesa, el actor se presentó en el puesto de trabajo «en un estado que le inducía al sueño por no haber dormido al haber dedicado la noche anterior a la diversión ingiriendo bebidas alcohólicas», y que acto seguido se ausentó del mismo con la furgoneta que utilizaba para la prestación de sus servicios, durante tres horas, tiempo que estuvo ilocalizable y que aprovechó para dormir, alterando los planes de trabajo del personal del aeropuerto y retrasando los vuelos, aunque no fue necesario que la empresa tuviera que hacer frente a la ejecución de la garantía de puntualidad que ofrece a sus pasajeros. La sentencia señala que la única conducta sancionable es la anteriormente relatada, porque no consta que el actor se presentase a su puesto de trabajo en estado de embriaguez, y que el retraso de los vuelos causados por su conducta resulta irrelevante, toda vez que no hubo que ejecutar la garantía de puntualidad, sin que el resto de las conductas tengan la entidad suficiente para justificar la sanción de despido.

No hay, pues, contradicción, porque en la sentencia recurrida se juzga el hecho de que el trabajador condujera el vehículo de la empresa en probado estado de embriaguez y que persistiera en su conducta, a pesar de que la gerente se lo prohibiera, marchándose nuevamente con el vehículo, mientras que en la sentencia de contraste la embriaguez no está acreditada, resultando únicamente probado que el actor se ausentó durante tres horas del puesto de trabajo con la furgoneta que utilizaba para su trabajo, alterando los planes de trabajo y retrasando escasamente los vuelos.

No contradicen lo anterior las alegaciones realizadas por la recurrente en el trámite de inadmisión dirigidas a relativizar las diferencias expuestas y que justifican a juicio de esta Sala la falta de contradicción, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 219.1, 225.3.4 y 5 y 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Ignacio Herrero Alonso, en nombre y representación de D. Jose Carlos contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 26 de noviembre de 2012, en el recurso de suplicación número 5804/12, interpuesto por D. Jose Carlos, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Móstoles de fecha 30 de abril de 2012, en el procedimiento nº 1137/11 seguido a instancia de D. Jose Carlos contra BOAYA, S.L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 18 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-22155
Non publié au bulletin
Rejet
M. Lacabarats (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2011), que Mme X..., engagée le 1er décembre 1981 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Apei du Valenciennois, occupait en dernier lieu les fonctions de chef du service éducatif; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 28 décembre 2007;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen:

- 1°/ que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son taux d'alcoolémie ne sont licites qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'en égard à la nature du travail confié à ce salarié, un état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger; qu'en jugeant que l'employeur avait pu recourir à des éthylotests et licencier Mme X... en se fondant sur leurs résultats, sans avoir constaté, comme elle le devait et comme il le lui était demandé, si le règlement intérieur permettait la contestation par la salariée des éthylotests pratiqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail et l'article 16 du règlement intérieur de l'Apei du Valenciennois;
- 2°/ que l'article 16 «Hygiène» du règlement intérieur de l'Apei du Valenciennois stipule qu'en cas d'alcootest positif, «le salarié sera convoqué à un entretien le lendemain ou le jour de la reprise pour analyser et comprendre la situation», cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement; qu'en constatant que l'employeur n'avait pas procédé à cet entretien spécifique et en décidant néanmoins que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail et 16 du règlement intérieur de l'Apei du Valenciennois;
- 3°/ que l'imprégnation alcoolique révélée par un éthylotest ne peut fonder un licenciement que si l'état du salarié est susceptible d'exposer des personnes ou des biens à un danger; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était justifié, sans avoir constaté que son comportement traduisait un état d'ébriété incompatible avec l'exercice de ses fonctions et que la nature du travail de la salariée était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail;
- 4°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp. 4 et 5), reprises oralement, Mme X... faisait valoir que l'alcootest ne constituait qu'un simple outil de dépistage d'une imprégnation alcoolique et ne suffisait pas à établir un état d'ébriété, et que personne n'avait attesté de son état d'ébriété, M. Y... s'étant borné à relever que le représentant de l'employeur avait des doutes «par rapport à une prise éventuelle d'alcool»; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de Mme X..., qui démontraient qu'à aucun moment la preuve d'un état d'ébriété incompatible avec ses fonctions n'avait été rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause l'état d'ébriété de la salariée était établi par d'autres éléments que le contrôle d'alcoolémie pratiqué à la demande de l'employeur et que celle-ci avait été placée en arrêt pour maladie dès la survenance des faits ce qui avait rendu impossible sa convocation à un entretien dès le jour de la reprise tel que prévu par les dispositions du règlement intérieur; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'association APEI à lui régler les sommes de 93.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui lie le juge et les parties et fixe la limite du litige, est ainsi libellée: «Le 5 octobre 2007, un membre du personnel a informé le directeur de ses inquiétudes quant à votre état de santé. Il est allé à votre rencontre et a constaté un état anormal pouvant être assimilé à un état d'ébriété. Ce même jour à 9 h 15, vous avez accepté de réaliser un éthylotest en présence d'un membre du CHSCT de notre établissement. L'éthylotest s'est avéré positif. Vous nous avez informés que vous aviez consommé de l'alcool la veille au soir. Le directeur d'établissement vous a ramenée à votre domicile, où était présente votre fille. Cette situation s'est répétée le 10 octobre 2007. L'éthylotest s'est à nouveau révélé positif. Le directeur d'établissement vous a amené au cabinet de votre médecin traitant, le Docteur Z.... Il a ainsi été confirmé que vous étiez en état d'ébriété pendant vos heures de travail devant le personnel dont vous avez la responsabilité et devant les personnes accueillies. Cet état ne vous permettait pas d'exercer correctement votre travail et d'assumer vos responsabilités professionnelles. Nous ne pouvons tolérer une telle conduite de la part de nos salariés. Vous avez enfreint l'article 16 du règlement intérieur: «Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue». De plus, l'article L. 230-3 du code du travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions du travail. Par ailleurs, vous avez fait l'objet de deux sanctions disciplinaires: - par courrier du 4 mai 2007, vous avez reçu un avertissement pour fraude de pointage et sortie pour motif personnel pendant les heures de travail sans autorisation, - par courrier du 29 octobre, vous avez été mise à pied pour fraude de pointage et sortie pour motif personnel pendant les heures de travail sans autorisation. Cette conduite met en cause le fonctionnement de l'établissement et la qualité du service rendu aux personnes handicapées mentales que nous accueillons»; que le règlement intérieur de l'APEI qui a été régulièrement déposé à l'inspection du travail le 31 janvier 2004 après avis favorable du comité central d'entreprise du 8 décembre 2003, remis en main propre à Sylvie X... le 1er décembre 2006, prévoit page 11 qu'il est interdit de pénétrer ou demeurer dans l'établissement en état d'ivresse; qu'il résulte des attestations du directeur de l'association (Olivier A...) et du chef d'atelier, membre du CHSCT (Jean-Claude Y...), que par deux fois, les 5 octobre 2007 et 10 octobre 2007, Sylvie X... a présenté un comportement anormal permettant au directeur de suspecter un état d'ébriété; que conformément à la conduite à tenir prévue dans le règlement intérieur, ce dernier, après avoir demandé à Sylvie X... si elle acceptait que soit pratiqué un éthylotest, a, en présence de Jean-Claude Y..., pratiqué celui-ci qui virait au vert et donc à la constatation d'un état d'ébriété; que la première fois, le directeur l'a reconduite chez elle, et la seconde fois, l'a déposée chez son médecin traitant; qu'ainsi il ne peut être reproché à l'employeur

de ne pas s'être conformé aux modalités prévues par le règlement intérieur en cas de suspicion d'un état d'ébriété; que si aucun rendez-vous n'a pu être pris pour discuter du problème cela est dû au fait que Mme Sylvie X... a été aussitôt, et à chaque fois, placée en arrêt maladie; qu'en tout état de cause, cet état d'ébriété est démontré par les deux attestations susvisées et par l'absence de contestation épistolaire de l'intéressée au moment des faits; que la survenance d'un tel état d'ébriété, à deux reprises en l'espace de quelques jours, chez un chef de service amené à donner des ordres à ses subordonnés et à accueillir des personnes handicapées, avait nécessairement une répercussion sur la qualité de son travail, faisait courir à elle et aux tiers un danger et ternissait l'image de l'association s'occupant des personnes fragilisées, justifiant en cela la fin de la relation salariale, ce d'autant que Sylvie X... avait déjà reçu plusieurs mises en garde ou sanctions sur la mauvaise qualité de son travail ou l'anormalité de certains comportements (non contestés par elle); qu'il y a lieu en conséquence, réformant en cela le jugement déféré, de débouter Sylvie X... de toutes ses demandes sans application de l'article 700 du code de procédure civile;

- 1°/ ALORS QUE les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son taux d'alcoolémie ne sont licites qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'en égard à la nature du travail confié à ce salarié, un état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger; qu'en jugeant que l'employeur avait pu recourir à des éthylotests et licencier Mme X... en se fondant sur leurs résultats, sans avoir constaté, comme elle le devait et comme il le lui était demandé, si le règlement intérieur permettait la contestation par la salariée des éthylotests pratiqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail et l'article 16 du règlement intérieur de l'APEI du Valenciennois;
- 2°/ ALORS QUE l'article 16 «Hygiène» du règlement intérieur de l'APEI du Valenciennois stipule qu'en cas d'alcootest positif, «le salarié sera convoqué à un entretien le lendemain ou le jour de la reprise pour analyser et comprendre la situation», cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement; qu'en constatant que l'employeur n'avait pas procédé à cet entretien spécifique et en décidant néanmoins que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail et 16 du règlement intérieur de l'APEI du Valenciennois;
- 3°/ ALORS QUE l'imprégnation alcoolique révélée par un éthylotest ne peut fonder un licenciement que si l'état du salarié est susceptible d'exposer des personnes ou des biens à un danger; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était justifié, sans avoir constaté que son comportement traduisait un état d'ébriété incompatible avec l'exercice de ses fonctions et que la nature du travail de la salariée était de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail;
- 4°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp. 4 et 5), reprises oralement, Mme X... faisait valoir que l'alcootest ne constituait qu'un simple outil de dépistage d'une imprégnation alcoolique et ne suffisait pas à établir un état d'ébriété, et que personne n'avait attesté de son état d'ébriété, M. Y... s'étant borné à relever que le représentant de l'employeur avait des doutes «par rapport à une prise éventuelle d'alcool»; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, qui démontraient qu'à aucun moment la preuve d'un état d'ébriété incompatible avec ses fonctions n'avait été rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée: Cour d'appel de Douai, du 31 mai 2011.

Roj: ATS 12706/2012
Id Cendoj: 28079140012012202817
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1649/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Antonio Martín Valverde
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil doce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Avila se dictó sentencia en fecha 10 de noviembre de 2011, en el procedimiento nº 420/11 seguido a instancia de D. Desiderio contra SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en fecha 23 de febrero de 2012, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 11 de mayo de 2012 se formalizó por el Letrado D. Pedro Estanislao Bris García, en nombre y representación de D. Desiderio, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 12 de septiembre de 2012 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y R. 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y R. 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y R. 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y R. 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y R. 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y R. 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R.

3014/2007 y R. 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

Por tanto, procede comprobar si entre la sentencia recurrida en casación unificadora y la que se propone de contraste por la parte recurrente concurre el requisito de la contradicción, de conformidad con la doctrina de la Sala que se acaba de exponer.

En el supuesto de la sentencia recurrida, el actor, que prestaba servicios como vigilante en la empresa Securitas Seguridad España S.A. tenía asignado el 19 de septiembre de 2011 la prestación del servicio de vigilancia en las dependencias municipales entre las 22 horas de dicho día y la 8 del siguiente. El demandante se personó en su puesto de trabajo, relevando a un ordenanza municipal que se marchó a su casa, para poco después, al considerar que el demandante mostraba evidentes signos de embriaguez, volver y llamar a la policía municipal. Casi al mismo tiempo había pasado por el puesto de trabajo el vigilante de ronda, que al percibir el estado de embriaguez del actor llamó al jefe de servicios que se personó en el puesto de trabajo prácticamente al tiempo que la policía. Estimando todos que el actor -que vestía el uniforme con la camisa mal abotonada y sin introducir los bajos de ésta en el pantalón- no se encontraba en condiciones de prestar servicios por considerarle bajo los efectos del alcohol, le conminaron a que se fuese a su casa, donde le trasladó el jefe del servicio. Del servicio se hizo cargo, primero el vigilante de ronda y después un compañero al que localizó la empresa y que estaba libre de servicio. Estando en su casa el actor decidió trasladarse a un servicio de urgencias donde, a petición propia, se le practicó una analítica de alcoholemia, resultando una tasa de alcohol de 2,3 g/l, siendo diagnosticado de «*intoxicación etílica*». Al día siguiente, la empresa le entregó carta de despido imputándole la embriaguez probada vistiendo uniforme, y en la misma fecha y hora firmó un documento en el que reconocía «*la certeza de las causas que se le imputan en la carta de despido y deciden (ambas partes) llevar a cabo este acuerdo transaccional... ambas partes reconocen la extinción de la relación laboral por causas disciplinarias*». Sobre las 21 horas del mismo día el actor remitió telegrama a la empresa diciendo no estar de acuerdo con el despido y que bajo presión había sido coaccionado para firmar la baja voluntaria y un acuerdo de extinción sin indemnización alguna.

La sentencia de instancia desestima la demanda por despido, pronunciamiento confirmado en suplicación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de 23 de febrero de 2012. En relación con la eficacia del documento firmado por el actor, la sentencia considera que no se acredita causa alguna por la que pueda entenderse que el consentimiento estaba viciado y por lo que se refiere a la gravedad de la conducta -embriaguez probada y vistiendo uniforme- la sentencia entiende que está específicamente tipificada como falta muy grave y con sanción de despido en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.

Recorre el actor en casación para la unificación de doctrina, planteando dos motivos en relación con las dos cuestiones citadas.

En relación con la eficacia del documento se propone de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 6 de octubre de 2004 que declara improcedente el despido de la actora a quien la empresa demandada había comunicado por escrito la extinción de la relación laboral por causas objetivas, suscribiendo la actora ese mismo día un recibo de finiquito.

La contradicción es inexistente. En primer lugar porque la sentencia de contraste no contiene el tenor literal del documento firmado por la actora por lo que no es posible su comparación con el de la sentencia recurrida. Pero además ocurre que en el presente caso se trata de un documento que reconoce la procedencia de un despido disciplinario y lo que se plantea es si sobre el actor se ejerció algún tipo de coacción y si por ello su consentimiento estaba viciado. Esta situación y las cuestiones que sobre la misma se plantean son ajenas a la sentencia de contraste donde se trata de un despido por causas objetivas y donde la actora, en el documento en cuestión, se limitó a reconocer -según se desprende de la fundamentación de la sentencia- la recepción de una cantidad correspondiente a la indemnización por el despido, sin que se mostrara acorde con la situación económica alegada por la empresa ni reconociera la procedencia de la decisión extintiva.

SEGUNDO.- En relación con la gravedad de la conducta y la procedencia o no del despido se propone de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de abril de 2005 que declara improcedente en despido del actor, también vigilante de seguridad a quien la empresa le imputaba haber estado ebrio en su puesto de trabajo.

Tampoco en este motivo puede apreciarse la contradicción al ser distintas las situaciones que en cada caso quedan acreditadas. Así, en el relato fáctico de la sentencia de contraste, el actor que prestaba servicios en el cementerio de la Almudena se dirigió a un empleado del cementerio diciendo que quería dar una queja a la funeraria porque el coche estaba averiado. Este empleado llamó al Inspector de la empresa demandada manifestándole que veía al actor «*un poco raro*» y que no estaba en condiciones de prestar servicios. El Inspector llamó al jefe de seguridad que se personó en el centro y requirió al actor para que entregara el arma, a lo que el actor se negó; tras la llegada de la policía nacional y la intervención del presidente del comité de empresa el actor entregó el arma, insultando al jefe de seguridad.

Por tanto se trata de una situación distinta a la enjuiciada en la sentencia de contraste en la que todos los presentes comprobaron el claro estado de embriaguez del actor, que además quedó acreditada con la prueba de alcoholemia practicada que dio unos resultados tales que fue diagnosticado de «intoxicación etílica».

En su escrito de alegaciones la parte recurrente se opone a la inadmisión, pero las diferencias observadas entre las sentencias comparadas son relevantes en relación con el sentido de los respectivos pronunciamientos, por lo que los mismos no pueden considerarse contradictorios.

Por otra parte, la Sala ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y R. 3461/1995, 6 de Julio de 2004, R. 5346/2003, 24 de mayo de 2005, R. 1728/04, 8 de junio de 2006, R. 5165/2004 y 18 de diciembre de 2007, R. 4301/2006, 15 de enero de 2009, R. 2302/2007, 19 de julio de 2010, R. 2643/2009, 19 de enero de 2011, R. 1207/2010, 24 de enero de 2011, R. 2018/2010 y 24 de mayo de 2011, R. 1978/2010).

TERCERO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 219 y 225.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Pedro Estanislao Bris García, en nombre y representación de D. Desiderio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 23 de febrero de 2012, en el recurso de suplicación número 69/12, interpuesto por D. Desiderio, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Avila de fecha 10 de noviembre de 2011, en el procedimiento nº 420/11 seguido a instancia de D. Desiderio contra SECURITAS SEGURIDAD, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 9 février 2012

N° de pourvoi: 10-22909

Non publié au bulletin

Rejet

M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2010), que M. X..., engagé le 28 avril 2005 par la société Brice Robert participations en qualité d'ouvrier polyvalent, s'est trouvé en arrêt pour maladie à compter du 27 juillet 2007; qu'après avoir été convoqué le 28 novembre 2007 à un entretien en vu de son licenciement, il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2007 sans avoir repris le travail;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen:

- 1°/ que si la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement, il n'est pas nécessaire que l'employeur précise les dates et lieux des incidents auxquels il se réfère, dès lors que les griefs sont matériellement vérifiables; que tel était le cas en l'espèce, la lettre visant notamment les griefs suivants: «Un comportement au travail qui ne supporte aucune remarque», «une mauvaise entente sur l'organisation du travail», «le refus de faire certaines tâches», «violences verbales et physiques envers d'autres salariés», «vous n'avez pas pris soin du matériel, vous avez jeté un échafaudage par la fenêtre», «vous avez été en état d'ébriété sur les chantiers» etc; que pour refuser d'examiner les faits énoncés dans la lettre de licenciement (hormis le comportement violent du salarié envers monsieur Y...), la cour d'appel a affirmé qu'ils étaient trop imprécis et n'indiquaient pas le moment ni le lieu de leur commission; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les autres motifs de licenciement quand ils étaient suffisamment précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail;
- 2°/ que constitue une faute grave le comportement agressif d'un salarié envers ses collègues de travail ou son supérieur hiérarchique; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme établi le comportement violent et agressif du salarié à l'égard de M. Y..., contremaître, devant toute l'équipe (arrêt p. 3 § 8-9); qu'en jugeant toutefois qu'un tel fait ne pouvait, à lui seul, constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail;
- 3°/ que pour apprécier la gravité de la faute commise, les juges doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait et notamment du comportement antérieur du salarié; qu'en l'espèce, l'employeur exposait que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits de même nature, par un avertissement en date du 26 octobre 2006, pour avoir injurié et frappé un collègue; qu'en affirmant que le fait d'avoir agressé M. Y... ne pouvait à lui seul caractériser une faute grave, sans tenir compte, comme il lui était demandé, de son comportement antérieur déjà sanctionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail;
- 4°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir que les faits étaient prescrits, qu'«il paraît particulièrement surprenant et pour tout dire invraisemblable que des faits aussi graves n'aient pas été portés à la connaissance de l'employeur à la date où ils ont été commis» et que «l'embauche d'un intérim et la cause de cette embauche ne pouvaient pas être sérieusement ignorées de l'employeur» (motifs adoptés), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

- 5°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir résilié le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail dès lors qu'à la date du licenciement, il ignorait le caractère professionnel de l'accident ou l'existence d'un recours intenté par le salarié contre le refus de prise en charge de la caisse; qu'en l'espèce, l'employeur avait exposé qu'initialement la caisse primaire avait refusé la prise en charge de l'accident du 30 octobre 2006 au titre de la législation professionnelle et établissait que le caractère professionnel de cet accident n'avait été admis par la caisse que le 25 janvier 2008 (pièce produite n° 3-2 et 3-3); qu'en affirmant que le licenciement avait été prononcé alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie suite à un accident du travail, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, à quelle date la caisse avait reconnu le caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2006 et si, avant cette prise en charge, l'employeur avait eu connaissance d'un recours du salarié contre le refus initial de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail;
- 6°/ que la décision par laquelle la caisse d'assurance maladie prend en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à un salarié n'a pas de caractère définitif si elle a été régulièrement frappée d'un recours par l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Brice Robert participations avait «engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente» à l'égard de la décision de prise en charge de la caisse de l'accident survenu à M. X... le 30 octobre 2006, ce dont il résultait que cette décision n'avait pas de caractère définitif; qu'en jugeant pourtant qu'il avait été licencié alors qu'il était en arrêt maladie «à la suite d'un accident du travail» et qu'il «avait été victime de deux accidents du travail sur des chantiers dont l'employeur se devait d'assurer la sécurité», et en tenant ainsi pour acquis le caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2006 (lequel a été écarté par jugement du 21 septembre 2010), la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale;
- 7°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir donné à ses salariés, en temps utile et opportun, les consignes pour que «cessent les comportements fautifs, dangereux ou nuisibles aux intérêts de l'entreprise», sans examiner l'avertissement notifié à M. X... le 26 octobre 2006, aux termes duquel l'employeur rappelait au salarié l'attitude qu'il attendait de lui et sur laquelle il serait intransigeant, à savoir «Respect des horaires – Pas d'alcool avant ou pendant le travail – Ne pas se fâcher avec ses collègues – Ne pas hésiter à joindre votre contremaître en cas de situation difficile», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois avant l'engagement des poursuites;

Et attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que les faits reprochés au salarié sous la qualification de faute grave étaient survenus au plus tard le 27 juillet 2007 et que les poursuites disciplinaires n'avaient été engagées que le 28 novembre 2010 sans que l'employeur n'établisse avoir eu connaissance des agissements reprochés au salarié moins de deux mois avant cette date, a pu décider que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient prescrits; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision;

Que le moyen, non fondé en sa quatrième branche, est inopérant pour le surplus;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Brice Robert participations aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brice Robert participations et la condamne à payer à M. X... la somme de 2.500 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Brice Robert participations.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BRICE ROBERT PARTICIPATION à payer à monsieur X... les sommes de 1.286,09 euros à titre d'indemnité de préavis, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Tomasz X... né le 1er juillet 1973, de nationalité polonaise, a été embauché par la société BRICE ROBERT PARTICIPATION comme ouvrier polyvalent, selon un contrat écrit à durée indéterminée et signé le 28 avril 2005; que le 30 octobre 2006, Tomasz X... a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration et qui, après un refus, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle; que selon une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, Tomasz X... a perçu des indemnités journalières correspondant à des arrêts de travail pour les périodes suivantes: 1) du 8 février 2007 au 15 mars 2007, 2) du 18 juin 2007 au 9 juillet 2007, 3) du 28 juillet 2007 au 1er octobre 2007; que ces arrêts de travail seraient en rapport avec deux accidents de travail, l'un du 30 octobre 2006, l'autre du 27 juillet 2007; qu'il a été convoqué le 28 novembre 2007 pour un entretien préalable qui s'est tenu le 6 décembre 2007; que la convention faite par lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée au domicile de l'intéressé le 5 décembre 2007; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 décembre 2007 et reçue le 13 décembre 2007 pour faute grave; que l'employeur dans sa lettre invoque des faits dont il a eu connaissance seulement les 30 octobre 2007 et 2 novembre 2007; que Tomasz X... soutient qu'il a été licencié pendant une période de maladie consécutive à un accident du travail; que la cour constate en effet qu'il produit un certificat d'arrêt de travail de prolongation suite à un accident du travail du 30 octobre 2006, certificat daté du 30 novembre 2007 et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 28 décembre 2007; que ce certificat médical est signé par madame le docteur A...; que la procédure de licenciement a donc bien eu lieu comme le licenciement alors que le salarié était en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail pris en charge par la législation professionnelle, même si l'employeur a engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente; que Tomasz X... conteste les faits invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave qu'il appartient à l'employeur de prouver; que la SA BRICE ROBERT PARTICIPATION apporte pour prouver les reproches qu'elle formule de manière assez imprécise dans sa lettre dans la mesure où les faits fautifs ne sont pas circonstanciés en temps, en lieu et en jours, deux témoignages qui ne sont pas formulés en la forme régulière des attestations mais dont les auteurs sont bien identifiés par la copie de leur carte d'identité; que ces deux déclarations que la cour accepte comme sincères dans la mesure où il n'est pas établi aucune preuve contraire et où il n'existe pas de suspicion de fausses déclarations à l'encontre de leurs auteurs font état d'un fait de juillet 2007, sur un chantier à Megève; que Tomasz X... a eu un comportement violent et agressif à l'égard de Thomas Y... qui lui demandait de se lever et de se mettre au travail; il a pris ce dernier par le col de son vêtement de travail devant tout l'équipe, observation faite que Thomas Y... avait la qualité de contremaître; que ce fait qui remonte à juillet 2007 et dont l'employeur soutient qu'il n'en a eu connaissance qu'en fin d'année 2007, sans être vraiment convaincant, ne peut à lui seul constituer, en l'espèce et dans le conteste, une faute grave; que les autres faits articulés dans la lettre du 11 décembre 2007 ne peuvent être retenus comme prouvés dans la mesure où leur énoncé n'est pas circonstancié et s'exprime en termes trop vagues, imprécis et trop généraux de sorte qu'il est impossible de les vérifier; qu'ainsi tout en retenant les témoignages de Patrick B... et de Thomas Y..., l'employeur succombe dans la charge de la preuve de la faute grave; que par ailleurs, les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu à l'égard de Tomasz X... qui était en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail et qui avait été victime de deux accidents du travail sur des chantiers dont l'employeur se devait d'assurer la sécurité dans le travail par l'ensemble des moyens dont il dispose dans l'organisation du travail dont il est responsable, ne permettent pas de retenir que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse; que si l'employeur peut reprocher au salarié un comportement déloyal, ou une mauvaise exécution du travail en raison de son alcoolisme, il appartient à cet employeur de prendre au bon moment, en temps utile et opportun, les mesures nécessaires ou de donner à ses personnels et contremaître des consignes utiles pour qu'il soit informé de ce qui se passait sur les chantiers et pour que cessent ces comportements fautifs, dangereux ou nuisibles aux intérêts de l'entreprise; qu'en conséquence comme le soutient Tomasz X..., le jugement attaqué doit être confirmé en toute ses dispositions;

ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QU'il convient tout d'abord de souligner le caractère imprécis des griefs qui ne sont pas non plus datés; que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à la société BRICE ROBERT PARTICIPATION qui verse aux débats deux courriers de salariés, monsieur B... et monsieur Y...; que M. B... aurait écrit à son employeur le 30 octobre 2007 que monsieur X... s'est alcoolisé lors du déplacement à Megève ce qui a perturbé son travail car il refusait de se lever à 7 heures pour être au travail à 8 h et qu'il a été violent verbalement vis-à-vis de monsieur Y..., ce qui a obligé la société à prendre un intérimaire; que monsieur Y... aurait également écrit à son employeur le 2 novembre 2007 que monsieur X... a eu une attitude très violente sur le chantier de Megève au mois de juillet; qu'il paraît particulièrement surprenant et pour tout dire invraisemblable que des faits aussi graves n'aient pas été portés à la connaissance de l'employeur à la date où ils ont été commis alors même que monsieur X... avait fait l'objet d'avertissements antérieurs; que l'embauche d'un intérim et la cause de cette embauche ne pouvaient par ailleurs pas être sérieusement ignorées de l'employeur; que les faits prétendument commis en juillet 2007 sont dès lors prescrits;

- 1°/ ALORS QUE si la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement, il n'est pas nécessaire que l'employeur précise les dates et lieux des incidents auxquels il se réfère, dès lors que les griefs sont matériellement vérifiables; que tel était le cas en l'espèce, la lettre visant notamment les griefs suivants: «Un comportement au travail qui ne supporte aucune remarque», «une mauvaise entente sur l'organisation du travail», «le refus de faire certaines tâches», «violences verbales et physiques envers d'autres salariés», «vous n'avez pas pris soin du matériel, vous avez jeté un échafaudage par la fenêtre», «vous avez été en état d'ébriété sur les chantiers» etc; que pour refuser d'examiner les faits énoncés dans la lettre de licenciement (hormis le comportement violent du salarié envers monsieur Y...), la Cour d'appel a affirmé qu'ils étaient trop imprécis et n'indiquaient pas le moment ni le lieu de leur commission; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les autres motifs de licenciement quand ils étaient suffisamment précis et matériellement vérifiables, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail;
- 2°/ ALORS QUE constitue une faute grave le comportement agressif d'un salarié envers ses collègues de travail ou son supérieur hiérarchique; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré comme établi le comportement violent et agressif du salarié à l'égard de monsieur Y..., contremaître, devant toute l'équipe (arrêt p. 3 § 8-9); qu'en jugeant toutefois qu'un tel fait ne pouvait, à lui seul, constituer une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail;
- 3°/ ALORS QUE pour apprécier la gravité de la faute commise, les juges doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait et notamment du comportement antérieur du salarié; qu'en l'espèce, l'employeur exposait que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits de même nature, par un avertissement en date du 26 octobre 2006, pour avoir injurié et frappé un collègue; qu'en affirmant que le fait d'avoir agressé monsieur Y... ne pouvait à lui seul caractériser une faute grave, sans tenir compte, comme il lui était demandé, de son comportement antérieur déjà sanctionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail;
- 4°/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir que les faits étaient prescrits, qu'«il paraît particulièrement surprenant et pour tout dire invraisemblable que des faits aussi graves n'aient pas été portés à la connaissance de l'employeur à la date où ils ont été commis» et que «l'embauche d'un intérim et la cause de cette embauche ne pouvaient pas être sérieusement ignorées de l'employeur» (motifs adoptés), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
- 5°/ ALORS QU'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir résilié le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail dès lors qu'à la date du licenciement, il ignorait le caractère professionnel de l'accident ou l'existence d'un recours intenté par le salarié contre le refus de prise en charge de la caisse; qu'en l'espèce, l'employeur avait exposé qu'initialement la caisse primaire avait refusé la prise en charge de l'accident du 30 octobre 2006 au titre de la législation professionnelle et établissait que le caractère professionnel de cet accident n'avait été admis par la caisse que le 25 janvier 2008 (pièce produite n° 3-2 et 3-3); qu'en affirmant que le licenciement avait été prononcé alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie suite à un accident du travail, sans rechercher, comme il y invitait l'employeur, à quelle date la caisse avait reconnu le caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2006 et si, avant cette prise en charge, l'employeur avait eu connaissance d'un recours du salarié contre le refus initial de la caisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-9 du code du travail;

- 6°/ ALORS QUE la décision par laquelle la caisse d'assurance maladie prend en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à un salarié n'a pas de caractère définitif si elle a été régulièrement frappée d'un recours par l'employeur; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la société BRICE ROBERT PARTICIPATION avait «engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente» à l'égard de la décision de prise en charge de la caisse de l'accident survenu à monsieur X... le 30 octobre 2006, ce dont il résultait que cette décision n'avait pas de caractère définitif; qu'en jugeant pourtant qu'il avait été licencié alors qu'il était en arrêt maladie «à la suite d'un accident du travail» et qu'il «avait été victime de deux accidents du travail sur des chantiers dont l'employeur se devait d'assurer la sécurité», et en tenant ainsi pour acquis le caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2006 (lequel a été écarté par jugement du 21 septembre 2010), la Cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale;
- 7°/ ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir donné à ses salariés, en temps utile et opportun, les consignes pour que «cessent les comportements fautifs, dangereux ou nuisibles aux intérêts de l'entreprise», sans examiner l'avertissement notifié à monsieur X... le 26 octobre 2006, aux termes duquel l'employeur rappelait au salarié l'attitude qu'il attendait de lui et sur laquelle il serait intransigeant, à savoir «Respect des horaires – Pas d'alcool avant ou pendant le travail – Ne pas se fâcher avec ses collègues – Ne pas hésiter à joindre votre contremaître en cas de situation difficile», la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Décision attaquée: Cour d'appel de Lyon, du 11 juin 2010.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 18 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-16832
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Lacabarats (président), président
Me Blondel, Me Ricard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Fosséenne de Transports devenue l'entreprise de transport La Fosséenne-Transco & Cie a engagé M. X... sous contrat à durée déterminée à compter du 16 juin 2001 en qualité de conducteur routier; que la relation contractuelle est devenue un contrat à durée indéterminée à partir du 18 septembre 2001; que la société de transport La Fosséenne-Transco & Cie a notifié par lettre en date du 27 février 2006, le licenciement du salarié pour faute grave, lui reprochant un «état d'ébriété manifeste» remontant au 9 février 2006; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant, en outre, la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée;

SUR LE SECOND MOYEN:

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen:

- 1°/ qu'il incombe au juge de vérifier si les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement sont établis; qu'en se fondant, pour dire que la faute grave du salarié était établie, sur la circonstance que ce dernier ne contestait pas les éléments des partenaires commerciaux, sans rechercher si les faits invoqués étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail;
- 2°/ que lorsqu'il subsiste un doute sur la faute lourde reprochée au salarié, ce doute profite au salarié; qu'ayant constaté les contradictions manifestes des éléments probatoires fournis par l'employeur, ce dont il résultait que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir considéré que les attestations contradictoires de M. Y... ne permettaient pas de se prononcer sur la réalité de la faute reprochée à Lionel X..., a analysé plusieurs documents rédigés par les partenaires commerciaux de l'employeur pour en conclure que le salarié était sous l'emprise de l'alcool au moment où il devait récupérer son camion après chargement des marchandises, notant que le contenu desdits documents n'était pas utilement contesté par M. X..., qui s'était borné à produire le témoignage contestable de son collègue de travail et n'avait pas fourni des pièces justifiant ses dires concernant le traitement auquel il était soumis pour l'asthme; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis; que le moyen qui, sous couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN:

Vu l'article L. 1242-2 du code du travail;

Attendu que parmi les cas dans lesquels il peut être, selon ce texte, recouru au contrat de travail à durée déterminée, figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande visant notamment à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que la société de transport La Fosséenne Transco & Cie a fourni les copies des montants mensuels des chiffres d'affaires qu'elle a réalisés de janvier à décembre 2001 ainsi que ses comptes de résultats pour l'année 2001 avec des éléments de comparaison concernant l'année précédente, qu'il en résulte que l'entreprise a connu une augmentation régulière de ses activités au cours de cette période, que le conseil de prud'hommes a pu juger que la société avait donc rapporté la preuve de l'accroissement de ses activités justifiant l'embauche de Lionel X..., que compte tenu des baisses légères d'activités enregistrées en février et avril 2001 par rapport aux mois précédents, le recrutement de ce salarié a pu régulièrement intervenir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, une incertitude existant sur le caractère temporaire de la surcharge de travail constatée;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'accroissement de l'activité de l'entreprise était de nature temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail initial à durée déterminée en contrat à durée déterminée et des demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION:

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande visant notamment à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;

AUX MOTIFS QUE Lionel X... demande la requalification du contrat de travail du 18 Juin 2001 en contrat à durée indéterminée en invoquant l'absence de justifications par son employeur de la réalité du motif allégué pour recourir à un contrat à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Mais la société de transport LA FOSSEENNE-TRANSCO & Cie a fourni les copies des montants mensuels des chiffres d'affaires qu'elle a réalisés de Janvier à Décembre 2001 ainsi que ses comptes de résultats pour l'année 2001 avec des éléments de comparaison concernant l'année précédente; il en résulte que l'entreprise a connu une augmentation régulière de ses activités au cours de cette période; avec raison, le Conseil de Prud'hommes a pu juger que la société avait donc rapporté la preuve de l'accroissement de ses activités justifiant l'embauche de Lionel X...; compte tenu des baisses légères d'activités enregistrées en Février et Avril 2001 par rapport aux mois précédents, le recrutement de ce salarié a pu régulièrement intervenir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, une incertitude existant sur le caractère temporaire de la surcharge de travail constatée.

- ALORS QUE le contrat de travail de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que la Cour d'appel n'a pas constaté sur la période en cause un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, mais a constaté que l'entreprise avait connu dans l'ensemble une augmentation régulière de ses activités; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION:

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave;

AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement adressée le 27 Février 2005 à Lionel X..., la société de transport La Fosséenne-Transco & Cie lui reprochait une faute grave consistant dans le fait qu'il s'était présenté le 9 Février 2006 chez un client, l'entreprise ARKEMA, en «état d'ébriété manifeste», que les représentants de cette société, qui avaient constaté son état, avaient refusé de lui confier la marchandise et avaient exigé l'intervention d'un autre chauffeur, qu'un de ses collègues de travail présent, Martial Y..., avait également noté son état, que son comportement était «particulièrement grave car de nature à mettre en péril la vie d'autrui»; dans ce même courrier, l'employeur rappelait à son salarié qu'il avait fait l'objet de deux avertissements précédents, les 3 Novembre 2005 et 6 Février 2006. Pour justifier la réalité des griefs énoncés, la société de transport La Fosséenne-Transco & Cie, qui a la charge d'établir la preuve de la faute grave, produit en premier lieu, l'attestation, en date du 10 Février 2006, de Martial Y..., conducteur routier, qui a certifié «Lionel X..., le 9 Février 2006... en début d'après-midi, n'était pas dans son état normal et il semblait être sous l'empire de l'alcool, l'usine se refuse à le faire partir». Lionel X..., pour sa part, conteste avoir été le 9 Février 2006, sous l'effet de l'alcool, attribuant son malaise à une crise d'asthme. Il fournit une seconde attestation de Martial Y..., établie le 7 Décembre 2006, qui a écrit: «le 9 Février 2006, Lionel X..... s'est trouvé mal à l'aise et a été mené à l'infirmerie du site; à mon avis il n'était pas du tout en état d'ébriété; je pense que c'est un réel problème de santé qu'il avait». En l'état des éléments pour le moins contradictoires contenus dans les témoignages écrits de Martial Y..., il y a lieu de constater que ces deux attestations ne permettent pas de se prononcer sur la réalité de la faute reprochée à Lionel X.... En second lieu, la société de transport La Fosséenne-Transco & Cie, communique, une série de documents rédigés par ses partenaires commerciaux:- un courrier électronique expédié le 9 Février 2006 par la société ARKEMA l'avisant que son chauffeur était en état d'ébriété et lui demandant de faire le nécessaire pour faire intervenir un autre conducteur,- une réclamation écrite en date du 10 Février 2006 émanant de la société ARKEMA indiquant que son contrôleur avait, aux environs de 13 heures, après le chargement du véhicule de Lionel X... «détecté une forte odeur d'alcool émise par le chauffeur, associée à un net état de fatigue apparent», s'était alors fait remettre les clés du véhicule, que Lionel X... avait alors été conduit à l'infirmerie où ce dernier avait «pris ses propres médicaments pour traiter une crise d'asthme et s'était reposé jusqu'à 17 heures 30», laquelle réclamation demandait à la société de transport La Fosséenne-Transco & Cie de ne plus confier à Lionel X... la conduite d'un véhicule assurant le transport de marchandise de la société ARKEMA, faute de quoi les relations entre les deux sociétés pourraient cesser,- une note du 13 Février 2006 à l'attention des armateurs les informant qu'à la suite de l'incident, il était interdit d'utiliser les services de la société de transport La Fosséenne-Transco,- un message électronique sollicitant de la société de transport La Fosséenne-Transco des précisions sur les mesures prises pour s'assurer qu'aucun «chauffeur en état d'ébriété ou susceptible de récidive ne se présente pour charger sur le site de Marseille». Ces documents, dont le contenu n'est pas utilement contesté par Lionel X..., qui s'est borné à produire le témoignage contestable de son ancien collègue de travail et n'a pas fourni des pièces justifiant ses dires concernant son état de santé, démontrent que ce dernier était sous l'emprise de l'alcool au moment où il devait récupérer son camion, après chargement des marchandises, que son état a été préjudiciable à son employeur qui s'est vu essuyer réclamation et interdiction de la part de ses relations de travail. Avec pertinence, les premiers juges ont relevé que la consommation d'alcool par un conducteur routier ne pouvait être toléré par son employeur dans la mesure où Lionel X... avait la responsabilité de conduire un ensemble routier transportant des produits dangereux pour la santé. A donc constitué une faute grave ce fait du 9 Février 2006 qui caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.

1°/ ALORS QU'il incombe au juge de vérifier si les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement sont établis; qu'en se fondant, pour dire que la faute grave du salarié était établie, sur la circonstance que ce dernier ne contestait pas les éléments des partenaires commerciaux, sans rechercher si les faits invoqués étaient établis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail;

2°/ ALORS QUE lorsqu'il subsiste un doute sur la faute lourde reprochée au salarié, ce doute profite au salarié; qu'ayant constaté les contradictions manifestes des éléments probatoires fournis par l'employeur, ce dont il résultait que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 15 septembre 2009.

Roj: ATS 9780/2011
Id Cendoj: 28079140012011202244
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3540/2010
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Jordi Agusti Julia
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a ocho de Septiembre de dos mil once.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JORDI AGUSTI JULIA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Móstoles se dictó sentencia en fecha 1 de octubre de 2009, en el procedimiento nº 557/09 seguido a instancia de D. Antonio contra URENDE, S.A., sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 13 de mayo de 2010, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 28 de septiembre de 2010 se formalizó por el Letrado D. Oscar de la Orden Albarracín, en nombre y representación de D. Antonio, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 14 de abril de 2011 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- La Sala ha reiterado que la contradicción que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y R. 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y R. 2506/2007). También se ha reiterado que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y R. 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y R. 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y R. 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y R. 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y R. 1138/2008) y 29 de octubre de 2010 (R. 200/10).

Por tanto, procede comprobar si entre la sentencia recurrida en casación unificadora y la que se propone de contraste por la parte recurrente concurre el requisito de la contradicción, de conformidad con la doctrina de la Sala que se acaba de exponer.

En el caso de la sentencia recurrida la empresa demandada se dedica al comercio al por menor de electrodomésticos con domicilio social en Córdoba y con centro de trabajo en Alcorcón donde venía prestando sus servicios el actor como jefe de sección. Según el hecho probado tercero *«en los meses de febrero, abril (el día 17 de dicho mes), julio y diciembre de 2008 (el día 13), el actor acudió un día al centro de trabajo ebrio y desaliñado, siendo observada dicha situación por los demás trabajadores de la empresa que lo pusieron en conocimiento del Director del centro de trabajo, habiendo sido advertido en tales ocasiones por éste en forma verbal... y autorizando al mismo, a la vista del deplorable estado en que se encontraba para que se retirara a su domicilio, advirtiéndole de las responsabilidades que podían derivarse de tal comportamiento y las consecuencias para los demás trabajadores del centro, al tener que ser sustituido y dada la actividad de la empresa dedicada a la venta al público de electrodomésticos. En la última de las fechas indicadas el 13-12-2008 se advirtió al actor que en caso de incurrir en la citada conducta informaría a la dirección de la empresa en Córdoba»* En el hecho probado cuarto se dice que *«el día 12-2-2009 el actor acudió al trabajo ebrio y desaliñado con dificultades para hablar y para mantenerse en pie, por lo que... por el mismo (el Director del centro) se indicó al demandante que debía retirarse a su domicilio...»*. El 26 de febrero de 2009 el Director del centro remitió escrito a la dirección de la empresa en Córdoba a fin de informar de los hechos acaecidos desde febrero de 2008 y el 3 de marzo de 2009 la empresa comunicó el despido al actor. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de mayo de 2010 -con revocación de la de instancia- declara procedente el despido.

Recorre el actor en casación para la unificación de doctrina, aportando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de abril de 2005. En ese caso la empresa demandada se dedica a la actividad de reparaciones eléctricas y el actor -con la categoría de oficial 1ª- se presentó los días 19 y 21 de abril de 2004 en el domicilio de dos clientes en estado de embriaguez por lo que la empresa procedió a su despido disciplinario el siguiente 23 de abril, despido que la sentencia de contraste declara improcedente.

Ambas sentencias contemplan supuestos de embriaguez de los trabajadores, pero la contradicción no puede apreciarse al ser distintos los respectivos supuestos de hecho. En primer lugar, la sentencia recurrida no es clara a la hora de determinar los días en que el actor se presentó embriagado en el centro de trabajo, pues aparte de referirse a tres días concretos -el 17 de abril y el 13 de diciembre de 2008 y el 12 de febrero de 2009- se mencionan los meses de febrero y julio de 2008; en cualquier caso se pone de manifiesto una frecuencia en el estado de embriaguez mayor que el contemplado por la sentencia de contraste que se refiere a dos días prácticamente consecutivos -el 19 y 21 de abril de 2004 según los hechos probados quinto y sexto. En segundo lugar y en cuanto a la intensidad de ese estado de embriaguez la sentencia recurrida relata que el 12 de febrero de 2009 el actor se presentó en el centro de trabajo *«con dificultades para hablar y para mantenerse en pie»*, sin que la sentencia recurrida concrete la situación en que el actor se presentó en el domicilio de los clientes, aparte de decir que se fue *«en estado de embriaguez»*.

En su escrito de alegaciones la parte recurrente se opone a la inadmisión, pero aunque en ambos casos se contemplan supuestos de embriaguez, las diferencias que se acaban de relatar pueden justificar perfectamente la discrepancia en los respectivos fallos de las sentencias sometidas a contraste, de tal suerte que cada una de ellas resolvió el supuesto particular que se sometía a su enjuiciamiento y, en consecuencia, no existe una verdadera discrepancia doctrinal que precisa ser unificada.

Por otra parte, la Sala ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995, 6 de Julio de 2004, R. 5346/2003, 24 de mayo de 2005, R. 1728/04, 8 de junio de 2006, R. 5165/2004 y 18 de diciembre de 2007, R. 4301/2006).

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Oscar de la Orden Albarracín, en nombre y representación de D. Antonio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 13 de mayo de 2010, en el recurso de suplicación número 178/10, interpuesto por URENDE, S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Móstoles de fecha 1 de octubre de 2009, en el procedimiento nº 557/09 seguido a instancia de D. Antonio contra URENDE, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 16/01/2015**Cour de cassation****chambre sociale****Audience publique du 8 juin 2011****N° de pourvoi: 10-30162 10-30163 10-30164 10-30165 10-30166 10-30167 10-30168 10-30169
10-30170 10-30171****Publié au bulletin****Rejet****Mme Collomp, président****M. Gosselin, conseiller rapporteur****M. Weissmann, avocat général****SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)****REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS****LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:**

Attendu que M. X... et neuf autres salariés ont été engagés par la société SEIA, filiale du groupe Dunlop aux droits de laquelle vient la société Goodyear Dunlop Tires France à la suite d'une opération de fusion-absorption; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes visant notamment à obtenir, sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, des rappels de salaires au titre de primes liées au travail posté perçues par les salariés d'autres établissements de l'entreprise; qu'un des salariés, M. Z..., a par ailleurs contesté son licenciement pour faute grave devant la cour d'appel;

SUR LE PREMIER MOYEN:

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de rappel de salaires, alors, selon le moyen:

- 1°/ que l'employeur et les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent, par accord collectif d'entreprise, convenir que certaines conditions de travail et les avantages y afférents seront définis au niveau de chaque établissement sous réserve, d'une part, de ne pas introduire de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et, d'autre part, qu'une négociation soit possible avec les représentants des organisations syndicales au sein de chaque établissement; que, dans une telle hypothèse, l'appartenance du salarié à un établissement déterminé constitue, au regard des matières relevant de la responsabilité des établissements, à elle seule un élément objectif justifiant une différence de situation par rapport aux salariés travaillant dans d'autres établissements; qu'au cas présent, l'accord inter-entreprises du 22 décembre 2003 conclu entre les sociétés Dunlop France, Goodyear France et Seia et les organisations syndicales représentatives de ces trois entreprises prévoyait que, à compter de la fusion de ces trois entreprises au sein de la société Goodyear Dunlop Tires France devant intervenir le 31 décembre 2003 et jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution, le statut collectif en vigueur au sein de chaque établissement serait maintenu; que l'article 2. 5 de l'accord de substitution conclu le 21 janvier 2005 stipule que «l'ensemble des questions relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail, dont notamment les conditions de travail, relèvent des accords d'établissement»; que l'article 2. 1. 4 du même accord stipule que «les primes correspondant aux postes de travail et qui relèvent des conditions d'exercice du poste, des conditions de travail... sont du ressort des établissements respectifs» et que «leur nature, leur montant, leurs modalités de calcul et de paiement relèvent de la responsabilité des établissements»; qu'il résulte de ce texte que les conditions de travail, notamment celles relatives au travail posté, et les primes y afférentes avaient vocation à être définies au sein de chacun des établissements de la société Goodyear Dunlop Tires France; que la société Goodyear Dunlop Tires France exposait qu'une négociation avait été engagée au sein de l'établissement de Riom pour les nouvelles modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail notamment celles relatives au personnel posté; qu'il résultait de ces dispositions conventionnelles que les salariés de l'établissement de Riom se trouvaient du seul fait de leur appartenance à cet établissement dans une situation objectivement différente de celle des salariés des autres établissements au regard des conditions relatives au travail posté

et aux primes y afférentes; qu'en faisant droit aux demandes de rappels de primes formulées par les salariés, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisés, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail, et, par fausse application le principe «à travail égal, salaire égal»;

2°/ que la société Goodyear Dunlop Tires France insistait dans ses écritures sur le fait qu'avant l'absorption des sociétés Goodyear France et Sia, les conditions relatives au travail posté étaient définies au sein de la société Dunlop France, société absorbante, par des accords d'établissements, de sorte qu'il n'existait aucune norme d'entreprise relative au travail posté dont pouvaient se prévaloir les salariés des sociétés absorbées; qu'elle produisait aux débats, d'une part, le protocole d'accord sur les modalités d'aménagement du temps de travail du personnel posté de l'établissement de Dunlop Montluçon en date du 30 mars 2001 ainsi que son avenant en date du 28 février 2007 et, d'autre part, le protocole d'accord du 22 avril 2000 relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail de l'établissement de Dunlop, Amiens comportant un titre III consacré au «personnel posté»; qu'en estimant néanmoins que les conditions relatives au travail posté auraient été définies au niveau de l'entreprise et non au niveau des établissements, sans caractériser l'existence d'une norme collective applicable à l'ensemble de l'entreprise absorbante dont pouvaient se prévaloir les salariés des sociétés absorbées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des accords d'établissements susvisés et des articles 1134 du code civil, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail;

Mais attendu qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence;

Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les salariés concernés des différents établissements de l'entreprise accomplissaient un travail égal ou de valeur égale, et d'autre part que, ni les activités exercées dans les différents établissements, ni les modalités d'organisation du travail posté, n'étaient de nature à justifier la différence de traitement concernant les primes de poste de jour et de nuit, le bénéfice de celles-ci étant lié à la pratique du travail posté, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés de l'établissement de Riom de l'entreprise ne pouvaient être privés de ces primes applicables aux salariés des deux autres établissements de l'entreprise; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus;

Et sur le second moyen relatif au seul pourvoi n° B 10-30. 171:

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Z... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un; que commet une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, le salarié qui, en raison de la nature des travaux qu'il effectue, expose, de par son état d'ébriété, les personnes ou les biens à un danger; que l'employeur, tenu en matière de prévention d'une obligation de sécurité de résultat, ne saurait être tenu d'attendre la réitération du comportement ou la réalisation effective du risque; qu'au cas présent, la société Goodyear Dunlop Tires France faisait valoir, sans être contredite, que M. Z... était affecté à des travaux requérant l'utilisation d'outils «râpants» et de machines potentiellement dangereuses, notamment des meuleuses pneumatiques, et que son état d'ébriété l'exposait ainsi que ses collègues de travail à un danger pour leur santé et leur sécurité (arrêt p. 16 al. 3); que la cour d'appel a elle-même constaté que la société exposante était bien fondée, au regard des dispositions de son règlement intérieur l'autorisant à imposer des contrôles d'alcoolémie sur «les salariés occupés à des travaux dangereux dans les cas où l'imprégnation alcoolique peut constituer un danger», à imposer à M. Z... le contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif (arrêt p. 18 al. 1-3); qu'il résultait de ces constatations qu'en effectuant son travail sous l'empire d'un état d'ébriété M. Z... avait exposé les personnes et les biens à un danger et que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail; qu'en écartant néanmoins la faute grave en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'état d'ébriété au travail de M. Z... dans le passé et de l'absence de répercussion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation du texte susvisé et des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'avait pas eu de précédent et qu'il n'avait eu aucune répercussion sur la qualité du travail ni sur le fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ancienneté du salarié, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE les pourvois;

Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer aux dix salariés la somme globale de 2.500 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens communs produits aux pourvois n° S 10-30. 162 à B 10-30. 171 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Goodyear Dunlop Tires France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (commun aux 10 pourvois)

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir alloué à chacun des 10 salariés défendeurs aux pourvois une somme à titre de rappel de salaire sur prime de poste de jour de janvier 2004 à décembre 2008, une somme à titre de rappel de salaire sur prime de postes de nuit de janvier 2004 à décembre 2008 et une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante;

AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article L 132-8 précité, en l'absence de conclusion d'un nouvel accord dans le délai d'un an, les salariés de l'entreprise absorbée sont fondés à revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société absorbante à compter de la date à laquelle ils deviennent salariés de cette société. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que des primes de poste (3x8'2 8p, permanent du matin), des primes de poste de nuit et des indemnités d'intempéries étaient, avant la fusion, prévues au sein des établissements de Montluçon et d'Amiens Sud de la société DUNLOP France. Il ne peut être soutenu qu'il s'agirait d'avantages décidés seulement au sein de ces deux établissements. Il est, en effet, versé aux débats un «avis au personnel» émanant de la direction des ressources humaines de la société DUNLOP France qui fait état des mesures arrêtées à la suite de la négociation annuelle 2002 (augmentation des salaires «de l'ensemble du personnel», augmentation des primes de poste de jour et de nuit). Ce document démontre que les avantages litigieux résultent de négociations suivies et de décisions prises au niveau de l'entreprise elle-même, et non au niveau des établissements. Il est, en revanche, constant qu'au moment de la fusion, ces primes n'étaient pas en vigueur au sein de la société SEIA qui n'était pas un établissement de la société DUNLOP France. L'accord Inter-Entreprises du 22 décembre 2003 comporte les dispositions suivantes: «3. Maintien des statuts collectifs à compter du 31 décembre 2003, date effective prévue de la fusion sociale des trois entreprises et jusqu'au 31 mars 2005, date d'expiration de la période de quinze mois fixée par le code du travail et la jurisprudence, les salariés des sociétés Dunlop France, Goodyear France et SEL4 présents au 31 décembre 2003, continueront à bénéficier de l'application des statuts collectifs qui étaient en vigueur, dans leur entreprise et dans leur établissement respectifs à la date de la fusion. Ces statuts collectifs, mis en cause par la fusion et par d'éventuelles dénonciations par les sociétés Dunlop France, Goodyear France ou SEIA respectivement dans chacune des trois sociétés, de dispositions existantes soit sous forme d'accord d'entreprise, soit d'accord d'établissement, soit d'usages plus ou moins formalisés, resteront en vigueur jusqu'au 31 mars 2005 au plus tard, ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de nouveaux accords intervenus entre les parties dans le cadre de la société Goodyear Dunlop Tires France. 4. Avantages acquis à titre individuels Dans le cas où aucun accord de substitution ne viendrait remplacer tel ou tel accord collectif mis en cause ou dénoncé dans le cadre de la fusion au terme du délai de 15 mois, les salariés des sociétés Dunlop France, Goodyear et SEL4 présents à la date de la fusion dans chacune des trois entreprises, conserveront les avantages individuels liés à l'exercice de leur contrat de travail dont ils ont déjà eu le bénéfice

tels qu'ils seront constatés au 31 mars 2005 au plus tard'. Il n'est pas contesté que ces primes et indemnités ont été maintenues au sein des seuls établissements concernés pendant la période transitoire. Le 21 janvier 2005, un accord d'entreprise a été signé au sein de la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE qui prévoit en son article 2. 1. 4 intitulé «primes liées au poste de travail»: «Les primes correspondant aux postes de travail, et qui relèvent des conditions d'exercice du poste, des conditions de travail, et de la manière dont sont calculées les éventuelles primes d'activité (productivité, rendement, variable des commerciaux, etc.) sont du ressort des établissements respectifs. Leur nature, leur montant, leurs modalités de calcul et de paiement relèvent de la responsabilité des établissements. (...)». Il résulte des éléments versés aux débats qu'à l'issue de la période transitoire, les avantages litigieux ont été maintenus au sein des établissements de Montluçon et d'Amiens Sud et que l'établissement de Riom en est resté privé, en l'absence d'accord au sein de cet établissement. Cependant, si, un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement, il reste qu'aucune différence de traitement ne peut être instituée entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale à moins qu'elle repose sur des raisons objectives. En l'espèce, pour justifier cette différence de traitement, l'employeur fait valoir que les différents établissements se trouveraient dans des situations différentes et il invoque le fait que l'établissement de Montluçon est en «3x8 plus équipe de suppléance», ceux d'Amiens Nord et de Montluçon en «3x8 plus équipe de suppléance», tandis que celui de Riom est en «3x8 avec équipe de suppléance». Il invoque aussi le fait que l'établissement de Riom a pour activité le rechapage de pneumatiques tandis que les autres ont pour activité la fabrication de pneumatiques. Toutefois, ni les activités exercées ni les modalités d'organisation du travail posté ne sont de nature à justifier la différence de traitement concernant les primes de postes de jour et de nuit alors que le bénéfice de celles-ci est lié à la pratique du travail posté. Il en est de même pour l'indemnité intempéries qui est destinée à indemniser la sujétion résultant du travail effectué en étant exposé aux intempéries. Il n'est ni démontré ni soutenu que les salariés de l'établissement de Riom n'effectueraient pas un travail égal ou de valeur égale à celui accompli par les salariés des autres établissements de la société. Il s'ensuit, en l'absence de justification objective, que l'employeur ne pouvait priver les salariés appartenant à l'établissement de Riom des avantages litigieux sans enfreindre le principe «à travail égal, salaire égal». – Les rappels de salaire – Le salarié sera accueilli dans ses prétentions, l'employeur ne discutant pas les sommes réclamées qui, vérifiées au vu des pièces justificatives produites, s'avèrent exactes et justifiées»;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «sur les primes: que les primes existaient avant la fusion dans la société DUNLOP FRANCE pour les établissements de MONTLUÇON et DUNLOP AMIENS; que DUNLOP FRANCE a absorbé GOODYEAR FRANCE et SEIA RIOM au 31 décembre 2003; que ces primes n'ont pas été remises en cause par la fusion; que des primes sont maintenues pendant la période de négociation de 15 mois (1er janvier 2004- mars 2005); qu'à la fin de la période de négociation les primes sont toujours maintenues dans la société SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE; qu'en conséquence le Conseil ordonne le maintien des primes jour 3 x 8, poste de nuit et congés payés afférents à parfaire à la date du 31 décembre 2003» (jugement p. 5);

1º/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur et les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent, par accord collectif d'entreprise, convenir que certaines conditions de travail et les avantages y afférents seront définis au niveau de chaque établissement sous réserve, d'une part, de ne pas introduire de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du Code du travail et, d'autre part, qu'une négociation soit possible avec les représentants des organisations syndicales au sein de chaque établissement; que, dans une telle hypothèse, l'appartenance du salarié à un établissement déterminé constitue, au regard des matières relevant de la responsabilité des établissements, à elle seule un élément objectif justifiant une différence de situation par rapport aux salariés travaillant dans d'autres établissements; qu'au cas présent, l'accord inter-entreprises du 22 décembre 2003 conclu entre les sociétés DUNLOP FRANCE, GOODYEAR FRANCE et SEIA et les organisations syndicales représentatives de ces trois entreprises prévoyait que, à compter de la fusion de ces trois entreprises au sein de la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE devant intervenir le 31 décembre 2003 et jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution, le statut collectif en vigueur au sein de chaque établissement serait maintenu; que l'article 2. 5 de l'accord de substitution conclu le 21 janvier 2005 stipule que «l'ensemble des questions relatives à l'organisation

et à l'aménagement du temps de travail, dont notamment les conditions de travail, relèvent des Accords d'Etablissement»; que l'article 2. 1. 4 du même accord stipule que «les primes correspondant aux postes de travail et qui relèvent des conditions d'exercice du poste, des conditions de travail ... sont du ressort des établissements respectifs» et que «leur nature, leur montant, leurs modalités de calcul et de paiement relèvent de la responsabilité des établissements»; qu'il résulte de ce texte que les conditions de travail, notamment celles relatives au travail posté, et les primes y afférentes avaient vocation à être définies au sein de chacun des établissements de la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE; que la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE exposait qu'une négociation avait été engagée au sein de l'établissement de RIOM pour les nouvelles modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail notamment celles relatives au personnel posté; qu'il résultait de ces dispositions conventionnelles que les salariés de l'établissement de RIOM se trouvaient du seul fait de leur appartenance à cet établissement dans une situation objectivement différente de celle des salariés des autres établissements au regard des conditions relatives au travail posté et aux primes y afférentes; qu'en faisant droit aux demandes de rappels de primes formulées par les salariés, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisés, ensemble l'article L. 2232-16 du Code du travail, et, par fausse application le principe «à travail égal, salaire égal»;

2º/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE insistait dans ses écritures sur le fait qu'avant l'absorption des sociétés GOODYEAR FRANCE et SEIA, les conditions relatives au travail posté étaient définies au sein de la Société DUNLOP FRANCE, société absorbante, par des accords d'établissements, de sorte qu'il n'existait aucune norme d'entreprise relative au travail posté dont pouvaient se prévaloir les salariés des sociétés absorbées; qu'elle produisait aux débats, d'une part, le protocole d'accord sur les modalités d'aménagement du temps de travail du personnel posté de l'établissement de DUNLOP MONTLUÇON en date du 30 mars 2001 ainsi que son avenant en date du 28 février 2007 et, d'autre part, le protocole d'accord du 22 avril 2000 relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail de l'établissement de DUNLOP AMIENS comportant un Titre III consacré au «personnel posté»; qu'en estimant néanmoins que les conditions relatives au travail posté auraient été définies au niveau de l'entreprise et non au niveau des établissements, sans caractériser l'existence d'une norme collective applicable à l'ensemble de l'entreprise absorbante dont pouvaient se prévaloir les salariés des sociétés absorbées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des accords d'établissements susvisés et des articles 1134 du Code civil, L. 2254-1 et L. 2261-14 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION:

(relatif au seul pourvoi n° B 10-30. 171 concernant Monsieur Z...)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Z... ne reposait pas sur une faute grave, et d'avoir alloué à ce dernier les sommes de 8. 713, 71 € à titre d'indemnité de licenciement, 3. 227, 90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 322, 79 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, 1. 400, 91 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied et 140, 09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de la lettre du 10 octobre 2008, M. Z... a été licencié pour les motifs suivants: « (...) le 19 septembre 2008, vous avez pris votre poste de travail à 13 heures. Vers 14 heures 30, à votre retour de pause en compagnie de Monsieur Christian B..., Opérateur de Production, Messieurs Ludovic C... T, votre responsable hiérarchique, et Vincent D..., Responsable Sécurité, ont constaté que vous n'étiez pas en état d'assumer vos fonctions. Le caractère anormal de votre comportement présentait toutes les caractéristiques d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique, en particulier votre haleine chargée et votre état d'excitation. Constatant votre état, ils ont été dans l'obligation de vous interdire de tenir votre poste de travail. Monsieur Vincent D... a contacté immédiatement Monsieur José E..., Responsable de Production qui vous a rejoints dans le bureau de l'encadrement de production. Ce dernier a également constaté que vous n'étiez pas en état de tenir votre poste de travail. Il vous a demandé si vous aviez consommé de l'alcool. Vous lui avez répondu que non. Monsieur José E... vous a fait lecture des alinéas 2 et 3 de l'article VII intitulé Hygiène et Sécurité du règlement intérieur en vigueur dans notre établissement, savoir: (...) Vous exercez la fonction d'opérateur de production. Vous êtes affecté à la réparation intérieure. Dans ce cadre, vous utilisez des outils rapant et des

machines qui nécessitent le respect scrupuleux de consignations, notamment les meuleuses pneumatiques. En conséquence, Monsieur José E... vous a demandé de vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Avant d'opérer, il vous a proposé de solliciter la présence d'un témoin de votre choix, ce que vous avez décliné. Vous avez donc effectué l'alcootest en présence de Messieurs José E..., Vincent D... et Ludovic C... et de Monsieur Christian B... qui présentait un état d'ébriété identique au votre. L'alcootest s'est révélé positif. Sur cette constatation, Monsieur José E... a pris la décision de vous faire reconduire à votre domicile. Vous avez tout d'abord refusé et avez déclaré vouloir récupérer votre véhicule personnel. Monsieur José E... vous a alors signifié qu'en cas de refus persistant de votre part il se verrait contraint de faire appel à la Gendarmerie. Vous avez finalement accepté d'être raccompagné à votre domicile. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, Monsieur José E... a été contraint de vous signifier votre mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir (...). Votre conduite est inadmissible et inacceptable. Elle constitue un manquement grave à la discipline de l'entreprise et est de nature à porter préjudice à la sécurité de notre entreprise. Compte tenu de notre obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de notre personnel, nous ne pouvons laisser perdurer sans réagir votre comportement, ceci au risque de nous rendre complice de vos agissements et de leurs conséquences pour votre sécurité et celle de vos collègues (...). M. C..., agent de maîtrise, atteste avoir été alerté, le 19 septembre 2009, vers 14h30, par M. D..., responsable sécurité, de «l'état anormal» de M. Z... et avoir constaté «les caractéristiques d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique», et plus particulièrement, «une haleine chargée à l'alcool». Il explique s'être rendu dans le bureau de M. E..., responsable de production pour qu'il constate que M. Z... n'était pas en état de tenir son poste de travail, que ce dernier a fait lecture à M. Z... du règlement intérieur et lui a demandé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie avec la possibilité d'être assisté par un témoin. Il précise avoir constaté que le contrôle par alcootest s'est révélé positif. M. D... confirme ces déclarations, rapportant avoir constaté «le comportement anormal» de M. Z... «ainsi que son haleine chargée d'odeurs d'alcool». M. E... explique aussi avoir constaté par lui-même que M. Z... était «dans un état ayant consommé des boissons alcoolisées». Ils confirment l'un et l'autre les conditions dans lesquelles il a été procédé au contrôle d'alcoolémie et le résultat positif de celui-ci. Contrairement à ce que soutient M. Z..., ces attestations, précises et concordantes, sont de nature à établir la réalité du grief invoqué, même si elles émanent de supérieurs hiérarchiques. Les attestations de collègues de M. Z... disant qu'il était dans un état normal n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause leurs déclarations. Le salarié souligne qu'il s'est écoulé 3 heures entre sa prise de poste et l'invitation qui lui a été faite de se soumettre à un contrôle mais cette durée n'est, en elle-même, pas de nature à établir qu'il n'était pas, ainsi qu'il le soutient, sous l'emprise de l'alcool au moment du contrôle ni à remettre en cause les constatations rapportées dans les attestations. M. Z... n'est pas non plus fondé à soutenir que la matérialité du contrôle d'alcoolémie ne serait pas établie alors qu'il ne conteste pas avoir été soumis au contrôle et que les attestations produites par l'employeur apportent la preuve de celui-ci et de son résultat. Il n'est pas davantage fondé à contester la régularité du contrôle. Le règlement intérieur de l'entreprise prévoit, dans son article VII. 2 qu'il est interdit de pénétrer et de demeurer dans l'établissement en état d'ivresse et d'y consommer des boissons alcoolisées. L'article VII. 3 dispose que la direction pourra imposer l'alcootest aux salariés occupés à l'exécution de travaux dangereux dans le cas où l'imprégnation alcoolique peut constituer un danger. Il précise que le contrôle sera effectué par un ou des agents habilités, désignés par la direction, que le salarié concerné aura la faculté de solliciter la présence d'un tiers ainsi qu'une contre-expertise. En l'espèce, il n'est pas contesté et il est établi par les attestations produites qu'avant qu'il soit procédé au contrôle d'alcoolémie, les dispositions ci-dessus du règlement intérieur ont été lues à M. Z..., qu'il a été proposé à ce dernier d'être assisté par un témoin puis de demander une contreexpertise et que M. Z... a décliné ces propositions. Il est, en conséquence, suffisamment établi par les éléments versés aux débats que, le jour des faits, M. Z... se trouvait sous l'emprise de l'alcool. Un tel comportement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il y a, toutefois, lieu de tenir compte de l'ancienneté du salarié et de ce qu'il n'est pas fait état d'incidents similaires par le passé. Dans la mesure où il n'est ni justifié ni soutenu que la faute commise aurait eu une quelconque répercussion sur la qualité du travail et sur le fonctionnement normal de l'entreprise, la qualification de faute grave ne peut être retenue. Il s'ensuit que les demandes du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de l'indemnité de licenciement doivent être accueillies tant dans leur principe que dans leur montant, les sommes réclamées n'étant pas contestées dans leur montant et étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, eu égard à l'ancienneté et à la rémunération du salarié. La demande en paiement du salaire pendant la mise à pied sera également accueillie, en l'absence de faute grave»;

- ALORS QU'en vertu de l'article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un; que commet une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, le salarié qui, en raison de la nature des travaux qu'il effectue, expose, de par son état d'ébriété, les personnes ou les biens à un danger; que l'employeur, tenu en matière de prévention d'une obligation de sécurité de résultat, ne saurait être tenu d'attendre la réitération du comportement ou la réalisation effective du risque; qu'au cas présent, la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE faisait valoir, sans être contredite, que Monsieur Z... était affecté à des travaux requérant l'utilisation d'outils «râpants» et de machines potentiellement dangereuses, notamment des meuleuses pneumatiques, et que son état d'ébriété l'exposait ainsi que ses collègues de travail à un danger pour leur santé et leur sécurité (Arrêt p. 16 al. 3); que la cour d'appel a elle-même constaté que la société exposante était bien fondée, au regard des dispositions de son règlement intérieur l'autorisant à imposer des contrôles d'alcoolémie sur «les salariés occupés à des travaux dangereux dans les cas où l'imprégnation alcoolique peut constituer un danger », à imposer à Monsieur Z... le contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif (Arrêt p. 18 al. 1-3); qu'il résultait de ces constatations qu'en effectuant son travail sous l'empire d'un état d'ébriété Monsieur Z... avait exposé les personnes et les biens à un danger et que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail; qu'en écartant néanmoins la faute grave en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'état d'ébriété au travail de Monsieur Z... dans le passé et de l'absence de répercussion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation du texte susvisé et des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

Publication: Bulletin 2011, V, n° 154

Décision attaquée: Cour d'appel de Riom, du 24 novembre 2009

Titrages et résumés: TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - Différence de rémunération motivée par la seule appartenance des salariés à des établissements différents - Applications diverses - Octroi d'une prime de poste de jour et de nuit

Un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, pour accueillir la demande, émanant des salariés d'un des établissements d'une entreprise, de bénéficier d'une prime pour travail posté, applicable dans les autres établissements, relève que les salariés concernés des différents établissements de l'entreprise accomplissaient un travail égal ou de valeur égale et que, ni les activités exercées dans les différents établissements, ni les modalités d'organisation du travail posté, n'étaient de nature à justifier la différence de traitement concernant les primes de poste de jour et de nuit

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Office du juge

Précédents jurisprudentiels: Sur la prohibition d'une différence de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, dans le même sens que: Soc., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-43.452, Bull. 2009, V, n° 15 (rejet).

Roj: ATS 4374/2011
Id Cendoj: 28079140012011201003
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3325/2010
Procedimiento: Social
Ponente: Jesús Souto Prieto
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Marzo de dos mil once.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS SOUTO PRIETO.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 17 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 28 de octubre de 2009, en el procedimiento nº 706/09 seguido a instancia de D. Jose Francisco contra CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO, S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 6 de julio de 2010, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 30 de septiembre de 2010 se formalizó por el Letrado D. Fernando Lujas de Frías en nombre y representación de D. Jose Francisco, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 14 de febrero de 2011, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007). Contradicción que no puede apreciarse en este caso.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de julio de 2010 (rec. 1217/2010), confirma la de instancia que declaró la procedencia del despido del actor. Consta en el relato fáctico de la sentencia que el actor ha venido prestando servicios para la empresa demandada desde 1978 con categoría profesional de Ayudante de Oficio, hasta su despido disciplinario por embriaguez habitual comunicado el

30-3-2009. En la carta de despido se indicaba que éste se debía a que en los últimos meses o acudía ebrio o se embriagaba durante su jornada laboral, constando amonestaciones por escrito en 2003, 2005, 2007 y 2009, habiendo llegado a llamarse uno de esos días al 112, al alegar el actor que no podía levantarse del suelo, siendo traslado al hospital. Circunstancias que a entender de la empresa repercuten muy negativamente en el rendimiento y la calidad del trabajo, y originan un alto riesgo de sufrir accidentes. Los hechos que se describen en la carta de despido se consideran probados, constando también que hace dos años el demandante estuvo unos meses siguiendo un tratamiento de deshabilitación al alcohol, para lo que la empresa lo permitía salir un poco antes de su jornada. En instancia y en suplicación se declara procedente el despido, razonando la Sala que la sanción no se debe a un hecho aislado, sino a una conducta que se ha repetido con habitualidad a lo largo de varios años, repercutiendo su estado de forma negativa en el trabajo.

Contra esta sentencia interpone el presente recurso de casación unificadora la parte demandante, aportando de referencia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 6 de mayo de 1994 (rec. 1132/1993), respecto de la que no resulta posible apreciar contradicción porque en este caso se declara improcedente el despido del actor porque en la carta de despido no se hacía constar las veces que se había presentado embriagado al trabajo, ni la repercusión negativa para el mismo, salvo en una ocasión, la que determinó el despido, sin que existiesen otras sanciones, no caducadas o prescritas, salvo las meras advertencias o recriminaciones.

Así las cosas, mientras en el caso de autos consta la habitualidad en la embriaguez, haciéndose indicación en la carta de despido a que éste se debía a que en los últimos meses o acudía ebrio o se embriagaba durante su jornada laboral, constando amonestaciones por escrito en 2003, 2005, 2007 y 2009, lo que repercutía muy negativamente en el rendimiento y la calidad del trabajo, y originaba un alto riesgo de sufrir accidentes, tales circunstancias no concurren en el caso de referencia, pues en la carta de despido no se hacía constar las veces que se había presentado embriagado al trabajo, ni la repercusión negativa para el mismo, salvo en una ocasión, la que determinó el despido, sin que existiesen otras sanciones, no caducadas o prescritas, salvo las meras advertencias o recriminaciones.

Por otra parte, la Sala ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del ET no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995, 6 de Julio de 2004, R. 5346/2003, 24 de mayo de 2005, R. 1728/04, 8 de junio de 2006, R. 5165/2004 y 18 de diciembre de 2007, R. 4301/2006). Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, en el que insiste en la identidad sustancial de los supuestos comparados pero sin aportar datos relevantes que desarticulen las divergencias apreciadas por la Sala. Por lo demás, aunque es cierto que esta Sala tiene dicho que la identidad entre las resoluciones comparadas no ha de ser absoluta, no lo es menos que resulta consolidada la exigencia de que la misma sea sustancial y tal condición no se cumple en el caso de autos.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Fernando Lujas de Frías, en nombre y representación de D. Jose Francisco contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 6 de julio de 2010, en el recurso de suplicación número 1217/10, interpuesto por D. Jose Francisco, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 17 de los de Madrid de fecha 28 de octubre de 2009, en el procedimiento nº 706/09 seguido a instancia de D. Jose Francisco contra CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 1 mars 2011
N° de pourvoi: 09-43020
Non publié au bulletin
Rejet
M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2009) que M. X..., engagé en qualité de serveur le 3 mars 2005, par la société Emicam-Le bar basque, après avoir été mis à pied, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 2007;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen:

- 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer si bien qu'en retenant, pour estimer que les faits relatés dans trois attestations établies par des salariés constituaient une présomption permettant d'établir la réalité du vol imputé à M. X..., que ce dernier se bornait à nier les faits contestés sans produire aucun élément de nature à contredire ou combattre les éléments communiqués par l'employeur et à faire tomber les présomptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail et 1315 du code civil;
- 2°/ que le vol par un salarié d'une faible somme d'argent, en l'espèce 5 euros saurait constituer une faute grave et justifier son départ immédiat de l'entreprise, quand bien même il aurait moins de deux années d'ancienneté et déjà été sanctionné une fois pour des faits radicalement différents de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9) du code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait établi les faits reprochés au salarié et que c'est sans méconnaître la faible importance du vol commis au préjudice d'un autre serveur et par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause qu'elle a pu décider qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE:

«La faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l'employeur, est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement du 22 janvier 2007 pour faute grave est ainsi rédigée: «Vos collègues et moi-même avons constaté ces derniers temps à plusieurs reprises des manques en caisse. Notamment le vendredi 5 janvier, nous avons constaté qu'il manquait 10 € dans un fonds de caisse. Aussi, vendredi soir, un de vos collègues a-t-il laissé une ceinture avec un fonds de caisse bien précis. Le samedi matin, vous étiez d'ouverture. A notre arrivée, nous avons constaté qu'il manquait 5 € dans son fonds de caisse. Les soupçons que vos collègues et moi-même pouvions avoir sur vos agissements ont donc à cette occasion trouvé confirmation. Il est évident qu'un tel comportement est inadmissible, non seulement pour votre employeur mais aussi pour vos collègues de travail auxquels vous portez délibérément préjudice. Vos dénégations au cours de l'entretien préalable ne peuvent changer mon appréciation de la situation et il m'apparaît que toute poursuite de nos relations de travail est désormais impossible, même pour le temps limité d'un préavis. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra donc effet immédiatement».

La SARL EMICAM «LE BAR BASQUE» verse aux débats les attestations de trois salariés, collègues de Monsieur Patrick X.... Dans son attestation en date du 31 mai 2007, Monsieur Nicolas Y... écrit notamment «qu'à plusieurs reprises il manquait de l'argent dans la caisse de (son) collègue Nicolas Z...», «notamment un matin ce dernier me fit remarquer qu'il lui manquait 10 € alors que la veille j'avais moi-même compté avec lui son fonds de caisse. Le lendemain matin même chose (...)». Dans son attestation du 4 juin 2007 Monsieur Jean Charles A... écrit: «dans une ceinture contenant le fonds de caisse d'un des serveurs rangée dans un tiroir du bar, de l'argent avait été pris à plusieurs reprises. Le serveur m'en a fait part. J'ai donc compté sa ceinture avec lui à la fermeture. Le lendemain durant l'ouverture de Monsieur X... 10 € avaient disparus. J'ai donc recommencé l'opération le soir même, mais là je fus obligé d'appeler Monsieur B... pour participer à la constatation en tant que patron. Le lendemain matin il manquait 5 €, cela ne paraît rien dans l'importance des sommes, mais je peux vous assurer que nous étions tous écoeurés. P. S.: cet incident a été constaté le 6 janvier 2007».

Dans son attestation du 30 mai 2007 Monsieur Nicolas Z... écrit: «j'ai pu constater à plusieurs reprises qu'il me manquait de l'argent dans ma ceinture de limonadier. Début janvier, à l'aide du directeur on a compté précisément le fonds de caisse qui restait dans ma ceinture et le lendemain à mon arrivée il manquait de nouveau 5 € c'est alors que tout s'est déclenché. Ceci s'est passé le samedi 6 janvier 2007». Ces trois attestations concordent sur la constatation de la disparition, à plusieurs reprises de sommes d'argent dans la ceinture de limonadier d'un des serveurs. Le fait de constater que les disparitions avaient lieu lorsque Monsieur Patrick X... ouvrait seul le bar et d'induire qu'il était l'auteur de la disparition, constitue une présomption.

Le fait que trois personnes (l'employeur et deux salariés: Monsieur Jean Charles A... et Monsieur Nicolas Z...) constatent le montant de la somme déposée dans la «ceinture de limonadier» le soir avant la fermeture de l'établissement puis le lendemain matin à leur arrivée la disparition d'une partie de cette somme alors que Monsieur Patrick X... est celui qui a ouvert, seul, le bar et en induisent qu'il est l'auteur de la disparition, caractérisent un faisceau d'indices et constituent des présomptions graves, précises et concordantes. Or, les présomptions graves, précises et concordantes sont un mode de preuve suffisant pour entraîner la conviction du juge si, sans inverser la charge de la preuve, le salarié ne produit aucun élément de nature à combattre ces présomptions et donc à faire tomber cette preuve. En l'espèce, Monsieur Patrick X... se borne à contester les faits reprochés sans produire aucun élément de nature à contredire ou combattre les éléments produits par l'employeur et donc aucun élément susceptible de détruire les indices et faire tomber les présomptions. En effet, le fait d'affirmer que les faits ne sont pas prouvés n'est pas de nature à combattre ces présomptions graves, précises et concordantes qui, précisément, constituent la preuve qui pèse sur l'employeur. De même, la tentative «d'arrangement après la rupture, par l'intermédiaire d'un des salariés», dénoncée par Monsieur Patrick X... n'est pas de nature à combattre ces présomptions graves, précises et concordantes.

En effet, sa lettre de contestation de cette démarche, adressée à l'employeur le 31 janvier 2007, ne contient aucun élément, positif ou objectif, relatif aux faits reprochés, hormis sa contestation de ces faits qui, en

l'absence de tout élément venant l'étayer, demeure une allégation insusceptible de combattre les présomptions graves, précises et concordantes. Par conséquent il y a lieu de dire que les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent un motif réel et sérieux de licenciement. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Patrick X..., engagé à compter du 3 mars 2005 a reçu notification le 5 juin 2006 d'un avertissement, non contesté et dont il ne demande pas l'annulation, pour des motifs ainsi rédigés: «Je vous signifie un avertissement pour votre comportement, votre état, et vos manquements pendant le service de ce mardi 4 juillet 2006 au soir: en effet, j'ai constaté ce matin que: la terrasse n'avait pas été couverte et balayée; la porte de l'établissement n'avait pas été verrouillée; l'alarme n'avait pas été mise en service; le sol n'avait pas été nettoyé; la machine à calculer était détruite à même le sol; le téléphone était abîmé suite à une chute; la caisse n'avait pas été faite.

Après renseignements auprès de vos collègues de travail, il apparaît que tout au long de votre service vous avez été agressif et que vous avez fini en apothéose en ne remplissant pas vos tâches de responsables et surtout en ne verrouillant pas l'établissement. Ces faits interviennent après plusieurs avertissements qui vous ont été signifiés par oral par votre responsable et par moi-même après des états d'ébriété constatés au travail. Je vous adresse donc un avertissement, qui se transformera en cas de récidives en licenciement». Le fait, pour le salarié, après avoir reçu notification d'un avertissement, de commettre le fait grave de soustraction de numéraire, sur son lieu de travail, le tout en moins de deux ans de présence dans l'entreprise, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Par conséquent il y a lieu de dire le licenciement de Monsieur Patrick X... fondé sur une faute grave et, par voie de conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en toutes ses dispositions» (Arrêt p. 5 et 6).

- 1º/ ALORS, D'UNE PART, QUE la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer si bien qu'en retenant, pour estimer que les faits relatés dans 3 attestations établies par des salariés constituaient une présomption permettant d'établir la réalité du vol imputé à Monsieur X..., que ce dernier se bornait à nier les faits contestés sans produire aucun élément de nature à contredire ou combattre les éléments communiqués par l'employeur et à faire tomber les présomptions, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail et 1315 du Code civil,
- 2º/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le vol par un salarié d'une faible somme d'argent, en l'espèce 5 €, ne saurait constituer une faute grave et justifier son départ immédiat de l'entreprise, quand bien même il aurait moins de deux années d'ancienneté et déjà été sanctionné une fois pour des faits radicalement différents de sorte qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), 1234-9 (anciennement L. 122-9) du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Pau, du 29 juin 2009.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 24 novembre 2010
N° de pourvoi: 09-42267
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Collomp (président), président
Me Jacoupy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 18 janvier 2006 par la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie en qualité d'infirmier par un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 17 janvier 2009; que le 6 octobre 2006, après entretien préalable à une mesure disciplinaire, l'employeur lui a notifié une suspension de services de trois mois sans rémunération en lui demandant pendant la durée de cette suspension de restituer le logement de fonction mis à sa disposition; que le 18 janvier 2007, M. X..., estimant que cette mise à pied était abusive, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le tribunal du travail de diverses demandes;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office:

Attendu que l'arrêt a été notifié à M. X... par acte d'huissier du 6 janvier 2009 et qu'il a formé un pourvoi par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 15 mai 2009, après l'expiration du délai de trois mois durant lequel il pouvait former ce recours;

Mais attendu qu'en application de l'article 680 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé;

Et attendu que la signification de l'arrêt à M. X... indique que «dans le cas d'un pourvoi où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est indispensable» il faudra charger celui-ci d'accomplir les formalités nécessaires», et que «s'agissant d'un pourvoi dispensé du ministère d'avocats aux conseils», il suffira de «déposer une requête ou faire une déclaration au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision», cette formalité pouvant aussi être faite «par un avocat, un avoué ou une personne» du choix de la partie;

Qu'il en résulte qu'en l'absence d'indications précises sur les modalités selon lesquelles, dans le litige en cours, M. X... pouvait former un pourvoi, cette notification n'a pas pu faire courir le délai de recours; que le pourvoi est recevable;

SUR LE PREMIER MOYEN:

Vu l'article 27 de la convention collective du 10 septembre 1959 modifiée applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire;

Attendu que lorsqu'une convention collective fixant les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, limite la durée d'une mesure de suspension du contrat de travail, le dépassement de cette durée entraîne la nullité de la sanction;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et dire que la prise d'acte doit être considérée comme produisant les effets d'une démission, la cour d'appel, après avoir rappelé que la durée de la sanction prise excédait le maximum prévu par la convention collective applicable, a retenu qu'il convenait de rechercher si la sanction de suspension de service de trois mois avec retenue du salaire était disproportionnée au regard de la sanction la plus forte que l'employeur aurait été en droit de prendre, que le comportement et les manquements réitérés du salarié à ses obligations, qui étaient établis, constituaient des fautes de nature à

justifier un licenciement, de telle sorte que la sanction prise n'était pas disproportionnée au regard de la mesure de licenciement que la Province était fondée à prendre;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la durée de la suspension de services prononcée contre M. X... excédait celle prévue par la convention collective qui était de huit jours, ce dont il résultait que la sanction était nulle et que la prise d'acte de la rupture était justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Vu l'article 627 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa;

DIT n'y avoir lieu à renvoi;

Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2007 par le tribunal du travail de Nouméa;

Condamne la Province Nord aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Province Nord à payer à M. X... la somme de 2.500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Jean-Pierre X... doit être considérée comme produisant les effets d'une démission,

AUX MOTIFS QUE:

«Attendu que le tribunal a exactement rappelé que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à l'employeur produisait les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Attendu que Monsieur X... a, par lettre du 18 janvier 2007, considéré que le contrat qui le liait à la Province Nord était rompu du fait de celle-ci en relevant, d'une part, qu'il contestait les manquements professionnels qui lui étaient reprochés et avaient conduit à la sanction de trois mois de suspension de services sans rémunération, d'autre part, que la sanction était disproportionnée et ne permettait plus la poursuite de la relation contractuelle.

Qu'il convient donc de rechercher dans quelle mesure les faits invoqués justifiaient la sanction et/ou si celle-ci, par son caractère disproportionné, fondait la rupture.

Attendu que la matérialité des fautes reprochées à Monsieur X... est établie par les pièces produites par l'employeur.

Qu'il résulte ainsi:

- du courrier adressé à la DPASS Nord par le médecin-chef du CMS de BELEP le 2 avril 2006 que Monsieur X... se rendait quotidiennement au nakamal et en revenait en état d'ébriété interdisant tout recours à ses services; qu'il s'est absenté à plusieurs reprises avec le véhicule de service laissant le dispensaire sans voiture; qu'il a menacé le médecin-chef et un infirmier;

- de l'évaluation sommaire faite par le médecin-chef du CMS de TOUHO le 21 août 2006 et du rapport de l'équipe infirmière de ce même dispensaire du 23 août 2006, confirmé par un courrier de Madame Z..., un non respect des règles d'asepsie (oubli de compresses souillées sur le plan de travail), des erreurs dans les dosages, des inversions de données entre malades, un excès de confiance le conduisant à des pratiques médicalement inadéquates et dangereuses pour les malades, des interventions contraires aux règles de l'éducation pour la santé.

Attendu que Monsieur X... n'oppose aucune argumentation sérieuse aux fautes professionnelles qui résultent de ces rapports; que son accusation de parti pris de l'ensemble du personnel médical ou infirmier n'est étayée par aucun élément.

Que les courriers d'anciens collègues indiquant n'avoir pas eu de problèmes avec lui en janvier et février 2006 n'impliquent nullement qu'il ne s'est pas rendu responsable de manquements mentionnés dans les rapports.

Que l'avis favorable à la candidature de Monsieur X... émis le 21 septembre 2006 par le médecin-chef du CSM de HOUAÏLOU doit être nécessairement rapproché de l'engagement le 7 septembre 2006 de la procédure disciplinaire qui pouvait convaincre le salarié de rectifier son comportement.

Qu'enfin, si les fautes commises en avril 2006 ne pouvaient à elles seules justifier une sanction disciplinaire au regard du délai de deux mois prévu à l'article 98, alinéa 1, de la délibération n° 281 du 24 février 1988 relative au contrat de travail alors applicable, la jurisprudence admet que les faits anciens peuvent être évoqués au soutien des faits nouveaux.

Attendu que les fautes reprochées à Monsieur X... étant avérées, il convient de déterminer si la sanction prise a été disproportionnée et si la prise d'acte de Monsieur X... doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou une démission.

Attendu qu'il n'est pas discuté que la durée de la suspension de service excédait le maximum prévu par les textes; que la disproportion doit cependant être examinée au regard de la sanction la plus forte que l'employeur aurait été en droit de prendre.

Attendu que la Cour juge que le non respect des règles d'asepsie, les erreurs de dosages, les inversions de données entre malades, les pratiques médicalement inadéquates et dangereuses pour les malades, le comportement agressif envers les collègues, fautes réitérées en dépit des avertissements verbaux donnés, constituent, pour un infirmier comptable d'une obligation particulière de sécurité envers les malades, des fautes de nature à justifier un licenciement.

Que la Cour relève également:

- que Monsieur X... n'a engagé aucune procédure de suspension ou de contestation de la sanction pendant la durée de celle-ci,
- qu'il n'a pas repris son emploi à l'issue de la sanction,
- que sa première réaction est sa lettre du 18 janvier 2007 par laquelle il prend acte de la rupture aux torts de la Province Nord,
- qu'aucune pièce n'établit qu'il a été contraint pendant cette période de retrouver une nouvelle activité.

Qu'ainsi, il ne peut être retenu que la sanction prise, dont Monsieur X... lui-même n'a pas sur le moment contesté la mesure, constitue une sanction disproportionnée au regard de la mesure de licenciement que la Province Nord eût été fondée à prendre.

Attendu, dès lors, que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit être considérée comme produisant les effets d'une démission»,

- 1º/ ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les fautes reprochées au salarié étaient «de nature à justifier un licenciement», sans constater qu'il s'agissait de fautes graves

alors de surcroît que le maintien du salarié dans l'entreprise excluait cette qualification, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 du Congrès du Territoire de la Nouvelle Calédonie relative au contrat de travail,

2º/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE il était constant que le salarié s'était vu infliger une suspension de service de trois mois sans rémunération alors que la Convention Collective des Services Publics limite cette mesure à huit jours; que la Cour d'Appel a elle-même constaté «qu'il n'est pas discuté que la durée de la suspension de service excédait le maximum prévu par les textes»; qu'il apparaissait ainsi que l'employeur avait commis une faute grave justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié; que, dès lors, en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être considérée comme produisant les effets d'une démission, la Cour d'Appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations et a violé l'article 13 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 du Congrès du Territoire de Nouvelle Calédonie relative au contrat de travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Province Nord la somme de 745.800 F. CFP au titre du non respect du préavis,

AUX MOTIFS QUE:

«La démission du salarié sans respect du préavis de deux mois justifie la condamnation au paiement d'une indemnité équivalente à deux mois de salaire, soit 745.800 F. CFP»,

- ALORS QUE la rupture par le salarié, avant son terme, d'un contrat à durée déterminée, ouvre droit pour l'employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait subi, du fait de la démission du salarié, un préjudice qu'il convenait de compenser par une indemnité équivalente à deux mois de salaire, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 relative au contrat de travail du Congrès du Territoire de la Nouvelle Calédonie.

Décision attaquée: Cour d'appel de Nouméa, du 17 décembre 2008.

Roj: ATS 11023/2010
Id Cendoj: 28079140012010202001
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 187/2010
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Aurelio Desdentado Bonete
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a nueve de Septiembre de dos mil diez.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. AURELIO DESDENTADO BONETE.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 4 de marzo de 2009, en el procedimiento nº 1087/2008 y acumulado seguido a instancia de D. Raimundo y D. Jose Miguel contra CREMONINI RAIL IBÉRICA S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 30 de noviembre de 2009, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 6 de mayo de 2010 se formalizó por el Letrado D. Juan Duran Fuentes en nombre y representación de D. Raimundo y D. Jose Miguel, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 6 de mayo de 2010 acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de relación precisa y circunstanciada, falta de cita y fundamentación de la infracción legal y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral exige que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada. Para cumplir este requisito la parte recurrente debe establecer la identidad de los supuestos a partir de los que afirma la existencia de contradicción mediante una argumentación mínima sobre la concurrencia de las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, a través de un examen, que sea suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que el recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas [Sentencias de 27 de mayo de 1992 (R. 1324/1991), 16 de septiembre de 2004 (R. 2465/2003), 6 de julio de 2004 (R. 5346/2003), 15 de febrero de 2005 (R. 1900/2004), 28 de junio de 2005 (R. 3116/04) y 31 de enero de 2006 (R. 1857/04)].

La parte recurrente no ha observado el requisito al que en el apartado anterior se alude, ya que no ha realizado un análisis comparativo de los elementos que delimitan la identidad de las controversias (objeto y fundamento de las pretensiones y hechos probados de las sentencias) y de la divergencia de los pronunciamientos como requiere la norma legal y nuestra doctrina.

SEGUNDO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley, de acuerdo con el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal.

La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» (sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 2008, R. 2206/2006 y 5 de marzo de 2008, R. 1256/2007 y 4298/2006, 14 de mayo de 2008, R. 734/2007 y 1671/2007; 17 de junio de 2008, R. 67/2007; 25 de septiembre de 2008, R. 1790/2007; 2 y 7 de octubre de 2008, R. 1964/2007 y 538/2007; y 3 de noviembre de 2008, R. 2791/2007).

Así se deduce, no sólo del citado art. 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación supletoria en ese orden social, cuyo artículo 477.1 prescribe que «el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso», mientras que el artículo 481.1 LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.2º LEC (entre otras, sentencias de 8 de marzo de 2005, R. 606/2004; 28 de junio de 2005, R. 3116/2004; 16 de enero de 2006, R. 670/2005 y 8 de junio de 2006, R. 5287/2004; 7 de junio de 2007, R. 767/2006; 21 de diciembre de 2007, R. 4193/2006; 16 y 18 de julio de 2008, R. 2202/2007 y 1192/2007; 19 y 25 de septiembre de 2008, R. 384/2007 y 1790/2007; 22 de octubre de 2008, R. 4312/2006; 16 de enero de 2009, R. 88/2008; y 17 de febrero de 2009, R. 2401/2007).

Este requisito no se cumple en el presente recurso, dado que la parte recurrente no ha citado el precepto que considera infringido por la sentencia impugnada.

TERCERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

La sentencia impugnada -confirmando la dictada en la instancia- declara la procedencia de los despidos disciplinarios de los trabajadores. Los demandantes, que prestaban servicios en las instalaciones de la Estación de Atocha, hacia las 01:00 horas del día 30-6-08, mostrando signos de embriaguez, se presentaron en la Estación de Atocha e intentaron entrar por el acceso de la C/ Méndez Alvaro. Los vigilantes de seguridad de la empresa Seguritas, que prestan servicios en la estación, les negaron el paso. Entre 15 y 20 minutos después, los actores regresaron entrando por los andenes. Conducían un «trapele», vehículo de trabajo que recibe en el centro la denominación coloquial de «papamovil», y mofándose de los vigilantes porque habían conseguido burlarlos. Los demandantes mostraban ánimo alterado y proferían ofensas verbales a los vigilantes, tales como chulos e hijos de puta, y amenazaban con hacer que los echaran. Hubo un forcejeo entre estos y los actores, en cuyo transcurso una vigilante de seguridad acabo en el suelo. Finalmente fueron conducidos al exterior. En un momento determinado, uno de los demandantes lanzó un puñetazo a uno de los vigilantes, que adoptó actitud de repeler la agresión, aunque no hubo mayores incidentes. Sostienen los recurrentes que el uso del material de la empresa y la agresión fuera del horario y del centro de trabajo a personas que no pertenecen a la empresa, son hechos que no encajan en el art. 56.9 del Convenio Colectivo de la empresa. La Sala rechaza

tal argumentación, razonando que los demandantes se presentaron precisamente en su centro de trabajo, Estación de Atocha, y que el hecho de que no lo hicieran en su horario no excluye el comportamiento del ámbito obligacional del contrato de trabajo, en el cual se incluye la conducta descrita al penetrar en el centro en horas intempestivas y en contra de la prohibición de quien ejercía funciones de autoridad por delegación de la empresa, para dentro desarrollar una serie de actos reprochables, entre ellos la utilización de un vehículo de la empresa. Y sin que pueda prosperar la tesis que sostiene la inaplicabilidad del precepto por no ser «compañeros» los vigilantes de seguridad.

Los actores recurre en casación unificadora, proponiendo como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12-09-06 (Rec. 2368/06), que declara la improcedencia del despido. Se trata de un supuesto en el que el actor fuera del perímetro exterior de la empresa tuvo un altercado con otro compañero, llegándose a las manos. Sin que conste quien comenzó el mismo y si hubo provocación por uno u otro interviniente. Con anterioridad, el demandante había tenido una discusión en la fábrica con este trabajador. La Sala parte de la falta de acreditación de que fuera el actor el provocador y único agresor. a lo que une que la agresión física tuvo lugar fuera del centro de trabajo y la ausencia de prueba de que se verificara antes de la finalización de la jornada del demandante.

De lo relacionado se desprende que no existe contradicción entre las sentencias comparadas, al ser diferentes las conductas y demás circunstancias acreditadas en cada caso y, en consecuencia, distinta también la valoración que de ellos ha hecho cada Tribunal. Así, en la impugnada los hechos tienen lugar en el centro de trabajo y utilizando indebidamente un vehículo de la empresa. Por el contrario, en el supuesto examinado por la sentencia referencial resulta acreditado que la agresión física se produce fuera del centro de trabajo, no constando que la pelea no fuera mutuamente aceptada por los participantes.

Por otra parte, la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del ET, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico [Sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (R. 1232/1990 y 2271/1991), 15 y 29 de enero de 1997 (R. 952/1996 y 3461/1995), 6 de Julio de 2004 (R. 5346/2003), 9 de julio de 2004 (R. 3496/2002), 24 de mayo de 2005 (R. 1728/04) y 3 de julio de 2007 (R. 2486/07)].

CUARTO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Juan Duran Fuentes, en nombre y representación de D. Raimundo y D. Jose Miguel contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 30 de noviembre de 2009, en el recurso de suplicación número 4290/2009, interpuesto por D. Raimundo y D. Jose Miguel, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Madrid de fecha 4 de marzo de 2009, en el procedimiento nº 1087/2008 y acumulado seguido a instancia de D. Raimundo y D. Jose Miguel contra CREMONINI RAIL IBÉRICA S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 6987/2010
Id Cendoj: 28079140012010201211
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2155/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: María Lourdes Arastey Sahun
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Abril de dos mil diez.

Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. MARÍA LOURDES ARASTEY SAHUN.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 30 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 16 de diciembre de 2008, en el procedimiento nº 1447/08 seguido a instancia de D. Franco y D. Hernan contra AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 30 de abril de 2009, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 29 de junio de 2009 se formalizó por el Letrado D. Pedro Arriola Turpín en nombre y representación de D. Franco y D. Hernan, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 25 de febrero de 2010, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción, falta de fundamentación de la infracción legal, falta de aportación de sentencia de contraste y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- 1.- Los demandantes, pilotos de aviación, fueron despedidos disciplinariamente, en fecha 3.10.208, al considerar la empresa, en esencia, que se agredieron una noche posterior a un vuelo y anterior al siguiente, estando los dos con claros síntomas de embriaguez, lo que les impidió asumir su trabajo al día siguiente. Se remitió copia a la sección sindical del sindicato SEPLA al que ambos pertenecen. El día 21 de septiembre 2008 los dos actores llegaron a Vigo procedentes de Madrid, en un vuelo en servicio y se desplazaron a una marisquería, de donde salieron hacia la 1,20 horas de la madrugada. Seguidamente se dirigieron a un bar, donde efectuaron nuevas consumiciones y discutieron, ocasionando que los encargados del establecimiento invitasen a uno de los pilotos a marcharse al hotel, y retuvieron al otro para evitar nuevos enfrentamientos. En torno a las 2.30 llegan al hotel por separado, pero el que lo hace primero espera al que quedó rezagado y le increpa en las inmediaciones del hotel, donde ambos se agraden físicamente hasta quedar en el suelo uno encima del otro. En ese momento son separados por los policías municipales y un empleado del establecimiento. Preguntados por su condición de pilotos - y si tenían vuelo de inmediato, contestaron que no salían hasta las 12,00 horas, rehusando la asistencia sanitaria ofrecida. Ante estos hechos, la policía local se puso en contacto con la dirección de la compañía aérea informando de la pelea y del estado de embriaguez, contestando aquella que el vuelo era a las 7,30 con hora de recogida a las 6,00, y que al menos 8 horas es el tiempo mínimo que debía transcurrir después de haber ingerido bebidas alcohólicas. La empleadora recurrió a otros pilotos y finalmente el vuelo programado salió con 3 horas de retraso. La empresa convoca comisión de disciplina, conforme al art. 96 del Convenio, adjuntando un relato de hechos similar al de las cartas de despido, con la mención de que de confirmarse los hechos, podría aplicarse sanción de despido, que

finalmente, se reúne en sesiones sucesivas para cada actor el 1.10.08 con presencia de cuatro representantes de la empresa y otros cuatro del Sindicato SEPLA. El día 19 de noviembre 2007, el SEPLA notifica a la empresa que desde el 10 diciembre entre los cargos electos del sindicato figura uno de los demandantes, cesando al propio tiempo al otro trabajador.

El Juzgado de lo social declara el despido procedente, al entender probada la conducta imputada de entidad grave y culpable, suficiente como para justificar tal pronunciamiento. Por lo que se refiere a las agresiones recíprocas llevadas a cabo entre los dos recurrentes, resulta acreditado que en la madrugada del 21 de al 22 de septiembre de 2008 uno de los trabajadores llegó al hotel donde se alojaba y, cuando acudió al mismo establecimiento el otro demandante, la emprendió a golpes con él, enzarzándose ambos en una pelea que les hizo caer al suelo uno encima del otro, donde fueron separados por la policía local. Se estima que dicho proceder es encuadrable en la norma disciplinaria invocada por la empresa, habida cuenta que las agresiones tuvieron lugar en tiempo considerado de trabajo. También se estima que queda acreditada la embriaguez de los demandantes. Los recurrentes se encontraban en la madrugada del 21 de septiembre, sobre las 3,45 horas, bajo la influencia de bebidas alcohólicas en un periodo de tiempo en el que les estaba prohibida la ingesta de tales bebidas por razones de obligada seguridad de los pasajeros, de sus compañeros de trabajo y de los propios medios materiales con los que tenían que realizar el vuelo Gijón-Madrid, para el cual debían estar perfectamente preparados a las 6 de la mañana, a fin de poder despegar a las 7,30, como estaba previsto. Todo ello resulta, como indica la propia sentencia, del atestado policial, de las manifestaciones notariales de los dos empleados del hotel presentes, leídas en la comisión disciplinaria y de las declaraciones testificales aportadas por la empresa, así como la declaración del detective privado y su informe, ratificado y ampliado a presencia judicial, y contrastado en interrogatorio cruzado junto con uno de los testigos aportados por los actores.

La sentencia, ahora recurrida por los demandantes, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de abril de 2009 (rec 1062/09) confirma la anterior decisión. En primer lugar, rechaza la pretendida nulidad de actuaciones, por tres causas diferentes, relativas al valor probatorio de los atestados policiales, del informe de detectives y de la testifical documentada ante notario y no ratificada en juicio. También, rechaza la revisión del relato fáctico, y en cuanto al fondo del asunto, confirma la procedencia del despido. Previamente, y en relación con el expediente disciplinario y la comisión disciplinaria previstos en convenio, dilucida si los demandantes ostentan la condición de representantes de los trabajadores reconociéndola a uno de ellos. Seguidamente, estima que no hay indicios suficientes para entender que el despido sea consecuencia de una represalia empresarial a la huelga que, meses antes, hizo el sindicato al que pertenecen los actores, concluyendo que queda acreditada una conducta grave y culpable, merecedora de la máxima sanción.

2.- Disconformes se alzan los trabajadores en casación unificadora, articulando el recurso en cinco motivos, prácticamente coincidentes con las denuncias jurídicas efectuadas en suplicación. En concreto, en los motivos primero y segundo solicitan la nulidad de la sentencia recurrida y se devuelvan las actuaciones para que se dicte nueva sentencia, al efecto que no tengan la consideración de pruebas las combatidas en dichos motivos, y estimando el resto de los motivos se declare la nulidad del despido por vulneración del art 24 CE y de los arts 28.1 y 28.2 CE y subsidiariamente la improcedencia, con reconocimiento de las garantías del art 10.3 de la LO de Libertad sindical.

SEGUNDO.- 1.- El art 217 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) exige para la viabilidad del recurso unificador que concurra la contradicción entre la resolución impugnada y la que se invoca a estos efectos, y en orden a acreditar esta contradicción, se impone el cumplimiento de determinados requisitos formales.

Así, el art. 222 LPL exige que el escrito de interposición del recurso contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas [sentencias de 30 de diciembre de 2008 (R. 3291/07), 3 de marzo de 2009 (R. 4510/07), 4 de marzo de 2009 (R. 1535/07), y 9 de marzo de 2009 (R. 2123/07)].

Por otra parte, el RCUD ha de fundarse en infracción de Ley, y según también ha reiterado este Tribunal, el requisito de «fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada» es una consecuencia

lógica del carácter casacional del recurso de unificación de doctrina [puesto que sin ella se transferiría a la Sala, en contra del principio de equilibrio procesal, el «examen de oficio del ajuste de la sentencia a la legalidad» (STS 16-7-1993)], que deriva, además, de lo dispuesto en el art. 481 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil y que, por tanto, obliga a incluir una argumentación suficiente que permita conocer la base jurídica en la que se apoya la posición de la parte, no bastando normalmente con «indicar los preceptos que se consideren aplicables... al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a diferentes pronunciamientos judiciales». Por ello, «el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso» y el art. 481.1 impone que en el escrito de interposición del recurso «se expondrán con la necesaria extensión, sus fundamentos» (entre otras, sentencias de 19 y 25 de septiembre de 2008, R. 384/2007 y 1790/2007; 22 de octubre de 2008, R. 4312/2006; 16 de enero de 2009, R. 88/2008; y 17 de febrero de 2009, R. 2401/2007).

2.- En aplicación de la anterior doctrina, resulta que el presente recurso, y pese a lo manifestado en trámite de alegaciones, no cumple con el requisito de la relación precisa y circunstanciada de la contradicción, en ninguno de los motivos planteados. La recurrente, en los diferentes epígrafes dedicados a la «identidad de los hechos» expone la fundamentación jurídica y el núcleo de la cuestión, mostrando su disconformidad con el actuar de la Sala de suplicación, pero sin abordar un examen comparativo de la concurrencia de los elementos de identidad en los hechos de las sentencias comparadas, ni en el objeto y el fundamento de las pretensiones.

3.- Tampoco se cumple con el otro requisito, en el primer motivo en el que la fundamentación de la infracción legal denunciada - art 24 CE - es insuficiente, puesto que únicamente indica que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva, porque el despido se basa en el atestado policial que no fue ratificado en juicio. Asimismo, también concurre la defectuosa fundamentación de la infracción legal, en el motivo segundo, pues si bien se cita el art 24 CE, en cuanto a la tutela judicial efectiva, en relación con los arts 10 y 18 CE y el art 91.1 LPL, dichas denuncias son genéricas.

TERCERO.- 1.- Además, el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción, lo que requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

Tampoco este presupuesto se cumple en el supuesto analizado, tal y como se adelantaba en la precedente providencia, por las siguientes razones.

2.- En el primer motivo, plantean los recurrentes el valor probatorio de los informes o atestados policiales y la necesidad de ratificación cuando una de las partes les niega valor, alegando infracción del art 24 CE invocan para sustentar la contradicción la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 28 de marzo de 2000 (Rec 56/2000), confirmatoria de la declaración de procedencia del despido. La causa fue el accidente de tráfico del que derivaron diversas lesiones a personas y daños a otros vehículos, por razón de quedar implicada la furgoneta que conducía el actor, quedando acreditado que conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En el momento del accidente se levantó atestado policial en el que consta, la realización de dos pruebas de alcoholemia con un resultado de 0,60 y 0,59, respectivamente para cada una de ellas, reconociendo el actor que había bebido y en el que figura que presentaba una conducta irregular frente al agente que le atendió y respecto al sanitario que procuró efectuarle una asistencia sanitaria, señalándose que presentaba, además, signos de dificultad para permanecer erguido, problemas para asimilar lo que se le decía, necesidad de repetir las preguntas dirigidas al mismo con respuestas incoherentes, fuerte olor a alcohol en su aliento, y movimientos lentos.

Pues bien la contradicción, es inexistente entre las sentencias comparadas, en primer lugar porque no existen fallos contradictorios, al confirmar ambas la procedencia de los despidos. Ha de tenerse presente que el art. 217 LPL exige -para la viabilidad del RCU- -que exista contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra decisión judicial, lo que se verifica por el contraste entre la parte dispositiva de las sentencias que contienen pronunciamientos diversos respecto de hechos y pretensiones sustancialmente iguales, de forma que es la existencia de fallos contradictorios [«se hubiere llegado a pronunciamiento distintos», sostiene el art. 217 LPL] y no la diversidad de *ratio decidendi*, el presupuesto del recurso extraordinario de casación para la unidad de la doctrina (SSTS 06/11/08 -rcud 4255/07-; 12/11/08 -rcud 2470/07-; y 12/11/08 -rcud 4367/07-).

Por otra parte, ni los hechos ni las imputaciones efectuadas presentan la necesaria homogeneidad, más allá de la referencia al estado de embriaguez. A lo que se une que las denuncias formuladas y los debates suscitados son diferentes. En la sentencia de contraste, y por lo que ahora interesa, el trabajador recurrente, censura que en la especificación de las pruebas de las que se han deducido los hechos probados, se incluye entre estos elementos probatorios el atestado policial. La Sala de suplicación, mantiene el criterio de otorgar valor al atestado y a sus manifestaciones, al ser un elemento que introducen los dos litigantes, y por tanto ambos asumen el riesgo de su valoración, no siendo admisible la pretensión de si beneficia se admite, y en cuanto perjudica se rechaza. La sentencia impugnada, alcanza la misma solución, si bien a través de razonamiento diferente, admitiendo el valor probatorio del atestado policial, argumentando, en el fundamento de derecho 4º, que con apoyo en STCo 35/06, se trata de documento público de los previstos en el art. 317.5º LEC, y, por tanto, su fuerza probatoria es la establecida en el art. 319.1 del mismo texto legal, concluyendo que el atestado policial es plenamente admisible como medio de prueba, junto con las restantes practicadas en el marco del proceso.

3.- En el segundo motivo, pretenden los recurrentes la nulidad de las pruebas obtenidas ilícitamente vulnerando el derecho fundamental a la intimidad, alegando que el detective procedió con engaño para obtener la factura que presentan del restaurante y «de la que el juez considera que han consumido alcohol», solicitando la nulidad de la sentencia y se devuelvan las actuaciones al juzgador para que dicte sentencia sin que se tengan como validas dichas pruebas.

Tampoco en este motivo puede apreciarse la contradicción, al ser diferentes los supuestos de hecho y las denuncias efectuadas, dando respuesta cada una de las sentencias a las específicas cuestiones sometidas a su consideración. En efecto, la pretendida ilicitud de las pruebas obtenidas se apoyan en supuestos fácticos totalmente dispares. La sentencia invocada de contraste del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2007 (Rec 966/06), enjuicia el despido disciplinario de un Director General, por uso incorrecto del ordenador, en el que se encontraron archivos temporales sobre acceso a páginas pornográficas, y se debate las garantías aplicables al control por parte de la empresa de ese uso. El ordenador fue intervenido a raíz de haberse detectado la presencia de un virus informático ocasionado precisamente por la navegación en páginas poco segura de internet. La Sala IV, confirma la improcedencia del despido [aun cuando la sentencia recurrida alcanzó dicha conclusión con fundamento erróneo en el art.18 ET], al estimar que la empresa no podía recoger la información obrante en los archivos temporales del ordenador empleado por el actor en la forma en que lo hizo, esto es, sin haber advertido previamente sobre el uso y el control de dicho instrumento, y haber accedido a los archivos de referencia, lo que no era preciso para reparar el aparato y eliminar el virus. Se estima que se ha ido más allá de lo que la entrada regular para la reparación justificaba, lo que significa que se ha vulnerado el derecho a la intimidad del trabajador. Mientras que en el caso de autos se denuncia la concreta forma en que la prueba de detectives a cuyos servicios recurrió la empresa obtuvo determinada información sobre los recurrentes, y que estos cuestionan al considerar que utilizó la manifestación de que aquél era amigo de éstos, cosa que era incierta, solicitando que dicha prueba se considere nula por lesiva de los derechos a la intimidad, honor y propia imagen. En este caso, la sentencia impugnada no entra conocer del fondo de la cuestión suscitada, porque la alegada vulneración de los arts 10 y 18 CE no está justificada mediante el oportuno razonamiento, ni tampoco la lesión de los mismos. En definitiva, no pueden establecerse términos de comparación entre las resoluciones, en cuanto la sentencia impugnada no entra conocer del fondo de la cuestión suscitada, que en todo caso es diferente a la planteada en la de contraste.

4.- En el motivo tercero, denuncian los recurrentes que no se ha cumplido el procedimiento sancionador recogido en el convenio colectivo, y en particular no se tramitó el expediente sancionador regulado en la norma

convencional, habiendo actuado la empresa al margen y previamente al mismo, lo que acarrea la nulidad del despido. Alegan que la incoación de expediente disciplinario, no puede ser suplida, con la actuación de la Comisión Disciplinaria, ya que uno y otro mecanismo cumplen diferente función, en cuanto la constitución de la Comisión se lleva a cabo en todos los casos de actuación disciplinaria frente a cualquier piloto de la empresa, mientras la tramitación de expediente disciplinario es una garantía adicional y específica reservada para los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores, alegando infracción del art 96 del III Convenio Colectivo de Air Europa y del art 58.1 ET.

La sentencia invocada de contraste, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de junio de 2005 (Rec 1885/05) confirma la declaración de improcedencia del despido de una trabajadora, con categoría de auxiliar administrativo, al no quedar acreditadas los hechos imputados en la carta de despido, consistente en la indebida disposición de unas cantidades de dinero, y en la que se debate, por lo que ahora interesa, sobre la legalidad del reconocimiento de los hechos efectuado por la trabajadora en la reunión a que fue convocada, siendo evidente que estos hechos ninguna similitud presentan con los del caso de autos.

En la específica cuestión ahora planteada, no existe contradicción, al no ser los fallos contradictorias, puesto que las sentencias comparadas niegan la nulidad del despido por falta de tramitación del expediente sancionador contemplado en la concreta norma convencional y ello dejando al margen de que este tema no se suscita en la de contraste como motivo autónomo. Esta resolución únicamente se refiere a ello en el fundamento de derecho 3º, como argumento de refuerzo, al contestar a la petición de nulidad del despido, que fue rechazada, al no acreditarse que el cese tuviera como móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. Añadiendo que si bien la empleadora, obvió la aplicación del artículo 82.2 del Convenio Colectivo que le obliga a tramitar un expediente sancionador para esclarecer dentro del mismo la responsabilidad de la trabajadora, ello no supone la nulidad del despido. En todo caso, dada la actuación de la empresa de llevar obligada a la trabajadora una entrevista sorpresiva con la jefa de relaciones laborales y el jefe de seguridad, a la que fue citada sin informársele de cuál iba a ser el contenido de la reunión ni darle tiempo para prepararse o solicitar asistencia sindical o jurídica, y sometiénola, durante la misma, a una fuerte tensión que llegó a ocasionarle una gran ansiedad, firmando, en tan patológico estado los documentos de reconocimiento, llevan a entender que la voluntad de la trabajadora estaba viciada, declarando la falta de validez de los documentos firmados y la improcedencia del despido.

Por su parte, la sentencia impugnada, con carácter previo estima que únicamente reúne la condición de representante de los trabajadores, uno de los dos demandantes. Resulta que en la Comisión disciplinaria, convocada y ante la que declararon los demandantes, se establece un procedimiento específico en caso de despido; se trata de un órgano paritario en el que la mitad de sus miembros pertenece al sindicato al que está afiliado el trabajador; este delegó su representación en los miembros del SEPLA integrantes de esa Comisión. Circunstancias que hacen que se entienda que la actuación de esa Comisión tutela de forma amplia tanto la autonomía sindical del SEPLA como los intereses de sus delegados sindicales, cumpliendo, de esta forma, el trámite de garantía previsto en el artículo 68 a) del ET, sin que ningún requisito formal adicional pueda exigirse en el presente caso. Finalmente, concluye la sentencia que aun cuando se apreciara algún defecto procedimental en la tramitación del expediente disciplinario, la consecuencia no sería nunca la nulidad del despido.

5.- En el motivo cuarto, e íntimamente ligado con el anterior, se denuncia que la sentencia recurrida, anula lo pactado entre las partes, en cuanto no ha aplicado el concepto de reincidencia o reiteración de las faltas, exigido por el art 96 del III Convenio Colectivo, para poder sancionar con el despido.

En la sentencia impugnada, consta que la norma convencional establece un tratamiento específico para la imposición de sanciones por falta muy grave e indica, que en caso de despido la Comisión disciplinaria se regirá por determinados criterios y que, «en caso de no tomarse una decisión mayoritaria, la Compañía podrá imponer la sanción que considere, teniendo en cuenta que se establece un sistema de sanciones basado en el concepto de la reiteración de faltas muy graves. Se acuerda tres sanciones, ordenadas en función de esta reiteración». La Sala de suplicación, confirma la declaración de procedencia del despido en atención a las diversas conductas imputadas y calificadas de falta muy grave. Seguidamente efectúa una interpretación literal

del término «reiteración», señalando que no es casual que el convenio no emplee la palabra «reincidencia», lo que impide aplicar la jurisprudencia referida a ese concepto. Y la interpretación finalista, significa que los sujetos negociadores del convenio han querido descartar que se castigue con la máxima sanción una acción reprochable pero aislada, no que se reduzca la facultad disciplinaria empresarial hasta el punto de que una acción, por muy grave que sea, jamás pueda sancionarse por no ser reiterada, y menos cuando esa acción no es única, sino que concurre con otras también constitutivas de falta muy grave, que es lo que ocurre precisamente en este caso, concluyendo que la empresa estaba facultada para acordar la sanción que impuesta a los recurrentes y su despido resulta procedente.

Y nada semejante acontece en la sentencia de contraste del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de julio de 2006 (Rec 2087/2006), que confirma la declaración de improcedencia del despido, de un trabajador al que le imputaban proferir expresiones ofensivas contra el gerente, en presencia de otros compañeros. Dado que se trata de una ofensa aislada y única, se estima que no justifica la extinción del vínculo contractual.

La falta de homogeneidad en los hechos y en las imputaciones, así como la diferente normativa de aplicación, impide apreciar la contradicción. Se trata de la interpretación de dos convenios diferentes, y respecto del que es de aplicación en la sentencia de contraste, ni siquiera consta la redacción del mismo, ni la parte recurrente se ha preocupado de justificar la igualdad de textos. Igualdad, que parece deducirse que no existe, dado que el Convenio de Colectivo del sector de Limpieza de Edificios y locales de la CAMm habla de «reincidencia», y como señala la sentencia, no puede estimarse que concorra la misma, puesto que en el momento de la comisión de la segunda falta, las sanciones precedente no eran ni firmes ni definitivas, por lo que no existe infracción del art. 50 de la norma citada.

Es sabido que un elemento esencial para que concorra la igualdad de los supuestos decididos consiste, con carácter general, en que la norma aplicable sea la misma, pues si cada sentencia resuelve de acuerdo con una disposición distinta, es claro que no puede hablarse de identidad, ni de contradicción, ya que la eventual divergencia en los pronunciamientos puede tener su origen en las diferencias de regulación que derivan de la diversidad de las normas aplicables y así lo ha establecido la Sala, entre otras, en sus sentencias de 7 de mayo, 22 y 23 de junio de 2004. En definitiva, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos son diferentes, tal como tiene declarado esta Sala en sentencia de 19 de diciembre de 2008 (Rec. 881/2008), salvo supuestos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones, lo que, no sucede en el presente caso.

6.- En el quinto motivo, plantean la nulidad de los despidos, al entender que la decisión extintiva tiene su causa en la condición sindical o actividad sindical de los recurrentes, y en particular, por ser una represalia a una huelga anterior. Tampoco ahora concurre la invocada contradicción, puesto que los indicios aportados en uno y otro caso no presentan ninguna similitud, lo que puede justificar los diferentes fallos.

En la sentencia impugnada, la Sala estima que no hay indicio alguno de vulneración del derecho a la libertad sindical, que los recurrentes vinculaban a que «la compañía está pasando factura a SEPLA y a sus afiliados por la convocatoria de Huelga que SEPLA realizó esta pasada primavera». Se estima que no existe razonable posibilidad que permita vincular la sanción de los recurrentes con el ejercicio por parte de éstos de una actividad sindical, por los siguientes motivos: 1) Aunque los recurrentes pertenecen al mencionado sindicato, que efectivamente convocó la huelga, no se acredita que este hecho haya llevado a la empresa a decidir represaliar a todos los miembros de ese sindicato; 2) la huelga fue finalmente desconvocada; 3) no consta la imposición de sanción a ningún otro miembro de ese mismo sindicato. Finalmente la sentencia, y como obiter dicta, señala que aun cuando en plano hipotético concurren los indicios de lesión, los mismos quedan enervados por la actuación de la empresa, al quedar acreditado el despido «pluricausal».

Mientras que la sentencia invocada de contraste, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 18 de enero de 2005 (Rec 2719/2004), [y no del TSJ de Madrid como por error se hizo constar en la providencia de 25/2/10] confirma la nulidad del despido de los actores, al considerar que la decisión extintiva disciplinaria, obedecen al propósito de evitar que los demandantes fuesen elegidos representantes de sus compañeros de trabajo en el proceso electoral. Se aportan como indicios los siguientes hechos: A) el conocimiento empresarial del propósito de presentarse como candidatos en el proceso electoral en curso, que tenían los despedidos. B) conociendo la empresa que dichos trabajadores tenían intención de presentarse como candidatos, proceda a

su despido imputándoles unos cargos que, son absolutamente iguales en ambos casos, resultando que se trata de ocho imputaciones, «lo cual constituye un número suficiente como para hacer absolutamente imposible que ambos hayan efectuado siempre la misma conducta» a juicio de la Sala. C) están redactados siempre en términos genéricos, pero expresivos de unas acciones que se imputan como continuadas a lo largo de un tiempo prolongado, y que nunca hasta entonces fueron objeto de sanción.

7.- En sus alegaciones, la recurrente insiste en su pretensión y en la contradicción alegadas, intentando relativizar las diferencias expuestas y que justifican, a juicio de esta Sala, la falta del presupuesto legal de contradicción, siendo de resaltar que ningún elemento novedoso añaden respecto al contenido del escrito de formalización.

CUARTO.- Por último y a modo de «motivo sexto», la parte recurrente insiste en que lo planteado - infracción de derechos fundamentales al haber dado valor a unas pruebas que no deberían tenerlo, se vulnera el art 24 y 18 CE - por lo que entiende que no es necesario sentencia de contraste, invocando en apoyo de su tesis la STS de 3.1.2006 (Rec 5414/04). Se denuncia vulneración del art 24.2 CE en cuanto la sentencia recurrida ha dado validez a pruebas obtenidas ilícitamente.

Tal motivo, debe rechazarse pues es doctrina unificada de esta Sala -entre otras, sentencias de 13 de octubre de 2006 (R. 3404/2005), 11 de diciembre de 2007 (R. 1434/2006) y 7 de octubre de 2008 (R. 538/2007)- que, conforme a lo previsto en el art. 219.2 de la LPL, el escrito de preparación del recurso, ha de exponer el núcleo básico de la contradicción y citar la sentencia o sentencias con las que tal contradicción se produce.

Por otra parte, esta Sala también tiene declarado que no es preciso examinar si entre las dos resoluciones concurre o no la contradicción requerida como condición de procedibilidad por el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), cuando se suscita una cuestión de orden público, cual es la relativa a la competencia funcional, (STS 20/4/2009, rec 2654/2008; 20/10/2009, rec 3372/08) y la competencia jurisdiccional, y ésta con la matización -pese a presentarse, en principio, como un «prius» ineludible respecto de cualquier tipo de actuación judicial- de que sólo en los casos de incompetencia jurisdiccional manifiesta cabe anteponer el problema de la competencia jurisdiccional al problema básico esencial e ineludible para adentrarse en el conocimiento del recurso de casación para unificación de doctrina, cual es, el de la concurrencia de la contradicción entre las sentencias comparadas en el mismo (STS 23/01/04 -rec. 3661/03, que cita las de 28/02/92 -rec. 1194/91-, 25/03/93 -rec. 1033/92-, 08/02/96 -rec. 891/95-, 26/09/01 -rec. 3337/00- y 29/06/01 -rec. 7082 -). El presente recurso no tiene encaje en dichas excepciones.

QUINTO.- Por lo razonado, y, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin imposición de costas a los trabajadores recurrentes.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Pedro Arriola Turpín, en nombre y representación de D. Franco y D. Hernan contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 30 de abril de 2009, en el recurso de suplicación número 1062/09, interpuesto por D. Franco y D. Hernan, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 30 de los de Madrid de fecha 16 de diciembre de 2008, en el procedimiento nº 1447/08 seguido a instancia de D. Franco y D. Hernan contra AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 16 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-44984
Non publié au bulletin
Cassation partiellement sans renvoi
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide soignante depuis 23 ans dans un établissement accueillant des personnes handicapées, a été licenciée pour avoir pris un service de nuit en état d'ébriété;

Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le fait de se présenter à son travail en état d'ébriété prononcé constitue une faute grave car l'établissement ne pouvait, sauf à exposer ses résidents à un risque majeur, conserver l'intéressée dans cet état à son service, même pendant la durée du préavis;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute isolée commise par une salariée ayant 23 ans d'ancienneté n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute de la salariée;

Dit que la faute grave n'est pas constituée;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les conséquences de la rupture du contrat de travail;

Condamne la Fondation de l'asile évangélique de Nice Mas Palmerose aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation de l'asile évangélique de Nice-Mas Palmerose à payer à Mme X... la somme de 2.500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre;

AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture est ainsi libellée: «(...) malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement

sont les suivants: «Prise de fonction le 26 août 2006 à 20h45 en état d'ébriété pour assurer votre service d'aide-soignante de nuit. Etat d'ébriété confirmé par l'équipe de jour, par l'équipe de nuit, par le cadre d'astreinte et validé par l'éthylotest pratiqué avec votre consentement. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'établissement (...); que contrairement à ce qu'a énoncé le Conseil de Prud'hommes, un règlement intérieur peut autoriser le contrôle de l'alcoolémie d'un salarié, dès lors qu'il peut en contester les résultats; que cependant, en l'occurrence, le règlement intérieur ne prévoit pas un moyen spécifique de contrôle de l'alcoolémie, sans d'ailleurs en prohiber aucun; que l'article 23 (ALCOOL-DROGUE) se borne à stipuler: «Constituent des fautes graves interdisant l'accès aux services, le fait de:- se présenter en état d'ivresse ou d'imprégnation alcoolique,- faire usage de stupéfiant»; que cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'article L. 230-2 du Code du travail qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et des personnes de leur entourage sur les lieux et dans le temps du travail; qu'en l'espèce, l'état d'alcoolémie de Madame Michèle X..., d'ailleurs reconnu par elle, est établi par: 1 / le rapport de l'équipe de jour en date du 8 août 2006 (pièce n° 81) «Samedi 26 août 2006 vers 20h45, l'équipe de nuit arrive. Nous constatons que Madame X... n'est pas tout à fait dans son état naturel. Elle tient des propos véhéments et titube sur place. Il nous semble nécessaire de contacter le cadre de permanence pour lui signaler nos craintes vis-à-vis des résidents. Madame Valérie Y..., cadre de permanence ce soir-là, nous affirme qu'elle arrive de suite (...); 2 / l'attestation de Madame Z...: «Le 26 août 2006, lorsque Madame X... Michèle a pris son service à 20h45, elle titubait et sentait l'alcool»; 3 / l'attestation de Monsieur A...: «A l'arrivée de Madame Michèle X..., celle-ci titube dans le couloir. Je lui demande si tout va bien. Elle me répond par des propos incohérents et diffamatoires envers le personnel, les résidents et la direction. Son haleine me paraissait sentir l'alcool; je téléphone à Madame HUBER B..., cadre d'astreinte ce jour-là pour lui relater les faits (...); 4 / le rapport de Madame Y... (pièce n° 7): «(...) Je me suis rendue sur place pour constater les faits. A mon arrivée à 21 heures 30, Madame Michèle X... rangeait le chariot à médicaments à l'infirmerie. A ce moment-là, j'ai observé qu'elle présentait des yeux globuleux et une forte odeur d'alcool se dégageait (...); qu'il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus, et sans qu'il soit besoin de faire état des résultats de l'éthylotest, que Madame Michèle X... a pris ses fonctions alors qu'elle se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique prononcé; que ce n'est qu'à titre surabondant que la Cour relève que le résultat de l'éthylotest s'est révélé positif selon Mesdames Y... et G...; que le fait pour Madame Michèle X... de se présenter à son travail dans un état d'ébriété prononcé constitue une faute grave car la FONDATION DE L'ASILE EVANGELIQUE de NICE ne pouvait, sauf à exposer ses résidents handicapés à un risque majeur, conserver à son service, même pendant la durée limitée du préavis, une aide-soignante privée d'une partie de ses moyens par l'absorption d'alcool; que Madame Michèle X... ne peut exciper du fait qu'elle n'a pas été renvoyée sur le champ à son domicile, car cela aurait mis sa personne en danger; qu'il était plus avisé de la conserver la nuit dans l'établissement, tout en la confinant à des tâches subalternes, afin de lui permettre de retrouver son entière lucidité; qu'en conséquence, Madame Michèle X... doit être déboutée de toutes des demandes d'indemnités de rupture;

- 1º/ ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en concluant, en l'espèce, que le fait pour Mme X... de s'être présentée sur son lieu de travail dans un état d'ébriété prononcé constituait une telle faute alors qu'elle avait auparavant relevé que l'employeur ne l'avait pas renvoyée à son domicile mais qu'il l'avait affectée à des tâches dites «subalternes», ce dont il résultait que son maintien dans l'entreprise n'était nullement impossible, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1234-1 ancien article L. 122-6 du Code du travail;
- 2º/ ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE dès lors qu'elle constatait que la salariée n'avait pas été renvoyée à son domicile, qu'elle avait été conservée dans l'établissement et qu'elle y avait effectué la distribution des médicaments aux résidents, constatations dont il ressortait que, pour son employeur, l'état d'ébriété reprochée à Mme X... n'était pas en réalité d'une gravité telle qu'elle l'aurait empêchée d'effectuer son travail et qu'elle ne représentait donc pas un danger pour les résidents de l'établissement, de sorte que la qualification de faute grave ne pouvait qu'être écartée, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1234-1 ancien article L. 122-6 du Code du travail;
- 3º/ ET ALORS, ENFIN, QU'en concluant à l'existence d'une faute grave commise par Mme X..., du seul fait qu'elle se serait trouvée en état d'ébriété sur son lieu de travail, le 26 août 2006, alors que le comportement de la salariée avait toujours été exemplaire, qu'elle n'avait reçu, en 23 ans de service auprès de la FONDATION DE L'ASILE EVANGELIQUE DE NICE, qu'une seule observation et que la charge de travail de nuit était particulièrement importante puisqu'elle impliquait la surveillance de 52 lits, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 1234-1 ancien article L. 122-6 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 15 septembre 2008.

Roj: ATS 9129/2009
Id Cendoj: 28079140012009201717
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3954/2008
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: José Luis Gilolmo López
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Mayo de dos mil nueve.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ LUIS GILOLMO LÓPEZ.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Ferrol se dictó sentencia en fecha 26 de marzo de 2008, en el procedimiento nº 742/07 seguido a instancia de D. Everardo contra PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 18 de septiembre de 2008, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 26 de noviembre de 2008 se formalizó por la Procuradora D^a Carmen García Martín en nombre y representación de D. Everardo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 27 de marzo de 2009 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004).

Esta exigencia no se cumple en el presente recurso. En efecto, el Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol conoció de la demanda del actor, hoy recurrente en casación para la unificación de doctrina, en la que postulaba que el despido se calificara como improcedente, frente a la mercantil PROSEGUR CÍA. SEGURIDAD SA, para la que prestaba servicios desempeñando el puesto de vigilante de seguridad. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, resolvió el recurso interpuesto por la demandada en sentencia de 18 de septiembre de 2008, en la que, estimó el mismo, revocando el fallo de instancia que calificó el despido del

demandante como improcedente. En particular y en lo que ahora importa, el órgano jurisdiccional de la suplicación, entró a decidir, tras el examen de los hechos imputados en la carta de despido disciplinario, sobre la calificación de los mismos, concluyendo que dos de las conductas imputadas —el estado de embriaguez vistiendo el uniforme y portando el arma por un lado, y por otro, los malos tratos de palabra y obra a un superior— entrañan la suficiente gravedad para justificar la decisión del empleador de dar por extinguida la relación laboral que unía a las partes contendientes.

Disconforme el demandante con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado, se alza ahora en casación para la unificación de doctrina proponiendo dos materias o puntos de contradicción, en relación con las dos conductas que han cobijado el éxito del recurso deducido por la empleadora. Por lo que atañe a la embriaguez vistiendo uniforme, señala como sentencia de contraste a los efectos de verificar el juicio de contraste la dictada por la Sala homónima de Tenerife de 28 de abril de 2005 (rec. 194/05), en la que se contempla asimismo el despido disciplinario de un vigilante de seguridad con ocasión de personarse en su puesto de trabajo en un evidente estado de embriaguez. La Sala confirma el fallo de instancia estimatorio de la demanda deducida en autos y atendiendo a las concretas circunstancias del caso, rechaza que concurra justa causa para justificar el despido.

Ciertamente las sentencias sometidas a comparación versan sobre dos despidos disciplinarios basados en conductas tipificadas en el art. 54.2. f) ET. Pero, más allá de la reiteradamente afirmada dificultad de unificar criterios en relación con la valoración de este tipo de conductas, concurren algunas diferencias fácticas entre ambos supuestos, que impiden la contradicción entre las sentencias comparadas, toda vez que la que realmente se cuestiona en el actual recurso es la incorrecta aplicación de los principios de proporcionalidad, gradualidad e individualización a la vista de las circunstancias concurrentes, que inspiran la regulación de la materia del despido disciplinario, con lo que en realidad se pretende que esta Sala valore de nuevo los hechos, calificando la conducta del trabajador y el consiguiente despido de que fue objeto. Al margen de que no es esa la finalidad del presente recurso extraordinario, tampoco concurre el presupuesto de la contradicción que permitiría a esta Sala pronunciarse sobre cuál es la doctrina correcta, ya que en cada caso se han enjuiciado hechos y circunstancias que no guardan la necesaria homogeneidad. Así, y en síntesis, consta en la sentencia de contraste que, particularmente, se valora la negativa repercusión del estado de embriaguez en el trabajo, de tal suerte que parte de la afirmación de que el actor nunca se llegó a incorporar al trabajo al ser interceptado por el Jefe de Equipo y responsable del servicio. En el caso de la sentencia recurrida, el actor fue hallado en estado de embriaguez en su puesto de trabajo portando el arma, siendo encontrado por el encargado muy nervioso semiacostado y todo rozado, debiendo ser trasladado al centro de salud y quedando el servicio desatendido. Por lo demás, en cada una de las sentencias comparadas se ha efectuado un análisis ponderado de la concreta situación que enjuicia, lo que conduce a pronunciamientos distintos.

SEGUNDO.- Igual falta de contradicción se produce en lo que atañe al siguiente motivo, mediante el que se combate la existencia de malos tratos de palabra y obra a un superior, señalando como sentencia a los efectos de verificar el juicio de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 25 de mayo de 2006 (rec. 191/06). En el caso, la Sala también confirma la declarada improcedencia del despido del actor que venía prestando servicios para la demandada con la categoría profesional de expendedorvendedor. El demandante sufrió cuando trabajaba un atraco durante el que fue agredido resultando con múltiples contusiones, lo cual, determinó que fuera dado de baja para el trabajo, precisando tratamiento médico, de ahí que ante la llamada del encargado en relación con un error en los partes de baja, no controló su leguaje ni por teléfono ni en el centro de trabajo. Estas concretas circunstancias personales y subjetivas, modulan la culpabilidad necesaria para la imposición de la sanción por despido.

Como pone de manifiesto la sentencia más reciente de esta Sala de 8 de junio de 2006 (rec. 5165/2004), «esa exigencia legal de igualdad sustancial en los hechos restringe acusadamente la viabilidad del recurso de unificación de doctrina en aquellos tipos de controversias como los despidos [SSTS 18/05/92 -rec. 1492/91 -; 15/01/97 -rec. 3827/95 -; 29/01/97 -rec. 3461/95 -], en que la decisión judicial se sustenta sobre una valoración individualizada de circunstancias de hecho, dada la dificultad que supone encontrar términos homogéneos de comparación; y esa dificultad persiste, como es lógico, en la extinción de los contratos por causas objetivas [STS 06/04/00 -rec. 1270/99 -; AATS 08/09/03 -rec. 3374/02 - y 12/06/03 -rec. 3248/02 -] (SSTS 07/10/04 -rec. 4523/03 -; y 28/10/04 -rec. 5529/03 -). Más concretamente, en relación con los despidos disciplinarios, la Sala ha declarado que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el art. 54 ET no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en estos casos

la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico, pues «para llegar a la conclusión de que un incumplimiento contractual es «grave y culpable» se deben, como regla, valorar todas las circunstancias concurrentes no sólo en lo afectante al hecho cometido, sino también en lo relativo a la conducta y persona del trabajador y al entorno empresarial en que acontece» (así, STS 13/11/00 rec. 4391/99)».

Es cierto que las conductas que motivan en cada caso el despido, aisladamente consideradas, presentan una enorme similitud, sin embargo, las circunstancias que las rodean no han sido las mismas, y así, en el supuesto que hoy nos ocupa, el actor se persona en el centro de trabajo y en el entendiendo de que el encargado no había llevado a cabo la gestión que le había encomendado, procede a empujarle y llamarle «hijo de puta», así como que iba a matar a los diez compañeros que no habían querido cambiarle el turno; por el contrario en la sentencia de contraste pese a existir cierta similitud en la conducta imputada, como hemos dicho, es lo cierto que a la hora de enjuiciar y valorar tal proceder, la sentencia la falta plena de responsabilidad y culpabilidad del actor, al hallarse de baja con un cuadro de inestabilidad depresiva derivada de un atraco que sufrió mientras trabajaba, lo que ha justificado la distinta calificación del hecho atendiendo al concreto alcance de la normativa de aplicación. Por otro lado, esta Sala ha destacado que en las cuestiones situadas en el área disciplinaria o sancionadora de esta rama del ordenamiento jurídico, han de ponderarse todos sus aspectos, objetivos y subjetivos, pues los más elementales principios de justicia exigen una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción, y en este orden de cosas, no puede operarse objetiva y automáticamente, sino que tales elementos han de enlazarse para buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace, a través de un análisis específico e individualizado de cada caso concreto, con valor predominante del factor humano, pues en definitiva se juzga sobre la conducta observada por el trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, o con ocasión de ellas. De ahí, y en virtud de todo ello, que no pueda mantenerse la identidad sustancial de los supuestos comparados.

TERCERO.- Por lo razonado, no habiendo el recurrente formulado alegaciones en el trámite oportuno, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin que proceda la imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora D^a Carmen García Martín, en nombre y representación de D. Everardo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 18 de septiembre de 2008, en el recurso de suplicación número 3239/08, interpuesto por PROSEGUR, S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Ferrol de fecha 26 de marzo de 2008, en el procedimiento nº 742/07 seguido a instancia de D. Everardo contra PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 7823/2009
Id Cendoj: 28079140012009201455
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3606/2008
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Benigno Varela Autrán
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Abril de dos mil nueve.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. BENIGNO VARELA AUTRÁN.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Badajoz se dictó sentencia en fecha 12 de mayo de 2008, en el procedimiento nº 883/07 seguido a instancia de D. Adolfo contra SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.L., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en fecha 22 de septiembre de 2008, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 22 de septiembre de 2008 se formalizó por el Letrado D. Rodrigo Bravo Bravo en nombre y representación de D. Adolfo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 5 de marzo de 2009 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004).

Esta exigencia no se cumple en el presente recurso. En efecto, la sentencia que se recurre, desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador demandante, confirmando la declarada procedencia del despido de que fue objeto el actor como consecuencia de presentarse en su puesto de trabajo en estado de embriaguez. El actor viene prestando servicios para la demandada, SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX SL,

como vigilante de seguridad. El día 29 de octubre de 2007 se personó en centro de salud donde presta servicios en estado de embriaguez, falta de aseo y descuido en la uniformidad. Personado el jefe de servicio, encontró al demandante con claros síntomas de embriaguez, consiguiendo que abandonara su puesto de trabajo. Tales hechos fueron presenciados por el personal del centro y ciudadanos que acudían al mismo. El 8 de noviembre siguiente se le notifica el despido. Como hemos, señalado, la Sala de suplicación comparte el parecer del Juez a quo y tras una elaborada tarea argumental concluye afirmando que la conducta sancionada a tenor de la norma convencional — Convenio Colectivo Estatal de las empresas de Seguridad— justifica el despido, sin que conste que en dicho momento el trabajadora tuviera sus facultades mermadas que no pudiera discernir sobre la trascendencia de su conducta.

Disconforme el trabajador con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala homónima del País Vasco de 26 de octubre de 2004 (rec. 1990/04), en la que también se decide a propósito de un despido disciplinario con base en dicha causa, llegando sin embargo a un pronunciamiento favorable al trabajador. En el caso, el actor, vigilante de seguridad, estaba de servicio entre las 22 horas del día 9 de febrero de 2004 y las 6 horas del día siguiente, teniendo asignada la labor de cierre y apertura de las estaciones de Euskotren en el tramo comprendido entre Oiartzun y Rekalde, para lo que se desplazaba en un vehículo propiedad de la empresa. Tras proceder al cierre de las estaciones asignadas, sin que se produjeran incidencias se personó a las 2 horas de la madrugada, en evidente estado de embriaguez, en las cocheras de la empresa sitas en la localidad de Elgoibar, donde mantuvo una conversación con la vigilante de servicio, tras la que abandonó dicho centro, y efectuó la apertura de las estaciones encomendadas, también sin incidencias, dejando las llaves del vehículo en el puesto de mando de la empresa al terminar su jornada de trabajo. La Sala descarta que el proceder del actor haya tenido una repercusión negativa en la actividad profesional que exige el art. 54.2 f) ET para que pueda cobijar el despido.

Ciertamente las sentencias sometidas a comparación versan sobre dos despidos disciplinarios basados en conductas tipificadas en el art. 54.2. f) ET. Pero, más allá de la reiteradamente afirmada dificultad de unificar criterios en relación con la valoración de este tipo conductas, concurren algunas diferencias fácticas entre ambos supuestos, que impiden la contradicción entre las sentencias comparadas, toda vez que lo que realmente se cuestiona en el actual recurso es la incorrecta aplicación de los principios de proporcionalidad, gradualidad e individualización a la vista de las circunstancias concurrentes, que inspiran la regulación de la materia del despido disciplinario, con lo que en realidad se pretende que esta Sala valore de nuevo los hechos, calificando la conducta del trabajador y el consiguiente despido de que fue objeto. Al margen de que no es esa la finalidad del presente recurso extraordinario, tampoco concurre el presupuesto de la contradicción que permitiría a esta Sala pronunciarse sobre cuál es la doctrina correcta, ya que en cada caso se han enjuiciado hechos y circunstancias que no guardan la necesaria homogeneidad. Así, y en síntesis, consta en la sentencia recurrida que, particularmente, se valora la negativa repercusión del estado de embriaguez en el trabajo, de tal suerte que tuvo que acudir al centro de trabajo el jefe de servicio de la empresa, obligando al demandante a que abandonara su puesto de trabajo, hechos que en todo caso fueron presenciados por el personal del centro sanitario y los ciudadanos que acudían al mismo. En el caso de la sentencia de contraste, pese al estado de embriaguez, el trabajador prestó sus servicios completos y sin incidencia alguna. Por lo demás, en cada una de las sentencias comparadas se ha efectuado un análisis ponderado de la concreta situación que enjuicia, lo que conduce a pronunciamientos distintos.

Resulta casi innecesario, por lo dicho, recordar que es doctrina constante de esta Sala, sintetizada en la sentencia de 24 de mayo de 2005 (RCUD 1728/2004), que el recurso de casación para la unificación de doctrina constituye un «instrumento (que) no puede operar a partir de lo que la doctrina denomina juicios empíricos de valoración de la conducta humana, porque en estos juicios los elementos circunstanciales de ponderación adquieren la máxima significación en el orden decisorio y, por ello, se resisten a una tarea de unificación doctrinal, que sería, por definición, una labor destinada al fracaso, al intentar convertir en general y uniforme lo que, por su propia naturaleza, es particular y variable, pues en tales decisiones opera siempre un elemento de discrecionalidad que no es susceptible de unificación».

SEGUNDO.- Por lo razonado, no habiendo el recurrente formulado alegaciones en el trámite oportuno, y de conformidad con lo que el Ministerio Fiscal ha informado, procede declarar la inadmisión del recurso. De acuerdo con el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin que proceda la imposición de costas.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Rodrigo Bravo Bravo, en nombre y representación de D. Adolfo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 22 de septiembre de 2008, en el recurso de suplicación número 304/08, interpuesto por D. Adolfo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Badajoz de fecha 12 de mayo de 2008, en el procedimiento nº 883/07 seguido a instancia de D. Adolfo contra SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 31 mars 2009

N° de pourvoi: 08-40159

Non publié au bulletin

Rejet

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Luc-Thaler, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LES MOYENS RÉUNIS:

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2007), que M. X... engagé le 5 décembre 1977 par la Compagnie générale de géophysique en qualité de prospecteur technicien a été licencié pour faute grave le 17 décembre 2002;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen:

- 1°/ qu'un fait commis dans le cadre de la vie privée ne peut justifier une mesure de licenciement; qu'à ce titre, seul est sanctionnable par l'employeur l'éthylisme sur les lieux et le temps de travail; qu'il avait fait valoir que «les faits qui ont entraîné son placement en garde à vue ne se sont pas produits sur le lieu de travail, qu'ils se sont produits dans sa vie privée et ne peuvent donc servir de base au prononcé d'une sanction» et ajouté, s'agissant du second grief énoncé dans la lettre de licenciement, «qu'à supposer même qu'il ait consommé de l'alcool les 11 et 12 novembre 2002, il l'aurait fait dans sa vie privée. Cette circonstance ne peut autoriser le prononcé par l'employeur d'une sanction disciplinaire...»; qu'en retenant, à sa charge, la consommation dans l'avion qui devait l'amener à Dubaï, d'un apéritif, d'une bière et d'un quart de vin et le fait qu'il ait reconnu avoir consommé de l'alcool à Dubaï, mais «modérément, un seul soir et en dehors de l'entreprise» sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie, tiré de ce que ces faits ne s'étaient pas produits sur les lieux et au temps du travail mais relevaient de la vie privée du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
- 2°/ que saisie d'un moyen en ce sens, les juges du fond qui ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement, doivent rechercher si le licenciement ne repose pas sur un autre motif que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement; que le salarié avait fait valoir que la raison véritable de son licenciement résidait dans la volonté de l'employeur d'opérer une réduction des effectifs de la société, ce qui ressortait notamment du fait qu'en 1999, 380 salariés avaient été licenciés et qu'en 2003 de nombreux salariés employés en qualité de prospecteur, catégorie à laquelle il appartenait, avaient été licenciés, et indiquait que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et tenant à l'alcoolisme n'était qu'un prétexte pour tenter de justifier la rupture du contrat de travail; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le véritable motif du licenciement n'était pas la volonté de l'employeur de procéder à une réduction des effectifs de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail;
- 3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée si le fait que le salarié, postérieurement à sa libération le 5 novembre 2002 avait continué à être employé au sein de la société sur la base de Dubaï jusqu'au mois de décembre, soit pendant une période d'un mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués, n'excluait pas la qualification de faute grave au soutien du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail;

4º/ subsidiairement, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en retenant que le fait pour un salarié comptant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'avoir, lors d'un vol à destination de son lieu d'affectation à l'étranger, «consommé plusieurs verres d'alcool et dit à un passager originaire des Emirats qu'il ressemblait à Ben Laden», et d'avoir reconnu avoir consommé de l'alcool à l'étranger «mais modérément», «un seul soir et en dehors de l'entreprise» constituait une faute grave, la cour d'appel qui n'a même pas relevé le fait que le comportement du salarié aurait occasionné un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, n'a pas caractérisé la faute grave et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail;

Mais attendu d'abord que le licenciement étant prononcé pour faute, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le comportement du salarié avait occasionné un trouble objectif au sein de l'entreprise;

Attendu ensuite que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été emprisonné à raison de faits commis lors du vol qui devait le conduire sur son lieu d'affectation professionnelle, et que libéré après intervention de l'ambassade et du responsable de l'agence locale de l'entreprise, il s'était peu après présenté devant ce dernier en état d'ébriété; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces faits, poursuivis dans un délai restreint, se rattachaient à sa vie professionnelle, elle a pu décider écartant par la même le moyen pris d'une autre cause de licenciement, qu'ils justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de l'intéressé, déjà sanctionné en raison de son alcoolisme; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION:

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et rejeté toutes ses demandes;

AUX MOTIFS QU'il résulte des documents versés aux débats que Monsieur X... avait déjà fait l'objet le 25 juin 2002 d'une mise à pied de trois jours, après s'être présenté sur son lieu de travail en état d'ébriété; qu'il n'avait alors pas été licencié, s'étant engagé à suivre une cure de désintoxication au sein d'un établissement spécialisé; qu'il avait, cependant, été informé que si de tels agissements venaient à se renouveler, son départ de la société serait alors envisagé; que l'employeur affirme que le 1er novembre 2002, Monsieur X... a manqué l'avion qui devait l'amener au Yémen, son nouveau lieu d'affectation; qu'il a alors pris un avion pour Dubaï; que lors du vol, il a dit à un passager, originaire des Emirats, qu'il ressemblait à «Ben Laden»; que la plainte de ce dernier, ainsi que l'état dans lequel il se trouvait après avoir consommé plusieurs verres d'alcool a abouti à son emprisonnement et au retrait de son passeport, dès sa descente d'avion; que l'employeur verse aux débats une «lettre de suivi des opérations», ainsi qu'un courrier en date du 26 décembre 2002, rédigé par Monsieur X...; que celui-ci reconnaît avoir consommé dans l'avion, un apéritif, une bière et un quart de vin, mais affirme que sa consommation n'était pas suffisante pour être dans un état d'ébriété avancée; qu'il reconnaît également avoir dit à un homme avec une grande barbe «qu'il ressemblait à Ben Laden»; que celui-ci ayant l'air fâché, il s'était excusé, mais que le passager avait tout de même porté plainte dans l'aéroport ce qui avait occasionné son incarcération; que l'employeur indique que Monsieur X... a été libéré grâce à l'intervention de l'ambassade de France et du responsable local de la Compagnie Générale de Géophysique; qu'il s'est de nouveau présenté à ce dernier en état d'ébriété, durant son séjour à Dubaï; que Monsieur X... reconnaît avoir consommé de

l'alcool à Dubaï, mais «modérément», un seul soir et en dehors de l'entreprise; que l'employeur a envoyé un autre salarié au Yémen; qu'il a rapatrié Monsieur X... et a procédé à son licenciement; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement du salarié a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et était constitutif d'une faute grave; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré; que Monsieur X... a été licencié pour faute grave; qu'il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice financier; qu'il doit, également, être débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail;

1°/ ALORS D'UNE PART QU'un fait commis dans le cadre de la vie privée ne peut justifier une mesure de licenciement; qu'à ce titre, seul est sanctionnable par l'employeur l'éthylisme sur les lieux et au temps du travail; que l'exposant avait pertinemment fait valoir que «les faits qui ont entraîné le placement en garde à vue de Monsieur X... ne se sont pas produits sur le lieu de travail. Ils se sont produits dans sa vie privée. Ils ne peuvent donc servir de base au prononcé d'une sanction» (conclusions d'appel p. 4, § 5) ajoutant encore, s'agissant du second grief contenu dans la lettre de licenciement que «à supposer même que le concluant ait consommé de l'alcool les 11 et 12 novembre 2002, il l'aurait fait dans sa vie privée. Cette circonstance ne peut autoriser le prononcé par l'employeur d'une sanction disciplinaire...» (conclusions d'appel p 5); qu'en retenant, à la charge de l'exposant, la consommation dans l'avion qui devait l'amener à Dubaï, d'un apéritif, d'une bière et d'un quart de vin, et le fait qu'il ait reconnu avoir consommé de l'alcool à Dubaï mais «modérément» «un seul soir et en dehors de l'entreprise», sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie, tiré de ce que ces faits ne s'étaient pas produits sur les lieux et au temps du travail mais relevaient de la vie privée du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE, saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond qui ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement, doivent rechercher si le licenciement ne repose pas sur un autre motif que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement; que l'exposant avait fait valoir que la raison véritable de son licenciement résidait dans la volonté de son employeur d'opérer une réduction des effectifs de la société, ce qui ressortait notamment du fait qu'en 1999, 380 salariés avaient été licenciés, et qu'en 2003 de nombreux salariés employés en qualité de prospecteur, catégorie à laquelle il appartenait, avaient été licenciés, et indiquait que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et tenant à l'alcoolisme n'était qu'un prétexte pour tenter de justifier la rupture du contrat de travail (conclusions d'appel p 5); qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le véritable motif du licenciement de l'exposant n'était pas la volonté de l'employeur de procéder à une réduction des effectifs de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.122-14-3, L.122-6 et L.122-9 du Code du travail;

3°/ ALORS DE TROISIÈME PART QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée (conclusions d'appel p. 4, § 2 et ss. et 5 § 5 et ss.), si le fait que l'exposant, postérieurement à sa libération le 5 novembre 2002, avait continué à être employé au sein de la société sur la base de Dubaï jusqu'au mois de décembre, soit pendant une période d'un mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués, n'excluait pas la qualification de faute grave au soutien du licenciement la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidaire)

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et rejeté toutes ses demandes;

AUX MOTIFS QU'il résulte des documents versés aux débats que Monsieur X... avait déjà fait l'objet le 25 juin 2002 d'une mise à pied de trois jours, après s'être présenté sur son lieu de travail en état d'ébriété; qu'il n'avait alors pas été licencié, s'étant engagé à suivre une cure de désintoxication au sein d'un établissement spécialisé; qu'il avait, cependant, été informé que si de tels agissements venaient à se renouveler, son départ de la société serait alors envisagé; que l'employeur affirme que le 1er novembre 2002, Monsieur X... a manqué l'avion qui devait l'amener au Yémen, son nouveau lieu d'affectation; qu'il a alors pris un avion pour Dubaï; que lors du

vol, il a dit à un passager, originaire des Emirats, qu'il ressemblait à «Ben Laden»; que la plainte de ce dernier, ainsi que l'état dans lequel il se trouvait après avoir consommé plusieurs verres d'alcool a abouti à son emprisonnement et au retrait de son passeport, dès sa descente d'avion; que l'employeur verse aux débats une «lettre de suivi des opérations», ainsi qu'un courrier en date du 26 décembre 2002, rédigé par Monsieur X...; que celui-ci reconnaît avoir consommé dans l'avion, un apéritif, une bière et un quart de vin, mais affirme que sa consommation n'était pas suffisante pour être dans un état d'ébriété avancée; qu'il reconnaît également avoir dit à un homme avec une grande barbe «qu'il ressemblait à Ben Laden»; que celui-ci ayant l'air fâché, il s'était excusé, mais que le passager avait tout de même porté plainte dans l'aéroport ce qui avait occasionné son incarcération; que l'employeur indique que Monsieur X... a été libéré grâce à l'intervention de l'ambassade de France et du responsable local de la Compagnie Générale de Géophysique; qu'il s'est de nouveau présenté à ce dernier en état d'ébriété, durant son séjour à Dubaï; que Monsieur X... reconnaît avoir consommé de l'alcool à Dubaï, mais «modérément», un seul soir et en dehors de l'entreprise; que l'employeur a envoyé un autre salarié au Yémen; qu'il a rapatrié Monsieur X... et a procédé à son licenciement; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement du salarié a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et était constitutif d'une faute grave; qu'il y a lieu d'infirmier le jugement déféré; que Monsieur X... a été licencié pour faute grave; qu'il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice financier; qu'il doit, également, être débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail;

- ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en retenant que le fait pour un salarié comptant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'avoir, lors d'un vol à destination de son lieu d'affectation à l'étranger, «consommé plusieurs verres d'alcool» et «dit à un passager originaire des Emirats qu'il ressemblait à Ben Laden», et d'avoir reconnu avoir consommé de l'alcool à l'étranger «mais modérément, un seul soir et en dehors de l'entreprise», constituait une faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas même relevé le fait que le comportement du salarié aurait occasionné un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, n'a pas caractérisé la faute grave et a violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail;

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, du 6 avril 2007.

Roj: ATS 11019/2006
Id Cendoj: 28079140012006201598
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3492/2005
Procedimiento: Social
Ponente: Milagros Calvo Ibarlucea
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a seis de Junio de dos mil seis.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 20 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 6 de octubre de 2004, en el procedimiento nº 359/04 seguido a instancia de D. Plácido contra REPARACIONES TÉCNICAS DEL HORMIGÓN, S.L., sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 31 de mayo de 2005, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de julio de 2005 se formalizó por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez en nombre y representación de D. Plácido, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 16 de marzo de 2006 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

ÚNICO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 y 28 de enero de 1992, R. 824/1991 y 1053/1991; 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997, R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996; 23 de septiembre de 1998, R. 4478/1997; 7 de abril de 2005, R.430/2004; 25 de abril de 2005, R. 3132/2004; y 4 de mayo de 2005, R. 2082/2004).

El actor fue despedido por la empresa demandada para la que venía prestando sus servicios desde el 14-10-1999, con la categoría de Oficial de 1ª, debido a que el día 2-3-2004 fue citado a una reunión que tendría lugar una vez acabada la jornada, en la que se le pidió explicaciones por los daños económicos ocasionados a una furgoneta de la empresa en fecha de 16-1-2004, cuando el actor la conducía y sufrió un accidente, llegando a dicha reunión en estado de embriaguez, y reaccionando de forma agresiva, de palabra y de obra, levantando la mano y llamando al Gerente de la empresa en presencia de otras personas «cabrón» y golfo». La sentencia de suplicación revoca la dictada en la instancia que declaró la improcedencia del despido por considerar que los hechos sancionados son de indudable gravedad, ya que se produjeron de manera unilateral, sin mediar

provocación y sin respuesta, lo que determina la concurrencia de la causas alegada del art. 54.2.d) ET, a lo que hay que añadir que, aunque no se ha probado que la embriaguez alcance un grado de habitualidad notorio, todas las veces que ha concurrido ha tenido una clara repercusión negativa en el trabajo.

Contra dicha sentencia acude el trabajador demandante en casación para la unificación de doctrina, insistiendo en la improcedencia del despido, e invocando de contraste la sentencia de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1991 (R. 878/1990), que examina el supuesto de un trabajador que era representante de los trabajadores y que fue despedido por la empresa demandada debido a que el actor se dirigió a su inmediato superior solicitándole el visado del vale de desplazamientos correspondiente al mes de febrero y, acudiendo ambos al despacho del segundo, aprovechó éste para preguntar al actor si durante los días de parada de planta se habían realizado relevos, a lo que éste respondió que él no tenía por qué darle esa información y que se lo preguntara a los guardas, por lo que, ante esa situación, se le manifestó que el visado se lo daría otro día, y ya fuera del despacho el actor empezó a levantar la voz y le dijo «tonto, que es vd tonto», «vd no vale para trabajar», habiendo manifestado en el expediente los trabajadores que se encontraban en ese momento en el lugar que sólo oyeron una discusión, hechos que para la sentencia de esta Sala, si bien son reprochables, merecerían una sanción inferior al despido, pues no alcanzan la gravedad exigida en el art. 54.1 ET. De lo que se deduce la falta de contradicción pues los hechos comparados son diversos. Así, en la sentencia recurrida el actor acude a una reunión ebrio, después de haber bebido alcohol durante la jornada, adoptando una actitud agresiva, tanto de palabra como de obra, levantando la mano y llamando al Gerente de la empresa en presencia de otras personas «cabrón» y golfo», sin mediar provocación, ni tampoco contestación por parte de éste, mientras que en la sentencia de contraste el trabajador levantó la voz y dijo a su superior que era «tonto» y que no valía para trabajar después de haber subido a su despacho para darle un visado de desplazamientos que finalmente dejó para otro día, a la vista de que no le había proporcionado la información solicitada.

Por otra parte, la Sala ha declarado con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992, R. 1232/1990 y 2271/1991; 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995; 6 de Julio de 2004, R. 5346/2003; 9 de julio de 2004, R. 3496/2002; y 24 de mayo de 2005, R. 1728/04).

En sus alegaciones, la recurrente intenta, sin éxito, relativizar las diferencias expuestas, sin que la apelación del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de nuestra Constitución, pueda ser atendida pues la finalidad de este excepcional recurso es evitar el quebranto producido en la unidad de la interpretación del Derecho y en la formación de la jurisprudencia, lo que determina que la exigencia de contradicción constituya un presupuesto ineludible para su admisión, por lo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral, y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez, en nombre y representación de D. Plácido contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 31 de mayo de 2005, en el recurso de suplicación número 1044/05, interpuesto por REPARACIONES TÉCNICAS DEL HORMIGÓN, S.L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 20 de los de Madrid de fecha 6 de octubre de 2004, en el procedimiento nº 359/04 seguido a instancia de D. Plácido contra REPARACIONES TÉCNICAS DEL HORMIGÓN, S.L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 12 octobre 2005
N° de pourvoi: 03-44773
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Président: M. CHAGNY conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu que M. X..., engagé le 24 janvier 1994 par la société Colmarienne des eaux, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié le 5 juillet 2000 pour «cause réelle et sérieuse avec effet immédiat»;

SUR LE PREMIER MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme en réparation de son préjudice moral et matériel du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'au titre du deuxième grief énoncé par la lettre de licenciement, il était cumulativement reproché à M. X..., lors d'une intervention du 30 mai 2000, une forte imprégnation alcoolique et son incapacité à réaliser les travaux requis; qu'en retenant que l'imprégnation alcoolique de M. X... constituait à elle seule une cause réelle et sérieuse légitimant le licenciement, alors qu'elle constatait dans le même temps que cette «imprégnation» n'avait eu aucune conséquence sur la qualité de l'intervention du salarié, ce dont il résultait que ce grief était incomplètement établi, tandis que les deux autres griefs reprochés à M. X... ne l'étaient pas du tout, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ayant constaté que le grief pris d'un état d'ébriété qui lui était reproché dans la lettre de licenciement était établi, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN:

Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre de la mise à pied vexatoire et au titre de la perte de salaire pour la période du 27 juin 2000 au 6 juillet 2000;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur la demande de réparation du préjudice subi au titre de la mise à pied et au titre de la perte de salaire afférent, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;

Condamne la société Colmarienne des eaux aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Colmarienne des eaux; la condamne à payer à M. X... la somme de 2.500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

Décision attaquée: cour d'appel de Colmar (4e chambre section C), du 19 mai 2003.

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 18 mai 2005
N° de pourvoi: 03-43404
Non publié au bulletin
Rejet
Président: Mme MORIN conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu que M. X... engagé par la société Unalit le 2 novembre 1979 comme ouvrier polyvalent de fabrication et occupant en dernier lieu les fonctions d'opérateur «qualifié laquage» a été licencié pour faute grave le 30 mai 2000;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen:

- 1º/ que selon l'article L. 232-2 du Code du travail, le vin, la bière, le cidre, la poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool, peuvent être introduits et consommés dans l'enceinte des établissements industriels, et qu'en ayant affirmé que de manière générale, l'introduction et l'usage de boissons alcoolisées sont interdits dans l'enceinte de l'établissement la cour d'appel a violé le texte susvisé;
- 2º/ que le contrôle du taux d'alcool d'un salarié sur son lieu de travail n'est licite qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave; qu'en ayant relevé qu'il avait refusé de se soumettre à un alcootest sans constater que le règlement intérieur de l'entreprise permettait un tel contrôle avec les garanties afférentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-36 du Code du travail;
- 3º/ que l'état d'ébriété d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que s'il est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger; qu'en ne caractérisant pas en quoi ses fonctions d'opérateur laquage pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se trouvait en état d'ébriété dans l'enceinte de l'entreprise le 22 mai 2000, a pu décider sans encourir le grief de la troisième branche du moyen, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, qu'eu égard à ses fonctions et à ses antécédents, ce comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Décision attaquée: cour d'appel de Dijon (chambre sociale), du 26 septembre 2002.

Roj: ATS 3581/2005 - ECLI:ES:TS:2005:3581A
Id Cendoj: 28079140012005200270
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1626/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Juan Francisco García Sánchez
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Marzo de dos mil cinco.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 15 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 26 de junio de 2003, en el procedimiento nº 330/03 seguido a instancia de Víctor contra PESA REHABILITACIONES S.L., sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 20 de febrero de 2004, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 5 de mayo de 2004 se formalizó por el Letrado D. José Luis Fernández Chillón, en nombre y representación de Víctor, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 18 de octubre de 2004 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 de enero, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997 y 23 de septiembre de 1998).

La sentencia que se recurre ha recaído en un procedimiento de despido, instado por el actor frente a la empresa PESA REHABILITACIONES, S.L., para la que aquél presta servicios desde el 16 de abril de 1999 como oficial 1ª. El 27 de febrero de 2003 la demandada notificó al actor despido disciplinario con base en los hechos que se enumeran, consistentes en enfrentamientos, faltas de respeto, insultos y amenazas a los compañeros, en una ocasión, en estado de embriaguez, y desatención de sus obligaciones laborales con disminución voluntaria de su rendimiento. Todo ello, conforme al relato que se contiene en la sentencia de instancia, que concluyó declarando la improcedencia del despido. La Sala de suplicación, a la vista de los hechos que se declaran probados en aquella sentencia, estima el recurso de la empresa.

Recorre en casación para la unificación de doctrina el trabajador, invocando la existencia de contradicción entre la sentencia que se impugna y la de la Sala de Madrid de 17 de marzo de 1994, que estima el recurso del trabajador. El actor prestaba servicios para la empresa desde 1981, y la empresa le imputa que el día 21 de noviembre de 1992, durante su jornada de trabajo, y encontrándose en estado de embriaguez, provocó un gran escándalo con insultos y actitud agresiva con los compañeros de trabajo. La Sala se apoya en ese caso para estimar el recurso interpuesto por el trabajador en su antigüedad y el carácter no habitual de la embriaguez, aplicando los criterios de graduación e individualización de la conducta susceptible de sanción disciplinaria.

Es claro que no resulta posible establecer comparaciones entre las sentencias recurrida y de contraste, por cuanto que no abordan supuestos idénticos, básicamente porque las conductas sancionadas no son las mismas, y porque se trata de trabajadores con distinta antigüedad, elemento que es tenido en cuenta habitualmente —como lo hace la Sala de Madrid en la sentencia referencial— para adecuar la sanción a la conducta y situación particular del trabajador. Pero, lo que es más importante, no existe coincidencia entre las actuaciones objeto de sanción, pues en el caso de la sentencia de contraste el despido se adopta como consecuencia de una conducta aislada, mientras que en el supuesto ahora enjuiciado la Sala toma en consideración que el trabajador incurrió en los insultos y amenazas a los compañeros no sólo el día que se embriagó, y que se trata de una conducta reiterada y persistente y no de un hecho aislado u ocasional, dando lugar a que la convivencia ordenada en la empresa sea imposible.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Sala ha señalado, con reiteración, que la calificación de las conductas a efectos de despido disciplinario, al depender de una valoración casuística de las circunstancias individualizadas concurrentes en cada caso, difícilmente puede dar lugar a un supuesto incluido en el ámbito de la unificación de doctrina.

SEGUNDO.- Por lo expuesto, no habiendo la parte desvirtuado en el trámite de alegaciones cuanto se razonó en la procedencia antecedente, procede declarar la inadmisión del recurso, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal, sin imposición de las costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. José Luis Fernández Chillón en nombre y representación de Víctor contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 20 de febrero de 2004, en el recurso de suplicación número 5667/03, interpuesto por PESA REHABILITACIONES S.L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 15 de los de Madrid de fecha 26 de junio de 2003, en el procedimiento nº 330/03 seguido a instancia de Víctor contra PESA REHABILITACIONES S.L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 24 février 2004
N° de pourvoi: 01-47000
Publié au bulletin
Cassation.
M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction., président
Mme Bobin-Bertrand., conseiller apporteur
M. Legoux., avocat général
la SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu que M. X..., engagé le 21 février 1992 par la société Charvet en qualité d'agent technique de chauffage, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995, à la suite d'un contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIÈME BRANCHE:

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail;

Attendu que pour écarter la qualification de faute grave l'arrêt retient que le salarié ayant repris normalement ses activités et effectué sa journée de travail au lendemain du contrôle d'alcoolémie avant d'être mis à pied, l'employeur ne pouvait invoquer l'impossibilité de le maintenir dans son emploi;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIÈME BRANCHE:

Vu les articles L. 122-35 et L. 230-3 du Code du travail;

Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que si le recours à l'alcootest était légitime avant l'utilisation d'une machine dangereuse ou la conduite d'un véhicule de l'entreprise, l'employeur ne pouvait recourir à ce procédé à la fin de la journée de travail, pour constater une faute disciplinaire;

Attendu, cependant, que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, qu'en application du règlement intérieur, l'alcootest pouvait être imposé aux salariés amenés à manipuler des machines ou produits dangereux ainsi qu'à ceux qui conduisent des engins ou des véhicules automobiles et dont l'état d'imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux mêmes ou leur entourage, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIÈRE BRANCHE DU MOYEN:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Marseille aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Publication: Bulletin 2004 V N° 60 p. 56.

Décision attaquée: Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 8 octobre 2001.

Titrages et résumés: TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Restrictions aux libertés individuelles - Clause prévoyant le recours à l'alcootest - Validité - Condition. Les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'en égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que si le recours à un alcootest était légitime avant l'utilisation d'une machine dangereuse ou la conduite d'un véhicule de l'entreprise, l'employeur ne pouvait recourir à ce procédé à la fin d'une journée de travail pour constater une faute disciplinaire.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Preuve - Moyen de preuve - Procédés de surveillance - Validité - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses - Manquement du salarié à son obligation de prendre soin de la santé d'autrui CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Manquement du salarié à ses obligations - Obligation de prendre soin de la sécurité d'autrui.

Précédents jurisprudentiels: A RAPPROCHER: Chambre sociale, 2002-05-22, Bulletin 2002, V, n° 176, p. 175 (cassation).

Textes appliqués:

Code du travail L122-41, L122-35, L230-3.

■ PRESUNCIÓN DE ESTADO DE EMBRIAGUEZ

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 7 décembre 2011

N° de pourvoi: 10-21560

Non publié au bulletin

Rejet

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Bouilloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009), que M. X... a été engagé par la société Biribin Limousines en qualité de chauffeur intermittent à compter du 19 décembre 2002 puis, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2003; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 juillet 2004; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature permettre l'admission des pourvois;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié:

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen:

1°/ que d'une part, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; qu'à l'appui de sa décision, la cour a retenu que les heures de départ-retour garage ne devaient pas être qualifiées de période de travail effectif dans la mesure où les salariés disposent du véhicule; qu'en n'établissant pas que pendant cette période, le chauffeur pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail;

2°/ que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que les heures d'attente devaient être prises en considération; qu'en rejetant sa demande sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué par le pourvoi, a retenu qu'en application de la convention collective applicable l'amplitude de la journée de travail ne pouvait constituer en totalité un temps de travail effectif a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE les pourvois principal et incident;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bouloche, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté M. X... de ses demandes à ce titre,

Aux motifs que «la lettre en date du 27 juillet 2005 invoque trois incidents survenus le 1er juillet 2004;

Considérant qu'en ce qui concerne le premier motif, Mr X... indique qu'il avait refusé cette course, ayant travaillé à raison de 400 heures en juin 2004, et ayant demandé à bénéficier d'une matinée de repos; qu'ainsi il ne conteste pas ne pas avoir effectué le transport demandé; qu'il ne justifie pas avoir avisé son employeur en temps voulu de son refus et de ses motifs;

Considérant que pour le second grief, il expose que chargé d'un transfert au siège d'EDF à l'Etoile à 14 heures, il a mis ensuite 3 heures, s'agissant d'un jour de départ en vacances, pour rejoindre l'aéroport de Roissy; qu'il y est cependant parvenu avant l'arrivée de l'avion non du Président de la République de Chine, comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement, mais du ministre du tourisme; que Mr Y..., un autre chauffeur, atteste de son arrivée et de son état tout à fait normal;

Mais considérant que ces allégations ne sont pas confirmées par le témoignage de Mr Z..., régulateur chargé de l'opération, qui décrit très précisément comment à partir de 16 h, il s'est inquiété de la situation de Mr X... contacté à plusieurs reprises jusqu'à son arrivée à 17h50 à l'aéroport de Roissy, la personnalité attendant sa voiture; que celui-ci a alors été remplacé par un autre chauffeur; que l'attestation de Mr Y... bien que minorant la portée et la durée du retard de Mr X... ne les contredit pas; que l'argument de l'appelant tenant à la circulation automobile intensive qui serait la cause, compte tenu d'une course tardive imposée en début d'après midi, de son retard n'est pas prouvé;

Considérant enfin que si Mr X... était selon son collègue en état normal dans l'après midi, tel n'était plus le cas à la fin de cette journée selon les attestations de deux autres salariés qui décrivent son comportement comme celui d'un homme en état d'ébriété;

Considérant que le fait que Mr X... ait été un chauffeur apprécié pour sa compétence et son esprit d'initiative, comme le démontrent les certificats en sa faveur délivrés notamment par le président du directoire et le secrétaire général de la banque Sao Paulo ainsi que par plusieurs collègues, n'exclut pas qu'il connaissait des difficultés; qu'il résulte des pièces du dossier que de nombreux avertissements lui avaient été délivrés, pendant la période où il était mis à la disposition de la banque susvisée ainsi que postérieurement, pour différents problèmes de comportement dans le cadre de ses fonctions et pour la dernière fois le 3 4 juin 2004 pour un retard et une absence survenus le 23 mai 2004 au cours d'une mission; que la persistance des défaillances ainsi constatées et leur réitération permettent de conclure à la gravité des faits allégués lesquels rendaient impossible la poursuite du contrat de travail» (arrêt p. 3 & 4),

1º/ ALORS QUE, D'UNE PART, le simple fait de n'avoir pas justifié un comportement ne prive pas le salarié d'invoquer cette justification devant le juge; qu'en l'espèce, pour justifier le refus d'une course le 1er juillet 2004, M. X... a fait valoir qu'il avait travaillé plus de 400 heures au mois de juin précédent; que pour décider que le refus de cette course était fautif, la cour a retenu que le salarié ne justifiait pas avoir avisé son employeur en temps voulu de son refus et de ses motifs, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail;

2º/ ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des pièces versées aux débats; que dans son attestation, M. Y... a indiqué sans ambiguïté que le 1er juillet 2004, M. X... était arrivé à l'aéroport vingt minutes avant l'arrivée du ministre du tourisme de Chine et que s'il était arrivé après l'horaire prévu initialement, c'était en raison de la densité de trafic dû au départ en vacances et au fait que l'employeur lui avait demandé de faire un transfert au siège EDF avant d'aller à l'aéroport; que pour décider que M. X... avait commis une faute, la cour a retenu qu'il était arrivé à 17 h 50 à l'aéroport, la personnalité attendant sa voiture, et que la preuve d'une circulation automobile intensive n'était pas rapportée; qu'en statuant ainsi, bien que la preuve de l'arrivée de M. X... avant le ministre et d'une circulation automobile intense résultait de cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

3º/ ALORS QU'ENFIN, le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour retenir l'existence d'une faute, et de répondre aux conclusions relatives à la force probante de pièces produites; qu'en l'espèce, la cour a estimé que deux salariés décrivaient le comportement de l'exposant à la fin de la journée du 1er juillet 2004 comme celui d'un homme en état d'ébriété; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que les attestations de ces salariés ne pouvaient être prises en compte; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de salaires et d'heures supplémentaires,

Aux motifs que «Mr X... fait valoir que la somme de 18 864,96 euros lui serait due au titre d'un rappel pour les années 2003 à 2005 portant d'une part sur le fixe conventionnel journalier, inférieur à celui résultant de la convention collective, d'autre part, sur des heures supplémentaires; qu'il soutient que, dans sa catégorie professionnelle, le travail effectif est rémunéré mais également les heures d'attente et les amplitudes horaires et que les heures de travail comprennent les heures de conduite mais aussi les heures annexes, comme les heures de trajet aller et retour domicile; qu'il relève que la société ne tient aucun compte des heures d'attente classées comme temps de pause alors que les heures de stand-by dans les salles de repos des chauffeurs doivent être prises en considération;

Considérant que la rémunération du chauffeur «grande remise» comprend selon l'article 22 de l'annexe 1 à la Convention collective des transports intitulé «Grande Remise» d'une part un salaire de base, d'autre part un pourcentage sur la recette afférente à chaque service de sorte que le montant de la rémunération effective du conducteur ne puisse être inférieure au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire;

Considérant qu'à ce titre, le salaire de Mr X..., tel qu'il résulte de ses bulletins de salaire, comprend pour 151 h 67 mensuelles: un fixe conventionnel horaire de 1,960 euros outre un pourcentage conventionnel sur service; que le total en résultant n'est pas inférieur au salaire mensuel garanti;

Considérant quant à la demande au titre des heures supplémentaires qu'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ceux-ci et de ceux présentés par le salarié, qui doit produire des pièces étayant sa demande, le juge forme sa conviction;

Considérant que le contrat de travail de Mr X... prévoyait que les heures effectives travaillées et les heures d'amplitude définies par la convention collective résultaient d'un carnet chauffeur sur lequel étaient reportés pour chaque prestation de transport effectuée: les heures effectives de travail, les temps consacrés aux repas, les temps de coupure;

Considérant que pour le calcul du temps de travail effectif et conformément à l'article 17 de l'annexe 1 de la convention collective sont retranchés de l'amplitude journalière deux heures au titre du temps de repos et des interruptions de travail; qu'est déduite par ailleurs l'heure de départ-retour garage dans la mesure où ce temps, pendant lequel les salariés disposent du véhicule, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif;

Considérant que Mr X... produit d'une part ses contrats de transport établis par mission comportant: le jour, les heures de départ et d'arrivée, le kilométrage, le nombre de repas, les frais (parking autoroute) le carburant, d'autre part les tableaux des heures supplémentaires qu'il calcule par mois avec le report des heures par jour suivant les tranches horaires ainsi que les tarifs et taux horaires; que le temps de travail ainsi reporté correspond aux horaires des contrats de transport soit à la totalité de l'amplitude journalière;

Mais considérant que la société BIRIBIN produit outre les contrats de transports, les relevés établis par mois des paies-chauffeur, lesquels ventilent par jour et mission au vu des contrats de transport: les heures de départ et d'arrivée, le nombre d'heures journalier, les heures supplémentaires à 25 % et à 50 %, les repas et service; que le temps de travail en résultant est inférieur à celui retenu par Mr X..., ce qui influe sur le total des heures supplémentaires;

Considérant en effet qu'il est constant que la mise à disposition pendant une période d'amplitude horaire ininterrompue ne suffit pas à caractériser un temps de travail effectif; qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une impossibilité pour lui de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer à

des occupations personnelles durant tout ce laps de temps; qu'en l'espèce non seulement Mr X... n'apporte pas cette preuve mais qu'il ne retranche pas les heures de départ-retours garage et comptabilise dans son temps de travail effectif les deux heures exclues aussi de ce temps de travail par la convention collective;

Considérant que par suite les bulletins de salaire de Mr X... comprennent:

- un fixe conventionnel journalier et un pourcentage conventionnel sur service
- des indemnités qualifiées «amplitude journalière à 25 %» et «amplitude B» et C Convention collective»; qu'au vu de ces éléments, ce salarié ne prouve pas que les heures supplémentaires, dont il sollicite le paiement, correspondent à du travail effectif; qu'il n'établit pas en outre au regard des critères et barèmes conventionnels le non-paiement de ses heures supplémentaires» (arrêt p. 4 & 5),

1^o/ ALORS QUE, D'UNE PART, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; qu'à l'appui de sa décision, la cour a retenu que les heures de départ-retour garage ne devaient pas être qualifiées de période de travail effectif dans la mesure où les salariés disposent du véhicule; qu'en n'établissant pas que pendant cette période, le chauffeur pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail;

2^o/ ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que les heures d'attente devaient être prises en considération; qu'en rejetant sa demande sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Biribin Limousines.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société employeur à verser à Monsieur X... la somme de 2.495,02 euros au titre de la procédure irrégulière;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient l'irrégularité du licenciement faute pour l'employeur d'avoir respecté le délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable; qu'en effet, la convocation du 2 juillet pour un entretien fixé au 6 juillet est arrivée le 8 juillet; que, pour l'entretien du 19 juillet, la seconde lettre de convocation adressée à Monsieur X... le 13 juillet, lui était notifiée le 19 juillet; que celui-ci n'a donc pas bénéficié du délai prévu par l'article L. 1232-2 du Code du travail; que l'irrégularité de la procédure sera sanctionnée compte tenu du préjudice en résultant par l'allocation d'un mois de salaire; que le jugement sera réformé sur ce point;

- ALORS QU'en cas de report, à la demande du salarié, de l'entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du Code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée initiale de convocation; qu'ayant retenu que la première lettre de convocation du 2 juillet 2004 pour l'entretien préalable du 6 juillet avait été distribuée à Monsieur X... le 8 juillet et que la date de l'entretien préalable au licenciement avait été reportée au 19 juillet suivant, après une nouvelle convocation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la date prévue pour l'entretien préalable, soit le 19 juillet, étant postérieure de plus de cinq jours ouvrables à celle de présentation de la lettre recommandée initiale de convocation, soit le 8 juillet, l'irrégularité de la procédure n'était pas caractérisée et a violé l'article L 1232-2 du Code du travail;

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, du 8 décembre 2009.

Roj: ATS 11687/2010
Id Cendoj: 28079140012010202102
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 716/2010
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: José Manuel López García de la Serrana
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a nueve de Septiembre de dos mil diez.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 5 de los de Oviedo se dictó sentencia en fecha 28 de agosto de 2009, en el procedimiento nº 605/2005 seguido a instancia de D. Ambrosio contra CALERAS DE SAN CUCAO, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias, en fecha 18 de diciembre de 2009, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 5 de marzo de 2010 se formalizó por el Letrado D. Carlos García Barcala en nombre y representación de CALERAS DE SAN CUCAO S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 27 de mayo de 2010 acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007).

El actor, con categoría profesional de oficial de 2ª, fue objeto de despido disciplinario por los siguientes hechos: el martes 2 de junio de 2009 y a la hora de iniciar la jornada laboral se encontraba durmiendo en el interior de su vehículo dentro del recinto de la empresa; sobre las 11,30 horas entró a los vestuarios para ponerse la ropa de trabajo, pero la directora de recursos humanos le dijo que dejara de trabajar, y como el trabajador no hizo caso, se avisó a la Guardia Civil; los agentes se personaron sobre las 12,10 horas y no apreciaron que éste corriera peligro en el desempeño de sus funciones, por lo que no podían actuar; el trabajador prestó servicios con normalidad hasta terminar su jornada laboral. La sentencia recurrida declara la improcedencia del despido, valorando la conducta descrita en relación con lo dispuesto en el art. 54.2 b) ET y el convenio colectivo sectorial, que considera faltas muy graves la desobediencia continuada o persistente y la imprudencia o negligencia en

el trabajo. En primer lugar, no se tiene por acreditada la embriaguez puesto que los agentes de la Guardia Civil constataron que el estado del actor era normal; y, en segundo lugar, la imputada falta de desobediencia no reúne los requisitos de ser persistente y continuada.

La empresa ha seleccionado en el propio escrito de interposición del recurso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 18 de mayo de 1992 (R. 142/1992), que declara procedente el despido de la actora, camarera de pisos en un hotel, por acudir embriagada a su trabajo los días 20 de mayo y 11 y 15 de julio. El primer día la gran cantidad de alcohol ingerido la hacía tambalearse, impidiéndola limpiar; el segundo día provocó un incidente en la recepción insultando al recepcionista, al que se dirigió en términos injuriosos; y el tercer día, tras comprobar la gobernanta que por su estado de embriaguez no podía hacer sus tareas habituales, el director del hotel le dijo que se fuera a su casa, pero como la actora se negó permaneció en los vestuarios del hotel hasta el fin de su jornada laboral.

No puede apreciarse la contradicción alegada entre las sentencias comparadas porque son distintos los supuestos de hecho y las faltas imputadas en cada caso. La actora de la sentencia de contraste es despedida por embriaguez habitual, comprobada en tres ocasiones durante dos meses, así como por las ofensas verbales y las injurias vertidas contra el recepcionista y la gobernanta, permaneciendo el último día en los vestuarios del hotel por la imposibilidad de desempeñar su trabajo. En el caso de la sentencia recurrida son distintos los hechos imputados, no se acredita el estado de embriaguez del trabajador y éste lleva a cabo su trabajo normalmente hasta acabar la jornada laboral.

En relación con las alegaciones formuladas hay que remitirse a la reiterada doctrina de esta Sala declarando que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del ET no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995, 6 de julio de 2004, R. 5346/2003, 24 de mayo de 2005, R. 1728/2004, 8 de junio de 2006, R. 5165/2004 y 18 de diciembre de 2007, R. 4301/2006).

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, dándose a la cantidad consignada el destino legal.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Carlos García Barcala, en nombre y representación de CALERAS DE SAN CUCAO contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado de Asturias de fecha 18 de diciembre de 2009, en el recurso de suplicación número 2858/2009, interpuesto por CALERAS DE SAN CUCAO, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de los de Oviedo de fecha 28 de agosto de 2009, en el procedimiento nº 605/2005 seguido a instancia de D. Ambrosio contra CALERAS DE SAN CUCAO, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, dándose a la cantidad consignada el destino legal.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 25 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-42493
Non publié au bulletin
Mme Collomp (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2008), que M. X... a été engagé en septembre 1993 selon un contrat à durée déterminée d'usage par la société Cofras en qualité d'assistant technique militaire pour l'entretien d'hélicoptères au Koweït; que ce contrat a été suivi par d'autres contrats du même type et en dernier lieu par un contrat signé le 27 mai 2001, pour une durée de dix huit mois allant du 1er juin 2001 au 30 novembre 2002; que le salarié a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2001, motif pris d'un état d'ébriété avancé; que soutenant que son état, imputé à l'alcool, était dû en réalité à l'absorption de médicaments puissants contre la douleur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen:

- 1°/ que la société DCI faisait valoir qu'à aucun moment, avant que son licenciement ne soit prononcé et que son avocat n'intervienne, monsieur X... n'avait expliqué son état anormal par la prise massive de médicaments contre la douleur, dont il prétendait maintenant qu'elle justifiait son comportement, et elle soutenait que le caractère tardif de cette allégation la privait de toute crédibilité (p. 3, 5); qu'en omettant de prendre en considération ces circonstances et de rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de l'explication tirée des effets indésirables des antalgiques ne la rendait pas suspecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 3 8 (L. 1243 4) du code du travail;
- 2°/ que les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail des salariés liés par un contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas à la rupture des contrats à durée déterminée; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122 3 3 (L. 1242 14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L. 122 6 (L. 1243 1et L. 1234 5), L. 122 9 (L. 1234 9) et L. 122 14 4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L. 122-3-8 (L. 1243 4) du même code;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des éléments produits par les parties, a estimé que la preuve de l'état d'ébriété du salarié n'était pas établie; que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats;

Et attendu, d'autre part, que l'employeur, qui a, devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement ayant, pour débouter le salarié de ses demandes, retenu que le licenciement pour faute grave était justifié, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec sa position devant les juges du fond;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Défense conseil international aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Monod et COLIN, avocat aux Conseils pour la société Défense conseil international branche Cofras

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DCI à payer à monsieur X... les sommes de 14. 452, 17 à titre d'indemnité de préavis, 1. 445, 17 pour les congés payés afférents, 3. 853, 91 à titre d'indemnité légale de licenciement et 50. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

AUX MOTIFS QUE, pour établir la réalité des motifs du licenciement prononcé pour faute grave, la société DCI produit: un compte rendu du colonel Y... qui a constaté par téléphone que monsieur X... était incapable de s'exprimer de manière cohérente, le restant de ce rapport étant composé d'indications recueillies auprès de tiers, un message du lieutenant-colonel Z... indiquant que monsieur X... a été trouvé ivre, sans aucune constatation faite personnellement par l'auteur, une lettre du maréchal des logis B... indiquant qu'il a accompagné chez lui l'intéressé qui n'était pas en état de conduire, sans faire allusion à une consommation excessive d'alcool, un rapport du commandant C... indiquant «qu'un technicien français dans un état anormal (état d'ébriété) désirait entrer à la base», l'auteur n'ayant rien constaté par lui-même, un compte rendu de M. A..., appelé sur place, qui indique avoir constaté que monsieur X... tenait des propos incohérents et se déplaçait en titubant, sans faire état de consommation d'alcool; que monsieur X... oppose de son côté qu'il a toujours contesté, ce qui est établi, avoir bu de l'alcool ce jour-là, qu'il souffrait de la hanche et prenait des médicaments puissants pour soulager la douleur, qu'il présente une ordonnance médicale lui prescrivant ces médicaments en cas de douleur, médicaments dont la notice, qu'il produit, précise qu'ils pouvaient entraîner des nausées, des vertiges, des maux de tête, une confusion et des convulsions, qu'il justifie de ce qu'il s'est fait opérer par la suite de la hanche, qu'il était fatigué et que la veille, il s'était levé à 4h45 du matin pour ne se coucher le 29, jour des faits, qu'à 5 heures du matin et devoir se réveiller trois heures plus tard, qu'il n'a jamais fait l'objet de remarques de ce type dans son travail et que s'il a pu paraître dans un état anormal ce soir-là, c'est en raison de son état de santé mais non de l'alcool; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'ébriété alcoolique de monsieur X... n'est pas établie et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;

- ALORS d'une part QUE la société DCI faisait valoir qu'à aucun moment, avant que son licenciement ne soit prononcé et que son avocat n'intervienne, monsieur X... n'avait expliqué son état anormal par la prise massive de médicaments contre la douleur, dont il prétendait maintenant qu'elle justifiait son comportement, et elle soutenait que le caractère tardif de cette allégation la privait de toute crédibilité (p. 3, 5); qu'en omettant de prendre en considération ces circonstances et de rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de l'explication tirée des effets indésirables des antalgiques ne la rendait pas suspecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du code du travail;

Et AUX MOTIFS QUE le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis est due; qu'il convient de condamner la société DCI à verser à monsieur X... le montant des sommes demandées, non contestées dans leur montant, soit 14. 452, 17 au principal, outre 1. 445, 17 pour les congés payés y afférents; que monsieur X... a droit au paiement de l'indemnité de licenciement légale réclamée, soit 3. 853, 91; qu'il a subi un préjudice du fait du licenciement; que l'entreprise devra lui régler, compte tenu de son contrat, conclu pour une durée déterminée mais en fait renouvelé depuis 1993, des pièces qu'il produit, de son âge et des difficultés rencontrées pour obtenir un autre emploi, la somme de 50. 000;

- ALORS d'autre part QUE les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail des salariés liés par un contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas à la rupture des contrats à durée déterminée; qu'ayant constaté que le contrat de travail de monsieur X... était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L 122-3-3 (L 1242-14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L 122-6 (L 1243- 1et L 1234-5), L 122-9 (L 1234-9) et L 122-14-4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du même code.

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, du 1 avril 2008.

Roj: ATS 641/2009 - ECLI:ES:TS:2009:641A
Id Cendoj: 28079140012009200011
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1454/2008
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Benigno Varela Autrán
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a trece de Enero de dos mil nueve.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. BENIGNO VARELA AUTRÁN.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Pamplona se dictó sentencia en fecha 30 de noviembre de 2007, en el procedimiento nº 66/03 seguido a instancia de D. Jose Manuel contra AYTOS CPD, S.L., sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en fecha 14 de marzo de 2008, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 5 de mayo de 2008 se formalizó por la Letrada Dª Ángela Toro Cebada en nombre y representación de AYTOS CPD S.L., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 30 de septiembre de 2008 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R.430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004).

Esta exigencia no se cumple en el presente recurso. En efecto, es objeto del actual recurso de casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 14 de marzo de 2008 (rec. 76/08), en la que se desestima el recurso interpuesto por la demandada frente a la recaída en la instancia, que declaró la improcedencia del despido de que fue objeto el demandante. El actor viene prestando servicios para AUTOS CPD SL, siendo despedido por motivos disciplinarios el 25 de septiembre de 2007 con ocasión de los hechos acaecidos el día 13 anterior. En la citada fecha, el accionante fue convocado

junto con el resto de personal a una comida de empresa coincidiendo con la feria de Écija; sobre las 20:00 h, fuera del horario laboral y en una carpa pública de la feria en la que había unas 200 ó 300 personas no vinculadas con la empresa, el actor agredió a un compañero que tuvo que acudir al hospital donde le pusieron cuatro puntos de sutura en la ceja. La sentencia de instancia, como hemos dicho, declaró la improcedencia de la decisión extintiva empresarial y tal parecer es compartido por la Sala de suplicación.

Razona al respecto que aún siendo reprobable la conducta del demandante, es lo cierto que los hechos examinados no guardan relación alguna con la actividad laboral, ni por causa del trabajo, ni siquiera entre compañeros de trabajo en sentido estricto, pues aún prestando servicios ambos para la misma mercantil, lo hacían en poblaciones diferentes. Atendiendo a este singular contexto y a la ausencia de voluntariedad alguna en la agresión relatada, concluye la sentencia rechazando que el proceder del trabajador sea merecedor de la máxima sanción.

Acude ahora la demandada y recurrente en casación para la unificación de doctrina, invocando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Valladolid) de 2 de junio de 2005 (rec. 983/05), dictada asimismo en un procedimiento seguido por despido disciplinario. En el caso, los hechos que sustentaron la decisión extintiva empresarial del demandante, ocurrieron durante la celebración de la cena de Navidad de la empresa cuya mesa se hallaba presidida por la Dirección en la que se encontraban, entre otros, el Directivo encargado de representar a la empresa en ese acto y el Director de Administración y Finanzas, ambos de nacionalidad mejicana. Sobre las 23:00 h, uno de los Directivos se puso en pie e inició el discurso de agradecimiento y exposición de la actividad empresarial del año, el actor se puso en pie y en estado de embriaguez, profirió a gritos la frase de «mejicanos hijos de puta», junto con silbidos y vítores interfiriendo en el discurso del directivo al tiempo que era jaleado por otros trabajadores. Estos hechos a juicio de la Sala entrañan la suficiente gravedad como para justificar la sanción impuesta.

Ciertamente las sentencias sometidas a comparación versan sobre dos despidos disciplinarios basados en conductas tipificadas en el art. 54.2. c) ET. Pero, más allá de la reiteradamente afirmada dificultad de unificar criterios en relación con la valoración de este tipo de conductas, concurren algunas diferencias fácticas entre ambos supuestos, que impiden la contradicción entre las sentencias comparadas, toda vez que la que realmente se cuestiona en el actual recurso es la incorrecta aplicación de los principios de proporcionalidad, gradualidad e individualización a la vista de las circunstancias concurrentes, que inspiran la regulación de la materia del despido disciplinario, con lo que en realidad se pretende que esta Sala valore de nuevo los hechos, calificando la conducta del trabajador y el consiguiente despido de que fue objeto. Al margen de que no es esa la finalidad del presente recurso extraordinario, tampoco concurre el presupuesto de la contradicción que permitiría a esta Sala pronunciarse sobre cuál es la doctrina correcta, ya que en cada caso se han enjuiciado hechos y circunstancias que no guardan la necesaria homogeneidad. Así, y en síntesis, consta en la sentencia recurrida que, particularmente, se sancionan unos particulares hechos que se producen fuera del horario laborable, fuera del centro de trabajo y en un sitio público en el que había personas ajenas al entorno profesional, en dicho contexto se produce la agresión casualmente entre dos trabajadores de la misma mercantil. En el caso de la sentencia de contraste, se sancionan las ofensas verbales proferidas a los Directivos de la empresa en una reunión de empresa, manifestaciones con tinte soez y proferidas en menosprecio y con ánimo vejatorio hacia los Directivos de la mismas. Por lo demás, en cada una de las sentencias comparadas se ha efectuado un análisis ponderado de la concreta situación que enjuicia, lo que conduce a pronunciamientos distintos.

Resulta casi innecesario, por lo dicho, recordar que es doctrina constante de esta Sala, sintetizada en la sentencia de 24 de mayo de 2005 (RCUD 1728/2004), que el recurso de casación para la unificación de doctrina constituye un «instrumento (que) no puede operar a partir de lo que la doctrina denomina juicios empíricos de valoración de la conducta humana, porque en estos juicios los elementos circunstanciales de ponderación adquieren la máxima significación en el orden decisorio y, por ello, se resisten a una tarea de unificación doctrinal, que sería, por definición, una labor destinada al fracaso, al intentar convertir en general y uniforme lo que, por su propia naturaleza, es particular y variable, pues en tales decisiones opera siempre un elemento de discrecionalidad que no es susceptible de unificación».

SEGUNDO.- La no concurrencia del presupuesto de la contradicción en el único motivo articulado en el recurso, en cuanto que el mismo constituye el presupuesto de admisión de este tipo de recursos de conformidad con las previsiones precitadas del art. 217 de la LPL, conduce directamente a declarar su inadmisión, de conformidad y con los efectos previstos para tal situación en el art. 223 de la LPL, sin que las alegaciones

evacuadas tras la precedente Providencia que abrió el trámite de inadmisión hayan combatido eficazmente lo que aquí ha quedado expuesto de manera razonada. Procede la imposición de costas a la recurrente, pérdida del depósito constituido para recurrir y debiendo darse a la consignación el destino legal.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a Ángela Toro Cebada, en nombre y representación de AYTOS CPD S.L. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 14 de marzo de 2008, en el recurso de suplicación número 76/08, interpuesto por AYTOS CPD, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n^o de los de de fecha 30 de noviembre de 2007, en el procedimiento n^o 66/03 seguido a instancia de D. Jose Manuel contra AYTOS CPD, S.L., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente; pérdida del depósito constituido para recurrir, y debiendo darse a la consignación el destino legal.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 2138/2007
Id Cendoj: 28079140012007200007
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3967/2005
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Mariano Sampedro Corral
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a diez de Enero de dos mil siete.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Mataró se dictó sentencia en fecha 30 de diciembre de 2004, en el procedimiento nº 586/04 seguido a instancia de DON Jaime contra el AYUNTAMIENTO DE MASNOU, sobre Despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DON Jaime, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 30 de junio de 2005, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de septiembre de 2005 se formalizó por el Letrado Don Santos Valladolid Brizuela en nombre y representación de DON Jaime, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 5 de octubre de 2006 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

ÚNICO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 y 28 de enero de 1992, R. 824/1991 y 1053/1991; 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997, R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996; 23 de septiembre de 1998, R. 4478/1997; 7 de abril de 2005, R. 430/2004; 25 de abril de 2005, R. 3132/2004; y 4 de mayo de 2005, R. 2082/2004).

El actor prestaba servicios por cuenta del Ayuntamiento demandado desde el 1-6-1988, primeramente como Oficial 1º Electricista y, tras superar el proceso de selección correspondiente, como Inspector de la vía pública desde el 1-6-2004. El actor fue miembro del Comité de empresa hasta el 21-6-2003 y desde el 3-10-2003, miembro del Comité de Seguridad y Salud del citado Ayuntamiento. El 30-7-2004 recibió carta de despido por razones disciplinarias con base en los hechos declarados probados y que, en resumen, consistieron en las agresiones físicas producidas por dicho trabajador en la vía pública a dos personas, el día 18-6-2004, después

de acudir al centro de trabajo sobre la 9:00 h y comprobar que su vehículo no estaba reparado, y de estar un tiempo indeterminado en un bar. Sobre las 13:00 h de ese mismo día cogió su coche, y al iniciar la maniobra de conducción le pitó el cocha que tenía delante, por lo que el actor bajó a increpar al conductor, y empezó a golpear la parte posterior del vehículo. En ese momento, otra persona, compañera de trabajo del agredido y que vio la escena, se dirigió al actor para preguntarle qué ocurría, recibiendo por respuesta un fuerte golpe de cabeza contra su nariz que le causó fractura nasal, y síndrome de latigazo cervical, que requirió collarín, tratamiento farmacológico, rehabilitación funcional y 31 días de baja. Acto seguido, el actor fue a su coche y sacó un machete dirigiéndose con él a la otra víctima, que entró en un bar para pedir auxilio hasta que llegó la policía. El actor que no presenta trastorno psicótico activo, consume 60 cigarrillos diarios, así como alcohol de forma moderada-grave y cocaína ocasionalmente, y de forma diaria desde hace unos meses, habiendo sido sancionado por el Ayuntamiento demandado en ocasiones anteriores por agresiones a un vecino y a un compañero de trabajo. La sentencia de instancia declaró la procedencia del despido, siendo esta decisión confirmada en suplicación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de junio de 2005, por considerar que, con independencia de sus hábitos en relación con el tabaco, el alcohol y la cocaína, su actuación sólo puede ser calificada como una transgresión grave y culpable de la buena fe contractual.

Contra dicha recurre en casación unificadora invocando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de 7 de junio de 2001 (R. 555/2001), que examina el despido de un trabajador que el 6-11-1998 había celebrado contrato eventual de 3 meses de duración con el Ayuntamiento demandado, «para atender tareas como peón» en una obra de construcción, y que el 24-11-1998 le fue notificada carta de despido porque tres días, sobre las 2:15 h, acudió a un bar en estado de embriaguez solicitando al dueño que le sirviera bebida, a lo que éste se negó, por lo que el actor se acercó a él en actitud agresiva, cogiéndole del pecho y tirando dos litros de calimocho que había en la barra. Al lugar de los hechos acudió la Guardia Civil y la Policía con los que el actor también se mostró violento, insultándoles y resistiéndose, golpeando el vehículo y amenazando de muerte a todos los Agentes. La sentencia de suplicación revocó la dictada en la instancia que declaró la procedencia del despido, teniendo en cuenta que el actor se encontraba en estado de embriaguez, y que los hechos ocurrieron fuera del lugar de trabajo.

De lo que se deduce la falta de contradicción, pues las conductas enjuiciadas para calificar el despido son diferentes, siendo especialmente considerado por la sentencia de contraste que el trabajador se encontrara en estado de embriaguez, y que los hechos tuvieran lugar fuera del lugar de trabajo, circunstancias que no concurren en la sentencia recurrida pues sólo consta que el actor estuvo «durante un tiempo indeterminado en el bar», y que sobre las 13:00 h agredió a dos personas en la vía pública, que es donde últimamente venía prestando sus servicios como Inspector.

Por otra parte, la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas, a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992, R. 1232/1990 y 2271/1991; 15 y 29 de enero de 1997, R. 952/1996 y 3461/1995; 6 de Julio de 2004, R. 5346/2003; 9 de julio de 2004, R. 3496/2002; y 24 de mayo de 2005, R. 1728/04).

En sus alegaciones, la recurrente insiste en su pretensión y en la contradicción alegadas, intentando relativizar las diferencias expuestas y que justifican, a juicio de esta Sala, la falta del presupuesto legal de contradicción, por lo que, vistas las alegaciones de la parte recurrente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral, y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Santos Valladolid Brizuela, en nombre y representación de DON Jaime contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 30 de junio de 2005, en el recurso de suplicación número 2518/05, interpuesto por DON Jaime, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo

Social nº 1 de los de Mataró de fecha 30 de diciembre de 2004, en el procedimiento nº 586/04 seguido a instancia de DON Jaime contra el AYUNTAMIENTO DE MASNOU, sobre Despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 9890/2006
Id Cendoj: 28079140012006201110
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2918/2005
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Ramón Martínez Garrido
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Mayo de dos mil seis.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 30 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 4 de noviembre de 2004, en el procedimiento nº 885/04 seguido a instancia de D. Carlos Francisco contra SPANAIR, S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 17 de mayo de 2005, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 14 de julio de 2005 se formalizó por el Letrado D. Javier de la Cruz y Bazo, en nombre y representación de SPANAIR, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 10 de enero de 2006 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La Sala ha reiterado que contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 de enero de 1.992, RCU 824/91; 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, RCU 4067/96, 94/97 y 4203/96; 17 de mayo y 22 de junio de 2000 RCU 1253/99 y 1785/99; 14 de noviembre de 2003, RCU 4758/02; 17 de diciembre de 2004, RCU 6028/03 y 20 de enero de 2005, RCU nº 1111/03).

La sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2005, con revocación de la de instancia, declara improcedente el despido disciplinario del actor acordado por la empresa demandada SPANAIR S.A. para la que prestaba servicios como operario de rampa conductor.

En el supuesto enjuiciado el actor se presentó en el puesto de trabajo el 4 de julio de 2004 en un estado que le inducía al sueño por no haber dormido, habiendo dedicado la noche a la diversión e ingerido bebidas

alcohólicas. Acto seguido el actor se ausentó del puesto de trabajo con la furgoneta que utiliza para la prestación de sus servicios durante tres horas, alterando los planes de trabajo del personal del aeropuerto y retrasando los vuelos, aunque no fue necesario que la empresa tuviera que hacer frente a la ejecución de la garantía de puntualidad que ofrece a sus pasajeros.

Interpone la parte demandada el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que estructura en tres motivos, seleccionando una sentencia de contraste para cada uno de ellos.

Con independencia de la descomposición artificial de la controversia que dicho planteamiento puede suponer al menos respecto a los motivos segundo y tercero, lo cierto es que ninguna de las tres sentencias invocadas es contraria con la recurrida como ya se advertía en la providencia que iniciaba el trámite de inadmisión desde el momento que la sentencia recurrida prescinde de la embriaguez para calificar el despido.

En su escrito de alegaciones la parte recurrente muestra su disconformidad con tal afirmación, pero lo cierto es que la sentencia recurrida dice lo siguiente: «El Magistrado a quo efectivamente considera que no se ha acreditado que el actor se presentase en su puesto de trabajo en estado de embriaguez...» y con relación a la embriaguez concluye que «hemos de prescindir de esta cuestión al no considerarse probada y por consiguiente no puede ser tenida en cuenta para determinar la calificación del despido».

Así pues, la única conducta que la sentencia considera sancionable es la que consta acreditada, consistente en abandonar durante tres horas el puesto de trabajo, llevándose el vehículo con el que desarrollaba su actividad y entiende la sentencia que dicha conducta no merece una sanción tan grave como el despido.

Pues bien, ninguna de las tres sentencias citadas de contraste se centra en el abandono del trabajo por parte del trabajador despedido, sino que giran en torno al tema de la embriaguez, de la que, como se ha dicho, prescinde la sentencia recurrida para calificar el despido.

En el primer motivo sostiene el recurso que la sentencia niega eficacia a la sanción por embriaguez ocasional que contempla el Convenio de aplicación cuando el Estatuto de los Trabajadores exige que sea habitual y entiende que no puede ser sancionada con mayor dureza por ningún convenio colectivo. Sin embargo, esta consideración que efectivamente hace la sentencia recurrida no es más que a mayor abundamiento, o como dice la sentencia «a meros efectos dialécticos», como no podía ser de otra forma después de afirmar que prescinde de la embriaguez para calificar el despido.

Tratándose por tanto de consideraciones sin valor decisorio, no pueden tomarse en consideración para acreditar la contradicción con la sentencia invocada para este primer motivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 28 de marzo de 2000 que, además, contempla un supuesto que no guarda identidad con el caso de autos, en el que el trabajador despedido conduciendo un vehículo de la demandada ocasionó un accidente como consecuencia del cual falleció una persona y resultaron heridas otras tres, dando resultado positivo en la prueba de alcoholemia que se le practicó.

Para el segundo motivo y tercer motivo, sin especificar claramente esta división, se proponen de contraste la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1989 en el que un empleado de Iberia, tripulante de cabina, se presentó al servicio en estado de embriaguez, y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de marzo de 2003, que contempla un caso en el que el demandante, conductor de vehículo de baldeo de limpieza viaria tras ingerir bebidas alcohólicas, condujo el camión a gran velocidad, saltándose semáforos en rojo hasta que chocó con un árbol causando daños al vehículo.

Ninguno de estos supuestos guarda la menor identidad con el caso de autos ni con la conducta realmente enjuiciada que es el abandono del puesto de trabajo durante tres horas llevándose el actor el vehículo con el que trabajaba y las repercusiones que ello tuvo en el servicio.

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Con imposición de costas a la recurrente, pérdida de la consignación del importe de la condena y del depósito constituido para recurrir.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Javier de la Cruz y Bazo, en nombre y representación de SPANAIR, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 17 de mayo de 2005, en el recurso de suplicación número 574/05, interpuesto por SPANAIR, S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 30 de los de Madrid de fecha 4 de noviembre de 2004, en el procedimiento nº 885/04 seguido a instancia de D. Carlos Francisco contra SPANAIR, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente, pérdida de la consignación del importe de la condena y del depósito constituido para recurrir.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 923/2005 - ECLI:ES:TS:2005:923A
Id Cendoj: 28079140012005200437
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1319/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Juan Francisco García Sánchez
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil cinco.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 27 de mayo de 2003, en el procedimiento nº 257/03 seguido a instancia de D. Luis Enrique contra VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 10 de diciembre de 2003, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 5 de abril de 2004 se formalizó por la Letrada D^a Montserrat González Lorenzo, en nombre y representación de D. Luis Enrique, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 15 de septiembre de 2004 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- Es doctrina de esta Sala, sentada al interpretar y aplicar el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral que la contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales; y aunque el precepto no exige una identidad absoluta, sí es preciso, como en el mismo se señala, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos iguales (sentencias, entre otras muchas, de sentencias de 27 y 28 de enero de 1.992, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 2000 y las mas recientes de 14 de abril y 14 de noviembre de 2003). La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de diciembre de 2003 confirma la de instancia que había declarado procedente el despido disciplinario del actor, acordado por la empresa demandada Vigilancia y Sistemas de Seguridad S.A. para la que prestaba servicios como vigilante de seguridad. Según relata el hecho probado cuarto, el 28 de octubre de 2002 estaba el actor prestando servicios de vigilancia en un supermercado cuando, a parecer, un individuo estaba molestando a una cliente y se había apropiado de unas zapatillas; se relata en el mismo hecho probado que el actor hizo un uso desproporcionado de la fuerza frente a dicha persona que no oponía resistencia - parece que se encontraba en estado de embriaguez - y a quien se le causó una herida en la cabeza. Según el hecho probado segundo, el actor había sido miembro del Comité de Empresa, no ostentando en la actualidad representación ni afiliación alguna, de forma cautelar desde el 10 de enero de 2002 y definitivamente desde el 12 de diciembre de 2002.

Recorre la parte actora en casación para la unificación de doctrina, proponiendo como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 26 de junio de 2000 que confirma la nulidad del despido disciplinario del trabajador, también vigilante de seguridad.

Ninguna identidad concurre entre los supuestos de hecho enjuiciados, aparte la misma categoría profesional de los demandantes.

En la citada sentencia de contraste el actor forma parte del Comité de Empresa y esta afiliado al Sindicato U.S.O. y el despido se produce como consecuencia de las denuncias formuladas contra la empresa demandada, concretamente por el envío de cartas a clientes en las que se imputa a la demandada el incumplimiento del Convenio Colectivo Nacional de Vigilancia Privada. La sentencia considera que la conducta del trabajador se produjo en relación con el cargo representativo que ostentaba y en defensa de lo que estimaba el cumplimiento de la normativa laboral sin que existiera un «animus iniuriandi», sino la defensa de los intereses a quienes representaba.

En su escrito de alegaciones la parte recurrente insiste en la admisión del recurso, pero de la exposición que antecede se evidencia la absoluta falta de identidad entre los supuestos que cada sentencia enjuicia lo que impide apreciar el requisito de la contradicción entre las mismas.

En relación con lo anterior debe recordarse que la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en estos casos la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992, 15 y 29 de enero de 1997).

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral. Sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a Montserrat González Lorenzo, en nombre y representación de D. Luis Enrique contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 10 de diciembre de 2003, en el recurso de suplicación número 6348/03, interpuesto por D. Luis Enrique, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Barcelona de fecha 27 de mayo de 2003, en el procedimiento nº 257/03 seguido a instancia de D. Luis Enrique contra VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Alcohol dependencia y despido disciplinario

Roj: ATS 6252/2013
Id Cendoj: 28079140012013201254
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1906/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Maria Lourdes Arastey Sahun
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Mayo de dos mil trece.

Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Cartagena se dictó sentencia en fecha 10 de febrero de 2011, en el procedimiento nº 1381/10 seguido a instancia de D. Jose Enrique contra SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, S.C.P.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en fecha 5 de marzo de 2012, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 28 de mayo de 2012 se formalizó por el Letrado D. Francisco Javier Rojas Aragón, en nombre y representación de SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, S.C.P.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 26 de febrero de 2013 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y R. 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y R. 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos

sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y R. 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y R. 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y R. 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y R. 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

Por tanto, procede comprobar si entre la sentencia recurrida en casación unificadora y la que se propone de contraste por la parte recurrente concurre el requisito de la contradicción, de conformidad con la doctrina de la Sala que se acaba de exponer.

En el caso de la sentencia recurrida, el actor venía prestando servicios en la empresa demandada -dedicada a la fabricación de policarbonatos, utilizando productos químicos, tóxicos e inflamables- con la categoría profesional de panelista con las funciones de controlar la actividad de la planta de manómeros, verificando todas las variables del proceso químico, detectar posibles desviaciones, tomar las oportunas medidas correctoras, dar instrucciones a otros trabajadores, etc. El 10 de septiembre de 2010 el actor acudió al centro de trabajo en estado de embriaguez. Cuando los trabajadores del grupo saliente llegaron al vestuario a las 14 horas encontraron al actor con la ropa de trabajo mal puesta, sin cinturón ni botas de seguridad, con dificultades para mantener el equilibrio y para expresarse y con aliento etílico. Al apreciar el estado en que el actor se encontraba le impidieron incorporarse a su puesto de trabajo y le llevaron al servicio médico de la empresa. El actor que padece adicción a la ingesta de bebidas alcohólicas -por lo que está siguiendo tratamiento de deshabituación- fue despedido por los anteriores hechos el 22 de septiembre de 2010. El trabajador en ningún momento anterior había sido sancionado por embriaguez ni advertido por dicha conducta.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 5 de marzo de 2012 -con revocación de la de instancia- declara improcedente el despido. El artículo 62.7 del convenio de aplicación contempla como falta muy grave merecedora del despido, «*la embriaguez en acto de servicio*» y la sentencia considera que la embriaguez del actor no fue en acto de servicio ya que no comenzó a trabajar, sino que estando en el vestuario los compañeros advirtieron su estado y la empresa le impidió la incorporación al trabajo. La sentencia también entiende que la conducta del actor no se encuentra en el supuesto del artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores «*la embriaguez habitual o toxicomanía, si repercuten negativamente en el trabajo*», pues no había sido sancionada con anterioridad por embriaguez, sin que, por tanto, conste la habitualidad ni la negatividad en el trabajo.

Recorre la empresa demandada en casación para la unificación de doctrina, aportando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 19 de julio de 2007. En ese caso, el actor prestaba servicios en la empresa Air Europa LA S.A. con la categoría de conductor operario con las funciones de cargar y descargar las maletas de los aviones, conducir carros de maletas delación a la terminal y llevar escaleras hasta el avión. La empresa procedió al despido del actor imputándole el haber tenido que abandonar su puesto de trabajo el 8 de agosto de 2006 al haber sido hallado en estado de embriaguez. Según el hecho probado tercero en esa fecha el actor tenía turno de 10 a 14 horas y de 21 a 1 horas. A primera hora, el capataz del turno y el responsable de todos los trabajadores de la plataforma acudieron al recinto de descanso donde se encontraban los trabajadores que debían comenzar el turno, a fin de organizar el trabajo, y se encontraron al actor tumbado en un sofá, dormido, y desprendiendo olor a alcohol. Le costó despertar, tenía los ojos rojos y habla poco clara, diciéndoles el actor que había bebido la noche anterior, habiéndole sentado mal el alcohol. Los capataces decidieron mandar al actor a casa, con lo que el turno quedó con un trabajador menos, reincorporándose el actor al turno de tarde. El artículo 75 del convenio de aplicación considera falta muy grave «*La embriaguez por toxicomanía ocasional durante el tiempo de servicio*» que el artículo 76 permite sancionar con el despido. La sentencia propuesta de contraste -con revocación de la de instancia- declara el despido procedente al entender que la conducta del actor encaja en el mencionado precepto.

La contradicción es inexistente al ser distintas las funciones que en cada caso tenían encomendadas los trabajadores demandantes; además la sentencia de contraste valora el hecho de que el turno de trabajo se tuviera que realizar con un trabajador menos, sin que la sentencia recurrida valore una circunstancia igual.

En su escrito de alegaciones la parte recurrente se opone a la inadmisión. Es cierto que los supuestos de hecho enjuiciados presentan una clara identidad, pero la providencia que advertía de la posible inadmisión también se refería a que la calificación de las conductas a efectos de despido disciplinario difícilmente pueden dar lugar a un supuesto incluido en el ámbito de la unificación de doctrina.

Es reiterada la doctrina de la Sala según la cual la calificación de conductas a efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no suele ser materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en estos casos la decisión judicial se funda casi siempre en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico.

Pero además de resaltar la dificultad de encontrar situaciones sustancialmente iguales, la Sala se ha referido a la propia función de este recurso como instrumento de unificación jurisprudencial en relación con los casos de despido disciplinario. Así, entre las mas recientes, la sentencia de 19 de enero de 2011 (R. 1207/10) dice que *«Lo que ponen de relieve estas resoluciones no es sólo la dificultad de construir en materia disciplinaria la identidad fáctica que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. Se evidencia también algo que afecta, de manera más profunda, a la propia función de este recurso como instrumento de unificación jurisprudencial. Ese instrumento no puede operar a partir de lo que la doctrina denomina juicios empíricos de valoración de la conducta humana, porque en estos juicios los elementos circunstanciales de ponderación adquieren la máxima significación en el orden decisorio y, por ello, se resisten a una tarea de unificación doctrinal, que sería, por definición, una labor destinada al fracaso, al intentar convertir en general y uniforme lo que, por su propia naturaleza, es particular y variable, pues en tales decisiones opera siempre un elemento de discrecionalidad que no es susceptible de unificación. Por ello, el auto de 5 de noviembre de 1998 (rec. 4546/1997) ya precisó que la calificación de las conductas en materia disciplinaria «no es materia propia de la unificación de doctrina», porque la decisión parte «necesariamente de una valoración individualizada que no permite establecer criterios generales de interpretación». Desde esta perspectiva puede afirmarse que este tipo de litigios carece de interés casacional y su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora, sino que comprometería gravemente el funcionamiento del recurso con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social»*. En el mismo sentido la sentencia de 14 de julio de 2011 (R. 3060/10).

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 219.1 y 225. 5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Con imposición de costas a la parte recurrente, pérdida de la consignación del importe de la condena, y del depósito constituido para recurrir a los que se dará su destino legal.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Francisco Javier Rojas Aragón, en nombre y representación de SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, S.C.P.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 5 de marzo de 2012, en el recurso de suplicación número 764/11, interpuesto por D. Jose Enrique, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Cartagena de fecha 10 de febrero de 2011, en el procedimiento nº 1381/10 seguido a instancia de D. Jose Enrique contra SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, S.C.P.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente, pérdida de la consignación del importe de la condena y del depósito constituido para recurrir.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 1718/2012
Id Cendoj: 28079140012012200243
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2558/2011
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Rosa María Viroles Piñol
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a nueve de Febrero de dos mil doce.
Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. ROSA MARIA VIROLES PIÑOL.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 3 de los de Jérez de la Frontera se dictó sentencia en fecha 3 de junio de 2010, en el procedimiento nº 1523/2009 seguido a instancia de D. Herminio contra CORTIJO LA PEÑUELA, sobre despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 5 de abril de 2011, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de julio de 2011, se formalizó por la Procuradora D^a Cayetana de Zulueta Luchsinger en nombre y representación de CORTIJO LA PEÑUELA, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 15 de diciembre de 2011, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de relación precisa y circunstanciada y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO. - El artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral exige que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada. Para cumplir este requisito la parte recurrente debe establecer la identidad de los supuestos a partir de los que afirma la existencia de contradicción mediante una argumentación mínima sobre la concurrencia de las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, a través de un examen, que sea suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que el recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas [Sentencias de 27 de mayo de 1992 (R. 1324/1991), 16 de septiembre de 2004 (R. 2465/2003), 6 de julio de 2004 (R. 5346/2003), 15 de febrero de 2005 (R. 1900/2004), 28 de junio de 2005 (R. 3116/04) y 31 de enero de 2006 (R. 1857/04)].

La parte recurrente no ha observado el requisito al que en el apartado anterior se alude, ya que no ha realizado un análisis comparativo de los elementos que delimitan la identidad de las controversias (objeto y fundamento de las pretensiones y hechos probados de las sentencias) y de la divergencia de los pronunciamientos como requiere la norma legal y nuestra doctrina.

SEGUNDO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia

o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

La sentencia impugnada confirma la dictada en la instancia, que ha declarado la improcedencia del despido disciplinario, tras razonar que si bien se ha acreditado que el trabajador demandante es un bebedor habitual, no se ha probado de manera alguna que el consumo de alcohol se realice en el centro de trabajo, ni en horas laborales, ni que afecte a su rendimiento. La Sala comparte el criterio del juzgador «a quo» al no haberse demostrado de forma fehaciente que la embriaguez habitual del actor repercuta negativamente sobre trabajo y no concurrir, por tanto, las notas exigidas en el artículo 54.2.f) del ET.

La empresa interpone recurso de casación para unificación de la doctrina, seleccionando como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 03-10-05 (Rec. 937/05). Dicha resolución declara que procede la imposición del recargo del 30% a la empresa en las prestaciones económicas derivadas del accidente laboral que causó la muerte al trabajador. El siniestro se produjo cuándo el causante y sus compañeros se encontraban limpiando de maleza los márgenes del Río Segura hasta situarse en la zona próxima y bajo el puente de la estación de aforo. En un determinado momento de la tarea el trabajador resbaló y cayó al río, en el que desapareció. Y razona la Sala que medió falta de medidas de seguridad, pues, aparte de que no se acredita un plan de prevención no consta que el trabajador llevase calzado adecuado, ni que existiera algún sistema de sujeción o equivalente, ni que se habilitase algún medio de flotación, ni que hubiese medio de auxilio idóneo. Y ello pese a que también en este caso el trabajador hubiese ingerido alcohol.

Del examen comparativo de las sentencias se evidencia que no son contradictorias por cuanto, además de diferir hechos, fundamentos y pretensiones, ambas condenan a la empresa por lo que sus pronunciamientos no son opuestos. Así en la recurrida se ejercita una acción por despido mientras que la referencial se reclama la imposición de un recargo al empresario por falta de medidas de seguridad. Por otra parte, la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del ET, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico [Sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (R. 1232/1990 y 2271/1991), 15 y 29 de enero de 1997 (R. 952/1996 y 3461/1995), 6 de Julio de 2004 (R. 5346/2003), 9 de julio de 2004 (R. 3496/2002), 24 de mayo de 2005 (R. 1728/04) y 3 de julio de 2007 (R. 2486/07)].

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones, procede declarar la inadmisión del recurso. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral se imponen las costas a la parte recurrente y se acuerda la pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora D^a Cayetana de Zulueta Luchsinger, en nombre y representación de CORTIJO LA PEÑUELA contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 5 de abril de 2011, en el recurso de suplicación número 3557/2010, interpuesto por CORTIJO LA PEÑUELA, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Jérez de la Frontera de fecha 3 de junio de 2010, en el procedimiento nº 1523/2009 seguido a instancia de D. Herminio contra CORTIJO LA PEÑUELA, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 2475/2009
Id Cendoj: 28079140012009200277
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2885/2007
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Aurelio Desdentado Bonete
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a tres de Febrero de dos mil nueve.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. AURELIO DESDENTADO BONETE.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 24 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 21 de junio de 2006, en el procedimiento nº 148/06 seguido a instancia de D. Rafael contra RENFE OPERADORA, sobre despido, que estimaba parcialmente la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por ambas partes, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 24 de mayo de 2007, que desestimaba el recurso interpuesto por el demandante y estimaba el interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 10 de junio de 2008 se formalizó por la Letrada D^a Lara Martins Muñoz, en nombre y representación de D. Rafael, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 25 de septiembre de 2008 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción y por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El 13 de octubre de 2005, el actor -factor en la empresa demandada Renfe Operadoraprestó servicios en la estación de Montcada y Reixac-Manresa en el turno de mañana obteniéndose una recaudación de 699,60 €, que debió introducir en el sobre correspondiente con el nº 21. Retirada la recaudación por la empresa de seguridad, esta comprobó que dicho sobre contenía únicamente la cantidad de 1,10 € y papeles, procediendo la empresa mediante carta de 12 de enero de 2006 -tras la tramitación del oportuno expediente- al despido disciplinario del actor que había repuesto la cantidad de 695,50 € en el diario de operaciones de estaciones del 24 al 26 de octubre de 2005. El actor había sido diagnosticado como dependiente a la cocaína y abuso de alcohol y durante la tramitación del expediente manifestó su deseo de ser acogido al plan de drogodependencia y alcoholismo de la empresa, habiendo sido admitido en la Comunidad Terapéutica de Can Perellada el 15 de junio de 2006.

La sentencia de instancia declaró improcedente el despido al apreciar dos atenuantes en la que considera conducta muy grave del actor: la reposición del dinero y la decisión de someterse al plan de drogodependencia y alcoholismo de la empresa. Recurrida en suplicación por la demandada, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 24 de mayo de 2007 estima el recurso y declara procedente el despido. Valora dicha sentencia que la devolución de las cantidades no fue inmediata sino entre los días 24 y 26 de octubre cuando ya se había constatado la apropiación el anterior día 13; respecto al tratamiento del actor que muestra una voluntad de rehabilitación, la sentencia razona que no está prevista en la norma

colectiva por lo que no puede alterar la sanción impuesta prevista en el convenio ya que la facultad de atender esta clase de atenuantes, en caso de que no sea preceptiva, recae sobre la empresa demandada; además la sentencia valora que en ocasiones anteriores el actor se apropió temporalmente de la recaudación.

Recorre la parte demandante en casación para la unificación de doctrina, proponiendo de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de diciembre de 2002 que declaró improcedente el despido disciplinario del actor.

En el recurso se aprecian dos causas de inadmisión. La primera es la falta de relación precisa circunstanciada de la contradicción, que exige el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, habiendo reiterado la Sala que para cumplir este requisito el recurso debe establecer la identidad de los supuestos a partir de los que afirma la existencia de contradicción mediante una argumentación mínima sobre la concurrencia de las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, a través de un examen, que sea suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que el recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas (Sentencias de 27 de mayo de 1992 (R. 1324/1991), 16 de septiembre de 2004 (R. 2465/2003), 6 de julio de 2004 (R. 5346/2003), 15 de febrero de 2005 (R. 1900/2004), 28 de junio de 2005 (R. 3116/04), 31 de enero de 2006 (R. 1857/04) y 25 de septiembre de 2007 (R. 1909/06).

El recurso no cumple el citado requisito pues el escrito de formalización no contiene una exposición pormenorizada de los supuestos de hecho que cada sentencia enjuicia, realizando de los mismos una comparación en términos genéricos, omitiendo las claras diferencias existentes que conducen a la segunda causa de inadmisión por falta de contradicción. Es además, en el escrito de interposición y no en las alegaciones en el trámite de inadmisión, en el que debe contenerse la relación precisa y circunstanciada de la contradicción.

SEGUNDO.- La segunda causa de inadmisión es la falta del requisito de la contradicción exigido en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. La Sala ha reiterado que para su apreciación es necesario que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales, siendo preciso que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». También se ha repetido que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 de enero de 1.992, RCU 824/91; 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, RCU 4067/96, 94/97 y 4203/96; 17 de mayo y 22 de junio de 2000 RCU 1253/99 y 1785/99; 14 de noviembre de 2003, RCU 4758/02; 17 de diciembre de 2004, RCU 6028/03 y 20 de enero de 2005, RCU nº 1111/03), 15 de noviembre de 2005 (RCU nº 5015/04), 7 de febrero de 2006 (RCU nº 1346/04) y 13 de marzo de 2007 (RCU nº 4633/05).

Conforme a la anterior doctrina la contradicción es inexistente al ser distintos los supuestos de hecho que cada sentencia enjuicia. En el caso de la sentencia de contraste el actor -que había sido diagnosticado de trastorno por la dependencia del alcohol, con importantes repercusiones físicas laborales y familiares prestaba servicios como jefe de vestíbulo en la demandada Metro de Madrid S.A. que procedió a su despido porque en dos ocasiones -el 25 de septiembre y el 12 de noviembre de 2001 - abandonó el servicio sin previa comunicación ni autorización, apareciendo tres cuartos de hora después en otra estación, en estado de embriaguez, y se presentó en su puesto de trabajo en la misma situación no pudiendo cumplir con sus funciones. La sentencia entiende que para que la embriaguez constituya un grave incumplimiento es imprescindible su habitualidad, que no concurre en el caso, al tratarse de dos hechos aislados en un periodo de once meses. Por tanto, se trata de una conducta distinta a la de la sentencia recurrida que contempla la apropiación de una recaudación y su devolución por parte del trabajador cuando la apropiación ya había sido detectada.

Además, en relación con la situación de dependencia del alcohol y las drogas, en el caso que se propone como término de comparación existía un acuerdo entre los trabajadores y la empresa por el que esta

quedaba obligada a considerar como enfermedades comunes el alcoholismo y la drogadicción y a gestionar el tratamiento de las mismas, y la sentencia de contraste valora que la demandada no realizó actividad alguna dirigida al seguimiento de la enfermedad, ni por sus servicios de salud se mantuvo contacto con el actor ni con el especialista responsable del tratamiento. En cambio, en el caso de autos no aparece el mismo grado de compromiso de la empresa demandada con sus trabajadores, aunque exista un plan de drogodependencia.

En relación con la sentencia de contraste, tampoco puede obviarse la incidencia que en el caso tuvo la suspensión de empleo y sueldo de seis meses al actor impuesta el 8 de junio de 2000 por hechos ocurridos el 27 de marzo de 2000, el día antes de ser dado de baja y de lo que el actor tuvo noticia a su salida del centro sanitario, valorando la sentencia la desestructuración que una suspensión de seis meses causa en un alcohólico «inmediatamente después a haber conseguido superar el síndrome de abstinencia, pese a ser obvio que la inactividad en nada favorece la curación en estos casos».

En su escrito de alegaciones la parte recurrente se opone a la inadmisión del recurso, pero las diferencias entre ambos supuestos son claras y justifican los diferentes pronunciamientos, aparte de la ausencia de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción que ya constituye causa suficiente para la inadmisión.

Por otra parte, la Sala ha declarado, con reiteración, que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores no es materia propia de la unificación de doctrina, ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales, ya que en los casos de calificación de los despidos como procedentes o improcedentes la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico (Sentencias de 30 de enero y 18 de mayo de 1992 (R. 1232/1990 y R. 2271/1991), 15 y 29 de enero de 1997 (R. 952/1996 y R. 3461/1995), 6 de Julio de 2004 (R. 5346/2003), 9 de julio de 2004 (R. 3496/2002), 24 de mayo de 2005 (R. 1728/04), 8 de junio de 2006 (R. 5165/04) y 3 de julio de 2007 (R. 2486/06).

TERCERO.- De conformidad con todo lo anterior y con el informe del Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con lo establecido en los artículos 217, 222 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral. Sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a Lara Martins Muñoz, en nombre y representación de D. Rafael contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 24 de mayo de 2007, en el recurso de suplicación número 681/07, interpuesto por D. Rafael y por RENFE OPERADORA, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 24 de los de Barcelona de fecha 21 de junio de 2006, en el procedimiento nº 148/06 seguido a instancia de D. Rafael contra RENFE OPERADORA, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 1272/2004 - ECLI:ES:TS:2004:1272A
Id Cendoj: 28079140012004200501
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1427/2003
Nº de Resolución:
Procedimiento: Inadmisión
Ponente: Juan Francisco García Sánchez
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a cinco de Febrero de dos mil cuatro.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Mataró se dictó sentencia en fecha 12 de julio de 2002, en el procedimiento nº 391/02 seguido a instancia de Jesús Carlos y Germán contra INDUSTRIA TEXTFIN-FININTEX, S.L. y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre cantidad-despido, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 9 de diciembre de 2002, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 12 de marzo de 2003 se formalizó por la Letrada D^a Montserrat Sánchez Díaz en nombre y representación de INDUSTRIAS TEXTFIN-FININTEX, S.L. -Legal Representante D. Miquel Coll Ribas-, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción, falta de contradicción y falta de denuncia y fundamentación de la infracción legal. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que el recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos. Por su parte, el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral dispone que el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, con aportación certificada de la sentencia o sentencias contrarias.

Como se precisa en la precedente providencia de 18 de noviembre de 2003 que abrió el trámite de inadmisión ninguna de estas exigencias se cumple en el presente recurso. En relación con el indicado defecto (omisión de la relación precisa y circunstanciada de la contradicción), la parte recurrente no cumple el anterior requisito porque se limita prácticamente a la cita de las sentencias de contraste -dictadas por las Salas de Cataluña y de La Rioja- con una muy escueta referencia a los supuestos en que dichas sentencias enjuician, omitiendo por tanto su comparación con el caso que la sentencia recurrida contempla, a los efectos de evidenciar la sustancial identidad que la Ley exige.

Pero además, el recurso de casación debe ser inadmitido por no concurrir el requisito de la contradicción entre la sentencia recurrida (STSJ/Cataluña 9-XII-2002 -rollo 7226/02) y la invocada como de contraste (STSJ/

Cataluña 25-I-01 -rollo 6695/00), requisito o presupuesto exigido en el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, al no concurrir aquella identidad sustancial entre las sentencias a comparar. Dado que:

- a) En el supuesto enjuiciado, de la versión judicial de los hechos se desprende que los actores han venido prestando servicios para la mercantil demandada -hoy recurrente- con la categoría de oficial hasta que en fecha 19-03-02 la patronal les comunica carta de despido por motivos disciplinarios, en particular, por disminución del rendimiento del trabajo, lo que conlleva mala fe contractual y abuso de confianza, con ocasión de que aprovechan cuando no está el encargado o su compañero para realizar sus tareas lentamente, paran la máquina, aprovechan para desayunar en un tiempo superior a 20 minutos que tiene establecidos. La sentencia recurrida ha confirmado la decisión judicial de instancia que calificó la decisión extintiva empresarial como improcedente con las consecuencias legales inherentes a dicho pronunciamiento.
- b) Por el contrario en el caso decidido por la sentencia de referencia la Sala sentenciadora ha llegado a un pronunciamiento adverso a los intereses de la parte actora. En dicha sentencia los datos históricos para la decisión son que el actor venía prestando servicios para la demandada con la categoría de Cuidador Psiquiátrico. El día 23-11-1999 a las 14,20 horas fue sorprendido dormido en la zona donde desarrollaba su trabajo en el pabellón de retraso mental, siendo despertado por un paciente sobre las 15.05 horas cuando estaba sentado en la butaca y con las piernas estiradas. El tribunal de suplicación entiende que la conducta relatada es constitutiva de transgresión de la buena fe contractual, sin que sea óbice para ello que el actor tenga antecedentes de enolismo crónico y siga tratamiento médico-farmacológico. Constando, igualmente, que había sido sancionado con anterioridad por encontrarse dormido en su turno de noche con síntomas de embriaguez.

Falta en el presente caso el inexcusable requisito de la contradicción, tal como el mismo aparece definido en el actual artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. Y falta dicho requisito porque no existen entre las dos sentencias que se contraponen las identidades que dicho precepto exige, al no tratarse de litigantes en la misma situación, si bien es cierto que en ambos supuestos se examinan despidos disciplinarios distintas son las causas invocadas, las conductas y circunstancias profesionales de los actores en cada uno de los supuestos contemplados. Así, mientras que en la sentencia de referencia nos hallamos en presencia de un trabajador que fue sorprendido dormido en la zona donde desarrollaba su trabajo en el pabellón de retraso mental, y que anteriormente había sido sancionado por similares hechos; en el caso de la sentencia recurrida se imputa bajo rendimiento a los demandantes con ocasión de parar las máquinas durante parte de su jornada de trabajo.

Por otra parte, esta Sala ha reiterado -y así lo recuerda la reciente sentencia de 27 de octubre de 1998 (recurso 3616/97) con cita de distintas resoluciones- que la valoración casuística de circunstancias individualizadas y variables en cada supuesto no es materia propia de la unificación de doctrina, como ocurre en la calificación de los despidos disciplinarios.

Al respecto, resulta especialmente significativa la sentencia de 16 de julio de 1991 dictada en unificación de doctrina (recurso 110/91) en un supuesto de despido disciplinario y según la cual, «...la conducta del trabajador que, en definitiva, es lo que se juzga en un proceso por despido disciplinario, difiere en cada uno de ellos; lo cual, por otra parte, resulta obvio, sin necesidad de entrar en un análisis comparativo de dichas conductas en uno y otro caso; porque de suyo, el comportamiento del ser humano ante circunstancias concretas y, por tanto, diferentes en el tiempo y en el espacio de otras que, por mucho que sea su similitud nunca podrán ser iguales, tampoco podrá ser equiparado y homologado en forma alguna con el de otra persona, en estas circunstancias.»

De conformidad con lo anteriormente expuesto, hay que concluir que la calificación de los supuestos de hecho en materia de despidos disciplinarios no es materia propia de la unificación de doctrina porque parten necesariamente de una valoración individualizada de circunstancias que no permite establecer criterios generales de interpretación.

SEGUNDO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina es un recurso extraordinario que debe estar fundado en un motivo de infracción de ley (artículo 222 de la LPL, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal). Por ello, resulta plenamente aplicable en este recurso el artículo

477 de la LEC, a tenor del cual ha de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso y el artículo 481 de la misma Ley que exige que en el escrito de interposición del recurso se exponga, con la necesaria extensión, sus fundamentos. Por otra parte, el artículo 483.2.2º de la LEC establece que será causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de los requisitos establecidos para el escrito de interposición y así lo ha declarado reiteradamente esta Sala (sentencias de 10 de octubre de 1.992, 16 de julio de 1.993 y 3 de febrero de 1998).

También puede añadirse a mayor abundamiento, que en el escrito de formalización del recurso no señala el recurrente la infracción legal en que, a su juicio, incurre la sentencia impugnada. Esta falta de mención y de análisis de la infracción legal denunciada incumple el requisito expresado en el art. 222 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) de «fundamentación de la infracción legal», tal como resulta de la interpretación gramatical, y tal como ha sido entendido por jurisprudencia constante de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo. No es posible suplir esta deficiencia, de acuerdo también con reiterada doctrina jurisprudencial, a través de la fundamentación del presupuesto de contradicción de sentencias (que tampoco cumple el recurrente), ya que este último se refiere a un presupuesto distinto, y atiende a un aspecto diferente del recurso de unificación de doctrina.

TERCERO.- De conformidad con los argumentos anteriores, la decisión congruente es la de que el recurso aquí planteado no puede ser admitido, siendo en dicho sentido en el mismo en que se ha manifestado el Ministerio Fiscal, sin que el escrito de alegaciones del recurrente, tenga contenido suficiente para dejar sin efecto las apreciaciones que en el mismo sentido le fueron puestas de manifiesto por la providencia que abrió el trámite de inadmisión; con imposición de costas a la mercantil recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir, y el mantenimiento del aval en garantía del cumplimiento de la condena.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a Montserrat Sánchez Díaz, en nombre y representación de INDUSTRIAS TEXTFIN- FININTEX, S.L. -Legal Representante D. Miquel Coll Ribas- contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 9 de diciembre de 2002, en el recurso de suplicación número 7226/02, interpuesto por INDUSTRIAS TEXTFIN-FININTEX, S.L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Mataró de fecha 12 de julio de 2002, en el procedimiento nº 391/02 seguido a instancia de Jesús Carlos y Germán contra INDUSTRIA TEXTFIN-FININTEX, S.L. y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre cantidad-despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente; pérdida del depósito constituido, y mantenimiento del aval en garantía del cumplimiento de la condena.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 704/2004 - ECLI:ES:TS:2004:704A
Id Cendoj: 28079140012004200181
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1382/2003
Nº de Resolución:
Procedimiento: Inadmisión
Ponente: Gonzalo Moliner Tamborero
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Enero de dos mil cuatro.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 32 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 6 de marzo de 2002, en el procedimiento nº 917/01 seguido a instancia de Diego contra METRO DE MADRID, S.A., sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 27 de diciembre de 2002, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 13 de marzo de 2003 se formalizó por el Procurador D. Jose Manuel Villasante García en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 1 de octubre de 2003 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 y 28 de enero de 1992, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, 23 de septiembre de 1998, 30 de junio de 1999, 2 de julio y 28 de septiembre de 1999).

La parte demandada -Metro de Madrid SA- pretende que se revoque el pronunciamiento de la sentencia impugnada y se confirme el de instancia, que desestimó la demanda por despido y ello con apoyo en unos hechos probados que, en esencia, consisten en que el actor ha venido prestando servicios para la citada mercantil desde el 13-10-1981 como Jefe de Vestíbulo. El 13-03- 2000 se emitió un informe por el Servicio de Salud Laboral de la empresa en que figuraba que el trabajador sufría un trastorno por dependencia del alcohol, con importantes repercusiones físicas, laborales y familiares. El 28-03-2000 fue declarado en situación de Incapacidad Temporal, siéndole prescrita medicación para su desintoxicación, quedando pendiente de ingreso

hospitalario que se produjo el 29-05-2000, dándose de alta el 26-06-2000. El 8-06-2000, es sancionado con suspensión de empleo y sueldo por seis meses, con ocasión de los hechos que habían acontecido el 27-03-2000. El 26-11-2001 se le notifica carta de despido, en virtud de los hechos acaecidos los días 25-09-2001 y 12-11-2001, consistentes en el abandono de servicio sin previa comunicación ni autorización, apareciendo tres cuartos de hora después en otra estación en estado de embriaguez, no pudiendo cumplir sus funciones. La «ratio decidendi» de la resolución impugnada deriva de que ni concurre el presupuesto de la habitualidad en la embriaguez examinada, ni consta que ésta haya repercutido negativamente en el trabajo, destacando la Sala sentenciadora, especialmente, el incumplimiento por parte de la empleadora del Acuerdo de 3-03-1988 en virtud del cual venía obligada a gestionar el tratamiento de la enfermedad del actor.

Contra la anterior decisión se alza en casación para la unificación de doctrina la parte demandada y designando a efectos de viabilizar su impugnación la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 11 de abril de 2000 que contiene un pronunciamiento adverso a los intereses de la parte demandante. En el caso allí decidido, el actor venía prestando servicios como peón para la empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA, desde el 24-09-1986. Con fecha 27-08-1999, la empresa despidió al actor porque el día 19-08-1999, durante su jornada laboral, el encargado del servicio de limpieza le encontró en estado ebrio en las inmediaciones de un determinado bar. En su expediente personal constan otras sanciones: de fechas 15-07-1998, 29-09-1998, 1-06-1999, 30-05-1999, derivadas de faltas al trabajo injustificadas, consumo reiterado de alcohol en horas de trabajo y repetidas entradas a bares durante la jornada laboral.

No hay, por tanto la necesaria identidad fáctica exigida legalmente para abordar el juicio de contradicción, pues si bien en ambos casos se examina un despido disciplinario ex art. 54.2 f) del Estatuto de los Trabajadores, las conductas examinadas y en su caso valoradas impiden apreciar la divergencia doctrinal pretendida. Así, mientras que en la sentencia de referencia, consta que se trata de una conducta habitual que repercute, además, en la calidad del trabajo, dada la categoría profesional ostentada por el demandante al afectar a sus facultades de percepción y coordinación; por el contrario en la sentencia combatida, la conducta sancionada se halla diferida en el tiempo (dos hechos en un período de once meses, y otro más de un año y medio antes), sin que conste la repercusión fáctica de la citada conducta, por otro lado, el tribunal de suplicación enlaza los hechos imputados con el Acuerdo de 3-03-1988 asumido con la empresa, extremo de insoslayable relevancia jurídica que es ajeno a la sentencia de cotejo y que impide en consecuencia la divergencia doctrinal denunciada.

Debe también recordarse que la jurisprudencia de esta Sala ha declarado que en materia de despido disciplinario, la causa extintiva del contrato de trabajo vinculada a la apreciación de conductas, lo relevante suele ser la fijación de los hechos y su valoración, más que el establecimiento de reglas de carácter general sobre el sentido de la norma, por lo que la unificación doctrinal es difícil (entre otras muchas, SSTS/IV 21-X y 19-XI-1991, 2-XI-1992, 1-III-1993, 3-III-1994, 25-IX-1995, 25-I y 14-VI-1996).

En conclusión, como se ha razonado con anterioridad, en el presente caso, en efecto, se comprueba que los hechos que, en definitiva, han resultado acreditados en la sentencia de contraste y en la impugnada con posible incidencia en la valoración de la trascendencia de la conducta de uno y otro trabajador son esencialmente distintos al variar diversas circunstancias concurrentes de las que fundamentaron el fallo en uno y otro supuesto, por lo que, consecuentemente, las conclusiones jurídicas a las que han llegado una y otra sentencia pueden ser validamente distintas en apreciación de los concretos datos fácticos, puesto que, como, entre otras, se declara en la STS/Social 4-III-1991 «no cualquier transgresión de la buena fe contractual justifica el despido, sino aquella que por ser grave y culpable suponga la violación trascendente de un deber de conducta del trabajador, esto es la que tenga calidad bastante para que sea lícita y ajustada la resolución contractual basada en incumplimiento del trabajador (art. 1124 del Código Civil)».

SEGUNDO.- Por lo expuesto, no habiendo el recurrente formulado alegaciones en el trámite oportuno, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y con imposición de costas a la mercantil recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir, y el mantenimiento del aval en garantía del cumplimiento de la condena.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador D. José Manuel Villasante García, en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 27 de diciembre de 2002, en el recurso de suplicación número 2998/02, interpuesto por Diego, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 32 de los de Madrid de fecha 6 de marzo de 2002, en el procedimiento nº 917/01 seguido a instancia de Diego contra METRO DE MADRID, S.A., sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente; pérdida del depósito constituido, y mantenimiento del aval en garantía del cumplimiento de la condena.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Regulación de la embriaguez habitual en los convenios colectivos

Roj: STS 6641/2013
Id Cendoj: 28079140012013100943
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 62/2013
Nº de Resolución:
Procedimiento: Casación
Ponente: Rosa María Viroles Piñol
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a doce de Noviembre de dos mil trece.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de Casación interpuesto por la Letrada D^a Eva Marín Oliaga, en nombre y representación de SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A. y GRUPO-SUPECO-MAXOR, SL, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de fecha 19 de abril de 2012, Núm. Procedimiento 49/2012, en actuaciones seguidas en virtud de demanda a instancia de FEDERACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y TURISMO DE COMISIONES OBRERAS contra SUPERMERCADOS CHAMPION S.A., GRUPO SUPECO-MAXOR SL, FETICO; FEDERACION ESTATAL DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y TURISMO Y JUEGO DE UGT, siendo parte el MINISTERIO FISCAL, sobre Impugnación de Convenio Colectivo.

Ha comparecido en concepto de recurrido la FEDERACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y TURISMO DE COMISIONES OBRERAS (FECOHT-CC.OO), representada por el Letrado D. Angel Martín Aguado.

Es Ponente la Excm. Sra. D^a. Rosa Maria Viroles Piñol, Magistrada de Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por la representación de la FEDERACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y TURISMO DE COMISIONES OBRERAS se presentó demanda de Impugnación de Convenio Colectivo de la que conoció la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y en la que tras exponer los hechos y motivos que estimaron de aplicación se terminó por suplicar se dicte sentencia por la que se declare:

«1. La nulidad, por incurrir en ilegalidad, de los siguientes preceptos y contenidos del convenio impugnado: - Art. 10 C.4 en relación con las prorrogas del contrato en prácticas; - El inciso final del art. 10 E.2, en relación con la jubilación parcial del Grupo de Mandos, cuyo contenido material se relaciona en el ordinal cuarto de nuestra demanda; - Art. 10 G.1 en relación con los supuestos de «campañas específicas, ventas especiales» y el inciso final: «y en general las actividades que presenten perfiles propios y diferenciales del resto de la actividad»; - Art. 12, penúltimo párrafo; - Art. 25. párrafo tercero; - Art. 32, párrafo segundo: «Para los trabajadores contratados en el Grupo IV, durante el primer año de contratación, el salario base será del 95% del correspondiente salario base del Grupo de Profesionales; - Art. 52 c) 10.

2.- Que se condene a las demandadas a estar y pasar por dichas declaraciones».

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio, con la intervención de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a las actuaciones. Recibido el pleito a prueba se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.

TERCERO.- Con fecha 19 de abril de 2012 se dictó sentencia por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en la que consta el siguiente fallo: «Que estimando en parte la demanda, en trámite de impugnación de Convenio Colectivo, interpuesta por CC.OO. a la que se adhirió la UGT, dirigida contra el grupo CHAMPIONS y el Sindicato FETICO, siendo parte también el Ministerio Fiscal, debemos declarar y declaramos nulos por

ilegalidad los siguientes apartados del Convenio Colectivo impugnado y que fue publicado en el BOE de fecha 30.1.2012:

- El punto 4 del apdo C del art. 10.
- El penúltimo párrafo del art. 12.
- El penúltimo párrafo del art. 25.
- El párrafo 2º del art. 32.
- El artículo 52.c) 10 del mismo.
- Del art. 10.E. 2 se anula y deja sin efecto el segundo inciso, desde la expresión «No obstante» hasta el final del párrafo. En consecuencia debemos declarar y declaramos que no contraviene la legalidad el resto de los apartados del Convenio Colectivo cuya nulidad se postula. Comuníquese a la autoridad laboral».

CUARTO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: «PRIMERO.- La empresa demandada rigen las relaciones laborales con sus trabajadores por el Convenio Colectivo, publicado en el BOE de fecha 30 de Enero de 2012; SEGUNDO.- El referido Convenio fue suscrito por los representantes de CHAMPIONS y del sindicato FETICO. Tal convenio dispone en su art. 4 que su texto entrará en vigor en la fecha de la firma, que fue el 15 de Abril de 2011, salvo disposición expresa contenida en el mismo Convenio, finalizando su vigencia en el momento previsto en el párrafo siguiente, o en todo caso y subsidiariamente, el 31 de Diciembre de 2012; TERCERO.- En el texto del citado Convenio se contienen las siguientes disposiciones: art. 10 c.4: cuando el contrato en prácticas se concierte con una duración inferior a dos años, las partes podrán prorrogarlo por periodos de hasta seis meses, pero sin superar el periodo máximo de dos años; art. 10.e.2: «La empresa deberá facilitar la jubilación parcial de los trabajadores que lo soliciten, cumpliendo las formalidades que conduzcan a la realización del correspondiente contrato de relevo. No obstante lo anterior, atendiendo a las específicas tareas, responsabilidades y confianza que conlleva el grupo de mandos, dicha obligación solo será exigible para facilitar la jubilación parcial de trabajadores encuadrados en dicho grupo profesional, cuando la sustitución del trabajador que quiera jubilarse parcialmente pueda realizarse, conforme a la legislación vigente en cada momento, por medio de la promoción interna»; art. 10 g.1: «A los efectos previstos en el artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores y artículo 12 del Real Decreto 2720/1998, además de los contenidos generales, se identifican como trabajos o tareas con sustantividad propia, dentro de la actividad normal de la empresa, que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza, los siguientes: campañas específicas, ventas especiales, promociones de productos o servicios propios o de terceros. Otras tareas comerciales, que por inhabituales no pueden ser cubiertas con otro tipo de contratación y, en general, las actividades que presenten perfiles propios y diferenciados del resto de la actividad»; art. 12, penúltimo párrafo: Los trabajadores del Grupo de profesionales contratados a partir de la firma del presente Convenio, durante el primer año, por el hecho de la necesidad de adaptación a los sistemas de trabajo de la empresa, percibirán el 95 por ciento del salario base de grupo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 32 del presente Convenio; art. 25, párrafo tercero: Se entiende por salario de contratación de profesionales, aquel que percibe el trabajador durante el primer año cuando se le contrata por primera vez en algunas de las empresas, en este caso, el salario base de los profesionales de menos de un año será del 95 por ciento del establecido para dicho grupo profesional; art. 32, párrafo 2º: Para los trabajadores contratados en el grupo IV, durante el primer año de contratación, el salario base será del 95% del correspondiente salario base del grupo de Profesionales; art. 52. c) 10: Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de acuerdo con la regulación de faltas y sanciones que se especifica en los apartados siguientes: c) Se consideran faltas muy graves los siguientes: 'La embriaguez y drogodependencia manifestada en jornada laboral y en su puesto de trabajo' Se han cumplido las previsiones legales».

QUINTO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por la representación de SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. y GRUPO SUPECO MAXOR S.L., siendo admitido a trámite por esta Sala.

SEXTO.- Impugnado el recurso por la parte personada y evacuado el traslado conferido por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de que el recurso debe ser considerado parcialmente procedente, e instruida

la Excm. Sra. Magistrada Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 5 de noviembre de 2013, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- 1.- Por la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO., se formula demanda de Impugnación del Convenio Colectivo de Supermercados Champion, S.A. (BOE 30-01-2012), frente a las empresas Supermercados Champion S.A. y Grupo Superco-Maxor SL, FETICO, interesando fuera llamada como parte interesada a la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Juego de la UGT. Dicho convenio se suscribió por los representantes de Champion y FETICO, en relación con los arts. 10 c) 4, 10 e) 2, 10 g) 1, 12 penúltimo párrafo, 25 párrafo tercero, 32 párrafo 2 y 52 c) 10.

2.- La Sala Social de la Audiencia Nacional, en sentencia de 19 de abril de 2012 -ahora recurrida- (Proc. 49/2012), falla estimando en parte la demanda, declarando nulos por ilegalidad los siguientes apartados del Convenio Colectivo impugnado: El punto 4 del apartado C del art. 10, el penúltimo párrafo del art. 12, el penúltimo párrafo del art. 25, el párrafo 2º del art. 32, el art. 52 c) 10 del mismo, y del art. 10 E 2 se anula y deja sin efecto el segundo inciso, desde la expresión «No obstante» hasta el final del párrafo. Asimismo, se declara que no contraviene la legalidad el resto de los apartados del Convenio Colectivo cuya nulidad se postula.

3.- Por Auto de fecha 25-enero-2013, se tiene por no formalizado el recurso de Casación anunciado por FETICO.

4.- Se formaliza Recurso de Casación por SUPERMERCADOS CHAMPION SA, y por GRUPO SUPECO-MAXOR SL, ambos con unidad letrada y con idéntico contenido en los términos que a continuación se indicarán.

5.- Dicho recurso es impugnado por la Federación de Comercio. Hostelería y Turismo de CC.OO., solicitando se confirme la sentencia recurrida.

6.- El Ministerio Fiscal ha emitido informe en el que estima deben desestimarse los motivos primero, segundo, tercero, quinto y sexto del recurso, y estimarse el cuarto, en los términos que se analizarán.

SEGUNDO.- Al formalizarse ambos Recursos de Casación (por SUPERMERCADOS CHAMPION SA, y por GRUPO SUPECO- MAXOR SL), con unidad letrada e idéntico contenido, se impone un examen conjunto de ambos recursos.

La cuestión litigiosa consiste en determinar si son nulos o no ajustados a derecho los preceptos impugnados del Convenio Colectivo del Grupo Champions (BOE de 30-01-2012) relativos a la duración del contrato en prácticas (art. 10 c 4), contrato de relevo para facilitar la jubilación parcial (art. 10 e 2), trato diferenciado a los trabajadores de nueva contratación durante el primer año (art.12 penúltimo párrafo, art. 25 párrafo tercero, art. 32 párrafo 2º) y la tipificación como falta muy grave de «*la embriaguez y drogodependencia manifestado en jornada laboral y en su puesto de trabajo*» (art. 52 c 10).

1º/ El primer motivo de recurso, se formaliza al amparo de lo dispuesto en el artículo 207 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia como defecto procesal que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, genera indefensión a las partes del proceso, todo ello en relación con el art. 97 LRJS, y art. 248.3 LOPJ, en relación con el art. 25 de la Constitución Española. Estima la parte recurrente que al declararse la nulidad de los arts. 10.e), 12, 25 y 32 del Convenio Colectivo, la Sala de instancia no interpreta los preceptos en términos convencionalmente establecidos, ni valora la prueba documental, lo que provoca que la sentencia esté inmotivada.

Entiende la parte recurrente respecto a los arts. 12, 25 y 32 del Convenio Colectivo, que lo que establece el precepto es un salario de contratación del 95% establecido para el grupo profesional a que se refiere cuando se les contrate por primera vez en alguna de las empresas durante el primer año, existiendo justificación idónea, objetiva y razonable de tal hecho diferenciador, sin que la prueba aportada haya sido valorada por la

Sala de instancia. Y, respecto al art. 10 e) del Convenio Colectivo, consideran que en el mismo se recoge una justificación objetiva y razonable que elimina cualquier trato discriminatorio o arbitrario, y que se justifica por las propias tareas que desempeñan los mandos.

Es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias 142/1987, 36/1989, 368/93, 87/1994 y 39/1996 -entre otras-), que afirma que *«sólo viola el artículo 24.1 de la Constitución aquella incongruencia en virtud de la cual el órgano judicial deja sin contestación las pretensiones de las partes sometidas a su conocimiento, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como una desestimación tácita (sentencia 368/93). La exigencia del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -en el texto de 1881- de que las sentencias decidan todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate y de que sean congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en le pleito, no implica un ajuste literal a las pretensiones, dada la potestad judicial para aplicar la norma correcta, lo que supone el deber judicial de dar respuesta adecuada y congruente con respecto a los hechos que determinen la «causa petendi», de tal modo que sólo ellos, junto con la norma que les sea correctamente aplicable, sean los que determinen el fallo (sentencia 142/87)»*. También, y respecto a la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, afirma el Tribunal Constitucional que ello *«no comporta necesariamente que el Juez deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido, ni le impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado, ni es exigible una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, siendo bastante que la motivación cumpla la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la decisión adoptada y, de otro, permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico (sentencia 36/89)»*.

En el supuesto enjuiciado, ha de estimarse que la sentencia está suficientemente motivada y razonada, por lo que no adolece de la denunciada falta de motivación. En concreto, respecto a las cuestiones señaladas en el presente motivo de recurso son razonadamente expuestas en los fundamentos de derecho tercero y quinto de la sentencia recurrida que damos aquí por reproducidos, por lo que el desacuerdo con la solución de instancia que puede no coincidir con los intereses de la parte, en modo alguno pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia recurrida. Por ello el motivo ha de desestimarse.

2º/ El segundo motivo de recurso, se ampara en el art. 207 apartado d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a fin de que se adicione un hecho probado cuarto a la sentencia recurrida, en los términos que propone y que se da aquí por reproducido, apoyando la pretensión en unos documentos consistentes básicamente en referencias a unos Formatos formativos de Supermercados.

De acuerdo con reiterada doctrina de esta Sala, el motivo debe ser desestimado por cuanto la valoración efectuada por la Sala de instancia de los documentos que ahora en base a los mismos se pretende adicionar un hecho no puede ser sustituida por la de la parte recurrente. Sin perjuicio de que los documentos designados puedan ser interpretables, una vez lo ha hecho la Sala de instancia, no cabe una nueva valoración en casación, al no ponerse de manifiesto expresa y concretamente error alguno en aquella valoración ni su trascendencia para la solución del supuesto enjuiciado. No cabe pues, sustituir el criterio objetivo e imparcial de la Sala de instancia, por una valoración interesada y subjetiva de parte.

3º/ El tercer motivo de recurso, se ampara en el art. 207 apartado e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por entender la parte recurrente que la sentencia recurrida al anular el punto cuarto del apartado c) del art. 10 e) infringe las normas del ordenamiento jurídico, y en concreto el art. 11 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 19 del Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo. Y ello, porque considera que el citado precepto se ajusta a la normativa legal, no vulnerándose en ningún caso el art. 19 del RD 488/1998 de 27 de marzo por el que se desarrolla el art. 11 del Estatuto de los Trabajadores, solicitando se declare la legalidad del precepto convencional.

Conforme al art. 10 c) cuatro del Convenio Colectivo impugnado, *«cuando el contrato en prácticas se concierte con una duración inferior a dos años, las partes podrán prorrogarlo por periodos de hasta seis meses, pero sin superar el periodo máximo de dos años»*. Para la solución de la litis, ha de tenerse en cuenta que, conforme al art. 11.1.b) del ET, *«La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, dentro de cuyos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los convenios*

colectivos sectoriales de ámbito inferior, podrán determinar la duración del contrato, atendiendo a las características del sector y de las prácticas a realizar».

Siendo que el precepto impugnado se refiere al contrato en prácticas y en concreto a las prórrogas de dichos contratos por periodos de hasta seis meses, es claro, como señala la sentencia de instancia que el precepto es contrario a lo dispuesto en el art. 11 ET referido, porque en el mismo solo se autoriza a los convenios sectoriales de ámbito estatal o sectorial de ámbito inferior para determinar la duración de estos contratos, y en el presente caso, el Convenio Colectivo cuestionado no tiene el carácter de convenio de sector sino de empresa. En consecuencia, el Convenio Colectivo del grupo Champion no puede incluir una cláusula que disminuya o restrinja la previsión del ET y del RD 488/1988 de 27 de marzo, y la duración de las prórrogas de hasta seis meses pactada, vulnera el límite contemplado en el art. 19-1 del RD.488/1988, como entendió la sentencia recurrida. El motivo ha de desestimarse.

4º/ El cuarto motivo de recurso se formula al amparo de lo dispuesto en el art. 207 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por entender la parte recurrente que la sentencia recurrida al anular el segundo inciso del art. 10 e) desde la expresión «no obstante» hasta el final del párrafo del convenio colectivo del Grupo Champion publicado en el BOE de fecha 30 de enero de 2012, infringe las normas del ordenamiento jurídico, y en concreto los artículos 14 y 37 CE, artículo 12.6 ET, artículos 82 y sgs. ET. Alegan que no existe un derecho incondicionado del trabajador a acceder a la jubilación parcial, siendo conforme a derecho condicionar que el contrato de relevo se realice por medio de promoción interna en atención a las tareas, responsabilidades y confianza que conlleva el grupo de mandos, teniendo como fundamento la regulación convencional el salvaguardar el derecho de promoción interna de los trabajadores de la empresa, de forma que sean los trabajadores en plantilla los que sustituyan al jubilado parcial en detrimento de los trabajadores de fuera.

El art. 10 e) 2 del Convenio Colectivo cuestionado establece que: *«La empresa deberá facilitar la jubilación parcial de los trabajadores que lo soliciten, cumpliendo las formalidades que conduzcan a la realización del correspondiente contrato de relevo. No obstante lo anterior, atendiendo a las específicas tareas, responsabilidades y confianza que conlleva el grupo de mandos, dicha obligación sólo será exigible para facilitar la jubilación parcial de los trabajadores encuadrados en dicho grupo profesional, cuando la sustitución del trabajador que quiera jubilarse parcialmente pueda realizarse, conforme a la legislación vigente en cada momento, por medio de promoción interna».*

La sentencia recurrida argumenta que la promoción profesional regulada en el art. 17 del convenio colectivo, «no contempla ningún modo de promocionar al Grupo I, que es el que encuadra a los mandos del Grupo Champion, tal y como dispone el art. 12 del convenio, sin que exista ningún otro sistema de promoción profesional en los arts. 23 y 24 ET» concluyendo por ello que «el cumplimiento de la condición, para que los mandos de 64 años puedan jubilarse anticipadamente, queda exclusivamente al arbitrio de su empleador, puesto que ni está obligado a promocionar internamente a sus trabajadores al Grupo I, ni estos tienen posibilidad legal de reclamar su promoción al grupo de mandos, lo que nos obliga a estimar la nulidad de la cláusula impugnada, puesto que si el cumplimiento de la condición depende de la exclusiva voluntad del deudor, la condición será nula, a tenor de lo dispuesto en el art. 1115 CC. La nulidad de la condición comporta la estimación de la demanda, aunque no sería ilegítimo, en principio, que los negociadores del convenio excluyeran de la jubilación anticipada al grupo de mandos, siempre que acreditaran la concurrencia de causas idóneas, razonables y proporcionadas para dicha distinción respecto a los demás trabajadores, lo que no se ha acreditado en el presente litigio, pero no pueden condicionarlo, en ningún caso, a una supuesta promoción interna, que ni es exigible legal ni convencionalmente, por lo que queda totalmente al arbitrio de la empresa».

Ciertamente, como señala la parte recurrente, el art. 10 e) del Convenio Colectivo, que regula el «contrato de relevo», comienza con una remisión al art. 12 del Estatuto de los Trabajadores, en cuyo punto 6 establece que *«Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los términos establecidos en el apartado 2 del art. 166 de la Ley General de la Seguridad Social (...) deberá acordar con su empresa una reducción de jornada y de salario (...).»*. No existe pues, un derecho incondicionado a la jubilación parcial; lo que la norma convencional prevé es que la empresa *«deberá facilitar la jubilación parcial de los trabajadores que lo soliciten»*, si bien para el personal de mando lo condiciona a que el contrato de relevo se realice por medio de la promoción interna, conforme a la legislación vigente en cada momento, atendiendo a «las específicas

tareas, responsabilidades y confianza, que conlleva el grupo de mandos...». Es claro que no existe un derecho incondicionado a acceder a la jubilación parcial; ahora bien, la condición que el precepto establece para el personal de mando de que el contrato de relevo se realice por medio de promoción interna, conforme a la legislación vigente en cada momento, atendiendo a «las específicas tareas, responsabilidades y confianza», constituye una condición imposible que como tal aboca a su nulidad (art. 115 CC), al no existir legal ni convencionalmente una regulación de tal promoción, por lo que el acceso a la jubilación parcial de los referidos trabajadores, quedaría siempre al arbitrio de la empresa. Por ello, ha de desestimarse asimismo este motivo de recurso.

5º/ El quinto motivo de recurso se formula al amparo de lo dispuesto en el art. 207 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por entender la parte recurrente que la sentencia recurrida, al anular el penúltimo párrafo del art. 12, penúltimo párrafo del art. 25 y párrafo 2 del art. 25 del Convenio Colectivo del Grupo Champion (BOE 30-1-2012), infringe las normas del ordenamiento jurídico, y en concreto los arts. 14 y 37 de la Constitución, art. 82 y sgs del Estatuto de los Trabajadores, así como la doctrina jurisprudencial aplicable a los mismos, así como la contenida en las sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2002 y del Tribunal Constitucional de 2 de enero de 1998.

Entiende la parte recurrente que no procede la nulidad del penúltimo párrafo del art. 12 y 25 y párrafo 2 del art. 25 del Convenio Colectivo, por cuanto no se está ante una rebaja de un 5% del salario base por razón de la antigüedad, basándose la diferencia de salario en la necesidad de adaptación a los sistemas de trabajo en la empresa, aplicándose el salario de contratación a todos los trabajadores a los que se contrate por primera vez en dicho grupo profesional, habiendo determinado la STS de 12-noviembre- 2002, que la fecha de ingreso en la empresa no es un motivo genérico de discriminación, y la STC 2/1998 de 2 de enero, que determina que no constituye la diferencia un trato discriminatorio, ya que el trabajador contratado a partir de una fecha tiene que adaptarse a la totalidad de la estructura general de la empresa, ni se está en presencia de una doble escala salarial por fijarse para todos los trabajadores de la empresa de nueva incorporación. Fundamentan además este motivo en la revisión de hechos probados solicitada como motivo segundo del recurso, que ha sido desestimado.

Al respecto, como señala -entre otras- la STS/IV de 12-noviembre-2002 (rec. 4334/2001): «De conformidad con doctrina jurisprudencial reiterada (STS 18-12-1997, 17-5-2000, 3-12-2000), la fecha de ingreso o admisión en la empresa no es un motivo genérico de discriminación o una circunstancia personal o social de tal carácter que se haya incluido en la lista tasada del art. 14 de la Constitución española (*«nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra circunstancia personal o social»*), o en la relación más amplia de *«discriminaciones favorables o adversas»* en el empleo y en las condiciones de trabajo de los artículos 4.2.c. y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores (*«sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español»*); también, en principio, *«disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales»*).

Sentada la anterior premisa, las diferencias de trato entre trabajadores en función de la fecha de ingreso en la empresa establecidas en convenios o acuerdos colectivos pueden ser lícitas o ilícitas, de acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional (STC 2/1998, de 12 de enero, y las que en ella se citan), según estén o no basadas en una justificación objetiva y razonable. Siguiendo esta línea jurisprudencial, en el ámbito de las relaciones de trabajo el principio de igualdad de trato en materia de salarios ha de aplicarse matizadamente, haciéndolo compatible con otros principios como la autonomía de la voluntad (STC 34/1984, de 9 de marzo), o el propio principio de autonomía colectiva (STC 177/1988, de 10 de octubre). Entre los factores objetivos que justifican las diferencias de trato en materia de remuneraciones se reconocen expresamente, entre otros, los que derivan del contenido de los actos de trabajo, de la intensidad o duración del mismo, de la calidad de su realización, de los factores circunstanciales del medio de trabajo que influyen en la penosidad o peligro de su ejecución o en el esfuerzo laboral, o de las propias necesidades del trabajador (STC 34/1984 y STS 3-12-2000).

En el presente supuesto, la diferencia salarial, a pesar de que niega la empresa tenga su razón de ser en la «antigüedad» del trabajador, no cabe duda de su directa conexión con la fecha de ingreso en la empresa, sin

justificación alguna objetiva y razonable de acuerdo con los preceptos convencionales impugnados que la regulan. Es por ello que ha de estimarse acertada la solución de instancia, pues la antigüedad en la empresa, directamente relacionada como es obvio con la fecha de ingreso del trabajador en la misma, como tal, puede constituir un incremento salarial, pero no puede convertirse -sin más- en un «minus» o elemento negativo de rebaja del 5% del salario base del trabajador, pues el salario debe considerarse, en principio, inmutable. Por todo ello, el motivo ha de desestimarse.

6º/ El sexto y último motivo de recurso se formula al amparo del artículo 207 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por entender la parte recurrente que la sentencia recurrida, al declarar que la nulidad del art. 52 c) 10 del Convenio Colectivo del Grupo Champion (BOE 31-1-2012) infringe las normas del ordenamiento jurídico, y en concreto el art. 37 CE, arts. 82 y sgs. del ET, así como de la doctrina jurisprudencial aplicable a los mismos. Estima la parte recurrente que no procede la nulidad del art. 52 c) 10, por cuanto contraviene lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores al estarse en presencia de una tipificación de una falta laboral incluida dentro del régimen disciplinario, faltas y sanciones, respecto del que rige el principio de autonomía negocial. Añade que, cosa distinta es que tal tipificación convencional pueda ser causa justificativa de despido disciplinario del art. 54.1.f) ET, pero que convencionalmente se pueden determinar faltas y sanciones diferentes a las establecidas estatutariamente.

Conforme al art. 52 c) 10 del Convenio Colectivo cuestionado: *«Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de acuerdo con la regulación de faltas y sanciones que se especifica en los apartados siguientes: (...) c) Se consideran faltas muy graves las siguientes: La embriaguez y drogodependencia manifestada en jornada laboral y en su puesto de trabajo».*

Asimismo este motivo ha de desestimarse, pues la redacción dada al precepto convencional difiere de lo dispuesto en el art. 54.1.f) del ET. Como señala el Ministerio Fiscal en su informe y la sentencia recurrida, «es un principio general del derecho, no sólo del derecho laboral o social, el que las normas sancionadoras o restrictivas de derechos no pueden ser interpretadas de manera extensiva en perjuicio del ciudadano, por lo que vulnera abiertamente el citado principio que se proclama en el art. 4.2 del Código Civil». Y en este sentido, es contraria a derecho la extensión de la causa de despido ampliándola más allá de «la habitualidad y de repercusión negativa en el trabajo que el ET exige».

TERCERO.- Por cuanto antecede, visto el informe del Ministerio Fiscal, procede la desestimación de los recursos formulados por SUPERMERCADOS CHAMPION SA, y GRUPO SUPECO-MAXOR SL; y en su consecuencia, la confirmación de la sentencia recurrida. Sin costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la Letrada Dña. Eva Marín Oliaga actuando en nombre y representación de SUPERMERCADOS CHAMPION SA, y GRUPO SUPECO-MAXOR SL, contra la sentencia de fecha 19 de abril de 2012, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en autos núm. 49/2012, seguidos a instancia de FEDERACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y TURISMO DE COMISIONES OBRERAS a la que se adhirió la FEDERACIÓN ESTATAL DE COMERCIO, HOSTELERÍA, TURISMO Y JUEGO DE UGT, contra SUPERMERCADOS CHAMPION SA, y GRUPO SUPECO-MAXOR SL, FETICO, y MINISTERIO FISCAL, sobre Impugnación de Convenio; confirmando la sentencia recurrida. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Rosa Maria Viroles Piñol hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 8 février 2012
N° de pourvoi: 11-10382
Publié au bulletin
Rejet
M. Lacabarats, président
Mme Lambremon, conseiller apporteur
M. Lalande, avocat général
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2011), qu'en 2008, la RATP a ajouté à sa campagne de lutte contre les addictions développée depuis 2004, un volet de lutte contre les toxicomanies; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Bus s'est réuni le 17 septembre 2009, pour donner son avis sur l'introduction, dans le règlement intérieur, de dispositions pour le dépistage de produits stupéfiants au moyen de tests salivaires pratiqués par des agents d'encadrement avec une possibilité de «contre-expertise» selon le même procédé;

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'expertise décidée par le CHSCT et de la condamner à lui payer une somme au titre de la prise en charge de ses frais de procédure alors, selon le moyen:

- 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut faire appel à un expert agréé que dans deux cas, d'une part, lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou, d'autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8; qu'en l'espèce, pour valider la délibération du CHSCT du 17 septembre 2009 visant à recourir à une expertise relative au projet présenté par la RATP, la cour a retenu que les tests de dépistage seraient «susceptibles de dépasser (la) mission (des cadres de la RATP) dans la mesure où seuls les médecins peuvent pratiquer de tels tests»; que ces derniers n'avaient pas fait la preuve de leur fiabilité, et qu'il s'agissait d'un projet important «en termes éthiques, sanitaires et juridiques»; qu'en se déterminant ainsi, selon des critères étrangers à la loi et impropres, dès lors, à caractériser la réalité du projet invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail;
- 2°/ que dans ses écritures d'appel, la RATP avait en toute hypothèse soutenu que la demande d'expertise présentée par le CHSCT était inutile, non seulement parce qu'une importante campagne de formation et de prévention contre la toxicomanie avait déjà été réalisée par le département bus, avec le concours de la brigade des stupéfiants, mais encore parce que le CHSCT, demandeur d'expertise, avait toujours été lui-même impliqué dans les campagnes de lutte contre les addictions, notamment au sein du «Comité de pilotage addictions», dont la mission était en particulier d'apporter un éclairage sur les questions soulevées par le contrôle des stupéfiants, et que dans le cadre de la modification du règlement intérieur Bus, pour tous les départements de l'entreprise, l'ensemble des points repris aujourd'hui dans le projet contesté, y compris le dépistage, avaient été soumis à l'examen des élus du CHSCT sans que ceux-ci eussent émis le moindre commentaire, ni la moindre réserve; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans répondre à ces objections qui soulignaient, en toute hypothèse, l'absence de pertinence de la demande d'expertise, la cour, privant sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que le dispositif soumis au CHSCT ayant pour objet de contrôler l'activité des machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires dépendant du résultat de tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale, en a exactement déduit, sans avoir à se prononcer sur les actions d'information accomplies par ailleurs par l'employeur, qu'il s'agissait d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents concernés; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la RATP aux dépens;

Vu l'article L. 4614-12 du code du travail, condamne la RATP à payer au CHSCT la somme de 2 500 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté la RATP de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'expertise demandée par le CHSCT Bus de la RATP lors de sa réunion du 17 septembre 2009 n'était pas justifiée et de l'annuler et, y ajoutant, d'avoir condamné la RATP à payer au CHST Bus de la RATP la somme de 4.305,60 € à titre de frais de procédure;

AUX MOTIFS QUE la procédure de contrôle de dépistage des produits stupéfiants telle que soumise au CHSCT donne aux agents d'encadrement de la RATP le pouvoir de procéder à des tests salivaires dont la valeur probante n'est pas clairement précisée; que de tels pouvoirs donnés aux cadres de la RATP sont susceptibles de dépasser leur mission dans la mesure où seuls les médecins peuvent pratiquer des tests de dépistage; que, comme le soutient le CHSCT, seuls les contrôles effectués en la matière, par les médecins ont valeur probante; que dès lors qu'en l'état du projet litigieux, la délibération du CHSCT prise le 17 septembre 2009 visant à recourir à une expertise, doit être validée par confirmation de la décision des premiers juges, s'agissant, en termes éthiques, sanitaires et juridiques d'un projet important, étant précisé que les tests de dépistages biologiques de stupéfiants exigent des précautions importantes dans le maniement et l'interprétation des résultats, dans la mesure où contrairement à l'alcootest, qui mesure un niveau d'imprégnation alcoolique au moment où le test est effectué, le test de dépistage de produits stupéfiants détecte la «trace» d'une consommation plus ou moins récente d'une substance toxique, dont, toutes ne sont d'ailleurs pas interdites:

1°/ ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut faire appel à un expert agréé que dans deux cas, d'une part, lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou, d'autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8; qu'en l'espèce, pour valider la délibération du CHSCT du 17 septembre 2009 visant à recourir à une expertise relative au projet présenté par la RATP, la cour a retenu que les tests de dépistage seraient «susceptibles de dépasser (la) mission (des cadres de la RATP) dans la mesure où seuls les médecins peuvent pratiquer de tels tests»; que ces derniers n'avaient pas fait la preuve de leur fiabilité, et qu'il s'agissait d'un projet important «en termes éthiques, sanitaires et juridiques»; qu'en se déterminant ainsi, selon des critères étrangers à la loi et impropres, dès lors, à caractériser la réalité du projet invoqué, la cour d'appel a violé l'article L.4614-12 du code du travail;

2°/ ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la RATP avait en toute hypothèse soutenu que la demande d'expertise présentée par le CHSCT était inutile, non seulement parce qu'une importante campagne de formation et de prévention contre la toxicomanie avait déjà été réalisée par le département bus, avec le

concours de la Brigade des stupéfiants, mais encore parce que le CHSCT, demandeur d'expertise, avait toujours été lui-même impliqué dans les campagnes de lutte contre les addictions, notamment au sein du «Comité de pilotage addictions», dont la mission était en particulier d'apporter un éclairage sur les questions soulevées par le contrôle des stupéfiants, et que dans le cadre de la modification du règlement intérieur Bus, pour tous les départements de l'entreprise, l'ensemble des points repris aujourd'hui dans le projet contesté, y compris le dépistage, avaient été soumis à l'examen des élus du CHSCT sans que ceux-ci eussent émis le moindre commentaire, ni la moindre réserve (concl. pp.10-13); qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans répondre à ces objections qui soulignaient, en toute hypothèse, l'absence de pertinence de la demande d'expertise, la cour, privant sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Publication: Bulletin 2012, V, n° 70

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, du 25 octobre 2010

Titrages et résumés: TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Cas - Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail - Applications diverses

Ayant retenu que le dispositif soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait pour objet de contrôler l'activité des machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires dépendant du résultat de tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents concernés

Précédents jurisprudentiels: Sur la notion de projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, à rapprocher: Soc., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.023, Bull. 2009, V, n° 211 (rejet), et l'arrêt cité; Soc., 10 février 2010, pourvoi n° 08-15.086, Bull. 2010, V, n° 40 (rejet)

Textes appliqués:

Article L. 4614-12 du code du travail.

Jurisprudence**Cour de cassation****Chambre sociale****5 mai 2010****n° 08-45.323****Sommaire:****Texte intégral:****Cour de cassation Chambre sociale Cassation 5 mai 2010 N° 08-45.323****RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS****LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:****SUR LE PREMIER MOYEN:**

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 11 mars 1996 nommé «contrat de location d'un véhicule», la société Euromo taxis a donné en location à M. X... un véhicule équipé à l'usage de taxi pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'une somme mensuelle de 640,29 euros comprenant le loyer et les charges sociales; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 1997, date à laquelle M. X... a donné sa démission; qu'un second contrat de location a été conclu le 15 septembre 1997 dans les mêmes conditions qui s'est exécuté jusqu'au 3 septembre 1998, date à laquelle M. X... a cessé toute relations contractuelles avec la société Euromo Taxis; que revendiquant la qualité de salarié de cette société, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le remboursement des cotisations patronales indûment versées;

Attendu que pour décider que M. X... était lié à la société Euromo taxis par un contrat de travail et la condamner à lui payer une somme à titre de restitution des cotisations patronales indûment versées, l'arrêt énonce qu'il s'évince des clauses du contrat que la prestation de travail de M. X... s'accomplissait au profit de la société Euromo taxis laquelle percevait sans risque, par le biais de redevances servies par l'intéressé, partie des recettes générées par l'activité de celui-ci, dans un cadre prédéterminé et imposé par elle, sous son contrôle quotidien, avec pouvoir de sanction, notamment le droit pour elle de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquements du chauffeur à ses obligations contractuelles ou réglementaires, ce dernier étant rémunéré par l'excédent des revenus de son activité de transport de voyageurs après paiement des redevances;

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs;

Qu'en se bornant à analyser les clauses du contrat de location sans rechercher si, indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, la société Euromo taxis avait dans les faits le pouvoir de donner à M. X... des ordres et des directives relatives à l'exercice de son travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits par la SCP Célice, Blanchpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Euromo taxis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la Société EUROMOS TAXIS, D'AVOIR dit que Monsieur X... avait été lié à cette société par un contrat de travail, et D'AVOIR en conséquence condamné la Société EUROMOS TAXIS à verser à Monsieur X... les sommes de 13.320 € en restitution des cotisations patronales versées et à remettre à ce dernier un certificat de travail comportant les dates du 11 mars 1996 au 3 septembre 1998 comme période d'engagement, sous astreinte de 15 € par jour de retard;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «la Société EUROMOS TAXIS et Monsieur X... ont signé le 11 mars 1996 un contrat dénommé «contrat de location de véhicule» portant mise à disposition à ce dernier, moyennant redevances, d'un taxi dans la société est propriétaire; que le 23 octobre 1998, la société Société EUROMOS TAXIS établissant un «certificat de présence» précisait qu'«à ce jour Monsieur X... ne faisait plus partie de son personnel» comme ayant été «employé en tant que chauffeur taxi du 11 mars 1996 au 3 septembre 1998 – travailleur indépendant»; que le contrat ayant lié les parties fixe notamment: «le montant de la location» à 4200 francs TTC par semaine, charges sociales comprises, payable par acomptes hebdomadaires chaque lundi ou mardi, tout retard de paiement étant majoré de 100 francs par semaine, la durée de la location à un mois renouvelable par tacite reconduction, l'engagement du preneur à restituer le véhicule aux dates et heures prévues, le droit du loueur de résilier le contrat au cours de son exécution en cas par le preneur de non-paiement de la redevance et charges sociales, accidents entraînant sa responsabilité totale ou partielle, résiliation du contrat d'assurance, non-respect des clauses générales du contrat et des engagements pris, manquements, absences d'un mois calendaire ou plus, autres que celles résultant de maladies ou accidents et dûment justifiées sous 48 heures, la prise en charge par le locataire des frais de carburant, en contrepartie de laquelle la détaxe de carburant accordée aux chauffeurs lui est acquise, l'obligation pour «le chauffeur» de fournir la justification de sa consommation de carburant et la conformité de sa position fiscale (BIC et TVA), le caractère «strictement personnel et non transmissible» de la location, l'engagement du locataire de conduire lui-même le véhicule et de se conformer à la réglementation des taxis parisiens, l'engagement du locataire de respecter les règles de conduite: absence d'état alcoolique; lois propres à la circulation; stationnement réglementaire..., l'interdiction de participer à des compétitions et rallyes, conduire le véhicule hors de France, installer une galerie sur le véhicule, effectuer des transports de marchandises, hormis petits colis et bagages usuels accompagnés, transporter un nombre de voyageurs supérieur à celui des places assises, apposer des publicités sans autorisation expresse et écrite, utiliser le véhicule à des fins illicites ou immorales, remorquer d'autres véhicules, modifier le compteur horokilométrique, le taximètre ou l'horodateur, l'obligation de vérifier en début de journée l'état du véhicule, du taximètre, de l'horodateur, du dispositif lumineux, utiliser l'antivol lorsqu'il quitte le véhicule, prendre les documents de circulation et du taxi, vérifier chaque jour les niveaux d'huile et d'eau ..., effectuer chaque jour le lavage intérieur et extérieur du véhicule, porter les vérifications, révisions au kilométrage imposées et interventions techniques sur le carnet du véhicule, déclarer par écrit dans les 24 heures au loueur tout accident ou incident avec leurs circonstances, tout vol ou incendie dans le véhicule, effectuer toutes réparations avec l'accord du loueur et dans le garage de celui-ci ou dans un garage agréé par lui, le droit pour le loueur de reprendre le taxi loué à tout moment en faisant appel, le cas échéant, à la police en cas de violation des dispositions du code de la route concernant la sécurité des véhicules; qu'il s'évince de ces clauses, que la prestation de travail de Monsieur X... accomplit au profit de la Société EUROMOS TAXIS percevant sans risque, par le biais de redevances servies par l'intéressé, partie des recettes générées par l'activité de celui-ci, dans un cadre prédéterminé et imposé par elle, sous son contrôle quotidien, avec pouvoir de sanction, notamment le droit pour elle de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquements du chauffeur à ses obligations contractuelles ou réglementaires, ce dernier étant rémunéré par l'excédent des

revenus de son activité de transport de voyageurs après paiement des redevances; que la relation entre les parties procède en conséquence un contrat de travail; et qu'aux termes de l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur au titre des risques maladies, invalidité et décès ne peut être mise à la charge du salarié; que le contrat signé par les parties met expressément à la charge de Monsieur X... les charges sociales, la redevance payée par lui s'entendant «charges sociales comprises»; que cette clause est nulle de plein droit, Monsieur X... effectuant un travail subordonné; que le moyen de la Société EUROMOS TAXIS tiré d'une location du taxi mis à disposition de Monsieur X... n'est pas fondé; et, par suite, celui tiré d'une assimilation aux salariés des chauffeurs de taxi locataires pour l'assujettissement au régime général de sécurité sociale, Monsieur X... étant salarié; que la clause contractuelle fixant la redevance payée par Monsieur X... «charges sociales comprises», le moyen de la Société EUROMOS TAXIS tiré de l'absence de preuve par Monsieur X... du paiement des charges correspondantes ne peut prospérer; que la demande en effet a pour objet le remboursement de la part à ce titre de la redevance payée, sans que l'intéressé ait eu lui-même à régler les cotisations auprès des organismes de sécurité sociale; que de même, ne peut être soustrait du montant à restituer le montant des recettes conservé par Monsieur X..., qui constitue sa rémunération, ni celui de la détaxe sur le carburant alors que le paiement de celui-ci reste à sa charge et constitue des frais professionnels; qu'aucun manquement à des obligations fiscales et sociales ne peut par ailleurs être opposé par l'appelant à Monsieur X..., la qualification initiale du contrat comme la détermination de l'assiette des cotisations étant imputables à l'employeur qui s'est soustrait à l'application des dispositions d'ordre public tant du Code du travail que du Code de la sécurité sociale; ...; que le moyen subsidiaire tiré d'une nullité de l'ensemble du contrat n'est pas fondé, la clause nulle relative au paiement des cotisations sociales n'ayant pas pour effet de remettre en cause par ailleurs la définition du lien contractuel de travail procédant de ses autres clauses»;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE le contrat litigieux impose au locataire à peine de résiliation des obligations strictes telles que, conduire lui-même le véhicule mis à sa disposition, ne pas effectuer de transport de marchandises hormis les petits colis et bagages usuels accompagnés et ne pas apposer à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule de publicité sans autorisation expresse du loueur; que le contrat stipule encore qu'outre la vérification périodique du véhicule imposée à M. X..., les réparations et l'entretien doivent être réalisés dans le garage du loueur ou dans un garage agréé par lui; qu'il convient de relever que M. X... était tenu de justifier dans les quarante huit heures toutes absences pour maladie et que les modalités de la redevance hebdomadaire étaient fixées unilatéralement par la société EUROMO TAXIS; que l'importance du montant de la redevance soit environ 2.500 00 € à laquelle s'ajoutait le coût du carburant mis à la charge de M. X... imposaient à ce dernier une activité quotidienne très soutenue excluant toute liberté dans l'organisation de son travail et plus encore lui interdisait d'exercer d'autres fonctions pour le compte d'une autre société; qu'il convient enfin d'observer que diverses pénalités en cas de paiement tardif ou d'accident étaient mises à la charge du conducteur; que ces faits sont de nature à établir l'existence d'un lien de subordination juridique, critère déterminant de la relation de travail salarié; que par suite, il y a lieu de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître du litige»;

- 1º/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, la Société EUROMOS TAXIS avait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location de véhicule équipé-taxi mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail;
- 2º/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures, la Société EUROMOS TAXIS insistait sur le fait que le contrat de location de véhicule équipé-taxi conclu avec Monsieur X... était un «contrattype établi en liaison avec les organisations professionnelles intéressées» qui servait «de référence aux loueurs et aux conducteurs», lequel comportait de nombreuses contraintes et obligations qui étaient imposées par la préfecture de police; qu'en se déterminant ainsi par rapport à des clauses qui répondaient à des impératifs de police administrative imposés aux loueurs par les pouvoirs publics compte tenu des spécificités du service public des transports urbains dans laquelle s'intègre l'activité de location de véhicules équipés-

taxi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des considérations inopérantes et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail;

- 3º/ ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité administrative responsable de l'organisation du service public des transports urbains ayant retenu comme mode d'exploitation la location de véhicules équipés-taxi, indépendamment des autres modes d'exploitation constitués par l'artisanat ou le salariat, la cour d'appel ne pouvait, sans transgresser le principe de la séparation des pouvoirs et s'immiscer dans l'organisation même du service public du transport urbain, condamner ce mode d'exploitation réalisé dans les conditions réglementaires et réduire ainsi les possibilités d'exploitation à deux formes correspondant au salariat ou à l'artisanat; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même relever l'existence d'une question préjudicielle, la cour de PARIS a violé les lois des 17 et 24 août 1790 et l'article 92 du nouveau Code de procédure civile;
- 4º/ ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel qui se contente de mettre en exergue des clauses contractuelles qui sont de l'essence même du contrat de location ou qui découlent de la réglementation administrative en vigueur, en éludant toutes celles qui s'avèrent radicalement incompatibles avec la reconnaissance d'un lien de subordination, comme la libre disposition du véhicule loué pour les besoins personnels du locataire, la liberté totale de ce dernier pour déterminer la manière dont il entend exercer son activité de taxi (horaires, pauses, vacances, secteur géographique...), et la rémunération qui est exclusivement fonction des recettes perçues par l'intéressé;
- 5º/ ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le simple fait pour un contrat de location d'un véhicule équipé-taxi de prévoir la résiliation de plein droit en cas de manquement aux obligations du locataire relatives au seul véhicule loué ne caractérise pas l'exercice d'un travail dans un lien de subordination; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134, 1713 et suivants et 1780 et suivants du Code civil, et L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui disqualifie les relations contractuelles de la Société EUROMOS TAXIS et de Monsieur X... pour les requalifier en contrat de travail au motif que le contrat de location prévoyait la possibilité de résiliation du contrat en cas de manquement du chauffeur à ses obligations contractuelles ou réglementaires.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société EUROMOS TAXIS à verser à Monsieur X... les sommes de 13.320 € en restitution des cotisations patronales versées et à remettre à ce dernier un certificat de travail comportant les dates du 11 mars 1996 au 3 septembre 1998 comme période d'engagement, sous astreinte de 15 € par jour de retard, D'AVOIR débouté la Société EUROMOS TAXIS de sa demande subsidiaire de nullité de l'ensemble du contrat, ainsi que de sa demande tendant à dire que la propriété des recettes encaissées lui revient ainsi que la détaxe sur le carburant, et tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de faire les comptes entre les parties;

AUX MOTIFS QUE «la relation entre les parties procède en conséquence un contrat de travail; et qu'aux termes de l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur au titre des risques maladies, invalidité et décès ne peut être mise à la charge du salarié; que le contrat signé par les parties met expressément à la charge de Monsieur X... les charges sociales, la redevance payée par lui s'entendant «charges sociales comprises»; que cette clause est nulle de plein droit, Monsieur X... effectuant un travail subordonné; que le moyen de la Société EUROMOS TAXIS tiré d'une location du taxi mis à disposition de Monsieur X... n'est pas fondé; et, par suite, celui tiré d'une assimilation aux salariés des chauffeurs de taxi locataires pour l'assujettissement au régime général de sécurité sociale, Monsieur X... étant salarié; que la clause contractuelle fixant la redevance payée par Monsieur X... «charges sociales comprises», le moyen de la Société EUROMOS TAXIS tiré de l'absence de preuve par Monsieur X... du paiement des charges correspondantes ne peut prospérer; que la demande en effet a pour objet le remboursement de la part à ce titre de la redevance payée, sans que l'intéressé ait eu lui-même à régler les cotisations auprès des organismes de sécurité sociale; que de même, ne peut être soustrait du montant à restituer le montant des recettes conservé par Monsieur X..., qui constitue sa rémunération, ni celui de la détaxe sur le carburant alors que le paiement de celui-ci reste à sa charge et constitue des frais professionnels; qu'aucun manquement à des obligations fiscales et sociales ne peut par ailleurs être opposé par l'appelant à Monsieur X..., la qualification

initiale du contrat comme la détermination de l'assiette des cotisations étant imputables à l'employeur qui s'est soustrait à l'application des dispositions d'ordre public tant du Code du travail que du Code de la sécurité sociale; que le paiement des cotisations sociales était compris en l'espèce dans la redevance servie à la Société EUROMOS TAXIS, celle-ci est en mesure de savoir le montant resservi par elle-même aux organismes de sécurité sociale; que sa demande d'expertise n'est pas fondée; que le moyen subsidiaire tiré d'une nullité de l'ensemble du contrat n'est pas fondé, la clause nulle relative au paiement des cotisations sociales n'ayant pas pour effet de remettre en cause par ailleurs la définition du lien contractuel de travail procédant de ses autres clauses»;

- **ALORS QUE** la requalification du contrat de location de véhicule équipé-taxi en contrat de travail entraîne de plein droit l'annulation des clauses contractuelles propres au contrat de location et rendent obligatoires l'application des dispositions de la convention collective des taxis parisiens salariés, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales; qu'en décidant que la requalification du contrat conclu entre la Société EUROMOS TAXIS et Monsieur X... avait seulement pour conséquence la nullité de la clause selon laquelle la redevance payée par ce dernier s'entendait «charges sociales comprises» et ne remettait pas en cause la définition du lien contractuel procédant des autres clauses du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail ainsi que les articles L.311-3-7, L.242-1, L.241-8, R.312-5 2° du Code de la Sécurité Sociale et l'arrêté du Ministre du travail en date du 4 octobre 1976;

QU' il en va d'autant plus ainsi que l'exposante expliquait dans ses écritures d'appel que Monsieur X..., en sa qualité de locataire indépendant, bénéficiait d'un régime dérogatoire en ce qui concerne le paiement de ses cotisations sociales, dans la mesure où le calcul du montant de ces cotisations était déterminé à partir d'un gain mensuel forfaitaire; que la perte de cet avantage était la conséquence nécessaire de la requalification en contrat de travail et rendait indispensable de déterminer quelle aurait été le salaire de Monsieur X... pour ce qui concerne le calcul du montant des cotisations sociales; qu'en décidant que la requalification du contrat conclu entre la Société EUROMOS TAXIS et Monsieur X... avait seulement pour conséquence la nullité de la clause selon laquelle la redevance payée par ce dernier s'entendait «charges sociales comprises» et ne remettait pas en cause la définition du lien contractuel procédant des autres clauses du contrat, la cour d'appel a violé les articles L.311-3-7, L.242-1, L.241-8, R.312-5 2° du Code de la Sécurité Sociale, l'arrêté du Ministre du travail en date du 4 octobre 1976 et l'article 1217 du Code civil.

Composition de la juridiction: Mme Collomp (président), SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris 2008-10-21 (Cassation)

Copyright 2015 - Dalloz - Tous droits réservés.

2.- CONSUMO DE ALCOHOL Y DISCRIMINACIÓN MORAL

Acoso o discriminación moral y ambiente laboral derivado del consumo de alcohol

DEL EMPRESARIO CONSUMIDOR DE ALCOHOL HACIA EL TRABAJADOR

Le: 16/01/2015

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 23 septembre 2014

N° de pourvoi: 13-19900

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01570

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1992, en qualité de secrétaire, par M. Y..., artisan; qu'ayant adressé une lettre à son employeur le 20 octobre 2006, invoquant des griefs et un courriel le 30 octobre, l'informant qu'elle saisirait la justice pour démission à ses torts, elle a quitté son poste de travail le 6 novembre; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission, de la débouter de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer à son ancien employeur des sommes au titre du préavis non exécuté, alors, selon le moyen:

- 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas, et doit être l'expression d'une manifestation de volonté claire et non équivoque; qu'en jugeant que Mme X... s'était accommodée des manquements de l'employeur de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, ce qui revenait à considérer qu'elle avait renoncé à ses droits méconnus par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation ne se présume pas, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail;
- 2°/ qu'aucun délai ne s'impose au salarié pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail; que le cumul de manquements ou la poursuite d'un même manquement, sur plusieurs années, par l'employeur, peuvent justifier une rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs; qu'en interdisant à Mme X... de se prévaloir des manquements de l'employeur aux motifs qu'ils n'avaient pas constitué un motif de rupture de la relation de travail pendant plusieurs années, et que Mme X... s'en était accommodée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail;
- 3°/ qu'est justifiée la prise d'acte de rupture du contrat de travail motivée, entre autres manquements de l'employeur, par le non-paiement pendant plusieurs années, de la rémunération minimum conventionnelle; qu'il ressort des pièces visées par l'arrêt que la salariée se plaignait depuis 2004, de ce que le «tarif syndical» ne lui était pas payé (lettre de rupture du 20 octobre 2006, renvoyant aux griefs non résolus énoncés dans une lettre de la salariée du 9 novembre 2004: production); que la cour d'appel a condamné M. Y... au paiement d'un rappel de salaire sur minima pour la période de juin 2003 à juillet 2006, ce dont il résulte qu'elle a constaté le non-paiement du salaire conventionnel minimum pendant trois années

¿malgré la réclamation formulée dans le courrier adressé par la salariée le 9 novembre 2004; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de cette constatation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail;

- 4°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties; que dans ses conclusions soutenues à l'audience la salariée, tout en admettant que l'employeur avait fini par la déclarer auprès des organismes sociaux en 2003 devant ses demandes insistantes, lui reprochait cependant de ne pas avoir régularisé sa situation auprès desdits organismes pour la période travaillée de 1992 à 2000 ayant donné lieu au précompte des cotisations salariales, de sorte qu'elle ne pouvait faire valoir de droit à la retraite pour cette période; qu'en énonçant qu'«aux dires mêmes de la salariée», l'employeur avait remédié aux reproches relatifs au travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile;
- 5°/ que le juge, pour décider si la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit se prononcer au regard de l'existence de manquements commis par l'employeur, et de leur gravité, sans considération de ce qu'il est advenu de la situation professionnelle du salarié à la suite de la rupture; qu'en retenant, pour dire que la rupture devait produire les effets d'une démission, le fait que la salariée était immédiatement entrée au service d'une entreprise concurrente créée par le fils de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail;
- 6°/ que ne commet pas une faute lui interdisant de faire juger que la rupture de son contrat de travail au regard des manquements commis par son employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui parallèlement à cette rupture, se fait embaucher par une entreprise concurrente de son employeur, fût-elle dirigée par le fils de celui-ci, et fût-ce à un meilleur salaire; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans dénaturer les termes du litige, que les griefs invoqués n'ont manifestement pendant de longues années pas été considérés comme un motif de rupture de la relation de travail, les deux intéressés s'en étant visiblement accommodés, faisant ainsi ressortir qu'ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu, par ces seuls motifs, décider que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT que la rupture du contrat de travail s'analysait comme une démission et, par conséquent, D'AVOIR DEBOUTE Mme X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et DE L'AVOIR CONDAMNÉE à payer à son ancien employeur, M. Y..., les sommes de 5.624,45 € au titre du préavis non exécuté et 5.000 € au titre de dommages et intérêts;

AUX MOTIFS QUE les reproches formulés par la salariée, à l'encontre de M. Y..., relativement à une certaine intempérance et à son caractère difficile sont confortés par plusieurs témoignages réguliers en la forme émanant d'anciens salariés ou de proches de Mme X...; ils sont en revanche contredits par d'autres témoignages produits par M. Y..., émanant d'autres anciens salariés, mais aussi de fournisseurs, qui tous disent n'avoir jamais entendu M. Y... insulter son personnel ou manquer de respect à Mme X... indiquant en outre,

qu'ils ne l'avaient jamais vu en état d'ébriété, précisant qu'il ne consommait pas de boissons alcoolisées compte tenu de problèmes cardiaques; quant aux autres reproches relatifs au travail dissimulé, situation que l'employeur n'a pas contestée, il y a remédié aux dires mêmes de la salariée, sur l'insistance de celle-ci, en 2003; la cour rappellera que les mêmes griefs avaient déjà été évoqués par la salariée en 2004, dans un précédent projet de démission à laquelle elle n'avait finalement pas donné suite; il en résulte que si les griefs invoqués, plus ou moins établis, pourraient être dans d'autres circonstances et mieux établis, considérés comme de nature à justifier une rupture du contrat de travail, en l'espèce, ces dissensions entre le responsable de l'entreprise et la secrétaire de celui-ci n'ont manifestement pendant de longues années pas été considérées comme un motif de rupture de la relation de travail, les deux intéressés s'en étant visiblement accommodés;

En revanche il ressort clairement de l'enchaînement des faits tel qu'exposés cidessus, que le motif réel de la rupture soudainement voulue par Mme X..., réside dans le fait qu'au même moment, le fils de son employeur, ouvrant sa propre entreprise, avait choisi de débaucher une part importante des salariés de son père, y compris Mme X... qui a rejoint l'entreprise concurrente, pour signer un nouveau contrat de travail le 10 novembre 2006 aux termes duquel son salaire était porté à 3014 € par mois, cette salariée, à la différence des autres, tentant en outre de monnayer son départ; la cour infirmant la décision des premiers juges, dira donc que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission, privant la salariée des indemnités consécutives à cette rupture allouées par les premiers juges; Sur les autres demandes de la salariée: en revanche, seront confirmés les sommes, qui apparaissent justifiées, allouées à titre de congés payés (2825 €), ainsi que d'incidence sur les congés payés (618,55 €), et de rappel de salaire sur minima pour un montant de 4.758,15 €; en outre, la rupture du contrat de travail étant fixée au 5 novembre 2006, jour de la remise du certificat de travail par l'employeur, la somme de 426,09 € de salaire pour la période du 1er au 5 novembre devra également être réglée par l'employeur, qui a perçu les indemnités journalières correspondant à la même période; sur la demande reconventionnelle de M. Y..., la salariée ayant mis en oeuvre immédiatement cette rupture, sans accomplir son préavis, ce qui a nécessairement causé un préjudice à l'employeur, la cour fera droit à la demande de remboursement des deux mois de préavis formulée par celui-ci pour un montant de 5.624,45 €; au-delà, compte tenu du contexte et des conditions dans lesquels est intervenue cette rupture du contrat de travail, la cour condamnera également Mme X... sur le fondement de l'article L 1222-1 à régler à M. Y... une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts;

- 1°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas, et doit être l'expression d'une manifestation de volonté claire et non équivoque; qu'en jugeant que Mme X... s'était accommodée des manquements de l'employeur de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, ce qui revenait à considérer qu'elle avait renoncé à ses droits méconnus par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation ne se présume pas, ensemble les articles L. 1231-1, L.1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail;
- 2°/ ALORS QU'aucun délai ne s'impose au salarié pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail; que le cumul de manquements ou la poursuite d'un même manquement, sur plusieurs années, par l'employeur, peuvent justifier une rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs; qu'en interdisant à Mme X... de se prévaloir des manquements de l'employeur aux motifs qu'ils n'avaient pas constitué un motif de rupture de la relation de travail pendant plusieurs années, et que Mme X... s'en était accommodée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail;
- 3°/ ALORS QU'est justifiée la prise d'acte de rupture du contrat de travail motivée, entre autres manquements de l'employeur, par le non-paiement pendant plusieurs années, de la rémunération minimum conventionnelle; qu'il ressort des pièces visées par l'arrêt que la salariée se plaignait depuis 2004, de ce que le « tarif syndical » ne lui était pas payé (lettre de rupture du 20 octobre 2006, renvoyant aux griefs non résolus énoncés dans une lettre de la salariée du 9 novembre 2004: production); que la cour d'appel a condamné M. Y... au paiement d'un rappel de salaire sur minima pour la période de juin 2003 à juillet 2006, ce dont il résulte qu'elle a constaté le non-paiement du salaire conventionnel minimum pendant trois années ; malgré la réclamation formulée dans le courrier adressé par la salariée le 9 novembre 2004; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de cette constatation, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail;
- 4°/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 in fine) la salariée,

tout en admettant que l'employeur avait fini par la déclarer auprès des organismes sociaux en 2003 devant ses demandes insistantes, lui reprochait cependant de ne pas avoir régularisé sa situation auprès desdits organismes pour la période travaillée de 1992 à 2000 ayant donné lieu au précompte des cotisations salariales, de sorte qu'elle ne pouvait faire valoir de droit à la retraite pour cette période (conclusions de la salariée p.3 in fine et s.: production); qu'en énonçant qu' « aux dires mêmes de la salariée », l'employeur avait remédié aux reproches relatifs au travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile;

- 5°/ ALORS EN OUTRE QUE le juge, pour décider si la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit se prononcer au regard de l'existence de manquements commis par l'employeur, et de leur gravité, sans considération de ce qu'il est advenu de la situation professionnelle du salarié à la suite de la rupture; qu'en retenant, pour dire que la rupture devait produire les effets d'une démission, le fait que la salariée était immédiatement entrée au service d'une entreprise concurrente créée par le fils de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail;
- 6°/ ALORS ENFIN QUE ne commet pas une faute lui interdisant de faire juger que la rupture de son contrat de travail au regard des manquements commis par son employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui parallèlement à cette rupture, se fait embaucher par une entreprise concurrente de son employeur, fût-elle dirigée par le fils de celui-ci, et fût-ce à un meilleur salaire; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.1732-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, du 24 avril 2013.

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 7 mai 2014
N° de pourvoi: 12-29458
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00866
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boutet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 6 novembre 2007 par la société Au Bon Pain l'Ile-Rousse en qualité d'aide vendeuse, a fait l'objet d'un avertissement notifiée le 17 septembre 2009; qu'elle a adressé, le 18 septembre 2009, une lettre à son employeur; qu'elle a été licenciée par lettre du 19 octobre 2009;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en adressant une lettre à son employeur dans laquelle elle indiquait qu'il se trouvait régulièrement en état d'ébriété l'après-midi, la salariée a manifesté une critique d'ordre personnel, irrespectueuse et excessive qui n'était justifié par aucun élément produit aux débats et a ainsi abusé de sa liberté d'expression;

Qu'en statuant ainsi alors que l'envoi d'une lettre, adressée au seul employeur, qui répondait à un avertissement que la salariée estimait injustifiée et ne comportait aucun propos diffamatoire, injurieux ou excessif, ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, sauf en ces dispositions relatives au rappel de salaire, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Condamne la société Au Bon Pain l'Ile-Rousse aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté cette salariée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture;

AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement du 28 octobre 2009, qui fixe le cadre du litige, l'employeur reproche à la salariée une insubordination et des griefs invoqués dans une lettre portant

avertissement, un manque de sérieux dans son travail, un manque de responsabilité en acceptant un chèque en « blanc » sans y apposer le tampon dans l'entreprise, un refus d'accepter des remarques sur son travail et sa propreté et des propos inacceptables dans une lettre du 18 septembre 2009; qu'il considère que ces faits rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et estime que Madame X... est dans l'incapacité d'effectuer son préavis; que la Cour observe que les griefs autres que ceux énoncés au titre de la lettre du 18 septembre ont déjà fait l'objet d'un avertissement adressé à la salariée par lettre du 14 septembre 2009, et qu'ainsi ils ne peuvent être valablement invoqués pour motiver une mesure de licenciement puisqu'aucun autre fait de même nature n'est reproché à Madame X...; qu'il résulte de l'analyse de la lettre du 18 septembre 2009 adressée à l'employeur par la salariée, que celle-ci lui reproche, notamment, un état d'ébriété l'après midi, amplifiant gravement une situation de harcèlement moral qui l'oblige à ne pas reprendre le travail; que si la liberté d'expression ouvre le droit au salarié de manifester des critiques à l'encontre de son employeur c'est à la condition qu'elles soient d'ordre professionnel, respectueuses, proportionnées et établies; que dès lors, en indiquant à son employeur qu'il est régulièrement en état d'ébriété l'après midi, la salariée a manifesté une critique d'ordre personnel, irrespectueuse, excessive et qui, en l'espèce, n'est justifiée par aucun des éléments produits aux débats; que ce manquement constitue un abus du droit d'expression de nature à justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce d'autant que la salariée a manifesté son intention de cesser le travail sans demander la résiliation ou la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur;

- ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit de sa liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci; qu'en l'espèce, les propos tenus par la salariée dans le cadre d'un unique courrier adressé exclusivement à son employeur, dont le seul objet était de répondre aux reproches de ce dernier qu'elle estimait injustifiés et à son comportement agressif à son égard, et qui, pour être vifs, étaient dépourvus de caractère excessif ou irrespectueux, n'excédaient pas sa liberté d'expression; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Bastia, du 11 janvier 2012.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 13 février 2013

N° de pourvoi: 11-27566

Non publié au bulletin

Rejet

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 octobre 2011), que Mme X... a été engagée par la société SRP Gasnyphot le 5 mai 2003 en qualité de technicienne service après vente; que contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 7 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur:

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire pour non-respect de la rémunération annuelle effective conventionnelle, alors, selon le moyen:

- 1°/ que la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser le salarié; qu'en se fondant, pour reconnaître à Mme X... la classification technicien, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, sur la mention qui figurait sur ses bulletins de salaire à compter d'octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil;
- 2°/ qu'en se bornant, pour retenir cette classification, à reproduire la définition de cette classification par les dispositions conventionnelles et énoncer que les fiches de travail de la salariée produites aux débats permettaient de caractériser un travail y correspondant, sans préciser les fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de la grille de classification prévue par l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans les entreprises de la métallurgie;

Mais attendu que recherchant les fonctions réellement exercées par la salariée et examinant notamment ses fiches de travail, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules mentions des bulletins de paie, a estimé que la salariée exécutait des tâches relevant du coefficient 240, échelon 3 du niveau III; que le moyen n'est pas fondé;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE LA SALARIÉE:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident;

Condamne la société SRP Gasnyphot aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SRP Gasnyphot à payer à Mme X... la somme de 2.500 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SRP Gasnyphot.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société GASNYPHOT à payer à Madame X..., à titre de rappel de salaire pour non respect de la rémunération annuelle effective conventionnelle, la somme de 17.511,47 € et, pour les congés-payés afférents, celle de 1.751,15 €,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été embauchée en qualité de technicienne service après-vente en mai 2003 par un contrat ne prévoyant pas son classement conventionnel et ses bulletins de paie ne mentionnaient avant 2006 aucune classification, alors qu'il n'est pas discuté par les parties que les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective de la métallurgie; qu'à compter d'octobre 2006 et jusqu'à la rupture, ses bulletins de paie ont porté la mention «Technicien, niveau 3, Echelon 3, coefficient 240»; qu'il doit être considéré pour les motifs retenus par les premiers juges et que la Cour a fait siens, qu'il n'est nullement justifié que cette mention résulterait d'une erreur ou d'un acte délibéré de la secrétaire comptable alors en fonction, ni qu'elle aurait été portée sans l'accord de l'employeur; qu'il ne résulte non plus d'aucun élément que les fonctions ou responsabilités confiées à Madame X... se seraient accrues en octobre 2006; que surtout, le coefficient 240 échelon 3 du niveau III de la grille de classification de la métallurgie est attribué au salarié occupé à l'exécution d'opérations interdépendantes réalisées par approches successives et nécessitant la détermination de données intermédiaires et des vérifications au cours du travail. Rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs, le niveau de connaissance pouvant être atteint tant par formation scolaire, formation équivalente ou pratique professionnelle et, les fiches de travail de Madame X... produites aux débats permettent de caractériser un travail y correspondant; que les premiers juges devront ainsi être approuvés d'avoir alloué à Madame X... un rappel de salaire pour non respect de la rémunération annuelle effective conventionnelle basée sur le coefficient 240;

ET AUX MOTIFS, EN TANT QUE DE BESOIN ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le Conseil relève que le contrat de travail signé entre les parties ne prévoit pas le classement conventionnel de la salariée et ne mentionne pas d'échelon particulier; que le contrat ne donne pas non plus de précision particulière quant au contenu de ses activités, se limitant à qualifier Madame X... de technicienne SAV et à indiquer qu'elle était chargée de suivre et de mener à terme les travaux qui lui sont confiés suivant la méthodologie propre à l'entreprise; qu'en ce qui concerne ces travaux, Madame X... était tenue à une obligation de bonne fin; qu'en la cause, les premiers bulletins de salaire établis par l'employeur mentionnaient l'emploi de technicien SAV catégories ETAM; que c'est à partir du mois d'octobre 2006 qu'il sera mentionné l'échelon (3), le niveau (3) et le coefficient (240); que la défenderesse tente de soutenir que la modification des bulletins de salaire n'est pas une décision de l'entreprise; que c'est Madame Y..., qui assurait les fonctions de secrétaire comptable, qui a profité de l'absence de son employeur hospitalisé, pour modifier son coefficient et le coefficient des autres salariés; que de même, la Société SRP GASNYPHOT dit que l'ensemble des techniciens a reconnu qu'il existait sur leurs bulletins de salaire une erreur matérielle et qu'ils ont tous accepté un avenant; que le Conseil relève que toutes ces modifications interviennent le 9 juin 2009, juste après la décision rendue dans l'affaire de Madame Y... le 9 avril 2009, affaire dans laquelle la Société SRP GASNYPHOT fut condamnée et confirmée en appel sur le rattrapage de salaire pour les mêmes raisons exposées aujourd'hui par Madame X...-Z...; qu'en l'espèce, M. A..., embauché en juin 2008 en qualité de technicien, coef de 240, sera placé à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190; Mme B..., embauchée en mai 2006 en qualité de technicien, coef de 225, sera placée à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190; M. C..., embauché en qualité de technicien en novembre 2007, coef de 240, sera placé à l'échelon 1 niveau 2 coefficient 170; M. D..., embauché en qualité de technicien en novembre 2001, coef de 240, sera placé à l'échelon 2 niveau 3 coefficient 225; M. E..., embauché en qualité de technicien en janvier 2008, coef de 240, sera placé à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190; M. F..., embauché en qualité de technicien en avril 2008, coef de 240, sera placé à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190; M. G..., embauché en qualité de technicien en septembre 2008, coef de 240, sera placé à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190; M. H..., embauché en qualité de technicien en juin 2001, coef de 240, sera placé à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190; qu'il convient de souligner que parmi ces salariés qui avaient des coefficients de 240, certains ont été embauchés bien après 2006, l'année où Madame Y... aurait soi-disant profité de l'hospitalisation de son employeur pour modifier les bulletins de salaire; que c'est le cas de Monsieur A..., embauché en juin 2008 en qualité de technicien avec un coefficient de 240 avant d'avoir un avenant en juin 2009; qu'en l'espèce, il ne

ressort d'aucun élément du dossier que l'employeur se serait opposé d'une quelconque manière à l'indication dans les bulletins de paie du coefficient 240 d'octobre 2006 à juin 2008; que de même, il n'est pas justifié que Madame X... aurait effectué des tâches différentes avec plus de responsabilités avant et après octobre 2006; que de plus, il ressort des exemples fournis par la Société GASNYPHOT, que le plus bas coefficient pour un technicien est de 170; que l'ensemble des autres techniciens est à 190; que cependant, dans les conclusions de la défense, il est rappelé que l'emploi de Madame X... relève d'un coefficient de 140; qu'il convient de constater que l'attribution des coefficients se fait sous la libéralité de l'employeur; qu'il n'existe aucune logique à cette attribution; l'employeur fournit les fiches de travail de Madame X... mais ne verse pas aux débats celles des personnes citées, ce qui aurait permis au Conseil de faire un comparatif; qu'en conséquence, le Conseil dit Madame X... bien fondée en sa demande de rappel de salaire;

1º/ ALORS, D'UNE PART, QUE la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser le salarié; qu'en se fondant, pour reconnaître à Madame X... la classification technicien, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, sur la mention qui figurait sur ses bulletins de salaire à compter d'octobre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

2º/ ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant, pour retenir cette classification, à reproduire la définition de cette classification par les dispositions conventionnelles et énoncer que les fiches de travail de la salariée produites aux débats permettaient de caractériser un travail y correspondant, sans préciser les fonctions exercées par la salariée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de la grille de classification prévue par l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans les entreprises de la métallurgie. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR dit justifié par une faute grave le licenciement de Madame X... et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de l'indemnités de préavis et les congés payés afférents, indemnité de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement non causé,

AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche à Mme X... la teneur de la lettre qu'elle lui a envoyé le 27 mai pour contester l'avertissement du 16 mai; que la consistance des termes employés ne sont ainsi pas plus contestables que le fait qu'ils ont été exprimés dans une lettre adressée à l'employeur lui-même sans publicité; Outre le rappel de nombreux épisodes d'imprégnation alcoolique au cours desquels elle-même et le personnel de l'entreprise avaient dû aider le gérant dans la maîtrise de sa propre personne et la conduite de l'entreprise, Mme X... a, dans sa lettre de trois pages, mis en cause le comportement du gérant à son égard qu'elle a qualifié de harcèlement constant et l'attitude consistant à profiter de sa personne «à tous niveaux (professionnel et extra-professionnel)», mis en cause les compétences de son épouse dont il n'est pas discuté qu'elle est devenue la gérante de l'entreprise, mis en cause l'utilisation des ressources de la société à des fins personnelles par l'épouse qui lui faisait assumer le coût de ses leçons de code; qu'elle terminait son écrit en lui indiquant que son comportement est «minable, pathétique et pitoyable. Voici le résumé de votre personne»; que si l'existence d'un comportement passé marqué par l'alcoolisme n'est pas nié par l'employeur, il en va autrement des imputations relatives à l'incompétence, au harcèlement sexuel et à l'abus de biens sociaux; que si l'attestation de Mme Y... qui doit être appréciée en tenant compte de ce qu'elle même a été il y a peu opposée dans une procédure contentieuse à la société pour des demandes semblables, confirme les éléments relatifs à l'alcoolisme, elle n'apporte aucun élément sur les autres reproches; que Mme X... ne produit pas non plus au cours de la procédure le moindre élément de nature à confirmer ses allégations sur ces points; qu'en portant contre son employeur, même dans une lettre non publique des accusations particulièrement graves, sur lesquelles elle n'a pu fournir aucun élément Mme X... a dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression; qu'elle mettait d'ailleurs son employeur en cause d'une manière si grave qu'il était fondé à craindre qu'une absence de réaction puissante de sa part susceptible d'être interprétée comme un aveu ne lui porte gravement préjudice dans le cadre d'une plainte éventuelle; qu'elle termine par ailleurs son écrit par des injures en réduisant la personne de celui-ci à des qualificatifs péjoratifs et en manifestant, hors de toute nécessité du point de vue de la contestation de l'avertissement le mépris qu'elle éprouve à son égard.; que peu important que le contenu de la lettre n'ait pas été rendu public, et alors que ces écritures faisaient suite à bref délai à des proférations tout aussi insultantes, Mme X... a, par sa faute, rendu Impossible le maintien de la relation de travail et, la décision étant sur ce point réformée, il doit être considéré que le licenciement pour faute grave est justifié; que Madame X... sera en conséquence déboutée de ses demandes qui y sont relatives.

- ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto; que la Cour d'appel a constaté l'existence d'un comportement marqué par l'alcoolisme de l'employeur; que Madame X... produisait l'attestation circonstanciée de Madame Y... décrivant les conséquences de ces crises et épisodes alcooliques, et le rôle réitéré d'aide, d'intervention et d'assistance que les salariées étaient tenues de jouer; qu'en s'en tenant aux termes jugé excessifs de la lettre du 28 mai 2008, sans tenir compte des circonstances très particulières dans lesquelles elle avait été expédiée, et de son caractère non public, puisqu'elle n'était adressée qu'à l'employeur mis en cause, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 et suivants du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Rouen, du 4 octobre 2011.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 22 septembre 2010
N° de pourvoi: 09-40603
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Collomp (président), président
Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2008), que M. X..., engagé le 2 mai 2001 par la société TV7 en qualité de responsable du son (technicien), après avoir fait l'objet de fréquents avertissements et reproches écrits pour mauvaise qualité de ses prestations et manque de ponctualité, a été licencié par lettre du 12 décembre 2003 pour retards fréquents perturbant la bonne marche de l'entreprise et l'organisation de ses équipes;

SUR LE PREMIER MOYEN:

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen;

- 1°/ qu'en l'absence d'énonciation de motifs précis, objectifs et vérifiables, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, la société TV7 Bordeaux l'a licencié par lettre du 12 décembre 2003, aux termes de laquelle il était simplement indiqué que «cette mesure est motivée par vos retards fréquents et la perturbation qu'ils engendrent à la bonne marche de l'entreprise et à l'organisation de ses équipes ... d'une manière générale, vous ne prenez pas suffisamment en compte les consignes qui vous sont communiquées que ce soit au niveau du rangement du matériel ou de la discipline en général»; que, ce faisant, l'employeur ne lui a imputé aucun motif précis, objectif et vérifiable; qu'en considérant cependant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2);
- 2°/ qu'un même comportement ne saurait être sanctionné successivement par un avertissement ou une mise à pied, puis par un licenciement; qu'en l'espèce, la société TV7 Bordeaux l'a licencié par lettre du 12 décembre 2003, aux termes de laquelle il était simplement indiqué que «cette mesure est motivée par vos retards fréquents et la perturbation qu'ils engendrent à la bonne marche de l'entreprise et à l'organisation de ses équipes ... d'une manière générale, vous ne prenez pas suffisamment en compte les consignes qui vous sont communiquées que ce soit au niveau du rangement du matériel ou de la discipline en général»; qu'il ressort, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt attaqué que «M. X... avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements et de deux mises à pied disciplinaires qui sanctionneraient des retards, des négligences dans le respect des plannings, dans le contrôle du matériel, la présence de nourriture et de boisson auprès du poste de travail...», le jugement précisant que «M. X... a reçu des lettres d'avertissements et de mise à pied pour des retards et l'exécution défectueuse de ses prestations notamment; sept courriers entre fin septembre 2002 et décembre 2003 lui sont adressés»; qu'en considérant cependant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fautes alléguées dans la lettre de licenciement n'avaient pas déjà été sanctionnées par un avertissement ou une mise à pied, empêchant ainsi la Cour de cassation de vérifier qu'il n'y avait pas eu double sanction du comportement reproché a violé l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3), ensemble les articles L. 1331-1 et suivants de ce même code (anciens articles L. 122-40 et suivants);

Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement énonce des motifs précis et matériellement vérifiables;

Attendu, ensuite, que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les fautes invoquées dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnées par les avertissements;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, et, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche;

SUR LE SECOND MOYEN:

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements; qu'en l'espèce, la société TV7 Bordeaux l'a licencié par lettre du 12 décembre 2003, aux termes de laquelle il était indiqué que «cette mesure est motivée par vos retards fréquents et la perturbation qu'ils engendrent à la bonne marche de l'entreprise et à l'organisation de ses équipes ... d'une manière générale, vous ne prenez pas suffisamment en compte les consignes qui vous sont communiquées que ce soit au niveau du rangement du matériel ou de la discipline en général»; qu'il ressort, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt attaqué qu'«il avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements et de deux mises à pied disciplinaires qui sanctionneraient des retards, des négligences dans le respect des plannings, dans le contrôle du matériel, la présence de nourriture et de boisson auprès du poste de travail...», le jugement précisant que «M. X... a reçu des lettres d'avertissements et de mise à pied pour des retards et l'exécution défectueuse de ses prestations notamment; sept courriers entre fin septembre 2002 et décembre 2003 lui sont adressés»; que pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, les juges du fond ont simplement relevé qu'il « se contentait d'allégations vagues et imprécises qui ne permettaient pas de faire présumer de l'existence d'un harcèlement»; qu'en statuant ainsi sans analyser les multiples avertissements et mises à pied qui lui avaient été adressés entre septembre 2002 et décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail (anciens articles L. 122-49 à L. 122-52);

Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, parmi lesquels les avertissements dont le salarié avait fait l'objet, la cour d'appel a retenu que ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux conseils pour M. X...;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE «il ressort des éléments du dossier que Monsieur X... avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements et de deux mises à pied disciplinaires qui sanctionneraient des retards, des négligences dans le respect des plannings, dans le contrôle du matériel, la présence de nourriture et de boisson auprès du poste de travail... Dans l'ensemble ces différents reproches ne sont pas contestés formellement par Monsieur X... qui prétend notamment pour les retards à la réunion habituelle du lundi matin, que tout le monde était en retard et qu'arriver à l'heure entraînait une perte de temps. Il ressort tant de ces sanctions préalables que des attestations produites par l'employeur que les agissements dénoncés dans la lettre de licenciement sont avérés et qu'ils perturbaient le fonctionnement du service, s'agissant d'un travail en équipe avec des contraintes

techniques particulières. Monsieur X... allègue que son travail était de bonne qualité et que la tendance à l'alcoolisme de son supérieur hiérarchique rendait les relations de travail difficiles. La qualité de travail de Monsieur X... n'est pas en cause. Cet alcoolisme de son supérieur hiérarchique, à le supposer établi, ce qui est formellement contesté, ne peut justifier les retards répétés de Monsieur X... ainsi que ses manquements au planning» (arrêt, p. 4),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «le Conseil constate que la société TV7 a averti six fois, entre septembre 2002 et décembre 2003, Monsieur X... en lui rappelant dans chaque courrier qu'il devait comme tout salarié respecter les règles de discipline en vigueur dans l'entreprise; que son attitude ...diffusion et la qualité des programmes de l'antenne, l'organisation du service technique et la cohésion des équipes; que le Conseil constate que M. X... n'a jamais contesté les retards mentionnés par son employeur dans les six courriers reçus en 2002 et 2003, alors qu'aujourd'hui son représentant affirme qu'il n'a jamais été en retard; d'autre part et contradictoirement, que Monsieur X... conteste que ses retards aient pu perturber le fonctionnement de l'entreprise, mais ce qui sous entend qu'effectivement, il a bien eu des retards; d'autre part que le Conseil ne saurait prendre en considération les avis inconséquents produits par les témoignages de stagiaire ou de salariés n'ayant aucun pouvoir de gestion et de direction dans l'entreprise; que l'avis produit par la salariée Mme Z..., qui n'assiste jamais à la réunion technique, est tout aussi inopérant; en effet que le Conseil rappelle que l'exécution du contrat de travail se fait sous l'autorité de l'employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et de sanctionner les manquements de ses salariés; également que le conseil constate que la société TV7 a fait preuve de beaucoup de patience pour tenter d'obtenir de M. X... un comportement plus respectueux de l'équipe et des règles de l'entreprise; en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de M. X... repose effectivement sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande» (jugement, p. 5 et 6),

1º/ ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence d'énonciation de motifs précis, objectifs et vérifiables, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

Qu'en l'espèce, la SA TV7 Bordeaux a licencié Monsieur X... par lettre du 12 décembre 2003, aux termes de laquelle il était simplement indiqué que «cette mesure est motivée par vos retards fréquents et la perturbation qu'ils engendrent à la bonne marche de l'entreprise et à l'organisation de ses équipes ... D'une manière générale, vous ne prenez pas suffisamment en compte les consignes qui vous sont communiquées que ce soit au niveau du rangement du matériel ou de la discipline en général»; que, ce faisant, l'employeur n'a imputé à Monsieur X... aucun motif précis, objectif et vérifiable;

Qu'en considérant cependant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien art. L. 122-14-2);

2º/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'un même comportement ne saurait être sanctionné successivement par un avertissement ou une mise à pied, puis par un licenciement;

Qu'en l'espèce, la SA TV7 Bordeaux a licencié Monsieur X... par lettre du 12 décembre 2003, aux termes de laquelle il était simplement indiqué que «cette mesure est motivée par vos retards fréquents et la perturbation qu'ils engendrent à la bonne marche de l'entreprise et à l'organisation de ses équipes ... D'une manière générale, vous ne prenez pas suffisamment en compte les consignes qui vous sont communiquées que ce soit au niveau du rangement du matériel ou de la discipline en général»;

Qu'il ressort, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4) que «Monsieur X... avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements et de deux mises à pied disciplinaires qui sanctionneraient des retards, des négligences dans le respect des plannings, dans le contrôle du matériel, la présence de nourriture et de boisson auprès du poste de travail...», le jugement (p. 3) précisant que «M. X... a reçu des lettres d'avertissements et de mise à pied pour des retards et l'exécution défectueuse de ses prestations notamment; sept courriers entre fin septembre 2002 et décembre 2003 lui sont adressés»;

Qu'en considérant cependant que le licenciement de Monsieur Olivier X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui n'a recherché si les fautes alléguées dans la lettre de licenciement n'avaient pas déjà été sanctionnées par un avertissement ou une mise à pied, empêchant ainsi la Cour de cassation de vérifier qu'il n'y avait pas eu double sanction du comportement reproché à Monsieur X..., a violé l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien art. L. 122-14-3), ensemble les articles L. 1331-1 et suivants de ce même code (anciens art. L. 122-40 et ss).

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

AUX MOTIFS QUE «le premier juge a rappelé les termes des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail qui définissent le harcèlement et qui mettent à la charge du salarié l'obligation d'établir des faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Il a ensuite relevé que Monsieur X... se contentait d'allégations vagues et imprécises qui ne permettaient pas de faire présumer de l'existence d'un harcèlement. En cause d'appel, Monsieur X... n'apporte aucun autre élément» (arrêt, p. 4),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «en l'espèce, le Conseil constate que M. X... se contente d'allégations sans établir des faits précis qui permettraient éventuellement de présumer l'existence d'un harcèlement; également que le Conseil souligne que M. X... invoque un éventuel harcèlement deux ans après la rupture du contrat alors qu'il n'avait auparavant jamais remis en cause les conditions d'exercice de son activité» (jugement, p. 6),

- ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements;

Qu'en l'espèce, la SA TV7 Bordeaux a licencié Monsieur X... par lettre du 12 décembre 2003, aux termes de laquelle il était indiqué que «cette mesure est motivée par vos retards fréquents et la perturbation qu'ils engendrent à la bonne marche de l'entreprise et à l'organisation de ses équipes ... D'une manière générale, vous ne prenez pas suffisamment en compte les consignes qui vous sont communiquées que ce soit au niveau du rangement du matériel ou de la discipline en général»;

Qu'il ressort, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4) que «Monsieur X... avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements et de deux mises à pied disciplinaires qui sanctionneraient des retards, des négligences dans le respect des plannings, dans le contrôle du matériel, la présence de nourriture et de boisson auprès du poste de travail...», le jugement (p. 3) précisant que «M. X... a reçu des lettres d'avertissements et de mise à pied pour des retards et l'exécution défectueuse de ses prestations notamment; sept courriers entre fin septembre 2002 et décembre 2003 lui sont adressés»;

Que pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, les juges du fond ont simplement relevé «que Monsieur X... se contentait d'allégations vagues et imprécises qui ne permettaient pas de faire présumer de l'existence d'un harcèlement»;

Qu'en statuant ainsi sans analyser les multiples avertissements et mises à pied qui avaient été adressés à Monsieur X... entre septembre 2002 et décembre 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail (anciens art. L. 122-49 à L. 122-52).

Décision attaquée: Cour d'appel de Bordeaux, du 8 avril 2008.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 10 mars 2009
N° de pourvoi: 07-44092
Publié au bulletin
Cassation
Mme Collomp, président
M. Flores, conseiller rapporteur
M. Duplat (premier avocat général), avocat général
SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 janvier 2004, en qualité de chef d'équipe, par la société entreprise dijonnaise de Bourgogne; que par courrier du 5 mai 2004, le salarié s'est plaint auprès de son employeur de divers «faits illégaux» tenant notamment au défaut de respect d'une promesse de promotion, au paiement des heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles, à la variation du taux horaire, à la présentation d'accidents de travail comme des situations de maladies et à des agissements de harcèlement moral imputés à un supérieur hiérarchique; qu'à la suite de ce courrier, il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juin 2004; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités, de rappels de salaires et d'heures supplémentaires;

SUR LE MOYEN relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile:

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que le fait pour un salarié d'imputer à son employeur, après en avoir averti l'inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n'est pas établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver, caractérise un abus dans l'exercice de la liberté d'expression et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement;

Qu'en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

ET SUR LE SECOND MOYEN:

Vu l'article L. 3171-4, du code du travail;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que

les seules mentions du nombre d'heures travaillées chaque jour sur l'agenda que celui-ci verse aux débats sont insuffisantes pour établir que toutes les heures supplémentaires effectuées n'auraient pas été payées en tant que telles, en l'absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles ces heures auraient été effectuées ainsi que sur leur nombre et qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les heures supplémentaires, non payées en tant que telles, avaient été effectuées par M. X...;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;

Condamne la société Entreprise dijonnaise Bourgogne aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Entreprise dijonnaise Bourgogne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2.500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande d'indemnité pour rupture abusive;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi par des documents probants, que les salariés auraient travaillé durant les périodes de congés payés et auraient reçu une rémunération sous forme de prime, ni que les accidents du travail étaient enregistrés en maladie, alors que les documents produits, notamment sur ce dernier point, établissent le contraire, la caisse d'assurance maladie ayant seulement pris l'initiative, lors de « l'accident » de septembre 2003, d'effectuer une enquête afin de déterminer s'il s'agissait ou non d'un accident du travail, dès lors que la société employeur contestait que ce caractère ait pu être attribué à l'accident déclaré sans que cette contestation puisse lui être reprochée à faute; qu'aucune preuve n'est rapportée que M. X... ait été victime de discrimination quant aux primes et aux revalorisations de son salaire dont il n'aurait pas bénéficié et quant au crédit qu'il n'aurait pas obtenu; que les brimades, dénigrement et insultes dont M. Y..., son chef de chantier se serait rendu l'auteur vis-à-vis de M. X... ne sont pas établis, les attestations que celui-ci verse aux débats, faisant état, au surplus, de l'alcoolisme de celui-ci, étant contredites par celles versées par l'employeur; qu'il en résulte que le courrier de critique adressé le 3 mai 2004 par M. X... à son employeur ne repose sur aucun fait prouvé; qu'en toute hypothèse le fait pour un salarié d'imputer à son employeur, après en avoir averti l'inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n'est pas établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver, caractérise un abus dans l'exercice de la liberté et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les propos contenus dans le courrier envoyé, le 3 mai 2004, par M. X... à la société Entreprise dijonnaise bourgogne, l'accusant de faits illégaux répétés et de harcèlement moral non démontrés par les éléments versés à la procédure, justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse;

- ALORS QUE l'envoi à l'employeur d'un courrier dénonçant de prétendues irrégularités et des faits qualifiés de harcèlement ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression en l'absence de tout propos injurieux, diffamatoires ou excessifs; qu'en se bornant à constater, pour caractériser l'abus de la liberté d'expression, que la réalité des irrégularités invoquées par le salarié n'était pas établie et que les faits de harcèlement n'étaient pas prouvés, sans rechercher si le courrier litigieux contenait des propos injurieux, diffamatoires

ou excessifs, et a fortiori sans caractériser de tels propos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé;

AUX MOTIFS QUE la société Entreprise dijonnaise bourgogne conteste que les heures supplémentaires aient été rémunérées sous forme de primes exceptionnelles; que les attestations versées aux débats par le salarié sur ce point sont contredites par celles produites par l'employeur, ce qui les prive de tout caractère probant; que sur les bulletins de paie de M. X... figurent des heures supplémentaires; qu'il n'est pas établi que le nombre de celles effectuées par M. X... ait dépassé le nombre mentionné et rémunéré; que les seules mentions du nombre d'heures travaillées chaque jour figurant sur l'agenda que celui-ci verse aux débats sont insuffisantes à établir que toutes les heures supplémentaires effectuées n'auraient pas été payées en tant que telles, en l'absence de toute précision sur les circonstances précises dans lesquelles ces heures auraient été effectuées ainsi que sur leur nombre; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que des heures supplémentaires, non payées en tant que telles, ont été effectuées par M. X...;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les heures supplémentaires notées sur l'agenda communiqué, revendiquées par M. X..., ne peuvent être retenues en l'absence des fiches de chantier correspondantes;

- ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par celui-ci et que l'employeur est tenu de lui fournir; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail.

Publication: Bulletin 2009, V, n° 66

Décision attaquée: Cour d'appel de Dijon, du 28 septembre 2006

Titrages et résumés: CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Dénonciation de faits de harcèlement moral - Sanction interdite - Portée

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Viole les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient que le fait pour un salarié d'imputer à son employeur des irrégularités graves dont la réalité n'est pas établie et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver, caractérise un abus dans l'exercice de la liberté d'expression et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Licenciement prononcé en raison de la dénonciation de faits de harcèlement moral - Condition

Textes appliqués: articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

RUPTURA ABUSIVA DE LA RELACIÓN LABORAL**Le: 16/01/2015****Cour de cassation****chambre sociale****Audience publique du 6 novembre 2013****N° de pourvoi: 12-22132****ECLI:FR:CCASS:2013:SO01867****Non publié au bulletin****M. Lacabarats (président), président****SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)****REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS****LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:****SUR LE MOYEN UNIQUE:**

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2011), que M. X... a été engagé comme agent de surveillance le 1er juin 1985 par la société Gama services, qui a été reprise par la société Securitas, pour être affecté depuis novembre 2004 sur le site Ranger à Theillay (41); que son employeur ayant perdu ce marché et le salarié ayant refusé le transfert de son contrat de travail auprès du repreneur, la société l'a avisé qu'elle modifiait son lieu de travail et qu'à compter du 19 octobre 2006 il était fixé à Sorigny (37), que le salarié a refusé sa nouvelle affectation le 30 novembre 2006 et ne s'y est pas présenté; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen:

- 1°/ que les dispositions de l'article 3.3 de l'accord étendu du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, qui se substitue de plein droit à celui du 18 octobre 1995, stipulent que le salarié ayant refusé son transfert suite à la perte d'un marché demeure salarié de l'entreprise sortante; que dans cette hypothèse, l'entreprise sortante ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail en l'affectant sans son accord sur un site situé dans un autre secteur géographique ou hors des limites géographiques fixées par le contrat de travail; qu'en jugeant que les absences de M. X... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté que la société Securitas l'avait affecté, sans son accord, sur un site situé dans un autre secteur géographique et hors de la zone de mobilité réduite prévue au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail;
- 2°/ que les dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 5 mars 2002, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, qui se substituent à l'accord du 18 octobre 1995, ne peut faire obstacle à l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé par l'entreprise sortante; que l'absence du salarié justifiée par son refus d'exécuter le contrat de travail modifié sans son accord par l'employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que pour dire le licenciement pour absences injustifiées fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application de l'accord relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995 et de l'article 6 alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement et que dès lors M. X... devait rejoindre le site de Sorigny sur lequel il a été affecté; qu'en statuant ainsi quand une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié, nonobstant toute clause conventionnelle contraire, la cour d'appel, qui a constaté que les absences reprochées à M. X... procédaient de son refus de l'affectation imposée par son employeur sur un autre secteur géographique, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble l'article 3.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité;

3º/ qu'en ne recherchant, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si concrètement l'affectation de M. X... sur un site situé dans un autre département ne bouleversait pas de façon importante ses conditions de vie dès lors que le salarié qui travaillait de nuit, de 18 heures à 6 heures 30, était obligé après cette longue période de travail d'effectuer un trajet de voiture de 130 kilomètres pour rejoindre son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le refus du salarié d'accepter le changement d'affectation consécutif à la perte d'un marché ne modifiait pas le contrat de travail et constituait un motif de licenciement;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a fait ressortir que l'affectation géographique du salarié n'avait pas été contractualisée;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes;

AUX MOTIFS QU' il résulte de l'accord relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995, et de l'article 6 alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement; qu'il est notamment ainsi lorsque le salarié refuse de passer au service du repreneur et refuse ensuite la nouvelle affectation proposée par son employeur d'origine; qu'il faut malgré tout vérifier si l'affectation à SORIGNY a été faite loyalement, le salarié le contestant du fait que, selon lui, il existait des possibilités géographiques plus proches; que la société avait un autre site à VIERZON, auprès de la société TIMKEN; que toutefois, à la suite d'un problème d'alcoolisme sur le site, ce client a expressément refusé, le 14 octobre 2004, la présence de Monsieur X... sur celui-ci; qu'il invoque des possibilités sur le sites ALSER à ROMORANTIN et LA POSTE à VIERZON, produisant trois attestations: Monsieur Y... dit qu'à l'époque la société a engagé des salariés sur le secteur de VIERZON; que Monsieur Z... dit qu'en janvier 2007, il y avait du travail au centre de tri postal de VIERZON; que Monsieur A... dit qu'il a travaillé sur ce site à compter du 6 janvier 2007; que concernant ALSER, rien ne justifie son allégation; qu'au contraire, lors de la réunion des délégués du personnel du 21 février 2007, il a été indiqué qu'un contact serait pris mi mars 2007 pour un démarrage « éventuel » mi avril 2007, et donc après le licenciement; que concernant la POSTE à VIERZON, il résulte: des réunions de délégués du personnel que LA POSTE a commencé par confier une mission temporaire à SECURITAS, jusqu'au 15 février 2007, avant que les relations ne soient pérennisées, du planning de février 2007 que n'y sont employés que des salariés à temps partiel; que dans ces conditions il n'était pas possible, en janvier, de le reclasser sur le site de LA POSTE, et la société n'a pas été déloyale en le mutant à SORIGNY, d'autant plus qu'elle justifie avoir muté d'autres salariés qui ne voulaient passer au service du repreneur tant à TOURS qu'à ORLEANS; qu'en outre, il n'était pas porté une atteinte excessive aux droits de l'appelant dès lors que comme il vient d'être dit, il n'existait pas de possibilité plus proche; qu'il reste à apprécier si la société a agi de façon précipitée, sans laisser un délai de prévenance raisonnable; qu'à l'origine, la société lui demande de rejoindre SORIGNY le 19 octobre 2006 par courrier du 10 octobre 2006, qui sera réputé reçu le 11; que le salarié exprime ses réticences le 13 octobre 2006; qu'il est en arrêt maladie du 18 octobre au 25 décembre 2006; qu'il refuse définitivement le 30 novembre 2006; que la société lui répond le 6 décembre 2006, le met en demeure le 2 janvier 2007, sans réaction du salarié, et engage la procédure le 10 janvier 2007; qu'elle n'a donc pas agi avec précipitation, laissant

à son salarié un temps de prévenance raisonnable et suffisant; que dès lors qu'il devait rejoindre SORIGNY à compter du 26 décembre 2006, il s'agit bien d'absences injustifiées depuis cette date, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le rappel de salaire n'est pas dû, Monsieur X... étant en arrêt de travail, puis en absence injustifiée, et ne se rendant pas davantage à SORIGNY pendant son préavis;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il faut prendre en considération les spécificités de l'activité des entreprises de sécurité, particulièrement à l'occasion de la perte d'un marché; qu'il faut préciser que, lorsqu'une entreprise de sécurité perd un marché, les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas dans la mesure où il ne s'agit que de la perte d'un marché; que c'est pour cette raison que les partenaires sociaux ont jugé utile de mettre en place une reprise conventionnelle des salariés dans le cadre de l'accord du 5 mars 2002; que l'article 3 de l'accord du 5 mars 2002 stipule que dans l'hypothèse d'un refus, l'entreprise sortante peut prendre une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail; que la société SECURITAS a fait le maximum pour éviter le licenciement de M. X...; que c'est parce qu'il a refusé son transfert au sein de la société RAVEL puis la proposition de reclassement par la société SECURITAS sur le site de SORIGNY que la procédure de licenciement a été mise en place; que de plus M. X... savait pertinemment qu'il ne pouvait plus être reclassé sur le site de TIMKEN à VIERZON en raison des problèmes rencontrés précédemment; que s'agissant des autres sites, il lui a été indiqué par courrier en date du 16 octobre 2006 qu'il n'y avait aucune possibilité d'affectation sur le Loir et Cher; que la société SECURITAS avait bien précisé dans ce courrier que l'affectation à SORIGNY était provisoire; que c'est pour des raisons qui lui sont propres que Mr X... a refusé sans que pour autant il puisse être reproché à la société SECURITAS une exécution déloyale du contrat de travail; qu'en refusant de se rendre sur son nouveau site d'affectation M. X... était donc en absence injustifiée; qu'en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur X... de ses demandes relatives à son licenciement;

1º/ ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article 3.3 de l'accord étendu du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, qui se substitue de plein droit à celui du 18 octobre 1995, stipulent que le salarié ayant refusé son transfert suite à la perte d'un marché demeure salarié de l'entreprise sortante; que dans cette hypothèse, l'entreprise sortante ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail en l'affectant sans son accord sur un site situé dans un autre secteur géographique ou hors des limites géographiques fixées par le contrat de travail; qu'en jugeant que les absences de M. X... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté que la société Securitas l'avait affecté, sans son accord, sur un site situé dans un autre secteur géographique et hors de la zone de mobilité réduite prévue au contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L 1221-1 et L 1232-1 du code du travail;

2º/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 5 mars 2002, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, qui se substituent à l'accord du 18 octobre 1995, ne peut faire obstacle à l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé par l'entreprise sortante; que l'absence du salarié justifiée par son refus d'exécuter le contrat de travail modifié sans son accord par l'employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que pour dire le licenciement pour absences injustifiées fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application de l'accord relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995 et de l'article 6 alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement et que dès lors M. X... devait rejoindre le site de Sorigny sur lequel il a été affecté; qu'en statuant ainsi quand une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié, nonobstant toute clause conventionnelle contraire, la Cour d'appel, qui a constaté que les absences reprochées à M. X... procédaient de son refus de l'affectation imposée par son employeur sur un autre secteur géographique, a violé les articles L 1221-1 et L 1232-1 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble l'article 3.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité;

3º/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en ne recherchant, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si concrètement l'affectation de M. X... sur un site situé dans un autre département ne bouleversait pas de façon importante ses conditions de vie dès lors que le salarié qui travaillait de nuit, de 18 h à 6h30, était obligé après cette longue période de travail d'effectuer un trajet de voiture de 130 kilomètres pour rejoindre son domicile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel d'Orléans, du 31 mai 2011.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 13 février 2013
N° de pourvoi: 11-27652
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 1er juin 2000 par la société Le Mécano bar en qualité de serveur; qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements les 17 et 25 mai 2006 pour ébriété, il a été placé en arrêt pour maladie du 25 mai au 4 juin 2006, puis licencié pour inaptitude le 8 septembre 2006; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant un harcèlement moral;

SUR LE PREMIER MOYEN:

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, que le licenciement est illicite et de la condamner à indemniser le salarié à ce titre alors, selon le moyen:

- 1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer l'atteinte de manière répétée à ses droits et à sa dignité susceptibles d'affecter sa santé et son avenir professionnel; que le simple usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne saurait constituer, en l'absence de toute mesure vexatoire ou dévalorisante à l'encontre du salarié, une situation de harcèlement moral; qu'en se bornant à constater, pour retenir l'existence de harcèlement moral; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements dont l'un avec mise à pied non exécutés pour état d'ébriété sur le lieu de travail et de l'engagement d'une procédure de licenciement qui n'a pas eu de suite, sans constater des faits de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail;
- 2°/ que la seule notification de deux sanctions justifiées par un état d'ébriété sur le lieu de travail non exécutées suivie d'une convocation à entretien préalable sans suite ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, qu'en retenant en l'espèce que M. X... avait fait l'objet de deux avertissements et de l'engagement d'une procédure de licenciement qui n'avait pas été suivie d'effet comme éléments constitutifs d'un harcèlement moral, sans rechercher si ces sanctions étaient ou non fondées, et si l'attitude répétée du salarié ne justifiait pas l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail;
- 3°/ que le fait pour un salarié de présenter un état dépressif ne caractérise pas en soi l'existence d'un harcèlement moral, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de l'employeur; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait subi plusieurs arrêts de travail en raison de sa maladie, qu'il présentait un état dépressif et que l'avis émis par le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié avec impossibilité d'avoir tout contact avec les autres salariés et la direction; qu'en statuant de la sorte pour retenir que le harcèlement moral était caractérisé alors que de tels éléments ne faisaient que décrire l'état de santé du salarié, la cour d'appel a induit un lien de causalité entre les conditions de travail et l'inaptitude, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail;
- 4°/ qu'en se bornant à énoncer que l'inaptitude avait comme explication une tension au sein de l'établissement sans prendre en considération l'élément objectif déterminant tiré de l'état de santé dégradé du salarié de sorte qu'il était avéré que l'inaptitude n'était pas liée à ses conditions de travail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'agissements répétés de l'employeur susceptibles d'entraîner une dégradation des conditions de travail du salarié ou d'altérer sa santé, en retenant d'abord que la multiplication des sanctions même inexécutées en quelques jours, avec envoi d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement sans constat de fait nouveau suffisait à caractériser des pressions de la part de l'employeur, ensuite, que le second avis d'inaptitude mentionnait l'exigence d'absence de contact avec les autres salariés et la direction, de sorte que l'inaptitude du salarié au poste résultait non seulement des problèmes de santé antérieurs, mais aussi de difficultés relationnelles au sein de l'établissement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

SUR LE SECOND MOYEN:

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser le salarié pour le préjudice moral subi alors, selon le moyen:

- 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement illicite entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en application de l'article 624 du code de procédure civile;
- 2°/ qu'en se bornant à relever un contexte de santé fragile, connu de l'employeur, le préjudice moral subi par le salarié du fait de la dégradation de ses relations de travail et des pressions exercées sur lui au cours des dernières semaines, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice distinct du préjudice résultant de la rupture illicite et violé l'article 1382 du code civil;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur connaissait le contexte de santé fragile du salarié, faisant ainsi ressortir l'existence des conditions vexatoires du licenciement et d'un préjudice moral distinct; que le moyen, dont la première branche est sans objet, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Le Mécano bar aux dépens;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Le Mécano bar à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2.200 euros;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 257,08 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Le Mécano bar.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu que Monsieur X... avait été victime de harcèlement moral de la part de la SARL LE MECANO BAR, dit en conséquence le licenciement de Monsieur X... illicite et condamné la SARL LE MECANO BAR à lui verser les sommes de 14.000 € à titre de dommages et intérêts, 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 1.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui ne remet pas en cause la régularité formelle du licenciement pour inaptitude soutient que l'employeur est responsable de celle-ci en raison du harcèlement qu'il estime avoir subi. Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de

travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est admis par les deux parties que Monsieur X... a été engagé en 2000 alors que l'employeur connaissait parfaitement les problèmes de santé qu'il rencontrait. Les documents communiqués établissent que Monsieur X... a fait l'objet d'arrêts de travail à plusieurs reprises au cours de la durée de la relation contractuelle. Les deux parties s'accordent sur le fait que les relations de travail se sont déroulées sans difficulté particulière jusqu'au début de l'année 2006. Pour corroborer cette affirmation, il apparaît que le 3 octobre 2005 à la faveur de la remise d'un avis de tiers détenteur émanant du Trésor Public, l'employeur s'est exprimé en ces termes «cet employé nous donne entière satisfaction et mérite notre aide Si le premier avis d'inaptitude ne comporte aucune motivation particulière, le médecin du travail a précisé au terme du deuxième avis inapte définitif au poste. Pas de contact avec les autres salariés et la direction». Le médecin traitant confirme la réalité d'un état dépressif réactionnel survenant sur un terrain fragilisé par la problématique à laquelle Monsieur X... est confronté mais dont la cause première distincte. Il s'ensuit que l'inaptitude au poste n'est pas directement et exclusivement en lien avec les problèmes de santé antérieurs de Monsieur X... mais résulte aussi de difficultés relationnelles au sein de l'établissement. Par ailleurs, Monsieur X... communique aux débats les deux notifications de sanctions disciplinaires des 17 mai 2006 et 25 mai 2006. Le premier document du 17 mai 2006 stipule avoir pour objet «un premier avertissement» et est ainsi libellé: «suite à votre comportement en date du 13 mai 2006, nous vous informons d'une mise à pied de cinq jours sans solde pour les motifs suivants: état d'ébriété sur le lieu de travail ainsi que consommation d'alcool ...». L'employeur n'est pas contredit quand il soutient que cette mise à pied disciplinaire n'a pas fait l'objet d'une exécution. Le second avertissement du 25 mai 2006 est motivé de la manière suivante: «il est inadmissible que vous nous apportiez votre arrêt de travail ce matin dans l'état d'ébriété où vous étiez, ce devant témoins, nous ne comprenons pas le sens de cet arrêt de travail...». Or, il convient d'observer que cette sanction a été notifiée pour un fait pour lequel aucun justificatif n'est produit, prétendument commis pendant une suspension du contrat de travail puisque l'employeur met l'accent lui-même sur le fait que ce constat a été opéré alors que le salarié apportait son arrêt maladie. Enfin, Monsieur X... a reçu une convocation à un entretien préalable prévu pour le 7 juin, l'employeur précisant qu'une mesure de licenciement était envisagée, alors que le salarié était en arrêt maladie depuis le 25 mai jusqu'au 4 juin 2006, qu'en conséquence aucun fait nouveau entre le 25 mai, jour de la notification d'un avertissement et le 1er juin, date d'envoi de la convocation n'avait pu être relevé par l'employeur. Sans qu'il soit besoin d'analyser les attestations des trois témoins dont l'employeur conteste l'impartialité du fait des contentieux engagés par certains, la multiplication des sanctions mêmes inexécutées en quelques jours, dans un contexte de suspension du contrat pour l'une d'elle, avec envoi d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement sans constat de fait nouveau, même non suivie d'effet, suffisent à caractériser des pressions et s'analysent comme étant des agissements répétés de la part de l'employeur constitutifs de harcèlement moral susceptibles d'entraîner une dégradation des conditions de travail du salarié, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur à qui il incombe de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement explique qu'il voulait amener le salarié à se ressaisir, qu'il n'a pas exécuté l'une des sanctions, ni donné suite à la convocation à l'entretien préalable, par mansuétude. Cet argument manque à tout le moins de pertinence alors que l'employeur connaissait la fragilité de Monsieur X... et qu'il était en mesure d'évaluer le syndrome dépressif subi par le salarié à cette époque en raison des arrêts de travail qui lui étaient communiqués. Les pressions ainsi exercées par l'employeur sur le salarié sur une courte période et qui ont abouti au constat médical de l'impossibilité pour lui d'assumer les relations professionnelles au sein de l'entreprise caractérisent un harcèlement. Le licenciement pour inaptitude prononcé dans ce contexte est nul.

1º/ ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer l'atteinte de manière répétée à ses droits et à sa dignité susceptibles d'affecter sa santé et son avenir professionnel; que le simple usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne saurait constituer, en l'absence de toute mesure vexatoire ou dévalorisante à l'encontre du salarié, une situation de harcèlement moral; qu'en se bornant à constater, pour retenir l'existence de harcèlement moral; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements dont l'un avec mise à pied non

exécutés pour état d'ébriété sur le lieu de travail et de l'engagement d'une procédure de licenciement qui n'a pas eu de suite, sans constater des faits de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail.

2º/ ALORS surtout QUE la seule notification de deux sanctions justifiées par un état d'ébriété sur le lieu de travail non exécutées suivie d'une convocation à entretien préalable sans suite ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, qu'en retenant en l'espèce que Monsieur X... avait fait l'objet de deux avertissements et de l'engagement d'une procédure de licenciement qui n'avait pas été suivie d'effet comme éléments constitutifs d'un harcèlement moral, sans rechercher si ces sanctions étaient ou non fondées, et si l'attitude répétée du salarié ne justifiait pas l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, la Cour d'Appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail.

3º/ ALORS de troisième part QUE le fait pour un salarié de présenter un état dépressif ne caractérise pas en soi l'existence d'un harcèlement moral, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de l'employeur; que la Cour d'Appel a constaté que le salarié avait subi plusieurs arrêts de travail en raison de sa maladie, qu'il présentait un état dépressif et que l'avis émis par le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié avec impossibilité d'avoir tout contact avec les autres salariés et la Direction; qu'en statuant de la sorte pour retenir que le harcèlement moral était caractérisé alors que de tels éléments ne faisaient que décrire l'état de santé du salarié, la Cour d'Appel a induit un lien de causalité entre les conditions de travail et l'inaptitude, privant sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail;

4º/ Alors enfin qu'en se bornant à énoncer que l'inaptitude avait comme explication une tension au sein de l'établissement sans prendre en considération l'élément objectif déterminant tiré de l'état de santé dégradé du salarié de sorte qu'il était avéré que l'inaptitude n'était pas liée à ses conditions de travail, la Cour d'Appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL LE MECANO BAR au versement de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par le salarié.

AUX MOTIFS QUE dans un contexte de santé fragile, connu de l'employeur, le préjudice moral subi du fait de la dégradation de ses relations de travail et des pressions exercées sur lui au cours des dernières semaines distinct du préjudice résultant de la rupture illicite, justifient l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 12.000 €.

1º/ ALORS QUE d'une part, la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement illicite entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.

2º/ ET ALORS d'autre part QUE, en se bornant à relever un contexte de santé fragile, connu de l'employeur, le préjudice moral subi par le salarié du fait de la dégradation de ses relations de travail et des pressions exercées sur lui au cours des dernières semaines, la Cour d'Appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice distinct du préjudice résultant de la rupture illicite et violé l'article 1382 du Code Civil.

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris, du 6 octobre 2011.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 18 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-14114
Non publié au bulletin
Cassation
M. Lacabarats (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu l'article L. 1243-1 du code du travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bosquet en qualité d'ouvrier pâtissier suivant contrat à durée déterminée du 5 mars au 18 mars 2007, puis à compter du 19 mars 2007 pour une durée de six mois; qu'invoquant la rupture anticipée de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de précarité;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages produits que le 7 avril 2007, M. X... a exprimé sur son lieu de travail, auprès de ses collègues et de son employeur, son souhait de ne plus continuer à travailler et de démissionner, ce que la société Bosquet a accepté en prévenant le service pénitentiaire compétent et en mentionnant sur l'attestation Assedic, comme motif de rupture, «démission»; que ces témoignages sont confortés par l'attestation du fils du salarié qui déclare voir vu son père en état d'ébriété et que celui-ci avait quitté lui-même son poste de travail étant dans l'incapacité de travailler; qu'ainsi la preuve est rapportée d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait exprimé son intention de démissionner dans un état de fatigue pendant un service de nuit après avoir déclaré qu'il ne pouvait plus travailler, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;

Condamne la société Bosquet aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... et M. Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et d'indemnité de précarité;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; que la rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque; qu'en l'occurrence, il ressort des témoignages précis et concordants des collègues de travail de Bernard X..., Guy Z... et Frédéric A..., pâtissiers, Marina B..., apprentie pâtissière, que le dimanche 7 avril 2007, Bernard X..., pris de fatigue comme cela lui arrivait souvent, a essayé de travailler de 3 heures à 5 heures du matin, puis a dit à la SARL BOSQUET que ce n'était pas la peine qu'il continue, qu'il démissionnait, ce que l'employeur a accepté en prévenant le service pénitentiaire compétent et en mentionnant sur l'attestation Assedic, comme motif de rupture du contrat, «démission»; que Bernard X... conteste la fiabilité du témoignage de M. A... au regard des horaires que celui-ci mentionne; que si, comme cela résulte des contrats versés aux débats, Bernard X... travaillait de 5 heures à 12 heures, il s'avère que le 9 mars 2007 l'employeur a accepté un changement d'horaire pour lui permettre de se conformer aux modalités du jugement du 20 mars 2007 lui accordant un régime de semi-liberté; qu'aux termes de cette décision Bernard X... était autorisé à quitter le quartier de semi-liberté du lundi au vendredi de 6 h 30 à 16 h, et bénéficiait de permissions de sortir du samedi 10 h au dimanche 18 h, de sorte que, comme cela ressort de ses bulletins de paye, il a été amené à travailler le dimanche matin; que ces témoignages sont d'ailleurs confortés par celui de Mickaël X... qui atteste avoir vu son père en état d'ivresse dans son garage où il déposait son scooter tous les jours à la sortie de son travail chez la SARL BOSQUET et avant d'aller en prison et qu'il a, de ce fait, quitté lui-même son poste de travail étant dans l'incapacité de le tenir; que la preuve d'une volonté claire et non équivoque de Bernard X... de rompre le contrat étant rapportée, le jugement doit être infirmé et Bernard X... débouté de ses demandes;

- ALORS QUE sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure; qu'en disant que l'employeur avait accepté la démission du salarié et que la preuve d'une volonté claire et non équivoque de ce dernier de rompre le contrat de travail était rapportée, après avoir constaté que, pris de fatigue lors du travail qu'il effectuait un dimanche matin entre 3 heures et 5 heures, il avait démissionné en déclarant qu'il ne pouvait plus continuer, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Grenoble, du 8 juin 2009.

Le: 03/06/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 29 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-19435
Publié au bulletin
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. Lacabarats, président
M. Trédez, conseiller apporteur
M. Aldigé, avocat général
Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 17 septembre 2008 n° 07-42. 366), que M. X... a été engagé le 22 mai 1980 par l'URSSAF des Vosges en qualité d'agent de contrôle et a exercé ensuite les fonctions d'inspecteur de recouvrement, coefficient 284; qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'une durée de quatre mois, le salarié a été déclaré, après deux examens médicaux des 24 juillet et 10 août 1998, apte à la reprise à un poste sans relations avec la clientèle; que l'employeur l'a alors affecté à compter du mois de septembre 1998 à un poste de gestionnaire de comptes cotisants au coefficient 185; qu'estimant avoir fait l'objet d'un déclassement abusif, le salarié a saisi le 14 août 2003 la juridiction prud'homale de demandes de réintégration dans son ancien emploi et de rappel de salaires; qu'en cours de procédure et après deux nouveaux examens médicaux en date des 13 juillet et 27 juillet 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise en précisant que le salarié ne devait pas y retourner; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail en raison de sa qualité de conseiller du salarié, l'intéressé a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 septembre 2009; qu'il a formulé une nouvelle demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral;

SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL:

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen:

- 1°/ que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de ce chef après avoir constaté que l'URSSAF avait manqué à son obligation de sécurité en se livrant à un harcèlement moral sur sa personne, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail;
- 2°/ qu'en retenant, pour débouter M. Michel X... de ce chef de demande, qu'il n'aurait pas allégué que les manquements de l'URSSAF seraient à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil;
- 3°/ qu'en retenant tout à la fois que M. Michel X... n'aurait pas allégué que les manquements de l'URSSAF seraient à l'origine de son licenciement et qu'il imputait son licenciement au comportement de l'ancien directeur à son égard, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu que si l'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de cette rupture; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié:

Vu l'article 1134 du code civil;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la reconnaissance de son déclassement abusif, à sa réintégration au poste d'inspecteur et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié a été déclaré apte à la reprise sans relation avec la clientèle, que si un avenant n'a pas été proposé à sa signature, le salarié, à aucun moment, n'a refusé son affectation, ni contesté l'avis du médecin du travail qui imposait cette modification de son contrat dès lors que ses fonctions antérieures impliquaient des contacts physiques avec des personnes extérieures à l'organisme, qu'il n'a pas réagi à sa nouvelle affectation durant cinq ans et n'a jamais sollicité du médecin du travail un réexamen de sa situation en vue d'exercer à nouveau des fonctions en relation avec la clientèle;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la modification du contrat de travail ne constituait pas un déclassé abusif et déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la modification du contrat de travail;

Dit que le salarié n'a pas accepté la modification de son contrat et qu'il a été victime d'un déclassé;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points restant en litige;

Condamne l'URSSAF des Vosges aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Vosges à payer à M. X... la somme de 2.500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déboute Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il a été victime d'un déclassé abusif, à ce qu'il soit réintégré au poste d'inspecteur sous peine d'astreinte, à ce que l'URSSAF des VOSGES soit condamnée à lui verser des arriérés de salaire pour la période du 18 août 1998 au 28 septembre 2009, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé sur la base des salaires qui auraient dû être versés ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail l'employeur doit proposer à un salarié déclaré inapte à son emploi un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions

du médecin du travail et les indications formulées sur son aptitude à exercer une des tâches existant dans l'entreprise; qu'à l'issue du deuxième examen médical de reprise prévu par l'article L. 4624-31 du même Code, l'employeur doit reclasser le salarié en fonction de ces indications; que dès lors qu'il entraîne d'une modification du contrat, l'accord du salarié est nécessaire; qu'il doit être exprimé de façon claire et non équivoque sans qu'un avenant soit requis; qu'il résulte des documents versés aux débats qu'après un arrêt maladie de 4 mois Monsieur X... a passé deux visites de reprise les 24 juillet et 10 août 1998, aux termes desquelles le médecin du travail a confirmé qu'il était apte à la reprise «sans relation avec la clientèle»; que l'employeur a alors sollicité l'avis du médecin du travail sur le profil de poste qui pourrait lui convenir selon une lettre du 11 août 1998; qu'en réponse, le médecin du travail a réitéré son avis antérieur tout en précisant que «cette restriction d'aptitude (n'était) pas forcément définitive» et que M. X... pourrait «tenir tous les postes de votre organisme qui respectent cette restriction unique» et en ajoutant qu'«il pourra certainement bientôt reprendre des contacts avec la clientèle à l'intérieur de l'URSSAF»; que cet avis est éclairé par les fonctions antérieures exercées par le salarié, qui le conduisaient à se déplacer auprès des entreprises et démontre que l'URSSAF devait proposer à M. X... un poste différent de celui précédemment occupé, où les contacts avec la clientèle ne pourraient se faire qu'à l'intérieur, ce qui pouvait comprendre la réception d'appels téléphoniques; que la direction a alors indiqué à M. X... qu'il serait affecté à compter du 24 août suivant au groupe «CFE (centre de formalités des entreprises), DUE (déclaration unique d'embauché), PIE et standard», selon une lettre du 18 août; qu'en réponse à une demande des délégués du personnel du 3 septembre 1998 la direction a précisé par une note non datée que cette affectation était provisoire et qu'elle n'écarterait pas une évolution de la situation de M. X...; que si un avenant n'a pas été proposé à sa signature, il est constant que le salarié n'a aucun moment refusé son affectation ce qui aurait autorisé l'employeur à engager une procédure de licenciement; mais qu'il a surtout entériné cette modification comme cela résulte de plusieurs éléments de fait produits aux débats:- il s'est présenté aux élections professionnelles à deux reprises au sein du collège des employés correspondant à son nouveau poste, comme cela résulte des listes de candidature des 29 avril 2002 et 23 avril 2004,- il n'a à aucun moment contesté comme il le pouvait l'avis du médecin du travail qui imposait cette modification de son contrat, dès lors que ses fonctions antérieures impliquaient des contacts physiques avec des personnes extérieures à l'organisme,- à la suite de la démarche des délégués du personnel du 3 septembre 1998, qui portait sur la diminution de son salaire et non sur ses fonctions, la direction a précisé le caractère provisoire de cette nouvelle affectation et le salarié n'allègue d'aucune démarche effective remettant en cause celle-ci, qui s'est trouvée ainsi pérennisée,- il n'a pas réagi à sa nouvelle affectation durant cinq ans, sa demande étant datée du mois d'août 2003, sans qu'il invoque ni justifie d'aucune réclamation dans l'intervalle,- le fait qu'il ait postulé à des postes d'inspecteurs recouvrement en 2003 comme il l'établit démontre bien qu'il souhaitait retrouver un tel emploi, mais non qu'il ait refusé en 1998 cette nouvelle affectation à un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail,- il n'a à aucun moment sollicité du médecin du travail un réexamen de sa situation en vue d'exercer à nouveau des fonctions en relation avec la clientèle et ne fait d'ailleurs pas état de telles démarches; qu'il apparaît ainsi que l'employeur a suivi les préconisations du médecin du travail en affectant le salarié comme il l'a fait sur un poste conforme aux restrictions prévues, et que le salarié a accepté, de manière implicite mais non équivoque, la modification du contrat de travail qui en a résulté; qu'en conséquence, c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a qualifié cette mesure, imposée par l'inaptitude partielle du salarié, de déclassement et l'a jugée abusive; (...); que la demande d'arriérés de salaires n'est pas fondée dès lors que la modification du contrat de travail de Monsieur X... résultant de son inaptitude partielle a été valablement décidée par l'employeur au vu de l'avis obligatoire du médecin du travail; (...); que Monsieur X... a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement conforme au coefficient appliqué après le reclassement opéré; que la Cour écartant les prétentions de Monsieur X... sur cette modification du contrat de travail, la base de calcul retenue sera jugée conforme aux droits du salarié; qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer le complément sollicité qu'il calcule sur la base du salaire théorique d'inspecteur recouvrement.

1º/ ALORS QUE l'acceptation par un salarié d'une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions, et ce même pendant plusieurs années; que son consentement doit être exprès; qu'ayant constaté qu'aucun avenant au contrat de travail n'avait été signé et qu'aucune acceptation claire et non équivoque n'avait été formulée par le salarié, peu important les conséquences tirées par le salarié de la modification imposée, la Cour d'appel ne pouvait valablement déduire de la poursuite par le salarié de son travail au nouveau poste pendant cinq ans sans protestation de sa part, qu'il avait accepté son déclassement; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

2º/ ALORS encore QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en compte pour considérer que l'employeur a rempli son obligation de reclassement; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le salarié a été affecté de manière définitive à un poste de gestionnaire de comptes cotisant sans qu'il soit tenu compte de l'avis du médecin du travail qui avait interdit tout contact avec le public et prononcé une inaptitude uniquement temporaire à son poste d'inspecteur de recouvrement; qu'en déclarant néanmoins que le reclassement opéré était conforme aux exigences de l'article L. 1226-2 du Code du travail, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QU'élément nouveau par rapport aux faits débattus devant le Conseil de prud'hommes, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 25 septembre 2009; que ce licenciement fait suite à deux avis d'inaptitude du médecin du travail des 13 juillet et 27 juillet 2009, dont le second mentionne: « inapte définitivement à tout poste dans cette entreprise; ne doit pas y retourner »; que l'employeur a détaillé dans la lettre de licenciement les démarches entreprises en vue d'un reclassement éventuel du salarié: une prospection de proposition de postes de techniciens avec un coefficient de rémunération 205, égal à la rémunération du poste antérieur, des recherches restées vaines auprès d'autres organismes de l'URSSAF, l'impossibilité de transformer son poste ou d'adapter ses horaires; qu'il a également mentionné l'autorisation obtenue de l'inspecteur du travail, rendue nécessaire par son statut de conseiller du salarié; que le salarié, qui n'a pas contesté la réalité de ces démarches, qualifie son licenciement d'abusif en l'imputant uniquement au comportement de l'ancien directeur à son égard dans la période ayant précédé ce licenciement; que Monsieur X... n'allègue pas non plus que l'employeur aurait manqué à ses obligations de recherche de reclassement; qu'à ce stade de l'examen des faits invoqués par le salarié, la Cour relève qu'elle n'est pas saisie de conclusions tendant à la nullité du licenciement mais que Monsieur X... sollicite néanmoins des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral résultant des manquements commis au cours de l'exécution du contrat après son déclassement, sans alléguer que ces manquements seraient à l'origine de son licenciement; que dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement du salarié est justifié par l'inaptitude totale de Monsieur X... à exercer tout emploi au sein de l'URSSAF et que l'employeur n'a pas méconnu ses obligations de reclassement; (...); qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur X... des dommages et intérêts pour licenciement abusif, celui-ci étant fondé sur son inaptitude médicalement constatée.

1º/ ALORS QUE le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de ce chef après avoir constaté que l'URSSAF avait manqué à son obligation de sécurité en se livrant à un harcèlement moral sur sa personne, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

2º/ ET ALORS QU'en retenant, pour débouter Monsieur Michel X... de ce chef de demande, qu'il n'aurait pas allégué que les manquements de l'URSSAF seraient à l'origine de son licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du Code civil.

3º/ ALORS enfin QU'en retenant tout à la fois que Monsieur Michel X... n'aurait pas allégué que les manquements de l'URSSAF seraient à l'origine de son licenciement et qu'il imputait son licenciement au comportement de l'ancien directeur à son égard, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Vosges.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'URSSAF des Vosges à payer à M. X... la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait d'un prétendu harcèlement;

AUX MOTIFS QU'il est établi plusieurs faits susceptibles de faire présumer un harcèlement; qu'ainsi, le salarié établit que le directeur de l'URSSAF, M. Z..., le faisait surveiller lorsque celui-ci était consigné au standard;

qu'il devait demander l'autorisation de s'absenter pour aller aux toilettes; que la direction a fait saisir ses comptes au guichet même de l'URSSAF pour recouvrer les montants payés suite à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Nancy; que les différents collègues de M. X... ont tenté en vain d'infléchir la direction sur cette attitude à l'égard de M. X... au cours d'une réunion collective en 2007 (comme cela résulte notamment des attestations de Mmes A..., D... et E... et de M. B...); que des propos blessants et une absence de courtoisie de la part de la hiérarchie directe de M. X... (attestation de M. C...); que le directeur évitait de serrer la main du salarié (attestation de M. B...); que la direction a affiché ou laissé afficher dans les locaux l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ayant réformé la condamnation prononcée contre l'URSSAF alors que cela n'avait aucune justification, jetant le discrédit sur le salarié (attestation de M. B...); qu'en outre, le compte rendu d'un entretien tenu en 2009 entre M. X... et la direction, représentée par le directeur M. Z... et deux responsables des ressources humaines, a révélé que M. X... souhaitait retrouver ses fonctions anciennes après l'arrêt de la Cour de cassation et qu'il s'est heurté à une mauvaise volonté manifeste du directeur qui lui opposait le coût de la procédure et qui a refusé toute indemnisation; qu'enfin, l'URSSAF a mis le salarié en longue maladie le 10 avril 2000 avec effet au 22 février 1999 sans justifier de l'approbation du médecin conseil ni de celle de la caisse primaire d'assurance maladie; qu'il résulte ainsi des éléments ci-dessus que des faits répétés de nature à porter atteinte à la santé physique ou mentale de M. X... ou de compromettre son avenir professionnel ont été établis par le salarié; que ces agissements émanent de M. Z... directement ou d'autres cadres placés sous sa responsabilité, il appartenait à la direction de l'URSSAF de protéger le salarié contre ces agissements et d'y mettre fin; qu'au vu de ces faits et agissements successifs, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne s'agissait pas de harcèlement; que cette preuve n'a pas été rapportée; que dès lors, il y a lieu de considérer que, si le licenciement du salarié peut être justifié par l'inaptitude de M. X... à exercer tout emploi au sein de l'URSSAF et que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de reclassement, les agissements répétés de l'URSSAF vis-à-vis de son salarié sont constitutifs de faits de harcèlement moral, ayant entraîné pour le salarié un préjudice moral certain; que compte tenu de la durée des relations difficiles entre M. X... et son supérieur et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la cause en était l'alcoolisme du salarié ou la mauvaise volonté de l'employeur au maintien de M. X... en son sein, le préjudice moral résultant du comportement fautif de la direction de l'URSSAF autorise le salarié à en réclamer réparation;

- ALORS QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que le fait de se trouver confronté à des désagréments isolés ne suffit pas à constituer un harcèlement moral, dès lors que le salarié est lui-même à l'origine de ces désagréments; qu'en estimant que M. X... était fondé à invoquer l'existence d'un harcèlement moral, au motif qu'il se serait trouvé confronté périodiquement à l'hostilité de sa direction, sans que les juges du fond se prononcent sur le point de savoir si ces «relations difficiles entre M. X... et son supérieur» avaient pour cause «l'alcoolisme du salarié ou la mauvaise volonté de l'employeur» (arrêt attaqué, p. 6 § 5), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du code du travail.

Publication: Bulletin 2011, V, n° 275

Décision attaquée: Cour d'appel de Colmar, du 21 avril 2010

Titrages et résumés: CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Accord du salarié - Nécessité.

L'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions.

Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes relatives à son déclassement alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail.

Textes appliqués:

Article 1134 du code civil.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 10 novembre 2010

N° de pourvoi: 08-44661

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Boutet, SCP Didier et Pinet, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er octobre 1991 en qualité de secrétaire par la société Médica France a été licenciée pour faute grave le 23 décembre 2004; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture du contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral;

SUR LE PREMIER MOYEN:

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen:

- 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour ce motif doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était justifié après avoir constaté que, bien qu'aucune vérification n'ait été rendue nécessaire, l'employeur a attendu plus de 8 semaines pour procéder au licenciement de Mme X... après avoir eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ce dont il résultait que la faute imputée à la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail;
- 2°/ que l'arrêt de travail et l'absence du salarié consécutivement aux fautes qui lui sont reprochées ne peuvent justifier le délai excessif mis par l'employeur pour engager la procédure de licenciement pour faute grave; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail;
- 3°/ que ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant quatorze ans d'ancienneté et sous traitement médical, d'avoir à une seule occasion, refusé de répondre au téléphone, eu des difficultés à tenir son équilibre et tenu des propos jugés grossiers et insultants à l'égard de sa hiérarchie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le délai restreint à observer par l'employeur pour l'invocation d'une faute grave, et, d'autre part, relevé que Mme X..., qui sentait l'alcool et avait des difficultés à conserver son équilibre, avait sur son lieu de travail, au vu de tous, alors qu'elle était chargée de l'accueil et du standard, refusé avec grossièreté d'assurer ses tâches et avait eu dans le bureau de sa supérieure hiérarchique une attitude grossière et insultante tant vis-à-vis de celle-ci que du directeur d'exploitation; qu'elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN:

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que «Mme X... produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, une attestation de Mme Y... rapportant que lors de l'entretien préalable la salariée a déclaré que «depuis quelque temps ça n'allait plus au sein de

l'établissement» et indiquant l'avoir vue pleurer sur son lieu de travail, un certificat du docteur Z..., qu'elle consulte depuis septembre 2004, selon lequel elle a dit être l'objet de conflits socio-professionnels, un bulletin d'hospitalisation à compter du 15 novembre 2004 et des prescriptions de médicaments pour la période du 5 novembre 2004 au 10 septembre 2007; qu'elle n'établit pas l'existence de faits répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement»;

Qu'en statuant ainsi alors que la salariée n'était tenue que d'apporter des éléments qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;

Condamne la société Médica France aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médica France à payer à Mme X... et à l'Union locale CGT de Chatou la somme globale de 2 500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... et l'Union locale CGT de Chatou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de rappels de salaire;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi qu'aucun grief n'a été porté à la connaissance de madame X... lors de l'entretien préalable; que si madame Y..., qui assistait la salariée lors de cet entretien indique que la directrice a gardé le silence et n'a formulé aucun reproche, elle note cependant que celle-ci a demandé des explications à madame X...; que madame Y..., convoquée par le conseil de prud'hommes, n'ayant pas déféré à la convocation qui lui a été adressée, n'a pas éclairci cette contradiction qui ne permet pas de retenir son attestation comme probante; que la lettre de licenciement, qui fixe la limite du litige, est rédigée en ces termes: « nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave suite aux faits suivants: Vous êtes embauchée au sein de la résidence Clairefontaine Louveciennes en qualité de secrétaire administrative depuis le 7 octobre 1997; que le lundi 27 septembre 2004, non seulement vous avez fait preuve d'un manque évident de professionnalisme mais vous avez été par ailleurs surprise en d'état d'ébriété sur l'établissement, durant vos heures de travail; qu'en effet ce jour là vers 9 heures lors de la prise de fonction de notre cadre infirmier diplômé d'état, vous n'étiez pas à votre poste de travail. Vers 10 heures, ce dernier vous trouve discutant dans le hall d'accueil de l'établissement avec les accompagnatrices des résidents et ce alors même que le standard ne cessait de sonner. Lorsque le cadre infirmier vous demande de bien vouloir répondre aux appels téléphoniques vous lui répondez « eh ben que ça sonne », vous ajoutez par la suite « j'en ai rien à foutre je me casse d'ici, j'en ai ras le bol de travailler ici ». Par ailleurs, toujours le lundi 27 septembre 2004, M. Thomas A..., directeur d'exploitation, en rendez-vous avec madame Brigitte B..., témoin de votre esclandre à l'accueil, vous fait alors venir dans le bureau de la directrice d'établissement afin de vous calmer. Il remarque alors que vous êtes en état d'ébriété et que vous tenez difficilement debout. Cherchant à vous calmer, vous lui avez fait en réponse un bras d'honneur, et avez insisté pour rentrer chez vous. La directrice d'établissement,

refusant de vous laisser conduire dans votre état, a alors contacté votre mari afin qu'il vienne vous chercher. Lors de notre entretien vous avez reconnu la totalité des faits que nous vous reprochons. Nous vous rappelons qu'en votre qualité de secrétaire administrative, vous avez notamment en charge la responsabilité de la qualité de l'accueil physique des visiteurs et des résidents mais également la gestion de l'accueil téléphonique. Ainsi, eu égard à votre mission, nous sommes en droit d'attendre de votre part une certaine disponibilité et courtoisie dans l'exercice de votre profession. Or, votre comportement ce jour là est en contradiction totale avec ce que nous attendons d'une secrétaire administrative. Votre attitude, ce lundi 27 septembre 2004, dénote un manquement professionnel certain. Nous ne pouvons accepter un tel comportement de la part de nos salariés. En effet, il ne vous appartient nullement de décider quelles tâches vous souhaitez accomplir ou pas et ce d'autant plus lorsque celles-ci relèvent de votre fiche de fonction que vous avez acceptée. Par ailleurs, votre comportement ce jour là en présence du directeur d'exploitation est inacceptable. Cette attitude déplorable va à l'encontre de nos principes et nuit à l'image de notre établissement. En effet, il est demandé à tout le personnel de faire preuve de correction dans son comportement vis à vis de sa hiérarchie et d'adopter en toutes circonstances un langage et un comportement appropriés envers les résidents, ses collègues de travail et les clients extérieurs que la résidence est susceptible de recevoir. Votre conduite doit être courtoise et irréprochable eu égard à la mission vous incombant. En conséquence de quoi, nous vous adressons la présente notification de licenciement pour faute grave»; que la lettre de licenciement reprend les principaux faits rapportés par monsieur C..., cadre infirmier, madame B..., directrice de l'établissement, et monsieur A..., directeur d'exploitation dans les attestations précises et très circonstanciées versées aux débats; que monsieur C... a confirmé la réalité des faits relatés lors de son audition par le conseil de prud'hommes; qu'il est établi par ces attestations et cette audition que le 27 septembre 2004, sur son lieu de travail au vu de tous, dans le hall de la résidence où elle était chargée de l'accueil et du standard, et au temps du travail, madame X..., qui sentait l'alcool et avait des difficultés à conserver son équilibre, a refusé avec grossièreté, en présence d'accompagnatrices de résidents, d'assurer ses tâches et a ensuite fait preuve, dans le bureau de madame B... sa supérieure hiérarchique, d'une attitude grossière et insultante tant vis-à-vis de celle-ci que de monsieur A..., directeur d'exploitation alors présent sur les lieux; qu'un tel comportement, qui perturbe gravement la bonne marche du service et est susceptible de compromettre la confiance des tiers dans l'établissement, rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, en dépit de son ancienneté; que le délai écoulé entre la constatation des faits et l'engagement, le 18 novembre 2004, de la procédure de licenciement ne prive pas l'employeur de la possibilité d'invoquer la gravité du comportement fautif de madame X..., dès lors que le contrat de travail était suspendu par un arrêt maladie durant cette période et que l'intéressée était en fait absente de l'établissement; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de madame X... par la société Medica France pour faute grave justifié; qu'il y a lieu en conséquence de débouter l'intéressée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 1º/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour ce motif doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire; qu'en retenant que licenciement pour faute grave était justifié après avoir constaté que, bien qu'aucune vérification n'ait été rendue nécessaire, l'employeur a attendu plus de 8 semaines pour procéder au licenciement de madame X... après avoir eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ce dont il résultait que la faute imputée à la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail;
- 2º/ ALORS QUE l'arrêt de travail et l'absence du salarié consécutivement aux fautes qui lui sont reprochées ne peuvent justifier le délai excessif mis par l'employeur pour engager la procédure de licenciement pour faute grave; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail;
- 3º/ ALORS QUE ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant quatorze ans d'ancienneté et sous traitement médical, d'avoir à une seule occasion, refusé de répondre au téléphone, eu des difficultés à tenir son équilibre et tenu des propos jugés grossiers et insultant à l'égard de sa hiérarchie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR débouté l'Union Locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 122-49 du code du travail (ancien), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que l'article L 122-52, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 2003, énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que madame X... produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, une attestation de madame Y... rapportant que lors de l'entretien préalable la salariée a déclaré que «depuis quelque temps ça n'allait plus au sein de l'établissement» et indiquant l'avoir vu pleurer sur son lieu de travail, un certificat du docteur Z..., qu'elle consulte depuis septembre 2004, selon lequel elle a dit être l'objet de conflits socioprofessionnels, un bulletin d'hospitalisation à compter du 15 novembre 2004 et des prescriptions de médicaments pour la période du 5 novembre 2004 au 10 septembre 2007; qu'elle n'établit pas l'existence de faits répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement; que la Cour étant suffisamment informée des faits de la cause» il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction; qu'il convient en conséquence de débouter madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral;

ET AUX MOTIFS QUE l'Union Locale CGT de Chatou est recevable à agir pour harcèlement moral; que le harcèlement moral allégué par madame X... n'étant cependant pas établi, il y a lieu de débouter l'Union Locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts;

1º/ ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Madame X... a produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, une attestation de madame Y... indiquant l'avoir vue pleurer sur son lieu de travail, le certificat du docteur Z... qu'elle consulte depuis septembre 2004 en raison de difficultés psychologiques liées à des «conflits socioprofessionnels», un bulletin d'hospitalisation à compter du 15 novembre 2004, ainsi que des prescriptions médicales pour dépression nerveuse; que ces éléments étaient suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui était reprochés étaient étrangers à tout harcèlement; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail;

2º/ ALORS QU 'en s'abstenant de vérifier si les certificats médicaux versés aux débats faisant état de l'état dépressif de madame X... à la suite de problèmes socioprofessionnels et l'attestation d'une de ses collègues indiquant l'avoir vu «pleurer sur son lieu de travail» ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Versailles, du 25 juin 2008.

Le: 03/06/2015

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 28 avril 2011

N° de pourvoi: 09-70170

Non publié au bulletin

Cassation

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de caissier barman depuis le 1er juillet 1987 d'abord par la société Eyal puis à compter d'août 2005 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société Stef Bar, a été licencié le 2 février 2006 après mise à pied conservatoire pour faute grave pour agressivité, manque de respect à l'égard de la direction et altercation avec un client de l'établissement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que le salarié qui, à l'occasion de son travail, a giflé un client de l'établissement au sein duquel il travaillait et s'est adressé à son employeur dans des termes particulièrement grossiers, s'est révélé agressif;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, le contexte dans lequel l'incident avec le client était intervenu et le caractère isolé des faits n'étaient pas, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de l'absence de reproche antérieur, de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;

Condamne la société Tabac du Marché aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tabac du Marché à payer à M. X...la somme de 2.500 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X...reposait sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes du salarié;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixant les termes du litige est rédigée dans les termes suivants: « Nous faisons suite à l'entretien préalable à votre licenciement qui a eu lieu le 30 janvier 2006 en nos locaux. Au

cours de cet entretien préalable, vous avez reconnu avoir giflé un client de notre établissement et ce à trois reprises, alors que vous étiez en train de travailler au sein de notre entreprise. Malgré votre reconnaissance des faits, vous n'avez pas cru devoir vous excuser des faits commis. Les explications que vous nous avez fournies nous paraissent insuffisantes et nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:- Nous avons le regret de constater votre manque de respect, votre agressivité à l'égard de notre établissement et de la direction à des multiples reprises ces derniers temps.- En effet, en date du 20 janvier 2006 entre 15h et 16 h, alors que vous étiez en train de travailler au sein de notre établissement, vous avez giflé, sans aucune raison, un client de notre établissement et ce à 3 reprises.

- Cette scène a d'ailleurs été filmée par les caméras qui se trouvent à l'intérieur de notre établissement.- Bien que vous ayez reconnu les faits lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas souhaité vous excuser des faits commis. Vous comprenez que jusqu'à présent, nous avons été patients mais aujourd'hui nous ne pouvons plus tolérer cette attitude négative persistante qui commence à avoir des répercussions directes sur la bonne marche de l'entreprise»; que Monsieur X...ne conteste pas avoir donné une gifle à un client de l'établissement au sein duquel il travaillait et pendant ses heures de service; que l'employeur produisait principalement l'attestation de la victime indiquant avoir reçu le 20 janvier 2006 suite à une altercation avec Monsieur X..., des coups au visage administrés à 3 reprises et la cassette vidéo enregistrée par la caméra de surveillance du magasin; que cette cassette avait été visionnée par un huissier de justice, hors la présence de Monsieur X...qui disait ne pas connaître son contenu; que l'huissier ne précisait pas connaître physiquement Monsieur X...et ne pouvait donc constater qu'il était l'auteur de la gifle constatée sur le film; que toutefois, les constatations de l'huissier étaient à rapprocher des aveux de monsieur X...à l'audience qui avait reconnu « Je ne conteste pas qu'il y ait eu une agression »; qu'il était donc établi que Monsieur X..., en service, avait, ainsi qu'il l'avait reconnu, administré au moins une gifle à un client de l'établissement au sein duquel il travaillait; que l'employeur expliquait par ailleurs que Monsieur X...alors que des explications lui étaient demandées sur son comportement, lui avait, le 22 janvier 2006, manqué de respect et s'était montré agressif à son égard; que Y...et Boubé Z...attestaient que Monsieur X...les avait traités de «faux culs» et aurait déclaré à Monsieur Stéphane Z..., gérant de l'établissement, «tu n'as pas les couilles de me virer...»; que le fait que ces témoins étaient manifestement proches du gérant ne suffisaient pas à écarter leurs témoignages confortés par celui d'une cliente indiquant «venue boire un café au Grillon le 22 janvier 2006 vers 19h30, j'atteste par la présente que le salarié de l'établissement M. A...s'est adressé aux autres salariés ainsi qu'à Monsieur Stéphane Z...en les insultants de «faux culs» avec un ton assez violent puis en s'allant il a fini par dire «vous n'avez pas les couilles de me virer...»; que Monsieur X...ne s'était pas expliqué sur les propos qui lui étaient attribués et ne les avait en aucune manière démentis; qu'il était ainsi démontré que Monsieur X..., par la grossièreté de ses propos, avait manqué de respect à sa hiérarchie; qu'en conséquence, le salarié qui avait, à l'occasion de son travail, giflé un client de l'établissement au sein duquel il travaillait, et s'était adressé à son employeur en des termes particulièrement grossiers, s'était révélé agressif; que ces circonstances avaient rendu impossible le maintien du lien salarial même pendant la durée du préavis;

- 1º/ ALORS QUE constitue un mode de preuve illicite le compte rendu de visionnage d'une cassette vidéo enregistrée par la caméra de surveillance du magasin, établi par un huissier de justice qui a pris connaissance de la cassette hors la présence du salarié, à plus forte raison lorsque les locaux surveillés étaient précisément ceux dans lesquels le salarié exécutait son contrat de travail et qu'il n'est pas constaté que le dispositif de surveillance avait été préalablement porté à sa connaissance; qu'en s'étant fondée, pour retenir la faute grave, sur le compte-rendu de visionnage d'une cassette vidéo par un huissier de justice, effectué hors la présence du salarié, la caméra ayant enregistré l'activité du salarié sans qu'il soit constaté qu'il avait été informé de ce procédé de contrôle, la cour d'appel a violé les article 9 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail;
- 2º/ ALORS QU'en se fondant sur l'aveu de monsieur X...à l'audience, qui avait reconnu «Je ne conteste pas qu'il y ait eu une agression», pour en déduire à tort que Monsieur X...aurait reconnu avoir administré au moins une gifle à un client de l'établissement, quand la déclaration de M. X...n'était porteuse d'aucun aveu sur le fait qu'il ait giflé un client, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil;
- 3º/ ALORS QUE la faute grave, privative du préavis, doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait écarté la faute grave au motif que le responsable de Monsieur X..., présent le jour où les faits s'étaient déroulés, n'avait pas cru

bon d'intervenir pour calmer l'agressivité du client en état d'ébriété, qui avait agressé et injurié Monsieur X..., sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances, d'une part, que le salarié s'était fait insulté par un client en état d'ébriété avancé sans qu'aucun responsable n'intervienne, et d'autre part qu'il avait une ancienneté de plus de 19 ans dans les mêmes fonctions au sein de l'établissement sans que ses compétences et qualités relationnelles ne soient mises en causes, n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 du code du travail;

- 4º/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié «votre manque de respect, votre agressivité à l'égard de notre établissement et de la direction à des multiples reprises ces derniers temps.- En effet, en date du 20 janvier 2006 entre 15h et 16 h, alors que vous étiez en train de travailler au sein de notre établissement, vous avez giflé, sans aucune raison, un client de notre établissement et ce à 3 reprises» et lui rappelait «jusqu'à présent, nous avons été patients mais aujourd'hui nous ne pouvons plus tolérer cette attitude négative persistante»; qu'il en résultait que la gifle censée avoir été commise le 20 janvier 2006 était le dernier comportement visé dans la lettre; qu'en ayant néanmoins pris en considération, pour juger justifié le licenciement de Monsieur X..., des propos grossiers censés avoir été proférés le 22 janvier 2006, quand ces motifs n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail;
- 5º/ ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait; qu'après avoir constaté que l'employeur expliquait que Monsieur X...lui avait, alors que des explications lui étaient demandées sur son comportement, manqué de respect et s'était montré agressif à son égard, que des témoins attestaient que Monsieur X...les avait traités de « faux culs » et avait déclaré à Monsieur Stéphane Z..., gérant de l'établissement, «tu n'as pas les couilles de me virer», la cour d'appel, qui a énoncé que Monsieur X...«ne s'est pas expliqué sur les propos qui lui ont été attribués. Il ne les a en aucune manière démentis» (p. 5, antépénultième alinéa), pour en déduire qu'il serait ainsi démontré que Monsieur X..., par la grossièreté de ses propos, avait manqué de respect à sa hiérarchie et avait commis une faute grave, a violé l'article 1315 du code civil.

Décision attaquée: Cour d'appel de Versailles, du 28 avril 2009.

DE UN TRABAJADOR A OTRO TRABAJADOR

Le: 16/01/2015
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 31 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-18915
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01807
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2012), que Mme X... a été engagée le 10 avril 1989 par la société Adecco France en qualité d'attachée commerciale avant d'occuper les fonctions de chef de l'agence de Hirson; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 février 2010, l'employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral sur ses collaboratrices;

SUR LE PREMIER MOYEN:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

SUR LE SECOND MOYEN:

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen:

- 1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité; que l'existence d'une faute grave à l'origine du licenciement, n'exclut pas la possibilité pour le salarié, si les circonstances de la rupture le justifient, d'obtenir réparation d'un préjudice distinct de la perte de son emploi; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre des circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 de code de procédure civile;
- 2°/ que commet une faute donnant lieu au versement de dommages-intérêts distincts de l'indemnité visant à réparer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur qui rompt le contrat de travail dans des conditions brutales ou vexatoires; qu'en l'espèce, la demanderesse invoquait le fait que la mise en oeuvre de son licenciement était intervenue alors que celle-ci poursuivait un grossesse à risque, connue de l'employeur, et que la rupture du contrat avait été précédée d'une procédure interne pendant laquelle elle était indisponible au titre de cet état de grossesse, mais aussi que les griefs contenus dans la lettre de licenciement mettaient en cause sa moralité; qu'en affirmant péremptoirement que Mme X... ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de cette rupture, sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes;

AUX MOTIFS QUE «la société ADECCO France verse aux débats les attestations établies par les quatre collaboratrices de Nathalie X..., Nadia Y..., Elodie Z..., Marie A... et Aurélie C... qui relatent le comportement de celle-ci à leur égard; qu'il en ressort que selon ces salariées, le harcèlement dont elles étaient victimes prenait la forme: de propos dévalorisants, humiliants et injurieux tenus souvent devant d'autres collaboratrices ou devant des clients et portant tant sur la qualité de leur travail que sur leur personne en général, d'immixtion dans leur vie privée et notamment à l'occasion de leur grossesse; en dernier lieu de pressions dans le cadre de la mise en application du PSE; que s'agissant plus précisément des deux aspects principaux du harcèlement dénoncé:

1) que Nadia Y..., dans son attestation extrêmement détaillée de 15 pages, relate notamment que Nathalie X... lui a dit, le plus souvent devant témoins: «tu es remplie de vide, c'est horrible. Ma pauvre fille, t'es arrangée ¿ Vous ne savez pas mais Nadia est alcoolique, elle boit le soir en rentrant chez elle ¿ Sachez que Nadia a pour habitude de faire un strip-tease à chaque repas, elle danse nue sur la table ¿ Moi je suis une parisienne et Nadia une thiérachienne comme chienne», et qu'après lui avoir appris sa grossesse: «j'ai entendu les pires horreurs à mon égard. Je n'étais qu'une hypochondriaque, folle comme ma mère, atteinte de fibromyalgie. Je recevais des appels répétitifs chez moi pendant l'arrêt de travail sur un ton agressif: à croire que tu aimes être malade ! Tu fréquentes des charlatans ! Elle est capable quand elle l'a décidé d'anéantir les gens en utilisant son pouvoir hiérarchique. Lors de ma deuxième grossesse, la réaction fût vive ¿ Je croyais que tu n'en voulais plus, tu avais dit que tu aurais un seul enfant, j'imagine que tu t'arrêtes bien avant, et si moi j'étais enceinte. Les reproches se sont succédés, les appels téléphoniques répétitifs... Il fallait que je comprenne que je n'étais plus désirable pour mon mari, que j'avais plutôt intérêt à le surveiller?»; qu'Elodie Z..., dans une attestation de 7 pages: «je me suis sentie humiliée, rabaissée à plusieurs reprises sur mon poste. C'était sans cesse des réflexions, des remarques répétées aussi bien sur le travail que personnellement. Elle disait aux clients qu'elle travaillait avec des incapables, qu'il n'y avait qu'elle qui avait la fibre commerciale. Elle nous qualifiait de banc de moules?»; que Marie A...: «je me souviens de la maladie d'Elodie lors de sa première grossesse. Nathalie nous disait que c'était du bluff, que son arrêt n'était pas justifié. Elle a téléphoné devant moi à la direction et a demandé qu'on supprime la prime d'intéressement d'Elodie et ses congés. Elodie, par peur, est même revenue avant la fin de son arrêt maladie ¿ Elle disait que l'agence était une porcherie ¿ Vous n'êtes que des crasseuses ¿ Vous n'êtes que des bandes de moules ¿ J'ai une équipe de bras cassés ¿ Sa devise était de diviser pour mieux régner et tout contrôler. Elle prenait quelqu'un en grippe à qui elle faisait des réflexions professionnelles et personnelles et qu'elle dénigrait au plus haut point, dans son dos forcément. Lorsqu'elle donnait des ordres on était comme des chiens?»; qu'Aurélie C...: «dans ses mauvais jours, elle était très difficile à vivre ¿ elle avait une façon de manager si particulière et si injuste. Tout le monde y est passé?»; que suivent plusieurs événements ayant «marqué» cette salarié (accusation contre Nadia Y... d'avoir agouiché le DRH de l'époque, réactions acerbes en cas d'absence pour maladie de leur enfant ou nouvelle grossesse, équipe traitée d'incompétente; que «sa devise était diviser pour mieux régner»;

2) que concernant l'immixtion dans leur vie privée; que Nadia Y..., outre les propos déjà cités, relate que Nathalie X... lui a dit, après l'annonce de sa grossesse: «j'espère que tu vas foutre ta vie en l'air, ne prends pas ce genre de décisions à la légère, un enfant coûte très cher, tu ne pourras jamais assumer. En tout cas, si tu le gardes tu t'en vas» et explique qu'elle a finalement, sur l'insistance de sa chef d'agence, choisi d'avorter; qu'«elle m'a convaincu pendant des années que je n'étais pas faite pour avoir des enfants, que j'étais beaucoup trop indépendante et que je n'avais pas la fibre maternelle?»; qu'Elodie Z... «elle a eu des mots blessants pour ma fille, qui n'était pas normale d'après elle. Elle préférait que son fils meure plutôt qu'il ressemble à ma fille...», «elle a contacté la société VIGNERON pour dénigrer professionnellement mon mari alors qu'il était dans l'attente d'un contrat à durée déterminée au sein de cette société»; que Marie A... «elle m'a touché personnellement lors de ma deuxième grossesse. Etant enceinte avec trois embryons, elle m'a proposé d'appeler une de ses amies qui en a eu trois aussi et qui avait subi une opération en Suisse pour n'en garder que deux. C'est impensable d'avoir

des triplés. Lors de l'hospitalisation de son bébé, début mars 2008, elle est venue à l'agence avec son PC portable et m'a dit: regarde les photos c'est mon fils Elioth, attends-toi à voir tes filles dans une couveuse tubées comme lui. Lors de son accouchement prématuré, elle m'a téléphoné à l'agence et m'a dit: on est jamais assez préparé aux fausses couches, pensez-y ¿Elle a également dénigré mon gynécologue parti. Il est nul et tout est de sa faute»; que Aurélie C... fait également état de la même ingérence dans sa vie privée, lors de sa grossesse;

Qu'il est par ailleurs constant que le CHSCT, saisi en premier lieu par Nathalie X... à la suite de l'accident du travail dont elle se déclarait victime après l'entretien de fin mars 2009 puis ayant décidé d'étendre sa saisine à la situation générale de l'agence d'HIRSON, a procédé à une enquête confiée à deux membres du comité et deux représentants de la direction; qu'il ressort du procès-verbal de réunion du 21 avril 2009 qu'après avoir entendu Nadia Y..., Elodie Z..., Marie A... et Evelynne E..., Christine F..., membre du comité a émis les conclusions suivantes: «les entretiens ont fait ressortir une extrême souffrance causée par le management de leur directrice d'agence. Cette dernière est à la fois une personne qui les maternelle énormément, au point de s'immiscer dans leur vie privée, et un manager complètement irrespectueux de l'être humain. Les collaboratrices ne lui veulent pas de mal mais ne veulent plus être managées ainsi. Elles évoquent les grossesses de ces dernières et indiquent que Madame X... a, à chaque fois, tenus des propos violents à leur égard ou à l'égard des enfants à venir. Mme Y... considère avoir eu un lavage de cerveau par ce responsable d'agence pour la décider à ne pas mener sa grossesse à terme. Elle ajoute que la directrice d'agence s'est occupée de prendre rendez-vous chez le gynécologue, qu'elle l'a accompagnée au rendez-vous ainsi qu'à celui de l'avortement. Nathalie X... s'immisçait dans la vie privée de ses collaboratrices par le biais de leur mari, ponctuellement demandeurs d'emploi, et intervenait auprès de leurs employeur, parfois clients de l'agence»; que s'il est vrai que des voix discordantes se sont élevées, tout particulièrement celle de Jean D..., représentant du personnel cadre, qui a pris le parti de Nathalie X..., il n'en demeure pas moins que les salariés ont clairement et de manière concordantes mis en cause leur supérieure alors que celle-ci, convoquée à deux reprises devant le comité et invitée, si son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, à s'entretenir téléphoniquement avec les enquêteurs, a refusé pour sa part, tout contact avec le CHSCT; que cet organisme a ensuite mis en place une cellule d'écoute psychologique pour les salariées concernées; que la société ADECCO FRANCE produit également le témoignage de deux anciennes salariées de l'agence, Bénédicte G..., responsable du recrutement, et Christelle M..., employée durant un an en remplacement d'une salariée en congé maternité, qui expliquent longuement les persécutions et humiliations dont elles ont été victimes ou dont elle ont été témoins de la part de Nathalie X...; que la cour observe qu'au-delà des faits particulièrement précis et détaillés relatés par l'ensemble des salariées précitées, les termes employés font transparaître une souffrance extrême dans l'exercice de leur activité du fait du comportement de Nathalie X... (j'ai vécu dans la peur, des soirées passées à pleurer?); que par ailleurs, ces témoignages ne sont pas exclusivement à charge puisque les salariés reconnaissent souvent des excuses au comportement de leur supérieure qu'elles décrivent en souffrance suite à son divorce et à la perte de son bébé, l'ensemble de ces éléments apportant une grande crédibilité à leurs dires; que Nathalie X... conteste ces accusations de harcèlement en soutenant qu'elle est victime d'un complot orchestré par Nadia Y... et en produisant à l'appui de ses dires de nombreux témoignages qui établiraient, selon elle, son comportement irréprochable à l'égard de ses collaborateurs; que ces témoignages émanent cependant d'anciens salariés d'ADECCO qui, soit ont quitté l'agence depuis longue date (Marie H..., en poste de 1989 à 1995), soit ne travaillent pas au sein de l'agence et n'ont pas de contacts réguliers avec celle-ci (Christophe I..., responsable nouvelle technologie, Marie-Ligne J..., directrice d'une autre agence à CHAUNY), soit n'ont été employés que temporairement dans l'agence dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou de stages de courte durée; que s'agissant plus précisément de l'attestation établie par Patrick K..., ancien directeur régional ayant travaillé 19 ans avec Nathalie X..., outre le fait que celui-ci avait en charge 64 agences sur son ressort, ce qui limitait ses venues sur le site, son témoignage doit être considéré avec circonspection dès lors que les salariées de l'agence l'ont accusé à demi-mot de ne pas être intervenu lorsqu'elles ont tenté de l'alerter sur leur situation et qu'il est apparu lors de l'enquête du CHSCT mal à l'aise et énervé au cours de l'audition; que d'autres témoignages émanent de clients qui n'étant pas présents quotidiennement dans l'entreprise, ne peuvent utilement se prononcer sur les rapports de Nathalie X... avec ses collaboratrices; que la cour observe à ce stade que tous les salariés mettant en cause Nathalie X... relèvent un trait de personnalité dominant chez celle-ci: son ambivalence dans ses rapports avec les personnes sur lesquelles elle exerce un pouvoir hiérarchique; que Bénédicte G... parle d'une personne à deux facettes, d'une gentillesse incroyable un jour et odieuse le lendemain, capable d'anéantir un intérimaire; qu'Elodie Z... «Nathalie avait deux personnalités: mi ange mi démon. Elle pouvait être très gentille avec vous et deux minutes plus tard vous détruire»; que Marie A... un petit bout de femme attentionné, sympathique, charmante et à la fois une personne impulsive, humiliante, méchante et tyrannique; qu'Aurélie C... «elle avait une double personnalité»; que parmi ces témoignages, celui fourni par

Christelle M... est particulièrement édifiant: cette salariée diplômée d'un DESS de Ressources Humaines, recrutée pendant un an en remplacement d'une salariée en congé maternité, analyse longuement la personnalité de celle-ci; qu'indiquant avoir eu dans un premier temps «une admiration toute particulière» pour cette chef d'agence «qui incarnait le symbole de la réussite féminine», elle explique qu'elle a progressivement pris conscience des méthodes managériales pernicieuses de celle-ci, avec l'alternance de «comportements autoritaires, colériques ou encore excessifs» et d'«attitudes fusionnelles» de la part de cette chef d'agence qui «excellait dans l'art de créer une ambiance de chaleur humaine et de convivialité qui vous incitait à vous sentir en confiance»; qu'elle souligne le caractère destructeur de ce comportement manipulateur et changeant et la réelle souffrance physique, psychologique et mentale ressentie par ses collaboratrices (Nathalie X... en s'immisçant dans la vie de chacune de ses collaboratrices, en faisant intrusion dans leur vie à leur domicile, avait recueilli énormément de confidences et connaissait les modes de vie de chacune d'entre elles. Elle ne supportait pas que l'une d'elle puisse avoir mieux qu'elle ou puisse aspirer au bonheur. S'ensuivait alors un lynchage de la personne devant le reste de l'équipe. Ce facteur impersonnel qu'est la jalousie l'animait en permanence); qu'en conclusion, ce témoin définit Nathalie X... comme quelqu'un chez qui «la valorisation de l'un passe par l'infériorisation de l'autre ¿sans cesse sous les feux des projecteurs, nombriliste et narcissique, tandis que les autres n'étaient rien»; que par ailleurs, la thèse du complot soutenue par Nathalie X... n'est accréditée par aucun élément sérieux; qu'en effet, la découverte par celle-ci de dysfonctionnements dans la gestion de l'agence à son retour de congé maternité et les rappels à l'ordre qui s'en sont suivis à l'encontre de ses collaboratrices ne peuvent raisonnablement expliquer que ces salariées, qui n'avaient jusque là pas remis en cause l'autorité et les compétences de leur responsable, aient subitement décidé de se liguer contre elle et de lui reprocher un harcèlement imaginaire; que leurs accusations sont d'ailleurs corroborées par les témoignages, précédemment cités, de salariés ayant quitté l'entreprise depuis longue date, qui n'avaient aucun intérêt personnel à cautionner une telle machination; que Nathalie X... insiste certes particulièrement sur la personnalité de Nadia Y... qu'elle accuse d'avoir été l'instigatrice de cette prétendue cabale, par jalousie et vengeance; que toutefois les quelques attestations de familiers de Nathalie X... faisant état de bonnes relations entre celle-ci et Nadia Y... dans le privé ne reflètent pas nécessairement l'état de leurs relations dans le travail, étant rappelé que Nathalie X... est décrite, dans la vie professionnelle, comme une femme particulièrement changeante et imprévisible; que d'autre part, s'il est probable que Nadia Y... était fragilisée par le licenciement récent de son mari et le plan de sauvegarde de l'emploi en cours dans l'entreprise, aucun élément sérieux ne permet de considérer qu'elle rendait sa directrice responsable du licenciement de son époux et qu'elle ambitionnait d'occuper le poste de chef d'agence à sa place, le témoignage d'une stagiaire invoqué à cet égard n'étant nullement déterminant; qu'il convient également d'observer que Nadine Y... n'a pas révélé les faits de sa propre initiative mais à l'occasion d'un entretien décidé par son chef de secteur, Isabelle L..., inquiète de la voir désespérée à la suite du refus de sa demande de départ volontaire dans le cadre du PSE, ce qui ne concorde pas avec la théorie du complot; que c'est encore en vain que Nathalie X... fait état des petits mots d'amitié envoyés par ses collaboratrices, ces messages ayant été pour l'essentiel adressés après la perte de son enfant, soit à un moment où la compassion et le soutien dans l'épreuve l'emportait alors sur tout autre sentiment; qu'enfin ni l'absence de turn over depuis l'arrivée de Nathalie X... dans l'agence, ni les excellents résultats enregistrés par celle-ci ne sont incompatibles avec les faits de harcèlement moral dénoncés; que les témoignages recueillis démontrent en effet que Nathalie X... exerçait une véritable emprise sur ses collaboratrices et qu'elle avait par ailleurs un réseau de relations très fourni à l'extérieur de l'entreprise au point que, manipulées par leur responsable et vivant dans la crainte de ne pas retrouver d'emploi, les salariées ont préféré se taire et se consacrer malgré leur souffrance au développement de l'agence; que par ailleurs le plan de sauvegarde de l'emploi, loin d'avoir été le moteur d'une machination contre Nathalie X..., a clairement été l'élément déclencheur de la libération de la parole des salariées harcelées; qu'il ressort ainsi que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la société ADECCO France rapporte la preuve des faits de harcèlement moral reprochés à Nathalie X..., lesquels par leur gravité et leur répétition justifiaient son licenciement pour faute grave»;

1°/ ALORS QU'en cas de litige sur la justification du licenciement, le doute doit profiter au salarié; qu'en particulier, l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave, de sorte qu'en cas de doute sur la réalité d'une telle faute, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, le harcèlement moral auquel se serait livré Mme X... et qui lui était reproché comme une faute grave, était essentiellement fondé sur des attestations de ses collaboratrices, salariées de la société ADECCO, mais était dans le même temps radicalement démenti par des attestations, au moins aussi nombreuses, d'intervenants au sein de l'agence, de clients et d'anciens salariés ou stagiaires de l'agence; que la cour d'appel a constaté les contradictions manifestes entre ces différentes attestations, tout en n'accordant crédit qu'à celles «à charge», soutenant la version de l'employeur; qu'en décidant que la faute grave était

caractérisée, quand il résultait des contradictions manifestes des éléments probatoires, qu'elle avait constatées, que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la cour d'appel, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail;

- 2°/ ALORS QUE le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter sa thèse, et ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse; qu'en n'accordant aucun crédit aux nombreuses attestations produites par Mme X..., tendant à tout le moins à créer un doute, devant lui profiter, quant à la véracité des allégations de l'employeur appuyées sur d'autres attestations, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- 3°/ ALORS QUE n'est pas recevable contre le salarié la preuve recueillie d'une manière ne respectant le principe de loyauté; qu'en l'espèce, l'enquête réalisée par le CHSCT, saisi par l'un de ses représentants d'un danger grave et imminent, lorsque ce danger procède d'une situation de harcèlement ou de violence au travail, doit garantir que toutes les parties impliquées seront entendues de manière impartiale et bénéficieront d'un traitement équitable; qu'en l'espèce, il ressortait des procès-verbaux produits aux débats que seules les accusatrices ont été entendues par le CHSCT sans que Mme X..., empêchée pour raisons de santé de participer à l'enquête fut-ce par voie téléphonique, ait pu équitablement exercer ses droits à la défense; qu'en décidant néanmoins que l'enquête du CHSCT était de nature à établir le harcèlement moral reproché à la directrice d'agence, sans tenir compte de l'empêchement de Mme X... et du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de répliquer loyalement aux accusations portées contre elle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L 4131-2 du code du travail;
- 4°/ ET ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs; que Mme X... indiquait précisément dans ses écritures d'appel (page 54 et 55) que son licenciement trouvait son réel motif dans la volonté de la société ADECCO de renouveler l'équipe de direction de la région Picardie à la suite du changement de directeur régional et de mettre en oeuvre son projet de réorganisation «TEAM 2012», et non dans un prétendu harcèlement moral lui étant imputable; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influencer sur la solution du litige, que la thèse du complot soutenue par Nathalie X... n'était accréditée par aucun élément sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- 1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité; que l'existence d'une faute grave à l'origine du licenciement, n'exclut pas la possibilité pour le salarié, si les circonstances de la rupture le justifient, d'obtenir réparation d'un préjudice distinct de la perte de son emploi; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 de Code de procédure civile;
- 2°/ ET ALORS QUE commet une faute donnant lieu au versement de dommages et intérêts distincts de l'indemnité visant à réparer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement l'employeur qui rompt le contrat de travail dans des conditions brutales ou vexatoires; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait le fait que la mise en oeuvre de son licenciement était intervenue alors que celle-ci poursuivait une grossesse à risque, connue de l'employeur, et que la rupture du contrat avait été précédée d'une procédure interne pendant laquelle elle était indisponible au titre de cet état de grossesse, mais aussi que les griefs contenus dans la lettre de licenciement mettaient en cause sa moralité; qu'en affirmant péremptoirement que Mme X... ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de cette rupture, sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Décision attaquée: Cour d'appel d'Amiens, du 7 mars 2012.

Le: 27/09/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 27 janvier 2009

N° de pourvoi: 07-44172

Non publié au bulletin

Cassation

**M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)**

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

SUR LE MOYEN UNIQUE:

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 novembre 2003 par la société Sera en qualité d'employée de restaurant, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en application du second de ces textes, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il revient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas démontré que l'employeur avait promis à la salariée une rémunération de 1000 euros par mois, que les attestations produites ne font état d'aucun fait précis et circonstancié, que les questions relatives à l'alcoolisme du cuisinier et à l'hygiène relèvent de l'environnement général du travail, que l'attestation d'un délégué syndical ne fait que reprendre les accusations générales d'autres salariées, que les médecins du travail ont simplement rappelé à l'employeur certains principes visant à améliorer l'ambiance du travail et mis en garde l'employeur contre les problèmes d'alcoolisme du cuisinier et que les certificats médicaux produits ne font à aucun moment mention de l'origine professionnelle de la détérioration de l'état de santé de l'intéressée;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les faits dont il avait été avisé par la médecine du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;

Condamne la société Sera aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT:

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif en découlant,

AUX MOTIFS QUE seul reste en litige devant la Cour le harcèlement moral dont Madame X... prétend avoir fait l'objet; qu'aux termes de l'article L. 122. 49 du Code du travail «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel»; que les attestations émanant tant de Madame Z... que des membres de sa famille sont sujettes à caution et peuvent difficilement être retenues dans le cadre de la présente procédure compte tenu du litige qui oppose cette salariée à la société SERA; que Mademoiselle X... fonde sa demande sur un certain nombre d'agissements répétés de la part de son employeur qui ont consisté dans le fait qu'il n'a pas tenu ses promesses d'augmentation de salaire, dans l'alcoolisme du cuisinier, dans les brimades dont elle aurait fait l'objet de la part de ce dernier et de l'employeur et dans les conditions d'hygiène déplorable qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail; qu'en premier lieu rien ne permet de démontrer que la société SERA avait promis à Mademoiselle X... une rémunération de 1000 euros par mois mais qu'en revanche cette société a respecté l'engagement qu'elle avait pris en accédant au souhait de la salariée de travailler à temps plein et, ce, à compter du 1er mai 2004 ait imposé à la salariée d'effectuer des tâches d'une pénibilité particulière; qu'en second lieu les attestations produites aux débats ne relatent aucun fait précis et circonstancié concernant Mademoiselle X... et ne font état que de faits qui soit n'ont strictement rien à voir avec le litige, soit se rapportent uniquement aux salariés qui témoignent; qu'en troisième lieu les questions relatives à l'alcoolisme du cuisinier ou au problème d'hygiène relèvent de l'environnement général dans lequel travaillait Mademoiselle X... mais ne peuvent être analysés comme des actes de harcèlement, étant précisé que les brimades que celle-ci invoque ne sont nullement établies; que par ailleurs le courrier du délégué syndical ne fait que reprendre les accusations générales portées par Mademoiselle X... et sa collègue Madame Z... et que les médecins du travail qui se sont déplacés au sein de l'entreprise ont, dans le cadre de leur rapport, simplement rappelé à l'employeur certains principes visant à améliorer l'ambiance de travail et mis en garde ce dernier sur les problèmes que l'alcoolisme du cuisinier étaient susceptibles de créer sans toutefois relever là encore des faits précis concernant Mademoiselle X...; que d'autre part la dégradation des conditions de travail n'est pas caractérisée, l'établissement des plannings et le remplacement du responsable de salle rentrant dans le pouvoir d'organisation et de gestion de l'employeur; qu'enfin les certificats médicaux produits par Mademoiselle X... et émanant de son médecin traitant ne font que refléter les dires de l'intéressée; que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucun acte de harcèlement moral n'est caractérisé et que Mademoiselle X... ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts;

- 1º/ Alors d'une part que constituent des faits de harcèlement les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la santé morale ou physique du salarié, à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel; que dès lors en s'abstenant de rechercher si le paiement tardif lors de la rupture, en octobre 2004, des heures supplémentaires effectuées près d'un an plus tôt, en décembre 2003 et mai 2004, ne constituait pas un manquement incontestable de l'employeur à ses obligations entraînant une dégradation des conditions de travail caractérisant le harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-1-1, L 122-49 et suivant du Code du travail;
- 2º/ Alors d'autre part qu'en déclarant que rien ne démontrait que l'employeur ait promis à la salariée une rémunération de 1000 euros net par mois, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme A...qui déclarait «Sandrine devait partir en Suisse pour la saison, elle avait donné sa démission et moi je lui avais dit tu as raison tu seras sûrement mieux considérée qu'ici mais M. B...Arnaud lui a promis de la faire travailler à temps plein et fait miroiter un bon salaire mais un mois plus tard elle était toujours dans la même situation», d'où il résultait que l'employeur s'était bien engagé à augmenter la salariée et d'avoir, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil;
- 3º/ Alors au surplus que constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et salariales le fait d'imposer à un salarié, sans contrepartie, des tâches relevant d'une classification supérieure; qu'en

l'espèce, Mademoiselle X..., serveuse et rémunérée comme telle, établissait que M. B...abusait de son autorité en lui imposant de remplir des fonctions administratives ou de responsabilité sans lui attribuer de compensation salariale; que dès lors en déclarant que les exigences de l'employeur entraient dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation et de gestion, la Cour d'appel a violé les articles L 122-1 et L 122-49 et suivants du code du travail;

- 4º/ Alors enfin qu'en constatant la réalité des problèmes d'hygiène des cuisines, d'alcoolisme du cuisinier, de comportement des dirigeants confirmés par les deux médecins du travail et en écartant néanmoins la dégradation des conditions de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 122-49 et suivant du Code du travail.

Décision attaquée: Cour d'appel de Rennes, du 14 juin 2007.

Roj: ATS 8437/2008
Id Cendoj: 28079140012008201616
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3101/2007
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a once de Septiembre de dos mil ocho.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de San Sebastián se dictó sentencia en fecha 19 de febrero de 2007, en el procedimiento nº 16/2007 seguido a instancia de D. Darío contra PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD S.A. y MINISTERIO FISCAL, sobre despido, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en fecha 3 de julio de 2007, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 8 de octubre de 2007 se formalizó por la Procuradora D^a María Eva Guinea y Ruenes en nombre y representación de D. Darío, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 20 de mayo de 2008 acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de relación precisa y circunstanciada y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral exige que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada. Para cumplir este requisito la parte recurrente debe establecer la identidad de los supuestos a partir de los que afirma la existencia de contradicción mediante una argumentación mínima sobre la concurrencia de las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, a través de un examen, que sea suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que el recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas (Sentencias de 27 de mayo de 1992 (R. 1324/1991), 16 de septiembre de 2004 (R. 2465/2003), 6 de julio de 2004 (R. 5346/2003), 15 de febrero de 2005 (R. 1900/2004), 28 de junio de 2005 (R. 3116/04) y 31 de enero de 2006 (R. 1857/04).

Y esta exigencia no se cumple en el presente supuesto, puesto que el recurrente se limita a reproducir la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida y de otras que cita en apoyo de su tesis, señalando que la cobertura legal de la conducta enjuiciada es la misma, pero sin realizar una autentica comparación entre los hechos, pretensiones y fundamentos de las resoluciones. Por lo que no pueden tener favorable acogida las alegaciones realizadas por el recurrente, en tanto no especifica en el mentado escrito cuales son los concretos apoyos fácticos en los que se sustentan las sentencias comparadas y menos aun el correspondiente análisis.

SEGUNDO.- A) El actor, vino prestando servicios para PROSEGUR, COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SA, con categoría profesional de Inspector de Servicios, hasta que en fecha 1 de diciembre de 2006, se le comunica carta de despido disciplinario, referido fundamentalmente, al contenido de un escrito elaborado por el actor,

de fecha 2 de octubre de 2006, dirigido a un miembro del comité de empresa, en relación a las condiciones y circunstancias de un trabajador -que es el presidente del Comité -y que entiende está presidida por la mala fe, además de no seguir el procedimiento establecido.

En la demanda rectora, el actor peticiona con carácter principal, la nulidad del despido, al amparo del derecho a la libertad de expresión, y el derecho a la libre sindicación y subsidiariamente la improcedencia, y que no tuvo favorable acogida, declarando la sentencia de instancia la procedencia del despido. Esta señala como antecedentes las luchas sindicales que se producen desde el año 2001 en la empresa demandada y que determinó que el Sr. Felipe fuera destituido en su cargo de presidente del Comité, siendo sustituido por el Sr. Jose Pedro. Como consecuencia de estos hechos, las relaciones personales entre ambos son muy malas y han dado lugar a enfrentamientos, incluidos episodios judiciales. En la actualidad ambos son miembros del comité de empresa, si bien Don. Felipe lo es ahora por otro sindicato y queda acreditado que las relaciones personales de los protagonistas trascienden al ámbito de sus respectivos sindicatos.

Resulta que el actor remitió Don. Felipe una carta, -que este envió a la empresa dos días más tarde- en la que a juicio de la empresa vierte serias acusaciones contra un compañero de trabajo -el presidente del Comité, Don. Jose Pedro-, imputándole un hecho, la embriaguez en el puesto de trabajo, que es constitutivo de la sanción de despido, y además no lo hizo en la forma establecida para los partes de incidencias y ante una persona ajena a la Dirección de la empresa, que es la única competente en la materia. La sentencia de instancia partiendo de las funciones del actor, considera que la carta en cuestión no es un parte de incidencias, pues ni tiene el formato de estos, ni siguió el cauce establecido, sino que tiene una clara finalidad de perjudicar la reputación Don. Jose Pedro, pues si bien se refiere en la carta a otros trabajadores las imputaciones son genéricas, mientras que Don. Jose Pedro es al único trabajador que se cita por su nombre y se le imputan conductas concretas -beber en su puesto de trabajo- junto con otros hechos que dan a entender que se aprovecha de su situación para seguir bebiendo. A lo que se añade que remitió la carta, no a los responsables de la empresa, sino Don. Felipe, que es la persona que desde que perdió la presidencia del comité a manos Don. Jose Pedro, mantiene una enemistad manifiesta y lo hizo sin mediar instrucción y para que Don. Felipe hiciera el uso conveniente de dicha información. La sentencia de instancia concluye que el actuar el actor, no solo quiebra la buena fe - art. 54.2 d) -sino que además constituye una ofensa a un compañero de trabajo, que es el presidente del comité, lo que también constituye causa de despido ex art. 54.2 c) ET.

Por el trabajador se recurre en suplicación y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 3 de julio de 2007 (Rec. 1320/07), desestima tanto la revisión fáctica solicitada, como la alegada infracción del art. 55.5 ET - despido nulo por causa discriminatoria o vulneración de derechos fundamentales - al entender que en este caso ni siquiera se han probado que existan estos indicios, por lo que no estamos ante un supuesto de inversión de la carga de la prueba. Y dado que en el motivo se limita a transcribir una serie de hechos que, o no se corresponden con el relato de la sentencia o son interpretaciones subjetivas de los mismos, confirma la declaración de procedencia del recurso.

B) En casación unificadora se defiende la nulidad del despido efectuado, al entender que no había ánimo injurioso en la comunicación, estando amparadas las manifestaciones o expresiones proferidas dentro del derecho a la libertad de expresión, existiendo por tanto cobertura legal suficiente para verter unas determinadas expresiones, sin suponer una conducta transgresora de la buena fe contractual, alegando infracción de los art. 55 ET en relación con los arts. 20, 24 y 28 CE.

Consta en la referencial dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 22 de enero de 2002 (Rec. 2853/01), que el actor, con categoría de conductor ha venido prestando servicios, para las empresas adjudicatarias del servicio de Transporte Sanitario Urgente y forma parte del Comité de Empresa, junto con otras 4 personas. El Comité realizó y aprobó un informe denominado «Inspección de Ambulancias y Locales» que fue enviado a la Autoridad Sanitaria competente y a la propia empresa, si bien la redacción corrió a cargo del demandante, quien también elaboró las plantillas que sirvieron de base al mismo. Posteriormente, los miembros del Comité enviaron una nota a la prensa local. Por lo que ahora interesa, en relación con el despido del trabajador, respecto a la libertad de expresión y a la libertad de información, matiza que el informe fue elaborado por el actor y otros dos miembros del comité, habiendo sido los datos obtenidos debidamente contrastados. Así, resulta que algunos de los hechos denunciados han sido expresamente declarados probados -las ambulancias de la UTE demandada presentaban deficiencias de carácter técnico-; Respecto de otros - en cuanto a lo excesivamente largo de los tiempos de espera, o de respuesta - únicamente se trata de una

valoración subjetiva del Comité puesto que no se ha denunciado el incumplimiento de las condiciones pactadas, y sin que ello impida a aquel valorar que el sistema no es ágil. Y por último, la mayoría de las deficiencias cotejadas por el comité son ciertas, por lo que no puede apreciarse la falta de veracidad invocada por la empresa. Por otra parte en la carta de despido no se le imputa concreta actuación alguna en relación con la difusión pública de información acerca de la empresa. Y la Sala razona que la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores se evidencia en el contexto de la opinión pública, siendo normal que estos utilicen los medios de comunicación para verter información u opinión crítica sobre la empresa. La información publicada no era ofensiva, ni insultante ni falsa al ser la mayor parte de los datos ciertos. No se aprecia ánimo de causar expreso perjuicio a la empresa, ni tampoco que la información hubiera sido transmitida de manera precipitada o sin un análisis de la situación - de muy celoso se califica el informe que sirvió de base a la nota de prensa -. Por lo que se refiere a la alegación de infracción del deber de buena fe contractual, se rechaza, pues no se aprecia el quebrantamiento en quien actúa en su condición de miembro del comité, en defensa de intereses de los trabajadores, tanto en materia de seguridad e higiene, como en materia de otras condiciones o medios materiales de prestación del servicio que se han revelado deficientes. Concluye confirmando la declaración de nulidad del despido por discriminación.

C) El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004).

De la comparación efectuada se deduce que no concurre la triple identidad exigida por el art. 217 LPL, pues ninguna similitud guardan los relatos fácticos ni los debates suscitados en las sentencias comparadas. En la resolución impugnada, resulta que el actor con categoría de Inspector de Servicios, remitió una comunicación, a un miembro del comité de empresa, imputando una conducta difamatoria relativa al Presidente del Comité, a sabiendas de las malas relaciones entre éste y el receptor de la nota, ignorando el cauce establecido. Conducta que ninguna similitud guarda con la de la sentencia recurrida, en la que el trabajador despedido, es miembro del comité de empresa y este órgano realizó un Informe sobre las condiciones de trabajo, en términos negativos, y que fue enviado a la Autoridad administrativa y a la empresa, dándole posteriormente difusión pública y en la que resulta que la mayoría de los datos resultan ser ciertos. Pero es que además, la cuestión ahora suscitada, relativa a libertad de expresión no fue tratada en la sentencia recurrida, en la que no se entra a analizar la posible vulneración de derechos fundamentales, puesto que ni siquiera se probó que existieran los indicios necesarios y exigidos para la inversión de la carga de la prueba. Por el contrario, la referencial debate ampliamente sobre la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores (cualidad que no ostenta el trabajador ahora recurrente). A mayor abundamiento, y por lo que se refiere a la transgresión de la buena fe, en la impugnada resulta acreditado el contenido difamatorio de la comunicación remitida a un miembro del comité de empresa, ajeno por tanto a la dirección de esta y con la evidente finalidad de perjudicar la reputación de aquel. Circunstancias que ningún paralelismo guardan con el de la referencial, en la que no se aprecia el quebrantamiento en quien actúa en su condición de miembro del comité, sin que la actuación imputada haya sido realizada exclusivamente por él, actúa en defensa de intereses de los trabajadores, y ha transmitido, junto con el comité, información a la prensa tras estudio detallado de la situación y de las condiciones de trabajo, sin que se hayan utilizado medios ilícitos para la obtención de la información - información que ha resultado ser veraz- y no ofensiva, insultante ni falsa.

D) Y el anterior razonamiento conduce a que las alegaciones realizadas por el recurrente, en trámite de inadmisión, no desvirtúen la inexistencia de identidad entre las sentencias comparadas, incluso reconocida por la parte, quien insiste en que debe procederse a una moderación en el rigor del cumplimiento de los

requisitos formales. Afirmación que no es de recibo, en cuanto que no es posible establecer comparación alguna entre una sentencia que analiza la cuestión relativa a la libertad de expresión y otra que no lo hace y por tanto no entra en el fondo del asunto.

TERCERO.- Por lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin imposición de costas al trabajador recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora D^a María Eva Guinea y Ruenes, en nombre y representación de D. Darío contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de fecha 3 de julio de 2007, en el recurso de suplicación número 1320/2007, interpuesto por D. Darío, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de San Sebastián de fecha 19 de febrero de 2007, en el procedimiento nº 16/2007 seguido a instancia de D. Darío contra PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD S.A. y MINISTERIO FISCAL, sobre despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: STS 7151/2007
Id Cendoj: 28079140012007101235
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 5452/2005
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Antonio Martín Valverde
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Septiembre de dos mil siete.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recursos de casación para la UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, interpuestos por LA MUTUA UNIVERSAL MUGENAT Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 10, representada y defendida por el Letrado D. Carlos Serradilla Enciso, y por la mercantil FERROVIAL SERVICIOS S.A., representada y defendida por el Letrado D. Carlos Ignacio González Ruiz, contra la sentencia dictada en recurso de suplicación, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, de fecha 18 de julio de 2005 (autos nº 142/2005), sobre PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA. Son parte recurrida EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representado y defendido por el Letrado D. Enrique Suñer Ruano, DOÑA Consuelo y su hija menor de edad María Teresa, representadas y defendidas por la Letrado Dña. Cristina Marín Cid.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, ha dictado la sentencia impugnada en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada el 7 de abril de 2005, por el Juzgado de lo Social nº 1 de Salamanca, entre los litigantes indicados en el encabezamiento, siendo también parte demandada en la instancia la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre prestaciones por muerte y supervivencia.

El relato de hechos probados de la sentencia de instancia, es el siguiente: «1.- Gabino, nacido el 14 de abril de 1968, con la categoría profesional de Oficial 1ª de mantenimiento, ha trabajado en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), estando afiliado al Régimen General de la Seguridad Social con el nº NUM000. En los años 1995 a 1997 trabajó como personal de la empresa Abengoa. En 1997, la empresa Ferrovial Servicios S.A. se hizo cargo de los servicios. Los trabajadores de la anterior empresa pasaron a ésta, entre ellos Gabino. Prestó servicios como empleado de Ferrovial Servicios S.A. entre los años 1997, 1998 y 1999. En este año cesó voluntariamente para trabajar en el hospital de Salamanca. Al extinguirse esta relación laboral fue contratado nuevamente por la codemandada, iniciando esta relación laboral el día 2 de enero de 2003. Continuó realizando trabajos similares a los que realizaba en el período anterior. Teniendo al mismo encargado y a los mismos compañeros de trabajo, a excepción del alguno que fueron contratados durante el período en el que no estuvo en la empresa. 2.- Gabino estaba considerado como un buen profesional, reservado en su vida personal y perfeccionista en su trabajo. No se llevaba bien con un trabajador de su misma categoría profesional, con el que, a veces no se hablaba. No consta que hubiera ningún incidente entre ellos. En alguna ocasión aislada, comentó que le habían faltado herramientas de su equipo de trabajo. Los trabajadores de la empresa codemandada ocupan el mismo espacio que él, junto con los operarios de otras empresas al que accedían también los internos del centro penitenciario. A veces, raras veces, les faltaban destornillador o herramienta similar. 3.- Cuando regresó de vacaciones el actor, en el año 2004, alguien había vertido en su taquilla grasa de cocina o sustancia similar. El encargado de la empresa no pudo encontrar al autor. Hechos parecidos, o cierre de cerradura de taquillas, se han producido, también rara vez, en las taquillas de otros trabajadores. Este mismo año, como era costumbre, en el mes de diciembre los empleados programaron una comida de empresa. El encargado se enteró que el actor no quería asistir y dijo que si había tal reunión debía

ir todos, sino él tampoco iba. Habló con Gabino. Este asistió a dicha reunión, siendo el ambiente cordial. 4.- En fecha 7 de agosto de 2003, el trabajador acudió al Centro de Salud «La Alamedilla». Manifiesta al médico que no está cómodo en Topas y que ha tenido ideas de suicidio, folios 270 y 271 que se dan por reproducidos. En la misma fecha es remitido a la Unidad de Salud Mental del mismo centro. El psiquiatra le aprecia un episodio depresivo severo con ideación autolítica. Se describe como marginado por la gente, con poca capacidad de empatía: que no encaja en el trabajo ni con la gente; que no sirve para nada y que ha comenzado la rumiación acerca de «quitarse de en medio de alguna forma». Fue tratado con psicofármacos y psicoterapia de apoyo y presentó mejoría completa del episodio en noviembre de 2003. El 30 de junio de 2004, consulta de nuevo con un episodio depresivo con desencadenante laboral, presentando muy baja autoestima, inseguridad, rumiaciones obsesivas acerca del trabajo y refiriendo mala relación con algunos compañeros. Fue diagnosticado con «Ep depresivo mayor recurrente», iniciando tratamiento. Un tío materno del actor se suicidó tirándose a un pozo. Una hermana es de «carácter depresivo». Ha sido una persona con problemas de relación social desde siempre. En la primera visita al psiquiatra manifiesta que esta situación de malestar psíquico «la tiene desde la infancia», folios 267 a 272. 5.- El día 5 de agosto de 2004, entre las 18 y las 19 horas en el centro de trabajo y en la jornada laboral, el trabajador puso fin a su vida. La causa de la muerte fue «violencia externa, asfixia mecánica por ahorcadura». Dejó manuscrita una nota cuya copia se halla al folio 189, que se da por reproducida. 6.- La empresa demandada tenía concertado el riesgo de accidentes de trabajo con la Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 10. 7.- Gabino estaba casado con la demandante Consuelo. De dicho matrimonio había nacido una hija que es menor de edad. La viuda solicitó ante la Mutua Universal pensión de viudedad. La Mutua remitió la solicitud al Instituto Nacional de la Seguridad Social, por entender que el fallecimiento no debe ser calificado de accidente laboral. Solicitó también pensión de orfandad a favor de su hija, que también es denegada por la Mutua. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, por considerar que se trata de un accidente de trabajo, deniega la prestación. No obstante, para evitar situaciones prolongadas de desprotección reconoce el derecho a la pensión de viudedad y orfandad como si fuera originada por enfermedad común. 8.- La base reguladora a los efectos de la prestación pedida asciende a 1.044,54 euros mensuales, si se derivan de accidente de trabajo. Asciende a 1227,43 euros mensuales si derivan de contingencia común. 9.- La demandante ha agotado la reclamación previa a la vía judicial».

El fallo de la sentencia de instancia es del siguiente tenor: «FALLO: Que desestimando las excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda y de falta de legitimación pasiva y desestimando la demanda interpuesta por Consuelo en su nombre y en el de su hija menor María Teresa contra la MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, FERROVIAL SERVICIOS, S.A., INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre PRESTACIONES, debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos formulados en su contra».

SEGUNDO.- En el fundamento de derecho primero de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, hoy recurrida en unificación de doctrina, se aceptó la solicitud por el recurrente de la adición en el hecho probado cuarto lo siguiente: «D. Gabino acude por primera vez a Urgencias del Hospital Clínico Universitario en fecha 23 de julio de 2003, sin que hubieren existido contactos previos con psiquiatría, por llevar dos semanas preocupado por problemáticas laborales que le están afectando anímicamente; se encuentra agobiado, desganado, ha perdido apetito. En fecha 7 de agosto de 2003 acude a la Unidad de Salud Mental del Centro de Salud de Alamedilla, presentando un episodio depresivo severo con ideación autolítica y conflictividad socio-laboral intensa».

La parte dispositiva de la misma del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Estimamos el recurso de suplicación deducido por D^a. Consuelo, en nombre propio y en el de su hija menor D^a. María Teresa contra la sentencia dictada en fecha 7 de abril de 2005 por el Juzgado de lo Social número Uno de Salamanca, en virtud de demanda promovida por referidas actoras contra MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 10, FERROVIAL SERVICIOS, S.A., el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA. En consecuencia, revocamos la citada sentencia y declaramos que el trabajador D. Gabino falleció en accidente de trabajo, debiendo atemperarse a esa contingencia las prestaciones de muerte y supervivencia causadas por el mismo a favor de la recurrente D^a. Consuelo y su hija menor D^a. María Teresa. Y condenamos a Mutua Universal Mugenat, en su condición de responsable principal, a asumir el pago de tales prestaciones, sin perjuicio de la subsidiaria responsabilidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social».

TERCERO.- La parte recurrente MUTUA UNIVERSAL MUGENAT considera contradictoria con la impugnada en el caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, sede de Palma de Mallorca, de fecha 18 de mayo de 1999, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de DOÑA Emilia, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº Uno de los de Palma de Mallorca, de fecha 11 de diciembre de 1998, a virtud de demanda promovida por aquella contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y el INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA y, en su consecuencia, CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia recurrida».

La parte recurrente FERROVIAL SERVICIOS S.A. considera contradictoria con la impugnada en el caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 16 de junio de 1993, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Doña Carina contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de Santander, de fecha 30 de abril de 1993, a virtud de demanda formulada por la recurrente contra Vinsa Seguridad, Mutua Patronal de Accidente de Trabajo la Fraternidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social y la entidad aseguradora Lloyd Adriático España S.A., sobre Accidente, y, en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida».

CUARTO.- El escrito de formalización del recurso interpuesto por MUTUA UNIVERSAL MUGENAT lleva fecha de 3 de enero de 2006. En él se alega como motivo de casación al amparo del art. 221 de la Ley de Procedimiento Laboral, contradicción entre la sentencia reseñada en el antecedente de hecho anterior y la ahora impugnada en el caso. Alega también el recurrente infracción del art. 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social. Finalmente alega quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia.

El escrito de formalización del recurso interpuesto por FERROVIAL SERVICIOS S.A. lleva fecha de 27 de marzo de 2006. En él se alega como motivo de casación al amparo del art. 221 de la Ley de Procedimiento Laboral, contradicción entre la sentencia reseñada en el antecedente de hecho anterior y la ahora impugnada en el caso. Alega también el recurrente infracción del art. 115 de la Ley General de la Seguridad Social. Finalmente alega quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia.

Las partes recurrentes han aportado las preceptivas certificaciones de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y del Tribunal superior de Justicia de Cantabria, que consideran contradictorias a los efectos de los recursos.

QUINTO.- Por Providencia de 10 de enero de 2006 y de 31 de marzo de 2006, se tuvieron por personados e interpuestos en tiempo y forma los presentes recursos de casación para la unificación de doctrina. Pasados los autos al Magistrado Ponente, se admitieron a trámite los recursos. Personadas las partes recurridas, les fue efectuado el correspondiente traslado del recurso.

SEXTO.- Trasladadas las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, dictaminó en el sentido de considerar improcedentes los recursos. El día 18 de septiembre de 2007, previamente señalado al efecto, tuvieron lugar la votación y el fallo de la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Son dos, íntimamente relacionadas entre sí, las cuestiones jurídicas que plantean los recursos de casación para unificación de doctrina que debemos resolver en la presente sentencia. Una y otra versan sobre la calificación que pueda corresponder al suicidio de un trabajador, oficial 1ª de mantenimiento que presta servicios en un centro penitenciario, producido durante el tiempo y en el lugar de trabajo. Tal calificación - accidente de trabajo, o accidente no laboral, o enfermedad común- determina, la intensidad y los requisitos de la acción protectora de la Seguridad Social de las personas sobrevivientes al fallecido (viuda e hija en el caso).

La primera cuestión se refiere a si alcanza o no a estos supuestos de suicidio del trabajador, y en qué circunstancias, la presunción de laboralidad establecida en el art. 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), respecto de las lesiones producidas en el lugar y tiempo de trabajo («Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo

y en el lugar de trabajo»). La segunda trata de la ruptura o no del nexo causal entre el trabajo y la muerte autoinferida por el trabajador en virtud del art. 115.4 LGSS («...no tendrán la consideración de accidentes de trabajo:... d) los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado»).

Ambas cuestiones, que afectan al tercer elemento del concepto legal de accidente de trabajo -la conexión entre el trabajo prestado y la lesión producida-, aparecen combinadas en el planteamiento de los respectivos recursos de las entidades demandadas, tanto en el interpuesto por la empresa Ferrovial como en el entablado por la mutua Mugenat; una y otra impugnan la calificación de accidente de trabajo que contiene la sentencia recurrida. Viene a decirse en ambos recursos que la presunción de laboralidad del art. 115.3 LGSS no es aplicable en el supuesto de suicidio, y que el suicidio enjuiciado en el caso es una conducta subsumible en el dolo del trabajador al que se refiere el art. 115.4 LGSS.

El recurso de la empresa aporta y analiza para el juicio de contradicción sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictada el 16 de junio de 1993. Por su parte, el recurso de la Mutua de accidentes de trabajo cumple este esencial requisito procesal mediante estudio comparativo de la sentencia recurrida con sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de fecha 18 de mayo de 1999. Ciertamente, las dos sentencias de contraste citadas enjuician supuestos litigiosos similares al presente. La de la Sala de lo Social de Cantabria resuelve sobre la muerte de un vigilante jurado producida por su propia arma, en tiempo de trabajo, en el recinto cerrado objeto de vigilancia, y sin que nadie hubiera accedido al mismo hasta el descubrimiento del cadáver. La de la Sala de lo Social de Baleares se refiere a un profesor de una escuela de formación náutico-pesquera, que se quitó la vida en las instalaciones escolares, dejando nota manuscrita sobre los motivos de su decisión.

SEGUNDO.- Para el juicio de contradicción, que de ser positivo abre la puerta al fondo del asunto en este especial recurso de casación, debemos tener en cuenta determinados datos normativos y jurisprudenciales sobre el concepto legal de accidente de trabajo, que pasamos a exponer a continuación. Una vez sentadas estas premisas, será necesario observar las circunstancias concretas de los casos de las sentencias comparadas que pudieran tener relevancia para tal pronunciamiento.

La redacción actual del art. 115.4 LGSS-94 es idéntica a la redacción del precepto homólogo contenido en el art. 84 LGSS-74. A su vez, estos preceptos sobre la incidencia de la conducta dolosa del trabajador como factor que puede provocar, atendiendo a las circunstancias, ruptura del nexo causal entre la lesión voluntariamente autoinferida y el trabajo prestado proceden del texto articulado de la Ley de Seguridad Social de 1966 (LSS-66). Es de notar, no obstante, que la jurisprudencia anterior a 1966 ya había concluido, a propósito del suicidio del trabajador, que la decisión de quitarse la vida significaba en determinados casos la exclusión de la calificación de accidente de trabajo, cuando se introducía en la cadena causal un factor humano voluntario ajeno al trabajo prestado o un trastorno mental extraño también al medio laboral.

No hay razón, por tanto, para declarar que el cambio normativo habido entre la sentencia de Cantabria (que aplicó la LGSS-74) y la sentencia recurrida (que ha aplicado la LGSS-94) tiene trascendencia a efectos del juicio de contradicción. Ambas disposiciones legales son iguales en lo concerniente a la influencia de la posible conducta del trabajador en la producción del accidente de trabajo. El propio dato de la continuidad de la legislación de Seguridad Social desde la LSS-66, así como el de la correspondencia y probable inspiración del precepto legal sobre la conducta del trabajador en la jurisprudencia precedente en la materia, permiten tener en cuenta las orientaciones de esta doctrina jurisprudencial, aunque sea anterior a la aprobación de los textos legales reseñados.

TERCERO.- Las sentencias del Tribunal Supremo dictadas hasta finales de los años sesenta suelen descartar automáticamente la calificación a efectos de Seguridad Social del suicidio del trabajador como accidente de trabajo, cualesquiera que sean sus circunstancias, incluido el suicidio consumado en tiempo y lugar de trabajo. A partir de 1970 las decisiones jurisprudenciales no tienen siempre el mismo signo. En ocasiones se estima la reclamación de las indemnizaciones de accidente de trabajo solicitadas por los familiares sobrevivientes, y en ocasiones se llega a la conclusión contraria. Ello no significa, sin embargo, falta de criterio uniforme sobre el enjuiciamiento de estos litigios. Se trata más bien de la consideración como elementos determinantes de las decisiones adoptadas de ciertos factores circunstanciales y contingentes, que concurren unas veces y están ausentes otras en los casos enjuiciados. Tales factores determinantes se refieren siempre o casi siempre a la conexión de causalidad entre el trabajo y la conducta de suicidio, concretándose en la existencia o no de trastorno mental del suicida y en la etiología laboral o no de dicho trastorno mental o de la enfermedad mental que conduce a la decisión suicida.

Una primera sentencia que se suele citar en las exposiciones en la materia es la dictada por esta Sala de lo Social el 31 de marzo de 1952. En ella se niega la calificación de accidente de trabajo, a pesar de la intermediación entre el suicidio del trabajador y una acusación contra el mismo de robo de material de trabajo. También se descarta la calificación de accidente del trabajador en otra sentencia de la casación social de 29 de marzo de 1962, razonando que en el suicidio de un trabajador internado en un hospital por causa de un accidente de trabajo previo ha de haber, y no la hubo en el caso, una relación de causa a efecto «directa» y exclusiva entre el trastorno mental padecido por el trabajador (obsesión por quedar inútil para el trabajo) y la decisión de suicidarse. Otra sentencia del año siguiente (STS 19-2-1963) resuelve también con signo negativo, «pues establecida la voluntariedad de la muerte sufrida por el causante de la recurrente, no existe la relación de causalidad entre el trabajo que efectuaba aquél con el siniestro acaecido». A la misma conclusión llegó otra sentencia de los años sesenta (STS 28-1-1969), donde se acredita que el trabajador (cocinero de un barco) se suicidó, arrojándose al mar, como «consecuencia de un estado patológico mental», pero sin que constara «la menor indicación de que éste fuera causado por el trabajo que efectuaba a bordo de la nave, ni que fuera por ello agravado ni desencadenado».

El análisis del suicidio del trabajador desde la perspectiva del nexo causal existente en concreto entre el acto suicida y el trabajo prestado, que se detecta ya con claridad en la última de las sentencias citadas, da lugar a una primera sentencia estimatoria de la calificación de accidente de trabajo, que (s.e.u.o.) es la dictada por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 29 de octubre de 1970. Se acredita en el caso que el suicidio fue provocado por una situación de trastorno mental, producida a su vez por las vicisitudes y secuelas de un accidente de trabajo. La sentencia de instancia había estimado la demanda de pensiones a familiares sobrevivientes (esposa e hijos) y la sentencia de casación desestimó el recurso, identificando como causa eficiente del suicidio un «trastorno mental de tipo depresivo» derivado de una «larga hospitalización» por accidente de trabajo y de «repetidas intervenciones quirúrgicas», circunstancias del litigio que determinaron la fatal decisión. Ha seguido la estela de esta sentencia otras del año 1974 (STS 26-4-1974).

El mismo enfoque, pero desestimando la reclamación de accidente de trabajo, mantiene la sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 1972, que no aprecia la existencia del nexo causal en la producción de la muerte por suicidio enjuiciada. Esta sentencia se fija en el argumento de la presunción legal de laboralidad de las lesiones letales autoinferidas en el lugar de trabajo, llegando a la conclusión de que la «privación voluntaria de la vida» es «prueba en contrario» que impide en principio el despliegue de los efectos habituales de dicha presunción legal. También descarta la calificación de accidente de trabajo a efectos de una mejora voluntaria de Seguridad Social, la sentencia de esta misma Sala de 9 de marzo de 1987; se resuelve en el caso sobre un suicidio por precipitación al vacío «desde lo alto de la fábrica donde trabajaba» de un trabajador que padecía «trastornos psíquicos», que no constaban producidos por el medio de trabajo, para cuyo tratamiento había estado internado en la sección de neuropsiquiatría de un hospital público.

CUARTO.- Las consideraciones de los apartados anteriores ponen de manifiesto la relevancia que en el enjuiciamiento de los supuestos de suicidio tienen las circunstancias de cada supuesto concreto. Si bien es cierto que la presunción de laboralidad del actual art. 115.3 LGSS puede ser enervada por el carácter voluntario que tiene normalmente el acto de quitarse la vida, no es menos verdad que el suicidio se produce a veces por una situación de estrés o de trastorno mental que puede derivar tanto de factores relacionados con el trabajo como de factores extraños al mismo. El análisis de la contradicción de sentencias en casos de suicidio, y en particular en casos de suicidio en el lugar de trabajo, debe ponderar estas circunstancias. Ello es lo que nos corresponde realizar ahora, una vez expuestos los anteriores elementos de juicio, respecto de las dos sentencias de contraste anteriormente referenciadas.

Consta con claridad en los hechos de la sentencia recurrida que el trabajador que decidió quitarse la vida había acudido al médico para tratamiento de depresión en dos ocasiones, el 7 de agosto de 2003 y el 30 de junio de 2004. En la primera manifiesta al psiquiatra que «no está cómodo en Topas (la cárcel en la que trabajaba) y que ha tenido ideas de suicidio»; el médico diagnosticó «episodio depresivo severo con ideación autolítica». En la segunda consulta médica, próxima al acto suicida que tuvo lugar el 5 de agosto de 2004, se diagnostica, según consta literalmente en el relato fáctico, «episodio depresivo mayor recurrente», «con desencadenante laboral, presentando muy baja autoestima, inseguridad, rumiaciones obsesivas acerca del trabajo y refiriendo mala relación con algunos compañeros». La nota escrita dejada por el trabajador es una nota de despedida de su mujer y de encomienda del cuidado y educación de la hija común. Es de notar, además, que, de acuerdo con la revisión de los hechos probados solicitada por la actora, la primera visita

médica por depresión del causante es la reseñada de 2003, siendo así que el trabajo de oficial de mantenimiento por cuenta de la empresa codemandada había comenzado unos meses antes (en enero de 2003), después de haber prestado servicios a la misma en un período anterior (1997-1999), y a continuación de un período intermedio de trabajo para una empleadora distinta.

Los hechos anteriores son sustancialmente distintos a los de las sentencias aportadas para comparación, en este aspecto del nexo causal histórico acreditado en las mismas, que tiene trascendencia, como se ha visto, de conformidad con jurisprudencia de la Sala. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de junio de 1993 no consta trastorno mental derivado del trabajo, y ni siquiera se afirma el propio hecho del suicidio, ya que el órgano jurisdiccional no descarta que el disparo letal que costó la vida al guarda jurado se produjera por manejo imprudente del arma. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 18 de mayo de 1999 se excluye expresamente, a la vista de la actividad probatoria desplegada en el caso, que el suicidio del trabajador fuera provocado «por motivos laborales», circunstancia a la que no alude la nota escrita por el mismo, figurando en cambio como factores concomitantes de su situación el padecimiento de «alcoholismo crónico» y una situación de «deterioro sociofamiliar».

En suma, si como efectivamente sucede la jurisprudencia en la materia no establece a partir de los años setenta una exclusión automática del accidente de trabajo por suicidio del trabajador, y si la propia doctrina jurisprudencial obliga a considerar la conexión existente en cada caso concreto entre la conducta de suicidio y las circunstancias del trabajo prestado, la conclusión obligada es que no se da en el presente caso la contradicción cualificada de sentencias a la que se refiere el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. Los fallos de las sentencias comparadas son ciertamente diferentes, pero los hechos de los casos enjuiciados también lo son en aspectos significativos para la resolución de los mismos con arreglo a derecho.

QUINTO.- La conclusión del razonamiento es, de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, que el recurso, que pudo ser inadmitido en trámite anterior de este procedimiento, debe ser desestimado en este momento de dictar sentencia.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Desestimamos los recursos de casación para la UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, interpuestos por LA MUTUA UNIVERSAL MUGENAT Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 10, y por la mercantil FERROVIAL SERVICIOS S.A., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, de fecha 18 de julio de 2005, en el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada el 7 de abril de 2005 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Salamanca, en autos seguidos a instancia de DOÑA Consuelo y su hija menor de edad María Teresa, contra dichas recurrentes, EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA. Decretamos la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir al que la Sala dará el destino legal. Condenamos a las partes recurrentes al abono de los honorarios de Letrado de las partes recurridas y personadas.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Antonio Martín Valverde hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Le: 27/09/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 22 mars 2006
N° de pourvoi: 03-47478
Non publié au bulletin
Président: Mme MAZARS conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT:

Attendu que Mme X..., engagée depuis le 6 février 1973 par la société Etienne Dupont, aux droits de laquelle se trouve la société Dupont Beaudeau, en qualité de mécanicienne sur machine à coudre puis de responsable du service expédition, s'est trouvée à compter du 20 juillet 2000 en arrêt de travail pour cause de maladie; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral de la part d'une collègue de travail, elle a saisi le 30 août 2001 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail; que l'employeur ayant formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties;

SUR LE POURVOI PRINCIPAL DE L'EMPLOYEUR:

Attendu que la société Dupont Beaudeau fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen:

- 1^o/ que le congé maladie suspend le contrat jusqu'à la visite médicale auprès du médecin du Travail qui met un terme à la suspension du contrat; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été placée en congé maladie à compter du 20 juillet 2000, cette situation ayant simplement suspendu l'exécution du contrat de travail; qu'en l'état de suspension du contrat de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait le déclarer rompu par le seul fait qu'elle n'avait pas repris son travail; qu'en retenant que la prétendue rupture du contrat serait imputable à la société Dupont Beaudeau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du même Code;
- 2^o/ que lorsqu'un salarié refuse de reprendre son travail en raison d'un fait qu'il reproche à son employeur, la rupture unilatérale est une démission si nulle faute n'est établie à l'encontre de l'employeur; que Mme X... a quitté la société Dupont Beaudeau le 20 juillet 2000, sous couvert d'un arrêt maladie, et n'a pas repris son travail par la suite, soutenant qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur; que les juges du fond, tant en première instance qu'en appel, ont observé que le grief adressé à la société Dupont Beaudeau était inconsistant, nulle faute ne pouvant être retenue contre l'employeur;

Qu'en décidant pourtant que la rupture serait imputable à la société Dupont Beaudeau, puisque la démission ne serait pas dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

Mais attendu que l'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat;

Attendu que, pour décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, et que l'employeur, qui concluait reconventionnellement à la résiliation du contrat de travail aux torts de la salariée, s'est abstenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement; que, par ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

ET SUR LE POURVOI INCIDENT DE LA SALARIÉE:

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen:

1º/ que le harcèlement moral ne suppose pas la preuve d'une volonté de l'employeur d'exclure son salarié de l'entreprise; qu'en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur le harcèlement moral dont elle avait été l'objet parce qu'elle n'établissait pas que la direction de la SA Etienne Dupont souhaitait l'exclure de l'entreprise ou de son service, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du Code du travail;

2º/ que le harcèlement moral est caractérisé quand il a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

qu'en se bornant à relever que le harcèlement invoqué n'avait effectivement abouti à aucune dégradation des conditions de travail qui aurait été sanctionnée par l'employeur, sans à aucun moment rechercher si les faits reprochés ne pouvaient, dans leur objet même, caractériser le harcèlement invoqué par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail;

3º/ qu'outre les attestations de Mmes Y..., Z..., A... et B..., dont il résultait que Mme C... traitait la salariée de «cinglée», «bonne à rien», «incapable», «alcoolique», la ridiculisait, se moquait d'elle, perturbait son travail, la menaçait etc, Mme X... produisait les certificats médicaux du docteur D... des 28 mars 2000, 14 mai 2001 et 15 janvier 2002, attestant d'un «syndrome dépressif réactionnel» et un courrier du 10 janvier 2001 de l'Association nationale des victimes de harcèlement psychologique au travail attestant du «processus de harcèlement psychologique au travail» dont Mme X... avait fait l'objet; qu'en se bornant à viser et analyser les seules attestations de Mmes Y..., Z..., A... et B..., sans examiner les autres pièces produites par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

4º/ que le salarié qui invoque des faits de harcèlement doit seulement établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant quant à lui prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement; qu'en cas de doute, il doit profiter au salarié; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la salariée produisait des attestations dont il résultait que Mme C... tenait des propos désobligeants à son égard, se moquait d'elle, la ridiculisait publiquement, l'espionnait, en faisait son souffre-douleur, perturbait son travail, la tyrannisait et la menaçait; qu'en se contenant d'affirmer que ces attestations étaient contradictoires avec celles versées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif d'un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE les pourvois principal et incident;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Décision attaquée: cour d'appel de Douai (chambre sociale), du 30 septembre 2003.

3.- CONSUMO DE ALCOHOL Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Alcohol dependencia como situación laboral de asimilada al alta en la Seguridad Social

RECONOCIMIENTO DE ASIMILADA AL ALTA

Roj: ATS 9299/2012
Id Cendoj: 28079140012012202032
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1142/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Antonio Martín Valverde
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a trece de Septiembre de dos mil doce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. ANTONIO MARTIN VALVERDE.

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Jaén se dictó sentencia en fecha 5 de julio de 2011, en el procedimiento nº 301/11 seguido a instancia de Dª Dolores contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión de viudedad, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 9 de febrero de 2012, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 29 de marzo de 2012 se formalizó por la Letrada Dª María del Pilar Ruiz Contreras en nombre y representación de Dª Dolores, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 21 de junio de 2012, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales»

(sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de 9 de febrero de 2012 (rec. 2592/2011), revoca la de instancia confirmando la resolución del INSS denegatoria de la pensión de viudedad pretendida por la parte actora. Consta en el relato fáctico de la sentencia -tal como queda redactado en suplicación—, por lo que al presente recurso interesa, que el esposo de la actora falleció por enfermedad común el 15-1-2011, no encontrándose de alta o situación asimilada y sin tener cotizados quince años, ni 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al óbito. El trabajador inició baja médica el 30-11-2010, pero como no estaba de alta laboral no generó derecho a prestación de incapacidad temporal. Nada más sobre sus cotizaciones se hace constar como probado. En instancia se estima la demanda aplicando la doctrina del paréntesis, al entender que el causante sufría un alcoholismo crónico que explicaba su situación. Nótese que en la redacción de hechos original figuraba que el actor estaba en «situación de hecho asimilable» -al alta—, fórmula suprimida en suplicación, con indicación también de que el fallecimiento se debe a enfermedad común. La Sala de suplicación estima el recurso del INSS, razonando que el causante no acredita los requisitos de cotización ni desde situación de alta o asimilada, ni desde situación de no alta, por lo que procede la denegación del derecho pretendido.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la actora, insistiendo en su pretensión y aportando de contraste la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2005 (rec. 5282/2004), que aborda un supuesto en el que se cuestiona si a la hora de calcular la carencia necesaria para que la trabajadora fallecida pudiera generar el derecho a las pensiones de viudedad y orfandad que reclaman su esposo e hijos, debe o no ser considerado tiempo neutro, conforme a la conocida como «doctrina del paréntesis», el tiempo en que la causante permaneció inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo, tras agotar prestación por desempleo. Consta que la causante cotizó a lo largo de toda su vida laboral un total de 3.468 días, más 567 correspondientes a pagas extraordinarias; estuvo inscrita como demandante de empleo desde el 2-9-8196 hasta el 22-4-1993, fecha en que causó baja por colocación hasta el 21-5-1993; percibió prestación de desempleo desde el 22-5 al 21-11-1993; a partir de esa fecha figuró como demandante de empleo hasta el 15-2-1999 en que fue baja por no renovación de la demanda de empleo; dos días antes de la baja, el 13-2-1999, había sido diagnosticada de sintomatología depresiva; ingresó en el hospital el 20-2-2001; fue intervenida quirúrgicamente el 8-3-2001 por padecer «desde hace 18 meses, visión doble, pérdida de equilibrio y cefalea intensa»; se le practicó una «craneotomía suboccipital» con hallazgo de un aneurisma gigante; y falleció ese mismo día en el postoperatorio. La Sala aplica la doctrina del paréntesis al periodo en que tras agotar las prestaciones por desempleo, la causante permaneció ininterrumpidamente inscrita como demandante de empleo, y confirma la decisión del Juzgado que había declarado el derecho a percibir pensión de viudedad y de orfandad.

De lo expuesto se desprende que no existe contradicción entre las sentencias comparadas al partir de hechos distintos, y ser diversa la cuestión litigiosa resuelta. En la impugnada nada consta sobre una posible inscripción del causante como demandante de empleo o sobre que las patologías que presentaba al fallecimiento hubiesen podido justificar un ocasional alejamiento del mercado laboral, es más nada se advierte sobre sus cotizaciones, y los intervalos de no cotización, dándose únicamente por probado que no tiene cotizados 15 años y que tampoco había cotizado 500 días en los cinco años anteriores al hecho causante, de ahí que la sentencia no contenga doctrina alguna sobre la posible aplicación de la doctrina del paréntesis, limitándose a concluir que al no cubrir la cotización mínima legalmente exigida no resulta posible reconocer la prestación. Por el contrario, en el caso de referencia consta que la trabajadora, tras agotar el desempleo, permanece ininterrumpidamente

inscrita como demandante de empleo hasta que causa baja por enfermedad, por sintomatología depresiva, siendo lo que mantiene la sentencia la procedencia de considerar a la hora de calcular la carencia necesaria tiempo neutro, conforme a la «doctrina del paréntesis», dicho intervalo -en el que la causante permaneció inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo, tras agotar prestación por desempleo—.

Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones, en el que insiste en sus pretensiones y en las coincidencias apreciables entre las sentencias comparadas, pero sin aportar elementos novedosos o relevantes al respecto.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 LRJS y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas. Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a María del Pilar Ruiz Contreras, en nombre y representación de D^a Dolores contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 9 de febrero de 2012, en el recurso de suplicación número 2592/11, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Jaén de fecha 5 de julio de 2011, en el procedimiento nº 301/11 seguido a instancia de D^a Dolores contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión de viudedad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 11993/2010
Id Cendoj: 28079140012010202198
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3561/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Juan Francisco García Sánchez
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil diez.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JUAN FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Jaén se dictó sentencia en fecha 23 de febrero de 2009, en el procedimiento nº 537/2008 seguido a instancia de D^a Maite en representación de sus hijas menores Andrea y Florencia contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre prestaciones de orfandad, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 14 de septiembre de 2009, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 27 de octubre de 2009 se formalizó por el Letrado D. Marcos García Sánchez en nombre y representación de D^a Maite en representación de sus hijas menores Andrea y Florencia, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 6 de mayo de 2010 acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R.

2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

La sentencia impugnada -confirmando la dictada en la instancia- desestima la demanda en solicitud de reconocimiento de prestaciones de orfandad. Estas habían sido denegadas por no encontrarse el causante, en el momento de la defunción en situación de alta o asimilada al alta y no haber completado el periodo mínimo de cotización de 15 años. Consta que el causante falleció víctima al parecer de un homicidio; que había completado en el periodo comprendido entre el 5-2-91 y el 4-11-07, 3.495 días de cotización; que según el informe del médico de cabecera tenía antecedentes de alcoholismo desde 1998, no constando al facultativo antecedentes de otro tipo de drogodependencia, sin haberse sometido a terapia; y que no estaba inscrito como demandante de empleo en el INEM, habiendo estado inscrito en distintos periodos entre el 28-11-89 y el 8-8-07. En suplicación, la recurrente solicita la aplicación de la doctrina humanizadora, sosteniendo que no es necesario el periodo mínimo de cotización de 15 años «al tratarse como en el presente de una muerte por accidente no laboral». La Sala razona que del relato fáctico no se deduce una situación en la que es posible la aplicación de la doctrina flexibilizadora y humanizadora, pues aun cuanto consta que el fallecido tenía antecedentes de alcoholismo, no se acreditaron circunstancias en las que estuviera justificado el incumplimiento del requisito de la inscripción como demandante de empleo, para poder así entender al fallecido en situación asimilada al alta.

La parte actora recurre en casación para la unificación de doctrina articulando dos motivos, referidos a la situación de asimilada al alta y a la necesidad o no de carencia al producirse la muerte por consecuencia de un accidente no laboral, homicidio.

1.- La sentencia propuesta para el primer motivo, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 13-02-01 (Rec. 609/08), declara el derecho de la actora a percibir pensión de viudedad y orfandad y el del actor a percibir prestación a favor de familiares. Se trata de un supuesto en el que el causante percibió prestación contributiva de desempleo desde el 16-3-92 al 15-6-92, causando baja por renovación de demanda el 7-7-92, inscribiéndose de nuevo el 3-6-93 y permaneciendo inscrito hasta el fallecimiento, el 8-11-96. La Sala razona que en el global período de su vida laboral el intervalo en el que no estuvo inscrito en la oficina de empleo fue de 11 meses. Pero además -añade- el INEM le concedió subsidio por desempleo con fecha de inicio y final de 2-3-95, con 540 días consumidos por solicitarlo fuera de plazo, circunstancias todas ellas que demuestran su voluntad de permanencia en el mundo del trabajo a lo largo de las distintas etapas de su vida.

No existe contradicción entre las sentencias comparadas al diferir las circunstancias concurrentes ponderadas en cada caso. En la referencial se valora el breve período de interrupción de la inscripción en desempleo -11 meses- en el contexto de una dilatada trayectoria laboral; mientras que en el caso de la sentencia impugnada, no figuran estos datos, sino únicamente que el causante no estaba inscrito como demandante de empleo en el momento de su muerte y que estuvo inscrito en el INEM en distintos periodos.

2.- La sentencia alegada para el segundo motivo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 21-04-04 (Rec. 65/02), declara el derecho a percibir la pensión de viudedad. El esposo de la actora murió como consecuencia de un disparo que otra persona le hizo. Al fallecer estaba encuadrado en el Régimen Especial del Mar y tenía cotizado a la Seguridad Social 2327 días. El último periodo cotizado va del 11-7-92 al 18-9-92. Tenía reconocido subsidio de desempleo por causa de haber sido liberado de prisión por el periodo 15-7-99 a 14-1-00, que disfrutaba cuando falleció. El Juzgado califica de accidente no laboral su muerte a consecuencia del disparo y considera que no es necesario periodo de carencia para causar derecho a las prestaciones de viudedad. La Sala comparte este criterio, argumentando que la causa que produjo el óbito fue externa, un disparo.

Tampoco concurre contradicción entre las sentencias examinadas dados los diferentes presupuestos fácticos en que se sustentan. En la referencial, se acredita que la muerte del causante se produjo a consecuencia de un disparo de arma de fuego, mientras que en la sentencia recurrida, en el hecho probado 2º consta que «falleció..., víctima al parecer de un homicidio».

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Marcos García Sánchez, en nombre y representación de D^a Maite en representación de sus hijas menores Andrea y Florencia contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 14 de septiembre de 2009, en el recurso de suplicación número 1038/2009, interpuesto por D^a Maite en representación de sus hijas menores Andrea y Florencia, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Jaén de fecha 23 de febrero de 2009, en el procedimiento nº 537/2008 seguido a instancia de D^a Maite en representación de sus hijas menores Andrea y Florencia contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre prestaciones de orfandad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: STS 6564/2007
Id Cendoj: 28079140012007101148
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 322/2005
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: José Manuel López García de la Serrana
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Septiembre de dos mil siete.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Doña Pilar Hernández Melón en nombre y representación de DOÑA Marina contra la sentencia dictada el 19 de octubre de 2004 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en recurso de suplicación nº 2909/04, interpuesto contra la sentencia de fecha 23 de abril de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Castellón, en autos núm. 604/03, seguidos a instancias de DOÑA Marina contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre PENSIÓN DE VIUDEDAD.

Ha comparecido en concepto de recurrido el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL representado por el Letrado Don Andrés Trillo García.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha 23 de abril de 2004 el Juzgado de lo Social nº 1 de Castellón dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos: «**1º.-** Que la demandante D^a Marina, con DNI nº NUM000, solicitó en fecha 23-5-03 pensión de VIUDEDAD respecto de D. Jose Miguel, nacido el 13-3-45, con nº de afiliación a la SS NUM001, que falleció el 30-7-93, con el que contrajo matrimonio el 1-8-71, teniendo cuatro hijos en común nacidos en 1-6-72, 16-3-75, el 25-9-77, y el 1-10-88. **2º.-** Que el INSS por resolución de fecha 30-5-03 denegó la pensión solicitada: «Por no encontrarse el causante, a la fecha del fallecimiento, en alta o situación asimilada a la de alta y no haber completado el período de cotización de quince años, exigido en el art. 174.1 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29/06/94), en la redacción dada al mismo por el ap.I del art. 32 de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31-12-98), en relación con el apartado I de la Disposición Adicional octava de la mencionada Ley General, en redacción dada al mismo por el apartado tres de la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre». **3º.-** Contra dicha resolución formuló la parte actora reclamación previa en fecha 19-6-03, alegando que si bien era cierto que el causante no tenía 15 años de cotización, su situación si podía asimilarse al alta puesto que no se encontraba en alta debido a una enfermedad crónica y degenerativa que le apartó de la vida activa, habiendo fallecido de cirrosis hepática, siendo imposible en dicha situación realizar vida laboral, amén de la esposa tuvo que afrontar un pago a la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) de más de 3.000 euros para levantar el embargo sobre su vivienda familiar. La reclamación previa fue desestimada por el INSS mediante resolución de fecha 18-7-03, la que obrando en autos se da por reproducida. **4º.-** Que, según certificado de períodos cotizados emitido por el INSS en fecha 3-9-02, el esposo de la demandante tiene los siguientes días cotizados a la Seguridad Social:

Empresa Luis Varela Daval	de 7-7-65 a 24-12-66	536 días.
Empresa CÑANARJ.+15	de 1-1-67 a 8-1-67	8 días.
General	de 22-8-68 a 6-9-68	16 días.
General	de 23-11-70 a 30-11-70	8 días.
Autónomos	de 1-1-83 a 31-12-85	1096 días.
Total días computables =		1.664 días.

5º.- Que, según certificado de vida laboral emitido por la TGSS el causante permaneció en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos desde el 1-1-79 al 30-9-87; y según certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 28-10-03, sobre los procesos de reclamación de descubiertos del causante en el RETA, la situación existente es la siguiente:

PERÍODO	DEUDA	COBRADO	PENDIENTE	LIQUIDACIÓN
01-83 A 12-83	800,36	800,36		LIQUIDADO
01-84 A 12-84	995,79	995,79		LIQUIDADO
01-85 A 12-85	1054,3	1054,3		LIQUIDADO
01-86 A 12-86	1167,24	214,71	952,53	DATADO
01-87 A 09-87			919,18	DATADO

6º.- Que D. Jose Miguel en fecha 8-4-87 ingresó en el Hospital Provincial de Castellón de la Plana por tromboflebitis en la pierna derecha, que había empeorado a pesar del tratamiento establecido. Consta en la Hoja de alta, el 18-5-87, que había sido diagnosticado hacía dos años de cirrosis hepática alcohólica y que era bebedor habitual. El diagnóstico al alta fue de: «Erisipela, pierna derecha. Cirrosis hepática. Insuficiencia hepática y Hemorragia digestiva alta». Consta nuevo ingreso hospitalario en el hospital Gran Vía de Castellón en fecha 18-7-90 con alta el 23-7-90. En la Hoja de Alta consta «Ingesta etílica importante hasta hace dos años». Desde hace 6 años y a raíz de practicarse analítica rutinaria se objetiva alteración de patología hepática, precisando ingreso hace tres años en el hospital Provincial por edemas en extremidades inferiores y hematomas espontáneos. Precisa nueva hospitalización desde hace un año por idéntica sintomatología, así como ginivorragia, espirosis, precisando transfusiones repetidas. Actualmente tto. con Legalón y Ameride. Se mantenía en buena situación clínica y funcional hasta hace 3-4 meses en que presenta fatigabilidad muscular, decaimiento muscular progresivo y en el último mes edemas en extremidades inferiores y discreto aumento del perímetro abdominal. Hace tres semanas episodio febril, con hematuria y síndrome miccional bajo que remite con antibioterapia... **DIAGNÓSTICO:** Hepatopatía crónica. HT Portal. Hiperesplenismo. **TRATAMIENTO:** Evitar actividades que supongan esfuerzo físico o que puedan suponer cualquier traumatismo...» En fecha 6-6-92 ingresó, de nuevo en el Servicio de Urgencias del Hospital Gran Vía de Castellón por dolor en pierna izquierda con escalofríos y sensación de aumento del perímetro abdominal. Fue dado de alta hospitalaria el 25-6-02 con el siguiente diagnóstico: Erisipela profunda MID. Hepatopatía crónica. Hipertensión Portal. Hiperesplenismo. Consta en la Hoja de Urgencias: «Ingestión etílica hasta hace 4 años». En fecha 24-7-93 se produjo su último ingreso en el Servicio de Urgencias del Hospital Gran Vía de Castellón por erisipela en ambos miembros inferiores con descompensación ictero-ascítica de su hepatopatía crónica más insuficiencia renal aguda, falleciendo el día 30-7-93. Según certificado médico del Dr. Juan de 5-11-01, aportado con la demanda, el citado facultativo realizó la primera visita al causante en agosto de 1985, presentando ya un cuadro de cirrosis hepática etílica, varices esofágicas, hepatomegalia y esplenomegalia, siendo ingresado en el Hospital Provincial de Castellón en diversas ocasiones y visitado por el referido Dr. tanto en su consulta

como en su domicilio y controlado por él hasta su fallecimiento. 7º.- Que la base reguladora de la prestación solicitada asciende a la cantidad mensual de 210'57. El porcentaje legal para la pensión de viudedad fue en el 2003 el 48% y en el 2004 del 52%».

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: «Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Dª Marina contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo declarar y declaro que tiene derecho a que por la demandada se la invite a que en el improrrogable plazo de 30 días naturales, proceda a ingresar las cuotas en descubierto en el RETA y una vez efectuado le sea reconocida una pensión vitalicia de viudedad sobre una base reguladora de 210,57 euros mensuales en su porcentaje legal del 52%».

SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cual dictó sentencia en fecha 19 de octubre de 2004, en la que consta el siguiente fallo: «Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social contra la sentencia de fecha 23 de abril de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social núm. UNO de Castellón, y con revocación de la misma, desestimamos la demanda formulada y absolvemos a la parte demandada de las pretensiones en su contra formuladas.

TERCERO.- Por la representación de DOÑA Marina se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 11 de febrero de 2005, en el que se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en fecha 19 de noviembre de 1997.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de fecha 13 de septiembre de 2007 se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice su impugnación en el plazo de diez días.

QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso IMPROCEDENTE, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 19 de septiembre de 2007, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- 1. La sentencia recurrida en casación para unificación de doctrina, contempla el caso de una viuda cuyo marido falleció el 30 de julio de 1.993, cuando llevaba casi cinco años de baja en la Seguridad Social, donde tenía cotizados quinientos sesenta y ocho días al régimen general antes de diciembre de 1.970 y había estado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos desde el 1 de enero de 1.979 hasta el 30 de septiembre de 1.987, régimen al que tenía cotizados mil noventa y seis días, durante el periodo de 1 de enero de 1.983 al 31 de diciembre de 1.985, cotizaciones que abonó la viuda en la vía de apremio, según se deriva de los ordinales tercero y quinto del relato de hechos probados. La viuda solicitó el 23 de mayo de 2003 una pensión de viudedad que le fue denegada por el INSS, al no estar el causante en situación de alta o asimilada en la Seguridad Social al tiempo de fallecer y no tener cotizados quince años al sistema. Contra la anterior resolución presentó la interesada demanda que fue estimada en la instancia y desestimada en suplicación por la sentencia recurrida, al estimar que no podía flexibilizarse la exigencia del requisito de estar en situación asimilada al alta, ya que, el causante durante los cinco años anteriores al óbito no había estado en situación de alta laboral, ni había percibido prestaciones por desempleo, ni había estado inscrito como demandante de empleo para dejar constancia de su voluntad de trabajar, sin que tampoco se hubiese probado que el estado físico del mismo fuese tal que le obligase a seguir un tratamiento continuado y que le impidiese trabajar y cumplir con sus obligaciones para con el sistema, como la de inscribirse como demandante de empleo durante los largos periodos de tiempo en que no permaneció hospitalizado. Conviene recordar que, según el ordinal sexto del relato de hechos probados, en los cinco años anteriores a su fallecimiento el causante ingresó en cuatro ocasiones en un hospital para ser tratado de diversos problemas relacionados con su hepatopatía crónica de origen etílico, internamientos de corta duración, el que más duró cuarenta días, aunque es lo cierto que en el último, producido el 24 de julio de 1.993, murió a los pocos días del ingreso, cuando hacía más de cuatro años que no consumía bebidas alcohólicas.

2. Como sentencia de contraste se cita por la viuda recurrente la dictada por esta Sala el día 19 de noviembre de 1997 (Rec. 1194/97). Se contempla en ella el caso de una viuda cuyo marido falleció en accidente no laboral

el 25 de diciembre de 1.995, consistente en asfixia mecánica provocada por restos de comida a nivel traqueal alto. El causante padecía alcoholismo crónico de varios años de evolución que había sido la causa de que el mismo sufriera varios traumatismos por caídas, incluso recientes, ya que no había abandonado sus hábitos cuando le sobrevino la muerte por causa de ellos posiblemente. Se hace eco esa sentencia de otras de esta Sala en las que cuando, como consecuencia del alcoholismo crónico, «el causante se encuentra realmente incapacitado para trabajar y para gestionar su permanencia dentro del sistema de la Seguridad», debe entenderse cumplido el requisito de estar en situación de alta o asimilada cuando la enfermedad que determina la muerte se inicia bastante antes de producirse la baja en la Seguridad Social, ya que es explicable que en tales circunstancias se hayan descuidado los resortes legales prevenidos para continuar de alta.

3. Por el INSS y por el Ministerio Fiscal se alega en primer lugar que no concurre el requisito de contradicción de las sentencias comparadas que es necesario para la admisibilidad del recurso. Procede, por tanto, resolver previamente esa cuestión. Y, al efecto, conviene recordar que como señala la sentencia de esta Sala de 28-3-2006 (Rec. 2336/05): «es conocida por reiterada la doctrina de esta Sala en relación con el requisito de la contradicción que exige el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral entre la sentencia que se impugna y otra de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Según ella, la contradicción «requiere no solo que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos, sino que estos recaigan ante controversias esencialmente iguales; porque la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de la oposición de los pronunciamientos concretos recaídos en conflictos iguales» (sentencias de 27 y 28-1-92 [recs. 824/91 y 1053/91], 18-7, 14-10 y 17-12-97 [recs. 4067/96, 94/97 y 4203/96], 17-5 y 22-6-00 [recs. 1253/99 y 1785/99], 21-7 y 21-12-03 [recs. 2112/02 y 4373/02] y 29-1 y 1-3-04 [recs. 1917/03 y 1149/03] entre otras muchas).

Por esa razón, el término de referencia en el juicio de contradicción, ha de ser necesariamente «una sentencia que, al decidir sobre un recurso extraordinario, está limitada por los motivos propuestos por el recurrente» y, por ello, la identidad de la controversia debe establecerse teniendo en cuenta los términos en que el debate ha sido planteado en suplicación. Sentencias de 13-12-91 [rec. 771/91], 5-6 y 9-12-93 [recs. 241/92 y 3729/92], 14-3-97 [rec. 3415/96], 16 y 23-1-02 [recs. 34/01 y 58/01], 26-3-02 [rec. 1840/00], 25-9-03 [rec. 3080/02] y 13-10-04 [rec. 5089/03] entre otras). De otro lado, la Sala ha señalado con reiteración que los fundamentos que han de compararse no son los de las sentencias, sino los de las pretensiones y resistencias de las partes (sentencias de 25-5-95 [rec. 2876/94], 17-4-96 [rec. 3078/95], 16-6-98 [rec. 1830/97] y 27-7-01 [rec. 4409/00] entre otras).

En el presente caso, las diferencias entre los supuestos de hecho y de derecho contemplados por las sentencias comparadas son notables. Conviene recordar que el marido de la recurrente era trabajador autónomo, mientras que el causante en el supuesto contemplado por la sentencia de contraste era trabajador por cuenta ajena, cuyo fallecimiento se estimó derivado de accidente no laboral, lo que no acaece en el caso de la sentencia recurrida, donde, además entre la baja en la Seguridad Social y el óbito median cinco años sin que el causante se inscriba como demandante de empleo, mientras que en el caso de la sentencia de contraste sólo media un año entre la baja en la Seguridad Social, a raíz de un alta médica por baja laboral provocada por accidente de trabajo, y la muerte del causante. Pero, sobre todo, conviene resaltar que en el caso de la sentencia de contraste se estimó que el causante por causa de su enfermedad se encontraba incapacitado para el trabajo y para gestionar su permanencia en el sistema de la Seguridad Social, mientras que en el caso de la sentencia recurrida se ha estimado que, a lo largo de cinco años, hubo largos periodos de tiempo durante los que no consta ni la incapacidad laboral del causante, ni que el mismo se encontrase impedido para todo trabajo, ni imposibilitado para inscribirse como demandante de empleo, lo que sería indiciario de su voluntad de permanencia en el mercado laboral y de no apartarse del sistema. Tal imposibilidad física no se ha acreditado, pues, en el caso de autos, en el que, además, resulta que fue la viuda, quien, según sus manifestaciones, abonó las cotizaciones de los 1.096 días cotizados al RETA de 1.983 a 1.986, para levantar un embargo sobre la vivienda familiar. Dejando a un lado la cuestión relativa a la validez de las cotizaciones ingresadas por la viuda, es lo cierto que ese dato revela una conducta del causante de apartamiento del sistema, al no cotizar al RETA durante más de ocho años, que tampoco se produjo en el caso contemplado por la sentencia de contraste. Por todo ello, cabe concluir que no son sustancialmente idénticos los supuestos contemplados en las sentencias comparadas, lo que en su momento debió ser causa para la inadmisión del recurso y ahora lo es para su desestimación. Sin costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Desestimamos el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Doña Pilar Hernández Melón en nombre y representación de DOÑA Marina contra la sentencia dictada el 19 de octubre de 2004 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en recurso de suplicación nº 2909/04, interpuesto contra la sentencia de fecha 23 de abril de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Castellón, en autos núm. 604/03, seguidos a instancias de DOÑA Marina contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre PENSIÓN DE VIUDEDAD. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. José Manuel López García de la Serrana hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Roj: ATS 14361/2006
Id Cendoj: 28079140012006202080
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1662/2005
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Aurelio Desdentado Bonete
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil seis.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 24 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 27 de julio de 2004, en el procedimiento nº 571/02 seguido a instancia de DOÑA Francisca y DOÑA Flora representadas por su padre DON Carlos Daniel contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y EULEN S.A., sobre reclamación de cantidad, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DON Carlos Daniel DOÑA Francisca DOÑA Flora, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 24 de febrero de 2.005, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 5 de mayo de 2.005 se formalizó por la Letrada Doña María del Carmen García García, en nombre y representación de DON Carlos Daniel y DOÑA Francisca y DOÑA Flora, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 21 de febrero de 2.006 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/200 4)].

En el caso de la sentencia recurrida, la causante falleció el día 27 de noviembre de 2001, estando casada desde el día 7 de mayo de 1981 con uno de los actores, y dejando dos hijas menores del matrimonio. A la fecha de fallecimiento, la causante no se hallaba en situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. La última contratación se produjo el día 4 de abril de 2000 y hasta el 1 de octubre de 2000, sin que a su vencimiento

pasase a situación legal de desempleo. Durante el período de 2 de octubre de 2000 a 20 de septiembre de 2001, la causante pasó a percibir prestaciones de IT en régimen de pago directo. Solicitadas las pensiones de viudedad y orfandad el día 2 de enero de 2002, estas fueron denegadas por resolución del INSS de fecha 11 de enero de 2002, por no hallarse la causante de alta o en situación asimilada al alta en la fecha de fallecimiento, no ser pensionista de incapacidad o jubilación en la modalidad contributiva ni estar en situación de invalidez provisional o haber completado un período mínimo de cotización de 15 años. Tras la correspondiente reclamación previa, que fue denegada, los actores interpusieron demanda, que fue desestimada en la instancia y en suplicación. La sentencia de suplicación entendió que no procedía la aplicación de la doctrina del TS en materia de flexibilización de la exigencia del requisito de alta o asimilada al alta atendiendo a las circunstancias del caso, entendiendo, asimismo, que no procedía la aplicación de la doctrina del paréntesis. La razón esencial para llegar a dicha conclusión fue que ni siquiera el escrito del recurso hacía referencia concreta alguna a la enfermedad que se mencionaba ni a las circunstancias concurrentes derivadas de aquella, pero sobre todo, por el hecho de que dicho dato no constase en los hechos probados de la sentencia de instancia, por lo que la aplicación de la doctrina referida aparecía desprovista del más mínimo sustento fáctico en el presente caso.

Los recurrentes seleccionan como contradictoria la sentencia de esta Sala de 18 de junio de 2001, R. 784/00, supuesto en el que constaba expresamente que el causante se encontraba afectado por alcoholismo crónico, en concreto, «hábito enólico importante», habiendo sido encontrado muerto en la orilla del río Manzanares de Madrid en un «lugar donde pernoctan diversos indigentes», siendo la causa de la muerte una hemorragia cerebral espontánea, «posiblemente en relación con la ingesta de alcohol». Por estas razones, la Sala aplica al supuesto la interpretación flexible y humanizadora del requisito del alta.

En el presente caso no se da la contradicción requerida, puesto que, mientras que en el caso de la sentencia de contraste el causante se encontraba afectado por un alcoholismo crónico, circunstancia que fue considerada relevante para aplicar la doctrina humanizadora del requisito del alta, en la sentencia recurrida no consta ninguna enfermedad o circunstancia atinente a la causante que pueda ser tomada como relevante para aplicar dicha doctrina.

SEGUNDO.- Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas. Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Doña María del Carmen García García en nombre y representación de DON Carlos Daniel y DOÑA Francisca y DOÑA Flora contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 24 de febrero de 2.005, en el recurso de suplicación número 607/05, interpuesto por DON Carlos Daniel, DOÑA Francisca y DOÑA Flora, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 24 de los de Madrid de fecha 7 de julio de 2004, en el procedimiento nº 571/02 seguido a instancia de DOÑA Francisca y DOÑA Flora representadas por su padre DON Carlos Daniel contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y EULEN S.A., sobre reclamación de cantidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: STS 2476/2006
Id Cendoj: 28079140012006100288
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 5249/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Gil Suárez
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a catorce de Marzo de dos mil seis.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por la Letrada doña Pilar Hernández Melón en nombre y representación de doña Antonia que actúa en representación de su hijo menor de edad Emilio, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 19 de octubre de 2004, recaída en el recurso de suplicación num. 389/2004 de dicha Sala, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Castellón, dictada el 23 de abril de 2004 en los autos de juicio num. 605/2003, iniciados en virtud de demanda presentada por doña Antonia en representación de su hijo menor de edad Emilio contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre pensión de orfandad.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS GIL SUÁREZ

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Doña Antonia en representación de su hijo menor de edad Emilio presentó demanda ante los Juzgados de lo Social de Castellón el 1 de septiembre de 2003, siendo ésta repartida al nº 1 de los mismos, en base a los siguientes hechos: D. Juan Ignacio que estuvo casado con la demandante desde el 1 de agosto de 1971 hasta que falleció el 30 de julio de 1993, mantuvo una vida laboral medianamente estable hasta el año 1985 en que se le diagnosticó un proceso de cirrosis alcohólica que le llevó a la muerte por cirrosis hepática, desde ese momento descuidó absolutamente su vida activa dada la situación de inconsciencia que genera el alcoholismo crónico. La Sra. Antonia a la muerte de su esposo, asumió el pago de una deuda por descubierto en la cotización como autónomo, para cancelar un embargo sobre su vivienda habitual, por lo que el causante debe ser considerado en situación de asimilado al alta. Se termina suplicando en la demanda se dicte sentencia en la que se declare el derecho del menor Emilio al percibo de la prestación de orfandad por el fallecimiento de su padre D. Juan Ignacio.

SEGUNDO.- El día 7 de abril de 2004 se celebró el acto de juicio, con la participación de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a estas actuaciones.

TERCERO.- El Juzgado de lo Social nº 1 de Castellón dictó sentencia el 23 de abril de 2004 en la que, estimó la demanda y declaró el derecho del menor Emilio, y tras proceder a ingresar las cuotas en descubierto en el RETA, le sea reconocida una pensión vitalicia de Orfandad en la cuantía del 20% de una base reguladora de 210'57 euros mensuales, con efectos desde el 1 de marzo de 2003. En esta sentencia se declaran los siguientes HECHOS PROBADOS: «1º) Que la demandante Dª Antonia, con DNI nº NUM000, solicitó en fecha 23- 5-03 pensión de ORFANDAD respecto de D. Juan Ignacio, con nº de afiliación a la SS NUM001, que falleció el 30-7-93, con el que contrajo matrimonio el 1-8-71, teniendo cuatro hijos en común nacidos en 1-6-72, el 16-3-75, el 25-9-77 y el 1-10-88 (Emilio); 2º) Que el INSS por resolución de fecha 30-5-03 denegó la pensión solicitada: «Por no encontrarse el causante, a la fecha del fallecimiento, en alta o situación asimilada a la de alta y no haber completado el período de cotización de quince años, exigido en el art. 174.1 de la Ley General de Seguridad, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29/06/94), en la redacción dada al mismo por el apart. del art. 32 de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31-12-98), en relación con el apartado I de la Disposición Adicional octava de la mencionada Ley General, en redacción dada al mismo por el apartado tres de la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre»; 3º) Contra dicha resolución

formuló la parte actora reclamación previa en fecha 19-6-03, alegando que si bien era cierto que el causante no tenía 15 años de cotización, su situación si podía asimilarse al alta puesto que no se encontraba en alta debido a una enfermedad crónica y degenerativa que le apartó de la vida activa, habiendo fallecido de cirrosis hepática, siendo imposible en dicha situación realizar vida laboral, amén de la esposa tuvo que afrontar un pago a la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) de más de 3000 euros para levantar el embargo sobre su vivienda familiar. La reclamación previa fue desestimada por el INSS mediante resolución de fecha 18-7-03, la que obrando en autos se por reproducida; **4º)** Que, según certificado de periodos cotizados emitido por el INSS en fecha 3-9-02, el esposo de la demandante tiene los siguientes días cotizados a la Seguridad Social: Empresa Luis Varela Daval... de 7-7-65 a 24-12-66... 536 días. Empresa CÑANARJ.+15... de 1-1-67 a 8-1-67... 8 días. General... de 22-8-68 a 6-9-68... 16 días. General... de 23-11-70 a 30-11-70... 8 días. Autónomos... de 1-1-83 a 31-12-85... 1.096 días. Total días computables = 1.664; **5º)** Que, según certificado de vida laboral emitido por el TGSS el causante permaneció de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos desde el 1-1-79 al 30-9-87; y según certificado de la TGSS de fecha 20-10-03, sobre los procesos de reclamación de descubiertos del causante en el RETA, la situación existente es la siguiente: PERIODO, DEUDA, COBRADO, PENDIENTE, LIQUIDACIÓN, 01-83 a 12-83... 800'36... 800'36... LIQUIDADO 01-84 a 12-84... 995'79... 995'79... LIQUIDADO 01-85 a 12-85... 1.054'3... 1.054'3... LIQUIDADO 01-86 a 12-86... 1.167'24... 214'71... 952'53... DATADO 01-87 a 9-87... 919'18... DATADO **6º)** Que D. Juan Ignacio en fecha 8-4-87 ingresó en el Hospital Provincial de Castellón de la Plana por tromboflebitis en la pierna derecha, que había empeorado a pesar del tratamiento establecido. Consta en la Hoja de alta, el 18-5-87, que había sido diagnosticado hacía dos años de cirrosis hepática alcohólica y que era bebedor habitual. El diagnóstico al alta fue de: «Erisipela, pierna derecha. Cirrosis hepática. Insuficiencia hepática y Hemorragia digestiva alta. Consta nuevo ingreso hospitalario en el Hospital Gran vía de Castellón en fecha 18-7-90 con alta el 23-7-90. En la Hoja de Alta consta «Ingesta etílica importante hasta hace dos años. Desde hace 6 años y a raíz de practicarse analítica rutinaria se objetiva alteración de patología hepática, precisando ingreso hace tres años en Hospital provincial por edemas en extremidades inferiores y hematomas espontáneos. Precisa nueva hospitalización hace un año por idéntica sintomatología, así como ginivorragia, espitaxis, precisando transfusiones repetidas. Actualmente tto con Legalón y Ameride. Se mantenía en buena situación clínica y funcional hasta hace 3-4 meses en que presenta fatigabilidad muscular, decaimiento muscular progresivo y en el último mes edemas en extremidades inferiores y discreto aumento del perímetro abdominal. Hace tres semanas episodio febril, con hematuria y síndrome miccional bajo que remite con antibioterapia... DIAGNOSTICO Hepatopatía crónica. HT Portal. Hiperesplenismo. TRATAMIENTO: Evitar actividades que supongan esfuerzo físico o que puedan suponer cualquier traumatismo...». En fecha 6-6-92, ingresó, de nuevo en el Servicio de Urgencias del Hospital Gran vía de Castellón por dolor en pierna izquierda con escalofríos y sensación de aumento del perímetro abdominal. Fue dado de alta hospitalaria el 25-6-02 con el siguiente diagnóstico: Erisipela profunda MID. Hepatopatía crónica. Hipertensión Portal Hiperesplenismo. Consta en la Hoja de Urgencias: «Ingestión etílica hasta hace 4 años». En fecha 24-7-93 se produjo su último ingreso en el Servicio de Urgencias del Hospital Gran Vía de Castellón por erisipela en ambos miembros inferiores con descompensación ictero-ascítica de su hepatopatía crónica más insuficiencia renal aguda, falleciendo el día 30-7-93. Según certificado médico del Dr. Ignacio de 5-11-01, aportado con la demanda, el citado facultativo realizó la primera visita al causante en agosto de 1985, presentando ya un cuadro de cirrosis hepática etílica, varices esofágicas, hepatomegalia, y esplenomegalia, siendo ingresado en el Hospital Provincial de Castellón en diversas ocasiones y visitado por el referido Dr. tanto en su consulta como en su domicilio y controlado por él hasta su fallecimiento; **7º)** Que la base reguladora de la prestación solicitada asciende a la cantidad mensual de 210'57. El porcentaje legal para la pensión de Orfandad en el 2003 y en el 2004 es del 20%». Mediante Auto de Aclaración del mismo Juzgado de fecha 4 de junio de 2004 se rectificó el carácter vitalicio de la pensión que se le debía reconocer al hijo de la demandante.

CUARTO.- Contra la anterior sentencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su sentencia de 19 de octubre de 2004, estimó el recurso y revocando la sentencia recurrida desestimó la demanda inicial presentada por doña Antonia.

QUINTO.- Contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Comunidad Valenciana, doña Antonia interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en los siguientes motivos: 1.- Contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 29 de noviembre de 1997. 2.- Infracción de los arts. 174.1 y 175.1, en relación con el artículo 124.1 de la Ley General de la Seguridad Social, y los arts. 7.1 y 16.1 en relación con el artículo 2.4 de la Orden de 13 de febrero de 1967.

SEXTO.- Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida, INSS, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar procedente tal recurso.

SÉPTIMO.- Se señaló para la votación y fallo el día 7 de marzo de 2006, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La actora Antonia, estuvo casada con Juan Ignacio, el cual falleció el 30 de julio de 1993. Este matrimonio tuvo cuatro hijos, nacidos en las siguientes fechas: 1 de junio de 1972, 16 de marzo de 1975, 25 de septiembre de 1997 y 1 de octubre de 1988.

El Sr. Juan Ignacio cotizó a la Seguridad Social en los siguientes períodos en que trabajó por cuenta ajena: a).- del 7 de julio de 1965 al 24 de diciembre de 1966 (536 días); b).- del 1 al 8 de enero de 1967 (8 días); c).- del 22 de agosto al 6 de septiembre de 1968 (16 días); y d).- del 23 al 30 de noviembre de 1970 (8 días). Las cotizaciones que se acaban de exponer suman un total de 568 días.

El 1 de enero de 1979 se dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), si bien únicamente abonó las cotizaciones correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 1985, más los 60 primeros días del año 1986, todo lo cual suponen 1156 días de cotización al RETA. Debe tenerse en cuenta además que continuó dado de alta en este Régimen Especial hasta fin de septiembre de 1987, pero no abonó cotización alguna al mismo en los dieciocho meses anteriores a esta fecha, de modo que en 28 de octubre del 2003 (fecha en que la Tesorería General de la Seguridad Social expidió el documento que obra en autos conteniendo estos datos) todavía existían descubiertos por impago de cotizaciones a la Seguridad Social del esposo de la actora, los cuales descubiertos ascendían a 952,35 euros de cotizaciones impagadas en 1986 y 919'18 euros por iguales impagos del año 1987.

La actora solicitó el 23 de mayo del 2003 ante el INSS el reconocimiento y abono de pensión de viudedad por la muerte de su esposo, acontecida el 30 de julio de 1993, como se ha dicho. Dicha entidad gestora denegó esta prestación, mediante resolución de 30 de mayo del 2003, «por no encontrarse el causante, a la fecha del fallecimiento, en alta o situación asimilada al alta y no haber completado el período de cotización de quince años». Contra tal resolución la actora formuló reclamación previa «referente a reclamación de prestación de muerte y supervivencia», la cual fue desestimada mediante resolución del INSS de 18 de julio del 2003.

La demandante presentó la demanda origen de estas actuaciones el 1 de septiembre del 2003, en la que solicitó el reconocimiento y abono de una pensión de orfandad, en favor de su hijo Emilio, nacido el 1 de octubre de 1988, fruto del matrimonio de la actora y el causante. En el suplico de esta demanda se solicita que se dicte sentencia «declarando el derecho del menor Emilio al percibo de la prestación de orfandad por el fallecimiento de su padre D. Juan Ignacio, y como consecuencia de ello se condene al organismo demandado a que abone las correspondientes prestaciones, con los demás pronunciamientos inherentes a tal declaración». En esta demanda se alega que el causante «tuvo una vida laboral medianamente estable hasta el año 1985 en que se le reconoció y diagnosticó un proceso de cirrosis alcohólica que le llevó, tras un accidentado proceso de tratamientos médicos, a la muerte por cirrosis hepática», y por ello se alega que «debe ser considerado en situación de asimilación al alta».

El Juzgado de lo Social nº 1 de Castellón dictó sentencia de fecha 23 de abril del 2004, en la que estimó la demanda referida y declaró que la actora, que actúa en nombre de su hijo menor Emilio, «tiene derecho a que por la demandada se la invite a que en el improrrogable plazo de 30 días naturales proceda a ingresar las cuotas en descubierto en el RETA, y una vez efectuado le sea reconocida una pensión vitalicia de orfandad sobre una base reguladora de 210'57 euros mensuales en su porcentaje legal del 20%.

El INSS interpuso recurso de suplicación contra esa sentencia, y la Sala de lo Social del TSJ de Valencia en la suya de 19 de octubre del 2004, acogió favorablemente tal recurso, revocó la resolución de instancia y desestimó la demanda absolviendo a la entidad demandada de las pretensiones de la misma.

SEGUNDO.- Contra esta sentencia de la Sala de lo Social de Valencia la actora formuló el recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora se analiza. En este recurso se alega, como contraria, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1997. Pero esta sentencia de contraste no puede ser calificada como contrapuesta a la que aquí se impugna, como ponen en evidencia las siguientes consideraciones:

1º/ En primer lugar se ha de destacar que en los casos análogos al que aquí tratamos, no es, en modo alguno suficiente para poder apreciar la existencia de contradicción entre las dos sentencias confrontadas, el hecho de que en ambos casos el causante estuviese aquejado por la misma dolencia. Pues las situaciones que se comparan tienen que ser sustancialmente iguales, y para ello no basta la coincidencia en el tipo o clase de enfermedad, sino que es necesario además que exista equivalencia en el grado, intensidad, modo de afectar al paciente, efectos y consecuencias que de tal dolencia se derivan para uno y otro causante. Como dice con acierto la sentencia de esta Sala de 13 de julio del 2004 (recurso nº 3226/2003), «la materia debatida es fundamentalmente de valoración casuística».

Por ello, el hecho de que en el actual recurso, conste en la sentencia recurrida que el causante fue diagnosticado de «cirrosis hepática alcohólica y que era bebedor habitual», y en la de contraste se diga que el «esposo de la actora presentaba un cuadro de alcoholismo crónico», sin otras precisiones ni coincidencias, no justifica la apreciación de que exista contradicción entre esas dos sentencias.

2º/ La propia sentencia referencial recoge la doctrina de que debe considerarse que se encuentra en situación asimilada al alta aquella persona que padece alcoholismo crónico y a consecuencia del mismo «se encuentra realmente incapacitado para trabajar y para gestionar su permanencia dentro del Sistema de Seguridad Social», y luego llega a la conclusión de que esa incapacidad concurrió en el causante de las pensiones de viudedad y orfandad sobre las que se debatía en aquel litigio, y por ello estimó la demanda y reconoció tales pensiones a la allí demandante y su hijo. En cambio, la sentencia recurrida no afirma ni concluye, en momento alguno, que el alcoholismo del actor le incapacitase para el trabajo; y tampoco puede llegarse con seguridad a esa conclusión con los solos datos médicos que se contienen en la misma, fundamentalmente en el hecho probado sexto, y menos aún que tal invalidez laboral se produjese antes de julio de 1990, con lo que aunque como mera hipótesis se admitiese esta fecha como inicio de la imposibilidad de trabajar, no se cubriría el período de carencia que impone el art. 174-1 de la LGSS. Se destaca que en el citado hecho probado sexto aparece que en los últimos seis años, y prescindiendo del último ingreso hospitalario en el que se produjo su fallecimiento (estancia hospitalaria que duró siete días) tan sólo se produjeron otros tres ingresos en hospitales, el primero en abril y mayo de 1987 que fue el que tuvo una duración más larga, el segundo en julio de 1990 (de seis días) y el tercero en junio de 1992 de veinte días; pero, repetimos, que a la vista de los datos médicos recogidos en ese hecho probado o expresados en otros datos fácticos de la recurrida no cabe deducir la referida imposibilidad para trabajar del esposo de la actora.

3º/ Más aún, en ese hecho probado sexto consta que dicho señor había efectuado una «ingesta ética importante» hasta 1988 aproximadamente, de lo que se desprende que desde entonces había dejado de beber, al menos de forma relevante, lo que constituye un dato favorable a la posibilidad de trabajar. Sin que en la sentencia de contraste pueda apreciarse nada similar.

4º/ Por último, se destaca que la sentencia recurrida no sólo afirma que el esposo de la actora no se hallaba de alta en la Seguridad Social, ni cubría el mínimo de 500 días de cotización en los cinco años anteriores, ni los 15 años en toda su vida laboral y que después de su baja en la Seguridad Social nunca se inscribió como demandante de empleo; sino que además añade no «consta oficialmente su alcoholismo, sin que muriese por él, sino de tromboflebitis, y de todos modos no equivale alta, y se debe cumplir algún requisito legal y aquí no se cumple ninguno». No cabe duda, que todo este cúmulo de circunstancias y condicionamientos no concurrieron, de forma coincidente y conjunta, en el supuesto que resolvió la sentencia de contraste comentada.

TERCERO.- No existe, por tanto, contradicción entre las dos sentencias que aquí se comparan, lo que obliga a desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina entablado por la demandante contra la sentencia del TSJ de Valencia de 19 de octubre del 2004.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por la Letrada doña Pilar Hernández Melón en nombre y representación de doña Antonia que actúa en representación de su hijo menor de edad Emilio, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, de fecha 19 de octubre de 2004, recaída en el recurso de suplicación num. 389/2004 de dicha Sala. Sin costas.-

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Luis Gil Suárez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Documento TOL718.936**Jurisprudencia**

**Cabecera: Viudedad y orfandad, se desestima por falta de carencia y alta o asimilada al alta.
Falta de contradicción para los dos motivos.**

Jurisdicción: Social

Ponente: Juan Francisco García Sánchez

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 28/06/2005

Tipo Resolución: Auto

Sala: Cuarta

Sección: Primera

Número Recurso: 3205/2004

<http://www.tirantonline.com>

ENCABEZAMIENTO:

Procedimiento: **Social**

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil cinco.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social N° 7 de los de Valencia se dictó sentencia en fecha 12 de febrero de 2004, en el procedimiento nº 9301/03 seguido a instancia de DOÑA Melisa representada por su madre Doña María Inés contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 26 de mayo de 2004, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 22 de julio de 2004 se formalizó por el Letrado Don Ricardo Peralta Ortega, en nombre y representación de DOÑA María Inés, por sí y en nombre de su hija menor Melisa, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 26 de abril de 2005 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 y 28 de enero de 1.992, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, 23 de septiembre de 1998, 30 de junio de 1999, 2 de julio, 28 de septiembre de 1999 y 29 de enero de 2004, entre otras muchas).

En la sentencia recurrida, que denegó las prestaciones de viudedad y orfandad solicitadas por la demandante por no concurrir los requisitos de hallarse el causante en alta o situación asimilada, ni la carencia genérica ni específica, consta que el causante estuvo en situación de alta en Seguridad Social desde el 1/04/1965 hasta el 31/12/1980, acreditando 4.415 días cotizados. Lapso de tiempo en el que se sucedieron varias altas y bajas en RGSS y RETA. Consta que estuvo de alta en el período de 2/02/1977 al 20/06/1977 cotizando 149 días (RGSS); y en el período 1/12/1979 al 31/10/1980, 639 días (RETA). Asimismo consta que el trabajador se encuentra en situación de baja en el RETA desde el 31 de diciembre de 1980. Producida la baja no se inscribió como demandante de empleo. Por Resolución de 13/09/1983 y con efectos de junio de 1983 se reconoció al recurrente una ayuda por enfermedad del Fondo de Asistencia Social por encontrarse afecto de una incapacidad permanente para todo trabajo, con prestación no contributiva desde 1993 hasta su fallecimiento; asimismo consta que desde 1983 padecía hepatopatía crónica, posiblemente alcohólica, con carcinoma de boca en 1990, falleciendo en 2003. Se afirma que cuando ocurrió el óbito, el causante hacía más de 20 años que había causado baja en la Seguridad Social, sin que conste que la hepatitis la padeciese antes de su cese en el trabajo, ni que dicha enfermedad fuese la causante de su muerte. La sentencia recurrida sostiene que la hepatitis no se padecía antes del cese en el trabajo y que no fue la causa de la muerte. Sostiene, de forma suscita, la sentencia impugnada que: no se acredita el período mínimo de cotización de 15 años, que no se encontraba el causante en situación de alta o asimilada, pues no se inscribió como demandante de empleo y que no cabe aplicar la teoría del paréntesis, pues no se dan los requisitos para ello.

El recurrente en casación unificadora sostiene que se encontraba en situación asimilada al alta pues la situación de invalidez con prestación no contributiva es asimilada a la situación de alta. En conexión con lo anterior entiende que como desde entonces no podía trabajar y cotizar, debe serle aplicada la teoría del paréntesis. Es decir, que desde que percibía una ayuda por enfermedad al encontrarse afecto de situación de incapacidad -Resolución de 13/09/1983- se encontraba en situación de asimilada al alta y desde esa fecha, como no podía cotizar por causa a él no imputable, se le debía aplicar la teoría del paréntesis y, por lo tanto, tomar en consideración el período septiembre de 1978 a septiembre de 1983, caso en el que sí tendría los 500 días de cotización. Para estos dos argumentos, estrechamente unidos, invoca de contraste dos sentencias de esta Sala.

En relación con el primero, cita como contradictoria la sentencia de esta Sala de 26 de octubre de 1998 (recurso 584/98). Esta sentencia de referencia examina supuesto en el que la causante estuvo en alta y cotizando en el Régimen general de la Seguridad Social desde el 15 de septiembre de 1.980 hasta el 10 de febrero de 1.992, momento en que pasó directamente a percibir una pensión no contributiva de invalidez, falleciendo en 1993. Atendiendo a esta situación, esta Sala Cuarta en la referida sentencia, entendió que la situación podía considerarse como asimilada al alta, teniendo en cuenta que la enfermedad que motivó la concesión de la prestación de invalidez se había iniciado forzosamente antes del cese en el trabajo. Realmente esa es la doctrina que se viene aplicando en reiteradas sentencias de esta Sala, algunas de ellas citadas en la sentencia de contraste, con arreglo a la que la relativización o humanización del requisito de estar en alta o situación asimilada se puede extender a supuestos en los que la enfermedad se ha iniciado durante el momento en que sí concurría el requisito (sentencias de 19 de diciembre de 1996, 19 de noviembre de 1997, 12 de marzo de 1998 y 9 de diciembre de 1999).

De lo expuesto se desprende la falta de identidad entre los supuestos comparados, pues en la sentencia recurrida en modo alguno cabe establecer una relación entre la fecha en que dejó de estar en alta el causante y la enfermedad que padeció muchos años después y que determinó la concesión de la prestación no contributiva de invalidez. Sin embargo, en la de contraste, lejos de afirmarse que el simple hecho de percibir una prestación de esas características equivale a estar en situación asimilada al alta, lo que se dice es que la enfermedad que condujo a ella se inició durante el tiempo en que el trabajador estuvo en alta y cotizando, lo que no acontece en el supuesto que resuelve la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Respecto del segundo motivo, por el que se cuestiona la aplicación de la doctrina del paréntesis no computable para retrotraer la fecha del cómputo del período de cotización (500 días en los cinco años anteriores al hecho causante), tampoco concurre la contradicción denunciada entre la sentencia recurrida y la seleccionada de contraste de la Sala de 25 de julio de 2000 (rec. 2808/99).

Esta sentencia de referencia reconoce la pensión de viudedad solicitada, al constar que el causante había cotización al Régimen General de la Seguridad Social de 2.900 días en los años 1973 a 1981; con inscripción

ininterrumpida como demandante de empleo desde 1983 hasta su muerte en 1994, con dos períodos intermedios de percepción del subsidio de desempleo de año y medio y dos años de duración; un período de cotización de 1141 días en los cinco años que van del 14 de febrero de 1983 (fecha de la inscripción como desempleado no interrumpida posteriormente) al 15 de febrero de 1978; y un lapso temporal de 23 meses menos tres días (de 17 de marzo de 1981 a 14 de febrero de 1982) en que no consta comparecencia del causante en el mercado de trabajo.

Concluye manteniendo una interpretación humanizadora del requisito del alta que pondera las circunstancias de cada caso concreto con el fin de evitar supuestos no justificados de desprotección, concluyendo que en el caso enjuiciado el requisito de cotización de los 500 días en los cinco años anteriores al hecho causante debe retrotraerse al momento de paso a desempleo involuntario no interrumpido.

Es evidente la falta de identidad con la sentencia recurrida porque la razón de decidir de la sentencia de contraste es que la falta de inscripción como demandante de empleo no supera los 23 meses y que la enfermedad ya estaba instaurada en el momento de producirse la baja en Seguridad Social; mientras que la sentencia recurrida se refiere a un supuesto en el que se cesó en el trabajo, sin constar que la enfermedad fuese anterior al cese, y tras un período de tiempo de aproximadamente 2 años y 9 meses, se obtuvo una ayuda por encontrarse el causante afecto a una enfermedad. Por otra parte, en los supuestos comparados concurren distintas enfermedades, lo que puede repercutir tanto en su desarrollo y consolidación en el momento de la baja en el Sistema, también, claramente, el tiempo transcurrido entre ese momento y el de la solicitud de la pensión, como en la capacidad y diligencia del paciente en el mantenimiento de su inclusión en el Sistema, teniendo en cuenta también el tiempo en el que se permanece fuera del mismo.

La parte recurrente en el trámite de alegaciones insiste en la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y las invocadas como término de contradicción para cada uno de los motivos articulados en el recurso, pero lo manifestado no desvirtúa los razonamientos expuestos, al ser una mera reiteración de lo contenido y argumentado en su recurso, por lo que procede su rechazo. En cuanto a la falta de tutela judicial que denuncia, se ha de decir que no existe tal, dado que la parte ha podido valerse de todo los medios y recurso a su alcance, y que la inadmisión del presente recurso de casación para la unificación de doctrina se produce por faltar el presupuesto esencial del mismo, cual es la existencia de contradicción entre las resoluciones confrontadas.

TERCERO.- Por todo lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal sin que proceda imponer a la parte recurrente las costas del presente recurso, al gozar del beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Ricardo Peralta Ortega en nombre y representación de DOÑA María Inés, por sí y en nombre de su hija menor Melisa contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 26 de mayo de 2.004, en el recurso de suplicación número 1458/04, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Valencia de fecha 12 de febrero de 2.004, en el procedimiento nº 9301/03 seguido a instancia de DOÑA Melisa representada por su madre Doña María Inés contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Roj: ATS 4635/2005 - ECLI:ES:TS:2005:4635A
Id Cendoj: 28079140012005200703
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1454/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Ramón Martínez Garrido
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Abril de dos mil cinco.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 13 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 16 de octubre de 2002, en el procedimiento nº 169/02 seguido a instancia de Mariana, Carolina y Roberto contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MAPERTRANS, S.A. y empresa de transportes AUTOCAMIONES, S.A., FRATERNIDAD MUPRESA y CYCLOPS, sobre viudedad, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 5 de enero de 2004, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 13 abril de 2004 se formalizó por la Letrada D^a Gloria Roset Soler en nombre y representación de Mariana y OTROS, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 27 de enero de 2005 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras muchas, de 27 y 28 de enero de 1992, 14 de octubre de 1997, 23 de septiembre de 1998, 10 de marzo de 2000, 17 de octubre de 2003, 30 de enero y 26 de noviembre de 2004).

La parte recurrente plantea dos materias de contradicción: en primer lugar, pretende la aplicación de la doctrina jurisprudencial que ha venido interpretando de forma flexible el requisito de estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante; y en segundo lugar, interesa que el fallecimiento del causante sea considerado como accidente de trabajo a los efectos de la falta de carencia para causar derecho a las prestaciones.

En la sentencia recurrida consta probado que el causante estuvo sin trabajar desde el año 1981 hasta 1986 y que en este último año prestó servicios durante cuatro meses, sin que volviese a cotizar desde el 31-5-86, percibiese prestaciones por desempleo ni figurase inscrito como demandante de empleo. El fallecimiento tuvo lugar el 7-12-88 en las inmediaciones de una empresa dedicada a la venta y reparación de camiones y sitio habitual de encuentro entre los profesionales del sector de transportes, a donde había acudido para acompañar a un amigo que iba a hacer gestiones de compra de un camión. La causa de la muerte fue infarto y consta que el fallecido había sufrido tres meses antes una angina de pecho, habiéndose encontrado en el bolsillo un medicamento indicado para tratamiento sublingual en caso de infarto. El juez de instancia ha desestimado íntegramente la demanda y la Sala, sin entrar en el fondo del asunto, confirma tal pronunciamiento debido a la defectuosa interposición del recurso de suplicación, que no se ajusta en absoluto a lo prevenido por el art. 194 LPL.

Los recurrentes alegan como sentencias de contraste las de esta Sala de 18 de junio de 2001 y de 22 de octubre de 1999, y aunque han seleccionado esta última siendo dos los puntos de contradicción, es irrelevante porque no hay contradicción con ninguna de ellas dados los términos en que resuelve la Sala de Cataluña.

La primera de las sentencias reconoce las prestaciones por muerte y supervivencia en un supuesto de alcoholismo crónico padecido meses antes del fallecimiento, aplicando la doctrina que entiende cumplido el requisito del alta cuando «la enfermedad que determina la muerte se inició bastante antes de producirse la baja en la Seguridad Social, ya que es explicable que en tal circunstancia se hayan descuidado los resortes legales prevenidos para continuar en alta».

En cuanto a la sentencia de 22 de octubre de 1999, declara la contingencia de accidente de trabajo en relación con un fallecimiento producido, de modo repentino e imprevisto, por la ingestión de sustancias estupefacientes que originaron una embolia pulmonar.

Las alegaciones formuladas destacan las semejanzas entre esta última sentencia y el supuesto resuelto por la recurrida pero sin hacer referencia alguna a los extremos concretos expresados en la anterior providencia, de modo que no alteran en absoluto la causa de inadmisión apreciada por la Sala.

SEGUNDO.- De conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a Gloria Roset Soler, en nombre y representación de Mariana y OTROS contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 5 de enero de 2004, en el recurso de suplicación número 1657/04, interpuesto por Mariana y OTROS, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 13 de los de Barcelona de fecha 16 de octubre de 2002, en el procedimiento nº 169/02 seguido a instancia de Mariana, Carolina y Roberto contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MAPERTRANS, S.A. y empresa de transportes AUTOCAMIONES, S.A., FRATERNIDAD MUPRESA y CYCLOPS, sobre viudedad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Documento TOL867.322**Jurisprudencia**

Cabecera: Interpretación flexible de la inscripción continuada como demandante de empleo como situación asimilada al alta a efectos de reconocimiento del derecho a una pensión de incapacidad permanente (art.138.1 LGSS, en relación con el 124). Falta de contradicción.

Jurisdicción: Social

Ponente: Milagros Calvo Ibarlucea

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 18/11/2004

Tipo Resolución: Auto

Sala: Cuarta

Sección: Primera

Número Recurso: 1843/2004

<http://www.tirantonline.com>

ENCABEZAMIENTO: Procedimiento: **Social**

AUTO:

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Noviembre de dos mil cuatro.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 6 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 21 de mayo de 2002, en el procedimiento nº 208/02 seguido a instancia de DON Alexander contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre reclamación de invalidez, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 4 de marzo de 2004, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 14 de mayo de 2.004 se formalizó por el Letrado Don Enrique Suñer Ruano, en nombre y representación de INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 20 de julio de 2.004 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 y 28 de enero de 1992, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, 23 de septiembre de 1998, 30 de junio de 1999, 2 de julio, 28 de septiembre de 1999 y 29 de enero de 2004, entre otras muchas).

En el presente recurso se cuestiona la interpretación flexible de la inscripción continuada como demandante de empleo, como situación asimilada al alta a efectos de reconocimiento del derecho a una pensión de incapacidad permanente (art.138.1 LGSS, en relación con el 124), invocándose como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 22 de noviembre (rec. 9095/1999). La sentencia recurrida reconoce, según consta en el hecho probado séptimo, que el demandante no permaneció inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo desde el 21 de mayo de 1992, ya que aparte de pequeñas interrupciones, existe un período de un año, en concreto de 21/07/1999 hasta el 14/07/2000, durante el que no renovó su demanda de empleo, no obstante ello, considera que no existe voluntad de desvinculación con el sistema de Seguridad Social, porque, también, consta que en agosto de 1999 sufrió síndrome de abstinencia alcohólica, así como diagnóstico de hepatopatía derivado de enolismo, lo que justifica esa interrupción en su inscripción, al ser la consecuencia de ello la grave alteración de su estado de salud.

Por el contrario, en el supuesto de la sentencia de contraste de la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de noviembre de 2000, no consta la circunstancia afectante a la alteración del estado de salud del trabajador, dado que en este supuesto de referencia el actor el 19 de febrero de 1997 solicita una pensión de incapacidad permanente, habiendo estado inscrito como demandante de empleo desde agosto de 1994 hasta enero de 1998, pero con una interrupción en su inscripción desde el 18 de octubre de 1991 hasta el 18 de febrero de 1992. Esta sentencia estima incumplida la exigencia de una situación de alta o asimilada, como consecuencia de la referida interrupción en la inscripción como desempleado.

Las dolencias padecidas y la circunstancia afectante al estado de salud mental y física que afecta al trabajador en el caso enjuiciado, junto con el hecho de que el mismo cumple el requisito de carencia genérica, al acredita más de 15 años cotizados, no acontecen en el supuesto examinado en la sentencia de contraste, lo que determina la inadmisión del presente recurso de casación unificadora, porque las diferencias apuntadas no pueden considerarse accesorias, toda vez que son las que condicionan, precisamente, la interpretación flexible del cuestionado requisito legal de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social.

La entidad recurrente insiste en el trámite de alegaciones de la existencia de identidad, pero ésta, como se ha razonado no puede apreciarse, sin que lo manifestado desvirtúe los argumentos anteriormente expuestos, por lo que procede su rechazo.

SEGUNDO.- Por todo lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal sin que proceda imponer a la parte recurrente las costas del presente recurso tenor del art. 222.2 LPL.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Enrique Suñer Ruano en nombre y representación de INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 4 de marzo de 2.004, en el recurso de suplicación número 3153/03, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Barcelona de fecha 21 de mayo de 2.002, en el procedimiento nº 208/02 seguido a instancia de DON Alexander contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre reclamación de invalidez.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

EL CÓMPUTO DEL PERÍODO DE CARENCIA

Roj: ATS 12254/2013
Id Cendoj: 28079140012013202435
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 938/2013
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: José Manuel López García de la Serrana
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Noviembre de dos mil trece.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 14 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 20 de diciembre de 2011, en el procedimiento nº 1017/2008 y acumulados seguido a instancia de INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra D. Gabino, D^a Marcelina, D. Narciso, D. Jose Antonio, D. Antonio y AYUNTAMIENTO DE GALAPAR, sobre pensión de viudedad y orfandad, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por los codemandados D. Gabino, D. Narciso, D. Jose Antonio y D. Antonio, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 28 de diciembre de 2012, que desestimaba los recursos interpuestos y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 25 de marzo de 2013, se formalizó por el letrado D. Francisco Javier Angulo Fernández en nombre y representación de D. Gabino, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 19 de septiembre de 2013, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de relación precisa y circunstanciada y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- De acuerdo con el artículo 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219. Este requisito lo viene exigiendo la Sala IV en numerosas sentencias, las más recientes, de 28 de junio de 2011 (R. 2431/2010), 12 de julio de 2011 (R. 2482/2010), 21 de septiembre de 2011 (R. 3524/2010) y 13 de octubre de 2011 (R. 4019/2010). Según el artículo 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para interponer el recurso, siendo criterio doctrinal en tal sentido que el incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social constituye un defecto insubsanable (sentencias, entre otras, de 28 de junio de 2006, R. 793/2005, y 21 de julio de 2009, R. 1926/2008).

Esta exigencia no se cumple en el escrito de interposición del recurso, pues la parte recurrente no ha realizado un análisis comparativo de los elementos que delimitan la identidad de las controversias (objeto y fundamento

de las pretensiones y hechos probados de las sentencias) y de la divergencia de los pronunciamientos como requiere la norma legal y nuestra doctrina.

SEGUNDO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

La sentencia impugnada confirma la dictada en la instancia, que ha estimado la principal petición en la que la Entidad Gestora solicitaba que se dejaran sin efecto las resoluciones del INSS de 2005 y 2008 por las que se reconocieron pensiones a favor de los demandados, condenando a reintegrar las cantidades que se señalan por las pensiones de viudedad y orfandad indebidamente cobradas. La trabajadora murió el 12/10/05 a consecuencia de un infarto sufrido en el parto de su último hijo. El INSS reconoció en 2005 y 2008 sendas pensiones de viudedad y orfandad al cónyuge, al excónyuge y a los hijos de la fallecida. Ésta prestó servicios a lo largo de su vida laboral, en distintas empresas, acreditándose en los últimos cinco años de cotización, es decir, de octubre de 2000 a octubre de 2005, un total de 386 días efectivamente cotizados al RGSS, que sumados a los 63 días que le correspondían por prorrateo de pagas extras, totalizan 449 días. No acredita a lo largo de su vida laboral, la carencia genérica exigible de quince años (5475 días) sino, de acuerdo con el informe de cotización, un total de 514 días.

Las partes demandadas sostienen en suplicación que no es exigible el plazo genérico de cotización de los 500 días en el periodo de los últimos cinco años, al ser la causa del fallecimiento la situación de embarazo de riesgo complicado por un estado de ansiedad de carácter laboral y que resulta de aplicación para el cómputo del periodo de carencia la «teoría del paréntesis». La Sala desestima ambos razonamientos, por no haberse probado que la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, y por devenir inaplicable la doctrina del paréntesis asentada en la sentencia del Tribunal Supremo de 07/02/00. A tal efecto, razona que no es posible aplicar al caso enjuiciado tal doctrina pues la causante se encontraba de alta al tiempo del fallecimiento por lo que dicha fecha debe actuar como «dies a quo» para el cómputo del periodo de carencia.

La sentencia que se han tenido por seleccionada como contradictoria, es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1 de octubre de 2010 (R. 2594/2007). En ésta se estima el recurso de suplicación interpuesto por la viuda, solicitando la prestación de viudedad, en un supuesto en el que la Sala afirma probado que el causante era alcohólico crónico, lo que le produjo un muy grave y progresivo deterioro hasta causarle el fallecimiento, que a juicio del Tribunal permite retrotraer el cómputo de la carencia al 19/10/98, periodo en el que consta que sí había completado el periodo de cotización de 500 días dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento, habiéndose el 20 de octubre de ese año inscrito como demandante de empleo, aunque posteriormente no renovaría la demanda de empleo.

Del juicio comparativo entre la sentencia impugnada y la que se ha tenido por seleccionada para el contraste se deduce que no son contradictorias. En particular, la referencial considera probado, y resulta determinante para reconocer la prestación de viudedad, que la falta de renovación de la demanda de empleo del trabajador obedeció a su grave y progresivo deterioro producido por alcoholismo crónico hasta causarle el fallecimiento, lo que a juicio del Tribunal permite retrotraer el cómputo de la carencia a una fecha, en el que consta que sí había completado el periodo de cotización de 500 días; mientras que en la recurrida no figuran tales circunstancias, sino que la trabajadora al tiempo de su fallecimiento se encontraba de alta y no reunía el mínimo de 500 días cotizados en los últimos cinco años.

Por otra parte, la aplicación de la doctrina del paréntesis no fue planteada en suplicación por la parte ahora recurrente, Sr. Gabino, sino por el otro recurrente, Sr. Narciso, por lo constituye una cuestión nueva a los efectos del presente recurso.

TERCERO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Francisco Javier Angulo Fernández, en nombre y representación de D. Gabino contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 28 de diciembre de 2012, en el recurso de suplicación número 2550/2012, interpuesto por D. Gabino, D. Narciso, D. Jose Antonio, D. Antonio, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 14 de los de Madrid de fecha 20 de diciembre de 2011, en el procedimiento nº 1017/2008 y acumulados seguido a instancia de INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra D. Gabino, D^a Marcelina, D. Narciso, D. Jose Antonio, D. Antonio y AYUNTAMIENTO DE GALAPAR, sobre pensión de viudedad y orfandad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 5941/2013
Id Cendoj: 28079140012013201168
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2329/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Jesús Souto Prieto
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Mayo de dos mil trece.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS SOUTO PRIETO.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 3 de los de Toledo se dictó sentencia en fecha 13 de julio de 2011, en el procedimiento nº 274/2011 seguido a instancia de Dª Gloria contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión de viudedad, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en fecha 24 de mayo de 2012, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 5 de julio de 2012, se formalizó por la letrada Dª Margarita Romeral Gil en nombre y representación de Dª Gloria, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 31 de enero de 2013, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y

1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

La sentencia impugnada confirma la dictada en la instancia, que ha desestimado la demanda interpuesta sobre pensión de viudedad, que el INSS había denegado por no hallarse el causante en alta o situación asimilada al alta en la fecha del fallecimiento, ni ser pensionista de incapacidad jubilación en la modalidad contributiva, ni en situación de invalidez provisional; por no haber completado el periodo de cotización de quince años; ni reunir un periodo de cotización de 500 días dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento. El causante tenía reconocido un grado de minusvalía del 72% y era pensionista de invalidez no contributiva desde el 01/06/02. Falleció el 15/07/10 y había estado en situación asimilada al alta hasta el 28/05/99, en que se extinguió el subsidio de desempleo, contabilizando un total de 5.145 días cotizados hasta esa fecha. La Sala considera que si bien se cumple el requisito del alta o situación asimilada a la del alta, pues tenía a la fecha del fallecimiento una incapacidad permanente no contributiva, no reúne el requisito de la carencia exigible, que será la de 500 días inmediatamente anteriores, no a la fecha del fallecimiento sino a aquella en que cesó la obligación de cotizar, que es la fecha de reconocimiento de la incapacidad no contributiva, porque computa 5.145 días cotizados hasta el 28/05/99. Y—continúa— sin que pueda aplicarse la teoría del paréntesis, al no existir elementos fácticos que permitan conocer si durante el periodo de 28/05/99 a 01/06/02 concurre alguna circunstancia que permite explicar la ausencia de cotización durante el mismo.

Contra esta sentencia interpone la esposa del fallecido recurso de casación para unificación de doctrina, aportando como sentencia de contraste la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1 de octubre de 2010 (R. 2594/2007). En ésta se estima el recurso de Suplicación interpuesto por la viuda, solicitando la prestación de viudedad, en un supuesto en el que la Sala afirma probado que el causante era alcohólico crónico, lo que le produjo un muy grave y progresivo deterioro hasta causarle el fallecimiento, que a juicio de la Sala permite retrotraer el cómputo de la carencia al 19/10/98, periodo en el que consta que sí había completado el periodo de cotización de 500 días dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento, habiéndose el 20 de octubre de ese año inscrito como demandante de empleo, aunque posteriormente no renovaría la demanda de empleo.

Del juicio comparativo entre la sentencia impugnada y la de contraste se deduce que no son contradictorias. En particular, mientras que en la recurrida no queda acreditado que el causante cumpliera el mínimo de días cotizados, ni que la falta de renovación de la demanda de empleo se debiera a imposibilidad que explicara su ausencia de cotización, estos dos aspectos se consideran probados y determinantes en la sentencia de contraste para reconocer la prestación de viudedad.

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada D^a Margarita Romeral Gil, en nombre y representación de D^a Gloria contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de fecha 24 de mayo de 2012, en el recurso de suplicación número 400/2012, interpuesto por D^a Gloria, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Toledo de fecha 13 de julio de 2011, en el procedimiento nº 274/2011 seguido a instancia de D^a Gloria contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión de viudedad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 1271/2013
Id Cendoj: 28079140012013200110
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1661/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Milagros Calvo Ibarlucea
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintidós de Enero de dos mil trece.
Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. MARÍA MILAGROS CALVO IBARLUCEA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 26 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 17 de mayo de 2010, en el procedimiento nº 672/2009 seguido a instancia de D^a Enma contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la codemandada INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 3 de febrero de 2012, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 10 de mayo de 2012, se formalizó por la letrada D^a María Carmen Palacio Giral en nombre y representación de D^a Enma, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 8 de noviembre de 2012, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007

y 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

La sentencia impugnada revoca la dictada en la instancia —que había declarado a la actora en situación de incapacidad permanente absoluta por enfermedad común— y desestima la demanda. El INSS había denegado a la demandante, afiliada a la Seguridad Social, y de profesión especialista de artes gráficas, la petición de invalidez, por no reunir el periodo mínimo de cotización. La Sala fundamenta su decisión en que la accionante no acredita el periodo mínimo de cotización de 15 años, con la distribución prevista en el apartado 2.b) del nº 2 del artículo 138 de la LGSS, pues, según figura en el hecho probado 5º, la carencia sólo alcanza 3.495 días, necesitando 5475 (15 años); y tampoco se encuentra de alta o situación asimilada al alta, ya que en el relato fáctico se evidencian varios y extensos periodos de alejamiento del mercado laboral y de los resortes de protección del sistema de la Seguridad Social: más de tres años entre enero de 2004 a junio de 2007 y casi otros dos desde junio de 2007 a marzo de 2009. Y, en cuanto a su salud, el hecho probado 8º recoge que desde 1995 está en tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia paranoide, pero los episodios agudos le han venido remitiendo con el tratamiento, mientras que el trastorno obsesivo compulsivo no se le ha diagnosticado hasta el 2006. Por lo tanto —concluye— en un periodo de casi siete años (del 2002 al 2009) apenas ha permanecido seis meses trabajando o inscrita en el INEM, esto es, incorporada al mercado laboral, sin que en sus patologías alcancen a justificar el alejamiento.

La parte actora interpone recurso de casación para la unificación de la doctrina, articulando dos motivos, relativos a la situación de alta o asimilada al alta, y a la carencia precisa para la obtención de la prestación interesada.

1º/ La sentencia propuesta para el primer motivo, del Tribunal Supremo de 16/12/99 (R. 1789/99), recoge en su relato de hechos probados que el actor había sido despedido el 23/10/91 y estuvo percibiendo prestaciones por desempleo hasta el 23/10/93 y el subsidio, hasta el 23/10/95, permaneciendo inscrito como demandante de empleo desde esa fecha hasta el 11/1/96 en que fue baja por no renovación de la demanda; posteriormente, se inscribió de nuevo el 10/10/96 y ya permaneció en esa situación salvo un breve intervalo de tres días comprendido entre el 13 y el 16 de octubre. A consecuencia de un infarto cerebral sufrido el 13/1/97, solicitó pensión de invalidez permanente el 23 de julio de ese año y la EVI emitió dictamen el 14/10/97 reconociendo secuelas de hiperlipemia mixta tipo II-B y antecedentes de etilismo crónico. La entidad gestora denegó la prestación alegando la falta de alta o situación asimilada al alta habida cuenta, por una parte, de la interrupción de nueve meses en la demanda de empleo y, por otra, que el demandante no se encontraba inscrito en la Oficina de Empleo a la fecha del hecho causante, si bien la Sala recondujo el debate a una única cuestión: la del criterio a aplicar respecto al requisito del alta pues si se efectuaba una interpretación flexible, dicho criterio era válido tanto para la interrupción de nueve meses como para el lapso de tres días durante el cual se había emitido el dictamen de la EVI. En la sentencia fueron considerados como datos relevantes el dilatado periodo de tiempo durante el cual el trabajador estuvo percibiendo prestaciones por desempleo o bien inscrito como demandante, que evidenciaba un «animus laborandi», así como su situación de etilismo crónico que podía justificar el abandono en un determinado momento de los trámites burocráticos necesarios para permanecer en la Oficina de Empleo; circunstancias que conducían a una interpretación flexible de los arts. 124, 125 y 138 LGSS en relación con la Disposición Adicional 2ª del RD 1799/85 y al reconocimiento, por consiguiente, de la invalidez solicitada.

De lo expuesto se desprende que las sentencias no son contradictorias pues los supuestos de hecho en ellas contemplados no son iguales. En la referencial, la trayectoria del actor desde que es despedido pone de manifiesto un interés por incorporarse a la vida laboral al permanecer en situación de paro involuntario a lo largo de casi dos años, interrumpidos únicamente por un plazo de seis meses, lo que no acredita una cesación en el «ánimus laborandi», justificada por el cuadro de alcoholismo que presenta; situación que difiere de la descrita en la sentencia recurrida, donde el periodo de falta de inscripción en la oficina de empleo es extraordinariamente amplio en relación con el que figura en el pronunciamiento de contraste.

2º/ La sentencia propuesta para segundo motivo, del Tribunal Supremo de 18/05/10 (R. 3495/09), reconoce al actor una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común. Al examinar las sentencias comparadas esta Sala aprecia la inexistencia de contradicción respecto del problema de la carencia porque ambas la calculan haciendo coincidir el hecho causante con el momento en que se entienden consolidadas las dolencias, no en la fecha del dictamen de la UVMi. Por el contrario, la Sala sí considera que hay contradicción en el sistema de cálculo de los periodos cotizados según se compute o no el periodo de incapacidad temporal posterior al hecho causante, fijado en la fecha de inicio de dicho proceso, llegando a la conclusión de que si bien la carencia para la incapacidad permanente se cubre con las cotizaciones anteriores al hecho causante, excepcionalmente pueden computarse las posteriores cuando este coincide con el inicio de la baja médica.

Tampoco las sentencias comparadas son contradictorias dado que deciden sobre cuestiones distintas derivadas de supuestos también diferentes. En particular, en el pronunciamiento referencial la controversia se concreta en decidir si es computable o no un periodo del proceso de IT a efectos de carencia genérica; cuestión que no se suscita la sentencia recurrida, donde no consta ni en el relato de hechos probados ni en la fundamentación jurídica, periodo alguno en que la actora haya permanecido en situación de IT.

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada D^a María Carmen Palacio Giral, en nombre y representación de D^a Enma contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 3 de febrero de 2012, en el recurso de suplicación número 5143/2010, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 26 de los de Barcelona de fecha 17 de mayo de 2010, en el procedimiento nº 672/2009 seguido a instancia de D^a Enma contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL565.133

Jurisprudencia

Cabecera: Incapacidad permanente: período de carencia; cómputo de las cotizaciones ficticias correspondientes a la prestación por incapacidad temporal no agotada.

Jurisdicción: Social

Ponente: Juan Francisco García Sánchez

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 17/01/2005

Tipo Resolución: Sentencia

Sala: Cuarta

Sección: Primera

Número Recurso: 1366/2004

Supuesto de hecho: Recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en suplicación, con fecha 10 de febrero de 2004, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 4 de los de Granada, de fecha 12 de mayo de 2003.

RESUMEN:

Se discute cuándo deben computarse, a efectos de incapacidad permanente, las cotizaciones correspondientes al período de una incapacidad temporal no agotada en su máxima duración. El Tribunal Supremo, en base a doctrina previa, reitera que sólo en el caso de que el trabajador estuviera percibiendo la prestación económica por incapacidad temporal.

COMENTARIO:

La STS de 17 de enero de 2005, siguiendo doctrina previa (SSTS de 2 y 3 de febrero, 10 de marzo, 14 de mayo y 2 de diciembre de 2004), reitera que únicamente en el supuesto de que el trabajador se encuentre percibiendo el subsidio por incapacidad temporal puede verse beneficiado del mecanismo de cotizaciones ficticias previsto en el art. 4.4 del Real Decreto 1.799/1985, de 2 de octubre, en la redacción del Real Decreto 4/1998, para el cómputo de carencia necesario para causar derecho a prestación por incapacidad permanente, hasta completar los dieciocho meses que se establecen como duración máxima de una situación de incapacidad temporal.

ENCABEZAMIENTO:

Número de Recurso: **1366/2004**

Procedimiento: **Social**

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Enero de dos mil cinco.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL representado por el Letrado Sr. Cea Ayala contra la Sentencia dictada el día 10 de Febrero de 2004 por la Sala de lo Social con sede en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Recurso de suplicación 2447/03, que a su vez había sido ejercitado frente a la Sentencia que con fecha 12 de Mayo de 2003 pronunció el Juzgado de lo Social número cuatro de Granada en el Proceso 698/02, que se siguió sobre prestación, a instancia de DON Gerardo contra el mencionado recurrente.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JUAN FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- El 10 de Febrero de 2004 la Sala de lo Social con sede en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia, en virtud del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del

Juzgado de lo Social nº 4 de Granada, en los autos nº 698/02, seguidos a instancia de DON Gerardo contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre prestación. La parte dispositiva de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es del tenor literal siguiente: «Estimamos el recurso de Suplicación, interpuesto por D. Gerardo. Anulamos la sentencia dictada por el Juzgado de lo social número cuatro de los de Granada en fecha doce Mayo de dos mil tres, en autos nº 698/02 seguidos a su instancia, y declaramos que el actor reúne el período mínimo de cotización, devolviéndose las actuaciones al Juzgado de procedencia a fin de que dicte nueva sentencia en la que entre a resolver sobre las cuestiones que suscitan en la demanda promovida, con entera libertad de criterio».

SEGUNDO.- La sentencia de instancia, de 12 de Mayo de 2003, dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Granada, contenía los siguientes hechos probados: «1º.- La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en resolución de 2 de abril de 2.002 (Expt. 2002-501750- 03), denegó al actor D. Gerardo, titular del D.N.I. NUM000, domiciliado para notificaciones en Granada, C/ DIRECCION000, NUM001 NUM002 NUM003, afiliado a la S. Social con el nº NUM004 del RGSS, peón de la construcción y con base reguladora de 533.89 €, la prestación de incapacidad permanente «por no reunir el periodo mínimo de cotización exigido para causar pensión de incapacidad permanente, según lo establecido en el primer párrafo del artículo 138.2 y en la disposición Adicional Octava número 1 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29/06/94). «Carencia exigida 1.825 días, carencia acreditada 1.474 días. Obra a los folios 48 y sgtes. Informe de cotización....2º.- Disconforme con el contenido de la resolución denegatoria, interpuso reclamación previa en 22 de mayo de 2002, que fue desestimada mediante acuerdo expreso de la Entidad Gestora de 18 de junio de 2.002, por lo que formuló la correspondiente demanda ante el Decanato de los Juzgados de lo Social, en 31 de julio de 2002, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado. Según obra en el expediente el Sr. Gerardo falleció el 12.X.2002 (F. 57) manteniendo la acción su esposa Dª. Leonor. En el Informe del Equipo de Valoración de Incapacidades, que sirvió de base para dictar la resolución, se determinaron como lesiones: Diabetes Mellitus Insulino- dependiente. Pseudoquiste pancreático secundario a pancreatitis aguda alcohólica. Ex ADVP en tratamiento con metadona. EPOC en estadio clínico funcional II. Hernia de hiato. Disnea de esfuerzo, tabaquismo. Irregular control glucémico. Molestias dispépticas. Proceso pancreático que puede cursar con agudizaciones. No repercusión estado general. Citado cuadro se reproduce en la resolución denegatoria y es el que se objetiva a los fines del procedimiento».

El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: «Desestimo la demanda interpuesta por DON Gerardo (hoy fallecido), y mantenida por su viuda Dª Leonor, contra el INSS, y absuelvo a citado organismo de las pretensiones deducidas en su contra».

TERCERO.- El Letrado Sr. Cea Ayala, mediante escrito de 1 de Abril de 2004, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 18 de Enero de 2002. SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 138.2.b) de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el artículo 4.4º de Real Decreto 1799/85, de 2 de Octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 4/98, de 9 de enero.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 14 de Abril de 2004 se tuvo por personado al recurrente y por interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.

QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 11 de Enero de 2005, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El actor en el proceso de origen, afiliado al Régimen General de la Seguridad Social como peón de la construcción por cuenta a ajena, solicitó prestación por incapacidad permanente, que en vía administrativa le fue denegada por reunir sólo 1.474 días cotizados, necesitando 1.825 días. Formuló aquél demanda con la pretensión de que se le computara como efectivamente cotizado el período de 18 meses, plazo máximo de duración de la incapacidad temporal (con lo cual rebasaba la carencia legalmente exigible), siendo desestimada la demanda por el Juzgado, pero la decisión de éste resultó revocada por la Sentencia dictada el 10 de Febrero de 2004 por la Sala de lo Social con sede en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra la que la Entidad Gestora ha interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.

Como resolución de contraste aporta el recurrente la Sentencia dictada el día 18 de Enero de 2002 por la homónima Sala y Tribunal de Cataluña, cuya certificación obra en autos con expresión de su firmeza. Enjuició ésta el supuesto de un trabajador que no reunía 1.825 días cotizados para causar prestación por incapacidad permanente, pero que sí los habría reunido en el caso de que se le computara como cotizado el período máximo de duración de la incapacidad temporal. En este caso, la Sala resolvió que no procedía tener en cuenta como cotizado este período.

Concurre, por consiguiente, entre ambas resoluciones -y esta es también la opinión del Ministerio Fiscal- la contradicción requerida por el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) como condición de admisibilidad de este excepcional recurso. Por ello, procede resolver el fondo de lo debatido.

SEGUNDO.- La doctrina en la materia ya ha sido unificada por nuestras Sentencias de fechas 2 y 3 de Febrero de 2004 (Recursos 4806/02 y 1525/03 respectivamente), así como por las de 10 de Marzo de 2004 (Recurso 2429/03) y 15 de Mayo de 2004 (Recurso 3162/03), en consonancia con la resolución referencial. El mismo criterio debemos seguir ahora, no sólo por elementales razones de seguridad jurídica (art. 9º.3 de la Constitución española), sino además por resultar ello acorde con el espíritu y finalidad del recurso de casación para la unificación de doctrina. Las razones en las que nuestras reseñadas resoluciones se apoyaron las ofrecemos a continuación.

La sentencia recurrida, como se ha visto, estimó la pretensión de la actora y aplicó los 18 meses de cotización que correspondían al tiempo máximo teórico de duración de la incapacidad temporal que nunca llegó a percibir la actora, y ello por entender que la nueva redacción del artículo 4.4º del Real Decreto 1799/1985 no había cambiado sustancialmente en su alcance anterior, lo que exigía en todo caso referirse al contenido del artículo 128 de la LGSS para determinar qué había de entenderse por incapacidad temporal. Para mayor claridad, conviene recordar que el invocado número 4º del artículo 4 del referido Real Decreto 1799/85, antes de la modificación legal decía lo siguiente: «4. En el caso de trabajadores que no hayan llegado a agotar el período máximo de duración señalado para la situación de incapacidad laboral transitoria, incluida su prórroga, los días que falten para agotar dicho período se asimilarán a días cotizados a efectos del cómputo del período mínimo de cotización exigido para causar derecho a la pensión de invalidez permanente.».

La doctrina de esta Sala interpretó el referido precepto de una manera amplia o extensiva en una línea uniforme contenida en sentencias como las de 26 de marzo y 22 de septiembre de 1.997 (recursos 2734/1996 y 559/1997) 6 de marzo de 1.998 (recurso 3292/1997) y 18 de enero de 1.999 (recurso 3120/1997), en las que se decía que: «en la interpretación de los preceptos citados, debe estarse a la doctrina unificada ya establecida por esta Sala.... pudiendo entenderse que ... una interpretación racional y sociológica acorde con lo prevenido en el art. 3.1 del Código Civil, teniendo en cuenta también la finalidad del régimen público de la Seguridad Social que consiste en garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41 de la Constitución), permite sostener un criterio distinto en un supuesto, como el presente, en el que el actor, aunque quisiera, no podría acceder a la situación de incapacidad laboral transitoria prevista en el art. 126.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social de 1974, no obstante padecer las graves enfermedades que se describen en el relato fáctico, dado que no se encontraba prestando sus servicios a ninguna empresa, en el momento de su solicitud, según consta en los autos, lo que evidentemente no podía efectuar, dada precisamente la entidad de aquellas dolencias, por lo que solicitó directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social la declaración de invalidez permanente, lo que es factible conforme a lo prevenido en el artículo 132.5 LGSS/74».

Ya la última de las sentencias citadas, la de 18 de enero de 1.999 (recurso 3120/1997), en supuesto similar al que dio origen al presente recurso, se decía que «... hay que advertir que esta doctrina no resulta afectada por lo dispuesto en la Disposición Adicional 7ª del Real Decreto 4/1998 de revalorización de pensiones para dicho año por ser el hecho causante en el presente caso anterior a dicha norma...».

La nueva redacción del precepto es la siguiente: «4.- En el caso de trabajadores que, encontrándose en situación de incapacidad temporal o de prórroga de sus efectos, no hayan llegado a agotar el periodo máximo de duración de la misma, incluida su prórroga, establecida en el párrafo a), apartado 1 del artículo 128 de la Ley General de la Seguridad Social, los días que falten para agotar dicho periodo máximo se asimilarán a días cotizados a efectos del cómputo del periodo mínimo de cotización exigido para causar derecho a la pensión de incapacidad permanente».

Como se puede apreciar, es fundamentalmente la expresión «encontrándose en situación de incapacidad temporal o de prórroga de sus efectos» la novedad de la disposición, junto con la remisión directa al artículo 128.1 a) LGSS para determinar la duración máxima de la referida incapacidad y lo que ha de resolverse ahora

es si la nueva redacción ha supuesto un cambio normativo, como entiende la sentencia de contraste, de manera que sólo si el trabajador se encuentra percibiendo el subsidio a que se refieren los artículos 130 y 131 LGSS puede verse beneficiado por la aplicación del sistema de cotizaciones ficticias hasta completar los 18 meses que como máximo corresponden a la duración de la incapacidad temporal, o, por el contrario, como se sostiene en la sentencia recurrida, los términos de la nueva norma nada han cambiado en relación con la situación anterior y el referido beneficio ha de continuar aplicándose en la misma forma anterior a la reforma.

TERCERO.- La doctrina ajustada a derecho se encuentra en la sentencia de contraste, pues la nueva expresión que exige la existencia de una situación de incapacidad temporal o de prórroga de sus efectos, pone de manifiesto la necesidad de que el beneficiario se encuentre no sólo en baja médica expedida por los servicios oficiales de la Seguridad Social e incapacitado para el trabajo, como exige el artículo 128.1 a) de la LGSS, sino que además se halle dentro del sistema de la prestación, pues en otro caso no se trataría realmente de incapacidad temporal, ni podría técnicamente hacerse referencia a las prórrogas de la situación, pues éstas solo tienen sentido en relación con el propio percibo del subsidio a que se refiere el artículo 129 de aquella norma. La duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis de la incapacidad temporal, únicamente tiene sentido si se vincula con el percibo de la prestación. En otro caso, la norma no tendría que fijar límites temporales a una situación de incapacidad para el trabajo apreciada por los servicios médicos, que determina el derecho a la asistencia sanitaria -artículo 38.1 a)- pero no necesariamente al subsidio integrado en el propio concepto de la incapacidad temporal. En consecuencia, si en el caso de autos la actora no pudo llegar a percibir la prestación por incapacidad temporal, no puede decirse que estuviera en esa situación a los efectos de acogerse al beneficio previsto en el artículo 4.4º del R.D. 1799/85, computando ficticiamente como cotizados los días que le faltasen para completar el tiempo máximo de duración de la incapacidad o de su prórroga a efectos del cómputo del periodo mínimo de cotización para causar el derecho a la prestación de incapacidad permanente.

CUARTO.- Al haberse apartado de la doctrina correcta la Sentencia recurrida, procede casarla y, tal como establece el art. 226.2 de la LPL, resolver el debate planteado en suplicación, lo que comporta la procedencia de desestimar el recurso de esta última clase y, en consecuencia, confirmar la decisión del Juzgado. Sin costas (art. 233.1 de la LPL).

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la Sentencia dictada el día 10 de Febrero de 2004 por la Sala de lo Social con sede en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Recurso de suplicación 2447/03, que a su vez había sido ejercitado frente a la Sentencia que con fecha 12 de Mayo de 2003 pronunció el Juzgado de lo Social número cuatro de Granada en el Proceso 698/02, que se siguió sobre prestación, a instancia de DON Gerardo contra el mencionado recurrente. Casamos la Sentencia recurrida, anulando sus pronunciamientos, y resolvemos el debate planteado en suplicación en el sentido de desestimar el recurso de esta última clase, por lo que confirmamos la Sentencia del Juzgado. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Juan Francisco García Sánchez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Alcohol dependencia e incapacidad permanente

Roj: STS 3298/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3298
Id Cendoj: 28079140012014100350
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 392/2013
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Miguel Ángel Luelmo Millán
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a seis de Mayo de dos mil catorce.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representado y defendido por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social Doña María Angeles Lozano Mostazo, contra la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2012, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso de suplicación núm. 2309/2010, formulado frente a la sentencia de fecha 26 de marzo de 2010, dictada en autos 936/2009 por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Pontevedra, seguidos a instancia de DON Justiniano, contra dicho recurrente, sobre REVISION DE INVALIDEZ.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida DON Justiniano, representado y defendido por el Letrado D. Fernando Peche Villaverde.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. MIGUEL ÁNGEL LUELMO MILLÁN.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha 26 de marzo de 2010, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Pontevedra, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO: Estimando la demanda interpuesta por DON Justiniano contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, declaro al actor en situación de Gran Invalidez, por revisión de grado, condenando al demandado a estar y pasar por esta declaración y a que abone al actor la prestación económica correspondiente en cuantía del 150% de la base reguladora mensual declarada probada con los efectos legal y reglamentariamente establecidos».

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: «PRIMERO.- Don Justiniano, con D.N.I. NUM000 Nacido el día NUM001 de 1958, tiene reconocida la Incapacidad Permanente en Grado de Total para su profesión habitual derivada de enfermedad común por resolución de fecha 5 de mayo de 2006, con una base reguladora de 975,21 euros y por padecer las siguientes dolencias: hepatopatía crónica de origen alcohólico estadio A de CHILDPUGH. Anemia macrocítica. Trombopenia. Agenesia renal derecha izquierda sin alteraciones ecográficas datos de insuficiencia renal. Frente a la anterior resolución interpuso el actor reclamación previa y posterior demanda que fue desestimada por sentencia del Juzgado de lo Social N° 2 de Pontevedra de fecha 18 de enero de 2007 confirmada por otra del T.S.J. de Galicia de 28 de noviembre de 2007. SEGUNDO.- Solicitó el actor la declaración de incapacidad permanente absoluta por revisión de grado el día 16 de enero de 2008 siendo denegada su petición por no haber transcurrido el plazo de 2 años, presentando nueva solicitud el 20 de abril de 2008 siendo examinado por el E.V.I. y desestimada su petición por resolución de fecha 8 de agosto de 2008. Frente a esta resolución interpuso el demandante reclamación previa que fue desestimada en fecha 25 de septiembre de 2008 y posterior demanda que fue estimada por sentencia de este mismo Juzgado de fecha 13 de marzo de 2009, confirmada por sentencia del T.S.J. de Galicia de 4 de noviembre de 2009. Padecía el demandante en el momento de la declaración las siguientes dolencias: Hepatopatía crónica de origen alcohólica desde al menos 5.2005. El 1.7.2008 estadio B de Chile- Pugh. Último ingreso hospitalario en marzo

de 2007. Agenesia renal derecha. Contraindicada la exposición a tóxicos hepáticos. Se desaconseja la sobrecarga biomecánica abdominal. Cirrosis hepática en grado BC. Descompensación hidrópica (Ascitis) refractaria. Insuficiencia renal leve. Encefalopatía hepática grado III. Anemia ferropénica, secundaria a proceso crónico y pérdidas digestivas. Prurito generalizado. Síndrome artromialgias secundarias a hepatopatía. Cuadro residual: hepatopatía crónica de origen enólico estadio Child con episodios recurrentes de descompensación icterohidrópica, que precisan paracentesis evacuadoras. Gastroduodenitis erosiv. Trombopenia. TERCERO.- Por resolución del I.N.S.S. de 2 de abril de 2009 se revisó la prestación del demandante en virtud de la sentencia citada, estableciendo que el periodo mínimo para poder instar revisión de grado se establece en dos años, plazo propuesto por el E.V.I. en su reunión de 30 de marzo de 2009. En fecha 20 de agosto de 2009 el demandante solicitó la revisión de su situación, resolviendo el I.N.S.S. en fecha 21 de septiembre de 2009 que no procede la revisión por cuanto no ha transcurrido el periodo mínimo de revisión establecido, cumpliéndose el mismo el 29 de marzo de 2011, presentando el actor reclamación previa que fue desestimada en fecha 23 de octubre de 2009. CUARTO.- Padece el demandante las siguientes dolencias derivadas de enfermedad común: No AMC. Hepatopatía crónica de origen alcohólico, estadio Child C con episodios previos de descompensación icterohidrópica y ascitis de difícil control. A seguimiento en consultas de Digestivo y Paliativos. Úlcera duodenal previa. Pangastatitis. Pólipo adenomatoso colonico extirpado. Colitis inflamatoria en el 2005. Diverticulosis. Hemorroides. Agenesia renal derecha. Prostatismo. Cirugía de menisco. Extirpación de lipoma en espalda. Actualmente se encuentra prácticamente encamado. PS 3-4 apenas se levanta y precisa de ayuda y apoyo constante para la práctica totalidad de las actividades de la vida diaria, encontrándose en fase avanzada y terminal de su patología digestiva, exclusivamente a tratamiento sintomático. Presenta un síndrome constitucional avanzado con caquexia y anorexia extremas y episodios de descompensación hidrópica y asilados de desorientación. En las últimas semanas ha precisado importante ajuste de la analgesia así como un aumento de la desorientación con necesidad de reajuste de neurolépticos».

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó sentencia con fecha 21 de diciembre de 2012, en la que consta la siguiente parte dispositiva: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia de fecha 26-3-2010 dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Pontevedra en el Procedimiento nº 936-2019 sobre invalidez permanente, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia recurrida».

TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede Burgos, de fecha 29 de noviembre de 2012, así como la infracción de lo dispuesto en el art. 143.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de fecha 4 de noviembre de 2013, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

QUINTO.- Evacuado el trámite de impugnación, pasó todo lo actuado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminando en el sentido de considerar que el recurso deber ser desestimado.

SEXTO.- En Providencia de fecha 5 de marzo de 2014 y por necesidades de servicio se designó como nuevo Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Miguel Angel Luelmo Millan, señalándose para la votación y fallo del presente recurso el 29 de abril de 2014, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Recurre el INSS en casación unificadora la sentencia de suplicación que confirma la de instancia estimatoria de la demanda del trabajador accionante al que se declara en situación de gran invalidez por revisión de grado, condenando a dicho Instituto a estar y pasar por lo declarado y que abone al actor la prestación económica correspondiente en cuantía del 150% de la base reguladora mensual declarada probada con los efectos legal y reglamentariamente establecidos.

El recurso contiene tres «fundamentos», relativos a la contradicción alegada, a la infracción que dice cometida y al quebranto que entiende producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la

jurisprudencia, siendo susceptibles estos dos últimos de tratamiento conjunto al constituir el segundo un mero apéndice dialéctico conclusivo del anterior y ambos el auténtico y único motivo el recurso.

SEGUNDO.- En cuanto al inicial, la contradicción que considera se produce entre la sentencia recurrida y la de contraste, representada por la STSJ de Castilla y León (Burgos), de 29 de noviembre de 2012, podría parecer, en principio, que debe admitirse porque no se trata de determinar si es, o no, correcta la gran invalidez reconocida al trabajador sino si ese reconocimiento pudo, o no, producirse antes de que transcurriese el plazo para poder solicitar la revisión del grado de incapacidad inicialmente reconocido, que es lo que en ambos casos, en que los dos trabajadores tenían ya reconocida una incapacidad permanente absoluta (IPA), se resuelve con resultado opuesto, al pronunciarse la sentencia recurrida con base en su segundo fundamento de derecho en sentido favorable a dicha posibilidad y la de contraste en el contrario apoyándose en lo que razona en su tercer fundamento de derecho.

Ahora bien: tal y como señala el Ministerio Fiscal en su informe, «aunque la sentencia recurrida reconoce la revisión y la invalidez solicitada y la de contraste la deniega, no existe contradicción entre ambas sentencias ya que aplican la misma doctrina pero parten de hechos diversos porque la sentencia recurrida reconoce la revisión por valorar el órgano judicial la existencia de nuevas patologías mientras que la de contraste niega expresamente la aparición de nuevas dolencias».

En efecto: en ambas sentencias se cita la nuestra de 23 de abril de 2009 (rcud 2512/2008), señalándose en la recurrida que «en el supuesto de autos la aparición de patologías nuevas facilita el acceso a la revisión de grado sin sometimiento a plazo, lo que resulta de la comparación de las dolencias que la sentencia de instancia declara en los hechos probados segundo y cuarto y que se mantienen inmodificados», mientras que sobre dicha cuestión, la sentencia de referencia dice que en relación con las circunstancias que enumera nuestra mencionada sentencia, ninguna de ellas aparece en el caso *«pues el demandante, ya afecto a una situación de incapacidad permanente absoluta, no desarrolla trabajo remunerado alguno, no se ha producido error de diagnóstico ni han aparecido nuevas dolencias»*.

De lo expuesto se deduce que ambas resoluciones parten de la misma jurisprudencia y que si resuelven de modo opuesto es porque en la recurrida se aprecia la existencia de posteriores procesos morbosos que no se constatan en la de contraste, por lo que la diferencia en lo resuelto se halla justificada sobre la base de hechos distintos y, consecuentemente, no es apreciable la contradicción que se exige previamente para posibilitar el examen del recurso, lo que supone, en esta fase procesal, su desestimación.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Desestimamos el recurso de casación para la UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2012, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso de suplicación núm. 2309/2010, formulado frente a la sentencia de fecha 26 de marzo de 2010, dictada en autos 936/2009 por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Pontevedra, seguidos a instancia de DON Justiniano, contra dicho recurrente, sobre REVISION DE INVALIDEZ. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Organismo Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Miguel Angel Luelmo Millan hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL4.405.171

Jurisprudencia

Cabecera: Incapacidad permanente absoluta: no se reconoce. con las dolencias que padece el actor sólo es acreedor de reconocimiento en situación de incapacidad permanente total. Falta de contradicción.

Jurisdicción: Social

Ponente: María Lourdes Arastey Sahún

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 22/04/2014

Tipo Resolución: Auto

Sección: Primera

Número Recurso: 2822/2013

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintidós de Abril de dos mil catorce.

Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social N° 3 de los de Girona se dictó sentencia en fecha 24 de noviembre de 2011, en el procedimiento n° 1115/2010 seguido a instancia de DON Jacinto contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 16 de octubre de 2012, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 11 de octubre de 2013 se formalizó por la Letrada Doña Ana Cristina Mazariegos Aragón, en nombre y representación de DON Jacinto, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 5 de febrero de 2014 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que se efectuó por escrito del Procurador Don Federico Pinilla Romero. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo.

Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

La sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 16 de octubre de 2012 (Rec. 1654/2012), revoca la de instancia que había reconocido al actor en situación de incapacidad permanente absoluta para reconocerle en situación de incapacidad permanente total, padeciendo, según el informe del ICAM «Polineuropatía mixta alcohólica de carácter intenso», y según el hecho probado sexto: el actor, diagnosticado de dependencia al alcohol y al tabaco, realiza seguimiento en la Fundación Teresa Ferrer.

En noviembre de 2009 acude a Xarxa de Salut Mental, remitido por médico de familia y debido a los problemas relativos al consumo de alcohol. Sometido a tratamiento, desaparecieron los episodios de auto y hetero-agresividad, pero mantiene la sintomatología depresiva. Presenta, como cuadro de secuelas, una polineuropatía periférica mixta de predominio axonopático-sensitivo, de carácter intenso, de etiología tóxica/enólica. Presenta molestias derivadas de la polineuropatía atrofia muscular global en extremidades, con ataxia a la marcha y con hipestесias/hipopalestesia (alteración de la sensibilidad) distal en las inferiores. Según TAC craneal de marzo de 2009 presenta discretos signos de atrofia cerebral cortical, con deterioro cognitivo de posible origen tóxico (valorado por UVAMID IAS en mayo/2011), con persistencia de pérdida de memoria reciente. En exploración neuropsicológica del Servei de Demencies, de agosto de 2011, se evidencia un deterioro cognitivo que afecta de forma leve a las funciones superiores del actor, con enlentecimiento psicomotriz y del proceso de información bajo rendimiento en la fluencia fonémica, déficit de memoria verbal inmediata y diferida, en memoria visual diferida y en memoria de aprendizaje». Entiende la Sala que teniendo en cuenta las dolencias que padece el actor, puede desempeñar empleos que no le exijan grandes o medianos esfuerzos físicos o de tipo intelectual, ya que la atrofia muscular global en las extremidades y el deterioro cognitivo, con enlentecimiento psicomotriz y del proceso de información, está calificado de leve.

Contra dicha sentencia presenta recurso de casación para la unificación de doctrina el actor, por entender que con las dolencias que padece debe ser reconocido en situación de incapacidad permanente absoluta, para lo que invoca de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 26 de mayo de 2008 (Rec. 305/2008), que revocó la de instancia para reconocer al actor en situación de incapacidad permanente absoluta, tras admitir, por la vía de revisión de hechos probados, que las dolencias que en realidad padece el actor son: «1.-Cuadro neurológico consistente en alteración a nivel frontal (demencia fronto-temporal en etapas iniciales) que provoca deterioro cognitivo moderado con disfunción a nivel central y alteración de memoria, y funciones de organización y planificación. 2.-Cuadro psiquiátrico de años de evolución, consistente en trastorno depresivo mayor con mala respuesta a los distintos tratamientos; clínica de retraimiento, anhedonia, ánimo triste, insomnio. 3.- Polineuropatía sensitivo-motora, de probable origen diabético, con parestesias y pérdida de fuerza en extremidades». Entiende la Sala que teniendo en cuenta el conjunto de dolencias neurológicas y psiquiátricas, el actor no puede desempeñar ningún trabajo, máxime cuando la capacidad residual que presenta es de escasa entidad, pues su vigor físico se encuentra limitado por su edad, superior a los 60 años, así como por los efectos de la polineuropatía que presenta.

De lo relacionado se desprende que no puede apreciarse la existencia de contradicción entre las sentencia recurrida y la aportada como término de comparación, por cuanto no existe identidad en las dolencias padecidas por los actores de ambas sentencias, de ahí que en atención a las mismas, no puedan considerarse los fallos contradictorios cuando en la sentencia recurrida se reconoce al actor en situación de incapacidad permanente total y en la sentencia de contraste en situación de incapacidad permanente absoluta, no constando en la sentencia recurrida, como así consta en la sentencia de contraste, que a efectos de valorar la capacidad del actor, tenga que tenerse en cuenta que el vigor físico se encuentra limitado por una edad superior a los 60 años.

Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado en los autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003). En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004) han establecido que «este

tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social» (sentencia de 17 de febrero de 2010, R. 52/2009).

SEGUNDO.- Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 18 de febrero de 2014, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 5 de febrero de 2014, sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto o argumentos jurídicos que desvirtúen el contenido de la misma, ya que se limita a reiterar lo ya expuesto en el escrito de interposición del recurso en relación con la existencia de contradicción, lo que no es suficiente.

TERCERO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Doña Ana Cristina Mazariegos Aragón en nombre y representación de DON Jacinto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 16 de octubre de 2012, en el recurso de suplicación número 1654/12, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Gerona de fecha 24 de noviembre de 2011, en el procedimiento nº 1115/2010 seguido a instancia de DON Jacinto contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Roj: ATS 12658/2013
Id Cendoj: 28079140012013202623
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1768/2013
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Rosa María Viroles Piñol
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil trece.
Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. ROSA MARÍA VIROLES PIÑOL.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 3 de los de Jaén se dictó sentencia en fecha 19 de diciembre de 2012, en el procedimiento nº 585/11 seguido a instancia de DON Humberto contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre prestaciones, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 18 de abril de 2013, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de junio de 2013 se formalizó por el Letrado Don Manuel Garzón Pasqual de Riquelme, en nombre y representación de DON Humberto, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 10 de octubre de 2013 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18 de julio de 2008, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2

de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010, 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011, 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011.

Consta en la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 18 de abril de 2013 (Rec. 477/2013), que el actor, mayor de 18 años, como consecuencia del fallecimiento (el 22-03-2011) de su madre con la que convivía, solicitó pensión de orfandad que le fue denegada, habiéndose reflejado por el EVI tras el examen realizado el 20-04-2011, que al actor se le diagnosticó durante el servicio militar realizado en 1982 «psiconeurosis», sin que haya recibido desde entonces ningún tipo de tratamiento ni haya sido valorado por especialistas, enfermedad agudizada por el alcoholismo que padece, habiendo estado de alta en la seguridad social realizando trabajos durante escasos periodos de tiempo en varias empresas entre 1978 y 2003, y siéndole reconocido un grado II nivel 1 de dependencia severa. En instancia se reconoce el derecho del actor a la pensión de orfandad solicitada, sentencia revocada en suplicación, por entender la Sala que no cabe considerar al actor como incapacitado de forma absoluta, ya que aunque fue declarado por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en grado II nivel I de dependencia severa, teniendo en cuenta lo dispuesto en el RD 174/2011, de 11 de febrero y que en su expediente constan 53 puntos por el diagnóstico de «*debilidad mental e ingesta de alcohol*», pero sin que se determine la cronicidad de la misma, y que dentro de los aspectos psicológicos y de tipo social dicho grado de dependencia se debe a la ausencia de higiene que motiva un seguimiento familiar, no existe enfermedad que impida o imposibilite el ejercicio de actividades laborales sedentarias o livianas.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina el actor, por entender que teniendo en cuenta sus dolencias, se encuentra afecto de incapacidad permanente absoluta, por lo que debe declararse su derecho a la prestación de orfandad solicitada. Aporta la parte recurrente de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 4 de diciembre de 2006 (Rec. 982/2006), en la que consta que el actor, que había sufrido un ingreso en la unidad psiquiátrica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla el 18-08-1981 por consumo excesivo y habitual de alcohol, siendo reconducido a grupos didácticos que no consiguieron su abstinencia, debido a la escasa crítica y motivación, solicitó como consecuencia del fallecimiento de su padre el 25-04-1989 pensión de orfandad, que le fue denegada, siéndole reconocido un grado de minusvalía del 66% el 13-07-1994, por etilismo crónico y bronquitis crónica. En suplicación se confirma la sentencia de instancia que reconoció el derecho del actor a la pensión de orfandad solicitada, por entender que concurre en el huérfano la situación de incapacidad permanente absoluta derivada de la enfermedad con dificultades incluso para la convivencia familiar, que le incapacita para realizar una vida laboral activa aunque no sea automático el reconocimiento, ante la previsión, años más tarde, del alto grado de minusvalía reconocido al actor.

De lo relacionado se desprende que no puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, por cuanto no existe identidad ni en los hechos que constan probados en ambas sentencias ni en las razones de decidir de las Salas de las resoluciones comparadas, por lo que en atención a dichos diferentes extremos no pueden considerarse los fallos contradictorios. En efecto, no es idéntica la situación de quien siendo mayor de 18 años solicita pensión de orfandad, habiendo sido diagnosticado mientras realizaba el servicio militar de «psiconeurosis», sin que haya recibido desde entonces tratamiento alguno ni haya sido valorado por especialistas, enfermedad agudizada por el alcoholismo que padece y habiendo realizado trabajos durante escasos periodos de tiempo -que es lo que consta en la sentencia recurrida- de quien ya en 1981 fue ingresado en la unidad de psiquiatría de un hospital, siendo sometido a tratamientos sin que dejara la ingesta de alcohol y siendo declarado en situación de minusvalía en grado del 66% -que es lo que consta en la sentencia de contraste-. Pero es que además, en la sentencia recurrida la Sala resuelve teniendo en cuenta si el hecho de que el actor haya sido reconocido en grado II nivel 1 de dependencia severa, implica reconocimiento en situación de incapacidad permanente absoluta a efectos del percibo de la pensión de orfandad, teniendo en cuenta además las dolencias que presenta, y nada de ello se plantea ni se discute en la sentencia de contraste, en la que por el contrario la Sala resuelve acerca de si el reconocimiento con posterioridad al fallecimiento del padre de un grado de minusvalía del 66%, implica el reconocimiento en situación de incapacidad permanente absoluta a efectos del percibo de la pensión de orfandad, teniendo en cuenta las dolencias que presenta el actor, que como se ha avanzado, son diversas a las que presenta el actor de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 29 de octubre de 2013, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 10 de octubre de 2013, sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto o argumentos jurídicos que desvirtúen el contenido de la misma.

TERCERO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Manuel Garzón Pasqual de Riquelme en nombre y representación de DON Humberto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 18 de abril de 2013, en el recurso de suplicación número 477/13, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Jaén de fecha 19 de diciembre de 2012, en el procedimiento nº 585/11 seguido a instancia de DON Humberto contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre prestaciones.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

<http://www.tirantonline.com>
Documento TOL3.331.523
Jurisprudencia
Jurisdicción: Social
Ponente: José Luis Gilolmo López
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 07/12/2011
Tipo Resolución: Auto
Sala: Cuarta
Número Recurso: 1728 / 2011

ENCABEZAMIENTO:

En la Villa de Madrid, a siete de Diciembre de dos mil once.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ LUIS GILOLMO LÓPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Pontevedra se dictó sentencia en fecha 22 de octubre de 2010, en el procedimiento nº 743 / 09 seguido a instancia de DON Pedro Antonio contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre revisión de grado de incapacidad, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 1 de marzo de 2011, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 26 de mayo de 2011 se formalizó por el Procurador Don Miguel Torres Álvarez, en nombre y representación de DON Pedro Antonio, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 29 de septiembre de 2011 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/ 2004 y 2082 / 2004; 25 de julio de 2007, R. 2704 / 2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586 / 2006 y 312 / 2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993 / 2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703 / 2006 y 2506/ 2007). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814 / 2007; 3 de junio de 2008, R. 595 / 2007 y 2532 / 2006; 18-7-08, R. 437 / 2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126 / 2007 y 2613/ 2007; 2 de octubre de 2008, R. 483 / 2007 y 4351 / 2007; 20 de octubre de 2008, R. 672 / 2007; 3 de noviembre de 2008, R.2637 / 2007 y 3883 / 07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470 / 2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014 / 2007 y 1138 / 2008).

Consta en la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 1 de marzo de 2011 (Rec. 5591 / 2010), que el actor fue declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de jefe de servicio de lavandería de hospital, por padecer: «accidente de tráfico en febrero 2005 con politraumatismo. Rotura de fibras del tendón de Aquiles derecho. Subluxación tibio - peronea izquierda. Síndrome postconmocional». Solicitada revisión por agravación, le fue denegada padeciendo: «Hepatopatía desde el año 07 secundaria a excesivo y abusivo consumo de alcohol. Ingreso en verano 08 durante 16 días por hepatitis aguda alcohólica. Accidente de tráfico en 2005 con múltiples fracturas óseas y hematoma subdural drenado. Trastorno orgánico de la personalidad». En instancia se declaró al actor en situación de incapacidad permanente absoluta por agravación de la anterior incapacidad permanente total reconocida, revocando la Sala de suplicación dicha sentencia, por entender que el deterioro sufrido no reviste entidad cualitativa suficiente como para revisar el grado de incapacidad permanente total inicialmente reconocido, ya que las lesiones no comportan una imposibilidad absoluta para desempeñar cualquier tipo de trabajo, pudiendo desarrollar actividades livianas y sedentarias como expedición de tiques, administrativos, vigilante, teleoperador, recepcionista, conserje, etc.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina el actor, interesando, nuevamente, el reconocimiento en situación de incapacidad permanente absoluta, por entender que ha sufrido una agravación de las lesiones por las que fue reconocido en situación de incapacidad permanente total, aportando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 28 de enero de 2009 (Rec. 2458 / 2008), en la que consta que la actora fue declarada en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de recepcionista - cocinera en un restaurante de su propiedad, por las lesiones que se describen en el hecho segundo de la demanda, pero que no consta en la relación de hechos probados.

Tras solicitar revisión de grado por agravación, fue denegada padeciendo «síndrome de frontalización post hematoma subdural: trastorno orgánico de la personalidad. deterioro cognitivo leve moderado. Dependencia crónica del alcohol en abstinencia. Hepatopatía alcohólica». En suplicación se confirma la sentencia de instancia en la que se declaró a la actora en situación de incapacidad permanente absoluta, por entender

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador Don Miguel Torres Álvarez en nombre y representación de DON Pedro Antonio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 1 de marzo de 2. 011, en el recurso de suplicación número 5591 / 10, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Pontevedra de fecha 22 de octubre de 2. 010, en el procedimiento nº 743 / 09 seguido a instancia de DON Pedro Antonio contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre revisión de grado de incapacidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

<http://www.tirantonline.com>
 Documento TOL3.393.402
 Jurisprudencia
 Jurisdicción: Social
 Ponente: Jesús Souto Prieto
 Origen: Tribunal Supremo
 Fecha: 20/09/2011
 Tipo Resolución: Auto
 Sala: Cuarta
 Número Recurso: 1166 / 2011

ENCABEZAMIENTO:

En la Villa de Madrid, a veinte de Septiembre de dos mil once.
 Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS SOUTO PRIETO.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Donostia se dictó sentencia en fecha 6 de septiembre de 2010, en el procedimiento nº 189 / 10 seguido a instancia de D. Rodrigo contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y SERVICIO VASCO DE SALUD - OSAKIDETZA, sobre incapacidad, que estimaba la excepción de litis pendencia, sin entrar a conocer del fondo del asunto.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en fecha 22 de febrero de 2011, que estimaba en parte el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada en la parte referida a la estimación de la excepción de litispendencia, rechazando que concurra la misma, y con desestimación de la demanda.

TERCERO.- Por escrito de fecha 7 de abril de 2011 se formalizó por el Letrado D. Desiderio Torres Martínez en nombre y representación de D. Rodrigo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 2 de junio de 2011, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contenido casacional y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430 / 2004 y 2082 / 2004; 25 de julio de 2007, R. 2704 / 2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586 / 2006 y 312 / 2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993 / 2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703 / 2006 y 2506 / 2007). Contradicción que no puede apreciarse en este caso.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814 / 2007; 3 de junio de 2008, R. 595 / 2007 y 2532 / 2006; 18-7-08, R. 437 / 2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126 / 2007 y 2613 / 2007; 2 de octubre de 2008,

R. 483 / 2007 y 4351 / 2007; 20 de octubre de 2008, R. 672 / 2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637 / 2007 y 3883 / 07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470 / 2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/ 2007 y 1138 / 2008).

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 22 de febrero del 2011 (rec. 227 / 2011), revoca la de instancia rechazando la estimación de la excepción de litispendencia, y desestimando la demanda rectora del proceso. Consta en la sentencia que el actor fue declarado en 2007 afecto de incapacidad permanente absoluta por enfermedad común, en atención al siguiente cuadro clínico: «síndrome de dependencia alcohólica; polineuropatía sensitivo motora axonal de etiología alcohólica, actualmente sin posibilidad de realizar una actividad laboral reglada, ingresado en comunidad terapéutica, precisa continuar tratamiento». El INSS procedió por resolución de 24/2/2009 a revisar de oficio el grado de invalidez del actor, declarando que no se encontraba en situación de incapacidad permanente en grado alguno, por haber mejorado su situación, extinguiendo la pensión reconocida en 2007, resolución que el actor no impugnó. El 27/2/2009 el actor solicitó su reingreso al servicio médico en el que prestaba servicios, que le fue denegado por no haberse emitido informe desfavorable sobre su aptitud psicofísica. A instancias del actor se inició nuevo expediente de incapacidad a mediados de 2009, dictándose resolución que nuevamente lo declaraba afecto de incapacidad permanente absoluta con efectos de 29/10/2009 sobre una base reguladora para cuya determinación se consideró como periodo de cómputo el comprendido entre el 1/4/2007 y el 25/10/2009.

Pues bien, en el presente pleito pretende la parte que se fije la base reguladora de la pensión inicialmente reconocida, manteniendo ésta, o que considerando como periodo neutro aquel en el que permaneció en situación de incapacidad permanente absoluta, se compute sólo el anterior y ulterior en que debió prestar servicios conforme a la base máxima de cotización. Razona la Sala que efectivamente el actor se vio perjudicado por la revisión de su incapacidad, permaneciendo durante ocho meses en una situación de supuesta aptitud laboral, con reserva de su puesto, pero sin que pudiera llegar a ocuparlo y sin que se cotizase por él en ese periodo, no obstante, considera ajustada a derecho la base reguladora fijada por el INSS, que tomó las bases mínimas de cotización para cubrir las lagunas correspondientes a periodos en los que no hubo obligación de cotizar, sin que resulte de aplicación la doctrina del paréntesis prevista exclusivamente para la ya desaparecida invalidez provisional. Todo ello sin perjuicio del derecho que pudiera asistirle a que la base reguladora se vea incrementada si en vía contencioso - administrativa se atiende su pretensión de que el servicio médico en el que prestaba servicios cotice por él en el periodo en el que no se le permitió reincorporarse a su puesto.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la parte actora, insistiendo en la aplicación al caso de la doctrina del paréntesis, aportando de referencia la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2003 (rec. 2197 / 2002), en ella el actor fue declarado en incapacidad permanente con efectos de 18/10/2000 y el cómputo de la base reguladora se extiende de noviembre de 1994 a abril de 1994, en el que hay un periodo de abril de 1994 a noviembre de 1998 que se integra por bases mínimas por estar el trabajador en situación de invalidez provisional. Consta además que, tras agotar la invalidez provisional, el demandante estuvo en desempleo contributivo y desde esa situación inició un nuevo proceso de incapacidad temporal que desembocó en la incapacidad permanente (afirmaciones con valor fáctico contenidas en el fundamento jurídico segundo). La sentencia de contraste aplica en esta situación la doctrina del paréntesis, pero no puede apreciarse contradicción con la ahora recurrida, pues lo que ahora se pretende no es la aplicación de la doctrina del paréntesis a la invalidez provisional —que es lo acontecido en el caso de referencia—, sino su aplicación al intervalo en el que el actor, entre la extinción de su inicial prestación de incapacidad permanente absoluta y el posterior reconocimiento de la misma, permaneció en situación de supuesta aptitud para trabajar pero sin prestar servicios por no haber sido admitido en el puesto que tenía reservado.

Pero es que además, el recurso carece de contenido casacional, pues tal como se advierte en la sentencia de 12/7/2004 (rec. 5513 / 2003), de conformidad con la doctrina de la sentencia de 1/10/2002, «el «paréntesis» en cuanto eliminación de un periodo de cómputo, que se sustituye por otro anterior, queda referido exclusivamente a la situación de invalidez provisional y, en su caso, a las prórrogas del artículo 131 bis 2 LGSS en el marco de un problema técnico de ordenación de la protección y de interpretación en el contexto legal de un término en sí mismo equívoco como es el de «hecho causante», que ha tenido también que ser precisado a otros efectos, como la exigencia del alta y el cómputo de las llamadas «carencias cualificadas». Esta técnica del «paréntesis» -se dice- «no puede extenderse a otros supuestos diferentes, que ya no reflejan un problema general de la articulación de la protección, ni se relacionan con la interpretación de una expresión legal equívoca, sino que ponen de relieve incidencias diversas en la situación de empleo del beneficiario». Y estas incidencias están dentro de la regla general del artículo 140. 4 de la Ley General de la Seguridad Social. En realidad, si en estos

supuestos se aplicara también el criterio del «paréntesis», la regla del artículo 140. 4 de la Ley General de la Seguridad Social quedaría sin aplicación práctica alguna o limitada a los supuestos excepcionales de inactividad voluntaria, contrariando así la clara voluntad del legislador de establecer el recurso a las bases mínimas como criterio general para la integración de las lagunas de cotización en la fijación de la base reguladora».

En efecto, esta Sala tiene dicho a propósito de la base reguladora, que es lo que en el caso de autos se discute, que la teoría del «paréntesis» actualmente está limitada - desaparecida la invalidez provisional - al periodo de prórroga de la actual incapacidad temporal [art. 136 bis dos LGSS] con exclusión de los periodos de los periodos de desempleo sin obligación de cotizar; «o sea, por un tiempo muerto derivado de una cierta descoordinación del sistema de protección, y en atención a la circunstancia de que en estos casos resulta suficientemente imprecisa la determinación del hecho causante» (STS 10 - 2 - 09, rec. 446 / 06). Todo ello, a partir, de la sentencia de Pleno de 1/10/02 (rec. 3666 / 01). Doctrina que se recoge también en SSTs 20/3/07, rec. 5522 / 05, 12/7/04, rec. 2465 / 03, entre otras.

La función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De ahí que carezcan de contenido casacional de unificación de doctrina aquellos recursos interpuestos contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo (Auto de fecha 21 de mayo de 1992 (R. 2456 / 1991), y Sentencias de 3 de mayo de 2006 (R. 2401 / 2005), 30 de mayo de 2006 (R. 979 / 2005), 22 de noviembre de 2006 (R. 2792 / 2001), 29 de junio de 2007 (R. 1345 / 2006), 12 de julio de 2007 (R. 1714 / 2006), 3 de octubre de 2007 (R. 3386 / 2006), 15 de noviembre de 2007 (R. 1799 / 2006), 15 de enero de 2008 (R. 3964 / 2006), 21 de febrero de 2008 (R. 1555 / 2007), 28 de mayo de 2008 (R. 814 / 2007), y 18 de julio de 2008 (R. 1192 / 2007).

En cuanto a las alegaciones que la parte formula, las mismas carecen de virtualidad para alterar las consideraciones y conclusiones a que ha llegado esta Sala sobre los motivos de inadmisión del recurso. En las mismas la parte pretende en realidad hacer valer su propia interpretación sobre el ámbito de aplicación de la teoría del paréntesis en el cálculo de la base reguladora, intentando justificar la procedencia de su aplicación en el caso de autos, en contra de lo que hizo la sentencia de suplicación recurrida en consonancia con la doctrina de esta Sala. Por otro lado no consigue la parte recurrente desvirtuar la falta de identidad expresada en la precedente providencia e insiste en relativizar la diferencia evidente entre las contingencias de invalidez provisional y la incapacidad permanente absoluta que concurren en el supuesto de la sentencia de contraste y en el caso de autos, respectivamente.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener el recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Desiderio Torres Martínez, en nombre y representación de D. Rodrigo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de fecha 22 de febrero de 2011, en el recurso de suplicación número 227 / 11, interpuesto por D. Rodrigo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Donostia de fecha 6 de septiembre de 2010, en el procedimiento nº 189 / 10 seguido a instancia de D. Rodrigo contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y SERVICIO VASCO DE SALUD - OSAKIDETZA, sobre incapacidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

<http://www.tirantonline.com>
Documento TOL3.351.008
Jurisprudencia
Jurisdicción: Social
Ponente: Aurelio Desdentado Bonete
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 29/03/2011
Tipo Resolución: Auto
Sala: Cuarta
Número Recurso: 1179 / 2010

ENCABEZAMIENTO:

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Marzo de dos mil once.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. AURELIO DESDENTADO BONETE.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 3 de los de Santander se dictó sentencia en fecha 13 de octubre de 2009, en el procedimiento nº 391 / 2009 seguido a instancia de D^a Amanda contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en fecha 27 de enero de 2010, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 10 de noviembre de 2010 se formalizó por la Letrada D^a Felisa Pascual García en nombre y representación de D^a Amanda, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 24 de enero de 2011 acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO - El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430 / 2004 y 2082 / 2004; 25 de julio de 2007, R. 2704 / 2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586 / 2006 y 312 / 2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993 / 2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703 / 2006 y 2506 / 2007).

La recurrente, nacida el 21 de mayo de 1975, pretende el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente, total para su profesión habitual de dependienta - camarera. Presenta unas secuelas de «trastorno límite de la personalidad. Ingesta abusiva de alcohol». Dichas secuelas le producen un menoscabo funcional de «sentimiento de inutilidad, baja estima por dependencia alcohólica».

Partiendo de la inexistencia de dolencias adicionales, la sentencia recurrida sostiene que las dolencias descritas no incapacitan para el desempeño de cualquier trabajo, ni tampoco para llevar a cabo las principales funciones de la profesión de camarera dada su escasa repercusión funcional que no limita para el ejercicio de dicha profesión.

La sentencia alegada de contraste es la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 30 de mayo de 2008 (R. 391 / 2008), que reconoce a la actora una incapacidad permanente total para su profesión habitual de titular de un establecimiento de bar. En el momento de la valoración del expediente la actora padece «osteopenia. Microcalcificaciones puntiformes, sin signos de sospecha. En afecciones psíquicas: nerviosa, verborreica, inquieta... En 2001 ya intentó deshabitación, pero su madre estaba pendiente de ser intervenida quirúrgicamente y lo deja pendiente. Informe de la unidad de trastornos adictivos en mayo de 2007: en tratamiento en la unidad desde abril de 2006, por consumo de alcohol. Inicialmente se realizó desintoxicación hospitalaria. Desde entonces se encuentra en seguimiento psicológico y médico, y realizando controles toxicológicos de orina dos veces por semana. Conclusiones, deficiencias más significativas: síndrome de dependencia alcohólica, deshabitación alcohólica; estado de ánimo, depresión con rasgos de ansiedad, reactivo a problemas familiares; artrosis lumbar, osteopenia; hipertensión arterial; y glaucoma crónico (...). Ha sido intervenida dos veces del síndrome de túnel carpiano bilateral».

Debe apreciarse falta de contradicción entre las sentencias comparadas porque deciden valorando distintas secuelas y limitaciones funcionales puestas en relación con los requerimientos de profesiones habituales también diferentes, de modo que la sentencia de contraste acaba afirmando, a la vista de los intentos de deshabitación y el proceso depresivo consiguiente, que es incierta la curación de la actora y crónico el cuadro clínico residual objetivado. Circunstancias que no se acreditan en el supuesto de la sentencia recurrida.

Por otra parte y relación con la identidad alegada en el recurso, la Sala IV viene declarando reiteradamente la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general - autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347 / 1997), 22 de marzo de 2002 (R. 2914 / 2001), 7 de octubre de 2003 (R. 2938 / 2002) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252 / 2003) -. En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711 / 2004 y 3304 / 2004) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117 / 2004) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo» [sentencias de 19 de noviembre de 1991 (R. 1298 / 1990), 27 de enero de 1997 (R. 1179 / 1996), 29 de noviembre de 2006 (R. 1557 / 2005) y 22 de enero de 2008 (R. 3890 / 2006), entre otras muchas.

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada D^a Felisa Pascual García, en nombre y representación de D^a Amanda contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 27 de enero de 2010, en el recurso de suplicación número 13 / 2010, interpuesto por D^a Amanda, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Santander de fecha 13 de octubre de 2009, en el procedimiento nº 391 / 2009 seguido a instancia de D^a Amanda contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Roj: ATS 3494/2011 - ECLI:ES:TS:2011:3494A
Id Cendoj: 28079140012011200693
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2946/2010
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Jesús Gullón Rodríguez
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Febrero de dos mil once.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS GULLÓN RODRÍGUEZ.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Zamora se dictó sentencia en fecha 16 de marzo de 2010, en el procedimiento nº 419/2010 seguido a instancia de D. Hipolito contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en fecha 16 de junio de 2010, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 28 de julio de 2010 se formalizó por el Letrado D. Antonio de la Fuente García en nombre y representación de D. Hipolito, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 26 de noviembre de 2010 acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007).

El recurrente, nacido el 25 de agosto de 1952, está afiliado al RETA como arquitecto técnico. Pretende el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta por padecer dependencia alcohólica. La sentencia recurrida, confirmando la de instancia, ha desestimado la demanda porque, según el dictamen del EVI, no están agotadas las posibilidades de tratamiento y de hecho el actor lleva en tratamiento desde enero de 2009 en «Alcohólicos Anónimos». Además, como señala el juez de lo social, el actor no padece alteraciones psicomotrices ni del sistema nervioso central y mantiene su capacidad cognitiva y de razonamiento.

La sentencia seleccionada de contraste es la del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 15 de diciembre de 2000 (R. 233/2000), que reconoce al actor una incapacidad permanente total para su profesión habitual de labrador por cuenta propia. El cuadro clínico residual consiste en «alcoholismo crónico, hepatopatía crónica evolucionada con signos de HPT y esplenomegalia l venosa bilateral más acusada en MID con piel atrófica indurada, adherida a planos profundos en pérdida de sustancia por múltiples cicatrices sobre todo a nivel 1/3 inferior interno supramaleolar».

La contradicción alegada no puede apreciarse porque las sentencias comparadas deciden valorando distintas secuelas y limitaciones funcionales, afirmando la sentencia de contraste que la capacidad laboral del demandante está disminuida de modo previsiblemente definitivo como consecuencia de las lesiones orgánicas irreversibles que padece. Esta situación no es la misma sobre la que decide la sentencia recurrida, que no aprecia alteraciones funcionales y considera susceptible de tratamiento la dependencia alcohólica a través de la organización mencionada.

Por otra parte, las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo» [sentencias de 19 de noviembre de 1991 (R. 1298/1990), 27 de enero de 1997 (R. 1179/1996), 29 de noviembre de 2006 (R. 1557/2005) y 22 de enero de 2008 (R. 3890/2006), entre otras muchas.

Lo que pone de relieve esa doctrina, dando respuesta a la alegación segunda del recurrente, es la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante al tratarse por lo general de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general [autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003)].

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita. Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Antonio de la Fuente García, en nombre y representación de D. Hipolito contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de fecha 16 de junio de 2010, en el recurso de suplicación número 902/2010, interpuesto por D. Hipolito, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Zamora de fecha 16 de marzo de 2010, en el procedimiento nº 419/2010 seguido a instancia de D. Hipolito contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 11930/2009
Id Cendoj: 28079140012009202226
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1805/2007
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Aurelio Desdentado Bonete
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Julio de dos mil nueve.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. AURELIO DESDENTADO BONETE.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 24 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 10 de julio de 2006, en el procedimiento nº 163/05 seguido a instancia de DON Luis Francisco contra TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre cantidad, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DON Luis Francisco, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 19 de marzo de 2007, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 9 de mayo de 2007 se formalizó por el Letrado Don Gonzalo Carrillo Ramos, en nombre y representación de DON Luis Francisco, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 14 de mayo de 2009 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y falta de fundamentación de la infracción legal. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina es un recurso extraordinario que debe estar fundado en un motivo de infracción de ley (artículo 222 de la LPL, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal). La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» (S. 25 de abril de 2002, R. 2500/2001). Así se deduce no sólo del art. 222 LPL, sino de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en ese orden Social, cuyo art. 477.1 prescribe que «el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso», mientras que el artículo 481.1 de la LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.º de la LEC [Autos de inadmisión de 14 de marzo de 2001 (R. 1589/2000), 9 de mayo de 2001 (R. 4299/2000), 10 de enero de 2002 (R. 4248/2000) y de 27 de febrero de 2002 (R. 3213/2001), y Sentencias de 25 de abril de 2002 (R. 2500/2001), 11 de marzo de 2004 (R. 3679/2003), 19 de mayo de 2004 (R. 4493 / 2003), 8 de marzo de 2005 (R. 606/2004) y 28 de junio de 2005 (R. 3116/04)]. En el presente caso, la parte recurrente no ha articulado un motivo específico en el que se analice la infracción legal, citando sólo al hilo del análisis de la contradicción el art. 137 LGSS, sin hacer ulterior fundamentación de la infracción legal que imputa a la sentencia recurrida, por más que en su escrito de alegaciones de 2 de junio de 2009 pretenda reconducir el

cumplimiento de este requisito al análisis de la contradicción efectuado en el recurso, pretendiendo fundamentar el propio recurso en la contradicción a su juicio existente entre la sentencia recurrida y la invocada de contraste.

SEGUNDO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/1996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004)].

No puede apreciarse la contradicción que se alega pues en los supuestos sobre los que se pronuncian las sentencias comparadas no concurren las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. En efecto, en la sentencia recurrida, el actor, de profesión habitual representante de comercio, fue declarado en incapacidad permanente total en 1998, padeciendo «depresión reactiva prolongada». En la actualidad reclama el grado de incapacidad permanente absoluta por revisión, que le ha sido denegado en instancia y suplicación, padeciendo «alcoholismo crónico sin abstinencia prolongada. Síndrome depresivo reactivo. Artrosis de codo izquierdo postraumática. Posible osteoporosis lumbar; discopatía degenerativa izquierda; espondilosis y espondiloartrosis lumbar; lumbalgia mecánica crónica; exoforia izquierda con paresia del m. oblicuo superior, corregida con prismas. Antecedentes de hepatopatía etílica. El estado del actor no ha sufrido un empeoramiento sustancial en relación con el que presentaba en el año 1998, estando impedido para realizar tareas de riesgo para sí o para terceros, aquellas que supongan alta carga psíquica por su responsabilidad, contactos personales ágiles, fluidos o especial concentración». En la sentencia de contraste, el actor, de profesión habitual operario de rama de limpieza, padecía «enfisema y fibrosis pulmonar». Habiendo sido declarado por resolución administrativa en incapacidad permanente total, se le reconoció el grado de incapacidad permanente absoluta en la instancia, el cual fue confirmado en casación, en atención a los padecimientos y limitaciones sufridos. En consecuencia, las lesiones, secuelas y limitaciones padecidas por ambos actores en las sentencias comparadas no son coincidentes, por lo que ha de apreciarse falta de contradicción.

Por otra parte, y en relación con las alegaciones efectuadas por la parte recurrente en su escrito de 2 de junio de 2009, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general -autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003)-. En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2.005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004) y 2 de noviembre de 2.005 (R. 3117/2004) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo [sentencias de 19 de noviembre de 1991 (R. 1298/1990), 27 de enero de 1997 (R. 1179/1996), 18 de junio de 2001 (R. 1768/2000), 22 de marzo de 2002 (R. 2654/2001), 27 de octubre de 2003 (R. 2647/2002), 11 de febrero de 2004 (4390/2002) y 9 de julio de 20004 (R. 3145/2003)].

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Gonzalo Carrillo Ramos en nombre y representación de DON Luis Francisco contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 19 de marzo de 2.007, en el recurso de suplicación número 4986/06, interpuesto por DON Luis Francisco, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 24 de los de Madrid de fecha 10 de julio de 2006, en el procedimiento nº 163/05 seguido a instancia de DON Luis Francisco contra TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre cantidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 7437/2008 - ECLI:ES:TS:2008:7437A
Id Cendoj: 28079140012008201376
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3929/2007
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Ramón Martínez Garrido
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de dos mil ocho.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 33 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 21 de diciembre de 2005, en el procedimiento nº 596/05 seguido a instancia de Dª Patricia contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre invalidez, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 6 de septiembre de 2007, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 23 de noviembre de 2007 se formalizó por la Procuradora Dª Carmen García Rubio en nombre y representación de Dª Patricia, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 15 de abril de 2008 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (SSTS de 27 y 28 de enero de 1992, R. 824/1991 y 1053/1991, 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997, R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996, 23 de septiembre de 1998, R. 4478/1997, 7 de abril de 2005, R. 430/2004, 25 de abril de 2005, R. 3132/2004, y 4 de mayo de 2005, R. 2082/2004).

La recurrente, nacida el 8 de agosto de 1956, está afiliada a la Seguridad Social y no se encuentra de alta o en situación asimilada al alta en ninguno de los Regímenes de la Seguridad Social. El 4 de marzo de 2005 solicitó la prestación de invalidez permanente, que el INSS le denegó por no reunir el periodo mínimo de cotización reglamentario. Padece diabetes mellitus 2 desde 1992, posiblemente secundaria a pancreatitis crónica; insulino dependiente con mal control de la glicemia y complicaciones hipoglucémicas en relación con

enolismo; hepatopatía y pancreatitis crónicas de origen alcohólico; como hipoglucémico en 1996; accidente vascular cerebral agudo el 22 de diciembre de 2004 de etiología isquémica, con secuelas de hemiparesia derecha y trastorno afásico motor, requiriendo ayuda de tercera persona y una silla de ruedas para las actividades de la vida diaria. La demandante acredita 5.475 días cotizados, de los cuales 214 están comprendidos dentro de los diez años anteriores a la solicitud (30 de ellos por asimilación de pagas extras). Los periodos de cotización están recogidos en el hecho probado sexto y el último fue el trabajo por cuenta ajena prestado desde el 18 de mayo de 1999 hasta el 17 de noviembre de 1999. El juez de instancia retrotrae el cómputo de la carencia específica a los diez años inmediatamente anteriores al 1 de enero de 1992 y considera cumplido tal requisito porque ya en ese año la actora fue diagnosticada de diabetes secundaria a pancreatitis crónica y dependencia enólica, sufriendo en 1996 un coma hipoglucémico, siendo dicha situación ya entonces tributaria de una incapacidad permanente y justificando al mismo tiempo el apartamiento del mercado laboral. La consecuencia de ese razonamiento es que reconoce una incapacidad permanente absoluta en grado de gran invalidez. Sin embargo, la sentencia recurrida estima que no hay base probatoria suficiente para llegar a tal conclusión, pues la demandante trabajó seis meses seguidos en el año 1999 y su dependencia alcohólica, según el último informe médico, ha sido oscilante, severa en algunos momentos pero con abstinencia durante largas temporadas y recaídas concretas. Por otra parte, entre 1989 y 1992 no tuvo ningún impedimento para trabajar ni tampoco se inscribió como demandante de empleo justificando así una voluntad de seguir trabajando, al margen de que las dolencias padecidas en 1992 no son las que han provocado la situación de gran invalidez sino el accidente vascular agudo de 2004, cuando la actora ya llevaba muchos años apartada de la vida laboral.

La sentencia alegada de contraste es la de esta Sala de 17 de septiembre de 2004. La demandante en este caso sufrió un gravísimo accidente de tráfico el 21 de septiembre de 1993, en el que resultó muerto su esposo, con severos traumatismos sus dos hijos y ella con graves lesiones que requirieron once intervenciones quirúrgicas a lo largo de siete años, quedándole, entre otras, una secuela consistente en una hipoactividad generalizada, con escasa diferenciación antero-posterior, estando afectadas las capacidades cognitivas, afectivas, racionales y personales, sufriendo una transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica que le impiden la realización de cualquier labor por liviana que fuese. El 16 de mayo de 2002 solicitó declaración de invalidez permanente absoluta que le fue denegada en vía administrativa, por no hallarse en alta ni situación asimilada en la fecha del hecho causante, ni acreditar que un quinto de las cotizaciones exigidas se encuentren dentro de los quince años inmediatamente anteriores. Acredita 5.262 días cotizados y permaneció inscrita como demandante de empleo desde 7 de octubre de 1986 hasta el 17 de octubre de 1994 y desde el 6 de mayo 1996 al 7 de agosto de 1996, aunque en parte del primero de esos periodos prestó servicios intermitentes por los que cotizó. Los dos espacios temporales que permaneció inscrita como demandante de empleo finalizaron por no renovación de la inscripción. El único punto que debate la sentencia es si procede aplicar la doctrina jurisprudencial sobre la interpretación flexible del requisito del alta para causar derecho a la prestación de incapacidad permanente, decidiendo que sí es aplicable porque «las serias afectaciones psíquicas que padecía la trabajadora le hacían imposible el cumplimiento de su inscripción como demandante de empleo, amén de lo inútil de semejante trámite burocrático para quién no tenía posibilidad real de prestación de servicios».

No puede apreciarse la contradicción alegada en el recurso porque las cuestiones jurídicas planteadas en cada caso son distintas. En la sentencia recurrida se pretende el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez, por la contingencia de enfermedad común, desde una situación de no alta que exige acreditar un periodo mínimo de cotización de quince años distribuidos en la forma prevista en el art. 138.2 b) LGSS, es decir, que la quinta parte del periodo exigible esté comprendida dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante (art. 138.3 LGSS). Tanto si se entiende causada la prestación en la fecha de la solicitud (4 de marzo de 2005) o en la fecha del informe del ICAM (16 de marzo de 2005), la actora no reúne la carencia específica y por ello se discute si cabe retrotraer el cómputo de ese periodo al momento en que efectivamente cesó el trabajo efectivo y cotizado, considerando la falta de cotización como un paréntesis -siempre que se acredite la voluntad de mantenerse en el mundo laboral mediante la inscripción en la oficina de empleo. Lo pretendido en el caso de la sentencia de contraste es el reconocimiento de una incapacidad permanente derivada de accidente no laboral, con lo cual entra en juego el art. 138.1 LGSS que exime del requisito de cotización para tal contingencia pero exige que el interesado esté de alta o en situación asimilada al alta en la fecha del hecho causante. Por lo tanto, el problema discutido

es distinto y se circunscribe estrictamente a la atenuación de la exigencia de ese requisito mediante la interpretación humanizadora de la doctrina que «pondera las circunstancias de cada caso concreto con el fin de evitar supuestos no justificados de desprotección».

La recurrente discrepa de la causa de inadmisión apreciada, alegando que la unificación doctrinal en ambos casos se limita a decidir sobre la aplicación de la doctrina del paréntesis por incumplimiento del requisito del alta en Seguridad Social; la prestación se solicita desde una situación de no alta o asimilada y también en los dos casos se trata de dolencias graves de larga evolución que impiden a los solicitantes cotizar y permanecer de alta en el sistema. Pero la falta de identidad debe mantenerse no solo por las diferencias expuestas en el razonamiento precedente, sino también porque, reconduciendo el debate a efectos puramente dialécticos a los términos en que lo plantea la recurrente, en la sentencia de contraste se acredita el padecimiento de unas dolencias que hacían imposible cumplir con el requisito de la inscripción en la oficina de empleo, y ese es un dato que no consta en la sentencia recurrida hasta el episodio vascular de noviembre de 2004, momento en que la recurrente llevaba ya muchos años apartada del mundo laboral.

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora D^a Carmen García Rubio, en nombre y representación de D^a Patricia contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 6 de septiembre de 2007, en el recurso de suplicación número 2844/06, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 33 de los de Barcelona de fecha 21 de diciembre de 2005, en el procedimiento nº 596/05 seguido a instancia de D^a Patricia contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre invalidez.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 7274/2008
Id Cendoj: 28079140012008201299
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3799/2007
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Jesús Souto Prieto
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Junio de dos mil ocho.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Burgos se dictó sentencia en fecha 22 de marzo de 2007, en el procedimiento nº 98/2007 seguido a instancia de D. Adolfo contra MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y GONVARRI INDUSTRIAL S.A., sobre incapacidad temporal, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en fecha 4 de julio de 2007, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 12 de noviembre de 2007 se formalizó por el Letrado D. Gonzalo López Cuesta en nombre y representación de D. Adolfo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 30 de enero de 2008 acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (SSTS de 27 de enero de 1992, Rec 824/91; 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, Recursos 4067/96, 94/97 y 4203/96; 17 de mayo y 22 de junio de 2000, Recursos 1253/99 y 1785/99; 14 de noviembre de 2003, Rec 4758/02; 17 de diciembre de 2004, Rec 6028/03 y 20 de enero de 2005, Rec 1111/03).

La sentencia impugnada -confirmando la de instancia- desestima la demanda. Consta que el actor ha estado de baja medica por contingencia comun en los siguientes periodos: Del 23-1-04 al 3-5-04 por crisis de ansiedad, del 25-5-04 al 8-7-05 por crisis de ansiedad, del 19-12-05 al 2-1-06 por faringitis, del 5-1-06 al 20-5-06 por crisis de ansiedad, y del 20-10-06 hasta la actualidad con diagnostico de alcoholismo. El 31-8-06 el INSS declara que no se halla afecto de incapacidad permanente en grado alguno. Las lesiones valoradas son las siguientes: dependencia del alcohol; hepatopatía alcohólica; problemas relativos al grupo primario de apoyo. El INSS notificó

la denegación de la invalidez a la empresa el 8-9-06, que lo restaura en la situación de alta en Seguridad Social. El 19-9-06 le remite carta comunicando que aun no ha ido a trabajar y advirtiéndole de las consecuencias desfavorables que dicha conducta puede acarrear. La Mutua deniega el pago de las prestaciones de IT el 20-11-06. La Sala partiendo de los datos anteriores, señala que la resolución del INSS denegando la concesión de incapacidad permanente, equivale al alta médica, poniendo fin al proceso por IT y estando a partir de ese momento en condiciones de trabajar. A pesar de ello, después de la decisión denegatoria, el demandante no acude a trabajar. Añade que, los distintos procesos de IT que ha sufrido el trabajador y concretamente el iniciado el 5-1-06 hasta el 20-5-06 y el discutido, iniciado el 20-10-06, si que pueden estar relacionados, dada la interacción que comparten, y teniendo en cuenta el tiempo que media entre ambos, estaríamos dentro del supuesto contemplado en el art. 131 bis 2 de la LGSS, no habiendo transcurrido los seis preceptivos meses entre ellos.

La sentencia referencial, del Tribunal Supremo de 08-11-04 (Rec. 6144/03), contempla un supuesto en el que se debate si el actor tiene derecho a prestación por IT considerando que, después de haber agotado un primer período de IT derivada de enfermedad común, se incorporó al trabajo y, antes de que transcurrieran seis meses de actividad laboral, causó nueva baja por la misma enfermedad. En el relato fáctico consta que el demandante inició situación de IT derivada de enfermedad común el día 24 de agosto de 1999 y fue dado de alta con propuesta de invalidez el 6 de enero de 2001, dictándose el 4 de diciembre de 2001 resolución por el INSS en la que se declara que no se encuentra afectado de ningún grado de incapacidad permanente; el actor se reincorporó a su puesto de trabajo el día 14 de enero de 2002 y causó nuevamente baja el 24 de abril de 2002 para ser intervenido quirúrgicamente por los médicos del INSALUD, después de dos años de espera. Solicitó el abono de las prestaciones por IT, que le fueron denegadas por el INSS. La Sala, aplicando la doctrina contenida en la STS de 20 de febrero de 2002, declara que es suficiente para tener derecho a la prestación solicitada en el caso de autos -concurriendo los demás requisitos de carácter general, que no se han cuestionado- el que se cumpla, como aquí efectivamente sucede, la exigencia general del art. 130 de la LGSS de que se hayan cotizado seis meses en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante.

No concurre la contradicción alegada entre las sentencias comparadas al diferir los presupuestos fácticos. En particular, en la referencial el actor después de un primer periodo de IT por enfermedad común, se incorporó al trabajo y antes de transcurrir 6 meses de actividad laboral, causó nueva baja; mientras que en la impugnada no se ha acreditado que el trabajador se haya reincorporado.

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones, sin que haya lugar a la imposición de costas por gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Gonzalo López Cuesta, en nombre y representación de D. Adolfo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 4 de julio de 2007, en el recurso de suplicación número 338/2007, interpuesto por D. Adolfo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Burgos de fecha 22 de marzo de 2007, en el procedimiento nº 98/2007 seguido a instancia de D. Adolfo contra MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y GONVARRI INDUSTRIAL S.A., sobre incapacidad temporal.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 14747/2007
Id Cendoj: 28079140012007202644
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 274/2007
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Gonzalo Moliner Tamborero
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Septiembre de dos mil siete.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 3 de los de León se dictó sentencia en fecha 24 de julio de 2.006, en el procedimiento nº 337/06 seguido a instancia de DON Carlos Manuel contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL e INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DON Carlos Manuel, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en fecha 20 de diciembre de 2.006, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 12 de febrero de 2.007 se formalizó por la Procuradora Doña Cayetana de Zulueta, en nombre y representación de DON Carlos Manuel, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 26 de junio de 2.007 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de relación precisa y circunstanciada, falta de determinación y fundamentación de la infracción legal, falta de contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral exige que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada. Para cumplir este requisito la parte recurrente debe establecer la identidad de los supuestos a partir de los que afirma la existencia de contradicción mediante una argumentación mínima sobre la concurrencia de las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, a través de un examen, que sea suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que el recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas (Sentencias de 27 de mayo de 1992 (R. 1324/1991), 16 de septiembre de 2004 (R. 2465/2003), 6 de julio de 2004 (R. 5346/2003), 15 de febrero de 2005 (R. 1900/2004), 28 de junio de 2005 (R. 3116/04) y 31 de enero de 2006 (R. 1857/04). En el presente caso, la parte recurrente se limita a transcribir literalmente los hechos probados y la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida y de la de contraste, sin que en ningún momento proceda a realizar un análisis realmente comparativo de hechos, fundamentos y pretensiones que han llevado a fallos contradictorios.

SEGUNDO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina es un recurso extraordinario que debe estar fundado en un motivo de infracción de ley (artículo 222 de la LPL, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal). La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables,

sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» (S. 25 de abril de 2002, R. 2500/2001). Así se deduce no sólo del art. 222 LPL, sino de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en ese orden Social, cuyo art. 477.1 prescribe que «el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso», mientras que el artículo 481.1 de la LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.º de la LEC [Autos de inadmisión de 14 de marzo de 2001 (R. 1589/2000), 9 de mayo de 2001 (R. 4299/2000), 10 de enero de 2002 (R. 4248/2000) y de 27 de febrero de 2002 (R. 3213/2001), y Sentencias de 25 de abril de 2002 (R. 2500/2001), 11 de marzo de 2004 (R. 3679/2003), 19 de mayo de 2004 (R. 4493/2003), 8 de marzo de 2005 (R. 606/2004) y 28 de junio de 2005 (R. 3116/04)]. En su escrito de interposición, el recurrente no cita en el motivo de infracción legal que articula ningún precepto como infringido y, en consecuencia, tampoco procede a fundamentar la eventual infracción cometida, centrándose el recurrente en la valoración de las lesiones y secuelas padecidas.

TERCERO.- Asimismo, el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004)].

La parte recurrente pretende que se le reconozca una incapacidad permanente absoluta que le ha sido denegada en resolución administrativa, así como en la instancia y en suplicación. En el presente caso, no puede apreciarse la contradicción que se invoca con la sentencia seleccionada de contraste porque las lesiones y secuelas padecidas en ambas sentencias son distintas. En concreto, en el caso de la sentencia recurrida, el actor presenta «enolismo crónico, depresión mayor, pancreatitis crónica de etiología alcohólica». Por el contrario, en el caso analizado por la sentencia invocada de contraste en el escrito de interposición, el actor padecía «alcoholismo crónico, habiendo precisado de un ingreso hospitalario en 1995 como consecuencia de haber sufrido fractura de varias costillas a causa de una intoxicación etílica, tras lo cual rechazó tratamiento de desintoxicación; el actor actualmente presenta aplanamiento afectivo, abulia, anhedonia, y se trata con Seroxat 20 mg. uno o dos comprimidos al día». Pero, además, se modificaron los hechos probados en suplicación, en el sentido de añadir que «el informe médico- forense requerido como diligencia para mejor proveer establece que el paciente debido a su estado actual no puede realizar con normalidad ningún tipo de trabajo, aconsejando tratamiento psiquiátrico con actuaciones terapéuticas que pudieran conducir a la revisión de su actual grado de invalidez». Es cierto que la Sala califica la modificación de intrascendente -aun incorporándola a los hechos probados-, pero lo cierto es que con posterioridad se basa en la misma para fundamentar la confirmación de la sentencia de instancia y con ella de la procedencia del grado de incapacidad permanente absoluta.

CUARTO.- Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general -autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003), 11 de febrero de 2004

(R. 4390/2002) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003)-. En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2.005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004) y 2 de noviembre de 2.005 (R. 3117/2004) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo [sentencias de 19 de noviembre de 1991 (R. 1298/1990), 27 de enero de 1997 (R. 1179/1996), 18 de junio de 2001 (R. 1768/2000), 22 de marzo de 2002 (R. 2654/2001), 27 de octubre de 2003 (R. 2647/2002), 11 de febrero de 2004 (4390/2002) y 9 de julio de 2004 (R. 3145/2003)].

QUINTO.- La parte recurrente, en su escrito de alegaciones de 18 de julio de 2007, se limita a oponerse a las cuatro causas de inadmisión que en su día se incluyeron en la providencia dictada el 26 de junio de 2007, sin que del mismo se desprendan nuevos argumentos que requieran ser valorados adicionalmente por esta Sala. En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas. Teniendo en cuenta que los beneficiarios de la Seguridad Social están exentos de constituir depósito para recurrir, y habiendo procedido a efectuar depósito la parte recurrente, que tiene tal condición en el presente procedimiento, procede devolver el mismo de conformidad con los arts. 227.4 de la Ley de Procedimiento Laboral y el art. 2.d) de la Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora Doña Cayetana de Zulueta en nombre y representación de DON Carlos Manuel contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid de fecha 20 de diciembre 2.006, en el recurso de suplicación número 2058/06, interpuesto por DON Carlos Manuel, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de León de fecha 24 de julio de 2.006, en el procedimiento nº 337/06 seguido a instancia de DON Carlos Manuel contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL e INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente, y con devolución del depósito constituido por la misma.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 12320/2007
Id Cendoj: 28079140012007202208
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3745/2006
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Gil Suárez
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Julio de dos mil siete.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 12 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 19 de enero de 2006, en el procedimiento nº 531/05 seguido a instancia de DOÑA Paula contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 19 de junio de 2006, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 13 de octubre de 2006 se formalizó por la letrada Doña María José García González, en nombre y representación de DOÑA Paula, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 8 de marzo de 2007 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/1996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 30/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004)].

No puede apreciarse la contradicción que se alega pues en los supuestos sobre los que se pronuncian las sentencias comparadas no concurren las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. En efecto, en la sentencia recurrida, la actora, de profesión habitual auxiliar administrativo, encontrándose desde el año 1999 en desempleo, padece «dependencia de alcohol y trastorno histriónico de la personalidad diagnosticado desde el 2003. Actualmente sigue con tratamiento psiquiátrico y recibe psicoterapia individual en el centro de salud de la CAM. No han podido delimitarse limitaciones definitivas, por no estar agotadas las

posibilidades terapéuticas, debe continuar en tratamiento, control de evolución, abstinencia y apoyo psicológico. Está limitada para tareas de tipo intelectual y actividad que precise organización y concentración». La sentencia recurrida entendió que, en virtud de los hechos probados descritos, las lesiones y secuelas padecidas no eran «previsiblemente definitivas», por lo que no cabía reconocer la incapacidad permanente. En la sentencia de contraste, el actor, de profesión albañil por cuenta ajena, padecía «alcoholismo. Trastorno de personalidad inestable en relación con consumo de alcohol. Diagnosticado de clínica depresiva tras descompensación por angustia persecutiva. Hta. en tratamiento». La sentencia estima el recurso de suplicación del actor, apreciando la existencia de una incapacidad permanente absoluta. En consecuencia, del análisis de las lesiones padecidas por los actores en ambos procedimientos, así como de las profesiones ejercidas, se observa que las mismas no son coincidentes. Pero, además, en la sentencia recurrida se resuelve fundamentalmente en contra del reconocimiento de la incapacidad permanente porque no se considera que, según lo reflejado en los hechos probados, las lesiones y secuelas padecidas sean previsiblemente definitivas, sin que nada de esto se plantee en la sentencia de contraste, por ser los hechos probados diferentes. Asimismo, en el procedimiento del que se ocupa la sentencia recurrida el actor pretendía el reconocimiento de una incapacidad permanente total, que fue reconocida en la instancia y denegada en suplicación, mientras que en la sentencia de contraste consta que lo pedido por el recurrente en suplicación fue el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta, por lo que las pretensiones tampoco son idénticas en lo sustancial.

SEGUNDO.- Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general -autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003)-. En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2.005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004) y 2 de noviembre de 2.005 (R. 3117/2004) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo [sentencias de 19 de noviembre de 1991 (R. 1298/1990), 27 de enero de 1997 (R. 1179/1996), 18 de junio de 2001 (R. 1768/2000), 22 de marzo de 2002 (R. 2654/2001), 27 de octubre de 2003 (R. 2647/2002), 11 de febrero de 2004 (4390/2002) y 9 de julio de 2004 (R. 3145/2003)].

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Doña María José García González en nombre y representación de DOÑA Paula contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 19 de junio de 2006, en el recurso de suplicación número 1991/06, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 12 de los de Madrid de fecha 19 de enero de 2006, en el procedimiento nº 531/05 seguido a instancia de DOÑA Paula contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 12288/2007
Id Cendoj: 28079140012007202177
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 4970/2006
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Rosa María Viroles Piñol
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a diez de Julio de dos mil siete.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Vitoria se dictó sentencia en fecha 20 de febrero de 2006, en el procedimiento nº 823/05 seguido a instancia de DOÑA Sara contra TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL e INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre invalidez permanente, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DOÑA Sara, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en fecha 17 de octubre de 2006, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 26 de diciembre de 2006 se formalizó por el Letrado D. Luis Antonio Ruiz de Larringa Benavides en nombre y representación de DOÑA Sara, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 21 de marzo de 2007 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de cita y fundamentación de la infracción legal y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina es un recurso extraordinario que debe estar fundado en un motivo de infracción de ley (artículo 222 de la LPL, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal). La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» (sentencia de 25 de abril de 2002, R. 2500/2001). Así se deduce no sólo del art. 222 LPL, sino de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en ese orden Social, cuyo art. 477.1 prescribe que «el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso», mientras que el artículo 481.1 de la LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.º de la LEC (autos de inadmisión de 14 de marzo de 2001, R. 1589/2000, 9 de mayo de 2001, R. 4299/2000, 10 de enero de 2002, R. 4248/2000 y de 27 de febrero de 2002, R. 3213/2001) y sentencias de 25 de abril de 2002 (R. 2500/2001), 11 de marzo de 2004 (R. 3679/2003), 19 de mayo de 2004 (R. 4493/2003), 8 de marzo de 2005 (R. 606/2004) y 28 de junio de 2005 (R. 3116/04).

El presente recurso incumple la exigencia de citar y fundamentar la infracción legal atribuida a la sentencia impugnada. En el escrito de interposición la parte hace una amplia relación de las enfermedades padecidas y de las limitaciones que conllevan, para acabar enumerando las funciones propias de un vigilante de seguridad

según el convenio colectivo del sector, pero no denuncia en ningún momento cómo ni que disposición legal o doctrina jurisprudencial ha infringido la sentencia que recurre.

SEGUNDO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (SSTS de 27 y 28 de enero de 1992, R. 824/1991 y 1053/1991, 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997, R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996, 23 de septiembre de 1998, R. 4478/1997, 7 de abril de 2005, R. 430/2004, 25 de abril de 2005, R. 3132/2004, y 4 de mayo de 2005, R. 2082/2004).

La recurrente, nacida el 7-11-65, pretende el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de vigilante de seguridad, en la que comenzó a prestar servicios el 30-4- 99. Presenta unas dolencias objetivadas de síndrome de ansiedad con afectación severa y dependencia de benzodiazepinas; antecedentes de dependencia alcohólica de larga evolución; diagnóstico de fibromialgia; ambliopía izquierda con severa disminución de la agudeza visual; y tuberculomas cerebrales e hidrocefalia tratada mediante derivación ventrículo-peritoneal. Esas lesiones la limitan para actividades de riesgo para sí misma o terceros y aquellas otras que precisen visión binocular, alto/medio nivel de concentración y atención e importantes requerimientos físicos. La sentencia recurrida, que confirma el fallo de instancia, ha desestimado sus pretensiones porque, al margen de las dolencias pretéritas como los tuberculomas y la dependencia alcohólica, la demandante en la actualidad tiene una merma de la capacidad visual y fibromialgia. La primera es irrelevante puesto que conserva en un ojo el 70% y en el otro un 10%, y además es anterior al comienzo de su actual profesión. En cuanto a la fibromialgia, no está acreditado que produzca menoscabo alguno y al carecer de repercusión funcional resulta intrascendente a efectos laborales. Aparte de que la profesión de vigilante de seguridad no exige grandes esfuerzos físicos, vista normal ni especial tensión nerviosa, que son los únicos factores contraindicados con el trabajo.

La sentencia alegada de contraste es la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 12 de noviembre de 2002, que confirma el reconocimiento de una incapacidad permanente total efectuado en la instancia para la profesión habitual de vigilante de seguridad. El actor en este caso padece una patología psíquica caracterizada por ansiedad, rumiación continua de pensamientos sobre un conflicto laboral que desemboca en despido, hiporexia e insomnio global, apareciendo ánimo sub- depresivo congruente con una situación vital negativa. Tales dolencias, a juicio de la sentencia, incapacitan para el desempeño de las principales tareas de la profesión del actor, que pueden requerir el uso de la fuerza y exigen de quien las desempeña un equilibrio psíquico del que aquél carece.

No puede apreciarse la contradicción alegada porque la recurrente consta que padece una ambliopía izquierda con severa disminución de la capacidad visual, anterior a que comenzara su prestación de servicios como vigilante de seguridad, y un diagnóstico de fibromialgia del que no hay constancia que tenga alguna repercusión funcional; mientras que el actor de la sentencia de contraste tiene objetivado un desequilibrio psíquico, incompatible con el ejercicio de su profesión habitual.

Por otra parte, esta Sala viene declarando reiteradamente que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general (autos y sentencias de 3 de marzo de 1998, R. 3347/1997, 22 de marzo de 2002, R. 2914/2001, 27 de febrero de 2003, R. 2566/2002, 7 de octubre de 2003, R. 2938/2002, 19 de enero de 2004, R. 1514/2003, 11 de febrero de 2004, R. 4390/2002 y 10 de diciembre de 2004, R. 5252/2003). En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2.005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004) y 2 de noviembre de 2.005 (R. 3117/2004) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la

garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo (sentencias de 19 de noviembre de 1991, R. 1298/1990, 27 de enero de 1997, R. 1179/1996, 18 de junio de 2001, R. 1768/2000, 22 de marzo de 2002, R. 2654/2001, 27 de octubre de 2003, R. 2647/2002, 11 de febrero de 2004, 4390/2002 y 9 de julio de 2004, R. 3145/2003).

TERCERO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita. Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Luis Antonio Ruiz de Larringa Benavides, en nombre y representación de DOÑA Sara contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de fecha 17 de octubre de 2006, en el recurso de suplicación número 1820/06, interpuesto por DOÑA Sara, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Vitoria de fecha 20 de febrero de 2006, en el procedimiento nº 823/05 seguido a instancia de DOÑA Sara contra TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL e INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre invalidez permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL515.504

Jurisprudencia

Cabecera: Falta de contradicción. Recurso de suplicación. Procede contra sentencias que resuleven sobre la pretensión de concesión de una incapacidad permanente denegada en vía administrativa. No hay contradicción si la sentencia de contraste contempla el caso de una diferencia de cuantía de la pensión reconocida en vía administrativa inferior a 300.000 ptas.

Jurisdicción: Social

Ponente: Jesús Gullón Rodríguez

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 23/09/2004

Tipo Resolución: Sentencia

Sala: Cuarta

Sección: Primera

Número Recurso: 4168/2003

ENCABEZAMIENTO:

Procedimiento: **Social**

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Septiembre de dos mil cuatro.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Cándido Sanisidro López, en nombre y representación de D. Octavio, contra la sentencia de 23 de mayo de 2.003 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso de suplicación núm. 4870/00, interpuesto frente a la sentencia de 14 de septiembre de 2.000 dictada en autos 266/00 por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Santiago de Compostela seguidos a instancia de D. Octavio contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social y las empresas Argenova, S.A., Pescanova, S.A. y Calanova, S.A., sobre Invalidez.

Han comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida, las entidades mercantiles ARGENOVA, S.A., PESCANOVA, S.A. y CALANOVA, S.A. representadas por el Letrado D. Ricardo Estrada Ibars, el INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA representada por el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla y el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL representada por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha 14 de septiembre de 2.000, el Juzgado de lo Social 2 de Santiago de Compostela, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Que estimando como estimo, parcialmente, la demanda formulada por D. Octavio contra el INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, debo declarar y declaro al demandante afecto de Invalidez Permanente, derivada de enfermedad común, en grado de Incapacidad Permanente Absoluta, con el derecho a percibir una prestación mensual equivalente al 100% de la Base Reguladora de sesenta y siete mil quinientas noventa y nueve pesetas (67.599 ptas.), con efectos económicos desde el 9 de julio de 1999, sin perjuicio de las mejoras correspondientes, condenando al I.S.M. a estar y pasar por esta declaración, acatándola y cumpliéndola, y al abono de la referida pensión en los términos indicados en esta Sentencia».

En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: 1º.- El demandante, nacido el 9 de septiembre de 1959, afiliado al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, Marinero de altura de profesión habitual, solicitó en fecha 30 de diciembre de 1998, la pensión de invalidez al amparo del Convenio Hispano-Argentino de Seguridad Social, siendo desestimada mediante Resolución del I.S.M. de fecha 17 de enero de 2000 al no reunir 5 años de carencia genérica.- 2º.- El demandante acredita cotizados un total de 1.259 días a la Seguridad Social española, de los cuales 122 días se corresponden con el denominado fichero histórico (26 de junio al 25 de octubre de 1977), 755 días cotizados al R.E.T.M. en

diferentes períodos de tiempo comprendidos entre el 16 de marzo de 1977 y el 23 de noviembre de 1998 (destacándose que estuvo afiliado por cuenta de 'Calanova, S.A.' desde el 1 de octubre de 1998 hasta el 31 de octubre del mismo año y en 'Argenova, S.A.' desde el 1 de noviembre de 1998 hasta el 23 de noviembre de 1998) y 382 días en el R.G.S.S. desde el 23 de enero de 1987 al 25 de junio de 1991.- 3º.- El demandante causó baja médica derivada de enfermedad común el 5 de diciembre de 1997, pasando a situación de I.T., siendo dado de alta el 23 de noviembre de 1998 por propuesta de invalidez.- 4º.- Según certificado expedido por 'Argenova, S.A.' el 30 de noviembre de 1998, el actor ingresó en la misma el 1 de mayo de 1997 y fue dado de baja el citado 23 de noviembre de 1998.- 5º.- Al parecer, la empresa codemandada dio de alta al trabajador demandante en la Seguridad Social argentina en el período comprendido entre el 15 de julio de 1997 y el 30 de septiembre de 1998.- 6º.- La Base Reguladora de la prestación interesada, calculada por la Entidad Gestora respecto del período 11/93-10/98, asciende a sesenta y siete mil quinientas noventa y nueve pesetas (67.599 ptas.) mensuales 7º.- Previo el Informe Médico de Síntesis de fecha 5 de julio de 1999, el Equipo de Valoración de Incapacidades elevó propuesta fechada el 9 de julio de 1999 sobre invalidez permanente absoluta derivada de enfermedad común.- 8º.- Que el demandante padece las siguientes dolencias: Cirrosis hepática alcohólica y VHC. Trombosis portal con encefalopatía hepática pre-transplante. Transplante hepático ortotópico (12/98). Astenia moderada. Disnea de moderados esfuerzos.- 9º.- Presentada reclamación previa, fue desestimada mediante Resolución de 12 de mayo de 2000».

SEGUNDO.- Posteriormente, con fecha 23 de mayo de 2.003, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: «Que estimado el recurso de suplicación interpuesto por el ISM contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Santiago de Compostela, con fecha 14-9-00, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución y con estimación parcial de la demanda inicial formulada por D. Octavio en el sentido de que el abono de la pensión de IPA reconocida lo sea al amparo del convenio Hispano Argentino, y la prorrata a cargo del ISM del 73'97% de la base reguladora de 67.599 pts. manteniendo el resto de los pronunciamientos».

TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de D. Octavio el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, el día 11 de julio de 2.003, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 29 de junio de 2.001 y la infracción de lo establecido en el artículo 189.1 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 21 de enero de 2.004, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de diez días.

QUINTO.- Evacuado el trámite de impugnación por la representación de la parte recurrida, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 20 de septiembre de 2.004, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El demandante solicitó al Instituto Social de la Marina el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, lo que le fue denegado en vía administrativa en resolución de 17 de enero de 2.000 por no acreditar el periodo mínimo de cotización exigible para el acceso al derecho solicitado. Interpuso demanda pidiendo el reconocimiento de la referida prestación, en cuantía equivalente al 100% de una base reguladora de 225.483 ptas. mensuales. El Juzgado de lo Social número 2 de los de Santiago de Compostela estimó en parte la demanda, declaró al actor en situación de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y condeno al Instituto Social de la Marina al pago de una pensión equivalente al 100% de la base reguladora de 67.599 ptas. mensuales.

Recurrió en suplicación el Instituto Social de la Marina, postulando en el recurso que, manteniéndose el indiscutido grado de incapacidad, se estableciese que la responsabilidad del recurrente se contraían exclusivamente al percibo de una pensión mensual con cargo a la Seguridad Social Española, al amparo del Convenio Hispano-Argentino de Seguridad Social, del 73,97% de la base reguladora de 67.599 ptas. mensuales.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en sentencia de 23 de mayo de 2.003, estimó el recurso y revocando en parte la decisión de instancia, fijó la prestación en los términos pedidos por el recurrente.

SEGUNDO.- Frente a esta resolución interpone ahora el demandante el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, en el único punto discutido que contrae a la inadmisibilidad del recurso de suplicación, puesto que -se afirma en el escrito- la reclamación que se ventilaba en esa sede de recurso no superaba la cuantía de 1.803 euros, desde el momento en el ISM reconocía que debía abonar el 73,97% de la base reguladora de 67.599 ptas., por lo que el resto, 17.596 ptas. por catorce pagas, supondría la cantidad de 246.344 ptas., inferior a las 300.000 ptas. a que se refiere el artículo 189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Como sentencia de contraste, invoca el recurrente la dictada por esta Sala de los Social del Tribunal Supremo en fecha 29 de junio de 2.001, pero como va a verse y ponen de relieve tanto el Ministerio Fiscal como los recurridos, entre la sentencia recurrida y la referencial pretendidamente contradictoria con ésta no existe la identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para que el recurso de casación para la unificación de doctrina sea viable.

La sentencia de contraste parte de una situación de hecho completamente distinta a la recurrida puesto que en aquélla, se había reconocido al demandante en vía administrativa una pensión de incapacidad permanente absoluta que comportaba el derecho al cobro de una pensión equivalente al 100% de la base reguladora de 93.715 ptas. Como no estuviera conforme con la base reguladora, planteó demanda en solicitud de que ésta se fijase en 99.827 ptas. mensuales, pretensión que fue admitida por el Juzgado de instancia. En suplicación, sin embargo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la decisión de instancia y absolvió al INSS de las pretensiones deducidas en su contra. En este caso, recurrió también el actor en casación para la unificación de doctrina, y esta Sala en la sentencia de contraste declaró que el recurso de suplicación interpuesto en su día era improcedente, puesto que no se trataba realmente del reconocimiento de una prestación de seguridad social encuadrable en la letra c) del artículo 189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino que lo que discutía el actor era el importe de su pensión de incapacidad permanente. La base reguladora de la pensión correspondiente, establecida inicialmente por el INSS, ascendía a 93.715 pesetas mensuales; la pedida y reconocida por el Juzgado equivalía a 99.827 pesetas mensuales y la diferencia suponía 6.112 pesetas. Lo que multiplicado por 14 abonos anuales determinaba una diferencia de 85.568 pesetas, inferior a las 300.000 ptas. previstas por la norma.

Por otra parte, en la sentencia de contraste se viene a distinguir perfectamente entre pleitos que versan sobre el derecho a la prestación misma, que es objeto de un reconocimiento o una denegación, combatidos, uno u otra, por las personas o entidades afectadas y aquellos otros contenciosos que se suscitan, no sobre la prestación en su integridad, sino sobre aspectos de la misma, en particular, una diferencia en la cuantía reconocida por el ente gestor competente. En el primer caso siempre es procedente el recurso de suplicación, tal y como previene el artículo 189.1 c) LPL y en el segundo no, por aplicación del mismo precepto en su número 1º. Esta doctrina viene siendo reiterada en sentencias como las de 19 mayo 1997, 29 diciembre 1998 y 29 mayo 2000, entre otras muchas.

TERCERO.- En resumen, la sentencia recurrida parte de una situación completamente distinta de que sirvió de base a la sentencia de contraste, desde el momento en que en aquélla se postulaba el reconocimiento de una pensión de incapacidad que había sido negada en vía administrativa y sin embargo en la sentencia de contraste, reconocida una cuantía determinada por el INSS, se postulaba judicialmente una diferencia en la prestación que no alcanzaba las 300.000 ptas. Son entonces supuestos distintos que han determinado que las sentencias comparadas sean distintas, pero en absoluto contradictorias, razón por la que debió inadmitirse en su día el recurso por falta de contradicción, situación que en este trámite procesal conduce a la desestimación del recurso, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento sobre costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de D. Octavio, contra la sentencia de 23 de mayo de 2.003 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Galicia en el recurso de suplicación núm. 4870/00, interpuesto frente a la sentencia de 14 de septiembre de 2.000 dictada en autos 266/00 por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Santiago de Compostela seguidos a instancia de D. Octavio contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social y las empresas Argenova, S.A., Pescanova, S.A. y Calanova, S.A., sobre Invalidez.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jesús Gullón Rodríguez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

EL ALCOHOL DEPENDENCIA COMO MODELO DE CONTRASTE PARA LA INCAPACIDAD

<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL3.059.581

Jurisprudencia

Cabecera: Rcd. Prestación por muerte y supervivencia. Suicidio: la contingencia es laboral. Falta de contradicción. Voto particular. suicidio accidente no laboral. Suicidio de un trabajador responsabilidad civil. Suicidio accidente de trabajo autobus.

Jurisdicción: Social

Ponente: Jordi Agustí Juliá

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 04/12/2012

Tipo Resolución: Sentencia

Sala: Cuarta

Sección: Primera

Número Recurso: 3711/2011

ENCABEZAMIENTO:

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a cuatro de Diciembre de dos mil doce.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don José Ruymán Torcelli García en nombre y representación de TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL contra la sentencia dictada el 22 de septiembre de 2011 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en recurso de suplicación nº 186/11, interpuesto contra la sentencia de fecha 19 de junio de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla, en autos núm. 554/09, seguidos a instancias de DOÑA Lidia, y los menores Regina y Julio contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FREMAP, TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA (TUSSAM) sobre PRESTACIONES.

Ha comparecido en concepto de recurrido el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL representado por el Letrado Don Andrés Ramón Trillo García, DOÑA Lidia y los menores Regina y Julio representados por el Letrado Don Rafael Sánchez Barriga Peñas, FREMAP, Mutua de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61 representada por el Letrado Don Florentino Gómez Campoy.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JORDI AGUSTI JULIA.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha 19 de junio de 2010 el Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla dictó sentencia, que posteriormente fue aclarada por auto de fecha 23 de junio de 2010, constando los siguientes hechos que se declararon probados: « 1º.- D. Rosendo, nacido el día NUM000 -1971 y con DNI NUM001, ha figurado afiliado al Régimen General de la Seguridad Social con el número NUM002. Prestó servicios por cuenta de TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA (TUSSAM), con la categoría profesional de conductor de autobús desde el día 27-3-2000. No consta que ostentara cargo de representación legal de los trabajadores en la empresa como tampoco su afiliación a organización sindical alguna. La indicada entidad tiene concertada la cobertura de los accidentes de trabajo de sus empleados con Mutua Fremap. Los días 11 y 12 de enero de 2005 D. Rosendo precisó asistencia médica por presentar una crisis de ansiedad tras sufrir un accidente de tráfico mientras realizaba su trabajo. En marzo de 2007 D. Rosendo precisó una asistencia sanitaria por dolencia abdominal que los facultativos atribuyeron a una situación de estrés laboral. En abril de 2007, el

especialista en Aparato Digestivo que trataba a D. Rosendo de su dolencia, recomendaba que quedara sometido a un horario de trabajo fijo que le permitiera seguir un horario fijo de comidas. **2º.-** El día 21-5-2007 tuvo lugar una huelga en el seno de TUSSAM, durante la cual se produjeron diversos daños a bienes de la empresa. D. Rosendo fue detenido por la Policía Nacional cuando se dirigía a su centro de trabajo a secundar la huelga. Tras permanecer detenido en dependencias policiales fue puesto a disposición judicial que decretó su puesta en libertad con cargos. Como consecuencia de estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla tramitó diligencias previas seguidas con el número 3425/2007, en las que D. Rosendo figuraba como imputado. Mediante auto de fecha 20-6-2007 el indicado Juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor conocido. TUSSAM se había personado en dicho procedimiento penal, recurriendo en reforma el auto de sobreseimiento. El recurso fue desestimado por auto de fecha 30-7-2007. Contra la anterior resolución se interpuso por TUSSAM recurso de apelación el cual fue estimado. Consecuencia de ello, y reaperturada la causa, el día 26-2-2008, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla llevó a cabo una rueda de reconocimiento en la que participó D. Rosendo como imputado. El testigo que debía identificar a las personas involucradas en los hechos investigados no identificó a D. Rosendo como uno de ellos. Por la representación procesal de TUSSAM se solicitó la realización de otras diligencias de investigación que fueron rechazadas por el Juez Instructor. A la vista del resultado de las actuaciones, el Ministerio Fiscal emitió informe solicitando el sobreseimiento provisional de las actuaciones. El día 7-4-2008 se dictó auto de sobreseimiento. Contra la anterior resolución TUSSAM interpuso recurso de reforma, el cual fue desestimado por auto de fecha 27-11-2008. Interpuesto recurso de apelación por TUSSAM éste fue desestimado. Durante la tramitación de las diligencias previas, la prensa vino recogiendo declaraciones de responsables de TUSSAM, en las que se expresaba que la empresa estaba a la espera del resultado del procedimiento penal para resolver sobre la imposición de medidas disciplinarias a los trabajadores imputados. Igualmente se recogían noticias y declaraciones en las que tratando el tema de la negociación colectiva y las relaciones entre sindicatos y empresa, se aludía siempre a la situación de los trabajadores que estaban incurso en procedimiento penal. En concreto, y en relación a D. Rosendo, tras su detención, se procedió a la incoación de expediente disciplinario. De esta forma, el 6-7-2007 la empresa dirigió a D. Rosendo escrito en el que se le informaba de la incoación de expediente disciplinario, se le describían los cargos (lanzar objetos contundentes contra los autobuses el día 21-5-2007) y se le daba un plazo de 5 días para alegaciones. El día 12-7-2007 D. Rosendo presentó escrito de alegaciones negando su participación en los hechos. El día 18-7-2007 la empresa le dirigió nuevo escrito en el que se le informaba de la suspensión del expediente hasta la resolución del procedimiento penal pendiente. El día 3-4-2008, el vicepresidente de TUSSAM firmó un documento asumiendo una serie de compromisos, condicionados a que se desconvocara la huelga prevista para la feria 2008. Entre tales compromisos se encontraba el referido a los trabajadores imputados en la causa penal por los hechos ocurridos en mayo de 2007, según el cual la empresa resolvería los expedientes disciplinarios de estos trabajadores una vez finalizado el procedimiento penal, comprometiéndose a que estos expedientes no supondrían la extinción de la relación laboral de los trabajadores afectados. El Comité de Empresa contestó elaborando nueva propuesta que en lo referente a los expedientes disciplinarios incluía que, de no declararse responsabilidad penal, la empresa archivaría definitivamente los expedientes disciplinarios y que, de declararse responsabilidad penal, la empresa sancionaría los hechos como máximo, como falta grave. El día 19 de mayo de 2009, la empresa adoptó la decisión de archivar el expediente disciplinario incoado a D. Rosendo como consecuencia del archivo del procedimiento penal. La decisión no pudo ser notificada al trabajador por cuanto éste ya había fallecido. **3º.-** El día 22-5-2007 inició proceso de incapacidad temporal por contingencia común con diagnóstico de «estado de ansiedad». Durante el proceso de incapacidad temporal fue atendido por el Equipo de Salud Mental así como por el servicio de Medicina Interna que efectuaba seguimiento y control de la dolencia digestiva. Una y otra dolencia era conectada por los distintos facultativos que atendían a D. Rosendo con la situación de estrés que padecía debido a la imputación en el procedimiento penal y a su situación en la empresa. D. Rosendo obtuvo el alta por mejoría el día 2-5-2008. El día 6-5-2008 D. Rosendo presentó escrito en la empresa dirigido a la Gerencia solicitando la asignación al turno fijo de mañana por motivos de salud. Se solicitó informe del Departamento de Prevención y Comisión de Asuntos Sociales, decidiéndose no conceder el turno solicitado por no estar suficientemente justificada la petición. D. Rosendo reiteró la petición el 3-6-2008, no siendo atendida. **4º.-** Reincorporado D. Rosendo a su puesto de trabajo como conductor, el día 5-11-2008, D. Rosendo, dentro de su turno de trabajo y conduciendo un autobús sin pasajeros, salió de su ruta y se tomó la N-630 sentido a Mérida. Durante el trayecto, estacionó en un área de descanso próxima a una gasolinera y llamó por teléfono al Servicio de emergencia 112, manifestando desconocer donde estaba, y que se encontraba muy nervioso y agobiado. Una

dotación de la Guardia Civil se dirigió al lugar donde se encontraba D. Rosendo. Se comprobó que D. Rosendo no se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. **5º.-** El día 6- 11-2008 D. Rosendo inició proceso de incapacidad temporal por contingencia común con diagnóstico de ansiedad. El día 18-11- 2008 D. Rosendo falleció. La causa del fallecimiento fue el suicidio. El lugar en el que se produjo el fallecimiento fue su propio domicilio. **6º.-** El fallecimiento de D. Rosendo, ha dado lugar a una pensión de viudedad a favor de Dña. Lidia y a dos prestaciones de orfandad a favor de los menores Regina y Julio, reconocidas por el INSS y sobre una contingencia de accidente no laboral. Contra la anterior resoluciones formuló reclamación previa impugnando la contingencia de las prestaciones, la cual fue desestimada. **7º.-** En relación al fallecimiento de D. Rosendo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no ha efectuado actuación alguna, no existiendo en sus archivos antecedentes relacionados con este trabajador».

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: «Que ESTIMANDO la demanda que en materia de DETERMINACIÓN DE CONTINGENCIA ha sido interpuesta por DÑA. Lidia, y por los menores Julio y Regina, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA FREMAP y TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M., debo declarar y declaro que la contingencia de las prestaciones de viudedad y orfandad a las que dio lugar el fallecimiento de D. Rosendo derivan de accidente de trabajo, condenando a los demandados, en el ámbito de su respectiva responsabilidad a estar y pasar por esta declaración».

SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M. ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, la cual dictó sentencia en fecha 22 de septiembre de 2011, en la que consta el siguiente fallo: «Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SAM (TUSSAM), y con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por la MUTUA FREMAP ATEPSS 61 contra la sentencia de fecha 19/06/2010 aclarada por auto de fecha 23/06/2010, dictada por el Juzgado de lo Social número OCHO de los de SEVILLA en virtud de demanda sobre Seguridad Social, formulada por DÑA. Lidia, y sus menores Regina y Julio, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General Seguridad Social, MUTUA FREMAP ATEPSS 61, y TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SAM (TUSSAM), debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida».

TERCERO.- Por la representación de TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM) se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 3 de noviembre de 2011. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en fecha 19 de mayo de 2011.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de fecha 13 de abril de 2012 se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice su impugnación en el plazo de diez días.

QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso IMPROCEDENTE, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 27 de noviembre de 2012, fecha en que tuvo lugar. En la votación correspondiente el Sr. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana de la Serrana mantuvo una posición opuesta al criterio mayoritario, y anunció la formulación de voto particular, por lo que la ponencia de este asunto fue asumida por el Sr. Jordi Agustí Julia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- 1. La demandante ha interesado que se declare que las prestaciones por muerte y supervivencia reconocidas como consecuencia del fallecimiento de su esposo, derivan de riesgo profesional. El Juzgado de lo Social nº 8 de los de Sevilla ha estimado su pretensión, e interpuesto recurso de suplicación por la empresa demandada y por la entidad aseguradora codemandada, éste ha sido desestimado por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla de fecha 22 de septiembre de 2011 (recurso 186/2011).

2. Consta acreditado -según se desprende del relato de hechos probados de la sentencia de instancia no modificado en suplicación- que el trabajador fallecido, con la categoría profesional de conductor de autobús,

para «Transportes Urbanos de Sevilla» (TUSSAM), los días 11 y 12 de enero de 2005 precisó asistencia médica por presentar una crisis de ansiedad tras sufrir un accidente de tráfico mientras realizaba su trabajo, que en marzo de 2007 precisó nueva asistencia sanitaria por dolencia abdominal que los facultativos atribuyeron a una situación de estrés laboral, y que abril de 2007 el especialista que le trataba de su dolencia recomendaba que quedara sometido a un horario de trabajo fijo que le permitiera seguir un horario fijo de comidas. Posteriormente, el día 21 de mayo de 2007 tuvo lugar una huelga en el seno de la empresa demandada, durante la cual se produjeron diversos daños a bienes de la empresa. El trabajador fallecido fue detenido por la Policía Nacional cuando se dirigía a su trabajo a secundar la huelga, y tras permanecer detenido en dependencias policiales fue puesto a disposición judicial que decretó su puesta en libertad con cargos.

Como consecuencia de estos hechos, el Juzgado de Instrucción n.º 13 de los de Sevilla tramitó diligencias previas seguidas con el número 3425/2007 en las que el fallecido figuraba como inculpado. Mediante auto de fecha 20 de junio de 2007, el Juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor reconocido, recurriéndose en reforma dicho auto por la empresa demandada y siendo desestimado por auto de 30 de julio de 2007. Interpuesto recurso de apelación por la empresa fue estimado y, como consecuencia de ello, y reaperturada la causa, el día 26 de febrero de 2008, el Juzgado de Instrucción llevó a cabo una rueda de reconocimiento en la que participó el fallecido como imputado. El testigo que debía identificar a las personas no involucradas no identificó al fallecido como uno de ellos. A la vista del resultado de las actuaciones el Ministerio Fiscal emitió informe solicitando el sobreseimiento provisional de las actuaciones, dictándose auto de sobreseimiento el 7 de abril de 2008. Contra esta resolución recurrió en reforma la empresa demandada, y desestimado este recurso, por auto de fecha 27 de noviembre de 2008, interpuso nuevo recurso, ahora de apelación, que fue igualmente desestimado.

Durante la tramitación de las expuestas diligencias, la prensa vino recogiendo declaraciones de responsables de la empresa demandada, en las que se expresaba que se estaba a la espera del resultado del procedimiento penal para resolver sobre la imposición de las medidas disciplinarias a los trabajadores imputados. En concreto y con respecto al trabajador fallecido, tras su detención, se procedió a la incoación de expediente disciplinario, remitiéndole la empresa el 6 de julio de 2007 escrito en el que se le informaba de la incoación de expediente disciplinario, describiendo los cargos (lanzar objetos contundentes contra los autobuses el día 21 de mayo de 2007) y se le daba un plazo de 5 días para alegaciones. El día 12 de julio de 2007 presentó el trabajador escrito de alegaciones negando su participación en los hechos, dirigiéndole la empresa nuevo escrito el día 18 de julio de 2007 en el que se le informaba de la suspensión del expediente hasta la resolución del procedimiento penal pendiente. Tras la asunción por la empresa de una serie de compromisos, condicionados a que se desconvocara la huelga prevista para la feria 2008, y entre tales compromisos el de resolver los expedientes disciplinarios de los trabajadores imputados penalmente, una vez finalizado el procedimiento penal, el día 19 de mayo de 2009, la empresa adoptó la decisión de archivar el expediente disciplinario incoado al trabajador fallecido, decisión que no le pudo ser notificada, al haber ya fallecido.

En fecha 22 de mayo de 2007, el trabajador inició proceso de incapacidad temporal por contingencia común con diagnóstico de «estado de ansiedad». Durante este proceso fue atendido por el Equipo de Salud mental así como por el servicio de Medicina Interna que efectuaba seguimiento y control de la dolencia digestiva. Una y otra dolencia era conectada por los distintos facultativos que atendían al trabajador con la situación de estrés que padecía debido a la imputación en el procedimiento penal y a su situación en la empresa. El día 6 de mayo de 2008, el trabajador solicitó de la empresa demandada la asignación al turno fijo de mañana por motivos de salud. Se solicitó informe del Departamento de Prevención y Comisión de Asuntos Sociales, decidiéndose no conceder el turno solicitado por no estar suficiente justificada la petición. El trabajador reiteró la petición el 3 de junio de 2008 no siendo atendida. Reincorporado el día 5 de noviembre de 2008 a su puesto de trabajo como conductor, dentro de su turno de trabajo y conduciendo un autobús sin pasajeros salió de su ruta y se tomó la N-630 sentido a Mérida. Durante el trayecto, estacionó en un área de descanso próxima a una gasolinera y llamó por teléfono al Servicio de emergencia 112, manifestando desconocer donde estaba, y que se encontraba muy nervioso y agobiado. Una dotación de la Guardia Civil se dirigió al lugar donde se encontraba el trabajador. Se comprobó que no estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Al día siguiente, 6 de noviembre de 2008, inició proceso de incapacidad temporal por contingencia común con diagnóstico de ansiedad, falleciendo el día 18 de noviembre de 2008 en su propio domicilio, siendo la causa del fallecimiento el suicidio.

3. Tras rechazar la revisión de hechos probados que instaban la demandada y codemandada recurrente, la Sala de suplicación, partiendo de la narración fáctica, que en los sustanciales se ha expuesto anteriormente, concluye en que el trabajador fallecido se había encontrado inmerso en un clima de conflictividad laboral importante, por haber comenzado una huelga en la empresa el día 21 de mayo de 2007, en cuyo seno se produjeron incidentes importantes con actuaciones penales, incluida la detención del trabajador, que fue imputado penalmente y como tal participó en una rueda de reconocimiento, siguiéndose igualmente por la empresa actuaciones disciplinarias, cuyo resultado final de archivo del expediente, por archivo de la causa penal, no llegó a conocer el trabajador a causa de su fallecimiento. Razona la Sala, que en el contexto de conflictividad laboral descrito, y pocos días después del comienzo de la huelga, el trabajador inició un proceso de incapacidad temporal por ansiedad, del que causó alta por mejoría, no resultando difícil conectar causalmente este proceso de incapacidad temporal, a pesar de que se tramitó por enfermedad común, con el ejercicio profesional, por la vía del artículo 115.2 e) de la Ley General de Seguridad Social, dado que con anterioridad no consta ningún proceso previo de incapacidad temporal por enfermedad mental. Destaca la Sala, que el trabajador obtuvo el alta por mejoría y comenzó de nuevo a trabajar, pero que a pesar de su reincorporación a la empresa, continuaba abierto el proceso penal y el disciplinario y la empresa le denegó el cambio de turno a fijo de mañana que por motivos de salud había solicitado, de manera que volvió a iniciar proceso de incapacidad temporal, con diagnóstico de ansiedad, tras el relatado episodio de pérdida de facultades psíquicas y capacidad volitiva. En estas condiciones, concluye y coincide la Sala de suplicación, con la sentencia de instancia, en que dado que antes del inicio de la problemática laboral no existe constancia de enfermedad mental del trabajador, en la exclusiva relación del suicidio con la problemática laboral, cuyas consecuencias para el trabajador no terminaron con la huelga, dado que sus derivaciones se arrastraron hasta el final de sus días, pues hasta el omento se supo inmerso en un expediente disciplinario, cuyo final favorable no llegó a conocer.

Como conclusión final, sienta la Sala de suplicación, que *«de todo lo expuesto, bien por la vía del artículo 115.1 de Ley General de la Seguridad Social, por considerar la enfermedad mental del trabajador que le llevó a quitarse la vida, como derivada directamente del quehacer laboral por aplicarse la presunción que tal norma contiene al no haberse acreditado que causa distinta a la de trabajo produjera la dolencia que le llevó al suicidio, bien por la vía del artículo 115.2 e) de la misma ley, entendiéndose que la dolencia mental que padecía el trabajador y que le llevó a quitarse la vida fue contraída por la realización del trabajo y tuvo por causa exclusiva la ejecución de este, se desprende que el fallecimiento del trabajador deriva de accidente de trabajo.»*

4. Contra dicha sentencia de suplicación, interpone recurso de casación para la unificación de doctrina la empresa demandada, aportando como sentencia de contraste la dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 19 de mayo de 2011 (recurso 2231/2010). En esta sentencia, el trabajador demandante, conductor- perceptor, igualmente para la empresa «Transportes Urbanos de Sevilla» (TUSSAM), en fecha 22 de mayo de 2007 inició proceso de incapacidad temporal por contingencias comunes, permaneciendo en dicha situación hasta el 16 de mayo de 2008, fecha en que fue dado de alta por control INSS, duración doce meses. Incoado de oficio expediente administrativo, el trabajador fue reconocido por el EVI que el 10 de noviembre de 2008 emite informe de valoración médica en el que se consigna que asegurado padece trastorno adaptativo secundario a proceso vital estresante (problemática laboral: huelga, arresto, juicios repetidos que desestiman el caso y empresa que recurre manteniendo causa abierta) reacción depresiva prolongada, considerándole, en atención a la medicación, limitado para tareas de riesgo para si y para terceros, indicándose que probablemente si se solucionan los problemas judiciales, dada la edad del paciente, se resolverán los problemas por lo que es revisable. El expediente finalizó mediante resolución del INSS de fecha 14 de noviembre de 2008, que declaró al trabajador afecto de incapacidad permanente total para su profesión habitual, y disconforme con la contingencia declarada, el trabajador solicitó se declarase el origen profesional de la situación de incapacidad permanente, siendo desestimada su reclamación. Consta probado, que efectuada convocatoria de huelga en la empresa TUSSAM del 21 al 27 de mayo de 2007, el día 21 de mayo el trabajador fue detenido por la policía nacional por haber sido visto -según el atestado policial- arrojando piedras contra los autobuses en la Avenida de Andalucía, y habiéndose incoado para la averiguación de los hechos Diligencias Previas núm. 425/2007 por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de los de Sevilla en las que el 7 de abril de 2008, recayó auto de sobreseimiento provisional y archivo, que fue recurrido en reforma y subsidiaria apelación por la empresa, confirmándose el mismo por Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla de 11 de marzo de 2008.

La empresa incoó en julio de 2007 expediente disciplinario al trabajador por causar daños materiales durante la jornada de huelga, suspendiéndose su tramitación hasta tanto se resolviera el procedimiento penal cuyo archivo determinó, asimismo, el del expediente, lo que se comunicó al trabajador, mediante burofax, el 19 de mayo de 2009. El trabajador tenía asignado, el día 21 de mayo de 2007, servicios mínimos en jornada que comenzaba a las 15 horas, habiendo puesto la empresa a disposición de la plantilla distintos mecanismos (telefónicos e informáticos) para informar a los trabajadores del mantenimiento o no de la convocatoria de huelga y del turno atribuido a cada uno para el caso de que la misma se desconvocara.

5. Habiendo reclamado el trabajador que la incapacidad permanente total declarada se reconociera como derivada de accidente de trabajo, la demanda fue desestimada en la instancia, e interpuesto recurso de suplicación, fue asimismo desestimado por la sentencia de contraste. La Sala de suplicación, tras hacer referencia a la definición del accidente de trabajo que efectúa el artículo 115.1 de la Ley General de la Seguridad Social, y a la presunción que establece el apartado 3 del propio artículo 115 de la misma LGSS, razona que: *«resultando incontrovertido que el presente supuesto los hechos de los que se dice derivan las secuelas psicológicas del actor, se producen durante el período de huelga, en horas en las que aquél no se encontraba prestando los servicios mínimos para los que fue designado, y teniendo en cuenta asimismo que el demandante ni se hallaba en las dependencias de la empresa realizándolos ni en sus cometidos de conducción, y de produjeron fuera del horario para el que estaba prevista su prestación de servicios, hallándose en acciones relacionadas exclusivamente con la huelga de la que era partícipe, debe concluirse que, con independencia del resultado de las Diligencias Penales y disciplinarias que le fueron incoadas, resulta evidente que los hechos se produjeron en circunstancias totalmente ajenas a las que determinan cualquiera de los supuestos de accidente de trabajo previstos en el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, cuya infracción se denuncia, y con ruptura del nexo causal, como así entendió en caso análogo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 24-2-1998.»*

SEGUNDO.- 1. La parte recurrida, viuda del trabajador fallecido, al impugnar el recurso, niega que entre las sentencias comparadas se de la necesaria contradicción, afirmación que comparte el preceptivo informe del Ministerio Fiscal.

2. Con carácter previo, pues, la primera cuestión que ha de resolver la Sala es la referente a la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina, comprobando si entre las resoluciones contrastadas concurre la necesaria contradicción que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral; y esta contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto de los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas, al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, según ha declarado la Sala en sentencias de 9 de febrero de 2004 (Rec. 2515/2003); 10 de febrero de 2005 (Rec. 914/2004); 15 de noviembre de 2005 (Rec. 4922/2004); 24 de noviembre de 2005 (Rec. 3518/2004); 29 de noviembre de 2005 (Rec. 6516/2003); 16 de diciembre de 2005 (Rec. 338020/04); 3 de febrero de 2006 (Rec. 4678/2004); 6 de febrero de 2006 (Rec. 4312/2004); 7 de febrero de 2006 (Rec. 1346/2005); 28 de febrero de 2006 (Rec. 5343/2004); 15 de septiembre de 2008 (Rec. 1126/2007) y 24 de septiembre de 2008 (Rec. 1523/2007).

TERCERO.- 1. Si bien es cierto que las dos sentencias comparadas resuelven supuestos de determinación de contingencia, y existen elementos comunes entre las mismas, ya que se trata de trabajadores que prestaban servicios como conductores para la misma empresa -Transportes Urbanos de Sevilla- y en ambas sentencias se parte de la huelga de transportes acaecida en la ciudad de Sevilla el día 21 de mayo de 2007, los dos trabajadores fueron detenidos simultáneamente, iniciándose diligencias previas con imputación penal inicial -si bien con resolución final de sobreseimiento de las actuaciones- e incoación de sendos expedientes disciplinarios, iniciando ambos trabajadores proceso de incapacidad temporal por estrés laboral el día 22 de mayo de 2007, que terminó en la sentencia de contraste con la declaración de incapacidad permanente y en el de la recurrida con el fallecimiento por suicidio, basta con la descripción de lo declarado probado en cuanto a los elementos fácticos soporte de la declaración judicial que efectúa cada una de las sentencias, tal como ha quedado reflejado en el primero de los fundamentos de la presente resolución, para poner de manifiesto la

existencia de profundas diferencias entre los dos casos, de lo que deviene que las situaciones contempladas no sean homologables a los fines de la unificación doctrinal que con este excepcional recurso se persiguen. Como ha venido señalando reiteradamente esta Sala, en supuestos varios, entre otras en las sentencias de 10 de mayo de 2005 (rec. 6082/2003) y 30 de octubre de 2007 (rec. 1766/2006), aun cuando pueda ser patente que las dos sentencias comparadas hayan contemplado una misma realidad, «lo cierto es que la proyección de esta realidad en el proceso es diferente y en esa discrepancia entre la verdad material y la procesal debe primar esta última a efectos de la contradicción, ya que no se comparan los hechos en sí mismos, sino los hechos tal como aparecen acreditados en las sentencias y si éstas deciden sobre apreciaciones fácticas distintas, no habrá contradicción a efectos doctrinales, que es la que interesa en este recurso, aunque puede haberla respecto a la versión de los hechos, que quedan fuera de la finalidad unificadora. No se trata sólo de que la relación fáctica de la sentencia recurrida sea más detallada que la sentencia de contraste, sino de que en aquella sentencia se introducen datos relevantes que no constan en la segunda»

2. En efecto, en primer lugar, consta en la sentencia recurrida, que tras ser recurrido el auto de archivo provisional de las actuaciones penales, se llevó a cabo una rueda de reconocimiento en la que participó el trabajador, no siendo identificado por el testigo como una de las personas involucradas en los hechos, extremo éste que no consta en la sentencia de contraste. Pero más importantes son las diferencias existentes en la evolución del proceso de incapacidad temporal en uno y otro caso. Así, además de que en el supuesto de la sentencia recurrida la salud del trabajador ya venía estando afectada psíquicamente por el trabajo, antes de la baja de 22 de mayo de 2007, primero por una crisis de ansiedad derivada de accidente de tráfico, y después por trastornos digestivos siendo la causa el estrés laboral, y nada se refiere con respecto a la situación de salud del trabajador anterior a la citada fecha en la sentencia de contraste, resulta que en dicha sentencia consta que el trabajador fue dado de alta por control INSS al haber agotado los 12 meses de duración, iniciándose de oficio expediente administrativo para el reconocimiento de incapacidad permanente por enfermedad común. Por el contrario, en la sentencia recurrida, tras el alta por mejoría en fecha 2 de mayo de 2008, el trabajador se reincorporó al trabajo, y cuatro días después solicitó la asignación al turno de mañana por motivos de salud, lo que le fue denegado por la empresa por estimar que no estaba suficientemente justificada la petición, que reiteró sin ser atendida, y el día 5 de noviembre de 2008, cuando desempeñaba su trabajo como conductor de un autobús sin pasajeros sufrió el episodio de ansiedad con pérdida de facultades psíquicas y capacidad volitiva ya descrito en el fundamento jurídico primero de esta resolución, lo que motivó una nueva baja e inicio de proceso de incapacidad temporal al día siguiente por ansiedad, falleciendo 12 días mas tarde siendo la causa de fallecimiento el suicidio. Pues bien, no sólo es el hecho puntual de la detención policial, la imputación penal y la incoación de expediente disciplinario, lo que ha llevado a la Sala de suplicación en la sentencia recurrida a estimar existente la relación de causalidad entre el quehacer laboral y el suicidio del trabajador, y en definitiva como contingencia la de accidente de trabajo, sino también -y significativamente- todas estas circunstancias que se han relatado y que no concurren en el caso de sentencia de contraste, razón por la cual ésta entendió inexistente el nexo causal y denegó la declaración de contingencia de accidente de trabajo de la incapacidad permanente reconocida.

3. En definitiva, se trata de dos sentencias que, en sendos supuestos particulares y concretos, adoptaron decisiones de signo diverso, con relación a la determinación de contingencia, en atención a las respectivas circunstancias acreditadas en cada uno de los procesos con respecto a dicha determinación, por lo cual -como ya se anticipó- no puede hablarse de discrepancia doctrinal alguna que precise de unificación.

CUARTO.- 1. Los razonamientos procedentes conllevan -de conformidad con la propuesta del Ministerio Fiscal- a desestimar en este momento procesal, por falta del requisito ineludible de contradicción, el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa demandada, con pérdida del depósito constituido para recurrir, imposición de las costas a la recurrente, y dando a las consignaciones, en su caso efectuadas, el destino legal acorde con los pronunciamientos de esta sentencia (artículos 226 y 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el Letrado D. José Ruymán Torcelli García, en nombre y representación de «**TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL**» (TUSSAM), contra la sentencia dictada el día 22 de septiembre de 2011

por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso de suplicación 186/2011, que a su vez había sido formulado frente a la sentencia que, con fecha 19 de junio de 2010, pronunció el Juzgado de lo Social número 8 de los de Sevilla, en los autos número 554/2009, seguido por determinación de contingencia, a instancia de D^a Regina y los menores Regina y Julio contra **«TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL» (TUSSAM), Mutua FREMAP, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**. Declaramos la firmeza de la Sentencia recurrida. Con imposición de costas a la recurrente, pérdida de depósito y dando a las consignaciones efectuadas el destino legal que corresponda.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR:

VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Manuel López García de la Serrana, y al que se adhiere el Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio Martín Valverde, de conformidad con lo establecido en el artículo 260.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la sentencia de 4 de diciembre de 2012, dictada en el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina nº 3711/11.

De conformidad con lo establecido en el artículo 260.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, formulo voto particular a la sentencia dictada en el recurso nº 3711/11, en el que expreso con total respeto, mi discrepancia respecto del criterio que mantiene la postura mayoritaria de la Sala al resolver las cuestiones que se suscitan en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sosteniendo la posición que mantuve en la deliberación.

Mi discrepancia con el criterio mayoritario de la Sala radica en que entiendo que si existe contradicción entre las sentencias comparadas, en los términos requeridos por el artículo 217 de la L.P.L. para la viabilidad del recurso que nos ocupa. La solución dada por la sentencia de la que discrepo ha impedido entrar a conocer del recurso y a aplicar la doctrina correcta que llevaría a desestimar la demanda por ser improcedente la declaración de existencia de accidente laboral. Fundo mi opinión discrepante en los siguientes apartados.

Primero. Sobre el objeto de la controversia planteada en esta litis.

Se debate si determinados hechos son constitutivos de accidente laboral y, más concretamente, si puede jugar la presunción a favor de la existencia de accidente laboral que establece el artículo 115-3 de la L.G.S.S. y si sería de aplicar el artículo 115-2-e) de la L.G.S.S., precepto que establece que merecen la calificación de accidente laboral las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de su trabajo, «siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo».

Este fue el debate planteado en la sentencia recurrida y en la sentencia de contraste que han dado respuestas distintas a la misma cuestión. La sentencia de contraste ha rechazado la calificación de accidente laboral porque la presunción a favor de su existencia no podía jugar al estar el contrato suspendido al tiempo del supuesto accidente y porque la enfermedad no tenía por causa exclusiva el trabajo realizado. La sentencia recurrida ha resuelto lo contrario: ha aplicado la presunción a favor de la existencia de accidente laboral, sin fijar la fecha en que ocurrió, ni abordar el tema de la suspensión del contrato y ha añadido que, además, la enfermedad tiene por causa exclusiva el trabajo realizado, argumentos concurrentes que revelan una contradicción interna, porque, si la enfermedad se debía en exclusiva al trabajo realizado, no era preciso hacer uso de la presunción que se aplica a falta de prueba y si se argumenta con base en la presunción en favor de la laboralidad del accidente es porque no existe certeza sobre la causa del mismo, lo que muestra que se trata de argumentos contrapuestos.

Puede concluirse, pues, que el debate planteado por las sentencias comparadas fue el mismo y que la cuestión objeto de controversia fue idéntica, cual requiere la doctrina de la Sala para apreciar la existencia de contradicción ya que tiene señalado: «con respecto al requisito de la contradicción que exige el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral entre la sentencia que se impugna y otra de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Según ella, la contradicción *«requiere no solo que*

las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos, sino que estos recaigan ante controversias esencialmente iguales; porque la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de la oposición de los pronunciamientos concretos recaídos en conflictos iguales» (sentencias de 27 y 28-1-92 [recs. 824/91 y 1053/91], 18-7, 14-10 y 17-12-97 [recs. 4067/96, 94/97 y 4203/96], 17-5 y 22-6-00 [recs. 1253/99 y 1785/99], 21-7 y 21-12-03 [recs. 2112/02 y 4373/02] y 29-1 y 1-3-04 [recs. 1917/03 y 1149/03] y 28-3-06 [2336/05] entre otras muchas).

Por esa razón, el término de referencia en el juicio de contradicción, ha de ser necesariamente «*una sentencia que, al decidir sobre un recurso extraordinario, está limitada por los motivos propuestos por el recurrente*» y, por ello, la identidad de la controversia debe establecerse teniendo en cuenta los términos en que el debate ha sido planteado en suplicación. Sentencias de 13-12-91 [rec. 771/91], 5-6 y 9-12-93 [recs. 241/92 y 3729/92], 14-3-97 [rec. 3415/96], 16 y 23-1-02 [recs. 34/01 y 58/01]. 26- 3-02 [rec.1840/00], 25-9-03 [rec. 3080/02] y 13-10-04 [rec. 5089/03] entre otras). De otro lado, la Sala ha señalado con reiteración que los fundamentos que han de compararse no son los de las sentencias, sino los de las pretensiones y resistencias de las partes (sentencias de 25-5-95 [rec. 2876/94], 17-4-96 [rec. 3078/95], 16-6-98 [rec. 1830/97] y 27-7-01 [rec. 4409/00] entre otras)».

Segundo.- Sobre la concurrencia de identidades del art. 217 de la L.P.L.

De lo razonado en el anterior apartado se deriva que los fundamentos y pretensiones ejercitadas en cada caso fueron sustancialmente los mismos: calificar de accidente laboral una determinada contingencia. Como el núcleo de la contradicción radica en la calificación de la contingencia como común o profesional, resulta indiferente a esos efectos el tipo de contingencia objeto de protección (incapacidad permanente o viudedad), pues ello no condiciona la calificación de la misma como profesional o no, pues esta calificación depende de la forma en que acaecieron los hechos que provocaron la situación objeto de protección, evolución fáctica de la contingencia protegida que fue similar, porque a los dieciocho meses del primer diagnóstico de la enfermedad mental se había causado la prestación en ambos casos.

Queda por ver si existe, también, la identidad sustancial de los hechos contemplados en cada caso y a ello se dedica el siguiente apartado que es el principal porque en la diferencia fáctica basa la mayoría su posición.

Tercero.- Sobre la identidad sustancial de los hechos.

1. Precisiones previas.

Como la discrepancia entre las sentencias comparadas radica en el juego de la presunción del artículo 115-3 de la L.G.S.S. y en si la enfermedad tiene por causa exclusiva el trabajo realizado, pienso que el análisis comparativo de los hechos debe limitarse a los que hacen referencia o están conectados con esas cuestiones.

Por otro lado, debe señalarse que la mayor o menor gravedad de la enfermedad, al igual que la mayor importancia de las heridas que causa una caída o un atropello, no es elemento determinante de la existencia del accidente laboral. El accidente existe desde el principio, desde el inicio de la lesión o enfermedad que causa, y su existencia no depende de la tórpida evolución de las lesiones que causa, sino de las circunstancias en las que se produce. Por ello, esta Sala, desde su sentencia de 1 de febrero de 2000, considera que la fecha del accidente, la de producción de la lesión o aparición de la enfermedad, determina la normativa aplicable y la entidad responsable del pago de las prestaciones y mejoras aseguradas o que se debieron asegurar, con independencia de la importancia de la lesión y de su evolución posterior. Consecuentemente, a efectos de la calificación como accidente laboral de la lesión, es irrelevante la posterior evolución de las lesiones, así como la mayor o menor importancia de las secuelas que dejan, cuestión que sólo influye en el tipo y cuantía de las prestaciones a reconocer. Tampoco son relevantes las recidivas de la enfermedad que parecía curada, porque la recaída no cambia la calificación inicial de la enfermedad.

Además, a efectos de la contradicción, es discutible decidir si es más grave el caso de la sentencia de contraste, donde la baja, sin solución de continuidad, desembocó en una incapacidad permanente o el del causante en el caso de la sentencia recurrida, quien permaneció en situación de alta médica durante meses, lo que revela que, inicialmente, el pronóstico de su enfermedad fue mejor.

Conviene en este sentido señalar que la sentencia de la que discrepo adolece de falta de precisión a la hora de indicar de que hechos concretos deriva la calificación del accidente laboral, ni el precepto que los tipifica,

sino que se limita a enunciar unos hechos y a concluir que de esas circunstancias que no concurren en el caso de la sentencia de contraste muestran la existencia de un nexo causal entre el trabajo y el suicidio. Ello obliga a acudir a las conclusiones que sienta la sentencia para calificar los hechos. La sentencia recurrida, como reconoce por la sentencia de la que discrepo, concluye que «el trabajador se había encontrado inmerso en un clima de conflictividad laboral importante por haber empezado una huelga en la empresa el día 21 de mayo de 2007» en la que se produjeron incidentes que dieron lugar a actuaciones penales, contexto de conflictividad laboral que dio lugar a la detención del trabajador, quien al día siguiente de su detención, tras quedar en libertad inició un proceso de incapacidad temporal por ansiedad. Con ello, la sentencia de instancia marca el inicio de la enfermedad, coincidiendo con la problemática laboral originada por la huelga, llegando a afirmar (fundamento de derecho tercero, párrafos cuarto y quinto en páginas 14 y 15) que antes no se había producido «ningún proceso previo de incapacidad temporal por enfermedad mental» y que como «antes del inicio de la problemática laboral no existe constancia de enfermedad mental» debe concluirse que el suicidio tiene su causa en esa problemática.

Consecuentemente, la comparación de los hechos contemplados por las sentencias que se contraponen debe hacerse a partir de ese momento, pues son los hechos posteriores a él los que han dado lugar a la calificación impugnada, máxime cuando antes de esa situación conflictiva sólo había padecido una crisis de ansiedad, sin baja laboral, con ocasión de un accidente de tráfico que a cualquiera le provoca una subida de adrenalina, y trastornos digestivos que aconsejaban tener un horario fijo de comidas.

2. Sobre si es aplicable la presunción a favor de la existencia de accidente laboral.

En este particular los hechos son sustancialmente los mismos en las sentencias comparadas. En efecto, en ambos casos se trata de trabajadores de la misma empresa que participaron en una huelga, participación que dió lugar a que se les incoaran diligencias penales y expediente disciplinario que siguieron las mismas vicisitudes, siendo así que, al día siguiente de su detención por la policía, ambos fueron baja laboral por trastornos de ansiedad provocados por estrés. En el caso del causante de los demandantes esa situación de incapacidad temporal se prorrogó desde la fecha de la baja (21-5-2007) hasta la de su fallecimiento el 18 de noviembre de 2008, en que se suicidó, con una interrupción de poco más de seis meses, del 2 de mayo de 2008 en que fue alta por mejoría al 6 de noviembre siguiente en que fue nueva baja por incapacidad temporal. Por contra, en el caso de la sentencia de contraste el trabajador permaneció en situación de incapacidad temporal dieciocho meses, hasta que fue declarado en situación de incapacidad permanente total.

Puede observarse que el inicio de la enfermedad se produjo en idénticas circunstancias en ambos casos, que el proceso penal, disciplinario y la actitud de la empresa fueron idénticos en ambos casos. Sin embargo, la sentencia recurrida aplica la presunción a favor de la existencia de accidente laboral e invierte la carga de la prueba sobre la existencia de nexo causal entre el trabajo y la enfermedad, mientras que la sentencia de contraste deniega el juego de esa presunción por entender que la misma no juega cuando el contrato está suspendido y cuando el siniestro no se produce en el lugar de trabajo, ni en acto de servicio. Luego la contradicción existe porque en supuestos idénticos y con independencia de la evolución posterior de la enfermedad, circunstancia que no es relevante para el juego de la presunción del artículo 115-3 de la L.G.S.S., se han dictado resoluciones diferentes.

3. Sobre si la enfermedad tiene por causa exclusiva el trabajo realizado.

Al respecto son de tener en cuenta los mismos hechos que en el anterior apartado. En los dos casos la baja laboral se produjo el 22 de mayo de 2007, día siguiente al del inicio de la huelga, por trastornos de ansiedad debidos a un proceso estresante motivado por la huelga, el arresto, el procedimiento penal que continuaba abierto etc. etc.. La evolución posterior, a efectos de calificar si el trabajo fue la causa exclusiva de la enfermedad, no importa porque el nexo causal entre trabajo y enfermedad debe existir al inicio de la enfermedad y es independiente de la evolución posterior de la misma, pues la enfermedad desde el principio debe tener por única causa el trabajo.

En este sentido, debe destacarse que la enfermedad tuvo idéntico inicio en los dos supuestos comparados, que los actos posteriores de la empresa fueron similares y que el 3 de abril de 2008 la empresa, respecto a los expedientes disciplinarios abiertos, se comprometió a estar al resultado del proceso penal abierto, a no acordar en ningún caso el despido por los incidentes de la huelga, a archivar los expedientes disciplinarios si no existía responsabilidad penal y a sancionar, como máximo, por falta grave en otro supuesto. Creo que con

ello se quitó toda la presión laboral sobre los afectados, pues nunca serían despedidos, cual muestra que el causante fuese alta laboral por mejoría el 2 de mayo de 2008. Sin embargo en el caso de la sentencia de contraste este alta médica no se produjo, sino que el trabajador siguió de baja hasta que fue declarado en situación de incapacidad permanente. Este dato evidencia que la situación de este operario era más grave y que, como la misma no fue calificada de accidente laboral existiría contradicción «a fortiori».

La posterior recaída en la enfermedad, acaecida seis meses después, no puede considerarse accidente, no sólo porque no se puede estimar que la negativa de la empresa a darle en turno sólo por las mañanas, fuese la causa de esa recidiva, máxime cuando acaeció seis meses antes y no parece injustificada, sino, además, porque ello no lo permite el tiempo transcurrido y lo dicho antes sobre que la calificación jurídica del accidente se hace al tiempo de surgir la enfermedad. Además, los hechos posteriores al alta médica no serían la causa exclusiva de una enfermedad en la que influyeron de forma importante sucesos ocurridos estando el contrato suspendido.

4. Sobre la violación del artículo 24 de la Constitución, al haberse denegado el derecho al recurso por motivos formales interpretados de forma rigurosa e inadecuada.

Los argumentos que preceden muestran con todos los respetos a la mayoría, que debió apreciarse la existencia de contradicción porque, cual requiere el artículo 217 de la L.P.L. en supuestos sustancialmente iguales, en cuanto a los hechos, fundamentos aducidos y pretensiones formuladas, recayeron resoluciones contrapuestas. Ello dio lugar a que no se entrara a conocer del fondo del asunto y a que en mi modesta opinión no se dictara una sentencia favorable a las tesis de la parte recurrente. Esa sentencia favorable al recurso se habría fundados en los siguientes argumentos:

La presunción del artículo 115-3 de la L.G.S.S. no puede jugar cuando se trata de supuestos en los que la enfermedad se presenta fuera del centro de trabajo y de las horas de trabajo, como con reiteración ha señalado esta Sala en múltiples sentencias de las que son simple muestra las que inaplican la presunción a los supuestos de enfermedades que se presentan en el trayecto de ida y vuelta al trabajo o antes de iniciarse este (SS.TS. 25 de enero de 2007 (R. 3641/05), 14 de julio de 2006 (R. 787/05), 7 de octubre de 2003 (R. 3595/02), 24 de junio de 2010 (R. 3542/09), 18 de enero de 2011 8R. 3558/09) y 14 de marzo de 2012 (R. 4360/10).

En el presente caso, la sentencia recurrida yerra al aplicar la presunción del art. 115-3 de la L.G.S.S., porque el contrato de trabajo se encontraba suspendido, conforme al artículo 45-1-I), del Estatuto de los Trabajadores, cuando se presentaron los primeros síntomas de la enfermedad mental, pues el trabajador el 21 de mayo de 2007 ejercía legítimamente su derecho de huelga y, como no fue al trabajo, ni tenía encomendados servicios mínimos, cual se reconoce en el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida que acepta la revisión fáctica propuesta en ese sentido. Por tanto, como el contrato estaba suspendido no puede operar la presunción que nos ocupa, ya que la baja laboral por enfermedad común se produjo el 22 de mayo de 2007, antes de que se reincorporara a la empresa y de que finalizara la huelga, esto es con el contrato suspendido.

Yerra, también, la sentencia recurrida al considerar que la enfermedad tuvo por causa exclusiva el trabajo realizado, juicio de valor que descartó la sentencia de contraste, que carece del necesario sustento fáctico y que no permiten hacer los hechos declarados probados, ni las suposiciones en que se funda la sentencia recurrida para llegar a tal solución, al estimar que existió un nexo causal entre el trabajo y la enfermedad mental. Parte para ello la sentencia de la conflictividad laboral que generó la huelga, de la apertura de diligencias penales contra el causante, así como de la existencia de un expediente disciplinario contra el mismo por los hechos en que intervino el día de inicio de la huelga y que provocaron su detención, situación estresante que se prolongó hasta la fecha de su muerte y que fue la que provocó esta. Pero ese razonamiento olvida que la patología mental del causante se inició estando el contrato suspendido primero por la huelga y, seguidamente, por la situación de incapacidad temporal que duró casi un año, lo que evidencia que el trabajo realizado no fue la causa de la enfermedad que produjo tan larga baja laboral. Más aún, la tramitación del expediente disciplinario se suspendió en Julio de 2007, mientras durasen las diligencias penales, y la supuesta amenaza del despido se desactivó el 3 de mayo de 2008 (fecha coincidente con la de reincorporación al trabajo por alta médica) al comprometerse la empresa a archivar el expediente si no se declaraba existencia de responsabilidad penal (como así ocurrió tras la muerte del operario) y a sancionar, como máximo, por falta grave en otro caso. Tras su reincorporación al trabajo, ningún incidente destacable, salvo que se le denegó la adscripción al turno fijo de mañana que pidió.

Vistos esos hechos, es más acertado concluir que la enfermedad no la provocó el trabajo realizado y que no se ha probado, cual requiere el artículo 115-2-e) de la L.G.S.S., que «la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo». La detención policial y las diligencias penales vinieron motivadas por los actos del causante el día de la huelga con el contrato de trabajo suspendido. El estrés que provocaron aquellos hechos y el posterior seguimiento de diligencias penales fue la causa determinante, concurrente al menos, en el desencadenamiento de la enfermedad mental que causó la baja y en su posterior evolución. Por tanto, no puede afirmarse que el trabajo sea la causa exclusiva de la enfermedad, máxime cuando, como se razonó en el anterior fundamento, la calificación del accidente de trabajo se hace al tiempo de su acaecimiento y no en función de su evolución posterior. Por las mismas razones no cabe tener en cuenta la recaída, pues la recidiva en una enfermedad común no cambia la calificación de esa enfermedad. Tampoco puede estimarse que nos encontremos ante el supuesto contemplado en el número 2-f) del citado artículo 115, por cuanto este precepto contempla una hipótesis distinta, el caso de un accidente que provoca lesiones que agravan una enfermedad anterior, pero no la simple recidiva de una enfermedad que reaparece por empeorar la patología que parecía curada.

La solución dada es conforme con la doctrina que hemos sentado en materia de suicidios y que fue resumida por nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2007 (Rcud. 5452/2005) que dice: «Las sentencias del Tribunal Supremo dictadas hasta finales de los años sesenta suelen descartar automáticamente la calificación a efectos de Seguridad Social del suicidio del trabajador como accidente de trabajo, cualesquiera que sean sus circunstancias, incluido el suicidio consumado en tiempo y lugar de trabajo. A partir de 1970 las decisiones jurisprudenciales no tienen siempre el mismo signo. En ocasiones se estima la reclamación de las indemnizaciones de accidente de trabajo solicitadas por los familiares sobrevivientes, y en ocasiones se llega a la conclusión contraria. Ello no significa, sin embargo, falta de criterio uniforme sobre el enjuiciamiento de estos litigios. Se trata más bien de la consideración como elementos determinantes de las decisiones adoptadas de ciertos factores circunstanciales y contingentes, que concurren unas veces y están ausentes otras en los casos enjuiciados. Tales factores determinantes se refieren siempre o casi siempre a la conexión de causalidad entre el trabajo y la conducta de suicidio, concretándose en la existencia o no de trastorno mental del suicida y en la etiología laboral o no de dicho trastorno mental o de la enfermedad mental que conduce a la decisión suicida».

«Una primera sentencia que se suele citar en las exposiciones en la materia es la dictada por esta Sala de lo Social el 31 de marzo de 1952. En ella se niega la calificación de accidente de trabajo, a pesar de la intermediación entre el suicidio del trabajador y una acusación contra el mismo de robo de material de trabajo. También se descarta la calificación de accidente del trabajador en otra sentencia de la casación social de 29 de marzo de 1962, razonando que en el suicidio de un trabajador internado en un hospital por causa de un accidente de trabajo previo ha de haber, y no la hubo en el caso, una relación de causa a efecto «directa» y exclusiva entre el trastorno mental padecido por el trabajador (obsesión por quedar inútil para el trabajo) y la decisión de suicidarse. Otra sentencia del año siguiente (STS 19-2-1963) resuelve también con signo negativo, «pues establecida la voluntariedad de la muerte sufrida por el causante de la recurrente, no existe la relación de causalidad entre el trabajo que efectuaba aquél con el siniestro acaecido». A la misma conclusión llegó otra sentencia de los años sesenta (STS 28-1-1969), donde se acredita que el trabajador (cocinero de un barco) se suicidó, arrojándose al mar, como «consecuencia de un estado patológico mental», pero sin que constara «la menor indicación de que éste fuera causado por el trabajo que efectuaba a bordo de la nave, ni que fuera por ello agravado ni desencadenado».

«El análisis del suicidio del trabajador desde la perspectiva del nexo causal existente en concreto entre el acto suicida y el trabajo prestado, que se detecta ya con claridad en la última de las sentencias citadas, da lugar a una primera sentencia estimatoria de la calificación de accidente de trabajo, que (s.e.u.o.) es la dictada por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 29 de octubre de 1970. Se acredita en el caso que el suicidio fue provocado por una situación de trastorno mental, producida a su vez por las vicisitudes y secuelas de un accidente de trabajo. La sentencia de instancia había estimado la demanda de pensiones a familiares sobrevivientes (esposa e hijos) y la sentencia de casación desestimó el recurso, identificando como causa eficiente del suicidio un «trastorno mental de tipo depresivo» derivado de una «larga hospitalización» por accidente de trabajo y de «repetidas intervenciones quirúrgicas», circunstancias del litigio que determinaron la fatal decisión. Ha seguido la estela de esta sentencia otras del año 1974 (STS 26-4-1974)».

«El mismo enfoque, pero desestimando la reclamación de accidente de trabajo, mantiene la sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 1972, que no aprecia la existencia del nexo causal en la producción de la muerte por suicidio enjuiciada. Esta sentencia se fija en el argumento de la presunción legal de laboralidad de las

lesiones letales autoinferidas en el lugar de trabajo, llegando a la conclusión de que la «privación voluntaria de la vida» es «prueba en contrario» que impide en principio el despliegue de los efectos habituales de dicha presunción legal. También descarta la calificación de accidente de trabajo a efectos de una mejora voluntaria de Seguridad Social, la sentencia de esta misma Sala de 9 de marzo de 1987; se resuelve en el caso sobre un suicidio por precipitación al vacío «desde lo alto de la fábrica donde trabajaba» de un trabajador que padecía «trastornos psíquicos», que no constaban producidos por el medio de trabajo, para cuyo tratamiento había estado internado en la sección de neuropsiquiatría de un hospital público».

«Las consideraciones de los apartados anteriores ponen de manifiesto la relevancia que en el enjuiciamiento de los supuestos de suicidio tienen las circunstancias de cada supuesto concreto. Si bien es cierto que la presunción de laboralidad del actual art. 115.3 LGSS puede ser enervada por el carácter voluntario que tiene normalmente el acto de quitarse la vida, no es menos verdad que el suicidio se produce a veces por una situación de estrés o de trastorno mental que puede derivar tanto de factores relacionados con el trabajo como de factores extraños al mismo.».

Esta doctrina ha sido reiterada en nuestras sentencias de 10 de junio de 2009 (R. 3133/2008) y 9 de febrero de 2010 (R. 1703/2009) en las que en casos de suicidio (la primera) y de autolesión (la segunda), sucesos acaecidos en el centro de trabajo, se consideró que existía accidente no laboral afirmándose en ellas: «la voluntariedad en la producción del siniestro no conlleva dejar sin prestación al trabajador, o en su caso, a sus familiares, pero si otorgársela sin el mayor plus de protección que comportaría su consideración como accidente de trabajo. Entender lo contrario, implicaría -dada la practica imposibilidad conceptual y legal del encaje del suicidio como enfermedad común- el dejar sin protección a los familiares del trabajador suicidado, lo que por absurdo y contrario a la finalidad de la Seguridad Social ha de ser rechazado.».

«Esta es también, la solución que desde la perspectiva de la Seguridad Social viene dando el Instituto Nacional de la Seguridad Social a la problemática de la inclusión del suicidio entre las contingencias protegidas por el Sistema, según se desprende de la Resolución de 22 de septiembre de 1976, de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social. Esta resolución, rechazando expresamente la calificación del suicidio como enfermedad común, sostiene el criterio de considerar el suicidio como accidente no laboral, salvo su posible determinación como accidente de trabajo o que se hubiera producido con la intención de conseguir una determinada prestación, lo que no se presume, no existiendo en el presente caso el menor atisbo sobre dicha posibilidad».

Las circunstancias concurrentes en el presente caso no permiten apreciar la existencia de un nexo causal entre trabajo y la enfermedad diagnosticada, pues, aparte que cuando ocurrieron los hechos el contrato de trabajo estaba suspendido, lo que hacía inviable el nacimiento de ese nexo causal, resulta que, aunque la participación en una huelga es lícita, no merece ese calificativo la participación en disturbios que dan lugar a la detención policial y a la incoación de diligencias penales, aunque estas sean luego sobrepasadas por no constar el autor material de los daños causados a bienes de la empresa.

Con la solución propuesta, la familia del trabajador que se suicida no queda desprotegida, pues siempre se le reconocerá la prestación por contingencias comunes, aunque no se acreditara carencia por considerarse accidente no laboral.

Por todo lo expuesto discrepo, respetuosamente, de la sentencia dictada y entiendo que su tenor y fallo debieron ser diferentes, pues procedía estimar el recurso, casar la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de revocar la sentencia de instancia y desestimar la demanda que pretendió que se declarara que las prestaciones reconocidas a los demandantes derivaban de accidente laboral.

Madrid, 4 de diciembre de 2012.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jordi Agustí Julia así como el voto particular formulado por el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana y Excmo. Sr. D. Antonio Martin Valverde, hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Roj: ATS 4642/2012
Id Cendoj: 28079140012012200935
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3317/2011
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Milagros Calvo Ibarlucea
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a once de Abril de dos mil doce.

Es Magistrada Ponente la Excm. Sra. D^a. MARÍA MILAGROS CALVO IBARLUCEA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Sevilla se dictó sentencia en fecha 16 de junio de 2010, en el procedimiento nº 511/2009 seguido a instancia de D. Íñigo contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 12 de abril de 2011, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 10 de octubre de 2011, se formalizó por el Letrado D. José Antonio Moreno Martínez de Azcoyta en nombre y representación de D. Íñigo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 19 de enero de 2012, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de cita y fundamentación de la infracción legal y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

La sentencia impugnada revoca la dictada en la instancia y desestima la demanda, en la que se solicita el reconocimiento de incapacidad permanente absoluta. El actor, nacido el 31-07-45, fue declarado afecto de incapacidad permanente total, y presenta el siguiente cuadro clínico «diabetes mellitus tipo II en tratamiento correcto con antidiabéticos orales. Hipertensión arterial y deslipemias en tratamiento correcto. Hernia inguinal intervenida con éxito hace siete años. A nivel cardiaco está diagnosticado de cardiopatía isquémica con lesión de la arteria ascendente anterior que requirió de implante de stent en 2007 tras infarto agudo de miocardio. Asimismo presenta crisis de taquicardia auricular paroxística que debe ser tratado de manera urgente y que durante las crisis le impiden la realización de cualquier tarea. La patología cardiaca en general le supone limitaciones para la realización de tareas que exijan estrés ligero, cambios bruscos de temperatura o esfuerzos físicos ligeros/moderados en general. Hipoacusia bilateral que requiere prótesis auditiva y que le limita la realización de tareas que requiera la correcta audición tanto para su realización como para prevenir riesgos». La Sala razona que tales dolencias no representan la desaparición de toda capacidad de trabajo, sino que le impedirían la realización de las funciones propias de su profesión habitual de montador de ascensores, y en general de cualquier otras que comporten aquellos requerimientos para los que le inhabilita su patología, permitiéndole en cambio la realización de actividades de carácter liviano y sedentarias que no demanden estrés o esfuerzo físico, por lo que su situación es la prevista en el apartado 4 del artículo 137 de la LGSS.

El demandante interpone recurso de casación para unificación de la doctrina, alegando cuatro motivos, relativos a las limitaciones en los ligeros esfuerzos, a la valoración de la invalidez atendiendo a la edad, a la imposibilidad de equiparar inhabilidad para el trabajo con imposibilidad material de efectuar cualquier labor y al deber de los jueces de concretar el trabajo que le suponga apto al demandante para negar la incapacidad permanente absoluta.

- 1º/ La sentencia seleccionada para el primer motivo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/ Sevilla de 15-03-07 (Rec. 914/06), declara al actor en situación de invalidez permanente absoluta. El demandante padece angor de esfuerzo estable tras cateterismo intervencionista, diabetes mellitus tipo II insulino dependiente, hipertensión arterial, deslipemias en tratamiento, cervicartrosis C5-C6, lumbartrosis y tendinitis del manguito de los rotadores izquierdo que requiere tratamiento antiinflamatorio. Presenta una limitación para la realización de esfuerzos físicos que supongan una actividad moderada ligera, estrés y cambios bruscos de temperatura. La Sala razona que si el actor no puede realizar esfuerzo físico que suponga una actividad ligera es indudable que no puede realizar ninguno, porque no existe trabajo por sedentario o liviano que sea que no conlleve una cierta actividad y cuando se está impedido para realizar actividades ligeras, no se puede pretender que realice ningún trabajo con eficacia y responsabilidad.
- 2º/ La sentencia seleccionada para el segundo motivo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla de 21-12-01 (Rec. 1122/01), declara al actor en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional. El demandante presenta «alcoholismo, neuropatía periférica, insuficiencia venosa crónica MMII, probable silicotuberculosis con TAC, lóbulo superior izquierdo: enfisema paraseptal múltiple, bloqueo completo de rama derecho». La Sala razona que el cuadro descrito aunque, en principio, sólo limitada para tareas de medianos esfuerzos, no obstante unido a su edad, le impide la realización incluso de labores de tipo sedentario o que no exijan un excesivo esfuerzo físico.
- 3º/ La sentencia seleccionada para el tercer motivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla de 28-09-06 (Rec. 500/06), desestima la demanda en la que se solicita la declaración de que el actor está afecto de incapacidad permanente absoluta.
- 4º/ La sentencia seleccionada para el cuarto motivo, del Tribunal Supremo de 28-02-75 declara en situación de incapacidad permanente absoluta al actor, trabajador agrícola por cuenta propia, que padecía cardiopatía mitral con sobrecarga ventricular derecha. La Sala considera que, tratándose de una afección cardiaca de tal intensidad que impide todo esfuerzo físico, que necesita tratamiento y que no consta que el enfermo esté dotado de actitudes ni formación para realizar las tareas propias de algún oficio concreto de los teóricamente llamados sedentarios, la situación del demandante ha de calificarse de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.

Del examen comparativo de las sentencias se desprende que no son contradictorias al diferir las dolencias y limitaciones objetivadas a los respectivos trabajadores. A lo que se une que, respecto a la sentencia propuesta

para el 2º motivo, las contingencias son diferentes -enfermedad común en la recurrida y enfermedad profesional en la referencial-, y que, respecto a la sentencia propuesta para el 3º motivo, los fallos son coincidentes -ambas desestiman la pretensión de reconocimiento de la situación de incapacidad permanente absoluta- por lo que sus pronunciamientos no son opuestos.

Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general - autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003)-. En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2.005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004) y 2 de noviembre de 2.005 (R. 3117/2004) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo - sentencias de 19 de noviembre de 1991 (R. 1298/1990), 27 de enero de 1997 (R. 1179/1996), 18 de junio de 2001 (R. 1768/2000), 22 de marzo de 2002 (R. 2654/2001), 27 de octubre de 2003 (R. 2647/2002), 11 de febrero de 2004 (4390/2002) y 9 de julio de 2004 (R. 3145/2003)». Doctrina que ha sido seguida por las sentencias de 20 de julio de 2006 (R. 1320/2005), 29 de noviembre de 2006 (R. 1557/2005), 19 de febrero de 2007 (R. 2870/2005), 18 de abril de 2007 (R. 4757/2005), 27 de septiembre de 2007 (R. 5573/2005), 15 de noviembre de 2007 (R. 4687/2006) y 22 de enero de 2008 (R. 3890/2006).

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no haber quedado desvirtuadas las causas que se hicieron constar en la providencia que abrió el incidente de inadmisión por el escrito de alegaciones. Sin que haya lugar a la imposición de costas al gozar la parte recurrente del beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. José Antonio Moreno Martínez de Azcoytia, en nombre y representación de D. Íñigo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 12 de abril de 2011, en el recurso de suplicación número 3300/2010, interpuesto por D. Íñigo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Sevilla de fecha 16 de junio de 2010, en el procedimiento nº 511/2009 seguido a instancia de D. Íñigo contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 4835/2012
Id Cendoj: 28079140012012200986
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1985/2011
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Fernando de Castro Fernández
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veinte de Marzo de dos mil doce.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNÁNDEZ.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 7 de octubre de 2.010, en el procedimiento nº 14/10 seguido a instancia de DON Abel contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DON Abel, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 5 de mayo de 2011, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de junio de 2011 se formalizó por el Letrado Don José Joaquín Domínguez García, en nombre y representación de DON Abel, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 13 de enero de 2.012 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción, falta de fundamentación de la infracción legal y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral exige que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, lo que supone necesariamente una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos [sentencias de 3 de noviembre de 2008 (R. 2791/07), 25 de noviembre de 2008 (R. 5057/06), 10 de diciembre de 2008 (R. 1537/07), 11 de diciembre de 2008 (R. 2379/07), 15 de diciembre de 2008 (R. 178/08), 19 de diciembre 2008 (R. 881/08), 19 de diciembre de 2008 (R. 881/08), 30 de diciembre de 2008 (R. 3291/07), 3 de marzo de 2009 (R. 4510/07), 4 de marzo de 2009 (R. 1535/07), y 9 de marzo de 2009 (R. 2123/07)].

Esta exigencia es presupuesto indispensable para la viabilidad del recurso, pues su incumplimiento constituye causa de inadmisión según el art. 483.2.2 LEC o, en su caso -tras señalamiento, votación y fallo-, de desestimación (sentencia de 3 de marzo de 2009, R. 4510/2007).

Consta en la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 de mayo de 2011 (Rec. 1572/2011), que el actor solicitó incapacidad permanente en el año 2007, que le fue desestimada por sentencia de suplicación que confirmó la de instancia. Al actor se le reconoció un grado de minusvalía del

56%, siendo el grado de discapacidad global del 52% por discapacidad del sistema osteoarticular por trastorno del disco intervertebral, trastorno de la afectividad por trastorno adaptativo, discapacidad del sistema osteoarticular por osteoartrosis localizada y discapacidad del sistema neuromuscular por trastorno de raíces y plexos. Reclama el trabajador en el año 2009 el reconocimiento en situación de incapacidad permanente total por revisión de grado, padeciendo: *«cervicoartrosis C5 a C7 y protusiones discales cervicales con afectación medular y radiculopatía en miembro superior izquierdo que le produce cervicalgia, limitación de la movilidad cervical y parestesias en miembro superior izquierdo. Discopatía degenerativa L5-S1 sin signos de radiculopatía, movilidad normal y marcha normal. Presenta además un trastorno de adaptación en relación con la patología crónica dolorosa»*. Dicha pretensión es desestimada en instancia cuya sentencia es confirmada en suplicación, por entender la Sala que no consta probado que se reconociera al actor en grado alguno de incapacidad permanente, por lo que no cabe instar la revisión, pero es que además, las dolencias que padece no le incapacitan de forma permanente para el desarrollo de su profesión de peón de mantenimiento de edificios, ya que lo único que consta en el informe médico forense es limitación *«para realizar esfuerzos físicos y carga de objetos pesados (y) mantenimiento de posturas forzadas de columna cervical»*, por lo que no cabe el reconocimiento en situación de incapacidad permanente en grado alguno, máxime cuando el actor se centra en la patología y no en la profesión para fundamentar dicho reconocimiento, y cuando no se ha intentado la modificación fáctica.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina el actor, por entender que *«cabe revisión de grado de Incapacidad Permanente Total a Incapacidad Absoluta, por aplicabilidad de nuevas lesiones que agravan el estado de la parte beneficiaria»*. Aporta la parte recurrente de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 25 de noviembre de 2010 (Rec. 1526/2007), respecto de la que se limita a copiar las partes que interesan a su pretensión, al igual que hace con la sentencia recurrida, lo que en ningún caso sirve para cumplir con la exigencia del artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral de establecer la comparación entre hechos, fundamentos y pretensiones de ambas sentencias.

SEGUNDO.- Además, el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de *«hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales»* (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

Tampoco podría apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la aportada como término de comparación del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 25 de noviembre de 2010 (Rec. 1526/2007), en la que consta que el actor sufrió un accidente de trabajo por el que se le reconoció en situación de incapacidad permanente total padeciendo: *«Diagnosticado de rotura. De manguito rotador. Diagnosticado de rotura completa del tendón del supraespinoso con degeneración grasa de su vientre muscular. Tendinitis/rotura parcial del infraespinoso. Cambios degenerativos acromio-claviculares. Incapacitado para tareas que supongan cargas repetidas con hombro izquierdo o maniobra de fuerza con el mismo o elevación/abducción por encima de la horizontal»*. El actor solicitó revisión del grado de incapacidad, por padecer: *«Diagnosticado inicialmente de trastorno afectivo mixto, posteriormente no ha modificado el diagnóstico a trastorno mixto de la personalidad (anancástico y paranoide). D. Abel presenta antecedentes de depresión y alcoholismo desde el año 1994, que han provocado episodios de heteroagresividad física y verbal. Es tratado por la unidad de*

psiquiatría por esta dolencia desde 1996; habiendo estado ingresado voluntariamente, al menos en una ocasión (año 2000) en la Unidad Psiquiátrica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Ha sufrido episodios de pérdida de la memoria reciente con dificultad para recordar nombres y para expresarse; episodios de alteración del nivel de conciencia y episodios de convulsión generalizada. Se le han diagnosticado por el Servicio de Neurología crisis parciales complejas. 2º Síndrome mieloproliferativo crónico-policitemia vera. 3º Cambios degenerativos acro-claviculares». En instancia se estima la pretensión del actor de ser reconocido en situación de incapacidad permanente absoluta, sentencia confirmada en suplicación respecto de dicho extremo -no así respecto del porcentaje que corresponde abonar a la Mutua y al INSS-, por entender la Sala que se han agravado las dolencias por las que fue inicialmente reconocido en situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo con los graves y crónicos padecimientos psíquicos que sufre.

De lo relacionado se desprende que no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la aportada como término de comparación, por cuanto en la sentencia recurrida al actor le fue denegado por sentencia de instancia confirmada en suplicación, el reconocimiento en situación de incapacidad permanente, mientras que en la sentencia de contraste el actor fue declarado en situación de incapacidad permanente total derivada del accidente de trabajo sufrido. Además, tampoco existe identidad en relación con las dolencias padecidas y las profesiones de los actores, por lo que puestos en relación ambos extremos los fallos no podrían considerarse contradictorios. Por último, las razones de decidir de ambas Salas difieren, por cuanto en la sentencia recurrida la Sala tiene en cuenta para emitir el fallo las dolencias padecidas por el actor en su conjunto, mientras que en la sentencia de contraste lo que se tiene en cuenta es si las dolencias padecidas por el actor en el momento de solicitud de revisión se han agravado respecto de las que tenía cuando fue reconocido en situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo.

TERCERO.- Por último, el recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley, de acuerdo con el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal. La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» (sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 2008, R. 2206/2006 y 5 de marzo de 2008, R. 1256/2007 y 4298/2006, 14 de mayo de 2008, R. 734/2007 y 1671/2007; 17 de junio de 2008, R. 67/2007; 25 de septiembre de 2008, R. 1790/2007; 2 y 7 de octubre de 2008, R. 1964/2007 y 538/2007; y 3 de noviembre de 2008, R. 2791/2007).

Así se deduce, no sólo del citado art. 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación supletoria en ese orden social, cuyo artículo 477.1 prescribe que «el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso», mientras que el artículo 481.1 LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.2º LEC (entre otras, sentencias de 8 de marzo de 2005, R. 606/2004; 28 de junio de 2005, R. 3116/2004; 16 de enero de 2006, R. 670/2005 y 8 de junio de 2006, R. 5287/2004; 7 de junio de 2007, R. 767/2006; 21 de diciembre de 2007, R. 4193/2006; 16 y 18 de julio de 2008, R. 2202/2007 y 1192/2007; 19 y 25 de septiembre de 2008, R. 384/2007 y 1790/2007; 22 de octubre de 2008, R. 4312/2006; 16 de enero de 2009, R. 88/2008; y 17 de febrero de 2009, R. 2401/2007).

Pues bien, la parte recurrente cita en cuanto que infringidos determinados preceptos de la LGSS, pero no fundamenta, más allá de la copia de las partes de las sentencias recurrida y de contraste que realiza, las razones por las que entiende que existe dicha infracción legal.

CUARTO.- Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 13 de febrero de 2012, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 13 de enero de 2012, insistiendo en la existencia de contradicción y señalando que sí ha citado y fundamentado la infracción legal, pero sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto o argumentos jurídicos que desvirtúen el contenido de la misma.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don José Joaquín Domínguez García en nombre y representación de DON Abel contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 5 de mayo de 2011, en el recurso de suplicación número 1572/11, interpuesto por DON Abel, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Madrid de fecha 7 de octubre de 2.010, en el procedimiento nº 14/10 seguido a instancia de DON Abel contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 8267/2007
Id Cendoj: 28079140012007201138
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3034/2006
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Mariano Sampedro Corral
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Abril de dos mil siete.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 28 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 11 de julio de 2005, en el procedimiento nº 768/04 seguido a instancia de D. Augusto contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 10 de mayo de 2006, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 7 de septiembre de 2006 se formalizó por la Procuradora Dª Pilar Huerta Camarero en nombre y representación de D. Augusto, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 23 de enero de 2007 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de mayo de 2006 (Rec. 8234/2005), revoca la de instancia que había declarado al demandante afecto de una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común. Consta en los hechos probados de la sentencia que el trabajador, aprendiz de jardinería, padece déficit mental cognitivo desde la infancia, diabetes mellitus tipo 2, cirugía de hernia inguinal, fístula anal, hienqueratosis plantar, y visión de luz por el ojo izquierdo. Cuadro clínico que el INSS considera insuficiente para declararle afecto de ningún tipo de incapacidad permanente. En instancia se le reconoce una incapacidad permanente absoluta, contra la que la Entidad Gestora interpone recurso de suplicación. La sentencia de suplicación, ahora recurrida por el trabajador, revoca la resolución estimatoria al considerar que el déficit mental lo padece el trabajador desde la infancia sin que el mismo se haya agravado o empeorado con la actividad laboral, y que el resto de lesiones no tienen la relevancia necesaria para incapacitarle para las funciones esenciales de su profesión. Contra esta sentencia interpone el trabajador el presente recurso de casación aportando como sentencias de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de julio de 2003 (Rec. 7795/2002) y la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha de 8 de octubre de 1997 (Rec. 1133/1997).

Pues bien, no existe contradicción respecto de la más moderna de las señaladas. En este caso, el trabajador, aprendiz de carpintería, padece con anterioridad a la incorporación a la actividad laboral espina bífida congénita, reconociéndosele en instancia y en suplicación la condición de inválido absoluto. Es cierto como sostiene el recurrente que en esta resolución se considera irrelevante el hecho de que el trabajador padeciese la lesión incapacitante antes de su afiliación al sistema de Seguridad Social, pero no lo es menos que en este caso se reconoce la incapacidad porque, como se señala en la sentencia, esta dolencia se ha visto agravada como consecuencia del desempeño de la actividad productiva, circunstancia que no concurre en el asunto que ahora nos ocupa.

Es más, a mayor abundamiento, no concurre tampoco la contradicción necesaria respecto de la otra sentencia aportada. En ella el trabajador, peón de jardinería, padece retraso mental ligero y epilepsia generalizada, dolencias anteriores a la vida laboral, que le provocan crisis convulsivas con pérdida de conciencia, además lee y escribe con dificultad, carece de formación especializada y adecuada y sufre alcoholismo, reconociéndosele en instancia y en suplicación la condición de inválido absoluto. Sostiene la Sala que con tales dolencias y secuelas es imposible que desarrolle cualquiera actividad que requiera un mínimo control por parte del trabajador, no pudiendo por tanto atender a las necesidades de un puesto de trabajo. Sucede así, respecto de esta sentencia, que si bien ambos trabajadores prestan servicios en el mismo sector (uno como aprendiz y el otro como peón), y los dos padecen déficit mental previo a la actividad productiva, el resto de lesiones y secuelas no coinciden, debiendo destacarse, en este sentido, que las que sufre el trabajador de la sentencia de contraste —epilepsia generalizada y alcoholismo— le impiden desempeñar una actividad que requiera un mínimo control, no pudiendo por tanto atender a las necesidades propias de un puesto de trabajo.

SEGUNDO.- En todo caso, debe tenerse en cuenta que la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general -autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003)-. En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2.005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004) y 2 de noviembre de 2.005 (R. 3117/2004) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo - sentencias de 19 de noviembre de 1991 (R. 1298/1990), 27 de enero de 1997 (R. 1179/1996), 18 de junio de 2001 (R. 1768/2000), 22 de marzo de 2002 (R. 2654/2001), 27 de octubre de 2003 (R. 2647/2002), 11 de febrero de 2004 (4390/2002) y 9 de julio de 20004 (R. 3145/2003).

Las razones señaladas, contenidas en nuestra providencia de 23 de enero de 2007, no han quedado en modo alguno desvirtuadas por las alegaciones del recurrente, con entrada en esta Sala el 6 de marzo de 2007, que no son mas que una reiteración literal del escrito de interposición del recurso.

TERCERO.- Procede, pues, declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora D^a Pilar Huerta Camarero, en nombre y representación de D. Augusto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 10 de mayo de 2006, en el recurso de suplicación número 8234/05, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 28 de los de Barcelona de fecha 11 de julio de 2005, en el procedimiento nº 768/04 seguido a instancia de D. Augusto contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 6066/2007
Id Cendoj: 28079140012007200694
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1731/2006
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Víctor Eladio Fuentes López
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veinte de Marzo de dos mil siete.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 18 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 13 de mayo de 2005, en el procedimiento nº 683/04 seguido a instancia de D. Juan Luis contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por D. Juan Luis, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 19 de diciembre de 2005, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 10 de mayo de 2006 se formalizó por el Letrado D. Antonio Fernando Olivares Perdones en nombre y representación de D. Juan Luis, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 19 de diciembre de 2006 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (SSTS de 27 y 28 de enero de 1992, R. 824/1991 y 1053/1991, 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997, R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996, 23 de septiembre de 1998, R. 4478/1997, 7 de abril de 2005, R. 430/2004, 25 de abril de 2005, R. 3132/2004, y 4 de mayo de 2005, R. 2082/2004).

El recurrente, nacido el 26-2-48, pretende el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de conductor en el RETA. Presenta un cuadro clínico de «trombosis de la vena central de la retina OI percibe luz. Ojo derecho la unidad». La pérdida visual izquierda es completa cor reversible. La visión del ojo derecho es relativamente buena, el 80% de la visión central. También padece amaurosis izquierda secundaria a glaucoma neovascular y síndrome ansioso-depresivo reactivo. Se le ha renovado el permiso de conducir con condiciones restrictivas, es decir, exigencia de dos retrovisores y no pasar de 100 kms/hora. La

sentencia recurrida, confirmando el fallo de instancia, ha desestimado la pretensión del actor de que se le reconozca una incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente, total, considerando que si bien padece algunas limitaciones para desempeñar su profesión de conductor-repartidor, se le ha renovado el permiso de conducir, tiene permiso para conducir vehículos de clase B y está limitado para tareas que impliquen visión binocular o que puedan ocasionar aumento de la tensión ocular.

La sentencia seleccionada de contraste es la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 5 de julio de 2001, que reconoce al actor una incapacidad permanente total para su profesión habitual de cocinero, con un cuadro residual de psoriasis cutánea generalizada de evolución crónica que afecta a más del 50% de la superficie corporal, incluida cabeza, manos y piernas, con dolor articular acompañante y dependencia alcohólica crónica de casi 20 años de evolución.

El recurrente funda la contradicción en que el informe del forense recoge un trastorno depresivo con tendencia al alcoholismo que le produce importante desequilibrio en las situaciones de abstinencia. Pero ese dato no consta probado en la sentencia impugnada, no se trata de las mismas dolencias objetivadas que en la sentencia de contraste, ni con igual repercusión funcional, y las profesiones habituales son distintas, por lo que no hay identidad alguna entre las sentencias comparadas. Conclusión que la propia parte admite en el escrito de alegaciones, aunque sigue interesando la admisión del recurso por la similitud de las lesiones y el hecho de que ambas profesiones pueden encuadrarse dentro del ámbito de operarios. Lo cierto es que, al margen de esa apreciación, esta Sala viene declarando reiteradamente que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general (autos y sentencias de 22 de marzo de 1998, R. 3347/1997, 22 de marzo de 2002, R. 2914/2001, 27 de febrero de 2003, R. 2566/2002, 7 de octubre de 2003, R. 2938/2002, 19 de enero de 2004, R. 1514/2003, 11 de febrero de 2004, R. 4390/2002 y 10 de diciembre de 2004, R. 5252/2003). En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social. En estos principios se ha fundado y se funda la doctrina de la Sala, con resultados que han acreditado su eficacia a lo largo del tiempo (sentencias de 19 de noviembre de 1991, R. 1298/1990, 27 de enero de 1997, R. 1179/1996, 18 de junio de 2001, R. 1768/2000, 22 de marzo de 2002, R. 2654/2001, 27 de octubre de 2003, R. 2647/2002, 11 de febrero de 2004, 4390/2002 y 9 de julio de 2004, R. 3145/2003).

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Antonio Fernando Olivares Perdonés, en nombre y representación de D. Juan Luis contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 19 de diciembre de 2005, en el recurso de suplicación número 5089/05, interpuesto por D. Juan Luis, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de los de Madrid de fecha 13 de mayo de 2005, en el procedimiento nº 683/04 seguido a instancia de D. Juan Luis contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

*Consumo de alcohol como imprudencia temeraria del trabajador***IMPRUDENCIA TEMERARIA Y PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD**

Roj: ATS 1756/2013
Id Cendoj: 28079140012013200201
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2473/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Jesús Souto Prieto
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a cinco de Febrero de dos mil trece.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS SOUTO PRIETO.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de A Coruña se dictó sentencia en fecha 25 de noviembre de 2008, en el procedimiento nº 281/2008 seguido a instancia de D. Jenaro contra MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENVASES LA ESTRELLA S.L., INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre determinación de contingencia, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 22 de junio de 2012, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 12 de septiembre de 2012, se formalizó por el letrado D. Federico Novo Prego en nombre y representación de D. Jenaro, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 10 de diciembre de 2012, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y R. 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006;

8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007, 24 de junio de 2011, R. 3460/2010, 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010, 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010).

El recurrente sufrió un accidente de trabajo el 18 de mayo de 2005 cuando al ir a entregar unas cajas a un pesquero se cayó al mar. Sufrió un traumatismo torácico y una contusión a nivel cervical, siendo diagnosticado de fractura de apófisis espinosa C6. Se le practicó un TAC craneal que detectó un infarto agudo estriado izquierdo y puntiformes capsulares y talámicos derechos envejecimiento con atrofia difusa e higromas bifrontales. El 16 de enero de 2006 fue dado de alta médica. En septiembre de 2005 había manifestado dolor en el hombro izquierdo y en octubre de ese año se le practicó una RMN cerebral que demostró signos de atrofia córtico-subcortical con higromas bifrontales, sin observarse complicaciones postraumáticas. El 1 de febrero de 2006 el recurrente inició un nuevo proceso de incapacidad temporal por enfermedad común, con el diagnóstico de infarto cerebral/estudio por neurólogo. El INSS le reconoció una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, con un cuadro residual de «19-5-05 accidente de trabajo traumatismo craneoencefálico leve. Fractura apófisis espinosa C6. Deprivación etílica. Diagnosticado en 2-06: deterioro psicoorgánico mixto. Multinfartos, atrofia cerebral, alcoholismo crónico. Rotura completa del tendón supraespinoso derecho con aceptable funcionalidad». La pretensión del recurrente es que se declare la contingencia de accidente de trabajo respecto de la incapacidad permanente reconocida. Sin embargo, la sentencia recurrida llega a la conclusión de que las dolencias determinantes de la segunda baja médica no derivan directamente del accidente ocurrido en mayo de 2005, pues las únicas lesiones sufridas por el actor fueron el traumatismo craneoencefálico leve y la fractura apófisis espinosa C6, y el dolor del hombro izquierdo no se conocía en el momento del accidente, no siendo hasta cuatro meses después cuando se manifiesta y luego se diagnostica con una ecografía una enfermedad degenerativa bilateral que afecta también al hombro derecho. Y por lo que se refiere a la patología neurológica tampoco puede afirmarse que derive del accidente, porque el traumatismo fue leve y la RMN no reveló complicaciones postraumáticas.

El recurrente alega como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 25 de noviembre de 2003 (R. 2292/2003), que estima el recurso del actor y declara que el proceso de incapacidad temporal iniciado el 15 de febrero de 2002 deriva de accidente de trabajo. El actor había sufrido un accidente mientras estaba embarcado, haciéndose una herida en el pie izquierdo de la que fue tratado en el propio barco. También se quejaba de dolores en los brazos y las muñecas. Cuando desembarcó la mutua le expidió un parte de baja, tras apreciar que la herida del pie estaba cicatrizada, y le proporcionó tratamiento para las dolencias de las manos y el hombro izquierdo, estimadas inicialmente -y luego ratificadas- como síndrome del túnel carpiano bilateral y síndrome de compresión subacromial. El 14 de febrero de 2002 la mutua le dio el alta médica al demandante, el cual al día siguiente causó nueva baja por enfermedad común. Meses después fue operado del hombro izquierdo, mantenía la rotura del tendón supraespinoso y padecía lesiones degenerativas en el otro hombro. La sentencia estima la demanda aplicando la presunción de laboralidad por manifestarse las dolencias en lugar y tiempo de trabajo y a falta de prueba de que el trabajo no ha sido el elemento desencadenante del daño. Considera decisivo a tal efecto que al actor no se le hubiera tratado antes por esas mismas dolencias y también que la rotura del tendón supraespinoso no es rara en un marinero de pesca de bacalao que debe hacer grandes esfuerzos, cuando a mayor abundamiento la mutua lo dio de baja médica por los dolores padecidos pues al desembarcar la herida del pie estaba prácticamente curada.

En el supuesto de la sentencia recurrida la incapacidad permanente se reconoce valorando un conjunto de dolencias de origen profesional y común, las primeras resultantes de un traumatismo craneoencefálico y fractura apófisis espinosa C6, y las segundas de carácter neurológico -multinfartos y atrofia cerebral-, así como una enfermedad degenerativa de los dos hombros, respecto de las cuales no se acredita que el trabajo sea la causa determinante de su producción al haberse manifestado fuera del tiempo y lugar de trabajo. Mientras que en el caso de la sentencia de contraste las dolencias distintas a la herida del pie, causada directamente por el accidente, se manifiestan en el lugar de trabajo y no se ha practicado prueba en contrario de que éste no haya sido el factor desencadenante.

No puede aceptarse la identidad que se alega en el oportuno trámite respecto a la carga de la prueba, porque el hecho de que un caso las dolencias se manifiesten fuera del lugar y tiempo de trabajo, y en el otro aparezcan en el lugar y tiempo de trabajo es decisivo a efectos de determinar a quién incumbe la carga de la prueba. Así en el primer caso debe acreditarse que el trabajo ha sido el factor determinante del padecimiento, mientras que en el segundo la parte que niega el accidente laboral debe probar su desconexión absoluta con el trabajo o, lo que es lo mismo, la ruptura de la relación de causalidad trabajo -lesión.

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Federico Novo Prego, en nombre y representación de D. Jenaro contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 22 de junio de 2012, en el recurso de suplicación número 1157/2009, interpuesto por D. Jenaro, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de A Coruña de fecha 25 de noviembre de 2008, en el procedimiento nº 281/2008 seguido a instancia de D. Jenaro contra MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENVASES LA ESTRELLA S.L., INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre determinación de contingencia.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 15775/2009
Id Cendoj: 28079140012009202988
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 166/2009
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Fernando Salinas Molina
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil nueve.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO SALINAS MOLINA.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 20 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 29 de junio de 2006, en el procedimiento nº 552/05 seguido a instancia de EMPRESA ULNOR S.A. contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DOÑA Genoveva, DON Fulgencio, DOÑA Margarita, DON Ismael y LA EMPRESA EJECUMAN S.L., sobre cantidad, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por ENTIDAD MERCANTIL ULNOR S.A. DOÑA Genoveva DOÑA Margarita DON Fulgencio, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 30 de junio de 2.008, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 10 de febrero de 2.009 se formalizó por el Letrado Don Rafael Navarrete Paniagua, en nombre y representación de ENTIDAD ULNOR, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 9 de septiembre de 2.009 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de una relación precisa y circunstanciada, falta de contradicción y falta de contenido casacional. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral exige que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada. Para cumplir este requisito la parte recurrente debe establecer la identidad de los supuestos a partir de los que afirma la existencia de contradicción mediante una argumentación mínima sobre la concurrencia de las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, a través de un examen, que sea suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que el recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas (Sentencias de 27 de mayo de 1992 (R. 1324/1991), 16 de septiembre de 2004 (R. 2465/2003), 6 de julio de 2004 (R. 5346/2003), 15 de febrero de 2005 (R. 1900/2004), 28 de junio de 2005 (R. 3116/04) y 31 de enero de 2006 (R. 1857/04). En el presente caso, frente a lo defendido por la parte recurrente en su escrito de alegaciones de 16 de septiembre de 2009, y respecto de los dos motivos de impugnación articulados, la parte recurrente se limita a yuxtaponer la transposición literal de los hechos de la sentencia recurrida y de las sentencias finalmente seleccionadas de contraste, sin llevar a cabo en ningún momento un auténtico análisis comparativo de hechos, fundamentos y pretensiones que hayan llevado a fallos contradictorios, procediendo exclusivamente a contraponer doctrinas abstractas de las sentencias.

SEGUNDO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra

resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004)].

En el caso analizado por la sentencia recurrida, el accidente ocurrió el 6 de marzo de 1997, al encontrarse el trabajador accidentado encofrando un pilar cilíndrico de la 4ª planta de un edificio en construcción de viviendas, sufriendo politraumatismo con resultado de muerte. Tras visita de la Inspección de Trabajo, se inicia expediente sancionador, acordándose suspender el mismo el 20 de noviembre de 1997, por haberse iniciado procedimiento penal, que finalizó el 17 de marzo de 1999. El 4-09-2001 se impuso sanción, que fue recurrida en lo contencioso-administrativo. El 11-09-1997 la Inspección de Trabajo comunica al INSS el inicio del procedimiento de recargo, que fue comunicado a las partes, habiendo formulado alegaciones la empresa demandada el 7 de enero de 2004, dictándose resolución el 21 de marzo de 2005, por la cual se impone recargo del 50% a las dos empresas responsables, de forma solidaria. Las prestaciones a que ha dado lugar el fallecimiento del trabajador, con efectos de 7 de marzo de 1997 son pensión vitalicia de viudedad, de orfandad e indemnización a tanto alzado y auxilio por defunción. Según informe forense emitido a petición de la empresa demandante en el presente procedimiento, el trabajador presentaba una tasa de alcoholemia de 2,6 gramos por litro de sangre. El trabajo que desarrollaba el fallecido en el momento del accidente consistía en verter hormigón sobre un pilar de borde de forjado en la tercera planta del edificio de viviendas y posteriormente vibrarlo hasta su correcta puesta en obra. El desplome del pilar fue la causa del accidente, pero se desconocen con exactitud las causas que motivaron el desplome. La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda, reduciendo el recargo al 30%, por entender que se había producido asimismo una imprudencia del trabajador. La Sala de suplicación confirma esta decisión, entendiendo, en primer lugar, que no puede apreciarse prescripción respecto de la imposición del recargo, primero, porque el procedimiento administrativo se suspendió por causa penal, y segundo, porque habiendo finalizado esta el 17 de marzo de 1999, la parte demandante efectuó alegaciones con anterioridad al transcurso de cinco años -el 7-1-2004-. Además, el tiempo adicional durante el cual el asunto no se tramitó administrativamente una vez finalizada la causa penal no puede computarse como tiempo de prescripción. En cuanto a la procedencia del recargo, la empresa ha cometido varias infracciones que presentan un nexo causal claro con el accidente producido, siendo estas, en concreto, no llevar cinturón de seguridad anclado; atar al andamio el cable del vibrador, lo que provocó la caída del andamio y con él la del trabajador; las redes protectoras carecían de elevación suficiente respecto de la plataforma de trabajo; y, finalmente, falta de formación e información suficiente a los trabajadores, al haber ingresado este en la empresa 2 meses antes sin que conste un plan de seguridad que contemple todas las operaciones que realmente se realizan en la obra, así como la no corrección de la operativa incorrecta seguida -el atado del vibrador al andamio-. De la misma forma, declara la sentencia que la imprudencia del trabajador derivada de su grado de alcoholemia no puede calificarse como temeraria, si bien su existencia justifica la reducción del porcentaje del recargo del 50% al 30%.

Invoca de contraste la parte recurrente en el primer motivo de impugnación la STSJ Castilla y León/ Valladolid de 24 de julio de 2006, R. 1356/06. No se da la contradicción requerida entre la sentencia de contraste y la sentencia recurrida porque en esta última se tiene por interrumpida la prescripción no sólo por el seguimiento de causa penal, sino también durante el tiempo que se tramitó el procedimiento administrativo de recargo, incluso una vez finalizada la causa penal, teniendo además por interrumpida la prescripción por la presentación de un escrito de alegaciones por parte de la empresa demandante. En cambio, en el supuesto analizado por la sentencia de contraste, aun habiéndose seguido en su día actuaciones penales por el accidente y un posterior proceso civil reclamando indemnización por daños y perjuicios, fue más tarde cuando se inició a instancia de parte el expediente administrativo de recargo de prestaciones, más de siete años después del reconocimiento de la última prestación reconocida, a saber, la incapacidad permanente. En consecuencia, el

procedimiento administrativo no se suspendió, sino que se incoó tardíamente, frente a lo que sucede en el caso analizado por la sentencia recurrida y ello hace que, a la hora de valorar la existencia de contradicción, no pueda estarse exclusivamente a la fecha de la resolución que impuso los recargos impuestos, en relación con la fecha en que se produjo el accidente de trabajo, tal y como pretende la parte recurrente en su escrito de alegaciones de 16 de septiembre de 2009.

TERCERO.- La función institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina es procurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico por los órganos judiciales del orden social. De ahí que carezcan de contenido casacional de unificación de doctrina aquellos recursos interpuestos contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo [Auto de fecha 21 de mayo de 1992 (R. 2456/1991), y Sentencias de 14 de diciembre de 1996 (R. 3344/1995), 21 y 23 de septiembre de 1998 (R. 4273/1997 y 2431/1997), 27 de octubre de 1998 (R. 3616/1997), 16 de junio de 2003 (R. 2835/2001), 18 de noviembre de 2004 (R. 5193/2003), 3 de diciembre de 2004 (R. 6052/2003), 25 de enero de 2005 (R. 5515/2003) y 30 de septiembre de 2005 (R. 3824/2004)].

En el presente caso, y tal y como reconoce la propia parte recurrente en su escrito de alegaciones de 16 de septiembre de 2009, la decisión de la sentencia recurrida en cuanto a que no se computa a efectos de prescripción el tiempo de suspensión del expediente administrativo de recargo de prestaciones por incoación de procedimiento penal es conforme con la doctrina de esta Sala contenida en las SSTs 18 de octubre de 2007, R. 2812/06, 13 de febrero de 2008, R. 163/07 -esta última, con la misma sentencia de contraste que la aquí invocada- y 2 de octubre de 2008, R. 1964/07, que han declarado que «ha de admitirse que en materia de recargos de prestaciones no existe prejudicialidad penal devolutiva, de forma que la tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos no suspende el procedimiento para imponer el citado recargo por falta de medida de seguridad, pese a lo previsto en el art. 16.2 OM 18/01/96, pues tal paralización no se contempla en el 1300/1995 [21/Julio] del que aquella es desarrollo y resulta contraria al art. 86.1 LPL, a la par que el art. 3.2 RD Legislativo 5/2000 [4 /Agosto] limita a contemplar la paralización del procedimiento para el aspecto sancionador; así se ha mantenido en las sentencias de 17/05/04 [rcud 3259/03], 08/10/04 [rcud 4552/03], 25/10/05 [rcud 3552/04], 18/10/07 [rcud 2812/06] y 13/02/08 [rcud 163/07], a cuyos más extensos razonamientos nos remitimos. Ahora bien, la Sala igualmente ha afirmado que la inexistencia de tal efectivo suspensivo no comporta que ese proceso penal o el procedimiento administrativo para sancionar las responsabilidades administrativas por incumplimiento de las normas de prevención que haya podido motivar el accidente no suspendan el plazo de prescripción de la acción para reclamar el abono del recargo. Así los hemos afirmado -siquiera obiter dicta - en nuestra sentencia de 12/03/07 [rcud 4099/05] y ya con profusión argumental los reiteramos en las de 18/10/07 [rcud 2812/06] y 13/02/08 [rcud 163/07]». Es cierto que en las sentencias citadas, así como, en particular, en la STS de 27 de diciembre de 2007, R. 4945/06, se ha señalado que la prescripción ha de entenderse suspendida durante todo el tiempo de tramitación del expediente administrativo de recargo y la sentencia recurrida también incide en este aspecto. Esta doctrina es asimismo acorde con el fallo de la sentencia recurrida, en la medida en que la misma también señala que no cabe entender prescrito el expediente porque entre la finalización de la causa penal y la presentación de un escrito de alegaciones de la empresa demandante transcurrió menos de cinco años. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para la sentencia recurrida, el elemento determinante para no apreciar la prescripción es el hecho de que no hayan transcurrido cinco años desde la finalización de la causa penal hasta las alegaciones efectuadas por la empresa en el expediente administrativo, por lo que la falta de contenido casacional necesariamente ha de complementarse con la falta de contradicción ya estudiada.

CUARTO.- En relación con el segundo motivo de impugnación, la STSJ Cataluña de 20 de mayo de 1998, R. 6483/97 analiza un supuesto en que el trabajador, sobre las 11,30 horas de la mañana estacionó un camión a unos 50 cms. de la pared del almacén de la empresa, accionó la grúa y la palanca de hidráulico, saliendo el estabilizador hidráulico delantero derecho que le atrapó contra la pared, no pudiendo salirse al tener situado el camión a la referida distancia de la pared, causándole la muerte. Practicado análisis de sangre, resultó que tenía concentración de alcohol etílico en sangre de 1,8 g/l. Según el Servicio de Toxicología los efectos del etanol en el hombre, en concentraciones aproximadas a 0,9 g/l a 2,5 g/l van desde la inestabilidad emocional a la pérdida del juicio crítico y al incremento del tiempo de reacción e incoordinación muscular. La sentencia estima que debe operar la exclusión del art. 115-4 Ley General de la Seguridad Social, porque existe un dato objetivo, cual es que el grado de etanol en sangre mientras el trabajador está realizando actividades propias de su profesión, utilizando los mandos de una grúa incorporada al camión. La conducta se califica de imprudencia temeraria desde el momento en que el causante decide utilizar los mando del camión-grúa en esa condición de embriaguez.

No puede apreciarse la contradicción invocada por las mismas causas que se señalaron tanto en la STS de 31 de marzo de 1999, R. 2997/98, que resolvió el recurso de casación para unificación de doctrina contra la sentencia hoy invocada de contraste, como en el Auto de 12 de diciembre de 2000, R. 1305/00, en el que se invocó de contraste la misma sentencia que en el presente procedimiento. Así, como señalara la sentencia citada, las circunstancias en que ocurrieron ambos accidentes no son comparables, como tampoco las funciones que tenían encomendadas ambos trabajadores accidentados, por mucho que los dos se encontrasen en situación de embriaguez. Por otra parte, en el Auto mencionado se señala que mientras que en la sentencia de contraste «se tiene acreditada la existencia de relación entre embriaguez y el accidente», esta circunstancia no se da en la sentencia recurrida, pese a que el grado de alcoholemia sea incluso superior. En esta última, además de establecerse que la imprudencia del trabajador no podía considerarse temeraria, se señala que fueron varias infracciones cometidas por la empresa las que provocaron el accidente, sin que, por lo demás, se de esta circunstancia en la sentencia invocada de contraste. En consecuencia, no basta para apreciar la existencia de contradicción el hecho de que ambos trabajadores hubieran consumido alcohol, tal y como pretende la parte recurrente en su escrito de alegaciones de 16 de septiembre de 2009.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas a la parte recurrente, así como pérdida del depósito.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Rafael Navarrete Paniagua en nombre y representación de ENTIDAD ULNOR, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 30 de junio de 2.008, en el recurso de suplicación número 5681/07, interpuesto por ENTIDAD MERCANTIL ULNOR S.A. DOÑA Genoveva DOÑA Margarita DON Fulgencio, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 20 de los de Madrid de fecha 29 de junio de 2006, en el procedimiento nº 552/05 seguido a instancia de EMPRESA ULNOR S.A. contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DOÑA Genoveva, DON Fulgencio, DOÑA Margarita, DON Ismael y LA EMPRESA EJECUMAN S.L., sobre cantidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

<http://www.tirantonline.com>
Documento TOL3.374.264
Jurisprudencia
Jurisdicción: Social
Ponente: Jesús Souto Prieto
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 17/09/2009
Tipo Resolución: Auto
Sala: Cuarta
Número Recurso: 430 / 2009

ENCABEZAMIENTO:

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Septiembre de dos mil nueve.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS SOUTO PRIETO.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 15 de los de Valencia se dictó sentencia en fecha 9 de julio de 2007, en el procedimiento nº 36 / 07 seguido a instancia de D. Pedro Enrique y D^a Palmira contra empresario D. Donato y la Compañía de Seguros REALE UNIÓN ASEGURADORA SOCIEDAD ANÓNIMA, sobre cantidad, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 22 de octubre de 2008, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 3 de marzo de 2009 se formalizó por el Letrado D. Ignacio Emparan Rozas en nombre y representación de D. Pedro Enrique y D^a Palmira, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO. - Esta Sala, por providencia de 19 de mayo de 2009 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y defecto en preparación por falta de núcleo de la contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824 / 1991 y 1053 / 1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035 / 1996, 94 / 1997, y 4203 / 1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478 / 1997), 7 de abril de 2005 (R. 430 / 2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132 / 2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082 / 2004). Contradicción que no puede apreciarse en este caso.

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 22 de octubre de 2008 (Rec. 4372 / 2007), confirma la de instancia desestimatoria de la demanda rectora del proceso. Consta en el relato fáctico de la sentencia que el hijo de los actores sufrió un accidente de tráfico mientras conducía un vehículo de transporte de la empresa para la que trabajaba como conductor mecánico. En concreto, el accidente se produjo cuando el trabajador, que se encontraba bajo los efectos de alcohol etílico, cocaína y cannabis y

que había iniciado la marcha sobre las 11. 15 horas, sufrió sobre las 4. 20 horas una salida de la vía con el camión con semirremolque que conducía, chocando con una barrera de seguridad, volcando lateralmente sobre la calzada, y falleciendo en el acto. La empleadora tenía concertada una póliza de seguro que cubría el riesgo de accidente laboral. En instancia y en suplicación se desestima la pretensión de los actores de lucrar la indemnización prevista en la póliza, al apreciar imprudencia temeraria en la conducta del trabajador, lo que impide considerar el siniestro accidente laboral. Razona la Sala que aunque en el atestado de la Guardia Civil se indica que el accidente debió atribuirse a una distracción del trabajador, la conducción bajo los efectos del alcohol y las dogas supone ya de por sí una imprudencia temeraria, y tuvo necesariamente que repercutir de forma notable en el nivel de consciencia, equilibrio y reflejos, pudiendo deberse la distracción a esta influencia.

Contra esta sentencia interponen recurso de casación unificadora los demandantes discutiendo que la conducta de su hijo pueda merecer la consideración de imprudencia temeraria, aportando de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 22 de marzo de 2006 (Rec. 183 / 2006), respecto de la que no resulta posible apreciar contradicción porque en este caso se reconoce a la hija del trabajador fallecido la indemnización prevista en el convenio en caso de fallecimiento derivado de accidente de trabajo en unas circunstancias diversas a las que nos ocupa. En efecto, en este caso el trabajador, también conductor mecánico, falleció en accidente de circulación mientras conducía un tractocamión propiedad de la empresa, y razona la Sala que aunque conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas con 1, 20 g / l en sangre, ello no demuestra que fuese la causa del accidente, constando en el atestado que podía haberse debido a una inadecuada velocidad, pero sin indicar la velocidad a la que conducía. Y al efecto tiene particularmente en cuenta la existencia de otros datos más objetivos que pudieron dar lugar al accidente: curva peligrosa a la derecha, señal de peligro por pendiente prolongada del 6 %, calzada mojada por lluvia intensa, y luminosidad nocturna y sin iluminación artificial.

Huelga señalar que no resultan comparables los supuestos de hechos, así mientras en el caso de autos consta únicamente que el trabajador se encontraba bajo los efectos de alcohol etílico, cocaína y cannabis y que el accidente se pudo deber a una distracción, que la Sala considera puede relacionarse con el estado en el que conducía, en el de referencia sólo queda acreditado que el trabajador conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas con 1,20 g / l en sangre, y que concurrían otras posibles causas del accidente (curva peligrosa a la derecha, señal de peligro por pendiente prolongada del 6 %, calzada mojada por lluvia intensa, y luminosidad nocturna y sin iluminación artificial).

SEGUNDO.- Además, incurre el recurso en defecto insubsanable en preparación, al no exponer en modo alguno en el escrito correspondiente los hechos concurrentes en las sentencias seleccionadas de contraste, limitándose a citarlas. Y es doctrina unificada de esta Sala - entre otras, sentencias de 22 de junio de 2001 (R. 3006 / 2000), 26 de marzo de 2002 (R. 2504 / 2001), 18 de diciembre de 2002 (R. 203 / 2002), 20 de septiembre de 2003 (R. 3140 / 2001), 1 de junio de 2004 (R. 3321 / 2003), 17 de junio de 2004 (R. 4453 / 2003), 18 de junio de 2004 (R. 4038 / 2003), 25 de junio de 2004 (R. 4495 / 2003) y 11 de noviembre de 2004 (R. 4039 / 03) - que, conforme a lo previsto en el art. 219. 2 de la LPL, el escrito de preparación del recurso, ha de exponer el núcleo básico de la contradicción y citar la sentencia o sentencias con las que tal contradicción se produce. De modo que, si bien no será necesario efectuar en dicho escrito «el análisis comparativo de las identidades que constituyen el ámbito propio de la relación precisa y circunstanciada del escrito de interposición», sí «deberá identificar tanto el núcleo básico de la contradicción, que la Sala ha definido como la determinación del objeto y el sentido de la divergencia entre las resoluciones comparadas, como las sentencias concretas que se tienen por contradictorias».

Por otra parte, hay que señalar que el incumplimiento de tales requisitos constituye defecto procesal insubsanable, porque no está prevista su subsanación en el art. 207. 3 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con el art. 193. 3 de la misma Ley y se trata además de «una omisión injustificada imputable a quien prepara el recurso en un trámite que, a diferencia de lo que ocurre con la casación ordinaria y la suplicación, exige la intervención de Letrado, y esa omisión afecta a la regularidad del procedimiento, al retrasar, también de forma injustificada, la firmeza de la sentencia de suplicación con el consiguiente perjuicio para la parte que ha obtenido un pronunciamiento favorable.

Cabe significar, además, que sobre tal interpretación se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, habiendo declarado en auto 260 / 1993, de 20 de julio, que este criterio no es contrario al art. 24 de la Constitución, «sino más bien impecable desde el punto de vista constitucional y legal». Doctrina que ha reiterado en la STC 111 / 2000, de 5 de mayo.

Estos razonamientos no han quedado desvirtuados con las alegaciones de la parte recurrente, en las que se insiste en la identidad de las resoluciones comparadas, pero sin aportar elementos novedosos y relevantes que permitan llegar a una conclusión diferente a la expuesta. Por lo demás, debe recordarse de nuevo a esta parte que no cabe en este recurso la comparación abstracta de doctrinas que pretende. Y que, por mucho que sostenga lo contrario, basta la lectura del escrito de preparación para constatar que no se cumplen las exigencias legales señaladas en su momento.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Ignacio Emparan Rozas, en nombre y representación de D. Pedro Enrique y D^a Palmira contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 22 de octubre de 2008, en el recurso de suplicación número 4372 / 07, interpuesto por D. Pedro Enrique y D^a Palmira, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 15 de los de Valencia de fecha 9 de julio de 2007, en el procedimiento nº 36 / 07 seguido a instancia de D. Pedro Enrique y D^a Palmira contra empresario D.

Donato y la Compañía de Seguros REALE UNIÓN ASEGURADORA SOCIEDAD ANÓNIMA, sobre cantidad.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Roj: ATS 7304/2008
Id Cendoj: 28079140012008201329
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 4288/2007
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Joaquín Samper Juan
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a ocho de Julio de dos mil ocho.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Vitoria se dictó sentencia en fecha 20 de diciembre de 2006, en el procedimiento nº 334/06 seguido a instancia de D^a Elsa, en su nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Oscar y Luis contra CARPINTERÍA LLODIANA, S.A., MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Nº 126 MUTUAL CYCLOPS, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre declaración de contingencia, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en fecha 23 de octubre de 2007, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de diciembre de 2007 se formalizó por la Procuradora D^a Sara Natalia Gutiérrez Lorenzo en nombre y representación de D^a Elsa, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 16 de abril de 2008 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004). Contradicción que no puede apreciarse en este caso.

La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 23 de octubre de 2007 (Rec. 2035/2007), revoca la de instancia estimatoria de la pretensión rectora del proceso. Consta en el relato fáctico de la sentencia que el esposo de la actora falleció como consecuencia de un politraumatismo provocado en un accidente de tráfico sufrido al regresar de su trabajo habitual. En instancia se declara el fallecimiento derivado

de accidente de trabajo, revocándose en suplicación esta resolución. No se discute en suplicación la consideración del accidente como in itinere, sino si que el fallecido incurrió en dolo o en imprudencia temeraria. Tesis que la Sala acoge destacando que cuando se produjo el accidente conducía su motocicleta tras la ingesta de alcohol por encima de la tasa permitida (queda probada la presencia de 1,66 g/l de alcohol en sangre, cuando la tasa permitida es de 0,5), y de cannabis, a más velocidad de la permitida, y aunque el trayecto estaba en obras, y es posible que estas no estuviesen todo lo bien señalizadas que debían, él lo conocía porque lo realizaba habitualmente. Contra esta sentencia interpone recurso de casación unificadora la viuda, aportando de contraste la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de septiembre de 2003 (Rec. 1848/2003).

En esta sentencia se declarada derivado de accidente de trabajo el fallecimiento del hijo de los actores, que había estado prestando servicios hasta cerca de las tres horas de la madrugada del día del accidente, acercando después en coche a un compañero hasta su domicilio familiar, donde lo dejó para continuar hacia el propio. A las 5,05 horas de ese día se recibió llamada telefónica del Área Regional de Tráfico de Girona dels Mossos d'Esquadra, informando del accidente de tráfico en el que había perdido la vida el causante. Se discute en la sentencia la concurrencia de imprudencia temeraria y la consideración del accidente como in itinere. Ahora sólo interesa la segunda cuestión al no debatirse la primera en el caso de autos. Conviene tener en cuenta que el examen de toxicología practicado al fallecido reveló una concentración de 1,78 g/l. de alcohol etílico y menor a 0,02 ug/ml. de cocaína. Pues bien, razona la Sala que la ingestión de bebidas alcohólicas por el causante constituye sin duda una conducta imprudente, pero no implica una imprudencia de gravedad excepcional, contra todo instinto de conservación de la vida y con clara conciencia del peligro, cual es la imprudencia temeraria a los efectos de pérdida de la condición de accidente de trabajo.

Pese a la innegable proximidad de los supuestos, en la medida en que ambos casos se supera la tasa de alcoholemia permitida habiendo ingerido también drogas el fallecido, no puede apreciarse la contradicción alegada toda vez que en el supuesto de autos a las circunstancias coincidentes se suma el que la carretera estuviese en obras, y que pese a ello el fallecido condujese a más velocidad de la permitida, haciendo maniobras innecesarias. No puede, por ello, sostenerse que la doctrina de las sentencias sea contraria, porque la ahora recurrida no sostiene que conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas sea en todo caso una imprudencia temeraria, sino que estos hechos sumados al exceso de velocidad en zona en obras sí merecen tal consideración.

Estos razonamientos, contenidos en nuestra providencia de 16 de abril de 2008, no han quedado desvirtuados con las alegaciones de la recurrente, con entrada en esta Sala el 2 de junio. En ellas insiste la recurrente en la identidad de los supuestos comparados, toda vez que lo que discute por este cauce procesal es la consideración como imprudencia temeraria de la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Argumento que no puede tener favorable acogida por las razones que se acaban de exponer, esto es: que a las señaladas se suman en el caso de autos otras circunstancias, inexistentes en el caso de referencia.

SEGUNDO.- Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal. Sin imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora D^a Sara Natalia Gutiérrez Lorenzo, en nombre y representación de D^a Elsa contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de fecha 23 de octubre de 2007, en el recurso de suplicación número 2035/07, interpuesto por MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO NÚM. 126 CYCLOPS, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Vitoria de fecha 20 de diciembre de 2006, en el procedimiento nº 334/06 seguido a instancia de D^a Elsa, en su nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Oscar y Luis contra CARPINTERÍA LLODIANA, S.A., MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Nº 126 MUTUAL CYCLOPS, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre declaración de contingencia.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 8483/2007
Id Cendoj: 28079140012007201194
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1208/2006
Procedimiento: Social
Ponente: Luis Ramón Martínez Garrido
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Abril de dos mil siete.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 34 de los de Madrid se dictó sentencia en fecha 29 de abril 2.005, en el procedimiento nº 933/04 seguido a instancia de DON Jose Augusto, DOÑA Yolanda contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UNIÓN MUSEBA IBESVICO, MATEP, DECORACIÓN y TERMOGRABADO S.L., sobre derechos, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por UNIÓN MUSEBA IBESVICO MUTUA DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 271 y DECORACIÓN y TERMOGRABADO S.L., siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 26 de diciembre de 2.005, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 17 de marzo de 2.006 se formalizó por la Letrada Doña María José Sánchez García, en nombre y representación de DECORACIÓN Y TERMOGRABADO, S.L., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 18 de enero de 2.007 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (SSTS de 27 y 28 de enero de 1992, R. 824/1991 y 1053/1991, 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997, R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996, 23 de septiembre de 1998, R. 4478/1997, 7 de abril de 2005, R. 430/2004, 25 de abril de 2005, R. 3132/2004, y 4 de mayo de 2005, R. 2082/2004).

La Sentencia recurrida confirma la de instancia, que estimo parcialmente la demanda. En dicha resolución se declara que el fallecimiento de la hija de los demandantes deriva de contingencia profesional, accidente de trabajo «*in itinere*», acontecido cuando la trabajadora, de profesión comercial, se dirigía a Madrid, en viaje por motivos laborales desde Bilbao, argumentando que la simple imprudencia no impide la calificación como accidente de trabajo. La Sala considera que la concentración de sangre por la conductora, de 0,96 g/l, así como el adelantamiento antirreglamentario constituye, sin duda una conducta imprudente, pero no implica una imprudencia

de gravedad excepcional, contra todo instinto de conservación de la vida y con clara conciencia del peligro, cual es la imprudencia temeraria a los efectos del pérdida de al condición de accidente de trabajo en misión, aunque todo ello influyera en las funciones psíquicas y motrices.

La recurrente ha elegido como contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 17-9-02, que estimando el recurso de suplicación absuelve a los demandantes y revoca la sentencia de instancia, que había declarado que la muerte sufrida por el trabajador fue debida a un accidente de trabajo «in itinere». La Sala razona que, desprendiéndose del relato histórico de la sentencia y demás actuaciones obrantes en autos, que el trabajador murió en accidente de circulación cuando conduciendo un vehículo de motor regresaba a casa procedente del trabajo, al encontrarse con otro vehículo que venía en dirección contraria y que en el momento del accidente presentaba un grado de alcoholemia en sangre del 1,9 g/l, no puede considerarse accidente de trabajo al ser debido a imprudencia temeraria del propio accidentado. Declara que debe operar la exclusión del art. 113,4º LGSS al existir un dato objetivo del grado de etanol en sangre, mientras se conduce un vehículo de motor, en concreto de 1,9 g/l que supera el legalmente establecido de 0,5 g/l, lo cual produce según informe del Instituto Nacional de Toxicología inestabilidad emocional, pérdida del juicio crítico, alteraciones de memoria, decrecimiento de la respuesta sensorial, incremento del tiempo de reacción e incoordinación de memoria. A lo que añade que en juicio penal fue absuelto el conductor del otro vehículo implicado en el accidente, por estimarse que la causa del accidente fue la velocidad inadecuada del fallecido en el tramo curvo de la vía, al quedar acreditado el conducir en estado de embriaguez y a excesiva velocidad.

No puede apreciarse la contradicción alegada porque las circunstancias que en cada caso se valoran en torno a la producción del accidente no son homogéneas. En el supuesto de la sentencia referencial se tiene en consideración, no solo la tasa de alcohol que el tenía, 1,9 g/l, cuando se produce el accidente, sino también el modo de proceder del accidentado, con velocidad inadecuada en el tramo curvo de la vía. En el caso de la resolución impugnada, consta que la concentración de alcohol en sangre por la conductora era de 0,96 g/l (menor que en la sentencia comparada).

Por otra parte, la STS de 31 de marzo de 1999 (RCUD 2997/98) ha declarado que inicialmente la Sala no puede hacer una declaración sobre «si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como la imprudencia que rompe la relación de causalidad. La imprudencia se configura en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto litigioso, y esas circunstancias concurrentes son de apreciación inicial del juzgador en cada caso concreto, para determinar si existe o no la causa de exclusión de la presunción de laboralidad».

Por último, hay que indicar que las alegaciones efectuadas por la parte recurrente, de fecha 06-03- 07, insistiendo en la semejanza de los supuestos comparados no pueden tener favorable acogida por las razones expuestas.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso. En aplicación de la dispuesto en el artículo 223.2 de la Ley de Procedimiento Laboral se imponen las costas a la parte recurrente y se acuerda la pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Doña María José Sánchez García en nombre y representación de DECORACIÓN Y TERMOGRABADO, S.L. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 26 de diciembre de 2.005, en el recurso de suplicación número 5087/05, interpuesto por UNIÓN MUSEBA IBESVICO, MUTUA DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 271 y DECORACIÓN Y TERMOGRABADO, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 34 de los de Madrid de fecha 29 de abril 2.005, en el procedimiento nº 933/04 seguido a instancia de DON Jose Augusto, DOÑA Yolanda contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UNIÓN MUSEBA IBESVICO, MATEP, DECORACIÓN Y TERMOGRABADO S.L., sobre derechos.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente. Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 12611/2006
Id Cendoj: 28079140012006201916
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3905/2005
Procedimiento: Social
Ponente: Víctor Eladio Fuentes López
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Julio de dos mil seis.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Motril se dictó sentencia en fecha 30 de septiembre de 2004, en el procedimiento nº 620/03 seguido a instancia de DOÑA Maribel contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA ASEPEYO y EMPRESA MOVIMIENTOS DE TIERRAS HERMANOS GARCÍA MOTRIL S.L., sobre Seguridad Social, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por MUTUA ASEPEYO, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 8 de junio de 2005, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 6 de octubre de 2005 se formalizó por la Procuradora Doña Matilde Marín Pérez, en nombre y representación de ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 23 de marzo de 2.006 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- En el caso de la sentencia recurrida, el trabajador, cuyos causahabientes son los actores del presente procedimiento, se desplazó por indicaciones de la empresa y con vehículo de la empresa a localidad distinta para realizar unas reparaciones. Tras realizar estas y proceder a almorzar, cuando se dirigía de nuevo a verificar el trabajo realizado, sufrió accidente de circulación cuando conducía por un tramo de curva fuerte a la derecha y descendente, comenzando a derrapar el vehículo hasta perder el control y se salió por el margen izquierdo hasta caer en el interior de una alberca de riego llena de agua sumergiéndose en ella el conductor y el vehículo. Como consecuencia del accidente, el trabajador resultó muerto, siendo la causa fundamental de la muerte la sumersión y la inmediata asfixia. En el estudio de laboratorio de hígado y pulmón del fallecido se detectó una alcoholemia de 1,85 g/l, que se corresponde con la fase ebria de la intoxicación etílica aguda. Solicitadas prestaciones de viudedad y orfandad por los demandantes, así como auxilio por defunción a la Mutua aseguradora del riesgo laboral, esta les fue denegada al entender la citada Mutua que no se trataba de accidente laboral. Reclamadas las correspondientes prestaciones al INSS este reconoció las prestaciones de viudedad y orfandad en los porcentajes y cuantía que señalan los hechos probados de la sentencia. Los causahabientes plantearon demanda ante el orden social por entender que la contingencia causante era la de accidente de trabajo. La sentencia de instancia estimó la demanda, que ha sido confirmada en suplicación. La sentencia de suplicación entiende que se trata de un accidente en misión y que la tasa de alcohol en sangre ha de calificarse de imprudencia, si bien no en grado de temeraria, teniendo en cuenta que esta última exige la consciencia en la asunción del riesgo temerario, desprecio por la vida del trabajador fallecido con ocasión del accidente, lo que no se acreditó que sucediera en el caso de autos.

Por su parte, la sentencia de contraste analiza un supuesto de accidente de trabajo *in itinere*, puesto que el trabajador accidentado se dirigía a su domicilio habitual en automóvil y, conduciendo en un tramo curvo hacia la derecha, de reducida visibilidad y con cambio de rasante, como se introdujo en la curva a una velocidad superior a la que permitía el tramo, perdió el control del vehículo que tras dar varios bandazos y golpear el lateral trasero de un vehículo que circulaba en dirección contraria, se salió de la calzada, yendo a golpear contra una alcantarilla y empotrándose finalmente en una acequia. Como consecuencia del accidente, el trabajador falleció. Practicado análisis de sangre por el Instituto Nacional de Toxicología, dió como resultado la concentración de etanol en sangre de 1,85 gramos por litro. Los familiares del trabajador accidentado reclamaron prestaciones por accidente de trabajo a la Mutua con la que la empresa tenía concertado el riesgo, que esta denegó. Interpuesta la correspondiente demanda, esta fue desestimada en la instancia y en suplicación. En concreto, para la sentencia de suplicación existió imprudencia temeraria por parte del trabajador, puesto que, a la elevada tasa de alcohol con que conducía, se unió una conducción notoriamente desatenta como relata la sentencia, que acredita grado de contribución causal de aquel factor previo.

El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [Sentencias de 27 y 28 de enero de 1992 (R. 824/1991 y 1053/1991), 18 de julio, 14 de octubre, y 17 de diciembre de 1997 (R. 4035/4996, 94/1997, y 4203/1996), 23 de septiembre de 1998 (R. 4478/1997), 7 de abril de 2005 (R. 430/2004), 25 de abril de 2005 (R. 3132/2004) y 4 de mayo de 2005 (R. 2082/2004)].

En el presente caso, no se da la contradicción alegada, pese a la coincidencia de ciertos datos en ambos supuestos, como es el caso de que se produjera accidente de tráfico con resultado de muerte, que ambos actores tuvieran una tasa de alcoholemia idéntica y que lo que se debata en ambos casos sea la concurrencia de imprudencia temeraria a efectos de calificar o no el accidente como de trabajo. Pero se da una diferencia relevante entre ambos supuestos que hace que no se pueda apreciar la contradicción alegada. En efecto, mientras que en la sentencia recurrida tan sólo se da como circunstancia el hecho de la elevada tasa de alcohol en sangre, en la sentencia de contraste este elemento se da junto con el hecho de que el trabajador llevara a cabo una conducción notoriamente desatenta. Ambos factores fueron tomados en cuenta por la sentencia de contraste, mientras que en la sentencia recurrida no consta probada esa conducción notoriamente desatenta.

SEGUNDO.- Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas a la parte recurrente, así como pérdida del depósito.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora Doña Matilde Marín Pérez en nombre y representación de ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 8 de junio de 2005, en el recurso de suplicación número 971/05, interpuesto por MUTUA ASEPEYO, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Motril de fecha 30 de septiembre de 2.004, en el procedimiento nº 620/03 seguido a instancia de DOÑA Maribel contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA ASEPEYO y EMPRESA MOVIMIENTOS DE TIERRAS HERMANOS GARCÍA MOTRIL S.L., sobre Seguridad Social.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente, así como pérdida del depósito. Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 14944/2005 - ECLI:ES:TS:2005:14944A
Id Cendoj: 28079140012005202396
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 5229/2004
Procedimiento: Social
Ponente: José Maria Botana López
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Noviembre de dos mil cinco.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Pontevedra. se dictó sentencia con fecha 13 de Noviembre de 2001, en el procedimiento nº 324/01 seguido a instancia de DOÑA Rosario, DON Juan Carlos, DOÑA Claudia y DON Cristobal contra DOÑA Paula, MUTUA ASEPEYO, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre reconocimiento de prestaciones por muerte y supervivencia, que estimaba parcialmente la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Esta resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, y en este recurso se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con fecha 21 de octubre de 2004, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 30 de marzo de 2005 se formalizó por el Letrado D. Venancio Martín Villanueva, en nombre y representación de DOÑA Rosario Y OTROS, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 27 de diciembre de 2005, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral exige que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada. Para cumplir este requisito la parte recurrente debe establecer la identidad de los supuestos a partir de los que afirma la existencia de contradicción mediante una argumentación mínima sobre la concurrencia de las identidades del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, a través de un examen, que sea suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que el recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas (sentencias de 27 de mayo de 1.992 recurso 1324/91, 18 de junio de 1997 recurso 4035/96, 21 de marzo de 2002 recurso 1525/01 y 9 de junio de 2005 recurso 2752/04).

En el presente caso, tal como dictamina el Ministerio Fiscal, resulta evidente que no se ha cumplido en modo alguno en el recurso, el esencial motivo de recoger y expresar la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, ya que después de recoger en síntesis los hechos probados de las sentencias comparadas, se limita a expresar, que «en ambas sentencias el conductor fallecido, dentro del ámbito temporal que considera como tiempo de trabajo había vulnerado una norma administrativa de cuidado cual es la conducción sobrepasando el límite administrativo autorizado de alcohol en sangre, habiendo realizado ingestas de alcohol previas», sin aludir a otras circunstancias que se recogen en la narración fáctica y, después de exponer los fundamentos y pretensiones de ambos supuestos, afirma que existe identidad de hechos, pretensiones y fundamentos y que encontrándose los litigantes en la misma situación, las sentencias comparadas son contradictorias.

SEGUNDO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra

resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 de enero de 1.992 recurso 824/91, 18 de julio de 1997 recurso 4067/96, 17 de mayo y 22 de junio de 2000 recursos 1253 y 1785/99, 14 de noviembre de 2003 recurso 4758/02, 29 de enero y 17 de diciembre de 2004 recursos 3770/02 y 6028/03 y 20 de enero de 2005 recurso 1111/03).

En la sentencia combatida se estima la existencia de imprudencia temeraria porque el fallecido «conducía un camión con remolque, que transportaba mercancías peligrosas, haciéndolo, no solamente en un estado personal de no normalidad, a causa del consumo anterior de bebidas alcohólicas [índice de 0,52 gramos de alcohol]; sino también de forma inadecuada, para las circunstancias de tráfico concurrentes, pues marchaba a una velocidad (70 km/h), muy superior a la máxima permitida (40km/h), en hora nocturna y por la travesía de un lugar poblado... con olvido de las más elementales medidas de precaución -que debían ser extremas ante la peligrosidad de la mercancía transportada-... con todo lo que origino un gravísimo riesgo, que, ante la falta de cualquier dato en contra, fue el único factor desencadenante de lo ocurrido».

Esta acumulación de circunstancias en las que se basa la sentencia combatida para estimar la imprudencia temeraria no concurren en la de contraste, por lo que falta el requisito de identidad de supuestos, cuando además en materia de accidentes de trabajo la casuística es amplísima, hasta el punto de que la regla general es que cada supuesto es único y diverso, pues no cabe pensar que dos accidentes sean idénticos en cuanto a su forma de producción y causas concurrentes. Así se evidencia con los hechos probados de la sentencia de comparación: el conductor fallecido que tenía una concentración de alcohol de 0,8, colisionó con un autobús en un cruce y, por la vía donde accedía existía un stop y, a la izquierda de donde venía el autobús, estaban plantados en un montículo rosales y unos pequeños abetos. Por lo que, en los fundamentos jurídicos de la sentencia de contraste se dice, que el recurrente «anuda» a la imprudencia temeraria los hechos de haber saltado un stop por parte del fallecido y tener una tasa de alcoholemia del 0,8 y, al respecto se argumenta, que la certeza de la transgresión de las normas reglamentarias no puede calificar automáticamente la temeridad en el ámbito laboral y, en el caso de autos lo único incuestionado es que el trabajador no observó la señal de stop «pero no hay ninguna otra circunstancia para calificar esta inobservancia reglamentaria de temeraria, máxime si se tiene en cuenta que la misma se produce dentro de la ciudad... ya que se precisa de una conducta imprudente de gravedad excepcional, lo que no sucede en el caso enjuiciado, porque hay que tener en cuenta que en el hecho probado tercero consta que de la parte izquierda de donde venía el autobús estaban plantados en un montículo rosales y unos pequeños abetos, lo que indudablemente produce una cierta falta de visibilidad, o al menos obliga a traspasar la señal de stop para que la visión del conductor pudiese apreciar si la vía a la que pretendía acceder estaba libre o por el contrario venía algún vehículo, siendo descartable por tanto en el presente caso, dada la existencia de estos factores, la posibilidad de imprudencia temeraria únicamente por el hecho de no haber parado convenientemente en el stop, y con relación a la tasa de alcoholemia hay que indicar que es baja».

TERCERO.- De conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, en atención a las consideraciones expuestas que no se han desvirtuado por el recurrente en su escrito de alegaciones, procede la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina. Sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Venancio Martín Villanueva, en nombre y representación de DOÑA Rosario Y OTROS, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 21 de octubre de 2004.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida. Sin costas. Contra este auto no cabe recurso alguno.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

<http://www.tirantonline.com>

Documento TOL781.766

Jurisprudencia

Cabecera: Recurso de casación para la unificación de doctrina: inadmisión por falta de contradicción; accidente de trabajo; imprudencia temeraria. Accidente laboral caída altura imprudencia temeraria no indemnización daños y perjuicios

Jurisdicción: Social

Ponente: Gonzalo Moliner Tamborero

Origen: Tribunal Supremo

Fecha: 22/11/2005

Tipo Resolución: Sentencia

Sala: Cuarta

Sección: Primera

Número Recurso: 4367/2004

Supuesto de hecho: Recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en suplicación, con fecha 5 de mayo de 2004, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Palma de Mallorca, de fecha 20 de mayo de 2003.

RESUMEN:

El Tribunal Supremo no admite el recurso de casación para la unificación de doctrina porque no concurren las identidades necesarias entre las sentencias presentadas como contradictorias para interponer el recurso.

COMENTARIO:

La STS de 22 de noviembre de 2005 no aprecia que la sentencia de contraste incurra en contradicción con la impugnada y, en consecuencia, no concurren las identidades previstas en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral necesarias para viabilizar el recurso de casación, lo que determina su inadmisión.

ENCABEZAMIENTO:

Número de Recurso: 4367/2004

Procedimiento: Social

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil cinco.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador D. José María Martín Jaureguibeitia en nombre y representación de D. Luis Enrique contra la sentencia dictada el 5 de mayo de 2004 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, en recurso de suplicación nº 86/2004, interpuesto contra la sentencia de fecha 20 de mayo de 2003, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Palma de Mallorca, en autos núm. 519/02, seguidos a instancias de D. Luis Enrique contra Benjamín, MUTUA BALEAR e INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre accidente de trabajo.

Ha comparecido en concepto de recurrido MUTUA BALEAR, representada por el Procurador D. Santos de Gandarillas Carmona, y el INSS, representado por Letrada de la Administración de la Seguridad Social.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. GONZALO MOLINER TAMBORERO.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha 20 de mayo de 2003 el Juzgado de lo Social nº 2 de Palma de Mallorca dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos: «1º) El demandante prestaba servicios como fontanero desde el 04.05.02 para la empresa que tenía concertado documento de asociación con para la cobertura de las contingencias por AT con la Mutua codemandada, estando al corriente del pago de las cuotas sociales. 2º) El día 17.05.03 fue remitido por la empresa a la obra de los apartamentos «las golondrinas» para hacer trabajos

de fontanería sobre las 3 horas, estando solo en la obra, con la llave de apertura del apartamento entregada, no teniendo síntoma de indisposición el trabajador. 3º) No queda acreditado que saliera al balcón para tomar aire, apoyándose con las manos en la barandilla y que alguien le dijera algo, perdiendo el equilibrio por el susto y el «golpe en la espalda de una persona». 4º) Sobre las 3,30 acudió la policía local tras el aviso a la central, reanimando una señora al actor tendido en la planta del patio del apartamento. Llamaron a la mujer de la limpieza y encontraron la llave dentro del apartamento. 5º) Los cables de la antena estaban arrancados a la altura entre la azotea y 2º piso. 6º) Vía previa, agotada».

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: «Desestimando la demanda presentada por Don. Luis Enrique contra la empresa Don. Benjamín, la Mutua Balear y el INSS debo absolver y absuelvo a las demandadas de la pretensión planteada.»

SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por dicho actor y Mutua Balear ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, la cual dictó sentencia en fecha 5 de mayo de 2004, en la que consta el siguiente fallo: «Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Luis Enrique contra la sentencia de fecha 20/05/03, y que debemos estimar y estimamos, en parte, el recurso de suplicación interpuesto contra la misma por la MUTUA BALEAR, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183, en el solo sentido de adicionar el Hecho Probado VII consignado en el último Fundamento de Derecho de esta resolución y debemos confirmar y confirmamos el fallo de la sentencia recurrida, con devolución, a la Mutua recurrente, del depósito constituido para recurrir».

TERCERO.- Por la representación de D. Luis Enrique se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 15 de noviembre de 2004, en el que se alega infracción del art. 115.1 de la Ley de la Seguridad Social (RDL 1/94), en relación con los núms. 3 y 5 del mismo artículo. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada el 2 de enero de 2000 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Rec.- 731/99).

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de fecha 18 de marzo de 2005 se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte demandada para que formalice su impugnación en el plazo de diez días.

QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 15 de noviembre de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- 1.- La sentencia que se recurre en el presente caso es la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Baleares de fecha 5 de mayo de 2004 (Rec.-86/2004). Dicha sentencia es confirmatoria de otra de instancia en la que se había desestimado la pretensión de un trabajador de que se declararan derivadas de contingencia laboral las lesiones que había sufrido. La sentencia parte, para llegar a dicha conclusión del hecho probado de que, estando realizando trabajos de fontanería en un apartamento y teniendo en su poder la llave de la obra, se cayó desde la azotea «debido a su imprudencia temeraria, pues no puede calificarse de otro modo el descolgarse desde la azotea al 2º piso aferrándose, mientras, a los cables de una antena» (hechos probados segundo y tercero y fundamento jurídico tercero).

2.- En solicitud de que la contingencia de la que derivaron sus lesiones sea declarada de origen laboral el demandante, ahora recurrente, ha aportado como sentencia de referencia para la contradicción la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura el 2 de enero de 2000 (Rec.-731/99), en la cual se declaró como accidente de trabajo el que sufrió un trabajador que, siendo vigilante de seguridad y estando trabajando, cayó desde una altura de tres metros. En este caso, a pesar de que en el hecho probado tercero de la sentencia se afirma que en un informe médico de urgencias dice que «es manifiesta la ingesta de bebidas alcohólicas» también se afirma en el hecho cuarto que no quedaba especificado el grado de alcohol que al parecer tenía, lo que llevó a la Sala a entender que la caída no se debió a esa influencia del alcohol aunque añadiendo que tampoco se hubiera accedido a declarar su conducta como temeraria «porque la conducta del trabajador tampoco podría calificarse de temerariamente imprudente, jugando la definición general de accidente de trabajo»... «como lesión que el trabajador ha sufrido con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutaba por cuenta ajena».

3.- Denuncia la Mutua Balear en su escrito de impugnación del recurso la falta de concurrencia del presupuesto de admisibilidad del presente recurso de casación para la unificación de doctrina por estimar que no concurre la contradicción entre sentencias que viene requerida por el art. 217 de la LPL, y esto es lo que la Sala aprecia igualmente a partir de los hechos que se reflejan en cada una de las dos resoluciones aportadas. En efecto, aunque es cierto que en ambos casos estamos ante la caída de sendos trabajadores desde una altura considerable en accidentes ocurridos en el lugar de trabajo, existe entre ambos la diferencia fáctica fundamental de que, mientras en el caso de la sentencia comparada el trabajador sufrió aquella caída mientras estaba realizando el trabajo que tenía encomendado y con ocasión de estar llevándolo a cabo - vigilante de seguridad -, aunque lo hiciera bajo la influencia de bebidas alcohólicas cuyo grado de afectación se desconoce, en el caso de autos el trabajador, que era fontanero, se precipitó desde una azotea en circunstancias que nada tenían que ver con dicho trabajo pues se descolgó hasta el segundo piso por los cables de una antena cuando para la realización del trabajo que le había sido encomendado no tenía ninguna necesidad de hacer maniobra alguna de tal carácter, según se deduce de la sentencia.

Esta diferencia de situaciones es fundamental a los efectos de calificar un accidente como laboral o no laboral, puesto que en el caso de la sentencia recurrida, y eso es lo que en ella se hizo, estaríamos ante un supuesto de «imprudencia extraprofesional» mientras que en la sentencia de contraste se trataría de un supuesto de «imprudencia profesional», la primera situada fuera de la órbita laboral por tratarse de una imprudencia temeraria de las incardinables en el art. 115.4.b) de la LGSS y la segunda situada dentro de la protección del accidente de trabajo por hallarse dentro de las previsiones del apartado 5 a) de dicho precepto, por hallarse la primera fuera de la relación de causalidad que necesariamente debe existir entre trabajo y lesión conforme al art. 115 citado mientras que en la segunda esa relación de causalidad se mantiene.

SEGUNDO.- La diferencia de situaciones que origina la falta de contradicción entre las dos sentencias conduce a entender que este recurso no debió ser admitido por estar fuera de las previsiones legales del recurso de casación unificadora, lo que lleva a que en este momento procesal deba declararse dicho recurso como improcedente con todos los efectos que ello comporta de conformidad con lo dispuesto en el art. 226 de la LPL; sin que proceda dictar pronunciamiento alguno sobre costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO:

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de D. Luis Enrique contra la sentencia dictada el 5 de mayo de 2004 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, en recurso de suplicación nº 86/2004, interpuesto contra la sentencia de fecha 20 de mayo de 2003, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Palma de Mallorca, en autos núm. 519/02, seguidos a instancias de D. Luis Enrique contra Benjamín, MUTUA BALEAR e INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre accidente de trabajo. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Gonzalo Moliner Tamborero hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

Roj: ATS 12845/2005 - ECLI:ES:TS:2005:12845A
Id Cendoj: 28079140012005201925
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 5042/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Mariano Sampedro Corral
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Octubre de dos mil cinco.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Santiago de Compostela se dictó sentencia en fecha 17 de julio de 2001, en el procedimiento nº 473/99 seguido a instancia de Nuria contra MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA PESCA CRUÑA, Lázaro sobre prestación, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 22 de octubre de 2004, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 27 de diciembre de 2004 se formalizó por el Letrado D. Xosé Febrero Bande en nombre y representación de Nuria, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 31 de mayo de 2005 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (SSTS de 27 de enero de 1992, Rec 824/91; 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, Recursos 4067/96, 94/97 y 4203/96; 17 de mayo y 22 de junio de 2000, Recursos 1253/99 y 1785/99; 14 de noviembre de 2003, Rec 4758/02; 17 de diciembre de 2004, Rec 6028/03 y 20 de enero de 2005, Rec 1111/03).

La sentencia recurrida, revocando el fallo de instancia, ha desestimado íntegramente la demanda formulada en solicitud de reconocimiento de las prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo. El esposo de la actora, nacido el 23-11-56, estaba afiliado al Régimen Especial del Mar y prestaba servicios como marinero a bordo del buque Drakkar II, de bandera irlandesa, por cuenta de la compañía S.A. Pescacruña dedicada a la actividad de pesca. El 9-9-98 el causante desapareció en el mar cuando el barco se encontraba situado en posición 53º 11' Norte/12º 37' Oeste. Ese día había estado bebiendo durante la madrugada hasta que fue convencido por su compañeros para que descansara; lo acompañaron a su litera a la 9 horas y fue visto por última vez a las 10,30 horas, siendo detectada su ausencia sobre las 12 horas. La

Sala considera que si bien es indiscutible que el fallecimiento se produjo en lugar de trabajo, no puede aceptarse por el contrario que ocurriera en tiempo de trabajo ya que antes de la desaparición el trabajador se encontraba en el camarote, en principio, para descansar y con el beneplácito, se supone, de toda la tripulación incluido el patrón del buque. Tampoco se ha acreditado que fuese llamado para cualquier tipo de actividad relacionada con el trabajo y todos los datos apuntan a que desapareció durante el tiempo marcado de descanso dada la relativa inmediatez en la producción de los acontecimientos.

La sentencia alegada de contraste es la dictada por la misma Sala que la recurrida el 11 de marzo de 1997 que declara la contingencia de trabajo en el siguiente supuesto: el trabajador prestaba servicios como motorista en el barco Nuevo José Angel; el 20-1-94 el buque arribó al puerto de Algeciras sobre las 18 horas y se dio tiempo libre a la tripulación hasta las dos de la madrugada, en que se procedería a la descarga; a las 21 horas fue encontrado flotando el cadáver del trabajador en las proximidades de la dársena del muelle donde estaba atracado el buque, constando en el informe de la autopsia que el fallecimiento se produjo por asfixia, por sumersión y que pudo ocurrir sobre las 19 horas. Para la Sala resulta difícil desligar el fallecimiento de la ocasión y el lugar de trabajo, pues solo el trabajo pudo ser la causa de que el fallecido se encontrase en aquella zona portuaria, en aquel barco, en aquel muelle en que se produjo el siniestro, no acreditándose, por otra parte, una absoluta falta de causalidad entre éste y el trabajo, por lo que entiende que existen datos e indicios más que suficientes para que entre en juego la presunción legal del art. 84.3 LGSS.

La recurrente sostiene que en los dos casos el fallecimiento ocurrió en tiempo de descanso y que en la recurrida se atribuyó ese periodo al estado físico del trabajador, en el entendimiento de que si hubiera podido habría debido incorporarse a sus tareas. Pero las situaciones de la sentencias comparadas no son iguales. El estado de embriaguez en la sentencia recurrida rompe cualquier nexo causal entre la probable caída por la borda y el trabajo, cuando además el trabajador desaparece durante un periodo de descanso iniciado, al menos, en la madrugada de ese día; mientras que en la sentencia de contraste el trabajador está sobrio y los hechos probados solo dan cuenta de que el buque arribó al puerto a las 18 horas, dándose descanso a la tripulación, lo cual no significa que a partir de esa hora exacta hubiesen terminado las tareas de amarre y comenzasen el efectivo disfrute de ese periodo; el trabajador cae al agua una hora después y hay indicios más que suficientes, a juicio de la Sala, para considerar que el fallecimiento tuvo lugar con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena, no habiéndose acreditado sensu contrario la ruptura de la relación de causalidad. En definitiva, no puede hacerse abstracción, como se pretende en el recurso, de la causa por la que el trabajador se encontraba indispuerto ni de las diferentes connotaciones que comporta el término descanso en cada supuesto.

SEGUNDO.- De conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Xosé Febrero Bande, en nombre y representación de Nuria contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 22 de octubre de 2004, en el recurso de suplicación número 1069/02, interpuesto por MUTUA GALLEGA, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Santiago de fecha 17 de julio de 2001, en el procedimiento nº 473/99 seguido a instancia de Nuria contra MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Lázaro y SOCIEDAD ANONIMA PESCACRUÑA, sobre accidente laboral.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 10821/2005 - ECLI:ES:TS:2005:10821A

Id Cendoj: 28079140012005201818

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Sede: Madrid

Sección: 1

Nº de Recurso: 2684/2004

Nº de Resolución:

Procedimiento: Social

Ponente: Milagros Calvo Ibarlucea

Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a quince de Septiembre de dos mil cinco.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de La Coruña se dictó sentencia en fecha 21 de junio de 2001, en el procedimiento nº 769/00 seguido a instancia de DOÑA Nieves y DOÑA Leonor contra AXAAURORA IBERICA S.A. DE SEGUROS, LA EMPRESA PLYMPOR LIMITED y la EMPRESA PESQUERA ARCADE S.L. que absorbió a la EMPRESA MUGARDESA S.A., sobre salarios, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DOÑA Nieves y Leonor, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en fecha 30 de abril de 2004, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 1 de julio de 2004 se formalizó por el Letrado Don José Miguel Orantes Canales, en nombre y representación de DOÑA Nieves y de DOÑA Leonor, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 9 de diciembre de 2004 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- La sentencia recurrida ha confirmado la de instancia que no calificó de accidente de trabajo el sufrido por el marido de la demandante, por considerar que hubo imprudencia temeraria del trabajador que rompe el nexo causal entre trabajo y accidente.

Consta acreditado que cuando el trabajador accedía al buque en el que prestaba servicios, que en ese momento se encontraba atracado en determinado muelle, cayó al mar falleciendo a los pocos minutos por asfixia mecánica por sumersión. En la autopsia practicada se detectó la presencia de alcohol etílico con la valoración siguiente: sangre 3,23 g/l. Humor Vítreo 3,50 g/l. A partir de estos datos la sentencia considera que el elevado grado de alcohol detectado comporta la ruptura del nexo causal entre trabajo y lesión, estando ausentes los elementos teleológico, cronológico y fáctico del accidente *in itinere*.

Por su parte la sentencia de comparación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 22 de febrero de 2000, rec. 2651/1999 declaró derivado de accidente de trabajo el fallecimiento de trabajador ocurrido en las siguientes circunstancias. El día del accidente, una vez terminada la jornada de mañana, el fallecido y dos compañeros acudieron a almorzar a un bar cercano, consumiendo durante la comida entre los tres una botella de vino de tres cuartos de litro con gaseosa. De vuelta al lugar de trabajo, lo único que consta es que los compañeros del fallecido desde el andamio en que trabajaban oyeron alboroto desde la calle, comprobando que su compañero de trabajo había caído al suelo. Según el informe de toxicología la presencia de alcohol en sangre del fallecido era de 1,99 g/l de alcohol en sangre y humor vítreo de 2,37 g/l. Negada la existencia de accidente de trabajo por parte de la Mutua, por considerar que había existido imprudencia del trabajador, la sentencia considera que se está en presencia de un accidente laboral porque;

- 1º/ el hecho de que el trabajador se incorporaba a trabajar, como lo venía haciendo normalmente, en labores que tienen de por sí un riesgo de caída al vacío. En esa tesitura, pronto se advierte que hay una reducción de las defensas naturales que tiene cualquier persona para los peligros, ya que le hace confiarse de que tiene capacidad y conocimientos suficientes para sortearlos sin daño alguno. Incorporación al trabajo en situación de plena normalidad laboral, entendida ésta en el sentido de que ocurría tras el descanso para comer e impelido porque comenzaba la jornada de tarde; en otras palabras, la tarde de autos actúa como en él es habitual,
- 2º/ el hecho de que hubiera ingerido alcohol en cantidades suficientes como para dar la tasa de alcohol en sangre que consta acreditada no altera la conclusión expuesta porque no se ha probado que esa concreta tasa fuera necesariamente expresiva de que su nivel de consciencia, equilibrio o reflejos estuviera alterado, sin que pueda presumirse, sin más, del hecho de que sobrepasara los niveles exigidos en materia de conducción de vehículos de motor, y tampoco hay constancia de que, de hecho, el alcohol que consumió repercutiera en sus facultades de percepción y reacción o en su sentido del equilibrio, siendo significativo que los hechos probados no recojan dato alguno poniendo de manifiesto que sus compañeros (o los empleados del bar) advirtieran que estuviera embriagado, como tampoco que le hicieran la más mínima advertencia de que no subiera o, cuando menos, de que anduviera con más cuidado del normal en las circunstancias exigidas por ese concreto trabajo, por lo que no cabe concluir que estuviera embriagado cuando se incorpora a trabajar; a mayor abundamiento, porque de haber estado embriagado, tampoco se ha probado que la caída se debiera a esa circunstancia, sin que ésta pueda presumirse, máxime en una materia que constituye una auténtica excepción a la regla general de protección y cuando, como aquí sucede, se parte de una previa presunción legal que la atribuye al trabajo.

Como es sabido, el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [sentencias de 27 de enero de 1992, rec. 824/1991; 27 de enero de 1997, rec. 1179/1996; 28 de febrero de 1997, rec. 2773/1996; 18 de julio de 1997 (dos, recs. 4035/1996 y 2661/1996); 14 de octubre de 1997, rec. 94/1997, 17 de diciembre de 1997, rec. 4203/1996; 18 de marzo de 1999, rec. 1117/98, 30 de junio de 1999, rec. 4398/1998, 23 de julio de 1999, rec. 3362/1998 y 27 de octubre de 2003, rec. 784/2002].

Y del relato antecedente no resulta la contradicción que se mantiene por el recurrente porque las circunstancias que en cada caso se valoran en torno a la producción del accidente no son homogéneas lo que lleva a las diferentes conclusiones sobre la existencia o no de accidente de trabajo. En efecto, en el supuesto examinado por la sentencia referencial se valora, no sólo la tasa de alcohol que los accidentados en cada caso tenían cuando se produjo el accidente, sino también el modo de proceder del accidentado y las circunstancias anteriores a producirse el accidente, en especial, el estado del trabajador después de comer que no mostró ningún síntoma de embriaguez. Ello unido a la valoración del concreto puesto de trabajo que, de suyo, conlleva riesgo de caída por tratarse de trabajo en altura y de que no se acreditan las concretas causas de dicha caída, lleva a la sentencia a la conclusión de existencia de accidente laboral. En el supuesto de la sentencia recurrida, además de que se debate sobre la existencia o no de accidente de trabajo *in itinere*, lo único que consta es que el trabajador cuando accedía al buque se cayó al mar y que tenía una elevada tasa de alcohol en sangre (más elevada que en el caso de la sentencia comparada).

SEGUNDO.- Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don José Miguel Orantes Canales en nombre y representación de DOÑA Nieves y de DOÑA Leonor contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 30 de abril de 2004, en el recurso de suplicación número 5611/01, interpuesto por DOÑA Nieves y de DOÑA Leonor, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de La Coruña de fecha 21 de junio de 2001, en el procedimiento nº 769/00 seguido a instancia de DOÑA Nieves y DOÑA Leonor contra AXA AURORA IBERICA S.A. DE SEGUROS, LA EMPRESA PLYMPOR LIMITED y la EMPRESA PESQUERA ARCADE S.L. que absorbió a la EMPRESA MUGARDESA S.A., sobre salarios.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 7419/2005 - ECLI:ES:TS:2005:7419A
Id Cendoj: 28079140012005200585
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 3873/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Gonzalo Moliner Tamborero
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a catorce de Junio de dos mil cinco.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 2 de los de Castellón se dictó sentencia en fecha 9 de febrero de 2004, en el procedimiento nº 554/03 seguido a instancia de Lorenzo contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UNION DE MUTUAS, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267, la GESTORA LABORAL MEDITERRANEA, E.T.T. y AZULEJERA LA PLANA, S.A., sobre accidente de trabajo, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 13 de julio de 2004, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de octubre de 2004 se formalizó por el Letrado D. Víctor M. Esteve de Libano en nombre y representación de Lorenzo, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de 27 de enero de 2005 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras muchas, de 27 y 28 de enero de 1992, 14 de octubre de 1997, 23 de septiembre de 1998, 10 de marzo de 2000, 17 de octubre de 2003, 30 de enero y 26 de noviembre de 2004 y 8 de marzo de 2005).

La sentencia recurrida revoca el fallo de instancia y desestima íntegramente la demanda formulada en solicitud de que se declare la contingencia de accidente de trabajo respecto del sufrido por el esposo de la actora el 9-3-03 cuando prestaba servicios en la empresa AZULEJERA LA PLANA S.A. como atomizador. El causante tenía una jornada laboral de cuarenta horas semanales en turnos de 6 a 14 horas, de 14 a 22 horas y de 22 a 6 horas, y sus tareas fundamentales consistían en la carga y descarga, en la sección de atomizado, de unos molinos de barbotina, tratándose de una sección compuesta por una batería de 6 molinos situados en paralelo y separados por una valla metálica sobre los cuales hay una plataforma metálica a una altura no inferior a los

cuatro metros. La caída se produjo al caer el fallecido desde esa plataforma, por un tramo de 2,50 metros que carecía de protección, a la que había acudido para terminar su jornada de trabajo y realizar las labores habituales de limpieza, vaciado de contenedores, etc. En concreto, el accidente ocurrió entre las 21,10 o 21,15 horas y las 21,40 horas, siendo descubierto el accidentado, aún con vida, por el operario de relevo que llegó a la sección sobre esa hora. Según se declara en el hecho probado decimoquinto el trabajador tenía en el momento de la caída una tasa real de alcoholemia de 1,12 gr./l, y de acuerdo con el informe del Instituto de Medicina Legal, el índice era de 1,5 gr./l en sangre y de 2,28 gr./l de alcohol etílico en humor vítreo. Teniendo en cuenta indistintamente una tasa u otra, la Sala califica la conducta del trabajador de imprudencia temeraria subsumible en el supuesto del art. 115.4 b) LGSS, al constar acreditada la ingestión de bebidas alcohólicas durante el trabajo, en contra de la prohibición de la empresa (hecho probado duodécimo), que no las tiene a disposición de los empleados, concretamente, «que el accidentado había ingerido una elevada cantidad de alcohol durante la merienda, para lo cual debió salir del recinto de la empresa» (fundamentación jurídica del juez de instancia). Esa conducta supone olvidar las más elementales normas de precaución y prudencia atendidas las circunstancias de tiempo y lugar, y no puede considerarse como una imprudencia profesional derivada de un exceso de confianza del operario a causa del ejercicio habitual de un trabajo.

La parte recurrente alega como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 22 de febrero de 2000 que declara la contingencia de accidente laboral en relación con el siguiente supuesto: la muerte del trabajador se produjo al caer al vacío desde la zona del tejado de la casa en que la que trabajaba como peón colocando las últimas hileras de tejas, después de haber almorzado sobre las 13 horas y habiendo consumido durante la comida, entre él y otro compañero, una botella de 3/4 de litro con gaseosa, lo que reveló un índice de alcohol en sangre de 1,99 gr./l. La Sala califica el comportamiento del trabajador de imprudencia profesional tomando en consideración la habitualidad de esa conducta y la falta de prueba acerca de que la tasa de alcoholismo fuese expresiva de una alteración en el nivel de consciencia, dado que ni los compañeros ni los empleados del bar advirtieron el más mínimo indicio de embriaguez. Y añade a mayor abundamiento que de haber estado embriagado, tampoco se ha acreditado que la caída se debiese a esa circunstancia.

Aunque en los dos casos hay constancia de la normalidad de la conducta previa al accidente (hechos probados décimo y duodécimo de la sentencia recurrida y penúltimo párrafo del segundo fundamento jurídico de la de contraste), en la sentencia recurrida consta que era costumbre en la empresa hacer una parada para merendar en el turno de tarde de 18,30 a 19 horas, siendo posible aunque no habitual, la salida a un bar fuera de la empresa; los operarios de mantenimiento no volvieron a ver al trabajador hasta las 21,10 ó 21,15 horas, y la Sala tiene por acreditada la afirmación del juez de instancia de que el accidentado había ingerido una gran cantidad de alcohol, en contra además de la prohibición de la empresa. En el supuesto de la sentencia de contraste es durante el almuerzo cuando el trabajador consume a medias con otro compañero una botella de 3/4 de litro mezclada con gaseosa -con toda probabilidad lo hacía a diario- y en este sentido la Sala declara que se incorporó a trabajar como lo venía haciendo normalmente, concluyendo con la afirmación de que «no cabe concluir que estuviera embriagado cuando se incorpora a trabajar».

Por otra parte, la STS de 31 de marzo de 1999 (RCUD 2997/98) ha declarado que no es materia de unificación «si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como la imprudencia que rompe la relación de causalidad. La imprudencia se configura en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto litigioso, y esas circunstancias concurrentes son de apreciación inicial del juzgador en cada caso concreto, para determinar si existe o no la causa de exclusión de la presunción de laboralidad».

SEGUNDO.- De conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Víctor M. Esteve de Libano, en nombre y representación de Lorenzo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 13 de julio de 2004, en el recurso de suplicación número 2307/04, interpuesto por UNION DE MUTUAS, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 267, frente a la sentencia

dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Castellón de fecha 9 de febrero de 2004, en el procedimiento nº 554/03 seguido a instancia de Lorenzo contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, UNION DE MUTUAS, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267, la GESTORA LABORAL MEDITERRANEA, E.T.T. y AZULEJERA LA PLANA, S.A., sobre accidente de trabajo.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 13134/2004 - ECLI:ES:TS:2004:13134A
Id Cendoj: 28079140012004203126
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1712/2004
Procedimiento: Social
Ponente: Antonio Martín Valverde
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintidós de Noviembre de dos mil cuatro.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 3 de los de San Sebastián se dictó sentencia en fecha 2 de julio de 2003, en el procedimiento nº 756/02 seguido a instancia de DOÑA Trinidad contra ASEPEYO, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA Y EMPRESA PESQUERIA PIO BAROJA, S.A., sobre viudedad e indemnización, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por MUTUA ASEPEYO, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en fecha 24 de febrero de 2.004, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 4 de mayo de 2004 se formalizó por la Procuradora Doña Matilde Marin Pérez, en nombre y representación de ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 2 de julio de 2.004 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas (STS/IV 16/07/2001) al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 y 28 de enero de 1.992, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, 23 de septiembre de 1998).

La cuestión planteada consiste en determinar que el accidente sufrido por el trabajador fallecido no fue laboral, por existir conducta temeraria causante del accidente al contener el accidentado elevados índices de alcohol en sangre.

La sentencia de suplicación ha desestimado pretensión de la Mutua para que no se calificara como accidente de trabajo el suceso que costó la vida al causante de prestación de viudedad y orfandad. En la tesis de la recurrente el fallecido incurrió en imprudencia temeraria cuando fue atrapado entre la puerta y el pescante del

barco porque estaba prestando servicios en alta mar con unos elevados índices de alcohol en sangre, como quedó demostrado con la autopsia practicada tras el fallecimiento (4,44 grados de alcohol en sangre). Pero la sentencia, aún admitiendo que existió imprudencia del trabajador, sin embargo, no la considera temeraria, manteniendo la calificación de accidente de trabajo. La sentencia valora que se desconoce la razón del fatal atrapamiento que le causó la muerte, ni si ponerse a trabajar en las condiciones que lo hizo fueron determinantes en la producción del accidente, ni si la tasa de alcohol repercutió en las facultades de percepción, reacción o equilibrio, ni existe constancia por declaraciones de compañeros de que estuviera embriagado, interrogantes que impiden considerar que se esté en presencia de un supuesto de imprudencia temeraria.

Por su parte la sentencia de comparación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de marzo de 2002 no consideró accidente de trabajo la muerte de trabajador de la construcción ocurrida cuando, tras el descanso del desayuno, se dirigió a la obra para incorporarse a su puesto de trabajo en determinado andamio desde que colocaba unos vierte aguas optando por acceder a la plataforma, que se cimbreaaba, por unos huecos laterales, salvando los palets que se habían colocado como obstáculos y precipitándose al vacío a través del hueco del ascensor desde una altura aproximada de 12 metros. Consta acreditado que el médico que le atendió tras la caída señaló que el accidentado estaba bajo los efectos de una importante ingesta alcohólica y que en el análisis practicado se detectó una concentración en sangre de 1,78 g/l de alcohol etílico. Con estos datos la sentencia, tras descartar que hubiera podido existir falta de medidas de seguridad causantes del fatal accidente, considera que el trabajador actuó de forma imprudente cuando aprovechó el descanso del desayuno para proceder a la ingesta de alcohol en cantidad tan excesiva que le produjo una concentración en sangre de 1,78 g/l.

A pesar de la aparente similitud de supuestos - en ambos casos se discute si hubo o no imprudencia temeraria de los trabajadores fallecidos en los accidentes y en ambos casos se detectó en la sangre de los accidentados altos niveles de alcohol, incluso más elevados en el caso recurrido que en el comparado lo que podría configurar un supuesto de contradicción «a fortiori» - sin embargo en el caso referencial se ha acreditado el cumplimiento de las medidas de seguridad puestas para el trabajo realizado. Puesta en relación esta circunstancia con la actuación seguida para subirse al andamio después del desayuno habiendo bebido previamente una elevada cantidad de alcohol, llevó a la conclusión de inexistencia de accidente de trabajo por imprudencia temeraria del trabajador. En el caso recurrido, sin negar la existencia de imprudencia, no existen más datos que permitan concluir que fue temeraria la conducta del trabajador, calificación que no sólo puede extraerse de la concentración de alcohol en sangre pues se desconoce en el caso ni si fue la única causa determinante para la producción del accidente del que, por otra parte, se desconocen más datos sobre la forma y las causas por las que se produjo.

SEGUNDO.- Procede acordar la inadmisión del recurso de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, con imposición de costas y pérdida de depósito y mantenimiento de la garantía.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora Doña Matilde Marin Pérez en nombre y representación de ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de fecha 24 de febrero de 2.004, en el recurso de suplicación número 2981/03, interpuesto por MUTUA ASEPEYO, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de San Sebastián de fecha 2 de julio de 2.003, en el procedimiento nº 756/02 seguido a instancia de DOÑA Trinidad contra ASEPEYO, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA Y EMPRESA PESQUERIA PIO BAROJA, S.A., sobre viudedad e indemnización.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente, pérdida de depósito y mantenimiento de la garantía. Contra este auto no cabe recurso alguno. Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: ATS 9365/2004 - ECLI:ES:TS:2004:9365A
Id Cendoj: 28079140012004202523
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 6296/2003
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Gonzalo Moliner Tamborero
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Julio de dos mil cuatro.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 3 de los de Sevilla se dictó sentencia en fecha 30 de julio de 2002, en el procedimiento nº 828/01 seguido a instancia de DOÑA Mónica contra IBERMUTUAMUR, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TRANS-FRIO LA RINCONADA S.L., sobre seguridad social, que estimaba en parte la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por IBERMUTUAMUR MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 274, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 22 de mayo de 2.003, que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 20 de diciembre de 2.003 se formalizó por el Letrado Don Aurelio Belinchón Cuellar, en nombre y representación de DOÑA Mónica, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 24 de mayo de 2.004 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. La contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales». Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 27 y 28 de enero de 1.992, 18 de julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, 23 de septiembre de 1998, 30 de junio de 1999, 2 de julio y 28 de septiembre de 1999).

Se cuestiona la existencia de imprudencia temeraria o imprudencia simple del trabajador, para derivar de ello la declaración de accidente de trabajo el sufrido por el causante en accidente de tráfico, en el que se constata un cierto grado de alcohol en sangre y un exceso de velocidad. Se denuncia la infracción del artículo 115 LGSS.

La actora, hoy recurrente en este recurso extraordinario de casación unificadora, presentó demanda instando se calificara como accidente laboral el sufrido por su hijo en 11 de abril de 2001, accidente que le ocasionó la muerte, y, en consecuencia, se le reconociese la prestación a tanto alzado prevista en el artículo 177 LGSS.

La sentencia de instancia estimó en parte la pretensión, calificando el hecho como accidente laboral y otorgando las referidas prestaciones a tanto alzado, a cuyo pago condenó a la aseguradora.

Contra la referida resolución se interpuso recurso de suplicación por la Mutua condenada.

La sentencia recurrida de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de 22 de mayo de 2003 (rollo 4352/02) parte de la siguiente e inalterada versión judicial de los hechos, expuestos sucintamente en cuanto interesa a los efectos del recurso: el causante conducía un vehículo articulado compuesto por cabeza tractora y remolque sobre las siete horas del día 11 de abril de 2001 y, al llegar a una curva que se ofrecía a su derecha, volcó en la calzada, chocó contra la valla de protección existente en su izquierda y salió por este lado de la vía, lo que provocó su fallecimiento, según se estableció en diligencias penales que se instruyeron, el conductor tenía en sangre 1,54 gramos de etanol por litro y conducía a velocidad excesiva».

Se afirma que la conducta imprudente y temeraria del trabajador y su relación de causa efecto con el siniestro que le ocasionó la muerte están suficientemente acreditadas. Que no es sólo el alto índice de alcohol en sangre -fuera de lo permitido-, sino la embriaguez resultante que afectó a su actividad psíquica, emocional y motora, que provocó el exceso de velocidad y la conducción deficiente y peligrosa de un vehículo articulado, que exigía la prudencia en su manejo. Concluye declarando que el óbito no es constitutivo de accidente de trabajo.

La sentencia invocada de contraste de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 29 de febrero de 2000 (rollo 3266/96) contempla el accidente de tráfico sufrido por un trabajador tras finalizar su jornada de trabajo y cuando se dirigía a su domicilio. El accidente de tráfico se produjo cuando el causante, que conducía un turismo, a la salida de un tramo curvo a la derecha y de reducida visibilidad y ligeramente ascendente, se sale de la calzada al tratar de evitar una furgoneta que se hallaba averiada en el arcén derecho, pereciendo en el accidente. Consta que circulaba con 1,61 gramos de alcohol en sangre y a más velocidad de la permitida.

Se afirma que ni la alcoholemia, ni el exceso de velocidad rompen el nexo de causalidad y no determinan que la culpa sea exclusiva de la víctima, por lo que la califica de imprudencia simple y no temeraria, por lo que no le priva del carácter laboral al accidente.

De lo expuesto se desprende la falta de identidad entre los respectivos supuestos sometidos a examen, lo que determina la inexistencia de contradicción exigida en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, porque la imprudencia se configura en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto litigioso, y esas circunstancias concurrentes son de apreciación inicial del juzgador en cada caso concreto, para determinar si existe o no la causa de exclusión de la presunción de laboralidad.

En los hechos constatados en la sentencia impugnada se resalta la existencia de un dato objetivo cual es el grado de etanol en sangre y el exceso de velocidad por parte del trabajador que está realizando una actividad profesional de riesgo, conducta que la impugnada la califica de imprudencia temeraria. Por el contrario en la sentencia pese a existir un grado de embriaguez y exceso de velocidad, existe un elemento externo causante de la maniobra que provocó el fatal desenlace, sin que, además exista el elemento de riesgo, cual era en la sentencia impugnada la conducción de un vehículo articulado (cabeza-tractor-remolque). Es decir en ambas sentencias se analiza esa conducta en relación con las circunstancias concurrentes, circunstancias que son diversas en uno y otro supuesto.

Puede afirmarse en consecuencia que no son idénticas las situaciones de hecho, que contemplan ambas sentencias, pues no es lo mismo manejar un vehículo articulado compuesto por cabeza tractora y remolque con el grado de etanol en sangre expuesto y a excesiva velocidad, que conducir el propio turismo de vuelta a casa, que aún concurriendo ambos elementos, también existió un tercero, que determina que la culpa no sea exclusiva de la víctima y estas circunstancias, las que analizan las sentencias para llegar la conclusión de si existió o no la imprecendencia temeraria.

Es evidente por ello que no concurre el requisito de la contradicción, por lo que el recurso debe ser inadmitido, rechazando las alegaciones de la parte recurrente, al no desvirtuar las mismas los razonamientos expuestos y no concurrir las identidades del art. 217 LPL.

SEGUNDO.- Por todo lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal sin que proceda imponer a la parte recurrente las costas del presente recurso tenor del art. 222.2 LPL.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Aurelio Belinchón Cuellar en nombre y representación de DOÑA Mónica contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 22 de mayo de 2003, en el recurso de suplicación número 4352/02, interpuesto por IBERMUTUAMUR, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 274, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Sevilla de fecha 30 de julio de 2.002, en el procedimiento nº 828/01 seguido a instancia de DOÑA Mónica contra IBERMUTUAMUR, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TRANS- FRIO LA RINCONADA S.L., sobre seguridad social.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

CRITERIOS DE IMPRUDENCIA TEMERARIA DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

Roj: STS 6321/2013 - ECLI:ES:TS:2013:6321
Id Cendoj: 28079140012013100802
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 717/2012
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil trece.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Carlos Puga Trigás en nombre y representación de INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY SL., contra la sentencia dictada el 23 de diciembre de 2011 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso de suplicación núm. 6213/07, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de La Coruña, de fecha 9 de julio de 2007, recaída en autos núm. 56/2007, seguidos a instancia de D. Teodosio contra INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY SL. Y CASER SEGUROS S.A., sobre INDEMNIZACIÓN POR CONVENIO.

Ha comparecido en concepto de recurrido la Procuradora D^a Andrea de Dorremocha Guiot actuando en nombre y representación de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.-CASER.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL RAMON ALARCÓN CARACUEL.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha 9 de julio de 2007, el Juzgado de lo Social núm. 1 de La Coruña, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: «Que ESTIMO EN PARTE la demanda presentada por D. Teodosio contra las demandadas, y declaro el derecho del actor a percibir la cantidad de 11.969,64 € en concepto de diferencia que le resta de percibir por indemnización de convenio colectivo por incapacidad total derivada de accidente de trabajo, y CONDENO a la entidad INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY S.L. a abonar al actor la cantidad precitada, y ABSUELVO a la aseguradora CASER SEGUROS S.A., de las pretensiones contenidas en la demanda contra ella dirigida».

SEGUNDO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

- «1º/ El actor prestaba sus servicios laborales para la empresa demandada INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY S.L. desde el año 1983, con la categoría profesional de Oficial 2º soldador.
- 2º/ El día 25 de enero de 2005 el actor, cuando estaba prestando sus servicios para la empresa codemandada, tuvo un accidente laboral. A consecuencia de dicho accidente el actor fue declarado afecto de una IPT para su profesión habitual por resolución del INSS, de fecha 1 de junio de 2006.
- 3º/ La relación laboral existente entre el actor y la empresa demandada estaba regido por el Convenio Colectivo del Sector de Industrias Siderometalúrgicas, de la Provincia de A Coruña, publicado en el BOP de 4 de septiembre de 2004, en donde se pacta la obligación de las empresas de concertar un seguro colectivo que garantice a los trabajadores una indemnización de 30.000 € en caso de IPT derivado de accidente de trabajo.
- 4º/ La empresa INDUSTRIA EDUARDO ROMAY S.L., ha concertado con la entidad CASER los siguientes contratos de seguro, y regularizaciones:

- el 27 de octubre de 1993, contratada por D. Adrian definiéndose el riesgo cubierto como: pago del importe establecido en el Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la Provincia de La Coruña, en caso de FALLECIMIENTO o INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, ABSOLUTA O GRAN INVALIDEZ para toda clase de trabajo, de cualquier trabajador de la empresa tomadora del seguro a consecuencia de un accidente laboral definido como tal en la vigente Ley de Accidentes de Trabajo. Como capital garantizado se consigna, para el caso de IPT, la cantidad de 2.500.000 ptas.
- 21 de marzo de 1995, transferencia del contrato de seguro precitado de la D. Adrian a empresa INDUSTRIA EDUARDO ROMAY.
- 29 de marzo de 1996, variación del número de trabajadores asegurados.
- 6 de marzo de 2001, regularización de prima correspondiente al periodo de 1 de enero de 2000 a 31 de diciembre de 2000. Asimismo se actualizan los capitales garantizados incrementándose hasta los 3.000.000 ptas. En el convenio colectivo publicado en el año 1998 se fijaba la indemnización a garantizar en 3.000.000 ptas.
- 26 de octubre de 2006 se pacta un nuevo contrato en el que se define el riesgo cubierto como el pago del importe establecido en las presentes condiciones particulares y que se detallan en el apartado de capitales garantizados, en caso de fallecimiento o invalidez permanente total, o absoluta, de cualquier trabajador de la empresa tomadora del seguro a consecuencia de un accidente laboral definido como tal por la vigente ley de accidentes de trabajo. Los capitales garantizados en el caso de IPT son de 30.000 €.

5º/ En fecha 4 de diciembre de 2006 el Sr. Teodosio percibió de la entidad SEGUROS CASER la cantidad de 18.030,36 € derivados de la indemnización por accidente prevista en el Convenio Colectivo y en virtud de la póliza suscrita entre las codemandadas.

6º/ El día 19 de julio de 2006 tuvo lugar el acto de conciliación ante el SMAC que terminó con el resultado sin avenencia».

TERCERO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D. Teodosio y por la empresa INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY S.L. ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la cual dictó sentencia con fecha 23 de diciembre de 2011 en la que, dejando inalterada la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: «Que desestimando los recursos de suplicación interpuestos por el Letrado D. JOSE NOGUEIRA ESMORIS, en la representación que tiene acreditada de D. Teodosio y por el Letrado D. CARLOS PUGA TRIGÁS, en la representación que tiene acreditada de la EMPRESA INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY S.L., contra la sentencia de fecha nueve de julio de dos mil siete, dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de los de A Coruña, en autos seguidos a instancias de D. Teodosio contra la EMPRESA INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY S.L. y CASER SEGUROS S.A., sobre INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE CONVENIO COLECTIVO, debemos confirmar y confirmamos en su integridad la resolución recurrida, imponiendo a la RECURRENTE INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY S.L. las costas del recurso, que incluyen la cantidad de trescientos euros (300 euros), en concepto de honorarios del letrado impugnante del mismo».

CUARTO.- Por el Letrado D. Carlos Puga Trigás, en nombre y representación de INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY S.L. se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 4 de octubre de 2005.

QUINTO.- Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y habiéndose impugnado por CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.-CASER, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de considerar improcedente el recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 7 de marzo de 2013. Por providencia de la misma fecha y por necesidades del servicio se suspende el señalamiento anterior, fijándose nuevo señalamiento para el día 26 de septiembre de 2013, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La empresa recurrente en casación unificadora suscribió un contrato de seguro colectivo para garantizar el cumplimiento de la mejora voluntaria establecida en el Convenio Colectivo de Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de A Coruña, consistente, entre otras mejoras, en abonar una indemnización al trabajador declarado en incapacidad permanente total como consecuencia de un accidente de trabajo. La citada póliza, suscrita con la compañía aseguradora CASER SEGUROS S.A., dice lo siguiente:

«DEFINICIÓN DE RIESGO CUBIERTO

La Compañía garantiza por la presente póliza, al Tomador del Seguro, el pago del importe establecido en el Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la Provincia de La Coruña, en caso de FALLECIMIENTO O INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, ABSOLUTA o GRAN INVALIDEZ, para toda clase de trabajo, de cualquier trabajador de la Empresa Tomadora del Seguro a consecuencia de un ACCIDENTE LABORAL definido como tal en la vigente Ley de Accidentes de Trabajo.

CAPITALES GARANTIZADOS

Los capitales que habrá de satisfacer la Compañía son los que se indican a continuación:

- a) En caso de FALLECIMIENTO, la Compañía abonará a los beneficiarios del trabajador fallecido la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL (2.500.000) PESETAS.*
- b) En caso de INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, ABSOLUTA o GRAN INVALIDEZ reconocida por resolución de la Comisión de Evaluación de Incapacidades o Magistraturas de Trabajo, la Compañía abonará al propio Asegurado la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL (2.500.000) PESETAS».*

Por su parte, el Convenio Colectivo citado se revisó en 1998 (BOP de 20/11/1998 obrante en autos) elevando la cuantía de la mencionada indemnización a 3.000.000 de pesetas, en los términos siguientes:

«Artículo 69.- Prestación por muerte, viudedad o invalidez.

Las empresas afectadas por este convenio concertarán una póliza de seguros que garanticen a sus trabajadores una indemnización de 3.000.000 de pesetas por muerte, invalidez total, absoluta y gran invalidez derivada de accidente de trabajo».

Como consecuencia de ello, aunque con cierto retraso, en fecha 6/3/2001, la compañía aseguradora elevó el importe de la indemnización pactada a 3.000.000 de pesetas (hecho probado 4º y folio 93 de autos), suma equivalente a 18.030,36 euros, manteniendo la cláusula antes reproducida idéntica en todo lo demás.

Posteriormente, una nueva revisión del Convenio Colectivo fijó la indemnización en 30.000 euros (art. 64), equivalente a 5.000.000 de pesetas. Dicha revisión se publicó en el BOP de A Coruña de 4/9/2004, teniendo el nuevo Convenio una vigencia hasta 31/12/2006, lo que quiere decir que estaba vigente en la fecha de la Resolución del INSS declarando la IPT del trabajador, que tuvo lugar el 1/6/2006.

Como consecuencia de esta revisión del Convenio se produjo un nuevo aumento de la cuantía asegurada, hasta esos 30.000 euros, aunque de nuevo con retraso, concretamente el 26/10/2006 (hecho probado 4º).

Este retraso en la actualización del capital asegurado es el origen de este litigio. En efecto, habiendo sido declarado el trabajador de la empresa recurrente en dicha situación de IPT por accidente de trabajo mediante Resolución del INSS de 1/6/2006, le fue abonada una indemnización de 18.030,036 euros, en lugar de los 30.000 euros establecidos en el Convenio Colectivo de aplicación al caso. El trabajador demandó y le fue concedida -tanto en instancia como en suplicación- la diferencia, concretamente 11.969,64 euros, condenando ambas sentencias a la empresa y absolviendo a la entidad aseguradora.

SEGUNDO.- Recurre ahora la empresa condenada y aporta como sentencia contradictoria la del TSJ de la Comunidad Valenciana de 4/10/2005 en la que, al igual que en la sentencia recurrida, se trata de un trabajador que es declarado en situación de IPT (aunque derivada de enfermedad profesional, no de accidente de trabajo, lo que es irrelevante), estableciendo el Convenio Colectivo aplicable la obligación de las empresas de pagar una indemnización y de suscribir una póliza de seguros para garantizar el cumplimiento de dicha obligación.

La cuantía indemnizatoria asegurada no se actualizó debidamente y, a consecuencia de ello, se declaró el derecho del trabajador a percibir la diferencia, pero se condenó al abono a la compañía aseguradora y no a la empresa. Se cumplen, pues, los requisitos de igualdad sustancial en los hechos, pretensiones y fundamentos, así como los pronunciamientos contradictorios, que exige el artículo 219 de la LRJS para dar viabilidad a la casación unificadora.

TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, la sentencia recurrida argumenta lo siguiente: *«El convenio impone, en efecto, a la empresa la obligación de concertar un seguro que cubra todas las contingencias que se enumeran en el artículo 64, pero ello no le impide, en uso de la libertad contractual que le reconoce el artículo 1.255 del Código Civil, incumplir ese mandato y formalizar con la compañía aseguradora -que no está incluida en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo y por tanto no está obligada a cumplir sus previsiones- un contrato que dispense menor o distinta protección que la pactada en el Convenio, o no actualice en tiempo oportuno las cuantías indemnizatorias previstas en los sucesivos convenios de los que trae causa la póliza de seguros suscrita, sin perjuicio de que en tal caso, sea ella directamente la que deba responder ante sus trabajadores. Cuando esa inadecuación se produce, es evidente que la empresa no puede pretender que se amplíen los términos del contrato de seguro pactado para dar cobertura, en contra de lo previsto en el artículo 1283 del Código Civil, a una contingencia o a una cuantía que no ha querido asegurar».*

Dicha argumentación coincide con la doctrina sentada por la jurisprudencia de esta Sala Cuarta, concretamente la STS de 13/5/2004 (RCUD 2070/2003), que reitera doctrina y que, a su vez, es reiterada por la STS de 31/1/2006 (RCUD 4617/2004), en cuyo FD Segundo se afirma: *«El recurso no puede estimarse, porque la doctrina de la Sala está ya unificada por la sentencia de 13 de mayo de 2004 (rec. 2070/2003), en la que en un supuesto muy semejante al que aquí se debate se dijo que no hay que confundir «las obligaciones que nacen del convenio colectivo y vinculan a la empresa y sus trabajadores, con las que dimanarían del contrato de seguro. El convenio impone, en efecto, a la empresa la obligación de concertar un seguro que cubra todas las contingencias que se enumeran». Pero, como señala también la sentencia citada, «ello no le impide, en uso de la libertad contractual que le reconoce el artículo 1.255 del Código Civil, incumplir ese mandato y formalizar con la compañía aseguradora un contrato que dispense menor o distinta protección de la pactada en el Convenio, sin perjuicio de que en tal caso, sea la propia empresa directamente la que deba responder ante sus trabajadores. La empresa no puede pretender que se amplíen los términos del contrato de seguro pactado para dar cobertura, en contra de lo previsto en el artículo 1283 del Código Civil, a una contingencia que no quiso asegurar. Lo contrario -continúa diciendo la sentencia citada- sería romper el sinalagma contractual sin causa justificativa alguna, pues, en expresión de la sentencia de 19 de enero de 1987, «la obligación de pagar la indemnización o capital convenido es la contraprestación a cargo de la aseguradora que se corresponde con el pago de la prima convenida que ha de satisfacer el asegurado, calculada actuarialmente para que haya la necesaria proporcionalidad entre este pago, de tracto sucesivo y aquel abono, en un solo acto cuando se dé realmente el riesgo cuyo acaecimiento se asegure». Si las previsiones del contrato de seguro fueran oscuras, podría recurrirse, para interpretarlas, al convenio o a las normas de Seguridad Social, como declaró la Sala en algunos casos. Pero ese criterio no es aplicable a casos en que los términos de los contratos de seguro son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, ya que entonces habrá que estar al sentido literal de sus cláusulas, siguiendo el primer canon de interpretación del artículo 1281 del Código Civil. El empresario puede suscribir el contrato de seguro en los términos del convenio o en otros distintos, debiendo afrontar las correspondientes responsabilidades si no se ajusta a esos términos; responsabilidades que no pueden desplazarse a la aseguradora, que ni está obligada por el convenio, ni tiene tampoco obligación de ajustar la póliza a lo previsto en él».*

Sucede, sin embargo, que en ambas sentencias el supuesto de hecho es de infraaseguramiento inicial, obviamente imputable al tomador del seguro (la empresa), no un problema de actualización de la cantidad asegurada, que es más complejo. En efecto, en la STS de 13/5/2004, contraviniendo lo preceptuado por el Convenio aplicable, la empresa aseguró la IPA pero no la IPT. Y en el caso de la STS de 31/1/2006, el Convenio ordenaba indemnizar todos los accidentes sin restricción alguna pero la empresa condenada excluyó del aseguramiento los accidentes producidos a causa de embriaguez, que fue el caso.

No ocurre eso en el caso de autos. El contrato inicial de seguro expresa con claridad que el objeto del contrato es «el pago del importe establecido en el Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de La Coruña», sin especificar la fecha del Convenio en cuestión, por lo que debe deducirse que se trata del que esté vigente en el momento de producirse la contingencia. Y en el apartado siguiente la póliza de seguro concreta que la cantidad será la de 2.500.000 pesetas, que era la señalada en el Convenio vigente en

la fecha en que se suscribió dicha póliza inicial. Posteriormente, el Convenio subió esa suma hasta 3.000.000 de pesetas y, si bien con dos años de retraso, la compañía aseguradora actualizó la póliza. Y, finalmente, el Convenio volvió a subir la cuantía hasta 30.000 euros (igual a 5.000.000 de pesetas), procediendo de nuevo la compañía aseguradora a actualizar la póliza, de nuevo con retraso, lo que hizo que en el momento de surgir la contingencia la póliza no estaba actualizada.

CUARTO.- Las cuestiones a resolver son dos, íntimamente ligadas entre sí: determinar el sujeto obligado a practicar la actualización, si la compañía aseguradora o la empresa asegurada; y determinar si, en un supuesto como éste, debe hacerse primar la cláusula de la póliza que establece que el objeto del contrato es pagar la indemnización establecida en el Convenio, sea cual sea la que esté vigente en cada momento, o la cláusula siguiente en la que se concreta a cuanto ascenderá esa suma, esté o no actualizada.

La sentencia de contraste afirma que ese deber de actualización incumbe a la compañía aseguradora y que lo importante es que el objeto del aseguramiento es la obligación que el Convenio Colectivo establece. Y, así, afirma en su FD Único: *«Se argumenta que la limitación antes citada, ceñida a la suma que aparece suscrita en la póliza del seguro concertado en su momento entre la compañía aseguradora y la empresa, resulta de todo punto incorrecta en la medida que es la vigente con anterioridad a la publicación del convenio colectivo de la construcción para 2002, lo que tuvo lugar el 10 de agosto de 2002, por lo que la aseguradora debería haber actualizado la cobertura del riesgo, al señalar dicha disposición convencional en su artículo 71 la suma de 20.000 euros para el caso de la incapacidad permanente total.- Partiendo de la circunstancia de que el trabajador demandante fue declarado en dicha situación invalidante derivada de enfermedad profesional una vez se hallaba en vigor la norma pactada citada, resulta evidente que no es correcta la limitación que la parte dispositiva de la resolución de instancia establece respecto la aseguradora a la cifra de 3.455,82 euros, en atención a que esta cantidad se corresponde con el límite de cobertura que la empresa concertó en su momento en la póliza (el resto, hasta los 20.000 euros, son cargados a la empresa demandada), pues al suscribirse seguros colectivos en cumplimiento de obligaciones que se imponen al tomador del seguro por convenio colectivo, el asegurador en la póliza tiene el deber de asumir, llegado el caso, la responsabilidad derivada del contrato de seguro cuyo objeto quede regulado por el convenio, en definitiva, como sucede en el caso que nos ocupa, ajustar la prima a la nueva cobertura de los riesgos asegurados, regularizándola por un ineludible deber de diligencia, al no poder afirmarse una supuesta ignorancia sobre el particular».*

QUINTO.- A juicio de esta Sala, es más correcta la argumentación de la sentencia de contraste en un supuesto como el de autos que, como ya hemos dicho, es muy diferente a los contemplados en las sentencias de esta Sala antes citadas y en las que pretende apoyarse la sentencia recurrida. Como con acierto afirma el recurrente, el criterio primordial para la interpretación de los contratos es el de la intención de los contratantes que, a veces, se desprende de los propios términos literales del contrato cuando «son claros y no dejan duda» sobre dicha intención (art. 1281 C.c.). Pero no es este el caso, pues, aunque el objeto del contrato sí aparece expresado con claridad -asegurar el pago de la indemnización establecida por el Convenio-, el hecho de que a continuación se concrete una suma dineraria y que no haya ninguna cláusula sobre a quien corresponde instar la actualización de la misma, crea un problema interpretativo ante la discordancia sobrevenida entre la cuantía establecida por un nuevo Convenio revisado y la que consta en la póliza de seguro no actualizada. Para resolver la duda, es útil acudir al art. 1282 del C.c., según el cual: «Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato». En nuestro caso, se puede comprobar que es la compañía aseguradora la que ha llevado a cabo las sucesivas actualizaciones -entre otras cosas porque eso es de su interés, al conllevar una correlativa actualización de las pólizas- si bien lo ha hecho con cierta falta de diligencia, habida cuenta de los retrasos que hemos referido anteriormente y que, en nuestro caso concreto, han dado lugar al problema litigioso. A ello hay que añadir que no hay cláusula alguna en el contrato que obligue a la empresa a solicitar dicha actualización. Y, corroborando todo lo anterior, es claro -pues así se desprende de usos bien conocidos- que el contrato de seguro es redactado por la compañía aseguradora, por lo que resulta pertinente recordar lo que prescribe el art. 1288 del C.c.: «La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad». Así lo entendió esta Sala Cuarta en su sentencia de 24/11/2009 (RCUD 1145/2008), en cuyo FD Tercero, 4 se afirma: «La causante de la oscuridad en este caso fue la entidad aseguradora recurrente, experta conocedora del sector de seguros, que fue quien redactó la póliza de seguro que normalmente es manifestación de un contrato de adhesión, razones todas por las que se viene entendiendo que las cláusulas oscuras de los contratos de seguro deben interpretarse en favor del asegurado. En este sentido la sentencia de esta Sala de 24 de septiembre de 2002 (Rec. 2750/91), así como las de la Sala 1ª de este Tribunal de 15 y 22 de julio de 2008 (Recs. 1839/01 y 780/02), entre otras que las mismas citan».

En virtud de esos razonamientos, procede declarar la responsabilidad de la compañía aseguradora del pago de la suma a que fue condenada la empresa que, en cambio, debe ser absuelta.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Carlos Puga Trigás en nombre y representación de INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY SL., contra la sentencia dictada el 23 de diciembre de 2011 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso de suplicación núm. 6213/07, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de La Coruña, de fecha 9 de julio de 2007, recaída en autos núm. 56/2007, seguidos a instancia de D. Teodosio contra INDUSTRIAS EDUARDO ROMAY SL. Y CASER SEGUROS S.A., sobre INDEMNIZACIÓN POR CONVENIO. Casamos la sentencia recurrida y revocamos la de instancia y, resolviendo en suplicación, condenamos a la compañía aseguradora CASER SEGUROS S.A. a abonar al trabajador inicialmente demandante la cantidad de 11.969.64 euros que restan para completar la indemnización por incapacidad permanente total prevista en el Convenio Colectivo aplicable, absolviendo de dicho pago a la empresa recurrente. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Ramon Alarcon Caracuel hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Roj: STS 550/2006
Id Cendoj: 28079140012006100038
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 4617/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Aurelio Desdentado Bonete
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Enero de dos mil seis.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Empresa ALIMERKA, S.A., representada y defendida por la Letrada Sra. Gárriz García-Santamarina, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (sede en Valladolid), de 28 de septiembre de 2004, en el recurso de suplicación nº 1547/04, interpuesto frente a la sentencia dictada el 13 de mayo de 2004 por el Juzgado de lo Social nº 2 de León, en los autos nº 36/04, seguidos a instancia de Dª Gloria contra dicha recurrente, SEGUROS y REASEGUROS LA ESTRELLA, S.A., sobre indemnización.

Han comparecido ante esta Sala en concepto de recurridos Dª Gloria, representada y defendida por el Letrado Sr. Bernardo Llana, SEGUROS y REASEGUROS LA ESTRELLA, S.A., representado por el Procurador Sr. de Dorremoechea Aramburu y defendido por Letrado.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. AURELIO DESDENTADO BONETE.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- El 28 de septiembre de 2.004 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (sede en Valladolid) dictó sentencia, en virtud del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de León, en los autos nº 36/04, seguidos a instancia de Dª Gloria contra dicha recurrente, SEGUROS y REASEGUROS LA ESTRELLA, S.A., sobre indemnización. La parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (sede en Valladolid) es del tenor literal siguiente: «Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por ALIMERKA, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de León, de fecha 13 de mayo de 2.004, recaída en autos nº 36/04, seguidos a virtud de demanda interpuesta por Dª Gloria contra precitado recurrente y SEGUROS y REASEGUROS LA ESTRELLA, S.A., sobre cantidad (mejora voluntaria de convenio), debemos confirmar y confirmamos el fallo de instancia».

SEGUNDO.- La sentencia de instancia, de 13 de mayo de 2.004, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de León, contenía los siguientes hechos probados:

- «1º Lorenzo venía prestando sus servicios desde el 22/08/01 para la codemandada Alimerka, SA, encuadrada en el sector del comercio de alimentación, cuando falleció el día 14/09/2001 a consecuencia de un accidente de circulación. En el momento del fallecimiento presentaba una tasa de alcohol etílico de 1,66 g/L, el fallecido era el conductor del vehículo.
- 2º La única heredera de Lorenzo es la hoy actora Dª Gloria, madre del anterior.
- 3º Reclama la cantidad de 1.424.410 ptas. (8.560,88 Euros) en base a lo dispuesto en el art. 7 del Convenio Colectivo del Comercio de Alimentación para la provincia de León para los años 1999, 2000 y 2001, que prescribe: «Póliza de Accidentes.- Las empresas afectadas por el presente Convenio suscribirán una póliza colectiva de seguro que permita a cada trabajador causar derecho a las indemnizaciones que se especifican en las contingencias siguientes: 1.424.410.- ptas En los casos de fallecimiento, invalidez permanente absoluta o gran invalidez». (SIC).

- 4º/ La empresa Alimerka, SA tenía suscrita la póliza a que se refiere el Convenio y desde el año 1999 con la Compañía La Estrella, SA, pólizas que constan a los folios 188 y ss. En la vigente en la fecha en que se produjo el accidente, folio 197 a 201, se establecía en el folio 199: «Los efectos de lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, el tomador del seguro declara aceptar específicamente las disposiciones destacadas en negrilla o recuadros de las condiciones generales (modelo 2.303)». (SIC). Dicho modelo 2303 es el que consta a los folios 232 y ss. estableciéndose en el art. 1º. Del clausulado en cuanto al objeto del seguro y en su apartado f) lo siguiente: «f) Los accidentes sufridos con ocasión de actos realizados por deber de solidaridad humana, de imprudencias y negligencias graves, así como en estado de lipotimia o inconsciencia, siempre que no haya sido determinado por embriaguez, abuso de sedantes y/o estimulantes, uso de sustancias estupefacientes y alucinógenos, cardiopatías y/o derrames cerebrales. A estos efectos se considerará que hay embriaguez cuando el grado de alcohol en la sangre sea superior a 0,8 gramos por mil, o el Asegurado sea sancionado o condenado por esa causa». (SIC).
- 5º/ Se solicitó y celebró conciliación sin avenencia respecto a Alimerka, SA y sin efecto respecto a La Estrella, SA, en fechas respectivas de 24/11/03 y 3/12/03, interponiéndose demanda el 19/01/04».

El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: «Que estimando la demanda, en lo necesario, con absolución de La Estrella, S.A. debemos condenar y condeno a Alimerka, S.A. a que abone a la actora y por los conceptos reclamados la cantidad de 8.560,88 euros».

TERCERO.- La Letrada Sra. Gárriz García-Santamarina, en representación de la Empresa ALIMERKA, S.A., mediante escrito de 23 de noviembre de 2.004, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: **PRIMERO.-** Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede en Sevilla) de 19 de diciembre de 2.002. **SEGUNDO.-** Se alega la infracción del artículo 1281 del Código Civil en relación con el artículo 7.1 del Convenio Colectivo de Minoristas de Alimentación de León.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2004 se tuvo por personado al recurrente y por interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.

QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar procedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 25 de enero actual, en cuya fecha tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La sentencia recurrida confirma la resolución de instancia que había reconocido a la demandante la indemnización prevista en el convenio colectivo por el fallecimiento de su hijo, condenando a la empresa a dicho abono por no tener establecida la cobertura prevista en el convenio. La muerte del causante se produjo el 14 de septiembre de 2001 en un accidente de circulación cuando conducía un vehículo con «una tasa de alcohol etílico de 1,66 g/L» y en circunstancias en las que la sentencia recurrida aprecia «la influencia determinante de la ingesta alcohólica». La indemnización reclamada estaba prevista en el artículo 7 del Convenio Colectivo de Alimentación para la provincia de León 1999-2001, que establece que «las empresas afectadas por el presente Convenio suscribirán una póliza colectiva de seguro que permita a cada trabajador causar derecho a las indemnizaciones que se especifican en las contingencias siguientes: 1.424,410.- ptas En los casos de fallecimiento, invalidez permanente absoluta o gran invalidez». La empresa en la fecha del accidente tenía suscrito un seguro con «La Estrella». En la correspondiente póliza se incluye la cobertura de los accidentes con imprudencia, pero «siempre que no haya sido determinado por embriaguez, abuso de sedantes y/o estimulantes, uso de sustancias estupefacientes y alucinógenos, cardiopatías y/o derrames cerebrales. A estos efectos se considerará que hay embriaguez cuando el grado de alcohol en la sangre sea superior a 0,8 gramos por mil, o el asegurado sea sancionado o condenado por esa causa». En la póliza obrante al folio 184 se recoge la referencia a la cobertura del Convenio de Comercio de Alimentación de León. La empresa demandada ALIMERKA recurrió en suplicación, formalizando cuatro motivos, uno por error de hecho y los restantes denunciando la infracción de los artículos 1281 del Código Civil, 3 de la Ley 50/1980 y 7 del convenio sectorial en relación los artículos 7, 1281 y 1288 del Código Civil y 10 de la Ley 26/1984, argumentando en síntesis que no había quedado acreditado que el accidente se debiera al estado de

embriaguez, que las restricciones de la póliza son nulas y que la intención de la parte al suscribir el seguro era cubrir de forma completa el riesgo previsto en el convenio. Se designa como sentencia contradictoria la de la Sala de lo Social de Sevilla de 19 de diciembre de 2002, que se pronuncia sobre un fallecimiento producido por una intoxicación por cocaína. Existía también una norma del convenio aplicable que obligaba a la empresa a abonar una indemnización por accidente concertando a tal efecto la correspondiente póliza de seguro; póliza que fue concertada, pero excluyendo los accidentes sufridos bajo los efectos de drogas tóxicas. La sentencia de contraste estima el recurso de la empresa que había sido condenada en la instancia, absolviendo a ésta y condenando a la entidad aseguradora. La sentencia de contraste parte de que en «las condiciones de la póliza se hacía constar que las coberturas lo eran en función del convenio colectivo», añadiendo que, tratándose de una mejora de la Seguridad Social, son prevalentes las definiciones de las contingencias de la legislación de Seguridad Social y deben interpretarse en función de ésta, por lo que, estando clara la voluntad de la empresa de desplazar la responsabilidad establecida en el convenio colectivo hacia la aseguradora, ésta debe hacerse cargo del abono de la indemnización, teniendo en cuenta además que «no son los riesgos definidos en la póliza los que han de imponerse..., sino que han de serlo los previstos en el convenio colectivo».

SEGUNDO.- Existe, por tanto, la contradicción que se alega. En el escrito de interposición del recurso, después de examinar el alcance de la contradicción, se pasa al epígrafe dedicado al quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia, pero la parte recurrente no dedica ningún apartado a exponer el motivo en que se funda el recurso es decir la infracción de una norma del ordenamiento jurídico, lo que es una exigencia del recurso, según el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con el artículo 205 de la misma Ley y con los artículos 477 y 481 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, en el presente caso del examen del epígrafe mencionado se advierte que la parte denuncia la infracción del artículo 1281 del Código Civil en relación con el artículo 7 del convenio colectivo para sostener, con la sentencia de contraste, que no son los riesgos incluidos en la póliza los que han de imponerse, sino que han de prevalecer los previstos en el convenio, por lo que, al ser claro, que la intención de los contratantes fue la de concertar un seguro para cubrir los riesgos definidos en el convenio deben prevalecer los términos de éste sobre los del contrato.

El recurso no puede estimarse, porque la doctrina de la Sala está ya unificada por la sentencia de 13 de mayo de 2004 (rec. 2070/2003), en la que en un supuesto muy semejante al que aquí se debate se dijo que no hay que confundir «las obligaciones que nacen del convenio colectivo y vinculan a la empresa y sus trabajadores, con las que dimanarían del contrato de seguro. El convenio impone, en efecto, a la empresa la obligación de concertar un seguro que cubra todas las contingencias que se enumeran». Pero, como señala también la sentencia citada, «ello no le impide, en uso de la libertad contractual que le reconoce el artículo 1.255 del Código Civil, incumplir ese mandato y formalizar con la compañía aseguradora un contrato que dispense menor o distinta protección de la pactada en el Convenio, sin perjuicio de que en tal caso, sea la propia empresa directamente la que deba responder ante sus trabajadores. La empresa no puede pretender que se amplíen los términos del contrato de seguro pactado para dar cobertura, en contra de lo previsto en el artículo 1283 del Código Civil, a una contingencia que no quiso asegurar. Lo contrario -continúa diciendo la sentencia citada- sería romper el sinalagma contractual sin causa justificativa alguna, pues, en expresión de la sentencia de 19 de enero de 1987, «la obligación de pagar la indemnización o capital convenido es la contraprestación a cargo de la aseguradora que se corresponde con el pago de la prima convenida que ha de satisfacer el asegurado, calculada actuarialmente para que haya la necesaria proporcionalidad entre este pago, de tracto sucesivo y aquel abono, en un solo acto cuando se dé realmente el riesgo cuyo acaecimiento se asegure». Si las previsiones del contrato de seguro fueran oscuras, podría recurrirse, para interpretarlas, al convenio o a las normas de Seguridad Social, como declaró la Sala en algunos casos. Pero ese criterio no es aplicable a casos en que los términos de los contratos de seguro son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, ya que entonces habrá que estar al sentido literal de sus cláusulas, siguiendo el primer canon de interpretación del artículo 1281 del Código Civil. El empresario puede suscribir el contrato de seguro en los términos del convenio o en otros distintos, debiendo afrontar las correspondientes responsabilidades si no se ajusta a esos términos; responsabilidades que no pueden desplazarse a la aseguradora, que ni está obligada por el convenio, ni tiene tampoco obligación de ajustar la póliza a lo previsto en él.

Procede, por tanto, la desestimación del recurso, con las consecuencias que de ello se derivan conforme a los artículos 228 y 233 de la Ley de Procedimiento Laboral en orden a la condena en costas de la parte recurrente y a la pérdida de la consignación y del depósito constituidos, a los que se dará su destino legal.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Empresa ALIMERKA, S.A., contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (sede en Valladolid), de 28 de septiembre de 2.004, en el recurso de suplicación nº 1547/04, interpuesto frente a la sentencia dictada el 13 de mayo de 2.004 por el Juzgado de lo Social nº 2 de León, en los autos nº 36/04, seguidos a instancia de D^a Gloria contra dicha recurrente, SEGUROS y REASEGUROS LA ESTRELLA, S.A., sobre indemnización. Decretamos la pérdida del depósito constituido para recurrir al que se dará su destino legal, manteniéndose la consignación realizada en garantía del cumplimiento de la condena. Condenamos a la empresa Alimerka, S.A. al abono de los honorarios de los Letrados de las partes recurridas en la cuantía que, de ser necesario, fijará la Sala dentro del límite legal que establece el artículo 233.2 de la Ley de Procedimiento Laboral. Devuélvanse las actuaciones y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Aurelio Desdentado Bonete hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Consumo de alcohol y prevención de riesgos laborales

Roj: ATS 5135/2012
Id Cendoj: 28079140012012201114
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2934/2011
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Antonio Martín Valverde
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Marzo de dos mil doce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Granada se dictó sentencia en fecha 15 de diciembre de 2010, en el procedimiento nº 1036/09 seguido a instancia de GARASA ESÑECO S.A. contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y DOÑA Micaela, sobre prestaciones, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por GARASA ESÑECO S.A., siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 11 de mayo de 2011, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escrito de fecha 18 de octubre de 2011 se formalizó por el Procurador Don Luis Fernando Granados Bravo, en nombre y representación de GARASA ESÑECO S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 30 de enero de 2012 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción, falta de cita y fundamentación de la infracción legal. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de «hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales» (sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005, R. 430/2004 y 2082/2004; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006; 4 y 10 de octubre de 2007, R. 586/2006 y 312/2007, 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006; 8 de febrero y 10 de junio de 2008, R. 2703/2006 y 2506/2007). Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales (sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006; 18-7-08, R. 437/2007; 15 y 22 de septiembre de 2008, R. 1126/2007 y 2613/2007; 2 de octubre

de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007; y 18 y 19 de febrero de 2009, R. 3014/2007 y 1138/2008).

Consta en la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga), de 11 de mayo de 2011 (Rec. 584/2011), que la empresa GARASA ESÑECO S.A. estaba construyendo un edificio de viviendas, para lo que contrató al trabajador como guarda de obra, por lo que era habitual que éste accediese a su interior además de estar en una caseta que había en la entrada, habiendo recibido formación. En la madrugada del 15-05-2006, tras estar en la segunda y cuarta planta de la obra, se acercó hasta el balcón, e hizo lo mismo en la quinta planta de un edificio de siete pisos, cayendo desde el balcón y falleciendo. Todos los balcones estaban protegidos con una doble barandilla a 45 y 90 cms del suelo, sujeta a un puntal en su parte derecha, y en su parte izquierda con un hierro clavado en el forjado, amarradas mediante alambres que se cerraban con tenazas, si bien la barandilla por la que se produjo la caída estaba suelta en uno de sus extremos superiores y bajada, y el nudo era distinto al realizado por los trabajadores encargados de esta tarea. Bajo una regla de albañilería existente en la entrada del balcón, fue hallado uno de los zapatos del trabajador, en el primer piso una linterna destrozada por el golpe, y el Instituto de Toxicología informó que el fallecido tenía 2,03 gramos de etanol por litro de sangre. Por resolución del INSS se impuso a la empresa un recargo de prestaciones del 30%. Por la vía de revisión de hechos probados en suplicación, consta que por sentencia de instancia se desestimó la demanda por la que la viuda e hijos del trabajador solicitaban indemnización por daños y perjuicios derivados del fallecimiento del trabajador, al considerar probado que el trabajador no tenía encomendada como función realizar trabajos en altura y tenía prohibido acceder al interior de la obra, por lo que el accidente se produjo por causa exclusiva del trabajador seguramente por la embriaguez que sufría. En instancia se desestima la pretensión de la empresa de que no se le imponga recargo alguno, confirmando la Sala de suplicación dicha sentencia por entender, a lo que a efectos de este recurso de casación para la unificación de doctrina interesa, que el trabajador no se excedió en sus funciones, ya que entre éstas estaba supervisar el estado de la obra cuando no se realizaban trabajos, para lo que era habitual que accediese a su interior, y que la embriaguez no exime del recargo, ya que si la barandilla hubiera estado colocada correctamente no habría tenido consecuencia alguna la caída, sin que se pueda saber si la caída se produjo por el estado del trabajador o como consecuencia de un simple accidente al producirse un tropiezo.

Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina la empresa, articulando el recurso en torno a dos motivos con los que interesa que se le exima del recargo, por entender: 1) En primer lugar, que se la ingesta de alcohol rompe el nexo causal, para lo que invoca de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 30 de abril de 2004 (Rec. 5611/2001), y 2) Que existió por parte del trabajador una imprudencia que suprime la responsabilidad de la empresa, para lo que invoca de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 11 de diciembre de 2002 (Rec. 1008/2002), debiendo avanzarse que no puede apreciarse la existencia de contradicción respecto de ninguna de las sentencias invocadas.

Consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 30 de abril de 2004 (Rec. 5611/2001), alegada de contraste para el primer motivo de casación unificadora con el que la parte interesa que no se le imponga el recargo por cuanto la ingesta de alcohol rompe el nexo causal, que el trabajador, marinero, falleció por asfixia mecánica por sumersión al caer al mar cuando accedía al buque en el que prestaba servicios y que estaba atracado en el muelle. De las muestras de sangre y humor vítreo extraídas del cadáver del fallecido, se detectó la presencia de alcohol etílico con la valoración de: sangre 3,23 g/l humor vítreo 3,50 g/l. El convenio colectivo de aplicación preveía que se concertaría un seguro en el que se excluía expresamente las lesiones corporales atribuidas directa o indirectamente, entre otros a la embriaguez. Por la vía de revisión de hechos probados en suplicación consta que la mutua declaró el fallecimiento como derivado de accidente de trabajo. Reclama la viuda del trabajador que se declare que la contingencia es accidente, pretensión desestimada en instancia cuya sentencia es confirmada en suplicación, por cuanto entiende la Sala que la ingesta de alcohol acreditada comporta ruptura del nexo causal entre accidente y trabajo, siendo de aplicación la excepción del apartado 4 b del art. 115 LGSS.

Debe señalarse que no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la aportada como término de comparación para este primer motivo, por cuanto como se ha avanzado no existe identidad ni en las pretensiones de las partes ni en los hechos que constan probados en ambas sentencias.

En la sentencia recurrida la pretensión de la empresa recurrente es que se le exima del recargo de prestaciones por cuanto el accidente se debió a la embriaguez del trabajador, fallando la Sala en atención a que el accidente, consistente en caída desde la quinta planta del edificio cuya vigilancia le había sido encomendada, se debió a que la barandilla de protección no estaba bien colocada. Por el contrario, en la sentencia de contraste la pretensión de la viuda es que se reconozca que el fallecimiento derivó de accidente de trabajo, fallando la Sala en atención a que en aplicación del art. 115 LGSS -precepto que ni siquiera se menciona en la sentencia recurrida- la embriaguez excluye dicha calificación.

SEGUNDO.- Tampoco podría apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la segunda aportada como término de comparación para el segundo motivo de casación unificadora, con el que la parte recurrente entiende que se produjo una imprudencia por parte del trabajador, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 11 de diciembre de 2002 (Rec. 1008/2002). Consta en dicha sentencia que la empresa VC7 S.A., promovió la construcción de una nave almacén, iniciando las obras sin proyecto de ejecución, licencia municipal y sin efectuar estudio básico de seguridad, contratando verbalmente con una empresa que se dedicaba a la actividad de carpintería metálica, la fabricación de la cubierta de la nave sin haber realizado plan de seguridad, empresa que subcontrató a aquélla que contrató al trabajador, para la instalación de la cubierta metálica. El trabajador estaba en la parte más alta de la nave junto con un compañero sujetando uno de los paneles metálicos para colocarlo, cuando cayó al suelo al parecer por una ráfaga de viento, falleciendo, no existiendo redes protectoras ni habiendo sido habilitadas plataformas de trabajo de suficiente anchura y protección, no utilizando el actor ni el compañero ningún equipo de protección contra caídas ni cinturones de seguridad. En el art. 35 del Convenio Colectivo de ámbito provincial para la industria siderometalúrgica de Burgos, se establecía que las empresas concertarían un seguro de vida, invalidez y muerte cuando éstas derivaran de accidente de trabajo, concertando la empresa dicho seguro. Reclaman la viuda de hijos del trabajador fallecido indemnización por el accidente, pretensión desestimada en instancia cuya sentencia es confirmada en suplicación, por entender la Sala que existió una imprudencia el trabajador que si bien no elimina el concepto de accidente, sí suprime la responsabilidad de la empresa y rompe el nexo causal, ya que junto a la ausencia de determinadas medidas de protección y seguridad, el trabajador no se puso el cinturón de seguridad y había bebido en exceso y de forma inadecuada en relación al trabajo de riesgo y en altura que debía desarrollar, coadyuvando a todo ello la fuerte ráfaga de viento desencadenante de la caída.

De lo relacionado se desprende que no puede apreciarse la existencia de contradicción por cuanto no sólo no existe identidad en los hechos que constan probados en ambas sentencias, sino también por cuanto no existe identidad en las pretensiones, por lo que en ningún caso los fallos pueden considerarse contradictorios. En la sentencia recurrida la pretensión de la empresa es que no se le imponga el recargo de prestaciones respecto del accidente de trabajo con resultado de muerte del trabajador que siendo vigilante de seguridad, cayó desde la quinta planta que no tenía bien colocada la barandilla de seguridad, si bien el trabajador había bebido, por el contrario, en la sentencia de contraste, la pretensión de la viuda e hijos es que se les indemnice con la cantidad solicitada como consecuencia del fallecimiento del trabajador acontecido al caer desde la cubierta de una nave al perder el equilibrio presumiblemente por una fuerte ráfaga de viento, sin utilizar el cinturón de seguridad y habiendo bebido.

TERCERO.- Por último, la parte recurrente no cita los preceptos que considera infringidos para los dos motivos en que articula el recurso, ni fundamenta las razones legales por las que entiende que existe infracción legal más allá de la sucinta comparación de sentencias que realiza, debiendo señalarse que el recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley, de acuerdo con el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 205 del mismo texto legal. La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» (sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 2008, R. 2206/2006 y 5 de marzo de 2008, R. 1256/2007 y 4298/2006, 14 de mayo de 2008, R. 734/2007 y 1671/2007; 17 de junio de 2008, R. 67/2007; 25 de septiembre de 2008, R. 1790/2007; 2 y 7 de octubre de 2008, R. 1964/2007 y 538/2007; y 3 de noviembre de 2008, R. 2791/2007).

Así se deduce, no sólo del citado art. 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación supletoria en ese orden social, cuyo artículo 477.1 prescribe que «el recurso habrá de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso», mientras que el artículo 481.1 LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.2º LEC (entre otras, sentencias de 8 de marzo de 2005, R. 606/2004; 28 de junio de 2005, R. 3116/2004; 16 de enero de 2006, R. 670/2005 y 8 de junio de 2006, R. 5287/2004; 7 de junio de 2007, R. 767/2006; 21 de diciembre de 2007, R. 4193/2006; 16 y 18 de julio de 2008, R. 2202/2007 y 1192/2007; 19 y 25 de septiembre de 2008, R. 384/2007 y 1790/2007; 22 de octubre de 2008, R. 4312/2006; 16 de enero de 2009, R. 88/2008; y 17 de febrero de 2009, R. 2401/2007).

CUARTO.- Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 9 de febrero de 2012, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 30 de enero de 2012, insistiendo en la existencia de contradicción en relación con los dos motivos del recurso, pero sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de Procedimiento Laboral y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, con imposición de costas, pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose en su caso a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador Don Luis Fernando Granados Bravo en nombre y representación de GARASA ESÑECO S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 11 de mayo de 2011, en el recurso de suplicación número 584/11, interpuesto por GARASA ESÑECO S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Granada de fecha 15 de diciembre de 2010, en el procedimiento nº 1036/09 seguido a instancia de GARASA ESÑECO S.A. contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y DOÑA Micaela, sobre prestaciones.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose en su caso a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

Roj: STS 2280/2011
Id Cendoj: 28079140012011100253
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2601/2010
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Maria Luisa Segoviano Astaburuaga
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a once de Abril de dos mil once.

Vistos los autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el procurador D. Francisco José Abajo Abril, en nombre y representación de la empresa AGROPECUARIA COPERL, S.C.C.L., contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de fecha 10 de mayo de 2010, recaída en el recurso de suplicación nº 5442/2009, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 21 de Barcelona, dictada el 19 de diciembre de 2008, en los autos de juicio nº 452/07, iniciados en virtud de demanda presentada por D^a Leocadia, contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA MUPA IGUALADINA y AGROPECUARIA COPERL SCCL., sobre reclamación por responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad.

Es Ponente la Excm. Sra. D^a. MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA, Magistrada de Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha 19 de diciembre de 2008, el Juzgado de lo Social nº 21 de los de Barcelona, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: «En la demanda interpuesta por Leocadia contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua MUPA Igualadina y Agropecuaria Coperal SCCL; acepto la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Mutua MUPA Igualadina codemandada, a quien debo absolver y absuelvo en la instancia, y acepto en parte la demanda interpuesta, por lo tanto, declaro la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en el accidente de trabajo sufrido por Justo el 16/03/2005, para el que establezco un recargo del 40% de las prestaciones causadas y las que puedan causar derivadas de este accidente, condeno a la demandada empresa Agropecuaria Coperal, SCCL como responsable del pago a constituir en el Servicio Común de la Seguridad Social el capital coste de renta necesario para cubrir dicho recargo, y condeno también a los codemandados el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social a atenerse a las anteriores declaraciones y al cumplimiento de las obligaciones que se deriven».

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

- «1º La demandante Leocadia, es viuda del causante Justo, trabajador que prestaba servicios para la demandada empresa Agropecuaria Coperal SCCL, desde el 20/01/1994, con categoría profesional de Peón, cobrando un salario mensual de 1.419,38 € y que estaba en posesión del permiso de conducir clase B con validez hasta 24/10/2007.
- 2º El día 16/03/2005 sobre las 16:12 horas, mientras el causante por razón de su trabajo en la empresa demandada conducía un tractor marca Ebro 155E propiedad de la empresa demandada, por la carretera C-241 d dirección Manresa, en el punto kilométrico 19,400 sufrió un accidente de tráfico al salirse de la vía y volcar el vehículo quedando éste al revés y con el causante atrapado bajo el mismo con un fuerte traumatismo con aplastamiento craneal que le causó la muerte.
- 3º El vehículo era un tractor agrícola con acoplamiento de pala excavadora en la parte delantera y contrapeso en la parte posterior, que no contaba con barra antivuelco.

- 4º/ El accidente se produjo en una zona de carretera diáfana, con visibilidad de 75 metros, en una curva de ángulo de giro amplio, que el vehículo no trazó bien por causas desconocidas saliendo por la tangente, y dado que tras el arcén de la carretera había un terraplén de unos 90 centímetros, se produjo el vuelco del vehículo quedando en el campo de cultivo contiguo.
- 5º/ Del resultado de las analíticas toxicológicas de las muestras extraídas en la autopsia realizada al causante, se determinó una concentración de etanol en sangre de 1,45 gramos por litro.
- 6º/ La demandante inició actuaciones ante la Entidad Gestora mediante solicitud de 14/08/2006 para que se determinase la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en el accidente sufrido por el causante el 16/03/2005, dictando el Instituto Nacional de la Seguridad Social resolución de 09/01/2007 por la que se deniega la petición. Interpuesta reclamación previa por la demandante fue rechazada por nueva resolución de 20/11/2007.
- 7º/ Por resolución de 09-08/2005 el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya impuso a la empresa codemandada una sanción administrativa por importe de 3.000 euros por infracción en materia de prevención de riesgos laborales al no haber dotado al tractor en cuestión de una estructura de protección en caso de vuelco ni cinturón de seguridad».

TERCERO.- Contra la anterior sentencia, la empresa Agropecuaria Coperal, SCCL, formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, dictó sentencia en fecha 10 de mayo de 2010, en la que consta el siguiente fallo: «Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por AGROPECUARIA COPERL, SCCL., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 21 de Barcelona, de fecha 19/12/2008, autos núm. 452/2008, por RECARGO DE PRESTACIONES, debemos confirmar la resolución administrativa impugnada en toda su extensión. Se condena a la recurrente a la pérdida del depósito prestado para recurrir, una vez alcance firmeza esta sentencia y a las costas del recurso con inclusión de los honorarios del letrado de la parte impugnante que se fijan en 300 Euros».

CUARTO.- Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el procurador D. José Francisco Abajo Abril, interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 10 de enero de 2003, recurso de suplicación nº 3265/02.

QUINTO.- Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar improcedente el recurso interpuesto.

SEXTO.- Se señaló para la votación y fallo el día 6 de abril de 2011, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El Juzgado lo Social número 21 de los de Barcelona dictó sentencia el 19 de diciembre de 2008, autos núm. 452/07, estimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Mutua MUPA Igualadina codemandada, a la que absolvió en la instancia, y aceptando en parte la demanda formulada por Doña Leocadia contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua MUPA Igualadina y Agropecuaria Coperal SCCL, declaró la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en el accidente de trabajo sufrido por D. Justo el 16 de marzo de 2005, estableciendo un 40% de recargo de prestaciones, condenando a la empresa Agropecuaria Coperal SCCL, como responsable del pago, a constituir en el servicio común de la Seguridad Social el capital coste de renta necesario para cubrir dicho recargo, condenando a los codemandados Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social a atenerse a las anteriores declaraciones y al cumplimiento de las obligaciones que se deriven. Tal y como resulta de dicha sentencia la actora doña Leocadia es viuda del causante D. Justo, trabajador que prestaba servicios para la demandada empresa Agropecuaria Coperal SCCL desde el 20 de enero de 1994, con categoría profesional de peón, estando en posesión del permiso de conducir clase B. El día 16-3-05, sobre las 16'12 horas, estando el causante, por razón de su trabajo, conduciendo el tractor Ebro 155 E, propiedad de la empresa demandada, por la carretera C-241 d, dirección Manresa, en el

punto kilométrico 19,400 sufrió un accidente, al salirse de la vía y volcar el vehículo, quedando este al revés y con el causante atrapado bajo el mismo, con un fuerte traumatismo, con aplastamiento craneal que le causó la muerte. El vehículo, tractor agrícola con acoplamiento de pala excavadora en la parte delantera y contrapeso en la parte posterior, no contaba con barra antivuelco. El accidente se produjo en una zona de la carretera diáfana, con visibilidad de 75 m., en una curva de ángulo de giro amplio que el vehículo no trazó bien por causas desconocidas, saliendo por la tangente, produciéndose el vuelco porque, tras el arcén, había un terraplén de unos 90 cm. Del resultado de las analíticas toxicológicas de las muestras extraídas en la autopsia realizada al causante, se determinó una concentración de etanol en sangre de 1'45 gramos por litro. El Departamento de Trabajo de la Generalitat dictó resolución el 9-8-05, imponiendo a la empresa demandada una sanción administrativa de 3000 euros por infracción en materia de prevención de riesgos laborales, al no haber dotado al tractor de una estructura de protección, en caso de vuelco, ni cinturón de seguridad.

Recurrida en suplicación por la demandada Agropecuaria Coperal SCCL, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictó sentencia el 10 de mayo de 2010, recurso número 5442/09, desestimando el recurso formulado. La sentencia entendió que el accidente se produjo por el incumplimiento empresarial de las medidas de seguridad previstas en el apartado 2.1 d) y e) del Anexo I del Real Decreto 1215/97 de 18 de julio y Disposición Transitoria Unica de dicha norma, pues el tractor que causó la muerte del trabajador no disponía de barra antivuelco, ni ningún otro mecanismo que protegiese al trabajador conductor de un posible vuelco del vehículo, no estando dotado, tan siquiera, de un simple cinturón de seguridad, existiendo también una falta de control sobre el modo y forma en las que el actor desempeñó sus servicios, de manera que este pudo en estado de embriaguez subirse al vehículo sin que nadie se lo impidiera. La conducta del trabajador no puede calificarse de imprudencia temeraria sino de simple imprudencia profesional.

Contra la citada sentencia se interpuso por la demandada recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando como sentencia contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia el 10 de enero de 2003, recurso 3265/02, firme en el momento de publicación de la recurrida, pues tal y como resulta de la certificación expedida por la señora secretaria de la Sala, la misma adquirió firmeza el 26 de febrero de 2003.

El recurso ha sido impugnado por la letrada de la Administración de la Seguridad Social, actuando en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, habiendo informado el Ministerio Fiscal que estima que no concurre el requisito de la contradicción pero que, si se estimase que las sentencias son contradictorias, el recurso ha de ser desestimado.

SEGUNDO.- Procede el examen de la sentencia de contraste para determinar si concurre el requisito de la contradicción, tal y como enuncia el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, que supone que ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente idénticos, las sentencias comparadas han emitido pronunciamientos diferentes.

La sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia el 10 de enero de 2003, recurso 3265/02, estimó el recurso formulado por Marítima Valenican SA contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2002 por el Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia, revocando dicha sentencia y estimando la demanda interpuesta por el recurrente, dejó sin efecto la resolución del INSS que impuso el recargo en las prestaciones, declarando no haber lugar a recargo alguno, condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración. Consta en dicha sentencia que el trabajador D. Darío, venía prestando servicios como estibador, integrado como trabajador fijo en la plantilla de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Sagunto SA, desde el 17-7-97. Sufrió un accidente de trabajo el 21-2-00, cuando prestaba servicios para la empresa estibadora, sobre las 8'20 horas aproximadamente. El accidente se produjo cuando el trabajador se disponía a extraer cuñas de madera depositadas en un balde de hierro, para situarlas entre las bobinas metálicas ya descargadas y evitar así el desplazamiento de estas. Como observó que se iban a necesitar muchas cuñas, para adelantar el proceso de trabajo y mientras esperaba a la carretilla, retiró los pestillos de seguridad de un lado y se dirigió al otro lado para, una vez suspendido el balde por la carretilla, retirar el pestillo de seguridad restante, completando el desenganche. Al no existir en este balde los últimos pestillos de seguridad, cuando el trabajador rodeó el depósito pasando por la zona frontal, se produjo el vuelco del asa, que impactó en su caída contra el tórax del operario, tirándole al suelo y golpeándole en el pie derecho. Los baldes poseen un asa de hierro macizo que es abatible en ambas direcciones al estar inserta en un eje situado en la parte inferior del recipiente. Estos pestillos de seguridad existían en su origen y se fueron rompiendo por el transcurso del tiempo,

existiendo en la empresa seis baldes, de los cuales solo uno disponía de pestillos de seguridad a ambos lados, cuatro tenían pestillo solo en un lado y uno poseía pestillos a un lado, unidos por una barra de hierro para impedir que se retiraran para liberar el asa. Por resolución de la Dirección Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia de 21-2-00, se impuso a la empresa una sanción de 1.000.000 de pesetas por la existencia de una infracción grave. El trabajador accidentado presentaba en el momento del accidente una tasa de alcoholemia superior a 0'3 ml. en sangre. En la empresa existía un control de alcoholemia (control por sorteo). La sentencia entendió que no hay infracción del artículo 19 ET por mediar imprudencia del trabajador, contra la que no juega la obligación de vigilancia de la empresa, que no puede impedir la conducta incomprensible del trabajador. Continúa razonando que si tan mal estaban los pestillos, los trabajadores o la Inspección debieron ponerlo en conocimiento de la empresa, pero no era así, no se impedía ni el trabajo ni la seguridad, no se ha probado infracción de ninguna medida de seguridad ya que era adecuado tener pestillos en un solo lado, pues se trabajaba habitualmente así sin accidentes y sin protesta de los trabajadores.

Entre las sentencias comparadas no concurren las identidades requeridas por el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. Aunque en ambos supuestos el trabajador accidentado presentaba una elevada tasa de alcoholemia no son iguales los datos de los que parten cada una de las sentencias enfrentadas. En efecto, mientras en la sentencia recurrida no consta la causa por la que el coche se salió de la calzada, no consta que fuese por exceso de velocidad, mal trazado de la curva o inadecuada conducción, figurando que la ausencia de protección -falta de barra antivuelcos u otro mecanismo de protección, ni siquiera existía cinturón de seguridad- fue la que provocó el que al volcar el tractor el trabajador padeciese un traumatismo que le causó la muerte, en la de contraste consta que fue la actuación del trabajador, al abrir los pestillos de seguridad y cruzar al otro lado para retirar los otros pestillos de seguridad, la que originó el accidente. Entiende la sentencia que, aunque estuvieran estropeados los pestillos del otro lado, no existió infracción de medidas de seguridad pues es suficiente con que existieran pestillos en un lado en buenas condiciones. Hay otra diferencia entre una y otra sentencia y es que mientras en la sentencia recurrida la empresa no adoptó ninguna medida en orden a la vigilancia del estado de los trabajadores, en la de contraste existía un control aleatorio para detectar las tasas de alcoholemia. En atención a la disparidad de los datos las sentencias comparadas han llegado a resultados diferentes aunque no contradictorios imponiendo la recurrida recargo por falta de medidas de seguridad y no imponiéndolo la de contraste.

TERCERO.- Los razonamientos precedentes conducen, de conformidad con la propuesta del Ministerio Fiscal, a la desestimación en este momento procesal del recurso de casación para la unificación de doctrina, por falta del requisito ineludible de la contradicción, procediendo la condena en costas de la recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador D. Francisco José Abajo Abril, en nombre y representación de la empresa Agropecuaria Coperal SCCL., contra la sentencia dictada el 10 de mayo de 2010 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el recurso de suplicación número 5442/09, interpuesto por la citada recurrente frente a la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2008 por el Juzgado de lo Social nº 21 de los de Barcelona, en los autos número 452/07, seguidos a instancia de Doña Leocadia contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua MUPA Igualadina y Agropecuaria Coperal SCCL., en reclamación de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Declaramos la firmeza de la sentencia recurrida. Se condena en costas al recurrente, incluyendo en las mismas la minuta de honorarios de la Letrada de la Administración de la Seguridad Social que impugnó el recurso. Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir al que se le dará el destino legal.

Devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Roj: STS 890/2007
Id Cendoj: 28079140012007100112
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 5435/2004
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: Jesús Gullón Rodríguez
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Enero de dos mil siete.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Rafael Somalo Moreno, en nombre y representación de FIMAC Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 35, contra la sentencia de 8 de octubre de 2.004 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de suplicación núm. 8553/03, interpuesto frente a la sentencia de 6 de mayo de 2.003 dictada en autos 221/02 por el Juzgado de lo Social núm. 17 de Barcelona seguidos a instancia de D^a Elsa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Fimac (MATEPSS nº 35), Diagonal Hierros, S.L., Elaborados y armaduras Barcelona, S.A. y Fraga UTE, sobre Muerte y Supervivencia.

Han comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL representado por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, FRAGA UTE representada por la Letrada D^a Cristina Gutiérrez-Solar Calvo y D^a Elsa, representada por la Procuradora D^a Carmen García Rubio.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS GULLÓN RODRÍGUEZ

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha 6 de mayo de 2.003, el Juzgado de lo Social núm. 17 de Barcelona, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «que, estimando totalmente la demanda interpuesta por Elsa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Fimac, Diagonal Hierros SL, Elaborados y Armaduras Barcelona SA y Fraga UTE, debo declarar y declaro que la muerte del marido de la indicada demandante, Fermín, 27.8.01 fue debida a accidente de trabajo; en consecuencia, debo condenar y condeno a la indicada mutua a que abone, con cargo al Régimen General de la Seguridad Social, las prestaciones de viudedad y orfandad derivadas de dicho accidente, con efectos a la fecha del mismo y con arreglo a una base reguladora anual de 25.977,73 euros, con las mejoras y actualizaciones que sean procedentes; igualmente debo condenar y condeno a la citada mutua a que abone una indemnización por fallecimiento por importe de 17.318,48 euros y tres euros en concepto de auxilio por defunción; y debo condenar y condeno al resto de demandadas a estar y pasar por estas declaraciones».

En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

- «1º/ La demandante nació el 7.12.58 y es la viuda de Fermín, que había nacido el 19.4.58 y estaba encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social. El matrimonio tuvo dos hijos: Luis Manuel, nacido el 22.10.81, y Carolina, nacida el 29.12.84.
- 2º/ El Sr. Fermín prestaba servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa Diagonal Hierros SL, con la categoría profesional de oficial 1ª y antigüedad desde 9.8.01. La citada empresa tiene cubiertas las contingencias profesionales con Fimac.
- 3º/ La Administración adjudicó a Fraga UTE la realización de las obras de la variante de Fraga de la N-II.

- 4º/ Mediante contrato suscrito el 24.5.00, Fraga UTE encomendó a Elaborados y Armaduras Barcelona SA 'la ejecución de la obra consistente en la realización de elaboración, montaje y transporte de acero' de la indicada variante.
- 5º/ Elaborados y Armaduras Barcelona SA encomendó los trabajos de elaboración de acero corrugado a Diagonal Hierros SL con autorización de la citada UTE.
- 6º/ Fraga UTE elaboró el Plan de Seguridad de la obra.
- 7º/ En el año 1998, el Sr. Fermín participó en una jornada organizada por Fimac sobre seguridad e higiene en trabajos de ferralla que incluía un punto denominado 'prevención de riesgo de caída en altura'.
- 8º/ El 10.8.01, el Sr. Fermín firmó un documento de Diagonal Hierros SL en el que reconocía haber recibido casco, guantes, botas y cinturón.
- 9º/ En la mañana del lunes 27.8.01, el Sr. Fermín estuvo haciendo trabajos de ferralla junto a otros compañeros en la citada variante.
- 10º/ Finalizada la jornada matinal, el Sr. Fermín y un grupo de trabajadores almorzaron en un restaurante cercano, al que fueron llevados en furgoneta por Carlos Ramón, trabajador de Diagonal Hierros SL que estaba al frente del equipo del que formaba parte el Sr. Fermín.
- 11º/ Acabado el almuerzo, el Sr. Carlos Ramón recogió en la furgoneta al grupo de trabajadores.
- 12º/ El Sr. Carlos Ramón dejó al Sr. Luis Manuel al pie de un puente en el que estaban trabajando.
- 13º/ El Sr. Luis Manuel se puso a trabajar en el puente, a una altura aproximada de ocho metros.
- 14º/ Al cabo de aproximadamente una hora de haber empezado los trabajos, el Sr. Luis Manuel se precipitó al vacío desde el puente.
- 15º/ El impacto contra el suelo ocasionó la muerte del trabajador.
- 16º/ En el puente no había barandillas.
- 17º/ El Sr. Luis Manuel no llevaba arnés ni ningún elemento que pudiese impedir que cayese al vacío.
- 18º/ En el momento de la caída, el Sr. Fermín tenía una concentración de etanol en sangre de 3,55 gramos por litro.
- 19º/ Por los hechos relatados, fueron incoadas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº uno de los de Fraga (autos 862/01). Mediante auto de 18.11.02, se acordó el sobreseimiento provisional de la causa y el archivo de las actuaciones.
- 20º/ La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó acta de infracción contra las tres empresas demandadas, la cual fue confirmada mediante Orden del consejero de economía, hacienda y empleo del Gobierno de Aragón de 14.1.03, si bien fue reducido el grado en el que debían apreciarse las faltas. Dicha resolución fue recurrida y no consta que haya alcanzado firmeza.
- 21º/ Solicitadas prestaciones de muerte y supervivencia ante el INSS y la mutua, ambas entidades denegaron la solicitud.
- 22º/ Fueron formuladas reclamaciones previas.
- 23º/ La base reguladora de las prestaciones asciende a 25.977,73 euros anuales y la indemnización derivada del fallecimiento asciende a 17.318,48 euros».

SEGUNDO.- Posteriormente, con fecha 8 de octubre de 2.004, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: «Que tenemos que desestimar y desestimamos los recursos de suplicación interpuesto por DIAGONAL HIERROS, S.L. y

ELABORADOS Y ARMADURAS BARCELONA, S.A. y por MUTUA FIMAC, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 35 contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 17 de los de Barcelona en fecha 6 de mayo de 2002, recaída en los autos 221/2002, en virtud de demanda deducida por Elsa contra los mencionados recurrentes y el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y FRAGA UTE en reclamación de determinación de contingencia por prestaciones de muerte y supervivencia y, en consecuencia, tenemos que confirma y confirmamos íntegramente la citada resolución».

TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de Fimac (MATEPSS nº 35) el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, el día 21 de enero de 2.005, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 26 de marzo de 2002 y la infracción de lo establecido en el artículo 115.4 b) de la LGSS.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 25 de enero de 2.006, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de diez días.

QUINTO.- Evacuado el trámite de impugnación, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en el sentido de considerar que procede la desestimación del recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 18 de enero de 2006, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si el fallecimiento del trabajador, que se produjo por precipitación mientras llevaba a cabo trabajos en altura con una tasa de alcohol en sangre de 3,55 gramos por litro, ha de tener la consideración legal de accidente de trabajo, o, por el contrario, si ésta circunstancia determina que el suceso se haya producido por imprudencia temeraria del operario, lo que excluiría, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 115.4 b) de la Ley General de la Seguridad Social, de esa calificación al suceso.

La sentencia de instancia dio una respuesta positiva al problema, partiendo del relato de hechos que se contiene en otra parte de esta resolución, del que ahora cabe destacar lo siguiente: en la mañana del lunes 27 de agosto de 2001, el trabajador estuvo llevando a cabo trabajos de ferralla en su condición de oficial de primera, en la construcción de la variante de la Nacional II a su paso por la localidad de Fraga. Estuvo almorzando en un restaurante próximo a la obra junto con otros compañeros de trabajo, siendo trasladado después en una furgoneta de la empresa al punto donde debía trabajar por la tarde, un puente en la referida variante, a ocho metros de altura. Aproximadamente al cabo de una hora de haber iniciado la actividad, sobre las 15 horas y 15 minutos, el operario se precipitó al vacío y falleció a consecuencia del impacto contra el suelo. En el puente no había barandillas ni el trabajador estaba sujeto por cinturón o arnés de clase alguna. Se acreditó que en el momento de la caída, el fallecido tenía en sangre una concentración de etanol de 3,55 gramos por litro. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó acta de infracción por omisión de medidas de seguridad a las tres empresas demandadas, lo que determinó la imposición de recargo en las prestaciones derivadas del accidente en vía administrativa, resolución que ha sido recurrida y no consta que sea firme.

Sobre esa realidad, la sentencia del Juzgado apreció que el fallecimiento del trabajador se produjo como consecuencia de accidente de trabajo, y en consecuencia se condenó la Mutua Patronal como entidad aseguradora del riesgo y al resto de los demandados a estar y pasar por tal declaración.

SEGUNDO.- Recurrieron en suplicación tanto la Mutua Patronal como dos de las empresas demandadas y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la sentencia de 8 de octubre de 2.004 que hoy se recurre en casación para la unificación de doctrina, desestimó tales recursos y confirmó la decisión de instancia. Para ello, parte de la presunción del artículo 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social, pues el suceso se produjo en tiempo y lugar de trabajo, para excluir a continuación que ese accidente se hubiese producido por imprudencia temeraria del trabajador, lo que hubiese excluido, en todo caso, esa calificación

legal, tal y como se afirma en el artículo 115.4 b) LGSS. Razona la sentencia recurrida que en este caso que el causante «no murió por enolismo, ni por un desfallecimiento por intoxicación etílica. Falleció porque -sea cual fuese su estado- estaba prestando servicios en lo alto de un puente, sin sujeción y sin que dicho puente tuviese la barandilla de seguridad».

En el recurso de casación para la unificación de doctrina la Mutua recurrente denuncia como infringido el artículo 115.4 b) de la Ley General de la Seguridad Social, razonando que el suceso debe ser excluido de la calificación de accidente de trabajo, puesto que fue debido a la imprudencia temeraria del trabajador.

Como sentencia de contraste para sostener el recurso, propone la recurrente la dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 26 de marzo de 2002. Pero, como va a verse enseguida y aunque inicialmente pudiese parecer lo contrario, los hechos y los fundamentos que sirvieron de base a tal pronunciamiento, no guardan la necesaria identidad sustancial con los de la sentencia recurrida, como exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del recurso.

En ella se aborda el mismo problema referido a la concurrencia como causa del accidente de la imprudencia temeraria del trabajador como elemento determinante de su acaecimiento. Se trataba allí de un operario que prestaba sus servicios para una empresa de la construcción como peón de albañil, a las órdenes de un oficial, al que le proporcionaba cuantos materiales y herramientas necesitara para el desarrollo de su trabajo, consistente entonces en la colocación de vierteaguas en las ventanas del edificio en construcción. Para llevar a cabo esa actividad, el trabajador accidentado debía colocarse sobre un andamio colgante que se iba desplazando, de abajo hacia arriba, en un patio interior rectangular. La forma de llegar al andamio consistía en subir por medio de las escaleras del edificio en construcción hasta la planta en cuya altura se encontrase el andamio; una vez allí, entrar en la vivienda y acceder al andamio a través de un hueco, una puerta en la pared para subirse al mismo. El día 26 de junio de 2.000, el andamio, que según la Inspección de Trabajo y así se admite en la sentencia se cimbreaba, estaba colocado a 12 metros de altura, y en la pared en la que estaba colocado había tres aberturas que permitían hacerlo; no obstante, se había habilitado para ello la central y en las otras dos laterales se habían colocado unos palets para impedir el paso a los extremos del andamio, aunque había un espacio entre ellos y el muro que permitía el paso de una persona. Sobre las 9,45 horas, después del descanso para el desayuno, el trabajador se dirigió a la obra para reincorporarse a su puesto en el referido andamio, optando por acceder al mismo por uno de los huecos laterales, salvando el obstáculo de los palets, cayendo en ese momento al vacío, lo que le causó heridas de tal gravedad que determinaron su fallecimiento. Consta como elemento relevante que el operario tenía una concentración de alcohol en sangre de 1,78 gramos por litro, ingerido durante el referido desayuno. La sentencia de contraste atribuye a esta circunstancia la existencia de una imprudencia temeraria del trabajador que excluía la laboralidad del accidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 115.4 b) LGSS, teniendo en cuenta que, por un lado, el trabajador había aceptado voluntariamente el riesgo excepcionalmente grave y debido a circunstancias ajenas al trabajo como era el de ingerir alcohol durante el desayuno, y por otra, que no hubo ausencia alguna de medidas de seguridad directamente relacionadas con la producción del accidente, circunstancias que en conjunto conducen a la Sala a excluir la naturaleza laboral del accidente.

TERCERO.- Se trata entonces de comparar los hechos que sirvieron de base a los distintos fundamentos y, finalmente, soluciones, de las sentencia comparadas, pero partiendo de algunas observaciones generales que debe hacerse en relación con la dificultad de analizar y comparar a efectos de su identidad sustancial conductas humanas llevadas a cabo en sus respectivos entornos y circunstancias. Por esa razón en nuestra sentencia de 31 de marzo de 1.999, en el recurso 2997/1998, (citada en parte por la recurrente en su escrito de interposición del recuso, pero sin decir que esa sentencia no pudo entrar en el fondo del asunto, precisamente por ausencia de identidad de supuestos) decíamos entonces, en un supuesto de comparación de tasas de alcohol en sangre en dos accidentes de trabajo que «... la Sala no puede hacer una declaración general, como en esencia se propugna, sobre si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como la imprudencia que rompe la relación de causalidad. La imprudencia se configura en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto litigioso, y esas circunstancias concurrentes son de apreciación inicial del juzgador en cada caso concreto, para determinar si existe o no la causa de exclusión de la presunción de laboralidad».

El análisis de la posible existencia de una imprudencia temeraria en la conducta del trabajador excluyente de la laboralidad del accidente, ha de pasar forzosamente por el examen de elementos personales relacionados con diversos factores, que además excluyan la existencia de las demás modalidades de imprudencia, incluida la profesional, cuya concurrencia -artículo 115.5 a) LGSS - no impediría la referida calificación.

En los hechos que determinaron las distintas soluciones finalmente adoptadas por las sentencias antes referidas, aparecen las diferencias siguientes: En la sentencia recurrida el accidente, aunque con una tasa de alcohol en la sangre del trabajador superior a la de contraste (tasa que exigiría valorar algunos parámetros complementarios de comparación, como estatura, peso, hábito, alimentos ingeridos, etc, de los que aquí no se dispone) se produjo una hora después de incorporarse el operario al tajo, cuando en la de contraste ocurrió inmediatamente después del desayuno, de la ingesta de alcohol, por esa razón, en la sentencia recurrida se desconoce, y así se afirma, la razón por la que se produjo la precipitación al vacío del operario. Y finalmente, el entorno en el que se produjo el suceso era completamente distinto en uno y otro caso. Así, en la sentencia recurrida se dice que si el trabajador hubiese dispuesto de barandillas o/y de algún medio de aseguramiento, como cinturón o arnés, la caída no se hubiese producido, es decir, que si no se hubiesen omitido esas medidas el accidente no hubiese ocurrido, en la de contraste se parte del cumplimiento de tales medidas de seguridad por parte de la empresa.

CUARTO.- En conclusión, a la vista de esos distintos hechos y fundamentos de las sentencias recurrida y de contraste ha de concluirse que no concurre la necesaria identidad sustancial entre ellas para que la Sala pueda llevar a cabo su función unificadora, lo que en este trámite determina la necesidad de desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina planteado por la Mutua Patronal FIMAC, a la que de conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral deberá imponérsele las costas en este recurso.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de FIMAC Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 35, contra la sentencia de 8 de octubre de 2.004 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de suplicación núm. 8553/03, interpuesto frente a la sentencia de 6 de mayo de 2.003 dictada en autos 221/02 por el Juzgado de lo Social núm. 17 de Barcelona seguidos a instancia de D^a Elsa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Fimac (MATEPSS nº 35), Diagonal Hierros, S.L., Elaborados y Armaduras Barcelona, S.A. y Fraga UTE, sobre Muerte y Supervivencia. Se condena en costas a la Mutua recurrente y decretamos la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Devuélvanse las actuaciones al Organismo Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jesús Gullón Rodríguez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Roj: STS 3542/2006
Id Cendoj: 28079140012006100461
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 647/2005
Nº de Resolución:
Procedimiento: Social
Ponente: José María Botana López
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA:

En la Villa de Madrid, a tres de Abril de dos mil seis.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Arturo Estabanez Garcia, en nombre y representación de CEJOYSA S.L. y BUSANTE CASAL S.A., frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 17 de septiembre de 2004, dictada en el recurso de suplicación número 1401/03, formulado por D. Inocencio, MAPFRE INDUSTRIAL S.A.S., BUSANTE CASAL S.A. CEJOYSA S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, de fecha 17 de diciembre de 2002, dictada en virtud de demanda formulada por DON Inocencio frente a MAPFRE INDUSTRIAL S.A.S., BUSANTE CASAL S.A. CEJOYSA S.L. en reclamación de cantidad.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA BOTANA LÓPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- El día 17 de diciembre de 2002, el Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo dictó sentencia en virtud de demanda formulada por DON Inocencio frente a MAPFRE INDUSTRIAL S.A.S., BUSANTE CASAL S.A. CEJOYSA S.L. en reclamación de cantidad, en la que como hechos probados constan los siguientes: «PRIMERO: D. Inocencio, prestaba sus servicios para la empresa CEYJOSA, S. L., como gruísta, sufriendo el día 1 de junio de 1999, un accidente laboral, en el centro de trabajo que la empresa tenía en la calle Carpio de Oviedo. La función del actor consistía en manejar una grúa de botonera con mando a distancia. El día del accidente el actor, siguiendo las instrucciones del Jefe de Equipo, D. Pedro Miguel, procedió a retirar una chapa de encofrado del sótano de 3 x 1 metro y 125 kilogramos de peso, situándose el demandante en el lugar sobre el que se disponía a depositarla, que tenía una superficie de apenas 4 x 2 metros, lindando por un lateral con una caseta de obra, por el fondo con un muro, y el otro lateral y el frente hacia el vaciado de unos 7,5 metros de altura, y protegidos por sólidas barandillas. En la zona de acopio ya se habían apilado ocho chapas en posición horizontal entre las chapas y las barandillas se encontraban amontonados tableros de 3,55 metros, con una sección de 7 x 20 centímetros, igualmente en posición horizontal. En el momento en que se procedía al depósito de la chapa se produjo la caída del demandante hacia el vaciado, quedando la chapa suspendida en la vertical de la zona de acopio a un metro de altura aproximadamente. El trabajador presentaba, en el momento de sufrir el accidente, un grado de alcoholemia de 3,84 gramos/ litro. SEGUNDO: Las lesiones que sufrió el actor fueron: traumatismo torácico. Fracturas costales bilaterales. Fractura de clavícula derecha y escápula derecha. Traumatismo medular D4-D5, con paraplejía completa dependiente de silla de ruedas. Precisa ayuda de otra persona para todas las actividades diarias. Alteración de esfínter rectal y urinario. En fecha 27 de marzo de 2000, el I.N.S.S. reconoce al actor un grado de incapacidad permanente en grado de Gran Invalidez, derivado de accidente laboral, con derecho a percibir una pensión mensual de 1.524,08 euros. En fecha 29 de junio de 2000 la entidad MAPFRE SEGUROS GENERALES, S.A. entregó al actor la cantidad de 5.500.000.- pesetas en su condición de asegurado de la póliza de seguro de accidentes. TERCERO: La empresa codemandada, BUSANTE CASAL, S.A., era la propietaria y la promotoraconstructora de la obra en que ocurrió el accidente. CUARTO: La codemandada CEJOYSA, S.L. tenía suscrita, en el momento del accidente, una póliza con MAPFRE INDUSTRIAL, S.A.S. que cubría la responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo, con un límite de 120.202,42 euros, con una franquicia general de 1.502,53 euros. QUINTO: Se presentó la papeleta de conciliación, celebrándose el acto sin avenencia». Y como parte

dispositiva «Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por DON Inocencio contra la empresa CEJOYSA S.L., BUSANTE CASAL, S.A. y MAPFRE (MAPFRE INDUSTRIAL, S.A.S.) debo condenar y condeno a dichas empresas a abonar solidariamente a la actora la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS (168.800 euros), con el límite para la aseguradora Mapfre establecida en la póliza de seguros, más los intereses legales que establece el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta sentencia».

SEGUNDO.- Anunciado e interpuesto recurso de suplicación contra dicha sentencia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó sentencia de fecha 17 de septiembre de 2004, en la que como parte dispositiva consta la siguiente: «Desestimar los recursos de suplicación formulados por D. Inocencio, empresa CEJOYSA S.L. BUSANTE CASAL S.A. y aseguradora MAPFRE, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Oviedo en los autos seguidos a instancia del primero contra las restantes recurrentes, sobre indemnización derivada de accidente de trabajo, confirmando la resolución recurrida, condenando a las empresas y aseguradora recurrente a la pérdida del depósito y de la consignación hechos para recurrir a los que se dará el destino que ordena la Ley, y a satisfacer al letrado del trabajador recurrido, en concepto de honorarios, la suma de 150 euros cada uno de ellos». Siendo aclarada dicha sentencia por auto de 23 de diciembre de 2004, en la que como parte dispositiva consta la siguiente: «Aclarar la sentencia dictada con fecha 17 de septiembre de 2004, en el sentido de añadir nuevo fundamento de derecho, manteniéndose por lo demás en su literal contexto».

TERCERO.- Contra dicha sentencia se preparo y formalizo en tiempo y forma recurso de casación para unificación de doctrina por las empresas. En el mismo se denuncia la contradicción producida con la sentencia dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 26 de abril de 2002 (recurso 840/01).

CUARTO.- Se impugnó el recurso por el recurrido, e informó sobre el mismo el Ministerio Fiscal en el sentido de estimarlo procedente.

QUINTO.- Señalado día para la deliberación, votación y fallo de la sentencia, se celebró el acto de acuerdo con el señalamiento acordado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Las empresas demandadas (la empleadora del trabajador y la promotora de la obra) formulan el presente recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de suplicación confirmatoria de la de instancia que las condenó solidariamente en unión de la entidad aseguradora al abono de la cantidad de 168.800 euros (con el límite establecido en la póliza de seguros para la aseguradora Mapfre no recurrente), más los intereses legales desde la fecha de la sentencia. Se cita como sentencia de contraste la de la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 26 de abril de 2002 y, se denuncia infracción por incorrecta aplicación de los artículos, 9.3 de la Constitución Española al no haber respetado la sentencia impugnada el principio de legalidad, 101 y siguientes y 902 del Código Civil en relación con el 123 de la Ley General de la Seguridad Social en lo concerniente a los requisitos exigidos para que nazca la obligación de indemnizar, 14, 15 y 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 24 de octubre de 1997 en relación con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y equipos de protección individuales y, 42.3 también de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto establece una estrecha relación entre el recargo de prestaciones y la indemnización de daños y perjuicios.

SEGUNDO.- La parte actora en el escrito de impugnación del recurso alega la falta del requisito de contradicción, por no existir identidad entre las pretensiones formuladas así como entre los hechos de las sentencias comparadas. Aún cuando las dos sentencias se refieren al mismo trabajador y empresa empleadora y, en ellas se hace referencia al mismo accidente de trabajo, sin embargo son distintas las pretensiones formuladas por las partes, lo que determina que incluso las normas jurídicas alegadas por el trabajador en suplicación en ambos supuestos sean diferentes.

Así en la sentencia combatida la indemnización de daños y perjuicios solicitada a la empleadora esta sujeta al principio de responsabilidad subjetiva o por culpa con fundamento en los artículos 1902 y siguientes y 1101 del Código Civil, denunciando en el recurso de suplicación la parte demandante, infracción de los artículos,

217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1106 del Código Civil y 20 de la Ley de Contrato de Seguros. Cabe añadir que en presente proceso se amplía la demanda contra otra empresa en su condición de promotora de la obra y que no fue parte en él que recayó la sentencia de contraste, fundamentando la acción en el artículo 14 del Real Decreto 1627/1997.

En la de contraste se trata del recargo en las prestaciones de la Seguridad Social por falta de medidas de seguridad (con independencia de la gravedad del daño causado), que viene dado en función de la existencia y gravedad de las infracciones en materia de medidas de seguridad, por lo que se denuncia violación de los artículos, 123 de la Ley General de la Seguridad Social, 36.3 del Convenio Colectivo, 14, 15.1 y 4, 16.1 y 2, 17.2, 22.1 y 25.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre de 1995. Por ello, la «ratio dedicensi» de la sentencia de contraste es que «a partir del inalterado relato factico, no es dable comprobar la realidad de los quebrantamientos normativos allí denunciados, habiendo obtenido -lejos de ellos- los preceptos pertinentes una escrupulosa e inobjetable aplicación en la sentencia de instancia a la situación jurídica que el magistrado ha examinado y a la controversia que en ella ha dedicado».

A lo expuesto procede añadir que no es idéntico el relato de hechos, como incluso se desprende de la de la argumentación de la sentencia de instancia (cuya narración factica fue aceptada por la aquí impugnada) y, en donde se dice «que los hechos declarados probados por una resolución agotan todos sus efectos en ella y no vinculan al mismo distintos Juzgados en procedimientos diferentes donde ha de valorar las mismas o diferentes pruebas a él aportadas con libertad de criterio». Con lo que se está reconociendo que en el nuevo proceso se contemplan determinadas circunstancias no tenidas en consideración por la sentencia de contraste.

En el supuesto de autos, se parte de que «el gruista no tenía plataforma para situarse, en este tipo de grua el trabajador que la maneja se coloca en el lugar más adecuado para dirigirla» y, dice el fundamento jurídico tercero de la sentencia de instancia que «Ciertamente en un primer momento los medios adoptados pueden calificarse como eficaces, existían sólidas barandillas que protegían de caídas hacia el vaciado, pero dejaron de serlo a medida que se produjo el apilado de chapas, pues como se observa en las fotografías la altura a la que se encontraba el material rebasaba la de los citados medios de protección, quedando estos a la altura de los pies», lo que determina una concreción en los hechos probados no recogida en la sentencia de contraste, pues expresa que «siguiendo las instrucciones del Jefe de Equipo... procedió a retirar una chapa del encofrado del sótano... situándose el demandante en el lugar sobre el que se disponía a depositarla, que tenía una superficie de apenas 4x2 metros, lindando por un lateral con una caseta de obra, por el fondo con un muro, y el otro lateral y el frente hacia el vaciado de unos 7,5 metros de altura, y protegidos por sólidas barandillas. En la zona de acopio se habían apilado ocho chapas en posición horizontal entre las chapas y las barandillas se encontraban amontonados tabloncillos de 3.55 metros, con una sección de 7x20 centímetros igualmente en posición horizontal». En cambio la sentencia referencial solo dice en relación a este particular «El gruista, que se colocaba en un sector fuera del foso que estaba totalmente vallado, entre la barandilla y dos casetas de vestuario a su espalda y una pila de chapas (acopio de material) a su izquierda, separada a su vez del foso por unos tabloncillos amontonados (entre las chapas y la valla de la obra), procedió a subirse al montón de chapas para marcar la maniobra».

En base a las indicadas concreciones de los hechos probados, la decisión de la sentencia combatida aprecia la existencia de culpa como nexo causal entre la conducta de la empresa y el resultado, es decir, que la ausencia del deber de seguridad ha de ser imputable al empresario «al menos por culpa, salvo que de modo claro y terminante acredite que tras poner la diligencia necesaria para cumplir con la deuda de seguridad la omisión, sin embargo, se produjo pero por circunstancias extrañas a su actuación», añadiendo, que este nexo causal entre la conducta empresarial y el resultado del accidente «solo puede ser interferido o anulado por una conducta del trabajador que, sin precisar ser temeraria, debe, en cambio, manifestarse como eficiente, es decir, como causa única del evento, de manera que éste no se habría producido», lo que entiende la sentencia que no acaeció.

A tenor de lo razonado se ha de concluir que no existe contradicción entre las objeto de contraste en los términos exigidos en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues no estamos ante narraciones de hechos probados idénticas, ni ante los mismos fundamentos jurídicos y, tampoco estamos ante pretensiones sustancialmente iguales. Incluso en la sentencia combatida se alegaron hechos relacionados con una empresa (propietaria o promotora de la obra) fundados en su obligación de coordinar medidas de prevención en su condición de propietaria de la obra en la que se produjo el accidente. En consecuencia existe causa de inadmisión, que en este trámite procesal determina la desestimación del recurso con imposición de costas a

la parte recurrente, pérdida del depósito constituido y mantenimiento de las garantías que en su caso se hubiesen constituido a los efectos del cumplimiento de la sentencia.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS:

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Arturo Estábanez García, en nombre y representación de CEJOYSA S.L. y BUSANTE CASAL S.A., frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 17 de septiembre de 2004, dictada en el recurso de suplicación número 1401/03, formulado por D. Inocencio, MAPFRE INDUSTRIAL S.A.S., BUSANTE CASAL S.A. CEJOYSA S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, de fecha 17 de diciembre de 2002, dictada en virtud de demanda formulada por DON Inocencio frente a MAPFRE INDUSTRIAL S.A.S., BUSANTE CASAL S.A. CEJOYSA S.L. en reclamación de cantidad. con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido y mantenimiento de las garantías que en su caso se hubiesen constituido a los efectos del cumplimiento de la sentencia.

Devuélvanse las actuaciones al organismo de procedencia, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. José María Botana López hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Roj: ATS 884/2004 - ECLI:ES:TS:2004:884A
Id Cendoj: 28079140012004200537
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 4375/2002
Nº de Resolución:
Procedimiento: Inadmisión
Ponente: Aurelio Desdentado Bonete
Tipo de Resolución: Auto

AUTO:

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil cuatro.

HECHOS:

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 13 de Madrid se dictó sentencia en fecha 18 de abril de 2001, en el procedimiento nº 150/00 seguido a instancia de D. Jose Luis, D. Aurelio y de TALLERES BORDAS, S.L., contra Dª Sofía, el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre seguridad social, que desestimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida en suplicación por D. Jose Luis, D. Aurelio y de TALLERES BORDAS, S.L., siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 25 de julio de 2.002, que desestimaban los recursos interpuestos por D. Jose Luis, D. Aurelio y de TALLERES BORDAS, S.L., y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO.- Por escritos de fechas 11 de noviembre de 2.002 y 21 de noviembre de 2.002, se formalizaron por los Letrados Sr. Gómez Alvares y Sr. García-Orea Alvarez, en representación de D. Aurelio y de D. José Luis, recursos de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO.- Esta Sala, por providencia de fecha 7 de noviembre de 2.003 acordó abrir el trámite de inadmisión por el recurso presentado por D. Aurelio: 1) falta de relación precisa y circunstanciada, 2) falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación, 3) defecto procesal insubsanable; por el recurso presentado por D. Jose Luis: 1) falta de relación precisa y circunstanciada, 2) falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación, 3) posible planteamiento de cuestión nueva. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 25 de julio de 2.002, se han interpuesto recursos de casación para la unificación de doctrina por D. Aurelio y D. Jose Luis, ninguno de los cuales puede ser admitido por las razones que se exponen en los siguientes razonamientos jurídicos.

SEGUNDO.- El artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otra resolución judicial que ha de ser una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo y el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina contenga una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada.

Estas exigencias no se cumplen en el recurso del Sr. Aurelio. En este recurso se plantean dos puntos de contradicción. En el primero -relativo al alcance subjetivo de la responsabilidad por el recargo- la sentencia de contraste es la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de febrero de 2002, con la que no puede apreciarse contradicción porque en esta sentencia se trata de personas que se limitaban

a desarrollar la actividad de promoción de la construcción en la que tuvo lugar el accidente, mientras que en el caso de la sentencia recurrida consta que los Srs. Aurelio y Jose Luis «decidieron organizar y dirigir la construcción de la nave, encomendado la realización de un proyecto a D. Alonso, Ingeniero Proyectista y Director de la obra, aun a pesar de vivir en San Sebastián, por ser el cuñado de D. Aurelio. Convinieron que en la obra hubiese un aparejador que la dirigiera, pero al final no se llegó a contratar. Contrataron con la empresa Construcciones Chandavila, SL, la ejecución de los trabajos de encofrado y hormigonado, y con la empresa Talleres Bordas, SL, el montaje de la cubierta. La estructura metálica fue levantada por D. Jose Luis, y D. Aurelio, que para ello efectuaron personalmente trabajos de soldadura y albañilería. A efectos de levantar la estructura, D. Jose Luis, y D. Aurelio, contrataron personalmente a distintos operarios (como D. Víctor) a los cuales dirigieron en su actividad y retribuyeron personalmente. A efectos de levantar la estructura D. Jose Luis, y D. Aurelio, contrataron personalmente con D. Benito, el suministro de vigas y cerchas, que transportaba éste con su camión a la nave. Una vez allí las vigas, eran cortadas por aquéllos». Los supuestos que deciden las sentencias que se comparan en este motivo son, por tanto, distintos y no puede, por tanto, apreciarse la contradicción en los pronunciamientos.

En el segundo punto de contradicción sobre la eventual incidencia de la culpa de la víctima la sentencia de contraste es la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 18 de mayo de 2.001. En ella consta que la empresa había proporcionado al actor el equipo adecuado para ejecutar el descenso, y había sido instruido y contaba con la preparación insuficiente, lo que no consta en la sentencia recurrida, en la que se reseña que «Su trabajo no estaba controlado por la Dirección Técnica de obra ni por ningún encargado o jefe. No obstante, el causante dirigía el trabajo del peón. Al producirse el accidente el causante todavía no había comenzado a trabajar. No llevaba puesto el cinturón de seguridad ni había anclajes para sujetarlo. No había redes bajo el lugar en que estaba trabajando, ni otras medidas de seguridad colectiva análogas. No había plataformas sobre las cerchas para efectuar desplazamientos».

Por otra parte, el escrito de interposición del recurso tampoco contiene una relación precisa y circunstanciada de la contradicción, pues se limita a contraponer pasajes de las fundamentaciones jurídicas y a realizar una enumeración selectiva de determinados hechos, sin abordar una comparación individualizada de los supuestos decididos. Falta también en el escrito de interposición del recurso la exigencia de determinar y fundamentar la infracción que se atribuye a la sentencia impugnada a través de los correspondientes motivos de casación (artículos 205 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

TERCERO.- En el recurso del Sr. Jose Luis se formalizan tres motivos. El primero se refiere al alcance subjetivo de la responsabilidad en el recargo y se aporta como contradictoria la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 30 de abril de 1999, en la que se trata de la responsabilidad que se le imputaba a una promotora que había contratado determinados trabajos de una obra con una empresa constructora y otros con una empresa de pinturas, accidentándose dos empleados de ésta última. La responsabilidad de la promotora se excluye porque no tenía su centro de trabajo en el lugar donde ocurrió el accidente, y porque quedó acreditado que «no ha desarrollado actividad real de ningún tipo ni tan siquiera ha tenido ningún trabajador propio, ejerciendo únicamente la actividad de promoción y posterior venta de la edificación, más sin participación alguna en la obra una vez iniciada la construcción», lo que obviamente no sucede en el caso que decide la sentencia recurrida de acuerdo con los hechos a que ya se ha hecho referencia en el razonamiento jurídico anterior. El segundo motivo se refiere a la responsabilidad de la víctima por no utilización del cinturón de seguridad. La sentencia de contraste es la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Málaga de 21 de febrero de 1995. En ella se recoge, en modificación fáctica establecida en suplicación, que «respecto a las medidas de seguridad a adoptar en el trabajo se disponía de circunstancias de seguridad, barandillas interiores y anclajes al parámetro y que cuando comenzó la faena que tenía encomendada en el momento del accidente, el andamio se encontraba anclado al parámetro, ya que es indispensable para que el grupo de cinco personas que se encontraban trabajando en este andamio pudiesen desarrollar sus tareas. Que en el momento del accidente no tenía puesto el cinturón de seguridad porque era casi la hora de comer e iban a terminar la faena. Y que con anterioridad había sido amonestado por escrito por la empresa por el mal uso del cinturón de seguridad de no engancharlo debidamente a un punto fijo». Estas circunstancias no concurren en la sentencia recurrida en la que consta por el contrario que «no llevaba puesto el cinturón de seguridad ni había anclajes para sujetarlo. No había redes bajo el lugar en que estaba trabajando, ni otras medidas de seguridad colectiva análogas». El motivo tercero insiste en la responsabilidad de la víctima en atención al índice de alcoholemia registrado, que es, del 0,81 gramos de alcohol etílico,

denunciando la infracción del artículo 115.4 de la Ley General de la Seguridad Social y designando como contradictoria la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de mayo de 1998. Pero en la sentencia recurrida no se denunció como infringido por la recurrente el artículo 115.4 de la Ley General de la Seguridad Social y el grado de alcohol que se registra en la sentencia de contraste es notablemente superior a 1,8 gramos por litro. No hay, por tanto, contradicción y se incurre además en el planteamiento de cuestión nueva.

Por otra parte, también falta en el recurso del Sr. Jose Luis la relación precisa y circunstanciada de la contradicción que exige el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues el escrito de interposición no aborda una comparación concreta que respete la resultancia fáctica de las sentencias, sino que se limita a realizar una contraposición genérica y selectiva que obvia los elementos de diferenciación a los que ya se ha hecho referencia.

La parte alega que en la providencia de inadmisión le ha producido indefensión pues se refiere a la falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita a efectos de comparación cuando se han citado tres por cada motivo. Pero es obvio que si se citan tres sentencias de contraste por cada motivo y la causa de inadmisión se refiere a todo el recurso, la providencia se está refiriendo a la sentencia de contraste que se cita en cada uno de los motivos. También alega la parte que la denuncia de la infracción del artículo 115.4 de la Ley General de la Seguridad Social equivale a la del artículo 123.1 de la Ley General de la Seguridad Social. Pero no es así porque en el segundo caso de lo que se trataría es de excluir la responsabilidad en el recargo por la concurrencia de una culpa de la víctima y en el primero la exclusión que se deriva de la infracción denunciada se refiere al accidente de trabajo mismo, que es lo que además se dice en la fundamentación del motivo.

CUARTO.- Procede, por tanto, inadmitir los presentes recursos de casación para la unificación de doctrina, con condena en costas y pérdida de depósitos constituidos para recurrir.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión de los recursos de casación para la unificación de doctrina interpuestos por los Letrados Sr. Gómez Alvares y Sr. García-Orea Alvarez, en representación de D. Aurelio y de D. José Luis, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 25 de julio de 2002, en el recurso de suplicación número 6182/2001, interpuesto por D. Jose Luis, D. Aurelio y de TALLERES BORDAS, S.L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 13 de Madrid de 18 de abril de 2001.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición de costas a las partes recurrentes y pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Facultad de Medicina
Departamento de Toxicología
y Legislación Sanitaria